

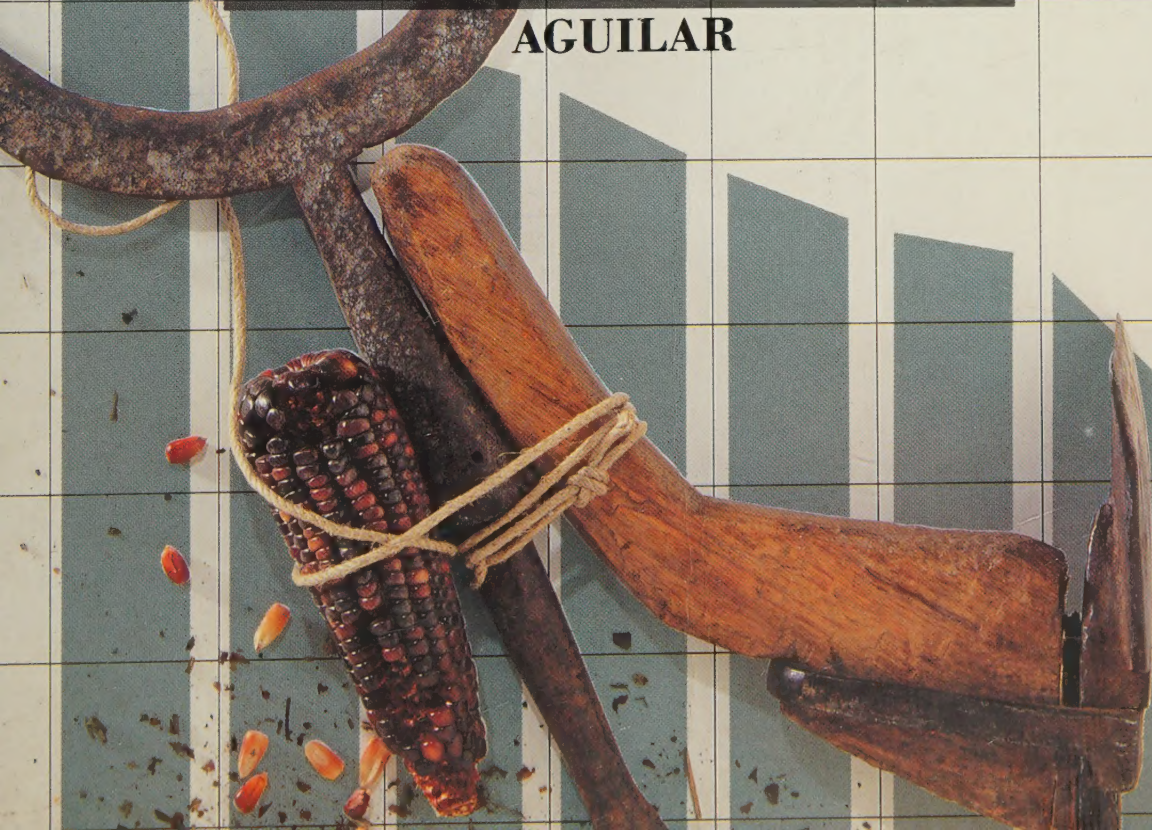
JULIETA CAMPOS

¿Qué hacemos con los pobres?

LA REITERADA QUERRELLA
POR LA NACIÓN

NUEVO SIGLO

AGUILAR





Novelista, ensayista, profesora universitaria; presidenta del Pen Club (1978-1982); directora de la *Revista de la Universidad de México* (1981-1984); colaboradora de numerosos periódicos, suplementos y revistas, incluyendo *Plural y Vuelta*, de cuyo consejo editorial forma parte, Julieta Campos pasó por una experiencia transformadora en los años ochenta. La posibilidad de actuar directamente sobre la extrema marginación le transformó, en Tabasco, la visión del mundo y la obligó a sustituir con realidades los esquemas intelectuales. La pobreza dejó de ser, para siempre, una abstracción.

A explorarla en el mundo y en México y a fundar en razones éticas y pragmáticas la urgencia de formular un proyecto nacional democrático, ha dedicado la autora cuatro años de una investigación distante de su original vocación literaria.

Aunque esa vocación había estado marcada, siempre, por un convencimiento: el ejercicio auténtico de la escritura pasa por una disposición a la disidencia *Un heroísmo secreto* (Vuelta, 1988). Julieta Campos, autora de *El miedo de perder a Euridice* (Joaquín Mortiz, 1979); *La herencia obstinada* (Fondo de Cultura Económica, 1982); *Jardín de invierno* (Ediciones del Equilibrista, 1988); y otros siete títulos de narrativa y ensayo, entrega hoy un memorial apasionado sobre el olvido de un verdadero rostro que ha fisurado a México.



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
Kahle/Austin Foundation

JULIETA CAMPOS

¿QUÉ HACEMOS CON LOS POBRES?

La reiterada querella
por la nación

¿QUÉ HACEMOS CON LOS POBRES?

La reiterada querella
por la nación

Para Miguel Angel Cutano,
cuya perspicaz mirada sobre México
también está presente en este libro,
con mucha simpatía

José Camps

¿QUÉ HACEMOS CON LOS POBRES?

© 1995, Julieta Campos

© 1995, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. de C.V.

Av. Universidad 767, Col. del Valle

México, 03100, D.F. Teléfono 688 8966

• Ediciones Santillana S.A.

Carrera 13 N° 63-39, Piso 12, Bogotá.

• Santillana S.A. Juan Bravo 38, 28006, Madrid.

• Santillana S.A. Avda. San Felipe 731, Lima.

• Editorial Santillana S.A.

4^a, entre 5^a y 6^a, transversal. Caracas 106, Caracas.

• Editorial Santillana Inc.

P.O. Box 5462 Hato Rey, Puerto Rico, 00919.

• Santillana Publishing Company Inc.

901 W. Walnut St., Compton, Ca. 90220-5109, USA.

• Ediciones Santillana S.A. (ROU)

Boulevard España 2418, Bajo, Montevideo.

• Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.

Beazley 3860, 1437, Buenos Aires.

• Aguilar Chilena de Ediciones Ltda.

Pedro de Valdivia 942, Santiago.

• Santillana de Costa Rica, S.A.

Av. 10 (entre calles 35 y 37), Los Yoses, San José, C.R.

Primera edición en México: abril 1995.

ISBN: 968-19-0256-4

© Cubierta: Carlos Aguirre.

Cuidado de edición, tipografía y diseño de interiores:

Ediciones de Buena Tinta, S.A. de C.V.

Colaboraron en la edición:

Enrique Mercado

Marisol Schulz

Impreso en México

Todos los derechos reservados.

Esta publicación no puede ser reproducida,

ni en todo ni en parte, ni registrada en

o transmitida por un sistema de recuperación

de información, en ninguna forma

ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico,

electrónico, magnético, electroóptico,

por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso

previo, por escrito de la editorial.

para Enrique González Pedrero

Agradecimientos

La escritura de este libro, al que dediqué la mayor parte de mi tiempo en los últimos cuatro años, restó días y horas de atención a vínculos familiares y amistosos. Agradezco su comprensión y paciencia a los que están más cerca y, por ello, habrían podido reprochármelo. A Paulina Mercedes Lemus, mi gratitud por la eficacia y dedicación que invirtió en la transcripción de las diversas versiones. A Eloísa Méndez y Elisa Cuevas por su auxilio en el rastreo de algunas referencias trasapeladas que requirieron buceos hemerográficos y visitas a bibliotecas. A Edna Rivera y sus Ediciones de Buena Tinta por el empeño y la limpieza en la producción de este memorial.

A Gabriel Zaid quiero agradecerle, con especial afecto, el acceso a su abundante colección de materiales sobre desarrollo en pequeña escala y propuestas alternativas, que puso a mi disposición desde los años de mi experiencia en Tabasco. Además de reconocerle sus lúcidas reflexiones acerca de las realidades y fantasías de la modernidad. A Oliva Velázquez, Miguel Armas, Marco Antonio López, Enrique González Torres S. J. y Miguel Álvarez Gándara les debo información y testimonios valiosos sobre los esfuerzos de la sociedad civil por abrirse espacios, desde abajo, para combatir la pobreza. A mi cuñado José, la paciencia de una lectura del original hecha con ojos de economista. A Enrique González Pedrero, el perdurable diálogo que ha alimentado mutuamente nuestras inquietudes, convicciones y compromisos.

J.C.

Introducción

¿Qué hacemos con los pobres?

Ignacio Ramírez, *Carta a Carlos Olagübel*, del 25 de octubre de 1875

Este libro es un memorial de la desmemoria, una crónica del olvido: un recuento de la inveterada relegación a la irrealidad que el país afortunado ha ejercido sobre el país anónimo, sin rostros y sin palabras. Tradición, modernidad, democracia: pasado, presente y futuro vuelven a disputarse los destinos en un tablero donde los mexicanos siguen jugándose el derecho a vivir dignamente.

Una pregunta formulada en 1875 por El Nigromante pende sobre la reiterada querella por la nación: “¿Qué hacemos con los pobres?” Hace diecisiete años, Moisés González Navarro partió de esa pregunta para emprender una extensa y profunda investigación sobre *La pobreza en México*, dirigiendo la mirada sobre todo hacia los siglos XIX y XX y hacia las acciones que, desde la Iglesia o el Estado, se habían emprendido con la pretensión de aliviarla. La interrogación es más vigente que nunca en el umbral del siglo XXI. Los neoliberales, como ayer los liberales del XIX, deploran la condición de los pobres, “la suerte de los desgraciados” en palabras de El Nigromante. Pero, como hace un siglo, no encuentran caminos para remediarla porque su confianza sigue puesta, únicamente, en las leyes del mercado. La reflexión que me propuse rastreó los callejones que fueron configurando el laberinto de la pobreza y procuró desenredar los hilos que señalarían hacia una salida.

Este libro germinó en una intensa vivencia personal. En 1982 descubrí el “otro México”: el país tradicional, el país campesino, el Sur palpable, con rostros, de carne y hueso. Lo descubrí en Tabasco, recorriéndolo primero varias veces con Enrique González Pedrero en una campaña electoral: de 1983 a 1987 fui testigo y copartícipe de una experiencia llena de lecciones. En un estado con más del 60% de población campesina, donde coexisten la industria petrolera, la ganadería extensiva y los cultivos de plantación con una precaria agricultura de subsistencia, conocí de cerca la penuria y el rezago. Fue una sacudida profunda, que removió esquemas intelectuales y los fue sustituyendo por realidades. La pobreza empezó a tener nombres y, para siempre, dejó de ser una abstracción.

La inquietud por ubicar mejor una experiencia local en el espacio más amplio del desarrollo del país y de la fatalidad que ha marcado el destino de los países pobres fue el punto de partida. ¿No es acaso evidente que los problemas globales se gestan en los espacios locales y deben entenderse y atenderse allí para que puedan incidir las soluciones en un auténtico cambio mundial? Un ir y venir entre lo local y lo global recorre este libro, que fue redactado entre febrero de 1991 y agosto de 1994.

El brote de un volcán social y político en Chiapas, el 1º de enero de 1994, obligó a añadirle un último capítulo a la exploración de los laberintos planetarios de la pobreza y de las espirales de tiempo que fueron desdoblando en México, desde la Conquista, la constante y desmesurada desigualdad.

En el escenario de 1994 afloraron y se hicieron visibles todos los tiempos de México, incluyendo las opciones para el futuro. El proceso y la jornada electorales del 21 de agosto mostraron el traumático entrecruzamiento de los tiempos y se barajaron en las urnas las inercias del pasado y las expectativas del cambio. La incógnita del futuro está abierta.

Una multiseccular inercia autoritaria sigue pesando sobre un sistema que impuso, desde los años veinte de este siglo, su proyecto modernizador al país tradicional. El desafío que hoy encara la sociedad civil es el de desplazar los lastres autoritarios premodernos para abrir el acceso a una modernidad democrática que beneficie a todos.

La pobreza y la dependencia clientelar siguen pesando en los sufragios, junto con la convicción arraigada en buena parte de la población de que la persistencia del régimen de partido de Estado responde a una fatalidad inescapable. Al uso discrecional de recursos y de programas, entre los pobres, para fines electorales se asocia la inequitativa disposición de fondos para campañas y el asedio que se tiende sobre la población desde los medios, sobre todo radiofónicos y televisivos. El déficit nutricional y el déficit educativo se retroalimentan y favorecen el círculo vicioso con el que juega el *statu quo*. Es responsabilidad de los sectores más alertas de la sociedad civil ir abriendo espacios a un ejercicio cada vez más

esclarecido de los derechos ciudadanos. Pero el análisis postelectoral de esos temas no será abordado en estas páginas, que concluyen en la víspera del 21 de agosto.

En la antesala del nuevo milenio, México no puede seguir aplazando la reconciliación entre su pasado y su futuro. El agravio de cinco siglos del país tradicional habló a gritos el 1º de enero y entró sin anunciarse, por la puerta trasera, para desazonar la autocomplacencia de las conciencias felices.

La violencia no puede ser el camino. El único camino está en la práctica urgente de una democracia de carne y hueso, sin escamoteos, ni maquillajes, ni reticencias. El país, a seis años del siglo XXI, tiene que insertarse, en condiciones más propicias, dentro del todavía incierto y asimétrico nuevo [des] orden mundial.

No podrá hacerlo sin reconstruir, a la vez, su trama social, la vasta red de comunidades rurales y barrios urbanos donde habita la gran mayoría de los mexicanos. Esa trama que ha sido abatida por una modernización que nunca ha entendido la lógica del “otro México”. Lo único que parece viable es conjugar, en lo sucesivo, un doble modelo.

Hay que modernizar con inteligencia, parsimonia y prudencia, con la mirada hacia fuera pero también hacia dentro. Fortaleciendo el derecho de las comunidades a elegir sus autoridades y a desarrollar sus capacidades básicas. Asegurándoles a los mexicanos pobres el derecho a comer; a prevenir la enfermedad y a curarla; a educarse para entender y aprovechar mejor el entorno inmediato, el vínculo con el país y con el mundo; a insertarse, con la propia identidad y la propia cultura fortalecidas, en el concierto de las otras culturas: en la cultura universal. Sólo entonces habrá condiciones para tener algún acceso, por modesto que pueda ser, a lo que Peter Drucker llama la sociedad del conocimiento y Robert B. Reich ha designado como la red global.

A principios de 1991, nos envolvía el optimismo y la magia de un *nuevo milagro*. La oferta del Paraíso tenía nuevos nombres y nuevas mecas. El futuro volvía a ser “el país de las maravillas”. En el futuro se habrían multiplicado los panes y los peces y todo alcanzaría para todos. El futuro volvía a ser la tierra prometida. La oferta del flamante milagro que recorría el planeta nos tocaría con la varita mágica de una inserción, por la vía rápida, al Primer Mundo. La globalización no era un hecho complejo, de rostro contradictorio, sino una aparición propicia y ubicua que sembraba, por todas partes, la buena nueva y que pronto nos visitaría, en el cuerpo y el espíritu del Tratado de Libre Comercio.

Cabía preguntarse si la venta de expectativas sería inseparable de la política y si acaso no era inevitable que la convirtiera, casi siempre, en un mercado de milagros. La industrialización acelerada, el crecimiento a altas tasas, el petróleo, el TLC fueron sucesivas ofertas en ese mercado de abalorios. El verdadero milagro estaba en que los pobres siguieran sobreviviendo en la periferia de

tantos milagros, esperando siempre en vano el goteo de las lluvias que les ha venido prometiendo el cielo protector del Progreso.

Era un buen momento para mirar alrededor, para mirar hacia atrás, para mirar hacia el futuro y para hacer un balance. En una lenta exploración de casi cuatro años se fue armando este libro, largo como la esperanza de los pobres.

A casi un lustro del fin del segundo milenio y 500 años después de la Conquista, crece la agravante distancia que siempre ha separado, en México, a los muy pobres de los muy ricos. Una es la desigualdad que se genera, en sociedades donde las oportunidades son más parejas, por las diversas cualidades y talentos personales, y otra la desigualdad oprobiosa que se transmite por generaciones cuando se escatiman los accesos a todas las oportunidades.

Reconciliar, por fin, tradición y modernidad es el único camino. Si todos los intentos de modernización han sido fallidos es porque nunca se intentó una reconciliación sino un avasallamiento: el proyecto moderno pretendió borrar al país tradicional adosándolo sin miramientos, como lastre, en su marcha a la conquista del Progreso. Por eso sigue habiendo, hoy, dos países. Por eso no hay más remedio que encontrar para ellos un modelo dual, que los contemple a ambos y no excluya al más vulnerable. La democracia, en todos los ámbitos, es la opción reconciliadora.

El proyecto moderno empezó con los Borbones y siguió con Juárez, con Porfirio Díaz, con Carranza, con Obregón y Calles, con los gobiernos que institucionalizaron la revolución. El intento más reciente ha sido la modernización neoliberal. Todos coincidieron en un presupuesto: las culturas “arcaicas” tienen que incorporarse subordinadamente al empuje y la fatalidad del Progreso, que hoy por hoy se llama “globalización”.

El proyecto no ha cuajado porque siempre ha ignorado el rostro del país real y le ha puesto la máscara elegida por las élites. El México impávido y recalitrante persistió sin embargo. No cristalizó el proyecto porque nunca se escuchó la voz múltiple de los pueblos, de las comunidades, de los pobres. Porque se les quiso imponer una modernidad que los excluía. Se ignoró la aspiración de autonomía de los municipios y los pueblos. Se atropelló el consenso para imponer la voluntad del Centro.

Hoy, la brecha entre los dos Méxicos es enorme. La trampa de los milagros fue tan grande como el sueño de los mexicanos. Un sueño de abundancia, en la libertad, engarzó la fantasía de unos cuantos ilustrados, en 1824, de alcanzar en unos cuantos años la prosperidad de los Estados Unidos. El afán de emparejarse con los países modernos e industriales marcó la gestión de los liberales y los empeños de los “científicos”. El país real, rezagado y macilento, tocó a la puerta e irrumpió sin anunciarse en el festín del Centenario, a caballo y también sin miramientos.

Las noticias de la presencia de México en el concierto de los ricos no habían cambiado la suerte de los peones acasillados ni de los pueblos despojados de sus tierras a lo largo de cuatro centurias. La Revolución Mexicana haría el milagro de cambiarlo todo para que, a fin de cuentas, no cambiara casi nada.

El proyecto modernizador fue retomado con nuevos bríos, para recuperar el tiempo perdido y calzando las botas de siete leguas. Una vez más se quiso brincar rápidamente, sobre 150 años, para alcanzar, entonces sí, el crecimiento de los Estados Unidos. El “milagro mexicano” alzó chimeneas y contaminó la “utopía bucólica” pero no le dio un lugar a los campesinos mientras trazaba carreteras y construía escuelas y extendía el pavimento sobre tierras ejidales.

El milagro estaba agotándose en 1968, cuando los primeros vástagos de la modernización cuestionaron la mecánica autoritaria que sustentaba la estabilidad. Se quiso mostrar entonces la cara benefactora del milagro “compartiendo” mejor sus dones y levantando nuevos e insospechados espejismos de abundancia sobre un subsuelo imaginado como inmenso barril sin fondo, rebosante de petróleo. Las promesas de abundancia naufragaron en un mar de números rojos, de déficit y de asfixiante endeudamiento. El fin de la “economía-ficción” fue seguido por una drástica purga, que permitió sobrevivir a los más aptos —es decir, a los más acolchonados—, diezmó a los estratos medios y emparejó, hacia abajo, a los pobres.

La “segunda modernización” se propuso insertar al país, después de un indispensable ajuste, dentro de la nueva economía global cuyas reglas habría que aceptar en aras del realismo. La teoría del goteo había supuesto primero —a partir de 1940— que había que crecer mucho y multiplicar la riqueza de los que adentro disponían de capitales para que, después, se filtrara hacia abajo y acabara por rociar a los más pobres. Hoy habría que esperarlo todo de un nuevo goteo, que se derramaría sobre los pobres de adentro cuando crecieran y se multiplicaran las inversiones de afuera: las únicas que, ahora sí, serían capaces de esparcir la prosperidad.

Una enorme abundancia de pobres ávidos de salarios, por bajos que pudieran ser, sería paradójicamente el atractivo para esas inversiones, que permitirían volver a crecer y crear empleos. Al milagro de la industrialización protegida, con capitales de dentro y de fuera, y centrada en la ampliación del mercado interno, sucedería el nuevo milagro de una industrialización sujeta a las necesidades globales, promovida sobre todo con capitales de fuera y dirigida a la exportación.

El TLC sería la puerta de entrada al “nuevo milagro”. Había que apostarle, una vez más, al crecimiento del sector moderno como la panacea que, en algún futuro, acabaría por revertir beneficios sobre el resto del país. En la primera versión del desarrollismo, el sector moderno no pudo absorber al tradicional.

La fórmula neoliberal sostiene que el modelo de más inversiones extranjeras y más exportación goteará más prosperidad.

¿Por qué? ¿Cómo y qué lo garantiza? ¿No sería de esperarse, más bien, una creciente polarización? ¿No tendería la lógica más elemental del mercado a acentuar la concentración de la riqueza en islotes de modernidad y la expansión de la pobreza en el resto del territorio? ¿Acaso la lógica de la producción del capital no lo atrae hacia los enclaves más dinámicos, donde más y mejor tiende a acrecentarse? Hoy, el ingreso de las 24 familias más ricas del país equivale al de 25 millones de mexicanos pobres. El crecimiento desigual, que relega al olvido a los más pobres de las regiones pobres, contribuirá a acentuar la concentración de riqueza y la difusión de pobreza.¹

El sector moderno tiene su lógica y es la lógica del mercado. Sería iluso no reconocer que esa lógica, en las circunstancias del mundo interdependiente de hoy, es inevitable. Pero también lo sería no advertir que esa lógica, por sí sola, no atenúa sino que acentúa las asimetrías que la han engendrado y que su propio desenvolvimiento engendra. La creación de empleos en el sector moderno nunca podrá absorber a la inmensa mayoría de los pobres. No hay *fast track* al Primer Mundo. Y no habrá un solo país, integrado y razonablemente moderno, mientras esa inmensa mayoría de pobres no tenga acceso a satisfactores razonables para sus necesidades básicas, esencialmente la capacidad de producir, la nutrición y la educación.

La única garantía de estabilidad es reconocer al país real que, todavía hoy, es dos países. La única garantía de estabilidad es abrirle paso a la democracia. El país tiene dos polos, distantes entre sí por años luz de recursos y de oportunidades. El discurso de las profecías, pronunciado por Fray Servando Teresa de Mier en el Constituyente de 1824, sigue vigente: todavía hoy, uno es el país imaginado por las élites y otro el país que arrastra, sin resolverlo, su pasado. Todavía sigue inventándose un país que sirva al Progreso y a la Modernidad, en vez de encontrar accesos modestos, pero reales y para todos, a la modernidad y al progreso. Todavía hoy no se encuentra un modelo coherente con el país real.

No se trata de rechazar, en bloque, la modernidad. ¿Quién querría renunciar a todo lo que puede aportar la nueva tecnología para mejorar la calidad de vida? La modernidad que, una y otra vez, ha defraudado a los mexicanos es la que no entiende que debe imbricarse en una realidad compleja, muy diversa a la de los países desarrollados. Es imperdonable modernizar sólo para unos cuantos, distrayendo o apaciguando a los demás con la falacia de que un día la riqueza va a rociarlos. Una modernización excluyente aleja cada día, en vez de acercarlo, el remedio a la extremosa desigualdad. Hay que aspirar a una modernización incluyente, por la vía de un desarrollo viable y sustentable.

Hace falta un nuevo modelo, que sea nuestra versión de la modernidad, con dos vertientes. Una que acepte y se ajuste a la globalización económica, en el área de empresas que produzcan para exportar, con eficacia, en las condiciones de la competencia mundial. Y otra que ofrezca protecciones temporales a ramas atrasadas, para que maduren y den soluciones a proyectos locales, con amplia participación de las comunidades, para abastecer al mercado zonal, comercializando regionalmente sus excedentes.

Sin renunciar a la eficiencia económica global, ese modelo ha de tener una dimensión social. Sin romper la disciplina del gasto, la estabilidad cambiaria y de precios, debe atender las prioridades del desarrollo humano. Entendiendo que la pobreza en las ciudades refleja la del campo y se ha generado en el campo, debe apoyar con fórmulas realistas, y no esperando a que lluevan improbables inversiones, a un desarrollo integral con campesinos en vez de soñar con desplazarlos “porque no son eficaces”.

Aunque haya más crecimiento con el TLC, México no será viable si no puede abatirse la pobreza extrema. Las inversiones extranjeras crearán un número moderado de empleos calificados en las ciudades y en la agroindustria de exportación. Pero la gran mayoría quedará fuera de esos beneficios. Hay que pensar en un modelo de desarrollo sustentable para el país tradicional, que no quedará automáticamente incorporado al sector moderno.

Cuesta muy caro un empleo en el sector moderno y hay un déficit de cerca de 9 millones de empleos, al que se añade la demanda de un millón anual, que ha sido paliado por la migración hacia los Estados Unidos y la economía informal. Paralelamente a las inversiones que puedan fluir, es urgente fomentar el ahorro interno y apoyar a la industria pequeña y mediana para que mejoren sus manufacturas.

La quiebra de empresas entró en un círculo vicioso, en los últimos años, con la contracción del mercado interno. La gente que perdió el empleo ya no puede comprar nada. Los campesinos nunca pudieron hacerlo. Aun rescatando a la microempresa, el sector industrial no podría asimilar a todos los marginados. Tampoco los servicios, que requieren calificaciones sofisticadas. Los que tocan fondo en la pobreza están fuera del mercado y seguirán fuera. Hay que apoyar la autosuficiencia y pequeñas soluciones locales con modesta participación en el mercado.

Hay que entender que si el país moderno busca sus caminos, los del país tradicional no son necesariamente los mismos. Reconciliar a los dos países significa que la lógica de uno no excluya a la lógica del otro. Significa cuidar que la lógica dominante, porque representa los intereses más fuertes, no pretenda barrer a la otra, que representa los intereses más vulnerables.

El Estado no puede resolverlo todo: cuando lo pretendió, nunca lo hizo. Pero

puede regular, facilitar y hacer contrapeso entre los intereses y las demandas sociales. Puede apoyar las soluciones alternativas que, desde los ámbitos locales, la gente busca para sus múltiples necesidades. Puede propiciar un auténtico federalismo y el fortalecimiento de municipios democráticos y con recursos para promover el desarrollo. Puede ver con simpatía y promover, en vez de ver con desconfianza y obstaculizar, las múltiples iniciativas de ONG y de las diversas instancias que ahora canalizan la iniciativa de la sociedad civil. Puede, y debe, prestar oídos a los sentimientos de la nación.

Las soluciones para los problemas globales y vastos son, a menudo, locales y pequeñas. La medida es la de la gente concreta, que vive en un poblado o en un barrio y dispone de mínimos recursos, aun para satisfacer necesidades elementales. La de los pobres, en una palabra. El gasto social no puede distribuirse igual entre desiguales: los más pobres son prioritarios. Los pobres son, además, la mayoría.

¿Quiere decir eso que son pobres porque se reproducen demasiado? Un curioso neomaltusianismo ha empezado a deslizarse en argumentos que nos avisan de la improbabilidad de distribuir mejor el bienestar sin poner coto, antes, al crecimiento demográfico. Cuando no se busca autocomplacerse en la buena conciencia aparecen, pronto, argumentos más consistentes: la gente no es pobre porque tiene muchos hijos sino que tiende a buscar más hijos porque es pobre. Los hijos son la única inversión que pueden hacer los pobres.

La política de control demográfico se inició en los años setenta dentro del esquema de “compartir” el desarrollo. En los sesenta y los setenta la fecundidad sólo descendió en los medios urbanos de clase media y alta. Sin embargo, se pasó del 3.5% en 1973 al 2.6% al terminar la década. Los años de alto crecimiento económico habían coincidido con el crecimiento de la población, alentado además por una deliberada política poblacionista. La desigualdad y los bajos niveles educativos no se alteraron con el “milagro”, cuyos beneficios fueron muy selectivos. La alta fecundidad de los marginados se mantuvo hasta principios de los años ochenta, cuando se integró la planeación familiar en la planeación del desarrollo: se fijaron metas de 2.5% para 1982, 1.9% para 1990 y 1% para el año 2000.

Según los expertos, la meta de 1% para el año 2000 será inalcanzable porque no se han modificado las precarias condiciones de vida. Aunque sus niveles de mortalidad son los más elevados, la población indígena sigue creciendo a índices más altos que los demás mexicanos, por patrones culturales y también, sin duda, por la extrema penuria. Tras casi dos décadas de insistencia en el control, han descendido los índices hasta 1.9% pero no ha mejorado la distribución de beneficios del desarrollo.

Una reciente investigación es muy clara: sin coordinarse con amplias acciones sociales, la simple “regulación poblacional” no es eficaz para lograr una

distribución más justa. Para que los índices puedan seguir bajando hay que atender, antes, los grandes rezagos básicos:

Debería insistirse en una voluntad política capaz de impulsar mecanismos eficaces y duraderos de distribución que en México no existen, y cuya ausencia puede ser la causa principal de una abismal desigualdad, de la pobreza, de la paralización del aparato económico y, tal vez, del entorpecimiento del cambio demográfico.²

Parece pertinente, cuando tanto se habla de “globalidad”, echar una mirada sobre el sistema global y sus asimetrías; el crecimiento y sus límites y la ubicación de México en ese marco referencial, sin olvidar los azares de su vocación latinoamericana y su frontera de 3 mil kilómetros con el país más poderoso del Hemisferio Norte. A todo eso se refiere el primer capítulo de este libro.

Los doce capítulos que siguen procuran ir detectando, a lo largo de la aventura histórica de México, el divorcio entre el país tradicional y el país moderno que ha sido el común denominador de una reproducción transgeneracional de la pobreza.

Acaso el matrimonio de conveniencia con el vecino próximo y distante, acelerado por la presurosa élite que encabeza al sector moderno, no sea tampoco la solución mágica: la magia y la milagrería sólo operan en lo imaginario. La integración silenciosa que ha ido dándose desde hace décadas no nos ha sacado de pobres. La formalización de relaciones le pondrá más pisos al edificio de la modernidad pero no bastará para esparcir considerablemente sus beneficios. Nada puede sustituir el encuentro, menos espectacular pero más seguro y perdurable, entre los dos Méxicos.

Nada puede sustituir la maduración esforzada y sólida de las mejores reservas del país, que no son por cierto las del petróleo ni las del dinero, sino las de la gente: los cerca de 90 millones de mexicanos que merecen la oportunidad de asumir, con plena conciencia, su destino. La inicua inequidad de las condiciones sociales se refleja, por supuesto, en la inequidad de los procesos electorales. La evaluación final de Alianza Cívica señaló que el 21 de agosto hubo dos elecciones simultáneas: una moderna, relativamente limpia, en zonas urbanas y otra, con alta incidencia de violaciones graves, en zonas rurales, especialmente del Sur del país. Es decir, una elección de Primer Mundo para el país urbano y moderno y otra, muy diversa, para el país rural y “profundo”. Hasta ahí fue notorio el triste lastre que inhibe los afanes de cambio con su peso muerto.³

Sólo una obstinada decisión de los sectores más despiertos de la sociedad civil podrá presionar para que se dé el salto sobre la inequidad electoral y, en condiciones de competencia efectiva en el acceso a los electores, en la información de esos electores y en la pristina emisión del sufragio, pueda transitarse con holgura hacia la democracia.

La reciente Conferencia del Cairo volvió a poner sobre el tapete el gran tema de nuestro tiempo que es el desarrollo sustentable. El atorado círculo vicioso entre el acceso vedado al bienestar y la multiplicación de los pobres no tendrá salida mientras se persista en modelos consumistas y depredadores. La pobreza es un hoyo negro para los pobres pero es, también, un riesgo para los ricos. La estabilidad y la seguridad no son viables sin mejorar la calidad de vida de los que ya nacieron y siguen naciendo pobres.

La participación democrática es la única llave maestra para abrirle paso a un desarrollo de dimensión humana. Para encontrarse con un mejor destino hay que romper primero la fatalidad histórica.

Los dos países que ha sido México tienen que reencontrarse y reconciliarse en uno solo. La única opción es la democracia.

J. C.

15 de septiembre de 1994

Notas

¹ Datos de un análisis presentado por Macario Schettino, entonces director de análisis económico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en el Congreso Nacional de Industriales, en Ixtapa, Zihuatanejo. *La Jornada*, 1º/X/1994.

² Raúl Béjar Navarro y Héctor Hernández Bringas, "Desigualdad social y población en México", en *Población y desigualdad social* (coord. Béjar y H. Bringas). Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 27.

³ "La calidad de la jornada electoral del 21 de agosto de 1994", Informe de Alianza Cívica Observación 94. Perfil de *La Jornada*, 20/IX/1994.

Post Scriptum

El 7 de marzo se aprobó en la Cámara el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía, suscrito por los presidentes de México y de los Estados Unidos el 21 de febrero. Se abrió una línea de crédito por 20 mil millones de dólares, para pagar vencimientos de Tesobonos, a cambio de condiciones severísimas de contracción económica. En la víspera de los cien días del nuevo gobierno se dieron a conocer esas condiciones y, en un mensaje a la nación, el presidente Zedillo buscó comunicar su convencimiento de que no había alternativa ante la amenaza de un colapso financiero y productivo.

A desequilibrios acumulados en varios años se atribuyó la crisis, de proporciones insólitas, que se había precipitado al término de un aciago 1994, tras la devaluación del peso. Se advirtió que “ya no contaremos con los cuantiosos recursos externos” y que, ahora sí, habrá que “echar a andar la economía con nuestros propios recursos”.¹ Era algo que parecía cuestionar la esencia misma del proyecto económico salinista, cuyo éxito aparente —notoriamente precario ahora— se había montado sobre la afluencia de inversiones especulativas a corto plazo.

Pero ¿acaso no es todo el modelo lo que hay que repensar? ¿No es tiempo de poner a debate un nuevo proyecto nacional, concebido para reorientar los objetivos de la economía hacia el bienestar de todos los mexicanos? ¿No va a ser ineludible, hoy o mañana, una sensata renegociación de la deuda? Casi todas las voces que se han levantado, entre los analistas pero también entre los empresarios, para advertir que no puede esperarse sanar a una economía noqueada y exangüe con otra sangría depresiva, coinciden con el escepticismo

de Henry Kissinger frente a las pantallas de CNN: no habrá, para México, recuperación sin crecimiento.²

El plan de choque anticipa, conservadoramente, una caída del 2% en el producto; la cancelación de 750 mil empleos y una inflación del 42%. Impone, a la vez, un IVA del 15%; aumentos del 35% a la gasolina y del 20% a las tarifas eléctricas y fija el aumento de salarios en un 10%. Con razón Lorenzo Meyer se ha preguntado si no habrá límites a la resignación de los ciudadanos ni al determinismo fatal de la lógica tecnocrática, que ha persistido en los enfoques de la crisis y en las decisiones de emergencia. Su augurio es, sin embargo, optimista: el neoliberalismo podría ser la fase final de un autoritarismo secular.³

Los sostenes legitimadores se han erosionado tanto que se encuentran en un punto sin retorno, ante la incapacidad total de respuesta a las demandas sociales. La mayoría de los mexicanos se sienten a la deriva, en un navío con brújula errática: no sujetos de una sociedad participativa sino víctimas de las decisiones de un solo hombre, que pueden provocar crisis como ésta. Ahora se les pide sacrificarse todavía más “porque es el único camino” cuando, apenas ayer, se les vendía la prosperidad fácil de un *fast track* al Primer Mundo. El ciudadano común se siente defraudado y manipulado por quienes le sedujeron con el “nuevo milagro” para abandonarlo de súbito en la intemperie de una turbulencia económica que derrumba todas las imaginarias certidumbres. No en balde un 77% respondió el 12 de marzo, en una encuesta del diario *Reforma*, que no se recuperará la confianza.

Si la lógica neoliberal de una racionalidad económica óptima resultó tan endeble; si todo estaba prendido con alfileres y si el propio presidente Zedillo desconocía en diciembre —como lo ha manifestado el *New York Times*— la extrema vulnerabilidad de la economía mexicana ¿parecería saludable insistir en el argumento de que, ahora sí, se está ofreciendo “la mejor opción” o “el único camino viable”?

Han sobrado explicaciones de la crisis: sobrevaluación como apuesta electoral; euforia de importaciones financiadas con dinero golondrino; expansión del circulante antes de las elecciones para favorecer captación de votos, después de haber estancado el crecimiento para contener la inflación. El Tesoro norteamericano le habría advertido al gobierno, a lo largo de 1994, sin encontrar eco, el peligro de la pérdida de reservas, que no se detuvo después del asesinato de Colosio, y la pertinencia de reconocer el valor real de la moneda. A la desconfianza generada por asesinatos y secuestros se añadió el alza de tasas de interés en los Estados Unidos. El efecto imán del TLC fue breve. John Kenneth Galbraith ha recordado que no es nada nuevo: desde siempre la “euforia financiera” corre con entusiasmo optimista hacia donde, en un momento dado, se auguran ganancias máximas, para desplazarse luego con la misma premura hacia otra parte.

Detrás de todo estuvo la incapacidad para financiar el crecimiento con recursos propios y la apuesta ilimitada a una Gran Feria Global de capitales infinitamente dispuestos e incansablemente propicios, ansiosos de ir al encuentro del mercado emergente de México. Estuvo el sacrificio de la planta productiva mediana y pequeña, de modo que ahora no tenemos colchón alguno frente a la crisis. Estuvo la meta obsesiva de lograr una inflación mínima, de país de Primer Mundo, en vez de crear empleos y fortalecer el poder de compra del salario. Estuvo la escasa capacidad para exportar, salvo migrantes en busca de trabajo. Estuvo, hay que reconocerlo, una indudable pericia para producir pobres.

Una dura negociación, que dejó en prenda la garantía de diez años de facturas petroleras, procuró evitar un naufragio a corto plazo. No alcanzará para cubrir el monto de obligaciones contraídas, si se incluye a la banca y a las empresas, que se acerca, según datos recientes, a los 70 mil millones de dólares.⁴ La privatización de la petroquímica está en puerta. ¿Acaso evitaron lo que ahora ocurre las privatizaciones anteriores? No es aventurado calificar el choque recesivo que se ha decretado, como lo ha hecho Carlos Fuentes: es, ni más ni menos, una *fórmula de desastre*.⁵ Todo será para pagar: nada para crecer.

Nos asfixia y nos paraliza un presente voraz, cargado de presagios ominosos. Las lecciones del pasado no parecen contar y nunca ha sido más incierto el futuro. La acelerada lógica globalizadora desplaza, por imperativos coyunturales, la opción de diseñar una amplia política de recuperación, que no le dé la espalda a la gente.

¿Nos encontramos atrapados, sin salida, en una fatalidad oprobiosa? ¿No enseñó el desplome del socialismo totalitario que ningún determinismo podía sustituir a la voluntad de los hombres de elegir su destino? ¿Acecha el fantasma de un nuevo determinismo? ¿Acaso la globalización le ha arrancado ya a las instancias políticas, sin misericordia, todas las capacidades para regular, en beneficio de la sociedad, el proceso económico? ¿Acaso no queda espacio alguno para una gobernabilidad democrática?

Son preguntas muy graves y nadie puede, hoy, pasarlas por alto. Frente a tales acechanzas urge abandonar, por fin, el lastre de la inercia autoritaria: es algo que le toca hacer a cada ciudadano y a cada uno de los que representan, en los poderes, la soberanía popular. A todos y cada uno nos corresponde demostrar que nunca había sido tan perentoria la democracia. El futuro sólo empezará a tener un rostro propicio si asumimos el tránsito hacia la democracia como el gran objetivo común.

Y, por supuesto, hay que abandonar para siempre la apuesta a los milagros. Hay que renunciar a “apropiarse” de mentiras del futuro, a crédito y a empujones. Hay que dejar de gastar mucho más de lo que se ahorra y casi siempre

para fines espurios. Como ha recomendado recientemente un sensato economista, hay que “evitar el pecado de la soberbia y volver a la virtud de la frugalidad”.⁶ Un convencimiento de esa naturaleza ha recorrido la escritura de este libro. No me queda sino comprobar que las noticias de la realidad confirman como nunca, desgraciadamente, la vigencia de cada uno de los argumentos que lo fueron articulando en los últimos cuatro años. Con Chiapas en carne viva ¿cómo no reconocer, hoy, que todos somos el otro México?

J. C.

Tetecala, 19 de marzo de 1995

Notas

¹ Véase Ernesto Zedillo, “Mensaje a la nación”, *La Jornada*, 13/III/1995.

² *El Financiero*, 15/III/1995. Kissinger habló sobre la crisis mexicana en el programa *Moneyline* de CNN.

³ Lorenzo Meyer, “Nunca tan pocos”, *Reforma*, 16/III/1995.

⁴ Declaración atribuida al secretario de Hacienda por representantes de la comunidad financiera internacional en Nueva York. *El Financiero*, 17/III/1995.

⁵ Carlos Fuentes, “Salinas versus Zedillo: las faldas de la Coatlicue”, *La Jornada*, 7/III/1995.

⁶ Entrevista a Francisco Suárez Dávila en *El Financiero*, 26/II/1994.

I. La pobreza en su laberinto

La teoría del desarrollo único es una teoría etnocentrista que consiste en aplicar el modelo histórico de Occidente a todas las sociedades.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

Fin de milenio

Suele fijarse en 1969 el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad marcada, más que nunca, por el tiempo de Occidente. El invento del microprocesador señala el umbral de la sociedad postindustrial: en un mínimo espacio se almacenan sonidos, imágenes y datos. Los inventos de la microelectrónica han centrado la dinámica económica en la información. La posesión de los conocimientos tecnológicos y su explotación comercial determinan la mayor productividad y, por ende, la distribución de la riqueza y la distribución del poder.

Un año antes, en 1968, se había fundado el Club de Roma para hacer un llamado de atención ante los peligros de un crecimiento indiscriminado en los países industrializados. *Los límites del crecimiento* inauguró, en 1972, un gran debate acerca de la manía del consumo irracional en los países desarrollados y la crisis del petróleo continuó, desde la realidad, las advertencias de la teoría. Hoy muchas materias primas ya no son requeridas y se sustituyen por invenciones tecnológicas, como es el caso de la fibra óptica que reemplaza a los con-

ductores de cobre. Pero el petróleo y sus derivados petroquímicos siguen siendo esenciales y todavía no puede sustituirse el uso de esa energía, o del carbón, por otras más limpias. El Club de Roma volverá a advertir, en 1989, sobre los peligros de que la riqueza de conocimientos no se traduzca en una equivalente riqueza de sabiduría: el riesgo de saber mucho pero entender poco. Propondrá una *ética suprema de supervivencia: la solidaridad mundial*. Buscar un desarrollo *sustentable* es imperativo moral en un mundo donde las dos terceras partes son pobres y para el año 2025, si no se revierten las tendencias actuales, los países ricos sólo cobijarán, en un gueto insólito, al 20% de la humanidad.¹

Se anuncia una nueva era en la que privarán los servicios, la microelectrónica y la superconductividad y donde prevalecerán nuevas élites: los poseedores del conocimiento. Algunos pensadores, como Peter Drucker, consideran sinceramente que todas las respuestas están en Occidente, es decir, en el mundo desarrollado. Ya no habría una historia o una civilización occidentales sino una sola historia y una cultura globales, troqueladas por la huella indeleble de Occidente. El principal recurso ya no será el capital sino el conocimiento y los protagonistas de la nueva era los que manejen el saber que permite crear valor, mediante la productividad y la innovación. La sociedad postindustrial se insinúa ya en el mundo desarrollado, donde el 20% del PIB se dedica a producir esa información, desde la escolaridad primaria y secundaria hasta la investigación científica y tecnológica, pasando por la capacitación en centros de trabajo:

La formación de conocimiento es ya la mayor inversión en todos los países desarrollados[...]. La productividad del conocimiento será el factor determinante en la competitividad de una compañía, de una industria, de un país.²

Una educación de alta calidad, que permearía a todos los estratos, sería el presupuesto de un orden innovador fundado en la capacidad de aprender a aprender. En esa sociedad poscapitalista ideal, regida por el saber, la educación sería un sistema abierto, con capacitación creciente e ininterrumpida. Puesto que la cultura occidental es el punto de referencia obligado, al que todo remite en el presente y remitirá en el futuro, el ciudadano arquetípico de la nueva sociedad tendrá que encarnar esa tradición para entender mejor la realidad global, sin renunciar por ello a la comprensión de otras culturas y particularidades:

El futuro podrá ser “post-occidental” o “anti-occidental”. No podrá ser “no-occidental”. Su civilización material y su saber se funda en cimientos occidentales: la ciencia; las herramientas y la tecnología; la producción; la economía; las finanzas y la banca. Ninguna puede funcionar sin arraigarse en la comprensión y aceptación de ideas occidentales y de la tradición occidental como un todo.³

La cultura occidental es el punto de referencia y de encuentro más allá de las fronteras. Ofrece, además de tecnología, valores de enorme vigencia para cualquier empeño de modernización, como la tolerancia hacia los otros, que ha preconizado Occidente aunque casi nunca la haya practicado, y la aspiración democrática. Quizá de todo el mundo pobre, América Latina sea el espacio donde resulte más inevitable reconocer que *cultural e históricamente somos parte de Occidente*,⁴ como ha insistido Octavio Paz.

Pero no es tan fácil como imaginaria Mario Vargas Llosa “poder elegir por primera vez entre la prosperidad y la pobreza”⁵ gracias al nuevo fenómeno de la globalización. El 95% de la investigación y el desarrollo del mundo se realizan hoy en los países desarrollados, que protegen mucho el acceso a la tecnología. Poco se ha avanzado desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, celebrada en Viena en 1979: sin capacidad tecnológica no se puede entrar a la economía moderna y para que crezca la capacidad productiva hace falta la infraestructura científica y tecnológica. El acceso a la economía global pasa por el acceso a la tecnología y ésta por el acceso a los capitales. En ese círculo vicioso se debaten los pobres de la periferia, cada día menos esperanzados en los “milagros económicos” que profetiza Drucker, los que habrían de convertir pronto a un número creciente de países pobres en émulos de los dinámicos Tigres del Sudeste Asiático.

La imaginación de lo que deparará el futuro ha generado anticipaciones utópicas y pesadillas. En el debate sobre la posmodernidad se han hecho críticas al despilfarro de la sociedad industrial y propuestas alternativas de desarrollo en pequeña escala. Se han formulado, a la derecha y a la izquierda, numerosas utopías postindustriales y una bibliografía interminable, a veces bordeando la ciencia ficción, procura encontrarle un sentido a la nueva época y a su proyección a futuro. Herman Kahn o Peter Drucker piensan que la nueva sociedad mundial estará en manos de gerentes tecnocráticos más importantes que los propios capitalistas. Desde el socialismo, Rudolf Bahro ha evolucionado hacia el ecologismo y André Gorz le ha dicho adiós a la clase obrera para preconizar una especie de *socialismo postindustrial*, lo mismo que Alvin Toffler, en busca de nuevas relaciones sociales que trasciendan al capitalismo.

Jacques Attali, por su parte, ha anticipado el futuro de los nómadas de la abundancia, consumiendo sin cesar objetos nómadas que les prestarían todos los servicios y complacerían todos los deseos. En los centros del mundo desarrollado reinaría el narcisismo y no habría cabida para proyecto alguno que no entrara en las exigencias del orden mercantil. Los objetos nómadas fabricados gracias a la revolución informática ya circulan por el mundo, pero sólo son accesibles a los privilegiados de los enclaves modernos. Y la información que permite imaginarlos y producirlos sigue siendo patrimonio de las empresas que emplean a científicos y técnicos del Norte.

Como sucedió antes con la Revolución Industrial, también la Revolución Postindustrial deja al margen al vasto universo de los pobres, a la periferia del Sur.

Al empezar la última década del milenio ha terminado la Guerra Fría y se han desplomado las perversas deformaciones del socialismo que engendró una burocracia ineficaz y totalitaria. Los países que ayer padecían el “socialismo realmente existente” hoy transitan en la penuria y el caos, en medio de estallidos nacionalistas y étnicos, hacia la economía de mercado. Por otra parte, el peligro de que la Tierra se transforme en artefacto muerto no ha desaparecido. El envejecimiento de la población en los países ricos y su crecimiento explosivo en los países pobres significa el imperativo de crear condiciones adecuadas de vida y desarrollo o esperar que una inmensa marea migratoria procedente del Sur inunde al Norte. El muro imaginario que ya algunos quisieran levantar entre el Sur y el Norte no soportaría esa marejada rugiente de los que tienen hambre en América Latina, en África, o en la India. Y, a la vez, si la producción para los que sí pueden consumir empezara a crecer, en el mundo entero, como hasta ahora creció en los países industriales, lo que estaría en peligro sería la sobrevivencia misma de la especie.

Proliferación de residuos sólidos; escasez de agua; duplicación del consumo de petróleo y de carbón; incremento en la emisión de gases nocivos (calentamiento por el aumento de anhídrido carbónico; reducción del ozono por los clorofluorocarbonos; efectos malignos del metano y de los dióxidos de azufre y nitrógeno): todas son amenazas reales que ya están actuando. Para el año 2000 se calcula que habrán desaparecido 225 millones de hectáreas de bosques mientras que se extinguen, cada año, 5 mil especies vivas. Como advierte Attali, la fantasía de satisfacción infinita de un hedonismo ilimitado para los habitantes del Norte encuentra su límite en el hecho de que, para el año 2025, se habrá triplicado el número de pobres en edad de trabajar a pesar de que habrán muerto de hambre 100 millones de niños menores de cinco años. En su más reciente *Informe* (1989), el Club de Roma ha reiterado que

[...] limitarse a promover el “crecimiento” en todo el mundo en vías de desarrollo conforme a los sistemas seguidos por las economías occidentales no es una estrategia viable[...].⁶

Las conclusiones de Attali se parecen mucho:

Salvo que revise profundamente sus modos de vida y produzca sus riquezas de otro modo, la humanidad destruirá cada vez más de prisa unos recursos que han requerido milenios para constituirse.⁷

Si en los países desarrollados el éxito de la sociedad postindustrial dependerá de la calidad cada vez más perfeccionada de sus escasos recursos humanos, en los

países pobres habrá que buscar a un tiempo crecimiento de la economía, sin afectar desastrosamente el ambiente, y abatimiento de la pobreza. Lo más racional será apoyarse en las culturas tradicionales en vez de hacer una imitación extralógica. Un futuro catastrófico o promisorio puede depender de una opción inteligente.

¿Fin de la utopía?

Tras el desplome del totalitarismo soviético, el mundo pareció bascular hacia un solo centro hegemónico situado en América del Norte. El poderío militar de los Estados Unidos, y la grave dependencia que todavía ata a la industria del Norte al consumo de petróleo, determinó que los países desarrollados hicieran cruzada común en la Guerra del Golfo. La polarización del poderío militar en una sola gran potencia no encuentra, sin embargo, una polarización equivalente en el poderío económico. La Comunidad Europea y la Cuenca del Pacífico, con sus corazones en Berlín y en Tokio, se han constituido en fortalezas económicas continentales que atraen al antiguo bloque soviético y a los Estados Unidos, notablemente penetrado por la inversión japonesa. Algunos analistas han pensado que el corazón del Norte tendería a desplazarse hacia Tokio si los esfuerzos hacia la integración europea no se fortalecen con una pronta articulación de la democracia y la recuperación económica en los países que fueron “socialistas”. De cualquier manera, la desaparición del modelo “socialista” propicia, más que la unipolaridad con un solo corazón en Nueva York, la emergencia de opciones de economía de mercado diversas a la norteamericana, como lo son las economías alemana y japonesa, donde el Estado tiene un importante papel regulador.

La opción de una *economía social de mercado* podría ofrecerse acaso al mundo del Sur, como una manera de integrarse al orden internacional sin el determinismo fatal de una economía de mercado en estado puro. Al caer el muro que dividía a Europa y escindía a los países industriales, el modelo alemán o el japonés podrían aparecer como nuevos paradigmas apreciables para los países del Sur. De hecho, el muro imaginario que excluiría al Sur es sólo imaginario, porque si la mundialización del mercado es una evidencia también lo son las presiones migratorias, que seguirán desplazando marginados hacia el Norte mientras las ventajas de la modernización no alcancen a las mayorías en el Sur y no vayan acompañadas con democracia:

Si la actual renuencia universal ante la intervención estatal y la regulación, con su predilección concomitante por el mercado a toda costa se desvanece, existe la esperanza de que el fin de la *Guerra Fría* dé lugar a un sistema más justo, más regulado y más fructífero de cooperación internacional.⁸

Las esperanzas del Sur podrían ubicarse en un punto intermedio: ni prescindir del Norte para embarcarse en una improbable autarquía, ni entregarse a la globalidad con las manos amarradas. Lo sensato sería buscar la integración más favorable. Parece evidente, sin embargo, que la viabilidad de ese expediente dependería, en cada caso concreto, de las condiciones de cada país y de la disposición del Norte a propiciarla.

La interdependencia del mundo contemporáneo no tiene que volverse una camisa de fuerza para los pobres. Hay que encontrar caminos para que la prosperidad no se concentre sólo en unos cuantos reductos regionales y sectoriales. Partidarios matizados de la economía de mercado, como el economista mexicano Josué Sáenz, se preguntan si basta una transición a la economía de mercado, por sí sola, o si le convendría más a América Latina mirar hacia un modelo como el de Japón:

Viviendo, como vivimos, en un mar de pobreza y de problemas, es necesario ayudar a que las islas de prosperidad se vayan extendiendo. Creo que en esto el Estado tiene todavía en América Latina un papel muy importante, siempre que esté sujeto a control democrático.⁹

En julio de 1990 Octavio Paz se preguntó en El Escorial, al inaugurar los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, hacia dónde irán las sociedades y los pueblos en el siglo XXI. En aquella lección advirtió el riesgo de olvidar *la otra voz*, la de ese modelo de supervivencia fundado en la fraternidad que es la poesía, *antídoto de la técnica y del mercado*, para permitir que la imaginación muera o se corrompa. Recordó que en Occidente reina la abundancia, pero también la injusticia y la desigualdad, y que esa abundancia sólo alcanza a una fracción del género humano. No han perdido validez ni legitimidad las preguntas básicas que se hicieron los grandes pensadores socialistas y libertarios en torno a *tres palabras cardinales de la democracia moderna: libertad, igualdad y fraternidad*. La solidaria *fraternidad*, herencia viva del cristianismo, podría enlazar a las otras dos como augurio, no del fin de la historia, sino del nacimiento de una nueva filosofía política que tendría que heredar lo mejor de la doble tradición de la modernidad, la liberal y la socialista: *sólo la fraternidad puede disipar la pesadilla circular del mercado*.

Aquel día, Paz eligió un tono profético para advertir que la institución del mercado, ahora en su apogeo, está destinada a cambiar, como todas las instituciones humanas, y señaló el peligro de que sus excesos y contradicciones arrastren en su ruina a las instituciones democráticas. La sociedad de consumo no ha enriquecido la bondad, la sabiduría ni la felicidad de los hombres, ni siquiera de los que han tenido el dudoso privilegio de disfrutarla. El poeta encontró el registro certero de la memoria profunda preservada en *la otra voz* cuando volvió la suya admonitoria:

La causa de este gigantesco desperdicio de riquezas —vida presente y futura— es el proceso circular del mercado. Es una actividad de alta eficacia pero sin dirección y cuyo único fin es producir más y más para consumir más y más[...]. Ninguna civilización había estado regida por una fatalidad tan ciega. [...] Lo urgente, hoy, es saber cómo vamos a asegurar la supervivencia de la especie humana.¹⁰

Un mes después, en México, voces de muchas latitudes confluyeron en un Encuentro sobre *La experiencia de la libertad* convocado por la revista *Vuelta*. Hombreros de pensamiento de los países del Este, de la Europa occidental, de los Estados Unidos y de América Latina debatieron sobre las consecuencias que encierra para el futuro el desplome del sistema soviético.

Más allá de las diferencias, se dio una coincidencia: lo que se derrumbó fue el presupuesto de un determinismo histórico que conduciría inevitablemente al comunismo a través de la redención de todas las sociedades por una clase mesiánica: el proletariado. Lo que se desplomó fue una de las dos vertientes del hegelianismo y de la teoría del Progreso. La lección sería que el hombre puede escapar a todas las fatalidades y escoger su destino.

Algunos, como Leszek Kolakowski, sostuvieron que el “socialismo” cayó fundamentalmente por un cambio en las mentalidades, más allá de su demostrada ineficacia económica. Daniel Bell fue más preciso: el “socialismo” soviético se hundió por su pretensión omnipotente de pasar por alto la realidad. No atendió a los límites marcados por su incapacidad para movilizar productivamente los recursos existentes y pretendió saltar desde una sociedad rural precapitalista al socialismo. Reconociendo su preocupación por la muerte del socialismo en tanto que podría representar la muerte de profundas aspiraciones humanas, Daniel Bell optó por *un mercado dentro de un marco social*, es decir, por una forma de democracia que, adecuadamente regulada para ponerle diques al egoísmo, sería la mejor vía para organizar la vida económica.

La posibilidad de un capitalismo con democracia, que permita regular la economía para el bienestar de toda la comunidad, fue propuesta por Bell, que se declaró socialista en economía y liberal en política. Quien hace años anunció el fin de las ideologías advirtió cómo han vuelto a resurgir otras nuevas, con contenidos raciales, étnicos o religiosos porque no sólo los intereses mueven a los hombres sino también las pasiones y los valores. El fracaso del bolchevismo no equivale al fracaso del socialismo, generado por la honorable aspiración a una igualdad que sigue siendo uno de los más altos ideales humanos. La crítica al marxismo-leninismo no excluye una crítica al capitalismo que practica *un feroz y desenfrenado individualismo, una ausencia de preocupación social*.

Pero la crítica al capitalismo tampoco excluye la crítica al bolchevismo, que rigidizó a la sociedad mediante el control burocrático, no fue capaz de incorporar

las nuevas tecnologías salvo en el sector militar, ni supo satisfacer los deseos y las necesidades de la gente a través del mercado. En suma:

El gran secreto del mundo occidental en los últimos veinte años se llama *productividad*, esto es, la utilización racional de los recursos, su mejor aprovechamiento. Pero ¿con qué fin? [...] Si los valores sociales se orientan hacia la acumulación individual, como en los Estados Unidos en el período de Reagan, entonces esa sociedad se conformará según la avaricia. Por el contrario, en Suecia, país que tiene un alto nivel de responsabilidad social, el capital que se acumula se dirige hacia propósitos sociales.¹¹

También Irving Howe se identificó con la tradición de un socialismo o utopismo democrático, sugiriendo que aun las más imperfectas sociedades capitalistas, siempre que sean democráticas, son mejores que las sociedades totalitarias. Como socialdemócrata, se mostró partidario de una *sociedad socialista democrática con un mercado controlado y regulado socialmente por cierto número de valores comunes*. El mercado libre, insinuó, es *una fantasía ideológica*:

El mercado no ha encontrado el modo de asignar recursos de una manera eficiente para las necesidades públicas [...] el mercado tolera desigualdades aterradoras. En las próximas décadas el dominio lo ejercerán poderosas corporaciones multinacionales que se desarrollarán en alianzas con los Estados-nación debilitados.¹²

Howe bosquejó, como modelo deseable, el de una sociedad fundada en el pluralismo democrático, con múltiples formas de asociación incluyendo a pequeñas industrias privadas, industrias nacionalizadas y cooperativas y donde funcionara la autogestión. Las medidas fiscales contribuirían a reducir las desigualdades. La salud y la educación no se considerarían como mercancías. Y, puesto que ese modelo admitiría la competencia en el mercado y no excluiría el desempleo o el fracaso de las empresas, requeriría de un Estado fuerte para proporcionar redes de seguridad y reglamentar el mercado. Los socialdemócratas, advirtió, no han renunciado a una serie de reformas graduales *con la esperanza de alcanzar la utopía*. Recordó que no hay que confundir un socialismo así concebido con las dictaduras comunistas. Dudó de la posibilidad de construirlo sobre una economía de la pobreza y, por lo mismo, consideró que una economía mixta sería lo más factible para América Latina en el futuro inmediato.

Dentro de aquel debate, una de las posiciones más escépticas fue acaso la de Cornelius Castoriadis, acerbo en su enjuiciamiento de un mercado dejado a sus propias leyes y partidario de una democracia directa, capaz de tomar en cuenta las decisiones de individuos autónomos. Aun reconociendo que resulta casi imposible

no identificar la palabra socialismo con los experimentos concretos que ha contemplado este siglo, aseguró que no hay que renunciar por ello al proyecto de una sociedad con autonomía, es decir, con *participación activa, vigilancia y responsabilidad del pueblo*.

Se negó a aceptar que la loca economía burocratizada de Stalin pudiera llamarse economía planificada y se negó a compartir el discurso de Thatcher, Reagan o Friedman por considerarlo *un sinsentido desde el punto de vista económico*. Se declaró partidario del mercado, pero de un mercado democrático regido por la soberanía de los consumidores. Más allá del Gulag y del capitalismo realmente existente, Castoriadis propuso buscar algo mejor: una sociedad efectivamente más libre.

Desde el mirador mexicano, Luis Villoro reflexionó en un tono afín al de Castoriadis. Se negó a aceptar que la sola eficacia pueda ser la meta de la sociedad, que no podría entenderse jamás como un sistema pensado por un ingeniero. Descartó la opción fallida de un socialismo que pretendió *reducir la sociedad real a una sociedad puramente razonada por unos cuantos dirigentes*. Pero procuró rescatar el auténtico *contenido del ideal socialista*:

Alcanzar una sociedad más humana [...], el ideal de una sociedad donde rijan ciertos valores de igualdad, de fraternidad y de libertad (porque eso es cierto: no puede haber socialismo sin libertad y sin democracia) [...]. Se trata justamente de propiciar estos valores humanos de protección a los débiles, valores de servicio social que difícilmente podrían realizarse en una economía de mercado sin ninguna intervención estatal.¹³

Villoro insistió en que las opciones de los países pobres no pueden decidirse en el Primer Mundo.

El interés del Encuentro fue indudable porque contribuyó a una toma de conciencia sobre las alternativas que ofrece el futuro a todos los países que no pertenecen al Club de los Siete más ricos del globo. Octavio Paz procuró resumir los destellos más iluminadores del debate: la complejidad de la historia admite la intervención de imponderables como la fortuna y el accidente, de modo que nada hay en ella predeterminado; el gran dilema para el futuro es cómo construir la libertad reconociéndole un límite: el derecho de los otros a disfrutarla. El mercado es la base de una vida económica activa y una precondition de la libertad. Pero está en crisis como la modernidad misma, es decir, como la idea lineal de que bastaba con *tomar el tren de la historia para marchar hacia el progreso, el bienestar y la libertad*. Señaló, a la vez, la necesidad de corregir las imperfecciones del mercado y de la democracia representativa y el riesgo de querer sustituirlos con quimeras.

Lo que sustentó aquel encuentro de inteligencias en busca de alternativas para mañana ya había sido visualizado en El Escorial: el imperativo de *asegurar la supervivencia de la especie humana*. Cornelius Castoriadis lo dijo en otras palabras:

Debemos entender que somos una sola humanidad la que vive sobre esta Tierra, una humanidad que requiere, por un lado, una organización política lo más descentralizada posible y, por el otro, una política mundial que resuelva las cuestiones que atañen a la humanidad en su conjunto.¹⁴

El fantasma de una idea del Progreso inventada por la modernidad para convertirla pronto en fetiche, no ha dejado de confundir y tentar a los hombres. Ese fantasma se insinúa ahora en las ofertas de una civilización *posmoderna* o *postindustrial* que aparece como el promisorio “futuro radiante” para la humanidad, cuando la inmensa mayoría de los hombres, las mujeres y los niños del planeta están muy lejos de satisfacer sus necesidades más elementales y de desarrollar sus capacidades básicas.

Los fracasos totalitarios del siglo XX y los vacíos que deja un consumismo insaciable que invade hasta los dominios de la cultura, apuntan cada vez más hacia la busca de una *modesta mejoría en la condición humana* (Irving Howe) fundando los modelos en una ética menos pedestre que la de Reagan o Thatcher. Imaginar la utopía es el primer paso para volverla realidad. No terminará la utopía mientras no se agote la imaginación del hombre. Como lo ha vislumbrado lúcidamente Octavio Paz, el fin del socialismo malamente llamado “científico” no puede entenderse como el fin de la utopía. Una cosa es la quimera y otra la aspiración indestructible del hombre a darse, en la libertad, un destino mejor.

Lo global no quita lo local

Es evidente la interdependencia de las naciones y la interdependencia de los problemas en el mundo contemporáneo. Las migraciones, los medios y la circulación de productos en los mercados, aunque muchísimos no tengan acceso, son canales por donde fluye esa interdependencia. Los agravios al medio ambiente, la desnutrición y demás síntomas de la pobreza extrema en los países pobres y las crisis de gobernabilidad, por el desborde de demandas que las fórmulas diseñadas casi siempre con criterios globales no alcanzan a satisfacer, no respetan fronteras. Es cada vez más urgente que la información circule con la misma presteza que los problemas y que se generalice una convicción de que todos los problemas afectan a todos, por distantes o ajenos que puedan parecer. Hay que acabar de entender que a cada cual le afecta lo que está ocurriendo en cualquier punto del planeta y que la suma de pequeñas soluciones locales sí contribuye a un desarrollo sustentable y a la sobrevivencia.

Las iniciativas locales para promover un desarrollo con apego a la realidad han empezado a brotar por todas partes. Sólo tomando en cuenta las situaciones concretas se puede empezar a modificarlas. Lo deseable es que los gobiernos munici-

pales, estatales y nacionales incorporen ese criterio como la columna vertebral de su actuación. Numerosas Organizaciones No Gubernamentales surgen, mientras tanto, para poner en práctica iniciativas que tienen que ver con la producción, la alimentación, la educación y la salud. Actúan en comunidades rurales y en las periferias de las ciudades, donde la pobreza del campo se vuelve miseria urbana. Sus proyectos se fundan en la experiencia práctica, ingrediente sin el cual resultan inoperantes las visiones globales del desarrollo que pretenden aplicarse como fórmulas de vigencia generalizada:

Ir de lo mundial a lo local y de lo local a lo mundial constituye una radical transformación en los modos de pensar y razonar que será esencial en lo sucesivo. Es un nuevo ejercicio intelectual que tendremos que extender e integrar.¹⁵

Grandes catástrofes naturales como el terremoto de 1985 en la ciudad de México, o el brote de un conflicto armado como la guerrilla en Chiapas en enero de 1994, pueden actuar como catalizadores que cohesionan la participación solidaria o, por lo menos, la toma de conciencia de situaciones de grave penuria aun entre quienes no resultan directamente afectados. En casos tan extremos surgen organizaciones espontáneas en las zonas afectadas, como ocurrió después del temblor en el Distrito Federal, que pueden evolucionar o no hacia acciones de mejoramiento consistentes y perdurables.

En el caso de Chiapas, una explosión localizada en cuatro municipios de la Selva Lacandona logró muy pronto el apoyo moral a sus demandas de 280 organizaciones independientes de aquel estado. Una cifra que parecería improbable si no hubiera evidencias múltiples de su existencia real. Entre otras, las voces de sus delegados, manifestando agravios y motivos de adhesión a las demandas de los combatientes, en una elocuente reunión con el presidente de la República en la capital chiapaneca tres semanas después del estallido. Aquellas 280 organizaciones, integradas en un Consejo Estatal (CEOIC), habían surgido desde hacía años para promover pacíficamente demandas locales de campesinos e indígenas. Pero, más allá de los límites del estado sureño, la opinión pública y múltiples ONG de todos los niveles se manifestaron por una solución pacífica y sin intransigencia. Como advirtió Carlos Monsiváis, ese *nuevo y notable* protagonista que es la sociedad civil emergió con una participación y una eficacia que no se habían hecho tan ostensibles en muchos años, seguramente desde el temblor.¹⁶

La irrupción de la sociedad civil es, sin duda, uno de los fenómenos contemporáneos más ilustrativos del constante entrecruzamiento entre lo local y lo global. La sensibilización de la opinión pública mundial a través de los medios que se manejan con objetividad informativa es una de sus manifestaciones. Es difícil de ponderar el peso específico que puede llegar a tener ese trasfondo global de

opinión pública en las decisiones nacionales y locales de los gobiernos, pero nadie podría dudar de su influencia.

Organizaciones No Gubernamentales de múltiples propósitos y con o sin filiación religiosa o política han surgido en los últimos años en el mundo entero. La razón de su ubicuidad está en la rigidez de los canales gubernamentales existentes y en la ineficacia burocrática para encontrar soluciones concretas para los problemas reales. Las ONG reflejan la voluntad que muestra la ubicua sociedad civil de participar activamente en la busca de tales soluciones. Su proliferación indica que algunas instancias internacionales y sus recetas globales, adoptadas por gobiernos nacionales en la toma de decisiones que afectan a los individuos en infinitas circunstancias locales, no han sabido contribuir a mejorar la vida de la gente.

Los objetivos de las ONG cubren una amplísima gama de atención a necesidades e inquietudes, desde la preservación del ambiente hasta el respeto a derechos humanos de toda índole. Muchas surgen para apoyar mejorías a la calidad de vida en pequeños ámbitos locales. Otras, para vigilar más allá de las fronteras nacionales la vigencia de los derechos humanos. Se les reprocha una anárquica proliferación que restaría coherencia a sus esfuerzos y se les aplaude, por otro lado, la espontaneidad, la flexibilidad, el vigor y el entusiasmo. Instancias con visión global como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o el Club de Roma proponen tomarlas cada vez más en cuenta, tanto por parte de los organismos internacionales como de los gobiernos nacionales. Las posibilidades de éxito de muchas ONG han dependido de su habilidad o relaciones para canalizar apoyos internacionales hacia sus proyectos locales.

Dentro de la red global de interdependencia, lo más saludable sería una estrecha comunicación entre quienes toman las decisiones internacionales y nacionales y los que tienen el conocimiento y la experiencia de las necesidades locales. Las ONG tienden a agruparse en alianzas o foros de apoyo mutuo que facilitan esa interrelación y acercan las grandes decisiones globales y nacionales a las pequeñas, pero inmensamente reales, necesidades locales.

La interdependencia funciona en los dos sentidos: de lo global a lo local y a la inversa. Si se pretende aplicar fórmulas globales haciendo abstracción de realidades locales, los resultados pueden ser desastrosos cuando la realidad se resiste a parecerse a la teoría. El pequeño realismo de los que buscan mejorar, aquí y ahora, las condiciones de vida de la gente tiene una densidad más contundente que la de cualquier ideología.

No hay duda, sin embargo, de que esa atención al llamado de la realidad tropieza con otra realidad de poderosos intereses. El imperativo moral de crear un desarrollo y una economía mundiales sustentables, y coincidentes con el esfuerzo de aliviar la pobreza en el mundo, topa con la pared de la lógica estrictamente económica del mercado. Como ha sabido discernir Robert B. Reich:

Si se desenvuelve al impulso de su propia lógica, la división internacional del trabajo no sólo creará grandes disparidades de riqueza dentro de las naciones sino que reducirá la disposición de los ganadores globales a hacer algo para revertir esa tendencia hacia la desigualdad —dentro o fuera de cada nación.¹⁷

Ha disminuido la amenaza de un conflicto global con el fin de la Guerra Fría. Las transformaciones económicas y la tecnología tienden a hacer más borrosas las fronteras entre las naciones. Pero hay que redefinir papeles en la red global, con conciencia de lo que se deben entre sí los ciudadanos de cada nación y de lo que deben a los demás seres humanos. Confiando en la libertad que todos tenemos de elegir entre opciones para evadir cualquier supuesto determinismo, el conocido economista propone asumir obligaciones mutuas como partícipes de un mundo interdependiente.

Para que la red global funcione en beneficio de todos no basta, pues, con sentarse a esperar a que los beneficios se desprendan, como consecuencia natural, de la economía de mercado. Ni se trata de que los consorcios multinacionales extraigan cómodamente utilidades de los países pobres y, de paso, aprovechen para venderles sus productos. Sólo si se busca promover de verdad el desarrollo equitativo de lo que se llamaba Tercer Mundo crecería, ahora sí en beneficio de todas las regiones, la economía mundial. Un buen conocedor norteamericano del orden económico global, convencido a la vez de los principios de democracia y de justicia, puede imaginar así la transformación de sus tendencias naturales, de su lógica propia, para asegurar otro orden más solidario. Pero ¿pasarán tales anticipaciones del dominio de los buenos deseos? Veamos lo que dice, hasta el día de hoy, el implacable lenguaje de las cifras desnudas.

Los de arriba y los de abajo

El mercado no ha beneficiado a los más pobres. Los pobres carecen de tierra, o del capital y del crédito necesarios para volverla más productiva. Si viven en pequeñas o en grandes ciudades, no tienen oportunidad de empleo suficientemente remunerado. El mercado no basta: hace falta una red de seguridad social que abarque las necesidades básicas. La pobreza no es un residuo del crecimiento, que pueda curarse con aspirinas o pequeños parches. Lo ha señalado el PNUD:

Los gobiernos no deben abordar la pobreza después del crecimiento económico. Deberían más bien adoptar modelos de crecimiento económico que incluyan como uno de sus principales objetivos la eliminación de la pobreza.

Y ha insistido:

[...]los pobres tienden a quedarse por fuera del mercado, ya sea en sus naciones o a nivel internacional[...].¹⁸

Tres mil quinientos millones de personas —las tres cuartas partes de la humanidad— viven en los países pobres, sobre territorios que ocupan dos tercios de la superficie del planeta. El Banco Mundial (BM) calculó hace poco mil millones en pobreza extrema. UNICEF calcula 1 534, es decir, el 27% de los seres humanos.¹⁹

Los países industriales vivieron tras la Segunda Guerra Mundial una euforia desarrollista, con crecimiento sostenido y pleno empleo, que culminó en los años sesenta. Los zumos de la abundancia alcanzaron para todos. El Estado, con orientación keynesiana, procuró asegurar un poder de compra estable y generalizado. En algunos países del Tercer Mundo se crecía entonces a más del 5% anual con el modelo de sustitución de importaciones, aunque los beneficios no alcanzaban a más del 20 o 30% de la gente.

En 1979, mil millones ganaban menos de 250 dólares al año; otros 1 500 millones recibían entre 250 y mil dólares: en los países desarrollados, el promedio era de 6 mil dólares *per cápita*.²⁰ Tras la década perdida ya sólo el 10 o el 15% mejoraba su bienestar en los países pobres. En 1988, el PIB de los países industriales era de 12 mil dólares anuales *per cápita* mientras en el Sur no pasaba de 700, con una enorme cantidad de gente por debajo de ese ingreso.²¹

La brecha se ha multiplicado. Calculando la diferencia de ingresos promedio entre países ricos y pobres, el 20% de los más ricos del mundo registra ingresos 150 veces superiores, o más, que el 20% más pobre.²²

Los países pobres entran en el mercado como socios desiguales. Algunos han disminuido a la mitad su participación en el mercado mundial desde 1960. Las exportaciones africanas son en un 90% de materias primas y las latinoamericanas lo son en un 65%: los precios se deterioran y la demanda disminuye. Y si exportan mano de obra se encuentran con una barrera.²³

Si dentro de sus países los pobres no tienen acceso al crédito, al capital ni a la tecnología, lo mismo ocurre en el mercado mundial: al 20% más pobre de la población mundial sólo le llegan el 0.2% de los préstamos comerciales y el 1.3% de la inversión internacional; sólo participa en el 1% del comercio y apenas recibe el 1.4% de los ingresos del planeta. La disparidad en tecnología y en sistemas de información sigue creciendo, celosamente protegidos en el Norte. En proporción *per cápita*, el Norte cuenta con nueve veces más científicos y técnicos y cinco veces más estudiantes de nivel superior, e invierte 24 veces más en investigación tecnológica.²⁴

La deuda sigue siendo determinante. Las tasas de interés reales en los años ochenta fueron del 4% para los industrializados y del 17% para los países pobres.

Esto se debió a la reducción de sus precios de exportación, que hizo muy desfavorable el ajuste de la tasa de interés nominal, de acuerdo con la tasa de cambio. Como consecuencia, *mientras más pagan los deudores más deben*. Ni el BM ni el FMI han podido equilibrar esas fluctuaciones sino que más bien las han intensificado.²⁵

La inversión internacional directa sigue circulando en un 83% entre países industrializados, buscando la mayor rentabilidad. Hasta los capitales de los países pobres prefieren irse a los países ricos. La mano de obra barata no es por sí sola una ventaja comparativa, salvo que además de ser barata tenga alta calificación tecnológica. Formar a números crecientes de la población con capacidades técnicas y administrativas es imprescindible. En palabras del PNUD:

A menos que los países en desarrollo adquieran un mayor control sobre la creciente “industria del conocimiento”, permanecerán por siempre rezagados en la producción de bajo valor agregado.²⁶

En un seminario del BM, en febrero de 1993, se insistió en el acceso a la tecnología como *una nueva fórmula para combatir la pobreza* y se aseguró que la redistribución del ingreso es la única opción para asegurar la paz social. Sin educación no habrá “milagros económicos”. De hecho, el control de la tecnología opera como una nueva forma de colonialismo.²⁷ La inversión de los Estados tiene que ir masivamente a la formación de recursos humanos, es decir, a la educación. Pero si no se empieza por consolidar el conocimiento en los niveles básicos y por garantizar el acceso de toda la población a una educación primaria y secundaria de calidad, fortalecer la educación superior y tecnológica sólo acentuará la brecha entre marginados y privilegiados.

El 95% de los mil millones de niños que nacerán en la próxima década en el mundo serán pobres. Hoy mueren de hambre y enfermedades evitables más de 13 millones cada año, es decir, más de 35 mil al día. Satisfacer las necesidades básicas de los niños pobres del mundo costaría 25 mil millones de dólares anuales durante una década, la mitad de lo que gastan los países desarrollados en calzado deportivo o en cigarrillos. La ayuda internacional, en forma de créditos con intereses bajos, suma actualmente alrededor de 40 mil millones, el 0.5% de su PIB. Aunque es muy escasa, la verdad es que los gobiernos que la reciben no dedican ni un 10% a cubrir necesidades básicas de la población materno-infantil, incluyendo planificación familiar.²⁸

La grande bouffe

El presidente del BM lo califica de escándalo moral: más de mil millones de seres humanos disponen de menos de un dólar al día para sobrevivir. Un informe del

Congreso de los Estados Unidos descubrió que cada año se tira allí a la basura el equivalente de lo que alcanzaría para alimentar a 50 millones de personas.²⁹ Países que importan granos para consumo interno exportan carne para confeccionar hamburguesas o alimentos procesados para animales o soya para el mismo fin o flores para el mercado suntuario de los países prósperos.

A los países del Norte, con el 18% de la población mundial, les corresponde el 78% de la producción, el 81% del consumo de energía, el 70% del uso de fertilizantes químicos, el 84% de los tractores, el 88% del hierro y el 84% del gasto en armamentos. Al 82% de la población del planeta, que vive en Asia, África y América Latina, le toca la quinta parte de la producción y el 15% del ingreso mundial.³⁰

El gasto de energía, el uso de recursos y el deterioro del ambiente que hacen los desarrollados pesan tanto sobre el planeta como el total de población de los países pobres. El mundo desarrollado consume 15 veces más energía. El 5% de la población mundial, que habita en los Estados Unidos, consume el 28% de la energía mundial, es decir, una vez y media más que todos los países en desarrollo juntos.³¹

El 49% de la producción mundial de granos se usó, en 1988, para alimentar ganado en unidades intensivas que encierran bajo techo hasta 100 mil vacas. Reducir apenas un 17% el consumo de carne de los países prósperos dejaría disponibles 100 millones de toneladas de grano para la gente de los países pobres.³² Un pequeño ahorro en los granos que se destinan al ganado permitiría contar con una reserva mundial para evitar penuria y hambrunas.

La agricultura industrial de los Estados Unidos desperdicia mucho energético: utiliza 900 litros de combustible por hectárea de maíz mientras que en México sólo se gastan 35. Si todas las tierras del mundo se cultivaran así, en 50 años se habrían agotado las reservas de energéticos sin poder cubrir los demás usos del petróleo.³³ La agricultura de los desarrollados es muy productiva pero usa tanta energía como su industria pesada. El 75% del consumo en esos países es de alimentos procesados. El procesamiento industrial de alimentos desplaza trabajo humano y animal por máquinas y utiliza enormes insumos de gasolina, fertilizantes químicos, plaguicidas y granos. Alimentar a una sola persona requiere, con semejante sistema, una tonelada de petróleo al año.³⁴ Es evidente, como dijo Schumacher, que los recursos del planeta no alcanzarían para satisfacer, a nivel mundial, una demanda como la de los Estados Unidos. El modelo del despilfarro no sólo no es recomendable: tampoco es practicable.

El fetiche del progreso

¿Puede aspirarse a un “nuevo humanismo” como corolario de la abundancia en la sociedad de consumo? Empezaron a imaginarlo, en sus múltiples cuestionamientos,

los jóvenes impugnadores de los años sesenta. Un “malestar de la civilización”, acaso más agudo que nunca desde los albores de la Revolución Industrial, marcaba el umbral postindustrial. Frente a las maravillas de la tecnología, se invocaban todas sus abominaciones. Lo que se ponía en duda, con el mito del Progreso, era su sustento cada vez más improbable en el mito de la Felicidad. La idea del Progreso indefinido aparecía como la más engañosa metáfora del Infinito inventada por Occidente. Mientras Edgar Morin advertía señales de crisis en esa idea medular, Lévi-Strauss reivindicaba las cosmovisiones de las sociedades “arcaicas” como sistemas de pensamiento absolutamente coherentes. Valores de fraternidad, recuperación de la naturaleza, aspiración a reencontrarse con lo sagrado coincidieron con la reivindicación de identidades diversas. A las razones de la ganancia y la cultura del despilfarro empezó a oponerse la idea de que *lo más* no es necesariamente *lo mejor*. Muchos se dieron a repensar el desarrollo, en los años setenta, para no subordinarlo al crecimiento económico ni a la técnica y para colocar en su centro al hombre.

Ya en pleno tobogán de la posmodernidad se buscaron nuevas opciones para enfrentar “el agotamiento de las utopías” y el ahondamiento de la brecha entre ricos y pobres del mundo. Se entendió que la crisis del mito del Progreso afectaba por igual a países capitalistas y “socialistas”. Sería fallida la imitación extralógica de cualquiera de los dos modelos, que sólo conduciría a culturas ricas en diversidad a reconocerse cada vez menos en su propio rostro.

En un encuentro convocado en 1977 por el brasileño Candido Mendes de Almeida se formularon, en Figline Valdarno, todas las inquietudes de la década y se alertó contra el riesgo de una imaginación agotada. Los países en desarrollo no podían evadir la busca de un modelo propio, que habría que formular aprovechando por igual las culturas tradicionales milenarias y los aportes técnicos de Occidente. Edgar Morin aconsejó tomar lo mejor de aquí y de allá y Cornelius Castoriadis insistió en advertir la falacia de considerar al “socialismo” soviético como otro modelo a imitar siendo, como era, una versión totalitaria y burocrática del *desarrollismo* del proyecto occidental. El Tercer Mundo, en cambio, podía hacer un aporte excepcional a la transformación de la sociedad mundial:

[...]la solución de los problemas actuales de la humanidad tendrá que pasar por la conjunción de ese elemento con lo que Occidente puede aportar; quiero decir, la transformación de la técnica y el saber occidentales de manera que puedan ser puestos al servicio del mantenimiento y del desarrollo de las formas auténticas de organización social que subsisten en los países subdesarrollados[...] y, a la vez, la posibilidad para los países occidentales de aprender allí algo que han olvidado, de inspirarse en ellos para revivir formas de vida verdaderamente comunitaria[...].³⁵

En países con culturas tradicionales, los excedentes no tienden necesariamente a acumularse sino que muchas veces se destinan a otros fines como las celebraciones rituales o las fiestas. No es mejor ni peor: es distinto.

¿Nuevas direcciones?

Los años setenta fueron pródigos en críticas al desarrollismo. Un año después de *Los límites del crecimiento* E. F. Schumacher había sentado los fundamentos de alternativas hacia un desarrollo en pequeña escala. Recobrar el sentido de lo que es *suficiente* sería el punto de arranque para revertir la actitud depredadora que ha caracterizado a la sociedad de consumo. Siendo lo económico el valor por excelencia, sólo es válido lo que reditúa altas ganancias monetarias y no se cuestiona la validez de prácticas que pueden ser destructivas o degradantes, siempre que sean “económicas”. Los bienes importan por su valor en el mercado, no por lo que son. El mercado es la institucionalización del egoísmo y la irresponsabilidad. La ciencia económica ha aportado poco para resolverle a la humanidad sus problemas más serios. Frente a la idolatría del gigantismo que ha caracterizado al maratón del Progreso Schumacher revaloró, en 1973, las virtudes de lo pequeño. *Lo pequeño es hermoso*³⁶ ofrecía un compendio de las ventajas de un modelo múltiple para los países pobres, generado en sus realidades y no irracionalmente imitativo. Quedaba implícita, lo mismo que en *The Age of Plenty*, la esperanza de que los beneficiarios de la abundancia volvieran sobre sus pasos para poner al hombre en el centro del desarrollo.

Las alternativas que propuso Schumacher se asientan en una concepción cristiana de la vida. Su crítica al modelo occidental reconoce que la saturación de satisfactores no significa mayor felicidad y propone explorar *nuevas direcciones* para revertir la cultura del desperdicio y recuperar los valores que hace tiempo tuvieron vigencia en las sociedades hoy más avanzadas. Voces como la de Barbara Ward, que hablaron de revertir el deterioro de la verdadera civilización en las grandes ciudades, pronto se hicieron eco de las propuestas de Schumacher:

Habría que abandonar ese deseo permanente de “tener más” que es el origen de la inflación, la médula del hastío, las ruedas de un molino que todo lo tritura sin ningún sentido[...].³⁷

Durante dos décadas abundaron las experiencias en países desarrollados. Empezaron a surgir huertos familiares y comunitarios para cultivar vegetales de consumo cotidiano: 700 mil en Londres, muchísimos en Holanda, 30 mil en los Estados Unidos donde trabajan cerca de 3 millones de personas, *cultivando no sólo hortalizas*

sino esperanza.³⁸ Emplear terrenos baldíos de las ciudades para cultivar huertos significó para muchos comer tomates no madurados artificialmente con gas y evitar el daño a la salud de los aditivos industriales. Reaparecieron en todo el territorio norteamericano ferias y mercados regionales sobre ruedas con carne y lácteos, frutas y verduras producidas orgánicamente, al estilo de antes, y hasta se organizaron, como en Europa, cooperativas de consumo para adquirir los productos de los agricultores pequeños. Floreció la añoranza de la autosuficiencia que caracterizaba a las viejas redes de producción de alimentos: de la pequeña granja al pequeño mercado y a la tienda del pueblo. Todo ello después de que el consumo de vegetales frescos se había visto disminuido en una mitad en el último medio siglo, paralelamente a la desaparición de unas 100 mil granjas cada año sólo en los Estados Unidos. Muchos agricultores desechan hoy los productos químicos y vuelven a la rotación de cultivos y al uso de abonos orgánicos. Pero ¿hay de veras alguna posibilidad de que el ganado regrese al pasto y los cerdos y las gallinas vuelvan a consumir los desperdicios como ocurría en las granjas del Primer Mundo hasta la Segunda Guerra Mundial?

La herencia de Schumacher fue prolífica. Ya para 1981 era mucho lo que habían emprendido el *Intermediate Technology Development Group* y otras instancias semejantes para demostrar que es posible y práctico fomentar tecnologías sencillas y de bajo costo, a escala humana, cuidando los recursos y sin violentar a la naturaleza.³⁹

La numerosa bibliografía que apareció en los años setenta y los ochenta sobre las pequeñas comunidades, su mejoramiento y posibilidades de autosuficiencia; las innovaciones de tecnologías alternativas; el uso de energías naturales; el reordenamiento de la relación entre la tecnología y la gente; la recuperación de la cohesión y la identidad de los barrios dentro de las grandes ciudades y otros temas semejantes son la mejor demostración, junto a las múltiples aplicaciones prácticas de esas inquietudes teóricas, de las reacciones explícitamente críticas que la propia sociedad de consumo ha generado dentro del *american way of life*.

En los Estados Unidos se da un fenómeno de regreso a los pequeños poblados en una migración que ahora quiere revertirse. Mucha gente vuelve en busca de un trabajo, aunque no sea demasiado bien pagado, y de condiciones de vida más amables. Cuando el mundo se vuelve “aldea global”, empieza a revalorarse la pequeña aldea. Cuando la organización en gran escala, impersonal y deshumanizada, demuestra que no es capaz de resolver los problemas reales de las personas concretas, resurge el espíritu local que devuelve la sensación de poder controlar la propia vida. Recuperar esa identidad y buscar la autosuficiencia mediante la cooperación comunitaria se vuelve una meta a la que sí se puede aspirar.

Los sitios “remotos” lo son porque un modelo desequilibrado entre el desarrollo urbano y el rural los ha hecho remotos: si vuelven a ser productivos y están bien

comunicados, pueden recuperar su vitalidad. En Francia se procura revitalizar esos núcleos de dimensión más humana que fueron, siempre, la savia de la nación.⁴⁰

La abundancia no gotea

Hasta ahora, aun en etapas de muy notorio crecimiento del PIB, la precaria participación de las mayorías en el ingreso y los satisfactores sólo ha acentuado la brecha de la desigualdad en los países pobres. Brasil es un ejemplo paradigmático de crecimiento con pobreza.

Entre 1960 y 1980 se registró allí un 7% de crecimiento anual, aumentando 10 veces el esfuerzo exportador y subiendo el PIB *per cápita* por encima de los mil dólares. En 1987 era de 2 020 dólares. Pero ¿cómo se distribuyó el ingreso?: el 1% de los más ricos obtuvo la misma participación que el 50% de los más pobres.

¿Por qué? Muchas transnacionales aplican tecnologías que ahorran mano de obra y en el campo prevalece la gran plantación exportadora de productos agrícolas, con ganancias concentradas en muy escasos beneficiarios. Se da entonces una paradoja: aumentando la producción de alimentos, los pobres siguen hambreados. Brasil exporta soya, en 9 millones de hectáreas, para 45 millones de cerdos en países desarrollados. Sembradas de maíz y frijol alimentarían a 45 millones de brasileños. Cabe añadir que, entre el Nordeste y las favelas, ese país suma 75 millones de desnutridos.

Suele elogiarse el esfuerzo de Brasil para “sembrar su propia energía” pero se olvida que un autotransporte grande consume el equivalente de 80 acres de caña. Con lo sembrado en un millón de hectáreas, se alimentarían 8 millones de pobres. Aunque todos los autos de Brasil pudieran moverse con el alcohol etílico derivado de la caña de azúcar y de la yuca ¿compensaría eso la miseria creciente de millones de brasileños?⁴¹

La Revolución Verde fue otro ejemplo paradójico. “Racionalizar” la agricultura multiplica la migración de campesinos: entre 18 y 33% en la India; entre 24 y 48% en Bangladesh y así en todas partes. Las nuevas semillas, vulnerables a las plagas, requerían alto consumo de plaguicidas y de químicos e inversiones importantes en irrigación que eran incosteables para los campesinos.⁴²

Donde antes se sembraba maíz y trigo para consumirlo ahora siembran las transnacionales, para exportar, cultivos de plantación. Tres consorcios manejan el 63% del mercado mundial del plátano y otros dos el 75% del mercado del cacao; seis controlan el 85% de la producción de algodón y dos acaparan el mercado con el 70% del café. Los cultivadores de cacao y de plátano recibían hasta hace poco entre el 2 y el 5% de los precios comerciales de esos productos.⁴³ Los precios han vuelto a caer últimamente.

Producir carne o granos para el mercado mundial, mecanizando el proceso, beneficia a consorcios de la industria química y del comercio. Cultivar granos y básicos, en parcelas pequeñas y medianas, significa producir lo que hace falta para comer, generar empleos en oficios vinculados al proceso agrícola, consolidar un mercado interno y reducir la migración hacia las ciudades.

El desarrollo agroindustrial moderno que busca altos rendimientos suele traducirse en expulsión de campesinos que pasan a nutrir contingentes de desempleados en villas miseria de las grandes urbes. Al finalizar el siglo la mitad de la población mundial será urbana y el 50% vivirá en países en desarrollo, donde su proporción habrá crecido de un 31% en 1980 a un 46% en el año 2000. Pero la mitad de esos desplazados a las ciudades no tendrá empleo o ganará menos de lo necesario para sobrevivir: de cada siete jornaleros que emigran a la ciudad en Latinoamérica seis arañan con dificultad la economía subterránea, subsistiendo apenas en cinturones de pobreza de barrios periféricos.⁴⁴

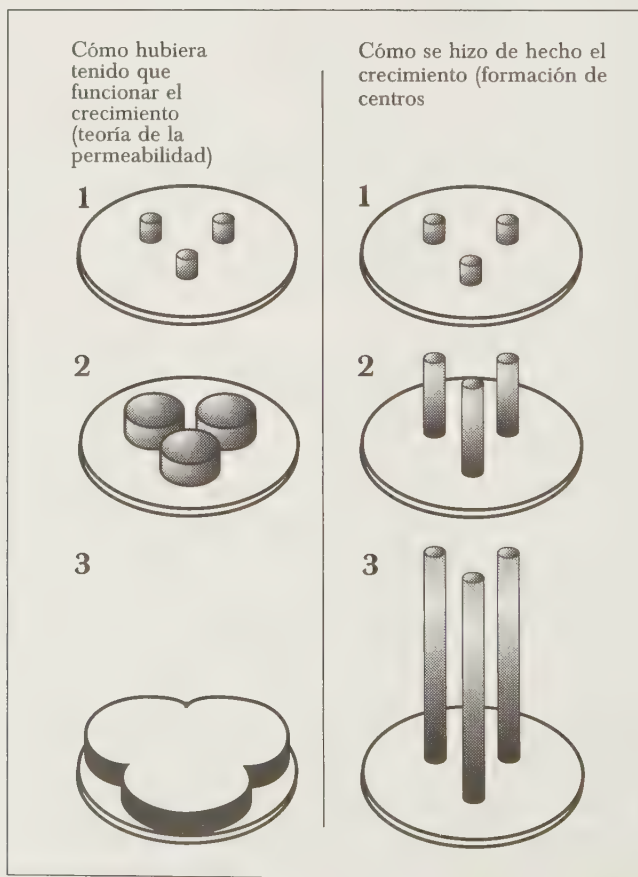
La emigración a las ciudades ha sido propiciada por políticas que privilegian el desarrollo industrial y descuidan el sector agropecuario, salvo para apoyar a la agricultura comercial en gran escala destinada a la exportación. Los centros urbanos son islotes de crecimiento en mares de sargazo y marginación. Funcionan como imanes de atracción para los desplazados del campo, cada vez más precario. Sin embargo, la gran mayoría de esas masas que migran en busca de medios para sobrevivir participarán sólo de la pobreza porque la industrialización y los servicios no alcanzan a asimilarlas.

Resolver la magnitud del desempleo con industrialización supondría inversiones de magnitud inalcanzable. Para cubrir los 310 millones de empleos, a un costo promedio de 50 mil dólares cada uno, que demandaba la población joven del Tercer Mundo en los años ochenta se habrían requerido más de 15 billones, una cifra inalcanzable con ahorros internos, con inversión extranjera directa y con ayuda para el desarrollo. En 1980 las transnacionales sólo ofrecían 4 millones de empleos en la totalidad del mundo subdesarrollado según datos de la OIT, lo que equivale al 0.6% de todas las fuentes de trabajo del Tercer Mundo. El número de empleos nuevos que se requerirán en el mundo en desarrollo (sin contar China) para el año 2000 es de 1 300 millones, incluyendo a los 300 millones ahora desempleados: más del triple de los empleos que existen actualmente en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo habrían de cubrirse por ese camino?⁴⁵

La inversión transnacional con tecnologías intensivas de capital no crea muchos empleos: la ventaja está en producir con salarios muy bajos y, en lugares como Taiwan, con jornadas de hasta 12 horas de trabajo. Estas empresas llegan a ahorrar mucho, en relación con lo que cuesta producir en los países desarrollados, pagando hasta 16 veces menos salario en la industria textil y en la automotriz. Los procesos intensivos en mano de obra se dan en países donde las condiciones de trabajo son muy precarias.

La industrialización tiene efectos notoriamente negativos sobre el empleo cuando desplaza a más artesanos de los que encontrarán ocupación en las nuevas fábricas: en Indonesia desaparecen 410 mil plazas en artesanías textiles y sólo se ocupan 86 mil en la industria; en África pierden el empleo 5 mil artesanos del calzado y sólo 40 serán requeridos por la fábrica que los desplazó y que va a sacar al mercado millón y medio de sandalias de plástico.⁴⁶

El modelo industrializador ha promovido un desarrollo marcadamente desigual. Sectores reducidos de la población, en perímetros urbanos dotados de todos los servicios, consumen bienes industrializados y tecnología moderna en proporciones semejantes a las de países altamente desarrollados. Esos islotes crecen hacia arriba, no se expanden hacia el entorno. Las transnacionales son puentes que los integran con el mercado mundial.



Gráfica 1

Fuente: Rudolph Strahm y Ursula Oswald, *Por esto somos tan pobres*. Cuernavaca: CRIM/UNAM, 1990, p. 168.

Mientras que las ganancias que generan las exportaciones agrícolas van a proyectos industriales, a la especulación en bienes raíces o a satisfacer demandas del consumo urbano de sectores relativamente pequeños, la pobreza le impide al 70% entrar al mercado de consumo. En el campo, donde sólo llega el 20% de la inversión y donde ha quedado rezagada la más extrema pobreza del Tercer Mundo, más de un 40% de la población es joven y exige empleo. Y los que emigran apenas subsisten con ingresos bajísimos, con cifras de desempleo del 30 o el 40%:

Si se permite que sigan estancados veinte años más, salvo en las cifras de población que siguen creciendo, la catástrofe humana alcanzará una dimensión irreparable [...] la decisión de modernizar a toda velocidad ha incrementado al parecer la dependencia [...] no ha sido evidente que las comunidades locales obtengan una participación justa de las ganancias generadas.⁴⁷

El riesgo de un salto brusco a la modernización, vía crecimiento industrial y comercial, es que la gran mayoría se quede rezagada. Un desarrollo sólido, con empleo para las grandes mayorías, sólo puede propiciarse con tecnología intermedia y un amplio apoyo al desarrollo integral del campo, incluyendo la creación de agroindustrias regionales y locales.

Vitaminar sólo a los islotes para dinamizar su crecimiento repercute en el aumento de los índices del PIB pero no en la periferia de la economía: las vitaminas no llegan a los pobres. Sólo los islotes se vinculan con los países industrializados, mediante el mercado, los medios y los intercambios culturales. La teoría del *trickle down effect* ha sostenido que el crecimiento del sector moderno se iría expandiendo hasta abarcar con su abundancia, cada vez más, al sector tradicional. Pero ese *efecto de goteo* no se ha producido hasta ahora en ninguna parte.

Los índices de crecimiento resultan engañosos si no se traducen en poder adquisitivo generalizado. Si la industria no produce bienes para el consumo de las mayorías ni éstas tienen con qué comprar, el modelo de crecimiento industrial sólo beneficia a los exportadores, a los sectores ricos y a proporciones variables de las clases medias urbanas. La experiencia de algunos países demuestra, en cambio, que puede elevarse la calidad de vida sin altos índices de crecimiento reflejados en elevados PIB.

En los años cincuenta y sesenta Sri Lanka, por ejemplo, logró resultados espectaculares en atención a necesidades básicas aunque el PIB fuera muy bajo. Sus índices de alfabetización y de esperanza de vida eran muy próximos a los de naciones desarrolladas. Cuando a partir de 1977 se dio un vuelco a esa política para reorientar la economía hacia el exterior, centrándola en los mecanismos del mercado, la distribución del ingreso empeoró y subieron los precios. Creció el consumo de los ricos pero subieron los índices de desnutrición de los pobres y se revirtieron los avances ya logrados en la educación.⁴⁸

Otra nación muy pobre en términos de PIB *per cápita* que hizo notables avances para cubrir necesidades básicas, sin ayuda exterior importante y sin crecimiento interno, fue China. Después de imitar a la URSS con resultados funestos, China optó en los años sesenta por consolidar su desarrollo aliando tecnología moderna con técnicas tradicionales e impulsando la agricultura para el autoconsumo. Se recuperó una antigua tradición, la ayuda mutua, y la tecnología de abono orgánico intensivo, mejorada con algunos nuevos fertilizantes y pequeños tractores de fabricación local. Desconectada del mercado exterior durante tres décadas, se concentró en dar ocupación y comida a sus mil millones.⁴⁹ Ahora China se ha abierto a la economía global y crece a un 10%, pero después de un sólido esfuerzo hacia dentro.

En la India, donde no hubo coherencia con la gran anticipación visionaria de Gandhi y se favoreció un desarrollo industrial en gran escala había, en 1978, 20 millones de desempleados, con un aumento de 6 millones de nuevas demandas de trabajo al año y capacidad para absorber sólo 600 mil. Se inició después un cambio de dirección, procurando emplear a más gente en actividades agroindustriales o artesanales en el campo y fomentar pequeñas empresas en las ciudades. Ahora, por ejemplo, se muele el 30% de la caña en ingenios pequeños, con máquinas fabricadas con tecnología intermedia que, además, se exportan a Pakistán, Nepal y Sri Lanka.⁵⁰

Algunos países han experimentado con buenos resultados el apoyo a la producción agrícola con un desarrollo industrial paralelo, en pequeña escala y descentralizado, con revitalización de las pequeñas comunidades. Es el caso, en África, de Tanzania. En Asia, naciones como Taiwan y Corea del Sur han procurado paliar los efectos nocivos del maratón industrializador mirando hacia Japón que, al iniciar su modernización, adaptó la tecnología importada a necesidades de su mercado interno y trató de mantener un equilibrio entre la grande y la pequeña empresa. Sin olvidar que privilegió a la agricultura como cimiento del desarrollo y sigue obteniendo los mayores rendimientos por hectárea del mundo, con pequeñas granjas de apenas tres hectáreas y minitractores adecuados.⁵¹

Es evidente que las condiciones de globalización no existían cuando los países ahora altamente desarrollados se replegaron hacia la consolidación interna de sus recursos, protegiéndose de las fuerzas del mercado exterior para dar el salto hacia el crecimiento. Pudieron hacerlo, entonces, imprimiendo todo el impulso a la agricultura y vinculando una agricultura sólida con un desarrollo industrial generado en recursos propios. Acaso sólo las condiciones peculiares de China por su dimensión, su población, su geografía y su cultura propiciaban, en estos tiempos, un modelo tan independiente del mercado mundial, por un período tan prolongado y con tantas probabilidades de éxito. Pero, reconociendo como excepcional el caso de China, los países que se debaten hoy entre las redes de la pobreza y de la deuda tienen que buscar, con imaginación, sus propias fórmulas, en condiciones muy diversas y sin recetas globalmente válidas.

De Bretton Woods a la década perdida

Hasta los años setenta las perspectivas parecieron abiertas y propicias. El “milagro” no fue sólo mexicano: los países en desarrollo crecieron en los años cincuenta, los sesenta y los setenta a un índice superior al 5%, aunque no se tradujera en distribución equitativa del bienestar. La modernización trajo industria y expansión en los servicios de agua y energía, comunicaciones, transportes y vivienda en los enclaves industriales. El modelo orientado a incrementar el PIB como la gran meta descuidó la realidad precaria que se escondía detrás de las cifras. No se hizo mucho para propiciar un bienestar que, teóricamente, tendría que ir “goteando” desde los núcleos modernos que, esos sí, crecían. Las condiciones de vida de los más pobres se deterioraban en la medida en que se acercaban los más ricos a patrones de consumo del Norte. La desintegración de la agricultura tradicional obligó a importar granos básicos y no contribuyó a la consolidación de mercados internos. Recursos crecientes se destinaron a satisfacer demandas de bienes y servicios de los sectores prósperos. Se descuidó la protección al ambiente y se fundó la industrialización, más o menos precaria, en una creciente dependencia de la ciencia y la tecnología del Norte, aunque muchas veces la tecnología recibida fuera obsoleta.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se habían creado en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En toda el África recién independizada y en partes de Asia y Latinoamérica había un 80% de analfabetos y un 50% de asistencia a la primaria.⁵² Se pensaba abolir la pobreza extrema al terminar el siglo. Pero, mientras financiaban la reconstrucción de Europa y Japón, esas instituciones fueron sellando la subordinación de los países pobres. Fracasaron los intentos de estabilizar precios de materias primas y se consolidaron barreras arancelarias. La ayuda para el desarrollo fluyó poco y poniendo siempre condiciones políticas. El crecimiento demográfico exacerbó la pobreza y acentuó presiones sobre los centros urbanos, incapaces de absorber las demandas crecientes de servicios. En 1964 surgió la UNCTAD para promover el desarrollo y la cooperación entre países pobres y hacer algún contrapeso en la balanza de las relaciones Norte-Sur.

En 1974, el alza del petróleo en los países árabes y la escasez de granos en la URSS iniciaron perturbaciones en la economía mundial que culminarían en una recesión a principios de los años ochenta. Los desarrollados, con sobreproducción y excedentes de liquidez, ofrecieron créditos al Tercer Mundo para colocar allí sus mercancías. Los pobres entraron en un juego que, al subir las tasas flotantes de interés, se hizo cada vez más disparaje y empezó a sofocarlos, sobre todo en la medida en que las dificultades para pagar inducían a pedir nuevos créditos en condiciones desventajosas. La recesión en el Norte y los cambios tecnológicos redujeron la demanda de materias primas y bajaron sus precios mientras crecían las tasas de interés. Los países del Sur empezaron a pagar cada vez más, como

servicio de la deuda, recibiendo cada vez menos por sus exportaciones. El precio del petróleo bajó en un 65% y el de los 33 productos principales de exportación se redujo un 30%. Los términos del intercambio se deterioraron, en los años ochenta, un 49% para los países petroleros y un 29% para los demás.⁵³

La tendencia general de los años ochenta fue un drenaje de recursos hacia el Norte superior a la afluencia de créditos e inversiones hacia el Sur. Mientras que la deuda se llevaba en los últimos 15 años el 36% del presupuesto de Filipinas y el 39% de Jordania, el gasto social era allí del 22 y el 18%. En México, un 20% se destinaba a la deuda y un 18% se dedicaba a gasto social.⁵⁴

Las instituciones financieras, donde los países fuertes ponen las condiciones, establecieron programas de *ajuste estructural* para mejorar a corto plazo las balanzas de pago de los países endeudados, es decir, para asegurar el pago de la deuda. Los paquetes incluían reducción del gasto público, control de salarios, liberalización de la economía con exportación ilimitada de ganancias para las transnacionales y priorización de la exportación sobre el consumo, para generar divisas y poder pagar. “Apretar el cinturón” y “austeridad” fueron palabras clave en el “diálogo” de los años ochenta con los países deudores.

No sólo se perdió la década sino que las condiciones de vida de los pobres sufrieron una regresión considerable. Los datos de UNICEF, en su demanda de un *Ajuste con rostro humano* (1988), revelan que en los 37 países más pobres la inversión en salud y en educación se redujo, respectivamente, un 50 y un 25%. El 70% de los países de África, Oriente Medio y América Latina revirtieron bruscamente sus índices de mejoramiento de salud y nutrición y los niveles educativos. Aun sin plantear cuestionamientos morales podrían esgrimirse los argumentos de productividad tan caros a algunos tecnócratas: se estaba mermando la capacidad física y mental de la futura mano de obra. Los efectos de las políticas macroeconómicas en la distribución del ingreso, la incidencia de la pobreza y el estado de nutrición y salud de los más pobres no fueron aliviados, sino muy excepcionalmente y en algunos países, con políticas de participación comunitaria dirigidas a atender necesidades básicas y algunos intentos de mantener el crecimiento. Advirtiendo que las tensiones sociales acumuladas podrían detonar en inestabilidad política UNICEF presentó, en 1988, los resultados de su investigación en diez países y propuso algunas recomendaciones.

Brasil y Sri Lanka crecieron, pero con profundo deterioro de las condiciones de vida. Sri Lanka, un país que en los años cincuenta y los sesenta había logrado avances notables en atención a necesidades básicas, dio un vuelco a esa política en 1977, para reorientar la economía hacia el mercado externo. Se deterioró la distribución del ingreso, los salarios reales bajaron y subieron los precios. Aumentaron, a un tiempo, el consumo de los más ricos y la desnutrición de los más pobres y se revirtieron notoriamente los avances en educación. Brasil inició su ajuste en 1983:

se redujo el gasto público, bajaron los salarios reales, se incentivó la exportación, bajó la producción de alimentos y subieron los precios, con inflación de 400%. En São Paulo, la mortalidad infantil aumentó espectacularmente en 1984 cuando, debilitados los niños por la desnutrición, los diezmó una epidemia de sarampión. Subieron los índices de bajo peso al nacer y las consultas de emergencia en hospitales, la deserción escolar y el número de niños en la calle, disparándose los indicadores de delincuencia, efectos que UNICEF consideró como los más deplorables de la crisis. Los asesinatos de niños de la calle en los últimos tiempos son un polvo de aquellos lodos. Mientras Brasil se “estabilizaba” en relación con la deuda y restablecía el crecimiento del PIB en 1984 y 1985, el impacto humano no podía ser más desastroso. Lo mismo ocurrió en Ghana y Filipinas, en Perú de 1977 a 1985 y en Jamaica entre los años 81 y 85.

En el otro extremo Corea del Sur, Botswana, de 1983 a 1985, y Zimbabwe consiguieron aplicar el ajuste y proteger relativamente a la población más vulnerable. Corea lo hizo con medidas macropolíticas y programas compensatorios de obras públicas. Zimbabwe reorientó el gasto público, bajando la defensa y la burocracia de un 44 a un 28%, mientras que subían educación y salubridad de un 22 a un 27%. Al duplicar el crédito a agricultores, el valor del maíz y el algodón comercializados subió de un 10 a un 38%. En un momento crítico de sequía, en 1983 y 84, se canalizó a los afectados un 3.4% del gasto total del gobierno, lo que equivalía a 5 o 6 dólares por persona al año. Botswana es un país exportador de diamantes. Ese mercado se paralizó entre 1981 y 1983, pero los efectos no repercutieron en los grupos más vulnerables, que viven en el campo y nunca se han beneficiado con la venta de diamantes. Ese 80% de la población rural, que representa sólo el 8.5% del PIB, fue devastado, sin embargo, por la sequía de 1983. El gobierno lo enfrentó, en medio del ajuste, con un programa de creación de empleos en construcción de infraestructura; un programa de apoyo a la agricultura, la ganadería y el suministro de agua y, además, medidas compensatorias de alimentación suplementaria a niños de primaria en todo el país, a los menores de cinco años en el campo, a los desnutridos en las ciudades, a lactantes, mujeres embarazadas y tuberculosos.

En Perú, el ajuste iniciado en 1977 se tradujo en un descenso acumulativo del PIB *per cápita* que, en 1985, se redujo hasta el nivel de los años sesenta. La inflación se disparó del 30 al 160%. El servicio de la deuda se llevaba, en 1985, un 140% de los ingresos generados por exportaciones. La economía subterránea subió del 48 al 54%. Los salarios reales estaban en un 64% del nivel de 1973. El gasto social pasó del 26 al 18% y bajó lo destinado a educación de un 20 a un 12%. Se suprimieron todas las subvenciones a alimentos y combustibles, sin medidas compensatorias para las familias de más bajos ingresos. El informe de UNICEF cifraba esperanzas en medidas tomadas en 1985 para aumentar salarios reales por encima de la tasa de inflación, controlar precios y reducir el pago de la deuda al 10% de los ingresos por

exportación. Pero en el informe de 1989 de CEPAL ya se advertía el fracaso de sucesivas medidas, nulificadas por una incontrolada virulencia inflacionaria. Los salarios reales descendieron a los niveles más exigüos de la década y la caída en los niveles de empleo fue estrepitosa.

En el caso de Chile, se orientó la política a mantener el crecimiento, sostenido desde 1977 a pesar de altos niveles de desempleo, en medio de una amplia apertura de la economía. Medidas deflacionarias hicieron bajar el PIB *per cápita*, en 1985, a niveles inferiores a los de 1970. Mientras tanto, se buscó moderar los efectos de la recesión y del ajuste en grupos muy vulnerables como lactantes, niños menores de dos años gravemente desnutridos, niños menores de seis años y madres embarazadas en extrema pobreza: se les destinaron subsidios y programas de alimentación suplementaria y de rehabilitación nutricional. UNICEF expresó su desconfianza en el éxito de tales programas enfocados a grupos muy específicos. Había datos contradictorios sobre la desnutrición de niños en edad escolar y otros que registraban incidencias de fiebre tifoidea y hepatitis, prueba de insalubridad ambiental. Cuestionaba, en todo caso, la viabilidad de manejar la salud y la nutrición sólo con medidas focalizadas en grupos específicos, dentro de un contexto generalizado de estancamiento y de creciente pobreza.

Fueron recomendaciones de UNICEF no acelerar tanto el ajuste, para poder crecer; atender con prioridad las demandas de los más vulnerables, garantizando su acceso a bienes y servicios básicos; promover la producción agrícola e industrial en pequeña escala; estimular la participación comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de saneamiento y salud, vivienda y educación y recurrir a programas compensatorios de aportación o subvención de alimentos a grupos específicos o a la promoción de empleos en obra pública sólo como un refuerzo de medidas dirigidas a una atención integral al nivel de vida.⁵⁵ El rostro generalizado del ajuste fue inhumano, a pesar de las amonestaciones de organismos bien intencionados y de las relativas excepciones que confirman la regla.

El típico paquete de ajuste ha sido criticado por su dogmatismo y falta de sentido común. Liberalizar importaciones ha significado muchas veces importar bienes suntuarios en vez de maquinaria o insumos esenciales. La mayoría del producto de las exportaciones se ha ido en el pago de la deuda. Estancamiento y regresión pesarán irreversiblemente sobre el futuro del Sur y la responsabilidad no pueden soslayarla los países del Norte. Se limitaron a negar que algo marchaba mal en el sistema global y que se pudiera “intervenir” para configurar un marco más favorable al desarrollo. Nada se hizo para estabilizar precios de materias primas y se rechazaron las propuestas de negociación global de la deuda. El “libre juego de las fuerzas del mercado” pareció preferible a cualquier otra opción. El Grupo de los Siete se constituyó de hecho en custodio de la economía mundial, pasando por alto los principios de acción multilateral de la Carta de Naciones Unidas. Se atribuyó

unilateralmente la crisis a errores de los países del Sur que, para remediarlos, debían “ajustar con austeridad sus economías”. “Sanear” la economía de los pobres significó volverlos más pobres, en la medida en que se acentuaron pérdida de capacidad adquisitiva y desempleo. La Comisión Sur ha sido explícita al aludir a una forma de neocolonialismo:

[...] las metrópolis económicas del mundo le adjudicaban al Sur toda la carga del ajuste a una economía mundial deteriorada, mientras ellos seguían creciendo. Es más, el debilitamiento de los países del Tercer Mundo debido a la crisis de la deuda y los precios bajos de las materias primas fue aprovechado también por el Norte como oportunidad para influir en sus opciones internas e imponerles valores, políticas, concesiones y modelos de desarrollo determinados desde afuera. Los costos sociales y políticos de medidas inadecuadas fueron pagados por los países víctimas y por sus poblaciones —y si se generaba alguna inestabilidad también eso era aprovechado por el Norte como una oportunidad más de intervención. Dadas tales tendencias, no parece exagerado afirmar que existe un peligro inminente: la imposición de un sistema de relaciones económicas internacionales que institucionalice ese trato de segunda para el Sur.⁵⁶

Globalización asimétrica

El mundo entero se vincula estrechamente pero se trata de una vinculación asimétrica, donde las decisiones se toman en las confortables oficinas que manejan en el Norte la movilidad de capitales y tecnología. El mercado está dominado por grandes consorcios que monopolizan la producción y el comercio y dejan espacios cada vez más reducidos a empresarios nacionales de los países que siguen pretendiendo un acceso al desarrollo.

La presión de la deuda y el ajuste coincidieron, en los años ochenta, con una *red global* que extiende sus hilos por todas partes. En el gran mercado, las relaciones internacionales son, cada vez más, escarceos de compra-venta. También los procesos de manufactura se han escindido y dispersado, buscando ventajas comparativas. Muchas industrias desplazan hacia el Sur todos o algunos de sus procesos de fabricación, por conveniencia económica.

Los países en desarrollo, se alega ahora, ya no han de pensar en crecer para ir cubriendo las necesidades de su mercado interno sino para exportar al mercado global. La economía mundial se entiende como una economía única, hacia donde confluye una producción de múltiples procedencias, en un juego donde a cada país le tocan las fichas de sus ventajas o desventajas comparativas. La interdependencia volvería prescindible, por ejemplo, la autosuficiencia en producción de alimentos. La lógica del mercado movería las piezas para adjudicar sus fichas a cada jugador.

La “división internacional del trabajo” determina la parte que le toca a cada economía “nacional”. El gran jugador es, por supuesto, la empresa *multinacional*, beneficiaria privilegiada que busca utilidades más jugosas en países subdesarrollados. La interdependencia, así entendida, es una novedosa modalidad de la dependencia.⁵⁷

Fuentes de Naciones Unidas han demostrado que, en líneas generales, mientras el Norte gana con las transnacionales, el Sur pierde. Entre 1978 y 1980, por ejemplo, los industrializados recibieron 18 mil millones de dólares anualmente por concepto de nuevas inversiones y otros 8 mil millones por ganancias reinvertidas de multinacionales. Las ganancias exportadas fueron de 13 mil millones, lo que significa un efecto positivo para su balanza de pagos. Los países en desarrollo recibieron 6 mil millones, más otros 2 mil por ganancias reinvertidas; ganancias exportadas e intereses sumaron, en cambio, 13 mil millones: el efecto es claramente negativo para su balanza de pagos. A esto se añaden los pagos por patentes y licencias de tecnología más las ganancias secretas por manipulación interna de precios de transferencia entre matriz y filiales que no se manifiestan. Esas ganancias indirectas y secretas, obtenidas por dólora manipulación de la contabilidad, han sido calculadas por UNCTAD: en 1982 había que multiplicar por 6.8 las que se habían manifestado en Brasil y hasta por 21.2 las que se confesaban en Argentina.⁵⁸

No sólo la economía se globaliza sino también la cultura, con gran permeabilidad de los patrones de consumo y los valores culturales del Norte que se han derramado mediante un “goteo” persistente a través de los medios, sobre los maltrechos sectores tradicionales de los países pobres y han ido debilitando su cohesión. El único *trickle down effect* que sí funciona acentúa la desvalorización de costumbres y la sensación de minusvalía, cuando el acceso a los satisfactores de la sociedad de consumo conspicuo se percibe como inalcanzable. En sentido inverso fluye un contagio del Sur hacia el Norte, a través de movimientos migratorios que suelen despertar más miedo y xenofobia que intercambio de valores. Las “culturas de la pobreza” confinadas en regiones y barrios de las grandes ciudades, penetran eventualmente, sin embargo, las barreras de los patrones culturales prevalecientes. De ahí la alarma que han despertado tendencias “multiculturales” ya notorias en ciertos ámbitos de la educación en los Estados Unidos.⁵⁹

Al síndrome de pobreza en el Sur —miseria en el campo y en grandes ciudades y contaminación del aire; deforestación masiva y degradación de la tierra y el agua— se añaden efectos de patrones de crecimiento y de consumo del Norte: desechos peligrosos y reubicación de industrias contaminantes; reducción del ozono, efecto invernadero, contaminación de mares y radiación nuclear. En un mundo donde circulan por igual las secuelas de la droga, los síntomas del SIDA y el azote del cólera, ni la contaminación ni la enfermedad tienen fronteras. La tecnología para el desarrollo, en cambio, se vende cara.

Pero el determinismo aparentemente fatal de la globalización tiene otra cara. No habrá un sistema estable de relaciones globales sin un desarrollo realmente dirigido a abatir la pobreza:

La paz y la seguridad no podrán lograrse si los pueblos y las naciones no se liberan del subdesarrollo y la privación. Pobreza equivale a inseguridad: la inseguridad producida por la amenaza del hambre, la desnutrición y la enfermedad de los millones que arañan una vida subhumana en el Sahel devastado por la sequía o en los tugurios de Latinoamérica o de Asia[...].⁶⁰

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estima que el costo de sólo diez días de guerra en el Golfo habría bastado para vacunar a todos los niños del Tercer Mundo durante diez años.⁶¹

Modelos propios

¿No habría más opción, entonces, que adaptarse al orden global tal como es hoy por hoy, o replegarse hacia una improbable autarquía? Hay, por el contrario, opciones intermedias, sin plegarse, maniatados, a reglas de juego desiguales. Es factible tomar en cuenta recursos, necesidades y experiencia de culturas tradicionales seculares para encontrar un modelo adecuado a las circunstancias concretas de cada país, sin excluir las posibilidades más o menos viables de inserción en la economía global.

El modelo neoliberal en estado puro aconseja la máxima apertura al comercio y a las finanzas internacionales, creando condiciones óptimas para la atracción de capitales disponibles. Se trata de una nueva versión de la división internacional del trabajo de David Ricardo. Los ganadores son, sobre todo, los exportadores de productos agropecuarios y de manufacturas que pueden resultar competitivas y los importadores de bienes para consumidores de alto poder adquisitivo. Son los sectores ya modernizados y con capacidad para competir por sí solos o buscar socios extranjeros. Los perdedores son los agricultores afectados por la desaparición de aranceles; los empresarios medianos y pequeños que funcionaron con el modelo de sustitución de importaciones y son incapaces de competir, de repente, con los gigantes; los campesinos pobres que todavía habitan el campo o han sido desplazados a las ciudades, sin aptitud para empleos calificados, aun suponiendo que se crearan tantos como hacen falta. Aunque los campeones del modelo insisten en que no hay otra manera de lograr algún día una mejor distribución del ingreso que “dejar hacer” al mercado, casi todos sabemos que el goteo de la abundancia no sirvió antes ni servirá ahora para superar la pobreza.

La autarquía es, por supuesto, inoperante. Algunos, como el economista suizo Rudolph Strahm, consideran que una *separación selectiva* del mercado mundial, en determinadas circunstancias, sería más viable y más realista que la meta de influir sobre el orden económico internacional para volverlo más justo y equitativo. Strahm, que ha sido consejero de la UNCTAD y forma parte de la Declaración de Berna, organización que investiga el desarrollo, rechaza las críticas que se hacen a tal opción como romántica o anacrónica. En *Por esto somos tan pobres* abunda en ejemplos históricos que demuestran cómo fue el método elegido, en su momento, por la mayoría de los países altamente desarrollados.

Los Estados Unidos, Japón, Alemania, Suiza consolidaron su ahorro interno y su mercado con relativa autonomía. Dos países pobres han actuado después en esa dirección: la India, con un impuesto a la industria textil que impidió la desocupación de miles de tejedores artesanales; China, que ocupó a su inmensa población durante tres décadas sin intervención del mercado exterior y que empezó a abrirse sólo cuando se sintió suficientemente consolidada en el aprovechamiento intensivo de sus propios recursos, esencialmente humanos. Alternativas como esas aconsejarían concentrarse en la producción de alimentos básicos y de bienes masivos y lo más baratos posible para el mercado interno. La viabilidad de tales opciones dependería de múltiples factores, incluyendo recursos naturales y humanos y posición geográfica.

Pero la *separación selectiva*, temporal en todo caso, resulta cada vez más improbable en medio de la red apretadísima de intercambios de toda índole —financieros, comerciales, tecnológicos, de información, culturales y políticos— que abraza con sus ligamentos al planeta entero. La situación paradigmática de China, con su enorme acervo de población y de territorio y su ubicación geográfica, es más bien excepcional. Una tradición milenaria de disciplina, orden familiar y pragmatismo heredados de Confucio sirvió para sustentar allí la consolidación hacia dentro y ahora la apertura. China crece al 10% y ha recibido, desde que comenzó la apertura en 1978, 65 mil millones de dólares de inversión extranjera. Pero cuando se abrió ya era autosuficiente en alimentos, empleaba a toda su población y, en niveles modestos pero eficientes, garantizaba la vivienda, la educación y la salud.

En 1991, el PNUD recordó los 60 millones de niños gravemente desnutridos y los más de 100 millones que no van a la escuela; los 1 500 millones de personas sin atención médica básica; los 3 millones de niños que mueren cada año de enfermedades inmunológicas y los mil millones de adultos analfabetos.⁶² Recordó también que la distribución tan desigual de los ingresos incrementa la pobreza; que la deuda reduce mucho los recursos que servirían para aliviarla en América Latina; que África se lleva el primer lugar en pobreza absoluta y que, aun entre los Tigres Asiáticos, la mitad de los habitantes no tienen agua potable ni servicios médicos básicos.

Entre 1987 y 1990 había sesionado en Ginebra la Comisión Sur, coordinada por el expresidente de Tanzania Julius Nyerere. Expertos y ex funcionarios de 27 naciones emprendieron un minucioso examen de las alternativas del Sur, buscando estrategias hacia un desarrollo *fundado en los propios recursos y realizado con participación para poner fin a la pobreza, generar empleo productivo y satisfacer necesidades básicas*:

Esto significa que los *bienes y servicios básicos*, tales como *alimentos y vivienda, educación básica y servicios de salud y agua potable* deben ser *accesibles a todos*. El desarrollo presupone, además, una *estructura democrática de gobierno*, apoyada en las libertades individuales de expresión, organización y publicación, así como en un sistema de justicia que proteja a todos de cualquier acción inconsecuente[...].⁶³

El PNUD coincide al exponer, en 1991, su propuesta de un *desarrollo humano* que concilie crecimiento con expansión del bienestar:

[...]la adecuada *redistribución de recursos* para servir mejor a la humanidad, mediante la *participación* de tantas personas como sea posible en el uso creativo de esos recursos, en lugar de favorecer sólo unos pocos intereses personales[...].⁶⁴

El esfuerzo sostenido de una modernización acorde con la herencia cultural, que tienda a incluir a las mayorías y no a marginarlas, requiere de un apoyo interno que sólo puede lograrse con democracia.

La propuesta de la Comisión Sur, que realizó una de sus plenarias en Oaxtepec en 1988, advirtió que sólo una cooperación organizada depararía autonomía de decisión a los países débiles. Se trataría, pues, de construir una solidaridad Sur-Sur más allá de la tentación de buscar soluciones particulares, que a la larga suelen resultar engañosas. Porque la fragilidad del Sur se refleja también en la precariedad de los vínculos que guardan entre sí los países pobres, acentuada sin duda por la vasta diversidad de sus niveles de desarrollo y de sus problemáticas pero, también, por la corrupción de muchos gobiernos. La esperanza de promover cambios en el asimétrico orden internacional es el trasfondo de toda la propuesta: ¿se tratará de otra fantasía destinada al desván de las quimeras? La negociación de ese nuevo orden por un Sur fortalecido, gracias a sólidas relaciones entre pares, con un Norte comprensivo y propicio a escuchar sus razones acaso no esté a la vuelta de la esquina. Pero no por eso hay que descartarla.

Los modelos propios tienen que dar prioridad a las necesidades básicas y, sin excluir recursos externos, cuando los haya, reorientar con más racionalidad y justicia el uso de los recursos internos. Imitar literalmente el modelo de los desarrollados sería tomar como realidad un espejismo. No alcanzarían los ahorros nacionales tan dispuestos, por lo demás, a viajar hacia el Norte; ni la ayuda para el desarrollo,

siempre tan avara; ni las inversiones extranjeras directas, siempre tan cautelosas. Además de que sería inviable un consumo de energía tan desmesurado a escala mundial y la Tierra no soportaría la contaminación ni el calentamiento. Los niveles de abundancia y desperdicio de los siete países más industrializados están fuera de toda opción realista para el conjunto de los países del Sur. Hay que proponerse objetivos más modestos, más coherentes con la cultura propia y con una visión acaso más armónica, saludable y ponderada del hombre.

Satisfacer necesidades básicas

Como reconoce el PNUD *los mercados no pueden, por sí solos, asegurar un buen desarrollo humano*.⁶⁵ Ni son equitativos ni tienden a propiciar un equilibrio más justo del poder. En palabras de Barbara Ward:

[...]Estamos tratando de conducir nuestra economía planetaria interdependiente partiendo del mercado como base primordial y eso trae precisamente las mismas consecuencias: poder para los ricos, miseria para los pobres e inestabilidad para todo el sistema[...].⁶⁶

Hasta ahora se ha privilegiado crecimiento sobre desarrollo y en la década perdida hubo que “apretarse el cinturón” y pagar la deuda. Ahora hay que reorientar prioridades para cubrir carencias sin contraer más deudas: ni financieras, ni sociales, ni demográficas, ni ambientales. La falta de voluntad política puede ser aun más grave que la falta de recursos financieros. Son múltiples, además, los canales por donde se filtran y desperdician tales recursos: fuga de capitales como en México (donde sumó hasta el 50% de todo el dinero tomado en préstamo en los últimos 15 años); corrupción (como en Pakistán, donde se filtra por ese concepto el 4% del PIB); ineficiencia de empresas públicas como en Camerún (donde sus pérdidas exceden el ingreso total que el gobierno obtiene vendiendo petróleo); gastos militares (que absorben el 5.5% del PIB del mundo en desarrollo, doblando el presupuesto para salud y educación en muchos países). Pero, sobre todo, la deuda. El Sur transfirió al Norte, en 1989, 171 mil millones de dólares. Dice el PNUD:

[...]el pago de la deuda se ha convertido en uno de los más fuertes competidores del gasto en desarrollo humano, sobre todo en lo que respecta a gastos en las necesidades básicas de los grupos menos privilegiados, menos influyentes, menos organizados y menos poderosos.⁶⁷

América Latina ha pagado por el servicio de la deuda, entre 1982 y 1990, 223 600 millones de dólares: el equivalente al 50% de su deuda total, sin que ésta haya

disminuido ni un centavo. Al contrario: aumentó en 59 mil millones. Y los pagos no fueron mayores porque muchos países tuvieron que declarar moratorias forzosas por 18 mil millones de atrasos acumulados. Hay que exportar más para pagar mejor. Más allá de cualquier racionalidad teórica, ahí está una razón fundamental para transformar el modelo de desarrollo hacia dentro en otro de desarrollo hacia afuera: fortalecer el esfuerzo exportador significa tener más recursos para pagar. Cabe añadir que, para 1987, el 75% de las exportaciones latinoamericanas se dirigían a países desarrollados, de donde provenía el 73% de las importaciones: todo ello habla más de dependencia que de un terreno fértil para la deseable integración latinoamericana.

Reorientar el desarrollo para elevar el ingreso y la productividad de los pobres y promover el uso sustentable de recursos exige modernizar estructuras políticas, abriéndolas hacia una creciente democratización. Las condiciones heterogéneas de los países del Sur, que abarcan desde sociedades predominantemente agrarias hasta economías semindustrializadas requieren, por supuesto, enfoques múltiples y mucho cuidado y parsimonia en la modernización económica. Si en muchos países el objetivo más inmediato sería aumentar la producción para el autoconsumo en las pequeñas parcelas, en otros habría que reforzar también los vínculos entre industria y agricultura. Aun en los más desarrollados suelen coincidir en algunas regiones la economía agraria más arcaica con la más moderna industria de punta: es el caso, en México, de Tabasco. La inconveniencia y aun la imposibilidad de “modernizar” de golpe a los sectores tradicionales exige, pues, diversificar estrategias y soluciones.

Más de mil millones en pobreza extrema no tienen para sembrar ni comprar lo indispensable. Carecen de tierras donde persiste el latifundio y no encuentran dónde emplearse, o carecen de créditos para sembrar sus pequeñas parcelas. Los pobres del campo no suelen tener voz en las decisiones gubernamentales, de modo que no pueden modificar políticas que los discriminan. Un desarrollo amplio y sustentable sólo puede lograrse con un sector rural sólido, que incluya a los pequeños y a los más pobres. En la mayoría de los países latinoamericanos prevalece la concentración de mucha tierra en pocas manos: la reforma agraria tendría que ser el punto de partida. Pero, como se ha demostrado en México, repartir la tierra no basta: hay que repartir buena tierra. Y, además, hace falta crédito, apoyo técnico, infraestructura de caminos y almacenamiento, electricidad, canales de comercialización. Y, por supuesto, los servicios sociales básicos. En Latinoamérica sólo tiene acceso al crédito el 20% de los campesinos y en África el 5%. La modernización de la agricultura puede rendir resultados tan dudosos como los de la Revolución Verde: las semillas mejoradas no resisten enfermedades ni plagas y se crea una doble dependencia, de las semillas y de los plaguicidas suministrados por transnacionales. Las tendencias a volver, en el Norte, a la agricultura orgánica han contri-

buido a revalorar, afortunadamente aunque todavía de una manera incipiente, la sabiduría ancestral de las culturas campesinas del Sur.

La modernización de la base industrial y tecnológica es indispensable para ampliar exportaciones, fortalecer la balanza de pagos y hacer menos vulnerable a la economía. La industria de sustitución de importaciones, demasiado protegida y con un mercado interno cautivo pero reducido a un 10, un 20 o un 30% de la población, no llenó esos requisitos y el modelo fue desplazado para sustituirlo por otro, abierto a la competitividad exterior. Pero la modernización industrial para el mercado externo, que beneficia sobre todo al sector ya moderno e incorpora a un número muy limitado de pobres a la productividad, no puede ser la única meta. Hay que apoyar a industrias medianas y pequeñas, que son las que crean más empleos. Hay que promover pequeñas industrias para transformar recursos locales, sin importación de insumos, en áreas rurales. Proporcionando la infraestructura adecuada se da un paso importante para reducir desigualdades y equilibrar condiciones entre áreas urbanas y rurales. Esas industrias pequeñas pueden producir artículos de consumo baratos y herramientas agrícolas simples para satisfacer las necesidades locales. Un nuevo proceso de industrialización, de base amplia, tendría que promover la descentralización en beneficio de pequeños centros urbanos y de áreas rurales. Métodos intensivos en mano de obra suplirían a la vez dos carencias: la de empleo y la de tecnología.

La contracción de mercados internos por el ajuste y la necesidad de pagar la deuda obligó a buscar, en los años ochenta, más mercados para exportar. Exportar es un buen hábito, que debe trascender el servicio y la servidumbre de la deuda. Pero no es necesario sacrificar el mercado interno a la dinámica exportadora. Y, sobre todo, no se puede dejar de comer adentro para vender afuera.

La mitad de los niños del Tercer Mundo no son vacunados contra enfermedades infecciosas y mueren por eso o mueren de diarrea. Dos tercios de las familias rurales carecen de agua potable y de atención a la salud cuando la atención básica, según la FAO, no cuesta más de diez dólares al año por persona. En los países más pobres los recursos escasos no llegan al campo y el gasto se concentra en modernos hospitales urbanos. No sólo la educación primaria tendría que abarcar a la totalidad de los niños en el año 2000 sino que habría que hacer más compatible la educación con las necesidades reales de la gente.

Lo que más ha crecido en los países pobres, junto con la miseria, es la población. Se calcula en 2.3% la tasa de incremento anual de mano de obra hasta el año 2000. Pero no es verdad que son más pobres porque sean muchos: el hambre se debe a la distribución inequitativa de los alimentos. De hecho, un solo ciudadano de los Estados Unidos consume la misma energía que 63 personas, como promedio, en países pobres.⁶⁸ Es evidente, sin embargo, que en las condiciones de profunda desigualdad existentes, es aconsejable bajar el crecimiento demográfico, algo que

en países como México ya se ha estado propiciando. Pero es un círculo vicioso: sólo podría lograrse en las proporciones deseables con el mejoramiento de las condiciones sociales.

Los círculos viciosos, que se dan en muchos niveles, suelen meter a los países pobres en callejones a los que hay que encontrarles salida. Para modernizar hace falta desarrollo científico y tecnológico. ¿No queda más que depender de tecnologías caras y muchas veces inadecuadas? Producir las propias tecnologías, adecuadas a necesidades y a recursos disponibles, sería lo más racional. Pero habría que invertir *por lo menos* el doble de lo que ahora se invierte en la investigación para el desarrollo, triplicar el número de científicos e ingenieros y multiplicar su sentido de responsabilidad social. Para competir en el mercado mundial no hay más opción que hacer avances simultáneos en ciencias básicas, baja tecnología, ciencias aplicadas y alta tecnología.

La presión sobre el ambiente es álgida en el mundo de la pobreza. El crecimiento demográfico y la concentración de la tierra en grandes propiedades han vuelto inoperantes formas tradicionales como la rotación de cultivos y el uso alterno de tierras, que permitía dejarlas descansar para recuperar nutrientes. Las tierras escasas se sobrecultivan y se vuelven improductivas. Se sobreexplotan los bosques para exportar madera. Se desertifican las zonas áridas. Se degrada el agua y los desechos afectan la pesca. En las ciudades, rodeadas de cinturones de miseria, se contamina el aire en índices impensables. Y, según datos de la FAO, se derrumban cada año 11 millones de hectáreas de bosque tropical, aunque otras fuentes calculan hasta 17 millones.

Crear más fuentes de trabajo en el campo y favorecer la autosuficiencia de la parcela son medidas elementales y válidas en cualquier parte. En vez de descartarlos como anticuados e ineficientes, habría que revalorar sistemas tradicionales de cultivo y transformación de productos agropecuarios, adaptándolos a las necesidades actuales. Revertiría, además, en beneficio del ambiente en el campo y en las ciudades donde se aliviaría, de paso, la presión demográfica.

Dos puntos decisivos al contemplar opciones para el desarrollo cuando la globalización reclama sus tributos son, sin duda, la afirmación de la identidad cultural y una visión clara del papel que le corresponde al Estado. El desarrollo ha de fundarse en el acervo de costumbres, creencias y valores que ha heredado cada nación, que habrá que enriquecer con aportes universales: los tecnológicos que contribuyan a un desarrollo equitativo y sustentable y los culturales cuya vigencia, es evidente, no tiene fronteras.

Las concepciones reduccionistas y economicistas del crecimiento, que pretenden modernizar sin atender al peso real de las tradiciones, corren muchos riesgos, desde tropezar con la indiferencia de la gente hasta propiciar el brote de inciertos e irracionales fundamentalismos.

El PIB no mide el bienestar

La calidad de vida de las mayorías no está en relación directa con el monto de la producción. El PIB no mide el bienestar. Por eso el PNUD ha propuesto un *nuevo índice de desarrollo humano*. Incluye el ingreso *per cápita*, pero le añade esperanza de vida y acceso a la educación, medido por alfabetización y escolaridad promedio. Resulta impreciso todavía porque no es imposible aumentar esperanza de vida y alfabetización con bajos niveles de salario real, de acceso a la tierra y al crédito, de servicios sociales y de oportunidades de encontrar empleo. Pero es más confiable.

En el *Índice de Desarrollo Humano* para países en desarrollo México ocupa, por ejemplo, un lugar 45. Si se considera la distribución del ingreso, desciende a un nivel 56. Brasil baja de un lugar 60 a un lugar 77. Entre los desarrollados Japón ocuparía el primer lugar, pero desciende a un nivel 17 si se toma en cuenta la diferencia por sexos, lo que haría subir a Finlandia, en cambio, de un doceavo lugar al primero. Hay 26 países con enorme divergencia entre su PIB y su IDH, que los rebaja 20 niveles en la escala del desarrollo.⁶⁹

Advirtiendo que el ingreso *per cápita* del Sur es sólo el 6% del ingreso del Norte, el *Informe* del PNUD califica de aterradora la proporción que marca, para el 77% de la población mundial (82% según otras fuentes), sólo el 15% de los ingresos. Pero el modelo neoliberal ha empezado a extender la pobreza en el Norte, de modo que ya no es posible afirmar que nadie pasa hambre en los países industriales. En los Estados Unidos hay 32 millones de pobres y otros 11 millones casi en la pobreza: 31% son negros, 26 son hispanos y sólo un 10% son blancos. Un 13% de la población norteamericana vive ahora en la pobreza, incluyendo 13 millones de niños. La infraestructura se ha deteriorado y la educación es deficiente. Ya los Estados Unidos no pueden jactarse del nivel de vida más alto del mundo: la gente gana menos y hay más desempleados; ha bajado la inversión y la productividad y han crecido el déficit fiscal y una deuda que es la mayor del mundo, mientras se pronostica que los anglosajones serán minoría antes de mediar el siglo XXI. En Gran Bretaña hay cerca de 400 mil personas sin hogar y la mitad de los habitantes de “ciudades de cartón” son niños. La estructura social se desintegra en las sociedades desarrolladas, con índices crecientes de violencia, crímenes, delitos relacionados con droga, divorcios y familias monoparentales.

El Norte produce la mitad de los 6 mil millones de toneladas métricas de gases que generan el efecto invernadero, aunque allí sólo habite la quinta parte de la población mundial. La esperanza de vida promedio es de 75 años y dos tercios de la población está amparada por un seguro de salud pública; un tercio de los egresados del sistema educativo ha estudiado ciencias; se produce cada año el 85% de la riqueza mundial; casi toda la población tiene acceso al agua potable y servicios sanitarios; la familia promedio tiene automóvil; todos tienen radio, una

de cada tres personas compra el periódico y hay un televisor y un teléfono por cada dos personas. En los países en desarrollo la esperanza promedio de vida ha subido a los 63 años, pero 2 mil millones de personas siguen sin acceso a servicios de salud y 1 500 carecen de agua potable, con más de mil millones en pobreza absoluta; 180 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición severa y 14 millones mueren antes de cumplir 15 años; hay más de mil millones de analfabetos y 300 millones de niños no asisten a la escuela. La proporción de científicos y técnicos por cada mil es de nueve en el conjunto del Tercer Mundo y de 39 en América Latina, en comparación con 139 en los países industriales.⁷⁰

Puede resultar ilustrativo desglosar cifras por regiones y países. En Asia hay 700 millones de pobres, la mayoría en la India y Bangladesh, donde el PIB *per cápita* no llega a 170 dólares y uno de cada tres niños está desnutrido. En países como Hong Kong, Singapur o Corea, donde ha habido auge de exportaciones y altas tasas de crecimiento económico y de empleo, sólo la mitad de la población tiene acceso al agua y servicios sanitarios. Los contrastes son muy agudos en América Latina. En Brasil, el 20% más rico gana 26 veces más que la quinta parte más pobre y en Perú el 40% más pobre recibe sólo el 13% del ingreso nacional. Si en Salvador el acceso a educación primaria y secundaria es de 69%, el acceso al agua potable no pasa de 39%, mientras que en Paraguay, con el mismo índice en educación, se baja aun más en agua potable, que no pasa del 35%. Con una inflación de más de 100% en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, la década perdida, marcada por la sangría de la deuda, denotó descenso en la inversión y la producción, erosión de salarios reales, desempleo abierto y constante y aumento en la desnutrición y la mortalidad infantil.

En los países árabes petroleros, las cifras de desarrollo humano siguen muy rezagadas en relación con las del PIB, que en los Emiratos Árabes Unidos asciende a 15 770 dólares anuales: cerca de 60 millones son muy pobres y analfabetos. En África había, en 1989, cuatro veces más desempleados que en 1979, es decir, 100 millones, y los salarios reales habían caído un 30%. Más de la mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud y las dos terceras partes carece de agua potable. La mortalidad infantil es de 178 por cada mil: en Angola, Mozambique y Sierra Leona, una cuarta parte de los niños muere antes de cumplir cinco años. La carencia de oportunidades de trabajo provoca la emigración de los pocos que han tenido acceso a la educación, agravando el deterioro social: en Nigeria y Ghana, por ejemplo, sólo se queda en el país un médico de cada cuatro diplomados. Por circunstancias políticas, el *apartheid* ha expulsado 6 millones de refugiados y ha dejado inválidas a 50 millones de personas. Bastarían estos datos, si no hubiera otros muchos, para poder afirmar con el *Informe 1991* del PNUD que “el panorama para África es desolador”.⁷¹

Hay excepciones, como es el caso de Zimbabwe. ¿Por qué? A partir de la independencia, el gobierno ha sido consistente en aplicar el gasto público al desarrollo

humano, aun durante los períodos de ajuste económico y sequía severa de los años ochenta. El gasto social subió de un 20% en la etapa colonial a un 49%. El gasto en salud se aplicó menos a hospitales urbanos que a servicios rurales de medicina preventiva y la totalidad de los niños ha recibido educación primaria. El caso de Tanzania fue también ejemplar durante tres décadas, demostrando que el desarrollo humano puede ser alto aunque los ingresos *per cápita* sean bajos, si la política de desarrollo se funda en la satisfacción de necesidades básicas a toda la población. En los años sesenta, bajo la presidencia de Julius Nyerere, se organizó a la población rural en poblados “registrados”, para facilitar la expansión de servicios. Mucho se logró, elevando al 80% la cifra de los que recibían asistencia médica y a 90% la de niños inmunizados. Pero, aun así, la mitad de la población sigue sin agua potable y la mitad de los niños no asiste a la primaria. El índice de gasto social se ha reducido ahora al 15% mientras que el servicio de la deuda, gastos militares y empresas públicas ineficientes se comen el presupuesto.⁷²

En contraste con el panorama de desigualdad que uniforma a los países árabes de altos ingresos petroleros, como Kuwait, Arabia Saudita o los Emiratos, Jordania procura una distribución más equitativa de ingresos escasos, con asignaciones a educación y salud que registran aumentos del 47 al 74% en alfabetización, de 1970 a 1985, y de 47 a 67 años en esperanza de vida, de 1960 a 1990. En el caso de Corea, se ha procurado conciliar altas tasas de crecimiento con expansión del ingreso, no sólo en una industria para la exportación con empleo intensivo de mano de obra, sino también en la agricultura. Se orientan recursos considerables a la seguridad social, a la salud y a la educación. En Indonesia, el agua potable y la atención de salud son privilegio de la población urbana de mejores ingresos, con una alta proporción de población nacional que no rebasa la línea de sobrevivencia: allí se está destinando muy poco al gasto social prioritario.⁷³

Dentro de las condiciones de penuria de Centroamérica, Costa Rica sería un ejemplo sobresaliente fundado en la práctica democrática y la participación comunitaria, la abolición del ejército y una asignación considerable al gasto social durante la prosperidad cafetalera. A pesar de que también se endeudó y de que su economía se deterioró en los años ochenta, los logros que había alcanzado amortiguaron los efectos traumáticos del ajuste. La calidad del desarrollo humano en Argentina es calificada, al contrario, como decepcionante a partir de mediados de los setenta: distribución cada vez menos equitativa de salarios reales disminuidos, con un descenso al 51% de la población con acceso al agua potable y orientación del gasto público hacia los más acomodados, desviándolo de prioridades como atención médica primaria, educación primaria o mejoramiento de los barrios paupérrimos de la capital. Allí, un alto PIB *per cápita* no se corresponde con un índice semejante de desarrollo humano.⁷⁴

En una comparación entre 11 países en desarrollo, la proporción más alta de gasto en prioridad humana corresponde a Zimbabwe, que gira alrededor del 12%,

y la más baja a Pakistán, que no pasa del 1%. Entre los altos se encuentran Malasia, Jordania y Costa Rica. Kuwait, Corea y Chile quedan en proporción intermedia, mientras que la India y Argentina se colocan, con Indonesia y Tanzania, entre los niveles bajos. Con una desproporción notable entre niveles de vida en Argentina y Tanzania, esas apreciaciones se refieren a calidad de vida en relación con índices del PIB en cada país. El gasto público puede ser elevado, como en Pakistán o Indonesia, destinándose menos del 1% a gastos de prioridad humana. Hay países que gastan en defensa dos o tres veces más que en educación y salud. En países como la India los gastos de policía, supuestamente por conflictos étnicos y religiosos, superan al gasto social. ¿No parece evidente que sería mucho más eficaz incluir a las minorías en programas amplios de desarrollo participativo que reducirían, sin duda, la necesidad de reforzar la seguridad? En los países más pobres de África, la deuda es 10 veces mayor que el ingreso y su servicio se lleva el 80% de las exportaciones.

Donde los niveles de salud pública, agua potable y educación siguen siendo muy bajos, la prioridad está ahí y no en otra parte. Construir una basílica mayor que la de San Pedro donde el 80% de la población carece de agua potable parece un proyecto de *Ubú Rey* y lo ha sido, en efecto, del gobernante de un infortunado país africano. La mayoría de estos países invierte mucho en hospitales urbanos, que no evitan altas tasas de mortalidad infantil porque no hay servicios ni promoción de salud en el campo, donde sigue viviendo la gran mayoría de pobres. Un ejemplo de lo que sí habría que hacer lo dio Bangladesh, al aumentar su presupuesto en salud para centros rurales del 10% en 1971 al 60% en 1988. En cambio, hay países que, con 40% de analfabetos, subsidian universidades de élite. El 80% de los 10 mil millones de dólares que se invierten en suministro de agua potable en países en desarrollo benefician sólo a sectores urbanos acomodados, que además la reciben a muy bajo costo, mientras el 50% de los hogares rurales y el 20% de los urbanos carecen de todo servicio y a veces sólo les queda comprarla cara en pipas comerciales.⁷⁵

El *Informe 1991* significa un avance, porque enseña a discriminar entre gasto social y gasto en prioridades sociales. Un gasto social imprudentemente asignado, como privilegiar universidades cuando todavía prevalece el analfabetismo u hospitales urbanos cuando el campo carece de atención médica básica, puede ser la explicación de que un gasto social elevado no se traduzca en más bienestar para los marginados. O puede suceder que programas compensatorios, como Solidaridad en México, no lleguen en la práctica a los más pobres; asignen sus recursos a fines no prioritarios; no movilicen de veras la participación de los más necesitados o tropiecen con el obstáculo de estructuras locales de poder antidemocráticas. Un elevado gasto social no garantiza, por sí solo, que la gente empiece a vivir mejor.

Pensar en la gente antes de tomar decisiones

Abundan las declaraciones de principios que coinciden en la conveniencia de un *acuerdo mundial para el desarrollo humano*. Lo propuso, en 1991, las Naciones Unidas:

Es indispensable contar con un entorno económico y financiero internacional favorable para mejorar el desarrollo humano en el Sur: para resolver la crisis de la deuda internacional, para restaurar un flujo de capital adecuado, para crear un sistema de comercio mundial más abierto, para lograr una expansión económica sostenida y para aumentar el gasto privado y público en desarrollo humano.⁷⁶

Y fijó metas de alta prioridad para el año 2000: acabar con la desnutrición grave; extender a toda la población la atención médica y la educación primaria; agua potable para todos; oportunidades de empleo para incorporar a las mayorías a las actividades productivas; mejor vivienda para los más pobres.⁷⁷ Faltan seis años para terminar el milenio y estamos muy lejos de alcanzarlas.

¿Qué hay que hacer para que el crecimiento no pase de largo y deje a la gente rezagada? Hay que invertir mucho en gasto social, pero en gasto social prioritario. No basta gastar en salud: hay que gastar en salud para los más pobres. No basta gastar en vivienda: hay que gastar en mejorar la vivienda de los más pobres. No basta gastar en educación: hay que asegurar que la educación primaria llegue a todos y que sea de alta calidad y enseñe a aprovechar mejor los recursos naturales. No basta gastar en infraestructura de salud o educación: esos servicios tienen que llegar realmente a la gente más pobre y no ser de segunda sino de excelencia. No basta con promover acceso al crédito: hay que garantizar crédito para los agricultores y los empresarios más pequeños. Gastando mucho se puede hacer poco y, paradójicamente, gastando relativamente poco se puede hacer mucho.

Hay que descentralizar recursos para que lleguen de verdad allí donde hacen falta para satisfacer las necesidades más básicas. No bastan alivios focalizados para parchar temporal y fragmentariamente alguna de esas múltiples necesidades. De nada sirve que la gente reciba pasivamente ayudas fragmentarias. Es indispensable que los necesitados se conviertan en sujetos activos de su propio mejoramiento.

Las razones morales para pensar en la gente sobran. Sobran también las razones egoístas. La pobreza degrada el ambiente. La pobreza es un riesgo de inestabilidad social y política. La pobreza no favorece al mercado ni a la economía global. La pobreza invade los reductos de la riqueza: más de 14 millones de personas (y fueron muchas más) habían emigrado hacia el Norte en 1991 esperando trabajar, comer y mandar ayuda a sus familias.⁷⁸

Las prioridades para el año 2000 convienen a cada uno de los países pobres y convienen a los ricos. Pero los intereses inmediatos suelen ser chatos y se desplaza la racionalidad de decisiones que tendrían que ser de emergencia por el lucro a corto plazo. Numerosos políticos y empresarios del Norte, y sus homólogos en el Sur, siguen sosteniendo a estas alturas —cuando la pobreza se multiplica y la riqueza se concentra cada vez más— que el *trickle down* es un hecho: primero hay que crear riqueza para después repartirla. ¿O esperarán, acaso, que la enfermedad y la desnutrición acaben antes con los pobres?

Experiencia: la prueba de fuego

A veces los que piensan pueden o han podido, en algún momento, tomar decisiones. A veces han sabido traducir los buenos deseos y convertirlos en el pan de cada día de la gente de carne y hueso. Fue el privilegio de Julius Nyerere como presidente de Tanzania. Después coordinó en la Comisión Sur las reflexiones de otros expertos y políticos que, como él, habían pasado por la prueba de fuego de la experiencia. El *Informe de 1990* está lleno de argumentos minuciosos que no es fácil sintetizar.

Para orientar el desarrollo hacia la gente hay que tener claro que lo primero *es* lo primero. Ya nacieron los que buscarán trabajo en las próximas dos décadas: para satisfacer sus necesidades hay que crecer. Bajar el índice demográfico es meta a largo plazo y depende de echar a andar primero el desarrollo para el bienestar. No nos sirve el modelo consumista del Norte. Sólo dando prioridad a necesidades básicas podrá ir cerrándose la brecha de la desigualdad. Descentralizar el desarrollo y revitalizar al campo es la única manera de empezar a generalizar beneficios. No es imposible detener y aun revertir la aglomeración caótica de las grandes urbes.

No basta importar crecimiento con inversiones y tecnología. Hay que equilibrar beneficios de la iniciativa empresarial con apoyo a los marginados. La economía de mercado no es un Ábrete Sésamo y hay que amortiguar sus efectos negativos para sectores vulnerables. No hay que tenerle fobia al mercado pero tampoco al Estado, que seguirá siendo responsable de que el desarrollo favorezca a todos, con eficiencia y equidad. *La economía es para servir a la gente: no la gente para servir a la economía*. El cambio, para ser viable, tiene que arraigarse en la historia y la cultura de los pueblos:

Los reformadores impacientes olvidan con frecuencia que los gobiernos pueden cambiar las políticas pero no pueden cambiar a las sociedades —al menos, no de un día para otro.⁷⁹

No hay desarrollo en serio sin canales democráticos, sin respeto a los derechos humanos, sin Estado de derecho. Para desarrollarse, la gente tiene que poder opinar e intervenir: *participar*, en una palabra.

Para cerrar la brecha del desarrollo hay que cerrar la brecha del conocimiento. Toda la educación debe orientarse al desarrollo, entendiendo que hace falta una buena formación de niños y adolescentes en ciencias básicas y matemáticas. Hay que coordinar esfuerzos para lograr acceso a la ciencia y la tecnología modernas y esforzarse en crear técnicas adecuadas al mosaico propio de recursos. O atenerse, sin opciones, a la dependencia del Norte.

Las estrategias para combatir la pobreza no deben presionar irracionalmente, como se ha hecho en el Norte, sobre los recursos no renovables. Pero la protección del ambiente global debe ser pareja: es paradójico que el Norte insista en las medidas que debe tomar el Sur sin querer alterar sus esquemas de producción y consumo.

Un argumento importante del *Informe* de la Comisión Sur es que sólo un desarrollo auténticamente participativo puede resolver, a largo plazo, la sobrepoblación del mundo pobre. Sólo dentro de estrategias dirigidas a abatir la pobreza funciona la planificación de la fertilidad. El control de nacimientos es propio de la mentalidad moderna y las culturas tradicionales tienden a rechazarlo si no se ofrece como una opción más para el acceso a una vida mejor. Sus alcances son muy limitados sin un amplio esfuerzo educativo y de incorporación de las mujeres a mejores niveles de vida.

El Sur no puede hacerse escuchar cuando se toman decisiones que afectan a este Hemisferio. Recibe cada vez más las influencias de un entorno asimétrico sobre el que apenas puede influir. Los países pobres son muy vulnerables y cada día es más difícil pensar en un desarrollo que prescinda del marco global. ¿Podrán los pobres fortalecer su capacidad de negociación mediante una cooperación más intensa entre sus países?

Aprovechar la globalización en vez de padecerla

Modificar las desventajas de la asimetría requiere: 1) renegociar la deuda para ponerle término a la transferencia neta de recursos hacia el Norte y poder crecer y aumentar en 2 o 3% anual el ingreso *per cápita*; 2) concertar arreglos multilaterales para proteger el ambiente global, respetando las prioridades de combatir la pobreza; 3) duplicar la ayuda para el desarrollo y dedicarla a producir alimentos y cubrir necesidades básicas; 4) lograr mecanismos internacionales independientes para evaluar las necesidades de los países pobres; 5) levantar las barreras proteccionistas que afectan a las exportaciones del Sur y estabilizar precios de materias primas y 6)

protegerse contra fluctuaciones excesivas en las tasas de interés y en los términos del intercambio.

La cooperación entre países del Sur ha sufrido altibajos. Cuando se independizaron las colonias de Asia y África, al terminar la Segunda Guerra Mundial, sabían que su autonomía se vería menoscabada por la asimetría del orden mundial. La Conferencia de Bandung, en 1955, fue el primer intento de organizar al Sur en torno a metas comunes. En 1961 surgió el Movimiento de los No Alineados, procurando no inmiscuirse demasiado en la Guerra Fría y en 1964 se constituyó el Grupo de los 77.

El diálogo Norte-Sur tampoco ha sido lineal. Cuando subieron en el año 73 los precios del petróleo se quiso evitar el enfrentamiento y las Naciones Unidas aprobaron la propuesta de un Nuevo Orden Económico Internacional. En 1976 se habló en Nairobi de una disposición a estabilizar precios de materias primas y se aprobó una Carta de Derechos y Deberes de los Estados. Pero las discusiones se fueron fragmentando para debilitar la capacidad de negociación del Sur y los buenos deseos se quedaron en el papel. La Cumbre de Cancún, en 1981, no fue prometedora. El estancamiento del diálogo se hizo evidente en 1983 cuando los países industriales advirtieron, en Belgrado, que tratar de reactivar las economías del Sur conduciría a procesos inflacionarios y que habría que *apretarse el cinturón*, hasta que se diera la recuperación del Norte y pudiera "gotear" hacia el mundo en desarrollo.

Las reglas del juego se endurecieron en los años ochenta. El Norte se mostró tercamente sordo a las razones del Sur. Bajaron los precios de materias primas y hubo que producir más, no para alimentar a la gente sino para pagar la deuda. En abril de 1980 se discutió la Cooperación para el Desarrollo en una Asamblea General de la ONU, pero no se lograron compromisos expresos.

La Comisión Sur había vuelto a la carga al finalizar la década: reunida en Ginebra de 1987 a 1990, articuló demandas y necesidades del Sur en un prolijo documento propositivo. Tres años de sumar información y experiencia culminaron en una cuidadosa actualización de los problemas del Sur al iniciarse la última década del milenio. Formar recursos humanos con capacitación científica y tecnológica es de máxima prioridad. Cuesta mucho más formarlos en el Norte que crear una Fundación para otorgar becas que permitirían preparar en los mejores centros del Sur a ingenieros, médicos, expertos en salud pública, científicos y técnicos en diversas ramas y administradores de empresas.

La cooperación financiera tiene que buscar apoyo, para empezar, en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el PNUD y los Bancos de Desarrollo regionales. Pero una meta a mediano plazo sería establecer un Banco del Sur que comenzaría por financiar exportaciones entre países del hemisferio con tasas más bajas de interés, para financiar a la larga proyectos de desarrollo. Un Foro de

Deudores prestaría servicios de consulta y asesoría a los países más débiles en sus negociaciones con el FMI y el BM.⁸⁰

En el campo comercial no hay que limitar las redes de preferencias a grupos regionales; conviene fomentar tratos directos, sin intermediarios del Norte; asociaciones de productores, sobre todo de chocolate, café y té propiciarían la estabilización de los precios. Sería aconsejable promover la creación de transnacionales del Sur, que ofrezcan tecnologías más intensivas en mano de obra, adecuadas y menos costosas. Habría que favorecer contactos entre empresarios del Sur y promover flujos horizontales de capitales y tecnologías, así como acuerdos de asesoría técnica. Empresas conjuntas podrían producir fertilizantes, maquinaria, productos farmacéuticos, energía, petroquímicos y bienes básicos. Sería muy útil un banco de datos sobre tecnologías, producción y servicios del Sur, incluyendo información sobre autoempleo, desarrollo comunitario y Organizaciones No Gubernamentales. Sería aconsejable incrementar la cooperación en servicios, en el mejoramiento de transportes y comunicaciones Sur-Sur y en el aumento del comercio de productos alimenticios para consolidar la autosuficiencia y ayudar a los países más pobres, sobre todo de África, en las temporadas de sequía y hambrunas.

Una de las propuestas más interesantes es la creación de 20 centros de ciencia, alta tecnología y ecología para el mundo en desarrollo. La investigación en tecnología agrícola adecuada a los recursos de este hemisferio es primordial para intercambiar experiencias tradicionales en el manejo de ecosistemas y recursos naturales. Tales centros facilitarían, además, acciones conjuntas sobre la capa de ozono y el efecto invernadero e investigaciones sobre el uso de energía solar y control de enfermedades tropicales.

En suma, más cooperación entre países del Sur significaría aprovechar la globalización en vez de padecerla. Sería contrapesar con comunicación horizontal la comunicación vertical Norte-Sur que ha prevalecido hasta ahora. Los países más sólidos del Sur tendrían que asumir su papel abriendo sus mercados y apoyando el desarrollo de los más débiles.

La Comisión Sur propuso, en fin, un Secretariado del Sur dentro de las Naciones Unidas para apoyar a los países miembros en el manejo de la interdependencia global. Los recursos del Sur, incluyendo la información, han permanecido dispersos, lo que repercute negativamente en la posibilidad de tomar decisiones conjuntas. El Norte, en cambio, cuenta con toda la información y todos los mecanismos para concertar sus decisiones.

Existe, pues, todo un programa coherente que tiene en su contra, sin embargo, el peso de un cúmulo de intereses favorables al *statu quo*.

No hay más camino que la democracia

La cooperación inter-Sur es una meta a alcanzar. Pero no significa renunciar a exportar al Norte, ni a importar de allí tecnología, capitales e insumos para industrializarse. Y hay que seguir buscando que las tecnologías para la conservación de recursos naturales y las que faciliten la satisfacción de necesidades básicas se consideren bienes públicos, propiedad de la humanidad. Cuando se reunió en Guadalajara la Primera Cumbre Iberoamericana, en abril de 1991, un documento de escritores del continente recordó algunas verdades alarmantes. El 75% de los bosques tropicales de América habrán sido arrasados para el año 2000. Millones de toneladas de desechos de compañías del Norte —un 78% procedente de los Estados Unidos— convierten a América Latina en basurero tóxico del mundo industrial. Encubierto como “reciclaje”, ese comercio ilícito de basura incluye desechos nucleares, sustancias químicas, líquidos tóxicos, cenizas de incineradores, restos de minerales, lubricantes, pinturas y lodos de alcantarillado.⁸¹

La Cumbre de la Tierra (Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo convocada en Río en junio de 1992) aceptó la propuesta de destinar 0.7% del producto nacional bruto de los países prósperos como ayuda oficial para el desarrollo “lo antes posible”, pero sin decir cuándo. Para cumplir los 115 programas de desarrollo ecológicamente viable que enunció la *Agenda 21* se requieren 600 mil millones de dólares y nadie quiso comprometerse a garantizarlos en el corto o mediano plazo.⁸² Una Cumbre Alternativa sirvió de foro paralelo para las propuestas de ONG del mundo entero.

El 15 de diciembre de 1993 concluyó la Ronda Uruguay del GATT, que sirvió para que los Estados Unidos y la Comunidad Europea resolvieran sus diferencias, centradas en subsidios y aranceles a sus productos agrícolas. Los 105 países restantes tuvieron que esperar a conocer esos acuerdos para luego comenzar sus negociaciones multilaterales, que hubo que sacar apresuradamente, en menos de 24 horas. Los países en desarrollo recibieron, pues, beneficios marginales y se limitó el acceso de sus productos. Los industrializados, en suma, obtuvieron la mejor parte. La Unión Europea, los Estados Unidos y Japón saldrán ganando y también, de paso, la Europa del Este. El mayor ganador fuera de ese circuito es China, cuyas ganancias para el año 2002 se calculan iguales a las de los Estados Unidos. El conjunto de América Latina obtendrá las mismas ganancias que los Tigres Asiáticos, siendo Brasil el más favorecido. África, como era de esperarse, saldrá perdiendo.⁸³ Una nueva Organización Mundial de Comercio (OMC) cumplirá, en lo sucesivo, las funciones de regulación comercial que hasta ahora realizó el GATT. Los siete años de *impasse* en la Ronda Uruguay no culminaron con sonrisas entre los países en desarrollo.

Con la revolución postindustrial, el Norte necesitará cada vez menos de las materias primas, los alimentos y la dependencia del Sur. El término de la Guerra

Fría también canceló intereses geoestratégicos y acentuó la indiferencia de los países ricos. ¿Precipitará todo ello la decisión, en el Sur, de alcanzar mayoría de edad y confiar cada día más en los propios recursos?

Para salir del laberinto de la pobreza, sólo son viables los caminos que conducen a la democracia. Un orden internacional más justo pasa por el ejercicio, en cada país, de la justicia y la equidad, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Sólo la democracia garantiza que los pobres estarán en el centro de la atención de los que gobiernan. Sólo la democracia y la permanente vigilancia ciudadana pueden garantizar la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Sólo la democracia garantiza una participación real de la gente, no simulada y escamoteada, para encontrar condiciones de vida más humanas.

El cuerpo maltrecho de Latinoamérica

De cada 100 latinoamericanos, 63 son pobres: 270 millones de un total de 425. La pobreza creció, de 1980 a 1986, al 3.8%, es decir, casi al doble que el crecimiento demográfico, que ya se había reducido al 2.2%. Un 56% de esos pobres vivían en ciudades en 1980, pero la pobreza del otro 44% era todavía más severa. El coeficiente de Gini, que mide la concentración de la riqueza, es elocuente: el 10% de los más ricos han aumentado su participación proporcional de los ingresos y el 5%, los riquísimos, han aumentado también el nivel absoluto de sus ingresos. Los pobres son hoy más pobres que nunca.⁸⁴

A la mitad de los ochenta, el desplome del empleo había batido todos los récords: se había duplicado y hasta triplicado en las zonas urbanas. Se hablaba de un 10% de desempleo abierto, porque la economía informal absorbía precariamente a muchísimos más. Al estancarse el sector moderno de la economía, la gente fue desplazada hacia empleos menos estables, menos remunerados y sin seguridad social, en empresas semiclandestinas que maquilaban para las grandes, o se fueron a la calle. Los que todavía percibían salarios redujeron su poder de compra hasta un 50%; los grupos medios fueron empujados hacia abajo y los obreros se depauperaron. Desplazados hacia áreas donde el medio está muy deteriorado, los campesinos sólo sobreviven, en muchos casos, con sobreexplotación depredatoria de suelos erosionados. Prosiguió su desplazamiento a las ciudades, para malvivir hacinados y sin servicios. La miseria y sus secuelas de desechos humanos no tratados y agua contaminada mostró un síntoma álgido al principiar los noventa, cuando el cólera se extendió como reguero de pólvora.

Latinoamérica salió muy maltrecha de los años ochenta: a la hemorragia de la deuda y el cáncer de la inflación, que abatían su ya endeble cuerpo social, se añadió la asfixia del ajuste. El pago de la deuda se llevó, sólo en 1988, 30 550 millones de

dólares, en medio del estancamiento de inversiones internas y externas. El PIB se revirtió a cifras de hace una década mientras la inflación, calculada en índice de precios al consumidor, subió un 760% en relación con 1970.⁸⁵

Pero, a pesar de la década perdida, América Latina todavía se sitúa en un estadio intermedio entre los más subdesarrollados y los más adelantados, y con el potencial productivo de su vasta fuerza de trabajo. Posee, además, el 10% del total de tierras cultivables del planeta; el 17% de praderas y pastos y el 24% de bosques; el 25% de reservas minerales e importantes fuentes de energía, incluyendo petróleo y agua. Ha acumulado capital productivo y dispone de una base no despreciable de infraestructura. Durante siglo y medio de independencia ha sedimentado, aunque también malversado, experiencia política y económica y numerosas instituciones sólidas de educación y cultura. En el ámbito internacional dispone de organismos regionales y subregionales de cooperación, del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), para promover el desarrollo y coordinar acciones en foros multilaterales, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El BID sostiene que el enorme costo humano del desajuste y el ajuste macroeconómicos debe asimilarse como lección. La disciplina macroeconómica y la eficiente utilización de recursos han de servir de punto de partida para resolver el rezago social. Buscar un desarrollo sustentable conservando recursos, protegiendo el ambiente y elevando el ahorro interno no es viable sin disminuir la pobreza extrema y la desigualdad en la distribución del ingreso. Pero considera que todo depende de un crecimiento sostenido del comercio mundial, de la recuperación de precios de las materias primas y de la revitalización de la integración regional. Para complementar el ahorro interno, habrá que atraer inversiones cada vez más competidas, en una economía sujeta a muchos vaivenes. Según sus cálculos, harían falta 220 mil millones de dólares en los años noventa, además de ahorro interno, para alcanzar a crecer en el año 2000 al 4.9%: ese financiamiento externo equivaldría al 10% de las exportaciones y al 2% del PIB. Calcula una modesta repatriación de capitales, no mayor de 10 mil millones de dólares en la década, poco para el monto que todavía permanecerá afuera. Un “modesto endeudamiento” de 40 mil millones de dólares más hasta el año 2000 completaría los recursos necesarios.⁸⁶

El BID ha insistido recientemente en la necesidad de volver tangibles las medidas macroeconómicas mediante apoyos concretos a los pequeños actores productivos. Para ampliar el ahorro interno habría que ampliar la base tributaria, mejorar la administración y racionalizar el gasto, destinando recursos a las necesidades prioritarias. Si bien pueden ser útiles, en el corto plazo, los programas de ayuda a grupos específicos (fondos de emergencia social como Pronasol en México), no aconseja concebirllos aislados, sino como parte de una acción social más amplia y a largo plazo.

La CEPAL no difiere mucho de esos planteamientos, aunque acentúa la importancia del rezago social, el imperativo de una modernización productiva con equidad y

de desterrar el gran obstáculo para el desarrollo en nuestro continente, que es la corrupción. La educación y la capacitación son prioritarias para incorporar el conocimiento tecnológico que funda la competitividad y la inserción global.⁸⁷

Los organismos internacionales aconsejan consolidar la integración regional y, a la vez, abrirse al mundo. Los intentos previos de integración: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960) y Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) no habían sido exitosos. Un acuerdo entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay se orienta hacia un mercado común que entraría en vigor a principios de 1996. Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela dieron un primer paso hacia el mercomún andino. Chile concertó un acuerdo de libre comercio con México y con Venezuela. Colombia, México y Venezuela pensarían establecer una zona de libre comercio para mediados de 1994. Los países de Centroamérica tendrían libre acceso al mercado mexicano para 1996 y se insinúa un Mercado Común del Caribe.

La *Iniciativa para las Américas*, de George Bush, propuso crear a largo plazo una zona de libre comercio continental, cuyo primer paso sería el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos y Canadá. Hay que anotar que hasta el momento, Latinoamérica tiene un déficit comercial de más de 100 mil millones de dólares con el resto del mundo; que México sostiene con los Estados Unidos el 90% de sus intercambios comerciales; que el 75% de las exportaciones mundiales son de países desarrollados y que del 25% restante que exportan los países en desarrollo, sólo un 8% no se dirige a países industrializados.⁸⁸

La retórica de la integración culminó en la Primera Cumbre Iberoamericana. La Declaración de Guadalajara se hizo eco de muchas recomendaciones de UNICEF, el PNUD, la UNESCO y la Comisión Sur. Se habló de encontrar formas efectivas de reciprocidad para evitar que una tajante escisión entre la riqueza del Norte y la pobreza del Sur sustituya al bipolarismo ideológico. Los presidentes hablaron de fortalecer la democracia y de *liberar a nuestros pueblos, antes del siglo XXI, del flagelo de la miseria*. Hablaron de procurar el acceso general a servicios mínimos de salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad social para el año 2000. ¿Refrendará la coherencia de los hechos tan irreproachable coherencia verbal?

¿A qué le apostamos?

El fin de la Guerra Fría fue interpretado por ciertos analistas como la oportunidad para que América Latina se procurara una mayor autonomía: se desvanecían las razones geoestratégicas de amenaza soviética que habían pendido como espada de Damocles sobre el continente. Quedaban, sin embargo, los intereses económicos. La urgencia de insertarse en el mercado global delimita ahora las decisiones, por

precaución ante el peligro de retiro de los escasos créditos disponibles, o de la ayuda, o de las deseadas inversiones. No adaptarse a los dogmas del esquema ortodoxo podría acarrear altos costos: escasez financiera y ostracismo económico.⁸⁹ No faltarían formas de presión menos sutiles, con el pretexto de combate al narcotráfico o para detener la migración, a través de México, hacia los Estados Unidos.

A fines de la década, las exportaciones latinoamericanas habían bajado a la mitad, lo mismo que la participación en el producto bruto mundial. Ya no se requerían tanto nuestras materias primas por innovaciones tecnológicas y el estancamiento general contribuía a recortar la demanda. Tampoco llegaban inversiones. La iniciativa de un mercado común en el Cono Sur puede interpretarse, entonces, como resultado de esa creciente marginación. Por otra parte, las reacciones inmediatas en los Estados Unidos, frente a la oferta de droga o la indeseada migración, contribuirían acaso a levantar barreras más que a abrir las puertas. ¿Se acentuaría una indiferencia rechazante, en el intento de no dejarse contaminar?

¿Podría llegar a cerrarse un circuito Norte-Norte de inversión, crédito y comercio, incluyendo a la antigua URSS y a China, y excluyendo al Sur? ¿Aprovecharía a América Latina el “abandono” del Primer Mundo para rascarse al fin con sus propias uñas? La verdad es que el aislamiento del Norte es ilusorio, por muy deseado que pueda ser para algunos. Todo lo que pasa al Sur de las fronteras postindustriales le concierne al Norte porque las migraciones de todo tipo son imparables y la pobreza del Sur, con todo el complejo cultural que la acompaña, ya lo ha invadido.

El modelo neoliberal le fue ofrecido a América Latina como única salida y fue adoptado por las élites políticas y financieras como la nueva Meca del determinismo histórico. Para ser “elegible” y entrar al nuevo bloque continental el requisito es comprar todo el paquete: ajuste, apertura, desregulación y privatización. Todo junto y ya: no selectivamente y con parsimonia, tomando en cuenta a los amplios sectores sociales afectados. Como había fallado el “populismo” del déficit, las cuentas alegres y la hipertrofia del Estado, lo indicado era echar rápidamente a la basura, junto con lo inservible, los restos desmantelados del Estado de bienestar. A pesar de los fracasos del thatcherismo y del reaganismo, del rechazo a Bush y a Mulroney, los gobiernos latinoamericanos siguen adheridos a la ortodoxia, como lo ratificó el ministro argentino de Economía, en diciembre de 1993, después de la furia social desatada en La Rioja y en Santiago del Estero. Adoptar como panacea la utopía neoliberal serviría para enterrar a la utopía socialista. ¿Acaso un nuevo fatalismo, el mercado, desplazaría mejor a los fatalismos obsoletos del determinismo marxista que buscar alternativas con imaginación abierta, y con el consenso de la sociedad civil? Eso parecen creer las élites decididas a una modernización salvaje porque, según los cánones, tal sería el único desarrollo que admite la globalización.

Los tratados comerciales interregionales son provechosos si tienden a fortalecer la capacidad de negociación de Latinoamérica, pero es dudoso que cumplan ese papel si se subordinan a proyectos hegemónicos. En una reunión de dirigentes de la izquierda latinoamericana celebrada en Princeton, en abril de 1993, se coincidió en la importancia de una integración latinoamericana que permitiera negociar en bloque con los Estados Unidos, para ir logrando un orden mundial más equilibrado.⁹⁰ Ninguno de los congregados rechazó un acercamiento de la izquierda con los Estados Unidos, aunque advirtieron los diversos grados de dependencia que se dan, por la geografía, en los países más cerca del Norte y los que se van alejando hacia el Sur.

En junio de 1990, el gobierno de México propuso a Washington un Tratado de Libre Comercio que había descartado ocho meses antes. Así como había preferido renegociar por separado la deuda, para aprovechar mejor las buenas relaciones de coyuntura, buscó entonces una integración acelerada y unilateral con los Estados Unidos. Había influido, tal vez, el desplome soviético, que cambiaba los equilibrios del poder en el mundo, y la perspectiva de que se consolidaría, con la presencia del Este, un bloque europeo todavía más fuerte. Se pensó, al parecer, que la única opción para México, en un mundo crecientemente integrado en bloques comerciales, era ser admitido rápidamente en el de Norteamérica.

Contó, sobre todo, la sospecha de que surgía una unipolaridad del poder —militar e ideológica, si no económica— y que más valía alinearse con la potencia que iba a ejercerla. Aunque se siguió hablando de diversificar vínculos, con Europa, Asia y especialmente Latinoamérica, la motivación dominante fue buscar en la integración con los Estados Unidos una inserción más ventajosa en la economía global. La retórica diplomática siguió promoviendo la integración con América Latina, con la que sólo mantiene México el 4% de su intercambio comercial, pero los hechos hablaron de una integración con los Estados Unidos, con los que actualmente ya se realiza el 90% de los intercambios. México parecía optar por “mirar hacia el Norte y ser el más pobre de los ricos” en vez de “mirar hacia el Sur y ser el más rico de los pobres”.⁹¹

El dilema de México entre la atracción y el recelo frente a su vecino más o menos distante viene de los inicios de su vida independiente:

México está atrapado en un fuego cruzado entre su historia y su nacionalismo tradicional y las poderosas fuerzas de integración económica que lo arrastran en dirección al Norte[...].⁹²

Acaso la clave estaría en encontrar el camino para convertir el nacionalismo en motor de una modernización realmente provechosa para las mayorías. Porque, como ha advertido un defensor apasionado del TLC:

Existe una desigualdad básica que tiene obvias consecuencias políticas. Si no se establecen nuevas instituciones para redistribuir las ganancias del comercio entre los perdedores y para ayudar a las regiones atrasadas en los Estados Unidos y Latinoamérica a conectarse con la economía moderna, ni el NAFTA ni una unión todavía más amplia podrán perdurar.⁹³

Quizá México no ha acabado de entender que una relación estable y provechosa con los Estados Unidos tiene que pasar por una vinculación sólida con América Latina. El libre comercio entre el Norte y el Sur del continente americano beneficiaría a todos, pero no en la misma medida: ni a todas las naciones, ni a todos sus habitantes por igual. Hace falta algo más que el mercado para que se expandan equitativamente los beneficios. Sólo una comunidad americana en la solidaridad y la libertad, no en la subordinación, le devolvería vigencia, como lo ha recordado Leopoldo Zea, al ideal bolivariano.⁹⁴

Modernidad sin consenso no es modernidad

La aparición de movimientos populares amplios, que trascienden a los partidos, es un fenómeno que se ha incorporado en los últimos años a la experiencia latinoamericana. Hacia esos movimientos suelen confluir múltiples organizaciones independientes, surgidas muchas en las situaciones más locales que puedan imaginarse. ¿No se generan precisamente en ámbitos locales todos los problemas globales? En barrios urbanos y en comunidades rurales, en centros de estudio y de trabajo emergen, por todas partes, las ONG:

La gran novedad de Iberoamérica, en 1992 y en vísperas del nuevo milenio, es la sociedad civil, que se ha venido forjando en la adversidad a menudo, pero también con la certeza de ser la portadora de la continuidad cultural del hemisferio[...].⁹⁵

Los imperativos morales pesan poco entre los que se han habituado a manejar el peso de los intereses. Un porcentaje restringido de las poblaciones —más en los países pobres, pero también en los desarrollados— se vincula a la economía global. El economista y secretario de Trabajo de Clinton Robert B. Reich ha descrito lo que podría suceder en países como los Estados Unidos. Un estrato privilegiado de tecnócratas, altamente calificados y capaces de manejar la información y los servicios, se aislaría en prósperos enclaves suburbanos provistos de excelentes servicios de educación y de salud, percibiendo para el año 2020 más del 60% del total de ingresos y con bajas cargas fiscales. Sus barrios residenciales y sus sitios de trabajo, protegidos por abundantes guardias de seguridad, no se parecerían en nada a los asentamientos

deteriorados de la gran mayoría de norteamericanos. La pobreza habría crecido, con la creciente desesperación, como la única suerte para las cuatro quintas partes con la consiguiente multiplicación de la violencia y la insuficiencia de las cárceles. Ominoso panorama. No se trata de futurología de ciencia ficción sino de previsiones coherentes con la propensión a desplazar, con la lógica del mercado, los vínculos de convivencia decente y civilizada que deben articular a las sociedades.

Analistas como Reich se están preguntando, en el Norte, si las sociedades serán capaces de articular lazos suficientemente cohesionadores entre sus ciudadanos para hacer contrapeso a las fuerzas centrífugas de una globalización que, dejada a su propia lógica, engendra más perdedores que ganadores. Allí donde el capitalismo ha avanzado con una importante intervención del Estado, como en Alemania y Japón, se ha conseguido una distribución del ingreso bastante más equitativa, aunque la división internacional del trabajo empiece también a golpearla. El éxito de los Tigres del Sudeste asiático se habría fundado menos en una libertad sin cortapisas del mercado que en una participación estatal al estilo japonés. En todos esos países, lo mismo que en Suecia o en Suiza, un criterio de justicia redistributiva ha pedido sacrificios a los más afortunados para asegurar un acceso más justo de los demás a adecuados niveles de vida. Pero, si la globalización acentúa la brecha entre los ricos y los pobres en los países prósperos, esa distancia no tiene punto de comparación con la que se abre progresivamente entre la quinta parte próspera de la población mundial y el resto del planeta:

Norteamérica, Europa Occidental y el Este de Asia —que constituyen la quinta parte más próspera— registran las tres cuartas partes del producto mundial bruto y el 80% del valor del comercio mundial. Como estas regiones ricas se han divorciado del resto del mundo, mucho de lo que se quedó al margen se va hundiendo precipitadamente en la más desesperanzada pobreza.⁹⁶

En un mundo donde los centros que elaboran los productos, aun los que ahora se sitúan en los países pobres, mantienen un estrecho contacto con los centros donde se elaboran la tecnología y la información, la dispersión planetaria de los procesos productivos significa beneficios para unos y marginación para otros. No significa que, al trasladarse a la periferia una parte importante de la producción de manufacturas, la riqueza así generada vaya a beneficiar automáticamente a toda la población. Acentuará, más bien, las distancias entre los que alcancen a incorporarse al sector moderno y los que verán cerradas aun más sus oportunidades de actividad productiva.

En los países postindustriales, las tendencias globalizadoras pueden significar desempleo para desplazados por la migración de fábricas y las tecnologías que ahorran mano de obra. A esos países toca encontrarle solución a un serio proble-

ma que puede poner en entredicho las cuotas de bienestar generalizado que han disfrutado. El problema es particularmente serio en los Estados Unidos, donde la *reaganomics* habituó a los estratos más favorecidos a no compartir sus dividendos con una población pobre en incremento. Los países pobres pueden evadir menos aun la responsabilidad de encontrar fórmulas para una inserción equitativa, y no excluyente, en la moderna red global.

La riqueza no es contagiosa. Los sentimientos de responsabilidad hacia el prójimo no están implícitos en la condición humana: lo que prevalece es el egoísmo, si no lo modera una consistente valoración por parte de la sociedad de la generosidad y los deberes hacia los semejantes. Si tales sentimientos no suelen florecer espontáneamente entre los ciudadanos privilegiados hacia los más desfavorecidos en cualquier país, habría que preguntarse si es válido imaginar solidaridad con las miserias que se padecen a miles de kilómetros de distancia. Como lúcidamente ha alertado Reich, los gerentes y los tecnócratas superinformados de la nueva economía global pueden llegar a desarrollar, frente a las noticias del hambre, la enfermedad, las represiones políticas o el deterioro ambiental todos igualmente globales, una soberana indiferencia.

Si el mercado no opera con valores morales ni sentimientos caritativos ¿qué puede esperarse de la aséptica eficacia de un impasible globalismo? La propuesta reichiana es la opción por un nacionalismo económico de signo positivo en los Estados Unidos que busque en primer lugar fortalecer las capacidades de los propios ciudadanos, de todos y no sólo de los ya elegidos por la fortuna, y coopere con otras naciones para que tales mejorías no se logren a sus expensas. Suena muy bien y sin duda sería la única manera de volver provechosa, también para los países pobres, la mítica economía global. Robert Pastor resume así su propia utopía:

Un sueño secular —una comunidad democrática de las Américas— combinaría la tecnología, las destrezas y el capital del Norte con el mercado, los recursos y la mano de obra del Sur para crear un nuevo y formidable gigante de la economía y la democracia.⁹⁷

Con menos barreras arancelarias, con recursos liberados del pago de intereses de la deuda, con reducción de gastos militares, con una razonable política fiscal y reasignación de recursos a objetivos prioritarios crecería, según propone Robert B. Reich, el gasto social. Los gobiernos no se cruzarían de brazos a esperar la libre acción de las fuerzas del mercado: les tocaría mantener y ampliar la infraestructura y asegurar que toda la población tuviera oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades y de ejercitar actividades productivas, además de garantizar salud de alta calidad y educación de excelencia para todos.

Ya muy cerca del fin de milenio no es hora de renunciar a las utopías, pero sí de abolir los milagros. Quizá la crisis de los paradigmas nos ha dejado la lección más iluminadora: ningún sistema es inevitable y los espejismos, de cualquier signo, son desastrosos. Tiene razón Carlos Fuentes cuando califica de trágica, para nuestra América, la imitación de modelos que han demostrado sus fallas allí donde surgieron, en la Inglaterra de Thatcher y en los Estados Unidos de Reagan:

No es posible que siendo un continente tan joven, vital y creativo, nos atengamos a modelos muertos. Creo que se debe llegar a un equilibrio entre la función del Estado, que es imprescindible, y la función de la iniciativa privada. Si uno resume todo esto vemos cómo el populismo satanizó a la iniciativa privada en nombre del estatismo, y luego el liberalismo satanizó al Estado en nombre de la iniciativa privada. El mercado no es un fin, es un medio para que la sociedad alcance bienestar, cultura, comunicación. Entonces, con el neoliberalismo y el capitalismo salvaje no podemos reaccionar como imitamos, siempre a destiempo, cuando ya se han demostrado sus insuficiencias.⁹⁸

Conciliar las demandas concretas de la gente, que exige justicia y democracia, con las exigencias de una globalidad que nos rebasa es el desafío. Para empezar, hace falta democracia y aprender a rendir cuentas.

Notas

- ¹ Alexander King y Bertrand Schneider, *La primera revolución mundial. Informe del Club de Roma*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 312.
- ² Peter Drucker, *Post-Capitalist Society*. Nueva York: Harper Collins, 1993, pp. 186 y 193.
- ³ Drucker, P., *op.cit.*, p. 214.
- ⁴ Octavio Paz, "El mapa del siglo XXI", en *La experiencia de la libertad*, vol. 2. México: Vuelta, 1991, p. 31.
- ⁵ Mario Vargas Llosa, intervención en "El mapa del siglo XXI", en *La experiencia de la libertad*, *op.cit.*, p. 37.
- ⁶ King y Schneider, *op.cit.*, p. 129.
- ⁷ Jacques Attali, *Milenio*. México: Seix Barral, 1993, pp. 97 y 98.
- ⁸ Jorge G. Castañeda, "Pax Americana", en *La casa por la ventana*. México: Cal y Arena, 1993, p. 134.
- ⁹ Josué Sáenz, "De la economía estatal a la de mercado", en *La experiencia de la libertad*, vol. 5, *op.cit.*, p. 41.
- ¹⁰ *La otra voz*, Lección inaugural de los Cursos de Verano 1990. Madrid: Universidad Complutense, 1990, p. 14. El texto no es idéntico al que le dio título al libro *La otra voz*,

Barcelona: Seix Barral, 1990, pp. 125 ss. La versión que se incluye en ese libro es del 1º de diciembre de 1989.

¹¹ Daniel Bell, "Miradas al futuro", en *La experiencia de la libertad*, vol. 7, *op.cit.*, p. 21.

¹² Irving Howe, "Del socialismo autoritario a la difícil libertad", en *La experiencia de la libertad*, vol. 1, *op.cit.*, p. 63.

¹³ Luis Villoro, intervención en "Del socialismo autoritario a la difícil libertad", en *La experiencia de la libertad*, *op.cit.*, pp. 96-97.

¹⁴ Cornelius Castoriadis, "Miradas al futuro", en *La experiencia de la libertad*, vol. 7, *op.cit.*, p. 36.

¹⁵ King y Schneider, *op. cit.*, pp. 301-302.

¹⁶ Carlos Monsiváis, *La Jornada*, México: 22/I/1994.

¹⁷ Robert B. Reich, *The Work of Nations*. Nueva York: Vintage Books, 1992, p. 315.

¹⁸ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD. Bogotá: Tercer Mundo Editores, p. 40.

¹⁹ *Estado mundial de la infancia*, UNICEF. Barcelona: 1991, Tablas 1 y 6, pp. 76-77 y 86-87.

²⁰ Barbara Ward, *Progress for a Small Planet*. Londres: W.W. North & Co., 1979, p. 171.

²¹ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op.cit.*, p. 66.

²² *Informe sobre desarrollo humano 1992*, PNUD. Bogotá: Tercer Mundo Editores, p. 18.

²³ *Ibid.*, p. 23.

²⁴ *Ibid.*, p. 22.

²⁵ *Ibid.*, pp. 24 y 25.

²⁶ *Ibid.*, p. 25.

²⁷ *El Financiero*, México: 9/II/1993.

²⁸ Cifras de Nafis Sadik, Secretaria de la Conferencia Mundial de Población, *La Jornada*, México: 3/V/1993 y de UNICEF, *Estado mundial de la pobreza*, 1993. Citadas por Carrasco y Hernández, *La Jornada*, 21/XII/1992.

²⁹ *The Challenge to the South. The Report of the South Commission*. Nueva York: Oxford University Press, 1990, pp. 84 y 93.

³⁰ Rudolph Strahm y Ursula Oswald, *Por esto somos tan pobres*. Cuernavaca, Morelos: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, pp. 20-21.

³¹ Strahm y Oswald, *op.cit.*, pp. 22-23.

³² *Ibid.*, p. 59.

³³ *Ibid.*, pp. 78-79.

³⁴ Ward, B., *op.cit.*, p. 92.

³⁵ Cornelius Castoriadis, en *Le Mythe du Développement* (coord. Candido Mendes). Paris: Seuil, 1977, p. 139.

³⁶ E. F. Schumacher, *Small is Beautiful*. Londres: Blond & Briggs, 1973. 1a. edición española, Madrid: Hermann Blume ed., 1978. Véase también *The Age of Plenty, A Christian View*. Edimburgo: The Saint Andrew Press, 1979.

³⁷ Ward, B., *op.cit.*, p. 169.

³⁸ *Ibid.*, p. 106.

³⁹ En Gran Bretaña, el movimiento hacia una tecnología alternativa empezó con el fomento de la agricultura orgánica, propiciando que la gente cultivara cada vez más sus propios alimentos, que se procesaran localmente y se aumentara el consumo de proteínas vegetales. Surgieron *Soil Association*, *The Organic Farmers & Growers Corporation*, *The Rye Research Institute*, *The Henry Doubleday Research Association*, *The International Institute of Biological Husbandry* y *Emerson College*. También en la industria apuntaron iniciativas para transformar procesos y promover a la pequeña y mediana empresa. Un *Industrial Common Ownership Movement* agrupó cooperativas para fabricar piezas menores de computación, alimentos integrados, pan, artesanías, materiales para autoconstrucción. La *Foundation for Alternatives* publicó en 1980 dos volúmenes sobre iniciativas comunitarias. El *Council for Small Industries in Rural Areas* en Inglaterra y *The U.S. Office of Economic Development* responden a esa nueva tendencia que, en la época de los grandes consorcios transnacionales, pretende devolver a los individuos sus potencialidades creativas y recuperar el mejor espíritu de los empresarios pioneros.

Según el directorio de *Alternative America* había en los Estados Unidos, en 1980, más de 5 mil organizaciones y 300 grupos que trabajaban en tecnologías adecuadas para lograr la autosuficiencia, reducir el desperdicio, reciclar productos y conservar el equilibrio ecológico. *Forest Farm*, *Abandoned Farm*, *Shelter Institute*, en Maine; *New Alchemy*, *Institute of Community Economics*, *The Community Investment Fund* y el *Centre of Community Economic Development*, todas en Massachusetts; el *Center for Neighbourhood Technology y Operation Brotherhood*, en Chicago; el *National Centre for Appropriate Technology*, fundado en Montana por el ex-senador Mike Mansfield para lograr la autosuficiencia de comunidades de bajos recursos; *California Office of Appropriate Technology* y *Farallones Institute* en San Francisco; *Institute for Social Self-Reliance*, en Washington, D.C.; *Movement for a New Society*, en Filadelfia y *People's Development Corporation*, en el Bronx de Nueva York.

Véase George Mc. Robie, *Small is Possible*. Nueva York: Harper & Row, 1981.

⁴⁰ Lawrence D. Houston, *Small Town*, vol. II, núm. 5; David Morris y Karl Hess, *Neighborhood Power*, Beacon Press, 1975; B. Ward, *op. cit.*, p. 115.

⁴¹ Strahm y Oswald, *op. cit.*, pp. 33, 38, 64-65. Ward, B., *op. cit.*, pp. 195-196 y 225-227.

⁴² Ward, B., *op. cit.*, pp. 173, 185, 207.

⁴³ Strahm y Oswald, *op. cit.*, pp. 154-157.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 37.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 171 y 173.

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 174-175, 178-179.

⁴⁷ Ward, B., *op. cit.*, p. 247.

⁴⁸ G. A. Cornia, Richard Polly y Frances Stewart, *Ajuste con rostro humano. Protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*. Madrid: Siglo XXI para UNICEF, 1987, pp. 152 ss.

⁴⁹ Ward, B., *op. cit.*, pp. 182-184.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 222.

En la Conferencia de Ciencia y Tecnología de Viena (1979) se recomendó la creación

de Organizaciones No Gubernamentales en los países pobres, para proyectos de desarrollo en pequeño y promoción de tecnología intermedia. Se han hecho intentos en una y otra dirección con diversas características. Se ha practicado el desarrollo comunitario con y sin apoyo gubernamental; con aplicación de tecnologías alternativas o simplemente para fomentar un desarrollo microempresarial y promover el autoempleo.

Gandhi había sido, en la India, un precursor del apoyo a las formas tradicionales de producción que Schumacher articularía, en los años setenta, como propuesta de desarrollo alternativo. Gandhi insistió en el uso de telas y atuendo hindúes y apoyó los talleres tradicionales de textiles (*swadeshi*). (Mohandas Karamchad Gandhi, *Swadeshi, artesanía no violenta*. Quito: Instituto Andino de Artes Populares Andrés Bello, 1983).

En Bangalore y Bombay surgieron luego ASTRA y ATY, para investigar y aplicar tecnologías adecuadas con biogás, molinos de viento, bombas de mano y otras opciones para los pequeños poblados. En la época de Nehru la Fundación Ford apoyó el proyecto *Etawah*, inspirado en la filosofía de Gandhi. Se dividieron los distritos en bloques que abarcaban 100 poblados y entre 70 y 100 mil habitantes atendidos por promotores, de origen campesino, que recibían durante dos años entrenamiento en desarrollo comunitario. Pero eran “mil usos” que no alcanzaban a cubrir las funciones de gestoría y promoción excesivamente vastas que se les encomendaban. Por eso no lograron aliviar la terrible crisis de alimentos, que requería un apoyo intensivo a la economía de subsistencia.

En 1974 una evaluación de Philip Coombs y Ahmed Manzur para el BM hizo un balance de los intentos de desarrollo comunitario realizados hasta entonces. En 1952 se habían promovido en Filipinas cooperativas de producción y consumo y programas de vacunación, mejoramiento del ambiente y alfabetización capacitando a bachilleres con afán de servicio, aunque sin mucho éxito.

Tampoco había sido exitoso un programa de cooperativas aplicado en Senegal desde 1959 que, para 1967, ya había capacitado a 7 mil *animadores* en 56 centros de entrenamiento. Oposición de intereses locales y falta de apoyo práctico y de asesoría técnica lo hicieron fracasar. En Tanzania otro programa de 1 800 cooperativas locales reunidas en Uniones regionales, que pretendió abarcar a 12 millones de personas, corrió la misma suerte. Quizá porque los asesores técnicos eran escandinavos. Ante reiterados fracasos de proyectos de cooperativas a la occidental, incluyendo otro de la FAO en Afganistán, surgió la duda bien fundada de si podrían funcionar las imitaciones. (Philip Coombs y Ahmed Manzur, *Attacking Rural Poverty, How Non-formal Education Can Help*, Baltimore y Londres: John Hopkins University Press, 1974.)

Bruce Stokes, de World Watch, fue un convencido de la eficacia de la participación para resolver abastecimiento de alimentos, mejoramiento de vivienda, saneamiento y generación de energía. Fue de los primeros en advertir el error de creer en la pertinencia de soluciones globales cuando hay que movilizar más bien recursos locales y con la participación de los necesitados. Señaló, desde 1978, que sólo los interesados conocen

bien sus carencias más urgentes y cómo resolverlas. Es más probable el éxito de iniciativas prácticas locales que de fórmulas generadas en los centros burocráticos. (Bruce Stokes, *Local Responses to Global Problems: A Key to Meeting Basic Human Needs*, World Watch Papers núm. 17. Nueva York: febrero, 1978; *Helping Ourselves: Local Solutions to Global Problems*, Nueva York-Londres, World Watch, W.W. Norton & Co., 1981.)

UNICEF registró, en 1986, ejemplos exitosos de actividades en pequeña escala. Una Asociación de Mujeres Autónomas agrupa en la India a un 46% que trabaja en su casa, un 33% que se dedica a vender en la calle y a un 10% de trabajadoras agrícolas y de servicios. Un *Banco Popular* apoya, en Costa Rica, a vendedores callejeros, un 40% de los cuales era antes tan pobre que no podía adquirir una canasta básica: los créditos no pasan de 247 dólares anuales. También funciona la tecnología adecuada: en Bangladesh, donde se mejoran ingresos de un millón de personas con medio millón de bombas manuales para extraer agua potable y, además, regar la tierra; en Ghana, estufas para ahumar pescado multiplican por cinco los ingresos familiares; en Sri Lanka, también con tecnología adecuada, se hace almidón de yuca. (Cornia, Polly y Stewart, *Ajuste con rostro humano*. Madrid: Siglo XXI para UNICEF, 1986, pp. 271 ss.)

Otros casos ilustrativos aparecen en el *Informe 1991* del PNUD. En Bangladesh, el Banco Grameen empezó apoyando a 170 mil campesinos sin tierra (incluyendo un 70% de mujeres) en la producción de bienes y servicios. Tiene ahora sucursales en 3 660 poblados y ya abarca a 300 mil personas, que han aumentado sus ingresos un 30%. La Fundación Carvajal, en Colombia, transforma la villa miseria de Agua Blanca, habitada por 300 mil migrantes del campo. Con capacitaciones específicas y cursos de administración y contabilidad, muchos se volvieron sujetos de crédito y manejan sus microempresas. El Movimiento Six-5 surge en Burkina Faso y se extiende a Senegal, Malí, Mauritania, Níger y Chad. Ha movilizado la antigua tradición de ayuda mutua e impulsa proyectos productivos, atención médica, educación básica y pequeñas obras de infraestructura. Financiamiento privado, nacional e internacional y de organismos internacionales apoyan proyectos como los citados. (*Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op.cit.*, pp. 167, 168.)

En 1979 surgió en Dominica el *Trickle Up Program*, una ONG que trabaja actualmente con fondos de varia procedencia, incluyendo financiamiento del PNUD. En 10 años logró promover 10 mil pequeños negocios en un total de 83 países, invirtiendo sólo un millón 700 mil dólares. Se pretende promover 100 mil microempresas más en la próxima década. (*Trickle Up Program Newsletter*, vol. 9, núm. 1. Nueva York: Junio, 1989.)

En algunos programas de autoempleo hay patrocinio de fondos empresariales, asignados con propósitos filantrópicos. En otros, se cuenta con fondos de organismos internacionales públicos, privados o de carácter religioso. Los múltiples experimentos de desarrollo desde abajo se fundan en una evidencia generalmente reconocida: la abundancia *no gotea*.

⁵¹ Ward, B., *op.cit.*, p. 109.

⁵² *The Challenge to the South*, *op. cit.*, p. 26.

⁵³ *Ibid.*, p. 59.

⁵⁴ *Informe sobre desarrollo humano 1991, op. cit.*, p. 25.

⁵⁵ Cornia, Polly y Stewart, *op.cit.*, pp. 133 ss y 167 ss.

⁵⁶ *The Challenge to the South, op.cit.*, p. 72.

⁵⁷ Véase, en el capítulo IX, una explicación más amplia de este fenómeno y sus mecanismos operativos. Consultar los siguientes epígrafes: “Globalización, palabra clave”; “Tres polos y un solo dios verdadero: la economía de mercado” y “El modelo neoliberal en la probeta latinoamericana”.

⁵⁸ Strahm y Oswald, *op. cit.*, pp. 186-189. Sus fuentes son: C.V. Vaitos, *The Role of Transnational Enterprises in Latin American Economic Integration Efforts: Who integrates and with Whom, How and for Whose Benefit?* UNCTAD/ST/ECDC/19, Nueva York: Naciones Unidas, 1982, p. 43. *Transnational Corporations in World Development, Third Survey*. Nueva York: Naciones Unidas, 1983, p. 19.

⁵⁹ Véase comentarios de Arthur Schlesinger y de Bonfonte, Allis y Booth en *Time*. Nueva York, 8/VII/1991.

⁶⁰ *The Challenge to the South, op. cit.*, p. 264.

⁶¹ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op. cit.*, p. 60.

⁶² *Ibid.*, pp. 18-19.

⁶³ *The Challenge to the South, op. cit.*, p. 13.

⁶⁴ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op. cit.*, p. 11.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 24.

⁶⁶ Ward, B., *op. cit.*, p. 119.

⁶⁷ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op. cit.*, p. 185.

En la p. 116 del *Informe* se señala la perversa correlación entre fuga de capitales y deuda:

Los ricos se benefician con esa fuga de capitales [...], contratan los préstamos originales y luego compran dólares, a tasas subsidiadas, que transfieren al exterior. Muchos gobiernos latinoamericanos asumieron más tarde deudas como una responsabilidad pública, dejando a los ricos con sus activos en dólares libres de impuestos y trasladando la carga del ajuste y la austeridad fiscal a los pobres.

Los datos que siguen fueron tomados de Juan Carlos Mendoza, “América Latina: incierto camino al siglo XXI”, en *La Jornada*, Suplemento *Política*, 20/VI/1991.

⁶⁸ Strahm y Oswald, *op. cit.*, p. 22.

⁶⁹ *Informe sobre desarrollo humano 1991*, PNUD, *op. cit.*, pp. 43 ss.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 186 y 62-82.

⁷¹ *Ibid.*, pp. 88-90.

⁷² *Ibid.*, pp. 83-91.

⁷³ *Ibid.*, pp. 134 y 139.

⁷⁴ *Ibid.*, pp. 138 y 141.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 115-123.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 195.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 180 ss.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 195.

⁷⁹ *The Challenge to the South, op.cit.*, p. 275.

⁸⁰ En los hechos, sólo con ahorros públicos sería realizable ese Banco del Sur porque los privados privilegian el rendimiento financiero alto —especulativo— y la seguridad frente a “riesgos políticos”. Y ello supondría gobiernos democráticos con excedentes presupuestales obtenidos mediante reformas fiscales “progresivas”. En cuanto al Fondo de Deudores, ha sido reiteradamente descartado por las instituciones internacionales.

⁸¹ *La Jornada*, 20/VI/1991.

⁸² Carrasco y Hernández, “La Cumbre de la Tierra y las diferencias Norte-Sur”, en *La Jornada*, 15/VI/1992.

⁸³ *El Financiero*, 16 y 28/XII/1993.

⁸⁴ El cálculo de 270 millones es del PNUD, hecho público en un Seminario en Santiago de Chile. *La Jornada*, 31/VIII/1991. Hasta ese momento, se habían pronosticado 183 millones para 1990, de acuerdo con las últimas proyecciones de CEPAL en 1986. *Primera Cumbre Iberoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 222. Índice de crecimiento demográfico en p. 191. Coeficiente de Gini, p. 218.

⁸⁵ *Estudio económico de América Latina y el Caribe 1988*. Santiago de Chile: CEPAL, 1989, p. 45.

⁸⁶ *Primera Cumbre Iberoamericana, op. cit.*, pp. 162 y 164.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 187. Declaraciones de Gert Rosenthal sobre corrupción, *La Jornada*, 2/V/1993.

⁸⁸ Strahm y Oswald, *op.cit.*, p. 165.

⁸⁹ Jorge G. Castañeda, “América Latina y el fin de la Guerra Fría”, en *La casa por la ventana, op. cit.*, p. 100.

⁹⁰ Foro coordinado por Jorge G. Castañeda sobre *Alternativas de América Latina*. Declaraciones de Antonio Navarro Wolff de Colombia, Lula da Silva de Brasil y Cuauhtémoc Cárdenas de México, *La Jornada*, 17/IV/1993.

⁹¹ Declaración, no confirmada, que se atribuyó al presidente Carlos Salinas de Gortari, en Jorge G. Castañeda, *La casa por la ventana, op. cit.*, p. 212.

⁹² Jorge G. Castañeda, Introducción a *Límites de la amistad, México y Estados Unidos*, escrito en colaboración con Robert A. Pastor, México: Joaquín Mortiz/Planeta, 1989, p. 28.

⁹³ Robert A. Pastor, *Whirlpool, U.S. Foreign Policy toward Latin America and the Caribbean*. Princeton: Princeton University Press, 1992, p. 268.

⁹⁴ Leopoldo Zea, en el Coloquio Internacional sobre Latinoamericanidad celebrado en su honor por la Universidad Nacional Autónoma de México, *La Jornada*, 29/VI/1992.

⁹⁵ Carlos Fuentes, conferencia sobre “Imaginación de América” en el Palacio de Iturbide, *La Jornada*, 21/V/1992.

⁹⁶ Reich, R. B., *op.cit.*, p. 306.

⁹⁷ Pastor, R. A., *op.cit.*, p. 269.

⁹⁸ Carlos Fuentes, *La Jornada*, 5/XII/1993.

II. ¿Qué hacemos con los pobres?

La historia mexicana ha enseñado hasta la saciedad que la riqueza no es contagiosa.

Daniel Cosío Villegas

Rascacielos de riqueza y espinazo de pobreza

En la base de la pirámide mexicana hay cerca de 50 millones de pobres: el 60% del país. En el espacio más desprotegido se amontonan los más olvidados de los olvidados: jornaleros, ejidatarios con parcelas mínimas, migrantes en diáspora perpetua, indígenas. Los más pobres de los pobres viven en zonas áridas y semiáridas; alcanzan apenas la mitad de los servicios indispensables y sus bienes son exiguos; no leen ni escriben o han cursado sólo uno o dos años de primaria; minados por enfermedades que el resto de la población no conoce, mueren antes de tiempo, a veces en la primera infancia; están desnutridos; hay hacinamiento en sus casas precarias, sin agua, ni electricidad, ni drenaje. Algunos los calculan en 23 millones, otros en 17. El “espinazo de la pobreza” empieza por el Sur en Chiapas y termina por el Norte en Chihuahua: atraviesa Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, México, Hidalgo, Nayarit y Durango, e incluye sierras de difícil acceso, huastecas y zonas desérticas.

Los pobres “a medias” llegan a algún servicio básico (como electricidad, o agua, o drenaje) y, si alguien en la familia tiene empleo estable, reciben servicios de salud.

Sus viviendas están muy deterioradas y casi todo lo que ganan se les va en comer, cada vez menos. La mayoría no ha terminado la primaria aunque, en ese enorme contingente, son menos los analfabetos. Se cuentan entre ellos ejidatarios y muy pequeños propietarios rurales, muchos de los cuales tienen que salir a completar sus ingresos; hay también los que migran a las ciudades y se ocupan en actividades eventuales o en el servicio doméstico. La pobreza extrema anda en los límites de un salario mínimo o menos; la moderada puede alcanzar hasta dos salarios mínimos.

Alrededor de 15 millones la van pasando, con ingresos entre dos y cinco salarios mínimos. Son artesanos, empleados de oficina o de comercios, obreros, choferes. Con ellos se cierra lo que alguien ha llamado “el primer círculo de la miseria urbana”. Después de cuatro décadas de crecimiento sostenido, poco más de 10 millones constituyen las clases medias, con más de cinco salarios mínimos: unos 6 millones oscilan entre los 5 y los 9 y otros 4 se ubican en un estrato bastante acomodado, recibiendo entre 10 y 19 mínimos.¹ En el escalón más cercano a la cima, alrededor de 4 millones y medio de personas ganarían 20 veces, o más, ese salario. Por encima de esos ejecutivos, profesionales y altos funcionarios está la verdadera cima de la pirámide con aquellos, contadísimos, que ocupan las columnas de *Forbes* y *Fortune* y son, como diría Carlos Fuentes, “los privilegiados del reino de la tuna”.

La concentración de la riqueza ha sido endémica y el proceso industrializador la acentuó: un 5% de ciudadanos suma el 47% de la riqueza del país. En Suecia la distancia entre los más ricos y los más pobres es de 4 a 1: en México los más ricos ganan por lo menos 38 veces más, consumen el 68% de los bienes industriales en el mercado y el 80% de los automóviles.² Son marginados, según los definió Coplamar en 1977:

[...] aquellos grupos que han quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible.³

No son el peso muerto, el “lastre”, de los sectores dinámicos sino los que han sido excluidos.

El Norte y el Sur, la ciudad y el campo, los barrios residenciales y las colonias populares polarizan riqueza y pobreza. La dicotomía Norte-Sur que divide al mundo se repite en México: en Chiapas, Oaxaca y Guerrero menos del 2% de las viviendas tenían, según Coplamar, los requisitos mínimos de bienestar. Hidalgo, Tabasco, Querétaro y Puebla se encontraban muy cerca. A fines de los años setenta los estados fronterizos del norte eran los de marginación media y únicamente la capital registraba una marginación baja. El 92% de las viviendas campesinas eran muy precarias y sólo el 1% de los ejidatarios gozaban de todos los beneficios del

bienestar. Un 90% de campesinos no consumían proteínas ni calorías suficientes. La mortalidad se duplicaba en el campo y se triplicaba entre los niños. El 88% de los campesinos no habían terminado primaria y el 36% eran analfabetos.⁴

Pronasol habló de 39 millones de desnutridos en 1989. Aunque la leche existente hubiera alcanzado para 20 millones de niños, los niños pobres no tomaron leche. Mueren en México, según UNICEF, 51 niños por cada mil, de modo que ocupamos el lugar 77 entre los de mortalidad infantil intermedia.⁵

El 20% de las primarias dispone de un solo maestro y no cubre ni la mitad de los grados: más de 15 millones que ya cumplieron 15 años nunca completaron la primaria. De los que entran a primaria, la mitad no la termina; de los que entran a secundaria, el 30% no la culmina. La calidad de la educación es tan deficiente que 28 de cada 100 aspirantes a entrar a la UNAM no alcanzan 5 de calificación. La mitad de los que logran ingresar a la educación superior no terminan estudios.

Sólo sectores medios y trabajadores sindicalizados han tenido acceso a crédito para vivienda. En cálculos de Pronasol, 22 millones de mexicanos carecían absolutamente de vivienda en 1980 y el 77% de la población ocupaba viviendas deterioradas e inhóspitas.⁶

Ser pobre en país pobre

Pobreza, según la *Enciclopedia Británica*, es “la condición que existe cuando la gente carece de medios para satisfacer sus necesidades básicas”. Necesidades que pueden determinarse como las imprescindibles para sobrevivir o, en sentido más amplio, como las que reflejan el nivel de vida promedio en una comunidad. Por eso hay que distinguir entre la pobreza en la antigüedad y en los tiempos modernos y entre la que se da en las naciones industriales y la que conocen los países pobres. En otras etapas históricas y aún hoy, donde hay una vasta población rural, la pobreza se ha acentuado por ciclos cuando la sequía, por ejemplo, desata hambrunas.

En las sociedades industriales han sobrevenido olas de empobrecimiento cuando los mecanismos del mercado no han evitado desplomes en la producción y el empleo, como en la Gran Depresión de los años treinta. Los cambios tecnológicos que generó al comenzar el siglo XIX la Revolución Industrial provocaron desplazamientos de campesinos a las ciudades y la aparición de una pobreza concentrada, sórdida y urbana, muy distinta a la ponderada pobreza de la vida rural autosuficiente. La Revolución Postindustrial vuelve a sembrar pobreza, sobre todo entre minorías raciales y migrantes del Sur, aunque también afecte a otros estratos. La que se instala en las sociedades industriales de hoy repite rasgos que se daban en el Londres de Dickens y le añade otros novedosos. Esa “cultura de la pobreza” desintegra la familia con su carga de ansiedad por la sobrevivencia cotidiana y de

amargo resentimiento, con secuelas que propician adicciones y delincuencia. Algunos países, como Suecia, han logrado evitarla, destinando un tercio de su presupuesto a la red de bienestar social y financiándolo con impuestos progresivos relativamente altos que han reducido considerablemente la brecha entre los más y los menos prósperos.

La desnutrición, la vivienda deteriorada, la carencia de atención a la salud y la educación deficiente predominan en bolsones de pobreza de países ricos y se transmiten de una a otra generación. No hay que confundir causas con efectos. No son rasgos subjetivos atribuibles a individuos o a grupos los que favorecen la pobreza, sino condiciones de la estructura social que se reflejan en el empleo satisfactoriamente remunerado o en su defecto. Cambios tecnológicos y falta de calificación entran en ese círculo vicioso de pobreza.

Pero no es lo mismo ser pobre en país rico que ser pobre en país pobre. Como los niveles de vida son en aquéllos mucho más altos, también la línea de pobreza se sitúa relativamente más arriba. Además, en los países pobres la pobreza colectiva es generalizada. En gradaciones diversas, las mayorías apenas sobreviven, con niveles “mínimos” de bienestar o por debajo de tales niveles.

Todas las naciones pobres, con la excepción de China, fueron colonias. En las colonias, la cultura occidental moderna fue sobrepuesta a culturas tradicionales. En el ámbito económico, significó exportar materias primas e importar productos industriales en un intercambio marcado por la dependencia. El desarrollo de muchos países industriales se consolidó y expandió gracias a la subordinación de las colonias y a la extracción de sus recursos naturales. En muchos países coloniales habían florecido culturas ricas en valores espirituales, sin el afán de acumulación monetaria que caracterizó al Occidente moderno, católico y protestante, aunque por cierto en las naciones protestantes se acentuaron las virtudes del éxito material y se las asoció con la predestinación divina.

En los territorios colonizados, el arraigo a la tierra era fundamental. Los vínculos con lo sagrado pasaban por otra parte en esas sociedades que empezaron a ser calificadas como “arcaicas”, a las que habría que llevar “a rastras” hacia el Progreso. La pobreza que hoy ha proliferado en el Hemisferio Sur del planeta tiene que ver, como ha sugerido Octavio Paz, con la perversión y destrucción de la cultura tradicional.⁷

Los marginados de hoy se han quedado en vilo entre un pasado que se les ha arrebatado y un futuro que todavía no los alcanza. Excluidos de la dinámica económica moderna, no cuentan ya con los sostenes de las estructuras tradicionales. El impacto de la industrialización sobre sociedades rurales acentúa determinados rasgos de pobreza urbana que son propios de este siglo. En relación con México conviene recordar, sin embargo, cómo se fue propiciando un empobrecimiento ascendente, después de la Conquista, con modalidades de apropiación de la tierra y servidumbre de los indios que configuraron el primer trauma modernizador.

El destino de los *tlatoque*

Se inauguraba el siglo XIX cuando Alejandro de Humboldt acuñó una definición de México que no ha perdido vigencia: aquel sabio devoto del Nuevo Mundo entendió que podía identificarlo, sin reticencias, como *el país de la desigualdad*. Algo habían influido tres siglos de Colonia para agigantar la escandalosa distancia entre los que lo tenían todo y los que no tenían nada.

Por la mediación de los colonizadores y de la extracción de la plata, el antiguo orden cerrado y autosuficiente fue vinculado a la economía mundial. Una nivelación paulatina de la precariedad fue convirtiendo a todos los indios, sin distinción, en los pobladores mayoritarios, pero más excluidos del bienestar, de toda la Nueva España.

La sociedad indígena, jerarquizada dentro de un ordenamiento que hacía confluir los poderes terrenales con los religiosos, se fundaba en el legado del maíz, que los dioses habían confiado a los hombres para su sustento y para garantizar la reanudación cíclica de la vida. En el sustrato de aquel orden había un contrato implícito: los dioses habían derramado su sangre para alimentar a los hombres y los hombres devolvían sangre y ofrendas para alimentar a los dioses. La sociedad se estructuraba a imagen del orden cósmico, cuya continuidad era garantizada por el *tlatoani*. A él le correspondía asegurar la abundancia *de los frutos de la tierra, para que siempre hubiese mucha hartura*.⁸ En el diseño sagrado del universo todos tenían un lugar, prestaban un tributo y recibían algo a cambio. En cada ámbito de la vida se manifestaba el orden trascendente.

Las riquezas y las tierras que disfrutaban el soberano y los señores correspondían a una función cumplida dentro de aquella estructura, pero sin las características modernas de la propiedad raíz. Un 90% de la población, los *macehualtin*, sembraba la tierra, cuya tenencia era parte de un orden regido por la relación religiosa del hombre con el maíz. Los *calpulalli* eran tierras que los pueblos recibían en usufructo, asignándose una parcela a cada familia, con el derecho a cultivarla para sustentarse. Su disfrute no era privado sino colectivo y se perdía si se abandonaba la siembra por tres años consecutivos: las tierras no podían venderse. Los *macehualtin* también cultivaban, por turnos, las tierras que usufructuaban el *tlatoani* y los *pipiltin*, laboraban en la construcción de caminos, obras hidráulicas y templos o prestaban servicio militar.

Todos, desde el *tlatoani*, cumplían su *tequitl* o tributo, aportación que sustentaba un orden social que era reflejo del orden cósmico. El tributo de los *macehualtin*, un tercio de lo que producían, servía para rodear de abundancia al soberano y los señores y para cubrir los gastos militares. Se revertía, como “gasto social redistributivo”, cuando las reservas señoriales proveían para toda la población en temporadas de escasez, que sobrevenían por alguna inclemencia de la naturaleza: el tributo no se cobraba en tales casos ni siquiera a los pueblos vencidos. La estratificada desigualdad era legitimada por la misión que cumplían el *tlatoani* y los *tlatoque* de preservar el orden cósmico.

Los contrastes no se borraban, sin embargo, con la lógica impecable que cohesionaba a la pirámide. El esplendor de Tenochtitlan atraía riquezas de vastísimos territorios tributarios y, en la cima, el *tlatoani* concentraba toda la hermosura de la naturaleza pródiga y toda la belleza creada por los más espléndidos artesanos. Las compartía, es verdad, con los *tlatoque* y los *pipiltin*, de noble linaje, cuyo destino era participar con él de *cuanto hay de precioso en el Anáhuac*.⁹ Los *hombres comunes* sostenían la pirámide con su tributo y recibían, a cambio, protección de los dioses y el usufructo de una parcela de tierra sacralizada por el cultivo del maíz. Las familias eran autosuficientes, no sólo en alimentos sino en la manufactura de instrumentos de trabajo, de los escasos utensilios y del menaje de casa y en la confección de los vestidos. Una práctica generalizada era la *macoa* o ayuda mutua entre parientes y vecinos que se auxiliaban en diversas labores, sobre todo la construcción de la vivienda de adobe.

El tributo era la forma predominante de circulación de bienes. Los productores los intercambiaban, además, en el *tianguizco*: el trueque no tendía al lucro sino a satisfacer necesidades básicas. La única modalidad de acumulación de riqueza se daba acaso entre los *pochteca*, que cumplían funciones de embajadores e intercambiaban mercancías en los puntos más remotos de los territorios vinculados al poderío de los nahuas. Pero las ganancias solían gastarse en convites y ceremonias que consolidaban el prestigio: el excedente, como es propio de culturas tradicionales, se gastaba en la fiesta y era otro canal redistributivo.¹⁰

La columna vertebral de ese universo era una visión religiosa que, fundada en mitos y cohesionada en ritos, regía los destinos de la colectividad y llenaba de significado a la vida de cada uno de sus miembros. La educación era obligatoria y entre los seis y los nueve años todos los hijos de *macehualtin* recibían una formación básica coherente con el orden del sistema.

El desplome de semejante estructura, con la irrupción de los conquistadores, les arrancó su columna vertebral y los sumió en la confusión de un transcurrir incomprendible. Esa desarticulación del núcleo de la cultura irá carcomiendo múltiples ámbitos de la existencia de los antiguos mexicanos, que fueron catapultados abruptamente del año 3 Casa al 1521 de la Era Cristiana al consumarse la derrota de Tenochtitlan.

Y fue nuestra herencia una red de agujeros

Comenzó entonces un implacable proceso de deterioro, más o menos precipitado o paulatino, que fue pervirtiendo la frugalidad y ahondó la pauperización. Sirvieron de contrapeso las disposiciones tutelares de la Corona, en interés propio y ante la persistente y generosa vigilancia de los misioneros. Las Nuevas Leyes de Indias fueron promulgadas en 1542 por Carlos V, bajo la influencia del

Obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas. Dos siglos después Fray Servando Teresa de Mier las interpretará como un “pacto” entre la Corona, los criollos y los indios, que habrían “aceptado” ser vasallos a cambio de garantías de autonomía. Pero la ambivalencia, a la vez tutelar y opresiva, de los siglos coloniales no bastó para preservar a los indios de una progresiva relegación al submundo de los tiempos modernos. Un sentimiento de minusvalía y orfandad había sustituido a la certidumbre de pertenencia a un orden coherente. Los indios se quedaron solos, golpeando con lamentos vanos sus muros de adobe, sin más herencia que una *red de agujeros*.¹¹

El sistema novohispano se incrustó sobre el prehispánico favoreciendo las particularidades étnicas, que además de acentuarse como sostén coherente de identidad, sirvieron para sujetar mejor a los indios. Se procuró “congregar” a la gente que habitaba en poblados dispersos en torno al culto a algún santo patrón y a esas “congregaciones” les otorgó la Corona tierras comunales que a veces coincidían, y otras no, con las que antes usufructuaban. Como en el orden prehispánico, la religión siguió cohesionando al sistema. La tenencia comunal de la tierra garantizaba, además, la recaudación fluida del tributo colectivo. El *fundo legal* abarcaba terrenos para casa y corrales hacia los cuatro puntos cardinales a partir de la Iglesia; el *ejido* y los *propios* estaban integrados por pastos, bosques y aguas de propiedad comunal y terrenos que se cultivaban colectivamente y cuyo producto era para la comunidad. Había parcelas de usufructo individual, que se trasmitían por herencia: como todas las tierras de la comunidad, tampoco podían venderse.¹²

La orfandad frente al conquistador acentuó los antiguos lazos solidarios que eran parte de la costumbre y la comunidad fue el continente propicio que les aseguró protección a los indios y que defenderían, en lo sucesivo, a toda costa. Las comunidades, con sus técnicas y siembras tradicionales, eran autosuficientes. El nuevo esquema de tributación también se incrustó sobre el tradicional: el tributo a la Corona substituyó al que se debía al *tlatoani*. Pero creció el que se entregaba a los señores: durante algún tiempo, también tuvieron que tributar los indios a sus antiguos señores mientras prestaban servicios a los encomenderos. A mediados del siglo XVI se substituyó la tributación en especie por pago en dinero: la inserción en la economía monetaria había empezado. Para obtener efectivo y poder pagar el tributo, empezaron a cultivar trigo y a criar cerdos y borregos, es decir, a incorporar productos vendibles en el mercado de los españoles. Tenían que producir excedentes, que no necesitaban para su autoconsumo, pero entraban con desventaja al mercado: eran los españoles de la ciudad los que fijaban los precios. El tributo, por otra parte, ya no se gastaba en la fiesta, ya no se redistribuía, sino que engrosaba los haberes del comercio, la hacienda y la mina.

En la segunda mitad del siglo XVI la población fue diezmada por epidemias y epidemias que hacían estragos entre los vencidos, anímicamente disminuidos. Hubo que

bajar el tributo, porque cada día había menos gente para pagarlo. Algunos indios que pretendían evadir el que les correspondía como pobladores de una comunidad contraían, sin darse cuenta, una dependencia más agravante: prestando trabajo a cambio de escasa remuneración se fueron volviendo *peones acasillados* que, endeudados de por vida, se obligaban a permanecer en la hacienda, a la que habían quedado vinculadas las comunidades mediante *repartimientos* que implicaban servidumbre.

Los indios que sobrevivieron al cataclismo de la irrupción violenta de la cultura occidental encontraron caminos para integrarse al nuevo orden de vida sin renunciar a algunos núcleos muy significativos de su cultura, como el vínculo religioso con la tierra. Sobre ese trasfondo se fueron amarrando los hilos de lo imaginario alrededor de símbolos que preservaron creencias ancestrales en alianza con otras que, traídas de Occidente, se asimilarían como propias. En 1531 se dibujó en el ayate de Juan Diego una imagen que sería capaz de aglutinar, como ninguna otra, a los mexicanos: la Virgen de Guadalupe, que los habría elegido para brindarles su manto protector y que empezaría a recibir, en el cerro del Tepeyac, un culto que reiteró la veneración a Tonantzin, diosa de la tierra y madre del dios del maíz. Su poder de convocatoria, hasta el día de hoy, es el más evidente testimonio de la persistencia de los sustratos más antiguos de México.

Un puente de plata

La Colonia novohispana se articula, a través de la metrópoli y menguada por la dependencia política, a la economía mundial: con la riqueza del subsuelo se construyó un puente de plata. Al finalizar el siglo XVI, el 95% de lo que se exportaba era plata (y un poco de oro), amén de un mínimo porcentaje de cueros y de cochinilla.¹³ Cuando América no había entrado en el mapa, Europa compraba en Asia productos agrícolas y manufacturas suntuarias con metal de sus propias minas. Ya en 1530 esos yacimientos se estaban agotando: la plata de México y Perú proveería, con creces, sedas y porcelanas, especias y piedras preciosas. En el siglo XVI se constituye el primer mercado realmente mundial, incluyendo la venta en América de productos europeos y asiáticos y de esclavos africanos.

La producción de plata a bajo costo, para abastecer al mercado mundial, fue preferente: los beneficiarios de ese subsidio eran los que recibían, en Europa, la plata mexicana. Las áreas mineras se poblaron con indios desarraigados por fuerza de sus comunidades, a los que después se sumaron negros esclavos, para ocuparse del beneficio del mineral. Españoles libres la extraían, obteniendo una participación además de un salario. Junto a la mina se instaló la hacienda, que permitía alimentar a los que en ella laboraban. El subsidio a la extracción de plata mantenía bajos los precios de insumos y productos agrícolas. El peso de la exportación estrella de la Colonia (que

no representaba el porcentaje mayor del producto nacional ni empleaba a la mayoría de la gente) se le cargó al resto de la sociedad, sobre todo a la población indígena.

En la mayoría del territorio, donde no había minas, campeaba solitario el poderío de la hacienda. Con pagos nominales y a veces sin retribución, se aprovechaba la mano de obra de los pueblos y el conocimiento ancestral de los cultivos tradicionales. Las haciendas invadían, poco a poco, tierras de las comunidades. Los indios disponían cada día de menos espacio para sembrar y ya no les alcanzaban las cosechas para comer: día a día eran más los que tenían que alquilarse para laborar en la hacienda. Obligados a entrar en la economía monetaria para cumplir con el tributo, también necesitaron dinero para herramientas, para alquilar una yunta de bueyes o adquirir tejidos de lana. Su economía dejó de ser autosuficiente. El comerciante, el hacendado y el minero fungieron de intermediarios. Junto al acaparamiento de tierras, de granos, de alimentos, prosperaron los créditos usurarios.

A fines del siglo XVIII las condiciones de vida se habían degradado considerablemente y había crecido la mendicidad. A España le había servido la plata de México para comprar manufacturas que le vendían los industriosos países del norte de Europa. Su capacidad de producir había declinado y el metal de ultramar le compensaba el déficit comercial. La Colonia dependía de una metrópoli cuyo papel en el mercado mundial era subsidiario. El colonialismo español pesó sobre México unas 35 veces más que el británico sobre las trece colonias, por las restricciones al comercio con otros países y las cargas fiscales por la extracción de la plata. Dentro de la Colonia, los más desvalidos eran los que soportaban todo el peso de la nueva pirámide: los indios que, en el censo de 1740, eran el 60% de los mexicanos.¹⁴

Los Borbones, precursores de la Reforma

La Iglesia fue la gran cohesionadora de la sociedad colonial, ejerciendo su tutela entre los ricos y entre los pobres antes de la cuna y más allá de la tumba. Su obra misionera y educativa fue muy amplia, y fue coherente con la protección de los indios. Eran vastos los bienes eclesiásticos, por donaciones de la Corona y por legados de fieles, y seguían creciendo porque, igual que las tierras de comunidades, no podían venderse. La dinastía austriaca hizo intentos infructuosos para evitar esa concentración en “manos muertas” pero fueron los Borbones los que se decidieron a expropiar empezando, en 1767, con los jesuitas. El anticlericalismo borbónico fue una de las vertientes de su “despotismo ilustrado”: desde el exilio, los jesuitas se aplicaron a revalorar la antigüedad mexicana y a “traducir” al cristianismo los mitos indígenas, mexicanizando al catolicismo, mientras contribuían a articular el “patriotismo criollo”, el primer proyecto nacional de México.¹⁵ La Ley

de Consolidación promulgada en 1798, en vigor en México en 1804, obligaría a la Iglesia a vender todos sus bienes incluyendo los fondos píos para entregar el producto, en préstamo, a la Corona. Siendo la Iglesia la fuente del crédito era, como lo advirtió Humboldt, la principal promotora del desarrollo: no había fondos suficientes en el territorio para comprar sus bienes ni intenciones de reunirlos, porque se drenarían hacia España. La medida afectó tanto a la Iglesia como a los hacendados, que eran sus deudores.

De hecho, el “crecimiento económico” propiciado por los Borbones, con las medidas modernizadoras de “comercio libre”, también se tradujo en la exportación hacia España, para aliviar el enorme déficit, de buena parte de las ganancias generadas por lo que producía México. David Brading ha advertido lo engañoso de aquel programa “mercantilista” que se concretó en el edicto de Comercio Libre promulgado en 1778:

Nada impresiona más a la posteridad que una convicción de éxito. Si hasta muy recientemente los libros de texto consignaban los logros positivos del período borbónico —el carácter “ilustrado” del gobierno y la notable difusión de la prosperidad—, ello se debió en gran parte a que los historiadores modernos hicieron eco, de manera poco crítica, a los testimonios de la élite administrativa acerca de sí misma.

Las palabras de Brading podrían aplicarse a condiciones mucho más recientes, como si la historia volviera a repetirse:

[...] las ganancias se fueron al exterior. Tanto en la península como en México la agricultura estaba descuidada y atrasada, y así la mayoría de la población de ambos países vivía cerca de los niveles de subsistencia. De igual importancia fue el hecho de que los mercados de las colonias americanas fueron inundados por los textiles europeos baratos, al punto de que la industria local fue destruida.¹⁶

Los que poseen todo y los que nada tienen

La pobreza, al concluir el siglo XVIII, permanecía inalterable. Lo manifestaron el Obispo y el Cabildo de Michoacán en una *Representación* dirigida al rey en 1799, que Humboldt recogerá en su *Ensayo político*:

La población de la Nueva España se compone de tres clases de hombres, a saber: de blancos o españoles, de indios y de castas. Yo considero que los españoles componen la décima parte de la masa total. Casi todas las propiedades y riquezas del reino están en sus manos. Los indios y las castas cultivan la tierra; sirven a la gente acomodada y

sólo viven del trabajo de sus brazos. De ello resulta entre los indios y blancos esta oposición de intereses, este odio recíproco que tan fácilmente nace *entre los que poseen todo y los que nada tienen, entre los dueños y los esclavos[...]* es uno rico o miserable, noble o infame de derecho y de hecho[...].

Abundaba aquella memoria en la concentración de la tierra:

El producto del trabajo de los naturales entra en las cajas reales, llevando los oficiales reales cuenta separada de lo que ellos llaman la propiedad de cada pueblo. Digo lo que ellos llaman porque desde más de veinte años hace, es casi ficticia esta propiedad[...].¹⁷

El mismo Abad y Queipo, que reprochará al cura Hidalgo por “persuadir” a los indios de que son “dueños y señores de la tierra” y prometerles que les será restituida, había admitido en 1805 que

[...] las tierras mal divididas desde el principio se acumularon en pocas manos tomando la propiedad de un particular (que debía ser la propiedad de un pueblo entero) cierta forma individual opuesta en gran manera a la división[...]. *Los pueblos quedaron sin propiedad [...]*.

El obispo era partidario de repartir las tierras de comunidades, como buen seguidor de Jovellanos. Aquellos hombres ilustrados esperaban abolir el latifundio y promover la pequeña propiedad. Las Cortes de Cádiz (1812-1813) volverían ese propósito ordenamiento legal.¹⁸

La población indígena en el momento de la Conquista ascendía a unos 20 millones, 11 de los cuales habitaban en el centro del territorio y unos 300 mil en Tenochtitlan. Disminuyó durante un siglo y después comenzó a aumentar, a pesar de hambrunas y epidemias a lo largo del siglo XVIII. El censo de 1740 registra un 60% de indios y un 40% entre mestizos, criollos y españoles. La Nueva España contaba con 5 millones de habitantes en 1793 y eran poco menos de 6 millones cuando llegó Humboldt, en 1803. La distancia demográfica con la gran república del norte era mínima. Pero México sólo alcanzaba a producir la mitad de lo que producía, al iniciarse el siglo XIX, aquella pujante economía.¹⁹

1810: una nación que quería ser oída

La fascinación de la libertad se transmite con la velocidad del rayo. Uno tras otro se insurgen los pueblos.

Luis Villoro, *El proceso ideológico de la revolución de Independencia*

A pesar de tan perseverante sedimentación de agravios, la sociedad novohispana vivió con escasos sobresaltos su barroca estratificación. La señora del Tepeyac era el único vínculo entre criollos, castas e innumerables indios destituidos. Sólo a fines del siglo XVII se prendieron chispas en la ciudad de México, entre la “plebe” alebrestada, que fueron apagadas por milicias de artesanos, comerciantes y hacendados, sin mayores consecuencias.

La invasión napoleónica en España abrió un hueco de legitimidad que pretendió llenar, infructuosamente, el Ayuntamiento de México. Los abogados que formaban aquel cabildo, bien pertrechados con la teoría española del Estado, pretendieron devolverle al pueblo, en ausencia del monarca, su soberanía. Corría el año de 1808. Se invocó entonces la autoridad del ayuntamiento, que no desaparecía en derecho “por ser inmortal el pueblo”. Un terrateniente peninsular, auxiliado por comerciantes también hispanos y con una tropa de negros esclavos, sometió a los criollos que intentaban recuperar para el municipio aquella tradición de autonomía que les había sido arrebatada a los comuneros, en 1521, en la batalla de Villalar. Los reclamos del Ayuntamiento de México se habían gestado en el descontento de los criollos, que aspiraban a entrar en posesión del poder que consideraban una herencia que les había sido escamoteada. El regidor Azcárate invocaría los derechos legítimos de los criollos como descendientes de aquellos conquistadores que habían pactado, en el siglo XVI, con el soberano. Fray Servando Teresa de Mier iría más allá: la influencia decisiva del Obispo Las Casas habría culminado en un auténtico *pacto social* de Carlos V con los criollos pero también con los indios: unos y otros habían aceptado ser vasallos a cambio de garantías de autonomía. La irrupción libertaria que encabezó el cura Hidalgo en 1810 respondía a un orden de ideas muy próximo a esa lógica de Fray Servando.

Fue así como los indios y las castas emergieron por primera vez del subsuelo para volverse protagonistas. El temible clamor subterráneo que precede a los terremotos debe haberse difundido sordamente en los meses que precedieron al Grito de Dolores. Los despojos de los pueblos; la congoja de los que habían sido arrancados de sus comunidades para acarrearlos al beneficio de la mina, mucho más allá de las diez leguas legalmente permitidas; el desarraigo de los que vagaban sin empleo fijo en las ciudades; el resentimiento de las castas menospreciadas por su bastardía; la penuria de las comunidades empequeñecidas en la medida en que ganaban tierra las haciendas; rencores y carencias sacudieron el Bajío y expandieron esa fuerza telúrica que libera, en contadas ocasiones, lo que Villoro ha llamado “la fascinación de la libertad”.

Más de cien mil indios arrastra Hidalgo: pueblos enteros alzados, trabajadores de minas, “plebe” de las pequeñas villas provincianas. No se detuvo el vértigo con el ajusticiamiento de Hidalgo porque otro cura derramó la insurgencia en las pobres serranías de Guerrero y de Puebla y la condujo hasta los alrededores de

Cuernavaca. Morelos declaró abolida la esclavitud, suprimido el tributo, desterradas la nomenclatura degradante de las castas y la discriminación de los indios. La voz del *siervo de la nación* quería hacerse eco de agravios de trescientos años y desterrar la ominosa desigualdad. En Tecpan había dispuesto, en 1811, que *entregarán los justicias las tierras a los pueblos para su cultivo, sin que puedan arrendarse pues su goce ha de ser de los naturales en sus respectivos pueblos...* Pero los *Sentimientos de la Nación* (1813) propusieron algo que, más de siglo y medio después, sigue siendo una utopía: que el Congreso dicte leyes *que moderen la opulencia y la indigencia*. La nación recordará la fecha de Dolores como el día en que se desplegaron sus labios *para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída*.²⁰ Pero olvidará prudentemente la determinación de devolver sus tierras a los pueblos.

El sacrificio de Morelos pulverizó el aliento de epopeya popular que había interrumpido abruptamente el ponderado ritmo novohispano. El estandarte de Guadalupe, enarbolado por los curas insurgentes y el pueblo en armas, expresaba los hondos arraigos tradicionales de aquel movimiento libertario. Es verdad que las clases medias de abogados, clérigos y miembros de cabildos se sumaron con sus luces a la inquietud que revolucionaba al país. Pero, tras impregnarse en las Cortes de Cádiz de liberalismo e Ilustración, representaron cada vez menos al pueblo llano:

Es muy significativo que en el Congreso de Chilpancingo y en su fruto, la Constitución de Apatzingán, prevalezcan las abstractas ideas ilustradas sobre las disposiciones bien concretas que Hidalgo y Morelos habían dispuesto, por ejemplo, acerca de la tenencia de la tierra[...]. El elemento campesino, que predomina en el movimiento popular de Hidalgo y Morelos, será desplazado por una élite de letrados que defenderán los intereses de las clases medias y de otros letrados que defenderán los intereses de las clases altas.²¹

Los propietarios y los oficiales criollos coincidieron en el afán de aplacar el desplante de los humildes y de apagar los rescoldos de la insurgencia. El sosiego virreinal había vuelto por sus fueros en 1820.

Un pecado original

Intempestivo fue, entonces, el levantamiento de Riego, que hacía jurar al rey, en la península, la Constitución liberal y suprimía fueros y privilegios militares y eclesiásticos. Un azar inesperado de la historia llevó a consumir la Independencia, representados en la persona de Iturbide, a los que habían apagado el fuego emancipador de 1810. Con el Plan de Iguala empieza un período turbulento de más de treinta años,

dominado por el arbitrio del ejército y por los intereses y las ideas de facciones, que no lograban pergeñar un sólido proyecto de nación:

Había sí, en líneas muy generales, quienes miraban hacia el pasado y hubieran preferido que nada cambiara; quienes miraban igualmente hacia el pasado pero proponiendo, a la vez, que un gobierno fuerte y el imperio del orden permitieran un decidido desarrollo industrial protegido y fomentado por el Estado (como Lucas Alamán); y quienes miraban hacia el futuro (como Zavala) acariciando el espejismo de una prosperidad calcada de la norteamericana.²²

Conservadores y liberales de varios matices diferían en sus versiones de la tradición rescatable o desdeñable y de la modernidad deseable.

Casi el 95% de los 6 millones que habitaban el vasto país de Iturbide eran anal-fabetos. El debate entre centralismo y federalismo y la primera disputa por la nación, que se entabló entre escoceses y yorkinos y luego entre conservadores y liberales, los dejaba afuera. El pequeño país de los letrados decidía por el vasto país de los “sin luces”. Es verdad, sin embargo, que la promesa de un imperio que sería “el reino de la abundancia” había contagiado a la élite de los recursos y a la del pensamiento, pero también al común de la gente. Los criollos ricos como Alamán miraban llenos de optimismo al futuro desde sus dominios, la mitad de las tierras que, aunque cargadas de gravámenes, no estaban en manos de la Iglesia. Cargos municipales, pequeños curatos habían sido el premio de consolación para la clase media criolla, cada día más partícipe de la cultura de la Ilustración y más despegada del país tradicional.

Para inaugurar la república, los liberales quisieron prescindir de trescientos años de historia. Renunciar en bloque al pasado es la utopía de esos hombres enamorados de un futuro que soñaban comparable al de la Unión Americana.

El proyecto modernizador es abrazado por los liberales, junto con el federalismo, para darle cuerpo a una Constitución, la de 1824, embridadada sin embargo por los fueros eclesiástico y militar. La nación nace a su independencia encorsetada entre un futuro anhelado, pero sin sustento real, y un pasado abominado, pero presente por todas partes. Adoptar de un día para otro el atuendo de los tiempos modernos para ser “lo que eran ya los Estados Unidos” exigía algo muy costoso. Octavio Paz lo ha precisado:

El ingreso a la modernidad exigía un sacrificio: el de nosotros mismos. Es conocido el resultado de ese sacrificio: todavía no somos modernos pero desde entonces andamos en busca de nosotros mismos.²³

En un *Manifiesto* redactado por Zavala, que el Constituyente de 1824 dirigió a la nación, se advertía a los mexicanos que para ponerse al *nivel de la república feliz de*

nuestros vecinos del Norte tendrían que elevarse al grado de virtudes cívicas y privadas que distinguen a ese pueblo singular. Zavala soñaba que México había recorrido ya, en catorce años, el largo período de tres siglos.²⁴

En el umbral de la Revolución Industrial, la feliz república del norte tenía cerca de 10 millones de habitantes, con un 72% dedicado a una muy próspera agricultura. La industria sólo ocupaba entonces a un millón de obreros pero ya había en Nueva Inglaterra florecientes manufacturas, sobre todo textiles. No la aquejaba la infeliz desigualdad de México y disfrutaba, en cambio, de un bienestar parejo y un acceso generalizado a la educación. La Unión Americana empezaría a poblar sus grandes planicies, moviendo la frontera hacia el Oeste, para convertirse en un pletórico granero. Los indios serían reducidos a reservaciones cada vez más precarias, pero los colonizadores, imbuidos de un audaz espíritu emprendedor, no abrigan duda alguna de su derecho a desplazarlos para asentar los reales del Progreso.

Sólo la voz de Fray Servando se alzó en tonos proféticos para alertar a los padres de la recién nacida república contra la celada que se complacía en tenderles la historia. Pero el *Discurso de las profetas*, leído en diciembre de 1823 ante los constituyentes, fue enviado al mismo desván donde debían arrumbarse, en la opinión ilustrada, el pasado indígena y el novohispano. Aunque la retórica del discurso oficial recogiera después, para adornarse, los restos emblemáticos del pasado indígena que le había ofrecido Carlos María de Bustamante a las efemérides patrias. El país legal y el país real empezaron a andar, desde entonces, cada uno por su lado. Edmundo O’Gorman ha señalado el *pecado original* de la República: borrar de una plumada el pasado histórico creyendo que podía desecharse como una camisa sucia.²⁵

La única salvación: sacrificar a las comunidades

Algunos liberales de la primera generación criticaron los excesos populares de Hidalgo y Morelos, que habían convertido a la Nueva España en “un campo de desolación y un montón de ruinas”. Era la opinión de José María Luis Mora, que compartía con la “gente de bien” el temor de que volvieran a levantarse

[...] esas masas embrutecidas por su miseria y degradación que han existido en México hasta la independencia y que después de ella han disminuído considerablemente por la libertad de comercio [...].

La población urbana crecía ligeramente, con indios desarraigados de sus comunidades y gente de las múltiples castas, que vagaban sin rumbo fijo o ejercían alguna ocupación más o menos estable. La “plebe” salía ocasionalmente de las goteras para

presionar al Congreso o nutrir manifestaciones callejeras, primero en sostén del iturbidismo y luego de los yorkinos. Decía Mora:

[...] existe todavía una parte muy considerable de estas masas que, combinándose con los intereses de los partidos, y tomando ciertas alternativas por ellos, contribuyen con otros elementos de desorden a traer el país en perpetua agitación.²⁶

Los primeros manejos “populistas” se dieron efectivamente en los años veinte, pero la abigarrada presencia del populacho, a pesar de los miedos de Mora, siempre fue manejable.

El despojo de tierras comunales era el agravio de los pueblos: las reclamaciones de límites con las grandes propiedades eran reiteradas y a veces hicieron causa común con los reclamantes alcaldes de origen popular, que todavía solía haberlos en la tercera década del siglo. Las disposiciones de los caudillos insurgentes no tuvieron vigencia efectiva. Después de la Independencia hubo mínimos conatos de restitución agraria: en Amozoc en 1823; en San Ángel al finalizar el gobierno de Guadalupe Victoria; en el valle de Toluca donde hizo un reparto entre cuarenta pueblos el gobernador Lorenzo de Zavala.²⁷

Pero lo que preocupaba desde entonces a los liberales era la situación de la tierra en posesión de “manos muertas”. Mora describió severamente la “universal bancarrota” de la propiedad territorial hipotecada con la Iglesia o dejada en sus manos por legados piadosos. Los dineros entregados para fondos píos habían sido tomados a rédito, más para disiparlos que para el fomento de las fincas, de modo que los gravámenes eran ya tan desmesurados al principiar el siglo que era muy difícil redimir los capitales. Al terminar las guerras de insurgencia, muchos propietarios que no podían pagar intereses habían sido embargados por otros que lo serían a su vez en una cadena sin término. El “único medio de salvación” consistía, pues, en *sacrificar los pretendidos derechos de las comunidades a los de la propiedad particular*.²⁸ Desamortizar las tierras significaría ponerlas en el mercado y, se pensaba, facilitar la subdivisión. Aunque los tiros iban dirigidos sobre todo contra la Iglesia, también afectarían a las mermadas tierras de los pueblos. Ya en 1833 se pensó en promover reformas para poner en circulación *todas* las tierras de corporaciones.

La turbulencia política de la primera mitad del siglo, más la pérdida de 10 mil habitantes y la mitad del territorio en la quinta década, no fue propicia para cambios profundos en una estructura que seguía siendo colonial. La actividad empresarial no prosperó ni con el proyecto abortado y mal concebido, según Mora, del Banco de Avío. Los derechos de los pueblos, a pesar de la simpatía de Juan Álvarez, serían desestimados por Juárez y los hombres de la Reforma, profundamente imbuidos en las virtudes de la propiedad individual.

Las ideas modernas se habían gestado en la España borbónica de las postrimerías del siglo XVIII, contribuyendo a la separación de la Iglesia y la atribución al Estado de los objetivos de un Progreso que empezaba a escribirse con mayúscula. Jovellanos fue la fuente inspiradora de la ideología ilustrada que los liberales recogieron para alimentar su proyecto. Un decreto de las Cortes de Cádiz, del 4 de enero de 1813, sentó un precedente clarísimo para el fraccionamiento y desamortización de bienes comunales de los pueblos que dispondrían más tarde los liberales, en 1856:

Las Cortes Generales y Extraordinarias, considerando: que la reducción de los terrenos comunes a dominio particular, es una de las providencias que más imperiosamente reclaman el bien de los pueblos y el fomento de agricultura e industria [...] decretan:

*I. Todos los terrenos baldíos o realengos, y de propios y arbitrios[...], así en la península[...] como en las provincias de ultramar, excepto los exidos necesarios a los pueblos, se reducirán a propiedad particular[...].*²⁹

Wistano Luis Orozco señaló que *el gran error económico de fraccionar y desamortizar los bienes comunes* se había perpetrado desde ese momento. Aunque el decreto excluyera formalmente a los ejidos, no especificaba la extensión “necesaria a los pueblos” y al abarcar dehesas, propios y arbitrios afectaba el estatuto de todas las tierras que los pueblos disfrutaban en común.

La disputa por la tierra

Hubo partidarios de repartir las tierras. Era injusto, pensaron unos cuantos, que la mayoría de campesinos pobres careciera de un pedazo de suelo para su sustento. Algunos hasta aconsejaban distribuir no sólo tierras de la Iglesia sino de propietarios privados. El padre Vicente María Velázquez fue, en Yucatán, un activo propagandista de la restitución de tierras a los indios, en la tradición de Fray Bartolomé de Las Casas. Dice Jean Meyer que fue Lorenzo de Zavala el más célebre de sus discípulos. Francisco Severo Maldonado, por la misma época, se mostró partidario de poner en circulación bienes de manos muertas y mayorazgos y hasta propuso la fundación de un banco para comprar las tierras y venderlas muy baratas a quienes las demandaran. Tadeo Ortiz no distinguía entre la condición de los indios y la de los negros esclavos: el endeudamiento los esclavizaba y la Independencia no los había redimido. Fernández de Lizardi se preocupó por los *millones de individuos que no tienen un palmo de tierra propia* mientras unos cuantos poseen haciendas *que no se pueden andar en cuatro días*.

Dos gobernadores y un presidente de la República mostraron las mismas inquietudes. Mariano Arizcorreta explicaba invasiones en Tierra Caliente y en Cuernavaca

en 1849, porque *algunos de ellos* (los hacendados) *tienen usurpadas todas o la mayor parte de las tierras de repartimiento*: los hacendados lo obligaron a renunciar. Luis de la Rosa gobernó Zacatecas en el último cuarto del siglo y emprendió una modalidad de reparto agrario, promoviendo la colonización de terrenos de su propiedad e invirtiendo en maquinaria agrícola y para toda clase de oficios, pensando contribuir así a rescatar del hambre a muchas familias.

Fue muy claro don Juan Álvarez cuando respondió a las quejas que presentaba el gobierno español por invasiones de haciendas en el valle de Cuernavaca:

La expropiación y el ultraje es el barómetro que aumenta y jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados; porque ellos lentamente se posesionan, ya de los terrenos de particulares, ya de los ejidos o los de comunidad, cuando existían éstos, y luego con el descaro más inaudito alegan propiedad, sin presentar un título legal de adquisición, motivo bastante para que los pueblos en general clamen justicia, protección, amparo[...].³⁰

En 1853, en cambio, Lucas Alamán acusó a Melchor Ocampo de impulsar “medidas alarmantes [...] contra los dueños de terrenos” y también se lanzó *contra los ayuntamientos electivos y contra todo lo que se llame elección popular, mientras no descansase sobre otras bases*. Para aquel implacable defensor de la gente “de bien” era evidente que la democracia podía favorecer a los más pobres y pensaba, en consecuencia, que valía más evitarla. Santa Anna respondería pronto a los motivos expuestos en aquella clarísima carta, donde Alamán y los conservadores lo requerían para hacerse cargo, una vez más, del gobierno. En 1853 decretará Su Alteza Serenísima que ninguna congregación de familias establecida en terrenos de dominio particular podrá solicitar que “se le reconozca como pueblo” sin el expreso consentimiento del propietario del terreno.³¹

Paradójicamente, el emperador Maximiliano abrirá un breve paréntesis, en 1865 y 1866, en la relegación de los indios que es la tónica del siglo XIX liberal (y conservador). Los indios recibirán como “un soplo primaveral” sus decisiones restitutorias, como consta en testimonio de Francisco Islas, defensor de pueblos, que encabezará en 1869 un levantamiento en el Valle del Mezquital.³² Mientras que Juárez amonesta a Islas, advirtiéndole que “la patria tiene graves problemas por resolver” y que “no es tiempo todavía” de atender tales demandas, el emperador sí los había escuchado.

En 1865 Maximiliano había promulgado una *Ley para dirimir las diferencias sobre tierras y aguas entre pueblos* sustentada en un severo juicio crítico sobre las tendencias de las grandes propiedades a absorber a las pequeñas, incluyendo las mercedadas a los pueblos. En 1866 se formuló la *Ley sobre terrenos de comunidad y de repartimiento*, por la cual el emperador *cede en plena propiedad los terrenos de comunidad y de*

repartimiento a los naturales y vecinos de los pueblos a que pertenecen... A esa ley del mes de junio siguió otra notabilísima, del 16 de septiembre, según la cual

*[...]los pueblos que carezcan de fundo legal y ejido tendrán derecho a obtenerlos[...]; los que pasen de dos mil habitantes, a que se les conceda, además del fundo legal, un espacio de terreno bastante y productivo para ejido y tierras de labor[...].*³³

Para dotar de fundo y ejido a los pueblos que no los tuvieran se acudiría a baldíos y realengos o a la compra, previéndose la venta forzosa y la expropiación. Jesús Sotelo Inclán reconoce que un Habsburgo devolvía a los indios lo que otros Habsburgo, los monarcas españoles de la casa de Austria, les habían instituido. La ley sería traducida a la lengua náhuatl para su más amplia difusión.

Así se había expresado una comisión de indígenas recibida por el emperador:

*[...]nuestra raza, justamente retraída y desconfiada por la dolorosa experiencia de tres siglos y medio en que, duro es decirlo, se nos ha usurpado descarada o fraudulentamente los pedazos de tierra que avino a los monarcas españoles dejarnos, cree que ha llegado el término de sus desdichas, que la Providencia se digna mandar a V.V.M.M. para que cicatricen nuestras heridas; y en esta creencia, señor, de V.M. esperamos el remedio de las vejaciones y despojos de que estamos siendo víctimas y por lo que venimos a quejarnos[...].*³⁴

La reacción de los liberales a esos reclamos queda plasmada en palabras de Ignacio Vallarta cuando, como gobernador de Jalisco, se dispuso a liquidar en 1873 el levantamiento nayarita de Manuel Lozada:

La sociedad civilizada y pacífica ha comenzado a sufrir, en algunas municipalidades del estado, los ataques de las hordas *bárbaras y turbulentas* de la sierra de Alica, haciendo sentir en ellos la ferocidad de sus instintos, la rapacidad de sus costumbres y la realización de sus inicuas tendencias. La enseña de estas hordas vandálicas no es la que entraña un pensamiento político para mejorar la sociedad; es sólo la del incendio, la del exterminio y la de la expropiación de *los terrenos de que en mala hora se han creído dueños perpetuos*, considerando a los demás como unos meros usurpadores[...].³⁵

Que nos devuelvan todo lo que nos han quitado

Antes de 1821 hubo en el territorio colonial protestas indígenas por el despojo de la tierra. Un ciclo de resistencia continua se dio entre 1693 y 1727, entre motines, incidentes menores y movimientos mesiánicos. Uno de los más importantes ocurrió

en Chiapas, en 1712, cuando se alzó la comunidad tzeltal de Cancuc. Lo imaginario prehispánico, entreverado con lo español, configuró un singular milenarismo que identificaba a los indios como “el pueblo de Dios”, depositario de la esperanza de una Nueva Jerusalén que por fin se instauraría en el mundo americano. Antonio García de León la registra como *la gran rebelión* y la única que sacudió al régimen colonial.³⁶ Chiapas formaba parte entonces de la Capitanía General de Guatemala.

Jean Meyer ha dado cuenta de numerosas revueltas agrarias que prendieron entre 1821 y 1910. La grave reclamación de Pedro Patiño Ixtolinque en 1829 advertía que la magna empresa de la Independencia no había traído mudanza alguna a la triste situación de los indios que recibían cada día nuevos desengaños. La invasión norteamericana propició tres sublevaciones en 1848: el Plan de Amatlán; el de Tantoyuca y Chicotepec y el de río Verde. El componente de la tierra estuvo presente, además, en la rebelión de Imán contra el centralismo en el Yucatán de 1838.³⁷

Y fue el combustible para la Guerra de Castas que allí se desató en 1847 y que duró hasta la caída de Santa Anna en 1855. Era el mismo espíritu que había levantado, en 1761, al pueblo de Cisteil contra los blancos que quemaban sus milpas creyendo acaso que

[...] Dios les dio permiso para acabar a todos los indios [...] Así estaba escrito en el libro de Chilam Balam, y así lo había dicho también Jesucristo, nuestro señor en la tierra y en el más allá, que si los blancos se volvían pacíficos los indios se harían pacíficos.³⁸

Después de la Guerra de Castas persistió la organización *cruzob* en Chan Santa Cruz y sus alrededores, en el actual territorio de Quintana Roo, que no pudo ocupar el gobierno federal sino hasta 1901. En torno al culto a la cruz parlante se gestó allí una organización religioso-militar, con antecedentes a la vez prehispánicos y españoles.

La llamada guerra de castas de Chiapas brotó en Tzajaljemel (San Juan Chamula) en 1867 y duró hasta 1870. Una joven india llamada Agustina había encontrado unas piedras, caídas del cielo, que hablaban con voz oracular. La reivindicación agraria estuvo en el centro de aquella rebeldía que reclamó con insistencia: *que nos devuelvan todas las tierras que nos han quitado* y que no excluyó el ajusticiamiento de varios finqueros. Fue un intento de recuperar un tiempo anterior al de la acumulación monetaria y se estableció un mercado donde sólo se practicaba el trueque. García de León lo interpreta como

Una forma campesina de resistencia económica[...] y quizás la más elaborada en este aspecto de toda la historia de México, contra la expoliación mercantil de los ladinos, “poseedores de dinero” en ese centro rector de la producción indígena regional: el mercado de San Cristóbal de las Casas, que aparece todavía en la narrativa tzeltal-tzotzil de nuestros días como el centro de una telaraña a la que nadie puede escapar[...].³⁹

Tener “luces” o gastar en cirios para los santos

Hay una continuidad entre Lorenzo de Zavala, Mora, Gómez Fartas, Juárez, Ocampo, Porfirio Díaz, Justo Sierra, Limantour, Carranza, Calles, Bassols, Lombardo Toledano, etc., etc. Esa continuidad es el “progresismo”, la tentativa por “modernizar” a México. Todos esos proyectos tienen en común el querer borrar, por decirlo así, la mancha, el pecado original de México: el haber nacido frente y contra el mundo moderno.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

La ignorancia impedía, según los liberales, que cundiera el espíritu de empresa tan florecido en el próspero vecino del Norte. Habría que introducir agricultores extranjeros para enseñar a los “incultos” campesinos autóctonos: para modernizarlos, en una palabra. Guillermo Prieto los imaginaba cavilando, en medio de tanta miseria espiritual, sobre su miseria material:

Las cosechas del blanco son abundantes: nosotros no tenemos cosechas. Las vacas y los carneros del blanco engordan: las vacas y los carneros del indio se mueren de flacos. ¿Por qué en los campos del blanco está la cosecha y en los nuestros la miseria? El blanco está contento: nosotros lloramos. ¿Por qué el blanco está contento y nosotros lloramos?⁴⁰

Las ciudades los volvían más miserables. El trabajo rendía muy poco y sólo les quedaba salir a vender trastes de barro, sus hierbas, sus flores o sus tejidos. Antonio García Cubas describía sus jacales:

[...]habitaciones muy inferiores, ciertamente, a las que tienen nuestros magnates para sus caballos y para sus perros[...] todas las calamidades posibles pesan sobre el hombre y mujer desde la infancia hasta la tumba, esto es lo que se halla en todas y cada una de esas pocilgas de cinco varas de largo por cuatro de ancho, donde nacen y mueren las gentes de nuestro pueblo[...].⁴¹

Fue la intención liberal aniquilar lastres prehispánicos para mejor redimir a los indios: salvarlos de su cultura y de sus tradiciones era salvar a México. Cualquier expediente era bueno: traer europeos para propiciar el mestizaje o “civilizarlos” en la milicia. Lo importante era superar la tutela novohispana y tratarlos con igualdad jurídica: eran pobres porque no se cumplía en las tierras comunales la figura jurídica de la propiedad individual. Dicha propiedad comunal era, en suma, “como si no

fuera propiedad". Habrá, pues, que desamortizar tierras comunales y volver a los indios propietarios de sus parcelas: la Ley Lerdo se promulgó en 1856. Pero la oposición de los indios a las Leyes de Desamortización, que ordenaban dividir las tierras comunales, fue unánime y generalizada. Los intentos de desamortizar ya habían empezado, de hecho, en la segunda década del siglo en Jalisco, Veracruz, Zacatecas y el Estado de México. La Ley Lerdo, que culminaba ese largo proceso, obligaba a los habitantes de los pueblos a dividir las tierras en parcelas individuales. Lo que había ocurrido antes siguió ocurriendo. Como se resistían, se obligaba a subastar las tierras una vez vencido el plazo y las comunidades, de todos modos, quedaban destruidas. Los pueblos se sintieron más vulnerables que nunca frente al poder de las haciendas y el descontento estalló en Puebla, en Michoacán, en Querétaro, en Veracruz.

Ponciano Arriaga, en su *Voto particular* sobre el Artículo 27, fue al grano:

Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos, que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, ni trabajo[...].

Arriaga advertía, en su *Voto particular*, que *La Constitución debiera ser la ley de la tierra; pero no se constituye ni se examina el estado de la tierra*. Sabía que no bastaban "las mágicas palabras de una ley escrita" para convertir a los campesinos pobres y destituidos en "ciudadanos libres". Señaló la distancia entre el país legal y el país real y declaró que, para ser coherentes, habría que excluir de la ciudadanía a los cuatro millones de pobres y garantizarles derechos ciudadanos sólo a quienes, en los hechos, los ejercían: la élite económica y la élite intelectual. ¿Cuándo entraría en la vida política "el fecundo elemento de la igualdad democrática"? ¿Cuándo recaería la autoridad, de veras, en la única y legítima soberanía popular? Constituciones iban y venían y *nada de positivo para el pueblo, nada de provecho para esas clases infelices [...] para las cuales se hicieron, en suma, todos los males de la sociedad y ninguno de sus bienes*.⁴² La Constitución de 1857 refrendó las disposiciones de la Ley de Desamortización y lo mismo hicieron las Leyes de Reforma en 1859.

De acuerdo con Francisco Pimentel, gran propietario liberal y autor de una *Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza india de México* (1866), no bastaba con repartir tierras comunales. El gobierno tendría que adquirir baldíos que los propietarios venderían "por cualquier cosa" para vendérselos a su vez a los indios, "de modo que verdaderamente ganen su propiedad con el sudor de su rostro". El usufructo comunal no había hecho más que privarlos de "todo sentimiento de individualismo y de empresa personal".⁴³

Y, en verdad, el propósito de los liberales no era despojar a los indios sino incorporarlos al Progreso. Darles “luces” y “propiedad”, aunque fuera de una pequeñísima parcela, bastaría para elevar a los mexicanos pobres al nivel de ciudadanos de una nación industrializada. La oposición pertinaz de los indios demostró el arraigo de aquella forma de tenencia que venía de los tiempos prehispánicos y que, con la memoria obstinada de la tradición oral, era lo único que les quedaba de un orden autosuficiente, donde la fertilidad de la tierra era la garantía visible del orden cósmico. En la práctica, la desamortización sirvió para legalizar los despojos:

Multitud de terrenos que se llamaban de comunidad y que cultivaban los indios por su cuenta, han pasado a manos de denunciante, quedándose aquellos, de la noche a la mañana, sin un palmo de tierra en que poner un pie, y expuestos a las arbitrariedades de los nuevos dueños[...] los antiguos comuneros, que no han podido comprender todavía lo que les pasa, emprenden largos viajes a las ciudades para hacer oír sus quejas y allí son estafados[...].⁴⁴

La denuncia del diario *El Constitucional* capta, en octubre de 1867, el desconcierto de “no comprender todavía lo que les pasa”: la sensación de ser manipulados desde una instancia lejana e incomprensible que es una de las constantes de toda marginación.

El orden colonial se había superpuesto al prehispánico sin violentar radicalmente ciertos núcleos esenciales. La ideología modernizadora de la pequeña élite liberal daba la espalda, radicalmente, al manantial subterráneo de cultura que seguía siendo, en definitiva, el sustrato de la nación. En 1868, Ignacio Ramírez pedirá que se suspenda la división de fondos porque *sobre los bienes comunales la usurpación ha ostentado la variedad de sus recursos*.⁴⁵

La brecha entre un México forjado como proyecto ideológico en la fantasía de una reducida élite y un México profundo, cargado de memoria y de agravios, era vastísima. Entre ambos extremos se alzaban los intereses de los que proclamaban confianza en el Progreso para mejor acumular una riqueza que seguía mucho más asociada a la posesión de tierras que a la creación de industrias.

Los conservadores soñaron a ratos, contagiados por Alamán, con un modelo de industrialización protegida por el Estado que tardaría más de un siglo en llevarse a la práctica. Los liberales repudiaron la “adoración fanática” de los indios por sus tierras comunales y quisieron “hacer de cada indio un propietario”, aunque la desamortización los dejó todavía más desposeídos. Si no se atrevieron a favorecer abiertamente el abandono del sentimiento religioso Juárez y Justo Sierra habrían querido verlos, eso sí, iluminados por el protestantismo antes que católicos, gastando sus ahorros “en cirios para los santos”.⁴⁶

Un pueblo de parias

Para 1878 se calculaba la población, todavía escasa, en menos de 10 millones. Un 38% hablaba sólo lenguas indígenas y estaba al margen de la cultura moderna. Más de 7 millones constituían el México rural en la República Restaurada. La tierra se cultivaba como en tiempos prehispánicos. La distancia entre campo y ciudad era gigantesca: en el campo, donde habitaba la mayoría, se ganaba muy poco y la gente permanecía atada al suelo por la tradición y por las deudas. En la ciudad había apenas 2.5 millones dedicados al comercio, la industria, la administración, la educación y la cultura. Un 80% de los mexicanos habitaban en chozas escuetas, semidesnudos y mal alimentados. Luis González y González lo describe así: *En medio de un Edén, sobre un subsuelo dorado, bajo un cielo luminoso y en una verde superficie, mora un pueblo de parias.*⁴⁷

Por esa época había cada vez más peones y cada vez menos agricultores con tierra o arrendatarios. La retención de gañanes en las fincas, atrapados por las deudas, se remontaba a los siglos XVI y XVII. En 1810 había 4 944 haciendas. En 1854 eran ya seis mil.⁴⁸

La “horrible miseria de la clase pobre” se debía mucho más a la servidumbre que a la “fanática” afición a las tierras comunales. El salario de uno a tres reales diarios apenas ajustaba para una dieta de arroz y frijol, tortillas con chile y atole de maíz. La deuda podía llegar a los 200 o 300 pesos: toda una vida no alcanzaba para pagarlos. El discurso liberal que proponía redimir a los indios del peonaje y de los castigos corporales, incompatibles con los principios de libertad, nunca pasó de los buenos deseos.

La salud era muy precaria: tuberculosis, enfermedades intestinales, paludismo, epidemias de viruela o de fiebre amarilla los diezaban. La mendicidad proliferó en la ciudad de México. Los llamados “léperos” sumaban la cuarta parte de la población: desocupados, mendigos, cargadores, pepenadores, vendedores ambulantes asediaban a los peatones. La idea de un hospicio para pobres asaltó un día al presidente Lerdo, en la calle de San Francisco, cuando él mismo se vio acosado por un enjambre de menesterosos. El Nacional Monte de Piedad registraba, en 1873, 27 mil empeñadores en sólo 30 días. Los periódicos advertían que *la miseria está tomando proporciones colosales.*

Los obrajes coloniales, transformados en incipiente industria, absorbían a una pequeña parte de la población, incluyendo a muchísimos artesanos desplazados. Aunque en la capital había siete telares, molinos de harina y de aceite, fábricas de jabón, de cirios y de cigarros, la minería seguía siendo la industria principal. La condición de los obreros era precaria y no había pensión para los mineros que, tras diez años de trabajo, quedaban deteriorados y apenas con fuerzas para pedir limosna. En las fábricas citadinas se trabajaban jornadas de quince horas, incluyendo

domingos, por tres a cuatro reales al día, con descuentos por servicios médicos y escolares a veces inexistentes. Los artesanos, sin la protección de que habían gozado sus gremios en tiempos coloniales, se habían proletariado y sólo podían pagarse cuartuchos de vecindades. Empezaban a surgir cooperativas de producción y de consumo, para combatir la miseria y la usura, y fue entre los artesanos que brotaron las primeras protestas.

Tal era el panorama durante el régimen porfiriano. Los indios eran “el lastre” de la sociedad mexicana. ¿Cómo progresar si la población natural “era insensible al aguijón del lucro” y le bastaba satisfacer las necesidades básicas? Muy pocos se preguntaban por qué no alcanzaba siquiera a satisfacerlas. Para asegurarse el apoyo de los indios al Plan de Tuxtepec, el general Porfirio Díaz fue prometiendo por todas partes, como lo hizo en Tecuac: “En la lucha que desde tiempo inmemorial sostienen los pueblos con las haciendas yo estaré con los pueblos”.⁴⁹ Así levantó gente contra Juárez y Lerdo, con promesas de *apeo* y *deslinde* de tierras que luego olvidó el presidente Díaz para deslindar, sí, pero sólo en beneficio de los hacendados.

En 1910, el 50% de las viviendas eran jacales.⁵⁰ La miseria citadina era todavía más sórdida: algunas vecindades alojaban de 600 a 800 personas y unos 100 mil desvalidos dormían en la calle. Una familia de clase media ganaba entre 80 y 100 pesos, pero una casa muy modesta podía rentar hasta 120. La insalubridad, según las crónicas, era pavorosa, por lo que fueron muy elogiados el canal de desagüe y las obras de saneamiento.

El país seguía siendo esencialmente campesino. La nueva ley de deslinde de terrenos baldíos propició que en nueve años se denunciaran 38 millones de hectáreas⁵¹ con el propósito supuesto de “poblar el país” con agricultores inmigrantes. Los litigios por despojos, entre pueblos y haciendas, se multiplicaron: seguían creciendo las haciendas a medida que se iban enjutando los pueblos. Fue así como denunció el hacendado de Cuahuixtla los “huecos y demasías” del vecino pueblo de Anenecuilco, en 1885. Zapata tenía seis años.⁵²

Las familias de ese pueblo se transmitían un único legado: la obligación de recuperar tierras y aguas usurpadas. Emiliano creció en una atmósfera cargada por muchísimos agravios y por el acoso del hacendado de Cuahuixtla, que destruyó los barrios Oriente y Poniente del pueblo. A los nueve años, el niño fue testigo de la destrucción de huertas y casas del barrio de Olaque y prometió lograr algún día la devolución de cuanto les había sido arrebatado. La semilla de la reivindicación agraria estaba sembrada.

Era rígida la pirámide humana del porfiriato. José Iturriaga la pondera, con datos aproximados, según el censo de 1895: un 77% de población rural y un 14% de población popular urbana; un 8% de clase media y un 1.44% de clase alta. Al terminar el porfiriato, según Bulnes, el 70% de la clase media era de burócratas que ganaban 100 pesos mensuales. Como contraste, las casas acomodadas podían lle-

gar a emplear entre 10 y 35 sirvientes. Años luz mediaban entre una casa de la colonia Juárez y un jacal con piso de tierra. Sólo el 10% de la población usaba zapatos y pantalón: se habló de “empantalonar” a los calzonudos para, entre otras cosas, evitar que “gastaran tanto” en el pulque. La dieta de los más pobres sólo incluía tortilla con sal y esquites pero la mayoría alcanzaba frijol y chile, con añadidura de quelites, nopales o tunas. Una persona podía aspirar, en el Estado de México, a medio kilo de maíz y 60 gramos de frijol. Aunque el pueblo era vegetariano por necesidad, como advierte Moisés González Navarro, no faltaban quienes recomendaran a los pobres, con la mejor de las buenas intenciones, comer más carne y menos tortilla.⁵³

Con los ferrocarriles, Porfirio Díaz ponía las bases para la modernización capitalista. La inversión extranjera se orientó hacia la minería, las vías férreas y los bancos y un poco hacia la industria pero se concentró en la exportación de productos primarios, agrícolas y mineros. Sólo el porfiriato logró en todo el siglo tasas altas de crecimiento: la media anual entre 1877 y 1910 fue del 2.3%, muy elevada para la época, con un aumento del PIB *per cápita* de un 33%. Pero ese crecimiento acelerado no se reflejó positivamente en la desigual distribución del ingreso sino que la acentuó. En cuanto a la brecha con la economía de los Estados Unidos, la proporción se había disparado: si en 1800 México producía la mitad, esa proporción había descendido al 3% en 1877, bajando al 2% en 1895, para permanecer estacionaria hasta 1910. La distancia demográfica era para entonces muy grande: los Estados Unidos contaban ya con 92 millones de habitantes y México no pasaba de 15.⁵⁴ Entre 1880 y 1910, el comercio con Estados Unidos fue creciendo hasta desplazar al intercambio con Inglaterra: en 1910 cubría un 76% de las exportaciones y un 55% de las importaciones.⁵⁵

La usurpación de tierras comunales se precipitó con la colocación de 24 mil kilómetros de vías férreas: cada paso en la modernización significaba nuevos despojos para los pobres. El modelo de desarrollo *para* la exportación no “goteaba” para las mayorías. Liberales como Wistano Luis Orozco proponían, en 1895, “traer negocios y dinero al país”. La política de Díaz creó, en efecto, condiciones favorables para la inversión extranjera y estimuló exportaciones: el comercio internacional, que sólo alcanzaba 51 millones de dólares en 1873, pasó a 499 en 1910 y las exportaciones excedían en 87 millones a las importaciones. La dinámica de la economía se centró en esas exportaciones, que aumentaron un 864% en los treinta años de porfiriato. Ya no se exportaba sólo plata sino cobre, plomo, antimonio, zinc, petróleo y carbón. Entre los productos agrícolas, henequén y tabaco, café y vainilla. Mientras crecía la producción de esas materias primas a un ritmo de 6.45% anual, la producción para el consumo interno se estancó, descendiendo la de maíz a una tasa anual de 0.84%. El hambre crecía tanto como las exportaciones: los pobres no consumían prácticamente nada, de modo que el mercado interno era reducidísimo. La incipiente industria no tenía a quién venderle.⁵⁶

El costo de la vida subió, como secuela de la industrialización, pero los salarios permanecieron estacionarios. Según Tannenbaum apenas se movieron entre 1794 y 1891 pero, mientras las comunidades no dependieron tanto de la compra de bienes básicos, eso afectó poco a la mayoría campesina. Cuando los ferrocarriles rompieron el aislamiento, expandieron por un lado el dinamismo de las ciudades y ampliaron el número de trabajadores con necesidad de adquirir ciertos productos. Pero hubo un alza general de precios y de alimentos básicos, que repercutió en campesinos cada vez más desvinculados de la vida comunal y orillados a trabajar en las haciendas y a comprar en sus tiendas de raya, que solían vender a precios arbitrarios. El poder de compra de un peón se desplomó en un 30% entre 1876 y 1910.⁵⁷

Algunos pensaban que México era, en 1910, “el ejemplo más hermoso y brillante de la solidez de la América Hispánica”. Pero no bastaba el peculiar “feudalismo industrial” o “industrialismo de invernadero” para curar al país de sus grandes males.⁵⁸ Por debajo de la modernización imitativa de los “científicos” y de una Constitución calcada de los Estados Unidos estaba el país real: la cultura indígena y el mestizaje y un sistema de tenencia de la tierra híbrido entre instituciones medievales españolas y tradición prehispánica. Todo eso emergería del subsuelo en 1910.

¿Qué hacemos con los pobres?

En 1875 Ignacio Ramírez, procurando conservar la atildada compostura liberal y no ceder a un “sentimentalismo aparatoso”, se había formulado la pregunta que la nación venía escamoteando por cerca de cuatrocientos años: *¿Qué hacemos con los pobres?*⁵⁹ Era muy evidente que había *hambre y sed de justicia*. Era evidente que la delincuencia germinalaba en la miseria. Pero ¿cómo escapar a la abyección de *ser siempre pobres*? El Nigromante confiaba en las virtudes del libre cambio para favorecer a los desvalidos pero reconocía, a la vez, que *la economía política no es un sánalo todo*: sugería entonces la educación para salir del callejón de la miseria. Pero la educación que concebían los liberales para transformar a la sociedad, como luego la concebirían los positivistas “científicos” de don Porfirio, era precisamente la transmisión de los valores vinculados a su noción del Progreso. Como advierte François Xavier Guerra: *El error no es [para ellos] la ausencia de cultura, es precisamente la posesión de una cultura que no es la de la Ilustración.*^(d)

Cuando, en 1973, Jean Meyer inicia lo que ahora se llama el revisionismo de la interpretación histórica de la Revolución Mexicana, apunta una hipótesis que va a hacer eco:

Esta revolución que la posteridad presenta como un movimiento único y singular[...] no es más que el resultado de movimientos muy anteriores y exteriores. *Es la meta de un proceso comenzado bajo los Borbones, en la segunda mitad del siglo XVIII, reanudado un siglo más tarde y acelerado por el porfiriato [...].*⁶¹

En 1985 recogerá esa hipótesis François Xavier Guerra, en una obra que se propone demostrar la continuidad entre el *antiguo régimen* y la Revolución, señalando el parentesco entre el modelo modernizador de los “ganadores” en el proceso revolucionario y el modelo liberal juarista, heredado por el porfiriato.

Vale rescatar de esa obra algo que resulta muy pertinente: el señalamiento de una grave y determinante escisión. Por un lado queda la realidad profunda y compleja de una sociedad tradicional, donde prevalecen los pueblos y comunidades campesinas que aspiran a gobernarse con autosuficiencia y autonomía. Por el otro un Estado dirigido por los valores “ilustrados”, “liberales” o “científicos” de una élite modernizante y centralizadora. La pugna entre el país mayoritario, que pretende conservar algo que viene de muy atrás, y la élite que se propone encaminarlo hacia el Progreso, inculcándole los valores de una ética de los beneficios y la productividad, se escenificará en épica secuela en las décadas que siguen al año de 1910. Lo más dramático es que, casi un siglo después, el modelo modernizador todavía no consigue responder a la pregunta de El Nigromante. ¿Qué hacemos con los pobres?

Notas

¹ Enrique Hernández Laos, *Crecimiento económico y pobreza en México*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades/Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, pp. 11-12. *El combate a la pobreza*, Documento programático de Pronasol. México: *El Nacional*, 1990, pp. 34 y 54-55. Héctor Aguilar Camín, *Después del milagro*. México: Cal y Arena, 1988, pp. 221 ss.

² R. Strahm y U. Oswald, *Por esto somos tan pobres*. Cuernavaca, Morelos: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, pp. 31 y 33. J. Boltvinik, “Satisfacción desigual de necesidades esenciales...”, en *La desigualdad en México* (coord. Rolando Cordera y Carlos Tello). México: Siglo XXI Editores, 1984, p. 37; Nora Lustig, “La desigual distribución del ingreso y de la riqueza”, en *La desigualdad en México, op. cit.*, pp. 281-282, 290.

³ Boltvinik, J., *op. cit.*, p. 19.

⁴ Boltvinik coordinó el equipo de investigación de Coplamar, cuyos resultados finales se reunieron en los cinco volúmenes sobre *Necesidades esenciales en México: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginación*. México: Siglo XXI Editores, 1992. Los datos que aquí se citan aparecieron en *La desigualdad en México, op. cit.*, pp. 40 y 43.

⁵ *El combate a la pobreza, op. cit.*, pp. 37-38. *Estado mundial de la infancia*. Barcelona: UNICEF, 1991, pp. 118-119. Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica y Jamaica entran, con índices más bajos, en la misma franja. El récord de alta mortalidad infantil se lo lleva Bolivia (con 165) y le siguen Haití (con 133), Perú (con 119), Honduras (con 103), Nicaragua (con 92) y El Salvador (con 90). Si se toma como punto

de referencia a los Estados Unidos, donde mueren 12 de cada mil, sólo se le acerca Cuba, con 14, y Trinidad y Tobago, con 18.

- ⁶ *Estado mundial de la infancia*, op. cit., p. 109. *El combate a la pobreza*, op. cit., pp. 46-54.
- ⁷ Octavio Paz, *El ogro filantrópico*. México: Joaquín Mortiz, 1979, p. 35.
- ⁸ Jacques Soustelle, *La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la Conquista*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 96. La frase es de Juan Bautista Pomar en *Relación de Texcoco* (1582).
- ⁹ Miguel León Portilla, *Toltecáyotl, aspectos de la cultura náhuatl*. México: Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 289. Véase Pedro Carrasco, "La economía prehispánica de México", en *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1580-1975)* (coord. E. Florescano). México: Fondo de Cultura Económica, 1979, pp. 15-50.
- ¹⁰ Jacques Soustelle, op. cit., p. 93. Pedro Carrasco, op. cit., p. 47.
- ¹¹ Miguel León Portilla, op. cit., p. 32.
- ¹² Johanna Broda, "Las comunidades indígenas y las formas de extracción del excedente: época prehispánica y colonial", en *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1580-1975)*, op. cit., p. 76. La fuente de Broda es el Archivo General de la Nación, Ramo de Tierras, Vol. 1154, Exp. 2.
- ¹³ David A. Brading, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*. México: Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 22.
- ¹⁴ John H. Coatsworth, "Características generales de la economía mexicana en el siglo XIX", en *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1580-1975)*, op. cit., p. 175.
- ¹⁵ Paz, O., op. cit., pp. 32 y 33.
- ¹⁶ David A. Brading, "El mercantilismo ibérico y el crecimiento económico en la América Latina del siglo XVIII", en *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1580-1975)*, op. cit., pp. 296-297.
- ¹⁷ Alejandro de Humboldt, *Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España*. México: Porrúa, 1966, pp. 70-71.
- ¹⁸ Jesús Sotelo Inclán, *Ratz y razón de Zapata*. México: Editorial Comisión Federal de Electricidad, 1970, p. 196. La 1ª edición apareció en 1943-1944. Jean Meyer, *Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910)*. México: SEP-Setentas, 1973, p. 116.
- ¹⁹ Coatsworth, J., op. cit., p. 172.
- ²⁰ Ernesto Lemoine, *Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 175, 371 y 373.
- ²¹ Enrique González Pedrero, *País de un solo hombre: el México de Santa Anna*, vol. I. *La ronda de los contrarios*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. XXX.
- ²² González Pedrero, E. op. cit., p. XXXVII.
- ²³ Paz, O., op. cit., p. 57.
- ²⁴ *Manifiesto del Congreso Constituyente a los habitantes de la nación*. Citado por González Pedrero, E., op. cit., pp. 301-302.

- ²⁵ Edmundo O'Gorman, *México: el trauma de su historia*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1977, pp. 19 ss.
- ²⁶ José María Luis Mora, *México y sus revoluciones*, tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 511. La opinión sobre excesos de la insurgencia, en vol. 3, p. 6. La 1ª edición apareció en París: Librería de la Rosa, 1836.
- ²⁷ Sotelo Inclán, J., *op. cit.*, Raymond Estep, *Lorenzo de Zavala, profeta del liberalismo mexicano*. México: Librería de Manuel Porrúa, 1952, p. 140.
- ²⁸ José María Luis Mora, *op. cit.*, vol. I, pp. 509-510.
- ²⁹ Wistano Luis Orozco, *Los ejidos de los pueblos*. México: Ediciones El Caballito, 1975, pp. 175-176. La 1ª edición apareció en Guadalajara en 1914.
- ³⁰ Juan Álvarez, *Manifiesto a los pueblos cultos de Europa y de América*. Transcrito parcialmente por Jean Meyer, *op. cit.*, p. 60.
- ³¹ Sotelo Inclán, J., *op. cit.*, pp. 273 y 274.
- ³² Gastón García Cantú, *El pensamiento de la reacción mexicana*. México: Empresas Editoriales, 1965. Citado por J. Sotelo Inclán, *op. cit.*, p. 332.
- ³³ Sotelo Inclán, J., *op. cit.*, p. 326. Allí se transcribe el texto completo de la Ley y se comentan ampliamente las disposiciones de Maximiliano.
- ³⁴ Meyer, J., *op. cit.*, p. 102.
- ³⁵ *Ibid.*, p. 115.
- ³⁶ Antonio García de León, *Resistencia y utopía*, tomo I. México: Ediciones Era, 1985, p. 79.
- ³⁷ Meyer, J., *op. cit.*, pp. 61-67.
- ³⁸ Nelson Reed, *La guerra de castas de Yucatán*. México: Ediciones Era, 1964, pp. 56-57.
- ³⁹ García de León, A., *op. cit.*, pp. 90-91.
- ⁴⁰ Citado por Luis González y González, "La vida social", en *La República restaurada, Historia Moderna de México* (coord. Daniel Cosío Villegas). México: Ed. Hermes, 1970, p. 250. La 1ª edición de esta obra apareció en 1956.
- ⁴¹ Citado por González, L., *op. cit.*, p. 255.
- ⁴² Ponciano Arriaga, "Voto particular sobre el derecho de propiedad" en la Sesión del Congreso Constituyente de 23 de junio de 1856. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. IV, núm. 2, abril-junio de 1952, pp. 173-174.
- ⁴³ Citado por González, L., *op. cit.*, pp. 316-317.
- ⁴⁴ *Ibid.*, p. 317.
- ⁴⁵ *Ibid.*, p. 318.
- ⁴⁶ *Ibid.*, p. 324.
- ⁴⁷ *Ibid.*, pp. 111, 126.
- ⁴⁸ *Ibid.*, p. 334.
- ⁴⁹ Sotelo Inclán, J., *op. cit.*, p. 372.
- ⁵⁰ Moisés González Navarro, "La vida social", en *El Porfiriato, Historia Moderna de México*, *op. cit.*, pp. 50 y 85.
- ⁵¹ *Ibid.*, p. 188.

⁵² Sotelo Inclán, J., *op. cit.*, pp. 243 y 426.

⁵³ González Navarro, M., *op. cit.*, pp. 387-388 y 392.

⁵⁴ Coatsworth, J., *op. cit.*, p. 172.

⁵⁵ José Ayala y José Blanco, "El nuevo Estado y la expansión de las manufacturas, México, 1877-1930", en *Desarrollo y crisis de la economía mexicana* (coord. Rolando Cordera). México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 19.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 15, 17 y 19. Los datos de vías férreas y comercio internacional son de Frank Tannenbaum, *La revolución agraria mexicana*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. IV, núm. 2, abril-junio de 1952, p. 55. La edición original apareció en Nueva York, en 1929.

⁵⁷ Tannenbaum, F., *op. cit.*, pp. 55 ss.

⁵⁸ H.I. Priestley, *The Mexican Nation*, 1923, p. 393, y Roa y Covarrubias, *El problema rural de México*, 1917, p. 86. Citados por F. Tannenbaum, *op. cit.*, pp. 55-56.

⁵⁹ Ignacio Ramírez, "Cartas al señor Olaguibel", en *Obras*, tomo II. México: Tipografía de la Secretaría de Fomento, Calle de San Andrés número 15, 1889, pp. 99-102.

La interrogación se formula en la segunda carta a Olaguibel y Arista, del 25 de octubre de 1875. La carta contiene una reflexión sobre las ventajas del libre cambio y las desventajas del proteccionismo y sobre la competencia, "lid en que unos productores salen vencedores y otros vencidos". Según Ramírez, no había que sacrificar por el interés de "los simples operarios", es decir, por la preservación de empleos, "el porvenir, las leyes sociales y hasta la existencia de su patria". Sugiere Ramírez: "...para socorrer a la indigencia se inventan mil medios, todos buenos con tal que no ataquen el principio de no intervención de la autoridad en la producción y en el consumo".

Los argumentos del Nigromante tienden a restarle razones a las respuestas que, según él, levantaban "como baluarte" los partidarios del proteccionismo ante la pregunta: "¿Qué hacemos con los pobres?", esa cuestión "difícil pero puramente humanitaria". La pobreza podía compararse con una enfermedad incurable: poco podía hacerse por los que quedaban "fuera de las leyes del libre cambio". Lo poco que podía hacerse había que esperarlo de la igualdad de derechos decretada por la democracia y de la apertura "del mercado de todas las naciones en favor principalmente de los desvalidos".

La conclusión era terminante: "Deploro como usted la suerte de los desgraciados, pero creo insensato sacrificarles las instituciones sociales". Poco podía esperarse, aseguraba El Nigromante, de una revolución: si la hacían los pobres, "al día siguiente sólo habrá un cambio de ricos".

⁽⁴⁾ François Xavier Guerra, *México: del Antiguo Régimen a la Revolución*, vol. I. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 396. La versión francesa es de 1985.

⁽⁴⁾ Jean Meyer, *La revolución mejicana 1910-1940*. Barcelona: Dopesa, 1973, p. 267. La versión francesa apareció ese mismo año.

III. Una revolución parricida

Muy pocos intelectuales han hecho la crítica de la modernización. La crítica la han hecho el tradicionalismo del pueblo mexicano, algunos poetas (López Velarde: patria, sé fiel a tu espejo diario) y a veces, como en la época de Zapata, el pueblo pobre en armas.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

Un juego donde se jugó el destino

Un acercamiento con lupa al abigarrado escenario móvil de los primeros diez años de revolución y a la década de los veinte es indispensable para discernir con alguna claridad todo lo que ocurrió después. La bibliografía es muy prolífica. A partir de los años setenta se ha ido concentrando la visión, amplificando segmentos, como podría hacerse con una fotografía procurando enriquecer, a partir de esa mirada puesta en los detalles, las visiones que habían sido demasiado panorámicas. Sólo así se han podido develar las texturas de las muy diversas lavas que derramó la erupción de un volcán con bocas múltiples. Según hacia dónde se dirija la lupa, la ampliación revela otro universo complejo, con su lógica propia, lo que dificulta una definición generalizadora de lo que habría sido “la Revolución Mexicana”. Así se van empalmando las versiones de Womack, de Jean Meyer, de Aguilar Camín, de Friedrich Katz, de Alan Knight o de Hans Werner Tobler, de David Brading o de François Xavier Guerra. Los límites de esta exploración exigen identificar sólo algunos de

los hilos más significativos, cuya detección permita seguir buscándole la pista al hilo de la pobreza.

Varias interrogaciones se desprenden de las diversas interpretaciones recientes. ¿Significó la Revolución una ruptura drástica o la continuidad de ciertos rasgos implícitos en los aspectos progresistas y modernizadores del pasado liberal y del reciente pasado porfirista? ¿Perpetuó otros rasgos, no tan modernos, como el carácter autoritario y predemocrático del sistema político? ¿Habría sido necesario que todo cambiara, como sugirió sagazmente en el Palermo de 1860 el Príncipe Salina, para que todo pudiera seguir igual? A los especialistas les corresponde seguir ahondando, como propuso Hans Werner Tobler, en las polarizaciones que la Revolución escenificó, no sólo de grupos sociales sino de culturas: la del campo y la de la ciudad, las de las regiones. En esencia, la que ha separado al México “profundo”, que ahora se da en llamar *arcaico*, del México a flor de piel, que desde hace siglo y medio pretende prevalecer, sin tomar en cuenta al otro, por el solo privilegio que le confiere su “modernidad”.

Entre 1910 y 1940 se jugaron en el tablero tumultuoso del movimiento armado y luego en el apaciguamiento institucional, todos los tiempos y todas las variables posibles. La heterogeneidad se puso en juego y los jugadores entraron en acción, desplegando sus respectivos recursos para buscar o rehuir el jaque mate. ¿Podría afirmarse que lo que habría de ocurrir y lo que no habría de ocurrir en las décadas posteriores quedó sellado? Acaso se correría el riesgo de resbalar hacia un fatalismo esquemático afirmando que la suerte estuvo echada a partir del asesinato de Zapata en 1919. No son tan mecánicos los resortes de la historia, que se permite dar las más inesperadas sorpresas, como ha quedado en evidencia en los acontecimientos que conmovieron al mundo en este imprevisible final de milenio.

No todo se consumó. Muchos jugadores conservaron la vida, algunos en cuerpo y otros sólo en alma. Las sucesiones presidenciales siguieron montando nuevas puestas en escena del drama original. Intervinieron elementos inéditos, como las características personales del presidente en turno, la coyuntura de fuerzas internas y las circunstancias internacionales. Pero quizá valdría la pena reconocer que, pasado el año de 1940, se aprecian constantes que remiten al desigual juego de fuerzas que se midieron en duelo entre 1910 y 1919: a los intereses y demandas que se dirimieron y a quiénes resultaron triunfadores. Hay un hilo en la trama que puede rastrearse sin dificultad: la opción por un proyecto modernizador con acento, a partir de 1940, en el crecimiento industrial; el papel preponderante que asumiría el Estado en ese proyecto y las proporciones en que se incorporó, se absorbió, se controló o se marginó a grandes mayorías populares en el transcurso de su puesta en práctica.

El episodio cardenista fue el reconocimiento de la persistencia de un México silenciado y excluido de hecho por cuatrocientos años: los campesinos. La monarquía española había avalado, en derecho, esa presencia, pero los intereses concre-

tos habían incumplido sus disposiciones jurídicas. El reconocimiento que hace Cárdenas del México relegado tiene, pues, antecedentes pero no la dimensión con que lo hizo ni la diafanidad y coherencia que tuvo su respuesta a una demanda que durante la Revolución se volvió harto explícita.

Para entender la etapa de Cárdenas y la que siguió hay que explorar, necesariamente, el remolino donde se gestaron. La insurrección campesina incrustó en la Revolución un agravio de siglos, colmado con múltiples agravios recientes. Los ejércitos del Centro y del Sur se nutrieron de campesinos empobrecidos, largamente despojados de sus tierras comunales, mientras que en el Norte se dio una heterogénea coalición de fuerzas sociales integrada por colonos, peones de hacienda, mineros desocupados, ferrocarrileros, pastores y hasta gente de clase media que confluyó en el raudal de un inmenso torrente popular.

Los muchos Méxicos

En 1910, el 95% de los pueblos indios de la Meseta Central no poseían ya ninguna tierra comunal y habían sido absorbidos por las haciendas. Cerca del 90% de las familias campesinas no poseían tierra alguna. La erosión propiciada por el ímpetu modernizador había sido espectacular, sobre todo desde 1876. Si en el momento de la Independencia los pueblos todavía conservaban el 40% de las tierras cultivables, al iniciarse la Revolución apenas les quedaba el 5%:

De las 69 549 comunidades rurales que había en México en 1910, el 81.7% de ellas —es decir, 56 825— estaba situado dentro de las grandes haciendas.¹

Las condiciones variaban mucho entre el Norte, el Centro y el Sur. La producción para exportar se cosechaba sobre todo en el Sur y el Sureste —Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán— donde se trabajaba en una servidumbre muy parecida a la esclavitud. El caucho y el café, el cacao, el tabaco y el henequén venían del trópico, como las maderas preciosas. Cuando no bastaban los campesinos de la región, los “enganchadores” contrataban desempleados y campesinos desposeídos en el Centro; el gobierno colaboraba deportando yaquis de Sonora y descontentos de las ciudades o de los pueblos que caían en manos de la ley, y hasta delincuentes. Aquel panorama le sugirió a John Kenneth Turner su *México bárbaro*, que causó revuelo. La agricultura comercial de exportación se hacía con trabajo forzado. Jefes políticos, jueces y pequeñas autoridades garantizaban el sistema, con los caciques y las guardias blancas de los finqueros.

En el Centro, la masa de campesinos desposeídos creció con el despojo de tierras comunales desde 1876. Allí se sembraba maíz y trigo y, en Morelos, caña de

azúcar. En algunos pueblos todavía quedaban escasas tierras comunales que alcanzaban para mantenerse parte del año. Casi siempre los despojados tenían que irse en busca de un exiguo salario a haciendas distantes, porque las cercanas no querían emplearlos. Los “acasillados” tenían ciertos privilegios en el Centro y tardaron en levantarse. Variaba mucho la situación de los permanentes y los eventuales y había una estratificación que también variaba según las zonas. Muchos acasillados ya no recibían pegujales para sus siembras y era muy precaria la suerte de arrendatarios, medieros y jornaleros eventuales endeudados. Las fluctuaciones que bajaban en el mercado los precios agrícolas eran “compensadas” por los hacendados, subiendo el costo de los productos en la tienda de raya, de la que dependían los jornaleros para comer: el poder de compra del salario real bajó, según Tannenbaum, un 30% en las tres décadas. En el Centro se fueron a la bola los habitantes de pueblos despojados, muchos de los cuales eran arrendatarios o medieros o eventuales, una parte del año, en las haciendas.

En el Norte había surgido un vasto sector móvil, de trabajadores semiagrícolas y semindustriales: parte del tiempo servían en las haciendas, pero podían irse a las minas o a las industrias del otro lado de la frontera. También los vaqueros encontraban ocupación del otro lado. Salvo los grupos de indios sedentarios y agricultores que seguían reclamando sus tierras mercedadas, como los yaquis, no había pueblos que despojar ni densas concentraciones de población con tales agravios. Las haciendas señorearon en las vastas extensiones semivacías como enclaves feudales. El desarrollo del sudoeste norteamericano, la comunicación ferroviaria con los Estados Unidos y el comercio de algodón, minerales y ganado con aquel país crearon condiciones nuevas en el porfiriato, muy diversas a las del Centro y del Sur.

Friedrich Katz ha señalado que no hubo una relación directa entre el grado de explotación y la participación en el movimiento revolucionario. No fue en el Sur esclavista donde brotó la protesta, quizá por la heterogeneidad de origen y condición de los siervos, que no facilitaba su organización para la rebeldía. Allí fue necesario que la revolución se derramara desde las regiones más próximas al Centro: entonces se vincularon acasillados e indios despojados de los pueblos, en una sublevación que el propio Katz califica como *una de las más radicales del país*. La reclamación de los pueblos encendió un clamor desbordado en el Centro de México, recordando aquella pleamar de insurgencia que había levantado el cura Hidalgo: los agravios ya se habían acumulado con desmesura. En el Norte, una crisis que abarcó a los dos lados de la frontera —despido de trabajadores mexicanos del otro lado del río y despidos en las minas y en las plantaciones algodoneras de este lado— precipitó la avalancha de gente que siguió a los caudillos. La jefatura estuvo en manos de hacendados y empresarios agrícolas medios: no fue nunca, propiamente, una dirección campesina. Las expropiaciones de haciendas fueron temporales y las demandas de tierras encontraron escasa respuesta.²

La rebelión agraria fue determinante, sin embargo, y no sólo en la meseta central: además de los vigorosos movimientos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, los hubo en el Este, desde Tampico hasta Veracruz y, con carácter más esporádico, en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En el Norte, los yaquis de Sonora y los mayos de Sinaloa seguían reclamando sus territorios, lo mismo que los ocuilas de La Laguna. En las sierras de Durango y Chihuahua se habían rebelado los indios por despojos de tierras comunales. Los “movimientos serranos” reclutaron a campesinos periféricos que centraban sus demandas en la aspiración a la autonomía del gobierno central y la expulsión de caciques y jefes políticos. Los muchos Méxicos se manifestaron en la diversa intensidad y modalidad de la demanda agraria, pero ésta fue el núcleo difusor del aliento revolucionario, como lo ha vuelto a mostrar, muy recientemente, Alan Knight.³

Todos los tiempos y un “estupor optimista”

El papel que representó el norte sonorense durante dos décadas explica mucho de los rumbos posteriores. Pero México no era sólo el norte sonorense. El régimen de usufructo de las tierras por las comunidades había sido dismantelado por los dos proyectos modernizadores del XIX, el de los liberales y el de los “científicos”, rechazados ambos por la obstinada persistencia de los indios. Por eso, en el Plan de San Luis, la Revolución tiene que comprometerse a devolver a sus antiguos poseedores las tierras habidas mediante despojos arbitrarios. En un capítulo de *Los grandes problemas nacionales*, Andrés Molina Enríquez había procurado aclarar, en 1909, la nebulosa de un problema agrario del que muchos hablaban pero pocos entendían. La demanda de tierra se abrió paso, gritada por voces campesinas de toda la República y encabezada por Emiliano Zapata y los campesinos de Morelos que reclamaron desde 1911, en el Plan de Ayala, el cumplimiento de las promesas pendientes de San Luis:

En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas, *a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor* y se mejore en todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.⁴

En 1914 Zapata asumió plenamente la responsabilidad de la jefatura de una revolución que Madero no había formulado como reclamación social y que Huerta

había traicionado. La ratificación al Plan de Ayala advierte que no cesará en sus esfuerzos hasta conseguir que las demandas agrarias sean consagradas como preceptos constitucionales. Advertía, también, que *sería criminal apartarse a última hora de los principios para ir, una vez más, en pos de las personalidades y de las mezquinas ambiciones de mando*. Y, sobre todo, que los grandes sacrificios *en las montañas del Sur y en las vastas llanuras del Norte* habían sido y eran para buscar *primero que nada, el mejoramiento económico de la gran mayoría de los mexicanos*.⁵ Insistencia que contrastaba con el acento que había puesto Madero sobre la demanda de libertad como prioritaria, a su entender, sobre la demanda de pan.

Gildardo Magaña dará fe muchos años más tarde de la función de *custodio del ideal* que cumplió Emiliano Zapata. La restitución fue la raíz de su demanda. Pero no se quedó ahí:

Como se ve, *el Plan de Ayala indica la reconstrucción de los ejidos, instituciones fuertemente vinculadas con la vida de los pueblos[...]*. Mas para que pudieran darse ejidos y fondos legales a los pueblos que no los habían tenido, para que fuera posible el establecimiento de colonias agrícolas *y para que los particulares tuvieran tierras de sembradura*, el mismo *Plan* considera que el caso es distinto al de los despojos y señala un nuevo procedimiento consistente en afectar las haciendas que no tuvieran el origen que hacía necesaria la restitución[...].⁶

Las diversas modalidades del reparto y la tenencia de la tierra estaban previstas: *restitución de ejidos, dotación de nuevos ejidos y parcelas individuales*. En Michoacán, en Guerrero, en Puebla, en Oaxaca:

Los campesinos de toda la República, por su parte, no cesaban de hacer peticiones de reparto de tierras: fácilmente se puede comprobar esto hojeando los periódicos de la época.⁷

Ninguna de esas demandas se había hecho manifiesta, sin embargo, en el Plan de Guadalupe, elaborado en 1913 por Carranza al asumir la defensa de la legalidad frente a la usurpación de Huerta. Y eso, a pesar del contenido del discurso pronunciado por un notable carrancista, Luis Cabrera, el 3 de diciembre de 1912 en la Cámara de Diputados.

Cabrera había advertido que no era uno sino múltiple el problema agrario y por ende las soluciones aconsejables para hacer justicia a los “cientos de miles de parias” que carecían de tierra. Sugirió, en principio, que lo más importante no era *dar tierras a los individuos sino a los grupos sociales* oponiéndose a la reducción de los terrenos que todavía pudieran quedar en manos de los pueblos a parcelas individuales. Se fundaba en el peso de los antecedentes históricos:

[...]Nuestra política necesita ante todo el conocimiento personal y local de nuestra patria y de nuestras necesidades, más bien que el conocimiento de principios generales sacados del estudio de otros pueblos.

Los antecedentes que voy a tomar para la resolución de este problema, no son los antecedentes de la historia de Roma, ni los de la Revolución inglesa, ni los de la Revolución francesa, ni los de Australia, ni los de Nueva Zelanda, ni siquiera los de Argentina, sino *los antecedentes del único país que puede enseñarnos a resolver nuestros problemas, de un país que es el único que podemos copiar, de Nueva España. Nueva España es el único país al que puede copiar México.*⁸

Cabrera tuvo que explicar a los diputados en qué consistían los *fondos* y los *propios* y la importancia de los *ejidos que aseguraban al pueblo su subsistencia* y cómo en su desaparición había estado *el origen del empobrecimiento absoluto de los pueblos* a partir de la Ley de Desamortización de 1856: el 90% de los pueblos de la Meseta Central se encontraban despojados de sus ejidos y propios y sólo contaban ya con sus jacales. La gente quería recuperar su secular forma de organización y se las ingeniaba para encontrar procedimientos *más de acuerdo con las modernas tendencias de organización social* para volver, de hecho, a la situación comunal *de donde la ley los sacaba*. Uno de esos procedimientos había sido entregar sus documentos de *repartimiento* a un depositario, para que se encargara de preservar la administración comunal. Pero esa forma de defensa se había demostrado *absolutamente ineficaz frente a la vigorosa atracción que ejercían sobre la pequeña propiedad de repartimiento los latifundios circunvecinos*.

Luis Cabrera había apelado con astucia a los temores al zapatismo que abrigan muchos de los diputados, intentando convencerlos de las bondades del ejido no sólo con razones históricas sino por conveniencia: podía ser útil hasta “como medio de complementar el salario del jornalero” para sacarlo de la tentación de vivir seis meses del jornal y otros seis con el rifle en la mano. Temiendo que la reivindicación de los derechos de los pueblos se desplazara a las calendas griegas si los hacendados exhibían títulos para respaldar sus despojos, proponía expropiarlos para *la reconstitución de los ejidos bajo la forma comunal, con su carácter de inalienable*. Y mientras los pueblos recibieran la personalidad constitucional para adquirir en propiedad y administrar bienes y raíces, aconsejaba poner la propiedad en manos de la Federación y la administración en manos de los pueblos:

Hay un profundo espíritu de conservación de nuestras costumbres en nuestros pueblos [...] puedo asegurar que nuestras clases rurales no han perdido la costumbre de administrar sus propiedades comunes.⁹

La pugna entre agraristas y partidarios de reformas leves, pasando por los diversos tonos del villismo y por el obregonismo que empezaba a aspirar a fungir como

“fiel de la balanza”, se precipitó en 1914. Fue el año en que las tropas de Villa y de Zapata entraron en la capital. Mientras Carranza gobernaba desde Veracruz, la Convención de Aguascalientes lo hacía desde la ciudad de México, con un gobierno donde el ministro de Agricultura era el zapatista Manuel Palafox. De repente todos los tiempos de México habían aflorado al unísono, y transitaban juntos y revueltos por el centro mismo de la nación, donde se hacían visibles como nunca antes “los de abajo”, para el “estupor optimista” de quienes, como Manuel Gómez Morín, hacían un descubrimiento:

Existía México, México como país con capacidades, con aspiración, con vida, con problemas propios [...]. Y los indios y los mestizos y los criollos, realidades vivas, hombres con todos los atributos humanos[...]. ¡Existían México y los mexicanos! La política colonial del porfirismo nos había hecho olvidar esta verdad elemental[...].¹⁰

Pero el estupor no siempre era “optimista” y para algunos esa aparición tenía que ser ahuyentada, como los malos espíritus o las pesadillas. La preocupación de Carranza por cohesionar políticamente a la nación y fortalecer el poder presidencial no pasaba por la escucha con oído atento a las reclamaciones sociales. El decreto promulgado en enero de 1915, que ofrecía devolución de tierras comunales y dotación a quienes no las hubieren recibido antes, fue más oportunista que sincero: el gobierno carrancista no repartió más de 173 mil hectáreas, a 44 mil campesinos, en cuatro años mientras que, al contrario, se devolvían haciendas confiscadas y seguía habiendo en el país 88 millones de hectáreas en latifundio.¹¹ En cuanto al villismo, su composición era variada, pero aquellos ejércitos reclutados en pueblos mineros del norte, que nunca habían sido asiento de comunidades indígenas estables, no eran tan homogéneos como los de Zapata. Tampoco coincidía con las aspiraciones zapatistas “el sueño de Pancho Villa”, que era ver el país sembrado de “colonias militares”, entre agrícolas e industriales, encabezadas por veteranos que enseñarían a los campesinos a pelear, si fuera necesario, en defensa del suelo patrio y harían de México “un lugar feliz”.¹²

Los que hicieron una revolución porque no querían cambiar

Las reivindicaciones de Zapata eran transparentes. Era la suya una utopía de restauración de un orden anterior, perdido y añorado, para realizar por fin el reencuentro con los orígenes. En su proyecto, el futuro de México era concebido como la reestructuración legítima de aquel universo coherente que había sido desarticulado, hasta la pulverización, por designios ajenos a la voluntad de los pueblos: el

futuro habría de fundarse en una justa recuperación del pasado. Zapata encarnaba esa continuidad del pueblo profundo que ha corrido por debajo de todos los intentos marcados por la pretendida superioridad de los modelos occidentales. Pero esa vertiente reparadora de la Revolución, que aspiraba a restañar heridas largamente abiertas, tenía que despertar desconfianza en los ambiciosos caudillos que bajaban del norte con sus esquemas modernizadores. Es significativo el prefacio de Womack:

Éste es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que, por eso mismo, hicieron una revolución[...] lo único que querían era permanecer en sus pueblos y aldeas, puesto que en ellos habían crecido y en ellos, sus antepasados, por centenas de años, vivieron y murieron[...]. *A todo lo ancho de México, los hombres de empresa pensaron que no podrían mantener su nivel de ganancia o el vigor de la nación sin efectuar cambios fundamentales en el país. Pero, dondequiera que se intentaba cambiar los fundamentos, los campesinos protestaban, pues su única forma de supervivencia conocida era trabajar la tierra de sus padres.*¹³

Rousseau y Tolstoi habrían acompañado en espíritu a Zapata, por una afinidad de talante que percibía Otilio Montaña cuando los evocó en un entrañable testimonio sobre “El zapatismo ante la filosofía y ante la historia”: ahí estarían la *voluntad general* y la adhesión a un credo tolstoiano.¹⁴ Pero lo que se ha llamado la “utopía zapatista” se fundaba en la manifestación de un consenso colectivo: de ese acuerdo fundamental que cohesionó a las comunidades desde tiempo inmemorial, como máxima garantía de autonomía y libertades para los pueblos, y que es mucho más antiguo que la idea rusioniana de un pacto entre ciudadanos celosos de su libertad individual.

El gobierno de la Convención nunca llegó a aprobar, por resistencia de los villistas más tibios, una Ley Agraria redactada por Manuel Palafox que, fechada en Cuernavaca el 28 de octubre de 1915, sólo entraría en vigor en Morelos. Pero esta Ley, reproducida íntegramente por Womack, que destaca su originalidad en relación con proyectos y leyes anteriores, es muy clara:

ARTÍCULO 3º *La Nación reconoce el derecho tradicional e histórico que tienen los pueblos, rancherías y comunidades de la República, a poseer y administrar sus terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en la forma que juzguen conveniente.*

ARTÍCULO 4º *La Nación reconoce el derecho indiscutible que asiste a todo mexicano para poseer y cultivar una extensión de terreno, cuyos productos le permitan cubrir sus necesidades y las de su familia; en consecuencia, y para el efecto de crear la pequeña propiedad, serán expropiadas por causa de utilidad pública y mediante las correspondientes indemnizaciones, todas las tierras del país, con la sola excepción de los terrenos pertenecientes a los*

pueblos, rancherías y comunidades y de aquellos predios que, por no exceder del máximo que fija esta ley, deben permanecer en poder de sus actuales propietarios.

En el ARTÍCULO 5º se establecen límites específicos para las propiedades individuales: y en el ARTÍCULO 14º [...]se dispone que *los predios que el gobierno ceda a comunidades o individuos, no son enajenables ni pueden gravarse en forma alguna.*

En el ARTÍCULO 15º se establece que

[...] sólo por herencia legítima pueden transmitirse los derechos de propiedad de los terrenos fraccionados y cedidos por el Gobierno a los agricultores[...].

En el ARTÍCULO 26º, que

[...]el propietario de un lote está obligado a cultivarlo debidamente, y si durante dos años abandonare ese cultivo sin causa justificada, será privado de su lote[...].

En el ARTÍCULO 28º, que

[...]los propietarios de dos o más lotes podrán unirse para formar Sociedades Cooperativas, con el objeto de explotar sus propiedades o vender en común los productos de éstas, pero sin que esas asociaciones puedan revestir la forma de sociedades por acciones, ni constituirse entre personas que no estén dedicadas directa o exclusivamente al cultivo de los lotes[...].¹⁵

La encomienda de fungir como ejecutores que la Ley otorga a las autoridades municipales refleja el anhelo de recuperación de un pasado rescatable: la tradición autonómica de los ayuntamientos españoles, estrechamente imbricada con la autonomía tan cara a las comunidades indígenas. El propio Zapata había sido presidente del Concejo de Anenecuilco, llamado en ese momento Junta de Defensa, cuando los ancianos decidieron, en 1910, que les faltaban fuerzas para seguir defendiendo, en condiciones cada vez más adversas, los antiguos derechos. Sin importar las denominaciones modernas, se trataba de la asamblea del pueblo, donde residía desde tiempo inmemorial la autoridad popular, expresada mediante la manifestación del consenso. Un sentimiento afín, sin duda, a la noción de la soberanía residente en el pueblo que había defendido, en 1808, el Ayuntamiento de México. Así entendía Zapata la representatividad, función inherente a los ayuntamientos.

El año de 1915 fue decisivo para definir dónde quedaría la hegemonía política y quiénes resultarían derrotados: triunfaba el carrancismo sobre el villismo y el zapatismo; se pactaba con la Casa del Obrero Mundial para amarrar el control sobre los asalariados industriales y se imponía el proyecto del norte sobre el de un México mucho más extenso y tradicional, católico y arraigado en su memoria.

Así podría recapitularlo, una década después, Manuel Gómez Morín:

Y en el año 1915, cuando más seguro parecía el fracaso revolucionario, cuando con mayor estrépito se manifestaban los más penosos y ocultos defectos mexicanos y los

hombres de la Revolución vacilaban y perdían la fe, cuando la lucha parecía estar inspirada no más por bajos apetitos personales, empezó a señalarse una nueva orientación. El problema agrario, tan hondo y tan propio, surgió entonces con un programa mínimo defendido ya, para ser el tema central de la Revolución. El problema obrero fue formalmente inscrito, también, en la bandera revolucionaria[...]. Del caos de aquel año nació la Revolución. Del caos de aquel año nació el nuevo México, una nueva idea de México[...].¹⁶

Esa “nueva idea de México” había aflorado, en verdad, y acabaría por cristalizar en la notable alianza de los múltiples tiempos de la nación que fue la Constitución de 1917. Pero también es verdad que emergió marcada por la derrota militar de los dos movimientos esencialmente populares. Sus demandas serían recogidas y consagradas como preceptos constitucionales pero, a la vez, fueron encauzadas e instrumentadas en la práctica para los propósitos de otro proyecto: el de aquellos que querían más un país “nuevo” que uno sedimentado en la tradición secular.

Entre abril y octubre cristalizó un triunfo que seguiría repercutiendo por muchos años en el tablero de las decisiones políticas: Obregón derrotó dos veces a Villa en Celaya y los Estados Unidos decretaron el embargo de todas las armas destinadas a cualquier grupo salvo el constitucionalista. Los zapatistas se replegaron en Morelos y durante un breve intermedio se constituyó la utopía.

La utopía zapatista

El movimiento zapatista fue una verdadera revuelta, un volver al revés de las cosas, un regreso al principio. Su fundamento era histórico porque los campesinos querían volver a la propiedad comunal de la tierra; al mismo tiempo estaban inspirados en un mito: la edad de oro del comienzo. La revuelta tenía una intensa coloración utópica: querían crear una comunidad en la cual las jerarquías no fuesen de orden económico sino tradicional y espiritual.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

Lo que allí sucedió entonces ilustra, mucho más que todas las elucubraciones teóricas, lo que deseaba Zapata. Por fin pudo hacerse el reparto agrario como lo había previsto desde 1911. Womack lo describe y también Arturo Warman, en su excelente ...*Y venimos a contradecir*:

En seis meses, a tiempo para las siembras de temporal, un centenar de pueblos habían recibido sus dotaciones y empezaron a trabajar su tierra, tan duramente recobrada. *Los*

*sujetos de esta radical reforma agraria eran los pueblos, las comunidades despojadas, que junto con la tierra recibían la autoridad para manejarla libremente [...]. El pueblo podía decidir entre el manejo comunal y sus modalidades o la dotación parcelaria definitiva con una sola restricción: la posesión de la tierra sólo se transmitiría por herencia y no podía ser vendida ni enajenada.*¹⁷

La Ley Agraria de Palafox no hizo más que resumir las medidas que ya habían sido tomadas en la práctica. Womack cuenta cómo, desde la primavera, habían empezado las cosechas, de modo que todos los campos de Morelos estaban cultivados para el mes de junio, pero no de la caña o el arroz de los hacendados, sino de los cultivos básicos tradicionales para la alimentación de la gente: maíz y frijol. El gobierno zapatista de Morelos prestó 500 mil pesos a los pueblos, a través de los municipios, para semillas y herramientas. Y el milagro se dio: de los campos calcinados brotaron las milpas y por primera vez los campesinos, como afirma Warman, *vivían mejor que los habitantes de las ciudades*. Chiles, cebollas y tomates prosperaban entre el frijol y la milpa y hasta empezaron a abundar los pollos: nadie quería sembrar caña, a pesar de que el propio Zapata lo intentara, un poco para financiar la lucha y otro poco para que obtuviera la gente, en el mercado, algún dinero en efectivo. De lo que producían alcanzaba, sin embargo, para abastecer ampliamente los mercados municipales de Morelos. Dice Womack:

*[...] en los cultivos mismos a los que quería dedicarse la gente se reveló la clase de comunidad en la que deseaba vivir. No les gustaba la vida de constante ajeteo, la vida de un perpetuo adquirir y lograr, de cambio, azar y constante inquietud y movimiento. En vez de esto querían una vida que pudiesen controlar, una prosperidad modesta, familiar, en compañía de otras familias medianamente prósperas, a las que conociesen, y todo en el mismo lugar [...]. Y apreciaban las ganancias únicamente cuando podían hacer un uso de las mismas, consagrado por la costumbre[...].*¹⁸

La utopía zapatista se fundaba en el consenso, ese acuerdo fundamental que cohesionó a las comunidades aun antes de que empezara la memoria, y su liderazgo no era autoritario sino cimentado por la relación personal y el reconocimiento de todos. Como señala Warman, Zapata buscaba una democracia fundada en la auténtica participación, expresada mediante el consenso en asamblea, como máxima garantía de autonomía y libertad para los pueblos. Womack es muy preciso: se trataba *de la refundación del Estado, entendido como comunidad de pueblos*.¹⁹

La utopía apenas duró un año. Luego entraron a sangre y fuego los constitucionalistas y asesinaron a hombres, mujeres y niños; enviaron a campos de trabajos forzados en Yucatán a más de cinco mil campesinos y saquearon por doquier. *La invasión carrancista despobló los asentamientos rurales de Morelos...*²⁰ Hasta

que, en 1916, mientras Zapata dirigía desde los cerros el hostigamiento hacia afuera para aliviar el acoso sobre los pueblos morelenses, los 30 mil carrancistas de Pablo González abandonaron ese territorio.

La Constitución de 1917 recogió, matizándolos, los principios agrarios del Plan de Ayala, aunque ningún zapatista pudo acudir a aquel Congreso Constituyente. Warman señala que, mientras tanto, las leyes zapatistas de 1917, promulgadas sobre las ruinas de los pueblos de Morelos, ya sin siembras ni ganado y diezmados por las muertes, la huida, las epidemias y el hambre, procuraban normar las relaciones de esos pueblos con sus ayuntamientos sobre la base del consenso comunal. Era así como Zapata entendía la “voluntad general” que invocaba Otilio Montaña, sin necesidad por supuesto de haber leído a Rousseau: le bastaba con llevar en la sangre la herencia de los abuelos.

Todos los pueblos Anenecuilco

Obstinado pueblo, Anenecuilco. Asentamiento de nahuas tlahuicas que pagaban tributo a Tenochtitlan, todavía en 1910 se negaba a desaparecer. Emiliano recibió, con la elección de los vecinos para encabezar su Junta de Defensa, la herencia de cuatro siglos de *calpuleques*. Sotelo Inclán ha recogido minuciosamente los hitos de la larga biografía de un pueblo que se volvió símbolo de todos los pueblos de México. Principales y gobernadores, alcaldes y regidores, representantes, presidentes de club y jefes de junta: una larga sucesión de indios y mestizos que se fueron pasando, de generación en generación, el mandato de luchar por la conservación y la recuperación de las tierras. El pueblo había olvidado los antecedentes prehispánicos, pero insistía en una remota merced virreinal que “muy derrotada y de letra muy agusanada” se había llevado, para no devolverla nunca, un Don José de Tagle, Juez de Tierras. El mapa se conservaba aún en 1853 cuando, para protegerse contra leyes de Santa Anna, fueron los pobladores al Archivo General de la Nación a pedir constancia de su fundo legal mercedado, según la memoria oral, alrededor de 1607.

De ese mapa quedó copia en el Archivo y una, más cuidadosa, se guardó en el pueblo: vigilantes, velaba un murciélago y acechaba un jaguar desde los cerros del Poniente. Aunque nadie ha llamado la atención sobre esos símbolos, no sobraría recordar su vinculación con la tierra, madre del dios del maíz.

Los siglos XVII y XVIII se sucedieron entre demandas y querellas, por el reconocimiento y otorgación del fundo y por el acoso de haciendas que se fueron apropiando, por todos los rumbos del horizonte y los cuatro vientos, de las tierras de Anenecuilco: Hospital, Cuahuixtla, el Mayorazgo de Salgado, Mapaztlán. Las cañas dulces se echaron sobre el pueblo y hasta del agua del apantle les impidieron

el uso de ella por todos modos de manera que no tenemos con qué regar nuestros solares. En prolija demanda de justicia al rey le comunican que no tenemos los pobres indios, tierras de pan llevar y útiles para nuestras labores:

[...]y, sin embargo el Mapa y situaciones que en él se mencionan con sus aguas, carecemos mucho tiempo ha de la mayor parte de las tierras laboriosas, a causa de que los hacendados[...] nos impiden con sus introducciones en el uso de ellas[...].²¹

Así se aproxima en 1786, para aquellos *humildes e infelices indios tributarios del Pueblo de Anenecuilco que no firmamos por no saber*, el ocaso de la Colonia, insistiendo en que son pueblo y por ende tienen derecho a existir. Por fin se les midió y adjudicó el fundo de 600 varas de tierra por cada viento, sin reconocerles la antigüedad que atestiguaban paredones, cementerio de iglesia y convento. Nunca les dieron posesión, en el enredo de trapisondas legales interpuestas por las haciendas.

En tales dilaciones los sorprendió la insurgencia y los principales de Anenecuilco mandaron totopos, para su sostenimiento, a Morelos y los defensores de Cuautla: un niño *tlacualero* que se quedó atrapado “en el *encierro*” se llamaba José Salazar: era indio y sería mucho después el abuelo materno de Emiliano.

Hay una *contradicción del pueblo sobre los parajes suyos*, de 1853, y dos cartas a Porfirio Díaz. El criollo don José Zapata, bisabuelo o tío abuelo de Emiliano y mayor de caballería en las tropas que expulsaron a los franceses, escribió la primera en 1874, como presidente del club del lugar, para recordarle compromisos contraídos tres años antes a su paso por el pueblo, cuando andaba levantado contra Juárez:

*“No descansaremos hasta obtener lo que nos pertenece”. Son sus propias palabras, general. [...] Los ingenios azucareros son como una enfermedad maligna que se extiende y destruye[...].*²²

En la carta de 1876 prevalece, como bien sugiere Sotelo Inclán, el espíritu comunal y justiciero de *Fuenteovejuna*:

Y hemos resuelto todos de común acuerdo, que es preferible que desaparezca la gran riqueza que constituyen los ingenios azucareros (que luego podrá repararse), a que se sigan apoderando de nuestras propiedades hasta hacerlas desaparecer[...].²³

Ese común acuerdo encarnó en Zapata. Cuando nació Emiliano, en 1879, se había ido cuajando en una infatigable reclamación de cuatrocientos años que le será transmitida como mandato en 1910, cuando lo designan para presidir la Junta de Defensa:

Antes de salir Zapata de Anenecuilco, ya dispuesto para lanzarse a la Revolución[...] escondió los documentos del pueblo, encerrados en su caja de hoja de lata, al pie de la escalera que lleva al coro y a las alturas de la iglesia. Allí quedaba enterrada la raíz y la razón que lo impulsaba, su íntima verdad, la historia de su pueblo y la prehistoria de su vida[...].²⁴

Pesaba demasiado aquel consenso, pero como lastre estorboso, para los que habían empezado pronto a pactar con los terratenientes de ayer para volverse los terratenientes de mañana. Así lo sintió y denunció en carta abierta redactada en 1917:

Las haciendas están siendo cedidas o arrendadas a los generales favoritos; los antiguos latifundios reemplazados por modernos terratenientes que gastan charreteras, kepí y pistola al cinto; los pueblos, burlados en sus esperanzas[...].²⁵

El 10 de abril de 1919 extinguirían, en Chinameca, la inoportuna y condenatoria mirada. Pero la gente no lo quería ni lo creía muerto: *Todo el año, dicen los indios, monta guardia en las montañas, velando para que nadie vaya a quitarles sus tierras.*²⁶ Junto a las sombras que los indios divisan por los cerros rondan, seguramente, un murciélago y un jaguar.

Entre Anenecuilco y Huatabampo, distancia de siglos

Zapata está más allá de la controversia entre los liberales y los conservadores, los marxistas y los neocapitalistas: Zapata está antes –y tal vez, si México no se extingue, estará después.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

Como ha escrito Arturo Warman:

El zapatismo no había ganado la guerra, mucho menos la revolución [...]. La Reforma Agraria no iba a legitimar el derecho histórico de los pueblos a la tierra ni a fortalecer su autonomía; no iba, pese a que la legislación autorizaba al gobierno para ello, a realizar actos de justicia[...] *iba a repartir la tierra como una concesión unilateral del Estado*[...]. *El problema económico era producir mucho y hacerlo para el mercado de exportación [...] la exportación agrícola no se concebía sólo como un paliativo a corto plazo sino como una alternativa permanente de desarrollo en un país carente de capital y, según Obregón, de empresarios eficientes*[...].²⁷

Se repartió tierra, de mala calidad, para apagar la agitación donde era más álgida: todo el apoyo fue para los latifundios que garantizaban la agricultura comercial.

Entre el proyecto de Zapata y el de Obregón hay una distancia de siglos, mucho mayor que si se midiera en kilómetros la que separa a Anenecuilco de Huatabampo. La historia entera de México, antes y después de la Conquista, pesa en la visión de Zapata, que se fragua con sedimento de tiempo acumulado. En la de Obregón cuentan sólo los estratos más recientes y, por ende, mucho menos hondos del acontecer histórico.

Zapata entierra los títulos del pueblo que su tío José Merino le confía, bajo el suelo sagrado de la iglesia parroquial y su gente cabalga bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Quiere restituir sus tierras a los pueblos y dárselas, con resguardo de perpetuidad, a los que nunca las hubieran poseído. Obregón concibe la agricultura como una empresa moderna, que debe manejarse con eficacia capitalista. No le simpatiza la Iglesia y aspira a conciliar intereses y a controlar “desde arriba” a obreros y campesinos. Zapata germina en un atávico impulso de recuperar tierras seculares, aunque también respalda las aspiraciones legítimas de los que nunca tuvieron tierra y merecen una parcela. Obregón adquiere su rancho y lo trabaja con empuje e iniciativa de empresario agrícola: fue corta su respuesta a las demandas restitutorias de los yaquis a quienes hubiera deseado convertir, acaso, en agricultores modernos y en ciudadanos. A Zapata lo vincula con la tierra un sentimiento muy antiguo, que viene de la herencia india; a Obregón, el hacerla producir óptimamente para exportar y obtener ganancias. Zapata reúne, a la vez, todos los tiempos de México; Obregón es un presente anclado apenas en el inmediato pasado decimonónico, que pretende empujar hacia el futuro los esquemas modernizantes del juarismo y del porfiriato.

Los texanos de México

El reparto agrario obregonista empieza en Morelos y se extiende a los sitios donde siguen ardiendo rescoldos del zapatismo: Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Puebla y el Estado de México,

[...]todavía en 1923, más de 10 años después del inicio de la Revolución, 114 propietarios tenían en sus manos casi la cuarta parte de todas las tierras de propiedad privada en la República (el 22.9%)[...].²⁸

Obregón distribuyó un millón de hectáreas y Calles casi 3 millones: el 0.7 y el 2.2% de la superficie del país.²⁹ Durante el callismo, el reparto fue utilizado para apaciguar las inquietudes manifestadas en el levantamiento cristero pero, si atendemos a Warman:

*No se puso ninguna esperanza en los resultados económicos del reparto y los ejidatarios no eran considerados como un factor en la reconstrucción, que se dejaba en manos de las dinámicas empresas. Otra vez se repartió la mala tierra de temporal, los montes agrestes y hasta malpaíses y pedregales[...].*³⁰

Tannenbaum calculaba, en 1927, que hasta ese momento *algo así como el 4% de la población rural había sido beneficiado definitivamente por estas leyes[...]*.³¹

Se ha ponderado el costo productivo de la lucha armada en un 37% de ingresos no producidos: descendió la producción de manufacturas y sólo la industria petrolera, en manos extranjeras, subió de 200 mil barriles en 1910 a 516 millones en 1921. Si 224 mexicanos de cada mil trabajaban en el campo, apenas 40 lo hacían en la industria y 19 en el comercio o las finanzas mientras que la burocracia, muy nutrida en el porfiriato, se había reducido a 4 personas por millar. La población crecía al 6.1% anual, pero era muy alta la tasa de mortalidad: 222 de cada mil que nacían. Carencia de agua potable y nulo saneamiento ambiental eran caldo de cultivo de las enfermedades, evitables, de la pobreza: diarreas y males de vías respiratorias. La influenza española cobró quizá más víctimas, entre 1918 y 1919, que las batallas de la Revolución: en total habían muerto un millón de mexicanos. La población era, en 1921, de 14 millones, 355 mil personas.³² Tannenbaum calculó:

Considerando el Distrito Federal como ejemplo de centro urbano, en 1921, dominado por la ciudad de México con sus 903 063 habitantes, vemos que la población rural era el 73.8% del total. Excluyendo el Distrito Federal y Quintana Roo, tenemos casi el 80% como población rural[...]. De los 62,272 lugares habitados en México en 1921, sólo 266 tenían más de 4 mil habitantes[...]. En 20 de los 29 Estados, más del 70% de la gente vive en poblados de menos de 4 mil habitantes[...].³³

Entre 1923 y 1934, ese país rural transitó hacia la estabilidad política guiado por dos caudillos militares norteros que le impusieron al proceso la marca sonoreNSE. Eran

[...]gente práctica y modernizante, pequeños propietarios y empresarios del norte ansiosos de echar a andar la máquina económica en beneficio propio y del país[...]. Deseaban, en fin, modernizar a México, y para ello no podían sino seguir, con ciertas variantes, el único modelo exitoso que habían visto de cerca, el norteamericano[...].³⁴

Obregón pretendió atraer de nuevo al capital extranjero, pero sin conseguirlo porque no había con qué pagar la deuda en suspenso desde 1914. No se alteró en los años obregonistas el panorama de la pobreza mexicana.

En cuanto a la participación obrera, marcada por las ideas anarquistas transmitidas al Partido Liberal por los Flores Magón, nunca generó una sólida "conciencia

proletaria". El malestar por las condiciones de vida deterioradas de los artesanos y escasos obreros había sido encauzado por los gobiernos revolucionarios, desde el Pacto de Carranza con la Casa del Obrero Mundial en 1915. Jean Meyer tiene razón: una lógica comprensible, si no justificable, indujo al movimiento obrero recién organizado a combatir, bajo la bandera carrancista, a los campesinos de Zapata y al ejército de Villa. La escasa población obrera configuró un movimiento enclenque y propicio a la cooptación: sus aspiraciones coincidían más con el proyecto modernizador que con las aspiraciones del campesinado zapatista.³⁵

Empezaba a cobrar cuerpo, a la vez, un nuevo sector de ricos y poderosos avezado en el caudillaje armado: numerosos *Artemio Cruz* que tratarían de sustentar en motivaciones "fuera de toda sospecha" los mecanismos de su propio provecho, articulándolos ventajosamente con los de un modelo de crecimiento que ha descrito despiadadamente Roger D. Hansen. Por esos años, y no casualmente, entró en el vocabulario de la clase política la palabra *desarrollo*.

El temperamento modernizante de esa nueva clase se manifestó también en la terca ofensiva antirreligiosa que propició la guerra cristera y enfrentó a la obstinada tradición católica popular del centro del país, fincada en raíces coloniales todavía muy vivas, con el "liberalismo" norteno, teñido con matices protestantes de allende la frontera. A Jean Meyer se debe, también desde 1973, un primer acercamiento a las simpatías que movían, en esa dirección, a la minoría dirigente: era una manifestación más de la brecha que separaba a las élites modernas del viejo México. En *La Christiade* (1975), abundó en esa tesis:

A sus ojos el protestantismo explica el éxito norteamericano y hacen suya la requisitoria anglosajona contra el pasado hispánico y colonial de un México degenerado por culpa de los indios y de los curas[...]. *Los hombres de la frontera Norte se consideraban portadores de la civilización y llamados a regenerar al viejo México* [...]. El protestantismo septentrional es un fenómeno lógico en una región vacía de hombres hasta fines del XIX y donde, desde la expulsión de los jesuitas, permanecerá ausente durante largo tiempo la iglesia católica[...].

Meyer fue prolijo en su demostración de la modalidad que asumió, en los años veinte, la decimonónica predisposición de los liberales a "deshispanizar" al país "descatolizándolo". El sueño era imitar la bonanza norteamericana atribuida, entre otras razones, a la propensión ahorrativa y acumulativa del protestantismo. Una comisión del Senado norteamericano recogió la simpatía que despertaban los revolucionarios de la frontera norte en los medios protestantes del otro lado:

Cuando empezó la Revolución Mexicana, las Iglesias protestantes se precipitaron hacia ella de manera unánime, creyendo que el programa revolucionario representaba lo que

ellos predicaban desde hacía años y que el triunfo de la Revolución significaría el de la Biblia. Hubo comunidades enteras que, detrás de sus pastores, se enrolaron voluntariamente en el ejército revolucionario[...].

No debe haberle sorprendido al presidente Obregón recibir un telegrama donde se le aplaudía en estos términos:

Millones de norteamericanos simpatizan con usted y ruegan por usted en su lucha por liberar a su gran país del dominio de la Iglesia Católica.³⁶

En coherencia con todo ello, se propiciaron las misiones protestantes y Moisés Sáenz procuró sustentar la escuela rural en las teorías de John Dewey. Ya en 1934, durante la campaña de Cárdenas, se propuso a la Cámara la reforma al Artículo 3º, para establecer una educación “socialista”.

La famosa “educación socialista” que se promulgó en octubre de 1934, con el propósito explícito de “crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y la vida social”, fue una nueva ofensiva contra la Iglesia, “el fanatismo y los prejuicios” y, de hecho, contra el país tradicional, al que los modernizadores pretendían transformar por decreto.

El radicalismo que campeó en el segundo lustro de los años veinte y al comenzar los treinta ha sido bien calificado como “radicallismo”: estaba hecho de una mezcla de culto al desarrollo, a la razón científica y al Estado, encarnados todos en un caudillo implacable y beligerante, dispuesto a cualquier cosa para imponer la modernidad a un pueblo que a la élite ascendente le parecía anclado, por la ignorancia, en sus costumbres y en su fe.

La gente del México viejo se sintió abusada y violada por un Gran Poder que dispuso de la educación y de los medios para implantar a la fuerza un cambio de mentalidades: lo que se había estado buscando, infructuosamente, desde el Congreso Constituyente de 1824. Una curiosa amalgama ideológica confluyó entonces para sustentar, en la columna vertebral de un Estado fuerte, el empuje desarrollista. En aras del Progreso se polarizó al país. Jean Meyer ha caracterizado la “ideología” del *radicallismo*:

[...] estos hombres impacientes, venidos del Norte, ajenos al viejo México del centro, encuentran en el catolicismo la explicación del atraso de su país, la explicación de los obstáculos que se les atraviesan, de los fracasos que ocurren de 1926 en adelante [...]. Ellos mismos se definen como los texanos de México o los californianos que en aquellos años envidian la riqueza del Valle Imperial. [...] Descubren que el centro y el sur son muy diferentes de su *Lejano Noroeste*; del choque de este descubrimiento nacerá la frustración, la impaciencia, la ira, a veces el desprecio.³⁷

Los caudillos sonorenses pensaron acaso, como ha sugerido agudamente Jean Meyer refiriéndose al general Calles, que el pueblo mexicano “no los merecía”.

La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) por Calles, en 1929, fue decisiva para lograr el control centralizado de las iniciativas políticas, poner fin a la etapa de los caudillos y crear las instituciones que pondrían en marcha el proyecto modernizador de la Revolución. En el programa de ese partido se fijó como objetivo central la modernización del país mediante un “vigoroso desarrollo capitalista”.

A la vez, se reconocía a obreros y campesinos como “los factores más importantes de la colectividad mexicana”: promover a un tiempo la industrialización y una política agraria de dotación ejidal y de apoyo a los empresarios agrícolas eran corolarios de tal propósito. A los temores de Obregón de que una Reforma Agraria a fondo pudiera “quebrantar la producción” siguieron las urgencias de Calles por

“[...]terminar con el reparto agrario[...] y formar una clase de pequeños propietarios modernos, con la ayuda política de riego, crédito [y] formación técnica[...]”.³⁸

Ya en 1925 se veía como el *desideratum* “modernizar” a los campesinos para incorporarlos a una agricultura concebida con criterio empresarial. La Ley de Patrimonio Familiar Ejidal estableció la explotación individual de los ejidos. Era una muestra de la desconfianza que despertaba el aprovechamiento comunal. Aunque no se creía en la eficiencia campesina, se esperaba estimularla con el apoyo a la pequeña propiedad. De hecho, la confianza estaba puesta en la gran agroempresa comercial exportadora.

Cuando en 1926 se creó el Banco de Crédito Agrícola, Gómez Morín sugirió que no bastaba repartir la tierra si no se tomaban medidas que “complementaran económicamente” su posesión y también advirtió contra el uso del reparto agrario para fines burocráticos y de conveniencia política. Pero, sobre todo, aconsejó darse prisa para organizar la economía rural y mejorar *la infeliz situación del campesino mexicano*[...].³⁹ Su preocupación era sincera pero también abrigaba el convencimiento de que se requería “enseñar la responsabilidad a quienes no han sido responsables”. Brindarles educación y orientación era enseñarles a vivir y enaltecerlos. Era arrancarlos de una “cultura” que sólo les acentuaba la pobreza y desestimulaba el afán de acumulación. Una meta que no difería, en esencia, de la que había hecho suya la élite ilustrada del XIX: el culto al Progreso, cuyo advenimiento en México celebraba, desde 1925, aquel católico que compartió los entusiasmos modernizadores.

Bajo la invocación de Madero, cuyo retrato presidía la IV Convención del Partido Nacional Antirreeleccionista, fue proclamada la candidatura de José Vasconcelos el 4 de julio de 1929. Su discurso enunció un programa para “sentar las bases de

la reconstrucción nacional” aspirando a representar a “la inmensa mayoría de la opinión” por encima del “despotismo y el caudillaje”. El presidente sería “el arquitecto del desarrollo nacional”, renunciando al autoritarismo y asumiendo el poder como responsabilidad. Respetaría la separación de poderes y promovería la elección popular del Poder Judicial. Combatiría los cacicazgos y rescataría la autonomía municipal. Estados y municipios recaudarían impuestos para contar con presupuesto propio y la equidad libraría de cargas fiscales a los más “débiles”. Se favorecería la libertad sindical. Vasconcelos se manifestó contra la dependencia económica del extranjero y el monopolio de intereses privados: un Estado fuerte debería administrar riquezas esenciales, como el petróleo y la energía eléctrica. En materia educativa, le parecía que México era “el país más atrasado del Nuevo Mundo”, calculando que apenas un 20 o 30% tenía acceso a la educación primaria.

Pensaba que “la mera distribución de la tierra no es una solución para el problema del campo”: había que organizar a los agricultores para “obtener todas las ventajas que proporcionan los sistemas modernos (y los métodos científicos) de trabajo en gran escala”.

Su utopía era la de una identidad mestiza: la fe en “los destinos de una raza cuya misión interesa la humanidad”. Confiaba en el mesianismo de esa raza cósmica para integrar la cultura nacional y darle a la nación una energía insospechada.⁴⁰

Pero, como ha señalado José Joaquín Blanco, acaso su discurso más importante ya había sido pronunciado, el 10 de marzo de ese año, al llegar en medio de aclamaciones a la Plaza de Santo Domingo. Allí había asegurado que por su voz hablaba la voz “histórica y milenaria” de Quetzalcóatl, la misma que se había manifestado por boca de Madero. La Revolución “acalló aquella voz y asesinó al profeta”. La Revolución era “el festín de Huitzilopochtli”: una “cena de caníbales”.⁴¹

En el Ateneo de la Juventud (1909) y en la Universidad Popular (1912) se había hecho la crítica al positivismo que había sustituido al “fanatismo religioso” por el “fanatismo científico”. La utopía civilizatoria vasconceliana pretendía rescatar a la cultura para mejor difundirla entre las masas. Sobre todo, pretendía recuperar la filosofía, el arte y la literatura y revalorar el espíritu hispanoamericano frente al materialismo de Norteamérica. Aquel idealismo humanista se reflejó ejemplarmente en la difusión masiva que quiso hacer de los grandes clásicos, en un país donde era altísimo el índice de analfabetos.

Campeón, como Sarmiento, de la “civilización” contra la “barbarie”, su mensaje iba dirigido a las clases medias ilustradas y captó la adhesión de algunos de los jóvenes más brillantes del país, que hubieran querido verlo gobernando por una aristocracia del espíritu. El afán democrático marcó con un sello de legitimidad el discurso de Vasconcelos, aunque el país real no estuviera demasiado presente.

¿Fin al reparto agrario?

[...]la propiedad ejidal está estrechamente ligada a la organización social tradicional y al sistema ético que, también tradicionalmente, rige las relaciones sociales y familiares de los campesinos mexicanos [...] el ejido representa una racionalidad distinta a la racionalidad económica moderna basada en la rentabilidad y en la productividad. El ejido no es un modelo óptimo desde el punto de vista económico: es un modelo posible de sociedad armoniosa.

Octavio Paz, *El ogro filantrópico*

La verdad es que tan pronto como se inició el reparto agrario se dio, paralelamente, la intención de ponerle fin lo antes posible. Calles lo deseaba en 1928. La Cámara Nacional de Agricultura pidió, en 1930, que se fijara un último plazo para solicitudes de pueblos con derecho a dotación ejidal cuando persistían más de 600 latifundios de más de 10 mil hectáreas. Ese mismo año Pascual Ortiz Rubio declaró terminado el reparto agrario en Aguascalientes, y luego en Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, Morelos y el Distrito Federal. Lo mismo se hizo, en 1931, para Querétaro, Nuevo León y Chihuahua. Siguiéron Jalisco, Sonora, Sinaloa y La Laguna. En septiembre de 1930 se dio por terminado el reparto agrario en doce estados.⁴²

Durante el maximato se insistió en dividir el ejido en parcelas individuales. Se amplió, sin embargo, la noción de *ejido* para que abarcara, como en tiempos coloniales, pastos, montes y aguas y se extendió a los peones acasillados el derecho a dotación ejidal. Se remediaba así, legalmente, la contradicción señalada por Tannenbaum, en 1927: la gran masa de campesinos que habitaba dentro de las haciendas no había tenido, hasta ese momento, derecho a solicitar tierra.

Tuvo razón Womack al señalar que los campesinos querían seguir siendo campesinos y querían, a la vez, ser hombres libres. La tierra no era concebida por ellos como un capital productivo sino como un medio de subsistencia: aspiraban a que volviera a ser dominio de los pueblos y las comunidades. No querían que nadie pudiera embargarla ni deseaban venderla. La mentalidad de los triunfadores era precisamente la opuesta: ellos querían ver la tierra como “el sustento de una empresa individual que produjera capital y crecimiento”. El Artículo 27 sancionó, con su ambivalencia, los dos proyectos.⁴³ Los triunfadores querían, dice Warman, “civilizar” al campesino metiéndolo al mercado o, más bien, garantizar el derecho de los agricultores con “horizontes” a fundar en la tierra empresas eficaces. Pero hubo que dar cabida, también, a la demanda campesina de respetar la antigua tenencia y de sustraer la tierra al mercado. De ahí la dualidad de la legislación agraria.

La presión campesina consiguió desorganizar el régimen de la gran hacienda, pero persistieron muchos hacendados antiguos y surgieron muchísimos nuevos. Los primeros repartos, hechos directamente por campesinos como sucedió en Morelos, fueron desautorizados por Calles, que entregó esa responsabilidad al Estado: *así perdieron los campesinos su más importante batalla*. Para dar seguridad a los propietarios, se quitó a las comunidades todo poder de decisión sobre la tierra y su explotación, *al entregar el usufructo del ejido en parcelas individuales permanentes*. El ejido fue, en palabras de Warman, *una propiedad vergonzante*. Se pretendía crear, en teoría, una clase media rural de pequeños propietarios capaces de proveer al abasto interno y a la exportación y, para ello, se inició, desde 1926, una política de irrigación y colonización. Pero

[...] la reforma agraria como monopolio del Estado ya no respondió a demandas sociales sino a los imperativos económicos del mismo poder público y de sus afiliados, los grupos modernizantes.⁴⁴

El levantamiento cristero fue consecuencia inmediata de las dolencias del país tradicional.

Cuando Cárdenas recorrió el país en campaña, el 93% de las tierras eran de propiedad privada y sólo un 7% era ejidal. Apenas en la región de Zapata los ejidos cubrían ya el 59% de la superficie cultivable: y eso, porque no convenía intranquilizar demasiado al fantasma que velaba, desde las montañas, las sementeras de Morelos. En menor proporción, las dotaciones ejidales alcanzaban el 25% en el Distrito Federal, el 21% en el Estado de México y el 18% en Puebla, territorios, todos, de filiación zapatista.⁴⁵

Una revolución parricida

En 1966 Stanley Ross recogerá numerosas opiniones de extranjeros y de mexicanos en torno a una pregunta incisiva: ¿había muerto la Revolución Mexicana? Fue importante la sugestión de Frank Tannenbaum, pionero entre sus intérpretes:

Lo importante es que *la Constitución* ni es rígida ni está regida por una doctrina y, si uno tuviera que explicarla, cabría decirse que es el intento de crear una fórmula legal para las complejidades de México, en donde conviven lado a lado la primitiva corporación indígena y lo moderno.⁴⁶

Años después, en 1985, François Xavier Guerra terminará su obra polémica creyendo advertir, en el sistema político creado por la Revolución,

[...] una forma original y *acabada* de resolver el problema esencial de la política contemporánea: *la articulación entre las sociedades tradicionales y el Estado moderno*.⁴⁷

Pero el dilema entre tradición y modernidad no se ha cancelado a 500 años de la Conquista. El país no acaba de reconciliarse con su otro rostro: o, dicho de otro modo, la cabeza y el corazón siguen escindidos. Es verdad que surgió un espacio político nuevo: el *espacio de la Revolución* donde empezó a participar, de manera creciente, la sociedad. Enrique Florescano ha hecho la crítica de la interpretación revisionista de la Revolución Mexicana que, a pesar de sus destellos esclarecedores, puso todo el énfasis en la continuidad de los dos proyectos elitistas, el del siglo XIX y el del XX:

La revolución [...] instaura un tiempo nuevo. [...] Este rasgo esencialmente político es el que hace de la revolución no una continuación de procesos anteriores, sino el acto inaugural de un proyecto nuevo, y una fundación, *el origen de un nuevo pacto social* [...] *es un proyecto nacional sustentado en una base social antigua y moderna*.⁴⁸

El Artículo 27 cristalizó, en la Constitución de 1917, la crítica campesina al proyecto liberal decimonónico y al proyecto de los “científicos”. Tiene razón Alan Knight cuando revalida la interpretación de Tannenbaum e insiste en definir a la Revolución, por su documentada presencia campesina, como un fenómeno esencialmente agrario y popular:

Los elementos populares que más contribuyeron a derrocar no sólo a Díaz sino a todo el orden porfiriano venían de grupos amenazados y declinantes, las víctimas del desarrollo económico y político porfiriano [...]. Estos grupos [...] nutrieron las filas de la revolución y garantizaron que fuera una revolución rural, y en muchos casos una revolución agraria, en la que fue central la lucha por la tierra y el agua.⁴⁹

Y la Constitución de 1917 sí encontró —como lo advirtieron desde miradores muy diversos Frank Tannenbaum y François Xavier Guerra— una fórmula de coexistencia entre la visión del país tradicional y la del país moderno. Sólo que en lo sucesivo y en los hechos, el proyecto modernizador procuraría desplazar, con enorme éxito, las reclamaciones del otro México. Como ha puntualizado Alan Knight:

[...] si la Revolución dependió esencialmente del apoyo masivo de grupos tradicionales, aplastados y amenazados, se convirtió en un motor poderoso de creciente modernización y desarrollo: aceleró precisamente los procesos a los que trataban de resistirse sus iniciadores populares. Cronos devoró a sus hijos: la Revolución se tragó a sus progenitores.⁵⁰

El gobierno de Lázaro Cárdenas fue un intento tangible de hacer realidad el propósito constitucional: de realizar la improbable alianza entre los dos Méxicos.

Notas

- ¹ Frank Tannenbaum, *La revolución agraria mexicana*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. IV, núm. 2, abril-junio de 1952, p. 165.
- ² Friedrich Katz, *La servidumbre agraria en México en la época porfiriana*. México: Ediciones Era, 1980, pp. 9-55. La 1ª edición apareció en 1976.
- ³ Alan Knight, "Caudillos y campesinos en el México revolucionario, 1910-1917", en *Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana* (coord. David A. Brading). México: Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 41 ss. La 1ª edición inglesa es de 1980.
- ⁴ Gildardo Magaña, *Emiliano Zapata y el agrarismo en México*, vol. 2. México: Editorial Ruta, 1951, pp. 85-86. El Plan de Ayala, inspirado por Zapata y redactado por Otilio Montaño, es del 28 de noviembre de 1911.
- ⁵ Magaña, G., *op. cit.*, vol. 4, pp. 203 ss.
- ⁶ *Ibid.*, vol. 2, pp. 92-93.
- ⁷ Octavio Paz Solórzano, "Emiliano Zapata", en *Historia de la Revolución Mexicana* (ed. José T. Meléndez). México: Talleres Gráficos de la Nación, 1936, p. 315.
- ⁸ Luis Cabrera, discurso en el Congreso sobre "La reconstitución de los ejidos", diciembre de 1912. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 4, núm. 2, abril-junio de 1952, pp. 192-203. La Ley Agraria de 1912 y el discurso de apoyo de Luis Cabrera aparecieron en el *Diario de Debates* de 3 de diciembre de 1912, reproducidos en *Problemas...*, *op. cit.*
- ⁹ *Ibid.*, p. 202.
- ¹⁰ Manuel Gómez Morín, *1915 y otros ensayos*. México: Ed. Jus, 1973, p. 20. 1915 apareció originalmente en *Cuadernos Mexicanos*. México: Editorial Cultura, 1927.
- ¹¹ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, pp. 72 y 131. El 54% de la tierra estaba en 1910 en poder de 11 mil latifundios, con un promedio de 8 mil hectáreas cada uno.
- ¹² John Reed, *México Insurgente*. Barcelona: Ariel, 1969, p. 116.
- ¹³ John Womack, *Zapata y la Revolución Mexicana*. México: Siglo XXI Editores, 1969, p. XI.
- ¹⁴ Ese documento, concebido como un *Manifiesto al Mundo* y firmado por Otilio Montaño, es del 21 de julio de 1913. Aparece en José Valero Silva, *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, Vol. 2. México: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1967, pp. 190-196.
- ¹⁵ Ley Agraria de 1915. Reproducida en Womack, J., *op. cit.*, pp. 398-403.
- ¹⁶ Gómez Morín, M., *op. cit.*, p. 21.
- ¹⁷ Arturo Warman, *...Y venimos a contradecir*. México: SEP/CIESAS, 1988, p. 115. La 1ª edición es de 1976.
- ¹⁸ Womack, J., *op. cit.*, p. 237.
- ¹⁹ *Ibid.*, p. 269.
- ²⁰ Warman, A., *op. cit.*, p. 116.

- ²¹ Jesús Sotelo Inclán, *Ratz y razón de Zapata*. México: Editorial Comisión Federal de Electricidad, 1970, pp. 119-120.
- ²² *Ibid.*, p. 360.
- ²³ *Ibid.*, p. 366.
- ²⁴ *Ibid.*, p. 543.
- ²⁵ Emiliano Zapata, citado por Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 79.
- ²⁶ Norman Studer, "My Mexican Notebook", en *The New Student*, 19/X/1928, p. 84. Citado por F. Tannenbaum, *op. cit.*, p. 61.
- ²⁷ Warman, A., *op. cit.*, pp. 150-152, 156.
- ²⁸ Tannenbaum, F., *op. cit.*, p. 165.
- ²⁹ Roger D. Hansen, *La política del desarrollo mexicano*. México: Siglo XXI Editores, 1971, p. 46.
- ³⁰ Warman, A., *op. cit.*, p. 164.
- ³¹ Tannenbaum, F., *op. cit.*, p. 167.
- ³² Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 87.
- ³³ Tannenbaum, F., *op. cit.*, p. 22.
- ³⁴ Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 117.
- ³⁵ Jean Meyer, *La revolución mejicana 1910-1940*. Barcelona: Dopesa, 1973, pp. 86 ss.
- ³⁶ Jean Meyer, *La Christiade*. París: Payot, 1975, pp. 31, 33-34.
- ³⁷ Jean Meyer, "Estado y sociedad con Calles", en *Historia de la Revolución Mexicana 1924-1928*, vol. 2. México: El Colegio de México, 1977, pp. 320-321.
- ³⁸ Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 132.
- ³⁹ Gómez Morín, M., "El crédito agrícola en México", en *1915 y otros ensayos*, pp. 44 y 47.
- ⁴⁰ José Vasconcelos, "Discurso en la Convención Antirreeleccionista", en *Discursos 1920-1950*. México: Ediciones Botas, pp. 132-142.
- ⁴¹ José Joaquín Blanco, *Se llamaba Vasconcelos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 154. Blanco registra ese discurso, "inexplicablemente excluido" de la citada edición de Botas. Apareció en *El Universal*, el 11 de marzo de 1929.
- ⁴² Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, pp. 133-134.
- ⁴³ Arturo Warman, *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Ed. Nuestro Tiempo, 1983, p. 46. La 1ª. edición es de 1972.
- ⁴⁴ Warman, A., *op. cit.*, pp. 47 y 48.
- ⁴⁵ *Ibid.*, p. 138.
- ⁴⁶ Frank Tannenbaum, "Algunas reflexiones sobre la Revolución Mexicana". En Stanley Ross, *¿Ha muerto la Revolución Mexicana? Balance y epílogo*, vol. 2. México: SEP-Setentas, 1972, p. 34.
- ⁴⁷ François Xavier Guerra, *Del Antiguo Régimen a la Revolución*. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 342.
- ⁴⁸ Enrique Florescano, *El nuevo pasado mexicano*. México: Cal y Arena, 1991, p. 151.
- ⁴⁹ Alan Knight, *The Mexican Revolution*, vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp. 169-170.
- ⁵⁰ *Ibid.*, p. 170.

IV. Un compromiso entre dos utopías: Lázaro Cárdenas

Una fórmula conciliatoria

El día en que Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia explicó que gobernaría con el apoyo del pueblo y para las grandes mayorías populares: el anhelo de justicia social, dijo, era la esencia de la Revolución Mexicana. Aquel 30 de noviembre de 1934 afirmó que había visto y oído lo suficiente, durante su minuciosa campaña, para conocer algo de *la ignorancia y la pobreza más absoluta* que prevalecían en amplias regiones de un país hecho de *profundas desigualdades e inicuas injusticias*. Había que implantar en los campos y en las ciudades *un tipo de vida económica superior: una poderosa economía nacional*. Considerando entonces que *sólo el Estado tiene un interés general y, por eso, sólo él tiene una visión de conjunto*, advirtió que *la intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más a fondo*.¹

Medio siglo después podría confirmarse, en palabras de Carlos Pereyra, que *pocas veces en la historia un Estado había obtenido un grado tal de legitimidad y un dominio tan definitivo sobre la vida económica, política e ideológica de un país*.² Durante seis años se buscó conciliar la meta del Progreso como crecimiento económico con la demanda de bienestar para los olvidados. Fue un experimento audaz y controvertido para modernizar al país incorporando a los pobres en la edificación del “México nuevo”. Cuando Ezequiel Padilla llamó la atención de Cárdenas, en abril de 1935, sobre la zozobra generada por la agitación obrera y sugirió que “México estaría destinado a ser un remanso de prosperidad en el mundo” y que su período presidencial podría “pasar a la historia como el constructor de nuestra grandeza económica”, la respuesta fue:

No vivimos en los tiempos en que basta fundar una “prosperidad” a secas. Correríamos el riesgo del porfirismo: creyó que estaba afianzando la prosperidad y sólo estaba preparando la revolución[...].³

Falta un balance con suficiente distancia y objetividad de aquel período y de su protagonista a la luz de la historia posterior pero también de la pasada. Una evaluación de sus múltiples aristas que trascienda el cúmulo de interpretaciones que han oscilado entre la apología y la inclemencia crítica, procedentes de la derecha o de la izquierda. Si Frank Tannenbaum lo acercó a Gandhi por un carisma que emanaba de la persona y no del cargo, también le descubrió algo “del antiguo demócrata jeffersoniano”. William Townsend hizo el retrato ideal de la “figura legendaria del demócrata mexicano”. En el otro platillo de la balanza, junto a las miopes malinterpretaciones de algunos de sus contemporáneos que le descubrían proclividades al “comunismo”, se sucedieron las severas revisiones, desde la izquierda, de Arturo Anguiano, Arnaldo Córdova o Arturo Warman. Queda pendiente la exploración del peso específico que tuvieron, en aquel régimen, los elementos modernizadores y los tradicionales y las contradicciones que probablemente se generaron en el difícil intento de conciliarlos. Porque ahí estuvo, probablemente, lo más original del proyecto cardenista y quizás ahí se originaron algunos de sus éxitos más notables lo mismo que algunos de sus fracasos.

Y es que Cárdenas intentó aliar, en la práctica de sus decisiones, a los dos Méxicos: al que venía de muy atrás con el que la élite había deseado y se había propuesto desde 1824. Quiso echar las bases de un país moderno, lanzado por fin al crecimiento industrial, pero le hubiera gustado hacerlo sin darle las espaldas al país antiguo que seguía siendo rural, católico y reacio a los hábitos de la acumulación capitalista. Es probable que su cabeza, o el cálculo racional, lo inclinara a abrazar aquel proyecto mientras su corazón latía cerca de la tierra y lejos de la gran ciudad, ese sitio “donde todo está corrompido”, apreciación suya que consta en testimonio de Tannenbaum y que coincide con otra expresada, en el mismo sentido, por Vicente Guerrero.⁴ A una extracción campesina semejante a la propia atribuí, significativamente, la integridad y el nacionalismo de los militares que lo rodeaban, en contraste con las veleidades de muchos civiles y ese temperamento marcará los aspectos más apreciables de su estilo de gobernar.

Tannenbaum, que durante treinta años pudo observarlo de cerca con mucha frecuencia, dejó el testimonio del vínculo que hacía con la gente del campo, con un interés absolutamente real, con una simpatía y una compasión verídicas, que también Townsend atestiguó. El hábito de escucharlos se le hizo tan consustancial que lo siguió practicando hasta su muerte, en un recorrido infatigable por todo el territorio como “oidor” de quejas y necesidades que procuraba canalizar con buenos oficios cuando ya no estaba en sus manos remediarlas. Hubiera querido, en seis

años, enderezar males de siglos. Aquel hombre tranquilo, moderado, tolerante, respetuoso de la vida y la legalidad y enemigo de la violencia, que hablaba en voz baja como el pueblo mexicano, dirigió sus esfuerzos a rescatar del olvido a los olvidados del campo, que seguían siendo la gran mayoría de los mexicanos, y a tratar de procurarles sustento, salud y educación.

Mediante la consolidación de un Estado y una presidencia fuertes quiso conjugar las demandas del México tradicional con las pretensiones del México que aspiraba a ser moderno, buscando favorecer a la vez bienestar social y desarrollo económico. Contemplando a distancia de medio siglo el episodio cardenista, sigue pareciendo notable la intuición política que le hizo procurar una articulación tan compleja de lo que sólo había cristalizado simbólicamente y jurídicamente, hasta ese momento, en la Constitución de 1917.

Un gran padre generoso para una orfandad de siglos

Cárdenas fortaleció el papel del Estado y del presidente y confirmó así una tendencia que había sido del antiguo régimen y que era parte del proyecto de los caudillos del Norte. Pero ese Estado y ese gobierno fuertes no fueron concebidos para propiciar la bonanza de unos cuantos “científicos” ni de unos cuantos caudillos porque, como bien ha observado Daniel Cosío Villegas, *la historia mexicana ha enseñado hasta la saciedad que la riqueza no es contagiosa*,⁵ y Cárdenas había aprendido esa lección y estaba convencido de lo improbable de semejante “goteo”.

No puede negarse que su ejercicio del poder tuvo un ingrediente muy tradicional, fundado en la dependencia personal de quien ocupa el lugar y ejerce la función paterna. Representó como líder el papel de un “gran padre” para un pueblo que arrastraba una orfandad de siglos. El remoto atavismo que depositaba esperanzas ilimitadas en una autoridad omnipotente que pudiera derramar beneficios contó, probablemente, en la adhesión a Cárdenas. Pero esa vez la autoridad no iba a ejercerse arbitrariamente ni el sueño de los mexicanos les sería burlado. Quizá por eso pudo transferirse al Estado un buen vínculo de reconocimiento e identificación con el padre. Porque era un padre que reconocía a los hijos como propios y que los afirmaba en una identidad que casi siempre les había sido escamoteada:

La expropiación electrizó y unificó a México como nunca antes había estado unido, ni siquiera durante el período de la Independencia. Dicho acto le dio a México la sensación de haberse liberado e hizo que ya no le temiera a Estados Unidos. México había alcanzado la igualdad política con su vecino del Norte de un solo salto y esa experiencia era vivificante. El flujo de energía creadora y de confianza en sí mismo que ha colmado los años que siguieron a la expropiación del petróleo es el resultado directo

del despertar espiritual que ésta precipitó. Por primera vez en su historia, por lo menos desde la conquista española, los *mexicanos se veían a ellos mismos y aprobaban lo que veían. Ya no deseaban ser europeos ni norteamericanos. Estaban contentos con ser lo que eran y estaban sumergidos en su propia valía*[...]. De hecho, ahora podían ser buenos amigos de los Estados Unidos[...].⁶

Esa amistad floreció propiciada por la secuela de la Gran Depresión, que condujo a Roosevelt a aplicar las recomendaciones keynesianas de pleno empleo, dentro del marco de un Estado benefactor. Josephus Daniels, el embajador cuya amistad con el presidente reflejó aquella atmósfera propicia, lo formuló muy claramente:

Cuando Cárdenas inició su período me pregunté, esperando que así fuera, si el *New Deal* en México, encarnado en el Plan Sexenal, sería el equivalente del *New Deal* de Roosevelt en los Estados Unidos. Pronto comprobaría que el “Actuaré como Presidente” fue un aviso a Calles de que había llegado a su fin el maximato y de que el Plan Sexenal beneficiaría a los marginados de México. No tuve que esperar mucho para comprobar que una Nueva Era se había inaugurado en México.⁷

Y el propio Cárdenas, en una conversación con Tannenbaum, lo reconoce: *Tuve mucha suerte en haber sido presidente de México cuando Roosevelt era presidente de los Estados Unidos*...⁸

Un mosaico de criterios y un Estado catalizador

El “socialismo” que Cárdenas decía profesar y que recorre su discurso es, en la práctica, un propósito de favorecer el despegue de un desarrollo material vigoroso pero asegurando, a la vez, el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y de los obreros. Rechazaba tanto el “liberalismo capitalista” como el “capitalismo de Estado” del modelo soviético. Pero era indudablemente un partidario del Progreso que pretendía impulsar sirviendo, al mismo tiempo, los fines del desarrollo humano. De ahí los calificativos de “reformista” (Tzvi Medin) y de “populista” (Carlos Pereyra) que se le han asignado. Arnaldo Córdova lo interpretó así:

[...] Cárdenas es una criatura de la Revolución Mexicana, ideológica y políticamente. La idea central de su concepción en torno a la vida social lo es la idea del *progreso de México*, convertida muchas veces en una reducción pragmática del progreso como *progreso material*. Para Cárdenas el desarrollo de México no se daba ni como desarrollo capitalista ni como desarrollo socialista en el sentido marxista. La Revolución perseguía la

*construcción de una sociedad igualitaria, pero no debía desembocar en una organización comunista de la economía y de la política. Ni capitalismo ni comunismo: tal era la aspiración revolucionaria. [...] en los hechos condujo su política como si el régimen de la Revolución pudiera contener tanto al capitalismo como al comunismo, es decir, como si fuera una síntesis de ambos.*⁹

Lo había anticipado en su campaña:

Lo principal de la nueva fase de la Revolución es la marcha de México hacia el socialismo, movimiento que se aparta de las normas anacrónicas del liberalismo clásico. Del liberalismo se separa porque éste no fue capaz de generar en el mundo sino la explotación del hombre por el hombre, al entregarse, sin frenos, al egoísmo de los individuos. Del comunismo de Estado se aparta, igualmente, porque ni está en la idiosincrasia de nuestro pueblo la adopción de un sistema que los priva del disfrute integral de su esfuerzo, ni tampoco desea la sustitución del patrón individual por el Estado patrón.¹⁰

Y, en efecto, la Revolución asumió, en la experiencia cardenista, los dos rostros de la modernidad, forjados en el mismo crisol que generó la idea de la marcha fatal de la humanidad hacia una meta superior llamada Progreso. Queriendo rescatar lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo no los incorporó en estado puro, sino que procuró una alianza *sui generis*, coherente con la busca que estaba haciendo el *New Deal* de una fórmula atemperada y equitativa para distribuir mejor el bienestar.

El proyecto de Cárdenas era el proyecto modernizador, sólo que marcado por una confianza ilimitada en las virtudes del cooperativismo, como lo hizo explícito en su cierre de campaña:

[...] siguiendo los lineamientos del Plan Sexenal, *se impulsará la organización cooperativista en la República*, que capacitará a los trabajadores para la conquista de las fuentes de riqueza y de los instrumentos productivos, que es el ideal de la doctrina socialista de la Revolución[...]. Mientras esto se logra, *es indispensable realizar los principios del plan sexenal, que señala la formación de una economía nacional dirigida y regulada por el Estado*, que libre a México del carácter de país de economía colonial[...].¹¹

Quizás el núcleo de la meta que se había propuesto se apuntó en una entrada del *Diario* correspondiente al término de su campaña, cuando resumió las observaciones recogidas:

[...] México debe lograr su desarrollo por el propio *esfuerzo organizado* de los mexicanos. De seguir México con un sistema individualista perderemos de aprovechar las

riquezas naturales y las ventajas agrícolas e industriales que ofrece el país. *Unidos en acción los mexicanos haremos de México un país próspero. Nuestro pueblo presenta un mosaico de criterios. Trataremos de fundirlos en uno solo.*¹²

El Estado sería el catalizador de esos diversos criterios de México: un Estado por encima de las clases, organizadas en un sistema político polarizado en torno al Poder Ejecutivo. La tendencia al fortalecimiento del Estado para promover el desarrollo venía de atrás y se había vinculado estrechamente al ejercicio ilimitado del poder presidencial. La fundación del PNR había tendido a consolidar la unidad de un Estado puesto en jaque por la lucha de facciones e intereses. Fue obra de Calles, que no tenía duda de la función que debía cumplir el Estado en el fomento del crecimiento. Cárdenas consignó en sus *Apuntes* una plática, en julio de 1933, cuando el Jefe Máximo insistió *en la necesidad de organizar la economía del país, que puede encauzarse prósperamente si el Estado ejerce una vigilancia para orientar sus actividades de producción y consumo.*¹³

En el informe de la Comisión Dictaminadora sobre el Plan Sexenal, aprobado por la segunda Convención del PNR, se advertía cómo la tesis en la que se fundaba ese plan era:

[...] que el Estado mexicano habrá de asumir y mantener una política de intervención reguladora de las actividades económicas de la vida nacional; es decir: franca y decididamente se declara que en el concepto mexicano revolucionario, el Estado es un agente activo de gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país; no un mero custodio de la integridad nacional, de la paz y el orden públicos.¹⁴

Froylán Manjarrez, que había sido constituyente y fue uno de los redactores del dictamen, advirtió que el Plan no hacía más que recoger una “necesidad de los de abajo”, más sentida que expresada, y una “tesis absolutamente mexicana” que se había concretado en la Constitución y que era anterior a cualquier teoría social de aplicación posterior.¹⁵ Se trataba de poner en práctica un ideario que la Constitución había plasmado como meta a alcanzar, no como realidad vigente. A Manjarrez le interesaba dejar clara la paternidad de los constituyentes: la necesidad de un Estado fuerte era un sentimiento compartido por la nación y no germinado en otra latitud ni en otra revolución.

Si el proyecto de un Estado fuerte había sido también el de los caudillos, Cárdenas puso todo el énfasis en el apoyo en las fuerzas populares como motor del Progreso. La consolidación del poder político centralizado como pivote de la modernización se haría, tal era por lo menos el propósito, elevando el nivel de vida de todos.

En un discurso en Iguala, el 11 de mayo de 1934, se anunció la importancia esencial que tendría *la organización para llevar progreso al pueblo*: no se trataba de

lanzar vítores o hacer manifestaciones sino de que campesinos y obreros hicieran suya

[...] una preocupación constante por *agruparse en un solo frente*, por despojarse de los prejuicios que estorban su marcha ascendente, por arrollar todos los obstáculos que se opongan al triunfo de los postulados de renovación social.¹⁶

Arnaldo Córdova ha señalado cómo el afán de organizar a una sociedad que Cárdenas consideraba anárquica y escindida en intereses dispersos fue el núcleo casi obsesivo de aquel proyecto dirigido a encaminar esos intereses en un sentido coincidente. El Estado sería el intérprete del *interés general*: algo de la diversidad de aquel *mosaico de criterios* había de menoscabarse, sin remedio, en el camino.

Todo empieza en lo más pequeño

En su discurso inaugural, el presidente había anunciado que se proponía entregar de verdad a los habitantes de cada municipio la administración del ayuntamiento —*la más pequeña célula de nuestras instituciones políticas*— pero también, como advirtió Luis González, *la mejor para aprender a mandar o a no dejarse mandar*.¹⁷ Tannenbaum le atribuyó el ideal de

[...] una nación de aldeas independientes autónomas, en la que cada individuo tuviera seguro su lugar en su propio ejido, estuviera libre de explotación y fuera un participante activo de los asuntos de su comunidad[...].¹⁸

Algo que se parecería mucho a *la refundación del Estado, entendido como comunidad de pueblos* que Womack consideró la suma de la visión política de Zapata. ¿Hasta qué punto coincidían ambas visiones?

Tannenbaum fue aun más explícito al consignar un comentario del propio Cárdenas: *cuando toda la tierra les pertenezca a los pueblos, el gobierno también les pertenecerá*.¹⁹ De acuerdo con esa argumentación, el reparto de tierras habría sido realizado en tan amplia dimensión porque el presidente lo consideraba esencial para la democracia. El vínculo en común con la tierra, asociado a la noción de democracia, parecía aludir al viejo consenso de los pueblos reunidos en asamblea. Y a aquella vocación de autonomía que, sin duda, formaba parte de una entrañable vocación que nunca había podido satisfacerse plenamente. En el mismo sentido abundó en la caracterización de Cárdenas, insistiendo en

[...] su tenacidad y preocupación por las cosas pequeñas: una escuela aquí, unas vacas allá, un pequeño puente o un camino, o algo particular: la posibilidad de ser enviado al hospital cuando uno estuviera enfermo, o de lograr un poco de dinero cuando la necesidad apremiaba.²⁰

Todo eso configuraba la parte de Cárdenas que era quizá la más auténtica: su identificación con el México rural de las pequeñas comunidades. Disposición que iba más allá de la simpatía y era, más que algo pensado, un sentimiento de fidelidad a los propios orígenes y una disposición de talante.

Por única vez, acaso, en la historia del país, un presidente intuía que el bienestar es algo que sólo se consigue buscando pequeñas soluciones para las cosas pequeñas y procurando que funcionen, para que la suma de muchas pequeñeces eficientes pueda conjugarse en un bienestar generalizado. Aunque la organización que se armó entonces condujera a resultados muy distintos y distantes, es importante apuntar que por lo menos, aunque no se avanzara mucho más allá del nivel de los buenos deseos, se vislumbró en aquel momento una aspiración: la de que todos los pueblos se rigieran democráticamente. Siendo la suma de muchas experiencias locales democráticas, el país llegaría a ser, por fin, una nación democrática. Parece evidente, sin embargo, que Cárdenas no razonaba como Zapata: apreciaba las virtudes del país tradicional pero quería vaciarlas en el molde de otro país, incorporado al Progreso, que la organización permitiría forjar.

La Iglesia y los indios

Fue notorio el tacto para abordar con prudencia y lucidez la cuestión religiosa. Haciendo a un lado sus propios puntos de vista acerca del “fanatismo” y los “prejuicios” y a pesar de una sincera convicción, arraigada en la tradición liberal mexicana, de las ventajas de una enseñanza que transmitiera “una concepción racional y exacta del Universo y la vida social”,²¹ había cosechado en el trato directo con la gente una sabiduría que refrendó su propia tolerancia a la libertad de creencias. Canceló, así, la ofensiva iniciada por los sonorenses y propició la reconciliación entre todos los mexicanos que en su mayoría eran, evidentemente, católicos y el Estado nacional producto de la Revolución. Rescató de esa manera un elemento esencial del México tradicional, entendiendo que

[...] no es competencia del gobierno emprender campañas antirreligiosas con lo que no se consigue más que gastar estérilmente el esfuerzo de los servidores públicos, levantar resistencias y aplastar indefinidamente el cumplimiento de los postulados económicos y sociales, básicos para el bienestar del pueblo [...].²²

Esa actitud, que propició la reapertura de los templos en la primavera de 1936, explica que en muchas iglesias del país, como lo consignó Jean Meyer, los sacerdotes hayan encabezado colectas cuando sobrevino, en 1938, la expropiación petrolera.

En cuanto a los indios, Cárdenas se propuso sacarlos de la miseria sin arrancarlos de la tradición. Townsend transcribió un comentario que le hizo años después de haber dejado la presidencia:

Naturalmente que el problema indígena es imposible resolverlo en seis años, pero esto no es ninguna excusa para abandonarlo. A los indígenas deben otorgárseles sus derechos, aunque para ello tengan que pasar cincuenta años[...].²³

Al tomar posesión se había referido “al grado de retraso de los aborígenes” y a la “estoica voluntad” que conservaban de sus antepasados. Señaló el “divorcio de siglos” y el “estancamiento” que obstaculizaba la cohesión nacional. Pensaba que habría que organizarlos en cooperativas en las zonas propicias, como las extensiones boscosas y maderables, y hablaba de convencer a los que habitaban zonas estériles para que se desplazaran a otras más productivas. Todo ello respondía, por supuesto, a un afán de verlos incorporados al progreso. Tannenbaum apuntó cómo en el Yaqui, en 1937, comentaba “melancólicamente”: *Aquí seguimos siendo extranjeros*. Como se verá al examinar la modalidad que tuvo en esa etapa el reparto agrario, prevaleció el propósito de incorporar a los indios al proyecto de agricultura comercial, allí donde ya existiera o donde hubiera condiciones para implantarla. Por eso dirá en Yucatán que

[...] las tierras deben dárseles para que ustedes mismos sigan cultivando el henequén. El espíritu de la ley no debe interpretarse en el sentido de que la dotación de tierras a los campesinos sea únicamente para que resuelvan el problema de su alimentación, y por lo tanto, no deben buscarse, como se pretende aquí, tierras donde cultivar el maíz y el frijol[...].²⁴

Al terminar su período seguirá pensando que hay que “mexicanizar al indio” para que se incorpore plenamente a la comunidad nacional pero advirtiéndolo:

Lo que se debe sostener es la incorporación de la cultura universal al indio, es decir, el desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales de la raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo todos los implementos de la técnica, de la ciencia y del arte universales, pero siempre sobre la base de respeto a la personalidad racial, a su conciencia y a su entidad.²⁵

Es verdad que asimilaba “la emancipación del indio” a “la del proletario de cualquier país” y que no podían ser los suyos criterios antropológicos todavía embrionarios entonces. Pero sería mezquino escatimarle el reconocimiento de que es

[...]la primera ocasión en que el presidente aparece en el horizonte de los indios, mestizos y trabajadores rurales, en general, como alguien que se preocupa y hace algo a favor de los humillados y ofendidos [...].²⁶

La tradición de Tata Vasco sustentaba, desde el fondo de la experiencia novohispana, el proyecto reivindicatorio de Tata Lázaro.

Un país para todos

El reparto de la tierra empezó a prepararse a mediados de 1935, propiciando la formación de Ligas de Comunidades Agrarias en cada uno de los estados, para juntarlas más tarde en una Confederación, y creando el Banco de Crédito Ejidal. Al mismo tiempo, se aprobó una Ley de Salario Mínimo, que beneficiaría a los trabajadores industriales.

La consolidación del poder y la liquidación del caudillismo, sin derramar una gota de sangre, le tomó al presidente año y medio. A pesar de los esfuerzos del último caudillo por pintarle de rojo el rostro al presidente, se consolidó la amistad con los Estados Unidos, que Roosevelt conducía por el camino del *New Deal*. El apoyo del gobierno a las demandas de un movimiento obrero cada vez más organizado por Vicente Lombardo favoreció que aquéllas se expresaran en numerosas huelgas y manifestaciones. Y que la otra parte del sector moderno, los empresarios, manifestara desconfianza e incertidumbre. Cuando el Centro Patronal de Monterrey acordó un paro por inconformidad con un laudo favorable a la huelga de la industria vidriera, el presidente se hizo presente y resumió en catorce puntos los principios de su política obrera, para concluir advirtiendo:

Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico; el paro no [...].²⁷

Unos días después había quedado constituida la Confederación de Trabajadores de México (CTM). La desconfianza y la incertidumbre plasmaron en un memorial de representantes de la banca, la industria y el comercio. Se le reprochaba al presidente que escuchara con menos frecuencia la opinión de empresarios que la de sindicatos obreros. El 14 de marzo Cárdenas respondió, en un discurso transmitido por la estación radial del PNR, que por primera vez en la historia de la República un gobierno tenía una orientación clara y definida puesto que respondía, estrictamente, a un programa elaborado previamente. La respuesta incluía precisiones significativas:

Otorgar tratamiento igual a dos partes desiguales no es impartir justicia ni obrar con equidad. La legislación sobre el trabajo [...] tiene en todos los países un carácter tutelar respecto de los trabajadores [...]. Las huelgas son fenómenos propios del reacomodo de los factores de producción [...]. Si se resuelven con espíritu comprensivo y justiciero a la postre producen beneficios a la economía en general [...] sería de desearse que la producción tuviera por norte satisfacer las necesidades del consumo, a precios mínimos. Pero eso que ustedes presentan como una realidad no es sino un término ideal ya que, dentro del actual período evolutivo de nuestro régimen económico, es todavía el lucro el único móvil de los industriales[...]. La decisión que ustedes muestran de no entregar sus fábricas, sus negocios o sus empresas es la mejor prueba de que les rinden utilidades muy estimables [...]. No es deseo del gobierno que empresario alguno renuncie a sus derechos y entregue los elementos de producción que posee. Pero [...] el interés social se lesiona cuando los propietarios se abstienen de ejercer correctamente sus funciones, escudados en un concepto anacrónico de la propiedad[...]. Las huelgas[...] favorecen al interés social porque ayudan a resolver el más grave de los problemas de México: la miseria de los trabajadores[...].

En aquella intervención difundida por radio, el presidente fue categórico:

*[...] Con fundamento en datos innegables, puede afirmarse que no se justifica el pesimismo [...], que hay recuperación y que no es infundado esperar una progresiva mejoría[...].*²⁸

No era un juicio parcial ni subjetivo, si tomamos en cuenta la evaluación que hizo Raymond Vernon del crecimiento en aquel período:

*[...] la industria tuvo actuación estelar en la economía mexicana durante la década de 1930[...] después de una breve depresión en los primeros años[...] este sector se expandió rápidamente[...]. No sólo los viejos baluartes como productos textiles, cerveza, azúcar, zapatos, jabón y tabaco incrementaron su producción: también lo hicieron nuevos ramos como cemento, hierro y acero[...]. El uso de energía se elevó firmemente de 1925 a 1940[...]. Se aprecia con toda claridad que la economía mexicana había empezado a despertar[...]. A partir de 1935 Cárdenas lanzó un extenso programa de obras públicas, con los efectos usuales de estimular la demanda[...] también ofreció a los jóvenes industriales del país oportunidades más frecuentes para obtener una sustancial utilidad, con poco riesgo[...].*²⁹

Arnaldo Córdova ha señalado que Cárdenas estaba convencido de la necesidad inaplazable de un programa de reformas sociales como requisito para la estabilización política y económica del país.³⁰ De ahí su advertencia a los empresarios:

[...] la opresión, la tiranía industrial, *las necesidades insatisfechas* y las rebeldías mal encauzadas, son los explosivos que en un momento dado *podrían determinar la perturbación violenta tan temida* por ustedes.³¹

Conceder reformas era indispensable para evitar la violencia. Un desarrollo estabilizador estaba en la mira. Dentro de ese propósito hay que ubicar las modalidades que tuvo el reparto de la tierra.

Lo antiguo y lo moderno en el reparto cardenista

En 1930 había en México 3.5 millones de hombres que trabajaban en el campo, de los cuales no poseían tierra alguna 2.5 millones, es decir, el 68%.³² Después de quince años de reforma agraria había todavía más de 13 mil hacendados con extensiones de más de mil hectáreas, lo que equivalía al 83% de toda la tierra de propiedad privada: el resto correspondía a 60 mil propietarios medianos y pequeños. Unos 668 mil ejidatarios beneficiados por el reparto apenas disponían, en algo más de 7 mil ejidos, de la décima parte de la tierra que aprovechaban los latifundios.

La recesión económica mundial se traducía en reducción de las exportaciones agrícolas y desempleo. La gran mayoría de los campesinos no tenían tierra y se alquilaban como asalariados. Al desplomarse la agricultura comercial, esos jornaleros constituyeron núcleos álgidos de presión. El reparto de las grandes plantaciones se dio en sitios donde, por una u otra circunstancia, la situación era crítica. Según Nathaniel y Sylvia Weyl, la concentración de la tierra

[...] había alcanzado todavía más notables proporciones en México que en aquellos países de la América Latina que se habían desarrollado bajo dictaduras conservadoras sin haber realizado una revolución popular.³³

Repasando los *Apuntes* de Cárdenas en campaña se advierte cómo fue configurándose un proyecto que, sin desatender las demandas de dotación o ampliación de los pueblos antiguos, se dirigió sobre todo a fraccionar latifundios donde se practicaba desde siempre la agricultura comercial. Vendría enseguida la organización de los jornaleros, convertidos en ejidatarios, en cooperativas. Las metas explícitas eran aumentar, por un lado, el poder adquisitivo de los campesinos y, por el otro, mejorar la economía del país. Al tomar posesión se había propuesto el presidente resolver las dotaciones de tierra aunque no hubiera recursos inmediatos para ponerlas a trabajar. En seis meses repartió poco más de 500 mil hectáreas, sin afectar todavía a la gran agricultura comercial. El 1º de septiembre de 1936 registraba:

El Plan sexenal fijó para los seis años treinta millones para crédito de ejidatarios y en año y medio (ya) se han entregado al Banco Nacional de Crédito Ejidal.³⁴

El 6 de octubre se ordenó la dotación de ejidos a núcleos de población de la Comarca Lagunera. Organizados como sociedades cooperativas de crédito por el Banco Ejidal, iniciarían una modalidad hasta entonces inédita de reparto agrario: el ejido colectivo.

El ejido colectivo fue una variante que recordaba la antigua propiedad corporativa de los pueblos, pero con un elemento completamente moderno: la organización cooperativa. Anunciada en el Plan Sexenal, era acariciada por Cárdenas como la fórmula que permitiría, idealmente, la preservación de la capacidad productiva de las grandes plantaciones entregadas ahora a los antiguos asalariados agrícolas.

Townsend ha apuntado que el interés le venía de una experiencia realizada en Jiquilpan durante su administración como gobernador. Se trataba de una hacienda cañera dotada a 300 ejidatarios. Uno de ellos, que había sido bracero en Estados Unidos y había observado allí el sistema cooperativo, convenció a los demás para que se agruparan de esa manera: el resultado había sido muy exitoso, tanto que llegaron a comprar terrenos colindantes además de la maquinaria necesaria para explotar la caña en gran escala.³⁵ El ejido colectivo sería, se pensó,

[...] la síntesis natural entre la eficiencia económica, íntimamente ligada con economías de escala, y los objetivos sociales de justicia perseguidos por la Reforma Agraria[...].³⁶

Se pretendía entregarle al ejido la función de sustentar el desarrollo del país:

[...] la institución ejidal tiene hoy doble responsabilidad sobre sí: como régimen social, por cuanto libra al trabajador del campo de la explotación de que fue objeto[...] y como sistema de producción agrícola, por cuanto pesa sobre el ejido, en grado eminente, la responsabilidad de proveer a la alimentación del país[...].³⁷

A la antigua reclamación de restitución de los pueblos, fundada en la tradicional inclinación de los campesinos a cultivar los básicos para la subsistencia, se añadía un elemento nuevo: les correspondería hacerse cargo de la alimentación del país entero. Las cooperativas ejidales fueron un injerto de lo moderno en lo tradicional que corrió suerte diversa según las circunstancias. La asamblea de cada ejido decidiría si optaba por la organización individual o por la colectiva. Restrepo y Eckstein se inclinaron a pensar que la opción colectiva se tomó por convencimiento de la gente y no por presión. Es probable que, en el caso de La Laguna, los sindicatos existentes ejercieran labor de convencimiento pero tampoco es improbable que, efectivamente, una mayoría se inclinara por la fórmula colectiva.

Los sinsabores del ejido colectivo

Cuando a principios de los años setenta se quiso revitalizar la experiencia del ejido colectivo, después de muchos años de deterioro, Restrepo y Eckstein hicieron una cuidadosa evaluación del transcurso del experimento, sopesando sus aciertos y sus errores. El veredicto fue *que la organización colectiva ejidal fue eficaz en La Laguna* pero sólo cuando coincidieron factores internos y externos propicios: líderes honrados y capaces y un apoyo del Banco sin reticencias ni rigideces; administración eficiente y aliento empresarial entre los ejidatarios.³⁸ El ejido El Manantial fue el ejemplo más notorio de éxito. Pero, a partir de 1940, abundaron las acciones dirigidas contra los ejidos colectivos que, aunadas a las numerosas dificultades que suponía la organización, hicieron más ostensibles los resultados negativos. Se retiró el apoyo político, se generalizó la corrupción y el ejido se convirtió en botín partidista, como sucedió en todas partes.

Los presupuestos, de entrada, parecían propicios. Se trataba de tierras fértiles y en buena parte irrigadas, que producían algodón para el mercado, trabajadas por una población mestiza: 146 mil hectáreas de la vasta comarca de 6 mil km² que comprende el sur de Coahuila y el oeste de Durango. El problema esencial fue el exceso de beneficiarios. Donde había 15 mil trabajadores permanentes y 15 mil de empleo estacional, más otros 5 mil eventuales, se dotó a la totalidad: 35 mil campesinos en 300 ejidos, para explotar la tierra sin interrupción y obtener de esa tierra todos sus ingresos. Dada esa presión numérica, la dotación de tierras de riego resultó insuficiente para las necesidades mínimas. Se aceleró mes y medio el proceso de dotación para no perder un ciclo agrícola. Y, además, como los hacendados pudieron escoger sus áreas inafectables a lo largo de los canales de riego o vendieron a tiempo a parientes y amigos, se quedaron con las tierras más aptas y los ejidos se formaron con los pedazos que quedaron, sin la compactación deseable. En la tierra de propiedad privada quedó, además, la mayoría de la maquinaria y equipo. El exceso de beneficiarios para recursos limitados habría tenido que resolverse generando otras actividades susceptibles de ocuparlos, algo que quizás era difícil anticipar y que después jamás se hizo.

La Escuela Práctica de Santa Teresa, creada en 1936, fue el intento más ambicioso de enseñanza técnica para la producción que se realizó en el país. La meta era formar a los jóvenes para dirigir las sociedades cooperativas: pero de los 150 que se formaron en tres años, sólo 30 siguieron siendo agricultores. Y, a partir de 1944, se convirtió en una preparatoria con criterios urbanos, sin ningún rastro del propósito inicial.

A pesar de todos los factores negativos que contaron desde un principio, fundamentalmente la sobrepoblación, hacia 1946 se había duplicado la producción de algodón y de trigo: *el esperado derrumbe en la producción no se produjo y todo parecía*

indicar un despegue sostenido [...].³⁹ A partir de 1940, el Banco descuidó la organización ejidal y el crédito fue llegando sólo a la mitad y a veces sólo a la tercera parte de los ejidatarios. La población creció todavía más, con la llegada de gente de otras regiones del país. Pero, si atendemos la minuciosa evaluación que aporta todos esos datos, hay que consignar:

los dos años siguientes al reparto de la tierra, se distinguen por el éxito logrado, no sólo en el campo económico sino también el social y en el organizativo. Las sociedades obtienen utilidades, no obstante que la fibra obtuvo en esos años un precio bajo. Las 16 plantas despepitadoras manejadas por las sociedades obtuvieron, en todos los casos, utilidades muy significativas. Las 48 cooperativas y las centrales de maquinaria, administradas y controladas por personal ejidal, reducen cuotas de operación y permiten una mejor coordinación atendiendo oportunamente las necesidades de cada sociedad. Paulatinamente, la labor de los distintos organismos ejidales fue cada vez más efectiva; así, los comités consultivos atendieron[...] la educación, la salud, la organización de tiendas cooperativas[...].⁴⁰

La Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal obtenía el crédito; cuidaba de todo el proceso desde la cosecha hasta la venta; manejaba las estaciones de maquinaria y los almacenes que distribuían a tiendas cooperativas de consumo; operaba las plantas procesadoras de los productos agrícolas; administraba los servicios de salud, promoviendo la instalación de agua potable, e impulsaba la educación, combatiendo el analfabetismo. De acuerdo con los autores citados, funcionó democrática y eficazmente hasta poco después de 1940:

Cuando el presidente Cárdenas entregó el poder a fines de 1940, al ejido colectivo se le consideró con menor simpatía y con cierta desconfianza y suspicacia, basándose más en consideraciones políticas que en las de índole económica. La base ideológica izquierdista que se le atribuía a la colectiva fue considerada como peligrosa en una atmósfera rural explosiva.⁴¹

Muy pronto se desconoció a la Unión como representante de los ejidatarios, negándole el derecho a intervenir en todo lo referente a producción y comercialización. Exigiendo el pago inmediato de un adeudo de 2 millones de pesos, el Banco se hizo cargo de las centrales de maquinaria, plantas industriales y equipo, alegando que la Unión había demostrado su incapacidad para dirigir tales empresas sobre principios estrictamente comerciales.⁴² Se propició la división de los campesinos y, mientras que la Unión Central siguió sosteniéndose sólo con cuotas de los cooperativistas, la Liga de Comunidades Agrarias afiliadas a la Confederación Nacional Campesina(CNC) recibió todo el apoyo y el financiamiento del gobierno.

Originalmente se había estipulado que el 5% del valor de las cosechas se dedicaría a constituir un fondo social que, llegado el momento, permitiría a las cooperativas no sólo la autogestión sino también el autofinanciamiento. De acuerdo con un estudio de 1940, se pensaba alcanzar la meta en 1963. Mientras tanto, el tutelaje del Banco Ejidal debería ir disminuyendo progresivamente:

Este objetivo no se ha logrado. La tendencia ha sido, por el contrario, de continua expansión de las actividades del banco y de su jurisdicción invadiendo más y más todas las facetas de la economía ejidal.⁴³

La batida contra el ejido colectivo dismanteló aquella experiencia y las esperanzas que la habían apadrinado.

De lo que pasó en “el desierto poblado de agaves, el horizonte de espinas” de Yucatán, ha dado cuenta Fernando Benítez en ese doloroso testimonio que se llama *Ki, el drama de un pueblo y de una planta*. Recibieron allí 34 mil mayas el 70% de las plantaciones de henequén entre 1935 y 1937: 30% se repartió en esos dos años y, al acordarse en 1937 el reparto de un 40% más, el Banco Ejidal organizó en siete meses 247 sociedades cooperativas que agruparon a 34 mil ejidatarios que vivían en 384 poblados.

Es evidente que no resultaba nada fácil la organización de un número tan considerable de indígenas, en una estructura asociativa germinada en circunstancias modernas y ajenas. Seguramente muchos indios compartían aquel deseo, manifestado alguna vez por Carrillo Puerto, de deshacerse junto con el henequén del fatídico eslabón de la cadena de la servidumbre: por algo los plantíos habían sido destruidos en la guerra de castas. Por otra parte, el henequén estaba en crisis: aunque la demanda mundial se había triplicado, la participación de Yucatán había caído del 100% en 1901 al 32% en 1933. Los hacendados habían reducido aun más los jornales para enfrentar la crisis y, en muchos casos, se habían excedido en el corte de las hojas, alterando el ciclo ecológico de una planta que exige siete años de crecimiento para cortarse.⁴⁴

La condición de los mayas era acentuadamente precaria en la zona henequenera. Un estudio del doctor Azkenazy en 1936 la cuantificó en una carencia de calorías que oscilaba entre 50 y 70% y una mortalidad de 318 niños de cada mil antes de cumplir un año.⁴⁵ Fernando Benítez avaló el comportamiento del Banco, todavía entonces de Crédito Agrícola, entre 1935 y 1937, debido a la gestión ejemplar de un ingeniero Candelario Reyes:

Por primera vez los campesinos yucatecos gozaron de créditos y de servicios médicos; muchos tuvieron casas nuevas, molinos y plantas eléctricas, se construyeron carreteras[...] y durante 1935 y 1936 las sociedades henequeneras percibieron una ganancia de

\$671 187.22[...]. Los resultados iniciales de la reforma agraria no son, pues, desdeñables[...]. Los peones se habían transformado. En las juntas hablaban —un derecho que nunca habían conocido—, defendían su “ejido”[...].⁴⁶

Los errores en la distribución fueron grandes, sin embargo, en 1937: muchos ejidos recibieron plantíos que no habían llegado a la época productiva y sus beneficiarios tuvieron que alquilarse en los otros ejidos, como jornaleros. Algunas dotaciones estaban muy distantes de los sitios de residencia de la gente. Se dio el caso de tierras distribuidas, por errores burocráticos, a dos o tres ejidos. Entonces se le ocurrió al gobernador sacar del juego al Banco e inventar el Gran Ejido: un dominio sin fronteras que comprendería a todas las dotaciones. *Henequeneros de Yucatán*, con un gerente nombrado por él, abarcaría tanto a ejidatarios como a pequeños, medianos y grandes propietarios. Lamentablemente se aprobó el proyecto, que empezó a funcionar desastrosamente en abril de 1938, con 50 mil trabajadores y 200 mil hectáreas de cultivo:

La antigua tutela fue sustituida por una nueva, en todo contraria al espíritu de la reforma cardenista[...]. El Gran Ejido se manejaba, en efecto, como una gran hacienda. El gobernador era el nuevo patrono de 50 mil peones[...] los salarios y los racionamientos de trabajo, decretados por Henequeneros, no habían mejorado en nada la situación del campesino[...].⁴⁷

No fue afortunada, en resumen, la experiencia henequenera. La corrupción fue corroyendo a un engendro burocrático que trató como peones a los ejidatarios y los hizo sentir como tales.

Los otros repartos importantes se realizaron en el Yaqui, en Mexicali, en Michoacán y en Sinaloa. En el Yaqui fueron 17 mil hectáreas de riego y 36 mil de temporal, muchas pertenecientes a extranjeros, para 2 160 indígenas que recibieron *un promedio excepcional de 8 hectáreas de riego per cápita, es decir, más del doble que en La Laguna*.⁴⁸ Una carta de Ignacio Lucero, gobernador de los yaquis, le recordó al presidente, en febrero de 1937, los agravios de cuatro siglos que incluían la pérdida de la antigua Cajeme, convertida en Ciudad Obregón. Los ocho pueblos recibieron tierras en la margen derecha del río, hasta la sierra, y también ganado y tractores, disponiéndose el trazado de los canales necesarios para riego: las obras en beneficio de las tierras se hicieron a cambio de las muchas que ya no podían ser devueltas.⁴⁹

En Mexicali se organizaron 44 ejidos, en 90 500 hectáreas de la Colorado River Land Company, para 16 mil familias y otras 60 550 hectáreas fueron entregadas a colonos y pequeños propietarios. Los 44 ejidos se dividieron poco después en parcelas individuales, por decisión de los beneficiarios. En Lombardía y Nueva

Italia, donde 2 066 familias fueron beneficiadas con las 61 499 hectáreas de dos latifundios de la familia Cusi, no surgieron múltiples cooperativas sino dos grandes sociedades de crédito ejidal para las cuales el gobierno adquirió las instalaciones, maquinaria, ganado y huertas de las unidades expropiadas.⁵⁰ La última expropiación importante, en Los Mochis, alcanzó 55 mil hectáreas dedicadas a la caña de azúcar para 3 500 campesinos que se agruparon en 28 ejidos y siguieron trabajando toda la extensión como una sola unidad: la caña siguió moliéndose en el ingenio, que no fue expropiado.⁵¹

Si para 1930 los ejidos apenas ocupaban el 13% de la tierra cultivable en el país, para 1940 cubrían el 47%: la mitad de los campesinos y sus familias vivía en ejidos y en las haciendas quedaban menos de un millón.

Hay que advertir que, tomando en cuenta el total de dotaciones en la época de Cárdenas, la modalidad que predominó no fue la del ejido colectivo:

Más del 80% de los ejidos entregados a los campesinos durante el gobierno de Cárdenas fueron ejidos *parcelados*, con propiedad patrimonial campesina de las parcelas de cultivo y propiedad comunal inalienable de los bosques, pastos, aguas y eriales.⁵²

Todos los gobiernos anteriores, a partir de Carranza, habían repartido 7 717 607 hectáreas: Cárdenas repartió en su período 18 352 275 que beneficiaron a 1 020 594 ejidatarios. Había en el país, en 1940, un total de 15 mil ejidos con 25 324 568 hectáreas repartidas a 1 442 895 campesinos.⁵³ Sin embargo:

A pesar del reparto de [casi] 18 millones de hectáreas, México continuaba aún siendo, al final del sexenio cardenista, un país esencialmente latifundista, dado que cerca del 70 por ciento de las tierras se encontraban concentradas en predios de más de 500 hectáreas[...].⁵⁴

La intención de convertir al ejido colectivo en el motor del desarrollo agrícola del país para sostener sólidamente al desarrollo industrial fue, sin duda, bien intencionada. Pero no cumplió cabalmente ese objetivo por varias razones:

El ejido colectivo fue un intento por conciliar las empresas agrícolas que surtían al exterior con un programa radical en el reparto de tierra. La complejidad de la organización colectiva, los grandes recursos de financiamiento necesarios, junto con la resistencia de los filibusteros y hacendados extranjeros que estaban golpeados pero no difuntos, a los que se aliaban las voces que denunciaban al “comunismo”, frenaron la extensión del ejido colectivo y la producción para la exportación fue recuperada por los empresarios privados.⁵⁵

La concesión de “inafectabilidades ganaderas” ya en 1937, preservó del reparto agrario a superficies de propiedad privada que excedían el máximo constitucional. Y, por otra parte, en los entresijos de la burocracia y la corrupción se perdió lo esencial de las buenas intenciones.

La agricultura de plantación, en las áreas de grandes ejidos colectivos, se encuadró en una estructura política, la CNC, donde las decisiones se dictaron de arriba hacia abajo. En la cima, una dirigencia designada por el gobierno daba línea a las Ligas de Comunidades Agrarias y a los comisariados ejidales. En cada ejido, los comisariados ejidales manejaron los recursos económicos y fueron los resortes de la influencia política. Idealmente, la elección en asamblea de los tres integrantes del comisariado y del concejo de vigilancia sería el núcleo básico de la democracia ejidal: en reuniones mensuales se tomarían decisiones por mayoría de votos y a los comisarios correspondería ejecutarlas. De hecho, encuadrar a los campesinos en la CNC para “modernizarlos” y “velar por sus intereses” significó manejar sus decisiones, para su bien o para su mal, desde el poder centralizador del Estado.

Además, y quizás ésa sea la lección más elocuente del desigual desempeño del ejido colectivo, se demostró que ninguna solución global y esquemática funciona: no hay fórmulas válidas en todas partes ni para todos. El mosaico de criterios no puede fundirse en uno solo. Lo que habría que propiciar es un marco favorable para que la gente pueda en cada caso escoger sin presiones, entre varios caminos posibles, el que a su leal saber y entender pueda convenir mejor a sus intereses y a su idiosincrasia.

Pero ¿hasta qué punto podía darse tal libertad de opción cuando todo tendía a la implantación de un determinado modelo que era el desarrollo industrial? Fue funesta la suerte que correspondió a los campesinos a partir de 1940, como base sustentadora de la pirámide. El encuadre corporativo de las mayorías campesinas y de los contingentes obreros para asegurar crecimiento y progreso empezó a instrumentarse, en verdad, en 1935.

En época de Cárdenas, *la mitad de la superficie cultivable del país pasó al régimen ejidal de tenencia* y creció el número de campesinos que producían excedentes pero, como ha señalado Warman, esos excedentes *se transfirieron a otros ramos de actividad*, es decir, a la industria y al comercio. Se fortaleció al Estado, que pretendió darle un contenido social al despegue hacia el desarrollo industrial, y se captó a obreros y campesinos para sustentar los imperativos del proyecto modernizador.⁵⁶

Cuando la realidad desbordó a la utopía

Un ejemplo de los embates que enfrentaron los campesinos del resto del país, es decir, todos los que habitaban fuera de las grandes zonas comprendidas en el

reparto masivo, es el caso de Morelos que Warman ha radiografiado. Al romperse la relación con las haciendas se había consolidado el sentido de pertenencia a la comunidad y se había revitalizado el tradicional sistema de cargos: las mayordomías vinculadas a la fiesta religiosa. Los ejidatarios, que habían vuelto al cultivo del maíz, prestaban su trabajo en las *faenas* para reconstruir iglesias y pueblos.

Surgieron entonces nuevos caciques rústicos en el interior del marco tradicional: eran vecinos y hasta parientes. Esos caciques se fueron volviendo acaparadores del maíz, cuando se monetarizó el intercambio y el trueque entre productores complementarios fue sustituido por la apropiación del excedente a cambio de dinero en efectivo. En los tendajones asomaron unos cuantos productos industriales que fueron desplazando a los de fabricación local y tradicional. Warman advirtió cómo los maestros rurales fueron los “evangelizadores del progreso”, los instructores del culto a los adelantos urbanos y la civilización que también preconizaban, en la medida en que los favorecía, caciques y comerciantes. Mientras el maíz se devaluaba costaban más los bienes que había que pagar en efectivo. Se producía mucho maíz, pero se pagaba mucho por todo lo que había que comprar: entonces se vendía el maíz, por adelantado, al cacique acaparador o se le pedía prestado, lo que devaluaba todavía más al maíz por los intereses que había que pagar. *Hacia 1935 el maíz cosechado en una yunta de tierra había “dejado de dar” para el sustento completo de una familia campesina.*⁵⁷

De lo que se repartió en Morelos antes de 1935, a cada familia le tocó menos de tres hectáreas, de las cuales menos de una era de riego. La gente se negaba a renunciar al maíz, que era la garantía de tener qué comer. Buscando actividades complementarias para conseguir efectivo volvieron a la recolección, de leña u otros productos, según el clima; además, en zonas templadas, se rotó el maíz con trigo, chile y cacahuete y en las cálidas se cultivó chile y arroz: de hecho, el banco sólo daba crédito para el cultivo comercial, no para el maíz. En 1935, 7 700 ejidatarios de Morelos trabajaban ya como jornaleros: las comunidades inventaron formas para compensar la depreciación del maíz, dándole trabajo en algunos ejidos a los menos afortunados de otro ejido, pero esa solución no bastó y tuvieron que volver a trabajar en las haciendas.

Con variantes, eso se repitió por todas partes. Los que controlaban el abasto de la capital les compraban barato a los campesinos aquellos productos que sembraban para obtener algún dinero en efectivo. Los campesinos se contentaban con librar al maíz del mercado, es decir, con preservar la seguridad de su alimento tradicional:

Los campesinos, un tanto perplejos, se veían obligados a trabajar el doble hacia 1940 para conseguir apenas lo mismo que diez años atrás; seguir viviendo a duras penas, con deudas, compromisos, cosechas que se esfumaban en cuentas[...]. Pero estaban cum-

pliando un designio superior: alimentar al pueblo de México a bajo costo, aunque ellos siguieran comiendo igual o peor que antes[...].⁵⁸

La severidad del juicio de Arturo Warman se atempera en evaluaciones menos crudas de Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín:

El aumento del autoconsumo y la baja real en la producción de ciertos bienes agrícolas provocaron un alza en los precios de los alimentos y el malestar consecuente en las zonas urbanas, pero permitió una transferencia real de ingresos del sector industrial y de servicios al agropecuario, en plena congruencia con el programa cardenista. En resumen, la reforma agraria no produjo un crecimiento inmediato de la economía pero los beneficiados por el proceso vieron de inmediato mejorada su forma de vida. El campesino que recibió la tierra durante el gobierno de Cárdenas efectivamente mejoró su posición relativa dentro del complejo esquema social de la época.⁵⁹

Interpretación que no coincide con la de Warman, que atribuía a Cárdenas, como única meta vertebradora de su proyecto, la industrialización del país. Aguilar y Meyer advertían, en cambio, que los testimonios del propio Cárdenas y de algunos de sus funcionarios como Ramón Beteta, que después sería secretario de Hacienda de Miguel Alemán, hablaban de un propósito de industrialización, sí, pero *al servicio de las necesidades de una sociedad agraria y no al revés como era la tendencia*. De cualquier manera, es difícil no reconocer que *contra lo expresado por Cárdenas y sus funcionarios la industria manufacturera siguió creciendo sin supeditarse a la agricultura*. Y que, en los hechos, la utopía cardenista resultó *desbordada y negada por la realidad*, es decir, por la lógica del mercado.

La modernidad se imponía

La paradoja parece ser que, a pesar de las simpatías del presidente, entre los sectores populares fue el obrero el más beneficiado por aumentos de salarios y el burócrata por las prestaciones a largo plazo. El aumento neto del salario entre 1934 y 1939 fue del 37%.⁶⁰ Los cálculos de la proporción en que subió el costo de la vida en el mismo período varían entre el 60 y el 90%, es decir, entre un 20 y un 50% más que el salario. No sólo Alberto Pani sino también Vicente Lombardo hablaron de hambre en los sectores populares.⁶¹ Warman apuntó que, cuando en 1938 se creó el Comité Regulador de Mercados de Subsistencia, se llegó a importar alimentos para abatir precios, lo que en definitiva perjudicó mucho menos a los comerciantes que a los beneficiarios de la Reforma Agraria.⁶²

La crítica de Pani y de algunos círculos financieros de la época se enderezó contra el financiamiento deficitario del extenso programa de obras públicas que emprendió el gobierno, con criterios keynesianos, desde 1935. La inflación propiciada por la derrama del circulante monetario, sería una de sus consecuencias negativas. Pero otras opiniones han avalado esa política, considerando que

[...] a pesar de ello el cuadro no fue tan sombrío, y el camino que se siguió era el único posible, especialmente frente al escape de capitales después de la expropiación petrolera[...].⁶³

El Estado creó, en suma, la infraestructura que hacía falta para el crecimiento: hizo los caminos y las presas y las obras de riego y la electrificación y los muelles y hasta las pistas aéreas. La Segunda Guerra Mundial dio la señal de partida de la recta final hacia el crecimiento industrial. Parecía el momento propicio para dar el salto. Se puso el acento entonces en la armonía entre los factores de la producción y se dio luz verde a los empresarios para que se lanzaran, sin reticencias, a la invención del México nuevo cuyo advenimiento tanto se había augurado y anticipado.

El período cardenista inició un apoyo a la industria nacional con sustitución de importaciones, que pretendería impulsar un modelo de desarrollo relativamente autónomo, independiente y nacionalista. La creación de Nacional Financiera, en 1934, había marcado el arranque. En 1935 empezaron a consolidarse las bases de aquel dinámico período de crecimiento que, al ritmo de más de un 6% anual, configuraría a partir de 1940 lo que se ha dado en llamar el “milagro mexicano”. México habría de crecer, en esa etapa, a un ritmo más alto que el resto de América Latina y que la mayoría de los países en desarrollo. Aunque es un hecho, también, que a partir de 1940 se alcanzaría otro récord: el de una distribución del ingreso extremadamente inequitativa, aun en comparación con el resto del mundo en desarrollo.

En febrero de 1940 se publicó en el *Diario Oficial* el decreto que eximía de impuestos, por un plazo de cinco años, a todas las empresas *que se organicen para desarrollar en los Estados Unidos Mexicanos actividades industriales totalmente nuevas*[...].⁶⁴ Tales empresas podrían importar, sin pagar impuestos, la maquinaria y las materias primas que el país no produjera y exportar, sin carga fiscal alguna, todo lo que manufacturaran. No se les cobraría impuesto sobre la renta y ni siquiera impuesto del timbre.

Educarse para vivir mejor

Desde 1934, al presidente le obsesionó la necesidad de echar a andar una educación “para el trabajo” tanto en la agricultura como en la industria. Consta en sus *Apuntes* la evocación admirativa que hizo entonces, en su visita a Juquila mixes, de

las misiones culturales de Moisés Sáenz y el propósito de adaptar metas de la educación a las necesidades prácticas de la actividad laboriosa. Quiso educar al México campesino para la producción, sin arrancarle sus modos más entrañables de ser mexicano: en 1937 estaba maduro un proyecto para formar promotores del desarrollo en 29 Escuelas de Trabajo que, en todo el país, encauzarían “racionalmente” a jóvenes indígenas hacia *el progreso material, económico y psíquico*.⁶⁵

Los propósitos quedarían trancos porque falló la capacitación de los capacitadores. También se propuso capacitar para la producción al México obrero en escuelas técnicas vocacionales que en efecto se multiplicaron, vinculadas al incipiente proceso de industrialización. Era más fácil, sin duda, capacitar obreros procedentes de sectores mestizos de población urbana, que improvisar una metodología para incorporar a la población indígena a los adelantos de un progreso que, en principio, no deseaba. ¿Cómo hacerlo, sobre todo, sin alterar la costumbre tradicional? El afán de formar a las nuevas generaciones para las necesidades prácticas de la vida se reflejó en la proliferación de secundarias prevocacionales, muchas destinadas exclusivamente a hijos de obreros. En el campo, el número de escuelas había llegado a 16 545. El analfabetismo, calculado en 70% en 1910, ya había bajado a un 50% en 1934 y se redujo a un 45%.

La fe en el modelo cultural de la modernidad y en el Progreso lineal inclinó al gobierno de Cárdenas hacia el socialismo como meta de la historia. El presidente y sus ideólogos simpatizaban con esa otra vertiente modernizadora, como alternativa al capitalismo, y confiaban en la tutela del Estado y el agrupamiento de las masas para propiciar una evolución que, de cualquier manera, les parecía inevitable. La “educación socialista” entró en esa lógica, aunque su definición quedó siempre en la ambigüedad de interpretaciones diversas.

La del propio Cárdenas se centraba, al parecer, en la idea de una “armonización” de la escuela con la producción, al servicio de los trabajadores del campo y la ciudad. Esperaba que desplazara el interés individualista para sustituirlo por una solidaridad entre las nuevas generaciones y esos trabajadores. La identificaba con la creación de hábitos sanos de trabajo y el combate a todos los vicios. El maestro sería “el organizador ilustrado de los campesinos”, que podría hacer contrapeso a la figura del sacerdote y cumplir la misión de extender la prédica de un Progreso para todos.

Era evidente, en el discurso de Cárdenas, su fe en una ética social capaz de suplantar el “dogma supersticioso”, en beneficio del pueblo. El afán de sustituir una fe con otra tiñó todo el proyecto. Sustentando el culto a la Razón se apelaba a una religiosidad “moderna”: la de un Progreso envuelto en una mística igualitaria que conduciría a la justicia social.⁶⁶ Cárdenas cedió a la tentación de implantar la “educación socialista”, aunque su gobierno puso fin, en los hechos, a la estéril querella por las almas y eligió la tolerancia.

La intención de cimentar el progreso material en la formación de cuadros nacionales bien preparados se consolidó, en el nivel superior, con la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1937; de los Institutos de Física y de Matemáticas y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional; se abrieron un Instituto Agropecuario y otro de Salubridad y Enfermedades Tropicales y la Universidad Obrera pretendió culminar la preparación de trabajadores conscientes de sus derechos y del papel del sector en el esfuerzo productivo. También inauguró el régimen cardenista dos instituciones claves para el conocimiento del México tradicional y su vínculo con la cultura hispánica: el Instituto Nacional de Antropología e Historia y El Colegio de México, creado por los animadores de la Casa de España, que reunió a lo mejor del exilio pensante español: Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas.

Sanar a un país enfermo

Procurar salud y educación para las mayorías fue desvelo de aquel presidente empeñado en darle un rostro humano al desarrollo. Si en educación invirtió mucho, a la salud le dedicó un presupuesto que duplicaba el gasto ejercido en ese rubro hasta el momento:

El Presidente empleó gran parte de los pocos recursos de que disponía en curar de sus males a la población desvalida. En un país que ocupaba el penúltimo lugar en el continente americano en lo que mira a salud[...], el esfuerzo debía ser descomunal para que dejase huellas. De hecho Cárdenas hizo todo lo que pudo por la salud en un país de enfermos.⁶⁷

El juicio de Luis González sitúa, en la dimensión que tuvo, aquel esfuerzo desplegado por igual en los ámbitos de más alta especialización y en los poblados más remotos. El doctor Ignacio Chávez elevó a niveles de excelencia el funcionamiento del Hospital General. En el campo, a la vez, se partió de aquel propósito anunciado en los *Apuntes*:

En el primer año de mi administración organizaré lo necesario para un programa de dotación de agua potable *a todos los pueblos del país*[...]. Considero de mayor importancia dar agua a los pueblos sobre cualquier otra mejora[...].⁶⁸

Cubrir la totalidad de los pueblos era una empresa desmesurada e inalcanzable, pero Cárdenas le dio agua potable a 337 poblaciones y abrió 108 hospitales rurales. Fue certera la creación de unidades de salud dotadas de vehículo e integradas por médico, enfermera, farmacéutico y ayudante para las regiones con un índice de mortalidad superior a 25 por millar.

Por primera vez se pensaba en la salud del campo en un país donde 2 mil médicos atendían a menos de la mitad del millón de habitantes del Distrito Federal mientras que apenas llegaban a 600 los que se ubicaban en algún lugar de la provincia, para un total de 13 millones de campesinos. Los otros 1 400 médicos que había en el país se concentraban, en cada estado, en las capitales y en otros centros urbanos. La salud de los pobres era deplorable tanto en la ciudad como en el campo: en el Distrito Federal morían 100 por cada mil en los barrios periféricos, en comparación con 12 fallecimientos en las colonias prósperas.

Aunque el país no pasaba de 20 millones de habitantes, 13 habitaban en el campo, donde la ausencia de servicios era pavorosa e improbables las opciones para resolverla. Pocos médicos deseaban “perderse” en los andurriales de la miseria citadina o de la penuria lastimosa de rancherías y poblados a donde no había modo alguno “civilizado” para llegar y donde daba grima, por lo demás, contemplar siquiera tanto desvalimiento. Dos recursos se pusieron en práctica.

El primero lo aplicó en 1936 el doctor Gustavo Baz, como director de la Facultad de Medicina, y fue el servicio obligatorio y gratuito de pasantes. Al echarlo a andar dijo estas palabras:

[...] lo normal sería que dentro de unos meses reciban ustedes el título[...]. En lugar de eso, he venido aquí a pedirles que se presten patrióticamente a uno de los experimentos más singulares que habrá de registrar la historia de la medicina. Cada uno de ustedes irá a un lugar donde no haya médico y pasará allí seis meses[...]. Las medicinas que necesiten las mandaremos nosotros. No cobrarán ustedes a nadie por sus servicios. El gobierno les asigna un sueldo mensual de 90 pesos[...]. Les cabrá en suerte ejercer su ministerio entre gentes primitivas y rudísimas[...] que no tienen la más leve noticia de lo que es el moderno arte de curar[...].⁶⁹

Era el inicio de una práctica de salud pública sin antecedentes. Con mística de pioneros, los primeros 793 jóvenes que partieron como cruzados de la salud curaron y procuraron transmitir prácticas higiénicas preventivas en comunidades prendidas de las estribaciones de las sierras, dispersas en la desolación de las zonas áridas, atrapadas en la triste insalubridad del trópico húmedo. Con los informes que remitieron aquellos insólitos abanderados del más noble de los rostros del progreso se dispuso, por primera vez, de datos confiables sobre el estado de salud de la nación.

El segundo camino no contó con la aprobación del ya por entonces rector Baz. Visto a la distancia aparece, sin embargo, como un proyecto visionario. La capacitación paramédica ha arraigado con éxito en países, como China, de población muy numerosa y dispersa en poblados rurales. En 1938 se estableció en el Politécnico una Escuela de Medicina Rural.⁷⁰ No pretendía, por cierto, improvisar médi-

cos en dos años como entonces se alegó. Intentaba únicamente habilitar como promotores de salud a campesinos, que adquirirían los mínimos de información suficientes para detectar los padecimientos endémicos más extendidos y para recetar unos cuantos medicamentos básicos. Hoy sigue pareciendo un gran recurso para atenuar condiciones de insalubridad muy graves entre quienes viven en extrema pobreza y lejos de los núcleos urbanos.

En términos globales, como consecuencia de la labor preventiva y curativa que desplegó el régimen, bajó a 22 por mil el índice de mortalidad, que en 1910 se había calculado en 40 y que probablemente no se había alterado en los turbulentos años de la revolución armada. Se combatió la tuberculosis, el paludismo, la tifoidea, la colitis hemorrágica que provocaba una altísima mortalidad infantil entre los pobres, la amibiasis, la viruela y el mal de pinto, sin descuidar las enfermedades venéreas y el alcoholismo. En seis años, el número de establecimientos de todos los niveles dedicados a la salud creció de 182 a 698. La obra en salud fue impresionante y sentó las bases del crecimiento de la población, más por el descenso de las elevadas tasas de mortalidad que por el incremento del índice de nacimientos. Había en 1934 tantos habitantes como en 1521: alrededor de 20 millones.⁷¹ En 400 años esa población había ido mermando hasta los 6 millones en la época de la Independencia, para crecer después muy lentamente a lo largo del siglo XIX. Las condiciones en que se dio, a partir de 1940, el desarrollo urbanizador explican las características del nuevo crecimiento demográfico, marcado por una también creciente desigualdad.

Un milagro efímero y una democracia tutelada

Cárdenas resumió así su sexenio:

*Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí una buena parte de la riqueza que estaba en pocas manos[...].*⁷²

Ni siquiera los juicios más críticos podrían negar la sinceridad de ese propósito en alguien calificado por el *New York Herald Tribune*, de acendrado conservadurismo, como “el presidente más honrado que ha tenido México desde 1859”.⁷³ Al terminar aquel sexenio el Estado había salido fortalecido, lo mismo que el poder presidencial. Con esa palanca se empujaría el crecimiento económico. Todo lo cual correspondía al proyecto modernizador que había hecho suyo la élite política desde siglo y medio atrás. Sólo que, por primera vez, ese proyecto tomaba en cuenta, con prioridad, a los millones de pobres que la nación venía arrastrando, a regañadientes, desde hacía siglos: cada día más pobres y más numerosos.

Gobernar es un arte difícil, que tiene que conciliarse con la ingobernable complejidad de la condición humana. Es fácil juzgar críticamente, desde el presente, aquel “gigantesco proceso de corporativización”. Casi imposible hubiera sido inducir a un país que emergía de una larga y caótica lucha de facciones por la vía de una auténtica democracia, sustentada en la base y no dirigida desde la cima. Townsend reprodujo un significativo diálogo con Cárdenas. Corría ya el año de 1938 cuando un día el presidente le dijo:

Hay muy pocas gentes en México que quieran realmente la democracia. Cada quien trata de imponer su voluntad a los otros. Un político quiere mandar a otro; el capital quiere enseñorearse del trabajo; los trabajadores quieren manejar al capital; las compañías se esfuerzan por establecer monopolios, y los líderes quieren controlar a tantos compañeros como les sea posible, para su propio engrandecimiento. Es un cuadro muy egoísta y lamentable.⁷⁴

Dar la tierra pudo haber sido, en efecto, echar los cimientos de la democracia política. Pero, en el empeño de configurar una sociedad igualitaria, se partió de un supuesto: la versión que tendría el Estado del *interés general* coincidiría necesariamente con la *voluntad general* de la sociedad. La estructura que se montó para encuadrar a las grandes mayorías populares no fue concebida sólo para asegurar el salto a la industrialización: estuvo animada por una auténtica voluntad de salvar el abismo de la desigualdad. Pero también sirvió a otros fines. Y no propició la organización que hubiera sido deseable, germinada desde abajo en el consenso de la gente. Sino, más bien, una armazón tan virtuosamente amarrada desde arriba por el Estado que, ya vaciada de su espíritu original, siguió funcionando después con la máxima eficacia.

El episodio cardenista concretó la alianza planteada por la Constitución de 1917 entre el pasado y el futuro de México. Pero ese milagro fue demasiado breve en comparación con el que empezaría a ponerse en escena a partir de 1940: el milagro de un desarrollismo de signo exclusivamente modernizador, que volvería a relegar al país tradicional al traspaso de la marginación y de la historia.

Notas

¹ Lázaro Cárdenas, *Palabras y documentos públicos*, vol. 1, 1928/1940. México: Siglo XXI Editores, 1978, pp. 138-139.

² Carlos Pereyra, “México: los límites del reformismo”, en *Desarrollo y crisis de la economía mexicana* (coord. Rolando Cordera). México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 375.

³ Cárdenas, L., *op. cit.*, p. 154.

⁴ Frank Tannenbaum, *El futuro de la democracia en América Latina*. México: Diana, 1978, p. 217. Sobre Vicente Guerrero, véase Lorenzo de Zavala, *Ensayo crítico de las revoluciones en México desde 1808 hasta 1830*, en *Obras*. México: Editorial Porrúa, 1969, p. 352.

En su reciente obra sobre *El cardenismo, una utopía mexicana*, Adolfo Gilly ha apuntado hacia “la recuperación de la comunidad agraria en la modernidad” como uno de los elementos de la utopía cardenista. Trascendiendo los extremos juicios de interpretaciones previas, Gilly procura una relectura del cardenismo desde una óptica contemporánea. Dado que este capítulo fue redactado con mucha anterioridad, ha sido imposible incorporar con amplitud esas aportaciones. Como hizo constar Aguilar Camín (en *Salvos de la revolución*. México: Editorial Nueva Imagen, 1982), la visión del cardenismo como una *utopía* recuperadora de hondas pulsaciones históricas y aspiraciones largamente aplazadas, que pasó a formar parte del imaginario mexicano, fue registrada hace años por Adolfo Gilly.

Véase Adolfo Gilly, *El cardenismo, una utopía mexicana*. México: Cal y Arena, 1994.

⁵ Daniel Cosío Villegas, “El México de Tannenbaum”, en *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 3, núm. 4, octubre-diciembre 1951, p. 159.

⁶ Tannenbaum, F., *op.cit.*, pp. 218-219.

⁷ Josephus Daniels, *Shirt-Sleeve Diplomacy*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1947, p. 59.

⁸ Tannenbaum, F., *op.cit.*, p. 219.

⁹ Arnaldo Córdova, *La política de masas del cardenismo*. México: Ediciones Era, 1974, p. 177.

¹⁰ *La gira del general Lázaro Cárdenas*. México: Partido Nacional Revolucionario, 1934, p. 45. La edición original fue reimpressa por el PRI en 1986.

¹¹ Lázaro Cárdenas, discurso en Durango en vísperas de las elecciones. *La gira del general...*, *op.cit.*, p. 132.

¹² Lázaro Cárdenas, *Obras*, I. *Apuntes*, vol. I, 1913/1940. México: Nueva Biblioteca Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 298.

¹³ *Ibid.*, p. 233.

¹⁴ En *La gira del general Lázaro Cárdenas*, *op.cit.*, p. 211.

¹⁵ Miguel Osorio Marbán, *El Partido de la Revolución Mexicana*, I. México: CISA, 1970, p. 433.

¹⁶ Cárdenas, L., *Palabras y documentos públicos*, I, *op.cit.*, p. 127.

¹⁷ Luis González, “Los días del presidente Cárdenas”, en *Historia de la Revolución Mexicana: 1934-1940*, vol. 15. México: El Colegio de México, 1981, p. 15.

¹⁸ Tannenbaum, F., *op.cit.*, p. 217.

¹⁹ *Ibid.*, p. 216.

²⁰ Tannenbaum, F., *México, la lucha por la paz y por el pan*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 3, núm. 4, octubre-diciembre de 1951, p. 46.

²¹ William Townsend, *Lázaro Cárdenas, un demócrata mexicano*. México: Biografías Ganesa, 1959, p. 76. Ramón Beteta, en *El progreso económico y social de México*, 1935, identificaba literalmente a Cárdenas con el texto del Artículo 3º constitucional.

- ²² Lázaro Cárdenas, "Discurso ante los maestros de Jalisco el 4 de mayo de 1936", en *Palabras y documentos públicos*, I, *op. cit.*, p. 200.
- ²³ Townsend, W., *op. cit.*, p. 326.
- ²⁴ Lázaro Cárdenas, "Discurso de campaña en Mérida el 10 de marzo de 1934", en *Palabras y documentos públicos*, I, *op. cit.*, p. 119.
- ²⁵ Lázaro Cárdenas, "Discurso del Presidente de la República en el Primer Congreso Indigenista Interamericano. Pátzcuaro, 14 de abril de 1940", en *Palabras y documentos públicos*, I, *op. cit.*, p. 402.
- ²⁶ Octavio Ianni, *El Estado capitalista en la época de Cárdenas*. México: Ediciones Era, Serie Popular, 1977, p. 100.
- ²⁷ Lázaro Cárdenas, "Palabras en el Centro Patronal de Monterrey el 11 de febrero de 1936", *Palabras y documentos públicos*, I, *op. cit.*, p. 192.
- ²⁸ Lázaro Cárdenas, "Transmisión el 14 de marzo de 1936", en *Cárdenas habla!* México: Partido de la Revolución Mexicana, 1940, pp. 63-69.
- ²⁹ Raymond Vernon, *El dilema del desarrollo económico de México*. México: Diana, 1966, pp. 100-101.
- ³⁰ Arnaldo Córdova, *op. cit.*, p. 185.
- ³¹ Lázaro Cárdenas, "Palabras transmitidas el 14 de marzo de 1936", en *Cárdenas habla!*, *op. cit.*, p. 69.
- ³² Alicia Hernández Chávez, "La mecánica cardenista", en *Historia de la Revolución Mexicana*, vol. 16. México: El Colegio de México, 1979, pp. 167 y 170.
- ³³ Nathaniel y Sylvia Weyl, "La reconquista de México", en *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 7, núm. 4, octubre-diciembre de 1955, p. 228.
- ³⁴ Lázaro Cárdenas, *Obras*, I. *Apuntes*, vol. I, 1913/1940, *op. cit.*, p. 356.
- ³⁵ Townsend, W., *op. cit.*, p. 155.
- ³⁶ Restrepo y Eckstein, *La agricultura colectiva en México: la experiencia de La Laguna*. México: Siglo XXI Editores, 1975, p. 30.
- ³⁷ Lázaro Cárdenas, "Mensaje al país con motivo de la dotación de la Comarca Lagunera", en *Cárdenas habla!*, *op. cit.*, p. 87.
- ³⁸ I. Restrepo y S. Eckstein, *op. cit.*, p. 11.
- ³⁹ *Ibid.*, p. 64.
- ⁴⁰ *Ibid.*, p. 133.
- ⁴¹ *Ibid.*, p. 135.
- ⁴² *Ibid.*, p. 179.
- ⁴³ *Idem.*
- ⁴⁴ Weyl, N. y S., *op. cit.*, p. 240.
- ⁴⁵ *Idem.*
- ⁴⁶ Fernando Benítez, *Ki, el drama de un pueblo y de una planta*. México: Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 132. La 1ª edición es de 1956.
- ⁴⁷ *Ibid.*, p. 136.

- ⁴⁸ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 168.
- ⁴⁹ Lázaro Cárdenas, *Obras I. Apuntes 1913/1940*, *op. cit.*, p. 426.
- ⁵⁰ Hernández Chávez, A., *op. cit.*, p. 178.
- ⁵¹ Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 168.
- ⁵² José Luis Calva, *La disputa por la tierra. La reforma del Artículo 27 y la nueva ley agraria*. México: Fontamara, 1993, p. 22.
- ⁵³ Roger D. Hansen, *La política del desarrollo mexicano*. México: Siglo XXI Editores, 1971, p. 46. Hansen reproduce un cuadro de James W. Wilkie que da la cifra que aquí se consigna para el reparto anterior a Cárdenas y una cifra de 17 906 429 para el reparto cardenista. En el último Informe de gobierno, sin embargo, se fija el total en 18 352 275 hectáreas. El número de beneficiarios y del total de ejidos en 1940 se incluye en la misma fuente. Véase *Los presidentes de México ante la nación*, 1821-1966, vol. 4 (recopilación de Luis González). México: Cámara de Diputados, 1966, p. 130.
- ⁵⁴ Tzvi Medin, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*. México: Siglo XXI Editores, 1972, p. 228.
- ⁵⁵ Arturo Warman, ... *Y venimos a contradecir*. México: SEP-CIESAS, 1988, p. 187.
- ⁵⁶ Arturo Warman, *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Ed. Nuestro Tiempo, 1983, p. 49. La 1ª edición es de 1972.
- ⁵⁷ A. Warman, ... *Y venimos a contradecir*, *op. cit.*, p. 183.
- ⁵⁸ *Ibid.*, p. 194.
- ⁵⁹ Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 158.
- ⁶⁰ Medin, T., *op. cit.*, p. 128.
- ⁶¹ El comentario de Pani, en Tzvi Medin, *op. cit.*, p. 127, y el de Lombardo en Luis González, "Los días del presidente Cárdenas", *op. cit.*, p. 243.
- ⁶² Warman, A., *op. cit.*, p. 198.
- ⁶³ Medin, T., *op. cit.*, p. 128.
- ⁶⁴ González, L., *op. cit.*, p. 267.
- ⁶⁵ *Ibid.*, pp. 124-125.
- ⁶⁶ Lázaro Cárdenas, "Mensaje del presidente electo sobre la escuela socialista", México, D.F., 28 de octubre de 1934, en *Palabras y documentos públicos*, I, *op. cit.*, pp. 136-137.
- ⁶⁷ González, L., *op. cit.*, p. 279.
- ⁶⁸ Lázaro Cárdenas, *Obras I. Apuntes*, vol. I, 1913/1940, *op. cit.*, p. 298.
- ⁶⁹ Los datos sobre salud son de Luis González, *op. cit.*, p. 277 ss. Las palabras del doctor Baz, en p. 280.
- ⁷⁰ Se incorporó al Politécnico, además, la Escuela Nacional de Homeopatía, fundada en 1889.
- ⁷¹ Los cálculos sobre población indígena antes de la Conquista son especulativos. Se ha llegado a calcular en 20 millones: devastada por enfermedades y por el trauma de la Conquista, para 1540 había descendido a alrededor de 6.5 millones. En 1607 se supone que quedaban 2 millones y en 1650 poco más de un millón. Empezó a crecer lentamente

hasta llegar a aproximadamente 2.5 millones en 1800, constituyendo entonces cerca de la mitad de la población total.

La población europea era de 63 mil personas en 1570; 125 mil en 1646 y 750 mil en 1770. El primer censo oficial arrojó, en 1793, un millón de habitantes de origen europeo, españoles o criollos.

Charles C. Cumberland. *Mexico: The Struggle for Modernity*. Oxford University Press, 1968, pp. 48-49.

Raúl Benítez y Gustavo Cabrera, *Tablas abreviadas. La mortalidad de la población de México, 1930, 1940, 1950, 1960*. México: El Colegio de México, 1967, pp. 31-32, 63, 76.

Citado por Luis González, "Los días del presidente Cárdenas", *op. cit.*, p. 319.

⁷² Lázaro Cárdenas, *Obras I. Apuntes*, vol. I, 1913/1940, *op. cit.*, p. 443.

⁷³ González, L., *op. cit.*, p. 121. El editorial del diario es de 29/IV/1937.

⁷⁴ Townsend, W., *op.cit.*, p. 214.

V. El milagro mexicano

Indios, candelilleros, cultivadores de la lechugilla y el algodón, parias de un país dividido en dos, separado por un océano de hambre del otro México, cruzados de brazos, impotentes en medio de tierras que han dejado, nuevamente, de pertenecerles, cerca de bosques talados, al lado de mares improductivos, en una desolación de andrajos, de pies descalzos, de piojos: así vive la mayoría de los mexicanos, y no habrá mentira que pueda disfrazarlo, cultura que pueda crecer sobre esta tristeza, progreso que pueda apoyarse en esta miseria.

Carlos Fuentes, *Tiempo mexicano*

Un destino manifiesto

A partir de 1940 la élite podrá realizar por fin lo que hasta ese momento no había sido más que una fantasía, un deseo abrigado en lo imaginario. Por fin se dará un desarrollo acelerado; por fin México podrá “parecerse” a los Estados Unidos; por fin habrá industrias y caminará el asfalto. Por fin se podrá aspirar a lo que aquel esperanzado regiomontano le habría comentado a Vasconcelos, en una aséptica ciudad fronteriza del otro lado: “¡Ay, licenciado, qué diera yo por ver a mi Monterrey así!” Y, además, los pobres dejarán de ser pobres y todo se hará “preservando la independencia económica”. ¿Por qué no si “[...]este movimiento hacia adelante y hacia arriba constituye el desarrollo histórico [...]”? Sobre todo: “El ejemplo de los

Estados Unidos nos indica que así puede y así habrá de suceder[...].¹ Y el milagro, por fin, *fue*.

La opción modernizadora parecía fatal: casi un “destino manifiesto”. Nadie se planteó seriamente en los años cuarenta la distancia tan desmesurada entre el país que se era y el país que se aspiraba a ser. Cuando Frank Tannenbaum formuló, en 1951, su profecía ominosa y advirtió que *cualquier plan que destruya la vitalidad de la comunidad rural mexicana tendrá trágicas consecuencias*[...],² nadie quiso escucharlo y un irritado barullo se apoderó del escenario para desplazar los ecos de aquella otra voz, disidente e inoportuna. A la derecha y a la izquierda reinó la complacencia. Intereses e ideología coincidieron en rendir tributo al becerro de oro del Progreso. Ya se había puesto el acelerador a la carrera industrializadora y Frank Tannenbaum aparecía intempestivamente, como aguafiestas, sembrando interrogaciones. ¿No le convendría más al país tomar, en vez de la vía real del desarrollismo industrial, los múltiples caminos vecinales de una *filosofía de lo pequeño*?

¿A quién podía desvelarle que el verdadero genio de México pareciera indicar, más bien, hacia la viabilidad de un modelo arraigado en el fortalecimiento de la comunidad local? En medio de una gran mayoría sin recursos para consumir, que subsistía en el campo gracias al aprovechamiento cada vez más azaroso de los recursos del medio y a los fuertes lazos comunitarios de cohesión social, había surgido en las ciudades una pequeña minoría ávida de cosechar ganancias y de “descubrir la fórmula mágica que conduzca a la industrialización”.³ Habían surgido grandes planes, grandes designios, el propósito obstinado de levantar grandes industrias: había que “pensar en grande” como el presidente Alemán.⁴ El afán de grandeza miraba con arrobo hacia el Norte en busca de modelos y de recursos, con la pretensión, otra vez, de saltar en unos cuantos años la brecha que separaba a la economía de México de la economía de los Estados Unidos.

¿Podría darse el salto mediante una industrialización promovida y subsidiada por el Estado? ¿Habría que recurrir a endeudamientos crecientes? En 1946 reconoció la *Revista de Economía*:

Carecemos de la inversión básica que facilitaría el desarrollo de las industrias de transformación para diversificar nuestra economía. Carecemos de transporte, de electricidad. No tenemos irrigación y nos falta el capital que nos permitiría hacer por cuenta propia esas inversiones básicas.⁵

La argumentación de Tannenbaum era implacable: se requerían, en 1950, por lo menos 11 mil millones de pesos, y sólo para armar sólidamente una infraestructura de ferrocarriles, energía eléctrica y riego. Sólo con tal infraestructura podría sustentarse, a su vez, una industria de transformación para generar las exportaciones suficientes para pagar intereses de los préstamos indispensables para adquirir mate-

rias primas, técnica y maquinaria. Con un criterio realista, insistía, habría que pensar no sólo en esos 11 mil millones sino, dada la escasez de recursos internos, en un flujo continuo y permanente de nuevas inversiones extranjeras.

¿Era viable tal costo? ¿Debería el país endeudarse para obtener los recursos requeridos por una inversión en gran escala en bienes de capital y atender, a la vez, a la satisfacción de necesidades básicas de una población creciente? En 1950 ya parecía evidente que, a pesar de la incipiente industria o, más bien, por la manera en que se conducía la industrialización, la mayoría de los pobres se empobrecía cada vez más.

Nadie sabe para quién trabaja

Ese proceso se había sobrepuesto a un país donde, en 1940, el 99.2% de los poblados tenía menos de 2 500 habitantes y donde sólo el 0.7% era urbano. En 1950 había 120 mil pequeñas comunidades.⁶

En 1940, a pesar de la buena voluntad de Cárdenas para favorecer una distribución menos desigual de los beneficios, el 9% de la población, que habitaba en el Distrito Federal, consumía el 38% de la carne disponible en el país. Andaban descalzos 5 millones de mexicanos y 4 millones dormían en el suelo. Un kilo de maíz costaba 12 centavos: un indio de la Mixteca Alta trabajaba 10 horas tejiendo un sombrero para ganar apenas 16 centavos y eran muchos los que, por todos los rumbos de México, tenían que comprar el maíz porque no podían producirlo.⁷

La transición de 1940 a 1946 mostró ya más elementos del futuro que del pasado. Cárdenas había dedicado el 18% de la inversión pública al campo, sobre todo en obras de riego para beneficio ejidal: sólo en 1937 había creado 11 mil ejidos y, durante esa década, la producción agrícola cosechada en ejidos había aumentado un 71%.⁸ Ávila Camacho decretó, en sus primeros diez días de gobierno, la parcelación de los ejidos. Antes de que pudiera demostrarse su eficacia o ineficacia, se revertía el ejido colectivo y la organización cooperativa. No se garantizaba al campesino, por otra parte, el apoyo para hacer producir la *parcela patrimonial* que, en teoría, se procuraba rescatar de “ideologías exóticas” y, verbalmente al menos, del ejercicio de “indebidas hegemonías en las comunidades ejidales”. Es decir, del control político que, por supuesto, en la práctica quedó incólume: ése sí no sufrió parcelación alguna.

La manipulación por los comisarios ejidales fue cada vez más firme y la CNC no tuvo que lamentar ningún “debilitamiento de la unidad campesina”. No faltaron reproches al gobierno por tibieza y por no romper más drásticamente con el pasado. Venían de quienes deseaban, Manuel Gómez Morín entre otros, que por fin se acabara de incorporar abiertamente la tierra ejidal a la circulación en el merca-

do, volviéndola un bien mercantil, susceptible de venta, especulación o hipoteca.⁹ Pero habría que esperar, para ello, cincuenta años más, hasta las reformas al Artículo 27 aprobadas en 1991. Ávila Camacho, por lo pronto, lo consideró demasiado osado.

El signo de los tiempos era la productividad y para eso estaba la agricultura privada: se sobreentendía que los campesinos “atrasados” eran incapaces de producir al ritmo requerido. La agricultura ejidal sería relegada: ni crédito, ni riego, ni reparto de buenas tierras. ¿Qué mejor manera para ir secando a la agricultura campesina?

La colectivización no ha de haber resultado, sin embargo, tan improductiva puesto que se consideró prudente no “arriesgar” la producción comercial del algodón, el trigo y las verduras que “a pesar de todo” se estaban cosechando con bastante abundancia en La Laguna, en el Yaqui y en el Valle de Mexicali: esas zonas quedaron excluidas de la parcelación dispuesta. La agricultura creció casi al 8% anual en los años cuarenta.¹⁰

El desarrollo industrial que surge a partir de los años 40 no se hubiera producido sin esta base agrícola y agraria. Alimentos, materias primas y recientes capas de consumidores, así como bajos costos para la industria, surgieron del programa agrario y agrícola cardenista[...].¹¹

El “milagro industrial” se montó sobre el “milagro agrícola”. Y el “milagro agrícola” se sustentó en la reforma agraria cardenista, que hizo incrementar la productividad a millones de campesinos, con su contrapartida de volverse cada vez más dependientes del mercado. Entre 1940 y 1960, el campo transfirió más de 3 mil millones de pesos al sector industrial, sin contar lo que se transfirió por mecanismos no recogidos en estadísticas.¹² El “milagro” se alimentó con intensificación del trabajo de cada familia campesina y deterioro progresivo de su nivel de vida.

Regateando la industrialización

La Segunda Guerra Mundial marcó el afán de industrializar a México con el estira y afloja de un regateo constante con los Estados Unidos. Funcionarios, empresarios y hasta el propio presidente, impacientes, se quejaban de que los Estados Unidos no los dejaban meter a fondo el acelerador: México tenía derecho a aspirar a un trato más favorable, es decir, a que se le vendiera más maquinaria a cambio de sus exportaciones de materias primas estratégicas. El regateo fue insistente durante el sexenio de Ávila Camacho, arguyendo siempre que los vecinos no debían temerle al desarrollo mexicano, que no aspiraba a ser competitivo sino complementario, y

que sería bienvenida cualquier inversión que bajara del Norte. Llegó mucha maquinaria de segunda mano, como parte del equipo destinado a Altos Hornos, lo que no contribuyó a la competitividad de la producción mexicana.¹³

De los Estados Unidos no se recibían ya artículos de primera necesidad ni materias primas para la industria, ni refacciones, ni material eléctrico: todo se lo llevaba el esfuerzo bélico. En tales circunstancias, a pesar de los afanes, la industria no resultaba demasiado favorecida: algunas fábricas tuvieron que cerrar y sus obreros se quedaron sin trabajo mientras subían los precios.

En 1942 Ramón Beteta fue a negociar un Tratado de Comercio cuya concertación se venía discutiendo desde 1939: al cerrarse todo contacto con el mercado europeo, por la guerra, era esencial encontrar salida para productos mexicanos y asegurar el suministro de artículos esenciales. Se buscaba defender el proteccionismo de México sobre ciertas manufacturas procurando, a la vez, la reducción de tarifas proteccionistas en los Estados Unidos y la supresión de barreras a la importación del petróleo mexicano. La firma del Tratado obtuvo reducciones para el petróleo, el plomo, el zinc y la ganadería, la cerveza, la plata labrada y algunos productos agrícolas mientras durara la guerra. A cambio, México reducía sus tarifas en 200 artículos, lo que frenó su producción y movilizó presiones de los industriales para denunciar el Tratado.

Para 1940, las exportaciones a Estados Unidos habían alcanzado el 90% de las ventas mexicanas y lo mismo sucedía con las importaciones, que en 1944 eran de esa procedencia en un 90%. Se exportaban productos agrícolas y algunas manufacturas que, por la guerra, ya no podían producir los Estados Unidos. Pero, por carencia de equipos y materias primas que no llegaban, se detuvieron proyectos de industrialización como Altos Hornos, Celanese, Papelera Atenquique, cinco hidroeléctricas, siete fábricas de cemento y otra de textiles y químicos. Por fin, en 1944 se echó a andar un programa mínimo de 20 nuevas manufacturas. Y en su Informe de 1945, el presidente se felicitaba porque

[...] la industrialización del país ha entrado en un período de amplia y firme actividad, la que se manifiesta en el aumento de noventa y tres nuevas industrias[...].¹⁴

Los tímidos intentos de proteccionismo tropezaban con un sistemático rechazo. México se resistió, con América Latina, a propuestas de librecambio como la Carta Económica para las Américas que se promovió en la Conferencia de Chapultepec. La inversión extranjera empezó a llegar en 1942, pero más tentada por los intereses bancarios o los bienes raíces que por la promoción industrial. Algunos monopolios trataban de “comerse” a empresas mexicanas, lo que propició la aprobación de una ley, en 1944, para regular inversiones extranjeras: se exigiría una participación de capital nacional por lo menos en un 51% con excepciones que podría conceder

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las inversiones extranjeras no crecieron en el sexenio a más de un 4% anual.¹⁵

En resumen, la guerra permitió exportar “prudentemente” unos cuantos productos aceptablemente competitivos. Pero, sobre todo, había que sustituir importaciones de acero, de celulosa, de parafina y lubricantes, de aceites vegetales, de químicos y de cemento. El apoyo a los empresarios, con exenciones fiscales, fue bien recibido por todos. Los más sólidamente establecidos, agrupados en Concamin, mostraron ciertas reservas, sin embargo, por temores a la intervención del Estado. Los más jóvenes y “progresistas”, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CNIT) desde 1942, la aceptaban sin reticencias, considerando al Estado como un aliado y compartiendo, en bloque, su proyecto. Nafinsa se dispuso a financiar la industrialización en empresas alimenticias, textileras, químicas, metalúrgicas y de construcción. Vale la pena señalar una advertencia del ex-presidente Cárdenas en sus *Apuntes*. Estaba convencido de que sólo a las industrias estratégicas les correspondía quedar en manos del Estado:

[...] las [...] que maneja Nacional Financiera que por quiebra de particulares las haya controlado, [debe] pasarlas a nacionales castigando aun su costo. La Nacional Financiera está anquilosando sus actividades con la política que viene siguiendo[...].¹⁶

Entretanto, los comerciantes resentían los intentos del gobierno por evitar una excesiva alza de precios fijando precios tope y vendiendo, a través de la Ceimsa, el maíz, el frijol y el arroz. A diferencia de su claro rechazo al exceso de industrias en manos del Estado, Cárdenas se mostraba decididamente partidario, por la misma época, de subsidiar ampliamente el cultivo del maíz, garantizando a los campesinos buenos precios y fertilizantes.

Mientras México defendía en foros internacionales su derecho a industrializarse, se insistía en que no sería a costa de los sectores menos favorecidos. La industrialización era la panacea: se lograría, a la vez, crecimiento y elevación del nivel de vida; dar empleo a más mexicanos y disminuir la dependencia del extranjero. Se matarían varios pájaros de un tiro. La guerra sirvió, por lo pronto, para diferir las demandas sociales: para contribuir a la “alianza para la producción” y alejar la amenaza fascista, los obreros renunciaron a la huelga. En compensación, se estableció el Seguro Social.

Revolución en crisis pero con alianza patriótica

Ya en 1943 se hizo manifiesta la inquietud sobre la vigencia de la revolución, que Iturriaga declaró terminada en 1945, al celebrarse el Congreso de crítica de la

Revolución Mexicana. El objetivo fundamental de propiciar el bienestar de las mayorías no se había logrado: ya lo había denunciado don Jesús Silva Herzog, dos años antes, al hablar de *una crisis moral... de extraordinaria virulencia*.¹⁷

Sin embargo Vicente Lombardo buscaba, al terminar la guerra, una alianza entre el movimiento obrero y la “nueva burguesía nacional” para la nueva gran meta revolucionaria: la industrialización. La “alianza patriótica” establecida durante la guerra era retomada por los dos campeones de la modernidad: los jóvenes empresarios, encabezados por José Domingo Lavín, y los obreros representados por Lombardo. La meta de “liquidar el régimen semicolonial” con el apoyo del Estado, que protegería a las empresas de la competencia extranjera, justificaba el pacto aunque “había que reconocer” las fallas que persistían en las metas agrarias. Ya se irían resolviendo poco a poco y, entretanto, era de esperarse que los campesinos siguieran respondiendo como un solo hombre.

Así nos han dado la tierra

Quedaron tres millones de campesinos sin tierra aunque el régimen de Lázaro Cárdenas les hubiera reconocido sus derechos y sus expedientes estuvieran en trámite.¹⁸ El rezago, que desde 1940 empezó a sumergirse en un marasmo de tramitación burocrática, fue terreno fértil para los sinarquistas. En Morelos aquellos rondaban por el oriente mientras que, en el poniente, surgía la protesta armada de Rubén Jaramillo. También había protestas en La Laguna y en otros rumbos: invasiones de tierras y delegaciones que empezaban a peregrinar hacia México, con sus agravios a cuestas. Mientras tanto, algunos exconstituyentes pedían el amparo agrario y se transfería al presidente de la República “la facultad para dictar la resolución de derechos ejidales”, despojando al ejido de cualquier autonomía.¹⁹ A la vez, se declaraban inafectables hasta 300 hectáreas de coco, hule, vid, olivo, quina, vainilla y henequén y se protegía a la “pequeña propiedad” cultivada durante cinco años seguidos aun cuando se comprobaran fallas en su titulación.

Aunque el “discurso agrarista” no varió mucho, dejó de tener sustento real. Sólo se entregaban tierras estériles:

—Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del Llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla, y ni aun así es positivo que nazca nada; ni maíz ni nada nacerá.

—Esto manifiésteno por escrito. Y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al Gobierno que les da la tierra.

—Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el Centro. Todo es contra el Llano... No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho... Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos...

Pero él no los quiso oír.

—Así nos han dado esta tierra. Y en ese comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de aquí. Ni zopilotes. Uno los ve allá cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera; tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando.

Melitón dice:

—Ésta es la tierra que nos han dado.²⁰

Para obtener “malpaíses” se perderían años, lustros, décadas a partir de 1940: podían pasarse entre cinco y 35 años para resolver malamente, entre ires y venires burocráticos, algo en definitiva. Las reclamaciones se “disolvían” en la burocracia o se reprimían por la mano de autoridades locales o de guardias blancas. Y como las legislaturas estatales podían fijar límites a las superficies permitidas, se llegó a excesos tales como determinar, en Coahuila, que el máximo sería de 50 mil hectáreas.²¹

Se atrapó a los campesinos en un enredillo legal que hacía dormir el sueño de los justos, en el escritorio de algún burócrata, a solicitudes hechas y concedidas desde la época de Cárdenas, pero que habían quedado en trámite. Si al fin se entregaba alguna tierra no era la dotada originalmente sino alguna otra de mala calidad. Si los campesinos no aceptaban, los desalojaban por la fuerza. A veces aceptaban sin resignarse para seguir peleando años y años. La seguridad prometida a los campesinos nunca se dio: a falta de planos definitivos de los ejidos, los cambios y los despojos abundaron. En los años cuarenta hubo desplazamiento de ejidatarios para dar paso a espléndidas zonas turísticas en costas y a fraccionamientos elegantes que iban brotando en torno a las ciudades.

Incontables medidas adversas a los campesinos se tomaron en el sexenio de Ávila Camacho. En 1944, por ejemplo, se obligó a los que habitaban en la proximidad de algún ingenio a cultivar caña de azúcar; en Yucatán se devolvieron desfibradoras a sus antiguos propietarios; se concedieron 8 mil inafectabilidades agrícolas y 203 ganaderas y se entregó, de hecho, a los ejidatarios en manos de los usureros de los pueblos, la única fuente de crédito que les quedaba accesible. Sin embargo, Ávila Camacho se resistió a asumir la responsabilidad de una reforma al Artículo 27 para implantar el *amparo agrario*, que el PAN seguía solicitando: el presidente Alemán habría de proponerlo entre sus primeras medidas de gobierno.

Un milagro “como debe ser”

En seis años se saltó de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial moderna. Es decir, saltaron los que pudieron. El esquema estaba bien “armado”: producir alimentos a bajos precios para el consumo de las ciudades y materias primas para la industria doméstica y la exportación. Con las divisas obtenidas se comprarían máquinas y materias primas para el desarrollo industrial.

Dentro de una circunstancia tan desfavorable para los hombres del campo, resulta sorprendente enterarse de que

[...] el crecimiento que se atribuye generalmente al sector “moderno” y superior se originó en el grupo campesino mayoritario[...].²²

Los incrementos de superficie cultivada, capital y mano de obra ocupada no explicarían el aumento en la producción que se dio entre 1930 y 1960. Si se añade que unos 600 mil campesinos fueron absorbidos en los años cuarenta y unos 480 mil en los cincuenta por la industria y los servicios y que, en los años cincuenta, se fueron de braceros más de un millón cada año, parece obvio que el sorprendente resultado de una producción agrícola *triplicada* entre 1940 y 1960 sólo podría atribuirse a algún otro elemento, inexplicable y enigmático. Ese misterioso factor que nadie quería mencionar fue registrado por Warman: *Un incremento notable en la intensidad del trabajo [...], una ocupación más amplia y más dura de la mano de obra disponible[...]*. Los campesinos tuvieron que trabajar cada vez más duro para ganar cada día menos. Ya en los años cincuenta, la tierra sólo cubría la mitad de las necesidades y había que alquilarla y alquilarse por jornales cada vez más mermados. En suma: [...] *este milagro se hizo con muy poco... como debe ser cuando se habla de milagros[...]*.²³ O, para ser más precisos, se hizo con poco dinero y con mucho sudor.

El reverso del milagro fue el abatimiento que acabó de pulverizar la vida rural y expulsó a muchísimos campesinos hacia las ciudades y a otros muchos hacia los Estados Unidos. Cuando la producción agrícola se triplicó, los campesinos pudieron consumir cada vez menos. Tenían que vender más en el mercado y a veces no podían dejar a salvo ni maíz ni frijol suficientes. La economía monetaria, que desde hacía siglos los perseguía, acabó de tragárselos.

La alimentación campesina no puede depender del dinero para comprar comida. La tierra producía para toda la población, pero los recursos monetarios de los campesinos eran exiguos. La población crecía, pero no el acceso a la tierra ni los medios para cultivar la que había sido dotada: llegó a haber en el campo dos veces más personas de las que hubiera podido ocupar, a pleno empleo, la tierra disponible. Los predios ejidales no alcanzaron para absorber a los hijos. Los que salían de jornaleros o se iban de braceros perdían su ubicación en las comunidades, sin encon-

trar empleo seguro y bien remunerado en otra parte. El campo expulsaba pero la ciudad no absorbía y los grandes predios comerciales sólo daban trabajo en tiempo de siembra o de cosecha.

Después de 1940, la mitad de la población quedó por debajo del nivel de subsistencia, que había sido hasta entonces el nivel de vida de las comunidades pequeñas. En la etapa de Cárdenas se quiso incorporar a los campesinos al mercado en las condiciones más ventajosas posibles. Pero acaso la verdadera aportación de la reforma agraria cardenista debe medirse, más que en cifras de salarios o de precios, en el mejoramiento de la existencia cotidiana de la gente con campañas de desarrollo de las comunidades: de saneamiento, de salud, de alfabetización, con amplia participación de las mujeres. Se procuró sumar calidad de vida en el entramado de la comunidad. A partir de 1940 la economía campesina se agrietó y los antiguos lazos de cohesión comunitaria se erosionaron como nunca antes. La quiebra de los valores tradicionales desintegró, con una gravedad sin precedentes, a la cultura campesina. La vida ya no se definió alrededor de los recursos disponibles. Hubo que comprar no sólo ropa y enseres domésticos sino también alimentos. Para ello había que vender parte de la cosecha, incorporándose con desventaja al mercado. Se perdió la autosuficiencia y todo un complejo de relaciones sociales se deterioró.²⁴

También la vivienda se volvió mercancía: no hubo espacio para las nuevas generaciones. En sus trabajos eventuales, los jornaleros vivían en condiciones inhóspitas, levantando jacales transitorios junto a los caminos o los canales de riego. El Distrito Federal crecía, mientras tanto, a expensas de ejidos y tierras comunales: el 60% del área capitalina fue antes propiedad ejidal o comunal que, ocupada ilegalmente a lo largo de las décadas, se fue regularizando poco a poco. La extensión de la capital empezó alrededor de 1938, cuando más de 1.5 millones de metros cuadrados fueron expropiados y surgieron, sobre terrenos ya invadidos, colonias proletarias. En las décadas sucesivas se negoció el apoyo político otorgando regularización de predios y, a partir de 1950, se favoreció a ciertos sectores y sindicatos con unidades multifamiliares construidas por el Estado.²⁵

El milagro se hizo, sobre todo, manteniendo bajos los salarios en el campo y en la ciudad. Hasta sobraba la mano de obra disponible. El control de los campesinos era ejercido con atingencia y los obreros andaban encandilados, con Lombardo, en la alianza para la modernización.

La “verdadera solución”: el neolatifundio

Después de Cárdenas, el reparto masivo entró en franca contradicción con la necesidad de grandes extensiones de tierra para consolidar capitales. La urgencia del enriquecimiento desplazó las metas sociales. Se importaron los métodos agrí-

colas de los Estados Unidos, donde al contrario de México existían grandes extensiones aptas para la agricultura y poca mano de obra. Se dieron todas las seguridades para la empresa agrícola y para simular la “pequeña propiedad” y los recursos públicos se dirigieron a irrigar y construir infraestructura para la agroempresa:

A los campesinos se les dio en cambio demagogia. El ritmo del reparto disminuyó. Cuando tuvo que hacerse para evitar riesgos políticos, se repartieron tierras poco productivas en las zonas más densamente pobladas. Desde entonces repartir lo inútil se ha convertido en objeto de competencia de los presidentes posteriores. Se reparte a los campesinos desiertos y cumbres montañosas, pedregales y es posible que hasta trozos de mar. Además se repartió tanto que no alcanzó el tiempo para titularlo.²⁶

Fue así como surgió lo que Warman calificó con sorna como “la verdadera solución al problema agrario”: el *neolatifundio*.

También a Warman se debe el análisis de las formas que adoptó ese *neolatifundio*. El *neolatifundio territorial* empezó a prosperar desde 1940. Subsidios, asistencia técnica, créditos, irrigación e infraestructura apuntalaron su éxito, sobre todo en las nuevas zonas de colonización ganadera del sureste. Una variante fue la integración horizontal de varias propiedades, dispersas en la geografía pero complementarias en la producción.

Pero mucho más importante fue el *neolatifundio financiero*, derivado directo de la reforma agraria. Obtener el máximo de ganancia con el mínimo de inversión era su meta y, por su carácter eminentemente especulativo, se volvió un instrumento idóneo para transferir recursos del campo a las ciudades. La dotación cardenista había dejado fuera del mercado a la mitad de las tierras cultivables pero, a partir de 1940, se canceló el apoyo a la agricultura ejidal. Los campesinos que tenían tierra no disponían de capital alguno para hacerla producir:

La capacidad de inversión está en otro sector distinto del que recibió la dotación. Luego, hay necesidad de transferir, no los recursos a la tierra, sino la tierra a los poseedores de los recursos productivos a través de la renta y la operación de latifundios financieros.²⁷

La tercera variante que consigna Warman es una combinación del *neolatifundio territorial* con el *financiero*. En las tierras propias del latifundio se hace una agricultura intensiva y capitalizada mientras que las tierras rentadas, donde se trabaja extensivamente y con menos inversión, se van agotando progresivamente. *Para competir hay que ser grande y rico y más grande y rico cada día*. Los ejidatarios pobres fueron abandonando así la producción comercial y se encadenaron a la renta de la tierra. Nunca pudo romperse el círculo vicioso porque nunca llegaron los recursos

públicos para capitalizar la tierra de los pobres y pequeños. Y el riego y la infraestructura sólo beneficiaron a los grandes. Los verdaderos pequeños propietarios, los minifundistas, tampoco fueron sujetos de crédito y tuvieron que vender sus tierras o rentarlas.

Los ejidatarios en zonas irrigadas tenían expresamente prohibidos los cultivos de subsistencia y los créditos que se les ofrecían no alcanzaban para sostener cultivos comerciales de alto costo en esas zonas irrigadas. También se vieron obligados a rentar la tierra. O fueron presa de la última variante del neolatifundio que detectó Warman: el *neolatifundismo financiero ejercido por el Estado*. Los bancos se convirtieron en neolatifundistas, controlando la tierra y sus cultivos.

En suma: la Reforma Agraria dotó la tierra pero, después de Cárdenas, tierra de mala calidad y no les aportó a los campesinos los medios para hacerla producir. Los neolatifundistas fueron los únicos *beneficiarios reales de la inversión pública*.²⁸ La improbable alianza entre dos utopías se canceló, sin retorno, a partir de 1940.

Pensar en grande

Los precios subieron, durante la guerra, casi un 100%. El crecimiento con inflación había arrancado. Con gasto público se duplicaron los caminos y se triplicó la superficie de riego, pero sólo para la agricultura privada.

La inversión privada creció tanto con la euforia del “pensar en grande” alemanista que alcanzó, en 1947, un nivel que no volvería a darse hasta 1956.²⁹ Crear una “economía de la abundancia” a través de “la revolución industrial de México” fue el *leitmotiv* de las mesas redondas de campaña: había que “entrar de lleno y por derecho propio”, como diría Lombardo, “a la edad moderna”. El “cachorro de la Revolución” (Miguel Alemán) estaba dispuesto a hacerlo, pero sin comprometerse a una alianza unilateral con las mayorías para las que Lombardo reclamaba una “justa participación”. El presidente advertía, en cambio, que los obreros tendrían que “superar todo egoísmo”. “Crecimiento” no rimaba con “populismo”: lo esencial era garantizar utilidades atractivas, no derechos sindicales. Y al desatarse la Guerra Fría rimará también con anticomunismo, argumento socorrido para asegurar la docilidad del movimiento obrero.

Aunque Alemán confiaba en que la estabilidad política de México, importante para los Estados Unidos, favorecería el apoyo a su proyecto económico, las condiciones internacionales no se mostraron muy propicias. Ni proteccionismo ni intervención del Estado despertaban demasiada simpatía y la industrialización dependía mucho de insumos, maquinaria y tecnología norteamericanos. La opción proteccionista fue elegida por un consenso entre el gobierno y los empresarios de Canacintra y Concanaco que pedían, por igual, evitar “una competencia ruinosa”: el propio

presidente Alemán reconocería años después ese consenso.³⁰ Así se decidió no participar en el GATT y denunciar, en 1950, el Tratado de Comercio firmado en 1942. Antes, en 1947, se estableció un sistema de licencias y prohibiciones de importación.

Puesto que “juntos hemos de vivir y juntos hemos de prosperar”,³¹ se procuró buscar créditos y atraer inversiones norteamericanas insistiendo sin embargo en la pertinencia del nacionalismo mexicano y en conservar autonomía en organismos internacionales. Los capitales no abundaban para América Latina porque, con el Plan Marshall, se había dado prioridad a la reconstrucción de Europa. Tampoco los créditos, que buscó Beteta para obras de infraestructura e inversiones industriales. Se le sugería recurrir más bien a la inversión extranjera directa pero ésta no fluía. O bien, en vez de crear nuevas fuentes de trabajo, venía a desplazar a empresarios mexicanos que se quejaban amargamente. De hecho, las empresas extranjeras también se beneficiaron del proteccionismo, sobre todo las automotrices, que ensamblaban, armaban y vendían en México. En cuanto a los créditos, sólo la Guerra de Corea aceleró una inyección de 150 millones de dólares: en 1952 la deuda externa no pasaba de 391 millones.

De las 163 empresas que apoyó Nafinsa, 155 eran privadas y sólo 15 estatales. Pero hubo lo que Vernon llamó una verdadera “explosión del gasto público”, tanto en infraestructura como en financiamiento de industrias que se consideraron básicas y que abarcaban una amplia gama: desde fertilizantes hasta papel, desde carbón hasta automóviles, desde maquinaria textil hasta químicos, desde camiones diesel hasta carros de ferrocarril, además de las estratégicas, como petróleo, electricidad y siderúrgica. La presencia tutelar de Nacional Financiera garantizaba que “el gobierno se convertiría en fiador si las cosas salían mal”:

[...] para los nuevos industriales, la era de Alemán fue más una oportunidad que una amenaza[...] produjo una demostración más del poder perdurable de los símbolos de la revolución: del uso de esos símbolos para ampliar las oportunidades del sector privado y del impulso hacia el crecimiento que esta fusión de fuerzas trajo aparejado[...].³²

La producción industrial creció a un 7% y el número de industrias subió de 13 mil en 1940 a 73 mil en 1950. Pero la capacidad de las plantas se mantuvo subutilizada por la estrechez del mercado y la tendencia al uso intensivo de capital no favoreció la oferta de empleos. En muchas industrias inclusive bajó: en alimentos y bebidas; en metales básicos; en la industria química. Según cálculos, en el conjunto de la economía el índice de empleo se redujo de 96 a 71%.³³

En 1950-51 se alcanzó la inflación más alta del período alemanista. El costo de la vida había subido un 54% desde 1940, acompañado del más severo control de los salarios. Mientras remontaban las utilidades también lo hacía el descontento obrero. La prioridad era el crecimiento, y sólo se pensaba en estimular la inversión y

alzar la productividad. La distribución vendría después, pero nadie sabía cuándo. Si a algún funcionario le preocupaba ese punto ciego en medio de la euforia, recurría a una teoría muy socorrida: la del *trickle down effect*. Más tarde o más temprano, la abundancia acabaría por gotear o permear hacia abajo hasta salpicar con sus dones a los muchísimos que todavía no recibían sus bendiciones. La concentración de riqueza era muy alta en 1950: mientras que el 20% de la población recibía el 59% de los ingresos, el 50% sólo alcanzaba el 18%.³⁴

Charrismo, “*mexicanidad*” y un alegato impugnador

Sólo cumplía Alemán tres semanas de gobierno cuando manejó sin contemplaciones un conflicto laboral en la industria petrolera que, como los ferrocarriles, debía subsidiar con combustibles y fletes bajos al proyecto industrializador. Una secuencia de procedimientos irregulares, incluyendo el pistoleroismo, culminó en el reconocimiento del “Charro” Díaz de León y el desplazamiento de Gómez Z. en el sindicato ferrocarrilero. Había cuajado el “charrismo”. Era evidente la incompatibilidad del proyecto desarrollista con cualquier pretensión de autonomía sindical. Fracasaron los intentos de Lombardo por conservar su influencia en la CTM que, encabezada ya por el grupo de Fidel Velázquez, no sólo no cumplió con un compromiso previo de apoyar al Partido Popular sino que se desvinculó de la Confederación de Trabajadores de América Latina y optó por la “amistad” del presidente, al que ofrecían los líderes, a su vez, “amistad” y “colaboración”. El movimiento obrero estaba a la orden, sin condiciones, para lo que pudiera ofrecerse. El proyecto modernizador se lo había engullido. Los líderes que se salieron de la tutela de Vicente Lombardo tenían sus propios intereses, bastante concretos: les interesaba el poder y el dinero, y el dinero y el poder estaban en otra parte y bajo otra tutela.

La ideología de la *mexicanidad* fue proclamada por el partido gobernante, transformado en Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946. Los sectores obrero y campesino, aunque mayoritarios, habían sido encauzados al redil de la docilidad y un sector popular integrado por la clase media en ascenso asumía, si no las decisiones, sí la voz cantante. En rigor, no era del todo incongruente la comparación que se atrevió a establecer el líder nacional de ese tercer sector entre aquella etapa y la época del liberalismo juarista. López Arias habló de una “segunda Reforma”, quizá sin una noción muy clara de que su audaz sugestión, por desmesurada que pudiera parecer, equivalía a reconocer la continuidad del proyecto modernizador.

En 1947 la ideología modernizadora, identificada entonces con la *mexicanidad*, se había apoderado del escenario. La avidez del Progreso campeaba victoriosa. Eran pocos los que hacían cálculos y se preguntaban por las posibilidades reales: los más, a la izquierda, veneraban el progreso lineal en estricta ortodoxia mar-

xista, y, a la derecha, lo identificaban con la oportunidad creciente de hacer buenos negocios. Mientras las mesas redondas marxistas, organizadas por Lombardo, proponían un frente nacional de masas populares en apoyo de un gobierno “democrático-burgués progresista”, sólo una voz disidente, la de Daniel Cosío Villegas, hacía un alto para reflexionar y recoger la preocupación expuesta hacía cuatro años por el profesor Silva Herzog.

El alegato de Cosío no se dirigió frontalmente contra la idolatría del Progreso: no era bueno arriesgar, creía, *un tiempo que no puede perder un país tan atrasado en su progreso*. Señaló, sin embargo, que aun en el supuesto de “llegar a gozar de una prosperidad material desusada”, la imitación sumisa del modelo norteamericano, fundada en la demanda de financiamiento económico y adiestramiento tecnológico, de otro modelo cultural y de asesoría política significaría un sacrificio de la nacionalidad y el extravío de confianza del país en la capacidad para labrarse un destino con recursos propios.

Al advertir que la nación atravesaba *una crisis gravísima*³⁵ y que los hombres de la revolución habían agotado *su autoridad moral y política*, recordó que una de las metas del movimiento había sido *anteponer la condición y el mejoramiento de los más al de los menos* y que la Revolución Mexicana podía congratularse de haber sido el primer *gran asalto victorioso al bastión del liberalismo* entendido como *laissez-faire*. Tan esencial era abreviar la desmesurada desigualdad como *crear en México una democracia con ciertos visos de autenticidad*. Como antes Silva Herzog, Cosío Villegas llamaba a desterrar la corrupción. Y concluía que no había que pedir soluciones a las derechas, “de las que México puede esperar bien poco”, sino a la revolución misma, que tendría que reafirmarse en sus principios y depurar a sus hombres.

¿Utopía o sentido común?

La política “agrícola” había sustituido a la política “agraria”. La enmienda al Artículo 27, para autorizar el *amparo agrario* y proteger inafectabilidades ya otorgadas o que pudieran otorgarse en el futuro, fue la primera medida de la administración de Alemán. En aras de la producción rentable y de los buenos negocios en el campo se congeló el desarrollo de la propiedad social y se propició el neolatifundio. Alemán estaba convencido: la productividad sólo podía garantizarse con la aplicación de criterios empresariales y consideraba remoto un cambio de mentalidades que pudiera convertir en empresarios a los campesinos. En su primer diálogo con ejidatarios de La Laguna había percibido esa escasa propensión al estímulo de la ganancia: aquellos hombres le habían insistido en que “necesitaban primavera”, es decir, “algo verde” porque “estaban hartos del algodón”.³⁶

El candidato, cuya sensibilidad era mucho más empresarial que bucólica, habría confirmado desde ese momento cuál sería su política hacia el campo. Aunque Leyva Velázquez alertará tímidamente contra un desarrollo agrícola “a la prusiana”, de modernos latifundios, su sustituto en la CNC no ocultaría el apoyo que esa organización habría de brindar, en lo sucesivo, a la “teoría de la abundancia”. Se apoyó la inversión privada en el campo con obras de riego, electrificación y caminos. En busca de “buenos negocios”, surgieron “agricultores *nylon*” que jamás habían visto el campo. La mecanización se quintuplicó en los grandes predios mientras sólo se duplicaba en los ejidos. El crédito para ejidatarios no fluía de instituciones oficiales ni tampoco privadas, sino de fuentes usurarias o, en el mejor de los casos, de transnacionales que exportaban cultivos comerciales. La altísima tasa de productividad agrícola de un 8%, la más alta entre 1940 y 1960, evidencia que se cumplió de esa manera el propósito de asegurar que el campo financiara el crecimiento industrial.³⁷

¿Quién iba a escuchar entonces el consejo de Frank Tannenbaum? ¿Quién pensaría en encontrar soluciones locales para los miles de pequeñas comunidades sin hacerlas cada vez más dependientes del mercado nacional? Siendo tan realista, el discurso de Tannenbaum fue leído como el discurso de la utopía o de la mala fe. Era, sin embargo, el del sentido común.

¿Para qué inundar a los poblados de manufacturas deficientes y caras si la gente podía producir, allí mismo, objetos sólidos, útiles y además hermosos? En vez de enormes y costosas presas ¿por qué no pequeños embalses que, además, pudieran funcionar como estanques para peces? Todo lo que después será propuesto por Schumacher y por los simpatizantes de las tecnologías *adecuadas* e *intermedias* fue sugerido en México, sin encontrar eco, por Tannenbaum. Habló de una educación dirigida al mejor aprovechamiento de los recursos del medio ambiente; de seguir desarrollando una cultura derivada de la realidad mexicana; de promover la tendencia a la autosuficiencia que siempre habían conocido las comunidades para producir desde la tela para vestirse hasta la casa, el frugal ajuar y los implementos domésticos y de trabajo; habló de la conveniencia de proporcionar motores de combustión interna y pequeñas plantas hidroeléctricas; de mejorar técnicas tradicionales de preparación de abonos; de aumentar cultivos de traspatio, incluyendo árboles frutales; de promover la selección de semillas y las artesanías locales; la sanidad ambiental y la cría de animales; la apicultura y el control de enfermedades endémicas. Los bienes industriales que podían ser útiles a la población rural no eran los sofisticados y costosos, sino los sencillos, baratos y abundantes. Lo que producía la industria de la ciudad no le interesaba al campo ni podía comprarlo. La industria pensaba en utilidades, no en campesinos:

Para los mexicanos, el primordial problema incubado por la Revolución es el de cómo eludir el dilema de una nación dividida entre los que viven en un mundo moderno y

los que viven en un mundo primitivo[...]. A menos que pueda elevarse el nivel de la población rural, no es posible esperar que pueda lograrse la unidad económica o la unidad cultural de la nación[...].³⁸

El propósito de precipitar la liquidación de una economía campesina de tradiciones seculares, acabando de atarla sin beneficio alguno a la economía monetaria, ahondó la enorme desigualdad. Siendo el 64% de la población, al campesinado apenas le tocaba la sexta parte del ingreso.³⁹

En *La revolución industrial en México*, Sanford A. Mosk se había referido a la estrechez del mercado interno, a la escasez de capitales y de recursos humanos especializados, a la carencia de planeación y al exceso de inflación. Tannenbaum iba más allá. Esbozaba una interpretación filosófica de la historia, que no se detenía en la economía sino que iba al fondo de las estructuras culturales: los campesinos eran los corderos sacrificiales en el altar del Progreso.

Se le opusieron, desde la izquierda, argumentos esquemáticos, ideologizados, que partían de un supuesto: se trataba de una “celada” del imperialismo. Manuel Germán Parra, marcado por una concepción economicista y marxista de la historia, reiteró que las estructuras económicas determinan las superestructuras culturales y no al revés. Su *fe* en el progreso lineal le obligaba a dogmatizar:

Progresar es industrializarse, industrializarse es urbanizarse, e industrialización y urbanización implican[...] desagriculturizarse y desruralizarse. Y, a la inversa, hacer que un país se vuelva más agrícola y más rural, equivale a que se torne menos industrial y menos urbano, y dejar de ser industrial y urbano equivale a marchar hacia atrás en su historia[...].⁴⁰

En las antípodas de quienes acusaron a Tannenbaum de proponer una utopía bucólica, “que la realidad misma se encargaría de refutar”, contrastó la inteligente apreciación de Leopoldo Zea, que invirtió el falaz razonamiento para afirmar que se trataba, al contrario y precisamente, de *una vuelta a la realidad*. Elegir una *filosofía de las cosas pequeñas* no era ninguna utopía. Permitiría recuperar en lo más concreto lo que México *es*, lejos de reincidir en la compulsión repetitiva de persistir en lo que se había pretendido ser:

[...] Realidad contra la cual se habían venido estrellando todos los proyectos de creación de un México que no respondía a sus necesidades. Tannenbaum ha captado este permanente conflicto de nuestra historia entre la realidad y la imaginación, lo que México es y lo que se ha pretendido que sea, lo concreto y lo utópico[...].⁴¹

Era lógico que prevaleciera, sin embargo, la escisión esquizoide entre la realidad de la mayoría y la fantasía de la élite. ¿Habría sido fatalmente abatido con Zapata,

en 1919, el México múltiple y disperso que tomó las armas en 1910 para exigir que se le tomara en cuenta? ¿O sería posible adoptar, con cordura, proyectos realizables, al alcance del país real, de todos los mexicanos de carne y hueso? La respuesta parecía negativa entonces. Medio siglo después se ha ido ahondando la fisura entre los dos Méxicos.

Era harto improbable que los presidentes Alemán o Ruiz Cortines “perdieran tiempo” en pesar los argumentos esgrimidos en aquella polémica de intelectuales. Las decisiones políticas estaban más cerca de los intereses que de la reflexión desinteresada. Y los funcionarios estaban imbuidos del desarrollismo generalizado, que proponía crecer ahora y redistribuir después.

Alternando con crisis periódicas de desconfianza, el hallazgo de un “armonioso mecanismo nacional” entre el gobierno y el sector privado influyó en el crecimiento acelerado y fue estimulado, a su vez, por ese crecimiento. Los empresarios no militaban en el PRI pero los canales de comunicación con el Estado siempre estuvieron abiertos. No hubiera sido fácil distinguir entre intereses empresariales e intereses de funcionarios. A la versión de Raymond Vernon, que creyó percibir a un Estado oscilante o inmovilizado a veces por presiones opuestas procedentes de la izquierda o la derecha del sistema, se opuso la de Roger D. Hansen que advirtió cómo, en aquella etapa de crecimiento sostenido, fueron eliminadas sistemáticamente todas las disensiones susceptibles de interferir con las demandas empresariales.

Apoyadas por el Estado, esas demandas serían satisfechas. Estaba en juego más que un modelo teórico. Aunque, sin duda, no perjudicó a quienes pensaban primero en sus intereses que una izquierda “progresista” coincidiera tan oportunamente con el empeño desarrollista. Lo hacía sin dejar de insistir, a cada rato, en una mejor distribución del ingreso, una mayor presencia del Estado o una mayor vigilancia de la inversión extranjera. Pero había un acuerdo en lo esencial: crecer a toda costa. Y ¿cómo hubiera podido conciliarse el “pensar en grande” con una “filosofía de lo pequeño”?

Importar capitales o exportar hombres

Puesto que todo dependía del poder presidencial las variables sexenales serían, también, cosa de temperamento. Así se pasó, en 1952, de la euforia derrochadora a la austeridad; del dispendio que los más osados llamaban *corrupción* a la probidad cautelosa de “quien camina sobre huevos”. El deterioro de los niveles de vida con inflación, salarios congelados y pauperización campesina, que caracterizó el fin del alemanismo, fue esgrimido por la oposición del general Henríquez Guzmán, que pretendió competir con Ruiz Cortines, en las elecciones de 1952. El henriquismo

enarboló una propuesta de recuperar las metas sociales de la revolución para canalizar el “descontento difuso de las masas”.⁴² A la Federación de Partidos del Pueblo se le canceló el registro como partido en 1954 pero muchos grupos campesinos que, sin aquel apoyo, volvieron al redil de la CNC nutrieron más adelante a otros grupos que buscarían eludir el control del sistema.

Mientras tanto, se procuró afianzar la imagen de un presidente preocupado por el bienestar de las mayorías con medidas contra el encarecimiento de la vida. En 1953 pasaron de 16 mil las multas a quienes violaban los precios.⁴³ En algunos sitios, la Ceimsa se encargó de toda la distribución de maíz y de frijol mientras los comerciantes organizados ponían el grito en el cielo y se oponían a la fijación de precios tope. Tras la devaluación de 1954 los precios se dispararon. Los líderes obreros, muy presionados por sus bases, amagaron con huelga general para pedir un alza del 24% en los salarios, pero sólo estallaron 150 de casi 50 mil emplazamientos: se negociaron arreglos con un promedio de 20% de aumentos en todo el país. A partir de 1955 se sentaban las bases de lo que se llamaría el *desarrollo estabilizador*, en contraste con el *desarrollo inflacionario* de los años cuarenta. Los salarios, muy deteriorados, mejoraron ligeramente y se logró cierta estabilidad en los precios, a la vez que los sindicatos recibían más prestaciones sociales.

En 1955 el secretario de Hacienda Carrillo Flores anunció que se habían alcanzado “los niveles más altos que registra nuestra historia” en producción, ocupación y consumo.⁴⁴ Tras un recorte del gasto público al principiar el régimen, acorde con la imagen de austeridad que se pretendía dar, y después de la fuga de capitales que evidenciaba molestia por una “excesiva” intervención del Estado, Ruiz Cortines tuvo que dar un viraje para contentar a los hombres de negocios. Alientos fiscales, extensión de créditos, proteccionismo y devaluación fueron medidas adoptadas para hacer más competitivos los productos mexicanos en el exterior. La inversión en el campo se concentró en la irrigación, que favorecía a la agricultura comercial: la extensión de tierra cultivable subió un 40%. Se mejoraron los ferrocarriles y se empezó a fabricar vagones. Se elevó en un 80% la capacidad eléctrica instalada y Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó en un 50% su capacidad de refinación.

Como los ingresos fiscales no aumentaron, se buscó crédito exterior. Fue así como la deuda, que en época de Alemán no pasó de 200 millones de dólares, ya había subido a 626 millones al salir Ruiz Cortines. Se logró asegurar estabilidad de precios y seguir subsidiando la industrialización, con bienes y servicios baratos suministrados por el Estado. En inversión directa, aumentó la afluencia de capitales que, entre 1955 y 1958, creció en más de 100 millones de dólares por año: en 1957, sin embargo, sólo la sexta parte de la producción correspondía a empresas controladas por capital norteamericano.⁴⁵

El presidente no perdía ocasión de sugerir que los extranjeros “harían bien en buscar socios mexicanos para sus empresas”. De hecho, el proteccionismo fue muy

favorable a las que se animaban a invertir contando con un mercado cautivo. La inversión extranjera subió, entre 1953 y 1958, un 60%.⁴⁶ La industria se dinamizó con la inyección de capitales y tecnología y algunos obreros salieron ganando con mejores salarios. Las inversiones extranjeras sólo preocuparon, aunque no demasiado, a intelectuales del Círculo de Estudios Mexicanos y a industriales de la Cámara de Transformación. Puntos de vista más o menos propicios se manifestaron en un Congreso Nacional de Industriales que suscitó en 1957 toda clase de opiniones y propició significativos elogios a la política de apertura que, en tiempos de don Porfirio, había favorecido Limantour. José Campillo Sáinz fue descarnado:

[...] o admitimos la colaboración de las inversiones extranjeras en la enorme tarea que tenemos por delante, o negamos a nuestros braceros un lugar en su patria para trabajar con provecho[...].⁴⁷

El dilema entre “importar capitales” o “exportar hombres” podía parecer válido: entre 1952 y 1958 pasaron legalmente la frontera 340 mil trabajadores cada año y sumaban 700 mil los “espaldas mojadas”. ¿Qué hacer con los mexicanos que expulsaba el campo? A nadie se le ocurrió buscar soluciones *en el campo* para los problemas que agudizaba, *en el campo*, la panacea de la industrialización.

Los sustentos del “milagro”

A partir de 1956 se logró, a la vez, aumentar la productividad y controlar la inflación. El “desarrollo estabilizador” habría de durar quince años aunque, en sentido estricto, fue articulado a partir de 1959 por Antonio Ortiz Mena y conoció el máximo ritmo de crecimiento en las postrimerías de Díaz Ordaz. Conciliar estabilidad con crecimiento fue la gran hazaña del “milagro mexicano”, restringiendo el gasto público y “procurando ajustar estrictamente los gastos a los ingresos”.⁴⁸ Aunque, en verdad, la política estabilizadora se fundó en buena medida en el financiamiento exterior:

La sólida posición económica actual de México, y la puntualidad en sus pagos, ha hecho que nos consideren magníficos clientes las organizaciones públicas y privadas de crédito más importantes del mundo[...]. Está, pues, totalmente consumada la rehabilitación del crédito de México en los mercados internacionales de capital.⁴⁹

El fomento a la producción industrial no fue muy selectivo, lo que propició un crecimiento más anárquico que racional y acorde con las necesidades del país. El Estado se mantuvo en prudente segundo plano. La iniciativa privada aplaudía los

incentivos pero rechazaba las interferencias inhibitorias. La dependencia de fluctuaciones externas marcaba a la economía. Cuando las importaciones de maquinaria y materias primas excedieron demasiado al desplome de ingresos por exportaciones agrícolas empezó a revertirse el auge. Se redujo, además, la producción de alimentos y, al finalizar el sexenio de Ruiz Cortines, había escasez y descontento. Ya a principios de 1957 había reconocido Carrillo Flores:

Sería[...] una grave, imperdonable imprudencia pensar que la situación favorable que la economía mexicana ha tenido en los últimos tres años, significa que nuestros problemas fundamentales han quedado resueltos[...].⁵⁰

En el campo sólo se había capitalizado al sector capitalista, especializado en cultivos de exportación: cuando se estancó la salida de esos productos hubo que reorientar la agricultura hacia la producción de alimentos, para el mercado interno. Mientras, se repartían cerros inhóspitos y tierras de temporal que llegaron a 3 millones 200 mil hectáreas.⁵¹ La población campesina quedaba prácticamente excluida del mercado, igual que los marginados urbanos cada vez más numerosos. Aunque se pretendió ampliar el mercado interno con un aumento del salario mínimo, que entre 1950 y 1958 subió un 142% en la ciudad y un 157% en el campo, los beneficiados fueron escasos: obreros sindicalizados y algunos jornaleros agrícolas que, muy eventualmente, conseguían hacer efectivo aquel aumento.⁵²

La transición entre Ruiz Cortines y López Mateos estuvo marcada por graves conflictos sociales, que desmintieron la suavidad de la sucesión en el interior del sistema político. Mientras éste se exhibía por primera vez como una fortaleza sin fisuras, una situación desfavorable para las mayorías se tradujo en descontento en el campo y en intentos de maestros y trabajadores por lograr reivindicaciones y autonomía sindical. Los efectos reales de la leve mejoría de salarios se reflejaron en 1957: ¡Fidel Velázquez pidió un aumento de 400%! Descartados sus argumentos de la urgencia de crear “un sólido mercado interno”, el salario mínimo quedó en 12 pesos. La anécdota confirma que los obreros no vivían precisamente en “jauja” y que el discurso de los dirigentes se daba vuelo para superar ampliamente, en osadía verbal, a la expectativa real de negociación.⁵³

Confianza y tranquilidad en el campo

La precariedad en el campo se acentuó con un repatriamiento masivo de braceros después de la Guerra de Corea y el desplome del algodón y otros cultivos comerciales en 1956. Jornaleros de predios dedicados a la exportación quedaron sin trabajo y a ello se sumó la demanda no resuelta de solicitantes de tierra. La Unión General de

Obreros y Campesinos de México (UGOCM) invadió grandes latifundios del Norte. Fue algo imprevisto: por todas partes se hablaba, en ese año de 1958, de confianza y tranquilidad en el campo. Cuando 2 mil campesinos invadieron predios en Sinaloa en vísperas de la cosecha, la respuesta fue rápida: en una semana se dotó a 484 familias con 4 840 hectáreas y en un mes más a otras 1 400 con 14 mil hectáreas. En La Laguna, jornaleros desempleados se presentaban a pedir trabajo y, al no obtenerlo, saboteaban labores y ocupaban temporalmente los ranchos para luego retirarse. En Tepic ocuparon parvifundios; en Colima 2 mil familias invadieron una hacienda de 17 mil hectáreas y en Ensenada otras 2 500 familias, incluyendo niños, ocuparon la colonia agrícola Valle de Guadalupe. Tras el desalojo fue apresado el líder Jacinto López. Pero, a la vez, el gobierno compró las 500 mil hectáreas del latifundio de Cananea, denunciado insistentemente por la UGOCM, para distribuir sus tierras. La compra se hizo a precio comercial a la Cananea Cattle Company.⁵⁴

El régimen de López Mateos procuró curarse en salud dotando, en 21 meses, el equivalente a la cuarta parte de lo repartido desde 1940: 3 millones de hectáreas.⁵⁵ También organizó ejidos ganaderos, canceló algunos arrendamientos de particulares en zonas ejidales e intentó industrializar productos agropecuarios para imprimirle “un nuevo enfoque” a la reforma agraria. Pero el año de 1962 quedó teñido de sangre: en el mes de mayo, en Xochicalco, *Rubén Jaramillo y su familia fueron asesinados por agentes del gobierno*.⁵⁶

Al culminar el régimen de Cárdenas, Jaramillo había sido el promotor de la cooperativa cañera de Zacatepec. El control del Banco Ejidal la convirtió, sin embargo, en una ficción formal. En 1942, perseguido por su defensa de los cooperativistas, tuvo que refugiarse en el monte, donde permaneció con cerca de 90 hombres hasta que el presidente Ávila Camacho le dio garantías. En 1946 se postuló como candidato independiente al gobierno del estado de Morelos y, en 1952, apoyó a Henríquez Guzmán en su intento de llegar a la presidencia. Unos meses antes de su asesinato había encabezado una solicitud de 14 mil hectáreas en los llanos de Michapa y el Guarín para 5 mil campesinos morelenses.⁵⁷

La situación del campo se fue deteriorando en los años cincuenta y sesenta:

La menor dotación de tierras y el crecimiento de la población rural, dentro de un esquema de acaparamiento de las mejores tierras y amparos por los agricultores comerciales, iría fracturando al ejido llevándolo a su parcelación excesiva y a su incapacidad para satisfacer las necesidades vitales del campesino. La participación democrática en la asamblea del ejido —máximo órgano de dirección— iría desapareciendo, reforzando la presencia del comisario ejidal y a través de éste, la fuerza de las instituciones de control y dirección del agro [...] el neolatifundismo disfrazado y el minifundio fueron configurando el binomio de la estructura de tenencia de la tierra en el México moderno [...] la desatención [...] al sector ejidal fue evidente [...].⁵⁸

Un verano y un otoño calientes

Los conflictos laborales se iniciaron en 1956, cuando los maestros, encabezados por Othón Salazar, reclamaron un aumento de 30%. En 1958 seguían pendientes esas demandas y una manifestación de maestros fue disuelta en el Zócalo con granaderos. El movimiento persistió: los maestros acamparon en la Secretaría de Educación Pública (SEP) e hicieron colectas y manifestaciones breves. Por fin se accedió a un aumento, poco antes de las elecciones. Una manifestación de 40 mil personas fue convocada para celebrarlo.

El verano de 1958 fue un verano caliente: Demetrio Vallejo fue elegido secretario general de 60 mil ferrocarrileros y en septiembre fue apresado y luego liberado Othón Salazar. Telegrafistas, petroleros y electricistas pedían aumentos. Tras varios paros escalonados y uno de 96 horas Vallejo había ganado, en agosto, por 59 mil votos contra nueve. Como se aproximaba el cambio de gobierno se consideró prudente no interferir. En julio se obtuvo un aumento de 215 pesos. Habían pedido 350 y la empresa les ofreció 180: el gobierno medió y la propuesta fue aceptada. El costo de la vida superaba en un 60% al salario.

No fue menos cálido el otoño: Fidel Velázquez, en declaraciones al periódico *El Popular*, consideró un mito la justicia social; señaló que las utilidades de 25 empresas sobrepasaban el presupuesto federal y sentenció que en ningún otro país era tan injusta la distribución de la riqueza.⁵⁹ Pidiendo un 25% de aumento generalizado, amenazó con “miles” de emplazamientos de huelga.

López Mateos toma posesión en medio de aquella efervescencia. Una huelga, en febrero, logró otro 16% de aumento sobre los 215 del mes de julio. Pero, para incluir en ese beneficio a trabajadores del Ferrocarril del Pacífico y del Mexicano, se emplazó nuevamente a huelga. La empresa despidió entonces a 12 mil trabajadores y se desató, de Sonora a Chiapas, la represión. Tras aprehender a 300 “agitadores” encabezados por Vallejo, se aplastó el movimiento tan violentamente que se hizo uso, por doquier, de macanas y bayonetas y la capital parecía en estado de sitio. Decapitado el movimiento, quedaron sin empleo 20 mil trabajadores más y se prosiguió la “pacificación” de todos los sindicatos. La dimensión de la rebeldía había sobrepasado en mucho a la que, diez años antes, fue controlada con el “charrismo”: también la respuesta fue mucho más contundente. Demetrio Vallejo habría de pasar varios años en la cárcel por delitos de disolución social, ataques a las vías de comunicación, delitos contra la economía nacional, asonada y motín.⁶⁰

Con la derrota del movimiento ferrocarrilero se desbrozó el camino para el *desarrollo estabilizador*. Así como las invasiones habían resultado sorpresivas en el campo, no estaba prevista la aparición de líderes obreros tan independientes. Fueron llamadas de atención que aconsejaron repartir más tierras (López Mateos llegaría hasta los 16 millones de hectáreas) y evitar, a toda costa, la elección democrática de dirigentes obreros.

Espectadores y voceros: una clarinada de disidencia

Las llamadas de atención también surgieron de los intelectuales. En mayo de 1959 apareció *El Espectador*. Fue la primera expresión, articulada y explícita, de disidencia intelectual: sin compromisos con ninguna tendencia y con el propósito de influir en la opinión pública a través de la reflexión honrada. Para hacer, con recursos propios, una revista mensual altamente crítica se juntaron Víctor Flores Olea, Carlos Fuentes, Jaime García Terrés, Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara y Luis Villoro. Los editores advirtieron que no pensaban en la organización política sino en

[...]ver de frente la realidad del país, entender a nuestros contemporáneos, preocuparnos por los nuevos estilos de vida, reflejarlos y decirlos [...] porque esto es ya un principio de transformación de la realidad.⁶¹

A eso, añadían, *tal vez pueda llamársele sentido de responsabilidad histórica*. Los seis jóvenes *espectadores* querían contribuir a una conciencia ciudadana, para devolverle sus propósitos originales a una revolución escamoteada. Anticipando lo que treinta años después sigue siendo una aspiración vigente e incumplida, señalaron la contradicción flagrante de una modernidad económica que le daba la espalda a la modernidad política: la democracia era el único camino y ya no podía aplazarse. Seis puntos proponían para esa meta: 1) cumplimiento de la Constitución de 1917; 2) respeto al voto; 3) democracia sindical; 4) auténticos partidos independientes; 5) separación de poderes; 6) libertad de expresión.⁶²

Carlos Fuentes calificó de *modesto* un programa que se limitaba a recoger *exigencias mayoritarias de México*. Para no atender a esa reclamación se agitaban, como espantapájaros, dos peligros supuestos, la presión norteamericana y una conjura comunista:

No creemos, sinceramente, que la realización de este programa se traduzca en superiores presiones norteamericanas sobre el gobierno de México. Formulemos, más bien, la pregunta en sus justos medios: ¿Por qué no se atreve el Estado a despejar la vía hacia esas metas democráticas? ¿Por qué no se decide a atender ese programa, tan modesto, de reclamaciones democráticas? Esperemos estas respuestas, y dejemos dormir a los fantasmas.⁶³

González Pedrero insistía en la democracia como un fin en sí y como punto de partida de todas las soluciones, incluyendo la justicia social. Se había falseado la representación legítima y el “charrismo” prevalecía, no sólo en el movimiento obrero:

[...]cuando no son los electores los que eligen a quien debe representarlos; *cuando una voluntad omnímoda sustituye a la voluntad mayoritaria* [...] cuando existe una democracia simulada [...].⁶⁴

La crítica al presidencialismo autoritario se manifestó en cada uno de los diez números que lograron sacar los inquietos disidentes: hasta allí alcanzaron sus cortos recursos monetarios y hasta allí pudieron resolver los tropiezos prácticos que suponían cubrir la redacción íntegra, el cuidado material y una difusión que, lógicamente escasa, se dio sobre todo en medios universitarios, intelectuales y políticos.

Había en *los espectadores* la esperanza del surgimiento de una nueva *izquierda*, humanista y antidogmática, sin sectarismos ni adhesiones al socialismo totalitario soviético, capaz de devolver la revolución a su vertiente popular y a su aspiración democrática. En la esfera internacional, la muerte de Stalin en 1953 había marcado el principio del fin del “socialismo real” y se perfilaba, sobre todo en Francia, la articulación de una *nouvelle gauche* emancipada y antiautoritaria. Había surgido el movimiento de los No Alineados y había aparecido la Revolución Cubana como la esperanza, para América Latina, de un socialismo democrático y libertario.

El Espectador hizo la crítica del modelo desarrollista que se desentendía de las necesidades populares; se solidarizó con los esfuerzos de los obreros por designar representantes auténticos y recordó el origen campesino del movimiento revolucionario de 1910. En aquellas páginas se inició la crítica del control corporativo y se señaló la contradicción entre un desarrollo industrial excluyente y la paradoja de que pretendiera seguir sustentándose en el apoyo de las mayorías excluidas. Luis Villoro señaló que todavía se podía rectificar el rumbo: *En México, el Estado emana- do de la Revolución no está en crisis, está en desarrollo*.⁶⁵

La decisión de no hacerle el juego al silencio y hacer uso de la palabra para defender la democracia fue una auténtica innovación modernizadora. Era, como dijo Fuentes, *darle una voz a quienes no pueden hacerse escuchar*, para hacer contrapeso a la *esquizofrenia retórica* de un *newspeak* que hablaba un lenguaje desmentido, día a día, por los hechos.⁶⁶

Octavio Paz habría de señalar más tarde, en 1972, cómo *la crisis del sistema y la crítica de los escritores se iniciaron casi al mismo tiempo*. Un manifiesto, firmado por Paz en 1958, y la aparición de *El Espectador* en 1959 advirtieron los peligros de obstruir la escucha de las demandas populares.⁶⁷

Annick Lempérière, discípula de François Xavier Guerra, ha reconocido que los editores de *El Espectador* reivindicaron un papel de *voceros* y que la revista

[...] tuvo el mérito de inaugurar, entre la izquierda intelectual, la dinámica del periodismo político y de poner en circulación fórmulas que de 1959 a 1968 seguirán vigentes.⁶⁸

Un modelo casi mítico

El 20 de mayo de 1946, Cárdenas había anotado en sus *Apuntes*:

[A los campesinos] sólo se les ha puesto en posesión de sus tierras, faltándoles el crédito [...], medios que levanten su moral, maestros que atiendan sus escuelas, médicos que atiendan a los numerosos enfermos que se registran en estas regiones azotadas por enfermedades endémicas, dirección técnica para aumentar y mejorar los cultivos [...]. Causa disgusto que se vea con tanta frialdad el problema del campo y de su población. La gente de los centros urbanos y la burocracia no toman en cuenta que el campo y la miseria campesina engordan a la ciudad.

El 20 de noviembre de 1957:

La industrialización no debe entenderse sino como una correlación en el desarrollo de la industria y de la agricultura. Nuestro país sigue siendo un país agrario. Su población rural forma un poco más del 65 por ciento de la económicamente activa [...]. Fueron brazos de ejidatarios los que hicieron producir en 1950, el 62 por ciento de la superficie cosechada de maíz en la República; el 56 por ciento de la de trigo; el 60 por ciento de la de frijol; el 77 por ciento de la de garbanzo y el 58 por ciento de la de caña de azúcar [...]. El ejido fue concebido como una unidad en la economía agraria nacional[...] no se trataba de imitar sistemas extranjeros, sino de facilitar la asociación campesina para el empleo de la maquinaria[...].

El 1º de enero de 1958:

[...] ¿Qué utilidad puede tener una Revolución que no garantiza la subsistencia de todos?[...]

El 16 de noviembre de 1959:

[...] El problema político y moral de la mayoría del pueblo pobre de México es que no tiene oportunidad de hacerse oír[...].

La preocupación del expresidente se había ido alimentando, en los años del “milagro”, con el persistente abandono del bienestar de los más pobres. El comentario registrado en 1959 no era una reflexión solitaria sino un reproche al presidente López Mateos, que se negaba a escuchar los consejos de reparar, con clemencia, la represión violenta del movimiento ferrocarrilero:

[...] Es nocivo para el país que para gobernar no se confíe en la fuerza moral de la investidura institucional y que se gobierne con temor, recurriendo a la fuerza armada[...].⁶⁹

El recurso de la fuerza se volverá aplastante diez años más tarde. Mientras tanto, la figura de Lázaro Cárdenas se fue perfilando como “un modelo casi mítico”.⁷⁰ Los jóvenes intelectuales se acercaron al respetado expresidente porque encarnaba, para ellos, el corazón sano de una revolución enferma y lastimada y lo percibían como la *conciencia perturbadora* que podía oxigenar una atmósfera enturbiada. Respondiendo a su convocatoria acudieron primero a la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz (marzo de 1961) y después al Movimiento de Liberación Nacional, MLN (agosto del mismo año), que formuló un programa democratizador, fundado en el respeto a la Constitución de 1917 y en la llamada “ideología de la Revolución Mexicana”: nacionalismo; participación del Estado en el desarrollo; reforma agraria integral y defensa de la soberanía.

Confluyeron en aquel *frente amplio* personas de muchas procedencias: miembros del Círculo de Estudios Mexicanos, fundado en 1954 y que reunía a profesionales de múltiples disciplinas; colaboradores de *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, publicación donde se difundía una reflexión seria sobre los problemas sociales y económicos; intelectuales independientes; militantes del PRI, del PPS y del PC; campesinos adheridos a la CNC y obreros incorporados a la CTM. Abundaron, sin embargo, los ataques de la prensa a una supuesta “conjura roja” y aun los de “traición a la patria” dirigidos al general Cárdenas a quien se le reclamaba, en verdad, que se atreviera a romper “las reglas del juego”.

De aquella breve incursión de Cárdenas en la arena política surgió, en enero de 1963, una Central Campesina Independiente (CCI) para encauzar demandas postergadas. Alguna influencia ejerció sobre la política agraria de López Mateos. Pero el MLN nunca pasaría de su calidad de “grupo de presión”. El general Cárdenas deseaba enderezar el rumbo del sistema pero no afectarlo en su estructura y, por eso, nunca se inclinó a convertirlo en partido político.

El lastre de muchos sectarismos pesaba, además, sobre aquel intento de actualizar a una izquierda cargada de resabios dogmáticos. Los grupos más radicales se escindieron, para participar en las elecciones, y los intelectuales dieron por terminada su primera experiencia, frustrante y aleccionadora, en las lides políticas. El MLN acabó de diluirse cuando el general Cárdenas anunció su adhesión a la candidatura de Gustavo Díaz Ordaz. La contradicción que desgarraba a Cárdenas se reflejó en el MLN: seguía creyendo en los instrumentos del sistema que él mismo había instituido y aspiraba, a la vez, a devolverles sus contenidos populares originarios. Su confianza y su lealtad al sistema prevalecía sobre cualquier impugnación de fondo. Por otro lado, la “izquierda” se mostraba incapaz de abandonar esquemas para trascender la fragmentación y el oscurantismo estaliniano. Y estaba muy verde la sociedad civil para generar, desde abajo, una participación coherente.

Carlos Fuentes le reprochó a aquella “izquierda” la incapacidad para organizarse, a la vez que sugería reflexionar más sobre los recursos del partido oficial para

seguir contando con el apoyo de los sectores populares.⁷¹ González Pedrero había señalado la inutilidad de los partidos mientras prevaleciera un ordenamiento electoral que dejaba el proceso en manos oficiales y había puntualizado que un juego democrático limpio exigía una *ley electoral amplia* y el reconocimiento de la *representación proporcional*. Era indispensable para convertir una “democracia a la mexicana” en la *democracia mexicana*.⁷² Su apasionado retrato de Vasconcelos, en uno de los primeros números de *El Espectador*, anticipaba el reconocimiento de una dramática tesitura de callejón sin salida: en los límites del lenguaje estaban los límites de la crítica, impotente si no podía trascender hacia la acción política.⁷³

Progreso para un 20%

Afianzado el control sobre el movimiento obrero con una represión que pretendió ser ejemplar, el sistema creyó haberse ahorrado la necesidad de negociar. La estabilidad política seguiría garantizando la estabilidad y el crecimiento económicos. Como mesurada concesión, se mejoró ligeramente el poder adquisitivo en sectores muy específicos, es decir, entre los trabajadores muy calificados.

Las clases medias, que se habían duplicado desde 1910, ya significaban un 17% de la población. Las clases populares constituían el 82% (incluyendo un 10% de obreros sindicalizados). Sólo un 0.5% podía clasificarse en la clase alta.⁷⁴

La mitad de los más pobres recibía en 1950 el 19% de los ingresos; en 1957 ya sólo recibía el 16% y en 1963 únicamente el 15%. En el otro extremo, el 20% de los más ricos percibía en 1950 el 60%, que subió a un 61% en 1958 y se situó en un 59% en 1963.⁷⁵ Para Antonio Ortiz Mena, sin embargo, el balance del desarrollo estabilizador era promisorio:

El crecimiento del producto interno bruto ha sido superior al registrado en el período precedente y ha tenido tendencia a acelerarse; el incremento medio de los precios ha sido sensiblemente inferior al del volumen de bienes y servicios; se ha mantenido el tipo de cambio en condiciones de libre convertibilidad y ha mejorado paulatinamente la participación de los sueldos y salarios en el ingreso nacional[...].⁷⁶

No se precisaba, en ese balance, la importancia que fueron cobrando en el crecimiento los recursos externos:

Cuando hacia finales de la década de los cincuenta el impulso inicial del proceso de industrialización —la sustitución de las importaciones de consumo final de menor nivel tecnológico— se estaba agotando, se recurrió al *endeudamiento externo* para ampliar la capacidad de acción del Estado. De hecho, a partir de 1960 el monto de los subsidios

gubernamentales ha sido prácticamente igual, año con año, al monto de la deuda externa contraída por el sector público[...].

[...] La deuda empezó a crecer: un 189.27 por ciento entre 1959 y 1964 y un 40 por ciento más entre 1965 y 1970, para situarse en 3 511 millones de dólares; lo que ya colocó a México como segundo país deudor de América Latina[...].⁷⁷

La Alianza para el Progreso favoreció, después de la Revolución Cubana, la mayor afluencia de préstamos.

Pero, como ha señalado Pedro Aspe, una de las principales fallas y contradicciones del *desarrollo estabilizador* fue:

[...]su enorme incapacidad de generación de empleos estables y bien remunerados[...] una de las fallas principales fue haber adoptado la *maximización del crecimiento del producto* en el corto y mediano plazos como su principal objetivo. La adopción de esta meta motivó en el largo plazo la creación de un *conflicto frontal entre el crecimiento económico y la generación de empleo* y, como esta última es una de las determinantes principales de la distribución[...], *el sistema se había tornado dinámicamente inestable* ya que la única forma de elevar el crecimiento económico del país era concentrando aun más el ingreso[...].⁷⁸

El desempleo era grave en 1970: tres millones, es decir, el 23% de la población activa no tenía ocupación y otros tres millones se consideraban *subempleados*, que sólo realizaban trabajos eventuales.⁷⁹ Las tecnologías intensivas de capital eran, en parte, responsables. La industria no creaba tantos empleos como hubiera requerido la cantidad de gente que era desplazada del campo. No era competitiva ni podía sobrevivir sin la protección arancelaria. No podía crecer al ritmo necesario para exportar ni creaba empleos suficientes para absorber el crecimiento de población. Cuando se agotó la agricultura, utilizada como sustento del desarrollo industrial, los presupuestos del milagro se habían gastado:

*Desde 1965, cuando se agotó el colchón territorial de la reforma agraria cardenista, la producción agropecuaria entró en crisis y su crecimiento fue inferior a la población. Esto implicó que los productores y sus familias, que pasaron de 20 a casi 30 millones, tuvieron que repartirse una proporción menor del producto nacional. El reparto fue muy desigual y la inmensa mayoría se empobreció más todavía frente a los productores ricos y respecto a otros sectores de la sociedad. Bajaron en la ya muy empinada escala de la desigualdad. También implicó que la producción agropecuaria fuera insuficiente para atender a la demanda nacional y pasáramos a depender de las importaciones de alimentos básicos[...].*⁸⁰

El modelo se centró en la generación de utilidades espectaculares, sin un plan demasiado articulado a pesar de que, en 1952, se había querido retomar la planeación esbozada en los años treinta. La producción de bienes para el consumo de las mayorías y el propósito de incorporarlas al mercado fue tema de declaraciones. Los pobres se quedaron fuera del mercado: el salario real y la capacidad de compra bajó, ya en los años cuarenta, en un 30% para los trabajadores de la ciudad y en un 40% para los campesinos.⁸¹ El mercado interno sólo abarcó a un 20% de la población, entre sectores medios y altos, que percibía en 1958 el 63% de los ingresos.⁸²

De cómo inventar un país moderno

Primero se produjeron textiles y bienes de consumo popular para vender afuera. Al terminar la guerra, esas empresas no podían subsistir más que sobreprotegidas, dado el escaso mercado interno. Pasaron a constituir un sector “tradicional”, con baja inversión y técnica rezagada, dirigido a satisfacer con productos de baja calidad esa demanda precaria.

Mientras tanto, un sector “dinámico” o “moderno” funcionó con alta inversión y tecnología para fabricar bienes de consumo duradero, como autos y electrodomésticos, y otros de consumo suntuario, incluyendo objetos decorativos y alhajas destinados a los sectores prósperos. La industria automotriz, con inversión extranjera, fue la estrella del sector dinámico empleando ya en 1950 a 14 mil obreros y pagando salarios 100% mayores que la industria alimentaria. El crecimiento de la capital (un 40% entre 1940 y 1947) disparó el auge de la industria de la construcción que cubrió, sobre todo, la demanda de sectores de altos ingresos: en los años de 1940 y 1941 se invirtieron 1 300 millones de pesos en viviendas acomodadas y apenas 50 millones en nuevas fábricas. Conviene recordar que las primeras inversiones del Estado en viviendas populares fueron apenas de 9 millones en 1947 y de 33 millones en 1950. En la industria del cemento prevalecieron inversiones inglesas (Mixcoac y Toluca) y norteamericanas (Portland). En diez años, las fábricas de aparatos eléctricos aumentaron de 26 a 1 500: la Industria Eléctrica de México se constituyó con un 60% de capital norteamericano.⁸³

La industrialización arrancó cuando en la economía mundial se aceleraba el progreso tecnológico y la concentración oligopólica en empresas transnacionales. A esas empresas les interesaba invertir en países ansiosos de industrializarse. Pero sólo en renglones muy rentables, para satisfacer la demanda de sectores prósperos. El “milagro” se dio, pues, en un marco subordinado. Los empresarios nacionales tuvieron que aliarse a grandes grupos internacionales para obtener, además de capital, tecnología y maquinaria. Como las máquinas no pudieron “sustituirse” igual que los bienes de consumo, una dependencia muy acentuada era inevitable:

[...] por el atractivo que representan los altos niveles de protección vigentes en México, la política pública en general y, muy particularmente, una fuerza de trabajo “dócil” y fuertemente controlada por el Estado, *la inversión extranjera se colocó en el centro mismo de la industrialización* hasta de hecho controlar sus sectores estratégicos tanto directa como indirectamente, e hizo prácticamente imposible distinguir lo nacional de lo extranjero[...].⁸⁴

Las cifras contabilizadas hablan de 1 725 millones de pesos hasta 1960 y de 3 mil millones hasta 1970.⁸⁵

En la carrera hacia el Progreso, lo único que resultó *progresivo* fue el *empobrecimiento*. El país había caído en las trampas del desarrollo: la élite intelectual avalaba el modelo, convencida de la fatalidad de un “único camino”. La élite política lo instrumentó, no sólo porque estaba igualmente convencida sino porque los funcionarios fueron cada vez más partícipes de las ganancias.

Rolando Cordera resumió el proceso de industrialización “subordinada”: 1) no se crearon muchos empleos y siempre sobró mano de obra controlada; 2) sólo aumentó ingresos el sector moderno; 3) no creció, sino limitadamente, el mercado interno; 4) se concentró el capital en grupos, cada vez más fuertes, vinculados a transnacionales que controlaban tecnología, patentes y procesos de producción; 5) creció la deuda y la pérdida de divisas por remesas al exterior de utilidades, regalías y una balanza deficitaria, que pesó más sobre importaciones de bienes de capital y materias primas que sobre ingresos por exportaciones; 6) se fortaleció un capitalismo de Estado, que extiende su actividad en lo económico y perfecciona los mecanismos de control político.⁸⁶ Surgió entonces una contradicción entre la necesidad de propiciar la acumulación acelerada de capital y la de “legitimar” el proyecto aplicando una política social.

El Estado representó un papel esencial, tanto que sin su patrocinio no habría habido industrialización. Dedicó la mayoría del gasto público a irrigación, caminos y puertos: es decir, proporcionó la infraestructura. Se reservó, además, la producción básica considerada estratégica para la autonomía del país: petróleo, electricidad, siderúrgica. El monto de inversión estatal directa fue variando. En 1950 alcanzó el 54%; en 1952 bajó al 30% y volvió a subir a un 65% en 1954. En 1960 se compró lo que faltaba de la industria eléctrica y, para 1961, el Estado cubría la mitad de la inversión total.⁸⁷ Entre 1940 y 1950, Nacional Financiera incrementó su apoyo al desarrollo industrial, pasando de 2 millones a 646 millones de pesos. Empresas como Cementos Portland, Westinghouse o Celanese, filiales de norteamericanas, fueron muy favorecidas por esos créditos.⁸⁸ Cordera pudo afirmar que

[...]la política económica del Estado, que como se sabe ha incluido[...] devaluaciones, financiamiento deficitario, inversiones concentradas regional y sectorialmente, permi-

sos de importación, aranceles, exenciones fiscales, subsidio de insumos, créditos selectivos, represión y control sindical, etcétera, ha funcionado, en conjunto *como un sistema artificial de producción de productores*[...].⁸⁹

Es decir, que el Estado inventó primero a los empresarios para poder inventar, enseguida, la industrialización.

La modesta cosecha del crecimiento y un activo faltante: democracia

Roger D. Hansen lo calificó como “la paradoja del desarrollo mexicano”: precisamente como secuela de una revolución sin precedentes el desarrollo, acelerado desde 1940, reprodujo sobre todo la inmensa desigualdad. Los presidentes mantuvieron en el discurso el propósito explícito de insertar al país en la modernidad tomando en cuenta a las mayorías. Se cuidó la imagen de un Estado “benefactor”, pendiente de los olvidados: a todos les llegaría la oportunidad de cobijarse bajo el cielo protector del Progreso. Fue tan cuidada la fidelidad verbal que la distancia entre lo dicho y lo hecho se escamoteó y la filantropía del ogro no fue demasiado cuestionada durante varias décadas. El sistema articuló con notoria destreza la dicotomía entre el discurso y la práctica.

La *política del desarrollo* contradecía notoriamente, según Hansen, aquel paradigma. Era considerable el gasto público pero escaso, en comparación, el gasto social: menos del 13% hasta fines de los años cincuenta; 15% en 1960. Ese año empezó a subir lentamente, hasta alcanzar un 23%.⁹⁰ Poco se destinó a educar, a prevenir y curar la enfermedad, a proporcionar seguridad social, a mejorar la vivienda, a asegurar nutrición barata para la población mayoritaria: muy poco para remediar la pobreza. A fines de los años cincuenta, México sólo asignaba el 1.4% a educación: Venezuela le destinaba el 4%. Se había anticipado para implantar el Seguro Social pero, en 1967, sólo alcanzaba a cubrir al 19% de los trabajadores: en Argentina ya cubría al 66% y en Chile al 76%.⁹¹

En 1965, Pablo González Casanova había advertido que la “racionalidad económica del crecimiento” no había logrado alterar la desigualdad. Frente a unas cuantas decisiones de interés nacional se tomaban constantemente decisiones “realistas”, en función de los sectores bien organizados del poder económico y político:

Con este tipo de decisiones se rompe parcialmente la dinámica de la desigualdad por zonas, clases y gremios del México participante, en razón de su participación o integración política. Pero estas decisiones –sociales– no satisfacen sino a un mínimo sector de la población; a las clases medias y los trabajadores organizados, a los núcleos urbanos e industriales que

configuran todo un tipo de gobierno bajo cuyo peso quedan las masas desorganizadas de las propias ciudades y particularmente del campo, los marginales urbanos y rurales, sobre todo indígenas, cuyo empobrecimiento es cada vez más notorio y angustioso[...].⁹²

Ya había señalado Cosío Villegas, en 1951, que la riqueza no es “contagiosa”. Pero la teoría del “goteo” siempre sirvió de tranquilizante para la mala conciencia. Raymond Vernon lo reconoció: *Con todos los estiras y aflojas, el sistema [...] no ha tratado mal a los intereses privados[...]*. Hansen fue mucho más explícito:

[...] a pesar de la continua preeminencia de las actividades del sector público, el gobierno mexicano es un “gobierno de hombres de negocios” en la misma medida que cualquier gobierno de los Estados Unidos durante las décadas en que predominó el partido republicano (1860-1932)[...].⁹³

¿Serían acaso demasiado incisivos tales juicios? Las cifras no mienten. Entre 1940 y 1970, México aplicó menos recursos a favorecer una distribución más equitativa que otras grandes naciones de América Latina. La cosecha del crecimiento sólo favoreció jugosamente a los nuevos empresarios industriales y agrícolas y modestamente a algunos sectores obreros y medios. Siendo los ejidatarios el sector más nutrido del partido oficial, sólo el 14% recibió algún crédito en los años sesenta, porque su capacidad de regateo fue secuestrada. El sector obrero y el sector campesino funcionaron mucho menos, dentro del PRI, como mecanismos de *representación* efectiva que de *control* para evitar que las demandas se salieran de cauce y se volvieran explosivas:

[...]Un gobierno en el que las demandas de la mano de obra organizada y de los campesinos mexicanos hubieran estado efectivamente representadas, no habría diseñado ni aplicado la estrategia para el desarrollo que ha caracterizado el reciente crecimiento económico de México. A largo plazo esa estrategia puede muy bien beneficiar de una manera equitativa a todos los segmentos de la sociedad mexicana; pero a largo plazo, como dice Keynes, todos estaremos muertos[...].⁹⁴

La magnitud y los efectos de los esfuerzos por el bienestar social habían sido, tal como los evaluó Hansen, muy *modestos*. Se eligió el camino de la industrialización acelerada, montándose en el deterioro campesino y de las mayorías urbanas, por razones menos teóricas que pragmáticas, menos ideológicas que crematísticas, menos patrióticas que interesadas. Era lo que convenía a quienes habían corrido al galope “para ponerse al corriente de las naciones civilizadas”; a los que habían prosperado con el riego y los créditos y los contratos de obras públicas y los proyectos industriales. A nadie le preocupó *nivelar* a las élites. Se trataba de volverse partícipes de

sus beneficios: de aprovechar el crecimiento para promover la propia movilidad social. Carlos Fuentes retrató en Artemio Cruz y en Federico Robles a los que treparon y medraron a la sombra de la revolución:

[...] México es otra cosa después de la Revolución. El pasado se acabó para siempre [...]. Para mí México es un país atrasado y pobre que ha luchado por ser progresista y rico [...]. Nosotros hemos demostrado que esas metas sólo se alcanzan creando industrias, impulsando la economía del país. [...]. A ustedes los intelectuales les encanta hacerse bolas [...]. Aquí no hay más que una verdad: o hacemos un país próspero, o nos morimos de hambre[...].⁹⁵

El país próspero fue para unos cuantos: el hambre para los demás. Como advirtió, cáustico, Roger D. Hansen, había prevalecido el modelo de Calles sobre el de Lázaro Cárdenas.

En *Posdata* que apareció, como la versión inglesa del libro de Hansen, en 1970, Octavio Paz puntualizaba, matizando, los vínculos entre la clase política y la clase empresarial:

[...] el Estado no es tanto la expresión de la clase dominante, al menos en su origen, sino que ésta es el resultado de la acción del Estado [...]. El PRI está incrustado en el capitalismo mexicano pero no es el capitalismo mexicano. Al analizar la nueva clase de *entrepreneurs*, Frank R. Brandenburg indica que el “régimen de Alemán originó una clase dual: parte de sus miembros se pusieron al frente de compañías privadas y otra parte asumieron la dirección de las empresas estatales”. Entre los segundos se encuentra ese amplio grupo de funcionarios que ha procurado defender, con éxito variable, la gerencia de la Revolución Mexicana[...].

Un sutil “margen de independencia” entre el sector privado y el público habría permitido especular a muchos intelectuales y a algunos técnicos en la eventualidad de que el Estado, valiéndose precisamente de la fuerza del PRI y sus sectores populares, se enfrentara algún día a la iniciativa privada:

[...] Me parece que el 2 de octubre disipó esas esperanzas. Para enfrentarse a los banqueros y financieros, el PRI necesitaría primero recobrar su ascendencia entre las clases populares y para ello debería transformarse y democratizarse, algo que no puede ni quiere hacer [...].⁹⁶

El hilo de la reflexión no terminaba ahí: si ese partido no demostraba en el futuro una mayor capacidad para absorber la inconformidad y el descontento, *el sector privado tarde o temprano sentiría la tentación de deshacerse del PRI.*

La democracia era la alternativa. González Casanova le atribuía al monolitismo del sistema y no sólo a las leyes del mercado, los cuellos de botella que obstruían una auténtica política de desarrollo. En verdaderos países de libre empresa, en Europa y los Estados Unidos, no sólo influyen en las decisiones las leyes de mercado sino los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones que representan las demandas de toda la sociedad. Una tendencia al “igualitarismo” compensa, en esas sociedades, la dinámica de la desigualdad. Donde libre empresa se conjuga con democracia lo que actúa como correctivo es, justamente, la democracia:

[...] que obliga al Estado y a los empresarios a hacer concesiones más y más grandes a las masas, a hacer inversiones sociales, aumentos de salarios, leyes fiscales que provocan una dinámica de igualitarismo —como en Inglaterra, los Países Escandinavos y los propios Estados Unidos—. En un país como México este correctivo no existe[...] y las decisiones gubernamentales en materia de desarrollo se toman sobre bases mucho más limitadas desde el punto de vista de la dinámica igualitaria y mucho más próximas a la dinámica de la desigualdad[...].⁹⁷

Aunque en las décadas que siguieron todo, aparentemente, seguiría igual algo, definitivamente, había cambiado. La relación entre Estado y sociedad hizo crisis y estalló en el punto álgido del sistema. El autoritarismo se mostró desnudo y sin máscara. Se hablará en lo sucesivo de una crisis o de una *transición* jalonada por crisis sucesivas.⁹⁸ Como quiera que sea, algo se fracturó en 1968 y el milagro llegó a su término con mucha más pena que gloria.

Tiempo encapotado

Las clases medias favorecidas por el desarrollo urbanizador se sintieron atrapadas, en los años sesenta, en un panorama pobre en expectativas. El período de Díaz Ordaz se inició con un paro de los médicos del ISSSTE y del IMSS, por demandas salariales y democracia gremial. Era un primer anuncio de una inquietud que asomaba entre los sectores medios acorralados por el autoritarismo del sistema. Se multiplicaron pronto los movimientos estudiantiles: Morelia (1964); Puebla (1964); Sinaloa (1966); otra vez Morelia (1966), con ocupación de la Universidad Nicolaíta por el ejército. En la huelga de la UNAM en 1966 todos metieron las manos, especialmente el gobierno, para expulsar al doctor Ignacio Chávez, celoso de la dignidad de su investidura. Javier Barros Sierra impulsaría, en 1967, la Reforma Universitaria. El presupuesto de la UNAM había tenido un aumento real del 66% desde 1961, pero resultaba desbordado por la demanda de ingreso; las universidades de provincia, sobre todo en los estados más pobres, recibían precarios subsidios.⁹⁹

Sonora y Chihuahua vivieron la inquietud estudiantil en 1967 y, en febrero de 1968, hubo en Dolores Hidalgo una marcha por la libertad, pidiendo la excarcelación de presos por motivos políticos y una reforma universitaria en toda la República.

El profesorado universitario, incluyendo a los exeditores de *El Espectador*, uno de los cuales dirigía la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, percibían en la oclusión del sistema y su cierre a la democracia el origen de la turbulencia universitaria. Flores Olea advertía *síntomas nacionales de que, por un período difícil de determinar, esa lucha democrática general será prioritaria respecto a otras más espectficas*. González Pedrero invocó el imperativo de proteger el espacio de reflexión que era la Universidad frente a los embates que amenazaban su autonomía.¹⁰⁰

La erupción de 68 no brotó en las milpas ni en las fábricas: estalló en las universidades. Fueron jóvenes de clase media urbana, los beneficiarios del modelo, quienes lo cuestionaron airadamente. Las contradicciones que se precipitaron en el hervor del crecimiento acelerado habían resultado en la paradoja señalada por Roger D. Hansen. Pero la erupción encontró salida por donde menos hubiera podido preverse.

La estabilidad había sido, en los años cincuenta y los sesenta, la palabra de orden: salarios estables, precios estables, moneda estable (después de 1954), sociedad estable, gobierno estable. Estabilidad económica, social y política configuraban la imagen de un país proyectado hacia el exterior como modelo para América Latina. Un país sujeto de crédito, en el que se podía confiar. Un país que había crecido como ninguno y que había logrado diseñar un sistema excepcional de equilibrio, un refinado mecanismo para calibrar y manipular el “apoyo difuso” de las mayorías y apuntalar así un proyecto modernizador instrumentado por el 5% de la población y con resultados palpables para otro 15%.

Lo que Hansen definía como *apoyo difuso* se fundaba en la esperanza de alcanzar algo en la lotería de las prestaciones sociales que se negociaban a partir de las adhesiones políticas. Era un apoyo prendido a la lealtad explícita del discurso oficial hacia los principios de una revolución cuya sombra tutelar seguía velando por el régimen. Aunque se le había dado varias veces por muerto, el mito se resistía a morir o más bien se le mantenía erguido en el caballo como al cadáver del Cid.

Celebrar la Olimpiada era ponerle al pastel la cereza que faltaba. Era la consagración del sazonado verano de un sólido y estable desarrollo. Era buscar el reconocimiento admirado del mundo de la mayoría de edad de México. ¿Cómo tolerar que unos cuantos jovenzuelos de cabellos largos e ideas cortas, malagradecidos usufructuarios de la educación para todos, lo pusieran en entredicho? El irascible temperamento de un presidente que había pasado por la escuela política de Maximino Ávila Camacho, puso su estilo personal en la desmesura brutal del escarmiento.

La interpretación del 68 no puede quedarse en el enfrentamiento de jóvenes de las clases medias urbanas contra un padre-Estado autoritario y castrante, aunque ese ingrediente estuviera presente: ~

El movimiento de 1968 significó también un asalto juvenil contra las seculares fortalezas del paternalismo, de la divinización del Presidente, de la abyección pseudo-religiosa ante el jefe [...].¹⁰¹

En todo el mundo occidental se impugnaba el modelo de una sociedad materialista, precaria ya en valores espirituales y que había renunciado a muchos de sus postulados libertarios. Los jóvenes mexicanos del 68 habían recibido muchos privilegios de la modernización y también habían sido tocados, gracias a la difusión de los medios, por esa cultura de la disidencia que reclamaba el acceso de la imaginación al poder y hacía la crítica del Progreso: una cultura que se difundió en los años sesenta entre los jóvenes del Primer Mundo. En el análisis de Sergio Zermeno, uno de los más minuciosos que se han hecho del movimiento estudiantil, se registraron motivaciones, actitudes, tendencias e ideologías que confluyeron en aquella contradictoria explosión de descontento juvenil.¹⁰² Hay un común denominador que, en la distancia temporal, marca las consecuencias objetivas del 68: aquella explosión, un tanto anárquica, abrió las compuertas a la presión contenida de una sociedad civil que irrumpió de repente como una avalancha.

Cuando las bayonetas, entrevistas en el año de 1958, reaparecieron con alevosía en 1968, la euforia de un *mexican way of life* altamente exitoso, instrumentado por un refinado aparato de relojería política, fue abruptamente cuestionada. Se habían invertido tres mil millones de pesos en la Olimpiada para “vender” a miles de visitantes la imagen lustrosa del país “moderno”. Pero la euforia se ensombreció. Elena Poniatowska recogió los testimonios de aquel *thriller* siniestro y logró mantener viva la vibrante pasión de la experiencia:

Aquí vienen los muchachos[...] son muchos, ninguno lleva las manos en alto [...] respiran hondo, caminan seguros, pisando fuerte, obstinados; [...]vienen hacia mí con sus manos que levantan la pancarta, manos aniñadas porque la muerte aniña las manos [...] ya no hay muros de bayonetas que los rechacen violentamente, ya no hay violencia; los miro a través de una cortina de lluvia, o será de lágrimas, igual a la de Tlatelolco; [...] oigo sus pasos [...] como en la manifestación del silencio, toda la vida oiré esos pasos que avanzan [...] toda la Plaza de la Constitución está iluminada; constelada con millones de cempazúchitl, millares de veladoras; los muchachos están en el corazón de una naranja, son el estallido más alto del fuego de artificio [...] se remontan a la sierra, los bosques, las montañas, Mé-xi-co, Li-ber-tad [...].¹⁰³

Carlos Monsiváis encontró la clave de la huella que dejaría 1968:

[...] El Edificio Chihuahua se erige como el símbolo que en los próximos años deberemos precisar y desentrañar, el símbolo que nos recuerda y nos señala a aquellos que, con tal de permanecer, suspendieron y decapitaron a la inocencia mexicana[...].¹⁰⁴

Esa pérdida de la inocencia fue el más auténtico acceso a una mayoría de edad, asumida no en la negación de la realidad sino en una dolorosa, pero ya inevitable, toma de conciencia.

La secuencia de los acontecimientos transcurrió en 120 días, entre el 23 de julio y el 2 de octubre, desde la inexplicable intervención de granaderos, en un pleito entre alumnos de dos vocacionales y una preparatoria privada, hasta el desenlace sombrío. Habían participado 200 mil estudiantes: un 77% de los universitarios eran de clase media y sólo un 17% venían de familias obreras o campesinas; en el Politécnico, la proporción subía quizás hasta el 30%.¹⁰⁵ Eran, pues, más bien, los retoños del crecimiento modernizador. En las manifestaciones se calculó una participación de hasta 400 mil personas: la manifestación “del silencio” fue sin duda la más intensa y elocuente por su carga simbólica. Los apresados, antes y después de la masacre, fueron sentenciados hasta a 19 años de prisión: hubo 200 condenados. Las detenciones prosiguieron hasta el mes de mayo de 1969, incluyendo al escritor José Revueltas.

En 1970, el sistema ensayará una apertura hacia el diálogo. Veinte años después del 68, algunos de los protagonistas se han caracterizado a sí mismos como “una generación rota”. Otros han hablado de un movimiento iconoclasta, que habría destruido mitos y patologías pero sin aportes alternativos: de ahí la sensación de vacío que les habría dejado. ¿Fue un movimiento apolítico, únicamente libertario, como supondría Marcelino Perelló? ¿O demostró que *la lucha por la democracia era una cuestión central en el país*?¹⁰⁶ Diez años antes Sergio Zermeno, que de partícipe había pasado a ser un acucioso investigador social, lo veía así:

La democracia, punto de unión universal entre quienes animamos ese movimiento, se vuelve un espejismo cuando nos acercamos tratando de precisar su contenido. Pero la fuerza unificadora que la democracia brinda a un movimiento no se aniquila por el solo hecho de que puedan acomodarse bajo esa bandera concepciones totalmente distintas de organización política y social[...]. El cemento que cohesiona estas enormes divergencias está dado por la búsqueda, en todos los casos, de una sociedad en la que los beneficios del desarrollo se encuentren mejor distribuidos[...]. Así, el movimiento estudiantil-popular de 1968 buscaba una sociedad más justa y éste es un hecho que está por encima de todo[...].¹⁰⁷

Tras el furor de Tlatelolco se impuso un atemorizado silencio. Raúl Álvarez Garín comentaría en Lecumberri a Elena Poniatowska:

[...] No se oyó ni una voz oficial de protesta por el asesinato de estudiantes salvo, fuera del país, la renuncia de Octavio Paz a la embajada en la India.¹⁰⁸

Más allá del destino personal de los protagonistas, 1968 había sido el término de una época en la historia de México: Octavio Paz hizo explícito su testimonio. En

una *Posdata* terminada en Austin, en octubre de 1969, interpretó a Tlatelolco como un acto ritual, un sacrificio, el brote atávico de un sustrato muy arcaico que obligaba a hacer la crítica de México comenzando por la crítica de la pirámide. Pero no todo el sustrato del pasado era rechazable. Paz habló de los dos Méxicos: [...] *medio México [...] contempla desde hace años los progresos del otro medio*[...].¹⁰⁹ Se refirió al Progreso como *un rostro en blanco* y al desarrollo, tal como se le había entendido, como *un espejismo*. Sugirió hacer un alto para buscar otro modelo:

Los modelos de desarrollo que hoy nos ofrecen el Oeste y el Este son compendios de horrores: ¿podemos nosotros inventar modelos más humanos y que correspondan a lo que somos?[...] ¿Podremos concebir un modelo de desarrollo que sea nuestra versión de la modernidad?¹¹⁰

Había que romper *la cárcel de palabras* del discurso retórico para encontrarse con la realidad del país. Afirmó que *sin democracia, el desarrollo económico carece de sentido* y pidió

[...]renunciar definitivamente a las tendencias autoritarias de la tradición revolucionaria, especialmente de su rama marxista. Al mismo tiempo, hay que romper los monopolios contemporáneos, sean del Estado, los partidos o el capitalismo privado y encontrar formas, nuevas y realmente efectivas, de control democrático y popular lo mismo del poder político y económico que de los medios de información y de la educación[...].¹¹¹

Ya desde 1947 había señalado, en *El laberinto*, que la revolución, a pesar de haber creado, o recreado, a la nación no había hecho de nuestra sociedad *una comunidad o una esperanza de comunidad*.¹¹² Estaba pendiente el cumplimiento de sus fines: instaurar una verdadera democracia social y hacer de México una nación moderna. Había que hacerlo sin traicionarse.¹¹³ Formuló su propia utopía como la de una *sociedad plural* donde el presente no se sacrificara a ningún improbable “futuro”:

Sobre todo y ante todo: debemos concebir modelos de desarrollo viables y menos inhumanos, costosos e insensatos que los actuales. Dije antes que ésta es una tarea urgente: en verdad, *es la tarea de nuestro tiempo*.¹¹⁴

Carlos Fuentes, que había escrito en París un brillante balance de *La revolución de mayo*, calificó al régimen, después de Tlatelolco, de *esclerótico y hueco* y señaló la necesidad de fundar el desarrollo económico en la libertad política y el desarrollo social. El fenómeno del 68 le parecía *el desbordamiento confuso, vital y necesario de un país carente de medios democráticos de expresión*. Ya lo había anticipado en 1963, advirtiendo que *la ausencia de canales de expresión popular es presagio de explosión*

violenta o de golpe reaccionario y que el sistema debía optar por pasar a la historia como un *régimen de transición*[...] *que habrá mantenido abiertos los caminos de la voluntad ciudadana o los habrá cerrado con las trancas del despotismo.*

También había resaltado la incongruencia de un modelo que *conserva el paratso de los pudientes y se lo promete a los desheredados* y que se ha entregado al *desarrollo por el desarrollo mismo, lo cual sigue siendo una forma del subdesarrollo.*¹¹⁵

Consumada la tragedia de Tlatelolco, afloraba como una llaga la falacia del “milagro mexicano” y entraba en crisis el sistema. Era acaso la hora de recuperar el pasado extraviado entre las zancadas de la historia. ¿Sabría hacer suyo la nación un saludable reencuentro con la realidad? Paz lo había invocado como *la tarea de nuestro tiempo.*

Notas

¹ Manuel Germán Parra, *La industrialización de México*. México: Imprenta Universitaria, 1954, pp. 19, 140.

² Frank Tannenbaum, *México, la lucha por la paz y por el pan*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 3, núm. 4, octubre-diciembre de 1951, p. 133.

³ *Idem.*

⁴ Blanca Torres, “Hacia la utopía industrial”, en *Historia de la Revolución Mexicana*, 1940-1952, vol. 21. México: El Colegio de México, 1984, p. 25. Expresión atribuida a Josué Sáenz, aludiendo al presidente Miguel Alemán en una entrevista realizada por la autora en 1982.

⁵ *Revista de Economía*, 31 de agosto de 1946, citado por Tannenbaum, *op. cit.*, p. 131.

⁶ Tannenbaum, F., *op. cit.*, pp. 17, 26 y 96.

⁷ *Ibid.*, p. 100.

⁸ Raúl Salinas de Gortari, “Agrarismo y agricultura en el México independiente y posrevolucionario”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo social*, vol. I. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 342.

⁹ Luis Medina, “Del cardenismo al ávila-camachismo”, en *Historia de la Revolución Mexicana*, 1940-1952, vol. 18. México: El Colegio de México, 1978, p. 238.

¹⁰ Roberto Cabral, “Industrialización y política económica”, en *Desarrollo y crisis de la economía mexicana* (coord. Rolando Cordera). México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 68.

¹¹ Salinas de Gortari, R., *op. cit.*, pp. 342-343.

¹² Arturo Warman, *Ensayos sobre el campesinado en México*. México: Editorial Nueva Imagen, 1980, p. 95; ... *Y venimos a contradecir*. México: SEP/CIESAS, 1988, p. 279.

¹³ Blanca Torres, “México en la Segunda Guerra Mundial”, en *Historia de la Revolución Mexicana*, vol. 19. México: El Colegio de México, 1978, p. 172.

- ¹⁴ *Los presidentes de México ante la Nación*, 1921-1966, vol. 4 (coord. Luis González). México: Cámara de Diputados, 1966, p. 311.
- ¹⁵ Blanca Torres, "México en la Segunda Guerra Mundial", *op. cit.*, p. 240.
- ¹⁶ Lázaro Cárdenas, *Obras*, I. *Apuntes 1941/56*. México: Nueva Biblioteca Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 116.
- ¹⁷ Torres, B., "Hacia la utopía industrial", *op. cit.*, p. 15.
- ¹⁸ Medina, L., *op. cit.*, p. 15.
- ¹⁹ *Ibid.*, p. 243.
- ²⁰ Juan Rulfo, "Nos han dado la tierra", en *El llano en llamas*. México: Fondo de Cultura Económica, 1953, p. 19.
- ²¹ Medina, L., *op. cit.*, pp. 249-250.
- ²² Warman, A., ... *Y venimos a contradecir*, *op. cit.*, p. 282.
- ²³ *Ibid.*, pp. 279, 282.
- ²⁴ Cynthia Hewitt de Alcántara, *Ensayo sobre la satisfacción de necesidades básicas del pueblo mexicano*. México: El Colegio de México, Cuadernos del CES, núm. 21, 1977.
- ²⁵ Alejandra Moreno Toscano, "La crisis en la ciudad", en *México hoy* (coord. Pablo González Casanova y Enrique Florescano). México: Siglo XXI Editores, 1972, p. 115.
- ²⁶ Arturo Warman, *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Editorial Nuestro Tiempo, 1983, p. 49. La 1ª. edición es de 1972.
- ²⁷ *Ibid.*, p. 64.
- ²⁸ *Ibid.*, p. 65.
- ²⁹ Raymond Vernon, *El dilema del desarrollo económico de México*. México: Diana, 1966, pp. 115, 119.
- ³⁰ Torres, B., "Hacia la utopía industrial", *op. cit.*, p. 93.
- ³¹ *Ibid.*, p. 161.
- ³² Vernon, R., *op. cit.*, p. 121.
- ³³ Torres, B., "Hacia la utopía industrial", *op. cit.*, p. 108. La autora recoge datos de René Villarreal citados por José Luis Reyna en *Authoritarianism in Mexico*, Filadelfia, 1977, p. 78.
- ³⁴ Ifigenia [Martínez de] Navarrete, "Distribución del ingreso en México, tendencias y perspectivas", en *El perfil de México en 1980*, vol. 1. México: Siglo XXI Editores, 1972, pp. 36-37.
- ³⁵ Daniel Cosío Villegas, "La crisis de México", en *Ensayos y notas*. México: Editorial Hermes, 1966, pp. 117, 122, 143, 144 y 150.
- ³⁶ Torres, B., "Hacia la utopía industrial", *op. cit.*, p. 59.
- ³⁷ *Ibid.*, p. 82.
- ³⁸ Tannenbaum, F., *op. cit.*, p. 99.
- ³⁹ *Ibid.*, p. 100.
- ⁴⁰ Germán Parra, M., *op. cit.*, pp. 148-149.
- ⁴¹ Leopoldo Zea, "Notas a un libro: México y sus problemas", en *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. 3, núm. 4, octubre-diciembre de 1951, p. 183.

- ⁴² Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna, "El afianzamiento de la estabilidad política", en *Historia de la Revolución Mexicana*, 1952-1960, *op. cit.*, vol. 22, p. 44.
- ⁴³ *Ibid.*, p. 20.
- ⁴⁴ Citado por Pellicer y Reyna, *op. cit.*, p. 108.
- ⁴⁵ Vernon, R., *op. cit.*, pp. 128-129.
- ⁴⁶ O. Pellicer y E. L. Mancilla, "El entendimiento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo estabilizador", en *Historia de la Revolución Mexicana*, 1952-1960, *op. cit.*, vol. 23, p. 197.
- ⁴⁷ *Ibid.*, p. 41.
- ⁴⁸ *Ibid.*, p. 181.
- ⁴⁹ *Ibid.*, p. 183.
- ⁵⁰ *Ibid.*, p. 208.
- ⁵¹ *Ibid.*, p. 227.
- ⁵² *Ibid.*, p. 232.
- ⁵³ Pellicer y Reyna, *op. cit.*, p. 120.
- ⁵⁴ *Ibid.*, pp. 125-127.
- ⁵⁵ *Ibid.*, p. 218.
- ⁵⁶ Arturo Warman, ... *Y venimos a contradecir*, *op. cit.*, p. 205.
- ⁵⁷ Carlos Fuentes, *Tiempo mexicano*. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1971, p. 118.
- ⁵⁸ Salinas de Gortari, R., *op. cit.*, pp. 248, 250.
- ⁵⁹ Citado por Pellicer y Reyna, *op. cit.*, p. 196. Declaración en *El Popular* de 16 de octubre de 1958.
- ⁶⁰ Pellicer y Reyna, *op. cit.*, pp. 131, 214.
- ⁶¹ *El Espectador*, vol. 1, núm. 2, junio de 1959, *Editorial*.
- ⁶² *El Espectador*, vol. 1, núm. 1, mayo de 1959, *Editorial*.
- ⁶³ *El Espectador*, vol. 1, núm. 2, junio de 1959.
- ⁶⁴ Enrique González Pedrero, "Charrismo y mayoría", en *El Espectador*, vol. 1, núms. 9 y 10, mayo-junio de 1960.
- ⁶⁵ Luis Villoro, "Crisis de desarrollo", en *El Espectador*, vol. 1, núm. 3, julio de 1959.
- ⁶⁶ Carlos Fuentes, "Radiografía de una década: 1953-1963", en *Tiempo mexicano*, *op. cit.*, p. 64.
- ⁶⁷ Octavio Paz, *El ogro filantrópico*. México: Joaquín Mortiz, 1979, p. 304. De un texto publicado en *Plural*, el 13 de octubre de 1972.
- ⁶⁸ Annick Lempérière, *Intellectuels, État et société au Mexique. XXème Siècle*. París: L'Harmattan, 1992, p. 312.
- ⁶⁹ Lázaro Cárdenas, *Obras*, I. *Apuntes*, vol. II, 1941/1956, *op. cit.*, pp. 206-207; *Apuntes* vol. III, 1957/1966, pp. 21-26; 35 ss; 121 y 123.
- ⁷⁰ Lempérière, A., *op. cit.*, p. 305.
- ⁷¹ Carlos Fuentes, "Bajo el signo del comercio y del alarido", en *Siempre!*, 19 de agosto de 1964. Citado por Susana Nava Angeles, en *El Espectador: un proyecto de disidencia intelectual*, tesis de licenciatura. Mimeo. México: Escuela Nacional de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México, agosto de 1993, p. 146.

- ⁷² González Pedrero, E., "Prensa del pueblo", en *Siempre!*, 1º de mayo de 1963. Citado por Susana Nava, *op. cit.*, p. 135.
- ⁷³ González Pedrero, E., "La política y la crítica activa", en *Política*, 1º de mayo de 1962. Citado por Susana Nava, *op. cit.*, p. 146.
- ⁷⁴ Arturo González Cosío, "Clases y estratos sociales", en *México: cuatro ensayos de sociología política*. México: Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, p. 57. Véanse pp. 63, 72 y 82.
- ⁷⁵ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 194.
- ⁷⁶ Citado por Pellicer y Reyna, *op. cit.*, p. 216. De "Desarrollo estabilizador", en *Una década de estrategia económica de México*.
- ⁷⁷ Saúl Trejo Reyes, *El futuro de la política industrial en México*. México: El Colegio de México, 1987, p. 193. Guillermo Vitelli, "México: la lógica del desarrollo capitalista dependiente", en *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*, *op. cit.*, p. 208.
- ⁷⁸ Pedro Aspe Armella, comentario a un texto de Eduardo González sobre "Empresarios y obreros: dos grupos de poder frente a la crisis y la política económica de los setenta", en *Investigación Económica*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, núm. 150, vol. XXXVII, octubre-diciembre de 1979, pp. 317-319.
- ⁷⁹ Aguilar Camín y Meyer, L., *op. cit.*, p. 207. Según Raymundo Arrio, la industria manufacturera empleaba en 1940 a 524 mil personas y en 1950 a 915 mil, lo que significó una tasa de crecimiento mayor que la de cualquier otra actividad. A pesar de eso, sólo absorbía en 1950 al 11.8% de la población: el sector agropecuario ocupaba al 58.3% y los servicios al 29.9%. ("El proceso de industrialización y la pauperización del proletariado mexicano: 1940-1950", en *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*, *op. cit.*, p. 117.)
- ⁸⁰ Warman, A., "La fuerza del pasado", en *México mañana*. México: Océano, 1986, pp. 20-21.
- ⁸¹ Cabral, R., *op. cit.*, p. 74.
- ⁸² Rolando Cordera, "México, industrialización subordinada", *Desarrollo y crisis...*, *op. cit.*, pp. 161-162. Se basa en datos de Ifigenia Navarrete, en *El perfil de México en 1980*, *op. cit.*, p. 37.
- ⁸³ Raymundo Arrio, "El proceso de industrialización y la pauperización...", en *Desarrollo y crisis...*, *op. cit.*, pp. 117 ss., 138-139 y 146-147.
- ⁸⁴ Cordera, R., *op. cit.*, p. 162.
- ⁸⁵ Otto Granados, "Estado y rectoría del desarrollo en México: una perspectiva política", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 43.
- ⁸⁶ Cordera, R., *op. cit.*, pp. 169-172.
- ⁸⁷ Granados, O., *op. cit.*, p. 38.
- ⁸⁸ Cabral, R., *op. cit.*, p. 88.
- ⁸⁹ Cordera, R., *op. cit.*, p. 168.
- ⁹⁰ Roger D. Hansen, *La política del desarrollo mexicano*. México: Siglo XXI Editores, p. 115.
- ⁹¹ *Ibid.*, pp. 115-116.

- ⁹² Pablo González Casanova, *La democracia en México*. México: Era, 1965, pp. 127-128.
- ⁹³ Vernon, R., *op. cit.*, p. 190; Hansen, R., *op. cit.*, p. 117.
- ⁹⁴ Hansen, R., *op. cit.*, p. 142. Ver también pp. 117, 134 y 140.
- ⁹⁵ Carlos Fuentes, *La región más transparente*. México: Fondo de Cultura Económica, 1958, pp. 266-268.
- ⁹⁶ Octavio Paz, *Posdata*. México: Siglo XXI Editores, 1970, pp. 67-69. La cita de Frank R. Brandenburg se encuentra en *The Making of Modern Mexico*, Prentice Hall, 1964.
- ⁹⁷ González Casanova, P., *op. cit.*, pp. 121-122.
- ⁹⁸ Véase Miguel Basáñez, *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*. México: Siglo XXI Editores, 1990, pp. 9-11.
- ⁹⁹ Lempérière, A., *op. cit.*, pp. 326-327.
- ¹⁰⁰ Víctor Flores Olea, "La respuesta democrática", en *Siempre!*. México: 21 de agosto de 1968. Citado por Susana Nava, *op. cit.*, p. 170. Nava se refiere a la preocupación de González Pedrero en pp. 148 ss.
- ¹⁰¹ Fuentes, C., *Tiempo mexicano, op. cit.*, p. 158.
- ¹⁰² Sergio Zermeno, *Una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68*. México: Siglo XXI Editores, 1978, pp. 234-235.
- ¹⁰³ Elena Poniatowska, *La noche de Tlatelolco*. México: Ed. Era, 1991, pp. 13 y 14.
- ¹⁰⁴ Carlos Monsiváis, *Días de guardar*. México: Ed. Era, 1970, p. 305. El texto titulado "2 de octubre/2 de noviembre/Día de muertos" es de 1968.
- ¹⁰⁵ Zermeno, S., *op. cit.*, pp. 48, 184.
- ¹⁰⁶ En *Pensar el 68*, colección de testimonios de los protagonistas, que incluye también otras aportaciones al análisis del movimiento estudiantil. México: Cal y Arena, 1988. Véase pp. 233-236 y 216.
- ¹⁰⁷ Zermeno, S., *op. cit.*, p. 1.
- ¹⁰⁸ Elena Poniatowska, *Fuerte es el silencio*. México: Era, 1980, p. 62.
- ¹⁰⁹ Octavio Paz, *Posdata, op. cit.*, p. 86.
- ¹¹⁰ *Ibid.*, pp. 13-14.
- ¹¹¹ *Ibid.*, pp. 30 y 95.
- ¹¹² Octavio Paz, *El laberinto de la soledad*. México: Cuadernos Americanos, 1ª. ed., 1950, p. 161.
- ¹¹³ *Ibid.*, edición del Fondo de Cultura Económica, México, 1959, pp. 156-157.
- ¹¹⁴ Paz, O., *Posdata, op. cit.*, p. 96.
- ¹¹⁵ Carlos Fuentes, "El régimen en crisis. Democracia o represión", en *Siempre!*, 23 de junio de 1969. Citado por Ma. Susana Nava, *op. cit.*, p. 172. Véase también *Tiempo mexicano, op. cit.*, pp. 67, 71 y 76.

VI. En busca de una legitimidad perdida

Borrón y cuenta nueva

El uso de la palabra “crisis” empezó a acentuarse desde 1970. No era nueva en el vocabulario de los intelectuales: la habían puesto a circular, en los años cuarenta, Jesús Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas aludiendo a una crisis moral de la revolución. Sólo que el 68 le dio otra dimensión y la cargó de un significado ominoso. La *pérdida de la inocencia* que señaló Monsiváis como la marca indeleble del movimiento estudiantil indicaba un cambio de calidad en el país posrevolucionario. Ya nadie podía llamarse a engaño. El sacrificio de Tlatelolco escindió a la modernidad mexicana entre un “antes” y un “después”. En 1970 se inauguró un sexenio que pretendería hacer borrón y cuenta nueva:

Echeverría optó[...] por el camino de la democratización. En los primeros siete meses de su gobierno se creó un nuevo clima en el país[...] sobre todo[...] levantó el velo del temor arrojado por Díaz Ordaz sobre el cuerpo de México. Muchos mexicanos se sintieron libres para criticar, para expresarse, para organizarse sin miedo a la represión.¹

Para abrirle camino a la recuperación de la legitimidad enterrada en Tlatelolco se dispuso la salida de prisión de casi todos los que cumplían largas condenas. Durante su campaña, el candidato había procurado mostrar que se inclinaría a seguir el ejemplo de Cárdenas. Por lo pronto, hizo un recorrido exhaustivo por los rincones más inaccesibles. Y su discurso quiso restañar heridas y convencer de la

buena voluntad que desplegaría el nuevo régimen hacia una apertura democrática. Procuró acercarse a los intelectuales que habían manifestado inconformidad, a lo largo de los años sesenta, por el creciente distanciamiento de los propósitos explícitos de la revolución.

A medio año de iniciado el sexenio un incidente sangriento, que nunca llegaría a aclararse, pareció poner en peligro los propósitos de allanar el camino hacia el diálogo. El jueves de Corpus —10 de junio de 1971— un grupo de choque, los “halcones”, dispersó violentamente en la capital una manifestación de adhesión estudiantil a las demandas de autonomía, que ya habían sido garantizadas, de estudiantes de Monterrey. Según Gilberto Guevara Niebla, la manifestación era innecesaria puesto que el conflicto de Nuevo León ya estaba resuelto y se realizó por la obstinación de grupos radicales maoístas y del PCM.² Pero se congregaron 30 mil estudiantes, hubo casi cincuenta muertos y fueron muchísimos más los heridos. Se especuló en torno a la posibilidad de que se le hubiera tendido al presidente “una gravísima trampa”, tratando de sabotear el estreno de explícitas demostraciones de cambio. En todo caso, los “emisarios del pasado” fueron desplazados para hacer ostensible la reprobación de una conducta que no parecía congruente con las intenciones manifiestas y que le amontonaba al presidente varias decenas de cadáveres agraviantes en el flamante camino del rescate de la legitimidad.

Los acontecimientos del 68 actuaron como un revulsivo sobre el modelo desarrollista y sobre la propensión autoritaria del sistema. El modelo, que privilegiaba el crecimiento sobre las demandas sociales y acentuaba la brecha entre los dos Méxicos, había desembozado su rostro torvo, el autoritarismo descarnado que se agazapaba bajo las máscaras de “unidad nacional” y de paternalismo “benefactor” de la revolución institucionalizada. Se habló de una *crisis de crecimiento*³ y, en efecto, el crecimiento como meta *per se* estaba en crisis.

Un malestar esquizoide y una fractura ostensible

Después de los sucesos del 10 de junio, Octavio Paz respondió a diez preguntas a través de Radio Universidad. Reiteraba la conveniencia de reorientar el desarrollo. Insistía en la disparidad entre el México desarrollado y el México marginal y la urgencia de la democratización: no sería la solución automática de todos los graves problemas, pero sí la única vía posible para que afloraran, se discutieran y se les buscara solución. Apareció también, en 1971, *Tiempo mexicano* de Carlos Fuentes, donde se reunían textos recientes con otros publicados a lo largo de quince años.

La necesidad de un nuevo modelo recorría el libro. ¿Por qué habría de imponerse el fetiche del Progreso sobre los antiguos valores de la vida comunitaria cultivados por la herencia indígena? Hacía falta

[...] una reforma política de gran alcance descentralizador, que confíe en la capacidad de las culturas locales de México para gobernarse[...].⁴

Para escapar del ciego callejón del “mundo moderno” habría que reconquistar la utopía. Si 1968 había puesto al descubierto una crisis de crecimiento, de transformación y de conciencia, era preciso encontrarle cura al *malestar esquizoide* de un país *social y culturalmente dividido en dos*. No bastaba un desarrollo cuantitativo, y el desarrollo cualitativo era inseparable de la democracia, que habría de lograrse con organización, desde abajo, de la sociedad.

En el mensaje de toma de posesión, el nuevo presidente había advertido:

No es cierto que exista un dilema inevitable entre la expansión económica y la redistribución del ingreso. Quienes pregonan que primero debemos crecer para luego repartir, se equivocan.⁵

Ni la prosperidad había sido compartida ni el progreso se había generalizado. Margáin lo repitió al hablar a los banqueros, en 1971 y luego en 1972:

Nadie podría asegurar que nuestro progreso es armonioso cuando el incremento del producto tiende a limitarse a unas cuantas zonas y estratos sociales[...] daremos un impulso adicional a la economía para crear con regularidad suficientes empleos, incorporar al progreso a los sectores populares marginados, construir nuevos polos de desarrollo y hacer efectiva la justicia social en nuestro crecimiento.⁶

En los hechos, el sexenio de 1970-76 no pudo revertir la tendencia hacia una creciente desigualdad. En 1975, el 50% de los más pobres recibían sólo el 13% del ingreso nacional y el 20% de los más ricos habían logrado acumular el 62%.⁷

La década transcurrió con una profunda inquietud intelectual en torno a las opciones del país. A fines de 1971 Octavio Paz había participado en una Mesa Redonda en Harvard, con John Womack y Frederick C. Turner. Abundó allí sobre el mito del desarrollo: un concepto que, en sí mismo, lleva implícita la afirmación de que sólo es válido el modelo de las sociedades industriales contemporáneas. En México, la “modernidad” era sólo un recubrimiento de pluralidades: las múltiples culturas prehispánicas y la cultura hispánica con su trasfondo visigodo, judío y moro. Sería una locura menospreciar la herencia más rescatable de la revolución,

la de su vertiente *no* triunfadora: que el beneficiario directo del desarrollo sea el pueblo. Hasta el momento, sólo Lázaro Cárdenas había sido fiel al legado. Pero, como el cardenismo no propició la democracia sino el control de las organizaciones obreras y campesinas por el Estado,

[...] en estos momentos, la condición primera y esencial de un renacimiento de las fuerzas populares es la democratización de los sindicatos y las organizaciones campesinas.⁸

El triunfo de la “facción termidoriana” de la revolución había marcado el rumbo, centrando el desarrollo en lo económico y volviendo protagonista al sector privado. Pero en los nuevos sectores generados por una revolución menoscabada —la clase media, los obreros, los intelectuales— se estaba dando una conciencia crítica que exigía *cambiar el rumbo y transformar el desarrollo económico en desarrollo social y político*. Una auténtica reforma política y social tendría que apoyarse en *una gran alianza popular* porque la otra opción que presentaba el dilema de México era *la violencia reaccionaria*.

Así veía el país, al concluir 1971, Octavio Paz. En una carta dirigida a Adolfo Gilly, todavía encarcelado en Lecumberri, escrita dos meses después, advertía:

No se puede entender el sentido de la crisis si no se acepta que es, por una parte, la consecuencia del crecimiento del primer México y, por la otra, la expresión de la contradicción entre ese crecimiento y el estancamiento del segundo México.⁹

Una auténtica “alianza popular” requería del reconocimiento del México plural, negado tanto por el sistema como por los sectarismos de izquierda y por los intereses económicos. Consideraba Paz que el sistema estaba en crisis porque los sectores populares, que habían sido su apoyo, ya no lograban expresarse a través de los canales proporcionados por el partido oficial, un partido que

[...] no se concibe como un partido, una parte de México, sino que se proyecta como una totalidad —es la nación entera con su pasado, su presente y su futuro.¹⁰

El sistema había hecho crisis porque, a pesar de esa pretensión de totalidad, se daba una profunda contradicción entre los intereses, que estaban con quienes poseían el poder económico, y las posibilidades de sobrevivir como sistema, que residían en el apoyo popular. El *leitmotiv* era la crítica a la “fe” en el Progreso propia del Este y del Oeste, pecado del capitalismo e igualmente del marxismo.

¿Desarrollo compartido?

En las declaraciones verbales, y probablemente en las intenciones, era manifiesto el deseo de darle al timón un cambio de rumbo, para encaminarlo hacia un desarrollo menos divorciado de las aspiraciones sociales igualitarias que habían encarnado las corrientes populares de la revolución. Echeverría habría querido parecerse, en eso, a Lázaro Cárdenas. No bastaba con crecer: había que “compartir” el desarrollo entre todos los mexicanos. El crecimiento había alcanzado un 7.3% entre 1960 y 1970: no se trataba de crecer menos sino de distribuir mejor. Era imprescindible para que no se desvaneciera el gran hallazgo que distinguía a México del resto de América Latina: la “estabilidad”. Todo aconsejaba tomar en cuenta al “otro México”, al país tradicional, si se pretendía empezar a reducir de veras la desigualdad. Y desazolver canales de participación, para que las diversas corrientes empezaran a hacerse oír.

El discurso “populista” de Echeverría y sus iniciativas de apertura partieron, es probable, de esa reflexión. Por una parte, el discurso que le acercó ciertas simpatías le enajenó otras: nunca llegó a encontrar la fórmula para convertir a los empresarios, beneficiarios destacados del desarrollo “estabilizador”, en partícipes entusiastas de sus buenos propósitos. Se ha dicho que buscó la alianza con el sector privado a través de la cabeza del Grupo Monterrey, Eugenio Garza Sada que, durante algún tiempo, habría actuado como *muro de contención* a la inquietud empresarial.¹¹ En efecto Coparmex —encabezada por Guajardo Suárez, afín a Garza Sada— había hecho explícita su desconfianza en 1970 y 1971 y poco después estaba colaborando, a través de Acción Comunitaria, con los propósitos gubernamentales de paliar desigualdades. Pero las tensiones entre el sector público y el privado no se debieron sólo al corte “populista” del discurso presidencial, sino a inquietudes por ciertas intenciones concretas como la de realizar una reforma fiscal, establecer control de precios o favorecer demandas laborales. Sobre todo, por la extensión considerable de la presencia del Estado en todos los ámbitos, acompañada de lo que pudo interpretarse, en algunos sectores, como exceso de apertura política.

“Progreso con justicia social” fue la tesis central del sexenio. El panorama internacional no era favorable. Síntomas de recesión inflacionaria afectaban a la economía mundial, incluyendo a los Estados Unidos, que pronto empezarían a derramar sobre el mundo su gran sobreproducción de granos para equilibrar su balanza comercial. La economía mexicana creció a contrapelo del ciclo internacional. A Hugo Margáin le tocó, de 1971 a 1973, la transición entre el desarrollo “estabilizador” y el desarrollo “compartido” que nunca pasó de ser un proyecto teórico. Después de un período breve de “atonía” al comenzar el régimen, el gasto público aumentó en 1972 un 40% y la inversión pública un 84%. Ya para 1972 y 1973, se crecía a un ritmo superior al 8%.¹²

Arriba con las inversiones y adelante con la deuda

Cuando afuera sucedía lo contrario, se aplicaron en México enfoques keynesianos que contradecían las tendencias internacionales, de modo que no podían rendir todos los resultados esperados. Pero, además, se le imprimió a la inversión pública una dinámica que parecía fundarse en la creencia de que la virtud estaba en el crecimiento mismo de la inversión, más allá de lo pertinente o lo atinado de su destino y de su manejo. El crecimiento del sector paraestatal fue enorme y “no siempre vinculado a objetivos congruentes con una óptica a largo plazo”. De 1970 a 1976 se pasó de 84 empresas paraestatales al número sin precedentes de 845.¹³

Lo que se pretendía era reducir drásticamente la desigualdad promoviendo la inversión pública en educación, en salud, en vivienda y, específicamente, en el campo. Se multiplicaron instituciones del Estado para “incentivarlo” todo, desde la construcción de viviendas populares hasta el comercio exterior, desde las empresas rurales hasta la siderúrgica y proliferaron los fideicomisos para atender todo tipo de financiamientos, desde el consumo de los trabajadores hasta el equipamiento industrial. La inflación, que era un problema mundial, se mantuvo baja hasta 1973, cuando los precios al mayoreo aumentaron un 25%¹⁴ y hubo que implantar el primero de una serie de programas de emergencia. Después de sustituir a Hugo Margáin en Hacienda, López Portillo declaró, sin embargo:

La única manera de salir del proceso inflacionario [...] es producir, aumentar la oferta de bienes, de cosas.¹⁵

La producción agrícola había descendido, a partir de 1965, al 1.3% anual mientras la población crecía al 3.3%. Después de 1970 subió el índice agropecuario a un 2.6% pero no en los básicos para la alimentación humana sino en forrajes para el consumo del ganado, que ocupó una superficie cada vez mayor.¹⁶ Y ese aumento no fue proporcional al monto considerable de inversión que se destinó para propiciarlo. En la industria persistió el esquema de sustitución de importaciones hasta 1975. Una fuerte inversión pública en el sector petrolero proporcionó la infraestructura para el auge exportador que habría de seguir inmediatamente después. Se invirtió en la industria eléctrica y creció la producción de electrodomésticos, de vehículos y de maquinaria. Decrecía, mientras, la proporción de los productos manufacturados tradicionales (alimentos, bebidas y textiles) aunque se impulsó a la industria maquiladora. A pesar de la creación del Instituto Mexicano del Comercio Exterior, no se logró estimular la exportación:

La política cambiaria mantuvo un tipo de cambio prácticamente fijo e independiente de los diferenciales de inflación, lo que implicó la sobrevaluación del peso ocasionando

con esto el estancamiento de las exportaciones y el auge de las importaciones y agravando, por tanto, el déficit de la Balanza de Pagos.¹⁷

Para financiar la expansión del sector público no se recurrió al aumento de los ingresos fiscales que, insinuado a fines de 1972, tropezó con el rechazo del sector privado. En 1973 se subió un 50% el precio de la gasolina y un 30% las tarifas eléctricas. Pero el grueso de la inversión pública que se inyectó para estimular el crecimiento se cubrió contrayendo deuda con el exterior. Todo favorecía, en el panorama de la economía internacional, la contratación de créditos: había un excedente de capitales que se había puesto a circular, al no poder destinarse a la inversión productiva en los países desarrollados, y que se ofrecía liberalmente a los países ansiosos de crecer. Así financió el Estado las importaciones que requería para ampliar la capacidad productiva, esencialmente la petrolera, y las copiosas inversiones en el campo. Pero, indirectamente, se trataba de compensar la fuga de capitales que empezó a incrementarse desde 1973:

La euforia internacional de préstamos bancarios permitió al régimen de Echeverría en 1974 y 1975 disfrutar casi ilimitadamente del crédito exterior para financiar el déficit como para apoyar el peso.¹⁸

En 1973 afloró abiertamente la tensión entre el sector público y el privado. Miguel Basáñez ha recordado que antes de ese año no se había dado ninguna confrontación abierta y que, en diciembre de 1972, el embajador norteamericano “cuestionó la política de Echeverría en vista de los proyectos de ley para regular la inversión extranjera”.¹⁹ Siguiendo el hilo de esa interpretación, de la Cámara Americana de Comercio habría partido la promoción decidida de “la defensa de la libre empresa” y dentro de una misma lógica se situaría la renuncia de Guajardo Suárez, proclive a la conciliación, del liderazgo de Coparmex. Siguió la caída de Allende, que contribuyó a endurecer la postura empresarial, y el enigmático asesinato de Eugenio Garza Sada el mismo día en que se firmaba un aumento general de salarios. En el entierro del empresario de Monterrey, al que acudió el presidente de la República, un representante empresarial pronunció un discurso abiertamente acusatorio contra el mandatario. Entonces empezó a instrumentarse, por parte del gobierno, una *alianza popular nacional* respaldada por el movimiento obrero y el ejército, que sería exhibida públicamente con manifestaciones coincidentes en todos los estados. Se produjo después una sorprendente declaración de la familia Garza Sada, desligándose claramente de los supuestos contenidos en el discurso fúnebre y reiterando la decisión de incrementar sus inversiones. Los episodios del año de 1973 se cerraron con el anuncio que hicieron los empresarios, en enero de 1974, de que se había restablecido la confianza.²⁰

Economía y democracia, manejadas desde Los Pinos

En octubre de 1973 aparecieron en *Excélsior* tres artículos de Octavio Paz que servirían de prólogo a la edición en inglés de *La noche de Tlatelolco* de Elena Poniatowska. A la mitad del sexenio de Echeverría, Paz reconocía un intento de reforma *desde arriba*: el sistema había procurado abrirse y liberalizarse. La demanda formulada en 68 no había sabido generar, sin embargo, la construcción de la democracia *desde abajo*:

La creación de una tradición democrática en México no es menos importante y urgente que el desarrollo económico y que la lucha por la igualdad.

En 68 había hecho crisis el México moderno y “desarrollado”. Lo dramático era *el otro México en andrajos*:

[...] los millones de campesinos pobrísimos y las masas de semidesocupados que emigran a las ciudades y se convierten en los nuevos nómadas —los nómadas del desierto urbano[...].²¹

El segundo trienio del régimen transcurrió con el mar de fondo del malestar empresarial, que se tradujo en retracción de inversiones y salida de capitales. El descontento se habría acentuado con la promulgación de una ley que regulaba inversiones extranjeras y transferencia de tecnología, rechazada por la cúspide empresarial más vinculada con esos capitales. Después de tres décadas de cercanía ininterrumpida, la fluidez de comunicación entre la élite política y la élite empresarial atravesaba un período de incertidumbre y aun de explícito malentendimiento. Un sector acostumbrado a ser protagonista y destinatario privilegiado de las iniciativas del Estado recibía con desconfianza las que despertaban inoportunos ecos de los años treinta. Al poder público, por su parte, acostumbrado a manejar a discreción su papel de árbitro entre las clases populares, que constituían un apoyo indispensable del sistema, y los empresarios a quienes, en buena medida, había contribuido a crear, podía parecerle de la lógica más elemental afirmar, como lo hizo el presidente, que la economía se manejaba desde Los Pinos.

No fue sino hasta el año de la sucesión cuando el sector empresarial decidió mostrar un frente sólido y sin fisuras, con el propósito de hacer sentir una presencia política. Así surgió, en el mes de abril, el Consejo Coordinador Empresarial, abarcando a Concamin, Concanaco, Coparmex, Asociación de Banqueros, Asociación Mexicana de Seguros y Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Y se realizaron, en noviembre del mismo año, paros de maquinaria agrícola para protestar contra accio-

nes agrarias dispuestas en Sinaloa y en Sonora. Los paros no se multiplicaron, pero bastó con la amenaza para desplazar las medidas impugnadas hasta el final del sexenio.

Los campesinos, “hijos predilectos del régimen”

En 1970, 7 millones de campesinos se habían sumado a los 13 millones que había en 1940 y había crecido, por ende, la presión sobre la tierra. La solución que creyó encontrar Luis Echeverría fue coherente con el viejo propósito callista de volver empresarios a los campesinos. Sólo que acentuando ahora la intervención del Estado para promover algo que seguía considerándose irreversible: la desaparición del campesino como tal y su incorporación a la marcha del progreso. La nueva Ley de 1970 *pretende acelerar lo que se cree un proceso fatal: que el campesino deje de serlo.*²²

Echeverría había declarado, en 1969, que era su proyecto “hacer del progreso socioeconómico de los campesinos del país, la principal tarea que deberá realizar su administración”. Los campesinos serían, por fin, “los hijos predilectos del régimen”. En la práctica se intentó modernizar, con inyección de capital público, a la agricultura tradicional, propiciando la colectivización de ejidos con tierras de riego y con potencial comercial. Se pretendía aumentar el número de empresas agropecuarias, que ya existían por supuesto pero que, a lo largo de tres décadas, habían prosperado sólo dentro del esquema del neolatifundio y la inversión extranjera. Bajo la dirección y el control del Estado, se quiso levantar empresas agropecuarias “de escala” y, en consecuencia, de alta productividad para el abastecimiento del mercado, de la industria y de la exportación.

La nueva Ley de Reforma Agraria proponía la colectivización como “una modalidad opcional en el reparto” y sólo cuando las condiciones la hicieran recomendable. Tres años después se había vuelto la panacea universal. Para implantarla se creó primero la Secretaría de la Reforma Agraria y después la Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario. Había 23 615 ejidos: según el Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina se habría pretendido colectivizar a algo más de la mitad: 11 mil ejidos para el año de 1976 era la meta.²³ Los datos alegres se barajaron, sin mucha exactitud, en medio de la euforia de colectivizar a ultranza: se aseguró que ya en 1975 podía hablarse de 5 mil y, todavía en 1976, algún investigador proponía como válida la cifra de 3 mil colectivizaciones. Sin embargo, el propio subsecretario encargado de la organización —Sergio Reyes Osorio— sostuvo en 1976:

Los avances son menores que las expectativas [...]. Apenas cerca de 850 ejidos se encuentran en proceso avanzado de organización colectiva y 4 mil más han iniciado su proceso de organización[...].²⁴

Según Arturo Warman, sólo se expidieron 633 decretos presidenciales de colectivización, es decir, apenas el 3% de los ejidos registrados en el censo de 1970. Y no es posible saber si se trataba de verdaderos procesos de colectivización o sólo de un acta levantada por algún promotor entusiasta para dar testimonio de que los ejidatarios habían decidido “colectivizar” tareas que siempre habían hecho en común, como pedir crédito oficial, o aceptar que el Estado organizara y tomara en sus manos la compra de la cosecha o la venta de fertilizantes.

Gasto alegre, empresas desde arriba y más burocracia

La inversión en el campo fue muy alta. Creciendo a un ritmo del 21% anual, se pasó de un 12.7% del total de inversión pública en 1970 al 18% en 1975.²⁵ Se manejó esencialmente a través de Fonafe y de Pider. El Fondo Nacional de Fomento Ejidal funcionaba con escasos recursos, desde los años cincuenta, canalizando fondos que algunos ejidos recibían por actividades procedentes de sus recursos no agrícolas, hacia servicios de bienestar en las comunidades. En 1970 no se contaba con más de 76 millones para esos fines. Se le inyectó entonces un refuerzo de 2 mil millones para apoyar la creación de empresas rurales. En 1976 ya se había invertido el 78% de esa cantidad, aunque sólo el 18% correspondiera a “actividades productivas”.²⁶ Cabe preguntarse si el resto fue absorbido por el vasto aparato burocrático.

Se supone, en todo caso, que en seis años se crearon 351 empresas (forestales; agropecuarias; turísticas; manufactureras; pesqueras; de la construcción) con un total de 13 mil empleos permanentes y 17 mil temporales. Las empresas se inventaron desde arriba y con esquemas elaborados por “expertos”. Se pretendía incorporar a los campesinos a la producción en áreas económicas más modernas y, para ello, se amplió la concepción del ejido, abarcando proyectos no estrictamente agropecuarios. Surgieron organismos específicos para agrupar, organizar y orientar una amplia gama de actividades que rescatarían recursos de múltiple naturaleza. En su afán de organizar más y mejor que los demás, tales instancias interferían unas con otras, generando un confuso enredo de competencias en perjuicio de los beneficiarios y supuestos sujetos del desarrollo. Para tratar de coordinarlos a todos surgió más tarde el Programa Maestro de Organización y Capacitación Campesina.²⁷

El Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider) concentró la atención en las zonas más “deprimidas” procurando, al mismo tiempo, atenuar la desigualdad y dinamizar el campo. Fue un programa de la Secretaría de la Presidencia, que después se convertiría en SPP. Contó con fondos del gobierno y del Banco Mundial para “reestructurar” la economía campesina sobre bases producti-

vas “más eficientes”. Coordinó recursos, en 200 zonas “atrasadas”, para proporcionar infraestructura física y económica; promover producción agrícola, pecuaria, minera, pesquera e industrial y, a la vez, servicios de salud y vivienda, sin faltar la asesoría técnica y organizativa. En tres años —desde 1973— se invirtió en el programa un total de 5 824 millones de pesos. El Pider se coordinaba con Conasupo para procurar la salida de productos industriales elaborados en talleres de telas y ropa; emparadoras de frutas y verduras o plantas pasteurizadoras de leche. Y con la Dirección de Actividades Productivas de la misma Secretaría de la Presidencia para tratar de extrapolar, en su programa nacional, un experimento de industrialización rural que se realizaba en el sur de Jalisco.

Industrias Colectivas del Pueblo fue un proyecto condicionado por factores externos a la gente misma: floreció mientras fluyeron pedidos y apoyos de toda índole, pero fue incapaz de resistir a la falta de apoyo desde arriba. El gran gestor, que fungió como correa de transmisión con las instancias del gobierno federal, fue un pariente cercano del presidente. Se integró un Fondo de Solidaridad, con el capital financiero de seis accionistas y el “capital laborable” de siete “accionistas” campesinos: los cooperativistas fueron mujeres y jóvenes sin tierra. Se llegó a abarcar 34 renglones de producción, incluyendo sombreros de palma; sacos y chamarras y cinturones; huaraches; jabón; ropa para niños; suéteres y jugos de frutas envasados. Se vendía en tianguis callejeros, en una red de “tiendas del pueblo” y, por pedidos, en Guadalajara, el DF y algunas ciudades de la frontera norte. El ingreso de los cooperativistas superaba en un 40% al salario mínimo. Cerca de 70 talleres ocuparon a unos mil socios.²⁸ Una Ley de Sociedades de Solidaridad Social, aprobada en 1976, quiso dejar el fundamento jurídico para una eventual multiplicación de la experiencia en el resto del país. No sólo no ocurrió sino que el proyecto jalisciense acabó por languidecer. Quedaba una enseñanza: lo ilusorio de cualquier intento artificial de desarrollo, dependiente de azares políticos, sobre todo si se desmesuran las metas y no se madura lenta y orgánicamente en el deseo y la capacidad real de la gente.

Desarrollismo colectivista

En 1970 el país estaba sembrado de minifundios sin apoyo alguno; prevalecía el neolatifundio en las zonas de riego y agricultura comercial y había legiones de jornaleros sin tierra. Se había pulverizado deliberadamente la capacidad organizativa de los ejidos como unidades de producción, aunque sin renunciar el Estado, en ningún momento, al control político a través de la CNC. Se procurará cubrir entonces a todos los organismos campesinos bajo esa tutela armando, en 1974, el Pacto de Ocampo, pero sin poder absorber al Frente Campesino In-

dependiente, que promovió invasiones para presionar en favor de campesinos sin tierra. Se repartieron 12 millones de hectáreas entre 219 mil ejidatarios y comuneros,²⁹ pero sin afectar la estructura vigente del neolatifundio, salvo lo que ocurrió “tardía y débilmente en Sonora” por motivos políticos.

El Programa Maestro atribuía la “limitación de la producción campesina, y particularmente la ejidal” a la falta de organización colectiva. No sería sujeto de crédito, en consecuencia, el ejidatario individual. Se buscaba perfeccionar el modelo de agricultura comercial multiplicando el número de empresas agropecuarias, sólo que controladas directamente por el Estado.

Arturo Warman hizo la crítica de los propósitos de aquel segundo episodio de colectivización que, en los hechos, apenas se aplicó en el 3% de los ejidos. La demanda reiterada de los campesinos era el reparto de tierras. Su propio proyecto de organización colectiva no se parecía al proyecto oficial: tenía que ver con *formas específicas, y tradicionales, de producir en beneficio de los productores*. Sistemas como la “mano vuelta” o el “convite” permitieron siempre pagar con jornadas de trabajo propio la cooperación recibida de vecinos o parientes; el “cultivo a medias” favorecía la asociación de las parcelas, para compartir recursos y beneficios en el proceso de siembra y cosecha; la “servidumbre” ofrecía una participación en la cosecha a todos los que hubieran contribuido a lograrla:

Estos mecanismos, auténticas organizaciones colectivas surgidas desde abajo, permiten sustituir con trabajo más intensivo las inversiones que las empresas hacen en maquinaria o insumos industriales; consecuentemente, permiten que una mayor proporción del producto quede como ingreso para los campesinos. El resultado de estas asociaciones colectivas que concentran y redistribuyen el trabajo —el recurso más abundante y flexible de los campesinos— y no la tierra —que es un recurso fijo y escaso— es un aumento en la productividad de la tierra, una mayor producción por hectárea cultivada con trabajo más intenso.³⁰

El propósito de la nueva “política agraria” era, otra vez, modernizar a la agricultura tradicional y quitarle al campesino la autonomía relativa que hubiera podido conservar, impidiéndole producir según sus propias reglas. Erróneamente se atribuía a una tecnología arcaica, a las labores en pequeña escala y a la falta de organización, una supuesta “baja productividad” que en realidad no era tal. Para revertir todos esos “defectos” se introduciría capital, tecnología y organización aportados por el Estado. Para instrumentarlo se puso en marcha un activismo confuso y atropellado, en un maratón que dispersó por el campo a miles de jóvenes burócratas, que llevaban la consigna de explicar a los campesinos “lo atrasados que están y lo torpes que son”, para estimularlos a la constitución de empresas agropecuarias de escala, con criterios de eficiencia empresarial.

De entrada, la mayor parte de la superficie del país no había sido ni sería nunca apta para la “agricultura de escala”. Son terrenos de temporal, pendientes en las laderas de las sierras o situados en planicies áridas, con lluvias insuficientes o irregulares que ponen en peligro las siembras. En esas tierras habita la mayoría de los campesinos mexicanos. En los terrenos con pendiente, donde no entra la maquinaria, sólo se puede funcionar con superficies pequeñas. En las tierras de temporal se hace inoperante la inversión en insumos costosos, como semillas mejoradas, fertilizantes e insecticidas, porque hay alto riesgo de perderla. El proyecto de empresa colectiva en superficies con tales características era obviamente inoperante. Se concentró, pues, en las áreas de riego o de temporal abundante y regular, con potencial ganadero, en las grandes planicies del norte y del noroeste donde se produce para el mercado de exportación.

Pero, aun en tierras buenas que ya habían sido dotadas y que se manejaban con formas de organización tradicionales, la empresa de escala entraría en conflicto con la esencia del trabajo campesino tradicional, que es la unidad productiva familiar. En una empresa se trata de aumentar la productividad del capital invertido: el rendimiento económico. El campesino no tiene capital y no le importa su rendimiento. Su recurso es el trabajo: cuanto más esfuerzo propio y familiar y menos dinero invierta, le quedará más del producto. Su mejor recurso es emplear más intensivamente la fuerza de trabajo. El dinero prestado siempre supone la necesidad de pagar intereses —entre 20 y 100% por cosecha— con el riesgo de tener que pagar aunque ésta se pierda. Y, aun suponiendo que las utilidades resulten muy grandes, no significan demasiado cuando hay que repartirlas entre cien o más socios. Poner la firma en una deuda puede significar perder el control de la tierra y del trabajo productivo.

La tecnología de escala sustituye trabajo humano con maquinaria. Las grandes empresas aumentan la desocupación en el campo porque requieren menos trabajo humano. Y, además, porque sólo toman en cuenta a los ejidatarios titulares cuando la unidad productiva campesina incluye a toda la familia. Se afirma y se calcula que cada productor va a recibir más ingresos, pero sólo se está pensando en el jefe de familia y no en todos los miembros de la unidad familiar que, en la medida en que son más numerosos, hacen más intensivo el trabajo del suelo. El ingreso familiar no consiste sólo en dinero sino en productos que se consumen directamente:

No en balde todo el territorio que conservan los campesinos bajo su control está sembrado en parte de maíz y de sus cultivos asociados. *El éxito del sistema productivo campesino para preservarse y reproducirse depende en gran medida del maíz.* Una parte importante de la cosecha de este grano se conserva y se consume directamente por los productores[...]. *El cultivo del maíz lo consideran los campesinos como una garantía de su subsistencia y no como una actividad económica indiferenciada.*³¹

Un cálculo empresarial tendería a aconsejar, por ejemplo, la erradicación del maíz para sustituirlo por otros cultivos más remunerativos. La soya o el sorgo producirían acaso más ingreso monetario porque todo el producto iría al mercado. Pero la familia campesina tendría, probablemente, menos actividad y menos satisfactores sociales esenciales. Los criterios mercantiles, idénticos en la gran empresa privada y en la colectiva, no serían válidos, por eso, dentro de la lógica de una agricultura *con* campesinos y *de* campesinos:

La crisis en el abasto de alimentos que sufre el país es uno de los resultados de la tendencia que da prioridad y ventaja a la producción de los bienes mercantiles sobre los satisfactores sociales básicos. *Cierto que esta crisis no la originó el colectivismo sino el crecimiento de la agricultura capitalista especulativa en manos de empresarios privados. Pero el colectivismo empresarial ni pretende ni quiere revertir esta tendencia sino que está concebido para ampliarla.* Opera sobre las mismas bases y con los mismos objetivos aunque declame exageradamente su intención social y revolucionaria.³²

La colectivización no cumplió sus metas: alcanzó a pocos ejidos y, donde se implantó, se la comió la burocracia. Tampoco funcionaron las empresas agropecuarias: correspondían a una mentalidad urbana y modernizadora y no era fácil reprogramar a los campesinos, a la carrera, para implantarles una mentalidad empresarial. Como suele ocurrir con el desarrollismo, los recursos se desperdiciaban y muy poco o nada cambiaba. Aquella experiencia fallida tendría que ser aleccionadora: cualquier intento de *implantar* un desarrollo armado en las oficinas, derramando recursos monetarios y criterios de organización ajenos a la cultura, la tradición y las necesidades sentidas por la gente resulta inoperante.

Lo peor y lo mejor de la economía presidencial

El desempeño económico fue errático. En 1972 y 1973 un aumento de 25% en la inversión pública, facilitado por el crédito exterior, pretendió compensar la participación vacilante de la inversión privada y revertir la atonía del primer año del sexenio. Se logró un crecimiento superior al 7%. Crecieron salarios reales y utilidades de empresarios. La producción agropecuaria se mantuvo muy baja. La acelerada inflación mundial empezó a reflejarse en el país, al subir el precio de las importaciones; se añadía la inflación que propiciaba, adentro, una creciente oferta monetaria. Con bajos ingresos fiscales y elevado gasto, el déficit presupuestal se agudizó. En 1974 la economía todavía crecía al índice relativamente alto del 5.9%: después empezó a descender hasta llegar, en 1976, al 1.7%.

La euforia del crecimiento se mantuvo, mientras duró, gracias a la vida artificial insuflada por una elevada inversión pública, que se ejercía con bastante improvisación, desorden e ineficacia. Crecía la deuda, no sólo para sostener la inversión pública sino la paridad cambiaria, que la fuga creciente de capitales iba haciendo insostenible. El año crítico fue 1976. No sólo descendió la inversión privada. También tuvo que bajar la inversión pública, mientras que los precios subían a la par que el desempleo y descendían salarios reales. Con un aumento del 30% a los salarios se consiguió frenar el malestar que se esparcía entre los trabajadores. La salida de capitales se aceleró en 1976 y, a mediados del año, se anunció una devaluación del peso en casi un 100%.³³

La inversión en el campo sí tuvo algunos resultados palpables y positivos cuando se dirigió a promover el bienestar a través de programas de salud y de educación. Se acentuó el aspecto preventivo de los servicios de salud y se iniciaron programas de planeación familiar para incidir en el alto índice de crecimiento demográfico. Se multiplicó cuatro veces el número de campesinos con derecho al Seguro Social, abarcando zonas muy marginadas como la mixteca, la región henequenera y la candelillera y muchas áreas forestales. Se amplió la atención del INPI y después del IMAN a numerosas áreas rurales. Se capacitó a 15 mil parteras empíricas para atender al doble de comunidades rurales y la mortalidad infantil bajó considerablemente. El Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Rural (Indeco) promovió la autoconstrucción de vivienda, mientras que en medios urbanos Infonavit promovía casas para trabajadores de la empresa privada y Fovissste las construía para empleados al servicio del Estado. A partir de 1973 se impulsó la educación en las zonas que permanecían más desatendidas, tanto en la ciudad como en el campo. Se revivió el programa de misiones culturales y se habilitaron muchas aulas rurales móviles. Se promulgó una Ley Nacional de Educación para Adultos para facilitar la instrucción abierta y se amplió considerablemente la educación agropecuaria.³⁴

Las zonas indígenas, a algunas de las cuales se les confirmaron o restituyeron sus tierras comunales, recibieron atenciones específicas para mejorar condiciones de vida. Se crearon los Consejos Supremos de las Etnias y el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Aunque es verdad que la capacitación de 18 mil promotores bilingües serviría, sobre todo, para difundir entre los indios los criterios desarrollistas, también contribuyó, lo mismo que los consejos, a revalorar sentimientos positivos de identidad.

Más de lo mismo, con “populismo”

La transición que inauguró Echeverría no maduró. Las respuestas que se dieron a demandas que reclamaban esencialmente democracia no alteraron a fondo esa carencia álgida del sistema. Consiguieron, eso sí, inyectarle oxígeno y alimentaron

la esperanza de encontrar soluciones entre los jóvenes, los intelectuales y algunos sectores medios. En los dos extremos del espectro ideológico se radicalizaron posiciones: mientras se propagaba, como secuela del 68, el extremismo terrorista de la guerrilla urbana y se intensificaban en el campo las protestas armadas, también se radicalizaron las posturas empresariales, a la derecha, hasta el punto de que pareció ponerse en peligro el acuerdo entre el sector público y el privado.

Desde una posición de izquierda reflexiva, Carlos Pereyra hizo una evaluación de *los límites del reformismo* en el verano de 1974. En el balance de los propósitos fallidos, se incluía la intención frustrada de reorientar el modelo hacia el exterior a través del estímulo a la exportación para buscar la competitividad internacional: no fueron propicias las circunstancias para instrumentar algo que se había expuesto como objetivo desde el primer Informe presidencial. En cuanto a la “actualización del populismo”,

[...] es una necesidad no sólo para postergar la formación de un movimiento popular independiente, no sólo para encauzar las demandas populares dentro de márgenes compatibles con la reproducción del sistema, sino también para preservar la autoridad política del grupo gobernante.³⁵

De ahí la alianza popular diseñada por el régimen. Se procuró abrir un poco las reglas del juego precisamente para poder seguir jugando el mismo juego: un juego de exclusión de las fuerzas sociales y políticas que el sistema no pudiera asimilar. Pero la actualización del populismo no fue apreciada por muchos de los grandes empresarios que, como advirtió Pereyra, no tuvieron visión de largo alcance y no advirtieron la conveniencia de encauzar las demandas populares, precisamente para proteger la legitimidad de un sistema que los favorecía y para asegurar su perduración.

A pesar de que los datos de la realidad aconsejaban otra cosa, no se dejó de “pensar en grande”. Se acentuó con desmesura la proliferación de un aparato burocrático innecesariamente hinchado, sin advertir que así se neutralizaban los beneficios que pudiera haber propiciado el aumento en la inversión pública. Y la palabra cobró, como nunca, una autonomía ilimitada, de tal modo que los cambios anunciados en el discurso se confundían con cambios reales, marchando de la mano un lenguaje-ficción y una economía-ficción. El populismo de ese lenguaje-ficción, acompañado de una política exterior “tercermundista”, desató desconfianzas excesivas por un lado sin poder concitar, por el otro, adhesiones entusiastas puesto que no se traducían en una política coherente y sólida de mejoramiento de condiciones reales de vida o de democratización real en las bases corporativas del sistema.

El mismo Estado que había dejado ver una hosca cara oculta en el 68 intentaba restaurar su legitimidad, apaciguando el clamor juvenil que amenazó con saltarse

las trancas del esquema idílico de paz y estabilidad posrevolucionarias. El apaciguamiento no fue sólo verbal, porque se abrieron efectivamente las puertas para recibir a muchos disidentes y voceros de la conciencia crítica. Se enunció el propósito de reducir desigualdades y de encontrarle la cuadratura al círculo de un crecimiento alimentado ávidamente con la penuria de muchísimos marginados.

Más valía abandonar una estabilidad engañosa y “compartir el desarrollo”, decía el nuevo discurso. No había que olvidar que el país tenía, *también*, un rostro indio, relegado en un olvido vergonzante, y que era lo prudente recuperar los valores populares y nacionales que la revolución *también* había propuesto rescatar. Por eso el régimen de Luis Echeverría se lanzó, en sus formulaciones verbales, a desempolvar propósitos neurálgicos del programa cardenista, incluyendo una explícita vocación a la fraternidad latinoamericana. La ideología manifiesta pretendía, en suma, sentar bases para un desarrollo más justo, capaz de incorporar por fin a las grandes mayorías a las gratificaciones del Progreso.

La probable sinceridad de tales propósitos resultó neutralizada y aun contradicha en la práctica. Faltó familiaridad con la idiosincrasia y las expectativas reales de la gente y sobró proclividad a atribuirle al gigantismo burocrático y a sus fórmulas desarrollistas facultades curativas que estaban lejos de poder improvisarse como soluciones reales. La realidad se negaba a parecerse a los esquemas teóricos de flamantes técnicos que experimentaban desde los escritorios. Igualmente inoperantes resultaron los esfuerzos de huestes juveniles que fueron enviadas al campo para instrumentar el milagro de una renovada reforma agraria colectivista.

La fórmula mágica de la colectivización no funcionó como Ábrete Sésamo para desatar el embrollo del campo. Tampoco funcionó el propositivo fortalecimiento del sector público para consolidar la estabilidad política impugnada en 1968. Más bien se tradujo en multiplicación azarosa de la burocracia y en un gasto exuberante que no siempre, o casi nunca, produjo los efectos deseados. La hegemonía del Estado como protagonista del desarrollismo se manejó sin mucha prudencia y con escasa eficacia.

Se ha señalado que el modelo hizo crisis cuando se volvió ostensible la contradicción entre sus dos sostenes: la alianza corporativa con los sectores populares, que había legitimado la fuerza del Estado, y la alianza con el sector empresarial, que decidió reclamar una creciente autonomía considerando que había cumplido la mayoría de edad y no necesitaba ya, en la misma medida, del sector público.

La tensión entre empresarios privados y gobierno se mantuvo con altibajos a lo largo del sexenio. El pacto implícito y explícito, vigente a partir de 1940, estuvo a punto de tronar. No aprobaron los empresarios ni la pretensión de regular la comercialización de bienes básicos a través de Conasupo, ni los aumentos salariales, ni los límites a la inversión extranjera y resintieron el acercamiento “simbólico” al Chile de Salvador Allende y a la Revolución Cubana. Para imprimirle fuerza política

a su poderío económico surgió el Consejo Coordinador Empresarial. En cuanto al sector obrero, los trabajadores urbanos aumentaron, en algunos lapsos, su poder adquisitivo y la industria de la construcción creó numerosos empleos, lo mismo que las obras de infraestructura de riego y de caminos, aunque hubo etapas de elevada desocupación.

Se partió del propósito de restañar heridas y cerrar las grietas abiertas en la estabilidad política. Se habló de cambiar estructuras mentales y de avanzar, no a la izquierda ni a la derecha, sino Arriba y Adelante. Se trataba de un giro versátil, adaptado a la coyuntura, para proseguir la misma carrera maratónica hacia el Progreso y la modernización, sólo que abriendo filas para incorporar a un número mayor de corredores. El lema de “Arriba y Adelante” sugería una disposición al movimiento por el movimiento mismo, a la hiperactividad, y no excluía la propensión a “pensar en grande” que había marcado antes el despegue y el despliegue del proyecto desarrollista.

La propuesta de un cambio de estructuras mentales fue un llamado a los sectores más propensos a apostar por la vertiente autoritaria, a reflexionar sobre las ventajas que podía reportarles la tolerancia. Los canales estaban demasiado obstruidos y había que abrirlos y desazolvarlos. Por eso muchos universitarios fueron incorporados al sistema. Y, para dar credibilidad al propósito de reforma política, se propició la formación de algunos partidos opositores como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y la salida de la clandestinidad del Partido Comunista Mexicano. Una parte del descontento más radical se escapó, sin embargo, a tales intenciones conciliatorias y optó por las vías violentas de la guerrilla urbana (Liga 23 de Septiembre) y la guerrilla rural (Genaro Vázquez y Lucio Cabañas).

Otra versión de los dos Méxicos

En los años setenta se dieron dos modalidades de rebeldía armada, completamente diversas y sin vínculos entre sus actores, sus metas o sus métodos: la guerrilla urbana y la guerrilla rural. La guerrilla urbana fue una secuela confusa del movimiento estudiantil del 68. Mientras en medio de la apertura eran liberados los dirigentes, se fue radicalizando una corriente que, invocando la represión de Tlatelolco y la del Jueves de Corpus, negaba cualquier posibilidad de diálogo con el Estado y no creía en ninguna alternativa de reforma:

Este razonamiento estuvo en el origen del movimiento guerrillero urbano (de base estudiantil), que se inició, precisamente, a partir del 10 de junio de 1971 y que contribuiría a debilitar las formas políticas del movimiento estudiantil.³⁶

La represión y el extremismo se alimentaron mutuamente. Gilberto Guevara ha descrito cómo se afectó a la institución universitaria con la hostilidad y la desconfianza que escindió en un confuso e incoherente coro ruidoso a las voces juveniles. Actitudes francamente provocadoras culminaron con la renuncia del rector Pablo González Casanova. El esquematismo beligerante de muchos grupos salió de los límites universitarios y encontró cabida después en ciertas organizaciones políticas. Una forma perversa y extrema de activismo fueron los brotes terroristas, expresión enfermiza de la descomposición del aliento originario y de un sentimiento de impotencia propicio a la inmolación. La Liga 23 de Septiembre fue, al parecer, un membrete adoptado por pequeños grupos clandestinos movidos por la frustración y, cada vez más, por la venganza contra el sistemático e implacable exterminio que fue diezmado sus filas. Los numerosos conflictos estudiantiles que estallaron en los años setenta tuvieron, en general, efectos desastrosos en las universidades, con un saldo de asentamiento de las tendencias más conservadoras. En algunos casos, como en Chihuahua, el activismo estudiantil se vinculó con la emergencia de movimientos urbanos que empezaban a surgir en colonias populares.

Generados dentro de una persistente confrontación armada por la tierra, y en una motivación de autodefensa, surgieron en Guerrero los alzamientos rurales de Lucio Cabañas (Partido de los Pobres) y de Genaro Vázquez (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) que prendieron en torno a Atoyac y Chilpancingo. Respondían a una tradición de levantamientos campesinos armados, en el Centro y el Sur del país, cuyos antecedentes estaban, en este siglo, en los episodios que protagonizó en Morelos Rubén Jaramillo y en la revuelta agraria de Zapata. Tanto Vázquez como Lucio Cabañas eran maestros rurales, estrechamente vinculados a las carencias y las demandas de sus comunidades y sensibles a las amenazas de violencia de autoridades locales, tan frecuentes en aquellos rumbos remotos e incomunicados. La dramática historia de aquella rebeldía localizada, aislada, sin ningún apoyo de afuera y que nunca alcanzó a movilizar amplios contingentes terminó con la trágica muerte de Lucio Cabañas.³⁷

Paradójicamente, ha sido un erudito y traductor de los clásicos griegos y latinos, Carlos Montemayor, el que ha hecho acopio de testimonios y documentación para novelizar, en *Guerra en el paraíso*, la fracasada empresa y la extinción del luchador guerrerense. En una entrevista reciente, Montemayor ha recordado la persistencia de condiciones muy semejantes, a lo largo de los siglos, con *ciertas familias en pie de lucha y ciertas familias detentando el poder*, es decir, la reiterada historia de los cacicazgos locales, que habría que rastrear como antecedentes del episodio guerrillero. Ha señalado la presencia del abuelo de Lucio Cabañas en la revolución zapatista y ha descrito a la sierra de Guerrero como *uno de los enclaves con mayor vocación de libertad* desde la insurgencia de Vicente Guerrero, recogida y continuada luego por don Juan Álvarez. La actuación de Cabañas se situaba, pues, en una larga sucesión

de focos de resistencia campesina. El aislamiento y el abandono de la sierra de Guerrero entrarían, sin duda, en el balance de las motivaciones:

Durante la época en que se mantuvo el cerco del ejército y la policía en las zonas guerrilleras, se tendieron líneas de teléfono, se abrieron clínicas, se hicieron carreteras, tiendas Conasupo. Una vez sofocada la guerrilla, eso desapareció, eso se olvidó, y puedo afirmar que, hasta hace poco, por no decir que hoy, las sierras de Atoyac y de Tecpan son cotos cerrados para cualquier individuo que no sea un vecino de esas montañas.³⁸

En el filo de la navaja

A fines de 1975, debido a una secuela de circunstancias naturales, sociales y políticas, brotó en el noroeste del país un núcleo conflictivo donde la crisis afloró y se volvió detonante.

En Sonora, los agricultores privados se concebían a sí mismos como titanes que habían cumplido el ideal de los caudillos sonorenses, tan evidente pero tan irrealizable todavía en los albores revolucionarios de los años veinte: establecer en México lo mejor del *farming* norteamericano y demostrar que era posible, de este lado de la frontera, la próspera empresa agrícola que florecía del otro lado. En aquellas planicies se consolidaron a lo largo de varias décadas algunos de los más importantes neolatifundios del país y entre las familias que los usufructuaban había nombres ilustres que remitían a la legendaria épica de la revolución armada. Disfrutaban algunas de las mejores tierras de riego del territorio mexicano y habían logrado el emporio de agricultura para la exportación que fue el sueño de Obregón y de Calles.

En esas tierras laboraban, desde los años cincuenta, miles de jornaleros procedentes de otras regiones, que pronto empezaron a solicitar tierras. Nunca se dio oído a esas demandas, que eran aplazadas en el papeleo burocrático aun cuando, en algunos casos, se concedieran las dotaciones. A veces, cuando los jornaleros llegaban a invadir algún predio, se les reprimía con mayor o menor dureza. Pero en los años 72 a 74 sobrevino un fenómeno natural que afectó el riego y redujo hasta en un 50% la actividad agrícola.

La sequía fue, pues, el principio del episodio que habría de precipitar la culminación del *imbroglio* entre gobierno e iniciativa privada. Tras la sequía vino la baja de precios del algodón, lo que condujo a sustituirlo por el cártamo y la soya, disminuyendo drásticamente la necesidad de ocupar jornaleros. El desempleo que se produjo entonces, en medio del alza de los productos de consumo que acuciaba a los trabajadores agrícolas, volvió detonante la reclamación de tierra.

Año de invasiones y desalojos en el norte de Sinaloa y en el sur de Sonora fue el de 1975. Los argumentos de los grandes empresarios agrícolas fueron expuestos en un encuentro nacional, en agosto, donde se hizo el elogio de la agricultura empresarial moderna como aportadora de divisas y como la única rentable. El gobernador Biebrich, aliado a esos intereses, desalojó con violencia y muertos a los invasores de un predio que había sido dotado, pero no entregado, desde 1953: San Ignacio Río Muerto. Entre octubre y diciembre se aceleraron los acontecimientos.

La renuncia del gobernador fue un subproducto político, pero la lógica del conflicto la rebasó y la volvió anecdótica. Pronto se anunciaría que en los trece meses restantes del régimen se pondrían al descubierto “todos los latifundios simulados que hay en el país”. Los sonorenses respondieron: “Quien aspire a ser campesino debe pagar por la tierra”. En noviembre se afectaron 2 500 hectáreas de Montelargo en Sinaloa (propiedad de la familia Almada-Calles) y San Ignacio Río Muerto, que abarca 4 487 hectáreas de riego. Al apoyo previo de grandes agricultores de Tamaulipas se sumaron los de Querétaro y Guanajuato, para aconsejarle al gobierno que definiera “la fórmula de tenencia que considera más conveniente para la economía nacional”.³⁹

El 1º de diciembre se sumaron a un *paro* de maquinaria agrícola numerosos pequeños propietarios de los valles del Yaqui y del Mayo, contagiados por el miedo, difundido por los grandes terratenientes, de que se pretendiera afectar sin distinciones a las tierras de propiedad privada. En diciembre, el presidente recibía agricultores de Sinaloa y de Sonora que, acompañados por sus pares de Tamaulipas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Chiapas, se presentaron como integrantes de una Unión Agrícola Nacional (Unan) que hasta el momento no tenía existencia jurídica y que, de hecho, se improvisó para presentar un pliego petitorio. El resultado inmediato fue una Comisión Tripartita Agraria para consulta y conciliación, con representantes del gobierno, de ejidatarios y comuneros y de los agricultores privados.

Entre diciembre y junio de 1976 se dio un período de estira y afloja, en el que Echeverría maniobró, queriendo demostrar que conservaba la iniciativa y procurando debilitar poco a poco tanto a la Unan como a los campesinos. Aunque, a la vez, el discurso inflamado de los funcionarios alentaba la “ola campesina” y la propia CNC propiciaba invasiones: cerca de 40 mil campesinos se manifestaron en Ciudad Obregón, a mediados de abril, frente al presidente acompañado del gabinete y de varios gobernadores. Probablemente para inducir a los propietarios a negociar se anunció, en junio, que habría afectaciones tanto en Sinaloa como en Sonora. A lo largo del enfrentamiento, los sonorenses se habían mostrado tercos y soberbios mientras los sinaloenses habían tendido a pactar. En Sinaloa se publicó una lista de 32 familias poseedoras de 39 mil hectáreas disfrazadas por prestanombres: cediendo una pequeña parte de esas tierras, los agricultores llegaron a un acuerdo con el gobierno.

En Sonora, en cambio, se dio la paradoja de que el modelo de los caudillos triunfadores de la revolución resultara impugnado por el propio poder del Estado al que ellos habían contribuido a formar:

La afectación de latifundios simulados —pocos o muchos, no importaba— era ya una cuestión de legitimidad social para el Estado. La afectación serviría al Estado para frenar el movimiento campesino —que recobraba ímpetu— y para mantener la base social de las organizaciones oficializadas en el Pacto de Ocampo. El hecho de que estuviera en el filo de la navaja, entre la presión del movimiento campesino y la intransigencia militante de la burguesía, y con su prestigio social en entredicho, volvía sumamente delicada la posición estatal y lo empujaba a radicalizar sus medidas. Pero (eso) fue insuficientemente comprendido por la burguesía y en especial por el grupo sonorense.⁴⁰

Al final de un régimen que trató de reconstituir el debilitado cuerpo de la revolución a base, sobre todo, de palabras, volvía a cuestionarse, ahora desde el otro polo, la legitimidad del Estado. Así se dio la más espectacular expropiación de muchas décadas, para culminar la puesta en escena de un conflicto de poderes en el que ni los sonorenses ni el presidente estaban dispuestos a ceder: se puso en jaque el principio de autoridad y, en la prueba de fuerzas, prevaleció la autoridad presidencial. Para demostrar que no había caminos sino dentro del sistema se excluyó del reparto, tras la expropiación relámpago, a los solicitantes del Frente Campesino Independiente. La expropiación de 37 mil hectáreas de riego y 61 mil de agostadero y temporal se hizo el 20 de noviembre, después de un año rípido.

Por iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial se convocó a un paro nacional de adhesión a los afectados en Sonora. Representantes de once estados advirtieron contra la imposición de “un régimen totalitario” y decretaron el cierre de 200 mil empresas en 51 ciudades de la república. Los sonorenses se quejaron de “un abuso de autoridad sin precedentes en nuestra patria” y, en medio de una campaña de rumores difundidos por los organismos empresariales, el régimen que había manejado las palabras como gran recurso para reinventar la revolución se vio ominosamente embestido por una contra-avalancha de palabras.

El 1º de diciembre se suspendió el paro como “acto de buena voluntad hacia el nuevo presidente de la república, licenciado José López Portillo” y se convocó a *reconstruir México* y “a renovar la confianza en nuestras instituciones”. Bajo esos auspicios se prendía el fuego nuevo y se inauguraba otro sexenio, con dedos cruzados en el sector privado, en la expectativa de sufrir menos sobresaltos. Pocos recordaban, es de suponerse, aquellas declaraciones de Roberto Guajardo Suárez cuando todavía era presidente de Coparmex, en octubre de 1973, afirmando que

[...]pocos regímenes como el presente se han preocupado más de la promoción y el estímulo a la iniciativa privada. En sólo tres años se han dictado más decretos, leyes y disposiciones diversas, promotoras del sector empresarial, que durante todo el sexenio anterior [...].⁴¹

O la advertencia de Jesús Reyes Heróles, en la VII Asamblea Nacional del PRI, contra las pretensiones de abandonar a la economía a su libre juego, lo que podría conducir a “un desarrollo casi salvajemente capitalista, probablemente a la dictadura.”⁴²

La apoteosis del sobregiro

Abundaron, antes y después del fin del período, críticas de todos colores. Muchas desde la derecha y otras desde la izquierda. Se le reclamó a Echeverría, desde un extremo, abrigar oscuros designios de afectar a la propiedad privada y, desde el otro, “no haber tocado al capital financiero”.⁴³

En 1979, Pedro Aspe advirtió que “no puede señalarse al régimen de Luis Echeverría como el causante directo de la crisis por la que ha atravesado el país en la última década”. Sería más ponderado no atribuirle a causas coyunturales sino a contradicciones internas del modelo, que habían provocado el agotamiento del “desarrollo estabilizador” y, sobre todo, a su incapacidad para crear empleos:

Los enfrentamientos entre los grupos empresariales, las organizaciones obreras y el Estado son simultáneamente resultado natural y condicionante de la política económica seguida por el país en las últimas décadas.⁴⁴

En octubre del 76 Gabriel Zaid tuvo el tino de señalar, desde la recién creada revista *Vuelta*, el rasgo acaso más desatinado del sexenio, el *sobregiro*:

El sobregiro era evidente, y no sólo financiero: se hablaba, se anunciaba, se prometía, sin fondos. A todos les decían que sí, pero sin decirles cuándo. El crecimiento de la deuda pública no era más que el reflejo de un mayúsculo endeudamiento político: el prometer milagros no empobrece, cumplirlos (o no cumplirlos) es lo que aniquila [...].⁴⁵

Y, mirando hacia atrás, escribiría años después:

La gran oportunidad desde 1968-1973 estaba en democratizar al país, despiramidar, buscar el desarrollo desde la provincia y desde abajo [...].⁴⁶

En julio de ese año Carlos Pereyra había coincidido con algo dicho antes, desde posiciones muy diversas, por Paz y por Fuentes:

[...] el agente de la democratización no puede ser el aparato gobernante sino las fuerzas integrantes de la sociedad civil[...].⁴⁷

Ante las maniobras que culminaron en la salida de Julio Scherer del periódico *Excélsior*, Paz había escrito:

Los mexicanos no tenemos vida política real, pero tenemos una ficticia: cada tres y seis años celebramos elecciones. En ellas participan partidos y grupos fantasmas que no tienen más función que probar, con su irrealidad, la realidad aplastante y omnipresente del Partido Revolucionario Institucional[...]. Nuestra ficticia vida política sería incompleta si no tuviéramos una libertad de prensa igualmente ficticia[...].⁴⁸

En la revista *Plural* se había insistido, entre octubre del 71 y julio del 76, en la apertura a voces múltiples como signo de vida en las verdaderas democracias. *Vuelta* continuaría el camino, con propósitos semejantes, a partir de noviembre de 1976.

El desgaste del sistema político no pudo revertirse: el populismo verbal produjo más irritación que saldos palpables, porque no funcionaron las medidas económicas destinadas a atenuar males sociales. El aumento del gasto público a niveles deficitarios se hizo con endeudamiento. Y, ante la confusa oferta reformista que no se concretó en mejorías sensibles para los marginados, fracasó el intento de una alianza popular que pretendió, infructuosamente, restaurar la alianza efectiva de los tiempos de Cárdenas.

Se pretendió escenificar una nueva versión del cardenismo para reoxigenar al país. Pero las circunstancias eran muy diversas, incluyendo la fuerza creciente del sector empresarial. También lo eran las experiencias personales de los presidentes. Uno se había formado en el contacto cotidiano con la gente y conocía de primera mano sus pequeños y sus grandes problemas. El otro se había entrenado en los escalones piramidados de la burocracia política y las buenas intenciones se dispersaron en una maraña burocrática proliferante y desordenada. No hubo densidad, en suma, en aquel simulacro reformista y sí mucho despilfarro. Se le temió, además, a la democratización.

Se le temía en el gobierno, que en ningún momento pensó en aflojar los controles corporativos. Pero tampoco se logró una organización política coherente, capaz de articular desde las bases, los gérmenes del descontento.

Las grietas en el edificio se habían hecho visibles en 1968. Algunas fueron tapadas entre 1970 y 1976. Pero nuevas grietas se abrieron: a la estructura afectada por

aquel temblor se le echaron más pisos, en vez de consolidar los que ya exhibían visibles deterioros.

El rescate de la legitimidad fue, quizá, la meta central de Echeverría. La buscó procurando absorber la disidencia y corresponsabilizando a una nueva generación con los asuntos del gobierno. Creyó, por otra parte, que bastaría con aumentar el gasto público para resolver la desigualdad. No quiso o no pudo correr, sin embargo, el riesgo político de una reforma fiscal que no era bienvenida entre los intereses más fuertes. Encontró oposición en los técnicos financieros y decidió asumir, entonces, la gerencia de la economía. Fue, sin duda, una decisión temeraria, que condujo al final a tener que aceptar un “paquete de austeridad” del FMI junto con la devaluación, cuando la fuga de capitales ya alcanzaba, en el último año de gobierno, los 4 mil millones de dólares.

Hay que registrar, acaso como paradoja, que fue en aquella etapa de retórica populista cuando empezaron a romperse los esquemas de la clase política tradicional, con el acceso a la burocracia media y alta de funcionarios jóvenes sin experiencia en lides partidistas ni en puestos de elección y con flamantes diplomas de posgrado. Fue un modo de asegurar lealtades personales y de marcar distancia con el diazordacismo: no se pensó, por supuesto, que se preludiaba el ascenso de una élite tecnocrática que, en la siguiente década, habría de desplazar no sólo a algunos veteranos del sistema sino la retórica y la estrategia del “populismo” para implantar decididamente la ortodoxia neoliberal.⁴⁹

La balanza perdió su fiel

Echeverría quiso combinar crecimiento con justicia social. Aumentar la participación del Estado en la economía, pensó, permitiría combatir mejor la desigualdad. Pero sólo proliferaron las paraestatales. En la primera mitad del régimen subió un 30% el salario real y bajó el costo de la canasta básica. También creció el gasto social, pero en buena medida se lo llevó la inflada burocracia. La deuda subió de 4.3 a 19.6 millones de dólares. El efecto inflacionario de la inyección de créditos y el consiguiente aumento de la inversión pública duplicó los precios. Apenas se alteró la desigualdad, pero muchos equilibrios se rompieron y cundió el desorden.

La entrada de los universitarios al sistema había empezado con Miguel Alemán. Los técnicos se concentraban en Hacienda y desde allí controlaban el gasto, pero no ejercían influencia sobre el aparato burocrático ni el manejo político. Hasta 1970 prevalecieron los “burócratas-políticos”, encabezados por el secretario de Gobernación, que garantizaba la estabilidad coordinando un vasto aparato clientelar a través de los tres sectores del PRI, de los gobernadores y los presidentes municipales y recibiendo el apoyo de la Secretaría del Trabajo. El PRI funcio-

naba, en la práctica, como una subsecretaría de Gobernación, es decir, como el brazo legitimador del sistema.

Dos gobiernos paralelos operaron en armonía de 1940 a 1970: el de los técnicos, con la cabeza en Hacienda, y el de los políticos, con sede en Gobernación. El presidente calibraba sus respectivas dosis de poder desde la cima de la pirámide. El delicado equilibrio se rompió a partir de 1970. El Estado asumió la promoción directa del crecimiento, aumentando su actuación empresarial. Esa expansión espectacular de la presencia del Estado en la economía se tradujo, en los hechos, en inflación del poder presidencial y del centralismo. Teóricamente, se pretendía propiciar una mejor distribución del ingreso y el presidente decidió que sólo podía garantizarlo si se manejaba la economía desde Los Pinos.

Los técnicos fueron desplazados de Hacienda y la deuda sirvió para financiar la expansión del poder presidencial aunque se argumentara que servía para fortalecer al Estado. La función de derramar dones, que antes correspondía al PRI, empezó a desplazarse hacia la presidencia, en la medida en que se fue creando una nueva red de organismos federales para ofrecer servicios sociales. El gasto para el bienestar social no fue hacia donde era más requerido porque la proliferación de nuevas instancias burocráticas y la promoción directa del desarrollo económico absorbió lo que, en la intención, se creía destinado al bienestar. Manejar la economía empezó a ser más importante que manejar la política.

Fue precisamente en esta etapa cuando se desequilibró la balanza que había mantenido el sutil equilibrio entre las recetas de los técnicos y la capacidad de maniobra de los políticos. Influyó, sin duda, la conveniencia insoslayable de poner distancia con el diazordacismo. La etiqueta de “emisarios del pasado” sirvió para identificar a buena parte de la élite política tradicional mientras ascendía una nueva élite y subían los bonos de los economistas. El sistema empezó a perder coherencia institucional, al iniciarse un proceso que ya no habría de detenerse.⁵⁰

Notas

¹ Carlos Fuentes, *Tiempo mexicano*. México: Joaquín Mortiz, 1971, p. 166.

² Gilberto Guevara Niebla, *La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil mexicano*. México: Siglo XXI Editores, 1988, pp. 67-69.

³ Fuentes, C., *op. cit.*, p. 147.

⁴ *Ibid*, p. 108.

⁵ Luis Echeverría Álvarez, discurso de toma de posesión el 1º de diciembre de 1970. México: Partido Revolucionario Institucional, Comisión Nacional Editorial, 1970.

⁶ Hugo Margáin, discursos ante la Convención Nacional Bancaria de 1971 y 1972. Citados por Francisco Suárez Dávila, “Política hacendaria y economía política en el México

- posrevolucionario”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 407.
- ⁷ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 194.
- ⁸ Octavio Paz, *El ogro filantrópico*. México: Joaquín Mortiz, 1979, p. 130.
- ⁹ *Ibid.*, p. 112.
- ¹⁰ *Ibid.*, p. 120.
- ¹¹ Miguel Basáñez, *El pulso de los sexenios*. México: Siglo XXI Editores, 1990, pp. 49-51.
- ¹² Francisco Suárez Dávila, *op.cit.*, pp. 412, 409 y 410.
- ¹³ Rogelio Montemayor, “Reflexiones sobre la planeación en México”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 98.
- ¹⁴ Suárez Dávila, F., *op. cit.*, p. 411.
- ¹⁵ José López Portillo, discurso de comparecencia ante la Cámara de Diputados, octubre de 1974, en *Discursos, Ensayos y Conferencias*. México: Dirección General de Documentación y Análisis, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1979.
- ¹⁶ Sergio Reyes Osorio y Ma. de los Angeles Moreno, “El desarrollo rural integral”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 228.
- ¹⁷ René Villarreal, “El desarrollo industrial de México”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 320.
- ¹⁸ Basáñez, M., *op. cit.*, p. 58.
- ¹⁹ *Ibid.*, p. 50.
- ²⁰ *Ibid.*, p. 51.
- ²¹ Paz, O., *op. cit.*, pp. 150 y 151.
- ²² Arturo Warman, *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Editorial Nuestro Tiempo, 1983, p. 67. La 1ª. edición es de 1972.
- ²³ Arturo Warman, *Ensayos sobre el campesinado en México*. México: Nueva Imagen, 1980, p. 64.
- ²⁴ *Ibid.*, p. 65.
- ²⁵ Sergio Reyes Osorio y Ma. de los Angeles Moreno, *op. cit.*, p. 226.
- ²⁶ Sergio Alcántara, *Industrias colectivas del pueblo: Un estudio de caso sobre industrialización rural en el Sur de Jalisco*. México: Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 1979.
- ²⁷ Reyes Osorio y Moreno, *op. cit.*, p. 239.
- ²⁸ Una amplia información sobre esta experiencia se encuentra en el trabajo monográfico de Sergio Alcántara citado en la nota 27.
- ²⁹ Reyes Osorio y Moreno, *op.cit.*, p. 223.
- ³⁰ Warman, A., *Ensayos sobre el campesinado en México, op. cit.*, p. 79.
- ³¹ *Ibid.*, p. 77.
- ³² *Ibid.*, p. 81.
- ³³ J. Ayala, J. Blanco, Rolando Cordera, G. Knochenhauer, A. Labra, “La crisis económica: evolución y perspectivas”, en *México, hoy*. México: Siglo XXI Editores, 1979, p. 19 ss.

- ³⁴ Reyes Osorio y Moreno, *op. cit.*, p. 244 ss.
- ³⁵ Carlos Pereyra, "Los límites del reformismo", en *Sobre la democracia*. México: Cal y Arena, 1990, p. 123. El artículo apareció en *Cuadernos políticos*, julio-septiembre de 1974.
- ³⁶ Gilberto Guevara Niebla, *op. cit.*, p. 69.
- ³⁷ Jorge G. Castañeda, *La utopía desarmada*. México: Joaquín Mortiz-Planeta, 1993, pp. 103-105.
- ³⁸ Entrevista de Carlos Puig a Carlos Montemayor en *Proceso*, México: 9/IX/ 92.
- ³⁹ Gustavo Gordillo, *Campesinos al asalto del cielo. De la expropiación estatal a la expropiación campesina*. México: Siglo XXI Editores, 1988, pp. 79-80.
- ⁴⁰ *Ibid.*, pp. 88-89. La información sobre todo el episodio se funda en ese análisis.
- ⁴¹ Citado por Carlos Pereyra, "Los límites el reformismo", *op.cit.*, pp. 122-123.
- ⁴² Jesús Reyes Heróles, discurso ante el pleno de la VII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 19 de octubre de 1972, en *Discursos políticos. Avancemos con la sonda en la mano*. México: Comisión Nacional Editorial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 1975, p. 120.
- ⁴³ Carlos Tello, *La política económica de México, 1970-1976*. México: Siglo XXI Editores, 1979, p. 125.
- ⁴⁴ Pedro Aspe, comentario a un texto de Eduardo González sobre "Empresarios y obreros: dos grupos de poder frente a la crisis y la política económica de los setenta", en *Investigación Económica*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, núm. 150, vol. XXXVII, octubre-diciembre de 1979, p. 317.
- ⁴⁵ Gabriel Zaid, "Alicia en el país de la fluctuación", en *La economía presidencial*. México: Vuelta, 1987, p. 43. El artículo apareció en la revista *Vuelta* en octubre de 1976.
- ⁴⁶ Gabriel Zaid, "La economía presidencial", en *La economía presidencial, op. cit.*, p. 28. El artículo apareció en la revista *Plural*, núm. 37, y fue reescrito para el libro.
- ⁴⁷ Carlos Pereyra, "La tarea mexicana de los setenta", en *Sobre la democracia, op. cit.*, p. 131. Artículo publicado en *La cultura en México*, suplemento de *Siempre!*, en julio de 1976.
- ⁴⁸ Paz, O., *op. cit.*, p. 317.
- ⁴⁹ Miguel Angel Centeno, *The New "científicos": Technocratic Politics in Mexico 1970-1990*. Tesis de doctorado en la Universidad de Yale, mayo de 1990. Mimeo, p. 236.
- ⁵⁰ *Ibid.*, pp. 299-307.

VII. El espejismo de la abundancia

Los veneros del diablo

Todo empezó con el explícito propósito de “organizar el gobierno para organizar al país”. Terminarían las veleidades del populismo y las aguas regresarían a su nivel. Había que recuperar un crecimiento que apenas alcanzaba un modesto 2% anual y abatir una inflación que remontaba el 27%. Había que favorecer la inversión y procurar estabilidad en los precios. El discurso populista habría de ser sustituido por un discurso apaciguador y estimulante para la iniciativa privada.

La recuperación económica tendría que enmarcarse en la austeridad del programa de tres años estipulado, al finalizar el sexenio de Echeverría, con el FMI. El déficit presupuestal bajaría a un 2.6% del PIB en 1979 y la producción subiría a un 7%; se propiciaría el ahorro interno y se bajaría el proceso inflacionario. A la Alianza para la Producción iba a corresponderle ofrecer subsidio y financiamiento al sector empresarial, bien dispuesto a volver a transitar con soltura por los pasillos del poder. Y a la Reforma Política equilibrar la estrategia, procurando encarrilar el apoyo popular y los afanes de democratización sin peligros para el sistema. Entonces se atravesó la tentación de treparse en la ola gigantesca del petróleo para dar el salto definitivo que permitiera salir, para siempre, de la pobreza. Y se construyó así el castillo de naipes más insostenible de la historia nacional: lo peor no fue el estrépito del derrumbe sino el amargo despertar después de la embriaguez.

Ya en 1977 el secretario de Hacienda, que entonces era David Ibarra, sugería:

Debemos prepararnos desde ahora a la prosperidad que nos espera[...] sería trágico que la nueva riqueza se dilapidara en usos improductivos[...].¹

Desde un observatorio a prudente distancia del sistema Octavio Paz señalaba, en diciembre de aquel año, que *el petróleo puede aliviar nuestros males, no curarlos*.² Era una advertencia fundada en la experiencia histórica: ya el proyecto de un imperio mexicano se había construido, en los albores de la Independencia, sobre la ilusión de que México era el cuerno de la abundancia.

¿Qué cantos de sirenas brotarían de los mares subterráneos de oro negro para invitar a los mexicanos a sumergirse en abismos seductores?

La verdadera pobreza era la ausencia de un proyecto nacional que tomara en cuenta la contradicción, cada vez más aguda, entre los dos Méxicos. Si en algún momento la derecha había logrado expresar algo profundo y antiguo de la nación, se había olvidado luego de ello para contagiarse del afán modernizador: se había quedado sin ideas y ya sólo tenía intereses. Una izquierda sin imaginación se perdía, mientras tanto, en discusiones estériles. Ni de un lado ni del otro se quería mirar de frente al país real: tampoco lo miraba de frente el sistema, montado sobre la falacia de una ficción. Por todo eso,

[...] no hemos podido crear ese espacio donde, en las democracias, se despliegan las luchas políticas[...]. El sistema político mexicano empieza a convertirse en una reliquia pero es una reliquia temible: su derrumbe puede sepultarnos a todos. El remedio no está en tapar las goteras sino en salir al aire libre: la evolución hacia una verdadera democracia[...].³

Un año antes, al aparecer la revista *Vuelta*, Paz había señalado que *una nación sin crítica es una nación ciega*. Había, en sus palabras, un eco de aquel *Discurso de las profecías* pronunciado en 1824 por Fray Servando Teresa de Mier. El fraile le había augurado infortunios al país por imitar un modelo ajeno a su realidad y a su idiosincrasia. Ahora Paz, en la entrevista con Julio Scherer que cerraba *El ogro filantrópico*, reiteraba y afinaba lo que ya había sugerido en 1969:

¿Por qué no poner en entredicho los proyectos ruinosos que nos han llevado a la desolación que es el mundo moderno y diseñar otro proyecto, más humilde pero más humano y más justo?⁴

Pero andaba rondando, acaso, el mismísimo diablo, que según López Velarde le habría escriturado al país los veneros negros. De una reserva de 10 mil millones de barriles se había pasado, por la magia del maligno, a un barril sin fondo que por el momento ya atesoraba 70 mil millones pero que, seguramente, reservaba todavía grandes sorpresas, anticipadas por pronósticos que fijaban la cifra centelleante en

200 mil millones. El papel de aprendiz de brujo le tocó al director de Pemex, que compareció ante el Congreso, en 1977, cargado de promesas y envuelto en el aura de fuegos fatuos que emitía una providencial riqueza petrolera, capaz de resolver todos los problemas de la inveterada penuria. Pero no sólo eso. Era, además,

[...] el gran eje económico que ha faltado desde el principio de nuestra historia y cuya ausencia ha inhibido la total consolidación de la nación. Esta riqueza hace posible ver hacia el futuro la creación de un nuevo país[...].⁵

¿Acaso alguno de los legisladores presentes habrá sabido identificar aquellas palabras como el anticipo de uno de esos “proyectos ruinosos”, desoladoramente modernizantes, al leer en *Proceso*, en diciembre de ese mismo año, la saludable propuesta de Octavio Paz de buscar alternativas más humildes para el futuro de la nación? Difícilmente, porque todo conspiraba, no sólo adentro sino también afuera, a sustentar el optimismo.

En esa atmósfera hay que situar el cálculo del Banco Mundial (1978): dados los nuevos excedentes que generaría el petróleo, México “podría convertirse en exportador neto de capital”.⁶ El país tenía mucho petróleo y los bancos internacionales muchos fondos, procedentes de los depósitos de otros países que tenían mucho más petróleo. Los bancos ofrecerían con liberalidad créditos blandos. En México se apostó a que el precio del petróleo —que subió de 4 dólares por barril en 1973 a 38 en 1979— se mantendría alto y a que las tasas de interés se mantendrían bajas. Así se montó el escenario para la administración de la abundancia. Mientras tanto, se consideró pertinente realizar la Reforma Política.

Lo que resiste apoya

La reforma fue concebida e instrumentada por Jesús Reyes Heróles, que la formuló como alternativa a

[...] un endurecimiento del gobierno que lo conduciría a la rigidez. Tal rigidez impediría la adaptación de nuestro sistema político a nuevas tendencias y a nuevas realidades; supondría ignorarlas y desdeñarlas[...].⁷

Considerando que *lo que resiste apoya*, se buscó fortalecer al sistema encauzando *el complicado mosaico ideológico nacional* sin romper los controles verticales de la estructura corporativa. Aunque en 1963 se había introducido la modalidad de diputados de partido, el pluripartidismo era ficticio y sólo había en la Cámara una apariencia de debate. Como había dicho Paz, en julio de 1977, *nuestros partidos [eran] una*

asamblea de fantasmas.⁸ El derecho a organizarse fuera de la tutela estatal había sido la demanda esencial del 68, pero no se había traducido después en una organización consistente desde la base. Villoro hablará, en 1979, de una *crisis general de confianza en el proceso político*: en 1977, un 89.4% de ciudadanos opinaron que no había libertad para participar.⁹

Reyes Heróles quería evitar la caída en un autoritarismo sin contención alguna, expresión límite del “capitalismo salvaje”, y procurar un reajuste “para acercarse a la democracia”. Se trataba de reformar “para reafirmar, no para cancelar” el modelo político. Tras un período de audiencias públicas, se introdujeron reformas constitucionales y una nueva Ley Electoral: entrarían 100 diputados de representación proporcional y se establecería el registro condicionado de partidos, sujeto al resultado de las elecciones. De hecho, el control quedaba en manos de la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación e integrada, además, por un diputado y un senador designados por las Cámaras y un representante de cada partido con registro definitivo. Los partidos con registro condicionado tendrían voz, pero no voto, en la Comisión. Los partidos recibirían subsidios, medios para editar publicaciones y recursos para sus campañas. Luis Villoro hizo el balance de la Reforma Política:

[...] acepta ciertos interlocutores válidos y representativos de la oposición y, a la vez, intenta encauzar y controlar su actividad, restringiéndola al campo electoral y manteniendo sobre ella procedimientos de vigilancia. Implica, al mismo tiempo, un reforzamiento y legitimación del sistema y una ampliación en la participación de fuerzas políticas disidentes [...]. Una verdadera reforma que propiciara la democracia tendría que ir mucho más lejos [...]. Implicaría una democracia en todas las esferas de la vida pública: la autonomía municipal, la independencia de las organizaciones de masas frente al aparato estatal, la democratización en el interior de los sindicatos obreros, la existencia de un pluripartidismo real[...].¹⁰

El tránsito a un modelo democrático pluripartidista, explicaba Villoro, no podía partir de la cima del sistema, sino de una organización desde las bases en busca de *la realización efectiva de la democracia*.

Conflicto de lealtades

Las inteligencias más lúcidas del país, preocupadas pero no sesgadas por ningún interés concreto en la feria política, coincidían en lo esencial. Una de las reflexiones más persistentes sobre los avatares de la democracia fue, a lo largo de esos años, la de Carlos Pereyra. En sucesivos análisis procuró reconstruir el proceso que había

conducido a la absorción de toda la vida política por un partido. Ese partido no era ni podía ser “un partido más”, precisamente porque nació y creció como *el partido del poder*. Cuando el proyecto se dirigió al crecimiento *per se*, la sociedad no tuvo instrumentos para contrarrestarlo: ningún pluralismo fue posible puesto que el sistema era todo y se lo había tragado todo. La Reforma Política

[...] es un paso considerable en la vía de la democratización nacional, pero este proceso exige también la progresiva disolución de la estructura corporativa del PRI[...].

La crítica de Pereyra al sistema político no cuestionaba la validez del proyecto modernizador sino la desviación del desarrollo excluyente. Acaso la objeción que puede hacerse a su inteligente argumento sea la de atribuirle unanimidad al “proyecto nacional de desarrollo”. También a Pereyra se le olvidaba que ese proyecto modernizador no había sido el de la gran mayoría del país, constituida por campesinos, cuya aspiración era permanecer fieles a su identidad tradicional. Formado en el marxismo, Pereyra no podía desprenderse de una visión lineal de la historia, coherente con los parámetros occidentales. El sistema no aparecía, en aquel análisis, como un todo espurio y rechazable sino como una trama de intereses y de fuerzas, a veces contradictorias entre sí. Las necesidades económicas no habían impuesto con absolutismo las decisiones políticas: un margen de libertad de decisión permitía siempre que la voluntad de los hombres entrara a configurar el curso de los acontecimientos.

El “perfil populista del régimen” había sobrevivido, aunque maltrecho, a los embates de un crecimiento fundado en la obtención de ganancias excepcionales para muy pocos. Nunca se prescindió de atender, en alguna medida, las demandas populares. El Estado no había representado únicamente los intereses de los sectores dominantes. Si los grupos privilegiados por el desarrollo excluyente quisieran inclinar al sistema a prescindir del apoyo popular y a no hacer concesiones, habría que fortalecer al Estado en vez de debilitarlo: las “fuerzas populares” tendrían que buscar alianzas “con los núcleos del Estado fieles a la tradición originaria: la Revolución de 1910”.¹¹

Una “nueva sociedad” o el preludio de una disputa

En 1978 la economía se había acelerado tanto que crecía en un 8.2%. La inflación, en cambio, bajaba de un 29 a un 17%. ¿Estaba en camino la consolidación del desarrollo en torno al pivote mágico del petróleo? La Alianza para la Producción se proponía trepar en la ola negra a la industria manufacturera, para darle el impulso definitivo: para ello, entre otras razones, se formulará, en 1979, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. La economía crecerá ese año al nivel máximo de un 9%.¹²

Entre junio del 78 y octubre del 79 la cúpula del sector obrero encuadrado en la CTM y en el Congreso del Trabajo adoptó un discurso inusitado, que hasta el momento sólo se había escuchado en boca de los que impugnaban, desde la izquierda, las imperfecciones del sistema:

[...] quizá para evitar “que la iniciativa de la base obrera desborde los límites establecidos por el sistema y orientarla por los canales corporativos”[...].¹³

Fue ése el tono de la Reunión Nacional para la Reforma Económica en 1978 y del Manifiesto a la nación de la diputación obrera del PRI en octubre de 1979. El movimiento de electricistas, encabezado por Rafael Galván, había articulado al término del sexenio anterior una efervescente propensión a aflojar los controles sobre algunos núcleos del movimiento obrero. Fidel Velázquez se había lanzado a pedir, en 1974, un 42% de aumento salarial, presionado por una base que sufría los embates de la inflación. El gobierno había declarado legítima una demanda que, tras breve negociación, fue satisfecha con un 35% de aumento. Pero en 1978 no se trataba de otra reivindicación salarial. Y no eran disidentes sino los jerarcas de la pirámide sindical los que afirmaban:

[...] la política económica de las últimas décadas ha estado orientada[...] a favorecer la acumulación privada de capital a través de un modelo de crecimiento económico que ha conducido al empobrecimiento de las mayorías[...], a una concentración extrema de la riqueza y a una dependencia creciente del exterior. El modelo de crecimiento se ha basado en un proceso de industrialización encaminado a obtener altas ganancias postergando para un futuro incierto la satisfacción de las necesidades reales de la población y el desarrollo de otros sectores de la economía.¹⁴

El 1º de mayo de 1979, la dirigencia del Congreso del Trabajo le señalaba al presidente que el Estado estaba en la posibilidad de “modificar las estructuras sociales”, si buscaba su fortaleza en una alianza con “las fuerzas populares que le dieron origen y lo sustentan”. En octubre los diputados priístas del sector obrero proponían, en el manifiesto difundido en la prensa nacional, *una nueva sociedad*. Ante “la presión de los grupos minoritarios representativos del poder económico”,

[...] es preciso poner en vía de realización un proyecto de desarrollo democrático, nacionalista y popular[...] que responda a las exigencias actuales de las mayorías[...].¹⁵

La propuesta incluía el propósito de dar mayor contenido revolucionario a la Reforma Agraria; de aplicar modificaciones estructurales para una reforma econó-

mica y de profundizar en la reforma política. La misma dirigencia sindical que se había aliado al desarrollismo, a cambio de ventajas económicas para sus agremiados, asumía ahora —en la retórica verbal por lo menos— propuestas que habían sido adoptadas por los brotes de independencia obrera. ¿Entraría, acaso, la democracia sindical en el proyecto de “nueva sociedad”?

En abril de 1980 se anunció el Plan Nacional de Desarrollo Industrial formulado en la Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal), que apoyaba el proyecto nacionalista (que algunos llamaban “populista”) del ala izquierda tecnocrática, cuyo vocero era Carlos Tello. Se proponía un cambio a fondo en la distribución del ingreso; producir más bienes y servicios para satisfacer necesidades básicas y fortalecer el mercado interno: se pretendía armonizar crecimiento con bienestar. Fortalecer la participación del Estado era parte de ese esquema.

De la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) salió el Plan Global de Desarrollo, que no proponía cambios de fondo en la distribución del ingreso sino volver más eficiente el aparato económico. Si el Plan Nacional aconsejaba acentuar el papel del Estado, el Plan Global proponía privilegiar su eficiencia. Si aquél ponía el acento en el mercado interno, éste daba prioridad la integración en la economía mundial: como diría Ricardo García Sáinz, exsecretario de Programación, la economía del país habría de progresar “con apoyos e incentivos del capital y sacrificio y esfuerzo de la clase trabajadora”.¹⁶

Ambos planes eran tecnocráticos. Desde la Secretaría de Patrimonio, los “estructuralistas” de la escuela de Cambridge querían ganarle la partida a los “monetaristas”, procedentes de Hacienda y del Banco de México y formados en los Estados Unidos, que se habían concentrado en la Secretaría de Programación, en torno a Miguel de la Madrid. A Carlos Salinas de Gortari le tocó coordinar la elaboración del Plan Global de Desarrollo. El duelo entre “nacionalistas” y “neoliberales” que significaba, en los hechos, una *disputa por la nación*, estaba en su apogeo.

La propuesta de una nueva sociedad que hacía el sindicalismo oficial parecía coincidir con la del Plan Nacional de Desarrollo Industrial que se haría público unos meses después.

Una recomendación: repartir la tierra

En el campo, aseguraba Arturo Warman en 1979, los problemas desbordaban la capacidad de resolver demandas de un aparato cada vez más rígido:

La situación de los campesinos, uno de cada dos mexicanos, no puede prolongarse ni profundizarse sin grandes riesgos para toda la sociedad.¹⁷

A pesar de estadísticas discutibles, en 1979 más campesinos dependían del agro para subsistir. El sector moderno no había podido absorberlos. No poseían tierras adecuadas ni suficientes; cuando alquilaban su fuerza de trabajo no llegaban al salario mínimo y no recibían ninguna prestación; cuando emprendían alguna otra actividad productiva tropezaban con la competencia de una industria protegida y subsidiada y tenían que vender sus artesanías a intermediarios que las compraban a precios irrisorios. Como las buenas tierras las cultivaban las empresas, por arrendamiento o bajo el disfraz del crédito, los campesinos sólo contaban, en los hechos, con el 30% de la superficie cultivable, casi toda de temporal.

Las centrales actuaban como intermediarias y muchos líderes potenciales eran cooptados. Como no se sentían auténticamente representados y pensaban que cada vez tenían *menos que perder*, brotaban movimientos de inconformidad. Y también la represión, que *siempre ha sido un factor activo en el campo mexicano*, ejercida como amenaza primero para pasar al encarcelamiento y, en casos extremos, a la muerte:

[...] a diferencia de la que afecta a otros grupos de la sociedad, la represión no es excepcional en el campo. Es una constante rodeada por un muro de silencio y de indiferencia, de encubrimiento bajo un término ambiguo y degradante: delito común[...].

Como punto de partida para el diseño de una nueva política agraria Warman recomendaba:

El reparto de la tierra, en términos adecuados a las necesidades de la población[...], único mecanismo viable para proporcionar ocupación básica a los campesinos[...].

Tras aconsejar la revisión de las políticas de inversión, precios, créditos y desarrollo tecnológico “en función de las necesidades campesinas” y de advertir que “las políticas agrarias y de apoyo no pueden ni deben ser diseñadas desde arriba”, concluía:

El Estado, que ha dialogado consigo mismo a través de las centrales burocráticas[...], desconoce los problemas del campo[...]. No tiene ni información ni recursos que le permitan reorientar su acción. Sólo los campesinos libremente organizados y unidos pueden realizar esa tarea.¹⁸

Pero el reparto de tierras no entraba en los planes: sólo unos 250 mil campesinos se beneficiaron, a lo largo de seis años, con 6 millones 836 mil hectáreas.

Eran demasiadas las advertencias de la enorme desigualdad que el Frankenstein del Progreso había creado. En 1978 se emprendió una investigación “para conocer la distribución geográfica de la marginación”. Se estratificó a los municipios de

acuerdo con la satisfacción de mínimos de bienestar en alimentación, educación, salud y vivienda. La marginación se calificó como muy alta; alta; media; media baja y baja; se pasó luego a determinarla por estados, por regiones y por zonas; en las grandes ciudades se cubriría la tercera etapa del estudio. La geografía de la marginación no fue muy actualizada, sin embargo, porque las estadísticas municipales disponibles eran de 1970.

Tras el prolijo análisis se creó, en 1977, la Coordinadora General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) que funcionó, a partir de 1979, dentro del marco de un Pacto Intersectorial para llevar bienestar al campo, con 34 programas integrados de desarrollo para atender a 4 millones de habitantes en 5 mil comunidades de 387 municipios.¹⁹

La investigación de Coplamar señaló que la extrema pobreza de los marginados se debía a *un largo proceso histórico en el cual esta población ha sido despojada de las mejores tierras*. Ya el documento inicial abundaba:

[...]la población indígena[...] ha padecido un proceso de expulsión de las tierras en que vivieron sus antepasados y se ha remontado a lo que se ha llegado a llamar regiones de refugio, hasta donde también llegan, causando cada vez mayor impacto, las llamadas fronteras de la civilización [...]. Existe también un número importante de mexicanos de las zonas desérticas y de nuestras montañas que padecen incomunicación y escasez de recursos vitales, como el agua, que les impide alcanzar, sin el apoyo decidido de la sociedad nacional, niveles de productividad que les permitan mejorar sus mínimos de existencia y bienestar[...].²⁰

Los seis volúmenes publicados por Coplamar en 1979 sobre *Mínimos de bienestar* aspiraban a sentar las pautas para satisfacer necesidades básicas hasta el año 2000. Una parte de la administración de la abundancia se dedicó a ese fin sólo que, una vez más, la abultada burocracia absorbió demasiados recursos. La busca de la autosuficiencia con el Sistema Alimentario Mexicano entraba en el esquema y quizá fue por ahí que el régimen logró hacer, por momentos, más contacto con la realidad.

La danza de los millones

Un torbellino de crecimiento se había apoderado del país desde 1977. Se desató la euforia en los sectores modernos, montada en los precios altísimos del petróleo y en una infraestructura cada vez más aparatosa. Para el crecimiento de la industria petrolera —y de la manufacturera que alcanzó a salpicarse con la bonanza— se hicieron en menos de cuatro años importaciones, sobre todo de maquinaria, por 60 mil millones de dólares, cuando los ingresos por la venta de petróleo no pasaron de 14 600.²¹

Tan dispendiosa liberación de importaciones disparó la deuda externa. No sólo fue imposible hacer del petróleo la palanca del desarrollo sino que se desequilibró con desmesura la balanza de pagos. Costaba mucho exportar 1.3 millones de barriles diarios. ¿Para qué pensar en minucias si las reservas recién descubiertas cuadruplicaban las calculadas y si alcanzaban para 60 años holgados de extracción? ¿Por qué no dar el salto maestro —o mortal— que, además de multiplicar la riqueza de unos cuantos, habría de sacar al país entero de la miseria?

El empleo repuntó, sobre todo en la industria de la construcción, que absorbió a contingentes ya desplazados del campo y a muchos recién llegados. Las clases medias aumentaban artificialmente su poder adquisitivo y nutrían la única exportación que aspiraba a competir con el petróleo: la de viajeros nacionales que fluían, alegremente, hacia el extranjero. Nadie pensaba que el oro negro era un piso harto resbaloso para sustentar la fantasía de un acceso prodigioso al disfrute del Primer Mundo.

Confundir el espejismo con una realidad sólida y perdurable permitió entregarse a la fiesta de las inversiones pomposas y de los proyectos grandiosos. Hasta parecía de mal gusto “aguar” el festín con la insinuación de que la verdadera riqueza del país había que buscarla en otra parte o de que no por mucho invertir en la cría de elefantes blancos (o de un enorme elefante negro) le amanecería más temprano a la penuria de las mayorías.

Las trampas del progreso improductivo

No faltó quien lo hiciera, a pesar de todo: coincidieron, en el año de 1979, *El progreso improductivo* de Gabriel Zaid y *La riqueza de la pobreza* de Enrique González Pedrero.

La propuesta de Zaid se vinculaba estrechamente con la formulada por E. F. Schumacher, en 1973, para la gran mayoría de los pobres del mundo. En los países que han incrustado la modernidad sobre una cultura tradicional, las grandes ciudades, islotes de crecimiento, son los enclaves donde se despliega la organización, el dinero y el poder. La concentración de enormes recursos permite lujo y aun despilfarro. Zaid va a demostrar que un peso en manos de un campesino pobre produce más que un peso en una empresa gigantesca o en la pirámide burocrática del Estado. La oferta de progreso costoso no es generalizable. Ofrecerlo es una falacia: es vender ilusiones, en el peor sentido de la palabra. La única oferta viable sería propiciar, con realismo, la productividad de todos y volver accesible un bienestar a bajo costo.

Apoyar la economía de subsistencia mejoraría realmente la vida de los pobres. El progreso ha prometido un cielo ilusorio: generalizar satisfactores modernos que han disfrutado, en las ciudades, estratos elevados de clases medias y altas. Renunciar a “la ciega voluntad de progreso” sería el más auténtico progreso. La economía de subsistencia sería la opción inmediata para los millones de mexicanos que habían vivido, y seguirían viviendo, de no adoptarse esa alternativa realista, al mar-

gen del acceso a los satisfactores básicos. Habría que empezar muy abajo, acercando a la gente medios para lograr la autosuficiencia y la satisfacción de necesidades elementales. Todo lo contrario, pues, de otra varita mágica:

Para una sociedad en transición, esto pudiera convertirse en una oportunidad de vivir pobremente en el campo, sin necesidad de emigrar, pero contando con satisfactores básicos, y otros que son un lujo en las grandes ciudades: aire, espacio, tiempo.²²

Zaid sugirió que en el mercado interno hacía falta *una oferta pertinente para un mercado pobre*. La meta sería no tanto “aumentar empleos” como *aumentar la satisfacción de necesidades, empezando por las necesidades básicas*, por algo tan simple como un pequeño huerto familiar o una máquina de coser. Habría que entender que, si es posible satisfacer necesidades básicas *dentro del mercado*, también es posible satisfacerlas *fuera del mercado*.

Ni las ciudades son capaces de absorber a toda la población rural ni sería posible extender a todos los rincones del campo los carísimos servicios urbanos que ni siquiera alcanzan, dentro de las ciudades, para la enorme masa de marginados. No se trata de que el campo adopte una vida urbana que supone costos monstruosos, sino de acercarle a la gente medios de producción adaptados a su forma de vida.

El razonamiento de Gabriel Zaid, como el de Schumacher, partía de la crítica cristiana al extravío del mundo moderno, cuyo afán devorador ha negado el amor al prójimo y se ha entregado a un apetito insaciable. La incorporación de los pobres de los países ricos a los beneficios del progreso se fue haciendo, en buena medida, a costa de los pobres de los países pobres. Los países pobres no tienen tal opción y, aun en los países ricos, reaparece el fantasma de la pobreza. Los usufructuarios de los privilegios del Progreso han difundido un mito. Ese mito engendra una demanda infinita, acumulando promesas infinitas de posibilidades que en los hechos son irrealizables. El disfrute de tales privilegios por unos cuantos ha dependido, en alguna medida, de que los excluidos sigan creyendo que algún día tendrán acceso a disfrutes semejantes. Esperando incorporarse al navío prodigioso del Progreso siguen ofreciendo su apoyo a quienes les venden el espejismo de su paraíso.

En las culturas tradicionales, la comunidad aprendió a aprovechar al máximo sus recursos. El criterio excluyente del Progreso ignora esa reserva de saberes seculares y, a la vez, carece de imaginación para desplegar *una oferta pertinente para las necesidades de los pobres*. Lejos de vender ilusiones que sólo sirven para aumentar la desigualdad, engordando elefantes en lo alto de la pirámide, habría que *condicionar el progreso a que haya un mínimo creciente garantizado para todos*.

Quizá lo más controvertible y original sea la afirmación de que más importante que “crear empleos” —algo que, por otra parte, nunca podrá hacerse en el sector moderno en la dimensión suficiente para absorber toda la demanda— sería “cambiar la oferta”:

¿Dónde están las semillas y los animales de tracción mejorados genéticamente para siembras de temporal; la investigación agrícola orientada a la producción doméstica de alimentos para el consumo propio; la reinversión del trabajo a domicilio para darles a los campesinos capacidad de “exportación” maquilera; la oferta que nos autorice a decir que no existe su demanda?²³

Lo importante es, en suma, que la gente tenga qué comer, ropa para vestirse y los demás satisfactores básicos: no basta con inventar empleos en el sector moderno, que siempre serán insuficientes. Unos cuantos ganarán más dinero en efectivo y consumirán más de lo que no necesitan, porque la oferta se nutre en la demanda de las clases medias y altas. Pero los demás seguirán en la penuria. La industria manufacturera tendría que proporcionar al campo, en cambio, medios de producción baratos. Y en el campo, a su vez, podrían maquilarse ciertos productos modernos de alta densidad económica sin salir del propio domicilio. Sobre todo, habría que recuperar la economía de subsistencia, que produce para las necesidades familiares, aunque casi no deje excedentes:

[...] la economía de subsistencia no tiene por qué ser la economía de los muertos de hambre, sino la economía que permite aumentar el consumo en todo aquello donde la autosuficiencia es más eficiente que el intercambio.

El mercado puede convenir más que la autosuficiencia, *pero puede convenir menos*:

[...]apoyar la marginación autosuficiente[...] puede ser un ideal [...] al menos durante el tiempo necesario para que el intercambio llegue a convenirles más que la autosuficiencia. Salirse de un mercado agrícola, en el cual no pueden competir, y usar la agricultura como un medio de enriquecer su consumo, a través de una mejor economía de subsistencia, puede convenirles más que integrarse fallidamente a la agricultura comercial o a las grandes ciudades.

Los mismos predios que no son, ni pueden ser, integrables como un negocio competitivo en el mercado que domina el sector moderno, pueden ser muy satisfactorios, marginados como “huertos familiares” donde se produzca el maíz, frijol, chile, gallinas, verduras, hierbas medicinales, miel, etc., que consuma la misma familia.²⁴

Lo que proponía Zaid era el reverso del “progreso improductivo”: tecnología para producir eficientemente, en pequeña escala, lo necesario para alimentarse, vestirse y construir la propia vivienda; tecnología para allegarse satisfactores básicos a bajo costo (como el agua potable); semillas y especies mejoradas para la producción doméstica; métodos para facilitar la conservación de alimentos; utensilios de trabajo baratos para todas las actividades agropecuarias, la pesca, la apicultura,

etc.; aprovechamiento de los medios de comunicación modernos —sobre todo la radio, pero también la televisión, para difundir un cúmulo de información útil en cada uno de esos aspectos. La oferta faraónica del Progreso promete Cadillacs, o sea grandes proyectos *movidos por burocracias empresariales, sindicales y gubernamentales*, donde hacen falta bicicletas:

Favorecer la oferta de progreso en bicicleta, un desarrollo a la rústica y por su cuenta de la población más pobre, que le abriría mercados (de bienes de capital) al sector moderno y oportunidades de aumentar su productividad a los empresarios rústicos, no sólo es posible: puede ser una gran oportunidad económica para todo el país.²⁵

Un doble modelo, garantía de sobrevivencia

Si Schumacher estaba en el centro de la argumentación de Zaid, González Pedrero fundó su propuesta de un *modelo mexicano de desarrollo* en el ejemplo de Vasco de Quiroga, por su reafirmación de las virtudes y potencialidades de la comunidad indígena, y en la vocación de autonomía municipal de herencia hispánica. En la historia nacional están las raíces de opciones múltiples, congruentes con la pluralidad del país:

No se trata de proponer soluciones espectaculares sino modestas y sólidas. Si no podemos ser ni como los Estados Unidos ni como la URSS, seamos como México. El “Progreso”, a la manera de la Sociedad Industrial, nos queda ancho y, a la vez, nos maniatada como una camisa de fuerza.²⁶

Había que hacer la crítica de la sociedad industrial contemporánea en sus dos manifestaciones: la occidental capitalista y el “socialismo” totalitario que, partiendo de la dialéctica hegeliana, buscaron el tránsito lineal hacia la realización del Espíritu Absoluto en la historia moderna, que la cultura occidental aprecia como su gran hazaña. La argumentación de González Pedrero pasaba de la lógica filosófica a la histórica y a la situación mexicana para rebatir el culto religioso a la idea de Progreso. Los parámetros de la modernidad no podían ser la Meca hacia la que debían mirar, dando la espalda a los propios orígenes, pueblos con otra historia y otras tradiciones.

En *La riqueza de la pobreza* se sostuvo que las pautas de la sociedad industrial eran indeseables pero, además, inalcanzables para México. Sólo quedaba, sin embargo, la opción de *manejar dos modelos*. Se había avanzado demasiado en el modelo modernizador como para poder desandar lo andado. El mito del Progreso encarnó en México, desde los albores de su historia independiente, en el espejismo de alcanzar e imitar la abundancia y la libertad de los Estados Unidos. Se negaron los

dos pasados, el indígena y el hispánico, para asumir formalmente, desde la Constitución de 1824, la imitación del modelo norteamericano. Con las fórmulas del pensamiento ilustrado y liberal se pretendió exorcizar la incómoda persistencia de un doble legado que le impedía al país acceder en poco tiempo, como ilusamente se suponía, a la condición de los países prósperos y libres del mundo moderno. Si ahora resultaba ilusorio querer dar marcha atrás, no lo sería racionalizar nuestro desarrollo aprovechando de la modernidad sólo lo adaptable a nuestra fisonomía, *que tiene que ser, con realismo, la de un país pobre pero con sentido común*:

Se trata de rechazar una inercia repetitiva que nos configura a imagen y semejanza de un modelo postizo para empezar a parecernos a nosotros mismos. Estamos en una encrucijada y es necesario un alto en el camino para contemplar las opciones y escoger. Ninguna alternativa es fácil. Sólo que no es lo mismo caminar confiadamente por una senda con obstáculos que, en definitiva, conduce a sitio seguro que andar por una carretera sembrada de minas.²⁷

Muy recomendable parecía una relectura de Tannenbaum, cuya clarividencia ya señalaba, en 1950, la celada que le tendía a la nación el desarrollismo desatado. Tannenbaum había sido partidario de una industrialización razonable, adecuada a las necesidades reales de una muy numerosa población campesina, dispersa en miles de pequeñas comunidades y cuya vocación esencial era el cultivo de la tierra. Y, sobre todo:

[...] centrar el desarrollo en las pequeñas comunidades, dotándolas de todo el acervo científico y tecnológico capaz de hacerlas autosuficientes. El acento se pondría en el impulso de la producción agrícola. Se fomentaría, además, la piscicultura en pequeñas obras hidráulicas locales, que facilitarían el riego y contribuirían a la alimentación de las diversas regiones. La inversión y los gastos de administración no serían excesivos. Tannenbaum recomendaba, por otra parte, lo que ahora llamamos tecnologías intermedias. En cada comunidad se fomentaría las artesanías locales y se instruiría a los habitantes en todas aquellas técnicas que pudieran mejorar la cría de animales, el rendimiento del agro y las demás actividades productivas que la comunidad pudiera desarrollar de acuerdo con los recursos propios de la región.²⁸

No se trataba, pues, de inventar nada ni de improvisar, como diría Zaid, “soluciones kafkianas” sino, al contrario, de escuchar la vocación inveterada de las pequeñas comunidades que, desde su inserción forzosa en la modernidad, cifraron su modesta ambición en ser autosuficientes y en parecerse a sí mismas. No sería demasiado tarde para recoger la sabia propuesta del autor de *México, la lucha por la paz y por el pan: México necesita realmente una filosofía de las cosas pequeñas*.

En una experiencia llena de imaginación organizadora, la que realizó en el Michoacán del siglo XVI un religioso capaz de hacer viable la utopía, quedó la demostración histórica de lo que habría podido hacerse con aquel modelo. Los intereses no propiciaron la difusión de la experiencia de Vasco de Quiroga. Los *pueblos hospitales* no encontraron eco en el espacio ni en el tiempo. El espíritu de aquel ejemplar experimento tendría que alentar, por fin, opciones contemporáneas alternativas. Hidalgo y Morelos lo respiraron en el Colegio de San Nicolás y Tata Vasco ha seguido viviendo en la memoria de los michoacanos y en las artesanías que producen e intercambian los mercados populares:

En esa fuente, que sigue brotando, bebió sin duda Cárdenas y enriqueció su propio sentido concreto de la importancia de organizar eficazmente las cosas más pequeñas para que puedan funcionar las más grandes.²⁹

La calidad *hospitalaria* de aquellos pueblos se fundaba en el usufructo solidario de la tierra y demás bienes comunales. Se producía lo necesario para toda la gente: se sembraba, se criaba ganado, se hilaba y tejía la lana, se fabricaban los materiales de construcción. Intercambiaban entre sí lo que era del oficio especializado de cada comunidad: el barro, la laca o el cobre y esa práctica resistió el paso de los siglos y los embates de la modernidad. Pero, además:

El gobierno de los hospitales se funda, más que en los Concejos de los utópicos, en el régimen de los ayuntamientos españoles, es decir, en la auténtica tradición más arraigadamente democrática y libertaria de España.³⁰

La tradición de autonomía municipal se trasplantó a México. La aspiración de cada pueblo a regir con autonomía su pequeño destino, cumplida en aquel notable experimento de Vasco de Quiroga, seguía vigente y rescatable:

Cuatro siglos después, el mensaje de aquellas comunidades autosuficientes, capaces de cubrir sus necesidades con el propio trabajo productivo, dentro de un régimen de libertad, seguridad económica y pleno empleo, tiene todavía mucho que decirnos. [...] “Con dificultad se podrá hallar otra cosa más pía[...] ni más necesaria[...]”, dejó dicho en su *testamento* don Vasco de Quiroga. Y habría que retomar ese mensaje si nos proponemos, en serio, aprovechar lo poco que tenemos —la riqueza de nuestra pobreza— para construir un país racional donde todos podamos trabajar, comer y vivir decorosamente.³¹

Encontrarle una respuesta política a la necesidad de alternativas para el desarrollo exigía dirigir la mirada hacia lo realmente realizable. Proponer *un doble*

modelo significaría no ignorar al país moderno sino *empezar a tomar en cuenta* al país tradicional. Significaría no perder de vista la creciente interdependencia de un mundo donde todo tiende a internacionalizarse pero, a la vez, mirar hacia dentro: poner en un platillo de la balanza al país olvidado, al que sólo le han llegado de rebote, más para padecerlos que para incorporarlos con provecho, los “beneficios” de todas las modernizaciones. La precaria sobrevivencia del México marginado ya no podía seguir esperando.

En aquellos apuntes para un modelo alternativo estaban los presupuestos que habrían de orientar un programa estatal de gobierno, en Tabasco, en 1983. La experiencia práctica permitiría matizar y aun modificar algunas de aquellas propuestas de 1979, pero ese afinamiento no alteraría la propuesta nuclear: *Un modelo fundado en la organización de la pequeña comunidad es una garantía de sobrevivencia.*

Precisamente cuando la propensión por lo desmesurado embarcaba a todos en la peligrosa travesía del petróleo y de la deuda, se advirtió en el prólogo de *La riqueza de la pobreza*:

Mientras los viajeros se divierten, alegres y despreocupados en el baile de gala, el barco navega, en la oscuridad, hacia el iceberg fatal.³²

Alegre vértigo de finanzas frágiles

Tres años después, el barco tropezaría con el iceberg. En la euforia, el vértigo de la expansión se había enseñoreado en los niveles decisorios, en las cimas políticas y empresariales. Las fantasías de grandeza alimentadas en esas cimas “goteaban” hacia los estratos medios, contentos de festinar una inflada capacidad de consumo que los acercaría a las apetecibles pautas norteamericanas. Y permeaban hacia los estratos bajos, que alcanzaron una ligera llovizna, debida al auge de la construcción que acompañó a los grandes proyectos. La ilusión de un barril de petróleo, sin fondo, que duraría por los siglos de los siglos fue contagiosa. Un sentimiento de omnipotencia y de confusión del patrimonio nacional con un patrimonio propio sustentó la actitud de “apostador” que asumió un presidente de la República que habló todo el tiempo de “jugársela”, hasta que se le acabó la buena racha y se quedó “sin fichas”.³³ Pero no sólo el presidente “apostó”. “Apostaron” también los empresarios, alegres de danzar en la ronda del dinero blando.

Por un momento pareció realizarse el viejo sueño del cuerno de la abundancia. El “hasta aquí” de la realidad sobrevendría en 1982. Terminaron los años setenta y empezaron los ochenta en el tobogán de los millones.

Sólo que eran millones a crédito y el crédito barato, a la larga, puede salir muy caro. Uno de los más lúcidos balances de aquella apoteosis del sobregiro de la

bonanza petrolera se debió a Gabriel Zaid. Retomando argumentos de *El progreso improductivo* insistió en 1982:

Un peso de inversión en manos campesinas produce más que un peso en manos del Grupo Alfa o de Petróleos Mexicanos[...].³⁴

¿Por qué? Porque la enorme concentración de inversiones en el sector moderno propicia el desperdicio. Cuando se nada en la abundancia se pueden correr todos los riesgos. Mientras que el sector tradicional cuida lo poquísimo que tiene, el sector moderno despilfarra: la cultura del Progreso es la cultura de la abundancia —de recursos despilfarrables. El principio de eficiencia aconsejaría desconcentrarlo todo, no sólo la administración pública sino también la producción: mover el capital, no hacia los grandes proyectos de inversión sino hacia *los miniproyectos de los municipios más pobres, a las microempresas de los autoempleados*. El sector moderno ofrece medios de consumo costosos, no medios de producción baratos:

Para aumentar la productividad nacional al menor costo de inversión posible (y éste es el criterio importante, repito: al menor costo de inversión posible), no hay mejor alternativa que las bicicletas de carga, molinos de nixtamal, máquinas de coser y tejer, apiarios, semillas y aperos para la producción doméstica de hortalizas y de pollos, artes de pesca, equipos para hacer adobes y tabicones, juegos de herramientas mecánicas, de carpintería, plomería, equipo para hacer conservas, quesos, dulces, jarabes, licores, equipo para artesanías, equipo desmontable o sobre ruedas para pequeño comercio, pequeñas obras de irrigación y acuacultura, ferias de comercio regional, préstamos duros pero seguros, rápidos y sin trámites, bibliotecas municipales con manuales prácticos, directorios de proveedores de medios de producción baratos[...].³⁵

No valdría apuntar que la sugerencia llegó tarde: Zaid abundaba en algo que había demostrado ampliamente tres años antes. La cultura del Progreso no concebía la dimensión de lo pequeño y su lógica tendía al gigantismo y a manejar sólo las proporciones “de escala”. Subsidiar un crecimiento incosteable podía ser, sin embargo, catastrófico. En un artículo titulado “Un presidente apostador”, Zaid describió las *frágiles finanzas* que montaron *la administración de la abundancia*:

Lo que más llama la atención del balance de Petróleos Mexicanos es que opera sin recursos propios. Al cerrar 1981, el 82 por ciento de su patrimonio estaba formado por revaluación de activos. Ignorando la revaluación, debía el 87 por ciento de lo que tenía. Como en el caso de Alfa, y más exageradamente, la expansión de Pemex no se hizo con utilidades reinvertidas sino con crédito. En 1981, las utilidades de 1980 le hubieran permitido aumentar 0.2 por ciento sus activos: crecieron cerca de 300 veces más [...].

Todo parecía disponible desde antes de tenerlo, cuando no se tenían más que instalaciones fiadas[...].³⁶

El crecimiento desproporcionado de Pemex, que supuestamente habría de movilizar el desarrollo del país, se hizo con deuda externa. En su cauda, el Grupo Alfa de Monterrey empezó a polarizar el poder empresarial abriéndose paso, con el apoyo del Estado, hacia nuevos campos de inversión y promoviendo, sobre todo, la euforia de la especulación bursátil. La Ley de Fomento Agropecuario de 1980 entraba dentro de esa lógica de expansión, creando bases jurídicas para fomentar la acción conjunta, en “Unidades de Producción”, de los ejidos y la iniciativa privada, aunque nunca se pasó de la etapa de los proyectos. El Grupo Alfa pretendió abarcar demasiado y, aunque logró encabezar al bloque industrial, entró en conflicto con el bloque financiero, lo que propició

[...] la aparición de acciones empresariales desarticuladas y trastornadas, como en efecto resultaron ser los recursos del rumor, la desconfianza y la fuga de capitales[...].³⁷

¿Crecer o no crecer?

Voceros empresariales hicieron explícitos sus puntos de vista. En octubre de 1979, Coparmex criticó el elevado nivel de gasto del sector público y aconsejó un manejo austero del presupuesto y la liberación de precios y salarios. Un año después, el Consejo Coordinador Empresarial habló de “una conspiración” para subvertir el orden constitucional, aludiendo a la acentuada propensión del Estado a la conducción hegemónica del crecimiento desde la plataforma petrolera. Aunque Coparmex consideraba que la sucesión presidencial no detendría las inversiones, aconsejó al Estado “dedicarse a crear obras de infraestructura en lugar de competir con el sector privado”. En la reunión Encuentro 80 se habló de un peligro de sobrecaletamiento de la economía y se aconsejó ponderar el presupuesto público para 1981 y reducir la tasa de crecimiento para disminuir las presiones inflacionarias.³⁸

Economistas inquietos y decididamente partidarios del papel rector del Estado auguraban en cambio, en 1981, “un crecimiento notable en los próximos años” siempre que no se le dejara al mercado la decisión sobre el uso de la reserva petrolera. No ponían en duda que la prosperidad habría de durar, por lo menos, un lustro más. Rolando Cordera y Carlos Tello se fundaron en un análisis del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para asegurar que el petróleo había sido [...] *elemento crucial para reactivar una economía que hace tres años estaba al parecer irremediablemente en crisis [...]*, aunque indicaron, a la vez, que resultaba *del todo insuficiente para asegurar un crecimiento mínimamente estable [...]*. Lo aconsejable sería

[...] proceder cuanto antes a desarrollar una política industrial de nuevo tipo, que ponga énfasis en el mercado interno para propiciar una reestructuración de la actividad productiva y que permita, a la vez que sustituir aceleradamente importaciones, construir una base efectiva de industrias exportadoras[...].³⁹

El optimismo de ambos analistas los estimulaba a afirmar que *el aliento reformador con que se inició la década alienta todavía en los corredores del poder*[...].

Si no subía la tasa de crecimiento no subirían los satisfactores sociales: no aumentaría el consumo ni la construcción de viviendas populares; no se ampliarían los servicios educativos ni los médicos; no aumentaría la producción agrícola y habría que seguir importando granos:

La necesidad y la posibilidad de un crecimiento acelerado, así como la de llevar a cabo cambios sustanciales en la estructura económica nacional, son postulados desde los más distintos lugares. [...] El Banco Mundial y otras entidades públicas en las que se realizan estudios de prospección coinciden en la factibilidad de alcanzar una tasa de desarrollo más rápida[...].⁴⁰

Cabría señalar hasta qué punto son frágiles los pronósticos de la ciencia económica y cómo los imponderables de la realidad los desbordan a cada rato. Muy pronto, la caída de los precios del petróleo, a mediados de 1981, volvería insustancial la discusión sobre crecer o no crecer. El país tropezó, súbitamente, con la crisis. Las tasas de interés subieron a un 21%, como nunca había ocurrido. Habría que pagar mucho más por la deuda y la entrada de divisas se reduciría brutalmente. La inercia siguió pesando durante dieciocho largos meses cargados de turbulencia:

[...] la economía mexicana siguió creciendo a tasas muy elevadas (7.9 por ciento), el Gasto Público aumentó 21 por ciento en términos reales y el déficit llegó a ser 11.3 por ciento del PIB. Es decir, que frente a una realidad externa claramente adversa la economía mexicana siguió de frente, a contrapelo de la corriente, acentuando los desequilibrios que un año más tarde se volverían insostenibles.⁴¹

Para pagar las altas tasas de interés se contrató más deuda que, solamente en ese año, aumentó en 18 300 millones de dólares.

Inoperante “altruismo”

En su primer Informe, el presidente de la República había hablado de una loable aspiración —imprecisa y vaga, por cierto— de dotar a toda la población de seguri-

dad social. Ya en 1974 se había adoptado un Plan Nacional de Salud que, dentro y fuera del gobierno, era calificado como demagógico aunque lleno de proposiciones loables. ¿Caería el nuevo régimen en la misma falta? Así lo anticipaban, en 1979, los redactores de *México, hoy* al considerar “improvisado y demagógico” el Programa de Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud al Medio Rural y Suburbano que se proponía alcanzar a cubrir, para 1982, hasta 15 millones de personas en el campo y 13 millones en las ciudades.

En 1970 había en el país dos veces más médicos que enfermeras, cuando hubieran hecho falta tres veces más enfermeras que médicos y muchísimos más auxiliares paramédicos. Había tantos hospitales como centros de salud, cuando se necesitaban por lo menos 20 veces más unidades de atención de primer nivel. En 1979, 95 mil de las 97 653 pequeñas comunidades contabilizadas carecían de servicios de salud.⁴² La investigación en salud pública era exigua: en 1973 apenas disponía del 4% del gasto destinado a investigar la salud. La población no atendida ni registrada como derechohabiente en ninguna institución de seguridad social pasaba, en 1979, del 65%. La atención de la salud fue evaluada así:

La red de contacto primario para cubrir las necesidades básicas de la población es muy limitada. El patrón de producción de servicios es más de orientación individual, hospitalaria y curativa que de orientación colectiva, comunitaria y preventiva. Existe una pésima planificación de los servicios de salud y de la asignación y distribución de los recursos desde el punto de vista de una política equitativa en materia de salud. La multiplicidad de instituciones provoca una gran duplicación de esfuerzos y dispendios y contradicciones, que a la vez originan y reproducen desigualdades en la prestación de los servicios. El funcionamiento de los servicios es altamente ineficiente y el número de personas beneficiadas revela un gran rezago en las políticas de salud.⁴³

No bastaban las “políticas altruistas”. Hacía falta regionalización de los servicios, abriéndolos a una relativa autonomía local. Hacía falta prevenir y promover el saneamiento del medio, difundiendo información en las zonas y sectores más marginados. Hacía falta, sobre todo, participación activa de la comunidad en el cuidado de la salud.

No hacen falta grandes inversiones para que la gente coma

El Instituto Nacional de Nutrición venía trabajando, desde hacía 16 años, en el diseño de un proyecto nacional de alimentación capaz de integrar, óptimamente, la producción al consumo. En esa fuente se sustentó el análisis que apareció en *Méxi-*

co, hoy. El vínculo entre desnutrición e infección por bacterias y gérmenes afectaba a 2.5 millones de niños, de un total de 3 millones que nacían cada año. Mientras México presumía de un ingreso *per cápita* parecido al de los países prósperos, la desnutrición lo acercaba más bien a la India o a Egipto. La alimentación básica de 18.4 millones de personas sólo incluía tortillas y frijoles, quelites, tomates, chile, calabazas y pulque. La “población golondrina”, de campesinos en migración constante para alquilar, aquí y allá, su fuerza de trabajo comía “alimentos chatarra”, muy bajos en valores nutritivos. Lo mismo pasaba con los habitantes de barrios marginados del DF y otras ciudades grandes como Monterrey, donde un 50% de niños moría antes de cumplir cinco años.⁴⁴

Sin embargo, para una dieta básica suficiente, con los contenidos mínimos de grasas, proteínas, vitaminas y minerales no se requeriría de mucho. Bastaría con añadir a la dieta mínima de tortillas y frijoles un guisado aportador de calorías, compuesto a base de algún pescado o de alguna carne, o de garbanzos cocinados con verduras y con un poco de grasa. Un modelo que procurara la autosuficiencia de cada familia en el campo podía lograrlo, sin necesidad de inversiones voluminosas.

Pero la autosuficiencia se había perdido. Los campesinos tenían que comprar alimentos a precios altos. En 1980, el ingreso monetario del 35% de familias no alcanzaba un salario mínimo, es decir, alrededor del equivalente de 100 dólares al mes. Los desnutridos sumaban 19 millones. Según cifras de Coplamar, en 1980 un 46% de mexicanos no satisfacía necesidades básicas de alimentación ni, por supuesto, de salud, educación y vivienda.

El 19% de la inversión pública se fue al campo. En medio de la profusión burocrática, era de esperarse que mucho se quedara en el camino. El Sistema Alimentario Mexicano se dirigió a aumentar la producción de granos básicos —maíz, frijol, arroz y trigo— en las áreas de temporal. Cuando se inició el SAM, 2.8 millones de hectáreas se dedicaban a producir granos para alimentar ganado, o sea, carne para los sectores de ingresos altos (40% de la población sólo consumía el 10%).⁴⁵ El SAM fue un programa para promover la autosuficiencia en alimentos básicos que inyectó créditos, subsidios a semillas y fertilizantes y extendió beneficios de la pequeña irrigación. Por razones climáticas y también por el apoyo recibido, la producción de maíz tuvo un alza notable —que ya había comenzado en 1979 y duró hasta 1981, pero la tendencia se revirtió en 1982, cuando volvieron a escasear lluvias y créditos.

¿Aulas y centros de salud o atención real?

Los recursos canalizados a través de Coplamar, durante la euforia de la abundancia, se midieron después en 3 200 sistemas de agua potable, 18 mil kilómetros de caminos rurales, mil aulas y 92 703 acciones de mejoramiento de vivienda en 192 comu-

nidades, para beneficio de 538 mil habitantes. Se calcularon también 130 mil empleos permanentes.⁴⁶

El Programa de Extensión de Cobertura de Salud al Medio Rural pretendía dotar con auxiliares de salud comunitaria, en menos de cinco años, a más de 13 mil localidades. Mujeres con alguna escolaridad primaria recibirían dos meses de capacitación y un sueldo de 500 pesos mensuales. En *México, hoy* se anticipaba “uno más de los programas declarativos cuya eficacia real distaba mucho de sus propósitos escritos”.

Un convenio entre el IMSS y Coplamar sirvió, es verdad, para proporcionar atención en muchas comunidades remotas y se completó, según estadísticas, la construcción de 2 mil unidades médicas y 32 hospitales rurales. También, según estadísticas, la capacidad instalada habría servido, ya en 1983, para atender a 18 millones de personas.⁴⁷ Tales cifras deben tomarse con reservas porque no basta con construir instalaciones. Dadas las dificultades que supone el apoyo a la salud comunitaria (obstáculos para sostener atención permanente y para capacitar al personal auxiliar), es muy improbable que tan halagüeñas estadísticas se hubieran reflejado en atención real.

La disputa por la nación

Antes de la caída del precio del petróleo, cuando todavía campeaba el optimismo, se editó un libro que exponía las opciones que polarizaban *La disputa por la nación*. Rolando Cordera y Carlos Tello sintetizaron los argumentos que compartía la opinión empresarial con un importante grupo de funcionarios, ubicados en la Secretaría de Programación. Esos argumentos configuraban el *proyecto neoliberal*. El *proyecto nacionalista*, fundado en la vigencia del pacto social emanado de la Revolución Mexicana, era compartido por los autores con numerosos economistas del sector público y funcionarios ubicados en la Secretaría de Patrimonio Nacional.

El modelo neoliberal, que había sido ampliamente formulado por Milton y Rose Friedman en *Free to Choose: A Personal Statement*, partía de una crítica a las propuestas keynesianas, implantadas después de la Segunda Guerra Mundial, de un Estado impulsor del bienestar y copartícipe en el desarrollo. Proponía, en cambio, adelgazar al Estado; reducir al mínimo su papel y propiciar el crecimiento libre y fluido de la productividad generada en las grandes empresas transnacionales.

En el caso concreto de México, reclamaba una creciente integración a la economía norteamericana. México podía aspirar a vender más en los Estados Unidos. Recibiría, a la vez, copiosas inversiones y, junto con la tecnología y el *know how*, toda la maquinaria indispensable. Hasta muchos alimentos básicos circularían de allá para acá a precios competitivos. La mano de obra que el país no

alcanzara a absorber, a pesar de la inyección de inversiones y de la “nueva productividad”, sería bien recibida del otro lado. Todo ello supondría “acuerdos de integración industrial complementarios”, para asegurar la maquila en ciertos renglones; se abriría el mercado a la importación de los Estados Unidos y se le proporcionarían todas las materias primas requeridas por su fuerte economía. Siguiendo la lógica del *trickle down effect*, la abundancia gotearía a través de una frontera cada vez más abierta. Todo ello sería coherente con la lógica globalizadora que iría diluyendo, junto con las fronteras económicas, las fronteras culturales y los criterios nacionalistas anticuados y cada día más obsoletos. México sería una especie de escaparate del modelo neoliberal para América Latina. Y ganaría, no sólo en lo económico, sino en un tránsito más fluido hacia la democracia.

El modelo exigiría reducir la inflación y hacia esa meta habría de girar toda la política económica. De hecho, suponía el paso de una economía *política* a una economía *strictu sensu*, regida exclusivamente por las leyes del mercado. Se reducirían la demanda y los costos recortando, sobre todo, el gasto público “improductivo”, entendido no sólo como el destinado a sostener un inflado aparato estatal sino, también, el destinado al bienestar social. El Estado se limitaría a “establecer las condiciones más generales que hagan posible la expansión de la economía”. Lo más conveniente sería privatizar las empresas públicas, y no sólo las deficitarias. Tendría que prevalecer una política monetaria sobre una política fiscal. Y obviamente, para contener la inflación, habría que evitar el alza de salarios:

Con la reducción salarial puede alcanzarse un equilibrio entre la oferta y la demanda, pero también propiciarse un mayor desempleo, lo cual redundará en una disminución del ingreso real del conjunto de la fuerza de trabajo. Se trata, sin embargo, desde la óptica neoliberal, de una especie de desajuste temporal que luego, al incrementarse suficientemente las ganancias y reestructurarse de manera adecuada la fuerza de trabajo, dará lugar a nuevas inversiones, más producción y más empleo.

Cordera y Tello advirtieron que la aplicación de tal modelo no había conducido en la práctica, donde había sido aplicado, al éxito de las metas teóricas:

Ni la inflación ha cedido ni los aumentos en las ganancias producidos por el desempleo y la contención salarial han traído consigo una reactivación sostenida de la economía.⁴⁸

Si se había favorecido, en cambio, el crecimiento de grandes empresas monopólicas, con tendencia a absorber a las empresas medianas y pequeñas, cada vez más marginales y menos competitivas. Las medidas monetarias contraccionistas habían ac-

tuado en los Estados Unidos y en Gran Bretaña acentuando el proceso inflacionario, aumentando el desempleo y beneficiando sólo a los estratos concentradores de riqueza. Las condiciones de Latinoamérica acentuarían las dramáticas consecuencias de la austeridad presupuestal y salarial a ultranza:

[...] ha añadido al desempleo y a la pérdida de poder adquisitivo del salario la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas y una mayor presencia del capital extranjero. Esto, junto a la continuación del alza de precios, en esencia ha producido una superconcentración del poder económico que, sin embargo, no ha dado lugar a una acumulación privada que por su dirección y contenido pudiera considerarse prometedora de mejores tiempos. Más bien lo que ha ocurrido es una creciente desviación del excedente hacia la especulación financiera o de bienes raíces y hacia la importación masiva —aunque sobre todo dirigida a estratos sociales minoritarios— de bienes de consumo, incluso alimentos, textiles y otros de consumo inmediato.⁴⁹

La exposición abundaba en un minucioso examen de las supuestas bondades teóricas y los nefastos efectos concretos, para el bienestar de las mayorías, del modelo neoliberal. Y concluía augurando consecuencias específicas de su eventual aplicación en áreas clave de la vida nacional.

En la agricultura, por ejemplo, la división “racionalizada” del trabajo, aconsejada para una creciente integración económica con los Estados Unidos, significaría que ese país se dispondría a surtir a México con sus excedentes de granos básicos mientras que México le aportaría frutas, legumbres y hortalizas. La lógica de la economía campesina, tercamente vinculada al maíz como cultivo esencial de subsistencia, tendería a ser desplazada por una lógica del rendimiento por hectárea cultivada. A la producción de alimentos básicos para el consumo generalizado se preferiría la producción de más forrajes para la ganadería y de ciertos productos agrícolas para la exportación, destinados al consumo exterior o a las necesidades industriales. La propiedad privada sobre la tierra acabaría por prevalecer definitivamente sobre la propiedad social.

En una coyuntura internacional todavía previa al desplome de los precios del petróleo, parecía coherente suponer que la importancia estratégica del combustible mexicano crecería durante la década, propiciando una tendencia a acelerar el ritmo de exportación y a volver “cada vez más estrecha y compleja la trama de las relaciones entre México y los Estados Unidos”. Se avizoraba un peligro: la magnitud de la riqueza petrolera podía inclinar a posponer reformas que hasta el momento parecían indispensables, como lograr la autosuficiencia alimentaria, rehabilitando la economía campesina, o buscar la creciente manufactura de bienes de capital: crecer, aunque dentro de una mayor dependencia, gracias al petróleo, podía parecer el camino más fácil.

La aplicación del modelo significaría, para el proceso de industrialización, renunciar a producir más maquinaria para cumplir sólo funciones complementarias de la industria estadounidense, en actividades de ensamble y/o maquila. Jugarían un papel decisivo, para propiciar esa “industrialización complementaria”, las ventajas económicas que les reportaría a las empresas matrices el aprovechamiento de una mano de obra muy abundante y, a la vez, muy barata.

Las repercusiones del criterio de “uso intensivo de la mano de obra” serían múltiples para los trabajadores mexicanos. Se cancelarían aumentos salariales que pudieran disminuir la ventaja comparativa de producir en México, con salarios bajos, para ciertas empresas norteamericanas; y se limitarían cuotas empresariales al Seguro Social y al Infonavit, reparto de utilidades y otras prestaciones. Prevalecería la sindicalización por empresa sobre la sindicalización por rama de actividad. Desaparecería de paso la fuerza corporativa de los sindicatos y, por lo menos en teoría, se compensaría el estancamiento de salarios con el acceso a empleos de un número mayor de sujetos por cada unidad familiar.

El proyecto neoliberal no podía desconocer el potencial explosivo latente en la miseria del campo. Era previsible que tratara de evitar, por eso, cualquier intento de organización campesina instrumentando, por ejemplo,

[...] programas, incluso masivos, para atacar de manera directa la pobreza absoluta de la población rural [...]. Estos programas contra la pobreza correrían paralelos, desde luego, con las posibilidades de ocupación que ofrecerían los convenios de complementariedad industrial y, en general, con el proceso de integración de las dos economías. Así, la fuerza de trabajo que no pudiera ser absorbida en el país se encauzaría hacia Estados Unidos dentro de un programa controlado de migración que además tendría que ser prolongado. Bolsones de pobreza controlada —aliviados dosificadamente por la migración interna y hacia Estados Unidos— parecería ser la perspectiva dominante para el mundo campesino de México en el proyecto neoliberal. Su papel productivo y su participación en el mercado serían algo esencialmente secundario.⁵⁰

A principios de los años ochenta, cuando se redactó *La disputa por la nación*, se calculaba que la economía norteamericana, con un crecimiento del 3%, se enfrentaría a un serio problema de escasez de mano de obra, sobre todo no calificada y semicalificada, en las dos décadas siguientes. Ni siquiera estarían disponibles las minorías negra y puertorriqueña. Sería bienvenida, en consecuencia, la importación de mano de obra mexicana. No se contemplaba, en cambio, que en el lapso de una década, la economía norteamericana se estaría enfrentando a una grave crisis, justamente por la aplicación de una política doméstica orientada por los parámetros neoliberales. Ni que la parálisis del crecimiento se traduciría en un sensible desempleo, que volvería indeseable para los sindicatos norteamericanos la

perspectiva de exportar inversiones, escamoteando la creación de empleos nuevos dentro del propio territorio y provocando la pérdida de empleos existentes.

Los autores de *La disputa por la nación* no compartían el proyecto neoliberal a pesar de su “racionalidad” aparente, y consideraban válidas, en cambio, múltiples razones para sustentar otro proyecto, al que calificaron como esencialmente “nacionalista”. Su propuesta se dirigía a rescatar la vertiente de la revolución preterida por el crecimiento excluyente. La acción del Estado tendría que volverse positiva, y encaminarse al beneficio de la población mayoritaria que, en el campo y en las ciudades, había quedado al margen de los satisfactores del desarrollo. Fundaban el modelo en una experiencia realizada en la práctica —la alianza del Estado con los sectores populares durante el régimen de Lázaro Cárdenas— y en la Constitución de 1917, especialmente en el cumplimiento de artículos significativos como el 3º, el 27 y el 123. Se trataba, pues, de convertir en hechos el proyecto nacional inscrito en la Constitución, según el cual

[...] el Estado se responsabiliza (de ahí su legitimidad), en tanto rector del proceso de desarrollo del país, de proveer y promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías populares actuando tanto sobre las relaciones de propiedad —imponiéndoles las modalidades que dicte el interés público— como sobre las relaciones entre las clases sociales.⁵¹

El desarrollo acelerado de la economía, meta del proyecto neoliberal, no sería abandonado por el modelo “nacionalista” que subrayaría, eso sí, “una vigorosa integración interna de la economía”. La industrialización no tendría que limitarse a bienes intermedios y manufacturas sencillas, sino que buscaría la autosuficiencia en bienes de capital. Una autosuficiencia que habría que lograr, también, en la producción de alimentos, aunque pudiera parecer más rentable intercambiar granos norteamericanos por frutas y hortalizas mexicanas.

El proceso industrializador había favorecido, hasta el momento, la producción de mercancías y servicios “esencialmente superfluos”, sólo para el reducido sector de población con acceso al mercado: *nada [indicaba] que la situación [fuera] a cambiar en un futuro más liberalizado e integrado al exterior.*

En cuanto a la inflación, lo aconsejable era combatirla en sus verdaderos orígenes:

No debe descansar [ese combate] en la contención de los salarios y en la reducción del gasto público [...]; debe orientarse a reducir [...] los factores que la provocan: a) un rezago en la oferta de bienes de consumo necesario frente a la demanda, que en algún momento se origina principalmente en un rezago de la inversión; b) una política monetaria restrictiva (que limita la expansión de actividades productivas afectando particularmente a las pequeñas y medianas empresas) y que está encadenada

al sistema financiero internacional, y c) una creciente dependencia de la economía nacional respecto del exterior que afecta a los precios internos por la vía de la inflación importada.⁵²

Una reordenación, en los términos de ese modelo, requería una actitud definida del Estado en torno a tres cuestiones claves: corregir el esquema de recaudación fiscal, sin lo cual resultaría imposible estimular la actividad económica a través del gasto público; sortear la reticencia que acaso opondría el gran capital bancario a los proyectos de ampliación de la base productiva y de nuevos campos de inversión, y entender que el modelo entraría en contradicción con la tendencia a la desestructuración de los Estados nacionales que prevalecía, dado el papel protagónico de las grandes empresas transnacionales.

¿Qué significaba la aplicación del modelo “nacionalista” en el campo y en la industria? Una reorientación de prioridades, para que las necesidades básicas pudieran situarse en el punto de mira de las decisiones políticas. El campo se volvería esencial y, dentro del campo, la recuperación de la economía campesina tradicional. La autosuficiencia sería impensable sin un amplio programa de *desarrollo rural integral*: un desarrollo dirigido a producir más alimentos básicos, respetando las formas de organización que la costumbre y la experiencia han generado. El apoyo a los campesinos de temporal tendría que dominar la estrategia. Sus necesidades y potencialidades normarían la canalización de fertilizantes, créditos, organización de acopio y comercialización, investigación y asistencia técnica.

No habría recetas generales válidas. Las regiones, las etnias, las calidades de tierra; las condiciones de vivienda, de acceso a la salud y a la educación son tan variadas como las que determinan acceso al crédito y al mercado o limitación a cultivos de subsistencia. Ningún propósito de homogeneizar tan compleja urdimbre de variables resultaría operante. Ningún criterio que pretendiera someter las actividades de los campesinos a mecanismos burocráticos y centralizadores sería eficiente. Habría que abandonar las actitudes de dominio y subordinación que esconden el paternalismo y la tutela. Habría que evitar, esencialmente, que el sector moderno siguiera imponiéndole sus propias reglas y condiciones al sector tradicional. Lo pertinente sería *el diseño de un proyecto organizativo y de desarrollo social que tenga como prioridad fundamental la subsistencia de la comunidad rural*. Habría que establecer y consolidar, en suma,

[...] un sistema para el sector tradicional de la economía que opere sobre sus propias bases, que dé lugar a pautas de producción y desarrollo tecnológico congruentes, de un lado, con los requerimientos de la sociedad global en materia de alimentos y, de otro, con la reproducción ampliada de los grupos mayoritarios de la sociedad rural mexicana.⁵³

El modelo proponía una producción acorde con las necesidades básicas y destinada al consumo de las mayorías. La oferta debería centrarse en los artículos requeridos por la demanda mayoritaria. Los recursos naturales habrían de procesarse en su lugar de origen, favoreciendo un desarrollo regional más equilibrado. No excluía ese modelo la modernización industrial y señalaba la conveniencia de promoverla, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas, cuya eficiencia y capacidad para crear empleos podía llegar a ser muy alta dentro de un marco favorable.

La generación de empleos, por otra parte, no habría de concebirse como un fin en sí sino como un instrumento. La aplicación de una tecnología intermedia en las actividades relacionadas con la agricultura, la pesca, los textiles, la construcción de vivienda, el procesamiento de materias primas, la pequeña minería y la industria forestal y agropecuaria favorecería la ocupación de la gente en actividades productivas y permanentes.

Asociar la educación a un proyecto de desarrollo nacional centrado en el bienestar parecía tan importante como orientar la atención de la salud a la prevención y al saneamiento del ambiente en zonas remotas y marginadas. No se trataba de reproducir en el campo la medicina urbana, orientada al consumo de medicamentos caros y a la especialización. Un programa coherente de vivienda beneficiaría a los que siempre habían tenido menos capacidad para hacer oír sus demandas, no sólo, como había ocurrido hasta el momento, a los sectores más organizados y con más capacidad de regateo del sindicalismo organizado.

¿Quiénes eran los principales beneficiarios y sustentadores de cada uno de los proyectos? Veían con entusiasmo el proyecto neoliberal, según Cordera y Tello, inversionistas y ejecutivos vinculados al capital extranjero; el capital financiero que, potenciando su papel de intermediario, cobraría indudable hegemonía; los grandes comerciantes, con clientela de ingresos elevados, propensa a consumir más artículos de importación; los grandes agricultores, que aspiraban a más seguridades y menos trabas en la venta de sus cosechas, menor fluctuación en los precios y la posibilidad de importar maquinaria a precios más bajos; los grandes industriales, escasos pero eficientes, ya altamente modernizados, e integrados al mercado internacional gracias a su asociación con compañías transnacionales. El atractivo del *american way of life* al alcance de la mano, gracias a la importación fluida de toda clase de bienes, despertaría la simpatía de una parte de las clases medias, muy sensibilizadas a tales estímulos por el *boom* petrolero. A esos sectores se añadían, dentro de la administración pública, cuadros técnicos con vocación “tecnocrática”, inclinados a valorar al máximo la “racionalidad económica” por encima de sus posibles costos sociales y políticos.

Buscar, en cambio, un desarrollo con creciente atención a las necesidades básicas reactualizaría la alianza cristalizada en la Constitución de 1917 que, a pesar de todos los menoscabos, había resistido los avatares del desarrollismo y había permi-

tido conservar el respaldo de las masas. Campesinos y obreros eran los pilares de un pacto consolidado en los años treinta, que se reactualizaría con la democratización de los grandes sectores corporativos.

Había crecido la masa flotante de los marginados, sin acomodo cierto ni en el campo ni en la ciudad, con actividades eventuales y muy escasamente remuneradas. En el sector empresarial, la gran mayoría de las empresas eran medianas y pequeñas, con importante movilización de inversiones y creación de empleos. A esos empresarios les convenía ampliar el mercado interno y recibir el apoyo de un Estado pendiente de mejorar el nivel de vida. El proyecto “nacionalista” encontraría, además, el respaldo de importantes sectores de las clases medias ocupados en tareas educativas y culturales; en ciertas áreas profesionales y en las del sector público que habían participado en los proyectos de desarrollo social que, con mayor o menor eficacia, había puesto en marcha el Estado en las últimas décadas.

El petróleo podía servir de catalizador para el desarrollo: pero había que evitar la “ilusión coyuntural” y entender que no podía convertirse en el pivote de una estrategia para el bienestar. La articulación de un proyecto integrado de desarrollo tendría que determinar el alcance y los límites de la expansión petrolera. Si los “neoliberales” objetaban, sobre todo, el crecimiento de la deuda que requería esa expansión, los “nacionalistas” rechazaban el empleo de tecnología muy cara, pero centraban sus reticencias en la objeción a una mayor integración con los Estados Unidos. El “expansionismo” encabezado por Jorge Díaz Serrano, que aspiraba a producir más para exportar más a los Estados Unidos, prevaleció mientras duró el auge de los precios.

En suma: el proyecto neoliberal no proponía, como meta central, abatir la desigualdad. Sólo un crecimiento sostenido del empleo podía favorecer una mejor distribución del ingreso. De acuerdo con su lógica, la autosuficiencia alimentaria o la aspiración a producir bienes de capital era un contrasentido. En cambio, el proyecto nacionalista se centraba en la conveniencia de producir lo indispensable para aminorar la dependencia suponiendo que, aun en el contexto globalizador, podía aspirarse a un amplio margen de autonomía en opciones que afectaban al conjunto de la nación.

Los planteamientos de Cordera y Tello coincidieron con la propuesta de una “nueva sociedad” formulada por la cúpula sindical. Una suerte de inercia marxista inducía a los voceros del modelo “nacionalista” a atribuir a la clase obrera la función de conducir los esfuerzos para cristalizar esa sociedad “nueva”. Y, con cierto fatalismo progresista, les parecía inevitable que acabaran por imponerse las tendencias democratizadoras en el movimiento obrero. Insistían en la importancia de los grandes sindicatos de empresas estatales como columna vertebral del sindicalismo mexicano y percibían que un viraje hacia el modelo “nacionalista” podía fortalecer, eventualmente, esos poderes corporativos. Aconsejaban, por eso, alimentar

el proyecto con “explícitos contenidos populares” que tenderían a promover, necesariamente, la democracia.

A pesar de la fuerza de los intereses había que intentar *una enorme movilización de recursos internos* para reestructurar y ampliar la oferta nacional:

El bienestar, para merecer tal nombre, sólo puede verse como una corriente creciente y sostenida de satisfactores cuyo disfrute se generaliza de manera irreversible.⁵⁴

Eso supondría *la revisión, en un sentido progresivo, de la pauta tributaria*. La propuesta no dejaba de recomendar “una reorientación del sistema financiero” para que el crédito y las inversiones pudieran atender mejor a las prioridades nacionales. La nacionalización de la banca sería el canto del cisne de la izquierda tecnocrática:

[...] una reorientación del sistema financiero para que el crédito y los otros mecanismos de apoyo respondan efectivamente a las prioridades establecidas [...]. Es decir, un manejo auténticamente nacional de la banca[...].⁵⁵

“Malas noticias de la realidad”

La *disputa por la nación*, el debate entre “nacionalistas” y “neoliberales”, fue un duelo entre dos versiones del proyecto modernizador. Lo que estaba en juego era si se valía, o no, aceptar altos costos sociales para procurar el crecimiento. Pero los “nacionalistas” tomaron en cuenta, también, al país tradicional, entendiendo que su ritmo y el del país moderno no coincidían y que sólo una distribución más ponderada del bienestar, a un plazo relativamente corto, podía propiciar una sincronía que garantizara, a mediano plazo, un desarrollo más equilibrado. Se daba una nueva versión del duelo entre Calles y Cárdenas. Pero otras dos presencias pesaban densamente en el trasfondo: Carranza y Zapata.

Cuando, en 1982, al expirar el sexenio y en medio de una situación económica limítrofe con el abismo, el presidente decidió nacionalizar la banca, se despertaron simpatías populares prendidas de la ilusión de recuperar el aliento que había conducido, en 1938, a la expropiación del petróleo. Fue una reacción emotiva, sin medir la enorme diferencia de circunstancias. Analistas inteligentes, como Carlos Pereyra, la aplaudieron pensando que el Estado podría así “reordenar la economía” y “canalizar la asignación de recursos en forma distinta”.⁵⁶ El deseo de volver tangible un “modelo ideal” no les permitía entender que la medida estaba fuera de contexto y que no respondía a lógica alguna que la hiciera viable. Se trataba sólo de un recurso *in extremis* para rescatar una legitimidad irremediablemente perdida. Evitar el naufragio no era cosa, sin embargo, de recursos espectaculares de última hora.

En *La economía presidencial* de Gabriel Zaid hay comentarios muy agudos sobre los puntos más álgidos de la crisis de 1982. Todo lo que ocurrió entre mediados del 81 y fines del 82 fue altamente ilustrativo de cómo los rasgos de omnipotencia implícitos en el ejercicio desmedido del presidencialismo pueden conducir a una disociación de consecuencias graves. Cuando el director de Pemex anunció una baja en los precios del petróleo mexicano, tras el desplome mundial de los precios, fue despedido. ¿Por qué? Porque el presidente no podía tolerar que al reino de la ilusión le llegaran “malas noticias de la realidad”. Pero nadie pudo lograr que los clientes de México pagaran un precio superior al que estaba fijando el mercado. Tampoco podía resignarse el presidente a que esas malas noticias volvieran cada vez más insostenible la sobrevaluación notoria del peso. “Defender el peso” se confundió con defender un atributo del honor nacional y lo que habría podido evitarse con un leve deslizamiento diario, en un largo período, sobrevino abruptamente en el mes de febrero de 1982. Después de múltiples declaraciones sobre la inconveniencia del control de cambios, hubo que implantarlo. El presidente hablaba de “problemas de liquidez financiera” pero no de crisis económica. La fuga de capitales era espectacular —cerca de 22 mil millones de dólares— y había empezado cuando, un año antes, se desplomaron los precios del petróleo. ¿Se trataba, como sugiere Zaid, de una incredulidad generalizada ante la negación obstinada del presidente a aceptar la realidad?

Hubo quien pensó, sin embargo, que el control de cambios y la nacionalización de la banca, anunciados conjuntamente el 1º de septiembre, podían considerarse como una demostración de que “el equilibrio de las fuerzas políticas en la disputa por las opciones del país estaba rápidamente cambiando”.⁵⁷ Pero no había tal. Las fuerzas reales tenían tan poco que ver en las decisiones como el resto de la realidad: la voluntad de un solo hombre, entonces como antes, se asumía como el único reflejo válido de esa realidad. Es verdad que una encuesta de opinión realizada en aquel momento registró un apoyo del 71% a la medida presidencial. Antes, por sugestión generada en las alturas, la gente le había “tenido fe” al petróleo. Ahora, como bien observó Zaid:

Las arcas bancarias sustituían mágicamente la decepción de las arcas petroleras. Todas las instituciones bancarias, como las petroleras, podían tenerse ahora y pagarse después. La deuda pública aumentaba, pero el aplauso renacía[...].⁵⁸

Pronto, la deuda empezaría a escribirse con mayúscula y ocuparía todo el escenario, con una realidad demasiado abultada para poder taparla con un dedo, así fuera el de la voluntad presidencial. La deuda ascendía, en ese momento, a 80 mil millones de dólares.

La opinión pública se manifestaba como una marea veleidosa, movida alternativamente por la ilusión o el desconcierto, por la credulidad o la incertidumbre y la

desconfianza. El apoyo difuso al sistema, del que hablaba Hansen, parecía susceptible de reactivarse al conjuro de cualquier espejismo. Las esperanzas seguían remitiendo al discurso, cargado de promesas, de la Revolución Mexicana. De ahí el aplauso mayoritario a la medida nacionalizadora, tomada con el pie en el estribo y en busca de ese aplauso. No era producto de la reflexión meditada sino de una adhesión, marcada por cargas afectivas, a la imagen de una identidad y de un proyecto. La mayoría se identificaba más con el proyecto “nacionalista” que con el “neoliberal”.

Los valores de los mexicanos

Cuando Enrique Alduncin analizó los datos recogidos en una encuesta realizada entre 1981 y 1984 sobre *Los valores de los mexicanos* advirtió que México aparecía, al margen de cualquier ideología, como *una gran nación que nutre su vitalidad con raíces profundas*. Ni la modernidad era el valor supremo ni la tradición era sentida como el lastre de un pasado obsoleto. El otro México, negado por el proyecto modernizador, coexistía con el afán de ubicarse en el mundo contemporáneo. O, en palabras de Alduncin, *en nuestro país se vive en forma simultánea en la tradición y en la modernidad*.

Interrogado sobre los logros de la nación, un 52% se había mostrado pesimista y un 46% los evaluó satisfactoriamente. A mayor nivel de ingreso y de escolaridad, disminuía la satisfacción con los logros del país y crecía la complacencia con los logros individuales. Los más pobres depositaban en el país el orgullo de haber logrado avances considerables, aunque no se reflejaban en su propio avance como individuos. No se advertía autodenigración alguna: los marginados conservaban un sentimiento de estimación personal y se sentían dotados de una reserva de potencialidades que no había podido desplegarse. Se había difundido un deseo de “progresar” y alcanzar el bienestar de los países “modernos” o “industrializados”. Algo que respondía, evidentemente, al mensaje de los medios y a la esperanza de cobijarse bajo el cielo protector del Progreso. La oferta manejada por esos medios aseguraba que ese Progreso, en un plazo impreciso pero garantizable, derramaría satisfactores para todos. Pero, significativamente, la mitad de los encuestados respondió que no deseaba que México se pareciera a ningún otro país y sólo un 20% manifestó la aspiración de parecerse a los Estados Unidos.

La persistencia de valores tradicionales, al lado de otros modernos, demostraba que los mexicanos no buscaban una ruptura con el pasado aunque sí un futuro más promisorio. La expectativa de mejorar una vida precaria no se identificaba con la necesidad de renunciar a valores profundamente vinculados a una identidad compartida.

Sólo un 24% opinó que lo nuevo era mejor y que el cambio, en sí, suponía una mejoría. Un 31% aspiraba a rescatar los valores que el pragmatismo modernizador insistía en desplazar: la pérdida de identidad y un sentimiento de desubicación los inquietaba y esperaban remediarlo. Otro sector, que alcanzaba un 29%, prefería que ningún cambio alterara las costumbres heredadas de sus mayores.

Sumando ambos porcentajes, Alduncin concluía que un 60% de la población compartía, definitivamente, *una actitud a favor de nuestras costumbres y tradiciones. Anticipaba un movimiento nacionalista más enérgico que, sin chauvinismo ni xenofobia, rescate nuestras costumbres y tradiciones más valiosas.* Y se mostraba optimista en cuanto a *una actitud que facilita la implantación de un proceso de planeación participativa y democrática.*⁵⁹ Sustentaba ese optimismo en la convicción del 60% de encuestados: los defectos del sistema podían modificarse con la participación creciente de ciudadanos esforzados y capacitados.

Sólo un 25% consideraba que los pobres eran los responsables de su pobreza. Un 60%, en cambio, atribuía la responsabilidad de la marginación a la sociedad y entendía que a la sociedad le tocaba asegurar oportunidades de trabajo productivo para todos los mexicanos.

Nunca hay que tomar las encuestas al pie de la letra, pero, con las reservas aconsejables, suelen ser bastante reveladoras si se manejan con transparencia y honestidad. Enrique Alduncin sugería, con fundamento en la voz de muchos mexicanos, centrarse en la realidad, abandonar imitaciones extralógicas y configurar un proyecto nacional capaz de tomar en cuenta la coexistencia entre tradición y modernidad. Sólo así podría integrarse una sociedad plural y democrática que no desconociera, en su afán de transformarse, la presencia de los muchos Méxicos.

Los que heredaron el futuro

El auge de la planificación había empezado en 1976, cuando el IEPES elaboró un Proyecto de Plan Básico de Gobierno para el sexenio que teminaría en 1982. La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) surgió, en diciembre de 1976, como culminación del proceso, iniciado por Echeverría, de transferir a la presidencia el poder de las decisiones económicas que antes había correspondido a una Secretaría de Hacienda lógicamente preocupada por evitar el gasto deficitario. Paradójicamente, la instancia concebida para “liberar” al presidente del control de los técnicos financieristas acabó, al contrario, dominada por esos técnicos, que lograron imponer pronto no sólo su prudencia presupuestal sino su proyecto de país:

La Secretaría de Programación y Presupuesto se volvió la responsable de planificar el futuro del país, asignando la distribución de los recursos necesarios para alcanzar ese

futuro; diseñando los procedimientos que permitirían a la administración realizar esas metas y evaluando los logros de tales políticas.⁶⁰

La SPP se volvió un “superorganismo”, sin los límites que antes ponía el delicado equilibrio entre el brazo técnico (Hacienda) y el brazo político (Gobernación) del Estado. Sus delegaciones en los estados derivaron su importancia del poder para asignar más o menos recursos. López Portillo se había propuesto reorganizar la maraña administrativa, bastante desordenada, que heredó. Se habló de *descentralizar* para ordenar pero, en la práctica, se centralizó todavía más el control de las decisiones. Es decir, se “modernizó” el presidencialismo y empezó a crecer el poder de los planificadores, que se volvieron los nuevos protagonistas del escenario político.

Tras una primera etapa (1976 y 1977) en la que prevalecieron un tecnócrata nacionalista (Carlos Tello) y un funcionario neutral (García Sáinz), la conducción de la SPP fue encomendada a un funcionario formado en Hacienda y rodeado de un equipo con experiencia profesional vinculada a las finanzas y la planeación: Miguel de la Madrid. Había surgido una nueva élite y había cambiado la distribución del poder en el sistema:

[...] el control sobre el gobierno se volvió mucho más centralizado al implantarse un sistema de planeación. La SPP fue creada para manejar ese sistema y su poder creció a alturas sin precedentes en los ochenta gracias al control que ejercía sobre la asignación del presupuesto. Esa institución estaba dominada por un nuevo subgrupo dentro de la élite: los *tecnócratas*. Aliados a algunos miembros del antiguo personal de Hacienda, acabaron por controlar prácticamente todas las instituciones del Estado.⁶¹

También habría de cambiar el signo de las decisiones políticas: la nueva élite compartía una perspectiva única sobre la dirección que convenía al futuro del país.

Notas

¹ David Ibarra, “Discurso en la Convención Nacional Bancaria de marzo de 1978”, citado en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 424.

² Octavio Paz, *El ogro filantrópico*. México: Joaquín Mortiz, 1979, p. 338.

³ *Ibid.*, pp. 191-192.

⁴ *Ibid.*, p. 338.

⁵ Jorge Díaz Serrano, citado por Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 250.

- ⁶ René Villarreal, "El desarrollo independiente de México: una perspectiva histórica", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 323.
- ⁷ Jesús Reyes Heróles, "Discurso de Chilpancingo el 1º de abril de 1987", en *Reforma Política*, vol. 1, abril-agosto de 1977, pp. XI - XII.
- ⁸ Paz, O., *op. cit.*, p. 193.
- ⁹ Luis Villoro, "Reforma política y perspectivas de democracia", en *México, hoy* (coord. Pablo González Casanova y Enrique Florescano). México: Siglo XXI Editores, 1979, p. 353. Villoro se refiere a una encuesta citada por Rafael Segovia en "Los partidos inexistentes", *Vuelta*, agosto de 1977.
- ¹⁰ *Ibid.*, pp. 358-359.
- ¹¹ Carlos Pereyra, *Sobre la democracia*. México: Cal y Arena, 1990, p. 179.
- ¹² Francisco Suárez Dávila, "Política hacendaria y economía política en el México posrevolucionario", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 425.
- ¹³ Pereyra, C., *op. cit.*, p.177.
- ¹⁴ Declaración de un alto líder sindical citada por Pereyra, C., *op. cit.*, p. 184.
- ¹⁵ Rolando Cordera y Carlos Tello, *La disputa por la nación*. México: Siglo XXI editores, 1981, p. 69.
- ¹⁶ Declaración de Ricardo García Sáinz, en "Planes sin planificación", *Proceso*, 23/II/1981, pp. 31, 39.
- ¹⁷ Arturo Warman, "El problema del campo", en *México, hoy*. México: Siglo XXI editores, 1979, p. 119.
- ¹⁸ *Ibid.*, pp. 118-120.
- ¹⁹ Sergio Reyes Osorio y Ma. de los Angeles Moreno, "El desarrollo rural integral", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 249.
- ²⁰ Coplamar, *Bases para la acción 1977-1982*. Mimeo. México, 1977, p. 10.
- ²¹ R., Villarreal, *op. cit.*, p. 326.
- ²² Gabriel Zaid, *El progreso improductivo*. México: Siglo XXI Editores, 1979, p. 14. Véase más sobre E. F. Schumacher en cap. I de este libro.
- ²³ *Ibid.*, p. 81.
- ²⁴ *Ibid.*, pp. 130, 134.
- ²⁵ *Ibid.*, p. 249.
- ²⁶ Enrique González Pedrero, *Riqueza de la pobreza*. México: Cal y Arena, 1990, p. 70. La 1a. edición es de Joaquín Mortiz, 1979.
- ²⁷ *Ibid.*, p. 107.
- ²⁸ *Ibid.*, p. 124.
- ²⁹ *Ibid.*, p. 129.
- ³⁰ *Ibid.*, p. 130.
- ³¹ *Ibid.*, p. 131.
- ³² *Ibid.*, p. 11.

- ³³ Gabriel Zaid, *La economía presidencial*. México: Vuelta, 1987, p. 69.
- ³⁴ *Ibid.*, p. 56.
- ³⁵ *Ibid.*, p. 62.
- ³⁶ *Ibid.*, pp. 73-74.
- ³⁷ Miguel Basáñez, *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*. México: Siglo XXI Editores, 1980, p. 73.
- ³⁸ Cordera y Tello, *op. cit.*, pp. 66-67.
- ³⁹ *Ibid.*, p. 60.
- ⁴⁰ *Ibid.*, p. 62.
- ⁴¹ F. Suárez Dávila, *op. cit.*, p. 427.
- ⁴² Daniel López Acuña, "Salud y seguridad social: problemas recientes y alternativas", en *México, hoy, op. cit.*, pp. 198-200.
- ⁴³ *Ibid.*, p. 208.
- ⁴⁴ Adolfo Chávez, "Nutrición: problemas y alternativas", en *México, hoy, op. cit.*, pp. 222-229.
- ⁴⁵ Reyes Osorio y Moreno, *op. cit.*, p. 232.
- ⁴⁶ *Ibid.*, p. 250.
- ⁴⁷ *Ibid.*, p. 245.
- ⁴⁸ Cordera y Tello, *op. cit.*, p. 88.
- ⁴⁹ *Ibid.*, p. 89.
- ⁵⁰ *Ibid.*, pp. 101-102.
- ⁵¹ *Ibid.*, p. 110.
- ⁵² *Ibid.*, p. 115.
- ⁵³ *Ibid.*, pp. 121-122.
- ⁵⁴ *Ibid.*, p. 143.
- ⁵⁵ *Ibid.*, p. 147.
- ⁵⁶ Pereyra, C., *op. cit.*, p. 217.
- ⁵⁷ Basáñez, M., *op. cit.*, p. 75.
- ⁵⁸ Zaid, G., *La economía presidencial, op. cit.*, p. 81.
- ⁵⁹ Enrique Alduncin, *Los valores de los mexicanos. México: entre la tradición y la modernidad*. México: Fomento Cultural Banamex, México, 1986, pp. 117, 121.
- ⁶⁰ Miguel Angel Centeno, *The New "Científicos": Technocratic Politics in Mexico 1970-1990*. Tesis de doctorado en la Universidad de Yale, mayo de 1990. Mimeo, p. 322.
- ⁶¹ *Ibid.*, p. 343.

VIII. Entre la espada y la pared

Los “nuevos científicos”

En 1983 se inició la llamada “segunda modernización mexicana”. Al terminar el período de Miguel de la Madrid, un analista perspicaz advertía que, una vez más, se buscaba implantar un proyecto modernizador desde la cima de la pirámide. La inclinación de las élites a tutelar a las mayorías para llevarlas por el buen camino volvía a repetirse:

¿[...] cómo puede hallar sitio en la cabeza de los gobernantes la idea de que una sociedad puede ir en contra del sentido de su historia? Porque nadie sabe tan bien como ellos, los ejecutores, hasta qué punto la historia política de ese pueblo es, desde la Conquista, la historia de una coerción de las élites sobre la sociedad, de una implantación cupular a contrapelo de los hábitos profundos del territorio humano que gobiernan.

Aguilar Camín hacía entonces una lectura de las elecciones de 1988 como la manifestación visible de la sorda resistencia que oponían las fuerzas reales del país, es decir, las mayorías, al inflexible avance de la nueva modernización. Sucedió algo parecido a la reacción de los criollos, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, ante las reformas borbónicas y a la reacción de la Iglesia y las comunidades indígenas, a mediados del siglo XIX, ante las reformas liberales:

Las del neoliberalismo eran otra vez propuestas que golpeaban el centro de viejas solidaridades. La acusación reiterada de la opinión pública fue, sintomáticamente, la de su “extranjería” y su ignorancia del México real.¹

Cinco años después Soledad Loaeza afirmará que *no* sería, el de la *segunda modernización*,

[...] un proyecto elaborado por una élite ilustrada que pretendiera cambiar a la sociedad para adaptarla a un Estado moderno. El realismo delamadridista, en cambio, se proponía cambiar el Estado para ajustarlo a la sociedad, al mismo tiempo que presentaba la propuesta como una exigencia de la sociedad misma.

Sólo que la sociedad así concebida sería, según la propia autora,

[...] una sociedad de clases que a fines del siglo XX ha abandonado explícitamente la utopía de la igualdad.²

Difícilmente podría interpretarse, en verdad, que el sustento del modelo neoliberal fue mayoritario y entusiasta, si se piensa en la amplia movilización de rechazo que se expresó en las elecciones de 1988. Tampoco se trataba, propiamente, de una *segunda* modernización.

La incrustación de una economía cuasi mundial sobre la economía prehispánica fue el punto de partida de todas las modernizaciones. Pero, sin ir tan lejos, las modernizaciones “modernas” parten del proyecto borbónico y enseguida del proyecto económico liberal, que se fundó en la aspiración de imitar y alcanzar la prosperidad norteamericana. No podría olvidarse el proyecto de industrialización protegida por el Estado, que formuló Lucas Alamán para el primer gobierno conservador en 1830. La modernización porfiriana habría de incorporar algo de ambos proyectos, del liberal y del conservador, y la revolución los recogería, con brío decidido, para apoyar la modernización en un desarrollo industrial protegido por un Estado fuerte y, a su vez, promotor del desarrollo.

La “segunda” modernización sería entonces, más bien, la quinta o la sexta: la más reciente modalidad de un proyecto con múltiples antecedentes. Como en las anteriores su origen fue cupular, tanto en la concepción como en la aplicación. Algunos analistas han identificado a sus teóricos y ejecutantes como una “nueva élite”, compacta y homogénea, con afinidades de origen, escolaridad y experiencia profesional que uniformarían a sus miembros con una mentalidad de signo tecnocrático. De acuerdo con Miguel Ángel Centeno,³ serían los “nuevos científicos”, pertrechados con la lógica impecablemente cerrada de un método “sin fisuras” para analizar la realidad. Ese método pretendería monopolizar la racionalidad, el

realismo y la eficiencia. La convicción de poseer una clave para encontrar la solución óptima, con la mira puesta en el largo plazo, caracterizaría a esos expertos, que asumieron el poder y la toma de decisiones en 1982.

Apego a la realidad y siete propósitos irreprochables

La prudencia y el realismo fueron las virtudes más cultivadas por el nuevo presidente. Frente a una situación económica descarnadamente adversa, se optó por un estricto reconocimiento de los hechos y una notoria renuncia a los eufemismos. Una renuncia que llevaba implícita, hay que reconocerlo, la decisión de prescindir de la aureola dadivosa que, para realzar la propia imagen, suele buscarse en el ejercicio del presidencialismo. La opción fue *apegarse a la realidad* y no aspirar a satisfacer demandas más allá del *peso real* de la economía. Advertir que había poco y que no se iba a ofrecer lo que no había.

La verdad es que el pago de la deuda dejaba escasas opciones. La inflación superaba el 100%. El déficit presupuestal era de un 18%, el más alto en la historia del país. De cada peso de gasto público había que destinar 32 centavos a pagar la deuda. La economía se había estancado. Buena parte de la opinión pública se mostraba reticente con las condiciones que exigía el FMI. Muchas empresas públicas y otras privadas estaban en virtual quiebra. El proyecto de gobierno, dirigido primordialmente a reducir la inflación y a racionalizar el gasto público, intentó conciliar los lineamientos neoliberales del FMI con el *nacionalismo revolucionario* de la Constitución de 1917. Sería ése el primero de siete puntos nodales para normar la gestión del sexenio. Se incluyó, también, la meta de procurar una *sociedad más igualitaria* junto a la *defensa del empleo* y la *recuperación de la capacidad de crecimiento*; se propuso la *democratización integral* y la *planeación democrática*, dentro del marco de una progresiva *descentralización*. Y, como la crítica de los sectores medios señalaba a la corrupción como responsable de casi todos los males, se levantó el faro de la *renovación moral* para alumbrar la difícil gestión que estaba a punto de iniciarse.

Entre la Revolución Mexicana y la neoliberal, prudente rectoría del Estado

Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión advirtió: *la situación es intolerable. No permitiré que el país se nos deshaga en las manos*.⁴ Un año después, en el primer Informe de gobierno, insistió en que se trataba de una *crisis estructural*: desarrollo paralizado y deterioro de todas las bases para mejorar el bienestar de las mayorías

o, siquiera, para preservar avances. Para conjurar la inminencia de un desplome sin precedentes que la sangría de la deuda magnificaba, se propuso sentar las bases de la modernización económica, del profundo cambio estructural que reclamaba el agotamiento del modelo, pero sin renunciar al papel del Estado como rector del desarrollo ni a la economía mixta. Quería desembarazar al Estado de adiposidades, definiendo a la vez áreas que debía reservarse con exclusividad.

Al terminar el período, cuando se publicaron los varios volúmenes sobre *México: 75 años de Revolución*, el presidente reconocía en el prólogo:

[...] hoy la Revolución Mexicana es una revolución inconclusa. Queda toda una larga jornada por recorrer. Existen tramos de desarrollo a los que no nos podemos sustraer [...].⁵

Al comenzar, el 1º de diciembre de 1982, había anunciado:

Pongo en marcha un Programa Inmediato de Reordenación Económica, cuyos objetivos centrales son combatir a fondo la inflación, proteger el empleo y recuperar las bases de un desarrollo dinámico, sostenido, justo y eficiente[...]. Paralelamente a esas políticas inmediatas realizaremos otras que atiendan y propicien los cambios estructurales que requiere nuestra economía: ahorro interno insuficiente, baja productividad, escasa competitividad de nuestros productos en el exterior, desigualdad social.⁶

Había advertido, durante la campaña, que

[...] la historia ha puesto de manifiesto que el desarrollo social no se da automáticamente y ha hecho evidente la necesidad de reorientar las actividades socio-económicas, buscando, bajo la rectoría del Estado y en un ambiente de libertad, superar los retos y los obstáculos que impiden el logro de los grandes propósitos nacionales.⁷

Al finalizar el régimen se seguiría sosteniendo que la polarización generada por el modelo industrializador requería de la rectoría del Estado para cerrar la brecha de la desigualdad y ofrecer oportunidades a *la parte olvidada de México*:

Esta enorme tarea de justicia social sería imposible si se dejara al arbitrio de las “fuerzas ciegas” del mercado. No sólo eso, la racionalidad del mercado terminaría por aumentar la desigualdad. Negar la rectoría del Estado en este contexto equivaldría a una irresponsabilidad histórica de enormes proporciones.⁸

Se recalca, igualmente, que al Estado tocaba ponerle límites al desempleo, porque en la lógica del mercado prevalece el lucro y no el acceso a un mínimo de

justicia social. A Otto Granados le tocaría, en el balance de la gestión de Miguel de la Madrid, recordar las numerosas *imperfecciones* del mercado cuando su lógica interfiere con la de un proyecto nacional, propicia la organización oligopólica e introduce patrones de consumo de las economías avanzadas, desatendiendo requerimientos sociales básicos.⁹

Finanzas sanas, Estado esbelto, economía abierta

El propósito de sanear las finanzas públicas fue el punto de partida para no generar inflación y reimpulsar el crecimiento. Se renunció a financiar con déficit el gasto social. No había alternativas salvo un eventual ahorro en el pago de la deuda que, dada la rigidez de los acreedores y acaso por una sobredosis de prudencia, nunca pudo lograrse. La meta era abrir perspectivas para un *cambio estructural*. Revertir los puntos ciegos del callejón al que se había ido metiendo una economía sobreprotegida, con un reducido mercado interno e insuficiencia en la generación de empleos.

Dentro del criterio de mantener la economía mixta, reconociendo la importancia de la empresa pública en un proyecto nacionalista, se definió la diferencia entre empresas *estratégicas*, *prioritarias* y *prescindibles* (las adquiridas por el Estado para suplir deficiencias temporales del mercado). Se consideró *estratégico* lo esencial para el funcionamiento del Estado, lo construido por su iniciativa y lo que “debido a su importancia no sería posible ni recomendable delegar”. La definición de áreas *prioritarias* se haría a la luz de las circunstancias, de modo que “la redistribución de competencias entre Estado y sociedad se lleve a cabo en un medio de discusión pública”. En las empresas que el Estado conservaría por pertenecer a sectores clave de la economía, se aplicaría una política de doble vertiente: cuidar la generación de empleo, indispensable por razones demográficas, y apuntar hacia la creación de alta tecnología, para no depender permanentemente de la extranjera. Al concluir el gobierno de López Portillo pertenecían al sector público 1 155 empresas y organismos. Al terminar el sexenio de Miguel de la Madrid se habían reducido a 412.¹⁰

Los otros dos objetivos del *cambio estructural* fueron la *descentralización* y la *apertura de la economía*. Se pretendía liberar las iniciativas regionales procurando a la vez, mediante la planeación, su coherencia y pertinencia. El paso de la economía cerrada a una economía abierta al mercado mundial empezó suprimiendo permisos de importación y estableciendo aranceles y culminó, en 1987, con la entrada al GATT, pretendiendo racionalizar la interacción entre el mercado interno y el exterior.

Entre la espada (de la deuda) y la pared (del ajuste)

En 1982 había terminado lo que Carlos Tello llamaría “la segunda versión del milagro mexicano”: el fallido intento de “desarrollo compartido” que siguió, durante dos sexenios, al “desarrollo estabilizador”. Prevalecía una sensación de atolladero, de atrapamiento en un callejón sin salida. Entre la espada de la deuda y la pared del ajuste, apenas había libertad de movimiento. El ajuste partió de una política de reducción del gasto: sustentar el gasto en una prudente generación de ingresos sería la norma. El desequilibrio fiscal era hasta de un 20% del PIB: en un año habría de reducirse al 8%. A la vez, se aumentó el IVA, precios de la gasolina y tarifas eléctricas. En 1984 la inflación había bajado del 120% anual al 36%. La banca tenía un excedente de fondos prestables.

Pero todos se quejaban del crecimiento insuficiente, de modo que empezó a aumentar lentamente el gasto público y la inversión privada, que creció en un 9%. La producción industrial volvió a crecer en un 6% y el PIB en un 4%, aunque también repuntó la inflación. De acuerdo con el modelo de cambio estructural, se pretendía iniciar la reconversión industrial, reducir importaciones y aumentar exportaciones no petroleras, todo dentro de un marco de apertura al mercado mundial. En julio de 1985 se sustituyeron permisos previos por aranceles sobre importaciones.

La meta a largo plazo sería llegar a ser una potencia industrial intermedia para el año 2010, con creciente competitividad en el exterior y sin abandonar un sistema de economía mixta donde se complementaran racionalmente los sectores público, social y privado. Cuando se hizo el balance de 75 años de revolución, se recordó el error del porfirismo, al buscar la modernización sin atender demandas sociales y a costa de perder la soberanía de la conducción nacional del desarrollo. ¿Acaso existía el peligro de que semejante error volviera a cometerse?¹¹

La deuda era el convidado de piedra. Una primera renegociación consiguió diferir vencimientos de los años 82, 83 y 84 a ocho años de plazo, con cuatro años de gracia, y obtener nuevos créditos por 5 mil millones de dólares. Ya para 1986 había crecido la deuda a 95 mil millones. Aunque se reprogramó a 14 años el pago de amortizaciones de la mitad del principal, ese diferimiento sólo afectaba al capital y no a los intereses. De hecho, se estaba pagando cada año el equivalente del 55 o 60% de los ingresos por exportaciones y el 75% de esas exportaciones seguían siendo petroleras. En febrero de 1986, Jorge G. Castañeda sugería como única salida aceptable el alivio de la deuda reduciendo el pago de intereses: la meta a buscar sería limitarla al 25% de los ingresos por exportaciones. Sin fijar una cifra, Carlos Tello recomendó reducir o suspender el pago de intereses por un período de entre tres y cinco años, aunque sin declarar unilateralmente una moratoria. Sólo así podría aspirarse a financiar un crecimiento moderado y, a la vez, hacer factibles reformas para modernizar la economía.¹²

Al introducir el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el presidente De la Madrid sintió la necesidad de advertir:

El país se encuentra en un momento decisivo para la historia nacional; está de por medio el destino de la nación. De lo que hagamos o dejemos de hacer depende nuestro futuro y el de las generaciones que nos sigan.¹³

Se había tocado fondo y, en adversas circunstancias externas e internas, había que cambiar la estructura del aparato productivo industrial para orientarlo a la exportación. Por supuesto, no era cosa de un día para otro. La participación en la red global estaba marcada, para México, por el vínculo mayoritario del comercio con los Estados Unidos. Desde el fin de la Segunda Guerra hasta fines de los años sesenta, los Estados Unidos habían ejercido la hegemonía mundial por ventaja tecnológica, productiva, comercial y financiera, sin contar el predominio nuclear y estratégico: una hegemonía impugnada, ahora, por el ascenso de Europa y el Pacífico.

El tránsito hacia la modernización económica se emprendía, por otra parte, dentro de una economía mundial que, desde 1973, mostraba una franca tendencia a retraerse con caída de la producción y por ende del comercio y despliegue de agresividad en la competencia comercial. Para entrar en esa competencia avorazada, algunos países de la Cuenca del Pacífico se industrializaban vertiginosamente, aprovechando su mano de obra barata. ¿“Taiwanizarse” sería, acaso, una opción para México?

La producción y el mercado mundiales, en medio de la general contracción, se habían transnacionalizado y la nueva globalización favorecía hegemonías regionales. Si la economía socialista no era un desafío para la norteamericana, sí lo eran en cambio la europea y la japonesa. Sin el recurso de las colonias, los industrializados se peleaban los espacios de la periferia para transferir industrias que, por elevados costos de producción, ya no resultaban rentables en sus propios territorios.

Para financiar su desarrollo industrial en los años setenta, algunos subdesarrollados renunciaron a sus cultivos básicos y se dedicaron a los cultivos de exportación. Importaron granos, en grandes proporciones, de los Estados Unidos y Canadá y contrataron créditos a ventajosas tasas. Cuando en 1981 subieron los intereses del 6 al 20% todos estaban muy endeudados y buscaban nuevos créditos para pagar los ya contraídos. En 1981 y 1982 los precios de las materias primas bajaron un 27% y a la vez creció el proteccionismo de los industrializados. No se quería admitir que si, como advirtió Gabriel Zaid, ya en el acto de contraer la deuda estaba implícito el requerimiento de exportar, también los prestadores tenían que entender que *cobrar es comprar* y que cobrar sin comprar *es sólo una fantasía de países acreedores*.¹⁴

Las relaciones con los Estados Unidos, por otra parte, habían entrado en crisis. Eran múltiples las razones y manifestaciones de esa crisis como lo advirtieron va-

rios analistas. Erosionadas las premisas que sustentaron, desde la Segunda Guerra Mundial, la coexistencia de vecinos hartos desiguales ya no se veía a México, desde el Norte, como una sociedad estable ni al Estado mexicano como un sistema eficaz y consensual. Se habían debilitado el nacionalismo defensivo y el carisma institucional del presidente y parecían de otra época ciertos desplantes de soberanía que, asumidos por la élite política, podían confundirse con el afán de evitar cambios democráticos. La crisis económica repercutía en todo el sistema: si la fragilidad económica debilitaba el sustento popular lo que mermaba era, a fin de cuentas, la política.

En la óptica conservadora de Ronald Reagan, México se volvía estratégico para controlar la frontera sur y evitar la infiltración de la inestabilidad centroamericana. Se habían diseminado, así, en la opinión pública de allende la frontera visiones apocalípticas sobre México, a la vez que se aspiraba a ver reflejados en la política mexicana, tanto interna como exterior, los intereses de los Estados Unidos. El temor al expansionismo soviético acentuaba la importancia del flanco latinoamericano y especialmente del flanco mexicano.

La importancia de México había crecido con el descubrimiento de sus reservas petroleras. Cuando se desplomaron los precios y creció la deuda, creció también la vulnerabilidad del país por su dependencia del mercado financiero internacional. Los acreedores, principalmente los norteamericanos, pudieron influir sobre decisiones fundamentales de la política económica. Se indujo una reestructuración profunda, que habría de implementarse mediante un drástico programa de austeridad, recorte del sector público y amplia apertura a las inversiones y al mercado global.

En la óptica de los acreedores, el alto déficit presupuestal se debía al abultamiento del Estado interventor, la asignación “populista” del presupuesto, los subsidios, el proteccionismo y la hostilidad hacia las inversiones extranjeras. La negociación de la deuda y los programas de rescate financiero fueron concebidos para insertar a la economía mexicana, como la de todos los países deudores, en una interdependencia inescapable.

Sin embargo, desde los Estados Unidos y desde México ciertos sectores habrían deseado todavía mayores garantías de que no habría accesos inoportunos de nacionalismo “anacrónico”. Lorenzo Meyer examinó la convergencia y el conflicto en las azarosas relaciones.¹⁵ Aun donde se dio mayor convergencia hubo conflicto: así fue con la deuda y el narcotráfico. Y se dieron coincidencias aun donde la lógica tendía hacia el conflicto, como en la cuestión de Centroamérica o en la migratoria. En plena negociación aquiescente sobre la deuda aparecieron tensiones, porque la banca privada norteamericana se negó a asumir responsabilidad alguna en “la orgía de préstamos” que había favorecido en los años setenta. La realidad se impuso sobre la ley que castigaba a empleadores de mano de obra mexicana y pudo más la complementariedad real del mercado laboral. Ninguna de las partes quedó con-

forme en el combate al narcotráfico. La divergencia respecto de Centroamérica no interfirió, por otra parte, en los acuerdos financieros y comerciales.

Las presiones ejercidas por el gobierno norteamericano fueron abundantes, sobre todo en los años 85 y 86, y se centraron en la corrupción, el narcotráfico y los procesos electorales. La actitud conciliatoria del gobierno de México en el terreno económico no consiguió evitarlo. Concretamente, en febrero de 1985 se llegó a una "operación intercepción", para controlar en la frontera misma el tráfico de drogas, después del secuestro de un agente de la DEA. Y en marzo de 1986 cerraron el 70% de las garitas fronterizas, con el pretexto de buscar armas y terroristas después del ataque a Libia. En abril del mismo año se suspendió la entrega de visas en la embajada de la capital mexicana, por razones de seguridad. El secuestro, en territorio nacional, de presuntos culpables en el asunto Camarena fue parte del esquema. Las numerosas presiones verbales, sobre todo del embajador Gavin, culminaron en mayo de 1986 con las audiencias promovidas en el Senado norteamericano por Jesse Helms, donde se tocaron ciertos puntos álgidos que despertaban la irritación de Reagan: crisis económica e inestabilidad política; corrupción, ineficacia y nepotismo; ineficiencia en el combate del narcotráfico y migración ilegal.¹⁶

Toda esa atmósfera, que fue tildada de esquizofrénica por su aparentemente disociada ambivalencia, le dejó al gobierno, sin duda, escasos márgenes de manobra para mejorar las condiciones del pago de la deuda. México se abstuvo de propiciar una concertación latinoamericana para suspender o diferir el pago, quizá para evitar las consecuencias que podría atraer, sobre la precaria situación económica, un enfrentamiento con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano, por otra parte, hizo esfuerzos explícitos para que la banca privada "mejorara" las condiciones de renegociación en 1982 y en 1985.

La opción de taiwanizarse

El monto del endeudamiento había crecido en proporciones equivalentes a las desmesuradas expectativas depositadas en el petróleo. Del mismo modo, la creciente integración del país a la economía norteamericana acentuó la repercusión de sus altibajos. La política de apertura aceleró algo que ya se daba desde el comienzo del proceso industrializador. Ya en 1950 el 75% del intercambio se hacía con los Estados Unidos, que envió la maquinaria y muchos insumos para la industria y hacia donde se exportaban productos primarios y algunas manufacturas. Con las divisas del turismo y del crédito se compensaban desequilibrios en la balanza comercial. Las industrias automotriz y electrónica se establecieron, con capital norteamericano, para ensamblar partes importadas y producir para un mercado interno cautivo y relativamente reducido. Para ganar competitividad empezaron a trasladarse a México

la producción de partes y la maquila de ciertos componentes. Algunos analistas mexicanos tenían en 1985 que, siendo tan frágil y desintegrada la planta industrial mexicana, cualquier opción norteamericana para recuperar la perdida eficacia económica —continuación del reaganismo o alguna alternativa demócrata— repercutiría en una integración mayor y más desequilibrante de la economía mexicana, empezando por la planta industrial.

La economía norteamericana había mostrado tendencias recesivas desde 1974. Habían bajado productividad y crecimiento y se habían inflado el desempleo y el deterioro del nivel de vida. Una reconversión industrial y cambios estructurales, que estaban sobre el tapete, no podían dejar de repercutir sobre la economía más débil. Llegó a hablarse de una “taiwanización” definitiva de la planta industrial mexicana:

[...] un aumento indiscriminado de la inversión extranjera, como el que está buscando el gobierno, no sólo conduce a una mayor transnacionalización, sino que entrega la planta industrial de México a las políticas de las empresas transnacionales. El ritmo de las nuevas inversiones, los cambios en los procesos de producción y los productos, los precios, las exportaciones e importaciones, todo dependerá de la forma en que estas empresas enfrenten la competencia internacional[...].

Era previsible que, en tales perspectivas, pudieran consolidarse

[...] un amplio sector de maquiladoras para la electrónica norteamericana y japonesa y un sector siderúrgico y automotriz fuertemente integrado a la planta industrial de Estados Unidos. El conjunto de la planta productiva de México dependería de las orientaciones de esos dos sectores, produciéndose desde ahí desequilibrios económicos incontrolables.¹⁷

Sólo una democracia con sustento en las mayorías podría evitar la aceleración de un proceso de integración desigual de México a los Estados Unidos. La posición de Aguilar Zinser, como la de Castañeda y algunos otros analistas, coincidía en la conveniencia de una interdependencia productiva con los Estados Unidos, pactada de manera transparente y apoyada en un consenso nacional efectivo. Habría que articular un proyecto modernizador no excluyente y evitar el apresurado desmantelamiento de avances sociales:

Desde la perspectiva nacional, el reto de México es encontrar una fórmula de democracia que, además de atender las necesidades del desarrollo social y político de la mayoría de la población, le asegure al país un sitio digno en el mundo contemporáneo y le confiera a los intereses extranjeros un acomodo interno aceptable a ellos, pero sobre todo ventajoso para los mexicanos.¹⁸

El comportamiento de la economía tuvo lapsos de moderada recuperación. Tras el empeoramiento de 1983, hubo un leve crecimiento en 1984 seguido de un retroceso, a mediados de 1985, que ya no se detendría, hasta la fuerte caída en 1986. La decisión de pagar la deuda, aun a expensas del costo social y del crecimiento, mereció fuertes críticas. Por fin, en febrero de 1986, el presidente declaró que el Estado mexicano no estaba dispuesto a seguir sacrificando el nivel de vida de la población para exportar un porcentaje elevadísimo de recursos generados en el país, sin ningún apoyo de financiamiento externo y con una reducción a menos de la mitad de los ingresos generados por el petróleo, que había vuelto a desplomarse. Poco después, el subsecretario de Hacienda aventuró que México optaría unilateralmente por una reducción de intereses, al margen de la opinión de los acreedores. Y hasta el propio secretario Silva Herzog, tan reacio a la participación de México en un “Club de Deudores”, llegó a insinuar veladamente una eventual moratoria. En el convenio que se firmó en julio mejoraron las condiciones, pero no se redujeron intereses ni hubo mejoría sustancial en los plazos ni en los términos de pago.

Los empresarios, interlocutores del régimen

Llevar una aceptable relación con el FMI coincidió con el propósito de recuperar una confianza empresarial que había vuelto a volatilizarse tras la nacionalización bancaria. Se vendió a particulares el 34% de las acciones de la banca, se indemnizó a los antiguos propietarios y se reprivatizaron empresas de propiedad bancaria, como casas de bolsa y aseguradoras.

Si el sexenio fue gris para el mundo obrero, abundaron las señas seductoras hacia el mundo empresarial. O, en otras palabras, sólo los que podían negociar fueron apaciguados. Como contrapartida, aquellos cuya capacidad de negociación podía mantenerse convenientemente embrizada en el encuadramiento corporativo no recibieron respuestas alentadoras. Como señaló Soledad Loaeza:

[...] la desigualdad cristalizó en la capacidad de negociación de los actores políticos y en las respuestas que recibieron del gobierno: mientras que las demandas de empresarios y clases medias fueron de alguna manera atendidas, en particular las protestas contra un proceso inflacionario que amenazaba el bienestar que habían obtenido en el período 1976-1982, las clases desprotegidas no pudieron o no supieron oponerse a una política recesiva que destruía su nivel de vida y sus perspectivas en el corto y mediano plazos. [...] *Tal fue la diferencia entre los grupos que lograron defenderse de la adversidad económica y quienes no lo hicieron, que la inflación escindió a la sociedad entre quienes podían negociar los costos de la política de austeridad, y quienes sólo sufrieron esos costos.*¹⁹

Los costos en las ciudades fueron más altos que en el campo y los pagaron las clases medias; los obreros, tanto los afiliados a sindicatos oficiales como los independientes; los grupos no organizados de bajos ingresos y la numerosísima población marginada.

Dentro de una lógica de optar por el mal menor, como ha interpretado Loaeza, se atribuyó un mayor peligro desestabilizador a las impugnaciones de un empresariado en quiebra y de una clase media que tendía a desclasarse que a la reclamación de los grupos mayoritarios, ya de por sí tan deteriorados y con escaso poder para hacer valer sus demandas. A esa lógica habría obedecido, pues, y no sólo a los dictados del FMI o a la propia convicción, el acento prestado al combate a la inflación sobre el abatimiento del desempleo.

Para restablecer la alianza con los inversionistas privados, el Estado procuró convencerlos, con numerosas medidas propiciatorias, de sus buenas intenciones. Temía el presidente, sin duda, que sin el apoyo del empresariado el país se le deshiciera entre las manos.

La respuesta que obtuvo fue cauta, no decididamente entusiasta. La inversión sólo repuntó algo en 1984, mientras que prevalecía la inclinación del capital a buscar refugio en el exterior o a especular, por momentos vertiginosamente, en la bolsa. No se quería tomar riesgos a largo y ni siquiera a mediano plazo. Quizá porque no se veía clara una perspectiva de grandes utilidades. Quizá porque no se avizoraba ningún espejismo ni milagro seductor. Acaso porque la nacionalización bancaria había dejado a todos muy escamados.

El programa de privatización de empresas estatales respondió tanto a las exigencias del FMI como a las del empresariado y correspondió, además, al convencimiento de los funcionarios. Se redujo en un 70% el número de paraestatales, quedando sólo un 6% de la industria manufacturera en manos del Estado, sobre todo en bienes de capital, bienes de consumo masivo e insumos de uso generalizado. Sin embargo, se mantuvo inconformidad entre los empresarios por la parte que aún retenía el Estado y, especialmente, por Conasupo.

En el marco de numerosas medidas destinadas al salvamento de esa alianza se acudió al rescate del sector industrial de mayor dimensión y más endeudado. Tal fue la encomienda del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca). El Estado se hizo cargo, así, del pago de 12 mil millones de dólares de la deuda externa del sector privado. Un estudio reciente sobre *Reestructuración industrial en México: el caso Monterrey* describe cómo las empresas de ese grupo pudieron recuperarse después de 1982 y consolidar su inserción en la economía internacional:

Esta investigación muestra la importante intervención del Estado en las nuevas formas de acumulación que empezaron a desarrollarse en México después de las crisis de 1982, y la configuración de una nueva forma de relación entre el Estado y la élite

empresarial mexicana, que cuestiona el planteamiento de que ha disminuido la intervención estatal en la economía [...].

Lo que realmente ocurre en México es que el Estado deja de actuar directamente como empresario para dedicarse al diseño e implementación de una serie de políticas que deliberadamente orientan la actividad económica hacia la exportación y los mercados internacionales. Este proyecto estatal implica la transformación de las relaciones que el Estado había mantenido durante los últimos 50 años con el sector empresarial. En oposición a los postulados neoliberales, la economía abierta, hacia donde se dirige el país, conlleva una colaboración más estrecha entre el gobierno y la élite empresarial[...].

[...]la eliminación de subsidios y la aparente desprotección en que se deja a la gran industria no es tal. Se trata, más bien, de un nuevo tipo de protección, que si bien incluye desregulación y apertura, ésta se produce en el marco del estricto control de ciertas variables económicas que podrían perjudicar a las empresas. Por esto, las políticas de inspiración neoliberal se aplican de manera conjunta con el control de precios y salarios, tasas de interés y tipos de cambio, entre otras cosas.²⁰

No se suprimía la intervención del Estado en la economía sino que cambiaba de signo, para adecuarse a los nuevos rumbos de la economía mundial. Del total de 12 mil millones de dólares que adeudaba el sector privado, la mitad correspondía a cuatro consorcios del Grupo Monterrey (2 700 millones a Alfa; 2 300 a Visa; 600 millones a Vitro y 400 a Cydsa). Tras la crisis de 1982, hubo despidos masivos de trabajadores: Alfa redujo su personal en un 34% y Vitro en un 36%, mientras que Cydsa operaba sólo al 60% de su capacidad. La brusca caída de salarios reales en 1983 favoreció a las empresas, aumentando su excedente disponible para cumplir con el pago de su deuda. Al intervenir Ficorca, la deuda se reestructuró, convirtiéndola a pesos, para ser pagada al Banco de México según un tipo de cambio controlado, bastante favorable respecto del cambio libre.

La modernización económica fue, sin duda, la propuesta esencial de Miguel de la Madrid. Significaba actualizar, de acuerdo con las tendencias globalizadoras, el proyecto modernizador de la revolución que, a partir de Venustiano Carranza, se había consolidado en el poder tras la derrota y muerte de Emiliano Zapata. A primera vista, parecería que se descartaba algo consustancial de aquel proyecto: el papel protagónico del Estado en la promoción del crecimiento. Pero sólo varió la modalidad de intervención: el Estado renunciaría a la función empresarial para situarse tras bastidores y mover desde allí los hilos para el más óptimo desempeño de los actores privados. Lo que sí se desplazó, en la práctica, fue el cumplimiento de las metas sociales cuya satisfacción, aunque moderada, había garantizado por muchas décadas el apoyo de las mayorías, aun a pesar de que el alivio a la notoria desigualdad hubiera sido hartamente modesto. Claro que no se renunció explícita-

mente a esa función pero se desplazó, para atender al pago de la deuda y mantener abierto el crédito internacional y la confianza del capital nacional.

El “nuevo dogma” y sus impugnadores

Ante los graves impactos de la crisis y del ajuste sobre el nivel de vida de las mayorías se formuló, desde la izquierda, una fuerte respuesta crítica. Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín coordinaron numerosos análisis sobre el contexto internacional de la crisis, la deuda y el ajuste y sus impactos sociales internos. En *México ante la crisis* se pretendió ofrecer alternativas a lo que González Casanova consideró el “nuevo dogma del Estado”. Es decir, el “liberalismo tecnocrático” que identificaba a los nuevos funcionarios mexicanos con sus homólogos de los países acreedores, con el FMI y los gobiernos conservadores tipo Margaret Thatcher. Números, estadísticas y modelos servían, de acuerdo con esa crítica, más para ocultar la realidad que para mostrarla: para disimular el desempleo real, la inflación real o la capacidad de compra real de los salarios.

La crítica se dirigió también a destacar la tendencia de los funcionarios a pasar por alto argumentos que cuestionaran los propios. Las políticas de “ajuste y estabilización” se fundaban en la convicción de “estar en lo cierto”. Pablo González Casanova lo resumió así: “El rumbo sigue fijo; está trazado”.²¹

Los autores de *La disputa por la nación* también aportaron sus puntos de vista sobre los primeros efectos del recetario neoliberal. Sumando los costos del ajuste, Carlos Tello advirtió un descenso del 35% en el salario real mientras subían, en cambio, las utilidades y aumentaba en un 10% el desempleo abierto. Así como aumentaba la población que no satisfacía necesidades básicas crecía, en el otro extremo, la concentración de ingresos. El producto nacional, en cambio, apenas superaba el aumento de población cuando se había previsto alzarlo hasta un 5 o 6%. Se habían pagado, en tres años, 40 mil millones de dólares, es decir, más de la mitad del saldo total de la deuda en 1982: todo eso, sólo para cubrir intereses. La deuda misma aumentaba, mientras que las exportaciones, desafiando las expectativas, crecían menos de lo previsto. Se abría el país mientras los países industrializados se protegían más: en esas condiciones se contempló la entrada al GATT. Persistía la inflación, sólo que ya no podía atribuirse al alza de salarios o a la exageración del gasto público.

Ya no habría auge petrolero. Ya no podría pensarse en crecer al ritmo de las cuatro últimas décadas. Tampoco había que esperar copiosas transferencias de capitales de los países industrializados. Ciertamente había que exportar más, pero sin depender sólo de las exportaciones para crecer. También se requería un vigoroso

so mercado nacional, integrado por sectores cada vez más amplios de población. Apostarle todo a las exportaciones sería depender exclusivamente de algo sobre lo que no se podía influir: la reanimación de otras economías.

Según Tello, se había demostrado la ineficacia de la congelación de salarios para combatir la inflación. Convenía establecer una política vigorosa de prestaciones no monetarias y ofrecer, a precios accesibles, bienes y servicios de consumo generalizado. Un gasto público sanamente financiado tendría que ser el punto de apoyo para la recuperación económica. ¿Cómo lograrlo sin una participación real del Poder Legislativo, de los gobiernos estatales y de la población en general?

La crítica de Rolando Cordera apuntó hacia la desmesurada concentración del ingreso propiciada por un ajuste que no lograba implantar un verdadero cambio estructural. Proponía un modelo encaminado al desarrollo social, sin pasar necesariamente por un elevado crecimiento. Como quedaba demostrado por todas las evidencias, la ciudad no podía absorber a los desplazados del campo. Urgía una agricultura autosuficiente y una “nueva sociedad rural” capaz de arraigar a la gente en sus lugares de origen.

Lo pertinente era vincular la producción industrial a las necesidades sociales, asegurando una producción de bienes para el consumo de las mayorías. Al sector público le tocaba llenar el hueco que dejaban, en ese renglón, los empresarios privados: había que ofrecer a la gente satisfactores idóneos para su demanda. Según Cordera, el Estado tendría que atender a la producción de ciertos básicos, fuera del mercado y para cubrir necesidades esenciales, combinando esa acción con la producción y distribución de bienes por parte de las comunidades organizadas. Aconsejaba racionalizar la producción de bienes industriales, sobre todo de bienes de capital, y pensar en una sustitución de importaciones no indiscriminada sino selectiva y racional.

La estrategia alternativa formulada en *México ante la crisis* no proponía renunciar al mercado sino reorientarlo hacia una creciente participación de las mayorías. Tampoco prescindir de la empresa privada sino, al contrario, devolverle su importante función a las empresas medianas y pequeñas. Y, paralelamente, propiciar la empresa de autogestión, de carácter social, tanto en el campo como en la ciudad. Una sensata economía mixta no tendría que propiciar despilfarro, ni subsidios indiscriminados, ni uso discrecional de los recursos públicos.

La deseable presencia del Estado fundaría su rectoría económica en la concertación efectiva de un *nuevo pacto social*. La planeación no tendría que darse como acto burocrático sino como resultado de la movilización real de las voluntades organizadas de la sociedad civil. Era preciso suprimir el control vertical y los obstáculos burocráticos que permitían manipular, con fines políticos, a los sectores sociales y a las actividades productivas. A la participación del Estado en la producción de bienes básicos tendría que añadirse su gestión en empresas “de

punta” para insumos estratégicos y bienes de producción. Pero el Estado debería ocuparse, sobre todo, del financiamiento del bienestar social, esencialmente la educación y la salud, e intensificar la construcción de infraestructura, sobre todo para el desarrollo rural y la reorganización urbana. Un modelo así concebido propiciaría un cambio efectivo del uso de recursos en la banca nacionalizada. En suma, tanto Cordera como Tello consideraban indispensable un “cambio estructural” para impulsar el desarrollo, pero diferían del proyecto gubernamental en sus contenidos y en sus metas.

A corto plazo todos estamos ya muertos

La preocupación por la macroeconomía y la fascinación por el ajuste, con la mirada puesta en el corto plazo, dominaron los años ochenta. A lo largo de muchas décadas, la política económica había reflejado la moda prevaleciente en el ámbito internacional y, muy específicamente, en el norteamericano. El propio subsecretario de Hacienda Suárez Dávila recapituló, en 1988, cómo los vaivenes de la teoría económica, que recomendaba ahora unas metas y en otro momento las opuestas, se habían sucedido a partir de los años treinta y habían marcado el rumbo de cada gobierno.²²

La Nacional Financiera de la época de Cárdenas correspondió a la *Reconstruction Finance Corporation* del *New Deal* rooseveltiano, fundadas ambas en tesis keynesianas; la sustitución de importaciones fue, en su tiempo, ampliamente recomendada por CEPAL; la teoría del *trickle down effect*, manejada desde la época alemanista, volvió a entrar en boga en la etapa de Reagan, que coincidió con la administración De la Madrid. La Alianza para el Progreso había precedido al auge de la planeación para el desarrollo. El “desarrollo compartido” coincidió con fórmulas que favorecían la priorización de necesidades básicas o *basic needs theory*. En 1985, Rolando Cordera jugó a enunciar al revés el conocido postulado de Keynes según el cual “a largo plazo todos estaremos muertos”:

Más bien habría que decir que para países como el nuestro, tan dependientes, tan vulnerables, tan frágiles en su estructura interna, *lo que parece cierto es que en el corto plazo todos estamos ya muertos*. Tal vez aquí podamos encontrar la explicación de la enorme fascinación que sobre los economistas y políticos de México y el mundo, hoy ejercen las políticas de ajuste que en los hechos se traducen en recesos productivos de larga duración[...].²³

En la óptica de Cordera, como de casi todos los analistas de *México ante la crisis*, la “pausa mortecina” que había elegido el régimen no hacía más que alargar y agravar la agonía.

Una crítica desde la plataforma modernizadora

Frente al rechazo en bloque de muchos, que consideraban antinacional y antipopular cualquier intención de abrir la economía a la competencia o a la inversión extranjera y de reducir la dimensión del sector público, Jorge G. Castañeda aportó argumentos mucho más matizados, partiendo de un supuesto: la modernización es inevitable.

Si el indispensable cambio estructural implicaba riesgos para la estabilidad política era sólo por la falta de credibilidad que ya padecía el sistema. La deuda era el cuello de botella que obstruía un profundo reordenamiento económico. Baker habría tenido que mostrarse más convincente con los bancos, después del temblor, para hacerlos entender que la opción era recibir menos pago de México o no recibir ninguno. Los escasos fondos nuevos que llegaron a México apenas sirvieron para pagar intereses, no para crecer.

¿Cómo podía esperarse apoyo popular para un cambio estructural si la actitud frente a la deuda era interpretada como tibieza en la defensa de una postura nacionalista? ¿Cómo podía esperarse que no se leyera el abandono del proteccionismo, la apertura a la inversión extranjera y la austeridad en el gasto como concesiones a los Estados Unidos? Para la gente, pagar la deuda en las condiciones estipuladas equivalía a una severa austeridad que les recortaba dramáticamente el nivel de vida. Frente a una caída de salarios reales casi del 50% parecía inevitable la erosión del apoyo popular y, en consecuencia, la desconfianza frente a cualquier intento de romper inercias arraigadas.

Aliviar el pago de la deuda no sólo permitiría financiar el crecimiento sino ganar consenso para reformas económicas recomendables e inevitables. El autoritarismo real, intacto detrás de una democracia formal mínima, y sus secuelas de fraude, corrupción, cooptación y represión eran el otro cuello de botella, con graves repercusiones de incredulidad cada vez más extendida sobre la limpieza electoral.

Ahorrar en el pago de la deuda permitiría, por ejemplo, crear “una red nacional de salvaguarda para los damnificados de la modernización”, incluyendo seguro contra el desempleo y nueva capacitación. Lo sugería Castañeda para minimizar el costo de racionalizar una burocracia estatal que alcanzaba, en ese momento, la abultada suma de 4 568 955 personas.²⁴ La carga de empleos improductivos que habría que podar era mucho mayor en paraestatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad que en muchas secretarías. No era razonable oponerse, tampoco, a la liquidación de paraestatales onerosas. Ni a la inversión extranjera directa, sobre todo de empresas medianas y pequeñas, aunque significara suprimir el límite de 49% a la participación extranjera. Convenía inclusive cambiar la ley de inversiones extranjeras y hacer, en cambio, prohibiciones específicas para determinadas inversiones, por ramas o localización geográfica. En cuanto al proteccionis-

mo, el país no podía seguir subsidiando al sector no competitivo de la industria, que no había logrado producir bienes aceptables para el mercado interno y menos para la exportación. Castañeda llegaba a admitir la supuesta racionalidad económica de la supresión del ejido, sin dejar de reconocer sus costos sociales y políticos. Desde la plataforma de la modernización, cuestionó criterios y señaló obstáculos que interferían con su puesta en marcha. Y apuntó hacia el más conspicuo de todos: la ausencia de democracia.

Protestas sin eco

¿Hubo reacciones palpables de las mayorías ante el ajuste? En 1985 Carlos Pereyra observó que el descontento no se había aglutinado para producir un movimiento social de envergadura. Se había quebrado, sin embargo, una legitimidad procedente del origen revolucionario y del pacto con las masas mantenido, con menoscabos pero sin demasiadas fisuras, a lo largo del impetuoso crecimiento económico.²⁵

El sindicalismo oficial habría hecho en 1974 la propuesta de una *nueva sociedad*. La dirigencia sindical siguió su acostumbrada táctica de avanzar mucho más en el discurso que en los hechos. Desde el principio del PIRE hubo inconformidad manifiesta con la política salarial y el descontrol de precios.

Las presiones obreras partieron de la cúpula del sindicalismo oficial pero también de la mesa de concertación, que aglutinaba al sindicalismo independiente. Entre 1983 y 1986 se sucedieron movimientos de huelga de sindicatos universitarios; emplazamiento de huelga general de la CTM y algunos independientes; de una fracción del SUTIN y empleados de la SARH; conflicto en la Escuela Normal; movilizaciones de maestros chiapanecos y oaxaqueños; manifestaciones de descontento en el desfile de 1º de mayo de 84; diez propuestas del Congreso del Trabajo para proteger el consumo básico, a las que el gobierno respondió que *no se aceptarían presiones*; requisita de Teléfonos, con enfrentamiento entre trabajadores; huelga de mineros; tortuguismo en Mexicana de Aviación; huelga de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas; manifestaciones contra despidos masivos de empleados públicos; conflictos en El Colegio de México y la UNAM; demandas de médicos del Hospital General y del Hospital Juárez; advertencia de petroleros en el saludo de año nuevo al presidente; manifestación de 100 mil sindicalistas independientes; huelga de Dina; nuevas manifestaciones de más de 100 mil trabajadores en marzo y julio de 1986; críticas del Congreso del Trabajo y la CTM, en el mes de julio, a la política económica; manifestaciones obreras y estudiantiles por el conflicto en torno al Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la UNAM.

Las protestas campesinas, menos publicitadas, surgieron allí donde más pesaban los males inveterados de rezagos y corrupción de funcionarios agrarios o los con-

flictos en torno a la tenencia o restitución de tierras. También brotaron por el alza en bienes de consumo básico, inconformidades con precios de garantía y demandas insatisfechas de apoyo a la producción. Se iniciaron, en 1983, con un conflicto de tierras en Ocoyoacac, Estado de México. Y continuaron con una movilización de chiapanecos de la CIOAC; marchas de campesinos del Estado de México hacia la capital; una caravana de solidaridad de diversos puntos del país; una movilización de agrupados en la Coordinadora Plan de Ayala; enfrentamientos, en Chiapas, entre gente de la CNC y la CIOAC; desalojos en Tequixquiac, Estado de México; convocatoria a contingentes de organizaciones independientes en el Distrito Federal y conflictos armados entre CNC y CIOAC en agosto de 1986. En el aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata organizaron una marcha conjunta hacia el Zócalo el grupo Plan de Ayala y el movimiento urbano popular (Conamup), en un intento de fortalecerse mutuamente.²⁶

A pesar del descenso de un 30% en la inversión en el campo, el producto agrícola subió en un 6.6% en comparación con el descenso de un 2% en el resto de la producción nacional. Buscando la soberanía alimentaria, algo que no entraba en un estricto modelo neoliberal, se estableció un Programa Nacional de Alimentación y se dedicaron 3 millones de hectáreas más a la producción de cultivos básicos.²⁷

El Plan Nacional de Desarrollo reconocía la prioridad del reparto de tierra y la importancia de una creciente autogestión de los campesinos. En la reforma al Artículo 130 de la Ley Federal de Reforma Agraria se dispuso que los ejidos de futura dotación se explotarán en forma colectiva salvo cuando los interesados determinaran, en asamblea general, su explotación individual.

Importar maíz, una tragedia nacional

La reflexión sobre el campo se concentró en publicaciones de Fernando Rello y Arturo Warman. Rello sostuvo que ninguna política alimentaria sería eficiente sin una estrategia de desarrollo dirigida a satisfacer necesidades básicas. El crecimiento tendría que ser consustancial con la producción de bienes demandados por la población. Cualquier modelo de desarrollo alternativo requeriría agroindustrias. Pero no grandes complejos agroindustriales al estilo de la empresa transnacional, sino un desarrollo agroindustrial en pequeño, con campesinos que produjeran más bienes básicos para el consumo mayoritario:

Todo el aparato estatal debe cesar de ponerse al servicio de sí mismo y de los grupos rurales privilegiados, para impulsar el desarrollo de una agricultura campesina autogestionaria.²⁸

Darle de verdad la vuelta al problema agrario sólo se lograría impulsando a la agricultura de temporal y deteniendo la ganaderización de la tierra.

No había crisis de producción agrícola. Había crisis agroalimentaria. No bastaba con recuperar una alta tasa de crecimiento en la producción. No se trataba sólo de producir más sino de asegurar que los alimentos básicos llegaran a los desnutridos. A un modelo agroalimentario concentrador y polarizado había que atribuirle la falta de alimentos para los más pobres.

Ése había sido y era el círculo vicioso: los campesinos no alcanzaban a producir para las necesidades familiares, por carencia de recursos o de tierra, y por la consecuente dependencia de empleos escasos y poco remunerados en el campo, acompañada de la necesidad de comprar alimentos caros para el consumo. El modelo polarizador también se manifestaba en los extremos de sobrealimentación y desnutrición, de modo que en el campo había un 88% de desnutridos, cifra que subía gravemente a un 92% en menores de 14 años con desnutrición crítica.²⁹ Fernando Rello insistía en los efectos de la lógica acentuada por las grandes empresas agroindustriales:

Las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, juegan un papel importante en la crisis agroalimentaria. Son ellas el elemento más activo del modelo alimentario transnacional. Sus efectos son variados e importantes; aceleran los cambios del patrón de cultivos que provocan la dependencia alimentaria, establecen intereses monopólicos que bloquean las posibilidades de integración agroindustrial de los campesinos, contribuyen a aumentar la polarización del campo y del consumo alimentario.³⁰

La sustitución de maíz y frijol por cultivos más rentables como la soya, el sorgo y la alfalfa o, de plano, por la ganadería condujo, ya en 1980, a tener que importar el 25% del maíz:

En un país tradicionalmente maicero, en el que este grano es el principal cultivo de la mayoría de los campesinos, y el alimento popular más importante, esto equivale a una tragedia nacional.³¹

Lo que hundió al campo

La otra cara del problema residía en el control estatal y en la burocracia agraria. La hipertrofia de una administración que disponía de cinco burócratas por cada ejido se volvía un barril sin fondo y, a la vez, una aplanadora que sólo servía para aplastar a los productores. Pensando que los campesinos, organizados por sí mismos, serían una amenaza para el poder de esa burocracia, siempre se les había

“organizado” mal, sólo para desorganizarlos mejor. Ni la SARH ni Banrural conocían directamente el trabajo productivo, pero sí eran diestros para administrar en provecho propio presupuestos jugosos.

Frente a tales desventajas, si los campesinos habían sobrevivido era justamente porque siempre habían sabido organizarse:

Tradicionalmente, los habitantes del campo se han organizado para participar colectivamente en tareas vinculadas con la administración de recursos naturales, la salud, la educación, la impartición local de justicia y hasta con el gobierno municipal. Las organizaciones campesinas también tienen que ver con la comercialización conjunta de cosechas, el abasto o la organización de servicios productivos. La democratización de la sociedad rural significa crear nuevos espacios y expandir otros ya existentes para dar libre cauce a la expresión, participación y creatividad de los grupos rurales en todos estos campos de la actividad campesina.³²

¿Por qué la Reforma Agraria no contribuyó a resolver la situación campesina? Porque incrustó un inflexible control sobre la estructura tradicional, aliado a los intereses de empresarios agrícolas y caciques. La maraña de controles ahogó las demandas de autonomía campesina. Sólo la subordinación era admisible. Rello recordó la larga lista de demandas campesinas que siempre recibieron respuestas agresivas: una auténtica redistribución de la tierra y del agua chocó con los intereses de grandes propietarios y empresas; el control de la comercialización por campesinos afectaba intereses de comerciantes y agroempresas; la autogestión ejidal estorbaba a la burocracia; comerciantes y burócratas del sistema oficial de abasto se opusieron a que los campesinos manejaran sus propios sistemas; la burocracia ineficiente se opuso a que los campesinos contrataran agrónomos y administraran sus propias agroindustrias; concesionarios privados y paraestatales se opusieron a la recuperación de bosques comunales; empresarios agrícolas y gobierno mantuvieron las deplorables condiciones de trabajo de los jornaleros rurales; las formas de agrupación impuestas desde arriba nunca respondieron a la auténtica articulación organizativa de los propios campesinos; la burocracia, ligada a intereses locales, interfirió en la elección de representantes ejidales; los caciques y el control de los organismos oficiales impidieron una auténtica representación en los ayuntamientos locales.

El éxito de la reforma agraria en Japón, en Corea o en Taiwan contrasta con el desastre de la reforma agraria mexicana. ¿Por qué? En esos países ha funcionado espléndidamente una agricultura de parcelas de cinco hectáreas gracias al apoyo consistente de inversión, créditos y subsidios, con insumos baratos y precios adecuados. Todo se destinó a favorecer a los pequeños agricultores. Y se liquidó a un sector feudal atrasado e injusto. Creció la producción y, a la vez, los campesinos recibieron los beneficios.

¿Qué sucedió en México? Se mantuvo un modelo de agricultura polarizada, que destinó recursos financieros y apoyos del Estado a los grandes agricultores de las zonas de riego. Nunca se creyó en el pequeño campesino como el núcleo del desarrollo agrícola. Se le atribuyó ese papel al *farmer*, pero no al pequeño granjero que durante tanto tiempo prosperó en la agricultura norteamericana, sino al gran agricultor que era el ideal de los caudillos sonorenses. Se hizo, a lo largo de medio siglo, lo que Rello calificó como una “diluida y esterilizada reforma agraria”, sólo para evitar una verdadera organización de los campesinos.

Pero habría que entender claramente que hablar de organización campesina no significaba hablar de colectivización. La capacidad de asociación que siempre desarrollaron los campesinos no significa necesariamente *ejido colectivo*. La colectivización ejidal ha sido, más bien, algo inducido autoritariamente por el Estado:

La acción colectiva, independientemente de la forma asociativa que revista, significa acciones conjuntas de grupos de campesinos que buscan resolver los asuntos relacionados con la producción agrícola, comerciales o procesar colectivamente sus cosechas, combatir la intervención irracional y autoritaria de la burocracia estatal y democratizar la estructura política regional.³³

Warman, por su parte, hizo la crítica de una política agraria que seguía intentando en vano el tránsito de la sociedad rural hacia “formas superiores”, es decir, hacia la modernidad y el Progreso. Desde que empezó la Reforma Agraria, en los años veinte, se le atribuyó al ejido una función “provisional”, como “transición hacia formas más modernas y racionales”. Eso habría que replantearlo porque

[...]los campesinos sin tierra y sus dependientes, no menos de 10 millones de mexicanos, carecen de destino, de ubicación, de espacio para vivir[...]. La absorción de esa población por otros sectores de actividad económica nunca sucedió y es imposible que suceda en el futuro previsible[...]. [Sería necesario para ello] que se mantuvieran tasas de crecimiento superiores al 10 por ciento anual en las ramas más dinámicas del sector moderno.³⁴

En números absolutos, se duplicaron los campesinos, que pasaron de 13 millones en 1940 a 27 millones en 1980. Había más desnutridos que 40 años atrás y más de la mitad de los que trabajaban la tierra no poseían tierra. Como la mayoría de los sin tierra fueron acogidos por sus familiares, las parcelas que antes sostenían a una familia tenían que alcanzar para dos o tres. O se había fragmentado, de hecho, la pequeña parcela. O se buscaba un acceso temporal a la tierra por mediería o aparcería u otras formas clandestinas. Mientras el 55% del total de productores no alcanzaba más que 1.7 hectáreas de temporal, el 0.3% del total contaba con más de

200 hectáreas.³⁵ Un 70% de campesinos tenían que buscar, fuera de la parcela, ingresos complementarios. La mayor parte de las nuevas generaciones, expulsadas del campo, nutrieron la marginación de las ciudades o cruzaron la frontera.

La producción campesina es, pues, insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. No porque se produzca poco sino porque al campesino sólo le queda la mitad del valor de lo que produce y lo demás lo pierde con intermediarios, al pedir créditos usurarios o al vender barato y comprar caro. A medida que creció la población se usó más intensivamente la tierra. Hasta 1965, la producción creció a ritmos mayores que la población y luego empezó a ocurrir lo contrario. Warman lo atribuía a la congelación del reparto y a la rigidez en las formas de la propiedad privada y social.

El reparto agrario fracasó, según Warman, porque se debilitó el espíritu original de la Constitución que fue considerar a los pueblos y las comunidades como sujetos de la distribución de tierras. Al parcelar el ejido se le despojó, como entidad corporativa, de capacidad de decisión sobre el proceso productivo y se volvió sólo una unidad rígida de individuos dotados de una parcela. Sin autonomía ni recursos económicos, el ejido no pudo mejorar la tierra mediante el riego o el terraceado, ni garantizar una distribución equitativa de sus beneficios, ni transformar o comercializar la producción. Tampoco funcionaron las parcelas como pequeña propiedad porque, en su mayoría, son de temporal y no hay con qué hacerlas producir, salvo para la autosubsistencia: en el mercado no pueden competir con propiedades que, legalmente, son hasta cien veces mayores, e ilegalmente lo son muchas veces más. La idea del ejido colectivo surgió para conciliar la agricultura de escala, en zonas de agricultura comercial, con el reparto de tierra. La alternativa de colectivizar o parcelar se volvió debate ideológico, cuando se buscaba ejercer el control estatal sobre los campesinos, tanto en una como en la otra modalidad. En algunas etapas, se aceptó como dogma que la colectivización permitía conservar la eficiencia de la gran empresa agrícola capitalista.

Lo que podría restaurarlo

Las proposiciones que hacía Arturo Warman, en 1988, para replantear la reforma agraria se fundaban en demandas campesinas y en el convencimiento de que había que buscar el desarrollo del campo, con realismo, dentro de una economía pobre y con escasos recursos de inversión. Partía de un supuesto: habría pocos recursos públicos y los recursos privados no fluirían al campo mientras lo prioritario fuera la producción de alimentos básicos, porque eso no se traduce en altas utilidades. La mejor opción sería, pues, el desarrollo de la propiedad social. Es decir, el ejido, porque abarcaba a la mayoría de los campesinos y porque permitía orientar el

desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades de alimentación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores.

La propuesta de Warman era continuar con el reparto agrario que, en su opinión, sólo se hizo en serio durante los años de 1936 a 1938, para luego suspenderse la redistribución efectiva de la tierra durante los siguientes 45 años.³⁶ ¿Cómo? Transfiriendo tierra de propiedad privada a propiedad social. Opinaba que regularizar la tenencia no podía limitarse, como hasta el momento, a proteger a la propiedad privada. Y advertía que existían millones de hectáreas, dotadas a ejidos y comunidades, que nunca fueron entregadas: o bien fueron retenidas por los propietarios o posteriormente despojadas a quienes las recibieron en dotación. Lo justo sería, entonces, devolver la tierra despojada o ilegalmente retenida.

Pero, además, existían múltiples recursos para integrar una propiedad social viable: arrendar a largo plazo tierras nacionales o privadas; que los ejidos compraran tierras; compactar minifundios que así lo desearan. No se excluía el recurso de expropiación, cuando la propiedad privada excediera límites legales.

No bastarían nuevos recursos territoriales, sin embargo, para que los ejidos recuperaran su dinámica de crecimiento: haría falta plena autonomía y capacidad para ejercer la democracia interna. El cese de la tutela permitiría el surgimiento de múltiples formas experimentales de producción y asociación. Considerando a la propiedad social como sujeto eminente de interés general, hacia allí deberían canalizarse con prioridad los recursos del Estado. Pero esos recursos no debían ser administrados por organismos burocráticos sino por las comunidades y los ejidos, en ejercicio pleno de su autonomía.

Hacía falta una política de créditos, de subsidios, de inversión y de financiamiento, que permitiera la eliminación de la usura y de intermediarios onerosos y dinamizara los recursos y la producción de ejidos y comunidades. Los planeamientos de Warman, en 1988, no hacían sino reiterar lo que había venido proponiendo a lo largo de muchos años.

Tiempo de rescatar el otro sueño mexicano

Uno de los rasgos más notorios de la reciente modernización ha sido el predominio de la economía sobre la política. Del *tout revient à la politique* de Rousseau se pasó a un *tout revient à l'économie*. Todo se redujo a la economía y, en términos estrictos, a la camisa de fuerza de la deuda. La economía ficción se desinfló como un globo pinchado por un alfiler, pero el desvanecimiento del espejismo de la abundancia marcó la vida nacional con el signo de los pesos faltantes. Ya no se tomaron medidas económicas por razones políticas sino medidas políticas por razones económicas.

Hubiera sido un buen momento para recuperar, dejando atrás sueños de grandeza, la dimensión de lo pequeño. Un buen momento para consolidar el tejido básico de la nación, esa forma de “civilización alternativa” que ha procurado insinuarse debajo de los grandes proyectos sólo para quedar relegada en el desván de las utopías. No hubiera requerido demasiado dinero. No era cosa de inversiones millonarias sino de un modesto esfuerzo, en los más modestos escalones de la pirámide, para que la gente se reencontrara con su propia iniciativa y se pusiera a organizar bien las cosas pequeñas. Era el tiempo de rescatar el otro sueño mexicano.

El país de 1980 tenía el doble de campesinos que el de 1940 y estaban más desnutridos. En 1987 había 125 mil comunidades con menos de 5 mil habitantes, que juntas sumaban 32 millones de mexicanos. El número de pequeños poblados había crecido un 25%, en relación con los 96 mil de 1970. La población de las comunidades rurales aumentó además, de 1980 a 1990, en un porcentaje muy semejante al de las zonas urbanas, es decir, en un 17%, lo que significó 5.5 millones en poblados menores de 5 mil habitantes; millón y medio más en poblaciones menores de 20 mil habitantes y 7 millones en las ciudades.

En quince estados de la república, la mayoría vive en poblados menores de 5 mil habitantes y, en otros siete estados, más del 40% habita en comunidades pequeñas. Sólo 10 estados del país (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas) registran una densidad urbana que supera el 50%.³⁷

Es una falacia, pues, que el campo desnutrido se haya desvanecido de un paisaje ocupado mágicamente por el sector moderno y por una población que, en las expectativas fantasiosas, estaría en vías de volverse sector moderno. Se hace como si el México local, diverso, disperso y tradicional no existiera. Es el país clandestino, pero sólo para los que no quieren verlo ni escucharlo.

Los campesinos no se desplazan por gusto sino por necesidad. Arturo Warman insistió, en 1986, en la resistencia de la tierra y de sus hijos a someterse al destino que le adjudicaron: a resignarse a una muerte tan anunciada por los partidarios a ultranza de la modernidad. No sólo no desapareció la diversidad ni el localismo sino que persistió y se extendió. Más de 125 mil pequeñas comunidades rurales siguen resistiendo con la fuerza obstinada de sus vínculos de parentesco y de vecindad. Han persistido a pesar de los intentos del Estado de imponer formas de organización ajenas; a pesar de la invasión de los medios y del proyecto modernizador que se inculca en las escuelas; a pesar, también, de la tiranía del mercado.

Durante los años del ajuste, el sector moderno estuvo demasiado ocupado en resarcirse de sus descalabros y el Estado volvió a ir en su ayuda. Para compensar espacios momentáneamente cerrados se le abrieron otros nuevos. Acaso en el más alto nivel de decisiones se entendía la urgencia de descentralizar, de democratizar,

de encaminarse hacia una sociedad más igualitaria.³⁸ Pero la inercia aconsejó apuntalar antes y siempre al sector moderno, cuya lógica es redundantemente moderna, es decir, responde únicamente al imperativo de multiplicar utilidades. Con los escasos recursos disponibles después de pagar la deuda pública, hubo que aliviar los términos del pago de la deuda privada. Y la lógica macroeconómica no dejó espacios para pensar que no se requerían demasiados recursos monetarios para apuntalar el tejido básico de la sociedad.

Espacios para la pequeña democracia

Unos cuantos, los tercios de siempre, lo siguieron reiterando: hacía falta escuchar a la gente de carne y hueso para construir un modelo alternativo. Y la única opción era la democracia, empezando por *la pequeña democracia entre vecinos, para nombrar sus autoridades sin injerencia externa*. ¿Qué pasaría, se preguntó Warman, con un país que ha pedido prestado el futuro y ahora no tiene ni para pagar los intereses?

[...] no hay un proyecto nacional claro, del que puedan derivarse alianzas estables y convocatorias públicas. El proyecto previo, ya muy desdibujado por su tránsito de lo popular a lo empresarial pese al mantenimiento de constantes retóricas, acabó derruido por la crisis. No hay propuestas para el futuro del país[...]. Quedó manifiesto que nos apoyábamos en modelos vagos y prestados, que con una increíble pobreza asumían como nuestro futuro el presente o el pasado de otros países. Con frecuencia se recurrió a simples abstracciones verbales: desarrollo, modernización y ahora eficiencia y productividad, entre otras, para disfrazar la carencia de un modelo propio. Ahora nos quedamos sin rumbo para decirlo pronto.

Cualquier “restauración” del proyecto modernizador sería inoperante si persistía en concentrar la riqueza y multiplicar la desigualdad. Si el país salió maltrecho del “primer milagro”, no podía reincidir en la marginación para implantar el “nuevo milagro”. La mayoría de los mexicanos permanecían ajenos a la disputa por la nación que protagonizaban las élites económica, política e intelectual: *tal sería el caso de los campesinos, los indios y los marginados, cuyas demandas se traducen en la necesidad de cambios más allá de la restauración*.³⁹

En 1986 unas cuantas voces se obstinaron en repetir lo que se prefería olvidar: la presencia de una vigorosa densidad social que era el sustrato de México y que había sobrevivido, de milagro, a los sucesivos escenarios modernizadores. El país tradicional no rechazaba los frutos apetecibles del desarrollo, pero tampoco deseaba perder “lo que nos identifica como pueblo”.

Warman, Lourdes Arizpe y Guillermo Bonfil procuraron hacer aflorar esa certidumbre sobre la irrealidad de cualquier proyecto que pretendiera construir el futuro haciendo tabla rasa de un pasado que seguía presente. Bonfil propuso un *proyecto cultural pluralista* para colocar

[...] como centro dinámico del desarrollo del país a la iniciativa cultural que está latente en todas las comunidades que poseen una cultura propia: los pueblos indios, las comunidades campesinas, los barrios urbanos con una estructura consolidada[...].⁴⁰

Lourdes Arizpe señaló que todos los modernizadores tropezaron en México con una vigorosa densidad social. En los años ochenta, la tendencia a la familia nuclear introducida por la industrialización se revirtió para recuperar a la familia extensa, capaz de enfrentarse mejor al deterioro de las condiciones de vida. La modernidad no ha podido barrer, por otra parte, ese sustrato de solidaridad latente que brota en los momentos críticos, como sucedió con el terremoto de 1985.

La mayor desintegración social de la historia mexicana ha sido probablemente la de los millones de jornaleros desplazados de la tierra y de su comunidad en aras del eficientismo económico. Los ejes viales, los multifamiliares que almacenan gente, los mensajes consumistas y todas las demás manifestaciones de una “idolatría del cambio” minan a la organización social de base que, a pesar de todo, se obstina en persistir. El Estado tendría que proteger esa base comunitaria que le ha otorgado su mandato y su poder. Habría que reabrir espacios para favorecer la reintegración de esas redes de vínculos que empiezan en la familia y se abren hacia el barrio o la comunidad rural:

No se trata de rescatar del tapanco relaciones sociales obsoletas porque traen la etiqueta de ser mexicanas. Se trata de abrir espacios en la sociedad civil para que la gente vuelva a reconstituir formas de apoyo e intercambio. Con frecuencia, cuando se teme que esto ocurra es por miedo a un desbordamiento: ése es el riesgo, el riesgo que se corrió en la época cardenista, cuyo resultado fue una fuerza de las comunidades de base que hizo posible, entre otras cosas, enfrentar el sistema transnacional y expropiar el petróleo.⁴¹

Warman calificó de esquizoide la escisión entre un sistema político formal y la *civilización alternativa* de las muchísimas organizaciones locales reales. Son esas fuerzas locales las que se han opuesto a las modernizaciones forzosas. El verdadero ejercicio de la democracia está trabado por la esquizofrenia del sistema: hay que vincular a la organización real de la sociedad con la estructura política. ¿Cuál sería, pues, la única reforma política viable?

Una reforma que haga compatible la participación directa, la pequeña democracia entre vecinos para nombrar sus autoridades sin injerencia externa, con una gran democracia nacional sin exclusión.⁴²

Desde el mirador de Carlos Monsiváis se contempló el hormigueo de una sociedad que se organizaba, frente a la *perpetuación ritual del poder* y la *modernización salvaje*. Era el submundo de la modernidad, el universo de la pobreza urbana, alimentado por oleadas de campesinos en diáspora. Monsiváis observó la gestación del movimiento urbano popular desde los años setenta en el Distrito Federal y en algunas de las grandes ciudades del norte, como el brote de *un poder nuevo, al margen de las soluciones convencionales de la izquierda*. Por debajo del discurso ineficaz, incomprensible para la gente, de muchos jóvenes líderes, estaba la gente misma, los damnificados de muchas décadas que emergían a la vista del país moderno, que siempre había pasado a su lado sin verlos.

Una “Gran Revelación” volvía a ser puesta en evidencia por el terrible incendio de San Juanico en noviembre de 1984 y el terremoto de septiembre del 85. Desde todas las pantallas de TV había amonestado un alto funcionario: “No podemos cerrar los ojos y olvidarnos que en esta ciudad existen zonas verdaderamente miserables y que allí viven seres humanos como nosotros, que ahí hay niños desnutridos, que ahí hay gente que con un poco de apoyo nuestro encontraría una morada y una vida más digna”. Monsiváis advertía, a su vez:

A la gente (el pueblo) (las comunidades) le urge conducir sus propios destinos. Ya el paternalismo agotó sus persuasiones, y el ensueño del Progreso infinito ha resultado devastador. Al ahondar la crisis económica las sensaciones de insuficiencia personal y colectiva, queda al descubierto la fragilidad de los esquemas de ascenso garantizado. [...] la experiencia del terremoto le dio al término *sociedad civil* una credibilidad inesperada [...] el avance civil ha continuado y entre sus logros cuenta la democratización como estado de ánimo y cambio de mentalidades [...] no viene tanto de los adelantos de partidos y corporaciones como de la revalorización generalizada de la democracia.⁴³

No sólo Lourdes Arizpe cifraba la esperanza de llegar al segundo milenio como nación soberana en la expectativa de lograr, contra tantos signos adversos, *concebirnos más que como economía, como una sociedad*. ¿Cuándo y cómo podría darse la deseable germinación ubicua de la *pequeña democracia* y cuándo y cómo podría articularse con la actualización, por fin, de una *gran democracia nacional* donde lo único excluido fuera la exclusión? Los brotes de la pequeña democracia, sus signos de vida, empezaron a detectarse con una frecuencia inusitada en el espacio, hasta entonces poco turbulento, de la experiencia electoral. En algunos casos, como en

las numerosas reclamaciones de triunfos municipales para candidatos de oposición, parecían coincidir y empalmarse ambas propensiones.

Hegemonía en jaque: “¿hora cumplida?”

Por primera vez, en 1982, se registró un fenómeno significativo en el terreno político: el candidato del PRI a la presidencia no recibió más del 71% del total de los votos. Nada semejante se había dado desde la elección de Carranza con el 97% de sufragios, es decir, casi por unanimidad. Aun tomando en cuenta probables alteraciones en las cifras oficiales, sobre todo cuando participaron Vasconcelos, Almazán y Henríquez Guzmán, pareció evidente hasta 1982 que una mayoría considerable de electores ratificaba al sistema. Sin descontar una explicable inclinación de la gente a sentir que su voto “contaba” y no era “derrotado” por anticipado puesto que, en la convicción generalizada, prevalecía un presupuesto indudable: “El PRI siempre gana”. ¿Para qué, pues, votar en contra? El desplome del sueño petrolero se reflejó, sin duda, en las elecciones de 1982. Como apuntó Lorenzo Meyer, se quebrantaba la tercera de las promesas incumplidas por la revolución: antes habían fallado la promesa maderista de democracia y la promesa cardenista de justicia social; ahora se esfumaba la promesa alemanista de crecimiento y seguridad económica.⁴⁴

Era muy explicable, pues, el descenso de votos en 1982. En el transcurso del nuevo sexenio las elecciones polarizaron descontentos de diversos sectores, demandas y cuestionamientos de la hegemonía del sistema. Por primera vez, quizá como un signo positivo de modernización, las urnas empezaron a ser vistas, como nunca antes en la historia del país, como la vía idónea para canalizar, dado que el consenso había entrado en crisis, una exigencia de democracia. La revolución, cuando parecía extinguirse, volvía a su punto de partida y, después de haberle dado muchas vueltas al nopal de los milagros, demandaba el cumplimiento de la primera de sus aspiraciones escamoteadas.

¿Sería la crisis, como lo deseó Lorenzo Meyer, la partera de la democracia? ¿Se daban ya las condiciones para dismantelar el sistema autoritario y encaminarse hacia otro plural y abierto? El espectro ideológico de impugnación electoral a la hegemonía del partido único no fue homogéneo.

En una primera etapa se dio el fortalecimiento panista en los estados fronterizos del norte, cohesionado por un rechazo empresarial a la nacionalización bancaria, que era compartido por sectores medios. En una segunda etapa se ahondó el descontento en sectores populares de la capital y otras regiones del país. El ajuste arreció sus costos y la factura fue presentada en las elecciones presidenciales de 1988 con un voto a la izquierda que fue, sobre todo, un voto contra la aplicación acelerada del proyecto neoliberal.

La polarización del ingreso le acreditaba un 60% al 20% más próspero y apenas un 2% al 20% más pobre. El estrato superior, 10 veces más rico en 1950, ya era 30 veces más rico en 1985.⁴⁵ Más que una clara discriminación del electorado entre plataformas partidistas y/o ideológicas, las votaciones potenciaron la carga negativa de un rechazo. Más que decir *sí* a programas específicos decían *no* a un sistema que había dejado de articular el consenso.

En 1983 el partido oficial perdió once presidencias municipales en Chihuahua, incluyendo la capital y Ciudad Juárez, que representaban el 70% de la población; y perdió otros treinta ayuntamientos en varios estados, incluyendo San Luis Potosí, donde triunfó el candidato del Frente Cívico. En el centro y sur (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla) triunfaban fracciones de izquierda. En Coahuila estallaron conflictos, en 1985, en los municipios de Monclova, Saltillo y Piedras Negras. En ese año, el PAN se proclamó ganador en la pelea por el gobierno estatal en Sonora y Nuevo León, tras una ruidosa campaña con apoyo empresarial y tupida publicidad del otro lado de la frontera sobre turbios manejos electorales del partido en el poder. Así se llegó a las muy impugnadas elecciones de Chihuahua en 1986 que provocaron, además de protestas partidarias, las de un grupo de veinte intelectuales que, incluyendo a Octavio Paz, pidieron la anulación de los comicios por existir “dudas razonables” de su legitimidad.

En junio de 1985, Octavio Paz había escrito un artículo con peso de losa funeraria:

En 1968 se abrió el período de revisión de nuestro sistema. Hoy la pregunta se ha vuelto imperiosa y la respuesta impostergable: o damos un paso definitivo hacia la democracia o la nación se estanca[...]. Centralismo y burocracia son dos vasos comunicantes que se alimentan mutuamente. El centralismo es la expresión de los grandes monopolios económicos del Estado [y de muchos privados que son sus aliados], de los monopolios culturales en las grandes ciudades y, en fin, de los monopolios políticos. Tenemos que acabar con todo esto. El único método conocido para lograrlo es la democracia [...] por sí sola, la democracia no puede resolver nuestros problemas. No es un remedio sino un método para plantearlos y entre todos discutirlos. Además [y eso es lo esencial] la democracia liberará las energías de nuestro pueblo.⁴⁶

Como ha señalado Jacqueline Peschard, la expresión del descontento a través de las urnas fue un fenómeno principalmente urbano y encabezado por los sectores modernos, que hicieron de la democratización electoral una consigna. En las elecciones de 1983 empezó a canalizarse la protesta contra la incapacidad del régimen para satisfacer las expectativas de prosperidad de los sectores medios. En las elecciones de 1985 se dio una polarización en el norte, con fuerte presencia del PAN, que algunos interpretaron como síntoma de una nueva modalidad bipartidista. Una parte del empresariado se radicalizó, pensando que no podía confiar en el sistema y buscando cargos de elección bajo el emblema del PAN. En las elecciones de Chihuahua,

en 1986, se desplegaron tácticas de desobediencia civil, se emprendió una “caravana para la democracia” que llegó hasta Querétaro y, tras lo que se consideró un fraude, se bloquearon puentes y prominentes panistas hicieron huelga de hambre.

La aprobación de una reforma electoral en 1987 no logró contrarrestar la presión. El fenómeno de impugnación al sistema desde la derecha, que culminó en Chihuahua/86, conjugó la molestia empresarial contra un régimen que había hecho posible la nacionalización de la banca con las presiones de una parte de la jerarquía eclesiástica, que buscaba ganar terreno ideológico y presionar por reformas constitucionales que favorecieran a la Iglesia. Los grupos medios resintieron considerablemente el desplome de las expectativas de prosperidad del *boom* petrolero. Y algunos de sus estratos más bajos, la pérdida de poder adquisitivo, el alza de tarifas de servicios públicos, el pago de más impuestos y la contención salarial. Al ir avanzando las medidas neoliberales, se fue modificando la evaluación del régimen por los empresarios. Pero se deterioró el apoyo de los sectores más desprotegidos, que habría de aflorar en las elecciones de 1988.

La impugnación del sistema desde la izquierda fue afinándose a lo largo del período, hasta llegar a desplazar al PAN, en las elecciones del 88, como segunda fuerza política nacional. La proverbial heterogeneidad de facciones que mantuvo fragmentada a la izquierda, durante muchas décadas escindida en sectas dogmáticas y poco afines a los sentimientos democráticos, parecía en vías de superarse en 1981. Cinco organizaciones se fusionaron ese año en el PSUM (Partido Socialista Unificado de México). Al margen de la organización partidaria se dieron movimientos sociales entre campesinos, como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; maestros (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación); obreros (Coordinadora Sindical Nacional); marginados de la ciudad (Conamup), y estudiantes (CEU). Fue, como se ha dicho, la “otra cara” de la izquierda o el surgimiento de la “izquierda social”.

En Juchitán, Oaxaca, confluyeron en escena modernas filiaciones partidistas con viejas reclamaciones de tierras comunales y de representación auténtica en el ayuntamiento. Carlos Monsiváis hizo la crónica de aquellos episodios donde las persistentes aspiraciones de los pueblos a ejercer con autonomía la “pequeña democracia” encontraron apoyo en estudiantes y obreros que, desde los años setenta, coincidieron con los campesinos en la peculiar alianza de COCEI.⁴⁷ Se dio allí un fenómeno paradigmático de “resistencia cultural” insertado en el mecanismo de la política electoral. Aquel episodio, corolario de signo opuesto a los ocurridos en el norte, suscitó un incisivo comentario en la revista *Vuelta*:

Después de las elecciones de Chihuahua, Durango y Juchitán, la calma ha descendido sobre la nación [...]. Los medios de comunicación de la ciudad de México, con rarísimas excepciones, entonan aleluyas en loor de Nuestra Señora de la Unanimidad y condenan a los opositores al basurero de la historia.⁴⁸

Si el PAN predominaba en el norte, la izquierda tenía presencia en estados del noroeste como Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora y, al noreste, en Tamaulipas; también la tenía en Veracruz y en Hidalgo y desde 1979 esa presencia se empezaba a insinuar, con un 20% de votación, en el Distrito Federal. Sin embargo, el tránsito de las catacumbas a la luz del día no fue fácil y las anacrónicas herencias estalinistas siguieron pesando dentro del PSUM, para contrarrestar los propósitos más lúcidos de encontrar caminos democráticos.

Pero el fenómeno más novedoso e interesante del período estuvo en la impugnación a los procedimientos del sistema que se gestó en su interior y que generó, en 1986, a la Corriente Democrática del PRI. Al principiar el año de 1987, en la XII Asamblea, la Corriente impugnó la política económica y el procedimiento antidemocrático en la designación de candidato presidencial. Con esa disidencia desgajada del sistema se encontraron un partido de centro (el PARM); los que eran considerados “paraestatales de izquierda” (PPS, PST y PFCRN) y, más adelante, el PMS (fusión del PSUM y el PMT) y el PRT para integrar un Frente Democrático Nacional, que fue calificado como de centro-izquierda y que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la república.

Una generación sacrificada

Al finalizar 1987, tras la designación de candidato oficial, sobrevino una cuarta crisis (si se consideran como tales los acontecimientos del 68, del 76 y del 82). La cotización de valores emitidos por el gobierno en gruesas cantidades había estimulado la afluencia de inversionistas hacia la banca paralela. Hubo retorno de capitales y creció la especulación desde mediados de 1985, cuando se notaba una leve recuperación, para dispararse después, sin sustento en la economía real, hasta llegar a ofrecer ganancias de un 600% cuando el índice de cotizaciones se multiplicó hasta 70 veces.⁴⁹

Al día siguiente de la designación del candidato, el gobierno decretó el cierre del mercado bursátil. Molestos por una intervención que interfería con la ley de la oferta y la demanda, los intermediarios financieros provocaron una baja en las cotizaciones. Un desplome imprevisto en las bolsas extranjeras aceleró la caída estrepitosa de la bolsa mexicana. Según el Banco de México volaron 3 mil millones de dólares en aquella primera quincena de octubre de 1987. La devaluación del peso se produjo en medio de un alza de precios, de casi un 50%.⁵⁰

Hubo que recurrir a un Pacto de Solidaridad Económica, concertado por el gobierno con los empresarios y las centrales obrera y campesina, para intentar contener la inflación galopante. Se aumentaron salarios, de emergencia, en un 15% a la vez que se subían en un 85% las tarifas telefónicas y eléctricas, el gas doméstico

y la gasolina, con la promesa de no incrementarlos por lo menos en dos meses. Se anunció una canasta de productos básicos a precios controlados. Mientras se aceleraba el programa de liberalización comercial el proyecto neoliberal se veía obligado a recurrir, de nuevo, a las viejas alianzas corporativas.

En tales condiciones comenzó el año electoral de 1988. Poco antes había aparecido en la revista *Estudios Económicos* un análisis de Nora Lustig sobre la crisis y los niveles de vida. Aunque sólo abarcaba hasta 1985, los datos eran muy significativos. En 1977, el 35% de las familias percibían ingresos menores al salario mínimo, que equivalía a 120 dólares al mes. Había 19 millones de desnutridos, 13 de los cuales vivían en el campo. En 1981 morían 50 de cada mil niños nacidos vivos (más que en Malasia o en Paraguay). Un 12% nacía con peso inferior al normal (siendo el 10% el promedio de América Latina). El 45% de la población no recibía atención gratuita de salud en el primer nivel. Al principiar los años ochenta había, por lo menos, 22 millones de analfabetos. Un 22% de viviendas carecía de todos los servicios; la mitad no recibía agua potable ni tenía drenaje y la cuarta parte no disponía de luz eléctrica. A esa insatisfacción de necesidades básicas se había sumado el deterioro del ajuste.

En medio de la recesión, la producción agrícola no descendió gracias a la abundancia de lluvias y a que los precios, debido a las devaluaciones, subieron más que la inflación: la agricultura comercial en gran escala resultó favorecida. Pero el 56% de los productores son campesinos de infrasubsistencia, que dependen de jornales para sobrevivir, y su precario ingreso bajó un 32%.

Los salarios en las ciudades bajaron en proporciones diversas: desde un 45% en la construcción hasta un 1 916% en servicios financieros. Los salarios mínimos “nominales” se fijaron de acuerdo con la inflación “esperada”, que se desbordó considerablemente. Según datos del Seguro Social, el porcentaje de trabajadores permanentes con salario mínimo o menor fue creciendo de 13% en 1982, a 28% en el 83, a 29% en el 84 y a casi 38% en el 85.

Las estadísticas oficiales consideran empleado a cualquiera que trabaje por lo menos una hora a la semana. Sus datos, por lo tanto, son irreales. Era notorio, de cualquier manera, que había crecido mucho el trabajo informal y, a la vez, las redes familiares de solidaridad como estrategia de sobrevivencia: muchos que decían trabajar lo hacían sin remuneración y sólo a cambio de alojamiento y comida.

¿Cómo afectó la disminución del gasto público al desarrollo social? Si en 1975 se le asignaba un 21%, ya en 1981 había bajado al 16% y en 1983 descendió hasta el 13%. La contracción del gasto repercutió gravemente en el sector salud, donde el desplome de salarios reales se reflejó en descenso en la calidad de los servicios, a lo que se sumó el deterioro en el mantenimiento de instalaciones. En el sector educativo bajó el pago a los maestros, profesores e investigadores, con efectos difícilmente cuantificables.

Los subsidios a alimentos básicos, que antes se otorgaban directamente a productores, al margen de los precios controlados de pan, tortilla, frijol, huevo y carne, se trasladaron teóricamente al consumidor, a través de Conasupo. Pero en sólo un año el subsidio bajó realmente en un 43%. Los alimentos básicos subieron, en proporción, más que todos los demás bienes y, por supuesto, mucho más que los salarios. La canasta básica, que en 1982 podía adquirirse con el 30% del salario mínimo, se llevaba el 50% en 1986. Según encuestas del Instituto Nacional del Consumidor, las familias que ganaban menos de dos salarios mínimos tuvieron que recortar el consumo de todos los alimentos, con excepción de la tortilla.

La pérdida de ingresos reales entre los pobres se reflejó en la deficiencia nutricional de los niños, que aumentó enfermedades y la tasa de mortalidad. Si en 1981 un 5.7% de niños se enfermaban por desnutrición, en 1984 la proporción había subido a 12.4%. La pérdida de ingresos reales se reflejó, también, en el acceso a la educación: el número de niños matriculados en primer grado bajó a -7.9% entre 1981 y 1984 y el total de niños en la primaria a un -3.7%. Nora Lustig lo atribuyó a la necesidad imperativa de las familias de recurrir a los niños para obtener ingresos adicionales, trabajando o pidiendo limosna. Por otra parte, el porcentaje de robos había subido ya, en 1983, un 65%. Las conclusiones de Lustig eran graves:

[...] hay procesos y costos irreversibles: una vez que se implantan la desnutrición, la falta de educación adecuada y el desarrollo de hábitos destructivos, es muy difícil, por no decir imposible, erradicarlos, porque son problemas que quedan incorporados literalmente en la población específica que los padece. Por lo tanto, es de esperarse que las consecuencias de los costos sociales se dejen sentir, por lo pronto, durante una generación.⁵¹

¿Qué tantos y qué tan pobres?

La primera parte de la reciente investigación de Enrique Hernández Laos sobre *Crecimiento económico y pobreza en México* no examina la insatisfacción de necesidades básicas, a partir del ajuste, debido al recorte del acceso a bienes y servicios proporcionados por el Estado. Pero se ofrecen numerosos datos significativos sobre lo que el analista llama “la década de involución económica” y también sobre la inmediatamente anterior. Con rigurosos parámetros, se manejan los conceptos de *pobreza absoluta* y de *pobreza extrema*. *Pobreza absoluta* significa no alcanzar a satisfacer necesidades básicas; *pobreza extrema* significa no alcanzar a cubrir las necesidades más perentorias de alimentación, ni siquiera la canasta “submínima”, y carecer de servicios de educación y de salud.

Según los cálculos de Hernández Laos, al terminar la etapa del “milagro” padecían pobreza absoluta 32 millones de mexicanos, cifra que subió a 37 millones en 1977. En términos relativos, sin embargo, la proporción de pobres en el total de habitan-

tes, que era del 78% en 1963, había descendido a un 48% en 1981. Para 1988 la tendencia había vuelto a revertirse, de modo que el 60% de los mexicanos, unos 50 millones, eran pobres. Un 28% de los pobres, es decir, 23 millones vegetaban en pobreza extrema. Las clases medias fueron diezmadas y muchos pasaron a engrosar las filas de los pobres. La pobreza absoluta creció, entre 1981 y 1988, un 50% más que la población, *regresión histórica sin precedente*: nacieron 11 millones de mexicanos y el total de pobres subió en 17 millones.

Es comprensible que, tras cuatro décadas de expulsión de campesinos hacia las ciudades, en los años ochenta hubiera proporcionalmente más pobreza urbana (un 60%). Pero más del 80% de la población campesina se encontraba en la pobreza absoluta y un 52% apenas sobrevivía, en pobreza extrema:

En resumen, la incidencia de la pobreza en México no sólo es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, sino que en aquéllas las condiciones de pobreza son más agudas, toda vez que una proporción mayor de la población rural vive en condiciones de pobreza extrema, y estas carencias aumentaron notablemente durante los primeros años de la crisis de la década pasada[...]. Casi la totalidad del aumento absoluto de la población pobre se concentró en las áreas urbanas, poniéndose así de manifiesto las repercusiones preferentemente urbanas de la crisis. En las áreas rurales, la crisis se manifestó en un incremento notable, en términos absolutos y relativos, de la población en condiciones de pobreza extrema.⁵²

El empobrecimiento absoluto tuvo su contrapartida en una reconcentración de riqueza en la cúpula: mientras la mitad de la población, unos 42.5 millones, sobrevivía con menos de dos salarios mínimos (200 dólares al mes), apenas 4.5 millones de mexicanos acumulaba ingresos mayores a veinte salarios mínimos (más de 4 mil dólares al mes). El salario real había bajado un 46% en relación con los primeros meses de 1983:

Aunque no se dispone de estudios que analicen la relación puntual entre desempeño económico y comportamiento del electorado en México, se puede suponer que los efectos electorales de semejante desempeño económico no podían ser favorables. Perder la mitad del poder adquisitivo del salario y además tener dificultad para encontrar un empleo estable en el sector formal, no es una situación que incline a pensar favorablemente del gobierno en turno.⁵³

Campo minado

Dados los costos sociales del ajuste, era lógico, como advirtió Juan Molinar Horcasitas, que las grandes masas de asalariados le regatearan su apoyo al PRI, absteniéndose

de votar o haciéndolo por una candidatura de oposición. Con la postulación de Manuel J. Clouthier, el PAN mostró una notoria disposición a no transigir, a adoptar una postura radical contra el sistema y a defender apasionadamente la limpieza del voto. Aunque su propuesta económica no difería mucho de la puesta en práctica por el partido en el poder, la propuesta política, centrada en el respeto al sufragio, esgrimía una demanda que se colocaba ya en el centro de las inquietudes y que apuntaba hacia la legitimidad del sistema. La propuesta del FDN, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, partió de un llamamiento previo de la Corriente Democrática.

Las demandas de la Corriente impugnaban abiertamente el proyecto puesto en marcha. La reiteración del verbo *recuperar* en aquel texto y el uso de términos como *reconquistar* y *renacer* eran sintomáticos de un contenido que proponía, en síntesis, un reencuentro con los principios originales de la Revolución Mexicana, es decir, con los de su vertiente nacionalista y popular. Se hablaba de involución histórica, con progresiva concentración del ingreso y “abatimiento irracional de la productividad y de la calidad de vida de los mexicanos”.

La escisión del ala izquierda del PRI y su vinculación sucesiva a varias tendencias del mismo signo, aunque de diversos orígenes y modalidades, incidió con un peso considerable en el futuro proceso electoral. Un estudio minucioso de lo que el autor calibró como “la caída del sistema hegemónico”, incluyendo sus antecedentes y el contexto en que se inscribieron las elecciones de 1988, se recogió en *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*, de Juan Molinar Horcasitas, que procuró atenerse a la información comprobable, sin cuestionar el cómputo impugnado por la oposición.

La segunda mitad del sexenio, a partir del terremoto de 1985, fue especialmente infortunada por la acumulación de circunstancias agraviantes para el electorado. Después del terremoto, se hizo notoria la distancia entre las autoridades y la población del Distrito Federal. En el hueco que dejaba el gobierno se abrió camino el movimiento de los damnificados, primero sólo con fines de rescate y después para asegurar tareas de reconstrucción, hasta convertirse en un movimiento de organizaciones vecinales. A pesar de mostrarse reacias a dejarse capitalizar por uno u otro partido, incluyendo al PRI, las organizaciones fueron ganando cohesión y permanencia, es decir, fueron consolidándose como movimiento urbano popular. El decreto expropiatorio de predios, que abarcó a sectores más amplios de población, fue una prueba de que el Estado reconocía esa nueva presencia política. Otra lo fue la cristalización de la Asamblea de Representantes, que sería elegida en los comicios presidenciales de 1988. Molinar señaló que la politización de los movimientos de vecinos propició la postulación por partidos de oposición, sobre todo el FDN, de varios de sus líderes.

Otro movimiento social que incidió en las elecciones fue el movimiento estudiantil del CEU, que brotó en 1986 y acabó por desbordar los límites universitarios,

culminando con un mitin de Cuauhtémoc Cárdenas en la Universidad, en mayo de 1988. Los mítines en apoyo de esa candidatura “se incluyen entre las mayores manifestaciones políticas que recuerde la capital”. También el PAN, antes renuente a las movilizaciones masivas, recurrió con éxito a esa modalidad. En el norte del país, el repudio al centralismo encarnado en el PRI polarizó agravios que inclinaban a atribuirle todos los males nacionales. La turbulencia por inconformidades electorales se multiplicaron, a partir de 1985, en otros rumbos. La arena electoral era “un campo político minado que estallaba en cuanto era sometido a presiones del electorado”. El comportamiento de la economía, en la segunda mitad del sexenio, acabó de exacerbar los ánimos impugnadores.

A mediados del 85 la inflación había alcanzado su nivel más bajo, al situarse en un 53.4%; el saldo positivo de la balanza comercial se había duplicado entre 1982 y 1984; el déficit financiero había descendido al 9.6%. El costo social del ajuste fue más leve en la primera mitad del 85: ligera recuperación del salario real y del empleo y un respiro en el deterioro del poder adquisitivo. Todo se revirtió en el segundo semestre, cuando volvieron a caer los precios del petróleo, provocándose lo que el presidente calificó como “un terremoto económico”. La economía volvió a estancarse y se disparó la inflación. La moneda empezó a devaluarse drásticamente, de modo que el peso perdió en año y medio 75% de su valor. Cuando se “destapó” al candidato oficial, la inflación estaba en un 135%. Volvió a bajar la productividad y el nivel de empleo, a la vez que se contraía dramáticamente el salario real. Al desplome de la bolsa siguió un “plan de choque”, el Pacto de Solidaridad Económica, que logró devolver la inflación, que en febrero del 88 había crecido hasta 179%, a un 135%. El Pacto obligaba de nuevo a “apretarse el cinturón”:

En síntesis, durante el trienio 1985-1988 se conjuntaron múltiples factores de tipo político, ideológico, partidario, electoral y económico que terminaron desembocando en la crisis final del sistema de partido hegemónico que estalló entre el 6 de julio y el primero de diciembre de 1988.⁵⁴

Elecciones aciagas

La verdadera “caída del sistema” no habría sido la del sistema de cómputo, denunciada ante la Comisión Federal Electoral por el comisionado panista Diego Fernández de Cevallos al atardecer del 6 de julio. Lo que se habría agotado, según Molinar Horcasitas, habría sido el sistema en su conjunto, el sistema político, *después del más aciago proceso electoral federal realizado en toda la historia posrevolucionaria de México*. Aun aceptando como válidos los datos oficiales,

[...]por primera vez en la historia el Presidente de México había sido electo con menos de la mitad de la votación. Las mayorías absolutas se habían perdido.⁵⁵

La primera cifra computada registró un 48.7% para el candidato del PRI. La CFE dio después, como cifra oficial, un 50.74% de votos. Para que el PRI pudiera contar con 260 diputados en la Cámara que se constituiría en Colegio Electoral y, de esa manera, calificar por sí solo el triunfo de su candidato, se modificó aquella primera cifra, que sólo registraba una mayoría relativa, para oficializar la de mayoría absoluta. ¿Cómo? Se omitieron del cómputo final 700 mil votos anulados y poco más de 14 mil votos emitidos a favor de candidatos no registrados.

Se le reconocieron a Cuauhtémoc Cárdenas un 31% y a Clouthier un 16.8% de sufragios. Cárdenas habría ganado en el DF, en Michoacán y en Baja California y Salinas de Gortari en todos los demás estados. Clouthier, según esos datos oficiales, no habría triunfado en ningún estado. La impugnación de tales resultados por la oposición los tiñó de incredulidad y desconfianza, en medio de *una atmósfera de imposición*.

La oposición exigía abrir los paquetes electorales para analizar las actas y contar los votos: sólo se publicó el resultado del 55% de las casillas y se reservó la información sobre las restantes 24 643 casillas. Los diputados priístas rechazaron las propuestas opositoras de “limpiar” la elección y, mientras unos y otros se enfrascaban en una larga discusión en la Comisión encargada de dictaminar el triunfo presidencial, el “dictamen” que por fin se aprobaría era elaborado fuera de esa Comisión.

Ese dictamen ignoró los documentos originales contenidos en los paquetes electorales y, con los votos en contra del FDN y el PAN, fue sometido a votación y aprobado por 263 votos a favor y 85 en contra.⁵⁶

Los niveles de sospecha que suscitaron las elecciones se expresaron en diversos análisis. *Radiografía del fraude (30 de noviembre/88)* expuso las objeciones del FDN y afirmó que los estados con mayor manipulación favorable al PRI habían sido Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Pablo González Casanova comparó cifras de las actas publicadas con las de actas no abiertas y encontró coherente la argumentación del FDN: para obtener la votación atribuida al candidato del PRI, habría tenido que obtener en las casillas que no pudieron ser revisadas el 67% de los votos, es decir, nada menos que el doble de lo obtenido en las que sí fueron abiertas. Las 1 434 casillas “zapato”, con 100% de votación para el PRI, representaron más del 8% del total acreditado a ese partido: más de 400 mil votos. La Fundación Arturo Rosenbluth, por su parte, registró sobreempadronamiento considerable en seis estados: Chiapas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León y Puebla.⁵⁷

Análisis del Instituto de Propositiones Estratégicas (IPE) y del Centro de Investigación, Promoción y Análisis Integral (CIPAI) concluyeron que *hubo graves alteraciones en la votación del 6 de julio*. Un análisis matemático y estadístico fundado en el

“coeficiente de Pearson” determinó 58 distritos con anormalidades, que coincidían con los 60 que Cárdenas había propuesto revisar, para “limpiar” la elección:

Si no se hubiera alterado el resultado de esos 58 distritos, la suma de diputados del PAN y del FDN hubiera sido superior a la del PRI, es decir, con mayoría opositora. Sin embargo, [...] la elección presidencial no modificaría los resultados [...]. Salinas hubiera ganado de todas formas, pero con un margen más pequeño, de 3 o 4% sobre Cárdenas.⁵⁸

Comparando datos de las diversas investigaciones se pudo concluir que los estados con mayor huella de fraude fueron Chiapas, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Yucatán. Alberto Aziz Nassif y Juan Molinar Horcasitas se aplicaron a hacer una “tomografía del fraude”, partiendo de los datos oficialmente publicitados por no existir tampoco pruebas fehacientes de todas las impugnaciones del FDN. Aun así concluyeron:

[...] se puede afirmar que el fraude fue masivo y estuvo orquestado como una operación de Estado, es decir, que no fueron errores humanos aislados, sino que se manipuló la elección para obtener resultados distintos a los que se emitieron en las urnas. Este fraude masivo se llevó a cabo en distritos de tipo rural, en donde no existió prácticamente ninguna vigilancia de la oposición.⁵⁹

El análisis de Aziz y Molinar confirmó el fraude que habría servido para modificar la composición de la Cámara de Diputados que, de otra manera, hubiera estado integrada por una mayoría del FDN y del PAN. Los investigadores sugirieron, además, que según los datos accesibles parecería que Salinas sólo obtuvo un 3 o 4% de mayoría sobre Cárdenas. Ese cálculo se basaba en la muestra de las 29 999 casillas que sí dio a conocer la CFE. La única manera de sacar otra conclusión habría sido revisar los paquetes electorales, algo que ni siquiera el Colegio Electoral tuvo la oportunidad de hacer.

Esos paquetes permanecieron en el sótano del Palacio Legislativo, resguardados por el ejército, donde sobrevivieron a un incendio que destruyó buena parte del edificio. Su destino era, sin embargo, ser devorados por el fuego: el horno crematorio de San Juan de Aragón los destruyó, por fin, en los últimos días de 1991, por acuerdo de la mayoría de la Cámara, que alegó falta de espacio para seguir guardándolos.

El mayor costo de aquellas *elecciones aciagas* fue la suspicacia generalizada de la opinión pública. La oposición manifestó que tan graves irregularidades podían determinar la nulidad de los comicios. El PAN sostuvo que lo pertinente sería anular el proceso. El candidato del FDN se proclamó triunfador el 9 de julio, durante un mitin en el Zócalo, y llamó a una movilización popular en defensa del voto.

Reclamación democrática vs. despotismo ilustrado

Dos meses después de las elecciones de 1988 parecía muy oportuno el título de una copiosa reflexión sobre *El reclamo democrático* que recogía los resultados de un seminario realizado en 1986.⁶⁰ Cuando en el voto popular se reflejaban los resultados de las medidas económicas, se articulaba con afán de coherencia la demanda de modernización política que había empezado a formularse en 1968. Devolver legitimidad al ejercicio de la cosa pública y buscar la modernidad sin afectar despiadadamente a las mayorías parecía impostergable. Aquel título presagiaba una “nueva saga” de la política nacional. Ya en 1986 había escrito Gabriel Zaid:

Desde que México pretende ser moderno (o, para ser exactos, desde que las minorías educadas pretenden modernizar al país), prevalece la contradicción del despotismo ilustrado: la modernización impuesta desde arriba. Es una contradicción porque, al imponerla, el modernizador actúa premodernamente [...]. El despotismo premoderno del poder modernizador ya no puede parar una revolución invisible, masiva, incontenible, porque es demográfica: la explosión de la población moderna[...]. Por primera vez, millones de mexicanos han rebasado en modernidad a sus gobernantes, y tratan de llevarlos a rastras al progreso, con una modernización exigida desde abajo, en vez de impuesta desde arriba.

La modernidad a la que se refería Zaid era, por supuesto, la modernidad política, inexistente sin el ejercicio de la democracia. Entrar al GATT, o no entrar al GATT, podría ser, o no, lo mejor para el país: *Lo que no es posible en una sociedad moderna es que un solo voto lo decida.*⁶¹

Lo cuestionable no sería tanto la modernidad económica como su imposición autoritaria. Los ciudadanos tenían derecho a discutirla y, en todo caso, a aprobarla o rechazarla, global o selectivamente. Lo inaceptable era ignorar la pluralidad de puntos de vista de una sociedad que reclamaba, cada día con mayor decisión, ser tomada en cuenta.

Lorenzo Meyer se aplicó entonces a rastrearle la genealogía a esa aspiración democrática. Presente en cabildos, gremios, comunidades religiosas, comunidades indias, jamás logró incidir en el proyecto nacional, es decir, en la “alta política”.⁶² La vocación de autonomía persistió en la expresión local del consenso, en corporaciones y pequeñas comunidades. Pero la cultura del voto, moderna y liberal, no se desarrolló nunca. En 1910, de manera sorpresiva, emergió como el proyecto de un segmento de la élite, cuando Madero resultó el primer mandatario verdaderamente electo en la historia del país.

Un mandato sutil y contundente

Dos libros pretendieron, en 1988 y 1989, hacer un balance crítico de la posrevolución: *Después del milagro* y *A la sombra de la Revolución Mexicana*. Aguilar Camín y Lorenzo Meyer evaluaron las elecciones de 1988 y sus consecuencias para el sistema:

El auge del neocardenismo dio vida electoral y partidaria a la cuestión social en un país que tiene el corazón echado a la izquierda. *Las elecciones de julio equilibraron el juego partidario creando, en unos meses, un espectro de opciones que en verdad representa y expresa la voluntad nacional[...]. Fueron, en ese sentido, una clara advertencia de rechazo del camino elegido. En el aluvión del cardenismo, significaron un voto de regreso a las fórmulas ideológicas y políticas de la Revolución Mexicana[...].* Es un lugar mitológico, benigno y deseable, que probablemente nunca existió del todo en el pasado, pero que incendia y mueve la imaginación de millones de mexicanos, ansiosos de reponerlo en su futuro [...]. Bajo la convergencia cardenista, *los electores de julio cuestionaron el camino de la modernización del gobierno actual y buscaron en el pasado —en el pasado populista e ineficiente que se recuerda, pese a todo, como mejor— una vía menos ajena a las tradiciones y a la historia del país que la emprendida en los ochenta por vía del ajuste estructural de la economía y el Estado. Fue otro mandato sutil y contundente por la recuperación del equilibrio.*⁶³

[...] la crisis económica hizo que en un período relativamente corto —un sexenio— el panorama tradicional cambiara de manera drástica y empezara a surgir en México algo totalmente nuevo: un verdadero sistema de partidos, y con ello la posibilidad de hacer del voto en el futuro, y por primera vez, la fuente central de la legitimidad gubernamental. En el momento de concluir esta obra (*A la sombra de la Revolución*), el tránsito del autoritarismo postrevolucionario a la democracia política moderna apenas se iniciaba en medio de grandes contradicciones. En 1989 la democracia era todavía una promesa y de ninguna manera un destino inevitable.⁶⁴

El “mandato sutil y contundente” que registró Aguilar Camín apuntaba, más que a una definición ideológica, a un reencuentro del proyecto nacional con el país real. Ésa era la verdadera reclamación que el país hacía: ser reconocido en su diversidad territorial, social y política. Era un clamor por la reconciliación. A algunos, acaso pudo parecerles que sólo el sector moderno tomaba la palabra. Suponerlo habría sido ignorar el origen de los marginados urbanos, cuya precaria “modernización” se debe, precisamente, al divorcio entre los dos Méxicos. E ignorar, también, que el verdadero sentir de muchísimos campesinos no era reflejado por los votos que se les atribuían, como se iría haciendo notorio muy pronto.

La lección de la elección: un pueblo que votó por la democracia

Inmediatamente después de las elecciones habían aparecido en el diario *La Jornada* dos textos significativos: “La lección de la elección”, debido a Enrique González Pedrero, el 5 de agosto, y “Para una transición democrática”, el 28 del mismo mes, con ocho firmas al calce. Desde la dirección del IEPES, González Pedrero advertía:

El deseo de cambio está vivo y es el tiempo el que se nos ha encogido peligrosamente: la piel de zapa de la historia de Balzac, el tiempo disponible se ha enjutado y el deseo profundo de los mexicanos reclama su cumplimiento[...]. El tiempo de México espera respuestas[...]. Es claro que a partir del 6 de julio se ha iniciado una etapa de transición hacia la plena democracia mexicana[...]. Pienso que se trata de modernizar el pacto social y político que nos une desde el primer cuarto de siglo[...]. Los partidos políticos, sin excepción, están llamados a romper inercias. Tienen que adaptarse y ponerse a la altura de un pueblo que votó, sobre todo, por la democracia[...]. Se trata de transformar una cultura política que ha perdurado quizá demasiado[...]. El tránsito democrático que demanda el pueblo de México consistirá, en buena medida, en ajustar los métodos de la política con las necesidades y las expectativas concretas de la sociedad[...] hay que reconstruir al PRI desde su base, desde los seccionales, con un paso a la vez simple y lleno de dificultades: la selección democrática de dirigentes y candidatos. La consulta a las bases, método empleado ya con éxito para ciertas elecciones locales, tiene que volverse tarea cotidiana y a todos los niveles[...] el Partido tiene que convertirse, fortalecido, en una especie de contraloría popular[...]. La descentralización está ligada a la democracia y tiene que hacerse con toda profundidad, como ha quedado claro en el mandato electoral. Es casi innecesario subrayar, en este punto, la importancia que debe cobrar la vida municipal[...]. La razón es muy simple: en los municipios reside la primera y más directa forma de representación popular[...]. Creo que la época del presidencialismo preeminente habrá de dejar su sitio a otra, caracterizada por un Poder Legislativo más fuerte y un Poder Judicial más independiente[...].⁶⁵

Los argumentos expuestos por ocho partícipes en el FDN, al finalizar agosto, hablaron a su vez de “llegar a un nuevo código de entendimiento” repensando y refrendando, desde la izquierda, el compromiso con la democracia. Tras afirmar que la nación, sorprendida, había comenzado a redescubrirse a partir del 6 de julio, sostenían:

Los mexicanos votamos, y de hecho hemos seguido votando a partir del seis de julio por la democracia[...]. Se trató de un reclamo ante las inequidades de la política económica reciente y por una apertura, creíble y duradera, del sistema político[...]. El deterioro del PRI ha

evidenciado, incluso a los ojos de numerosos miembros de ese partido, la necesidad impostergable de que se emprenda una profunda reforma para hacer de ése un auténtico partido[...]. El reconocimiento de que el PAN es una formación política histórica y legítima, es indispensable para avanzar con seguridad hacia la construcción de un auténtico sistema de partidos[...]. Se requiere de una profunda elaboración y discusión ideológica que le permitan al FDN conformar un programa político en todo el sentido del término[...]. La lección democrática del seis de julio muestra [...] un pronunciamiento claro y evidente en contra del presidencialismo autoritario [...]. También fue un voto por el restablecimiento de una auténtica división de poderes[...]. Buscar fórmulas que garanticen una mayor intervención de los partidos, que restrinjan la injerencia del gobierno, que acoten la presencia del partido oficial y que, en suma, ofrezcan garantías a todos [...]. Inaugurar cauces para que se expresen en el terreno nacional las peculiaridades étnicas, regionales, municipales serviría para contar con una representación más apegada a la realidad de lo que realmente es hoy nuestra nación [...]. Hay que apuntalar la democracia para que tenga viabilidad. Un país escindido entre un mundo concentrador y excluyente y otro marginado y castigado, no puede ser terreno fértil para que se desarrolle la democracia [...].⁶⁶

El documento del 28 de agosto se pronunció en favor de un “acuerdo nacional por la democracia” y reconoció la pertinencia de la concertación política y de un amplio debate abierto, cuyo espacio por excelencia tendría que ser un Congreso de la Unión debidamente fortalecido.

Al terminar el período 1982-1988 se escuchaba por todas partes la demanda democrática. Estaba en el aire

[...] una vuelta a los orígenes: la Revolución Mexicana comenzó en 1910 como una inmensa aspiración democrática. Realizar esa aspiración será convertir efectivamente a la Revolución en Institución.⁶⁷

¿Gobernar al país real o inventar uno a la medida?

La aspiración democrática entraba en conflicto con una acendrada propensión a depender de la voluntad de un solo hombre. El sistema institucionalizado por la revolución construyó, sin embargo, un complejo mecanismo que permitió ponderar desde la máxima instancia un delicado equilibrio entre las metas del crecimiento y las demandas de las mayorías, balanceando finanzas y estabilidad. La función del PRI como brazo legitimador dejó de ser operante al cancelarse aun las moderadas afluencias de gasto social que siempre había garantizado el sistema. Sin ese lubricante, el mecanismo empezaba a herrumbrarse y a rigidizarse.

La aspiración democrática era incompatible, además, con el sesgo tecnocrático que asumió acentuadamente el aparato del Estado a partir de 1982. La modernización no fue creciendo orgánicamente de las demandas de la sociedad civil sino que se manifestó como Verdad Revelada, como dogma que se desprendía de la lógica implacable de otro sistema: el *sistema económico global*. La convicción de monopolizar la Verdad excluyó la disposición a escuchar otras verdades y no propició la participación ni favoreció el diálogo. Si una parte de la oposición disentía con las fórmulas de la élite sólo podía atribuirse a “infantilismo”, “elementalidad”, “primitivismo” o “irracionalidad”. Cuando se posee la Verdad no hay que someterla a discusión. Cuando se dominan los instrumentos teóricos para definir la *solución óptima* no hay que negociar, ni transigir, ni entrar en compromisos.

Así se fue sustituyendo el manejo político por una lógica de la “eficiencia” y una “racionalidad económica” que tendió a desplazar a las demás. Los técnicos asumieron las decisiones políticas. Se trataba de una red de funcionarios con fuerte identificación de origen, escolaridad y experiencia profesional en finanzas y planeación, propensos a compartir una misma “mentalidad” y que podía actuar, en consecuencia, con alto nivel de coordinación. Los uniformaba un entrenamiento homogéneo en la disciplina económica dentro de las teorías ortodoxas del neoliberalismo. Descartaban planteamientos “populistas” y preferían un análisis “científico” y “racional”, esencialmente cuantitativo, de los problemas nacionales. Dominaban un lenguaje inaccesible para los no iniciados que permitía, en cambio, una comunicación fluida entre pares.⁶⁸

La “nueva élite” despreciaba las pequeñas soluciones locales para confiar en grandes planes macroeconómicos, siguiendo la obsesión *globalizadora* que marcaba su concepción del mundo: todo tenía que ver con el mercado mundial y la interdependencia global. De ahí la inclinación a minimizar la naturaleza múltiple y heterogénea de la sociedad. Y la propensión a los modelos económicos que subsumen, en fórmulas matemáticas, las “ecuaciones” sociales y políticas.

La élite que asumió el poder en 1982 hablaba, pues, el mismo lenguaje que los organismos financieros internacionales: no hacían falta presiones porque pensaba lo mismo. El loable propósito de ponerle fin a la *economía ficción* fue abrazado como una auténtica cruzada contra los infieles: con la pasión fría que suele servir a los dogmas.

La “nueva élite” reconocía la enorme desigualdad pero era “realista” y reacia a “falsos paternalismos” y “demagogias”. Convencida de lo difícil que resultaba “desarrollar programas efectivos que alteren la distribución del ingreso” sólo confiaba, a largo plazo, en “un crecimiento sostenido del empleo”.⁶⁹ Más que una ideología, se compartía una “mentalidad” y un “método”. Una mentalidad “realista” y un método “racional”. Ambos conducían a aceptar una lógica según la cual la única opción para el país era asumir, con sus ventajas comparativas, el lugar correspondiente como unidad de producción dentro de la economía global. A la larga, el

crecimiento y la consecuente creación de empleos reducirían probablemente la desigualdad: en los mercados externos residía la única esperanza de crecer. La puntualidad en el pago de la deuda aseguraba el visto bueno de la banca internacional, que podía garantizar el acceso al mercado mundial.⁷⁰

La propuesta, como suele ocurrir en los modelos utópicos, aun los que se jactan de fundarse en el mayor realismo, suponía sacrificar el presente en aras del futuro: un futuro próspero en el que, por fin, la riqueza se volvería contagiosa o, por lo menos, acabaría por derramarse con una generosidad más copiosa sobre las mayorías. Infortunadamente los datos de la realidad, al terminar el primer episodio del desempeño de la nueva élite, no eran muy halagüeños. Todo había conspirado, en aquel corto plazo tan lleno de signos adversos y ominosos, a contrariar la aspiración a cosechar resultados óptimos gracias al aplicado ejercicio de una impecable objetividad.

La inveterada tendencia de la élite a no conformarse con “gobernar el país real” y a querer inventar otro “que sirve al Progreso y a la modernización”⁷¹ se había repetido. Lo que resalta en casi todos los análisis del período que va de 1982 a 1988 es el cuestionamiento que la sociedad civil hace, con inusitada insistencia, de la legitimidad del sistema. ¿Se debe tal cuestionamiento sólo al deterioro del nivel de vida o va más allá y pone en tela de juicio un estilo autoritario de gobernar? Lo que parece evidente es que

cabe la posibilidad de que la crisis económica afectara de manera irreversible la esencia de la cultura política en lo que a legitimación se refiere, [...] de tal modo que se conciba a la democracia política como el mejor medio para prevenir en el futuro un desenlace similar.⁷²

A pesar de lo que un número considerable de ciudadanos vivió como un sacrificio desmesurado, los responsables de las decisiones consideraban incómodos, pero inevitables, los costos sociales de la austeridad. En todo caso, y en eso tenían razón, las decisiones que condujeron a la trampa del endeudamiento, y el uso irresponsable del poder que las favoreció, fueron herencia de otras gestiones y del agotamiento de un modelo. La nueva élite pensaba a largo plazo y creía que el futuro, si se garantizaba la continuidad, le daría la razón. En ese futuro promisorio se empezaba a dibujar la tierra prometida de un *nuevo milagro*: el acceso al Primer Mundo.

Notas

¹ Héctor Aguilar Camín, *Después del milagro*. México: Cal y Arena, 1988, pp. 265 y 260.

² Soledad Loaeza, “Delamadridismo: la segunda modernización mexicana”, en *México*:

auge, crisis y ajuste, vol. I. *Los tiempos del cambio, 1982-1988* (coord. Bazdresch, Bucay, Loaeza y Lustig). México: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 58-59.

- ³ Los “científicos” empezaron a entrar en el gobierno de don Porfirio a fines de la década de 1880. Eran relativamente jóvenes, formados en la capital y, en muchos casos, con educación europea. Después de 1895 los encabezó el secretario de Hacienda, José Ives Limantour, responsable de la política económica de México durante ese período:

Para los *científicos*, el progreso de México sólo podía garantizarse mediante una regeneración económica y con la imposición de una nueva eficiencia por parte de la administración del Estado. Lo primero se daría con la entrada de México al orden capitalista mundial mediante la reducción de aranceles y la atracción de inversión extranjera. Lo segundo requeriría la transformación de la administración federal y la sustitución de caciques y élites tradicionales con el tipo de personal calificado para administrar la nueva economía.

Miguel Angel Centeno, *The New “Científicos”: Technocratic Politics in Mexico 1970-1990*. Tesis de doctorado en la Universidad de Yale. Mimeo, mayo de 1990, p. 6.

- ⁴ Miguel de la Madrid, “Discurso de toma de posesión del 1º de diciembre de 1982”, en *Su mensaje a la nación*. México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1982.

- ⁵ Miguel de la Madrid. “Presentación”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 14.

- ⁶ Miguel de la Madrid, “Discurso de toma de posesión...”, *op.cit.* p. 5.

- ⁷ Miguel de la Madrid, *Plan básico de gobierno y plataforma electoral*. México: Partido Revolucionario Institucional, 1982, p. 27.

- ⁸ Otto Granados, “Estado y rectoría del desarrollo”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.* p. 63.

- ⁹ *Ibid.*, pp. 62-66.

- ¹⁰ Las citas entrecomilladas son de Otto Granados, *ibid.*, pp. 66-67. Las cifras, en Jacques Rogozinski, *La privatización de empresas paraestatales*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 45 y 46. Fuente: Informes de Gobierno.

- ¹¹ René Villarreal, “Desarrollo industrial de México”, en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 339. Para abundar sobre la información contenida en este párrafo puede consultarse el mismo volumen, en sus páginas 430 ss.

- ¹² Jorge G. Castañeda, “México en la orilla”, en *México: el futuro en juego*. México: Joaquín Mortiz-Planeta, 1987, p. 78 ss. El texto apareció en el núm. 98 de *Nexos* en febrero de 1986. Carlos Tello, “La crisis en 1985: saldos y opciones”, en *México ante la crisis*, vol. 2 (coord. Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín). México: Siglo XXI, 1985, p. 411.

- ¹³ Miguel de la Madrid, *Plan nacional de desarrollo 1983-1988*. México: Presidencia de la República, 1983, p. 45.

- ¹⁴ Gabriel Zaid, “Pagar la deuda”, en *La economía presidencial*. México: Contenido, 1992, p. 85. El artículo apareció en *Vuelta*, en marzo de 1984.

- ¹⁵ Lorenzo Meyer, "Las relaciones con los Estados Unidos: Convergencia y conflicto", en *México: auge, crisis y ajuste*, *op.cit.*, pp. 105 ss.
- ¹⁶ Jorge Chabat, "La política exterior de Miguel de la Madrid. Las paradojas de la modernización en un mundo interdependiente", en *México ante la crisis*, vol. 1, *op.cit.*, pp. 93-95.
- ¹⁷ Cesáreo Morales, "El comienzo de una nueva etapa de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos", en *México ante la crisis*, vol. 1, *op.cit.*, p. 80.
- ¹⁸ Adolfo Aguilar Zinser, "La crisis de las relaciones con los Estados Unidos y el cambio político en México", en *México: El reclamo democrático*. México: Siglo XXI Editores, 1988, p. 279.
- ¹⁹ Loaeza, S., *op.cit.*, p. 65.
- ²⁰ María de los Ángeles Pozas, *Reestructuración industrial en México: el caso Monterrey*. Las citas han sido tomadas de un artículo de Antonio Jáquez, "El Grupo Monterrey: de la quiebra al auge, gracias a De la Madrid y Salinas", en *Proceso*, núm. 849, enero de 1993, pp. 10 ss. La autora es investigadora del Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Estudios México-Norteamericanos de la Universidad de San Diego, California.
- ²¹ Objetivamente todas las políticas son las del FMI y todas tienen los mismos efectos que en otras partes. La política fiscal se basa sobre todo en impuestos indirectos, con un IVA de 15%, muy superior al de otros países. En política monetaria hay libertad de cambiar pesos por dólares sin ninguna limitación en el monto, con poquísimas en la manipulación de dólares controlados y libres. En política financiera hay "reestructuraciones" de la deuda con altas tasas de interés, altas comisiones y plazos cortos de crédito insuficientes para los ciclos de producción. En política bancaria, se imponen altas tasas de interés y hay falta de crédito para las empresas industriales y agrícolas. En política de egresos, hay recortes de gastos e inversiones de servicio social y productivo y recortes de personal de servicios sin que aumente el de la producción. En inversiones públicas, hay descuido creciente en la política de inversiones en la infraestructura y en recursos energéticos. En propiedad pública, hay privatización y desnacionalización de actividades bancarias y de empresas públicas altamente rentables, de gran importancia en las exportaciones como el turismo y la aviación comercial. En la propiedad social, continúa o se acentúa la precariedad de créditos, transportes y mercados. En la producción de bienes y servicios de consumo popular, hay contracción de actividades de Conasupo y organizaciones afines. En la renovación e innovación tecnológica mexicana no hay ninguna política realmente efectiva y anticíclica y ninguna que corresponda a la pretendida "mayor eficiencia en la producción" que va a lograr la "austeridad". En la renovación, articulación y reorganización de empresas públicas, sociales y privadas para una mayor competitividad, hay notoria ausencia de un plan prioritario. En política comercial se da un estímulo creciente al mercado externo, y decreciente al interno, todo ello cuando el proteccionismo de los países industrializados aumenta y cuando el 50% del comercio mundial está superprotegido. En el mercado interno hay estímulo creciente al mercado de lujo —dolarizado y exportador de divisas—, y contención al mercado de las clases medias, traba-

jadoras y de población marginada. En la política comercial internacional se acelera la sustitución de permisos de importación por aranceles, acto preparatorio de la entrada al GATT en calidad de mercado semicolonial asociado. En política de inversiones extranjeras, aumenta el fomento de maquiladoras y el permiso de que la totalidad de las acciones quede en manos de propietarios extranjeros (monopólicos y oligopólicos). En política de empleo, se fomenta el de maquila y se trunca el calificado y el altamente especializado. En política antinflacionaria, todas las medidas anteriores tienden a aumentar las presiones sobre la demanda de productos cada vez más escasos, y las presiones para que se abra el mercado a los productos extranjeros. En política de redistribución del ingreso se da, como es obvio, una estructura cada vez más inequitativa. En política de "rectoría del Estado" se tiende a un peso creciente del capital privado, en particular del gran capital y sus asociados, empleados y voceros. En política de independencia nacional (política "nacionalista" acorde mínimamente con la supuesta ideología oficial) se tiende a establecer una relación transnacional, de dependencia cada vez más articulada a la economía, la sociedad, la cultura y el poder de los Estados Unidos. En política de desarrollo, es evidente un proceso de subdesarrollo que está llevando a los niveles de vida y crecimiento que tenía México una o dos décadas atrás[...].

Pablo González Casanova, "Prólogo a la crisis futura", en *México ante la crisis*, vol. 2, *op.cit.*, pp. 419-421.

²² Francisco Suárez Dávila, "Política hacendaria y economía política en el México posrevolucionario", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op.cit.*, p. 442.

²³ Rolando Cordera, "El desarrollo económico y social: referencias y temas de una propuesta alternativa", en *México ante la crisis*, *op. cit.*, vol. 2, p. 393.

²⁴ Castañeda, J., *op. cit.*, p. 99. Véase pp. 78 ss.

²⁵ Carlos Pereyra, "Efectos políticos de la crisis", en *México ante la crisis*, *op. cit.*, vol. 2, pp. 207 ss.

²⁶ Miguel Basáñez, *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*. México: Siglo XXI Editores, 1990, pp. 86-88.

²⁷ Sergio Reyes Osorio y Ma. de los Ángeles Moreno, "El desarrollo rural integral", en *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, vol. I, *op. cit.*, p. 231.

²⁸ Fernando Rello, "La crisis agroalimentaria", en *México ante la crisis*, vol. 1, *op.cit.*, p. 229.

²⁹ *Ibid.*, p. 223.

³⁰ *Ibid.*, p. 227.

³¹ *Ibid.*, p. 222.

³² Fernando Rello, "El significado de la democratización rural", en *México: El reclamo democrático*. México: Siglo XXI Editores, 1988, pp. 351-352.

³³ *Ibid.*, p. 357.

³⁴ Arturo Warman, "De aquí pal real... Hacia el futuro de la Reforma Agraria Mexicana", en *México: El reclamo democrático*, *op. cit.*, p. 362.

³⁵ *Ibid.*, p. 363.

³⁶ Arturo Warman, "La fuerza del pasado", en *México mañana*. México: Océano-Nexos, 1986, p. 23.

³⁷ Cifras del Censo de Población de 1970; del Consejo Nacional de Población para 1987; de la Fundación Arturo Rosenbluth, 1990. Citados por Mauricio Merino, *Fuera del centro*. México: Universidad Veracruzana, 1992, pp. 143-144.

³⁸ Una prueba de ello fue el apoyo que prestó el presidente Miguel de la Madrid a la experiencia de desarrollo desde abajo y rescate de las comunidades rurales, en un marco de impulso a la democracia municipal, que se realizaba en Tabasco con una estrategia de *centros integradores*.

Los municipios funcionaron como agentes del desarrollo. En las comunidades consideradas *centros integradores*, por su ubicación y población y sus vínculos estrechos con diez o quince aledaños, se crearon *unidades integradoras comunitarias*, que abarcaban a toda la población interesada en participar.

Con sus propios esquemas de organización y autogestión, formularon programas para obras y acciones que sentían de mayor prioridad. La comunidad aportó la mano de obra necesaria, a veces algunos materiales y, en ocasiones, terrenos para ubicar las obras.

Los ayuntamientos e instancias del gobierno estatal incluían esos programas de trabajo en sus Programas Operativos Anuales, para asegurar la afluencia de recursos estatales y municipales. Frente a asambleas populares, los alcaldes se comprometían a ejercer para esos fines específicos las inversiones convenidas y la vigilancia de las comunidades, que actuaban como contralores, garantizaba la rendición de cuentas.

Esos comités integradores del desarrollo no se ocupaban sólo de promover infraestructura de agua potable, drenaje y electricidad, aunque también lo hacían. Gestionaban apoyo a la mecanización para cultivos básicos y otros relacionados con el rescate de actividades primarias. Promovían talleres y pequeñas fábricas. Gestionaban espacios para mercados, centrales de insumos, rastros, carnicerías, tortillerías, panaderías y almacenes de acopio y distribución. Promovían revestimiento o pavimentación de caminos y calles. Buscaban el mejoramiento de los servicios de educación básica, media básica y media superior y su vinculación a los procesos productivos, promoviendo además la reparación o construcción de aulas. Promovían la instalación de unidades fijas de salud en cada centro integrador y de unidades móviles para la zona de influencia.

Aunque sólo se contó con cuatro años para aplicar esa estrategia cada uno de los 185 *centros* logró infraestructura y equipamiento mínimo: agua potable; drenaje; mercado; tienda rural; transporte colectivo, telefonía rural o radiotelefonía; servicios de educación preescolar y primaria; biblioteca; centro de salud; espacio deportivo. En los 185 *centros integradores* habitaba el 20% de la población del estado (300 mil personas) y en sus áreas de influencia, que podían hacer uso de esos servicios, otras 800 mil personas.

El gobierno federal fue altamente respetuoso de la soberanía del estado. Fue igualmente coherente con el respeto al federalismo que con otros principios que había pro-

puesto en su programa el presidente: descentralización de la vida nacional, planeación democrática y fortalecimiento municipal.

En Tabasco pudo darse un esfuerzo por extraer de la sociedad civil la savia para alimentar “una democracia de carne y hueso”, desde lo más cotidiano de la vida y los espacios locales, cuando se aplicaban en el país medidas de ajuste y se iniciaba una reforma económica neoliberal:

El éxito definitivo de esa estrategia, quizá, habría dependido de su continuidad. No obstante, mientras se aplicó fueron evidentes sus resultados en tres puntos concretos: la calidad de la asistencia social, la disminución de las presiones migratorias sobre la capital del estado y la formidable organización social que generó el proyecto, ejecutado directamente por los municipios [...] que operaron como promotores insustituibles de la acción colectiva.

Mauricio Merino, *op. cit.*, pp. 148-149.

Con el recuento de aquella experiencia y de múltiples ensayos y errores en el afinamiento de un modelo de desarrollo desde abajo y en pequeño, el Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias (CRIM) de la UNAM publicará próximamente, de Julieta Campos, *Un jaguar despertado*.

³⁹ Ambas citas en Arturo Warman, “La fuerza del pasado”, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁰ Guillermo Bonfil, “La querella por la cultura”, en *México mañana*, *op. cit.*, p. 102.

⁴¹ Lourdes Arizpe, “La sociedad invisible”, en *México mañana*, *op. cit.*, pp. 81-82.

⁴² Warman, A., “La fuerza del pasado”, *op. cit.*, p. 31.

⁴³ Carlos Monsiváis, *Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza*. México: Ediciones Era, 1987, pp. 119, 113 y 13.

⁴⁴ Lorenzo Meyer, “La democracia política: esperando a Godot”, en *México mañana*, *op. cit.*, p. 199.

⁴⁵ Miguel Basáñez, *op. cit.*, pp. 114-115.

⁴⁶ Octavio Paz, “PRI: Hora cumplida (1929-1985)”, en *Vuelta*, núm. 103, junio de 1985.

⁴⁷ Carlos Monsiváis, *op. cit.*, pp. 151-166.

⁴⁸ “Antidemocracia. Sobre la necesidad de que existan partidos de oposición”, en *Vuelta*, núm. 118, septiembre de 1986.

⁴⁹ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 272; Juan Molinar Horcasitas, *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*. México: Cal y Arena, 1991, p. 209.

⁵⁰ Miguel Basáñez, *op. cit.*, p. 104 ss.

⁵¹ Nora Lustig, “Crisis económica y niveles de vida: 1982-1985”, en *Estudios Económicos*, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre de 1987, p. 227 ss.

⁵² Enrique Hernández Laos, *Crecimiento económico y pobreza en México*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 122.

⁵³ Los datos sobre concentración del ingreso se encuentran en Aguilar Camín y Meyer, *op. cit.*, p. 272. La cifra de salario real y la cita, en Juan Molinar Horcasitas, *op. cit.*, p. 208.

- ⁵⁴ Molinar Horcasitas, J., *op. cit.*, p. 210.
- ⁵⁵ *Ibid.*, pp. 218-219.
- ⁵⁶ Silvia Gómez Tagle, "La calificación de las elecciones", en *Segundo informe sobre la democracia: México el 6 de julio de 1988* (coord. Pablo González Casanova). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México y Siglo XXI, 1990, pp. 115-117.
- ⁵⁷ Alberto Aziz Nassif y Juan Molinar, "Los resultados electorales", en *Segundo informe sobre la democracia...*, *op. cit.*, pp. 163-165.
- ⁵⁸ *Ibid.*, p. 169.
- ⁵⁹ *Ibid.*, p. 170.
- ⁶⁰ *México: El reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra* (coord. Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre y Juan Enrique Vega). México: Siglo XXI Editores, 1988.
- ⁶¹ Gabriel Zaid, "La propiedad privada de las funciones públicas", en *La economía presidencial*, *op. cit.*, pp. 164-165. Artículo publicado en *Vuelta* en octubre de 1986.
- ⁶² Lorenzo Meyer, "La democracia política: esperando a Godot", *op. cit.*, pp. 187 ss., y "La debilidad histórica de la democracia mexicana", en *México: El reclamo democrático*, *op. cit.*, pp. 73 ss.
- ⁶³ Aguilar Camín, H., *op. cit.*, p. 295.
- ⁶⁴ Aguilar Camín y Meyer, Lorenzo, *op. cit.*, p. 281.
- ⁶⁵ Enrique González Pedrero, "La lección de la elección", en *Perfil de La Jornada*, 5/VIII/1988. Reproducido en *Riqueza de la pobreza*. México: Cal y Arena, 1990, p. 183.
- ⁶⁶ Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre, Arturo Whaley Martínez, José Woldenberg, "Para una transición democrática", en *Perfil de La Jornada*, 28/VIII/1988.
- ⁶⁷ Paz, O., *op. cit.*, p. 12.
- ⁶⁸ Centeno, M. A., *op. cit.*, pp. 131 ss.
- ⁶⁹ Pedro Aspe y Javier Beristáin, "The Evolution of Distribution Policies During the Post-Revolutionary Period in Mexico", en Pedro Aspe y Paul Sigmund (coord.), *The Political Economy of Income Distribution in Mexico*, Nueva York, Holmes and Meier, 1984, p. 18. Miguel de la Madrid, "Discurso pronunciado en la ciudad de México el 11 de marzo de 1980". Citados por M. A. Centeno, *op. cit.*, p. 383.
- ⁷⁰ Centeno advierte la lógica implacable que regía la toma de decisiones y señala que era absolutamente honesto Silva Herzog cuando afirmaba, pasado algún tiempo, que
El programa [económico] no lo impuso nadie[...]. El peso de las circunstancias, el déficit, el aumento de los precios y los desequilibrios externos habían alcanzado niveles tales que hubiéramos hecho lo mismo con o sin el FMI[...].
[Comentarios de J. Silva Herzog en una conferencia sobre *Planeación en tiempos de crisis*.]
A la vez, Centeno observa:
Lo que resulta interesante no es el papel que haya jugado el FMI, sino que las condiciones reales de la población y sus demandas no parecieron tan importantes

como la imposición de una disciplina originada en una concepción de la eficiencia económica. [...] Dudar del patriotismo de la nueva élite o de su autonomía para actuar es perder de vista el cambio crítico que se había dado en las perspectivas políticas: de acuerdo con el gobierno, México no tenía otra opción que convertirse en una unidad de producción dentro de una economía global y, por lo mismo, tenía que suscribir la lógica dominante de ese sistema.

Centeno, M. A., *op. cit.*, pp. 338 y p. 407.

⁷¹ Arturo Warman lo había expresado lúcidamente:

El Estado mexicano, a pesar de emanar de una revolución agraria, no favoreció el desarrollo de los campesinos ni el crecimiento de sus fuerzas productivas conforme a su propia dinámica [...]. El Estado no quiere gobernar al país sino rehacerlo, quiere fabricar un pueblo que sirva al “progreso y a la modernización”. Falta saber si esto es deseable, [...] pero sobre todo saber si esto es posible. El Estado no actúa en el vacío, en la soledad profunda que quiere aparentar.

...Y venimos a contradecir. *Los campesinos de Morelos y el Estado nacional*. México: SEP/CIESAS, 1976, p. 336.

⁷² José Antonio Crespo, “Crisis económica: crisis de legitimidad”, en *México: auge, crisis y ajuste*, vol. I, *op. cit.*, pp. 25 y 31.

IX. El nuevo milagro

Fast track al Primer Mundo

Dentro del esquema neoliberal de una fórmula óptima —el libre comercio— en el marco de un orden económico fatal —la globalización—, el sexenio que comenzó en 1989 prosiguió a ritmo acelerado el proyecto modernizador sobre una audaz apuesta: jugarse el desarrollo del país a una sola carta. Esa apuesta, asumida por la élite gobernante con la convicción de manejar con estricto apego a los datos de la realidad las fórmulas actualizadas de la economía neoclásica, fue elogiada y criticada desde diversas trincheras, con carga variable de razones y pasiones. Aguilar Camín, por ejemplo, sustentaba así, en junio de 1991, su adhesión:

Estamos en la onda del fin de la revolución, de la nueva hegemonía americana, de la revolución tecnológica, del éxito de países que han abierto sus fronteras, del tremendo fracaso de todas las economías planificadas, de la descomposición de la URSS y del increíble *boom* de las sociedades capitalistas avanzadas. Estamos ante el fin de la competencia de los paradigmas para la resolución final de la historia, y *frente a un solo camino, el mercado, el camino de la integración y de la internacionalización económica, el camino de la eficacia productiva y tecnológica y, al fin, a través de eso, el camino de la eficiencia social y de la equidad, de la transformación de países como el nuestro[...]*. Ya no se trata de afirmarse del Tercer Mundo, como era nuestra ilusión de nuestros años sesenta, *sino de ser simple y llanamente un país del Primer Mundo.*¹

Un poco después, Sergio Zermeno advertirá contra ese afán de querer traer “otro país[...] del futuro a empujones” (palabras que tomaba prestadas, precisamente, de un personaje de *Galio*, novela de A. Camín) y señalará riesgos de *desidentidad* y *desorden* si culminara “el proyecto más ambicioso que gobierno alguno haya lanzado dentro del neoliberalismo latinoamericano”, instrumentado con una serie de medidas “que hasta ahora se antojan atropelladas” y que pretenden curar la averiada salud de la economía, muy peligrosamente, a expensas de la dolencia *in crescendo* de la sociedad:

En donde las corrientes neoliberales creen fundar un nuevo orden basado en las fuerzas del mercado, el libre intercambio internacional, la reducción de la participación estatal en la economía y la desaparición de todas las fuerzas corporativas (sindicatos, uniones y movimientos sociales, identidades tradicionales, organizaciones, corrientes y partidos políticos con bases sociales activas, etcétera) es posible realizar una lectura alternativa y mostrar que *incluso si los objetivos neoliberales se cumplen (relanzar la economía), los beneficios que de ahí deriven no harán variar en nada las condiciones inhumanas en que transcurrirá la vida de tres de cada cuatro habitantes de México o de América Latina.*

Zermeno ponía en entredicho la validez del postulado general (el abandono de una economía acorde con las necesidades domésticas) y del argumento según el cual el sacrificio de las mayorías en una primera etapa sería inevitable para el goteo de bienestar en la segunda (versión *globalizada* de la vieja teoría del *trickle down effect*). El sociólogo hacía un grave llamado de atención con argumentos que contrastaban la voluntad de “integrar” el país hacia fuera con la de “desintegrarlo” hacia dentro:

[...] hay elementos suficientes para afirmar que el Estado mexicano, hoy, no sólo no intenta moderar las fuerzas que están devastando nuestra sociedad y nuestra cultura, sino que se une a ellas atizándolas en *un esfuerzo osado por trascender como un régimen refundador de la historia.*²

A partir de 1990, la “segunda” *modernización* se aceleró, en un intento cuasi maratónico de transitar por *fast track* —la vía rápida— hacia el Primer Mundo. Sin que suponga un juicio sobre la totalidad de las medidas modernizadoras, cuya oportunidad y atingencia tendrían que irse desglosando casuísticamente, parece evidente que el afán de la generación neoliberal por volver “irreversible” su huella “refundadora” explicaría su prisa por agolpar, en el breve plazo de seis años, una sucesión impresionante de medidas prácticas y de modificaciones constitucionales tendientes a configurar y dejar instaurado para siempre *el nuevo milagro*.

El efecto psicológico de la convicción con que se emprendió el *fast track* —no del TLC sino del abordaje al Primer Mundo— fue una inyección de euforia en inversionistas extranjeros y en un grupo no demasiado amplio de empresarios nacionales, que repercutió en la inyección de renovadas esperanzas entre sectores medios y salpicó a las mayorías depauperadas por el ajuste con cierta ilusión de un futuro mejor a la vuelta de la esquina.

Dos años después, en abril de 1992, Federico Reyes Heróles recordaría que un “vicio nacional”, la *especulación* con las expectativas de la gente, podía parecer una salida fácil pero era un atajo de alto riesgo. A mediados de 1992 empezaba a dibujarse una incierta fortuna para el TLC y, por ende, una difusa angustia catastrofista se iba abriendo paso donde había florecido el espejismo de una mágica panacea:

[...] el régimen cometió, desde mi perspectiva, un error grave. Apostó irracionalmente a un asunto que está fuera de control: la firma de un tratado de libre comercio. La apuesta produjo un fenómeno de opinión que hoy puede revertirse fatalmente. *Quiero aclarar que he argumentado a favor del Tratado de Libre Comercio, pero no como panacea ni como única salida para la economía mexicana. A México, estoy convencido, le conviene un buen tratado, no cualquier tratado[...]. Esta apuesta irresponsable generó enormes expectativas.* Se habló de las decenas de miles de millones de dólares que incontinentemente fluirían a nuestro país como puente productivo hacia el nuevo mercado. Esa especulación, pues no es otra cosa, trajo en un primer momento beneficios concretos de corto plazo a nuestra economía [...] entraron capitales, sobre todo al sector bursátil. [...] Pareciera que la firma del tratado, a pesar de las múltiples danzas mexicanas, por lo menos se pospone. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en seguir afirmando que el tratado se obtendrá, *generando así la sensación de que de la firma depende el futuro del país.*³

¿No había nada, en el proyecto, más allá de una “especulación tramposa” o de una “venta de ilusiones”, como lo calificaría Ifigenia Martínez en diciembre del 92?⁴ Más que un doloso y deliberado engaño habría que pensar, acaso, en una fe ciega en las recetas de un modelo que percibe en la interdependencia la única esperanza de crecimiento y pone el acento, en consecuencia, no en la ampliación del mercado interno sino en la integración a la economía mundial, aprovechando la ventaja comparativa de los bajos salarios y la proximidad a los Estados Unidos. En coherencia con ese esquema, Carlos Salinas podía afirmar, el 3 de agosto de 1991:

[...] unirnos a esos dos grandes países en una zona de libre comercio *es el único medio para satisfacer las necesidades de 82 millones de mexicanos[...].*

E insistir tres días después:

Mi interés en el TLC es que el país pueda crecer a tasas más altas; *ésta es la única forma en que puedo responder a los intereses de los 82 millones de mexicanos* hoy día y los casi 2 millones que se añaden cada año.

En octubre del mismo año afirmaría su confianza en la continuidad de un proyecto concebido para el largo plazo. Una confianza que lo había respaldado en su decisión de tomar medidas que, en sus propias palabras, hubieran sido consideradas poco antes como “anatemas”:

[...]el TLC será un instrumento para que las reformas económicas sean irreversibles[...].⁵

La apuesta respondía, evidentemente, a la lógica de una explicación teórica del comportamiento global de la economía según la cual no habría más recurso para propiciar la distribución del bienestar que el crecimiento sostenido del empleo, a lo que sólo podría aspirarse después de haber controlado estrictamente la inflación. Y no habría más recurso para lograr el crecimiento, de la economía y del empleo, que la eficiencia del aparato económico, favorecida por la afluencia ininterrumpida de inversión extranjera. De ahí el énfasis puesto en el TLC como “único medio” para satisfacer las necesidades de los mexicanos.

Se estaba apostando todo, es verdad, a una lógica y a una racionalidad abstractas que excluían los azarosos e imponderables avatares del comportamiento humano. Después de las elecciones estadounidenses y en medio de la profunda recesión de esa economía, el presidente Salinas moderó la rotunda y excluyente apuesta al “único medio”, matizando ligeramente:

Si el tratado fuera lo único que tuviéramos, sería una muy insuficiente opción; pero *el Tratado es una opción más*, un instrumento más de todo el proceso de reforma económica[...]. Tenemos otros instrumentos en acción, *pero yo considero el Tratado inevitable*.⁶

A pesar de que las noticias de la realidad parecían indicar que podía contrariarse el curso de los acontecimientos, el presidente no se resignaba a renunciar a su apuesta. No se resignaba a aceptar que una lógica inesperada —la del acontecer político— pudiera interferir con la *necesidad* inalterable de la lógica prevista para el acontecer económico.

Ya a mediados de 1993, el presidente se verá obligado a sugerir en el mes de julio, en El Salvador, que los tratados

[...] *son sólo un instrumento adicional* [...]. No por el hecho de que un tratado de libre comercio se convierta en realidad *arrojará de inmediato beneficios espectaculares* [...]. Si ese acuerdo no se lleva a la práctica, tampoco las economías se van a ver afectadas sustancialmente[...].⁷

¿Acaso habría que posponer, por lo menos para un calendario menos inminente, el tránsito esperado al Primer Mundo? Parecía desplazada, por lo pronto, la festinación de un virtuoso patinaje, de un deslizamiento impecable hacia la meta sobre el despejado *fast track* que habría de conducir a la tierra prometida. Un balance de la gestión salinista debe empezar por lo que constituye su centro de irradiación, el proyecto económico, para referirse luego a su brazo legitimador, el Programa de Solidaridad, y concluir con la controvertida intención democratizadora.

Compromiso con “una política moderna”

El segundo movimiento de la sinfonía modernizadora se inició sobre el telón de fondo de las elecciones de 1988, cuyo mensaje final resumía entonces Aguilar Camín como

[...]la decisión de cambiar a fondo nuestro sistema político[...] ajustando desde abajo, con los votos, lo que la cúpula no quiere o no puede ver[...].⁸

El perfil del nuevo mandatario aseguraba continuidad en la modernización económica. Corresponsable en la factura del Plan Global de Desarrollo de 1980, se le atribuían muchas de las medidas adoptadas a partir de 1983. El proyecto económico sería, pues, una secuencia del cambio estructural, cuyas bases estaban colocadas. Sólo que ese *más de lo mismo* se dibujaba sobre condiciones graves: para recuperar apenas el ingreso *per cápita* de 1980 en el año 2000 habría que garantizar un crecimiento promedio del 2.5% anual (frente a un 0.4% del sexenio anterior). Y aun duplicando el salario real para 1994, sólo se alcanzaría el nivel de salarios de doce años atrás.⁹

La selección de candidato había suscitado simpatía empresarial, ante la perspectiva de garantizar ortodoxia económica *vs.* “populismo”. También suscitó reticencia sindical. Durante la campaña, se tendió a ignorar a la oposición, sobre todo si basculaba hacia la izquierda, por “absurdamente infantil” o por formular críticas “primitivas, obsoletas y decadentes” (José Córdoba), evaluaciones que convergían en la descalificación por “falta de realismo”. Los descalificados sostuvieron, por su parte, que “toda la política de este régimen va dirigida a cambiar la naturaleza del país” (Muñoz Ledo).¹⁰

La propuesta de garantizar una *política moderna* resumía compromisos de campaña en una fórmula lo suficientemente amplia y vaga como para establecer marcos de referencia sin abrir innecesariamente el juego. Algunos analistas (Meyer y Aguilar Camín) suponían que las elecciones de 1988 habían abierto claramente el camino hacia la alternancia pacífica en el poder como corolario del tránsito hacia “un régimen creíble y competitivo de partidos”.¹¹

Afianzar; dismantelar; renegociar

El primer año fue de afianzamiento del poder presidencial, para abrir paso a las medidas económicas. El descabezamiento de dos grandes sindicatos —el de Pemex y el SNTE— no se dirigió tanto a democratizarlos como a debilitarlos. Hacia el lado empresarial, el mensaje de que el poder seguía concentrado en el presidente fue comunicado a través del encarcelamiento de un conocido financiero, por malos manejos en el *crack* bursátil de 1987. La aprehensión de un narco notorio y, por otro lado, de un alto funcionario del régimen anterior para procesarlo por la muerte del periodista Manuel Buendía, fueron actos dirigidos a propiciar una sensación de seguridad y transparencia en sectores de opinión que contemplaban desde afuera, con inquietud, un turbio juego incomprensible de policías y traficantes. En el primer caso, se pretendía, además, asegurar a los Estados Unidos una amplia colaboración en materia de narcotráfico.

Empezaba a mostrarse un propósito, todavía impreciso, de dismantelar a medias los sectores que constituían el aparato corporativo del partido oficial y se hablaba de una vuelta a la estructura territorial previa a la época de Cárdenas. En octubre de 1989, una vez asegurada la alianza con Acción Nacional, se aprobó una modificación al Artículo 54 constitucional: se adjudicaría en lo sucesivo mayoría absoluta de curules al partido que sumara el 35% de los votos. Y se le asignarían dos diputados de representación proporcional, adicionalmente a la mayoría absoluta, por cada 1% de votos obtenidos por encima del 35% y hasta el 60%. Esa *cláusula de gobernabilidad*, que recibió el apoyo del PAN, establecía un amplio margen de seguridad para la aprobación de reformas legislativas. El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en vigor desde fines del mes de mayo, enunciaba como metas la recuperación económica, la elevación del nivel de vida y la ampliación de la democracia. Buscar la recuperación fue el punto de partida.

En junio de 1989, la primera medida fue prorrogar la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), que regía desde enero del 88, para reducir la inflación manteniendo congelados los salarios y procurando que no se dispararan los precios. Fundado en la tutela de los obreros, el pacto encerraba una paradoja: el crecimiento dependería de un control de la inflación que se instrumentaba con prácticas corporativas premodernas. La inflación, en efecto, se redujo: de un 150% a fines de 1987 descendió a un 18% al mediar el año de 1989.

Estaba muy claro que el proyecto económico habría de centrarse en la integración de México en el mercado mundial, revirtiendo el modelo de desarrollo hacia dentro para consolidar el despegue de un crecimiento hacia fuera, previsto durante el sexenio anterior pero todavía incierto. La *política moderna* no renunciaba a la rectoría del Estado, que seguiría siendo el *promotor* del desarrollo, aunque sin necesidad de fungir como *empresario*.

Desde principios del año se aceleró la apertura comercial y la privatización y se reiteró la bienvenida a la inversión extranjera. Mientras avanzaba el proceso y se renegociaba la deuda, la postura oficial fue de rechazo a la idea de un Mercado Común y a la integración con los Estados Unidos que proponía el Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales. Una declaración presidencial, en febrero de 1989, y otra en septiembre, con motivo de la visita a Washington, esgrimieron el argumento de que México no podía integrarse a ningún bloque por encontrarse en un proceso de profundos cambios. Se buscaría diversificar vínculos con Europa y Latinoamérica subrayando el interés por la Cuenca del Pacífico, hasta el punto de ingresar en el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico y de organizar una reunión en Guadalajara, en marzo de 1991, ya en plenas conversaciones preliminares para el TLC.¹²

Renegociar la deuda fue uno de los primeros pasos hacia la meta de reanudar el crecimiento. Se hizo en el marco ofrecido por el Plan Brady —comercio, en vez de deuda—, que instaba a los bancos acreedores a aceptar reducciones solicitadas por los países deudores. El 4 de febrero de 1990 se anunció a través de los medios masivos un término tan exitoso de las negociaciones que merecía ser subrayado con los acordes del Himno Nacional. La deuda comercial suscrita con la banca privada, que sumaba 48 231 millones de dólares, se había reducido en 7 200 millones. A la vez, sin embargo, se obtenía “dinero nuevo”. Se calculaba un ahorro aproximado de 1 500 millones al año aunque, según el *Estudio económico mundial* de Naciones Unidas para 1990, el ahorro neto por concepto de pago de intereses no pasaría de 1 250 millones, a lo que habría que descontarle garantías otorgadas a los bancos acreedores, de modo que el promedio de ahorro se reduciría realmente a unos 900 millones de dólares anuales.¹³

Las tres opciones del trato de la deuda —reducción de un 35 por ciento del principal, reducción de un 35 por ciento del interés o aumento de un 25 por ciento de los créditos durante cuatro años, garantizados por un fondo de 7 mil millones de dólares de los que 5.7 mil millones consistían en nuevos préstamos contratados por México, todo lo cual se aplicaba únicamente a la mitad del total de la deuda mexicana— resultaron ser en sí mismas insuficientes para financiar una nueva era de crecimiento económico del país [...]. La deuda externa de aproximadamente 100 mil millones de dólares a comienzos de 1989 no sólo no se reducía a consecuencias del trato, sino que era probable que aumentara ligeramente debido a los nuevos créditos[...].¹⁴

Se insistió en que habría que “reciclar” los recursos que se gastarían en pagar la deuda, canjeándola por inversión para desarrollo social. México tendría que convencer a los acreedores de su corresponsabilidad en el endeudamiento para poder

canalizar buena parte de esos fondos hacia infraestructura social. Una renegociación con tales resultados sí sería garantía de estabilidad para todos.

Por el momento, ante la modestia en el ahorro renegociado de la deuda y la insuficiencia de la repatriación de capitales mexicanos, las esperanzas se pusieron en recibir anualmente 5 o 6 mil millones de inversión extranjera directa que se procuraría atraer de los Estados Unidos.

Apertura vs. proteccionismo

El paso de una economía cerrada, con mucha participación del Estado, a una economía abierta, con escasa participación estatal, se había iniciado como el resto del proyecto con la Carta de Intenciones del FMI en 1982. La apertura, gradual entre 1983 y 1985, se aceleró en los años 86 y 87 después de la adhesión de México al GATT. Calculando los aranceles de 1982 en un 100%, para fines del 87 ya habían descendido a un 50% y en junio de 1988 a un 20%, en comparación con un promedio de 35% que mantenían los Estados Unidos y Canadá.¹⁵

En realidad, la apertura de México no encontró reciprocidad, no sólo de los Estados Unidos, sino tampoco de la Comunidad Europea ni de Japón, puesto que las pláticas del GATT se eternizaban y nadie daba su brazo a torcer. Las actitudes proteccionistas persistieron en la Ley Omnibus Trade de 1987-88, que estableció represalias al *dumping* y otras medidas destinadas a menguar los efectos del déficit comercial de los Estados Unidos. Y, aparte de las restricciones que afectaban específicamente al acero y los textiles, numerosas protecciones no arancelarias limitaban la entrada de productos agropecuarios mexicanos. El creciente proteccionismo de los industrializados inhibía el esfuerzo mexicano por exportar manufacturas que habría crecido, para 1990, cuatro veces sobre la cifra de 1986:

México había alterado toda su estructura de desarrollo sólo para encontrarse con un obstáculo enorme, sobre el cual el gobierno no tenía control alguno.¹⁶

La apertura culminó en un Acuerdo Marco sobre inversiones, firmado en 1987 con los Estados Unidos, que anticipó las modificaciones a la Ley de Inversiones Extranjeras introducidas en 1989.¹⁷ Puesto que se confiaba en esas inversiones como la fertilizadora lluvia de oro que habría de favorecer la reanudación del crecimiento, se levantaron los impedimentos para su entrada en la petroquímica, las telecomunicaciones y la siderúrgica. Era lo indicado dentro del esquema de inserción en la economía global que enmarcaba todo el Plan Nacional de Desarrollo y que aconsejaba subordinar a esa lógica los resortes del crecimiento.

Globalización, palabra clave

El fenómeno de la globalización aconsejó, desde 1982, darle un giro completo al modelo de desarrollo que había rendido importantes, aunque desiguales, resultados desde 1940. En los años ochenta, todo empezó a girar en torno al mercado global, y las relaciones planetarias fueron concebidas como los escarceos de compra-venta de ese gran tianguis donde circulan productos de fabricación muchas veces dispersa, al que cada país acude con las materias primas y las manufacturas correspondientes a sus ventajas comparativas.

Es una mitología que remplace a la aspiración de un crecimiento destinado a ir cubriendo necesidades de los mercados nacionales. Ahora se buscará exportar al *mercado global*. La lógica de la globalización se rige por criterios de productividad, rentabilidad y eficiencia, es decir, por una “racionalidad económica pura”. La economía mundial deja de concebirse como la suma de muchas economías nacionales para entenderse como una economía única, en la que confluye la producción de las múltiples unidades que se le van integrando. Ya no hay que aspirar a la independencia o a la autosuficiencia, ni siquiera en alimentos básicos. Hay que aceptar, en cambio, que la interdependencia es el único presupuesto válido. De acuerdo con los entusiastas de la globalización, las grandes diferencias de desarrollo de los diversos países en los últimos veinte años se deben

[...]a una serie de cambios fundamentales en la manera de producir bienes a lo largo y ancho del mundo [...]. Las naciones que han adoptado esta nueva manera de concebir el desarrollo [...] han sido las más exitosas[...]. Con ello las empresas están teniendo una mejor capacidad que los propios gobiernos para determinar cuál es el perfil productivo más adecuado para un país.¹⁸

Dentro de la producción globalizada, no sólo las materias primas fluyen desde cualquier punto del globo sino también las partes o componentes para una manufactura proceden de diversos orígenes y son ensamblados en cualquier territorio. Esa “división internacional del trabajo” asigna a cada economía interdependiente la parte que le toca. El sujeto por excelencia es la *empresa transnacional*, gran beneficiaria de la globalización. Porque el esquema surgió precisamente de la busca de utilidades más jugosas en países poco desarrollados, cuando las oportunidades de alta rentabilidad disminuyeron en los industrializados. Las 200 transnacionales más fuertes, compitiendo entre sí, multiplicaron notablemente sus ganancias en dos décadas: si en 1960 les tocaba el 17.7% del producto mundial bruto, en 1980 recibían más del 28%.¹⁹

El ritmo de expansión de esas empresas contrasta con la desindustrialización y el desempleo que se extiende cuando desaparecen por todas partes, paralela-

mente, muchísimas empresas nacionales, medianas o pequeñas, que no pueden competir. Al principio, las empresas traspasaron las fronteras sólo para importar materias primas y exportar sus manufacturas; después exportaron capitales y ramas industriales, para cubrir toda la secuencia de producción de ciertos bienes; y, cada vez más, exportaron filiales para fabricar sólo ciertas partes y componentes y otras filiales, en otros sitios, para ensamblarlos. La teoría de una economía sin fronteras, fundada en las bondades del libre comercio como motor dinamizador del progreso, recoge elementos de la antigua teoría neoclásica de las “ventajas comparativas” y aspira a trascender soberanías políticas nacionales con una “soberanía supranacional”: la de aquella racionalidad económica que salta sobre los límites de las fronteras. La fatalidad de la globalización ha sido vendida con mucho éxito a los países en vías de desarrollo, no sólo por las empresas que han inventado y difundido su práctica, sino por numerosos académicos convencidos de sus ventajas que, desde universidades del Primer Mundo, han transmitido su convencimiento a los funcionarios que toman las decisiones en muchos países del mundo que ansía crecer.

Ese culto a la globalización supone que la mano de obra abundante y barata aprovechada para integrarse, con el atractivo de los bajos salarios, a la economía global es la mejor garantía para el desarrollo futuro. Los subdesarrollados tendrían la gran oportunidad de pelear por los capitales disponibles para crecer, ahora sí, gracias a los recursos de los países ricos. Paradójicamente los industrializados, después de haber logrado alzar notablemente los niveles de vida de sus poblaciones, ahora encuentran mermadas las utilidades de sus empresas y éstas buscan territorios más rentables aun a expensas del bienestar generalizado que llevó siglos alcanzar.

La lógica globalizadora tiene sus trampas, sin embargo, aparte de la escasez de capitales exportables en el mundo desarrollado salvo, probablemente, la excepción de Japón. Una de esas trampas está en la seducción ejercida sobre los países pobres para que abandonen la producción de alimentos básicos, que importarán de los ricos cuyos excedentes están a su disposición. A cambio, se dedicarán a cultivos de exportación con un mercado “seguro”. El caso de África mostró la irracionalidad que puede encerrar, a veces, la “racionalidad” económica: cuando se desploman los precios, no se dispone de alimentos básicos para la población ni de dinero con qué comprarlos afuera. Renunciar a la autonomía alimentaria puede significar quemar las naves en condiciones dramáticas.

La globalización se despliega en un escenario donde el discurso del libre comercio se contradice con intereses nacionales y regionales que obstruyen una auténtica apertura global como la preconizó el GATT, cuyo desenlace no fue demasiado feliz para los países en desarrollo. A la vez, la competencia por los mercados propicia la configuración de bloques regionales y de acuerdos bilaterales.

El circuito de la riqueza

¿Cómo se miden las fuerzas en ese panorama? A pesar de que, en el último lustro, Estados Unidos dejó de ser el mayor exportador del mundo, posición que había sostenido desde la Segunda Guerra Mundial, su nivel de vida seguía siendo el más alto, en 1988, según datos de la OCDE.²⁰ La hegemonía indiscutible se había mermando, sin embargo, por una constelación de circunstancias. La tasa de crecimiento de su producto fue descendiendo del 3.7% en 1988 a un 2.4% en 1989 y a un 2.1% en 1990, aunque su participación en el producto mundial bruto, de un 28%, no fuera nada despreciable. Ese descenso en la productividad fue acompañado de desempleo; estancamiento; baja en salarios reales; descenso en el ahorro (del 8% entre 1949 y 1981 y apenas del 2.3% desde entonces hasta 1988)²¹ y declive en la inversión; alto déficit fiscal y comercial y una enorme deuda que sobrepasa a la del conjunto de América Latina.

Con una infraestructura deteriorada y sistemas públicos de educación y de salud que se alejan de las expectativas óptimas, ese país recibe ahora más inversiones de las que es capaz de exportar (sobre todo de Japón, que canaliza hacia los Estados Unidos el 46% de sus capitales viajeros). La economía norteamericana se encuentra atrapada entre la necesidad de reducir el déficit y la de generar empleos. Aunque en cifras benignas, si se comparan con las de México, en los años ochenta creció el número de pobres y la dimensión de esa pobreza, pasando de sumar el 11% de la población en 1979 (26 millones) a un 13% en 1988 (casi 32 millones).²²

Los países que crecieron en los años ochenta a un ritmo más acelerado se ubican en el Extremo Oriente: China lo hizo nada menos que a un 10.9% anual, con sus mil millones de habitantes. La siguió Corea del Sur a un 10.6% (con 40 millones) y Taiwan, a un 8.4% (con 20 millones). Los cuatro Tigres Asiáticos (Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong) aumentaron dos veces y media su participación en el comercio mundial, junto con la de Japón que la duplicó, mientras que la de Europa permaneció estable y disminuyó la de los Estados Unidos. Las exportaciones de los Tigres van a Estados Unidos, a Europa, a Japón y a China. El auge de Corea, el más importante de los NIC (*newly industrialized countries*), se hizo subsidiando las exportaciones a través de una banca en manos del Estado y se consolidó, antes de iniciar privatizaciones, en la década pasada. Aunque en esos países se dio prioridad a la creación de empleos sobre la protección laboral, Corea ha registrado un 15% de aumento en el salario real desde 1981 y un expansivo mercado interno.²³

En cuanto a la circulación de capitales hay que advertir que fluyeron en los años ochenta principalmente entre países industrializados, que los acapararon en un 80% según datos del FMI.²⁴ Y si en los años setenta fluyeron copiosamente los créditos hacia los subdesarrollados, algunos de los cuales, como Corea, sí los aprovecharon para consolidar su crecimiento exportador, en los años ochenta la transferencia de

recursos de América Latina a los Estados Unidos fue tan considerable que equivalió al 45% del monto de su deuda externa.

Más allá del esquema teórico de la globalización y del “tipo ideal” de libre comercio que se postula, en la realidad la economía mundial se recompone y tiende a reagruparse en tres grandes polos: Japón y la Cuenca del Pacífico; Europa, y los Estados Unidos. Los espacios de poder económico suscitan disensiones y pugnas. Se prolongó largamente la Ronda Uruguay del GATT porque había desacuerdos fundamentales. El orden económico que nació en Bretton Woods se agotaba y el ocaso de la hegemonía económica norteamericana parecía coincidir con el anuncio de una auténtica guerra de mercados.

Tres polos y un solo dios verdadero: la economía de mercado

La economía mundial nunca ha sido una concertación idílica. Después de 1945, la Guerra Fría dividió al mundo entre la atracción de dos imanes que polarizaron alianzas políticas, estratégicas y económicas: la OTAN y el Pacto de Varsovia. Los Estados Unidos fueron el eje de Occidente y concentraron su poderío económico. La incapacidad del sistema “socialista” para alcanzar los avances tecnológicos de la economía occidental y sus rigideces de toda índole propiciaron el desplome que puso fin a la Guerra Fría. La desintegración del polo antagónico del Este dejó a los Estados Unidos como potencia militar hegemónica y universalizó el Modelo Occidental. En el Este empezaron a brotar conflictos étnicos y nacionalismos que habían permanecido soterrados pero latentes: el “retorno del tribalismo” empezó a estallar con violencia, allí y en otras latitudes. Algunos, como Samuel Huntington, han presagiado un “choque de civilizaciones” que habría de determinar, más que razones ideológicas o económicas, los grandes conflictos del futuro. Occidente habría arribado a la cúspide del poder para ser impugnado, cada vez más, por el *retorno a las raíces de las civilizaciones no occidentales*.

En todo caso, aunque afloren por aquí y por allá tales duelos, el panorama internacional sigue enfrascado, por lo pronto, en escarceos comerciales muy pecuniarios. Se esgrimen como bandera la ideología y el discurso del libre mercado, pero los intereses regionales se defienden con proteccionismos que favorecen la consolidación de los tres bloques que, mientras incursionan cada vez que pueden en territorios de sus competidores, pretenden convertirse en fortalezas para no ceder lo ya asegurado.

Una contradicción evidente confronta, entonces, a la propuesta neoliberal de marginar al Estado del funcionamiento del mercado, para liberalizarlo, con las tentaciones proteccionistas que conducen constantemente, en cada bloque regio-

nal, a solicitar intervenciones mediante subsidios, aranceles u otros mecanismos para poner obstáculos a mercancías de competidores.

A la teoría de la liberalización global se opone la práctica de conatos de guerra comercial. En 1993, por ejemplo, los Estados Unidos impusieron las sanciones *anti-dumping* al acero, que afectaron a Europa, pero también a México y a otros países en desarrollo; se fijaron restricciones a las importaciones de telecomunicación y generadores de energía eléctrica europeos en las compras de organismos públicos norteamericanos; se ratificó el embargo atunero contra México, con el argumento ecológico de la protección a los delfines, y se amenazó con aplicarlo también al camarón, para proteger a las tortugas; se restringió en los Estados Unidos la importación de vehículos de origen japonés, y no faltaron, por supuesto, pugnas interregionales, como la que enfrentó a una empresa coreana (Samsung) con una japonesa (Sony).

Dentro del marco de globalización y regionalización, de libre mercado y de neoproteccionismo se han inscrito los procesos, formales o informales, de integración económica en la Comunidad Europea, la Cuenca del Pacífico y el hemisferio americano.

La Comunidad Económica Europea se remonta a 1957 y se ha ido ampliando hasta incluir, desde 1986, a España y Portugal. El liderazgo de Alemania se concretó en la reunión de Maastricht en 1991, con la intención de implantar una moneda única antes del fin de siglo. El auge económico de la Cuenca del Pacífico partió de la obstinada recuperación de Japón, que emergió como un ave fénix de las cenizas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, con los apoyos del FMI y el Banco Mundial. Sin ser un bloque formalizado, como la CEE, agrupa a Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur además de Malasia, Filipinas, Indonesia y Tailandia y la enorme reserva para el futuro que ya se anuncia en China que, al margen de la órbita de Japón, es el gran enigma del futuro. Alemania y Japón, obligados a renunciar a su economía armamentista después de la derrota, aprovecharon esa flaqueza para fortalecer una muy próspera economía de paz. En el contexto de las paradojas, se incluye la nueva presencia de los países del Este europeo, con su crisis política y económica y las demandas que eso le plantea a la Comunidad Europea.

El reacomodo de las hegemonías puede sugerir la anticipación de más de un escenario para el futuro, a mediano y largo plazo. Por lo pronto, la "interdependencia competitiva" propicia proyectos como la Iniciativa para las Américas de George Bush que propuso, en 1990, la creación de un "mercado hemisférico", cuyo primer paso sería el NAFTA (*North America Free Trade Agreement*), conocido en México como Tratado de Libre Comercio, que se volvería una pieza clave en el proyecto económico del gobierno mexicano.

El modelo neoliberal en la probeta latinoamericana

Pasado el auge de las teorías keynesianas y del Estado benefactor se dio un reflujo de las teorías económicas que hizo a un lado las fallas del mercado para destacar únicamente las fallas del Estado.²⁵

En vez de buscar una distribución más justa del ingreso habría que propiciar, a largo plazo, la “igualdad de oportunidades”. Favorecer primero las utilidades de las empresas y disciplinar a los trabajadores permitiría promover más inversión. La inversión y los cambios tecnológicos aumentarían la productividad y el crecimiento. Fomentando cimientos económicos firmes se elevaría, eventualmente, el nivel de vida: sostener que hay “atajos” posibles no pasaría de ser pura retórica.

El riguroso control de salarios sería tan inevitable como el desplazamiento de empresas pequeñas y medianas no competitivas. El papel del Estado se reorientaría a garantizar el equilibrio macroeconómico, controlando la inflación, y a promover la reforma estructural; a abrir el mercado, reducir la propia participación en la economía, estimular las utilidades y mantener bajo control a los sindicatos. El Estado procuraría, por todos los medios, desbrozarle el camino a la empresa privada, pero no tanto ampliando el mercado interno como facilitando el acceso al mercado mundial. Si el eje del crecimiento se ubica en ese mercado mundial, las inversiones que circulan en la economía global son un factor determinante.

Así como la ideología marxista pretendía responder a una lógica “científica” que explicaba *toda* la realidad, la fórmula neoliberal tiende a reducirlo todo a la lógica del mercado, es decir, a un determinismo económico. El neoliberalismo prefiere no presentarse como ideología y no reconoce responder a intereses específicos: se propone como *la* descripción y explicación del comportamiento de la economía y como un recetario para devolverle la salud y prevenir su deterioro. Podría definirse como

[...]una concepción que se propone la reducción general del papel del Estado como regulador de la vida social; como asignador de valores autorizados y como factor de decisiones sociales y colectivas.²⁶

Entró en boga en los años setenta y se prolongó a los ochenta, coincidiendo con el endeudamiento crítico de los países en desarrollo. Fue la condición *sine qua non* del FMI para, garantizando el pago de la deuda, mantener algún flujo de financiamiento. Si algún hecho objetivo lo justificó fue el déficit presupuestal de las economías que se estructuraron en torno al Estado de bienestar, no sólo en los subdesarrollados sino en los altamente desarrollados, como Inglaterra y los Estados Unidos. Margaret Thatcher y Ronald Reagan llegaron al poder en medio de crisis

fiscales y propusieron la medicina neoliberal que, por cierto, no logró sanear a las maltrechas economías y, en los Estados Unidos, agudizó el enorme déficit de la deuda externa. Allí, se pensó que

[...]bastaba reducir impuestos y gasto social para que la producción, la inversión y el ahorro crecieran. Los beneficios, gota por gota, descenderían de los ricos a los pobres [...]. No sucedió así. El descenso de impuestos condujo al déficit presupuestal, multiplicado por el aumento del gasto militar. El consumo aumentó, pero no la producción.²⁷

De cualquier manera, el neoliberalismo de países ricos no sería igual al de países pobres, que suelen valerse de procedimientos autoritarios para aplicarlo, prescindiendo de uno de los elementos que el modelo original proponía como esencial: la democracia.

A partir de 1990, pareció que ya nada podría oponérsele: al desplomarse el “socialismo real”, se impuso como única alternativa. Ante el fracaso de los modelos estatistas del Este —y del estatismo latinoamericano (estatismo coloreado, las más de las veces, por una debilidad inherente a la ineficiencia y la corrupción)—, se ofreció como la única opción. En el México de los años ochenta se le consideró como un mal necesario, como medicina fuerte que sabía mal, pero que sacaría al enfermo del estado de coma. Poco a poco dejó ver, sin embargo, la pretensión que lo vertebraba: la de ser no la menos mala sino la mejor de las opciones.

La crisis de insolvencia de los deudores puso en jaque al sistema financiero internacional. Las medidas neoliberales permitieron “ajustar” el déficit hacia fuera —pagar a los acreedores— a costa de incrementar el déficit hacia dentro —la deuda social con las mayorías cada vez más empobrecidas. El neoliberalismo ha funcionado de una manera paradójica, haciendo al Estado *solvente frente a la banca internacional e insolvente frente a la sociedad*.

En los Estados Unidos el doble déficit siguió en pie y se volvió el gran desafío para la administración Clinton, que recibió en las elecciones de 1992 el mandato de los menos favorecidos por las políticas neoliberales y se tropezó, para cumplirlo, con la barrera del déficit fiscal y la resistencia de los sectores más acomodados al intento de buscar una salida por la vía impositiva. La enorme influencia de las grandes corporaciones, el “gobierno invisible”, en la toma de decisiones era y es, por supuesto, un obstáculo. La demanda de un Estado más activo en la distribución del bienestar, sobre todo en educación y en salud, pero también en la creación de empleos, respondió a fracasos muy concretos del modelo reaganiano. El gobierno de Clinton sigue tratando de demostrar la viabilidad del camino alternativo que propuso en campaña, con la resistencia de demasiados y muy fuertes intereses.

El primer laboratorio neoliberal en América Latina se instaló en Chile, durante la dictadura de Pinochet, a partir de 1973. Tenía antecedentes en el Brasil de 1964,

la Argentina de 1966, el Perú de 1968 y tuvo continuadores, en el Uruguay de 1974 y la Argentina de 1976. Esos primeros experimentos se dieron al instalarse en el poder gobiernos militares que ofrecían un salvamento *in extremis* de la ineficiencia y/o la corrupción y, en el caso de Chile, del “socialismo”.

En los años setenta, el modelo de sustitución de importaciones impulsado por Estados interventores pasaba de moda, a la vez que bajaban los índices de crecimiento en el mundo y subía la inflación. En el Cono Sur, la presencia de los militares facilitó los primeros intentos de aplicar fórmulas de saneamiento drástico a las economías, con métodos autoritarios, mediante una alianza de sectores conservadores y expertos en la ciencia económica con los que asumían las riendas y la responsabilidad del poder. Fue una manera, también, de legitimar la dictadura, que mantenía a raya cualquier inoportuno alebrestamiento popular. El gobierno de Pinochet suele ser invocado como un ejemplo de los aciertos “más notorios” de neoliberalismo tecnocrático-militar, curiosa alianza de la Escuela de Chicago con el caudillismo latinoamericano.

En los años ochenta, los militares fueron sustituidos por regímenes más o menos democráticos que, en el contexto de la deuda, siguieron instrumentando las fórmulas de “racionalidad económica” de los mismos expertos. Las características del sistema mexicano permitieron la aplicación del modelo en condiciones excepcionales para América Latina. Una élite convencida pudo echar a andar el más audaz de todos los experimentos intentados en el laboratorio más propicio: asumiendo directamente el poder sin apoyos ajenos, sin tener que subordinarse a nadie e, idealmente, sin tener que rendir cuentas.

Parecería que la aplicación del neoliberalismo como instrumento para el desarrollo, es decir, en su versión periférica, es consustancial con el elemento autoritario. El desplazamiento de las demandas populares para un tiempo futuro, situado imprecisamente entre el mediano y el largo plazo, inclinaría a suponerlo. Resulta difícil debatir diseños macroeconómicos con la gente común y corriente. Y más si los resultados no benefician palpablemente y en un plazo razonablemente próximo. Quizá por eso la participación democrática no se ha dado como punto de partida, y a veces ni siquiera como corolario, del modelo neoliberal. Puestos a escoger, los expertos no pondrían en riesgo un proyecto económico tan cuidadosamente articulado por tan pequeño detalle.

Reformando al Estado: el proyecto salinista

En su primer Informe de Gobierno, el presidente Salinas reiteró los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo: recuperación del crecimiento sin inflación; elevar el bienestar de la población y ampliar la vida democrática. En abril de 1990

consideró pertinente abundar, en la revista *Nexos*, sobre la *reforma del Estado* como presupuesto de la modernización.

El crecimiento demográfico, el vasto proceso de urbanización, el agotamiento de un modelo que en otro momento fue exitoso y los rezagos ancestrales en el campo, trasladados a la periferia de las ciudades, habían generado presiones internas que inducían a la modernización. Había que moderar las diferencias sociales y erradicar “los enclaves más graves de pobreza extrema”. La demanda se había vuelto más compleja y el aparato estatal había crecido desordenadamente. El Estado “proveedor” había inhibido las fuerzas de la sociedad.

Las condiciones objetivas de la economía nacional en los años ochenta fueron críticas: la población creció “menos de lo pronosticado” pero más de lo deseable; se detuvo el crecimiento; la crisis le impidió al Estado cumplir con las clases populares y aun con las clases medias, todo lo cual incrementó tensiones sociales y políticas. La deuda contraída debilitó más al Estado en medio de una crisis fiscal sin precedentes. El ensanchamiento del Estado había sido indispensable en el período de construcción: transformó al país y cumplió su cometido. Pero, al proliferar, el Estado se debilitó y descuidó la atención de las demandas populares. El proyecto nacional no podía aislarse de la transformación mundial. Serían más los riesgos, pero también las oportunidades. La globalización imponía una intensa competencia. No tenía fronteras ni acreditaba ideologías. No admitía rigideces ni dogmas.

Razones internas y externas imponían, pues, el cambio. La sociedad reclamaba un Estado democrático, pero fuerte, y que garantizara la paz social. No quería un Estado paternalista que le resolviera pasivamente sus problemas, pero sí uno que promoviera la “justicia social participativa”. El Estado debía crear las condiciones para que la sociedad asumiera su papel:

Además, no hay otra opción. El Estado, aunque quisiese permanecer proveedor, paternalista, absorbente, lo haría cada vez más ineficientemente y se debilitaría. El panorama internacional nos está mostrando día a día que el Estado avasallador está en retirada.

La argumentación del presidente se dirigió a demostrar que al Estado se le fueron los recursos en “la búsqueda de medios para sostener su mismo tamaño” y que ahora había que liberar recursos atados en empresas públicas para atender demandas sociales. La modernización fortalecería la capacidad del Estado para responder a sus funciones básicas. No se trataba de “una reestructuración económica aislada, de escritorio” sino de una “transformación de la vida nacional entera”.

En la exposición del proyecto salinista no se renunciaba a la responsabilidad social del Estado. Se proponía ejercerla “racionalmente”, “en la confrontación permanente con la realidad y no con la fantasía”. El Programa Nacional de Solidari-

dad reconocería las “carencias y demandas enormes” y obtendría de la venta de empresas estatales recursos para atenderlas. No había intención “populista” y se alentaría la participación de la comunidad en parte de sus costos. Se insistía en legitimar las privatizaciones, más allá de la mera racionalidad económica, con contenidos sociales:

El punto crucial es: las razones de la desincorporación no son un mero problema financiero aunque esta razón está siempre presente; no se trata de razones de eficiencia de las empresas o los empresarios públicos, aunque en ocasiones también estas razones están presentes. La tesis es de política general: que el Estado cumpla con sus responsabilidades constitucionales y sus compromisos sociales fundamentales.²⁸

Los recursos por privatizaciones (y los liberados por la renegociación de la deuda) se dedicarían, pues, a fortalecer empresas verdaderamente estratégicas, como Pemex y la CFE; a infraestructura para el crecimiento y a asegurar la justicia social. No se reformaba el Estado para suprimir prestaciones sociales sino para hacerlas llegar a sus legítimos destinatarios. Aumentaría la inversión pública en un 14% y el gasto social pasaría de un 29% a un 37%. A Carlos Salinas le interesaba demostrar que estaba comprometido con una modernización “nacionalista y popular”, que promovería justicia y libertad, sin olvidar la defensa de la soberanía.

En cuatro discursos de campaña (Coahuila, Puebla, Nuevo León y Chalco), Salinas había formulado algunas propuestas explícitas sobre soberanía, democracia, crecimiento y justicia, que luego desarrollaría en cada uno de los Informes de Gobierno. Su propósito era, sin duda, “refundacional”. Y, en la opinión de uno de los jóvenes entusiastas que, desde discreta ubicación, lo acompañó en la empresa,

[...]la reforma del Estado mexicano ha sido un proceso de gran aliento comparable acaso, en el plano nacional, con la profundidad de la etapa de formación de instituciones en los años treinta y cuarenta.

La secuencia de los acontecimientos se empeñaría en poner en evidencia que la reforma del Estado no siempre logró “el encuentro con el creciente pluralismo en todos los ámbitos de la vida de México”, como habría deseado Juan Rebolledo y acaso el propio presidente Salinas. No sólo por el peso de intereses creados de “una burocracia creciente y dominante” sino porque muchas veces rondó la tentación del “salto al vacío” y no se entendió que “el cambio no podía dismantelar impunemente las herencias del pasado y empezar de cero” que era, precisamente, lo que algunos inteligentes apologistas consideraron en todo momento como un peligro sorteado. Resultaba difícil, sin duda,

[...] transformar, sin destruir, los materiales necesarios para la reconstrucción misma, y sin ampararse a la sombra de una estructura aparentemente impenetrable pero ya alarmantemente endeble.²⁹

La estabilización macroeconómica se colocó en el centro del proyecto, procurando el control de la inflación para propiciar un crecimiento sano. La inflación fue controlada y el crecimiento se reanudó con los efectos, sobre todo subjetivos, de la renegociación de la deuda y la inyección de inversiones, en los primeros tres años. Después se inició un declive hacia el crecimiento cero que culminó en 1993. La microeconomía resultó tan perdedora (empresas quebradas, desregulación fallida, desempleo y salarios reales en picada) que los aciertos macroeconómicos llegaron a parecer estériles.

La intención de convencer con la adjetivación “social” de un liberalismo al que se despojó del prefijo que lo marcaba como “novedoso” pero le adjudicaba incómodos parentescos, tampoco resultó sumamente afortunada. El común denominador de los quebrantos de tan ambiciosa “reforma del Estado” era, evidentemente, el cenagoso suelo antidemocrático que comprometía, y acaso condenaba al fracaso, una sólida implantación de cambios que, en un ambiente democrático, podrían resultar valiosos.

Los diez mandamientos

En febrero de 1991, la revista *Nexos* dio a conocer un decálogo del exitoso neoliberalismo “a la mexicana”, preparado por el doctor José Córdoba para una reunión del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Las “Diez lecciones de la reforma económica en México” fueron ofrecidas como un manual para la transición de las economías “socialistas” a la economía de mercado.

El decálogo proponía: disciplina de las finanzas públicas; evitar la indización de la economía; anclar precios clave y salarios nominales; renegociar la deuda externa; apertura financiera gradual; apertura comercial rápida; simplificación administrativa y desregulación económica; privatizaciones; condiciones para propiciar la inversión extranjera; homogeneidad y coherencia de métodos y metas en el equipo ejecutor.

Ningún costo a corto plazo debía obstaculizar la ampliación de márgenes para la reforma estructural. Por eso se había “sobreajustado a la baja” la inversión pública (en un 50%) y los salarios reales (en un 30%). Con “alta discrecionalidad” se habían aplicado medidas que “irritan a la población y debilitan la credibilidad del gobierno precisamente cuando más se necesita”. Y se había cuidado de ampliar las recaudaciones fiscales. La distribución de los costos del ajuste se habría discutido “abier-

tamente” aunque, se reconocía, el control de precios no encontró resistencias en las empresas porque no pretendía controlar márgenes de utilidad.

No importaron tanto los efectos directos de la renegociación de la deuda como los “indirectos”:

Esos efectos indirectos se tradujeron en un abatimiento de las tasas internas de interés, un ahorro significativo en el servicio de la deuda pública interna y un incremento notable en los flujos de inversión extranjera: sin lugar a dudas, la magnitud del efecto acumulado [...] superó con mucho al de los efectos directos[...].³⁰

La “carga psicológica” del sobreendeudamiento era la que realmente pesaba. Por eso lo astuto había sido recurrir a ciertas artes de prestidigitación para aligerar la “carga psicológica”, procurando que dejara de constituir la deuda “un tema de relevancia” para la opinión pública.

La liberalización financiera tenía sus bemoles, como favorecer la volatilidad de la especulación: por eso se habría esperado a poder garantizar, con estabilidad macroeconómica, la reprivatización bancaria. La liberalización comercial, en cambio, exigiría una auténtica *blitzkrieg* para tomar por sorpresa a los empresarios, acaso reacios o incapacitados para volverse competitivos a corto plazo. Sólo esa táctica permitiría asegurar su “irreversibilidad” (preocupación que impregna todo el proyecto modernizador). El teórico de la estrategia no era partidario de las contemplaciones: “Negociar las medidas previamente es tanto como cancelar la apertura”. Al gobierno le había bastado, en todo caso, el apoyo de los grandes exportadores, ansiosos de ampliar su competitividad.

Sólo que la decisión de las empresas de importar maquinaria para modernizarse no se habría acelerado desde 1987; apenas había disminuido la de bienes duraderos y se había disparado la de otros bienes de consumo. La conciliación de intereses entre industriales y comerciantes sería el punto flaco de la desregulación y acaso explicaría su lenta instrumentación. Para privatizar el sector estatal de la economía que, según Córdoba, no aportaba al PIB en 1982 más de un 17%, se habría empezado por las “inviabiles”, para seguir con empresas pequeñas y medianas viables y culminar con las grandes empresas (de aviación, mineras, siderúrgicas, Telmex y los bancos). Una relativa parsimonia habría procurado no violentar a la opinión pública, aferrada a pruritos anacrónicos. Se habría justificado, también, por el propósito de consolidar antes la estabilidad y esperar el retorno de capitales. Un Manual dentro del Manual incluía 10 subrecomendaciones agudas sobre cómo evitar oposición de funcionarios, cómo evaluar compradores antes de la licitación y otros consejos muy pertinentes.

La perspicacia recomendaba allanar camino a las inversiones extranjeras para “contribuir a una mayor confianza por parte de los inversionistas nacionales” y no

al revés, como algún ingenuo hubiera podido especular. La inestabilidad no atrae inversiones, ni siquiera con apertura. En casos extremos, como el páramo de capitales que había prevalecido en el sexenio anterior, las maquiladoras, bien servidas con atractivos fiscales y aduanales, son muy socorridas.

La afluencia de inversiones, a partir de 1987, se debería a los efectos “indirectos” de la renegociación de la deuda y a la perspectiva, que pronto surgió, del TLC. La relativa limitación de su flujo se debería, sin embargo, a la escasez de infraestructura y a la “inadecuada” calificación de la mano de obra.

El decálogo resumía el proyecto económico: una estrategia que apuntaba “en la dirección correcta” y tácticas que podían “adecuarse sobre la marcha” según lo aconsejara el pragmatismo. Un equipo de gobierno sin fisuras, cohesionado por la “convergencia de ideas económicas”, garantizaba la instrumentación.

Se puede, pero no se debe

Varios cuestionamientos impugnaron el decálogo con argumentos económicos, sociales y políticos. Las brillantes lecciones no enseñaban a conjugar estabilidad y crecimiento con equidad. La verdadera lección era subliminal: no había que renunciar al conveniente sistema corporativo, capaz de garantizar salarios bajos, y era prudente prescindir, en cambio, de la reforma política. Quedaba en el aire una pregunta: ¿cómo hacer al país menos vulnerable a las variaciones del entorno económico internacional?

Pasar por alto a la gente fue la mayor objeción. Se había elegido la meta de perseguir un déficit cero alegando, engañosamente, que era la “única” estrategia cuando era sólo una entre varias opciones posibles. La deuda era una de las causas del déficit, por lo menos a partir de 1983, y el “tratamiento de choque depresivo” se dirigió a corregir bruscamente el déficit sin haber logrado un alivio importante de la deuda.

El Pacto fue tildado de “monólogo del gobierno” secundado por empresarios y cúpulas sindicales. ¿Por qué no se podía dar por terminado el Pacto si en verdad el programa había sido tan exitoso? ¿Cómo atribuirle a ese Pacto “un sentido de justicia” cuando los salarios habían perdido no un 30% sino un 50% de su poder adquisitivo mientras crecían las utilidades de las empresas?

La apertura no negociada, precipitada y sin reciprocidad, había sido suicida:

[...] no se puede (o sí se puede, pero no se debe) enseñar a los empresarios a competir a punta de [...] quiebras, ruinas, desastres [...].³¹

Y ¿de qué les serviría a tantos desempleados contemplar en los aparadores la proliferación de artículos extranjeros, muchas veces ni siquiera más baratos por-

que se les reetiquetaba *ad libitum*? Fuerzas monopólicas, sujetas a los flujos del mercado externo, regulaban la economía desbordando cualquier rectoría del Estado. Adecuada pasivamente al ciclo de la economía norteamericana, la mexicana se mostraba sensible únicamente a los arbitrios de los empresarios más fuertes.

Ahogos financieros coyunturales, más que un diagnóstico sensato, habrían fundado el ritmo de las privatizaciones y la calificación de lo estratégico y lo prioritario. Hasta el momento no se había demostrado que el Estado adelgazado estuviera respondiendo mejor a las demandas de la sociedad: no había más empleo estable, ni menor pobreza rural, ni menos tugurios urbanos. Privatización no era sinónimo de eficiencia y resultaba difícil calcular todavía si compensarían a las repercusiones negativas del proyecto los ahorros a futuro de subsidios a paraestatales. ¿Se justificaba privilegiar a unos cuantos empresarios con beneficios muy altos, vendiéndoles empresas subvaluadas, con *swaps* o con créditos ofrecidos por el propio Estado?

Se cuestionó también la pertinencia de las inversiones extranjeras. ¿Acaso las “nuevas tecnologías” serían las más avanzadas o, mejor, las más requeridas? Siendo la gran ventaja comparativa los salarios bajos, ¿de qué empleos bien remunerados se estaría hablando? Y ¿cuál comercio habría de hiperdesarrollarse, salvo el que ya intercambiaban matrices y filiales de las grandes transnacionales? Con la repatriación de utilidades y el costo de tecnología, insumos y bienes de capital ¿no serían marginales los beneficios para México? El modelo maquilador era el mayor logro hasta el momento. ¿Sería ésa la nueva meta de la industrialización del país?

El cuestionamiento de Jorge Alcocer, el más minucioso de los que encontraron cabida en *Nexos*, concluía que el éxito de la estrategia que Córdoba consideraba como “la dirección correcta” dependía, paradójicamente de “la prolongación del estancamiento” y anticipaba que “cualquier alteración de esa trayectoria haría inviable la continuidad de las actuales políticas”. La crítica más aguda se desprendía de la undécima lección, subliminal o implícita en las otras diez:

La estrategia económica reseñada requiere de un sistema político altamente centralizado y antidemocrático, que puede ir de la dictadura militar (tipo Chile o Argentina) a la subsistencia de regímenes presidencialistas autoritarios, con altos grados de control sobre las organizaciones sociales y ausencia de respeto al voto ciudadano.³²

“Capitales de la esperanza”

Al formularse el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se aspiraba a alcanzar, al culminar el sexenio, un crecimiento del 6%. Para ello, se calculaba, harían falta cuando menos 4 mil millones de dólares anuales en inversiones directas, es decir, el equivalente a los 24 mil millones que habían entrado al país, a lo largo de varias

décadas, hasta fines de 1988. ¿Cómo se obtendrían? El dinero fresco por renegociación de la deuda era insuficiente. ¿Bastaría con el regreso a casa de tantos capitales mexicanos que habían corrido a buscar seguridades afuera? Acaso sí, pero esos capitales eran cautelosos: se daba entonces la paradoja de que se reclamara “confianza” para repatriarlos cuando sus dueños habrían podido crear tal confianza, precisamente, regresándolos. ¿Qué mejor garantía para atraer eventuales capitales extranjeros que la seguridad de los propios mexicanos? Algunos analistas sugirieron:

[...]no parece congruente que se deposite la responsabilidad por el futuro económico de la nación en la afluencia de capital extranjero, como da la impresión está ocurriendo. Tal parecería que dichos capitales tienen mayor responsabilidad para aportar el financiamiento necesario para nuestro crecimiento que los propios mexicanos.³³

Pero los dueños de capitales suelen ser menos dados a apostar y tomar riesgos que los políticos. A pesar de que las inversiones extranjeras habían permanecido estancadas durante los años ochenta y bajaron mil millones de dólares de 1987 a 1989, se apostó a la lluvia de oro que vendría de afuera para fecundar a la economía nacional: los nuevos “capitales de la esperanza”.

En los anexos del Tercer Informe de Gobierno del presidente Salinas se darían cifras alentadoras. En tres años había ingresado el 55% o el 60% de los recursos previstos para todo el sexenio: de los 13 847 millones de dólares que ingresaron en ese lapso, 5 mil habrían ido a la bolsa y cerca de 9 mil millones a inversiones directamente productivas.³⁴ Las cifras de exportaciones no eran muy positivas. A pesar de créditos por 14 770 millones de dólares a “empresas altamente exportadoras”, ya se advertía un déficit comercial de 6 mil millones debido a las crecientes importaciones y, salvo el petróleo, sólo las maquiladoras generaban divisas importantes.³⁵

¿Podría aspirar el jaguar mexicano al crecimiento de los tigres asiáticos? ¿Compensaría el flujo de inversiones el déficit en balanza de pagos? Las cifras de CEPAL situaban el déficit comercial de 1991 en 12 590 millones de dólares, la mitad del valor total de las exportaciones.³⁶ Comentaristas financieros alertaban sobre “el galimatías de las cifras”: unas eran las previstas por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras como “proyectos autorizados” y otras las publicadas por el Banco de México como registro efectivo de la balanza de pagos. Así, por ejemplo, mientras dicha Comisión señalaba para 1990 una inversión directa de 4 400 millones de dólares, el Banco sólo manifestó 2 633 millones. En los dos primeros meses de 1991 habrían entrado al país, según la Comisión, 1 524 millones de dólares y, según el Banco, sólo entraron 414, es decir, el 20% de lo autorizado.

En octubre de 1991, según cifras del Banco de México, se calculaba que 8 de cada 10 dólares ingresados al país como inversión extranjera en la primera mitad del año habían ido a la bolsa y sólo 2 a proyectos productivos. La inversión directa, cuya proporción habría sido casi del 42% el año anterior, se había reducido al 19%. Ya en abril de 1992, se calculaba una tasa de crecimiento de 378% anual de inversión especulativa, en pobre comparación con un 13.7% de inversión productiva directa.³⁷

¿Y los capitales mexicanos? Según datos de *El Financiero*, en ocho años se habían movido 92 mil millones de dólares de capitales mexicanos en el país, más o menos el equivalente de la deuda externa, en inversiones especulativas a través de la bolsa y en la compra de empresas estatales y de bancos. De ese total, cerca de 50 mil millones buscaron ganancias inmediatas en la especulación.³⁸ La ola de privatizaciones propició alianzas entre empresas nacionales y extranjeras, en un eufórico mercadeo de fusiones y adquisiciones. Ante las expectativas del TLC y en busca de competitividad, abundaron asociaciones y se concentraron los grupos financieros, es decir, se acentuó la concentración de riqueza que ya había conocido un apogeo durante el auge petrolero.

Exitosa privatización

En diciembre de 1991, según Jacques Rogozinski, quedaban por desincorporar 241 de las 1 155 paraestatales, con las que había participado el Estado en 63 años de actividad económica. En mayo de 1993 quedarían 213. Es decir que, de 1982 a 1993, se habían desincorporado 977 y estaban en proceso otras 51.³⁹

La pertinencia de la privatización de Telmex y de los bancos fue la más discutida. Su venta se tradujo en recursos importantes percibidos por una sola vez: conservarlos hubiera mantenido acaso un flujo constante de recursos susceptibles de aplicarse al gasto social. Obedecía, se dijo, a motivos políticos: consolidar un clima propicio a las inversiones extranjeras y reestructurar la relación del Estado con empresarios y sindicatos. ¿Cómo se garantizaba que las mismas razones no aconsejaran, más adelante, la privatización del petróleo y/o de la electricidad?

Se insistió en que el Estado financiaba las operaciones. Técnicamente, lo que hizo en ciertos casos fue ofrecer un plazo cómodo para pagar, específicamente en el caso de Telmex, dando oportunidad a los compradores para colocar acciones en el mercado de valores y obtener así los recursos para liquidar la compra. Jacques Rogozinski puso algunas apostillas, en diciembre de 1991, al minidecálogo de la privatización que había resumido Córdoba en febrero. El “paternalismo gubernamental” no había propiciado en las décadas pasadas el surgimiento de muchos grupos empresariales: eran pocos y casi todos “familiares”, de modo que había

escasa experiencia en enlaces exogámicos. Nada garantizaba, pues, la eficacia de los grupos recién formados ni su permanencia: algunas empresas recién privatizadas habían quebrado, para recomenzar desde cero; a otras les iba muy bien. Y eso, a pesar de las precalificaciones para determinar buenos antecedentes empresariales. Podía considerarse, sin embargo, según Rogozinski, como uno de los procesos de privatización “más exitosos del mundo”: Inglaterra, por ejemplo, obtuvo más dinero, pero México vendió más empresas. Fue el más consistente: salvo el petróleo y la electricidad, se había vendido todo menos las empresas inviables, que fueron cerradas, y lo que siguió considerándose como estratégico: petróleo (con excepciones en la petroquímica) y electricidad.

A mediados de 1993, el Estado se había retirado completamente de 30 ramas de producción, sobre todo de minería y manufacturas, y próximamente habría concluido su actividad en otras 11 ramas. Según datos de Rogozinski, se vendieron 155 empresas entre 1985 y 1988, y 228 desde esa fecha hasta mediado el año de 1993. Entre esas ventas se incluían diez unidades industriales de Conasupo. En el 10% de las operaciones habrían participado los obreros de las empresas. Un 93% de las operaciones de venta habrían quedado en manos de mexicanos, aunque el aporte de recursos extranjeros fue más significativo por su monto, especialmente en Telmex y Siderúrgica del Balsas. A pesar de ello, el control absoluto de esas compañías quedó en manos de inversionistas mexicanos.⁴⁰

Aunque una encuesta de *Los Angeles Times* sugería, en 1991, que sólo un 39% de los mexicanos apoyaba el programa privatizador, no faltó quien aconsejara la privatización de Pemex, “para no poner en riesgo el éxito del modelo económico mexicano”: así lo hizo la Fundación Heritage, en diciembre de 1992. En enero de 1993, sin ir tan lejos, Jorge Díaz Serrano sostuvo que esa privatización ya había empezado en los hechos, al ceder exploración y perforación a la iniciativa privada: el siguiente paso sería avanzar hasta la comercialización y distribución de productos petroleros.⁴¹

El destino de los recursos obtenidos por privatizaciones no quedó muy claro a lo largo del proceso, aunque las afirmaciones del propio presidente, en 1990, los destinaban a gasto social. Una información de la Secretaría de Hacienda aclaró la duda: el 98.6% de los ingresos obtenidos por la privatización de 228 empresas paraestatales se destinó al pago de amortizaciones de la deuda interna. El gobierno percibió 57 467 millones de nuevos pesos, de los cuales se emplearon 56 633 millones en el pago del principal. Los ingresos más fuertes se debieron a la venta de los bancos (38 961 millones de nuevos pesos = 70% del total) y de Telmex (14 743 millones de nuevos pesos = 26% del total). El resto de las ventas apenas significó un 3.5% de los recursos por privatizaciones, o sea 1 992 millones.

Se explicó que, como se trataba de recursos que se percibirían por una sola vez, lo más indicado era destinarlos a “reducir gastos gubernamentales sobre una base

permanente". Por eso se constituyó el Fondo de Contingencia Económica, fuera del presupuesto y como reserva para enfrentar imprevistos, acaso una eventual caída de los precios del petróleo. Como no hubo signos de inestabilidad, se decidió amortizar 20 billones de pesos de deuda pública interna, cancelando la deuda del gobierno federal con el Banco de México: el saldo de la deuda interna con respecto al PIB se redujo al 13%. En junio de 1992, con recursos del Fondo de Contingencia se cancelaron 7 171 millones de dólares de la deuda externa, es decir, casi el 9% del saldo. La proporción de ambas deudas en relación con el PIB quedó en el 24.3%, en comparación con el 62.4% que se registraba en 1988. Según Rogozinski, al disminuir el pago de intereses de la deuda pública y al ahorrar en el presupuesto de las empresas vendidas, pudo ampliarse el gasto social en un 57% en relación con 1988.⁴²

¿Integración por la puerta trasera?

En febrero de 1990 se había tomado una decisión: el jefe de la Coordinación de Asesores de la Presidencia, doctor José Córdoba, fue a Washington para sondear las posibilidades de un Tratado de Libre Comercio. El 10 de junio se anunció, al entrevistarse los presidentes Bush y Salinas, el propósito de iniciar consultas preparatorias para negociarlo. El 8 de agosto, representantes de ambos países comunicaron a sus gobiernos que todo estaba listo para comenzar. El 21 de agosto, el presidente de México lo solicitó formalmente al de los Estados Unidos. El 25 de septiembre, Bush pedía al Congreso el consentimiento para hacerlo por *fast track*: la solicitud quedó aprobada el 27 de febrero de 1991. Ya desde el mes de junio de 1990, el presidente Bush había anunciado su Iniciativa para las Américas, que sugería un proyecto hemisférico de apertura comercial e inversiones directas, en contraste con la ayuda financiera ofrecida en los años sesenta por la Alianza para el Progreso. Era un mensaje político más que una oferta concreta, como ha señalado Luis Rubio: acelerar reformas al ritmo de México, imitando su aplaudida recuperación económica, podía redundar a la larga en premios semejantes para los hermanos menores.

En febrero de 1990, mientras enviados mexicanos en Washington proponían oficiosamente un tratado de libre comercio, a Jorge G. Castañeda le preocupaba la "integración económica por la puerta trasera, inconfesada y salvaje" que, al parecer, pretendía realizarse sin consulta ni consenso democrático. En abril, Lorenzo Meyer se refería a la invitación del presidente a "toda la sociedad", recién aparecida en la prensa, proponiendo *ex post facto* un debate sobre la integración acelerada a la economía norteamericana: "El gobierno hace tiempo que empezó a actuar por su cuenta en asuntos que nos atañen a todos."⁴³ Coincidió implícitamente con la

prudente advertencia de Zaid unos años antes: lo malo no era entrar o no al GATT sino que lo decidiera uno solo en ejercicio del “despotismo ilustrado”. Se proponía el debate “al cuarto para las doce”, cuando la decisión había sido tomada sin discutir previamente, en foro abierto, beneficios y costos a largo plazo.

La reflexión de Castañeda fue de las primeras, adelantándose en varios meses a la filtración de que había negociaciones en curso. En septiembre de 1989, cuando Salinas visitó Washington, Castañeda alertó que se proyectaba lanzar al país a una aventura, jugándose todo a la carta de las inversiones norteamericanas y a la integración económica con los Estados Unidos sin “crear las condiciones para que el país entero, democrática y libremente, sea el que decida si conviene o no emprender ese camino”.⁴⁴ A partir de ese momento, el analista irá acumulando argumentos, a lo largo de todo el proceso, no para oponerse por principio a cualquier tratado, sino para proponer una “integración explícita, negociada, de frente al país”, sin prisas y orientada por la paciencia y la prudencia, con inevitables repercusiones de democratización.

¿No sería más sensato aprovechar la libertad de maniobra que podía depararle a América Latina el fin de la Guerra Fría? ¿Lo era, en cambio, la renuncia a explorar otras posibilidades para encerrarse en una relación omnicomprendensiva con los Estados Unidos, contrayendo compromisos acaso irreversibles? ¿Se trataba de una estrategia rentable?

Dos señalamientos parecían incisivos: 1) no existía ninguna seguridad de una afluencia masiva y perdurable de inversiones norteamericanas hacia México, cuando todo indicaba que escasearían los capitales en los Estados Unidos para exportar al exterior, y 2) aun suponiendo que la estrategia funcionara, sólo beneficiaría a aproximadamente una quinta parte de la población, dejando al margen al 80% restante. Se polarizaría más el crecimiento, agudizando los contrastes entre la frontera norte, la costa del Pacífico y algunos enclaves de la ciudad de México con el resto del país y, dentro de esas mismas regiones favorecidas, se acentuarían las desigualdades sociales.

¿Destino manifiesto o apuesta temeraria?

Numerosos analistas, convocados por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, reflexionaron en 1990 sobre la integración como alternativa o como destino. Se discutieron las implicaciones de la asimetría; la posible merma de soberanía; los efectos sobre nivel de vida y empleo y la suerte que correrían la pequeña y la mediana industria. Se hicieron conjeturas sobre posibles ganadores y perdedores. Todos coincidían en algo: sólo sería favorable una integración que propiciara crecimiento y modernización sin agudizar desigualdad.

Afloró el argumento del petróleo. Siendo México la cuarta reserva de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita, Kuwait y Rusia, y siendo los Estados Unidos el mayor consumidor, con un octavo lugar en cuanto a reservas, resultaba lógico que el petróleo le interesara estratégicamente, pero también que México no deseara comprometer sus reservas.

Algunos pensaban que se habían invertido los tiempos. Se estaban depositando en el Tratado todas las esperanzas de dinamizar la economía cuando, al contrario, habría que fortalecerla primero para tener más capacidad de negociación: los mercados de los Tigres Asiáticos no dependían demasiado de fluctuaciones en la economía norteamericana, porque antes fortalecieron sus mercados internos y diversificaron sus exportaciones. La globalización reducía opciones, pero no imponía alternativas únicas: el camino para insertarse en la economía mundial dependía de la mentalidad y del modelo articulador de la voluntad política.

En México las transnacionales controlan el 35% del comercio y el 50% de la producción industrial. Dominan las ramas más dinámicas: químico-farmacéuticas; petroquímica “desprimarizada”; caucho y hule; procesadoras de alimentos; maquinaria; automóviles y partes automotrices; electrónica y eléctrica; papel; tabaco; textiles; bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Se ha iniciado, en los hechos, una tendencia a la “desindustrialización”, con cierre de pequeñas y medianas empresas o conversión de industriales en comerciantes importadores, coincidiendo con la concentración de unos cuantos consorcios aliados a las transnacionales, que son las únicas exportadoras fuertes (38 de las 43 exportadoras más importantes son transnacionales, principalmente norteamericanas). El 45% de las exportaciones no petroleras corresponden a General Motors, Chrysler y Ford (16% de las exportaciones totales, si se incluyen las petroleras).

Nadie dudaba de que una “integración silenciosa”, como la llamó Clark Reynolds, se había ido produciendo naturalmente desde hacía varias décadas. Aunque nunca se hubiera alcanzado el pico de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi el 90% de las exportaciones de México fueron a los Estados Unidos, el porcentaje de comercio en los dos sentidos con ese país había sido altísimo. En 1988, el 68% de las importaciones y el 67% de las exportaciones tenían esa procedencia o ese destino. En una proporción mucho menor, se comerciaba en un 15% y un 13% con la Comunidad Europea y en un 8% y 7% con países de Asia, especialmente Japón. Un porcentaje de 8% se realizaba con América Latina.⁴⁵ Si la “integración silenciosa” era un hecho, ¿hasta que punto convenía volverla “pragmática” y formalizada?

Los salarios bajos funcionan como atractivo para la industria manufacturera, aunque no sea el único factor que favorece su “reubicación”. El contraste entre lo que se pagaba en México en 1981 por una hora de trabajo y lo que se pagaba en 1988 era impresionante. En 1981 la hora valía 3.71 dólares; en 1988 sólo 2 dólares. En los Estados Unidos, en cambio, el salario por hora había subido, en el mismo

lapso, de 10.84 a 13.90 dólares. También había subido, en Japón, de 6.18 a 13.14 dólares. El salario en las maquiladoras era en 1988, en México, de 88 centavos de dólar por hora, todavía más bajo que en Taiwan (2.71), Singapur (2.67) y Hong Kong (2.43).⁴⁶

El riesgo de una integración indiscriminada parecía considerable:

El peligro de la aceleración de la interdependencia global, vía integración más intensa a la economía norteamericana, es que la economía nacional [...] se volverá aun más sensible a las depresiones y vaivenes de la de sus socios comerciales [...]. En vez de permitir un desarrollo tecnológico propio, así fuese en algunos “cajones” estratégicos, la posibilidad se alejaría cada vez más y la brecha se ampliaría[...]. La exportación estaría fundada casi exclusivamente en el deterioro de los términos del intercambio, el abaratamiento de los productos nacionales, y la obtención de fuerza de trabajo barata, utilizando los recursos naturales y el territorio nacional únicamente como plataforma de fabricación de estrechas líneas de productos, como lugar de ensamble maquilador o espacio de tránsito, en el que se concreten las triangulaciones comerciales.⁴⁷

En suma, de acuerdo con el estudio de la UNAM, habría ganadores y perdedores. Los *ganadores* serían las exportadoras transnacionales; sus socios industriales (proveedores) y comerciales; los especuladores (en valores, bienes raíces y seguros); una pequeña élite de profesionistas, administradores, técnicos y trabajadores especializados que se requerirían en las “proporcionalmente pocas nuevas plantas” que vendrían a instalarse. Los *perdedores*: industrias nacionales no asociadas a transnacionales (pequeñas, medianas y algunas grandes) que habían venido produciendo para el mercado interno; comerciantes de productos internos y prestadores de servicios locales; trabajadores desplazados del mercado de trabajo y/o lanzados a la economía informal. En la mayoría de la población, ubicada entre los perdedores, se incluían por supuesto los campesinos.

¿Qué se proponía como alternativa? Consolidar el ahorro interno y su aplicación productiva; racionalizar exportaciones y protección, como lo había hecho Corea del Sur; ampliar el mercado interno, mediante una readecuación gradual de ingresos reales de la población, hasta recuperar, por lo menos, el poder adquisitivo de 1981.⁴⁸

Pros y contras de un matrimonio de conveniencia

El año de 1990 fue pródigo en opiniones en contra, pero también en pro, como se verá en seguida, emitidas dentro y fuera del Foro de Consulta al que convocó el Senado de la República sobre “Las relaciones comerciales de México con el mun-

do". La Canacintra, representante de 82 mil industrias (con un 98% de pequeñas y medianas), procuró mostrarse coherente con su historia y advertir que no había que dar "igual trato a los desiguales". No se oponía a un tratado *si* se reconocía la diferencia en el desarrollo de ambos países; *si* se cuidaba a la pequeña y la mediana industria; *si* se procuraba elevar el bienestar de la mayoría de la población; *si* se evitaban acciones monopólicas e intereses hegemónicos.

Mientras la CTM manifestaba su "firme apoyo" el 18 de junio de 1990, la AFL-CIO se oponía rotundamente en una Declaración de su Consejo Ejecutivo. Las razones:

[...] compañías americanas se trasladan para aprovechar la pobreza de los trabajadores mexicanos [...] más de 400 mil trabajadores mexicanos son empleados actualmente con salarios por debajo de un dólar por hora [...]. El TLC solamente promoverá más salida de capital y un aumento de importaciones en México con mayor daño a la industria básica, sin mejorar la vida de los mexicanos, [...] porque sus salarios deben seguir manteniéndose bajos para atraer inversión norteamericana[...].

O, en palabras de un líder obrero norteamericano de la industria automotriz:

En buen romance el TLC se traduce en desocupación para los trabajadores de Estados Unidos y en salarios ínfimos para los mexicanos, un juego en que todos pierden, menos las transnacionales.⁴⁹

Tales preocupaciones se manifestaron también, con honestidad intelectual, en comentarios de analistas del ITAM y del IPADE. El Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM señaló el riesgo de "agudización de desigualdades sociales" y sus eventuales consecuencias políticas; el IPADE advirtió que cualquier gestión de apertura tendría que dirigirse a un solo fin: "Promover la dignidad humana de los mexicanos que viven en la pobreza por carecer de oportunidades de trabajo suficientemente remunerado".⁵⁰

También en junio de 1990, la Universidad Tecnológica de México convocó a norteamericanos, canadienses y mexicanos a un foro sobre "México y sus perspectivas de negociación comercial con el exterior" que examinó las conveniencias de una integración formal con los Estados Unidos y Canadá y las opciones de intensificar vínculos con otras regiones. El Colegio de México publicó las ponencias dedicadas a la integración con América del Norte.

Una de las más entusiastas fue, sin duda, la de Sidney Weintraub, autor del libro *A Marriage of Convenience: Relations of Mexico and the United States*. Como exportador de manufacturas, a México le convenía asegurarse un acceso estable a los mercados internacionales, sobre todo a su principal mercado, donde se ha acentuado el

proteccionismo. Ambas economías buscan un aumento de productividad y son complementarias: la producción intensiva en mano de obra es más barata en México y la intensiva en capital en los Estados Unidos. Mediante un tratado, la inversión se desplazaría hacia el lugar más eficiente para competir en el “mercado combinado”.

Como México no querrá competir siempre con base en su mano de obra barata, buscará hacerlo aumentando la productividad, única manera de elevar salarios sin caer en la inflación: aun así, seguiría siendo más barato producir en México. Un tratado aumentaría el PIB de México. Pero no aumentaría la dependencia de los Estados Unidos porque haría más competitiva a la economía mexicana. No sería negativo para la democracia, ni para la cultura, ni para la soberanía: siendo México el socio débil le convendría, más bien, que se restringiera la libertad de acción económica de los Estados Unidos. El impacto sobre el bienestar económico de ese país sería mínimo a corto plazo: le interesaría, eso sí, abrirse un mayor mercado, en la medida en que creciera la prosperidad en México. Como se opondrían los trabajadores norteamericanos, habría que buscar “mecanismos de ajuste” para compensar a los afectados. Y no habría que incluir el libre movimiento de trabajadores a través de la frontera: sería un tema demasiado “delicado” para los Estados Unidos.

Otros investigadores señalaron la diferencia en niveles de desarrollo y la conveniencia de establecer la libre circulación de personas y de servicios. Algunos pusieron en duda la oportunidad del acuerdo, dada la recesión de la economía norteamericana que tendería a acentuar el proteccionismo. Junto con la oposición de los sindicatos, eso complicaría mucho la negociación. Michael J. Piore, del MIT, destacó una contradicción:

La paradoja de la política social en un mercado norteamericano es que México, como país, está comprometido con una ideología política que apoya el papel activo del Estado en la protección del bienestar social de sus ciudadanos. [...] México parece estar destinado a desempeñar el papel de socio de bajo costo, y su capacidad de beneficiarse de esta relación parece estar basada en el mantenimiento de estándares sociales decididamente inferiores a los de Estados Unidos.⁵¹

Acaso el déficit de la balanza comercial de México y el todavía pesado servicio de la deuda exigirían más prudencia y no privarse de los instrumentos de política arancelaria. Los acuerdos bilaterales entre socios muy desiguales ponen en desventaja al más débil: el más fuerte suele exigir *side payments* (pagos laterales) y el más pequeño no dispone de medios para obligar al otro a cumplir lo convenido. Cuando se integran países con muy distinto nivel económico no hay modo de saber si las economías más débiles acabarán por modernizarse y prosperar o acabarán por

deprimirse más. Los economistas canadienses fueron los más cautos, quizá porque ya habían pasado por la experiencia.

Una “ventaja comparativa” demasiado cara

En septiembre de 1990 se constituyó en México un Comité Asesor para el Tratado, con 17 grupos de trabajo. En octubre se realizó, al margen de las prenegociaciones, un encuentro de representantes obreros de Canadá y México. En una declaración final sostuvieron:

[...]tales políticas (las neoliberales) han tenido un alto costo social para las mayorías. [...] Queda muy claro que ni los trabajadores canadienses ni los mexicanos desean establecer una competencia desleal entre sí ni ser esquirols de nadie [...].⁵²

El 28 de noviembre de 1990 seis mexicanos enviaron un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados. Expresaban algunas coincidencias y desacuerdos con los puntos de vista de otro mensaje: el enviado al presidente Bush por los diputados demócratas Don Peace y Terry Bruce. Las coincidencias: parecía inevitable una integración “más cercana y más amplia” de ambas economías; pero, aun sin oponerse en principio a las negociaciones, habría que reconocer un doble riesgo: la prisa excesiva y la reducción extrema de una agenda que no incluía temas decisivos en las relaciones bilaterales. Debían excluirse, en cambio, las presiones de los respectivos calendarios electorales. El Acuerdo tendría que incluir un capítulo social sobre condiciones de trabajo, salud y seguridad de los trabajadores, además de la protección del medio ambiente y la defensa de los consumidores. No podía soslayarse la defensa de los derechos humanos.

Los desacuerdos: el enfoque sobre dos asuntos espinosos, por una parte la droga y, por otra, los indocumentados. Los mexicanos manifestaban preocupación por el manejo, en las negociaciones, del máximo recurso estratégico de México: el petróleo. No debía negociarse nada más allá de la liberación de barreras fiscales: garantizar entregas de petróleo tenía que considerarse fuera de discusión. Y añadían otra inquietud: no dar la espalda a América Central y el Caribe ni al resto de América Latina. Por último, lo primero:

[...] pensamos que la ventaja comparativa de México [...] no debe de seguir siendo la fuerza de trabajo barata [...]. Esa ventaja comparativa es demasiado cara para todos los involucrados: humillante y poco productiva para la dignidad mexicana y para el desarrollo económico del país; muy costosa en empleos y beneficios sociales para los traba-

jadores norteamericanos y canadienses; destructiva para nuestra relación y nuestra civilización común.⁵³

Firmaron la carta Adolfo Aguilar Zinser; Jorge G. Castañeda; Carlos Fuentes; Lorenzo Meyer; Carlos Monsiváis, y Jesús Silva Herzog.

Este esquemático recuento no es exhaustivo, pero alcanza para exponer una variada gama de opiniones y de expectativas. Como, en definitiva, pueden esgrimirse argumentos económicos tanto para anticipar los beneficios como los costos de la integración, parece evidente que los argumentos de más peso tienen que buscarse en otra parte, es decir, en una visión política, social y cultural que procure situar las decisiones que afectan al destino del país fuera de cálculos pragmáticos y coyunturales demasiado concretos.

¿Negociar al margen o con la sociedad civil?

El año clave de los cambios para adaptar el país al Tratado fue 1991: culminó con el fin del reparto agrario y las reformas al Artículo 27.

Mientras proseguían los preámbulos de la negociación se iban articulando las reticencias, las reservas, las advertencias y las opiniones en franca oposición. Sesenta ONG se agruparon en una Red de Convergencia tras un encuentro, en febrero de 1991, que se transformó, en abril, en Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, con un objetivo básico: impulsar la participación de la sociedad civil. Además de investigadores y académicos coincidían más de 50 sindicatos, frentes, seminarios de estudio y cooperativas.⁵⁴

Las negociaciones formales comenzaron el 12 de junio. Se establecieron 18 grupos negociadores por los tres países y México puso a trabajar a cien especialistas. Se tomó en cuenta, sobre todo, al sector empresarial, cuyos representantes se mantuvieron en “el cuarto de junto” para facilitar las consultas. La Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) incluyó a representantes de las cúpulas y a organizaciones representativas de diversos sectores, actividades y regiones. Se elaboraron 130 estudios sectoriales. Es interesante registrar que el 70% de los empresarios originalmente designados para hacer estudios sectoriales renunciaron y hubo que remplazarlos: los más “políticos” habrían sido sustituidos por los “expertos”.

Las críticas, procedentes de múltiples espacios, giraron en torno a ocho temas: pérdida de soberanía; menoscabo de identidad cultural; subordinación de la política exterior; inclusión probable en el Tratado de áreas estratégicas reservadas al Estado, especialmente el petróleo; inexistencia de un marco democrático que favo-

reciera un acuerdo conveniente; asimetría entre las economías; exclusión de aspectos sociales en las negociaciones, y desinformación sobre los detalles de éstas a lo largo del proceso.⁵⁵

Cultura en el tapete y democracia arrinconada

Una declaración poco afortunada del secretario de Comercio, que coincidió con el principio de las negociaciones, causó cierto revuelo. Al preguntarle algún periodista si México, como Canadá, abrigaba alguna inquietud por el riesgo que pudiera correr su identidad cultural, el funcionario respondió: “Respecto a la cultura, es un asunto que no es tan relevante para México”. La cultura estaba, sin embargo, en el tapete y el periódico *La Jornada* consideró pertinente preguntar a varios intelectuales sobre el supuesto riesgo y sobre algunos otros de los puntos álgidos que suscitaban controversia.

Buscando una redefinición del concepto de *soberanía* en la nueva circunstancia que crearía un TLC, Carlos Fuentes procuró sintetizarla como *la capacidad política para dirigir nuestra participación en la nueva economía global en beneficio de las mayorías populares de México*[...]. Aguilar Camín habló de “soberanías restringidas” como signo de la época insistiendo, sin embargo, en una “autonomía de los estados nacionales” fundada en “el vigor de los consensos y en la representatividad y credibilidad de las autoridades”. Carlos Castillo Peraza buscó en la “legitimidad” el sustento de una soberanía concebida como “autonomía dentro de la interdependencia”. Carlos Monsiváis no entendía la definición improvisada por gobierno y empresarios de una “soberanía flexible”, y sugería no fetichizarla pero tampoco subordinarla “a las presiones de la integración comercial”. Coincidían Flores Olea y Guillermo Tovar en demandar “visión del futuro pero con memoria”. Lorenzo Meyer fue al grano:

La sociedad mexicana aún sigue esperando que le digan en términos precisos cómo va a poder mantener México una independencia política y cultural dentro de un marco de integración económica con la principal potencia mundial y cuya producción de bienes y servicios es, por lo menos, 25 veces superior a la nuestra.

Había optimismo en cuanto a la resistencia y vigor de la *cultura mexicana*, incluyendo al propio Meyer, que lo fundaba en la obstinada preservación de identidad de los mexicanos residentes del otro lado de la frontera. Castillo Peraza desconfiaba de cualquier maniqueísmo del “verdadero” y el “falso” país, que “desarmaría” a los mexicanos en “cualquier encuentro con el mundo”. Monsiváis prefería enten-

der la identidad como “el espíritu de continuidad y de resistencia, de adaptación y asimilación”. Aguilar la centraba en la mezcla heterogénea de influencias y trans-culturaciones a lo largo de la historia, y Flores Olea creía encontrar la clave de la fuerza de una cultura en su capacidad de “reconocimiento del otro”:

La cultura no se construye en el aislamiento, sino en el diálogo y en la influencia recíproca, en la vida y en el contacto, en la mutua fertilidad. Por el contrario, las culturas que se aíslan mueren, se secan.

Mientras Tovar imaginaba una “penetración mutua” entre la visión estadounidense, centrada en el futuro, y la mexicana, centrada en el pasado, Fuentes era contundente:

La identidad nacional mexicana es muy fuerte, más que la estadounidense. Son ellos los que deben temernos: la lengua castellana, la continuidad cultural y la pluralidad de tradiciones (indígenas, española, mestiza, mediterránea) acentuarán el mestizaje estadounidense. Para nosotros la policultura no es un problema.

El tema del *nacionalismo* despertó fervor en Castillo Peraza por “el Estado como instrumento del pueblo para constituir la nación” y en Aguilar Camín la defensa entusiasta de un “nacionalismo internacionalista, [...] pragmático, eficaz en lo que verdaderamente importa, que es fortalecer a la nación”. Cuando Flores Olea insistía en un nacionalismo “positivo y enriquecedor”, no xenofóbico y sí pluricultural y multiétnico, que no tendría que verse como obstáculo para salir en busca de “nuevas oportunidades de desarrollo”, Monsiváis optaba por las burlas veras:

nación es el cúmulo de lo obtenido y lo inasible (idioma, leyes, cultura, tradiciones, cambios, acervos de imágenes, historia) y el TLC no es todavía un asedio en forma, sino una arrogante proposición: “O cambias o te dejo a las puertas de la maquiladora”[...]. Si la nación se deja transformar tan radicalmente por el TLC, es que no era nación, sino la agencia de desempleados regida por una burocracia ineficaz.

Carlos Fuentes invocó la independencia política como presupuesto de una interdependencia capaz de traducir la participación en el mundo en progreso palpable: concretamente, en alimentos y en educación. Ese presupuesto pasaba por la sociedad civil y la democracia. Lorenzo Meyer puso, una vez más, el dedo en la llaga:

En la medida en que el TLC lleve a que unos mexicanos tengan acceso rápido a eso que se llama modernidad en tanto que otros se quedan rezagados o totalmente afuera, la nueva relación de México con el mundo no beneficiará la consolidación de una verdadera identidad nacional.

¿Supondría cambios en la cultura nacional la apertura de fronteras? La apertura no sería nueva y en la cultura nacional ya se habían instalado espacios de mimetismo que, en sus extremos, lindarían con la caricatura (Monsiváis); se eliminará y, a la vez, se reafirmará la xenofobia (Tovar); el TLC tendría que reconocer nuestra posición privilegiada como “elemento articulador de dos bloques culturales” (Flores Olea); “las culturas aisladas empobrecen: sólo las culturas comunicadas sobreviven” (Fuentes); los mexicanos debemos renunciar a vernos hacia adentro, “herméticos, cerrados y, a veces, hasta belicosos” para “pensarnos en el mundo” (Castillo Peraza); seremos un país bilingüe de habla española, se acentuará el interés por la ciencia y la tecnología junto con las “expectativas pragmáticas en el conocimiento” y se cerrará la brecha entre el país legal y el país real, amén de que se multiplicará la oferta de bienes culturales (Aguilar Camín). Lorenzo Meyer se mostró desconfiado de esas *great expectations*. Los beneficios de la apertura se antojaban improbables no por la apertura en sí, que acaso podría introducir cambios positivos *si*

[...]los mexicanos estuviéramos seguros y satisfechos de nuestras instituciones y proyecto nacional. [...] ¿Pero estamos satisfechos de nuestro marco institucional? ¿sabemos y se nos ha consultado sobre el proyecto nacional?

El punto flaco estaría entonces en ese talón de Aquiles, la falta de participación y democracia. Toda reflexión conducía al tema político, al desfase entre la pretensión de modernidad económica y la persistencia del rezago autoritario. La mayoría de los encuestados coincidían en lo fundamental, es decir, diferían del atrevido presagio que había introducido Aguilar Camín: “La democracia está mucho más cerca que la justicia social”. ¿Cómo podrían sustentarse cambios económicos en tal fragilidad de las instituciones democráticas y en el “capricho de un poder sin controles”? (Castillo Peraza) ¿Cómo, cuando la apertura no pasaba de ser “un gesto tímido”? (Monsiváis) ¿No tendrían que ser correlativos libre mercado y democracia? (Guillermo Tovar) Los buenos deseos de Flores Olea: “La economía, la sociedad y la política evolucionarán juntas, la madurez de un sector habrá de influir en los otros”, contrastaron con el realismo de Carlos Fuentes:

Sin la democracia política, seremos juguetes de las fuerzas económicas globales, no somos. La promesa incumplida de todos nuestros proyectos modernizadores ha sido la democracia.

Un realismo que se volvió todavía más descarnado en la respuesta de Lorenzo Meyer:

La realidad, no el discurso político oficial, nos dice que una garantía del cambio económico es el *no cambio* en los sistemas de control político. Facilitar las profun-

das y costosas transformaciones económicas usando las estructuras políticas autoritarias. Para cambiar en lo económico la actual élite política ha decidido no cambiar en lo político o, al menos, resistir al máximo la exigencia de apertura política efectiva.⁵⁶

Un testimonio de Robert A. Pastor confirmaría ampliamente la hipótesis de Meyer. El 30 de noviembre de 1990, el presidente mexicano le comunicó su decisión de posponer la reforma política:

[Salinas] expuso francamente su punto de vista: para modernizar a México habría que aplicar las reformas económicas antes de emprender una amplia liberalización política. Salinas dijo que el error de Gorbachov había sido realizar primero las reformas políticas: el resultado fue que perdió el apoyo que necesitaba para implantar sus programas económico y político. “*I believe in glasnost, not glasses that break*” [...].⁵⁷

A torn country

En el número de la revista *Foreign Affairs* correspondiente al verano de 1993, un prestigiado politólogo del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, Samuel P. Huntington, publicó un polémico texto que despertaría malesstar en el medio intelectual mexicano. ¿*Choque de civilizaciones?* fue reproducido por *El Financiero*. Suscitó respuestas, observaciones ácidas y hasta una entrevista con el autor donde se deslizó un comentario que se prestó a mayores suspicacias.

Huntington difería radicalmente de las certidumbres de intelectuales mexicanos sobre la inasediable fortaleza de nuestra cultura. El éxito del TLC dependería de la “asimilación plena” de la cultura norteamericana por parte de México. Las diferencias entre la tradición católica y la protestante y entre costumbres y valores tan diversos sería ya anacrónica y obsoleta. Un país “desgarrado” se estaría debatiendo entre la civilización “latinoamericana” y la “norteamericana”, con la más alta probabilidad de que, para nuestro beneficio, ésta acabara por prevalecer. El ingreso al TLC podría tener tanta repercusión como la Conquista de hace 500 años: un “cambio de civilización” que, cuando más, podría necesitar para arraigarse el lapso de una generación.

Desde Harvard, Samuel Huntington insistía en ver a México como un país en transición, que habría decidido “abandonar la cultura latinoamericana para abrazar, en su lugar, la norteamericana”. El país lo desearía y los Estados Unidos, a pesar de sus múltiples reticencias, acabarían por recibirnos con beneplácito. Lo más importante era, seguramente, que el “grupo dominante” había optado por Norteamérica, entendiendo que la integración económica debía cimentarse en una

“comunidad de civilización”. El politólogo se fundaba, esencialmente, en una conversación que había sostenido, en 1991, con un cercano asesor del presidente mexicano sobre las transformaciones que se efectuaban en el país. El diálogo habría concluido más o menos así:

—Es de lo más impresionante: me parece que básicamente lo que se proponen es cambiar a México de un país latinoamericano a uno norteamericano.

—¡Exactamente! Es precisamente lo que nos proponemos, pero por supuesto que jamás podremos decirlo públicamente.⁵⁸

Lo importante, para Huntington, no sería la diferencia de niveles de desarrollo sino la disposición a abrazar la versión anglosajona de la cultura occidental. La democratización de México sería, acaso, una de sus mayores ventajas.

¿Acuerdo parejo o venta de ilusiones?

Hasta fines de marzo de 1992, las opiniones en torno al Tratado eran conjeturales, puesto que no se conocía su contenido. En septiembre de 1991 Cuauhtémoc Cárdenas se había reunido en Washington con líderes sindicales de la AFL-CIO, a los que propuso trabajar en el diseño de un proyecto alternativo de alcance continental. En San Antonio, en el mes de octubre, se realizó un primer foro de discusión para líderes latinos, al que asistieron Luis H. Álvarez del PAN, Roberta Lajous del PRI, Mariclaire Acosta por Derechos Humanos, representantes de la Red de Acción frente al TLC, Herminio Blanco por los negociadores y Adolfo Aguilar Zinser.

El líder del PAN coincidió con Aguilar Zinser en calificar de fraudulentas a las elecciones de agosto y añadió que la debilidad del pueblo mexicano frente al gobierno y la del gobierno “frente al gobierno y ciertos intereses económicos norteamericanos” aconsejaban mucha cautela. En octubre, cuando se reunían en Zacatecas los representantes gubernamentales de los tres países, se celebró un foro paralelo con participaciones tan diversas como las de Federico Reyes Heróles, Aguilar Zinser, Cuauhtémoc Cárdenas y Salvador Nava. Ni el gobierno habría aportado argumentos “tan sólidos” en favor del TLC: pero no de cualquier TLC sino de un TLC congruente con el beneficio de las mayorías. Salvador Nava, ilustre ejemplo de la fuerza moral que puede llegar a proyectar la sociedad civil, fue ovacionado cuando le vaticinó un promisorio futuro:

[...]ese día haremos un tratado de libre comercio en igualdad de circunstancias y podremos tratar de igual a igual con cualquier país[...].⁵⁹

En febrero de 1992 el PAN sostuvo que no había que hacer “concesiones por prisa” y que “debería posponerse la firma con vistas a lograr un acuerdo más parejo”. El 21 de marzo de 1992, la Red Mexicana de Acción frente al TLC y la Fundación Lázaro Cárdenas lograron entregar a la prensa una copia del borrador íntegro del Tratado: el presidente del PRD lo calificó como un acuerdo que “nos condena a la miseria y la subordinación”. La crítica de ese partido al Tratado negociado se expresó en un documento interno que trascendió al público en abril, en un proyecto alternativo presentado en octubre de 1992 y en una serie de artículos de Ifigenia Martínez publicados en *La Jornada* al finalizar ese año, después del triunfo electoral de Clinton.

En resumen, tales argumentos sostenían que los principales beneficiarios del tratado serían los consorcios transnacionales, al formalizarse las condiciones favorables ya otorgadas mediante la apertura y el reglamento a la Ley de Inversiones. El costo de no firmarlo sería mucho más político —para el gobierno mexicano— que económico: efectos negativos en la opinión pública por el desperdicio de dinero, tiempo y esfuerzo y derrumbe de la “venta de ilusiones” de un futuro mejor.

Calcular un mercado de 360 millones era un eufemismo. En verdad, el 88% del mercado real se encontraba en los Estados Unidos: con un ingreso 10 veces menor, en México apenas un 10% tendría con qué comprar los productos que ya se venían importando. Aun antes de entrar en vigor el tratado, una excesiva importación de bienes y servicios disparó el déficit comercial y era notorio el carácter especulativo de la mayoría de la inversión extranjera. Mantener el alto nivel de reservas requerido para afrontar contingencias derivadas de un sector externo muy vulnerable recortaría la inversión en infraestructura, en producción y en desarrollo social:

El proyecto neoliberal salinista queda, por tanto, sujeto a que los más fuertes inversionistas nacionales y extranjeros aprovechen nuestros recursos y mano de obra barata para establecer una plataforma exportadora que satisfaga la demanda de un mercado ajeno y relegue el propio.⁶⁰

Se proponía, en cambio, un pacto continental con “enfoque visionario y de gran aliento”, parecido a la Alianza para el Progreso, que habría fracasado por la resistencia de las oligarquías latinoamericanas.

Callejón sin salida

Desde una trinchera muy diversa José Angel Conchello, del PAN, calificó al Tratado de *callejón sin salida* en una reflexión que pretendía trascender la diatriba contra el TLC para sustentar, en principios éticos, el rechazo al capitalismo salvaje

y el apoyo a un desarrollo en pequeño, endógeno y promotor de iniciativas locales, en la línea de Schumacher. Se insistía en la necesidad de incorporar a la gente al desarrollo de miles de comunidades, pensando siempre en los hombres más que en las cosas y apoyando de otra manera al sector tradicional, sin pretender absorberlo desde el sector moderno.

¿Cómo enfrentar las cinco D —o desgracias— que padece México: desnutrición, desempleo, desigualdad, deterioro y deuda? La opción de Conchello no era “el mito de las fábricas mundiales” ni la teoría del goteo, en el nivel doméstico o internacional, sino “la utopía de la autosuficiencia regional”. Funcionar como economía *complementaria* supondría seguir proporcionando mano de obra barata. Sólo “una trágica falta de confianza en nosotros mismos” inducía a pensar exclusivamente en un desarrollo “hacia fuera y desde fuera”. No aprobaba las reformas para adaptar la Constitución a las necesidades del Tratado y opinaba que las modificaciones al Artículo 27 propiciarían latifundios de sociedades mercantiles. Suscribía la vieja aspiración del PAN de convertir al ejido en pequeña propiedad titulada, pero con las características del patrimonio familiar, es decir, susceptible de heredarse pero no de venderse.

En apoyo de su desconfianza hacia un modelo que cifraba toda la esperanza en recursos de fuera, recurría a una advertencia de Michel Camdessus, presidente del FMI: *En el curso de los próximos años no hay que contar demasiado con los grandes países industriales para obtener el crecimiento.*⁶¹ ¿No quedaría más remedio que entrarle a “una rebatinga global de los países pobres para obtener el dinero de los ricos”?

La única forma en que nuestro país y nuestro continente no entren en la subasta de naciones para recibir el favor de los grandes financieros es tener una política que genere su fuerza desde dentro, que sepa movilizar el gran recurso disponible que es la mano de obra; que pueda redescubrir la técnica a la medida —a medio camino entre los alardes de la tecnología de punta y las manos desnudas—; que no pretenda incorporarse al sistema de vida y de consumo de las naciones glotonas del planeta; que pueda detener el gigantismo estatal o empresarial estableciendo un mundo de escala humana.⁶²

Frente a una tendencia al gigantismo, que confunde crecimiento con desarrollo, habría que pensar menos en los productos y más en los hombres. Proyectos como el TLC nos acercarían, insistía Conchello, al tipo de sociedad que habría que evitar. Su preocupación era esencialmente moral y advertía contra los riesgos de comprometer el alma, o por lo menos la identidad, “por el plato de lentejas de un pedacito de mercado”. Cierta fobia sustentaba la resistencia a una integración razonable como eventual alternativa: no se rechazaba *este* TLC sino *cualquier* TLC. No obstante, el valor de la propuesta consistía en tocar la raíz del problema y poner en el centro de la discusión a un modelo de desarrollo que se olvida de la gente.

Temores y expectativas

Sería prolijo hacer el balance exhaustivo de los puntos de vista de la sociedad civil sobre el TLC que registró la prensa, a lo largo de 1991 y 1992. El foro organizado por el Senado fue una especie de desahogo paralelo, que sirvió para dejar que se expresaran las opiniones de los más diversos sectores. Los rectores de la UAM fueron muy claros: sin equidad ni democracia el país entraba muy debilitado, “empequeñecido”, a las negociaciones de un tratado. Una “asimetría insuperable” entre los dos países impedía “quemar etapas”. Existía el riesgo de un brote indiscriminado de sucursales de instituciones educativas con carácter más comercial que académico. Podía desplomarse, ante la competencia de centros extranjeros, el esfuerzo incipiente de las instituciones nacionales por establecer lazos con la industria. No había que colocar a los productores mexicanos al borde de la muerte: si antes se les protegió en exceso, no parecía sensato caer ahora en el otro extremo. Opinó Avedis Aznavurian, rector de la UAM-Xochimilco:

El tamaño de las naciones, de sus economías, de sus empresas y productividades; los grados de escolaridad de su fuerza de trabajo, la magnitud de los mercados —enormes aquéllos, pequeños y en contracción los nuestros— son evidencias que hacen la intención considerablemente ambiciosa.⁶³

En ámbitos académicos abundaron juicios sobre la educación superior. En la UAM, Olac Fuentes Molinar evaluó su situación como crítica y advirtió que, en tales condiciones, no sería difícil que el TLC propiciara la instalación de universidades norteamericanas y canadienses que desplazarían a las mexicanas. José Sarukhán señaló que el Tratado podría aumentar la fuga de cerebros y que el país no sería moderno y competitivo si no se entendía el carácter estratégico de la educación superior. En el Seminario “Aspectos Laborales del TLC”, el propio rector advirtió que si México no lograba incorporar tecnología propia en sus productos “no pasaremos de ser copia de otras naciones”. Guillermo Soberón, presidente del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República, advirtió que habría que “romper drásticamente” con la “disminuida” situación de la tecnología y la investigación científica y se refirió a los sueldos ridículos de investigadores.⁶⁴ En el Seminario Internacional “Ciencia y Tecnología y el TLC” (octubre de 1991), Conacyt advirtió que sin canalizar recursos hacia el avance tecnológico jamás se logrará la competitividad a la que se aspira y “pondremos en riesgo el logro de nuestras aspiraciones de bienestar nacional y nuestra viabilidad como nación soberana”.⁶⁵

Académicos del Centro de Análisis e Investigación Económica del ITAM opinaron que el TLC no propiciaría, en el corto plazo, crecimiento del empleo ni aumento de salarios, como no lo hizo la apertura. Se ha exportado un poco más pero no se

ha producido más: simplemente han salido al exterior manufacturas que un mercado interno deprimido no podía absorber. Por eso no ha crecido la demanda de mano de obra, que simplemente se desplazó hacia la economía informal. A largo plazo, podría aumentar la generación de empleos —aunque sólo para mano de obra calificada— si se exportara más de lo que se importa en bienes de consumo y si no se aplicaran nuevas tecnologías que ahorran mano de obra.

Por otra parte, consideraban que, sin “flexibilizar” la legislación laboral (nivel de prestaciones, aportaciones al Seguro Social y al Infonavit, indemnizaciones por despido, etc.) y sin disminuir la “conflictividad”, no aumentarían la productividad, la rentabilidad financiera o la dinámica exportadora.⁶⁶ En eso coincidían con Concanaco y Coparmex que, en un seminario de la Facultad de Derecho de la UNAM, habían insistido en la pertinencia de modificar la legislación laboral para poder “modernizar” las relaciones obrero-patronales.⁶⁷

Y ¿qué pensaba la gente común y corriente? El 22 de octubre de 1991 *Los Angeles Times* publicó una encuesta nacional realizada por Prospectiva Estratégica, A.C. Al comentarla para *Este País*, Basáñez y Alduncin señalaron:

La imagen sobre el TLC es muy contradictoria y una resaca es previsible como efecto de la sobreventa que, en México, se hizo de sus beneficios inmediatos.⁶⁸

En efecto, un 62% opinó que aumentaría la dependencia con los Estados Unidos; un 49%, que éstos serían injustos en sus tratos con México, y un 44% que se beneficiarían más. Sólo un 37% confiaba en recibir personalmente algún beneficio del TLC. Sin embargo, un 62% opinaba a favor del Tratado (un 20% *totalmente* y un 42% *algo* a favor) porque esperaba que generaría empleos y que permitiría acceso a más y mejores bienes y servicios.

Las opiniones eran ambivalentes, aunando una vieja desconfianza con expectativas generadas por el mensaje de los medios, que contribuían notoriamente a alimentar la esperanza. La admiración por los Estados Unidos había subido, en cuatro años, de un 30% a un 72%, vinculándose directamente al hecho de tener allá algún familiar residente y con trabajo o a la ilusión de realizar ese proyecto, para sí o para alguien cercano, en un futuro próximo. Después de una década de drástico descenso en el nivel de vida, la confianza en los recursos del país también había disminuido.

El Tratado en cuestión

La versión definitiva del TLC, antes de los Acuerdos Paralelos, comprende 22 capítulos agrupados, a lo largo de dos mil páginas, en seis temas: acceso a mercados; reglas de comercio; servicios; inversión; propiedad intelectual, y solución de con-

troversias.⁶⁹ Aunque en el preámbulo se formula la intención de mejorar condiciones de trabajo en los tres países y proteger el medio ambiente, la ausencia de especificaciones en tal sentido motivó la insistencia del presidente Clinton en añadir acuerdos paralelos sobre ambos temas.

Los tres objetivos enunciados son: crecimiento económico mediante la expansión del comercio; incremento de inversiones, y creación de empleos. El Tratado no excluye la ratificación de los compromisos con el GATT pero, en caso de conflictos de interpretación, las cláusulas del Tratado prevalecerán sobre cualquier otro convenio.

La determinación de si un producto es o no “originario de la región” se hará mediante el método de “salto arancelario”: se resta el valor de los insumos que se importaron para su manufactura del valor de la manufactura al exportarse. Quedan fuera de esas *reglas de origen* el sector automotriz y los textiles. Autos y camiones deberán tener un 62.5% de componentes fabricados en la región, que tendrán que identificarse a todo lo largo de la cadena productiva. En los textiles, para que un producto sea calificado deberá tener un contenido mayoritario de la región, desde el hilo o la fibra hasta la prenda terminada. Sólo se harán excepciones cuando los tres países consideren que hay insuficiencia en sus territorios de lino, seda o ciertas telas para la confección de camisas.

En los *textiles*, los acuerdos del TLC prevalecerán sobre los del Acuerdo Multifibras, que limita exportaciones de países en desarrollo mediante cuotas para entrar a los Estados Unidos (los países asiáticos tienen las cuotas más amplias y pueden armar los componentes a través de terceros países). Las exportaciones textiles de México sólo representaban el 3% de las importaciones de los Estados Unidos y la mayoría de los insumos utilizados venían de allá. La industria textil es importante en México por la generación de empleo: en 1991 había 11 mil establecimientos que empleaban a 850 mil personas. La mano de obra abundante y los salarios bajos la hacían muy competitiva en la rama de confección (maquiladoras). La apertura afectó mucho, desde 1988, a los fabricantes mexicanos. Los sindicatos norteamericanos se opusieron a acuerdos que quitaran aranceles a manufacturas procedentes de México, por miedo al traslado de fábricas; también se oponían las empresas que recibían sus insumos de Asia. En el TLC se eliminan aranceles, de inmediato para la mayoría de los textiles y gradualmente, a diez años, para los demás.

El sector *automotriz* establece la supresión de aranceles en los tres países, a un plazo de diez años como máximo. Los automotores procedentes de México podrán entrar inmediatamente, sin aranceles, a los Estados Unidos y el impuesto a camiones ligeros se reducirá del 25 al 10%, e irá disminuyendo gradualmente para desaparecer en cinco años; los aranceles para camiones, tractocamiones y autobuses desaparecerán en diez años. México reducirá del 20 al 10% su arancel sobre automotores procedentes de Estados Unidos y lo suprimirá en un plazo de diez años. Se eliminan todos los aranceles sobre autopartes. Se garantiza la protección a

monopolios norteamericanos al impedir, durante diez años, que los particulares importen libremente vehículos nuevos y al mantener la prohibición, durante quince años, para vehículos usados.

Los consumidores mexicanos seguirán sujetos, pues, a la oferta y a los precios altos de las empresas norteamericanas establecidas en México, sin tener acceso a otras opciones. Se preserva a México, además, como “coto de caza” para las compañías norteamericanas: no se ofrecen condiciones para la competencia de armadoras de otros países, que pudieran ofrecer mejores precios. En cuanto a la inversión, las “proveedoras nacionales” de autopartes podrán tener hasta el 100% de inversión norteamericana o canadiense y las demás empresas hasta el 49%. En cinco años desaparecerá la restricción.

En el rubro de *energía y petroquímica básica* se establece el compromiso de cada país de respetar las Constituciones de los otros dos. México se reserva la propiedad de los bienes del subsuelo y de actividades e inversiones relacionadas con petróleo, gas, refinación, petroquímicos básicos, energía eléctrica y nuclear. No se obliga, en ningún caso, a vender petróleo. En cuanto al gas, los proveedores o los usuarios podrán negociar contratos de suministro con particulares. Las empresas de los tres países podrán establecer sus propias plantas para generar energía eléctrica para su consumo, pero sus excedentes tendrán que ser vendidos a la Comisión Federal de Electricidad que conserva, así, el monopolio de la comercialización de energía.

En el petróleo no se incluyen los *contratos de riesgo* que otorgarían un porcentaje sobre el petróleo descubierto a la empresa exploradora. Se establecen en cambio *contratos de desempeño*, que estipulan una retribución en efectivo y no en petróleo. La mayoría de los petroquímicos dejan de ser estratégicos, al reducirse sólo a ocho el número de los que se reserva el Estado mexicano: etano, propano, butanos, pentanos, hexanos, heptano, materia prima para la elaboración de negro de humo y naftas.

Abundaron presiones para incluir el petróleo en la negociación. Existía el antecedente del Acuerdo previo con Canadá, que se comprometió a no reducir suministros de petróleo a los Estados Unidos. El argumento era que no podía excluirse de un Tratado de Libre Comercio el producto que más exporta México a los Estados Unidos.

Algunos mexicanos sostienen que la modernización de la industria petrolera exige inversión extranjera, señalando que a partir de 1982 han disminuido considerablemente las reservas probadas de petróleo, al detenerse la exploración y debido a inadecuadas técnicas de exploración y de extracción. La revista *Este País* dedicó un número a exponer los puntos de vista de quienes opinan, al contrario, que el país no sólo puede sino debe recuperar su papel protagonista en la explotación del petróleo y no retraerse de la inversión en ese recurso estratégico.⁷⁰

En encuesta realizada por esa revista, un 65% de interrogados consideró que Pemex sigue representando uno de los símbolos más claros del nacionalismo mexi-

cano. Actualmente, el 59% de las exportaciones de crudo se envían a los Estados Unidos; un 17% a España; un 13% a Japón, y un 11% a otros países. La perforación de pozos se asigna cada vez más a empresas extranjeras y con la reclasificación de pe-troquímicos se avanza, en los hechos, en la privatización de la industria petrolera.

La *agricultura* es uno de los puntos más discutibles del Tratado. La agricultura está subsidiada en todas partes y, muy especialmente, en Europa y en los Estados Unidos. En México, la pobreza extrema es la suerte de la gran mayoría de quienes dependen de la economía campesina. Aunque el nivel de vida de los pequeños granjeros norteamericanos era mucho más alto que el de la mayoría de los campesinos mexicanos, también esos granjeros han sido afectados y cada vez más desplazados por la gran agricultura comercial. A través de las ONG, muchos han entrado en contacto con los pequeños agricultores mexicanos para intercambiar experiencias y comparar agravios.

Las reformas al Artículo 27, aprobadas a fines de 1991, prepararon el terreno para el TLC: se dio por terminado el reparto agrario y se autorizó la venta de parcelas ejidales. El objetivo era facilitar la llegada de inversión nacional y extranjera al campo. México y los Estados Unidos eliminarán de inmediato los aranceles en la mitad de su comercio agropecuario; los demás irán disminuyendo hasta un plazo de diez años. Sólo para el maíz, producto básico de la subsistencia campesina, se alargó el plazo hasta quince años, para dar tiempo a que “las reformas del campo surtieran efecto” y a que los campesinos “tuvieran tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones de modernización y liberalización progresiva”.

Mientras que en México los subsidios agrícolas disminuyeron considerablemente después del ingreso al GATT en 1986, en los Estados Unidos se mantuvieron incommovibles. El subsidio en los países desarrollados permite a los productores inundar el mercado mundial con productos más baratos. En los Estados Unidos tiene tres modalidades: “precio objetivo”, “precio soporte” y “pago en deficiencia”. En esta última variante, una agencia de financiamiento da el crédito y recibe parte de la cosecha como pago y, además, se compensa la diferencia entre el precio de mercado y el precio objetivo. A todo lo cual se añaden los subsidios al transporte. Por eso, sobre todo, México no es competitivo en granos ni en leche. Mientras no culminara el GATT no se podía negociar la totalidad de los subsidios: se limitó el Tratado, pues, a los *subsidios a la exportación*. Se estableció una escala: los *verdes* podrían otorgarse sin sujeción a sanciones; los *ámbar* sólo causarían aranceles extras cuando el país importador demostrara que el producto subsidiado dañaría a sus productores; los *rojos* causarían siempre aranceles al exportarse los productos.

A los productores de granos de los Estados Unidos les interesaba entrar de lleno y pronto al mercado mexicano: a los mexicanos les perjudicará enormemente. Lo mismo pasa con los productos mexicanos de leche y carne de cerdo. Por otro lado, mientras que los exportadores mexicanos (léase empresas transnacionales) de frutas

y hortalizas buscaban una apertura inmediata de barreras en el otro lado, los agricultores de California y Florida se oponían al retiro de barreras fitosanitarias.

Hasta ahora, el comercio de agropecuarios ha estado limitado por una amplia gama de barreras. Los aranceles a frutas y verduras mexicanas bajaban en invierno y subían en verano, cuando podían producirse también en los Estados Unidos.

Las barreras arancelarias que han aplicado los Estados Unidos han sido muy altas para ciertos productos mexicanos, como el melón, gravado en un 36%. Las barreras no arancelarias han mostrado diversas modalidades: una cuota muy reducida ha impedido, por ejemplo, la entrada del azúcar mexicana, de carne en canal o refrigerada y de leche. Normas de calidad muy elevadas han obstaculizado la entrada de ciertos productos, como la cebolla y el jitomate, cuando allá ha abundado su oferta. Restricciones sanitarias han limitado o impedido la exportación de pollo, huevo, manzana, papa, cítricos y productos de cerdo. El aguacate quedó marcado ominosamente, desde 1956, por la plaga del gusano barrenador que se detectó en algún envío. Lo mismo ha pasado con la plaga atribuida al pollo mexicano o la mosca mediterránea achacada a la naranja. Una refinada modalidad del proteccionismo ha sido la revisión aduanal morosa de productos perecederos, que puede comprometer todo un embarque. Las normas sanitarias no se eliminan en el Tratado, ya que los países quedan en libertad de adoptar las protecciones que les parezcan pertinentes. Se les pone, sin embargo, ciertos límites, procurando evitar la discriminación injustificada y se establecen dispensas para zonas libres de plaga.

Los *servicios financieros* fueron un punto de agria discusión, por la protección que el Estado mexicano se empeñó en reservarle a la banca reprivatizada. Se la protegió en exceso, posponiendo la apertura de esos servicios y perjudicando a usuarios y especialmente a las empresas mexicanas que requieren de crédito. Sin entrar en detalles, baste registrar que se estableció un plazo de liberalización de trece años, con tres diversas fases y restricciones menores para casas de bolsa y aseguradoras. La participación extranjera en el mercado bancario se limitó hasta el año 2000 al 15% (sin poder pasar una sola institución del 1.5%); del año 2000 al 2004 al 25% (pudiendo captar una sola institución hasta el 4%); de 2004 a 2007, México podrá aplicar una “salvaguarda” si un exceso de participación extranjera hiciera peligrar a la banca nacional. De acuerdo con los expertos, la banca mexicana opera con márgenes financieros mucho más altos que la norteamericana y la canadiense, y las tasas de crédito también son más altas: una liberalización mayor hubiera permitido financiar a las industrias con tasas más competitivas.

Pero el capítulo clave se refiere a *inversiones*. Todo el resto del Tratado gira alrededor de la atracción de capitales: pueden fluir hacia cualquier sector de la economía (menos los poquísimos que todavía se consideran estratégicos y, en los bancos, con los límites marcados) y recibirán el mismo trato que los nacionales. No hay ninguna restricción al desempeño de inversiones de los países signatarios, cu-

yas utilidades podrán remitirse libremente al país de origen. Las inversiones no serán expropiables, salvo por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Un mecanismo de solución de controversias resolverá cualquier conflicto que requiera un arbitraje. Sólo se excluyen las compras de gobierno y la industria militar.

La clave está en las inversiones porque de eso depende ampliar la plataforma exportadora. El socio mayor puede renunciar al proteccionismo en la medida en que se beneficiarán, sobre todo, sus propios inversionistas cuando operen de este lado de la frontera. Las grandes transnacionales serán las beneficiarias principales del levantamiento de barreras.

¿Ningún TLC u otro TLC?

Las reacciones frente al TLC se manifestaron en una amplia gama de críticas, desde las que se oponían radicalmente a *cualquier Tratado* hasta las que proponían *alternativas*, para beneficiar a la mayoría de la gente en los tres países y no sólo a escasos sectores.

El núcleo de la crítica razonada al Tratado realmente negociado fue su carácter exclusivamente económico, que dejaba todo en manos del libre mercado, es decir, de los que tienen más poder económico, sin tocar la dimensión social, ni el medio ambiente, ni las relaciones culturales, ni el tema político esencial de la democracia. Sustentándola, se esgrimió un argumento de peso: sería preferible que la firma se pospusiera hasta lograr una transición democrática con amplio consenso.

La más coherente argumentación fue, sin duda, la de Jorge G. Castañeda y Carlos Heredia, en un texto aparecido en *Nexos* en enero de 1993. En "El otro TLC" se sostuvo que no se había dado un debate serio sobre costos y beneficios y se partió de un supuesto: *si* conviene reglamentar y formalizar un intercambio cuya intensidad creciente se ha ido dando por la lógica de la vecindad geográfica. Es decir, *si* beneficiaría a México la firma eventual de un Tratado. Pero habría una opción frente al acuerdo negociado: *otro acuerdo* que reconociera la *asimetría* entre las economías y estableciera criterios de regulación y planificación, para proteger o desproteger a determinados sectores o estipular lo que cada país habría de producir. Así como hay varios modelos de economía de mercado y no uno solo, también los hay de integración económica: un ejemplo de otro tipo de integración es el de la Comunidad Europea, que incluyó planificación, regulación y política social a pesar del desacuerdo explícito de Margaret Thatcher.

La propuesta alternativa se concentró en siete puntos: 1) establecer *financiamiento compensatorio* para cubrir costos del proceso de transición y ajuste; 2) *planificar una política industrial trilateral*; 3) estipular una más amplia *planificación y regulación*, extendida al conjunto de las actividades económicas; 4) incluir la *migración*

de mexicanos; 5) armonizar *hacia arriba* las normas y *derechos laborales*; 6) incorporar la *defensa del medio ambiente* y del *consumidor*; 7) incluir un *mecanismo de solución de disputas* que abarcara todos los temas.

La asignación de *fondos compensatorios* permitiría incidir en la asimetría que existe entre los Estados Unidos y Canadá, por un lado, y México por el otro, con una proporción de 15 a 100 en los respectivos PIB *per cápita*. En la Comunidad Europea se establecieron esos fondos desde 1958 y se confirmaron recientemente en el Tratado de Maastricht, que sigue asegurando la ayuda a los países más débiles aunque su PIB *per cápita* ya alcance al 75% del promedio europeo.

Los fondos compensatorios le sirvieron a Italia para crear infraestructura y promover capacitación; a Irlanda, que ha obtenido así hasta el 8% de su PIB anual; a España, que financió con esos recursos sus carreteras, telecomunicaciones y seguro contra el desempleo en las regiones más afectadas por la competencia europea. En Europa, los fondos se cubrieron con recursos directos de los países más prósperos y con un impuesto al valor agregado. Pero, ¿acaso aceptarían los *tax payers* de los Estados Unidos financiar, por ejemplo, las carreteras mexicanas?

Podrían encontrarse, acaso, opciones más indirectas, como un impuesto a los intercambios fronterizos; un impuesto sobre las “ganancias extraordinarias” que obtuvieran las empresas que se trasladaran a México y/o la creación de un Banco Norteamericano de Desarrollo, para proporcionar recursos a México y las regiones o sectores más deprimidos de los Estados Unidos y Canadá. El Banco funcionaría con activos públicos y privados. Proporcionaría recursos a los gobiernos pero también, directamente, a las comunidades rurales y urbanas con carácter de préstamos o subvenciones de apoyo. Sus recursos servirían, también, para cubrir costos de modernización de infraestructura, armonización de normas y cierre de empresas no competitivas, permitiendo la capacitación de trabajadores y creando un seguro contra el desempleo.

La otra fuente probable de recursos para compensar la asimetría sería, por supuesto, una renegociación de la deuda: aunque se ha reducido su carga, las transferencias netas al exterior siguen siendo muy grandes. Una manera de reciclar esos recursos sería canjeando deuda por inversión para el desarrollo social, lo que redundaría en una estabilidad social altamente propicia para la afluencia de inversiones.

La *planificación* de una *política industrial* conveniente para los tres países permitiría racionalizar el desplazamiento de industrias a cada país y paliar sus efectos. Se aportaron como ejemplo la intervención estatal en Japón y en Corea y la alianza estratégica entre el sector público y el privado, en la Comunidad Europea, para capturar mercados, mejorar tecnologías y obtener ventajas comparativas dinámicas, que favorecen una competitividad no fundada exclusivamente en “ventajas naturales estáticas”. Habría que anticipar en qué rubros podría llegar a ser competitivo el país en una o dos décadas para promover, en consecuencia, la investigación

en tecnológicos y universidades y apoyar con coherencia a las empresas mismas. Hasta el momento, sólo se habría mostrado la competitividad de empresas mexicanas en tres productos de exportación: cerveza, vidrio y cemento. Todo lo demás se reduciría a comercio intrafirmas de multinacionales y ni siquiera esos rubros competitivos reciben apoyo. En el Tratado, por otra parte, se deja al mercado la determinación de los rubros en los que se podrá competir.

En cuanto a planificación y regulación del conjunto de la economía, se recordaron las funciones que cumple, en Europa, la Comisión de Bruselas y el amplio marco regulatorio que ha servido a la recuperación de Alemania. ¿No sería aconsejable una Comisión Económica de Norteamérica?

En alguna ocasión, el presidente Salinas justificó la ausencia de la cuestión migratoria en el TLC confundiendo los buenos deseos con la realidad. Dijo entonces: "No quiero exportar personas sino mercancías" y ésa sería, sin duda, la aspiración de todos, pero siendo tan grave el desempleo es obvio que la migración seguirá vigente durante varias décadas, con o sin TLC. Si en Europa se legalizó la migración de italianos, griegos, portugueses y españoles, ¿por qué no buscar una solución aceptable para ambos países, con el antecedente de la legalización de casi tres millones de mexicanos en los últimos cinco años? ¿Por qué los *trabajadores migratorios* quedan fuera de una apertura que sí se negocia para las mercancías y los capitales?

Otra deficiencia advertida por Castañeda y Heredia en el acuerdo negociado fue la ausencia de la cuestión laboral. Sería recomendable armonizar *hacia arriba* normas y derechos, procurando alcanzar los niveles mejores en cada país. Se tropieza, también, con la rigidez corporativa que impone la cláusula de exclusión de los sindicatos y asegura su subordinación al Estado y con otro rasgo del autoritarismo del sistema que, al asegurar la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, excluye fallos imparciales en caso de huelga.

Contra la argumentación de que la enorme diferencia de salarios se debería a diferencias de productividad, se opuso un ejemplo ostensible de que no hay tal: la productividad de los trabajadores de la Ford de Hermosillo es comparable con la de los obreros de Ford en Michigan o en Hiroshima. Sin embargo, los mexicanos ganan menos de 2 dólares por hora, es decir, 20 o 25 veces menos. Si las multinacionales pueden decidir qué y dónde producir, ¿no sería lógico que los trabajadores de los tres países pudieran negociar conjuntamente sus mejoras laborales?

Para evitar que México se convierta en un basurero tóxico de los Estados Unidos, como ya ha ocurrido en Matamoros o en Ciudad Juárez, habría que establecer normas ambientales válidas para todo el país y no sólo para la frontera, como lo ha propuesto la Comisión para la Justicia en las Maquiladoras, ONG formada por trabajadores y grupos sociales de ambos países. Sólo la participación ciudadana garantizaría la aplicación de las normas que se establezcan. Y sería justo que los contaminadores pagaran para limpiar lo que han contaminado.

Un último punto proponía la inclusión de “un mecanismo de solución de disputas abierto a todos y que abarque todos los temas”. La sanción por incumplimiento de normas laborales, ambientales o de protección para el consumidor tendría que ser, no una multa, sino la pérdida para los productos en cuestión de los privilegios de exención arancelaria. También sería recomendable abrir el mecanismo a ciudadanos y ONG de cada país.

Frente a la probable objeción pragmática de que un acuerdo de tal naturaleza no sería viable, ambos analistas esgrimían otro argumento: los profundos cambios en el clima político e ideológico de los Estados Unidos que anunciaba, entonces, la quiebra en la sucesión republicana y el advenimiento de Clinton. Y sugerían:

En lugar de gastar tanto dinero en tratar de convencer a los norteamericanos de que esto o aquello les conviene, sería preferible *dedicar nuestros recursos y esfuerzos a persuadirlos de nuestros argumentos, no de los suyos. A la larga esto se puede lograr; la prisa es mala consejera*.⁷¹

Notas

¹ Héctor Aguilar Camín, entrevista en *La Jornada Semanal*, 30/VI/1991.

² Sergio Zermeno, “Desidentidad y desorden: México en la economía global y en el libre comercio”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre de 1991, pp. 20-21.

³ Federico Reyes Heróles, “Ese vicio nacional”, en *La Jornada*, 10/IV/1992.

⁴ Ifigenia Martínez, “El TLC: realidades e ilusiones”, en *La Jornada*, 19, 20, 21/XII/1992.

⁵ Carlos Salinas de Gortari, declaraciones a *Le Figaro* y *Businessweek*, en *El Financiero*, 2 y 6/VIII/1991. Declaración a *The Financial Times*, en *La Jornada*, 1º/X/1991.

⁶ Carlos Salinas de Gortari, entrevista con Carmen Lira, *La Jornada*, 13/XI/1992.

⁷ Declaración de Carlos Salinas de Gortari, *La Jornada*, 24/VII/1992.

⁸ Héctor Aguilar Camín, *Después del milagro*. México: Cal y Arena, 1988, pp. 295-296.

⁹ Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989, p. 286.

¹⁰ Comentarios atribuidos a José Córdoba y Porfirio Muñoz Ledo. *La Jornada*, 13/XI/1989; *Proceso* núm. 572, 19/X/1987, p. 10; *Proceso*, núm. 569, 28/IX/1987, p. 13.

¹¹ Aguilar Camín y Meyer, *op. cit.*, pp. 284-285.

¹² F. Ortega Pizarro, “Mientras públicamente se decía no al convenio con Washington, ya se negociaba”, en *Proceso*, 2/IV/1991, p. 8. Enrique Quintana, “El TLC: alcances e implicaciones”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre de 1991, p. 66. Jorge G. Castañeda, *La casa por la ventana*. México: Cal y Arena, 1993, p. 227.

¹³ *La Jornada*, 2/VII/1990, y José Ángel Gurría, *La política de la deuda externa*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 156.

- ¹⁴ Jorge G. Castañeda, "La larga travesía de Tlatelolco y la política exterior de Carlos Salinas", en *op. cit.*, p. 215. El texto es de febrero de 1990.
- ¹⁵ S. León, "¿Requiem por el sindicalismo?", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre/1991, p. 177.
- ¹⁶ Arturo Ortiz Wadygmar, "El neoproteccionismo norteamericano ante el TLC", en *La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá* (varios autores). México: Siglo XXI Editores, 1990, pp. 44 ss.
- ¹⁷ Luis Rubio, *¿Cómo va a afectar a México el TLC?* México: Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 17.
- ¹⁸ *Ibid.*, pp. 20-21.
- ¹⁹ Sergio Zermeño, *op. cit.*, p. 29.
- ²⁰ Armando Labra, "La integración desde la perspectiva norteamericana", en *La integración comercial de México...*, *op. cit.*, p. 63.
- ²¹ Víctor M. Bernal Sahagún, "La inversión extranjera en el TLC: la integración dentro de la integración", en *La integración comercial de México...*, *op. cit.*, p. 190; Labra, A., *op. cit.*, pp. 72, 68.
- ²² Elaine Levine, "El TLC en la problemática económica y social estadounidense", en *La integración comercial...*, *op. cit.*, p. 39.
- ²³ J. Rangel, "El TLC y los tigres del Este asiático", en *La integración comercial...*, *op. cit.*, p. 112.
- ²⁴ Labra, A., *op. cit.*, p. 70.
- ²⁵ David Ibarra, "El Estado y el mercado", en *Nexos*, núm. 158, febrero de 1991.
- ²⁶ "Neoliberalismo", en *Zona Abierta de El Financiero*, 5/III/1993. Se recogen opiniones expuestas en una mesa redonda organizada por *El Financiero* donde participaron Juan Molinar, Adolfo Aguilar Zinser, José Luis Orozco y Lorenzo Meyer.
- ²⁷ Carlos Fuentes, "¿Es Clinton el nuevo F. D. Roosevelt?", en *La Jornada*, 14/VIII/1993.
- ²⁸ Carlos Salinas de Gortari, "Reformas al Estado", en *Nexos*, núm. 148, abril de 1990, pp. 30-31.
- ²⁹ Juan Rebolledo, *La reforma del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 13 y 21.
- ³⁰ José Córdoba Montoya, "Diez lecciones de la reforma económica en México", en *Nexos*, núm. 158, febrero de 1991, pp. 31, 32, 34, 35 y 37.
- ³¹ Jorge Alcocer, "La lección # 11", en *Nexos*, mayo de 1991, p. 34.
- ³² *Ibid.*, p. 37.
- ³³ Carlos A. Roza, "El Acuerdo de Libre Comercio en la disputa por la hegemonía económica mundial", en *La integración comercial de México...*, *op. cit.*, p. 144.
- ³⁴ Carlos Salinas de Gortari, Tercer Informe de Gobierno, *La Jornada*, 2/IX/1991.
- ³⁵ *El Financiero*, 14/I/1992.
- ³⁶ Enrique Quintana, "Ley de Inversión Foránea: dimes y diretes", en *El Financiero*, 25/VII/1991.
- ³⁷ M. de J. Espinosa, *La Jornada*, 19/X/1991; Marcos Chávez, "Especulación, signo de los tiempos", en *El Financiero*, 14/IV/1992.

³⁸ *El Financiero*, 13/IX/1991.

³⁹ Jacques Rogozinski, *La privatización de empresas paraestatales*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 46-47.

⁴⁰ Enrique Quintana, "Los mitos de la privatización", en *Este País*, núm. 9, diciembre de 1991. Jacques Rogozinski entrevistado por Enrique Quintana, en *Este País*, núm. 9, diciembre de 1991. Jacques Rogozinski, *op. cit.*, pp. 117-119 y 122-123.

⁴¹ Sergio Aguayo Quezada, "Corrupción, política y sociedad", en *La Jornada*, 22/V/1993; *El Financiero*, 22/XII/1992; entrevista con Jorge Díaz Serrano, *El Financiero*, 13/I/1993.

⁴² *La Jornada*, 20/VIII/1993. Jacques Rogozinski, *op. cit.*, pp. 128-130.

⁴³ Castañeda, J. G., "La larga travesía de Tlatelolco...", en *op. cit.*, p. 222. Lorenzo Meyer, "La noticia de los diarios...", en *La integración comercial de México...*, *op. cit.*, p. 15. El texto apareció en *Excélsior*, 11/IV/1990.

⁴⁴ Castañeda, J. G., "A la puerta de Washington", en *op. cit.*, p. 241.

⁴⁵ Bernal Sahagún, V. M., *op. cit.*, pp. 195 ss.

⁴⁶ Datos de J. Rangel y G. Minto en *Momento Económico*, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, enero-febrero de 1990, pp. 15, 18, citados por Bernal Sahagún, V. M., *op. cit.*, pp. 204-205.

⁴⁷ Bernal Sahagún, V. M., *op. cit.*, p. 205.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 207.

⁴⁹ Citado por Antonio Tenorio Adame, "La soberanía, el mercado y la mano de obra", en *La integración comercial...*, *op. cit.*, pp. 227-228.

⁵⁰ Luis González Souza, "México ante la integración de Norteamérica: entre la democracia y el vasallaje", en *La integración comercial...*, *op. cit.*, p. 255.

⁵¹ Michael J. Piore, "Los estándares sociales en México y las estrategias empresariales de los Estados Unidos", en *México ante el libre comercio con América del Norte* (Gustavo Vega Cánovas, coord.). México: El Colegio de México y Universidad Tecnológica de México, 1991, p. 241.

⁵² Citado por José Angel Conchello, *El TLC: un callejón sin salida*. México: Grijalbo, 1992, p. 184.

⁵³ Carta de seis mexicanos a la Cámara de Diputados, incluida por Jorge G. Castañeda en *op. cit.*, pp. 145-148.

⁵⁴ Conchello, J. A. *op. cit.*, p. 184.

⁵⁵ Luis Rubio, *op. cit.*, p. 94.

⁵⁶ La encuesta a intelectuales mexicanos sobre probables efectos de un Tratado en la cultura mexicana apareció en *La Jornada*, 17 al 22/VII/1991.

⁵⁷ Robert A. Pastor, *Whirlpool*. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1992, pp. 261 y 321. La frase de Salinas es un juego de palabras con la palabra rusa que designa a la apertura o reforma política (*glasnost*) y el riesgo de "romper la cristalería" poniéndola en práctica "antes de tiempo" (*glasses that break*).

⁵⁸ Entrevista a Samuel Huntington por Dolia Estévez, *El Financiero*, 6/VII/1993. ¿Choque de

civilizaciones? fue reproducido en dos partes por *Zona Abierta* de *El Financiero*, los días 30 de julio y 6 de agosto de 1993.

⁵⁹ Declaración de Salvador Nava en *El Financiero*, 28/X/1991.

⁶⁰ Martínez, I., *op. cit.*, 20/XII/1992.

⁶¹ Opinión de Michel Camdessus citado por Conchello, J. A., *op. cit.*, p. 257.

⁶² Conchello, J. A., *op. cit.*, p. 259.

⁶³ *La Jornada*, 18/V/1991.

⁶⁴ *El Financiero*, 13/IX/1991; *La Jornada*, 1º/X/1991; 18/X/1991 y 27/XI/1991.

⁶⁵ *El Financiero*, 10/X/1991.

⁶⁶ *El Financiero*, 15/X/1. 91.

⁶⁷ *La Jornada*, 22/VIII/1991.

⁶⁸ Miguel Basáñez y Enrique Alduncin, “A medio camino, perplejidad y contradicción”, en *Este País*, diciembre de 1991.

⁶⁹ Toda la información sobre el tratado negociado, que aquí se resume, se encuentra en Luis Rubio, *op. cit.*

⁷⁰ “Pemex, sin reservas”, *Este País*, núm. 12, marzo de 1992.

⁷¹ Castañeda, J. G., *op. cit.*, p. 41.

X. Proyecto en entredicho

El campo que se merece la globalización

En el Artículo 501 del TLC, todavía entre corchetes a principios de 1992, se fijaba la meta de lograr la competitividad aumentando la escala de producción. Las reformas al Artículo 27 y la nueva Ley Agraria se propondrían “revertir el creciente minifundio” para incrementar la productividad, estimulando la afluencia de capitales. El modelo volvía a ser el de una agricultura de escala para exportación, con grandes unidades que garantizarían una mayor eficiencia. Los funcionarios de la Secretaría de Agricultura se prodigaron en la alabanza de los grandes núcleos para “reagrupar al minifundio, ejidal y privado, y eficientizar (*sic*) su potencial productivo”.¹

El subsecretario Luis Téllez Kuenzler, autor intelectual del proyecto, señalará que

la integración y el comercio entre empresas transnacionales, que es uno de los factores primordiales de los intercambios actuales, permiten adquirir o complementar economías de escala, ampliando los canales de comercialización y acceso a la tecnología. La globalización, como fenómeno de fin de siglo, supone que las posiciones autárquicas y aislacionistas no prosperarán.

Los países “deben especializarse en la producción de bienes en los que gozan de mayores ventajas comparativas”. Téllez K. fue explícito:

El Estado no podía destinar, en la magnitud requerida, la cantidad de recursos necesarios para financiar por sí mismo la modernización productiva del campo. Era necesaria una mayor participación del sector privado y, para ello, era necesario ofrecer un marco de absoluta seguridad.²

Para ofrecerla, según el funcionario, “era indispensable eliminar la incertidumbre en la tenencia de la tierra asociada con el reparto agrario”. Facilitar la venta de parcelas serviría, de paso, para “garantizar la capacidad de decisión y gestión de los ejidatarios” y, era de esperarse, para contribuir a “elevar el nivel de bienestar de las familias”.³

La apertura había sido un preludio. Los aranceles de importación en productos agropecuarios todavía estaban por encima del 100% en 1986 pero, ya en 1991, la media arancelaria era del 13%. En 1990 se liberó la exportación de hortalizas y la mayoría de las restricciones a productos de la canasta básica, sujetos hasta entonces a precios controlados o de concertación. El retiro de Conasupo de la comercialización

[...] provocó un vacío ante el rezago de los sectores social y privado. La venta de las cosechas en un entorno de economía abierta planteó en 1989 y 1990 múltiples problemas[...].⁴

A esos múltiples problemas, explicaría Téllez Kuenzler, se les buscó salida creando un nuevo órgano desconcentrado de la SARH: Aserca, para fomentar la comercialización, pero sin intervenir en la compra-venta de productos agropecuarios.

El campo ordeñado

El total del reparto agrario fue de 102 millones de hectáreas, de las cuales sólo son cultivables 31 millones: el resto son forestales o con vocación ganadera. De las cultivables, un 5% son de riego, un 12% de buen temporal y un 72% de mal temporal. Se beneficiaron 3.5 millones de campesinos en 29 mil ejidos y comunidades. Un 82% de los beneficiarios han carecido de crédito o de seguros; alrededor de un 13% han recibido créditos en algún momento; el 1% sólo han recibido seguro y un 4% han contado con crédito y seguro. Actualmente, los campesinos suman unos 5 millones: contando las familias, la cifra se aproxima a 25 millones.⁵

Según cálculos del subsecretario Téllez, el 99% de los ejidos se dedican a la agricultura, en un manifiesto “uso inadecuado de los recursos”, considerando que la mayoría de la superficie ejidal “tiene vocación ganadera”. Un 70% se dedican al cultivo del maíz. El 91% de los ejidos, que cubren 17 millones de hectáreas, están en zonas de

temporal. Sólo 3 millones de hectáreas son de riego, lo que significa el 3% de la superficie ejidal nacional. El 50% de esos ejidos de riego se encuentran en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa, que cuenta con el 15% de todas las tierras ejidales irrigadas.

El 50% de los ejidos no tienen agua potable y el 80% carecen de caminos pavimentados: uno de cada cinco sólo pueden comunicarse por veredas, porque ni siquiera llegan a brechas. El 54% no reciben asistencia técnica; el 58% no poseen tractores y sólo el 37% tienen alguna infraestructura para la producción (como hornos o silos, o baños garrapaticidas, o naves para cerdos o aves). El 90% no cuentan con ninguna instalación agroindustrial o, si las tienen, son muy rudimentarias. Más del 58% de los ejidatarios tienen parcelas menores de 5 hectáreas y, en algunos estados, menores de 1.5 hectáreas.⁶

¿Escenarios catastróficos?

El deterioro de la agricultura campesina, como se repasó en capítulos anteriores, se debió a la dotación de tierras marginales, a la falta de apoyos coherentes, al burocratismo, a la corrupción y al control político de los campesinos, aunado todo ello a la aparición del neolatifundio. Pero los modernizadores prefirieron atribuir la crisis del campo a la forma de tenencia de la tierra.

En la década de los ochenta se restringió drásticamente la inversión del Estado y el crédito, se deterioró aun más la infraestructura y se desplomaron los precios de garantía: los productores de granos básicos recibieron por cada kilo, en 1988, la mitad de lo que recibían en 1981. La rentabilidad se derrumbó para el sector social capaz de vender excedentes, aunque también salió afectada la pequeña propiedad. Hubo que importar granos en grandes cantidades aunque la capacidad de consumo había bajado un 40%. En 1990 se importaron granos por valor de 4 500 millones de dólares y la cifra hubiera sido mucho mayor con el nivel de consumo de 1981.⁷

Ante la perspectiva del futuro tratado, el investigador José Luis Calva trazó, a fines de 1990, el panorama de los escenarios previsibles si México renunciaba al derecho, que le había reservado el GATT, de proteger prioritariamente sus productos y su régimen de tenencia, manejando discrecionalmente aranceles y permisos de importación. Los escenarios posibles eran liberar sin restricciones o una negociación minuciosa, producto por producto, con compensaciones y salvaguardas.

El efecto catastrófico de una liberalización irrestricta sería desaparecer las más importantes cosechas básicas, empezando por el maíz. ¿Por qué? Por una enorme brecha de productividad que le permite a los Estados Unidos obtener más de 7 toneladas de maíz por hectárea mientras que México sólo puede lograr, en los mejores años, 1.85. ¿Acaso se debe a que los granjeros de allá son mejores? No.

Allá llevan un siglo invirtiendo en investigación para mejorar la tecnología y en México se le han destinado pobres recursos; allá disponen de grandes planicies, donde puede entrar la maquinaria, y aquí prevalecen laderas y pendientes; allá les sale el sol a las cuatro de la madrugada y les llueve con generosidad y aquí no. Por otra parte, la equiparación tecnológica de la agricultura y la ganadería es muy problemática: las semillas, por ejemplo, no aceptan fácilmente el traslado de un nicho ecológico a otro y el recambio genético del ganado lechero se llevaría varios años. A todo ello se añade que la brecha tecnológica se ha agravado por la descapitalización del campo en los años ochenta, que afectó tanto a campesinos pobres como a empresarios. La maquinaria está en mal estado; la infraestructura deteriorada y la aplicación de fertilizantes y semillas mejoradas ha disminuido, así como el acceso a recursos para controlar plagas. La superficie sembrada de riego, por otra parte, se ha reducido en un 25% por falta de mantenimiento a la infraestructura. Con una liberalización irrestricta

[...]más de 10 millones de hectáreas serían retiradas del cultivo y se generaría un éxodo rural de alrededor de 15 millones de mexicanos[...].⁸

El experto consideraba muy incierta la alternativa de cultivar frutas y verduras para exportación. Apenas una quinceava parte de la superficie donde ahora se cultivan básicos podría dedicarse a hortalizas y frutales para exportar, entre otras razones porque ya estamos cubriendo el 70% de las necesidades de los Estados Unidos y una sobreoferta podría significar desplome de precios. Un cálculo realista permitiría dedicar, exclusivamente a la exportación, medio millón de hectáreas más.

Por otra parte, multiplicar cultivos de exportación sería una trampa de graves consecuencias puesto que más de la mitad de las proteínas de los pobres se encuentran en las tortillas. No está nada claro que a México le convenga una inundación de maíz forrajero amarillo, menos nutritivo que nuestro maíz blanco en un 25%, que aquí sería para consumo humano, sólo porque del otro lado de la frontera abundan los excedentes.

Ocaso del maíz y fin al reparto agrario

En el TLC negociado se estableció un plazo de quince años para la apertura total a la importación de granos básicos. Y, para propiciar una reconversión del campo que permitiera “competir” en el mercado de Norteamérica, se consideró indispensable modificar el marco jurídico que excluía a las tierras ejidales y comunales del mercado de bienes raíces. A lo largo de 1991 se fue preparando a la opinión con una ofensiva que le atribuía al ejido todos los males del deterioro agrícola:

A juicio del gobierno, solamente las fuerzas del “mercado libre” asegurarán la modernización rural de México, promoverán el ingreso del capital nacional y extranjero al sector y garantizarán la competitividad de la nación dentro del mercado norteamericano. [...] La demanda nacional se cubrirá principalmente con importaciones. *Ello implicará sustituir la soberanía alimentaria por la complementariedad internacional* [...] el gobierno convertirá a México en un simple consumidor de sus vecinos del norte.⁹

Mientras el Consejo Nacional Agropecuario, que reúne a los grandes empresarios agrícolas, aseguraba que las reformas acabarían con las invasiones de tierras y fluirían muy pronto entre 12 y 15 billones de pesos, el Congreso Agrario Permanente (que agrupa a organizaciones campesinas independientes y a la CNC) se declaró por la defensa del ejido. Demetrio Sodi escribió que *el Estado mexicano está en deuda con los campesinos y esa deuda no se paga privatizando la tierra* y recordó que la baja productividad no se debía al régimen de propiedad de la tierra sino a la persistente falta de apoyo del Estado.

Pocos días antes del Informe presidencial, el INI había pronosticado alto riesgo de desestabilización social si se privatizaba el ejido para propiciar el crecimiento de la empresa extensiva. En un documento interno, el Instituto Indigenista explicó cómo la relación del campesino con la tierra es más social y cultural que mercantil y señaló las posibles consecuencias de una propuesta modernizadora “radical” y aun de una “moderada”. No se resolvería la crisis sino que se acentuaría la desigualdad: comprarían las tierras los caciques o las empresas y la mayoría de los campesinos se encontraría pronto en la miseria.

El anuncio del fin del reparto agrario se hizo en el Tercer Informe de Gobierno. Ocho días después se conoció la propuesta de reformas. Arturo Warman se concretó a destacar “lo esencial”, que sería “reconocer la autonomía del campesino” para dejarlo en libertad de decidir. José Woldenberg, en cambio, desconfió de ese “escenario de campesinos autónomos, sin presiones de su entorno” y Arturo Gershenson criticó el fin de la dotación de tierras y el abrir las puertas a sociedades mercantiles recordando, por añadidura, cómo fueron perdiendo sus granjas, por hipoteca, los granjeros norteamericanos. Gustavo Gordillo aplaudió, mientras tanto, la “apropiación campesina de la tierra”.¹⁰

Todas las tierras al mercado

Los dos liberalismos del siglo XIX, el de los hombres de la Reforma y el de los “científicos” porfirianos, dieron la espalda por igual al México tradicional. La Ley de Desamortización de 1857 privó a los pueblos de sus viejos derechos a la propiedad comunal y luego siguieron las Leyes de Colonización de 1875 y 1883 y la de Terrenos Baldíos de 1894: el despojo de los pueblos culminó con el esquema de los positivistas porfirianos.

La revolución implantó un proyecto modernizador que retomaba ese hilo de continuidad. El proyecto de Carranza, Obregón y Calles prevaleció después de la derrota de Emiliano Zapata, aunque el aliento de su aspiración restauradora del país tradicional quedó inscrito en la Constitución de 1917. La modificación al Artículo 27 constitucional y la Ley Agraria aprobada a principios de 1992 se propusieron culminar, por fin, el proyecto modernizador que había pretendido desplazar a la propiedad comunal por el concepto y la práctica de propiedad individual, desde 1857, incorporando las tierras al mercado.

Esta vez, sin embargo, la experiencia aconsejó no hacer la privatización compulsiva sino voluntaria, quizá por temor a la “desestabilización” que había anticipado el Instituto Indigenista. Una vez más las élites imponían su proyecto a los campesinos; decidiendo por ellos, sólo que ahora matizadamente, procurando no violentar demasiado los ánimos: se trataba de crear el marco jurídico, abriéndole puertas al mercado y suponiendo que las presiones del mercado harían lo demás.

La reforma constitucional entró en vigor el 6 de enero de 1992. Puso fin al reparto agrario porque “ya no hay tierras para satisfacer las demandas de dotación” y la falsa expectativa “inhibe la inversión” y “produce una mayor pulverización del minifundio” y un descenso de la productividad. Para promover la certeza en la tenencia de la tierra, ya no se exigirá certificado de inafectabilidad para solicitar juicio de amparo contra resoluciones de restitución de tierras o aguas. Se crean *tribunales agrarios*, para resolver las cuestiones pendientes por límites de terrenos comunales o ejidales, y se establece la Procuraduría de la Justicia Agraria. Se reconoce la personalidad jurídica de ejidos y comunidades (a diferencia de la Ley de 1857) y el derecho de ejidatarios y comuneros a decidir sobre las condiciones que “más les convengan” para aprovechar sus recursos.

Las *sociedades mercantiles por acciones* podrán adquirir tierras “en la extensión que sea necesaria para su objeto” abarcando hasta veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad, que se señala en “cien hectáreas de riego o humedad de primera y sus equivalentes en otras clases de tierras”:

Para efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Una sociedad mercantil puede poseer, pues, hasta 2 500 hectáreas de riego; 5 mil de temporal; 20 mil de agostadero y 40 mil de bosque, monte o agostadero en tierras áridas. La reforma al Artículo 27 estipula también:

La Ley establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y *otorgar el uso de sus tierras*; y, tratándose

de ejidatarios, *transmitir sus derechos* parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario *el dominio sobre su parcela*[...].¹¹

Es decir, que las parcelas ejidales ya no son *inalienables, inembargables e imprescriptibles* como estableció la Constitución de 1917 para proteger a los campesinos de la pérdida de su único *patrimonio familiar*, transmisible sólo por herencia. Ahora se puede vender, se puede embargar, se puede ceder en usufructo y se puede perder por invasión.

La mesa puesta

Se establecen, en la Ley Agraria reglamentaria, ocho mecanismos para facilitar la movilidad de la tenencia: 1) un ejidatario puede vender su parcela *a otro ejidatario* o *avecindado* sólo firmando un papel ante dos testigos; 2) el comprador puede ser cualquiera, aun ajeno al ejido: bastará que apruebe la venta la tercera parte más uno de los miembros del ejido, en asamblea de segunda convocatoria; 3) puede otorgarse el *usufructo de la parcela* como garantía para un crédito o para cualquier otra obligación, en contratos sin límite de tiempo; 4) en las *asociaciones en participación con empresas*, los que se asocien con ejidatarios tendrán el recurso de embargarles la tierra, alegando incumplimiento de su parte del contrato; 5) puede transmitirse el dominio de la parcela a una *sociedad mercantil*, que extenderá *acciones* al ejidatario: como la posesión de la mayoría de acciones autoriza a tomar decisiones, no se excluye la posibilidad de que se hipotequen las tierras y, en caso de quiebra, los ejidatarios perderán todo; 6) el *invasor* de una o varias parcelas ejidales puede ahora reclamarla como suya a los cinco años (si es de *buena fe*) y a los diez años (si *de mala fe*); 7) puede *rentarse* la tierra sin límite de tiempo ni garantía de que no se agotará su fertilidad por abuso de su explotación; 8) el ejidatario puede nombrar heredero a cualquier persona, que no tendrá la obligación, como antes, de proveer alimentos a la familia del ejidatario fallecido.

No sólo las parcelas sino también las *tierras de uso común* (bosques, selvas, etc.) entran ahora en el mercado. ¿Cómo? 1) Pueden dividirse entre los ejidatarios como *parcelas*, tras lo cual pueden transmitirse por cualquiera de los mecanismos ya descritos (salvo si se trata de bosques o selvas); 2) puede transmitirse su dominio, sin dividir las, a una *sociedad mercantil*; 3) cualquier ejidatario puede vender su *derecho proporcional* a las tierras de uso común, facilitándose el acaparamiento por caciques; 4) puede otorgarse el *usufructo* de esas tierras como garantía de crédito u obligaciones y podrán ser embargadas para resarcirse el acreedor, hasta por treinta años; 5) pueden entregarse en *arrendamiento*, en *asociación* o en otras formas para

ser explotadas por terceros, hasta por treinta años, que serán prorrogables; 6) poseisionarios (léase invasores) *de buena fe* pueden reclamarlas como propias a los cinco años, y si fuera *de mala fe* podrán hacerlo a los diez.

Las *comunidades indígenas*, cuyas tierras no son ejidales, también entran al mercado: 1) el dominio de sus tierras de uso común, incluyendo bosques y selvas, puede transferirse a *sociedades mercantiles* que extenderán acciones (vendibles) a la comunidad; 2) los comuneros pueden vender sus derechos individuales sobre la parcela y sus derechos proporcionales sobre las tierras de uso común a otros comuneros o a cualquier comprador; 3) las tierras pueden rentarse, darse en aparcería o en cualquier otra forma de explotación por terceros, durante treinta años prorrogables; 4) también pueden ser reclamadas por poseisionarios *de buena fe* (a los cinco años) y de *mala fe* (a los diez años); y, por último, 5) pueden transformarse en *ejidos*, quedando “tan libres de privatizarse” como ahora lo están aquellos.

Analizando todas las disposiciones anteriores, incorporadas en las reformas al Artículo 27 y en la Ley Agraria, José Luis Calva resumió las *vías* abiertas para facilitar el propósito de revertir el minifundio y propiciar la *concentración de la tierra*.¹²

Un chivo expiatorio que no se quería morir

Comentaristas de la nueva modernización del campo, de las más variadas procedencias, celebraron el fin de la tutela del Estado sobre los campesinos y, de buena o mala fe, confundieron la manera en que habían venido funcionando los ejidos con el ejido colectivo hacía tiempo en desuso. El fantasma de una colectivización teórica confundía la discusión: la verdad era que no se trataba de optar entre parcelación o ejido colectivo puesto que hacía tiempo que la propiedad social, en los hechos, había estado parcelada. Lo que estaba en juego era propiciar o no propiciar que las circunstancias del infortunio se conjugaran para inducir la venta, el éxodo y el callejón sin salida. Había que proteger su condición de *patrimonio familiar* y la alternativa de un campo *con campesinos* en condiciones de producir.

La intención del proyecto modernizador no ha sido tanto una inmolación espectacular del chivo expiatorio como propiciar su muerte lenta, incruenta y por inanición. Se buscó quitar obstáculos para que pudieran afluir las inversiones al campo. Las inversiones no han fluido, sin embargo, por lo menos en el corto plazo. Y la disposición de los campesinos a vender tampoco ha parecido evidente. En junio de 1992, una encuesta registraba un 90% de campesinos dispuestos a continuar trabajando sus tierras y un 71% convencido de que la mayoría no vendería. Sólo un 8%

declaró tener la intención de incorporar sus parcelas al mercado y sólo un 2% afirmó que vendería y emigraría. La resistencia a vender o rentar parcelas fue asumida como compromiso en el Tercer Encuentro Nacional de Organizaciones de Campesinos, en agosto de 1992.¹³

La ofensiva contra el ejido y la declaración de que ya no había tierras para repartir fueron recibidas con inquietud por las organizaciones campesinas. Antes del Informe, representantes de un centenar de grupos se reunieron en una convención de dirigentes regionales, que entregaron sus puntos de vista al Ejecutivo y lo mismo hizo el Congreso Agrario Permanente (CAP), obteniendo seguridades de respeto al consenso y de no imposición. El anuncio hecho en el Informe y las reformas enviadas a la Cámara una semana después fueron recibidos por el CAP como “un proceso de contrarreforma agraria, social y económica”: once de sus doce organizaciones estaban en desacuerdo y sólo una asentía, la CNC. El reparto agrario sólo podría concluir, señalaban, cuando se hubiera resuelto de veras el rezago y no quedara ningún latifundio disfrazado.

El CAP entregó un documento a la Cámara de Diputados, definiendo esa posición y oponiéndose a lo que llamaban “la privatización del campo por los riesgos de desarticulación organizativa, productiva y social del ejido”, que se agravarían al quedar sujetas las parcelas a embargo y prescripción. La inconformidad campesina se manifestó en todos los rumbos del país: en los Valles del Yaqui y del Mayo, en Chihuahua, en Morelos, en el Estado de México, en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, en Tabasco.

La CNC condujo un día a Los Pinos a campesinos de Querétaro, Morelos y el Estado de México, para una reunión cuyo propósito desconocían. Se trataba de recabar firmas de dirigentes para un Manifiesto Campesino de apoyo a las reformas. El presidente les habría dicho, repitiendo palabras de Emiliano Zapata, y mirándolos uno a uno fijamente: “Los que no tengan miedo que pasen a firmar”.¹⁴

Al día siguiente apareció en la prensa el Plan de Anenecuilco, suscrito por diez organizaciones, anunciando un Movimiento Nacional de Resistencia y Lucha Campesina que se opondría a las reformas. Muchas firmas que aparecían al pie del Manifiesto suscribían el Plan. Presionados por circunstancias como el lugar y la investidura presidencial, muchos se atrevieron a decir lo que realmente sentían sólo cuando volvieron a sus comunidades.

Siguieron protestas y movilizaciones, incluyendo plantones frente a la Cámara, el Senado y Palacio Nacional. La prensa registró cuatro marchas de cinco mil campesinos desde los cuatro puntos cardinales hacia el Zócalo, a donde llegaron al mediodía del 12 de diciembre, coincidiendo no por casualidad con la celebración de la Virgen de Guadalupe. La demanda campesina pedía una consulta nacional *ejido por ejido*.

Alternativas campesinas

En los primeros días de enero de 1992 asistieron en Veracruz, a un Primer Encuentro Nacional, 759 organizaciones regionales, filiales de diez nacionales, que llegaron a formular, por consenso, los lineamientos para una Ley Agraria alternativa. Un mes después, el Congreso Agrario Permanente (CAP) realizó dos Foros Nacionales que culminaron en la redacción de una propuesta campesina de Ley Agraria, que sólo incluiría los artículos aprobados por unanimidad absoluta. Insistió en ratificar el contrato social agrario y en la necesidad de una política congruente de fomento agropecuario. Participaron en su formulación once organizaciones nacionales (ALCANO, CAM, CCC, CCI, CIOAC, CNC, CODUC, UGOCM, UGOCP, UNORCA y UNTA) y fue entregada a la Cámara de Diputados.

La propuesta alternativa planteó: 1) que las tierras de uso común de los ejidos siguieran siendo inalienables, inembargables e imprescriptibles; 2) que la parcela ejidal conservara su carácter de patrimonio familiar; 3) que se culminara el reparto agrario en los términos de la Constitución de 1917; 4) que se disolvieran los latifundios existentes y los que pudieran formarse en el futuro; 5) que se respetara la integridad territorial de las comunidades indígenas; 6) que las sociedades mercantiles extranjeras no pudieran adquirir terrenos en el campo; 7) que se preservaran los derechos económicos específicos en favor de ejidos y comunidades.

Para no contradecir la versión vigente del Artículo 27 constitucional, se aceptó la posible conversión de la parcela en propiedad privada, pero sólo con el consentimiento escrito de la familia y la aprobación de una asamblea del 90% de los ejidatarios, con mayoría de sus tres cuartas partes.

Los campesinos propusieron ampliar, además, las disposiciones de 1917 para garantizar un programa integral de desarrollo agropecuario y lograr la autosuficiencia alimentaria, con metas a largo y mediano plazo; precios de garantía para los básicos y una canalización de recursos del presupuesto de egresos de un 20%, además de garantizar el crédito y el seguro.

Pidieron que se les tomara en cuenta al trazar los programas de fomento rural. El Estado tiene el deber de promover el desarrollo social y de atender a la salud, la educación, la vivienda, la nutrición y la cultura. La preservación de recursos naturales le corresponde tanto como a los productores, incluyendo a las sociedades mercantiles. La Ley de redacción campesina no excluía los contratos de asociación o aprovechamiento de las tierras parceladas o de las de uso común; pero si tales contratos establecían el uso de tierras por terceros, no podrían extenderse a más de cinco años en cultivos anuales ni a más de quince en otras actividades.¹⁵

Las disidencias, “el cuarto de junto” y el modelo chileno

La nueva Ley Agraria, lo mismo que las reformas neoliberales al Artículo 27, no tomaron en cuenta las recomendaciones campesinas. Por obsoletas y anacrónicas no eran compatibles, según los planificadores, con una integración acelerada en la economía de Norteamérica. Las reformas al Artículo 27 eran un eslabón en el proyecto clave del Ejecutivo y por eso se presionó a muchos congresistas inconformes, sobre todo diputados priístas del sector campesino, para que mantuvieran disciplina y lealtad política aunque fue imposible evitar que opiniones disidentes se manifestaran en privado.

Abundaron testimonios en la prensa de tales presiones y disidencias, así como de la presencia en el “cuarto de junto” de la Cámara de todo un *staff* de la SARH encabezado por el subsecretario Téllez Kuenzler, inspirador de las reformas.

A principios de 1993 otro exsubsecretario, el de Agricultura de Pinochet, presumiría en Chile de haber asesorado de cerca el proyecto modernizador del campo mexicano. Advertía el asesor que la incompatibilidad más grave entre la agricultura tradicional y el TLC se centraba en el maíz:

En el mismo minuto en que los granos norteamericanos desembarcaran en los puertos mexicanos, los agricultores cerrarían las carreteras.¹⁶

El técnico chileno creía en las *asociaciones* como la gran solución y confiaba en una reconversión por etapas del uso del suelo, para abandonar la siembra del maíz y producir los frutos y hortalizas que le correspondieran a México en la economía integrada de América del Norte.

¿Diáspora o agricultura con campesinos?

La convicción de que hay que tomar en cuenta a los hombres, dentro de su cultura y con lo que necesitan y desean, aconseja como lo más razonable buscar soluciones para una agricultura *con campesinos* y no propiciar la diáspora en la incierta busca de condiciones ideales abstractas, sin sustento en la realidad aunque se postulen en nombre de un improbable “realismo”.

Partidarios de un desarrollo de esa naturaleza abundan en todos los nichos políticos, incluyendo a viejos panistas como José Angel Conchello. Un gran conocedor del campo mexicano, Arturo Warman, lo sostuvo siempre, como consta en su larga y honesta secuela de investigaciones sobre el drama del campo.

En un análisis concluido a fines de 1992 por investigadores del ITAM se consideraba un paso importante la reforma al Artículo 27 para el desarrollo del campo. Se

advertían, sin embargo, sus riesgos para la mayoría de los campesinos y el alcance, probablemente muy limitado, de sus beneficios. Aun sin pensar en vender las tierras, los ejidatarios requerirían de la certificación legal de su parcela para poder obtener cualquier crédito con la tierra como garantía. En la mayoría de las tierras ejidales hay imprecisiones acerca de la titularidad de parcelas y la definición de los usufructuarios legítimos. El proceso de certificación podría tomarse varios años. ¿Cómo obtendrían crédito, mientras tanto, de la banca comercial? Además, la mayoría seguiría siendo demasiado pobre para volverse sujeto de crédito.

En cuanto a la banca de fomento que ha manejado el Estado, hasta ahora no ha funcionado con eficacia. Ni Banrural ni FIRA han tenido un buen desempeño: bastaría con uno solo de esos organismos, si funcionara correctamente como banco de desarrollo agropecuario, para hacer llegar el crédito realmente a los campesinos pobres. Una opción sería dejar la intermediación financiera a las Uniones de Crédito Ejidal y descontar los créditos directamente con esas Uniones,¹⁷ dándoles la oportunidad de demostrar que sí pueden manejarse con tino. El Estado tendría que invertir en infraestructura, en apoyo tecnológico, en acceso a los insumos. Y tendría que ofrecer apoyo, en condiciones no comerciales, a los que no puedan pagar créditos.

La investigación del ITAM explicaba que la entrada de inversión extranjera traería bienestar pero sólo *en zonas potencialmente rentables, por lo que dichos efectos son insuficientes*. Sobre todo:

El desarrollo de un país no sólo significa mejorar los indicadores macroeconómicos, sino que esa mejora se refleje en las condiciones de vida de la población[...].¹⁸

Advertía con claridad, además, que la mayoría de los ejidatarios no lograrían crédito comercial por la calidad marginal de las tierras que se les dotaron, por lo reducido de sus parcelas y por la desigual distribución de dotaciones de tierra ejidal. El 45% de ejidatarios sólo usufructúa el 10% de las tierras ejidales mientras el 5% dispone del 40% de esas tierras: también en la propiedad social prevalece la concentración y la desigualdad distributiva. Cerca del 80% de ejidatarios cuenta con mucho menos de las 10 hectáreas que se contabilizan como promedio nacional:

Debido a que la desigualdad en las dotaciones ejidales es una realidad, la flexibilización de la tierra recién promulgada, junto con la desregulación y la liberalización de las actividades agrícolas, puede propiciar más concentración. Existen imperfecciones en el mercado de los insumos y en el acceso al crédito que impiden, en un esquema de *laissez-faire*, que los recursos fluyan a las actividades en que su productividad marginal es mayor.

Esto explica que la intervención gubernamental es necesaria con el objetivo de redistribuir equitativamente las oportunidades. No es fácil pensar en otra opción que permita a la mayoría de los agricultores [los pobres] disfrutar de los beneficios que puedan resultar del nuevo *statu quo* agrario[...].¹⁹

José Luis Calva ha insistido en las ventajas de apoyar un *desarrollo agropecuario con campesinos*: armonía del desarrollo con la realidad y, en consecuencia, equilibrio social; seguridad alimentaria, con acceso a comida barata producida en el país e incidencia positiva en el actual déficit de las cuentas externas. Los argumentos se fundan en la experiencia de México pero también se apuntalan con los éxitos de una agricultura de productores pequeños y medianos en los Estados Unidos, en Europa y en Corea del Sur, donde recursos generados con un desarrollo industrial previamente alimentado con recursos del campo se revirtieron después hacia el desarrollo agropecuario:

[...] si es aplicado en México un programa integral de fomento agropecuario que favorezca a los productores rurales en general, *pero con instrumentos diferenciados dirigidos a impulsar el desarrollo tecnológico de los pequeños agricultores rezagados*, podremos tener un crecimiento sostenido de la producción. [...] Dada la existencia de más de *cinco millones de familias* campesinas en México [lo que equivale a unos 25 millones de personas] y la imposibilidad de que la economía mexicana logre absorberlos en otras actividades económicas durante los próximos veinte años, *la preservación de la fuente de empleo e ingreso de cinco millones de familias* campesinas debe ser, precisamente, un objetivo central del programa.²⁰

Está probado que, *en igualdad de condiciones*, la agricultura de escala no produce más que la pequeña agricultura campesina. Hasta 1965, el sector rural abasteció al mercado interno y aportó materias primas para la industria, que absorbió además importantes excedentes de capitales acumulados por empresarios agrícolas. Pero empezaron a resentirse entonces las consecuencias de haberle cargado al campo todo el peso del desarrollo industrial. A partir de 1974 se recuperó el nivel de productividad del agro, casi hasta el 6%, entre 1977 y 1981, para volver a descender abruptamente en la década del ajuste, que retiró créditos, inversiones y gasto público, hasta quedar en ceros el crecimiento del sector.

Apoyar a la economía campesina, y fortalecerla desde su realidad y no desde un modelo ideal, sería provechoso para todos: alimentos básicos producidos en el país, que no habría que comprar con divisas; materias primas para la industria; excedentes para exportar a diversos mercados; arraigo de los campesinos en sus tierras y en sus pueblos. Y, además, mercado interno fortalecido para la industria de bienes de consumo, de insumos y de maquinaria.

En medio de tan grave crisis se decidió jugárselo todo a una versión puesta al día de lo que fue el sueño dorado de los caudillos sonorenses: la agricultura de escala para la exportación, propiciando, implícitamente, la reconcentración de la tenencia, fuera de las manos campesinas. No era la mejor opción. Ni la única. Pero, aun dentro de la lógica del mercado, ¿dónde están los capitales ansiosos de invertir en el campo?

Se equivocan de modelo o se equivocan de país

La frase certera de José Luis Calva culminó una sólida crítica a la “modernización” del sector agropecuario, recurriendo a cifras más que a argumentos ideológicos. Algunas parecen tan elocuentes que vale la pena registrarlas. En 1982 había en el país alrededor de 1.4 millones de desempleados. De 1982 a 1988 sólo se crearon 1.3 millones de empleos, cuando hubiera hecho falta crear un millón cada año para absorber a las nuevas promociones de jóvenes en edad de trabajar. Resultado: en 1992 había 8.9 millones de desempleados, más de la mitad de los cuales fueron emigrando, permanente o transitoriamente, a los Estados Unidos. A esa suma se añadirían, en los años noventa, otros 1.2 millones anuales.

Según los cálculos de Calva, la economía tendría que crecer al 9% anual durante los próximos 26 años para que en el año 2014 se lograra una ocupación aceptable, con sólo un millón de desempleados, en el sector industrial o de servicios. Si a las cifras reales de hoy se les añadiera el contingente que podría llegar a expulsar el campo, se necesitarían 13 años más, con un 9% de crecimiento, para absorberlos.

¿Y las inversiones que llegarían gracias al TLC? Las cifras hablan: hacen falta 40 mil dólares de nueva inversión fija para crear un solo empleo. Suponiendo que entraran 10 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera directa, algo sumamente improbable, se crearían solamente 200 mil empleos anuales, la quinta parte de lo que ahora, aun sin éxodo incrementado, se requiere. Y eso suponiendo que las inversiones no se dirigieran sólo a la compra de empresas ya creadas, o a la instalación de empresas que desplacen a otras mexicanas ya existentes.²¹

La reversión del minifundio y la compactación de grandes unidades de producción, que utilizan menos número de trabajadores, sólo contribuiría a agravar la diáspora de campesinos y volvería explosivo el grave problema nacional del desempleo.

Frente a los contundentes datos citados, el subsecretario Téllez Kuenzler sugiere que la migración del campo es “un fenómeno altamente deseable”,

[...] en la medida en la cual la población del campo puede ser absorbida por los sectores industrial y de servicios, ya que permite la mejoría sostenida en los niveles de vida [...].²²

El 80% de las familias rurales son pobres y gastan más del 60% de sus escasos ingresos monetarios en comprar algo para comer. ¿Sería la “condición indispensable” para mejorar su nivel de vida empujarlos hacia las ciudades? ¿Acaso no padecemos la alarmante miseria de bolsones de penuria urbana de los millones que ya han emigrado? ¿No los absorbió la primera industrialización, tan imperfecta, pero sí los absorberán las maquiladoras? ¿Se logrará ese milagro en los quince años que se ha fijado de plazo para la apertura ilimitada en la entrada de maíz?

Si la modernización, por otra parte, va a resolver todos los problemas de la crisis del campo, sería de esperarse que los campesinos pudieran permanecer en sus comunidades mejorando su nivel de vida. Parecería que ni los mismos autores del proyecto comparten tal convencimiento. De ahí, quizá, la justificación de la migración y la sugestión de que así, gradualmente, mejorarían las condiciones de vida. La afirmación del subsecretario, más que sorprendente, es anonadante.

Milagro “prematureo”

La élite tecnocrática se calzó las botas de las siete leguas para implantar un proyecto económico *irreversible*. Esa palabra reaparece constantemente en el discurso de los más altos funcionarios. Su afán “refundador” abrigaba tal convicción que parecía fácil hacer girar al mundo en torno al deseo de garantizarle la perpetuidad al modelo elegido: así se calculó la reelección del presidente Bush y se consideró inevitable la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

Los tres primeros años —de 1989 a 1991— fueron de triunfalismo y euforia. Parecía factible alcanzar la meta de un 6% de crecimiento para 1993-94. Habían entrado más de 30 mil millones de dólares en dos años, entre capital mexicano que volvía, inversión extranjera y nuevos préstamos. Bajar la inflación a un dígito era el objetivo. Restringiendo el gasto se mantendría bajo control el déficit presupuestario. Se pretendía crecer y crear empleos, pero se confiaba para ello en la apertura al mercado y la entrada de inversiones.

La renegociación de la deuda, que sólo ahorró un 10% del principal de la deuda comercial y un equivalente en el servicio de la misma, fue manejada publicitariamente para propiciar los efectos indirectos que recomendaba el doctor Córdoba en la cuarta lección de su decálogo. A la opinión pública se le quitaba de encima el peso “psicológico”, y hasta los inversionistas, nacionales y extranjeros, respondían al aligeramiento. El sector privado con más recursos empezó a endeudarse, quizá con demasiada ligereza. La reducción de la inflación, uno de los mayores logros económicos, se fue forzando con la prolongación del Pacto y la

astringencia en el gasto, mientras crecía la economía al 4.5% en 1990 y al 3.5% en 1991. Las reservas en dólares del Banco de México eran de 21 mil millones. Para fines de ese año, sin embargo, empezaron a mostrarse costos de la apertura y señales de estancamiento.

¿Habría nuevo milagro? En enero de 1992, Pedro Aspe aventuró que México podría repetir el éxito económico de 1930-70, pero advirtiendo que “sería prematuro hablar de un *nuevo milagro*”. En mayo, a un año y tres meses del decálogo, el doctor Córdoba consideró pertinente señalar que habría escasez mundial de recursos por lo menos durante diez años. Para lograr un crecimiento del 6% de la economía, habría que elevar el ahorro interno, *por lo menos*, al 19% del PIB y se requerirían, *por lo menos*, 15 mil millones de dólares de inversión extranjera anual. En la misma Convención Nacional Bancaria donde se hacían tales declaraciones, el secretario de Hacienda se lamentó de que no hubiera germinado todavía suficientemente la confianza de los inversionistas como para asegurar un crecimiento sostenido. ¿Acaso el “círculo virtuoso” que poco antes había ponderado en Washington no acababa de dibujarse? ¿Acaso no habían bastado la renegociación de la deuda ni las “profundas reformas estructurales”?²³ Empezaba a transparentarse la fragilidad de un proyecto que cifraba su éxito, casi exclusivamente, en recursos del exterior.

Un proyecto en entredicho

En 1992 el panorama se oscureció. El crecimiento había bajado al 2.5%; el déficit entre importaciones y exportaciones había subido a 20 mil millones de dólares (de 4 mil millones en 1989); se había disparado la economía informal, y sólo un 30% de inversiones habían sido directamente productivas: el 70% había entrado a especular en la bolsa, con documentos a corto plazo, y era tan volátil como las proverbiales golondrinas.

El pulso de la inquietud que fue generándose puede medirse en una secuencia de editoriales del diario *El Financiero*, escalonados entre octubre de 1991 y diciembre de 1992. El 7 de octubre, el editorialista hablaba todavía de “un buen momento en la economía”: atracción de capitales; saneamiento de las finanzas; renegociación de la deuda y elevadas reservas. Ya se llamaba la atención, sin embargo, hacia el creciente déficit en la balanza comercial que, por cierto, todavía no pasaba de 13 mil millones de dólares, y hacia el número de industrias afectadas y la entrada de capitales especulativos. El 28 de octubre se sugería que la integración “silenciosa” “no ha redundado en beneficios concretos para la economía mexicana” y que el Tratado tendría que modificar, precisamente, esa tendencia: evitar mayor menoscabo a la planta industrial, la ruptura de cadenas producti-

vas en varios sectores y la muerte de empresas mexicanas ante la competencia. Se advertía:

El TLC no es la panacea. Ayudará a reencauzar el desarrollo y a reactivar el crecimiento de la economía, pero siempre pensando que los niveles de vida sólo aumentarán con políticas específicas y con un crecimiento económico sano y equilibrado.

El 9 de junio de 1992 se registró la caída de la demanda interna por topes salariales que recortaban el poder adquisitivo; los costos de la apertura debidos al rezago tecnológico y la falta de créditos. El 27 de julio se señaló que, ante la demora del TLC y la escasez mundial de capitales, habría que promover el ahorro interno o no podría consolidarse el desarrollo. Abrir la economía no podía ser *la única solución*: sin aislarla, había que hacerla menos dependiente de factores externos sobre los que se tenía poco o ningún control, como lo demostraba un mercado de valores oscilante ante cualquier incertidumbre en las negociaciones.

El 10 de agosto se hizo un llamado a la racionalidad: había que dejar de confiar en una sola apuesta (el TLC) y desarrollar la propia capacidad de crecimiento: ampliar el ahorro interno y utilizar, pero como complemento, los recursos de afuera; fortalecer la planta productiva, el mercado interno y la infraestructura básica sin excluir un apoyo razonable a los sectores orientados a la exportación.

El 26 de octubre se auguró otro año de “crecimiento moderado” para reducir la inflación a un dígito, con repercusión en mayor desempleo y cierre de empresas. ¿Cómo evitar que el saneamiento de la economía siguiera afectando gravemente a las mayorías? El editorial sugería alentar la inversión productiva por encima de la especulativa; crear infraestructura; ampliar servicios de salud y educación y asegurar un acceso suficiente a la alimentación para fortalecer la economía, en vísperas del TLC. El 7 de diciembre se aconsejó “mirar hacia dentro” y “no ilusionarse con una quimera”. Habría que definir un auténtico programa de desarrollo industrial, generar empleo y recuperar el poder de compra del salario. El control de la inflación, al restringir el crecimiento, había achicado más todavía el mercado interno.

El 28 de diciembre de 1992 se hizo el balance de un año transcurrido entre “claroscuros” y marcado por la obsesión de alcanzar la inflación de un dígito. Se evaluaban, como logros, la acumulación de reservas por 19 mil millones de dólares; el hecho de que la deuda representara la tercera parte del PIB; un crecimiento de poco más del 2% y una inflación de poco más del 10%. El balance negativo incluía un déficit comercial de cerca de 22 mil millones de dólares; dificultades crecientes en la planta productiva, con deterioro de la empresa mediana y pequeña por la apertura, la carga fiscal excesiva y la escasa demanda interna; el desempleo abultado, y el descenso del poder adquisitivo. *El Financiero* se atrevía a anticipar que, de prolongarse la incertidumbre en torno al Tratado, bajarían las expectativas de inversión y se caería el modelo.

Estancamiento estabilizador

En julio de 1992, Vladimiro Brailowsky había apuntado hacia los desequilibrios ostensibles en la economía nacional, algunos reiterativos de tendencias de vieja data y otros nuevos. El repunte mexicano había coincidido, a partir de 1989, con la recesión norteamericana, de modo que la demanda de exportaciones mexicanas no creció como lo hacía en México la demanda de importaciones. El sector con capacidad de consumo demandó más bienes importados y, a la vez, la producción interna bajó desde mediados de 1991. El peso se sobrevaluó, si no en términos absolutos, sí en términos relativos. Se produjo “un crecimiento explosivo del financiamiento interno” para apoyar el gasto del sector privado, cuya deuda interna se duplicó (sin contar con la deuda contraída afuera) mientras la producción no superaba a la de hace una década. El superávit del sector público se usaba para cubrir el considerable déficit del sector privado, que significaba más del 10% del PIB.

La deuda externa seguía siendo muy alta, sin que el país produjera más: la relación con el PIB no había variado realmente, como lo querían las cifras oficiales, que no tomaban en cuenta los instrumentos especulativos en manos de extranjeros. El desequilibrio de la cuenta corriente con el exterior era mayor que el de España, cuya economía es un 60% más grande que la de México. Como el crecimiento era menor en un 50% al de la etapa de desarrollo estabilizador, podía afirmarse:

Hasta ahora, en materia de capacidad de crecimiento autosostenido, la nueva política económica ha tenido resultados contraproducentes.

Para no recaer en inflación y evitar que se expandiera más la demanda interna de importaciones, la política sería restringir aun más el crecimiento:

Al parecer, las autoridades han dejado de considerar factible financiar, por tiempo indefinido, déficit de la magnitud de los actuales.

Se elevarían, pues, las tasas de interés y se contraería el presupuesto. El problema del desequilibrio de cuentas con el exterior se transferiría al mercado de trabajo, si se pretendía aliviarlo conteniendo más el crecimiento. Habría, pues, más desempleo:

Así, es difícil que la economía mexicana vuelva al “desarrollo estabilizador”; más bien, en una combinación híbrida de sus pasados, tan sólo podrá aspirar al “estancamiento estabilizador”.

A este balance del director general de *Economía Aplicada* habría que añadir una opinión emitida poco después:

[...] todavía no hay la certeza de que el nuevo modelo de industrialización que sustituyó al proteccionismo pueda ser viable en el largo plazo[...].²⁴

Déficit comercial, desempleo, inversión especulativa

Como explicaría Jorge G. Castañeda a principios de 1993, los tres problemas más serios eran el déficit de cuenta corriente provocado sobre todo por un déficit en la balanza comercial; el estancamiento que se reflejaba en creciente desempleo, y la composición especulativa del financiamiento externo.

La recesión en los Estados Unidos acentuaba esos factores negativos. Si el déficit en cuenta corriente acordado con el FMI al renegociar la deuda había sido de 2 a 2.5%, ya para fines de 1992 había subido al 6% (aunque, si se descontaban las exportaciones petroleras, habría que calcularlo en un 10%). A cinco años de lanzarse la apertura comercial ya era tiempo de que las exportaciones hubieran subido más y las importaciones hubieran bajado. El déficit se estaba financiando con inversiones: se afirmaba que si éstas descendían lo harían también las importaciones y el déficit.

Se alegaba que las importaciones eran sobre todo de maquinaria, tecnología, materias primas y partes o insumos para reexportar después de ser maquilados (es decir, bienes de capital y bienes intermedios) con sólo un 15% de bienes de consumo. Pero, según Castañeda, en las partidas registradas como *bienes intermedios* o como *bienes de capital* se disfrazaban muchos bienes de consumo. Y aunque en los años ochenta habían crecido efectivamente las exportaciones no petroleras, la proporción no era tan importante como se sostenía: en 1992 las petroleras acreditaban un 30% del total de exportaciones contra un 80% en 1982 (calculado por ingreso de divisas), pero ese cálculo no tomaba en cuenta el desplome de los precios del petróleo. Si el petróleo se estuviera vendiendo al mismo precio que hacía diez años, las exportaciones petroleras seguirían representando un porcentaje tan alto del total como de un 58%.

La lluvia de oro de recursos del exterior había sido torrencial desde fines del año 1990 y duró hasta mediados de 1992. Se estaba financiando el déficit y se acumularon altas reservas porque entraron más de 30 mil millones de dólares en ese lapso.²⁵ La bolsa aseguró ganancias del 60% en dólares: el 70% de la inversión fue especulativa. Unos 7 mil millones fueron inversiones en Cetes (instrumentos de deuda interna) y 21.3 mil millones fueron préstamos propiamente dichos, solicitados en buena medida por el sector privado. La inversión extranjera directa crecía poco a mediados del 92 y los altísimos rendimientos en bolsa habían bajado. Aproximadamente 15 mil millones de capitales mexicanos en el exterior habían vuelto, para la compra

de Telmex y los bancos: en 1992 ya quedaba poco que privatizar. En suma, las inversiones copiosas cesaron y el monto que siguió entrando no bastaba para asegurar un crecimiento sostenido.

La relación deficitaria con la cuenta externa se reflejaba en la desaceleración del crecimiento y, lógicamente, en desempleo. La precariedad de los ingresos era notoria. En 1990, el 60% de los mexicanos no ganaba más de 200 dólares al mes (dos o menos salarios mínimos) y un 15% más los aventajaba apenas en 100 dólares: sólo el reducido porcentaje de otro 15% tenía ingresos superiores a 300 dólares.²⁶

De 1988 a 1992 apenas las maquiladoras, el turismo y la industria de la construcción crearon empleos (583 mil en total) mientras que las fábricas despedían gente y se sumaban a las filas de desempleados otros 200 mil burócratas. En la frontera se detenía a tantos ilegales como en 1986 y el ambulante florecía en un perímetro cada día más amplio del centro histórico de la capital.

En cuanto a la dimensión de la deuda (incluyendo la del sector privado y los depósitos extranjeros en instrumentos como Cetes, Bondes, etc.), ascendía en 1993 a 139 mil millones de dólares, según cifras del Instituto de Finanzas Internacionales con sede en Washington. Las reservas en dólares habrían bajado a fin de año a 16 mil millones y se habría pagado como servicio de esa deuda múltiple 16 445 millones de dólares. El monto de esa deuda global significaba un 38.8% del PIB. Del total de endeudamiento, un 30.5% correspondía a la empresa y la banca privadas, que habían duplicado sus demandas de crédito desde el principio del sexenio hasta ese momento.²⁷

Mitos geniales

Abundaron las críticas de empresarios medianos y pequeños a un modelo que, en su opinión, fortalecía sólo a una élite empresarial que concentraría todo en muy pocas manos. El presidente de Canacintra registró la quiebra de cientos de industrias orientadas al mercado interno y advirtió la falta de apoyo al 95% de su planta, en crisis, que lo requería con emergencia para salvar el atolladero de la vulnerabilidad tecnológica. Sin apoyo, no podían ubicarse siquiera como proveedores de los exportadores.²⁸

Según el Taller de Análisis Económico de la UNAM, la canasta básica estaba un 89% por arriba del salario mínimo al finalizar el año de 1991: se habría llegado al nivel más bajo de la historia, después de perder en una década un 67% del poder de compra de 1982.²⁹

Mientras que el INEGI sólo registraba 575 mil desempleados, sin tomar en cuenta al campo ni la economía informal, Fidel Velázquez habló de unos 5.5 millones sin empleo y El Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM calcularon 8 millones de desempleados y 17.4 millones de subempleados.³⁰

La CEPAL advirtió que la economía informal servía como único *amortiguador* para compensar la pérdida continua del poder adquisitivo. La canasta básica no incluía ni carne, ni pescado, ni huevos. Según cifras de Concanaco, muchos básicos (como el arroz, el frijol y la sal) habían subido durante el sexenio más del 300%; las pastas, la avena y el azúcar, cerca del 150%; la carne en retazo, un 176%; la tortilla, un 173%; los chiles, más del 100%.³¹

Al comenzar 1993, *La Jornada* informó que el salario mínimo de 14 nuevos pesos alcanzaba apenas para cinco productos de la canasta básica: 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz y 1 kilo de tortillas; 1 litro de leche y 1 kilo de jitomate, o de cebolla, o de chile. Un kilo de carne barata sobrepasaba en 6 pesos al salario mínimo. El costo para una familia promedio, de cinco personas, rebasaba ya en enero de 1992 en un 61% el salario mínimo. Añadiendo carne, huevos, fruta y alguna verdura, el costo subiría a 40 pesos. Un kilo de huevo costaba el 25% de lo que se ganaba al día por salario mínimo; un kilo de pollo medio salario y uno de puerco el 70%.³²

También en enero, el secretario de Hacienda declaró que el desempleo y la pérdida del poder adquisitivo eran “mitos geniales” y suscitó una polémica en el ITAM con tan novedosa versión panglosiana del “mejor de los mundos posibles”. Parecía olvidar su prudente recomendación, hecha un año antes, de no proclamar antes de tiempo un “nuevo milagro” como lo había hecho, en octubre de 1991, Henry Kissinger. Pero la tentación seguía rondando. ¿No celebraban el “milagro” nada menos que dos premios Nobel, profesores eminentes del MIT, como Modigliani y Miller, de paso por México?

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial se mostró menos inclinado a echar las campanas al vuelo. Pidió, en cambio, reconocer la realidad y reactivar con urgencia el mercado interno. Porque, según advirtió, la gente común y corriente podía quizás entender que todo iba bien en el nivel *macro* pero también quería “sentirlo en el bolsillo”.³³

Seis meses antes el dirigente de Coparmex había augurado la entrada al Primer Mundo dentro de 15 o 20 años y mucho antes, en octubre de 1991, un empresario inteligente como Carlos Slim había pronosticado un ingreso *per cápita* de 8 a 10 mil dólares anuales en el mismo lapso, lo que permitiría considerar a México, en un par de décadas, como “país medianamente desarrollado”.³⁴ ¿Contradecían los más recientes datos de la realidad tales buenos deseos? Simplemente había que matizar: el ingreso *per cápita* podía subir eso y más, pero la distribución de ese ingreso podía ser tanto o más desigual.

Ácida realidad

En julio de 1993 se anunció que la inflación había bajado, por fin, a un dígito. Parecía evidente, sin embargo, que no era para estar de fiesta en los hogares po-

bres si la canasta más barata costaba 3.2 salarios mínimos. Fidel Velázquez anunció que los obreros no renovarían el Pacto si persistían los topes salariales. Según la CTM, 29% de los asalariados (7 millones) recibían un salario mínimo, el poder adquisitivo había bajado 64% desde 1976 y la proporción de ingresos por salarios, en relación con el PIB, había descendido un 30%. La clase media, muy desvanecida (la que gana entre 3 y 8 salarios mínimos), gastaba el 90% de sus ingresos sólo para subsistir; el doble que hacía veinte años. La gran mayoría, es decir los pobres, no podían consumir; las empresas no vendían y despedían gente; la producción se desplomaba y lo único que crecía era la especulación financiera.

A fines de agosto, los ambulantes salían del Centro Histórico para acomodarse en 28 plazas que alojarían a los 12 mil que hormigueaban en torno al Zócalo. Pero las delegaciones del Distrito Federal hablaban de 70 mil que proliferaban en toda la ciudad y la Concanaco duplicó la cifra. El comercio ambulante, una de las manifestaciones de la economía informal, ocupaba a 6 millones de personas que carecían de oficio o beneficio. Habría en la economía informal mucha gente no calificada, pero también obreros, técnicos, estudiantes y hasta profesionistas. Era el paliativo de la pobreza generada por el desempleo en la gran ciudad. Según el INEGI, un 80% se autoemplea, en algún pequeño negocio o servicio que va desde el puesto de quesadillas hasta la fabricación casera de algún producto.³⁵

¿Volverían a alcanzarse los niveles de crecimiento de más del 6% como hacía 40 años, que llenaban de añoranza a Pedro Aspe, en julio, en San Luis Potosí? Datos de la propia Secretaría de Hacienda registraban, en cambio, un 1.3% de crecimiento en el primer semestre de 1993, muy por debajo de un crecimiento demográfico calculado en 2.2%.³⁶ *El Financiero* señalaba, en un editorial del 23 de agosto, ingredientes explosivos en los costos sociales de una política que había bajado inflación a expensas de crecimiento y señalaba las presiones financieras, fiscales y de pagos que agobiaban a la planta productiva. No sólo estaba en juego un proyecto, sino “la viabilidad y el futuro del país y de los mexicanos”.³⁷

La realidad era ácida. Sólo 30 empresas eran competitivas de acuerdo con normas mundiales, en comparación con 500 en España, 3 mil en Francia, 5 mil en Alemania y 15 mil en Inglaterra. El 60% de la industria manufacturera, según Canacintra, estaba en recesión. El balance alarmante de 300 mil despidos en lo que iba del año en manufacturera, campo y minería afectaba inclusive a la industria automotriz, que se había quedado con 90 mil autos en bodegas. La demanda había caído en seis meses un 30%. Los bancos no ofrecían buenas condiciones de crédito a empresas pequeñas y medianas: el dinero costaba un 60% de réditos y recurrir a los agiotistas significaba pagar hasta 3 650% de intereses anuales. El 80% de la población, es decir pobres y semipobres, no tenía acceso alguno al crédito formal y la clase media, cada vez más precaria, recurría a las socorridas “tandas”.³⁸

La iniciativa privada manifestó en varias ocasiones su necesidad de apoyo. Expresó molestias por el impuesto al activo de las empresas y el exceso de regulaciones que afectaba a todos los que no eran grandes empresarios. Algunas declaraciones, como aquella de Coparmex, en marzo, que calificó de “incorrecta” la aplicación de la estrategia económica, parecían dar la razón al director del IPADE, que describía como *estado de shock* el ánimo en que se encontraba la mayoría de los empresarios frente al TLC. Raimond Kedilhac sugirió que al Estado correspondía reducir el costo del crédito, nivelar la balanza comercial, evitar las prácticas monopólicas y emprender una profunda transformación educativa.

Al terminar agosto, la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que “las autoridades tendrán que encontrar fórmulas inmediatas para reactivar la economía”. Algunos analistas muy convencidos del modelo, como Luis Rubio, urgieron a *acelerar el paso de la reforma*. No bastaba con “gastar un poco más” o “subir un poquito los aranceles”:

En este momento ya hay un conjunto de empresas que se han ajustado en forma notable a la competencia internacional; otras, sin embargo, no lo han hecho, sea porque no cuentan con la capacidad para hacerlo o porque nada en su entorno favorece ese cambio y mucho todavía lo impide. [...] La reforma podría venirse abajo mucho más fácil y rápido de lo que uno pudiera imaginar. Muchos actores sociales —empresarios, líderes, obreros, políticos— están apostando a que los impedimentos al cambio van a acabar por destruirlo. Puede ser una apuesta poco inteligente, pero el hecho de que exista demuestra que la reforma lejos está de haber quedado consolidada.³⁹

¿Cómo “reactivar la economía” sin desviarse del modelo? ¿Cómo encontrarle la cuadratura al círculo para, con *más de lo mismo*, “elevar tasas de crecimiento y resolver los problemas de desempleo e ingresos de la población” como lo desearía el comentarista?

Neorrealismo futurista

En *El camino mexicano de la transformación económica*, Pedro Aspe avizó el futuro con optimismo. En conferencias dictadas en la London School of Economics en 1992, señaló cuatro logros macroeconómicos en la reforma del Estado: importación neta de capitales; equilibrio fiscal; déficit de cuenta corriente por incremento de la inversión privada, y no por deterioro de las finanzas públicas, y acumulación de reservas.

Serías reticencias se formularon, como se ha visto, a algunos de esos éxitos. El secretario de Hacienda podía afirmar, con buenos argumentos, que si cuatro años

antes el país estaba en recesión con hiperinflación, ésta ya se había reducido a menos del 20% y la confianza de mexicanos y extranjeros se reflejaba en una “expansión en los niveles de actividad”. Pero la expansión se contrajo en los meses que siguieron. En el curso de 1993, el secretario seguía celebrando “un período de crecimiento y prosperidad sostenidos”, seguro de andar por el camino correcto y de que la desaceleración sería rebasada. Había una novedad: se desplazaba el énfasis en la política macroeconómica de corto plazo hacia aspectos de desarrollo de largo plazo. La reforma macroeconómica habría culminado y sería la hora de emprender

[...]una profunda reforma microeconómica encaminada tanto a la eficiencia económica como a una mejor distribución del ingreso y de las oportunidades.⁴⁰

Había matices: en tanto que Aspe había desconfiado siempre de la posibilidad de distribuir mejor el ingreso y había puesto todo el acento en buscar la igualdad de oportunidades, hablaba ahora de “una mejor asignación de recursos” y de “una más justa distribución del ingreso” y se recalca la importancia prioritaria de la educación para fortalecer la integración nacional y abrir el acceso a esas oportunidades de trabajo y de ingreso.

La meta seguiría siendo *crecer y crear más empleos permanentes*, pero subrayando la necesidad de promover el *ahorro interno*, incluyendo a clases medias y trabajadores. Los bancos tendrían que responder a las demandas del público; la modernización agrícola tendría que destinar recursos para capitalizar el campo; habría que promover la ciencia y la tecnología para ser verdaderamente competitivos y evitar la fuga de cerebros. Culminada la privatización, que favoreció la concentración de grupos financieros, se pensaría en combatir los monopolios con eficacia y asignar mejor los recursos para que las empresas sobrevivientes pudieran competir. No había que renunciar a la eficiencia económica, pero sí recalcar la dimensión social. Sin abandonar la disciplina en el gasto, la nueva “estabilización de la economía” podría cumplir, mejor que el Estado paternalista del “desarrollo estabilizador”, la meta de la justicia social.

¿Reconocer la realidad equivaldría a pensar menos en los recursos de afuera y más en los de adentro? ¿Se encaminarían hacia un *neorrealismo* de signo diverso las metas de un proyecto económico que, partiendo del modelo neoliberal, habría ido procurando quitarse de encima la etiqueta como si se tratara de un incómodo sanbenito? ¿O se trataría sólo, acaso, de una versión remozada de la *teoría del goteo*?

Mi bicicleta por el TLC

Al finalizar septiembre de 1993, una encuesta confidencial realizada por un grupo de importantes empresas norteamericanas para sondear las probabilidades del NAFTA

(TLC) registró un margen en contra de por lo menos 60 votos si la votación tuviera lugar el día 20. Un asesor del gobierno de Clinton afirmó que no apostaría su propia casa al éxito del TLC: cuando más, arriesgaría una bicicleta. Y advirtió que

[...] el gobierno de México ha cometido un error al confiar tanto en el TLC, pensando que traerá la estabilidad que requiere[...].⁴¹

Parecía confirmarse, en ese momento, que la apuesta había sido temeraria. También a fines de septiembre, el presidente mexicano quiso dar señas de un tardío cambio de estrategia:

Nosotros sí queremos aprovechar nuestra circunstancia geográfica de vecindad con la economía más grande del mundo, pero al mismo tiempo le damos una enorme importancia a la *diversificación de nuestra relación económica y comercial* [...] queremos más inversión europea en México y más apertura del mercado europeo para los productos mexicanos [...].⁴²

El cambio tardío se debía, sin duda, a las tribulaciones del TLC. La oportuna aparición del programa de Pedro Aspe para el tercer episodio de la modernización parecía congruente con la incierta perspectiva: había que empezar a reparar los desperfectos de la nave ante el peligro de zozobrar. Si fallaba el itinerario para llegar, por la vía rápida, al Primer Mundo, no quedaba más remedio que fortalecer la salud averiada de la economía con recursos propios y buscar opciones en otras latitudes.

Quince meses antes, en julio de 1992, el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein, presidente del Instituto Wharton, no quiso engañar a nadie cuando se dirigió a un auditorio del Tecnológico de Monterrey en el campus de la ciudad de México. El TLC sólo estaba en la mente, dijo, no en la realidad y sólo produciría, en todo caso, beneficios modestos a corto plazo; aumentar el ingreso *per cápita* y la productividad y equilibrar la balanza comercial era mucho más importante que pensar en atraer capitales; los tratados no son vacunas contra recesiones ni son panaceas. La apertura comercial misma tenía pros y contras: imposible aventurar un juicio definitivo sobre sus eventuales beneficios o perjuicios para el desarrollo. Y en noviembre, alguien tan propicio al *matrimonio de conveniencia* como Sidney Weintraub, emitió una opinión reticente sobre la política económica, que se acercaba, según él, a límites “riesgosos” por la desaceleración y el sacrificio obstinado de los salarios reales.⁴³

Calendario de expectativas y sobresaltos

Cuando el todavía presidente Bush firmó el Tratado, en diciembre de 1992, Lorenzo Meyer analizó la compleja relación histórica de México con los Estados Unidos

y las dificultades implícitas en una fórmula que buscaba la integración de dos países con economías tan asimétricas y con tales diferencias de pasado histórico y de cultura política. ¿Qué pasaría, luego del entusiasmo del primer momento, con las grandes ilusiones sembradas en las clases medias, en ciertos empresarios, en los miembros de la élite política identificados con el proyecto? Aun suponiendo que el TLC le devolviera al país el dinamismo de la economía que se perdió en los años ochenta,

[...]lo que sí está claro es que México tendrá menos capacidad para determinar su propio destino, ya que éste va a estar definido por quienes tengan más fuerza, o sea el socio del Norte.⁴⁴

La brecha entre los dos Méxicos, el tradicional y el moderno, fue señalada por un comentarista:

No hay, hasta ahora, una correlación directa entre las élites de este país y la gran mayoría de la población, pues el proceso de reestructuración económica no ha cambiado los usos y costumbres de la sociedad mexicana, ni considera en sus presupuestos la revolución de la mente mexicana. Los funcionarios mexicanos deberían saber que su país se encuentra inmerso en una lucha con una sociedad que quiere nacer para enfrentar el siguiente siglo, y otra que se rehúsa a morir[...].⁴⁵

La prensa registró, en los primeros meses de 1993, diversos apuros para el TLC y especulaciones en torno a los acuerdos paralelos sobre cuestiones laborales y ecológicas. A principios del año el doctor Córdoba insinuó en Nueva York, ante la Sociedad de las Américas, que no existía *plan de contingencia* alguno para un eventual fracaso del tratado.

En febrero, Richard Gephardt esgrimía el argumento de la participación de Nacional Financiera en el Fondo Amerimex, destinado a comprar empresas de los Estados Unidos para trasladarlas a México. Ross Perot le hacía eco, desde *United we Stand America*. También se manifestaron el dirigente negro Jesse Jackson; los líderes de AFL-CIO partidarios de otro tratado “que proteja a los vulnerables contra los ricos y poderosos”, y el académico Noam Chomsky. Tres mexicanos —Mariclaire Acosta, Adolfo Aguilar Zinser y Jorge G. Castañeda— expusieron ante el Comité de Pequeña Empresa de la Cámara de Representantes, en Washington, objeciones a lo negociado y opciones para mejorarlo.

A los argumentos del gobierno, que auguraban devastadoras consecuencias en el flujo de inversiones si no se firmaba el TLC, se oponían los que consideraban saludable su aplazamiento para propiciar una prudente y paciente discusión y garantizar mejores condiciones para los marginados en ambos países. Se divulgó la cifra de 56 millones de dólares, dedicada por el gobierno al “cabildeo” para promover un Tratado al que se oponía, según Gallup, el 63% de los estadounidenses.

Expertos de la empresa Asesoría Económica Especializada explicaron que, *con o sin TLC, las inversiones no fluirían* en los montos esperados porque “el panorama ha cambiado dramáticamente en los últimos dos años, durante los cuales se negoció el TLC”: la economía mundial está en recesión y no se ven perspectivas de repunte. En abril, el secretario de Hacienda se refirió en Houston al TLC como “un estímulo adicional para alcanzar mejores tasas de crecimiento” mientras que, en Ginebra, el GATT advirtió que el Tratado “incrementará la crítica vulnerabilidad del país a las fluctuaciones económicas del mercado estadounidense”.

David Rockefeller, Brzezinski y Bill Brady lo apoyaron. El *Washington Post* lo veía “en apuros” después de la declaración de Panetta, que lo daba por muerto “al menos por ahora”. En el Congreso se contaban 153 a favor, 116 en contra y 157 indecisos. El presidente del Banco Mundial señalaba que se había desplegado en México “demasiado optimismo”.⁴⁶

En mayo, el secretario de Desarrollo Social declaraba a *Newsweek*, en Nueva York, que el TLC no era tema “de *todo o nada*” para el gobierno mexicano. Jorge G. Castañeda insistía en destacar, también en mayo, los esfuerzos que se hacían para convencer al gobierno norteamericano de los “riesgos catastróficos” para la estabilidad política y económica de México que acarrearía un aplazamiento en la firma del TLC. El presidente Clinton describió el punto en que se encontraban las negociaciones de acuerdos paralelos como “callejón sin salida”. En junio, *Businessweek* sugería que “la economía parece estar chocando (en México) contra una pared” y que “será cada vez más difícil decir a los mexicanos que continúen esperando tiempos mejores”. Según los consultores del Bufete de Promoción Industrial habría que “flexibilizar” más la Ley de Inversiones Extranjeras, de no aprobarse el TLC, para intentar atraerlas; con el mismo fin se subirían tasas de interés y quizá se precipitaría una devaluación.

En una “cumbre” de académicos y legisladores convocada en Washington, para discutirlo, Rudiger Dornbusch, exmaestro de Aspe en MIT, se hizo eco de la inquietud del gobierno mexicano advirtiendo que, sin tratado, “la economía mexicana se derrumbará y el país regresará al nacionalismo del pasado” porque todo “se ha moldeado en virtud del acuerdo”. Siendo la economía mexicana tan pequeña (menor que la de California), el NAFTA no significaba para los Estados Unidos, en cambio, ni panacea ni amenaza: por razones políticas, sin embargo, convenía firmarlo. El mes de julio empezó con el fallo del juez Charles R. Richey, que ordenó posponer el trámite del acuerdo hacia el Congreso mientras no se evaluara el impacto ambiental, y siguió una contrademanda del Ejecutivo en la Corte de Apelaciones. La Bolsa Mexicana de Valores cayó 30 puntos.

El Financiero aconsejó, en un editorial de primera plana, “demostrar que la economía mexicana no comienza ni se acaba con dicho tratado” y que había otras opciones de comercio e inversiones. Habría que romper la “dependencia emocional” y for-

talecer, por fin, el propio mercado interno. El secretario de Comercio, en cambio, persistía en “garantizarle” a la cúpula empresarial que “el Tratado será ratificado y entrará en vigor en los tiempos establecidos”.

Ocho días después, el presidente Salinas subrayaba, en El Salvador, que “no habría beneficios espectaculares” con la ratificación. Carlos Fuentes le apostaba a la firma del TLC “por el simple hecho de que sirve, sobre todo, a los intereses nacionales de los Estados Unidos”, aunque advertía que su fracaso obligaría a México a “redefinir su política exterior, asumir un liderazgo latinoamericano y concluir nuevos tratados con Japón y Europa”.

Carlos Salinas consideró prudente recordar, el 24 de julio, que *nadie hará por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos*. La veracidad de tal afirmación no alcanzó a borrar, sin embargo, el pronóstico de la frustración que muchos anticipaban con inquietud percibiendo, como Mauricio Merino, “que el Tratado se ha convertido, al final, en una suerte de compendio del resto de la estrategia y, en más de un sentido, en una condición de continuidad”. Porque sus expectativas habían sido “más poderosas que los resultados tangibles de la economía”: se había vuelto “la clave de la credibilidad política del sexenio”. Otros en cambio, como Aguilar Zinser, valoraban más las ventajas que los desajustes probables por un aplazamiento: mejores condiciones para renegociar los términos “de tan riesgosa como ineludible asociación económica”.⁴⁷

Agosto comenzó con la conclusión de acuerdos paralelos al TLC y un anuncio sorprendente del presidente Salinas: “Crecerán salarios en proporción a la productividad promedio de la economía”. Mickey Kantor lo calificó como “gran viraje político” del gobierno mexicano. Un balance de trece encuestas realizadas en los Estados Unidos, hecho por Lehman Brothers, apreció que el público se mostraba “escéptico e indeciso” y, en muchos casos, abiertamente opuesto. Los congresistas, por su parte, no parecían muy sensibles a los argumentos que pretendían convertir al TLC en asunto de *seguridad nacional* para los Estados Unidos. Y Ross Perot publicaba un libro con título admonitorio: *Salve su empleo, salve a nuestro país. Por qué el TLC debe ser parado ahora*.

En México, donde los voceros empresariales habían sostenido con insistencia que los salarios no podían subir si no subía la productividad, se alegaba la inexistencia de reglas universales para medirla: no podían establecerse indicadores válidos para todo el país sino, cuando más, conforme al comportamiento de cada empresa. En septiembre se iniciarían audiencias en Washington, para ventilar todo lo relacionado con el tratado, sin excluir cuestionamientos al autoritarismo, corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La CTM sostuvo que la productividad había aumentado en diez años por lo menos un 41% en la industria manufacturera, a lo que habría que añadir el 60% de poder adquisitivo perdido durante la década. El 21 de septiembre Richard Gephardt

anunció que votaría definitivamente contra el Tratado porque “podríamos y podemos hacerlo mejor” y citó, en su apoyo, un análisis de Jorge G. Castañeda en *Foreign Affairs*.⁴⁸ El anecdotario de las tribulaciones tendría pronto un desenlace sorpresivo.

El campo es mal negocio

A pesar del anuncio de que habría apoyos para el campo, hecho en febrero de 1993, en la primera mitad del año se agravó su situación crítica. Se insistió en convencer a los empresarios de que el campo “es buen negocio” y de que había que “jugársela”. En junio lo repitió el presidente en la Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, sin encontrar eco. Los empresarios urgieron a culminar la formalización legal de las reformas al Artículo 27, es decir, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Pero, al finalizar diciembre de 1993, sólo se habían entregado 22 certificados y títulos (12 en Campeche, 6 en Aguascalientes y 4 en Morelos): el 0.2% de los 10 388 ejidos que se esperaba incorporar al Programa. Procede haber tropezado con resistencias y dudas entre los ejidatarios, al atribuirle intenciones de control, problema que se añadió a los inintermitentes conflictos de límites que dificultan las mediciones.⁴⁹

Mientras Banrural embargaba implementos agrícolas a ejidatarios y comuneros, la amenaza de embargo de predios pesaba sobre pequeños y medianos propietarios. Las cosas no pintaban bien para la agricultura de exportación con la perspectiva de cinco años, por lo menos, de precios bajos. Se hablaba de proyectos de inversión extranjera. Pero, para madurar, requerían que “madurara” primero el cambio en la tenencia de la tierra, la infraestructura de comercialización y un financiamiento barato y adecuado, además de que el Estado financiara casi toda la infraestructura.

El campo es, para los bancos comerciales, “sector de alto riesgo” y apenas le canalizan el 3.6% de la cartera total de crédito. Si se agrega el financiamiento de la banca de desarrollo, la cifra sube apenas a un 7%.

Los tropiezos del proyecto Vaquerías, publicitado como paradigma de *asociación*, contribuyeron a desalentar nuevas experiencias. El secretario Aspe insistió, a fines de julio, en que el campo necesitaba capital y no más deuda e instó a impulsar *asociaciones*. Investigadores de la Universidad de Chapingo explicaron, por otra parte, la contradicción en cifras de proyectos manejadas por los distintos funcionarios. La mayoría de las supuestas *asociaciones*, atribuibles a las reformas, son modalidades de agricultura por contrato, que existían desde antes y consistían en arrendamiento, aparcería, compraventa o prestación de servicios profesionales. Solían darse entre campesinos proveedores y agroindustrias, pero los que participaban en esos contratos no eran *socios*. Considerarlos como *asociaciones* sería una argucia para abultar logros de las reformas al Artículo 27: el 88% del total de 112 proyectos de

“agroasociaciones” contemplados en octubre de 1992 no eran tales. Cabe advertir, por otra parte, que la gran mayoría de esas supuestas “asociaciones” se encuentra exclusivamente en el centro y el norte del país.⁵⁰

La explicación de los investigadores remitía una vez más a la terca realidad que desmiente las teorías. Los campesinos no tienen mentalidad empresarial. Los empresarios no quieren entrarle a “uno de los peores negocios” en tiempos de crisis. Por otro lado, la apertura permite a la agroindustria transnacional abastecerse de productos importados, subsidiados y más baratos. La mecánica operativa de la nueva Ley Agraria y sus alcances no están claros: ni para los propios técnicos de las instituciones que actúan en el campo, ni para los empresarios y menos para los campesinos. Y, en cuanto a la “equidad” en la asociación, que supone la Ley, es difícil llegar a un entendimiento aceptable para todos en aportes y beneficios. A veces los empresarios quieren obtener el 50% de las utilidades, cuando sólo aportan el 10% de las inversiones, arguyendo que contribuyen con otro 40% en “intangibles”. O bien no se les considera a los campesinos la tierra como un aporte de capital, sosteniendo que “la tierra no representa un riesgo”.

Si las asociaciones no han prosperado, tampoco las ventas de tierra: como señaló José Luis Calva, *no hay empresarios interesados en ir a perder al campo*. La compraventa se ha dado, sobre todo, en zonas suburbanas ejidales donde, según el procurador agrario, se han constituido cerca de 300 “inmobiliarias ejidales” para transmitir la propiedad dentro de los términos establecidos por la nueva ley.⁵¹

Carteras vencidas: la punta del iceberg

Agricultores medianos y pequeños, que antes recibían crédito y podían prosperar con subsidios a los precios y protección arancelaria, entraron en crisis. Agravada por la apertura a importaciones agropecuarias que afectó a muchos que ya no pudieron colocar sus productos en el mercado, la crisis estalló a mediados de 1993 con juicios de embargo de los bancos y protestas de agricultores de varias regiones, especialmente en Jalisco y Sonora.

En cinco años, la cartera vencida creció un 460%, al pasar de 395 a 4 787 millones de nuevos pesos. Los agricultores de Sonora han alegado que un 80% “nunca entró como dinero fresco a la actividad productiva y sin embargo se está tratando de cobrar”.

Los afectados pidieron una moratoria puesto que el adeudo habría sido ocasionado por un conjunto de factores (como altas tasas de interés, bajos precios, alto costo de insumos, desplome de la inversión pública y apertura comercial indiscriminada, que permitió importar a precios más bajos que los internos) que no eran responsabilidad de los productores. Las protestas por carteras vencidas inclu-

yeron plantones con maquinaria, bloqueos de un puente internacional y quema de tractores. El movimiento El Barzón, surgido en Jalisco, repercutió en otros estados del norte. La población lo apoyó, según encuesta de la Universidad de Guadalajara que registró un 72% de opiniones a favor.

No se trataba sólo de una protesta por carteras vencidas: surgió cuatro años atrás por el derrumbe de precios y el cierre de opciones para comercializar productos, al facilitarse la entrada indiscriminada de importaciones. Al agravarse la situación, se integraron federaciones estatales, para constituir una Confederación, al margen de partidos políticos:

Si ante el TLC no nos otorgan igualdad de condiciones no vamos a poder competir: la planta y las condiciones productivas deben ser prioritariamente de mexicanos. No se resuelve el problema siendo socios menores de capital extranjero.⁵²

La imposibilidad de los productores nacionales para competir con importaciones extranjeras se manifestó drásticamente en el sector pecuario, según la Confederación Nacional Ganadera. La producción se estancó mientras las compras al extranjero se dispararon un 50%. Todas las cadenas de producción entraron en crisis (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves y leche). Por primera vez la ganadería tuvo altos niveles de carteras vencidas con la banca, que empezó a rematar ranchos.

A mediados de 1993 se anunció que habría subsidios directos. El Consejo Nacional Agropecuario declaró, a fines de agosto, que los prefería por hectárea y no por volumen: "Al final de cuentas lo que interesa es que tengamos más dólares para comprar más cosas, y no necesariamente producir nosotros con grandes costos". Los apoyos por hectárea permitirían a los grandes empresarios agrícolas cambiar cultivos tradicionales por otros de exportación, con alto valor agregado.⁵³

¿Subsidios con qué fin?

El programa de subsidios se vinculó a la ratificación del TLC. Se otorgarían 4 mil millones de dólares a agricultores privados y ejidatarios. Los criterios del Consejo Nacional Agropecuario y del Congreso Agrario Permanente diferían. El CAP los concebía dentro de un programa de desarrollo integral, para alentar la productividad y facilitar la recuperación a la economía campesina: no bastarían para ello los subsidios directos.

El Centro de Investigaciones de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM) de la Universidad de Chapingo advirtió, a fines de septiembre, que el programa no había sido sometido a discusión entre los campesinos y aventuró que más parecía un planteamiento de tipo político electoral, "para contentar al mayor número de personas posibles a través de la entrega de un cheque en tiempos cerca-

nos a las elecciones presidenciales". Según el anteproyecto que había llegado a manos de los analistas, se haría un pago directo al productor, por hectárea, para once cultivos (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, soya, semilla de algodón, cártamo, girasol, avena forrajera y cebada forrajera) que ocupan más de 12 millones de hectáreas.

El programa "daría el golpe de gracia a la agricultura mexicana, al desalentar la productividad y la eficacia". Otorgar *apoyo por tonelada, en cambio, sí* estimularía la productividad y contribuiría a bajar las importaciones, a la vez que aumentaría ingresos de productores.⁵⁴ El apoyo por hectárea tendería a reducir la producción, "porque aparentemente es más barato importar alimentos". El programa, anunciado desde febrero, había sido contemplado para el ciclo de producción otoño-invierno pero lo demoró, acaso, la tardanza en la ratificación del Tratado. Como las anteriores medidas agrarias, éstas se decidieron sin la participación de la mayoría de los productores ni de los que han explorado a fondo, desde el campo y no desde las oficinas, su problemática. Los apoyos se destinan a la extensión y no a la productividad. El criterio es parcial y se desentiende de un apoyo integral a la economía campesina.

Es evidente que los subsidios tienen que ver con la apertura a las importaciones de maíz, que será total en un plazo de quince años, según lo establece el TLC. Actualmente se cultivan 14 millones de hectáreas de granos básicos, especialmente de maíz. Parece razonable pensar que no habría que cultivar maíz en la mayoría de las tierras de riego, con alta tecnología y otra vocación agrícola, como lo han hecho agricultores empresariales sólo por la seguridad de altos precios de garantía. Pero no puede olvidarse que el maíz es el alimento nacional y que para la mayoría de los campesinos sigue siendo la garantía de subsistencia. Opinó, por eso, Armando Bartra:

Los subsidios deben servir para evitar los excesos del mercado. Hay que concentrar apoyos en donde el mercado reduce el ingreso de los campesinos y viceversa, pero buscando que eso se traduzca a la larga en producción y productividad. El mercado es perverso al tratar como iguales a los terriblemente desiguales.⁵⁵

Líderes campesinos de CIOAC y UNTA han opinado que harían falta, además, subsidios indirectos para reducir la carga de los altos costos de producción: inversiones en maquinaria, que suponen un 38% de esos costos, y en fertilizantes, semillas e insecticidas, que se llevan un 32%.

Procampo: mucho ruido y pocas nueces

El 3 de octubre de 1993 se concertó la octava fase del Pacto, que el presidente calificó como "el más generoso" de su régimen. Parte del superávit fiscal acumula-

do se emplearía en los apoyos directos al campo: 11 700 millones de nuevos pesos. A pesar de que se implantaba al término de un sexenio, se planeaba a largo plazo. Calculando los 15 años de liberalización previstos para la entrada de granos se estipulaba que, a partir del undécimo año, los pagos serían decrecientes: era evidente que no se preveía ninguna alternancia en el poder puesto que se hacían cálculos a tan largo plazo. Procampo se destinó a 3.3 millones de productores rurales, de los cuales 2.2 millones no recibían antes ningún financiamiento.

El subsidio otorgaría 300 nuevos pesos por hectárea para el ciclo otoño-invierno de 1993-94 y 350 para el verano de 1994. El primer pago se haría en marzo de 1994. Les tocaría a los predios sembrados con maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, soya y algodón durante los tres últimos años. En la etapa definitiva se subsidiaría con un *mínimo* a los agricultores de subsistencia y con un *máximo* a las tierras de alto rendimiento para garantizar su rentabilidad en el libre mercado, es decir, para ayudar a los más prósperos a afrontar mejor la reconversión a nuevos cultivos. Como el subsidio se condiciona a la inserción en la economía global, no lo recibirán las actividades “que no enfrentan distorsiones de precios en los mercados internacionales”. Y como se trata, justamente, de promover la reconversión del uso del suelo, el subsidio se mantendrá “aunque” se den esos cambios. A partir del invierno de 1994-95, Conasupo será un comercializador más en los mercados de maíz y frijol. A partir de abril de 1995, regirá el precio de mercado y desaparecerán precios de garantía. El subsidio irá directamente al productor, en cheques de la Tesorería.⁵⁶

¿Éxodo o “gran reservación”?

El subsecretario Luis Téllez K. “explicó” que los precios de garantía han favorecido a los agricultores de zonas altamente productivas y muy poco a los campesinos de autoconsumo: Procampo sería un subsidio directo que llegaría, también, a los más pequeños, con la ventaja de que las familias pobres, que gastan un 7% de sus ingresos en maíz; lo comprarán más barato, a la larga, a precios internacionales. Se suprimiría el subsidio a los precios para subsidiar el ingreso de los productores y dejar que el mercado determine la producción.⁵⁷

Se ha criticado a Procampo como una imitación extralógica de subsidios destinados a desestimular la producción donde hay excedentes, que es lo contrario del caso de México, como ocurre en los países de la Comunidad Europea. Las críticas señalan que la comercialización a precios internacionales de los diez cultivos básicos será devastadora para el campo mexicano. Se fomentará la importación de granos, de modo que la alimentación básica del país quedará en manos de los Estados Unidos. Según José Luis Calva, cuando desaparezcan los precios de garan-

tía en 1995, será incosteable producir maíz: el subsidio no compensará la pérdida cuando los precios bajen y se igualen a los norteamericanos. Como los campesinos no pueden reconvertirse fácilmente a otros cultivos, en los que tampoco serán competitivos, aumentará el éxodo.

Armando Bartra se preguntó si el subsidio no buscaría precisamente evitar el éxodo con un criterio “realista” pero moralmente reprobable: crear “una gran reservación para los marginados rurales”. Se trataría de subsidiar su desempleo estructural masivo, a sabiendas de que la reconversión es imposible y de que no habría alternativas de ocupación en otras ramas de la economía:

La parte del apoyo de Procampo destinado al sector más pobre de los agricultores, no será un recurso productivo si no va acompañado de otros programas de fomento; *sin ellos se quedará en infimo subsidio al consumo[...], insuficiente para retener en el campo a los pequeños campesinos.*⁵⁸

Procampo propone extender a 2.2 millones de campesinos, a fondo perdido, lo que Pronasol les dio a 700 mil, como crédito a la palabra. Ni lo uno ni lo otro alcanza para “transformar a los campesinos en ciudadanos de primera”. Son “programas de consolación” y no parte de una gran reforma productiva y social del campo.

En cuanto a los productores excedentarios de maíz, la ventaja sería que desalienta producirlo especulativamente en tierras de riego que pueden reconvertirse. Pero si el subsidio no es suficiente para enfrentar la competencia internacional, y no se sabe de cuánto será a partir de 1995, la producción de granos para el mercado interno, garantía de la soberanía alimentaria, tenderá a desaparecer y México importará todo el maíz de los Estados Unidos a más tardar en quince años.

Acaso a quienes se quejaron de no poder ajustarse a la lógica de la economía global se les recomendaría lo mismo que Serra Puche aconsejó, molesto por sus reclamos, a agricultores de Chihuahua que le exponían su malestar por la excesiva importación de ciertas frutas a precios desleales: “Señores, si la agricultura no es rentable, entonces no siembren”. Sólo que cada vez se haría más evidente lo que advirtió Carlos Montemayor:

Me parece que el secretario Serra Puche no tuvo suficiente tiempo para darse cuenta que los campesinos chihuahuenses (y debo decir que todos los campesinos de México) no son tan versátiles como para dedicarse a otra cosa de la noche a la mañana. [...] Las manifestaciones cada vez más agresivas de las organizaciones campesinas en Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, en el país entero, creo que son síntomas claros de que no quieren seguir el consejo del secretario Serra Puche. *Parece que los agricultores mexicanos quieren seguir siendo agricultores.*⁵⁹

Era evidente que Procampo no resolvería el problema ni contemplaba un verdadero programa de *desarrollo integral agropecuario*. No buscaba producir en México los básicos para el consumo de las mayorías ni procuraba rehabilitar el conjunto de la economía campesina. Si muchos campesinos no poseen más de 1.2 hectáreas, es obvio que el “subsidio” no alcanza ni para vegetar, porque apenas ajusta 1.7 nuevos pesos al día. Es verdad que, como declaró el subsecretario Luis Téllez: *Procampo no pretende, y nunca se ha afirmado, solucionar el problema de la pobreza rural*. Aunque otros funcionarios y líderes campesinos, menos sinceros, dijeran lo contrario.

Los campesinos de autoconsumo seguirán sembrando su maíz, si no venden antes las parcelas, tan pobres o más que ahora. No hay salida para ellos en la lógica del mercado. Es evidente que hace falta un modelo alternativo que se funde en la lógica de las condiciones locales. La recuperación de las pequeñas comunidades y de su economía requiere del apoyo eficaz del Estado pero sin manipulación corporativa; exige la limitación del latifundio y alternativas reales para mejorar la producción de las pequeñas parcelas ejidales o privadas: acceso a sistemas de ahorro con autogestión y apoyos en toda la cadena productiva.⁶⁰

Las empresas no aguantan más

El Pacto tenía, además, otras implicaciones. Los salarios mínimos aumentarían lo mismo que la inflación esperada para 1994: el 5%, más el aumento correspondiente a la productividad promedio de la economía; los contractuales tendrían el mismo aumento proporcional a la inflación, más bonos de productividad concertados entre empresarios y obreros. Se eliminaría el impuesto sobre la renta a quienes no ganaran más de dos salarios mínimos y se reduciría algo a los que ganaran hasta cuatro mínimos. Se buscaría reducir aun más la inflación, hasta un 5%, y utilizar recursos presupuestales del ajuste porque era “tiempo de cosechar”:

[...]sin incurrir en déficit, sin relajamiento fiscal y sin expansión desordenada del gasto, sino con medidas de reducción fiscal que fortalecen los ingresos, el poder de compra y el mercado interno[...].⁶¹

A fines de agosto, el dirigente de Canacintra advirtió que “las empresas no aguantan más la contracción del mercado, por lo que es vital recuperar la demanda, tanto pública como privada”. En una Convención Nacional, todos los empresarios del país habían demandado “un mayor compromiso del gobierno” para promover el crecimiento económico. El año de 1993 era “el peor de la crisis” y existía el riesgo de que la “alta cuota de sacrificio de la población se

diluya” si se persistía en desatender la sobrevivencia de la planta productiva. Era urgente

[...]un aumento de la productividad y de la capacidad de generar ahorro interno a efecto de convertirlo en inversión, de modo que la suerte del país no dependa en exceso de factores como la ratificación o no del TLC[...].⁶²

Al firmar el nuevo Pacto, el presidente se mostró eufórico. “Se consolida la política económica de mi régimen”, aseguró. *El Financiero* fue más escéptico:

El país, a pesar de los innegables logros macroeconómicos, vive una dura situación que no será superada de la noche a la mañana. Hay rezagos importantes en materia de empleo, merma de los niveles de vida de la población y serios daños en la planta productiva.⁶³

Las expectativas estaban en crisis. Se prometía una reactivación, pero confiando en que la realidad se ajustara a los buenos deseos. El modelo exigía que el Estado no estimulara directamente la reactivación de la economía y una parte muy amplia de las empresas privadas estaban en quiebra: por lo menos un 65% habían cerrado a fines de 1993. Según el presidente de Concamin, se debía a la falta de mercado y de acceso al crédito y a que la estructura operativa resultaba obsoleta. ¿Qué les quedaría? Entrar en consorcios, en empresas integradoras, en asociaciones estratégicas que acaso les permitieran “sobrevivir”. Las que no pudieran “reconvertirse” desaparecerían y muchos empresarios pequeños se volverían empleados de los grandes. Lorenzo Servitje, presidente del Grupo Industrial Bimbo, fue muy “claridoso”. En un Congreso de la Cámara Internacional de Comercio, celebrado en octubre en Cancún, opuso la crítica de los hechos a la lógica de la teoría:

El régimen piensa que la gran reforma económica, la reestructuración de la economía y las buenas perspectivas del TLC deben satisfacer al empresario en general; sin embargo, el empresario medio y pequeño, que se ve acorralado por la baja demanda, la falta de liquidez y de crédito, no entiende nada de esto y siente que el gobierno no lo toma para nada en cuenta.

Siendo un gran empresario, quiso hacerse vocero de un descontento generalizado en la pequeña y la mediana empresa: la apertura debió ser menos drástica y más lenta; el alud desmesurado de importaciones barrió con los productos nacionales; la tasa de desempleo era la más alta de los últimos tres años, lo que se traducía en menor consumo; crecía la cartera vencida y los bancos prestaban menos. En suma: *La severidad de la contracción económica es superior a lo previsto.*⁶⁴

Luis Rubio opinaba:

Sin una recuperación económica suficientemente fuerte y prolongada, que permita elevar la tasa de empleo y el nivel de ingresos de la población, el sistema político sufrirá presiones crecientes —como las que fueron evidentes en la década pasada— que podrían conducir a una explosión social[...] la reforma económica ha acabado por beneficiar a las grandes empresas y dejar casi marginado al resto de la economía [...] el resultado parece indudable y se refleja en la creciente concentración del poder económico y en la distribución del ingreso, que se está convirtiendo en un tema político medular[...].⁶⁵

Y Gabriel Zaid concluía:

Los cambios económicos más importantes, valiosos y perdurables del sexenio han sido la privatización y la apertura[...] los mayores fracasos económicos han sido la desregulación, el empleo (estancado en 22.5 millones) y la distribución del ingreso[...] la especialidad de este sexenio: generar costos de transacción irritantes, incosteables, prepotentes.

En suma:

Se perdió mucho tiempo en el combate de la inflación y en la firma del TLC, quizá afortunadamente. Si la inflación ya estuviera en el 3 por ciento, si el TLC ya estuviera aprobado y si el crecimiento anduviera por el 6 por ciento, la nueva economía presidencial estaría incontenible. No faltarían los que pidieran la reelección presidencial.⁶⁶

Entre “Pobre México” y “la nueva grandeza mexicana”, el TLC

Unos días antes de la eufórica autocomplacencia en el éxito del proyecto económico, la prensa había recogido una curiosa evocación del presidente, en Suecia, de la socorrida frase de Porfirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Insinuando la difícil vecindad con la nación más poderosa del mundo, se ensalzaban los valores de la soberanía y se procuraba “curarse en salud” por si fallaba la gran apuesta.

El TLC fue aprobado el 17 de noviembre, por 234 votos a favor y 200 en contra. Algunos, como Carlos Fuentes, lo aplaudieron con augurios por un saldo positivo que permitiera “no quedarse atrás” en la carrera de la economía global:

Criticado por poner todos los huevos en la misma canasta, el presidente Carlos Salinas apostó la casa y ganó. Cuando se apuesta tanto y se gana, se gana en grande. Salinas ha ganado en grande.⁶⁷

Pero Fuentes no perdió la oportunidad para recordar que los logros macroeconómicos, el pasaporte al Primer Mundo y la confianza en el mercado valdrían poco si crecía la pobreza, se concentraba la riqueza y no llegaba la democracia. Casualmente el presidente respondió al día siguiente, a una pregunta de *Newsweek*, que no había “una relación directa” entre TLC y democracia, aunque el crecimiento económico sería una base material importante “si se quiere que florezca la democracia”.⁶⁸ El comentarista Carlos Ramírez subrayaba, a su vez, el riesgo:

Hasta donde se percibe el alcance del Tratado, México quedará *subordinado* a las grandes líneas de desarrollo de la economía norteamericana, cuando en realidad las *prioridades sociales* mexicanas son bastante diferentes a las de Estados Unidos.⁶⁹

Jorge G. Castañeda fue coherente con sus objeciones previas: el tratado aceleraría la desindustrialización, propiciaría un largo período de crecimiento a muy bajas tasas y acentuaría la desigualdad. Sin embargo, habría que aprender a vivir con el TLC y aceptarlo como parte de la realidad del país, porque resultaba ya quimérico pensar en revertir un proceso de tal naturaleza. Habría que intentar, más bien,

[...]convertirlo en un factor de crecimiento con justicia, de democracia y vigencia de un Estado de derecho, de consolidación de la soberanía que nos queda, y de lucha contra la intolerable corrupción[...].⁷⁰

En un artículo aparecido en *Política Exterior*, Castañeda había señalado el peligro de que, en contra de muchas expectativas, el TLC frenara la transición hacia la democracia. Y en cuanto a las inversiones, acaso fluirían las especulativas y a corto plazo, pero la desaceleración de la economía mundial no prometía nada en inversiones productivas a largo plazo.⁷¹

Un análisis de *El Financiero* midió así los resultados de la gran apuesta: a corto plazo, un presidencialismo fortalecido por el factor exterior y, a mediano plazo, una vulnerabilidad económica ahondada por las condiciones realmente negociadas. Ganarían sólo ciertas regiones y las grandes empresas monopólicas y se agudizarían los desequilibrios. Serían más las desventajas: las severas *reglas de origen* no permitirían capitalizar el “puenteo” de productos de otros bloques hacia el mercado norteamericano; se impondrían aranceles temporales a ciertos productos competitivos de México, como el jugo de naranja; no mejorarían las condicio-

nes de negociación con otros bloques; no habría ingresos más altos, por lo menos en los próximos cinco años.⁷²

Se ajustaron, de inmediato, 27 artículos de nueve leyes al contenido del TLC y una nueva Ley de Inversión Extranjera fue enviada a las Cámaras. Eliminaba requisitos para inversiones menores a 100 millones de dólares fuera de las tres grandes urbes; se daba trato preferente a empresas de los Estados Unidos y Canadá sobre las del resto del mundo; se abrían sectores antes restringidos, como el de autopartes, y se permitía la inversión, mediante fideicomisos, en fronteras y litorales. Toda empresa establecida en el país se consideraría mexicana, aunque el capital fuera mayoritariamente extranjero. Sólo se reservaría el Estado, como estratégicos, el petróleo; la petroquímica básica (reducida a etano, propano, butanos, pentanos, hexanos, heptano, materia prima para elaboración de negro de humo y naftas); la electricidad; la energía nuclear; los minerales radioactivos; comunicaciones vía satélite, telégrafos y radiotelegrafía; correos (abriendo los servicios de mensajería); ferrocarriles; emisión de billetes; control de puertos, aeropuertos y helipuertos (abriendo a extranjeros la administración y la prestación de servicios).

Un día antes de la ratificación, el secretario Aspe había anunciado el propósito de reactivar la economía, con o sin TLC, aprovechando el superávit y sin relajar la disciplina financiera. Con ese fin, se destinaría un 54% del gasto programable a gasto social. Se esperaba crecer al 3% en 1994, en comparación con el 1.1% de 1993 y bajar la inflación a un 5%. Aspe insistió en que

[...]los efectos del TLC sobre la economía nacional, por tratarse de un programa de apertura gradual a 15 años, serán más importantes en el largo plazo[...].⁷³

Pocos días después de la ratificación, ya se calculaba un crecimiento de 4% y una inflación de 7%. Se predijo, sin embargo, que seguiría escaseando la inversión productiva y prevalecería la misma volatilidad de capitales especulativos. El Grupo de Economistas Asociados (GEA) advirtió que seguía faltando una política de desarrollo industrial y agrícola, integral y congruente con el acelerado proceso de apertura. Urgía fortalecer la productividad real de la industria y del campo y procurar una mejor distribución de la riqueza. Voceros de Canacina anticiparon que no habría cambios significativos en el desempeño de la economía: persistirían desempleo, subempleo y desequilibrio entre regiones y sectores; más empresas estarían en peligro de quedarse en el camino y el campo seguiría igualmente descapitalizado. El director del Banco Mexicano de Comercio Exterior aseguró en cambio que, desde la aprobación del Tratado, empezaba a crecer “de manera mágica” el interés por invertir en México. El presidente celebró la cosecha de éxitos de la generación del cambio y aseguró, en mensaje a la nación, que se había hecho realidad la “nueva grandeza mexicana”.⁷⁴

Modelo mexicano

Los juicios que hacían el balance del proyecto económico oscilaban entre la apolo-gía y la descalificación del paquete completo: entre las alabanzas por salvar al país, eligiendo el único camino correcto, y la condena por haberlo arruinado, jugándose-lo todo a una apuesta ciega. Cabía preguntarse: ¿acaso el éxito inmediato de la apues-ta impediría que el tiempo desinflara, implacable, el globo de Cantoya de las grandes expectativas?

Aun los que mejor apreciaban el saneamiento de las finanzas, el control de la inflación, las privatizaciones y la apertura advertían lo que pesaba en el otro platillo de la balanza: déficit comercial, casi equivalente al total de la reserva en dólares, por exceso de importaciones y escasez de exportaciones; sacrificio de una industria que costó décadas crear y que se levantó sobre el sacrificio de los campesinos que, hoy como ayer, seguirían sacrificados; desempleo y deterioro del nivel de vida. Y se preguntaban por lo que podría pasar a corto y mediano plazo si para tan largo plazo como sugería el secretario de Hacienda se fiaba el cielo prometido:

Esta transformación no se puede medir en años, sino en décadas o en generaciones. Ésta es la filosofía sobre la que descansa la modernización que se ha llevado a cabo[...].⁷⁵

Podría evaluarse bien, mal, o regular el proyecto económico: lo que resultaba cada vez más inaceptable era que opciones tan decisivas para el destino de todos fueran tomadas por tan pocos.

Ahí estaba el punto más débil de la última versión del proyecto modernizador: en los procedimientos autoritarios, excluyentes de la sociedad civil, que sirvieron para instrumentar, a toda prisa, reformas cuya pertinencia y oportunidad hubieran re-clamado amplia consulta y consenso. Y, sobre todo, en la apuesta ciega a una sola jugada que a tantos mexicanos les recordó la aciaga apuesta que se hizo, desde 1977, al milagro del petróleo. Así como se ganó la apuesta pudo haberse perdido, porque el azar es harto veleidoso. Pero, sobre todo, la jugada exitosa no garantizaba que los pobres de ayer y de hoy no serían los pobres de mañana.

Habría que aprender, aun con ratificación del TLC, a renunciar definitivamente a los milagros. Y atreverse a pensar en un desarrollo sustentable, fundado en recur-sos propios y complementado por los que pudieran venir de afuera, pero sin sobre-valorarlos como el energizante mágico de propulsión al Primer Mundo.

Abiertas ya las puertas a la inversión extranjera, para ingresar al maratón globa-lizador, convenía mirar de nuevo hacia dentro y hacer un inventario de recursos propios. Más allá de las cuentas alegres, había que poner los pies en la tierra y ba-jarse de la nube de los milagros. Había que tomarle la palabra al presidente y cobrar conciencia de que *nadie hará por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos*.

La lección volvía a ser, como lo advirtiera tan claramente Octavio Paz desde 1969, la necesidad de construir un modelo coherente con el país.

Es verdad que prevalece esa modalidad inventada por las multinacionales que se llama *globalización*. Es verdad que tiende a soslayar los proyectos nacionales para adaptarlos a los requerimientos del gran *tianguis* internacional, de acceso condicionado a las “ventajas comparativas”.

Pero también es cierto que México sigue siendo por lo menos dos Méxicos: uno tradicional y otro moderno. En dos siglos de modernizaciones, el moderno no ha logrado borrar ni absorber al tradicional. ¿Por arte de qué magia ocurriría eso ahora? Los saltos mortales sólo han servido para acentuar la ominosa distancia entre los que nada tienen y los que lo tienen todo. Cada día es más urgente la necesidad de entender que la salida no está en inventar un país “que sirva al Progreso y a la modernidad” sino en adecuar a la realidad soluciones que tienen que ser múltiples y generadas en la base misma de la pirámide.

Un sustancioso editorial de *El Financiero* había insistido, en mayo de 1993, en buscar la viabilidad de un *modelo mexicano*:

La construcción de *un modelo propio* exige no sólo la aplicación de recetas diseñadas en otras latitudes sino *imaginación*, razón por la cual es pertinente tomar en cuenta las expresiones y posiciones de los diversos sectores productivos para construir un espacio económico vigoroso que haga al *pais menos dependiente de factores coyunturales sobre los que frecuentemente no tiene ningún control*.⁷⁶

Esa preocupación convocó a un Seminario Nacional de Alternativas que organizó la UNAM, al que acudieron otras quince universidades del país. Se buscaría formular un *modelo comprensivo* para sintetizar lo razonable de modelos anteriores y desechar lo inoperante. Se le acreditaba al modelo neoliberal

[...]haber dado a la nación una extraordinaria sacudida que sin duda era necesaria y urgente en una sociedad apoltronada en la autocomplacencia, en el autoengaño, en la improductividad y en la pereza mental y política. Nos despertó del sueño placentero de vivir de prestado, pensando que los acreedores nunca nos iban a pasar la factura[...]. A su favor está el haber introducido prácticas de disciplina financiera y orden monetario, así como haber controlado un fenómeno inflacionario que había cobrado una inercia altamente nociva para la economía. También creó un clima de confianza, competitividad, esfuerzo, autoestima y presencia internacional que no debemos soslayar.⁷⁷

Se rechazaría la contrapartida: incapacidad para hacer crecer la economía; acelerado desempleo; regresión y concentración sin precedente del ingreso; exclusión

absurda e innecesaria de las empresas “menores”; asfixia de agricultores medianos y pequeños; apertura imprudente y extralógica, sin reciprocidad, pasando del proteccionismo exagerado a la desprotección exagerada; dependencia creciente de importaciones, cancelando posibilidades de crecimiento salvo con capital extranjero; traslado de los mandos económicos a centros financieros internacionales; deuda externa efectiva por 145 mil millones de dólares; sobrevalorar la inversión extranjera como fuente prioritaria de recursos, cuando en los hechos se ha concentrado en la especulación y en la compra de empresas mexicanas, sin crear empleos.

La propuesta sería: volver a crecer; sincronizar crecimiento de oferta y demanda, para consolidar una economía de mercado socialmente equitativa; sustentar el crecimiento fundamentalmente en recursos internos y sólo complementariamente en los externos; manejar el sistema fiscal para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva; dar confianza y garantía a *todos* los agentes económicos; dinamizar la considerable capacidad productiva—empresarial, laboral y profesional—que ha estado casi inerte; desechar el mito de la teconología de punta y adoptar tecnologías intensivas en mano de obra; buscar la *equidad distributiva del ingreso*, por razones de equilibrio social y para que puedan crecer las empresas, el ahorro y la inversión; crear mercados de competencia efectiva, no oligopólicos o monopólicos; asegurar una intervención mínima del Estado en la economía, pero la suficiente para garantizar el equilibrio del sistema económico; alentar la exportación por todos los medios posibles, buscando la especialización, como única forma sana de importar lo verdaderamente necesario; mantener un tipo de cambio real, por deslizamiento, pero no una sobrevaluación, que abarata lo que se importa y encarece lo que se exporta.

En suma, no se objetó la inserción creciente en la economía mundial sino los tiempos y la forma de hacerlo, sin mercado interno sólido y sin una estructura económica integrada. La inteligencia mexicana no dejaba de reflexionar, con lucidez, acerca de los puntos medulares de la crisis.

Carlos Fuentes lanzó a principios de diciembre, desde Buenos Aires, un llamado a la imaginación y el realismo:

No es posible que siendo un continente tan joven, vital y creativo, nos atengamos a modelos muertos. Creo que se debe llegar a un equilibrio entre la función del Estado, que es imprescindible, y la función de la iniciativa privada[...]. El mercado no es un fin, es un medio para que la sociedad alcance bienestar, cultura, comunicación. Entonces, con el *neoliberalismo* y el *capitalismo salvaje* no podemos reaccionar como imitamos, *siempre a destiempo, cuando ya se han demostrado sus insuficiencias*.⁷⁸

Un modelo alternativo tendría que buscar, esencialmente, una estrategia para ese *otro país* que es la mayoría y que sigue *al margen del mercado*. O se acentuaría la desigualdad y la pobreza, aun o más con TLC.

El proyecto *modernizador* no abarcará jamás, por sí solo, a la mayoría de la población. Un modelo realista tendría que propiciar un desarrollo sustentable, fuera del centro y desde abajo. No hay más brújula que la del país real. Tiene que funcionar lo pequeño para que pueda funcionar lo grande. Un espacio económico vigoroso para el sector moderno, mirando hacia fuera, sería inviable sin una economía sustentable, hacia dentro y desde abajo, para la mayoría de los mexicanos. Sería ingenuo e imperdonable desvincular la suerte de la economía del fortalecimiento de la urdimbre social y de la impostergable democracia.

Notas

- ¹ Declaraciones de Carlos Hank y Renato Vega Amador en *El Financiero*, 15 y 18/X/1991.
- ² Luis Téllez Kuenzler, *La modernización del sector agropecuario y forestal*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. pp. 125-126 y 249.
- ³ *Ibid.*, p. 12.
- ⁴ *Ibid.*, pp. 184-185.
- ⁵ Cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en *El Financiero*, 20/X/1993. Véase también Ursula Oswald, “Futuro del campesinado”, en *Uno más Uno*, 25/XI/1991.
- ⁶ Téllez Kuenzler, L., *op. cit.*, pp. 242-246.
- ⁷ José Luis Calva, “Posibles efectos del TLC sobre el sistema agropecuario mexicano”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre de 1991, pp. 112-113.
- ⁸ *Ibid.*, p. 118.
- ⁹ “Hacia la privatización rural”, en *El Financiero*, 15/X/1991.
- ¹⁰ Declaraciones del CNA y CAP en *La Jornada*, 17/X/1991; Demetrio Sodi de la Tijera, “La Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos”, en *La Jornada*, 18/X/1991; opiniones del INI en *La Jornada*, 20/X/1991; Warman, Woldenberg y Gershenson, en *La Jornada*, 23/XI/1991.
- ¹¹ Decreto de Reformas al Artículo 27 Constitucional, *Diario Oficial*, 6/I/1992.
- ¹² 1) La formación de *sociedades mercantiles* que podrán poseer hasta 25 veces lo autorizado para la “pequeña propiedad”: esos latifundios “por acciones” podrán abarcar hasta 2 500 hectáreas de riego en cultivos anuales; 3 750 hectáreas de algodón; 7 500 hectáreas de riego para frutales; 20 mil hectáreas de bosques y hasta 500 mil hectáreas de agostaderos en las tierras áridas del norte. Ningún obstáculo legal impediría que, eventualmente, acapararan el territorio nacional 10 933 haciendas;
- 2) las *asociaciones en participación* entre ejidatarios y empresarios (tipo Vaquerías en Nuevo León) de difícil viabilidad, [...] porque requieren de enormes subsidios;
- 3) los *arriendos de parcelas* para compactar superficies y explotar directamente grandes extensiones (opción que se contrapone a la *asociación en participación* y que puede afectar a la *agricultura de contrato* de suministros entre productores medianos y pequeños y agroindustrias);

- 4) las *ventas de parcelas*, a los *caciques o ejidatarios prósperos*, dentro del ejido;
- 5) las *ventas de parcelas a compradores ajenos al ejido* (previo acuerdo de un tercio más uno de la asamblea) o, una vez obtenido el *pleno dominio* de la parcela, su hipoteca y eventual pérdida por embargo o remate;
- 6) la transmisión a *sociedades mercantiles* del dominio de tierras de uso común (bosques, selvas, pastizales y agostaderos);
- 7) la roturación de tierras en grandes propiedades ganaderas que, al incorporarse al cultivo, se consideran tierras inafectables;
- 8) el *anuncio del fin del reparto agrario*: ya no habrá solicitantes de tierra interesados en denunciar latifundios, lo que valida a los que pudieran existir.

José Luis Calva, *La disputa por la tierra. La Reforma del Artículo 27 y la nueva Ley Agraria*. México: Fontamara, 1993, pp. 57-58.

- ¹³ Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Nexos*, núm. 179, noviembre de 1992. La encuesta se realizó en el mes de junio.
- ¹⁴ Erick Quesnel, *La reforma al Artículo 27 Constitucional*. Manuscrito inédito. México, 1992. Citado por Calva, J. L., *op. cit.*, p. 102.
- ¹⁵ Calva, J. L., *La disputa por la tierra...*, *op. cit.*, pp. 116-125.
- ¹⁶ Entrevista con Renato Gaznuri, aparecida en la revista *Qué pasa en Chile*. Citada en *Proceso*, núm. 853, 8/III/1993.
- ¹⁷ Emma Campos y Félix Vélez, "La pobreza rural en México", en *La pobreza en México: causas y políticas para combatirla* (coord. Félix Vélez). México: Instituto Tecnológico Autónomo de México y Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 198.
- ¹⁸ *Ibid.*, p. 203.
- ¹⁹ Mónica Flores, Emma Campos y Félix Vélez, "Pobreza y desigualdad en dotaciones de tierra ejidal", en *La pobreza en México...*, *op. cit.*, p. 225.
- ²⁰ Calva, J. L., *op. cit.*, pp. 162-163. Los datos que siguen, en p. 164.
- ²¹ *Ibid.*, pp. 157-159.
- ²² Téllez Kuenzler, L., *op. cit.*, p. 27.
- ²³ Declaraciones de Pedro Aspe, *El Financiero*, 22/I/1992, y José Córdoba, *El Financiero*, 5/V/1992.
- ²⁴ Vladimiro Brailowsky, "Economía mexicana, viejos y nuevos desequilibrios", Cuadernos de *Nexos*, núm. 49, julio de 1992. Opinión de Brailowsky citada por Quintana y Lomelín, en *El Financiero*, 10/VIII/1992.
- ²⁵ Jorge G. Castañeda, "México 1994: un horizonte nebuloso", en *Zona Abierta de El Financiero*, 2/IV/1993.
- ²⁶ Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. *Estados Unidos Mexicanos. Perfil socio-demográfico, XI Censo General de Población y Vivienda*, 1992, p. 63. Citados por Jorge G. Castañeda, *ibid.*
- ²⁷ Cifras del Instituto de Finanzas Internacionales, citadas por Gustavo Lomelín, en *El Financiero*, 13/VII/1993. Cifras de la deuda privada citadas por J. S. Zúñiga, en *La Jornada*, 13/VII/1993. Según datos del Banco de México, Secretaría de Hacienda (SHCP) y Bolsa de Valores (BdeV).

- ²⁸ *El Financiero*, 15/VIII/1991; *La Jornada*, 21/I/1992; *El Financiero*, 11/II/1993; *El Financiero*, 13/V/1993.
- ²⁹ *El Financiero*, 26/XII/1991.
- ³⁰ *Época*, 11/I/1993.
- ³¹ *El Financiero*, 23/IX/1991; *La Jornada*, 9/IX/1991.
- ³² *La Jornada*, 1º/I/1993.
- ³³ *El Financiero*, 7 y 25/I/1993.
- ³⁴ *La Jornada*, 23/V/1992 y 19/X/1991.
- ³⁵ *El Financiero*, 14/VI/1993; 15, 27, 29 y 30/VII/1993 y 3/VIII/1993; *La Jornada*, 14 y 31/VIII/1993. La cifra de personas en la economía informal es del ITAM y el porcentaje de autoempleados es del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en *El Financiero*, 17/VIII/1993.
- ³⁶ *El Financiero*, 24/VIII/1993.
- ³⁷ *El Financiero*, 23/VIII/1993.
- ³⁸ *El Financiero*, 14, 15 y 23/VI/1993, y 31/VIII/1993.
- ³⁹ Luis Rubio, "El futuro de la reforma económica", en *La Jornada*, 24/IX/1993.
- ⁴⁰ Pedro Aspe, *El camino mexicano hacia la transformación económica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 208.
- ⁴¹ *El Financiero*. 28, 29 y 30/IX/1993.
- ⁴² Declaración de Carlos Salinas de Gortari en Bruselas, *El Financiero*, 24/IX/1993.
- ⁴³ *El Financiero*, 10/VII/1992 y 10/XI/1992.
- ⁴⁴ Lorenzo Meyer, "Balance anual", en *El Financiero*, 22/XII/1992.
- ⁴⁵ Raymundo Riva Palacio, "El México del TLC", en *El Financiero*, 8/II/1993.
- ⁴⁶ *El Financiero*, 28/IV; 2/V; 28/VI/1993. *La Jornada*, 28/IV/1993.
- ⁴⁷ Mauricio Merino, "¿Democracia sin TLC?", en *La Jornada*, 14/X/1993, y Adolfo Aguilar Zinser, "No hay buenas relaciones con E.U. tras dos años de debatir el TLC", en *La Jornada*, 15/X/1993.
- ⁴⁸ *La Jornada*, 26/IX/1993.
- ⁴⁹ *El Financiero*, 15/XII/1993.
- ⁵⁰ *El Financiero*, 26/VII/1993.
- ⁵¹ José Reveles, "Muy lenta la asociación entre empresarios y campesinos", en *El Financiero*, 22/VIII/1993.
- ⁵² *La Jornada*, 5/VIII/1993; 2/IX/1993; *El Financiero*, 24/VIII/1993; 15/X/1993. Véase más información sobre el movimiento El Barzón en *La Jornada*, 22/X/1993, y en el suplemento *La Jornada del Campo*, 26/X/1993, "El movimiento de El Barzón. ¿Y sigue la yunta andando?"
- ⁵³ *El Financiero*, 24/VIII/1993.
- ⁵⁴ *La Jornada*, 25/IX/1993; *El Financiero*, 25/IX/1993.
- ⁵⁵ Armando Bartra, citado por José Reveles en *El Financiero*, 15/VIII/1993; *El Financiero*, 30/IX/1993.
- ⁵⁶ *La Jornada*, 7/X/1993; *El Financiero*, 18/X/1993; *El Financiero*, *Análisis*, 7 y 18/X/1993.

- ⁵⁷ Luis Téllez Kuenzler, "Vamos al grano con Procampo", en *La Jornada del Campo*, 26/X/1993.
- ⁵⁸ Armando Bartra, "¿Subsidios para qué? Los quiebres finisexenales de la política rural", en *La Jornada del Campo*, 26/X/1993.
- ⁵⁹ Carlos Montemayor, *La Jornada*, 16/X/1993.
- ⁶⁰ Julio Moguel, "Procampo y la vía campesina del desarrollo", en *La Jornada del Campo*, 26/X/1993.
- ⁶¹ Declaración de Carlos Salinas de Gortari en la firma de la octava fase del Pacto, *La Jornada*, 4/X/1993.
- ⁶² Declaración del presidente de Canacintra a *El Financiero*, 26/VIII/1993; *La Jornada*, 20/VIII/1993.
- ⁶³ "Esfuerzo conjunto", editorial de *El Financiero*, 19/VII/1993.
- ⁶⁴ Cifra de empresas cerradas, en *Nexos*, núm. 190, octubre de 1993, p. 29. Opinión de Concamín, en *El Financiero*, 12/X/1993. Palabras de Lorenzo Servitje, *La Jornada*, 23/X/1993.
- ⁶⁵ Luis Rubio, "El talón de Aquiles de la reforma económica", en *Vuelta*, núm. 200, julio de 1993.
- ⁶⁶ Gabriel Zaid, "La nueva economía presidencial", en *Época*, núm. 123, 11/X/1993.
- ⁶⁷ Carlos Fuentes, "TLC: el día siguiente", en *La Jornada*, 21/XI/1993.
- ⁶⁸ Declaración de Carlos Salinas a *Newsweek* citada por *El Financiero*, 22/XI/1993.
- ⁶⁹ Carlos Ramírez, *El Financiero*, 21/XI/1993.
- ⁷⁰ Jorge G. Castañeda, "El bolero", en *Proceso*, núm. 890, 20/XI/1993.
- ⁷¹ Jorge G. Castañeda, "NAFTA y el futuro de México", en *Política Exterior*, vol. VII, núm. 35, Madrid, otoño de 1993, pp. 128 y 138.
- ⁷² "TLC: El poder de las corporaciones", en *Informe Especial*, *El Financiero*, 27/XI/1993.
Para lograr la aprobación del TLC, hubo que negociar a última hora acuerdos paralelos en azúcar, cítricos y vidrio plano. México tendría menos acceso al mercado de azúcar norteamericano y se limitarían exportaciones de jugo de naranja congelado. El gobierno norteamericano se había comprometido a proteger a los productores de frutas y verduras de Florida, manejando "agresivamente" ciertos mecanismos previstos en el Tratado y aumentando las inspecciones de productos mexicanos que se importaran a los Estados Unidos.
- ⁷³ Pedro Aspe, al presentar a la Cámara el paquete económico para 1994. *La Jornada*, 16/XI/1993.
- ⁷⁴ Declaración de Carlos Salinas de Gortari en *El Financiero*, 24/XI/1993, y *La Jornada*, 24/XI/1993. Los cálculos y opiniones contenidos en este párrafo se encuentran en *El Financiero*, 1º/XII/1993, y *La Jornada*, 26/XI/1993.
- ⁷⁵ Declaración de Pedro Aspe en el 2º Encuentro de Amigos de la Universidad de Tel-Aviv, *La Jornada*, 10/XI/1993.
- ⁷⁶ "Modelo mexicano", editorial de *El Financiero*, 10/V/1993.
- ⁷⁷ David Márquez Ayala, "Alternativa al TLC y al modelo neoliberal", en *Perfil de La Jornada*, 17/XI/1993. Ponencia en el Seminario de Alternativas para la Economía Mexicana al que acudieron la Universidad Nacional Autónoma de México y otras quince universidades del país.
- ⁷⁸ Carlos Fuentes, declaración en Buenos Aires, *La Jornada*, 5/XII/1993.

XI. La tela de Penélope

Vertiginosa pobreza

En 1988, 50 millones de mexicanos, el 60% de la población, eran pobres: entre 18 y 23 millones vivían en extrema pobreza. El cálculo estimaba 35% de pobres moderados y 25% de extremadamente pobres. Para 1990, con una población de 81 millones, esa proporción indicaría que más de 28 millones eran moderadamente pobres y 20 millones, por lo menos, vivían en extrema pobreza.¹

Los pobres sólo perciben un 19% del total de los ingresos según el INEGI. Según fuentes independientes, el 30% de los más pobres sólo recibe el 5% del total de los ingresos mientras que el 20% de los más ricos obtiene el 72%. La concentración de riqueza ha sido impresionante: si en 1950 el 10% de los más ricos ganó 19 veces más que el 10% más pobre, en 1990 gana 38 veces más.²

En 1989, el monto de ganancias empresariales superó en un 90.6% al monto de los salarios de 22.5 millones de trabajadores: la participación del trabajo en el PIB es de un 27% y la del capital de un 73%, cuando en los países más desarrollados del mundo, los de la OCDE, los trabajadores alcanzan el 51% del PIB. Tan altas ganancias empresariales se distribuyeron también muy inequitativamente: apenas 112 empresas grandes (de un total de 1.2 millones de comercios, industrias y servicios existentes) obtuvieron el 46%. El salario real se deterioró en los tres primeros años del régimen un 29% más, lo que se añadió al 55% del sexenio anterior.³

La mitad de los niños mexicanos están desnutridos y viven en la pobreza. Son 14 millones los menores de 18 años subalimentados, en viviendas hacinadas, sin atención a la salud, obligados a abandonar la escuela para ganar algún dinero o sin

acceso a la educación. Hay en el país unos 12 millones de niños en la calle, buscándose el sustento. Cada año emigran 3 millones hacia los campos de Sonora y Sinaloa o se van del país. El DIF cubre apenas el 4% de las necesidades de ayuda alimentaria, con 650 mil desayunos escolares. El gasto destinado a educación fue del 2.6% del PIB en 1990-91, cuando la UNESCO recomienda por lo menos un 8%.⁴

Mientras la población creció un 2.14% anual en la última década, la pobreza creció un 5.1%, con un 4.4% de aumento en la más extrema.⁵ Un estudio, del Centro de Análisis de la Facultad de Economía de la UNAM, concluye que *a pesar de Pronasol, el avance de la pobreza ha sido vertiginoso y profundo*. Los aumentos nominales al salario entre 1982 y 1993 equivalen a un 409% mientras que el costo de la canasta básica ha aumentado en 1 388%. En 1982 el salario mínimo alcanzaba para el 38% de la canasta; en 1987, para el 20%; en 1993, para el 13%.⁶

Los organismos internacionales reconocen que el problema de la pobreza puede tornarse explosivo. El BM consideró, en abril de 1993, que en toda Latinoamérica haría falta un crecimiento del 4.7% para empezar a abatir la pobreza, acompañado de inversiones específicas en salud, educación y planificación familiar. Sus cálculos hablan de un 8% de crecimiento de la pobreza en los últimos cinco años. El FMI opinó que no bastaba el crecimiento porque, sin distribución equitativa, sería muy vulnerable y sin probabilidades de volverse sostenido.⁷

En octubre de 1991, el Consejo Consultivo de Pronasol reconocía que el crecimiento es, en sí mismo, insuficiente para abatir la pobreza porque

[...]aun cuando se acelere *no se logra absorber a toda la fuerza de trabajo existente, quedando sectores de la población marginados del proceso de producción mercantil y por lo tanto incapacitados para acceder al mercado*; dado un patrón concentrador del ingreso, la producción se orienta a la satisfacción de la demanda efectiva, buscando por ese medio la máxima ganancia; *el crecimiento económico en México ha sido excluyente y concentrador*. La pobreza y la pobreza extrema son la expresión directa de la concentración social, sectorial y espacial de los recursos, el ingreso y la riqueza que se da en el país, en el marco de las relaciones asimétricas en todos los mercados: tierra, insumos, productos, trabajo, dinero y bienes de consumo en general.

El crecimiento no garantiza el bienestar, porque sólo significa que se producen más bienes. Es el acceso a esos bienes lo que genera bienestar. Si la abundancia creciente de bienes se traduce en menos empleo (porque se obtiene más productividad con menos gente) y en menos acceso a esos bienes, la calidad de vida no mejora. Sólo la capacidad para generar tecnología y mano de obra calificada puede conducir a un crecimiento con bienestar cada vez más amplio pero tardaría mucho, de cualquier manera, en abarcar a las grandes mayorías.⁸

La creación de un empleo en el sector moderno es muy cara: cuesta entre 40 y 77 mil dólares, según el nivel tecnológico que se aplique. El cálculo de José Luis Calva ha establecido las posibilidades reales de empleos nuevos en unos 200 mil al año, aunque el TLC promueva la entrada de capitales hacia inversiones productivas. Aparte de los empleos, escasos o no, que puedan crearse eventualmente gracias a esa afluencia, las soluciones para la pobreza deben buscarse, pues, en estrategias más realistas. Una sería el uso de tecnología intermedia, menos costosa que la manejada por transnacionales, y el apoyo a pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleos. Pero la esencial sería una política de desarrollo integral en el campo, que permitiera a los campesinos vivir en sus pueblos en condiciones modestas pero aceptables y producir lo que necesitan para vivir y buena parte de lo que necesitan los demás mexicanos. La solución no puede ser despojar al campo para poblar más todavía las ciudades y acentuar la miseria.

La enorme dimensión de la deuda social se manifiesta en una cobertura de seguridad social que atiende a menos de la mitad de la población; en un déficit de 7 millones de viviendas; en las precarias condiciones del 32% de las que ya existen, incluyendo un 57% donde más de dos personas duermen en una habitación; en el porcentaje de alumnos que no terminan la primaria, que oscila entre el 40% en zonas urbanas y el 80% en zonas rurales e indígenas; en el 22% de escuelas que no cubren los seis grados y son atendidas por un solo maestro; en la precariedad de apoyo a esas escuelas en materiales didácticos y en la ausencia de bibliotecas, talleres y laboratorios; en la baja calidad de la educación, que está muy lejos de cumplir sus objetivos básicos, y en el alto porcentaje de analfabetos funcionales.⁹

Hambre sin adjetivos

Se manifiesta esa deuda, sobre todo, en el hambre. Un diagnóstico elaborado por API Consultores entre mayo y noviembre de 1991, por encargo de Pronasol, confirmó que las políticas macroeconómicas de ajuste la habían acentuado. El IX Congreso Latinoamericano de Nutrición (septiembre de 1991) ya lo había reconocido. En las pequeñas poblaciones rurales de México murieron, en los años ochenta, 103 de cada mil niños menores de 5 años. De 1980 a 1988, las muertes por desnutrición en menores de un año habían subido de 40 a 118 por cada mil, y la cifra se había multiplicado por 4, de 5 a 20, en los menores de 5 años. Siguiendo el indicador de peso, el 41.9% (3.7 millones) de menores de 5 años estaban desnutridos en 1988; el indicador de talla registró un 37.5%.

El diagnóstico de API calculó en la población urbana, en 1990, un déficit de 25% de calorías y 15% de proteínas. Se redujo un 7.25% la compra de alimentos de origen animal y un 17.74% la de otros productos y la canasta subió un 63.40%. Los

pobres de la ciudad compraron un 43% menos de frijol, que subió un 270%; un 14% menos de leche, que subió 183%; redujeron poco su consumo de tortillas, aunque les costaron un 148% más y compraron un 32% menos de aceite, que subió un 130%. La reducción de tiendas urbanas de Conasupo, de 604 a 10 en dos años, contribuyó a disminuir la cantidad y condiciones de compra de la canasta alimentaria urbana.

La proporción de niños desnutridos en el campo era de 51% en 1989 y en las zonas indígenas de 71%. La desnutrición severa era de 15 y 25%. El déficit de consumo de calorías, de 27%, y el de proteínas de 30%. Los jornaleros migrantes son el 75% de 5 millones de nómadas que recorren, con sus familias, el territorio nacional, viviendo en condiciones de insalubridad y carencias nutricionales extremas. El Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia calculó en un millón a los niños que murieron, en los años ochenta, por el síndrome hambre-desnutrición-infección.¹⁰

Los resultados de investigaciones y encuestas del Instituto Nacional de Nutrición son elocuentes. El más amplio y reciente análisis recoge datos de una investigación de diez años en la comunidad nahua de Tezonteopan, los datos de la *Encuesta de 1989* y otros que dan testimonio de la herencia secular del hambre. La nutrición es el eje del desarrollo. Su defecto es desencadenante de mayor subdesarrollo individual y colectivo. Un esfuerzo serio para abatir la pobreza tiene que empezar por atacar la alimentación deficiente. Lo había advertido hace años el doctor Salvador Zubirán, fundador de ese Instituto, como el más grave problema del país:

Hay dos Méxicos [...]. Más del 50 por ciento de la población mexicana padece un grado de desnutrición tal que su alimentación puede compararse con la de los habitantes de África, que es la más pobre del mundo.¹¹

Los indicadores para medir la nutrición son las medidas de crecimiento y peso desde recién nacidos hasta los cinco años; el total de calorías y de proteínas consumidos por día y la mortalidad en menores de un año y en menores de cinco. La alimentación básica de tortillas, frijoles y chile se redujo, disminuyendo sobre todo el consumo de proteínas vegetales que proporciona el frijol, que escaseó, y se sustituyó por pastas, que no son complemento nutricional del maíz. En Tezonteopan se consumía en los años setenta, cuando se realizó la investigación, un 69% de calorías que proporcionaban las tortillas; un 11% se obtenían a través del frijol; un 10% del azúcar y otro 10% de grasas, refrescos y, ocasionalmente, alguna verdura o producto animal. Se resentía la disminución del 20% de proteínas que contiene el frijol, y apenas se consumían verduras y alimentos animales. Las madres desnutridas y anémicas engendran hijos afectados *in utero*, a lo que se añade que la leche materna es el único alimento hasta los ocho meses y a veces hasta los catorce y se mantiene como alimento básico hasta los dos años. Los investigadores señalan que,

para no morir, el organismo *se adapta*, física y mentalmente, a la miseria: a no comer y a reducir la actividad, a crecer menos y a hacer un ajuste metabólico. La falta de hambre (*anorexia*) es resultado del hambre y propicia la *astenia* (debilidad que conduce a una pasividad vegetativa). El círculo vicioso se completa con las infecciones intestinales y respiratorias, que proliferan en un medio insalubre y encuentran huéspedes propicios en los organismos desnutridos. Los niños mal alimentados pasan la tercera parte de su vida enfermos y las enfermedades les duran el doble que a los demás. La desnutrición causa alteraciones en la absorción que provocan diarrea y las infecciones agudizan la anorexia y la astenia. La reacción a cualquier estímulo es mucho más deficiente: los niños desnutridos evolucionan con más lentitud, aprenden a andar y a hablar más tarde y su capacidad para absorber conocimientos se afecta considerablemente.

Ese fenómeno, que empieza en la infancia, persiste después si continúa la desnutrición. La reducción de la actividad física e intelectual al mínimo es un mecanismo de autodefensa del organismo, que se adapta a la desnutrición para evitar la muerte. La desnutrición altera la maduración orgánica y el desarrollo mental. Se da en una amplia gama, desde niveles extremos hasta lo que los especialistas denominan *desnutrición moderada crónica*, que afecta a la mayoría de la población. En cuanto a los niños, los desnutridos *crónicos* crecen poco y siempre están por debajo del peso; los *agudos* alcanzan una estatura normal, pero siempre con peso bajo, y los *adaptados* logran un peso normal, pero se mantienen de muy baja estatura.

Se ha calculado que México tiene recursos agrícolas y acuáticos potenciales para alimentar a 300 millones de habitantes: unos y otros están subaprovechados. Y en cuanto a la carne, que sólo consume el 20% de la población, el total de ganado existente (273 millones de todas las especies) alcanzaría a 4 por habitante. Actualmente, se emplean 9 millones de toneladas de grano para producir 400 mil toneladas de proteína animal que nunca llegan a consumir los pobres.

El instinto de vida se traduce en una excepcional capacidad metabólica que, de acuerdo con los expertos, permite ahorrar los elementos nutritivos y gastar el mínimo. Así funciona la *capacidad de adaptación a la miseria* que garantiza la sobrevivencia, aunque muy vulnerada y frágil: hay un síndrome de inmunodeficiencia, no producido por virus sino por hambre. Los 23 millones de mexicanos en pobreza extrema padecen este síndrome de privación social.

En suma, no es la falta de educación la que genera la pobreza, como opinan algunos, sino la pobreza la que margina y propicia una carencia de alimentos que condiciona, a su vez, escasa reacción frente a cualquier estímulo, incluyendo los que generan el aprendizaje y el desarrollo intelectual. A lo que se añade que la mayoría del presupuesto para educación se destina a los niveles superiores, cuando habría que reasignar recursos para promover la investigación tecnológica y, a la vez, cubrir con eficacia los niveles preescolar y primario para la totalidad de la población in-

fantil. Si no desaparece el hambre y los niños no tienen acceso a la educación desde los primeros años, en condiciones favorables al aprendizaje, no habrá posibilidad alguna de un auténtico desarrollo. Tampoco lo habrá, es verdad, si la iniciativa privada no se compromete a invertir en serio para crear tecnología propia.

Incipiente filantropía

En 1988 se fundó el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) para “toda clase de actividades tendientes a la ayuda desinteresada a comunidades e individuos”. Su fundador, Manuel Arango, advirtió, sin embargo, que aunque todas las empresas canalizaran el 10 o 15% de sus utilidades a actividades filantrópicas no bastaría, dada la magnitud del problema:

Si la distribución de los recursos económicos no está bien hecha, si hay un problema de concentración de la riqueza, frente al empobrecimiento de grandes masas, la filantropía no puede hacer nada, porque se trata de un problema estructural, que tiene que ver con los gobiernos y las formas en que se reparte la riqueza.¹²

Los filántropos le atribuían al Estado la responsabilidad esencial en una más justa distribución del ingreso y de los servicios sociales. Mientras tanto, algunos de los ciudadanos más ricos empezaron a buscar una participación activa en la oferta de servicios sociales. El Cemefi ofreció asesoría y canalizó donativos hacia ONG. El entonces director del Cemefi afirmó que era obligación de las empresas revertir parte de sus utilidades al conjunto de la sociedad: “No es cosa de buena voluntad, sino de obligación social o ética.” El proyecto se proponía abrir un nuevo espacio, aunque sus promotores reconocían que no existía en el país una tradición de “filantropía empresarial”. La amenaza latente para el proyecto empresarial generada en la enorme desigualdad era una razón adicional para aconsejar la filantropía.

Uno de los filántropos, Lorenzo Servitje, reconoció no disponer de una respuesta personal para las terribles interrogaciones que plantea la desigualdad desmesurada de recursos, de oportunidades, de bienestar. Consideró insoslayable, sin embargo, la responsabilidad de compartirlos y fundó en ello su adhesión a ese proyecto. En una conferencia en la Universidad Iberoamericana sugirió:

Los gobiernos tratan de hacer demasiadas cosas y fallan en el proceso. Y esto se debe, entre otras causas, a que los problemas sociales necesitan tiempo para resolverse y los gobiernos tienen prisa; requieren dedicación y trabajo persistente que las burocracias no suelen aportar; exigen pruebas y experimentación en pequeña escala, mientras que

los gobiernos prefieren proyectos de carácter general y masivo [...] y les cuesta mucho trabajo abandonarlos, a pesar de sus insuficientes resultados o de su fracaso[...].¹³

La observación era pertinente. ¿Podrá demostrar la filantropía una decisión efectiva de contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad? Para hacerlo deberá sumarse a los diversos esfuerzos que se están dando, poniendo la voluntad de servicio sobre cualquier tentación protagonista.

La Fundación para la Protección de la Niñez, que surgió en 1990, es un buen ejemplo de lo que puede lograr la iniciativa privada de buena voluntad. Un empresario y su familia la constituyeron con sustento en una inmobiliaria, cuyas rentas se destinan a financiar proyectos que carecen de la infraestructura suficiente para obtener sus propios recursos. La condición es que trabajen con la población más pobre o más vulnerable. Las funciones operativas de la Fundación fueron encomendadas a personas con larga entrega, experiencia y profesionalismo en el trabajo con niños de la calle.

Son ya muy numerosas las iniciativas de los marginados para promover su propio bienestar. A los privilegiados de la sociedad civil les tocaría asumir su parte del esfuerzo. Nada justifica, por supuesto, que el Estado no cumpla la suya.

Religiosos al rescate de los pobres

Una parte de la Iglesia católica, procurando coherencia con los principios de la doctrina cristiana, ha trabajado intensamente con los pobres. Algunas órdenes y congregaciones han cambiado sus antiguos proyectos de educación privada por otros de trabajo con indios, campesinos y gente de barrios marginados. Muchos dominicos, jesuitas y franciscanos han asumido ese compromiso. También son muy activas las congregaciones femeninas: Hijas de la Caridad; del Sagrado Corazón; Guadalupanas y Josefinas entre otras.

El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962, fue el punto de partida. En aquella reunión de todos los obispos del planeta se proclamó que la Iglesia no era únicamente la jerarquía o los religiosos, sino *el pueblo de Dios*. Se inició el diálogo ecuménico con otras iglesias y se rompió el centralismo, creciendo la solidaridad de los obispos entre sí y su compromiso con el mundo. Esa Iglesia renovada se reencontró con la religiosidad popular: Juan XXIII anunció que sería, en lo sucesivo, *la Iglesia de los pobres*.

En la segunda reunión de obispos latinoamericanos con el papa Pablo VI, que se celebró en Medellín en 1968, se concretó la intención de liberar al pueblo de Dios, encadenado por la pobreza y la injusticia, *en solidaridad con los que sufren*. Pablo VI identificó la evangelización con la liberación de millones de seres humanos oprimi-

dos. Reunidos en Puebla, en 1979, 300 obispos de América Latina propusieron las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) como “célula inicial de estructuración eclesial” en torno a la fe, la esperanza y la caridad. Era una vuelta a los orígenes de las primeras comunidades cristianas. Cada una de esas células vivas habría de ser el espejo de la Iglesia toda y una semilla del Reino de Dios. Las CEB empezarían a configurar el rostro histórico de la Iglesia de los pobres, su expresión más clara.

A través de las CEB se abrirían espacios para el respeto a los derechos humanos, mediante la toma de conciencia y la promoción de formas independientes de organización popular. Sin ser en sí mismas organizaciones políticas, cívicas o económicas, impulsarían la participación en todos esos niveles. En México ya había 10 mil CEB en 1992, distribuidas en 47 diócesis de un total de 75. Aunque todas responden a una visión de conjunto semejante, no todas surgieron de la misma manera ni muestran idénticas modalidades. Todas celebran liturgia, fomentan el estudio de la Biblia y promueven la oración pero, además, reflexionan sobre la realidad social y actúan en favor de la comunidad. La diversa combinación de esos elementos determinan múltiples variantes. Aunque generalmente las promueven sacerdotes o monjas, no siempre están vinculadas a las parroquias o a las diócesis porque, mientras algunos obispos las estimulan, otros las desalientan o pretenden desvanecer su contenido de *opción por los pobres*.

Aunque se ha llegado a hablar de una Iglesia paralela, porque constituyen una amplia red que no depende directamente de la estructura de la Iglesia, no lo son propiamente ya que no se manejan como organización jerárquica de dirigencia o de mando. Funcionan como centros de trabajo pastoral, de estudio y de apoyo y a veces se parecen mucho a ciertas ONG.¹⁴

A mediados de 1992, la Comisión de Evangelización y Catequesis del Episcopado Mexicano propuso en una *Guía pastoral* recuperar *los valores más auténticos de la primera evangelización*, ante la decadencia de valores cristianos en una sociedad *que no ha sabido responder a los clamores de la justicia hacia los débiles*. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, heredero espiritual de Fray Bartolomé de las Casas, advirtió en una *Carta pastoral* que si el lucro es el único criterio, los derechos humanos y la ética se soslayan, alegando que los pobres son los únicos responsables de su destino. Señaló que, en esa diócesis, la gran mayoría vive en una pobreza que se agrava cada día: el 60% de los niños no pueden ir a la escuela porque necesitan trabajar. Una observación todavía pálida si se piensa en la del doctor Ávila Curiel, al comentar una encuesta del Instituto Nacional de Nutrición: en un pueblo de Chiapas *casi no había niños desnutridos, pero era porque todos habían muerto: una epidemia de sarampión se los llevó*.¹⁵

Los siete obispos de Veracruz afirmaron al terminar 1992, en un mensaje de Navidad:

[...] el creciente empobrecimiento en que nuestro pueblo se debate está llegando a intolerables extremos que nos dan en el rostro y nos invitan a buscar soluciones estructurales que garanticen el cambio[...].

Los obispos hablaban de una *alarmante falta de trabajo y desempleo* y del abuso del medio ambiente para lucrar, tan opuesto al respeto sagrado que le guardan los indios a la tierra. El Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro definió a los indios como los *desahuciados del sistema neoliberal*: habría un 71% de desnutridos en un total de 15 millones de indígenas. Entre ellos, el síndrome de la desnutrición y sus secuelas parecería inescapable.¹⁶

¿Sociedad derrotada?

Hasta ahora, sólo alrededor de un 20% de la sociedad latinoamericana se ha integrado a la dinámica modernizadora. En México, la desintegración de la economía campesina autosuficiente ha provocado el desplazamiento de hombres, mujeres y niños por todo el territorio y hacia los Estados Unidos. La mitad de los jornaleros eventuales en la agricultura son mujeres que ganan, como los niños, 30 o 40% menos que los hombres. Muchísimas mujeres emigran para trabajar en las maquiladoras.

Son peregrinos que transitan sin parar entre regiones, entre empleos, entre el sector formal y el informal. La gente se ve arrancada de su pasado, de su identidad, de su espacio signifiante. Sergio Zermeno, como José Luis Calva, sugieren que en el fortalecimiento y la reconstrucción de las pequeñas comunidades y en la autosuficiencia alimentaria puede encontrarse una alternativa. En la cohesión de identidades circunscritas al ejido, la comunidad, el municipio, la región y en la busca de soluciones concretas a las necesidades de la vida cotidiana puede hallarse la defensa de los excluidos de la modernización y de la propia sociedad, que así empezaría a rearmarse y a restituirse. Zermeno habla de *la búsqueda de una democratización desde las identidades restringidas ante la fuerza devastadora del desorden globalizador*.¹⁷

Sería, acaso, la única manera de oponerse al efecto disolvente que el proceso de globalización al vapor ha ejercido sobre la sociedad. Ese ritmo, violentado y frenético, ha trastornado a las estructuras sociales más sólidas del medio campesino. Pero ha afectado también a los que fueron protagonistas del *primer milagro*. Así se habría propiciado la destrucción sistemática de empresarios y empresas de la etapa de sustitución de importaciones y de los sectores medios, incluyendo a una capa numerosa de empleados públicos. También habrían sufrido estragos instituciones y espacios de intermediación entre la sociedad y el Estado: sindicatos, universidades, partidos. La globalización precipitada habría dejado una *pedacería social*: una socie-

dad desmantelada, atomizada, menoscabada por la *anomia*, es decir, por la falta de nexos significativos y de control sobre el entorno.

La desindustrialización ha afectado ya a 70 mil empresas medianas y pequeñas, la mitad de las existentes, y amenaza a otro 25%. Las maquiladoras desplazan hacia la frontera a más de medio millón de hombres y mujeres jóvenes, que podrían llegar al millón para el año 2000. Los empleos que ofrecen son precarios, de muy baja remuneración. El promedio de pago es de 1 dólar con 20 centavos por hora, en comparación con 2.50 en Corea y 3 dólares en Taiwan. Por eso la mayoría prefiere cruzar la frontera para ganar más de 4 dólares por hora. Pero, aun con TLC, sólo se absorberá a un mínimo del millón que demanda trabajo cada año, que se añade a los 8.9 millones del rezago que se viene arrastrando, la mitad del cual ha sido trasladado ya a la economía de los Estados Unidos.

Sergio Zermeno es pesimista: la sociedad, diagnóstica, ha sido derrotada en lo que lleva el país de modernización a marchas forzadas. La trama social se ha quebrantado y han sufrido todos los espacios de mediación que permitían la participación colectiva. El sociólogo advierte un fenómeno de retorno de los liderazgos personalizados. Eso suele ocurrir cuando los que constituyen la gran mayoría se sienten aislados, al garete, dispersos en grupos sociales en vías de desintegración. Programas como Pronasol ofrecen, entonces, una relación directa entre la imagen de un dador presidencial paternalista y los individuos atomizados. Se desalienta, en cambio, la auténtica consolidación de las pequeñas identidades locales en busca de opciones democráticas.¹⁸

Fuenteovejuna, señor

El desencuentro entre sociedad y Estado afloró notoriamente durante el terremoto de 1985. La demanda de suelo, vivienda y servicios se había ido desbordando en las sucesivas décadas de migración campesina hacia las grandes ciudades. Según el director de Infonavit, se había acumulado a fines de 1991 un déficit nacional de 6 millones de viviendas. El déficit del Distrito Federal sería de alrededor de 2 millones.

En la capital y en otras urbes, como Acapulco, Monterrey o Durango, se fueron gestando brotes de un movimiento urbano popular a partir de 1968, con diversos grados de politización y momentos de auge y otros de reflujo. A fines de los años setenta, la Conamup (Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos Populares) pretendió juntarlos, aunque no logró la coincidencia de todos y prevaleció el centralismo sobre la pluralidad de iniciativas locales. Confluían tendencias políticas e ideológicas múltiples que, al unificarse, buscaban lograr mayor eficacia sin perder independencia.

La instrumentación del ajuste significó un recorte drástico del presupuesto para la dotación de servicios urbanos a las colonias. A los movimientos independientes opuso el gobierno una “organización vecinal” controlada por el partido oficial y diversos filtros jurídicos, administrativos y financieros para canalizar demandas.¹⁹

Los temblores de septiembre de 1985 imprimieron una dinámica más intensa a las iniciativas populares, con importantes resultados en el surgimiento de ONG que se centraron en programas integrales de abatimiento de la pobreza, como se verá más adelante. Las gravísimas carencias de vivienda y servicios, acentuadas por el sismo, propiciaron una Coordinadora Única de Damnificados y también la politización de reivindicaciones y la dispersión, pasado el momento crítico, de numerosos proyectos con diversos enfoques de acción que repercutieron, sin embargo, en las elecciones de 1988, a través del Frente Democrático Nacional.

La Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (Anamup) incluye a grupos como la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, Movimiento Vida Digna y parte de la antigua Conamup. La Asamblea de Barrios, vinculada al PRD, ha sido muy activa. Algunos dirigentes han buscado trascender la organización puramente vecinal y promover una democratización de la ciudad que permita encontrar respuesta eficaz a las necesidades básicas. La mayoría considera que Pronasol se ha quedado en la superficie, sin atacar estructuralmente el problema de la miseria.²⁰

Hasta 1960, obreros y burócratas organizados recibieron respuesta a su demanda de vivienda barata. La migración hacia la capital empezó a desbordar, desde entonces, la demanda de grupos medios y bajos: el Estado sólo invirtió en un 7.8% de las viviendas construidas en los años sesenta: lo demás fue inversión privada. Los más pobres, sin capacidad corporativa de regateo, no fueron atendidos. Entonces empezaron a surgir “caciques urbanos”, líderes que controlaban invasiones de terrenos y luego gestionaban servicios. Para responder a las demandas de movimientos urbanos independientes, el Estado creó en 1970 el Indeco y en 1972 el Infonavit y el Fovissste. Luego surgieron la Procuraduría de Colonias Populares del Departamento del Distrito Federal y Fideurbe. En los años setenta se atendió más a las capas medias: sólo el 4.8% de los recursos destinados a vivienda fueron a la gente de bajos recursos. Fonhapo apareció en 1981, con la idea de promover la autoconstrucción para ir mejorando progresivamente las viviendas de los más pobres. El ajuste exigió un recorte drástico de recursos.²¹

A partir de 1989, la prensa no ha cesado de registrar problemas de vivienda popular en delegaciones del Distrito Federal. A veces, menos del 20% de la población ocupa más del 50% del suelo disponible, dejándole lo que queda a más del 80% restante. Parte de ese 80% vive en vecindades deterioradas, algunas con riesgo de derrumbe. En muchas zonas de la periferia se establecen campamentos improvisados, como en la zona Aeropuerto-Arenal y Xochináhuac: en la Delegación Venustiano Carranza hay 18 de esos campamentos.

La Asamblea de Barrios propuso a Pronasol un proyecto puntual en octubre de 1991: crear un fondo social inmobiliario, con ahorro familiar y recursos estatales, para comprar 200 mil m² y construir vivienda. No encontró eco. El regente de la ciudad propuso buscar un consenso para conciliar una estrategia de vivienda dirigida a los sectores populares con otra para la clase media, concertando recursos técnicos y financieros con los planteamientos de los que padecen la penuria. El problema es serio. El Infonavit ha agotado casi sus reservas de suelo. Ahora funcionará ofreciendo créditos a empresas constructoras, que aportarán los terrenos, y créditos a los asalariados, aunque únicamente podrán solicitarlos quienes ganen más de tres salarios mínimos. Todos los demás quedarán excluidos.²²

El 18 de agosto de 1993 unos seis mil manifestantes llegaron a la Cámara de Diputados y ocuparon el recinto durante cerca de ocho horas. Pedían la derogación de la reciente Ley Inquilinaria alegando que había sido aprobada a la carrera, sin tomarlos en cuenta y que los dejaba indefensos frente a los dueños de los inmuebles donde rentaban alguna deteriorada vivienda. Saltaron barreras, derribaron puertas y rompieron cristales para irrumpir en el ámbito legislativo exigiendo atención, a gritos y con pancartas. Pertenecían, según la revista *Proceso*, a 25 organizaciones de vecinos del Movimiento Urbano Popular, ligadas a diversos partidos (PRD, Frente Nacional Democrático Independiente y Movimiento Proletario Independiente). La multitud desbordó la contención de rejas y puertas cerradas para posesionarse del local donde sesionaban los diputados, mientras una comisión de 100 dirigentes vecinales y algunos diputados del PRD negociaban en otro local del edificio. ¿Obra de agentes provocadores, como aseguró el líder del PRD en el Distrito Federal? Ese partido declaró, en efecto, que no era su estrategia desatar desorden: la violencia, indeseable, podía atribuirse, sin embargo, a un atropello de derechos ciudadanos susceptible de generar, en cualquier momento, imprevisibles tensiones.

Al frente de los manifestantes habían marchado líderes de la Asamblea de Barrios, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan y la Unión de Vecinos y Damnificados. Iba gente de esas tres organizaciones y de muchas otras, incluyendo Amanecer Arenal, Anamup, Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco y Unión de Cuartos de Azotea e Inquilinos, Movimiento Vecino, Unión de Colonias Populares, Unión de Colonias de la Guerrero. Según el diario *La Jornada*, fueron miembros de un grupo que aparecía por primera vez, el Bloque de Organizaciones Sociales (BOS), los que caldearon los ánimos y encabezaron el desbordamiento.

Pero la hipótesis de una provocación o de manipulación de líderes no excluía, como advirtieron comentaristas serios, la *sorda inconformidad social* latente en las zonas marginadas que sin duda movía a la multitud (Miguel Ángel Granados Chapa), ni el agravio resentido por *los 40 millones de pobres que le sobran al proyecto* (Álvaro Cepeda Neri): sólo a Fuenteovejuna, en suma, habría que acreditarle la

responsabilidad de aquella violencia social (Miguel Ángel Rivera). O, como diría un representante de Coparmex, “la sociedad ha rebasado a los partidos”.²³ La decisión de posponer hasta 1998 la aplicación de la Ley Inquilinaria garantizó que las disposiciones más resentidas sólo se aplicarían a los nuevos espacios de vivienda.

El mito genial del desempleo y el milagro de sobrevivir

El primer modelo de industrialización —el “milagro mexicano”— no pudo absorber a todos los que desplazaba de la economía tradicional: muchos emigraron a los Estados Unidos y muchos se prendieron precariamente de las periferias de las ciudades para tratar de sobrevivir. Pero he aquí que la vieja teoría del *goteo* adopta ahora una nueva modalidad: no se trataría sólo de fomentar adentro la creación de riqueza, que acabaría por gotear hacia abajo, como antes se sostuvo. Se trataría de esperar el *goteo* de la riqueza de afuera que, al buscar su multiplicación, derramaría sus beneficios hacia este país, crearía empleos y *tutti contenti*. Nada de eso, sin embargo, ha sucedido hasta el momento.

Un programa realista de desarrollo integral en el campo evitaría, sin duda, la diáspora de campesinos y llegaría a las raíces del problema, rescatando algo de lo mucho ya desintegrado en la economía tradicional. Ahí estaría, sin duda, el principio del encuentro de un modelo viable. La demanda de ocupación sigue creciendo. Es muy improbable que, con el modelo neoliberal o aun buscando equilibrar la apertura con el fortalecimiento del mercado interno, el sector moderno pudiera absorber a la totalidad de esa población que, hasta ahora, ha permanecido excluida de los beneficios del crecimiento. Empiezan a surgir propuestas de ONG que buscan con modestia, sobre todo en las ciudades pero también en el campo, soluciones locales para los grandes problemas globales. Ese camino, que tendría que vincularse a un desarrollo integral del campo, empezaría a marcar la senda hacia un desarrollo sustentable.

El apoyo a las empresas medianas y pequeñas, creadoras de empleo y capaces de atender a un mercado interno de recursos modestos, es de máxima prioridad, antes de que sea demasiado tarde. Pero el número de excluidos de cualquier actividad productiva formal es desbordante. En septiembre de 1991, el dirigente de Canacintra hablaba de la “afortunada existencia” de la válvula de escape de la economía informal, que habría impedido la explosión social.

El país entero es un abigarrado tianguis. El INEGI calculaba en 22.5% los dedicados a la economía informal, con una proporción del 10.4% del PIB. Una encuesta de Canacintra contaba 5.7 millones de personas en la economía subterránea, abarcando no sólo al comercio sino a la pequeña producción con trabajadores contratados

verbalmente y escasamente pagados (los que son familiares muchas veces no cobran, a cambio de alimentos y cobijo). Un 68% no emplea a ningún trabajador sino que vende algo, o lo produce y lo vende o presta algún servicio por su cuenta y sin ayuda de otro. Un 18.9% vende algo y el 12% repara alguna cosa. Sólo un 21% tiene local propio; otro 21% se desempeña en la calle y un 25% trabaja a domicilio.²⁴ Como advertiría la revista *Este País* en noviembre de 1992:

*El sector informal se convirtió así en la base del nuevo milagro mexicano: sobrevivir en medio de la crisis[...]. El comercio informal y muchas veces ambulante [...] así como la organización de talleres de todo tipo fue el modo a través del cual los migrantes a las ciudades se integraron a la economía [...]. Cuando la crisis frenó la creación de empleos y los salarios se hicieron de hambre, volvió a brotar con fuerza la actividad informal.*²⁵

La economía informal ofrece fuentes de ocupación que ni las empresas ni el Estado proveen. Más de la mitad de los trabajadores informales tiene entre 20 y 44 años; 40% no terminó o ni siquiera empezó la primaria y un 21% hizo algún estudio después del sexto grado. El círculo vicioso que actualmente mantiene estancada a la economía era ya ostensible a fines de 1991: el poco dinero que ganaban los pobres no les alcanzaba para comprar en los comercios regulares; la industria no vendía, ni podía reinvertir, ni generaba empleos sino que los cancelaba. El desempleo creciente buscaba una salida en la economía informal.

La modernización que introduce tecnologías avanzadas significa desempleo, como ha ocurrido en Pemex y en otras industrias de punta. También la que “adelgaza” por otras razones como Fertilizantes Mexicanos, que reduce de 2 900 a 700 trabajadores y de 7 mil a 3 mil empleados de confianza. Las bajas de precio de minerales produce cierre de pequeñas minas y las siderúrgicas despiden trabajadores: el sindicato registra 35 mil mineros menos. Los ingenios azucareros, al privatizarse, despidieron un 40% del personal. Al registrar que las ventas se habían desplomado, el industrial textil José Zaga advertía que los industriales eran los más interesados en aumentar salarios para ganar compradores. La apresurada apertura dejó sin trabajo a muchos en esa industria y en otras de viejo arraigo, como la zapatera. Al principiar enero de 1993, Fidel Velázquez hablaba de un millón de despidos por el cierre de 455 empresas.²⁶

Pero el comercio ambulante no es, como podría pensarse, un auténtico “mercado de subsistencia” de gente que se autoemplea. Detrás del ambulante están los verdaderos *empresarios* del comercio callejero y los 29 líderes que controlan las calles, todos muy prósperos y capaces de movilizar contingentes para actos políticos. En un documentado análisis que publicó Enrique Quintana en *Este País* se detallaron los diversos y no siempre limpios manejos que incluyen contrabando, invención

de marcas y fabricación clandestina, a la vez que un alto volumen de compras a importadores directos y mayoristas. Al parecer, hasta los vendedores de churros trabajan, por alguna minucia, para “empresarios” que controlan cada uno a cincuenta “churreros”.

Ese empresariado *sui generis* ha servido, sin embargo, para que sobrevivan todos los que ejercen el ambulante y sus dependientes, es decir, varios millones de mexicanos. Como declaró con sagacidad la principal lideresa, Guillermina Rico: “Mientras en México seamos muchos y estemos muertos de hambre, habrá comercio ambulante”.²⁷ Buena explicación que le hubiera servido acaso a María Félix para entender por qué el desordenado Centro Histórico de la ciudad de México no se parece al de París. La reubicación del ambulante, para sacarlo de las aceras del Centro Histórico, no desapareció esa realidad pero procuró alejarla del alcance de miradas sensibles.

Un modelo que acentúa notoriamente la modernización de islotes geográficos y sectoriales, a expensas del deterioro de la mayoría del territorio y de sus habitantes, no podrá lograr jamás el gran salto que propone la venta de ilusiones: el salto espectacular que permitiría, idealmente, *reconvertir* al país entero a la modernidad. Es evidente que, sin excluir la modernización de lo que sea modernizable, la alternativa paralela de un modelo de desarrollo sustentable, desde abajo, sería muy racional.

Un modelo de tal naturaleza no tendría por qué excluir la promoción del autoempleo y la microempresa familiar o cooperativa que algunos investigadores preocupados, como Sergio Zermeno, han descartado, como recurso de remiendo en el desaguado de una macroeconomía que ha puesto a la microeconomía en el desván.²⁸ El autoempleo entra en las opciones de muchas de las ONG más comprometidas. Es una posibilidad no fantasiosa dentro de las condiciones actuales y seguirá siéndolo por mucho tiempo, dadas las enormes dimensiones de la pobreza.

Pequeños caminos en la megaciudad

La organización popular en zonas urbanas, principalmente en la ciudad de México, surgió en los años setenta. En colonias del centro y del norte de la capital se gestaron organizaciones vecinales para promover la autoayuda y solucionar problemas comunes de vivienda y de empleo. En veinte años se han triplicado las organizaciones populares y los movimientos cooperativos. Creció, a la vez, el sector informal de la economía, incluyendo a numerosas microempresas no registradas. Se multiplicó la experiencia autogestiva en organizaciones urbanas, que hacen modestos pero variados intentos de respuesta a necesidades múltiples: promover empresas productoras de bienes y servicios que proporcionen empleo; fomentar el aho-

rro; animar la autoconstrucción u otros programas de vivienda y atender necesidades educativas, de salud y de bienestar comunitario.

Falta una investigación a fondo que identifique a las diversas organizaciones y sus fuentes de financiamiento: las características y el volumen de la población que abarcan; las necesidades que se atienden; la presencia o ausencia de promotores externos; el nivel participativo en la toma de decisiones y la administración de recursos; la metodología de trabajo y el impacto en un mejoramiento real de calidad de vida. La información es fragmentaria, aunque apunta hacia una vasta presencia de iniciativas autónomas, que ya reflejan el dinamismo de la energía social y el afán de una creciente participación democrática.

Las labores de rescate que movilizó el terremoto de 1985 fueron atribuidas por algunos analistas al atávico instinto de sobrevivencia que acompaña desde siempre a la especie humana. Se sugirió que esa movilización fue numerosa y rica en motivaciones, pero pobre en eficacia y organización y que esos grupos tendieron a desaparecer, "víctimas del individualismo mesiánico".²⁹ Tales apreciaciones son desmentidas, sin embargo, por el semillero de coordinadoras de esfuerzos vecinales que se propusieron reconstruir viviendas y persistieron en proyectos de autoayuda para satisfacer otras necesidades esenciales. Esas pequeñas organizaciones atienden salud, abasto y alimentación, ahorro, cuidado de los niños, educación y cultura, recreación y deporte y diversos servicios y programas de capacitación doméstica.

El temblor germinó movimientos vecinales, que empezaron a trabajar con Renovación Habitacional, la instancia que creó el Estado para la reconstrucción. La gestión de esos movimientos logró que se respetara el arraigo de la gente a sus barrios y que no se les desplazara hacia la periferia. El presidente de la República se reunió varias veces con los damnificados y escuchó la demanda de expropiación de predios, que permitió la reconstrucción.

Una importante contribución al fortalecimiento de la sociedad civil surgió allí, dicen muchos de los que siguen promoviendo las organizaciones vecinales. La dimensión del terremoto y sus secuelas cambió la visión de algunos que habían pertenecido a diversas organizaciones de izquierda y que empezaron a intentar convertir las protestas en programas viables. Sin embargo, siempre hubo recelo por parte del Estado e intentos de poner coto a la organización independiente y de absorberla.

Los proyectos vecinales giran, en muchos casos, alrededor de pequeños centros comunitarios de desarrollo donde se prestan diversos servicios: guardería, consultorio médico, cocina popular y actividades culturales, que suelen incluir la posibilidad de consultar un mínimo acervo de libros. Todo funciona con la participación de los vecinos, que se hacen responsables y que suelen solicitar el apoyo de escuelas de educación superior que les proporcionan, mediante convenios, servicios de pasantes de medicina, enfermería, pedagogía o trabajo social. A veces, jóvenes estudiantes de la colonia o del barrio prestan así su servicio social.

El financiamiento que ha respaldado a esas coordinadoras llegó, al principio, para auxiliar en el rescate y la reconstrucción y se mantuvo, después, para encauzar proyectos de desarrollo comunitario. Buena parte del financiamiento ha sido de organismos internacionales, incluyendo algunos como CARITAS, de filiación religiosa. Algunas ONG de desarrollo comunitario han mostrado reticencia a establecer vínculos con instancias de gobierno y otras no. La idea de buscar apoyo del gobierno en proporción igual al que pudiera obtenerse de fuentes internacionales y al que las ONG pudieran recaudar por diversos canales empezó a prevalecer. Aunque la variedad es muy amplia, puede resultar ilustrativo referirse a algunos ejemplos concretos.

La Fundación Barrio Unido surgió en zonas del centro, afectadas por el terremoto, de la coincidencia de tres organizaciones muy cercanas: la Unión Popular Valle Gómez, Amanecer del Barrio y Centro Morelos, que trabajaron juntas la reconstrucción. Con recursos de la Cruz Roja suiza lograron sus viviendas. Al recibir las casas, los beneficiarios decidieron constituir un fondo, con aportaciones a contado o a plazo, para integrar la Fundación Barrio Unido, que fue registrada por la Junta de Asistencia Privada y pudo recibir beneficios como exenciones de impuestos, etcétera. Con recursos de FAC y del Departamento del Distrito se construyó el local. El Sindicato de Electricistas les regaló un terreno para guardería. Ahora cuentan con esa estancia infantil, tres consultorios que prestan servicios médicos, odontológicos y de atención psicológica y siguen construyendo viviendas. La Fundación actúa como árbitro en problemas vecinales, y apoya proyectos productivos (varias lavanderías y un vivero que va a funcionar en Xochimilco) y proyectos ecológicos.

Unas 800 familias se benefician con esa agrupación, que estimula que los mecanismos de atención a los problemas comunes germinen entre los propios interesados. Procuran depender lo menos posible de recursos de fuera y estimular el ahorro para optimizar los escasos recursos generados mediante la autogestión. Al concluir la Fase Dos de Reconstrucción, se promovió que la gente ahorrara para comprar terrenos. Sólo que tienen que hacer un enorme esfuerzo para aportar después el enganche que les pide Fonhapo o Fividesu para la pequeña vivienda de 44 m² que luego seguirán pagando. Esa vivienda les cuesta 60 mil nuevos pesos, en edificio de cinco niveles. La Fundación Barrio Unido trabajó con FAC y ahora forma parte del Foro de Apoyo Mutuo.

La Unión Vecinal del Valle de México agrupó a coordinadoras de vecinos de varias colonias, como la Morelos, la Valle Gómez y la Guerrero. Aunque se constituyeron formalmente en 1985, tenían el antecedente de proyectos iniciados, diez años antes, por jóvenes vecinos, que promovieron la organización para resolver problemas de vivienda y fomentar pequeñas empresas productivas. Al no encontrar respuesta en Renovación Habitacional, se vincularon a la Fundación para el Apoyo

a la Comunidad (FAC), que les allegó recursos para un programa de reconstrucción, que se realizaría con la participación directa de los beneficiarios. Las madres de familia han sido sujetos activos en la elaboración de proyectos, la vigilancia de obras, la asignación de viviendas a cada familia y la definición de nuevos objetivos una vez cumplida la fase de reconstrucción.

A la vez que se levantaban las viviendas, se construyó un centro de desarrollo comunitario. Mediante convenios consiguieron, a través de la delegación Venustiano Carranza y del gobierno del Distrito Federal, apoyos diversos para el funcionamiento de programas de salud y educación, con pasantes de medicina y educadoras, que a su vez capacitaron a las madres que atienden voluntariamente las guarderías. Con el apoyo de trabajadoras sociales, se impulsaron otros programas y se exploró la situación específica de cada uno de los participantes. Las madres establecieron cocinas populares, para compensar la merma de poder adquisitivo en la década del ajuste. Los jóvenes promueven campamentos para la recreación de niños y los ayudan en sus tareas escolares, mientras asesoran a adultos en estudios de primaria abierta.

Con créditos de FAC y de organismos internacionales obtuvieron recursos para instalar empresas familiares artesanales, especialmente de fabricación de zapatos. Se mantuvo una movilización constante para obtener nuevos predios y dotar de viviendas a todas las familias solicitantes. Los vecinos han procurado formarse y capacitarse: las madres que atienden guarderías y las que quieren mejorar el mantenimiento doméstico; los jóvenes que funcionan como consejeros recreativos y los que se interesan por la investigación social; los adultos que buscan mejorar sus escasas habilidades de comunicación y redacción.

Cada coordinadora reconoce a su asamblea como la autoridad máxima y cuenta con varios comités de trabajo que se ocupan de los diversos proyectos. Un consejo directivo central representa al conjunto de la organización y realiza gestiones ante cualquier instancia externa. Los vecinos ocupan los cargos directivos y toman las decisiones, aunque cuentan con asesores de la FAC y mantienen comunicación con las autoridades del DDF a través del presidente de la Unión, que forma parte del Consejo Consultivo de la Ciudad, y con la Secretaría de Desarrollo Social. Sin ser confesionales, mantienen un fuerte vínculo con la Iglesia y una posición crítica frente a una burocracia que no siempre ha sabido apoyar, con eficacia consistente, las iniciativas de las organizaciones.

La Coordinadora Lomas de la Era surgió, en los años setenta, en una comunidad suburbana de la delegación Álvaro Obregón. Entre 1970 y 1972 algunos jóvenes, secundados por varias familias, ocuparon tierras ejidales y buscaron legitimar su derecho a la vivienda y lograron servicios públicos. Al no encontrar respuesta en la delegación, se organizaron en 1976 para la autoconstrucción de viviendas y para demandar transporte público. Surgió entonces la Coordinadora y se formaron cuatro

grupos de abasto y un comedor popular, mediante un sistema de compras en común. Finalmente acudieron a Diconsa, buscando apoyo para abastecer las tiendas. En 1987 construyeron un centro de desarrollo infantil y un local para talleres culturales. En 1989 crearon un centro social y una cocina popular. En 1990 empezaron a luchar por obtener un predio para biblioteca y talleres y para ampliar el centro de desarrollo infantil. Funcionan a través de una asamblea general, un consejo de abasto y comités para los diversos programas. Algunas madres, que se capacitaron como educadoras, laboran en el centro de desarrollo infantil sin percibir ningún salario. Preservando su independencia, gestionan apoyos ante la delegación y otros organismos gubernamentales.³⁰

La Arquidiócesis de México creó, al día siguiente del terremoto, un Fondo de Ayuda Católica para canalizar donativos hacia los damnificados. Dos meses después surgió la Fundación para el Apoyo a la Comunidad (FAC), que empezó a operar como órgano oficial de la pastoral social para promover apoyos a la vivienda, al empleo y al desarrollo comunitario y despertó amplia credibilidad entre la población necesitada. En 1989 se constituyó Faprode (Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo) para operar varios *swaps*, intercambiando deuda pública por inversión social. Los fondos operados por Faprode no sólo se canalizaron a través de FAC sino de más de 100 ONG independientes.

En 1991 y 1992, FAC realizó numerosas acciones de construcción de vivienda e instalaciones de asistencia social; fomento de empleos autosuficientes; promoción del desarrollo comunitario integral y apoyo a nuevas organizaciones de inspiración cristiana que adquirieron progresiva autonomía. También otorgó becas a promotores sociales para trabajar en beneficio de sus comunidades. Muchos programas de FAC favorecieron a ancianos insolventes, para obtener vivienda y recibir una amplia gama de atenciones. A través del Centro Comunitario Juan Diego, se instrumentó un vasto apoyo para el Valle de Chalco.

Impulsando la reconstrucción de fuentes de empleo para damnificados del temblor surgió, en 1985, el programa de microempresas llamado “Los emprendedores”, que otorgó créditos para la compra de insumos, maquinaria y equipo y brindó capacitación para la contabilidad y la administración. Se creó un fideicomiso para apoyar a 28 ONG dedicadas a los niños de la calle y otros para financiar proyectos destinados a problemas de la juventud. Conanimac (Confederación Nacional de Niños de México) abarca a cerca de 150 instituciones que operan casas hogar para unos 10 mil niños y adolescentes huérfanos, maltratados o abandonados en toda la república. Manejadas al principio con criterio asistencialista y caritativo, han ido incorporando capacitación en trabajo social y forman a las monjas o sacerdotes como “educadores de calle”. Tres instituciones se dedican a los ancianos sin recursos.

Los Centros para el Apoyo a la Comunidad (Cepac) surgieron de las necesidades agudizadas por los sismos, uno en cada vicaría de la arquidiócesis. La organización

de la gente para echar a andar proyectos que mejoren sus condiciones de vida fue el núcleo animador de esos centros que funcionan con diversos criterios, más o menos asistencialistas o más o menos autogestivos. Muchos de esos proyectos, impulsados en algún momento por FAC, aunque surgidos casi siempre con anterioridad, se manejan con autonomía.

El trabajo de FAC se limitó a la Arquidiócesis de México, pero Faprode apoyó también proyectos de desarrollo en pequeño en otras regiones. Además de obtener los fondos, en el país y en el extranjero, sirvió de interlocutor entre ONG, comunidades marginadas y órganos de la Iglesia, por un lado, y el gobierno por otro.

Buscando incidir con más eficiencia en la promoción y definición de políticas sociales, se creó recientemente la Fundación Demos, que pretende explorar nuevos caminos para el impulso y financiamiento del desarrollo social, organizando campañas de recaudación e impulsando una cultura de donación en favor de los necesitados. Sus metas se vinculan a las del Foro de Apoyo Mutuo.³¹

La sociedad civil sí funciona

Las Organizaciones No Gubernamentales son un fenómeno relativamente nuevo en México: aunque algunas tienen hasta 25 años de edad, muchas nacieron, crecieron y se desarrollaron, sobre todo, después del terremoto de 1985. Cuando el Estado fue insuficiente para encontrar respuesta a la montaña de necesidades que hacía aflorar la catástrofe, la sociedad civil empezó a avanzar.

Las ONG operan sin fines de lucro, con vasta gama de preocupaciones y se calculan entre 3 y 5 mil, aunque es difícil determinar cifras exactas. Muchas promueven derechos humanos y algunas se dedican a combatir la pobreza. Se estima que, de 1989 a 1993, alrededor de 450 ONG operaron con más de 160 millones de dólares, procedentes de fundaciones u organismos internacionales.³² Su importancia es más cualitativa que cuantitativa: están en la base de la sociedad civil, procurando construir un tejido social al margen de fines políticos.

En agosto de 1992 más de 107 organizaciones civiles, preocupadas por los efectos del proyecto económico sobre los pobres, crearon el Foro de Apoyo Mutuo. Algunas de esas organizaciones comprenden a muchas otras, de modo que el Foro viene a ser una red de redes. La Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC), que desaparecerá en su forma actual, fue una de las promotoras del Foro. Están en FAM la Fundación para la Protección a la Niñez, el Movimiento Ciudadano por la Democracia, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y numerosas agrupaciones indígenas, de barrios y colonias populares de abasto, de autogestión, cooperativas, de mejoramiento ambiental, de promoción de la nutrición y la salud.³³

El Foro se concibió como un espacio plural, abierto, donde se podrían conjugar los esfuerzos de muchas ONG, ampliando su capacidad de convocatoria y unificando criterios básicos. En mayo de 1993 el FAM presentó un documento de trabajo en la reunión sobre *La sociedad civil y el financiamiento para el desarrollo*, que congregó en París a ONG con fundaciones, organismos multilaterales y bancos. Ese documento exponía los resultados del modelo de desarrollo estabilizador, que condujo al “primer milagro”, y del modelo neoliberal que, en busca del “segundo milagro”, se tradujo en persistencia y agudización de la pobreza a partir de 1982. Planteaba, a la vez, la necesidad de reformular el papel de la sociedad civil, como contrapeso del Estado, y de los organismos civiles, como vigilantes acuciosos del ejercicio del poder, para presentar alternativas sustentables y viables. El FAM intentó contrarrestar la versión difundida por la propaganda oficial, que hacía de México un país del Primer Mundo y que empezaba a suscitar reticencias a la canalización de fondos hacia proyectos mexicanos.

La rápida y sorpresiva dinámica de la globalización exigiría que las ONG participaran en la formulación de las políticas e influyeran en las decisiones de los gobiernos. No se trataba de buscar el poder como partidos políticos sino de contar en la toma de decisiones. Había que recrear un código de valores ciudadanos para lograr la participación real y efectiva de las mayorías. De la apertura de espacios para la sociedad civil dependería el cambio real, profundo, de la sociedad mexicana.

Lo que el Foro llamaba *la construcción del poder civil* había tropezado con esfuerzos del gobierno por controlar a los grupos civiles a través de distintas y múltiples iniciativas, entre ellas Pronasol. Advertía el documento:

Las reformas económicas y el intenso esfuerzo publicitario del gobierno han logrado crear una imagen positiva en ciertos sectores de México y del extranjero, mientras el descontento de los más amplios contingentes de la sociedad no sólo se mantiene sino que se acrecienta.³⁴

Sin embargo, no se buscaría criticar gratuitamente los intentos del Estado, sino ubicarlos en su dimensión real, y entablar un diálogo que permitiera trascender la protesta y la denuncia y pasar a la discusión de propuestas alternativas. El Foro propuso la operación de seis fondos sociales mediante fideicomisos. El objetivo sería

[...] el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la sociedad mexicana, a través del apoyo a proyectos sociales de asistencia, promoción y desarrollo operados por distintas instituciones y por grupos organizados de la sociedad civil[...].

Cada uno de esos fondos contemplaría un ámbito específico de pobreza: 1) niños y jóvenes marginados; 2) ancianos necesitados; 3) rehabilitación de adictos,

minusválidos y enfermos mentales; 4) empleos autosuficientes; 5) vivienda popular e infraestructura de servicios, y 6) desarrollo familiar y comunitario en zonas urbanas y rurales marginadas.

Las acciones previstas cubrirían una amplísima gama, desde la promoción de microempresas familiares hasta programas educativos y terapéuticos. Se atendería a la población en pobreza extrema. Se abarcaría, como beneficiarios, a organizaciones ya existentes y a grupos nuevos, sin discriminación ideológica o política alguna. Se pretendía financiar los fondos con recursos de tres fuentes: de la sociedad civil, captados mediante colectas particulares y globales; del gobierno mexicano, y del extranjero, provenientes de fundaciones, de ONG, de bancos de desarrollo y organismos internacionales. El Estado habría de contribuir con una tercera parte, equivalente a la participación de la sociedad civil y a la de organismos internacionales. El costo administrativo de los proyectos no debería pasar del 5% del costo total. Los comités técnicos aprobarían, en cada fondo, los proyectos viables y garantizarían su evaluación y seguimiento.

Se buscaría pasar de una acción atomizada con poca trascendencia a una más organizada, con relevancia creciente en el apoyo de la sociedad civil a los más pobres, sin fines de lucro:

Es posible mejorar la eficiencia y credibilidad en el manejo de los recursos gubernamentales destinados a combatir la pobreza extrema, al canalizar parte de esos recursos escasos a través de organizaciones de la sociedad civil —con experiencia, colocación adecuada y credibilidad—, en vez de continuar con la política casi unilateral de formar organizaciones sociales “nuevas”, cuya mayoría es posible desaparezcan del escenario de los hechos una vez que el programa oficial de combate a la pobreza termine por hacerse una institución corporativa más del aparato estatal.

La propuesta del Foro de Apoyo Mutuo no excluía la permanencia del Programa Nacional de Solidaridad, siempre que

[...] logre una neutralidad partidista socialmente creíble en la utilización de parte importante de sus recursos; si se establece una relación madura de diálogo y cooperación con la sociedad civil organizada y si los recursos utilizados crecen en cantidad y calidad [...].³⁵

La coherencia de tales planteamientos reflejaba la madurez de una voluntad: la obstinada decisión de la sociedad civil de hacerse escuchar y de ser tomada en cuenta. Actualmente, el Foro se desempeña con una estructura orgánica, en torno a una asamblea general que se reúne, como plenaria, una vez al año. El consejo general está integrado por comités técnicos de los diversos subforos, que se agru-

pan según el ámbito de trabajo en las áreas que se pensó integrar, al principio, como fideicomisos. Los subforos realizan también asambleas generales. El Foro de Niños y Jóvenes, por ejemplo, comprende unas 130 organizaciones: la Fundación para la Protección a la Niñez, por sí sola, representa a 85.

Los pobres construyendo su política social

Al principiar septiembre de 1993 se convocó en Oaxaca a un Foro Nacional de la Sociedad Civil: *Los pobres construyendo su política social*, que fue inaugurado por el obispo de Oaxaca Bartolomé Carrasco. Ese foro se realizó unos días antes de la Conferencia de México sobre Desarrollo Social y Pobreza, convocada por el gobierno mexicano y el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se propuso el foro estructurar una *red de los más pobres* con ONG de los estados más marginados (Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Chiapas) para coordinar esfuerzos con grupos del Distrito Federal y de otras regiones del país. La meta, como la del Foro de Apoyo Mutuo que también participó, era sistematizar acciones para influir en la política dirigida a combatir la pobreza.

En dos reuniones preparatorias, en Oaxaca y en Hidalgo, se acordó una estrategia centrada en la autosuficiencia alimentaria y la producción diversificada, basada en la complementariedad más que en la competencia. Se planteó proponer “paquetes digeribles” al Banco Mundial, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a otras instancias internacionales, para obtener apoyo financiero. Se crearían grupos interdisciplinarios, de apoyo técnico, en el nivel nacional. Se propuso avanzar, además, en el intercambio de productos mercantiles y de técnicas y métodos de producción; aumentar la participación de indígenas y de mujeres y promover foros estatales e intercambiar información para estrechar lazos. Se envió una copia de los acuerdos a la Presidencia de la República, solicitando información sobre el programa contra la pobreza convenido con el Banco Mundial. Se solicitó participar en la conferencia gubernamental —donde ya estaban inscritos 400 delegados— y se les acreditó una presencia de 25 representantes. El gobierno solicitó, a su vez, enviar 10 observadores al Foro de la Sociedad Civil.

Participaron en el foro de los pobres 150 organizaciones de campesinos, de indígenas, cristianas, de colonos, de derechos humanos y de mujeres. Además del Foro de Apoyo Mutuo estuvieron el Equipo Pueblo, Servicios para el Desarrollo, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Copevi, Biblistas Populares, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro, Centro de Estudios Ecuménicos, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),

Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, Enlace, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Frente Democrático de Campesinos de Chihuahua, Convergencia de Organizaciones Campesinas de Chiapas, Frente por el Derecho a la Alimentación, Grupo de Estudios Ambientales, Red Nacional de Pescadores Ribereños, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Unión Campesina Democrática, Mujeres en Lucha por la Democracia, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y muchas más, incluyendo el Frente Cívico Potosino, el Frente Independiente de Pueblos Indios, el Frente Auténtico del Trabajo y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

El padre Miguel Concha señaló el poder de convocatoria, de crítica y de protesta de la sociedad civil en un artículo aparecido en *La Jornada* al iniciarse la “cumbre alternativa” que era el Foro de Oaxaca. El combate a la pobreza habría sido enarbolado como bandera por un Estado que prefería cambiar el calificativo de *benefactor* por el de *solidario*, en un intento de evitar *la posible irrupción violenta de la población* por el abatimiento de niveles de vida:

[...]en un mismo régimen se llevaron a cabo medidas de *modernización selectiva* —y por lo tanto discriminatoria— y *programas de atención a los efectos negativos del nuevo modelo económico*, en forma simultánea. Dos Méxicos, como dos son los términos de la pretendida síntesis entre neoliberalismo y solidarismo: liberalismo social.

Advertía Concha la “tentación neocorporativizante” de Pronasol: asistencia más o menos oportuna y, a la vez, control social. El bienestar social no debía ser concebido como una concesión o donación filantrópica del sistema, sino como *derecho humano inalienable y exigencia ética y social irrenunciable*. La mediatización, con fines políticos, de la responsabilidad social atentaría contra la autodeterminación y el derecho de los pobres a un desarrollo autogestivo. La tesis del padre Concha era que el Estado debía actuar como *responsable*, encargado de *garantizar* el combate a la pobreza, pero sin asumir un papel protagónico como sujeto del desarrollo social. Por eso definió a la “cumbre alternativa” como

[...]un espacio para que los pobres, la sociedad civil independiente, definan en forma propositiva la identidad de sus proyectos y su forma de vinculación con los órganos estatales. Tanto el *desarrollo sustentable* como el *desarrollo con democracia* se harán presentes desde las bases.³⁶

La presencia de la Iglesia se manifestó en la de numerosas ONG de filiación católica y en la de los obispos de Oaxaca y de Chiapas. El obispo Carrasco señaló la urgencia de reflexionar sobre las causas estructurales de la pobreza, la concentra-

ción creciente de riqueza y el agravamiento de la miseria que acabarían por destruir a la sociedad y advirtió que las comunidades vivían *de milagro* y que *no hay que obligar a Dios a hacer tantos milagros*. Valoró el obispo de Oaxaca la resistencia multisecular de la cultura indígena que, actualizada, podría ser *una alternativa viable* para un auténtico desarrollo social. El obispo Samuel Ruiz se refirió a la aparición de los pobres en el escenario como una efervescencia en el camino hacia la democracia. Esa emergencia de los pobres podría manifestarse como “un torbellino destructivo” o como una “emergencia constructiva” tal como se advertía en ese Foro. Samuel Ruiz se pronunció por *un modelo nuevo de sociedad*.³⁷

Dos investigadores de la UNAM, José Luis Calva y Adolfo Aguilar Zinser, coincidieron con los puntos de vista de Concha y del obispo de Chiapas. José Luis Calva instó a las ONG a sumarse al proyecto de un *nuevo modelo de desarrollo* en el que ya trabajaban cerca de 300 economistas y estudiosos de las ciencias sociales de toda Latinoamérica. México no sería viable sin antes enfrentar, *realmente*, el problema de la pobreza, no como “anomalía”, que sería el criterio del proyecto oficial, sino como *condición estructural* del 50% de la población. El Estado “centralista, jerarquizado, presidencialista, autoritario” surgido de la revolución, se habría propuesto combatir la marginación para quedarse a medio camino. Aguilar Zinser distinguió entre dos proyectos para el México de hoy: el que tendería con una mano a concentrar más la riqueza y con la otra a soltar un poco de dinero para aliviar la pobreza; y el de la mayoría del país, consciente de las grandes necesidades básicas no resueltas y dispuesto a encontrar opciones en formas de organización generadas en la propia cultura.³⁸

Múltiples intervenciones de ONG de filiación diversa coincidieron en señalar que el modelo neoliberal ha profundizado y ampliado la pobreza. Al evaluar acciones de Pronasol se formularon varias críticas: recursos insuficientes que no pasaban del 1% del PIB; clientelismo político; normatividad vertical; intención de atomizar a las organizaciones no gubernamentales existentes para sustituirlas con Comités de Solidaridad; manejo del programa para “desmantelar focos de descontento social”; tramitación complicada y burocrática; manejo discrecional de recursos por gobiernos municipales carentes de un programa integral de desarrollo; desconocimiento de la organización comunitaria, tradicional de los pueblos, como sujeto jurídico y de crédito; aplicación de criterios “modernos” de viabilidad en el apoyo a proyectos productivos, sin entender las formas de viejo arraigo. En general, escasez de recursos para proyectos productivos; exigencia de un 65% de capital campesino para integrar Empresas en Solidaridad, en las que el Estado sólo aportaba un 35%, cuando los campesinos carecen de dinero en efectivo, y ejemplos numerosos de obras no realizadas o inconclusas, por contratismo y corrupción.³⁹

Hubo consenso, al apreciar un abismo entre los efectos del proyecto económico de una élite y la política social que había pretendido mitigarlos. Mariclaire Acosta lo apuntó al abrirse la reunión:

Las políticas económicas implantadas en los últimos diez años —apenas mitigadas por otras, de compensación social, destinadas más bien a paliar los efectos de las primeras, y de paso asegurar una nueva forma de control político, basado en la necesidad extrema de sus destinatarios— han producido como saldo la franca represión de nuestros derechos humanos: económicos, sociales, políticos, civiles, culturales y de autodeterminación.⁴⁰

Se propuso la integración de fideicomisos con participación conjunta de las ONG, del Estado mexicano y de organismos internacionales, incluyendo al PNUD.

Como lo reconocía un documento de circulación interna del Foro de Apoyo Mutuo,⁴¹ reconsiderar el papel que pueden llegar a desempeñar los organismos civiles en el desarrollo de los marginados significaría reconocer la responsabilidad de todos en el logro de un orden más humano y más justo. Y significaría entender que las vías para alcanzarlo pueden ser múltiples. Las agencias financieras internacionales, que antes sólo dialogaban con los gobiernos, ahora también lo hacen con las ONG, que no tienen la vocación del poder ni la obsesión del mercado. Reconocer su validez es aceptar que el Estado es uno de los actores sociales pero no el único. Con abundancia de buenas razones, las ONG aspirarían a convertirse en interlocutores entre la sociedad civil y los que toman las decisiones. Sus argumentos parten de un presupuesto: para que haya gobernabilidad tiene que participar la sociedad civil.

Cualquier programa de política social tiene que tomarla en cuenta. Si el Estado quiere profundizar la política social tiene que considerar en serio la aportación de recursos a esos esfuerzos. No puede seguir pensando que puede actuar solo. Hay un capital social que se está desperdiciando y son numerosas las ONG que han desaparecido por inanición. Mucho de lo que se invierte en gasto social se diluye en el mecanismo burocrático y no llega a donde debe llegar ni como debe llegar. Si las ONG ya no se sienten “culpables” por aceptar recursos del Estado, debe darse la reciprocidad: el Estado debe desechar los temores a la auténtica organización de la gente y dedicar parte de su gasto social a coparticipar en tales iniciativas. Un tejido social saludable y apoyado por un Estado democrático es la máxima garantía de estabilidad.

Abrir agujerotes y parchar agujeritos

Por encima de plataformas y de enfoques hay un consenso: el Estado tiene la responsabilidad de diseñar una amplia política social y no puede renunciarla. Esa responsabilidad social fue aceptada explícitamente por el régimen cuando quiso desprenderse del calificativo de neoliberal para abrazar el *liberalismo social*. El

Programa Nacional de Solidaridad pretendió encarnarla. En los últimos meses de 1993 ya podía intentarse un balance de lo que ese programa se había propuesto, de las críticas formuladas y de algunas evaluaciones concretas que permitían aventurar un juicio sobre sus logros y sus insuficiencias.

La sociedad civil había empezado a buscar cauces para ayudarse a sí misma. Pero la dimensión de la pobreza desbordaba con creces el alcance de las acciones emprendidas. Parecía evidente que los más pobres no siempre estaban en condiciones de movilizarse por sí solos: por eso, muchas iniciativas habían surgido de la Iglesia o de fundaciones filantrópicas. Las que habían germinado en comunidades o barrios pobres y habían logrado prosperar partieron, por lo general, de un piso mínimo que rebasaba ligeramente a la pobreza extrema. El Estado podía y debía apoyar a la sociedad civil en sus iniciativas: era un deber ineludible de su función. Pero esa función no se agotaba ahí.

Hacia falta una política social integrada y coherente, dirigida a las causas estructurales de la pobreza, para redistribuir los beneficios del desarrollo y mejorar el ingreso de los pobres. Había un gran atasco y lo generaba la dificultad de conciliar un modelo económico propicio a acentuar la concentración de beneficios en sectores muy reducidos con el propósito de difundir esos beneficios hacia la mayoría. Las medidas macroeconómicas habían acentuado, hasta el momento, la concentración de la riqueza. Se buscó, entonces, *compensar selectivamente* los estragos de tales medidas, pero se hizo con un criterio residual: se ponían pequeños parches para tapar agujeritos cuando la política macro estaba abriendo agujerotes.

Compensación “sin precedentes”

La Comisión del Programa Nacional de Solidaridad se creó el 6 de diciembre de 1988 para “hacer realidad el compromiso con el bienestar del pueblo”. Contemplaba a “los sectores sociales más desprotegidos” que, según el Acuerdo, eran los grupos indígenas, los habitantes de zonas áridas en el campo y los colonos de zonas urbanas. Se pondrían en marcha programas de “abatimiento a la pobreza”, contando con “el esfuerzo creativo de las comunidades y los grupos sociales”. Se trazarían estrategias de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y proyectos productivos para “los grupos más vulnerables”.

Encabezada por el presidente, la Comisión reunía a diez secretarios de Estado, al regente del Distrito Federal, al director del INI y al de Conasupo y a algunos otros funcionarios. Lo que empezó como un programa vinculado directamente a la Presidencia de la República culminó, en abril de 1992, con la transformación de una de las diez Secretarías, la de Desarrollo Urbano y Ecología, en Secretaría de Desarrollo Social, que incorporó al Programa en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Se suponía que los estados y municipios serían los encargados de recoger la demanda social y proponer acciones a los coordinadores del Programa, que decidirían las políticas y estrategias generales y las acciones que recibirían apoyo. La Secretaría formularía el presupuesto anual y los estados y municipios concertarían sus programas de bienestar con Solidaridad, canalizándolos a través de los Coplades y las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Si eran aprobados, se asignarían los recursos por tres vías: 1) a través de instituciones públicas encargadas de ejecutar proyectos como carreteras, sistemas de agua, alcantarillado o electrificación; 2) directamente a los ayuntamientos a través de Fondos Municipales de Solidaridad; 3) mediante Comités de Solidaridad, en programas como Niños en Solidaridad, Escuela Digna y los que surgieran de recuperación de Fondos de Solidaridad para la Producción.

Se consideraban oficialmente tres fuentes de financiamiento: 1) aportaciones directas de individuos y comunidades (en trabajo, materiales, infraestructura o recuperaciones); 2) inversión federal, y 3) presupuesto de estados y municipios. El Programa atendería tres vertientes: *desarrollo regional*, que abarcaría obras de infraestructura con impacto regional y programas para regiones específicas; *bienestar social*, para proporcionar infraestructura de servicios básicos, vivienda, educación, salud y alimentación, y *producción*, que brindaría apoyo en actividades agropecuarias, piscícolas, forestales, etc.

Aunque el acento en cada vertiente varió cada año, se dio prioridad a la construcción y mantenimiento de infraestructura y la introducción de servicios básicos. Se “etiquetó” dentro del Programa la rehabilitación de escuelas; la construcción, rehabilitación y equipamiento de hospitales y centros de salud; sistemas de agua potable y alcantarillado urbano y rural; electrificación urbana y rural; construcción y reconstrucción de caminos rurales y carreteras y algunos programas de urbanización.

Los programas de Desarrollo Regional se instrumentaron en distintas etapas, abarcando un número variable de municipios, en zonas ubicadas entre el Istmo de Tehuantepec y Coahuila. Se aplicaron en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Yucatán, en Puebla, en Tabasco, en La Laguna (Durango), en el Estado de México, en la Huasteca, en Michoacán, algunos en zonas indígenas.

Un programa de Fondos para la Producción brindó algún apoyo, en 1992, a cerca de 700 mil campesinos y otro, de Fondos Municipales para la Producción, se canalizó a través de los ayuntamientos. Mujeres en Solidaridad y Empresas en Solidaridad entraron en el mismo rubro. Un pequeño programa de abasto y comercialización se acreditó instalación de lecherías, cocinas populares y tiendas. El programa Niños en Solidaridad aportó pequeñas becas para subsidiar directamente el ingreso de las familias. Hasta fines de 1992 se habían regularizado un millón 673 mil lotes urbanos en el subprograma de Regularización y se había apoyado a cerca de 200 mil agricultores para rescatar su cartera vencida.⁴²

Los recursos destinados al Programa fueron subiendo: 1.3 billones en 1989; 2.6 billones en 1990; 5.1 billones en 1991; 6.8 billones en 1992, y 2 676 millones de nuevos pesos hasta el 1º de septiembre de 1993.⁴³ Sin embargo, la proporción que representaron esos recursos en el gasto programable del sector público fue de 1.3% en 1988; 1.5% en 1989; 2.4% en 1990; 2.9% en 1991, y 3.9% en 1992 y 1993. La proporción en el PIB no llegó al 1%.⁴⁴

Por cada peso destinado a Solidaridad, otros 6.6 se canalizaron al pago de intereses de la deuda externa. La proporción en 1991, según Denisse Dresser, fue de la décima parte: 1 700 millones de dólares para Pronasol y 20 mil millones para la deuda. El gasto social incluyó en 1993, aparte de lo presupuestado para Solidaridad, un 24% y un 22.4% del total de gasto programable, dedicados a salud y educación (incluyendo salarios) y un 1.8% para desarrollo urbano. Sumadas esas cifras con las de Solidaridad, darían un 53.6% que, en comparación con el 32% del año de 1988, significarían un aumento de 20% para el gasto social.⁴⁵

En el informe sobre *La solidaridad en el desarrollo nacional*, publicado en 1993, se afirmó:

[...]no hay precedentes en la historia reciente del país que se comparen con este esfuerzo por elevar el nivel de vida de la población[...].

Y el presidente declaró, a su vez, que Solidaridad

[...]ha hecho en 30 meses lo que a otras naciones ha tomado el curso de su historia[...].⁴⁶

Ambas apreciaciones sonaban en exceso entusiastas y acaso sólo habrían podido justificarse pensando en el recorte drástico que sufrió el gasto social de 1982 a 1988. De acuerdo con un cálculo de Mario Zepeda, los recursos del ramo XXVI del Presupuesto de la Federación de 1991 (Solidaridad y Desarrollo Regional) eran un poco menores a los recursos reales ejercidos de 1980 a 1982 en el mismo ramo, que entonces se llamaba sólo Desarrollo Regional y comprendía lo que se canalizaba a través de Coplamar.⁴⁷ Habría que advertir que en el régimen de Salinas todo lo que pudo considerarse como dirigido a “grupos vulnerables” en educación, salud, comunicaciones y obras públicas se transfirió a Solidaridad.

En el Quinto Informe de Gobierno, el presidente Salinas anunció que en 1993 se estaba invirtiendo un 10% del PIB en gasto social. Ese porcentaje abarcaba el 1% de Solidaridad y un 9% que incluía muchísimos servicios prestados a sectores de población por encima de cualquier línea de pobreza. La razón: el gasto social comprende todo lo dedicado a educación y salud, incluyendo educación superior y cultura; hospitales que sólo atienden a derechohabientes; instituciones para la vivienda que sólo han beneficiado selectivamente a sectores obreros y medios, etcétera.

Conviene recordar la advertencia del PNUD (capítulo I): las cifras de gasto social sólo se traducen en más bienestar para los marginados cuando se destina un alto porcentaje de ese gasto a asignaciones prioritarias. Una política social a fondo tendría que reasignar los recursos tomando en cuenta que unos están mucho más necesitados que otros y estableciendo prioridades. Los servicios de educación y salud tienen que ser de alta calidad y tienen que llegar a los más pobres. Sólo una reforma a fondo de la educación y la salud estaría poniendo bases sólidas para un auténtico desarrollo humano.

Escasa participación, mucha publicidad

En agosto de 1993 el titular de Sedesol, Luis Donaldo Colosio, precisó en Cozumel que existían en el país, en ese momento, más de 100 mil Comités de Solidaridad. Fueron definidos como

[...] la célula básica de integración a partir de la cual los miembros de una comunidad se organizan para dar una respuesta ágil y una solución inmediata a los problemas que les afectan directamente[...].⁴⁸

Realizar obra pública había sido, a lo largo de cuatro años, la meta primordial de los comités. Se pavimentaron calles y caminos, se electrificaron colonias, se introdujo agua potable, se rehabilitaron edificios de escuelas, hospitales o centros de salud. A partir de 1992 se buscó apoyar a la producción, pero se hizo con recursos escasos y dispersos, que sólo sirvieron para cubrir necesidades inmediatas de consumo, sin lograr recapitalizar al campo en las zonas donde llegaron los apoyos.

Algunos comités se formaron sobre estructuras ya existentes o por “desdoblamiento” de alguna organización previa; otros se fueron armando sobre la marcha, sin antecedentes. Muchos nacieron montados sobre la estructura previa del PRI y por convocatoria de los presidentes municipales; algunos se generaron en otras estructuras políticas. Los más permanentes fueron los de alimentación y abasto, vinculados al DIF y a Conasupo y los de Escuela Digna. En los propósitos entraban el respeto a la voluntad popular y a las formas de organización; la participación plena y la corresponsabilidad de la transparencia en el uso de recursos. Sin embargo, se ha argumentado que muchos comités sólo existieron en los papeles que servían para tramitar recursos: improvisar un comité habría sido el expediente más adecuado para obtener esos recursos.

El balance de Sedesol, en la Cuarta Semana de Solidaridad, atribuyó fallas en el funcionamiento de los comités a varios factores: inercias burocráticas; “resistencia” de la gente a asumir responsabilidades; exceso de trámites que no facilitaban la

fluidez de acceso a los recursos; falta de capacitación y asesoría técnica en el proceso de organización, planeación y ejecución; carencia de conocimientos administrativos y contables que dificultaban el seguimiento en el manejo de los recursos.

Se reconoció que se había logrado “una participación ciudadana limitada”, transitoria y de corto plazo; habían durado los comités lo que había durado la obra, para desaparecer tan pronto como ésta se terminaba. Se habló, entonces, de consolidar la organización y de darle permanencia para propiciar “un desarrollo sostenido” en las comunidades más marginadas; se habló de buscar “nuevos consensos” y de crear “verdaderos Comités de Solidaridad Comunitarios”.⁴⁹

Si la participación ciudadana, según reconocimiento de los responsables, fue limitada, la propaganda se encargó de magnificarla. La publicidad suplió, en la opinión pública, lo que no se consolidó en movilización real de la gente. El 78% de la población no conocía el programa cuando el presidente pronunció su segundo Informe, es decir, a fines de 1990. Se inició entonces una campaña de difusión que no ha cesado. Más hubiera valido, dicen los críticos, canalizar hacia los pobres lo que se gastó en propaganda.⁵⁰

Un fénix que renacía de sus cenizas: el Estado benefactor

El 4 de marzo de 1992 el presidente Salinas anunció “la reforma de la Revolución”. El PRI celebraba sus 63 años y se pretendía articular ideológicamente una propuesta original: el *liberalismo social*, como síntesis entre la libertad y la justicia y, volviendo al juego de palabras, entre la Reforma y la Revolución.

En ese discurso se rechazó, por igual, el “estatismo absorbente” y el “neoliberalismo posesivo” y se intentó vincular la propuesta “refundadora” con la historia de México más que con los requerimientos de la globalización. Se formularon diez puntos, equidistantes entre estatismo y neoliberalismo, para apuntalar el andamiaje ideológico: giraban en torno a la soberanía, el Estado solidario, la justicia social, las libertades, la democracia, la educación, el campo, los indígenas, las necesidades básicas y el nacionalismo.

Se rechazó la concepción de un Estado ausente frente a los excesos del mercado e irresponsable frente a rezagos sociales. Se hizo el elogio de un Estado promotor y, sobre todo, solidario que se dispondría a pagar las deudas sociales del Estado empresario. Evitar que los pocos abusaran de los muchos sería su función: *Solidaridad: expresión actual de nuestro liberalismo social, cumple en los hechos sin romper la disciplina fiscal [...]*.⁵¹

El liberalismo social no daría crédito a la teoría del goteo y se propondría la justicia como “un objetivo para el que hay que trabajar deliberadamente”. Lo haría sin

paternalismo ni populismo, en vez de financiarlo con inflación y con excesos. No bastaban las libertades: sin bases materiales justas para crear oportunidades, tales libertades serían inoperantes. La democracia no se agotaba en lo electoral, aunque debiera empezar allí. La educación de calidad sería esencial para el desarrollo. El campesino debería hacer ejercicio de su libertad y no de su necesidad. La lucha contra la desigualdad tendría que hacerse respetando las tradiciones pluriculturales. El Estado y la sociedad serían corresponsables para resolver las carencias en necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y calidad de vida. Se profesaba una ideología nacionalista, a la vez arraigada en la historia y abierta y activa frente al exterior. Se habló, por último, de un partido que “va a permanecer cambiando” y que aspiraría a ser, a un tiempo, partido de organizaciones y partido de ciudadanos.

Se ofrecía, pues, un nuevo decálogo para rejuvenecer una retórica agotada. Con otros argumentos, se relegitimaba el papel social del Estado y se consagraba a Solidaridad como el brazo relegitimador. El verdadero Estado benefactor resurgía, como el fénix, de las cenizas del caduco Estado benefactor. Una habilidosa alquimia, que matrimoniaba ideas heterogéneas, habría catalizado el milagro.

El sustento teórico del Programa Nacional de Solidaridad ha sido ampliamente expuesto en documentos y discursos y aparece sintetizado con coherencia en la más reciente publicación de su Consejo Consultivo, editada al iniciarse el año de 1994. Estrategias y programas, explicados y descritos, se enlistan con amplio sustento en cifras y gráficas: se trata, pues, de una fuente de referencia obligada para cualquier análisis de propósitos y logros que se quiera emprender en lo sucesivo.

Es inobjetable el punto de partida: la “creencia” en la abundancia ilimitada de recursos nacionales puso en crisis a las finanzas públicas. No hay que olvidar, sin embargo, que el gasto abultado y el burocratismo enmarañado que precipitaron la crisis, en la década que precedió a 1982, fueron intentos fallidos por revertir la grave desigualdad propiciada por estrategias excluyentes del crecimiento industrializador posrevolucionario. Detrás de cada intento fallido estuvo siempre el desconocimiento del otro México. Los teóricos de Solidaridad sostienen que ese programa, consciente del peligro, habría sabido evitarlo, recogiendo y sintetizando “la visión de la tradición y el cambio”:

El método de trabajo que promueve Solidaridad se originó en la convicción de que el proceso de integración y modernización del país debe estar sustentado en un consenso nacional respecto a que lo moderno es la aceptación de la participación plural, del reconocimiento de la diversidad social, como un potencial de enriquecimiento del desarrollo integral del país.⁵²

En fundamentos teóricos de “liberalismo social” estaría la decisión de conciliar el gasto social con las políticas de ajuste “que en el neoliberalismo se conciben co-

mo terminantemente antagónicas”. Orientar directamente el gasto a las necesidades más apremiantes, eludiendo centralismo, burocratización y “apropiación clientelar”, sería el segundo objetivo. Todo ello para

transitar hacia un modelo de desarrollo que contemple una política de desarrollo social integrado, que sea prestigiada, eficiente y de una rentabilidad socioeconómica que pueda orientar al conjunto de la nación hacia una mayor justicia social.⁵³

Solidaridad se habría propuesto eludir el gran vicio de tantos buenos propósitos anteriores en el tiempo y evitar, por ejemplo, la asignación de recursos “a partir de decisiones administrativas tomadas por burocracias gubernamentales” y el “creciente desencuentro entre la demanda social y los recursos públicos”. No haberlo logrado fue, por cierto, una de las críticas que se dirigieron al Programa. Otra fue no haber tocado los resortes de una auténtica participación de la gente. La dificultad de operar con eficacia un programa de tal naturaleza en un contexto escasamente democrático explicaría, sin duda, muchos de sus fracasos.

Retejer la tela de Penélope

La afortunada metáfora de la tela de Penélope, sugerida por Denisse Dresser, resumió una de las críticas más reiteradas que se le hicieron a Solidaridad. Esa tela no acabaría de tejerse nunca, porque lo que se hilaba de día se destejía por la noche. Algunas acciones sociales dispersas no alcanzaban a remediar los menoscabos generados, en todas partes, por un proyecto económico que no mejoraba el acceso a oportunidades y sesgaba más la distribución del ingreso. Armando Bartra señaló la insuficiencia de un “programa asistencialista” para socorrer con demasiada parsimonia a los que empobrecía con gran eficacia la política económica:

[...]la política social del régimen no es sustantiva sino accesorio: la compensación políticamente indispensable de una conducción económica de alto costo social. *La mano solidaria del régimen da consuelo a las víctimas de la mano neoliberal* [...].⁵⁴

En el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California, en San Diego, se realizó en febrero de 1991 un seminario para una primera exploración académica de Pronasol. La ponencia de Julio Moguel formuló cinco objeciones y aportó datos para demostrar que la extrema pobreza no se había reducido, fundándose sobre todo en el informe de API Consultores. Crecía la desnutrición y preocupaba el descenso de un 20% adicional en el poder adquisitivo del salario, entre 1989 y 1990. Se había cancelado la vía campesina de desarrollo, con las reformas de la

Ley Agraria y la ausencia de soluciones alternativas. Era muy dudosa la supuesta aparición de una “nueva relación Estado-pueblo” y tal parecería que sólo se buscaba ir sustituyendo a la antigua política corporativa con una nueva política de masas igualmente manipuladora. La discrecionalidad en el manejo de los recursos no redundaría en el fortalecimiento de los municipios, puesto que esos recursos *no se integraban estructuralmente* en los esquemas de planificación ni en los presupuestos de los ayuntamientos. La “inversión productiva”, por escasa, se diluía y desaparecía en el consumo de las familias, cada vez más empobrecidas.

La crítica de Moguel confrontaba al Pronasol con la distancia entre las palabras y los hechos y sugería favorecer una verdadera autonomía de la gente y un desarrollo sustentable. No importaba tanto la cantidad de recursos como las prioridades para asignarlos. Habría que apoyar la productividad de los campesinos y volver a la idea de autosuficiencia alimentaria; revitalizar de verdad el papel de los municipios y el de los estados y no competir con las organizaciones independientes sino colaborar con ellas. Sería indispensable dirigir los recursos a los más pobres en vez de dispersarlos discrecionalmente. El apoyo a la producción tendría que hacerse contemplando toda la cadena productiva: inversiones y subsidios deberían ser *permanentes y sostenidos*.⁵⁵

La hipótesis de Denisse Dresser (ITAM y Princeton) giró en torno a los dilemas de la gobernabilidad.⁵⁶ Pronasol sería la fórmula para construir un consenso político que permitiera profundizar las reformas económicas.

En la primera etapa de la modernización, las alianzas corporativas quedaron intactas. Se trataría, en la segunda etapa, de atraer directamente a los necesitados de servicios, al margen de su pertenencia o no a los sectores campesino y obrero, debilitados por el proyecto modernizador.

Si a mediano plazo no habría mejores ingresos ni más ocupación para las mayorías resultaba indispensable ofrecerles, por lo menos, algunos paliativos. Pronasol habría sido concebido para profundizar en el proyecto económico sin el riesgo de explosiones sociales. Al reestructurar las bases de apoyo, estaría propiciando la supervivencia del sistema. La crisis dismanteló a las fuerzas corporativas y propició la economía informal y las movilizaciones urbano-populares. Mediante “recursos selectivos” y “pagos compensatorios”, se pretendería neutralizar turbulencias latentes. Para que funcionara el “ala eficientista” del Estado se habría dispuesto un “ala redistributiva”: matrimonio de conveniencia de tecnócratas con reformadores sociales. Por eso se reclutó el personal del Programa juntando a muchos que habían trabajado en instituciones sociales del Estado con militantes de ciertos grupos de izquierda.

Entre las metas inmediatas, Dresser detectó la desactivación de la oposición de izquierda. ¿Acaso los comités fueron diseñados como una organización alternativa, paralela por lo pronto a la del PRI, pero con más dinamismo que los seccionales? ¿Se pensó en hacer un almáxico de líderes naturales capaces de ir sustituyendo,

eventualmente, a gastados dirigentes de los sectores del partido oficial? En todo caso, el propósito no se habría cumplido en el sexenio. De momento, no se dio la renovada “disputa por la nación” entre el PRI y Pronasol que pronosticaba la analista. ¿Se habría aplazado, para la siguiente etapa, el desplazamiento de los estratos tradicionales del partido por una organización “neopopulista”?

La argumentación de Dresser se prolongó en *Neo-populist Solutions to Neoliberal Problems*. La objeción central fue que Pronasol se conducía “directamente desde el bolsillo presidencial” como “fondo personal para las cruzadas políticas”. Fortalecer la imagen presidencial era un objetivo acaso tan ostensible como el de recabar votos para el partido y más exitoso que el de intentar desplazarlo. El alcance del programa *minimalista* no pasaría de crear un sostén social bastante precario, especialmente en infraestructura, sin tocar las raíces de la pobreza.

Restarle fuerza a movimientos germinados en la sociedad civil y sentar las bases de un nuevo clientelismo político habrían sido parte de sus propósitos. Dresser lo ilustraba con el desempeño exitoso del Programa en el caso del Comité de Defensa Popular de Durango, que se fue apartando del PRD hasta llegar a constituir el llamado Partido Pronasol (Partido del Trabajo) con otros grupos de la “izquierda social”. El Plan Michoacán y el Plan Nueva Laguna habrían servido para recuperar votos perdidos en el 88, a cambio de fondos “solidarios”. Algo semejante habría ocurrido en Morelos y en el Estado de México, donde el PRI perdió en aquellas elecciones 80 de 121 municipios y donde después se “vendieron” los logros del Programa, como la electrificación de Chalco, en la vitrina de ofertas de las elecciones de 1991.

Dentro de esa hipótesis, Solidaridad serviría acaso para evitar el declive de un partido que, al desmantelarse el repertorio de beneficios que antes brindaban los sectores, ya no tenía mucho que ofrecer. Se había calculado que la captación de líderes populares permitiría sobreponer una estructura territorial sobre la vieja estructura sectorial, pero no se había logrado en el corto plazo. La manipulación de “dones” habría funcionado, en cambio, gracias a una mancuerna entre programa y partido y a la exclusión de barrios o regiones afiliados a otros partidos: no se distribuyeron vales para tortillas en colonias controladas por la Asamblea de Barrios; no circularon recursos en el municipio de San Luis Potosí, ganado por el Frente Cívico, etcétera.

Solidaridad exhibiría “un estilo clientelista para adjudicar recompensas o castigos”. Sus coordinadores tendrían la fuerza política que antes ejercieron en cada Estado los delegados de SPP, gracias al poder discrecional de asignar recursos. Se sumaban ejemplos de “saturación de los terrenos institucionales del país por los representantes de Pronasol”, cuya influencia habría desplazado a gobernadores y, por supuesto, a presidentes municipales. Con el pretexto de “saltarse a la burocracia” se “modernizaba” el caciquismo.

Aparentar una acrecentada justicia social sería, en suma, su función legitimadora:

Pronasol indudablemente alivia algo del daño hecho por la depresión económica pero no atiende a las causas estructurales de la pobreza. Un ataque frontal a la pobreza traería consigo políticas macroeconómicas enfocadas a la creación de empleos y la elevación del ingreso[...]. El gasto social a través de Pronasol es loable, pero, por sí solo, Pronasol no es capaz de neutralizar los efectos de un programa de reestructuración que contribuye a sesgar cada vez más la distribución del ingreso en el país.⁵⁷

¿Aritmética solidaria?

Otro enfoque crítico sobre Pronasol, sus motivaciones y logros, se debió a Juan Molinar Horcasitas (Colmex) y Jeffrey A. Weldon (Universidad de California, San Diego). Posterior al de Dresser, coincidía en algunos puntos y difería en otros. Se procuraba demostrar que el Programa, más allá de sus metas de alivio a la pobreza, estaría guiado, también, por “consideraciones políticas y electorales”⁵⁸ y que la asignación de recursos “se entiende mejor con criterios electorales que si se atiende a índices de pobreza”.

Si el programa hubiera sido apolítico, sólo habrían contado las variables de pobreza y el monto de presupuesto de estados y municipios. ¿Fueron los recursos a los estados más pobres, con más bajos índices educativos, más población indígena y más población rural? ¿Se dirigieron a los que contaban con menor presupuesto? Los coeficientes decían, más bien, que fluyeron menos recursos a estados donde la mayoría gana menos de un salario mínimo y fluyeron más hacia estados con más recursos propios.

Los analistas detectaron que se habían enviado más recursos a estados donde ganó el PRI en 1988. Pero sólo cuando no había una elección para gobernador programada en 1991. Es decir, se habría premiado a los que votaron por el PRI y se habría mostrado menos generosidad hacia los que votaron PRD. Con algunas excepciones: los fondos fluyeron, independientemente de los resultados del 88, cuando el calendario electoral marcó elección para gobernador en 1991. La razón habría sido, lógicamente, recuperar votos perdidos. Sin embargo, parecería que los recursos se dirigieron más a simpatizantes del PRI que a los de la oposición, aun en aquellos estados donde ganó la oposición en 1988.

La afluencia de recursos no se comportó igual con las dos oposiciones: fluyeron muy poco hacia estados que tuvieron alta votación panista en 1988 y todavía menos si había elecciones para gobernador en 1991. Los analistas discurrieron que los votos perredistas se habrían considerado “recuperables”. Los panistas, en cambio, consistentes durante años en su oposición, serían menos susceptibles de ser atraídos. Por eso se les habrían dedicado menos recursos. En los hechos, donde llegó menos apoyo de Pronasol subieron votos para el PAN en 1991.

La conclusión sería que Pronasol no fue un programa apolítico. Cabría preguntarse entonces si fue eficaz como instrumento electoral, por lo menos en las elecciones de 1991. Al parecer, en efecto, los candidatos del PRI para gobernadores recibieron más votos donde hubo previamente más inversiones de Solidaridad. Los esfuerzos de recuperación de disidentes habrían sido exitosos:

En la mente de los que toman las decisiones pesan, pues, consideraciones electorales [...]. En general, los planificadores decidieron gastar más donde hubo, a la vez, elecciones federales y locales y decidieron gastar más donde Cárdenas se mostró fuerte en 1988 y menos en los reductos panistas [...]. Existen evidencias de que estas decisiones políticas rindieron frutos porque *al menos una parte de* la recuperación del PRI en 1991 puede explicarse por esos esquemas que se han detectado en los gastos de Pronasol.⁵⁹

Con un criterio pragmático, los investigadores extraían su moraleja: Pronasol habría sido “un signo positivo para el cambio político” al revelar que “cuando la gente vota, el gobierno escucha”. Tanto la imagen presidencial como los destinatarios de los recursos, en definitiva, habrían salido ganando.

Los más pobres, otra vez fuera

Para medir el impacto socioeconómico del Programa Nacional de Solidaridad, El Colegio de México diseñó una metodología que se aplicó, en evaluación piloto, en el estado de Zacatecas. La investigación abarcó los años de 1990 y 1991 y se propuso averiguar si se había combatido la pobreza extrema y si se había estimulado la participación de los más pobres.

La metodología incluyó encuestas, acopio de información estadística y recorridos de campo y se determinó el impacto del programa en el bienestar de las nueve regiones. Para establecer el grado de participación social, se encuestó a presidentes de comités de Solidaridad y a los grupos beneficiados y se entrevistó a responsables operativos y presidentes municipales. Se buscó evaluar el acierto en la orientación del gasto por regiones, grupos y carencias concretas y los rasgos de la participación.

Zacatecas es un estado agrícola, con un 45% de producción de maíz y frijol y el resto de chile seco, papa, avena y alfalfa. Un 91% son cultivos en tierras de temporal. La gente sobrevive, aunque los ingresos sean muy escasos: es verdad que una gran parte emigra a otros estados y a los Estados Unidos. Podría considerarse, por todo ello, un estado prototípico para evaluar el Programa. Aunque por su tamaño no aporta el más alto volumen de pobreza al total nacional (el 3.3%, en comparación con el 11% de Oaxaca y el 10.1% de Chiapas), seis de sus

nueve regiones son extremadamente pobres, dos son moderadamente pobres y sólo una, la que rodea a la capital, tiene un índice de pobreza inferior a la media estatal. Zacatecas recibió una proporción de recursos casi idéntica a su contribución a la pobreza nacional: el 3.6% del total invertido por Solidaridad en el país, y eso significó el 20% de todo el presupuesto ejercido en el estado. En 1990 los recursos fueron más hacia los apoyos productivos y en 1991 a fondos municipales y creación de infraestructura.

Los programas de crédito a la palabra y de becas a los niños redujeron efectivamente la pobreza en un 8%. Es difícil determinar si el aumento que se dio en la producción fue sólo porque llovió más o influyó en algo la inyección de recursos, o si éstos mejoraron simplemente el consumo familiar. Al no garantizar rendimientos estables, el efecto fue, en cualquier caso, temporal. Los programas de urbanización, electrificación y vivienda aumentaron potencialmente el valor de terrenos y casas.

En dos años se redujo en 6.4% la carencia de agua potable; en 3.9% la de drenaje y en 4% la de electricidad. Pero no se hizo equitativamente, sino que se concentraron los beneficios en la capital: allí se cubrieron totalmente las carencias de agua. Y en cuanto al drenaje y la electrificación, no los recibieron las regiones donde eran mayores las carencias. ¿Quizá porque hay más capacidad de demanda y de gestión en las ciudades? Se mejoró, además, el 42% de la infraestructura de educación y se aumentó un 5.8% la cobertura de salud.

El promedio estatal de participación colectiva fue de 6.97% y aportó el 12.9% del costo total de las obras. Un 46% de los beneficiarios reconoció el liderazgo de los presidentes de comités y el índice de satisfacción por las obras fue de 7. Un 74% de los beneficiados opinó que el presidente “había hecho mucho por la gente”, aunque el 46% consideró que las obras habían sido realizadas por el municipio.

La evaluación detectó, paralelamente a los beneficios, problemas de diseño y otros de implementación. Entre los primeros, los criterios que se usaron para distribuir recursos por regiones y por proyectos: no se dirigieron ni a las regiones ni a la población más pobre.

Un programa como Solidaridad no se proponía aumentar la capacidad productiva de manera permanente: eso se dejaba a la eficacia de las medidas económicas y de la iniciativa de los sujetos productivos. Se buscaría aliviar la pobreza extrema, sin embargo, aumentando directamente los ingresos o acercando satisfactores esenciales mediante obras de infraestructura: Solidaridad puso en juego ambos recursos. Pero no hubo congruencia entre el destino del gasto y las necesidades insatisfechas. Ni las regiones recibieron recursos equivalentes a su pobreza ni los proyectos respondieron a las carencias más importantes. Se optó por obras de alto costo para cubrir carencias que ya estaban relativamente cubiertas en las ciudades: se gastó mucho para satisfacer carencias proporcionalmente menos graves. Los apoyos a la producción, en el campo, redujeron, aunque transitoriamente, la pobreza y a un costo mucho menor.

Para decidir montos y destino de los recursos intervino la opinión de funcionarios estatales y federales del Programa, guiada aparentemente por dos criterios: capacidad de ejecución de un proyecto o capacidad de demanda. Se crearon comités para realizar ciertos proyectos autorizados, aunque los miembros del comité no los hubieran promovido originalmente. O bien se decidió en favor de grupos con más capacidad de demanda y organización, que casi nunca surgían entre los más pobres. La participación más activa se dio en sectores de pobreza moderada: los más pobres casi no participaron ni se atendió a sus carencias más apremiantes. Se escuchó a los que hablaban más alto. La “participación”, monetaria o social, no se tradujo en mayor eficiencia ni en mayor satisfacción de los beneficiados: es probable, pues, que la auténtica participación haya sido muy reducida.

Hubo deficiencias concretas. Por lo menos un 45% de los beneficiarios de apoyos directos a la producción no logró reintegrar sus préstamos a la palabra: como no alcanzaron para aumentar la capacidad productiva, se usaron para adquirir bienes básicos. El 8% de disminución de pobreza atribuido a los apoyos directos tendería a desaparecer al cesar los subsidios. Los apoyos de Procampo se destinarían después a asegurar un subsidio al consumo, equivalente, por un plazo de quince años.

En programas de infraestructura de agua, drenaje, electrificación o pavimentación no hubo criterio alguno de complementariedad. Se emprendieron fragmentariamente, muchas veces al azar de la opinión de un porcentaje no siempre mayoritario de los presuntos beneficiarios. A las fallas de diseño se añadieron otras en la instrumentación.

La investigación señaló casi un 30% de desperdicio de recursos: se detectó un 18% por obras iniciadas, pero incompletas; un 5% por obras que ya no brindaban el servicio previsto y un 6% por obras que nunca se realizaron. Un 9% se realizó sin comité alguno y había obras incompletas en 8 de los 14 programas. Aunque en el 84% de las obras había algún comité que la respaldara, sólo el 36% fue efectivamente ejecutada por el comité mientras que el 54% fue encargada a algún contratista. Es decir, sólo hubo participación en la tercera parte. Y casi la tercera parte del total de encuestados ignoraba las características del Programa. Un 41% de obras no contó con supervisión técnica ni de las autoridades responsables.

En cuanto a los líderes de comités, un 27% fueron nombrados por inducción de alguna autoridad y un 19% sin aparentar siquiera un consenso de asamblea. Más de la mitad de presidentes de comités dijo ganar más de dos salarios mínimos. Se detectó, por último, que sólo un 17% de las obras se decidió en asamblea de vecinos: la mayoría fue solicitada “por algunas personas de la comunidad” y un 34% fueron sugeridas por autoridades.

Las conclusiones de los investigadores de El Colegio de México fueron desalentadoras: los recursos no llegaron a las regiones más pobres ni respondieron a las carencias más acuciantes; no se promovió la organización de los más pobres, que fueron desplazados por grupos con más recursos y más capacidad de demanda;

hubo desacierto en el destino regional y por proyecto acaso, entre otras razones, porque no hubo un “mapeo” previo para precisar las carencias esenciales; no se falló porque los pobres no supieran identificar sus necesidades: más bien, porque fueron autoridades o “influyentes” los que decidieron, puesto que sólo un 17% de los proyectos se discutió en asamblea de vecinos; un 54% de los beneficiarios no podían considerarse pobres: es decir, recibieron recursos que, estrictamente, no les correspondían. En suma:

Los montos del gasto, su distribución regional y el tipo de proyectos que habían de emprenderse constituyeron ámbitos acotados también por los funcionarios estatales responsables de ejecutar el programa. A las comunidades llegaron, con relativa frecuencia, propuestas de acción con inversiones ya previstas por el gobierno. De modo que los comités de Solidaridad fungieron, en esas ocasiones, mucho más como entes de administración y control en algunos de los proyectos, que como sus verdaderos iniciadores.⁶⁰

La investigación sugirió algunas enmiendas: asignar más recursos a donde más se necesitan, partiendo de una información puntual de la geografía de la pobreza; no decidir asignaciones con criterios imprecisos, ni subordinar la participación comunitaria a tales decisiones; dar prioridad a proyectos realmente dirigidos a aliviar la pobreza extrema —salud, vivienda, apoyo a la producción agrícola— sobre otros cuyos beneficiarios finales podrían no ser los más pobres —como los de infraestructura o regularización de predios—; fundar la participación en las iniciativas de los más pobres en vez de partir de proyectos predefinidos por funcionarios; seleccionar a los beneficiarios por sus carencias básicas y no por su capacidad previa de organización y demanda y *destinar recursos a promover la organización de los más pobres*; vigilar la aprobación atinada de los proyectos, no con criterio de Manual Único de Operación, sino con criterio de realidad; no “formar comités” por llenar una fórmula; asegurar un seguimiento de la organización colectiva y favorecer su continuidad; estimular la participación mediante una supervisión consistente, en aspectos técnicos y de organización.

Precaria panacea

La evaluación de Zacatecas colocó a Pronasol en su dimensión real, al mostrar que no cumplió, por lo menos hasta 1991, con los objetivos que se había fijado. El Programa había sido “vendido”, con cierta ligereza, como *el instrumento clave* para revertir el empobrecimiento progresivo. Numerosas fallas de diseño e instrumentación le impidieron lograr siquiera un efecto importante sobre los síntomas de pobreza, puesto que no se dirigía a modificar sus causas estructurales.

Pronasol sirvió, es verdad, para apuntalar la imagen presidencial y favoreció clientelismo y manipulación de opinión con fines electorales. No fortaleció el papel que correspondería a los ayuntamientos como promotores del desarrollo. Fue concebido como compensación selectiva al deterioro de condiciones de vida propiciado por ciertas medidas del proyecto económico o por la maduración insuficiente de ese proyecto. Operó con criterios fragmentarios y discrecionales y la participación de la gente fue transitoria, casi siempre armada al vapor y más de papel que real.

En la Cuarta Semana de Solidaridad (1993) se reconocieron fallas en la organización de comités y se propuso corregirlas, para propiciar un desarrollo comunitario más auténtico. Acaso se pensaría consolidar así una futura estructura territorial, para insertarla poco a poco en el partido oficial e ir desplazando a la estructura corporativa. Tal como funcionó, sin embargo, los alcances del Programa fueron moderados y no coincidieron con los objetivos.

Pronasol sirvió, sobre todo, para rehabilitar y construir infraestructura de comunicaciones, electrificación, agua potable, alcantarillado, educación y salud, pero ni siquiera en los sitios donde las carencias eran mayores. A veces, cuando el nuevo servicio requiere un pago mensual, se redujo un poco más el ingreso de los beneficiarios. Los apoyos a la producción se diluyeron en subsidios selectivos al consumo. Si, como quedó demostrado, los recursos no se dirigieron a los más pobres, es improbable que la excepción fuera el programa Niños en Solidaridad. Porque los niños en pobreza extrema no llegan a la escuela o tienen que abandonarla, para ayudar a la familia, en el tercero o cuarto año de primaria. Y porque, según la evaluación de Zacatecas, las zonas rurales más pobres no fueron las más beneficiadas.

Una golondrina no hace verano

Más allá de aciertos y desaciertos, un programa compensatorio no suple la urgencia de una sólida política social. Hasta el momento, la estabilización macroeconómica no se ha reflejado en mejores niveles de vida. Ha aumentado, en cambio, la concentración de riqueza y se ha acentuado la marginación. Es evidente que cualquier política social será limitada si no se apuntala con medidas económicas para elevar el ingreso y la oportunidad de ocupación productiva. En el campo, concretamente, las reformas a la Ley Agraria y la entrada masiva de granos básicos podrían agravar la pobreza y el éxodo: habría cada vez más pobres y los parches selectivos no alcanzarían para remediarlo.

La afluencia de inversiones productivas y la reanimación del crecimiento son presupuestos muy importantes. Pero, mientras la industria mediana y pequeña no se recupere y vuelva a crear empleos; mientras los campesinos pobres no cuenten con apoyos integrales a su capacidad productiva; mientras no se fomente una con-

vergencia de apoyos al desarrollo desde abajo, la brecha que ahonda la pobreza seguirá creciendo. Mientras todo eso no ocurra, los beneficios del TLC sólo alcanzarán a pequeños núcleos de los que ahora viven en pobreza moderada y se agravará, dramáticamente, la pobreza extrema.

Sin cuestionar el proyecto económico pero señalando la necesidad de políticas concretas con incidencia en la productividad y en el ingreso, Santiago Levy (Universidad de Boston) elaboró en 1991 una monografía sobre la pobreza en México para el Banco Mundial. Levy distinguía entre el apoyo requerido por los moderadamente pobres y el apoyo de emergencia a los extremadamente pobres. La pobreza moderada exigiría oportunidades para generar mayores ingresos. Habría que procurar acceso oportuno al crédito, fertilizantes y sistemas de irrigación, para aumentar rendimientos y diversificar cultivos; mejores caminos y transportes para ampliar oportunidades de empleo; sólida educación primaria y técnica; infraestructura para el crecimiento regional y aumento permanente en la demanda de esa mano de obra no calificada.

Todo eso sería válido, también, para los extremadamente pobres. Sólo que en tal situación límite, habría que empezar por *romper el círculo vicioso de la pobreza*:

[...]ambientes insalubres, morbilidad, apatía, alta mortalidad infantil y alta fertilidad, incapacidad para enfrentar riesgos, incapacidad para demandar educación, recursos magramente distribuidos entre hogares grandes y transmisión de ese estado de cosas de generación en generación. Sólo cuando ese círculo vicioso se rompa podrán “valerse por sí mismos” y superar su condición de pobreza.⁶¹

No puede hablarse de acceso a oportunidades iguales si los pobres no comen lo suficiente: la desnutrición es el desencadenante fatídico de todo el síndrome de privación. El nivel mínimo es de 2 250 calorías diarias para un adulto, según cálculos de la OMS/FAO para las condiciones climáticas de países menos desarrollados. Si no se adquieren las calorías necesarias, cualquier dosis de proteínas se quemará para satisfacer el requerimiento de energía.

Levy destacó siete características de los extremadamente pobres: 1) más fecundidad, porque los hijos significan apoyo en el trabajo y seguridad para los padres en la vejez; 2) toda la familia trabaja al máximo de su capacidad y no puede compensar una baja de ingresos trabajando horas extra; 3) los hijos no suelen recibir educación porque deben ayudar a los padres: en consecuencia, no les llegan subsidios proporcionados a través del sistema educativo; 4) aferrarse a las pequeñas parcelas para asegurar el autoconsumo es menos riesgoso que participar en el mercado: en regiones remotas y con escaso transporte, puede ser la única opción ante el incierto abastecimiento de alimentos; 5) donde los ingresos son muy bajos, sólo se consumen calorías baratas; 6) la desnutrición afecta la pro-

ductividad; 7) dentro de las familias, los hijos no siempre reciben una parte adecuada de los escasos alimentos disponibles.

La propuesta sugería dos estrategias: una dirigida a promover el desarrollo y aumentar los ingresos de los pobres; otra para hacer llegar a los extremadamente pobres un conjunto de beneficios básicos directos, que los habilitaran para poder incorporarse al desarrollo y aprovechar los beneficios de la primera estrategia.

La estrategia de satisfactores directos partiría del combate a la desnutrición. Habría que crear Centros de Atención a la Pobreza Extrema concentrados en unas cuantas metas: disminuir la mortalidad infantil, la desnutrición, la fecundidad y la predisposición a contraer enfermedades y promover la higiene del medio ambiente. Esos centros se localizarían en las áreas con mayores índices de pobreza; abastecerían, por medio de cupones, unos cuantos alimentos nutricionalmente adecuados a precios más bajos, y proporcionarían medicina preventiva gratuita y educación para la salud. Se les destinarían recursos fiscales a salvo de fluctuaciones macroeconómicas.

El acceso a alimentos básicos y la prevención de enfermedades redundaría en efectos reales y psicológicos. Al sentirse menos vulnerables, los más pobres desearían menos hijos y empezaría a disminuir la oferta de mano de obra no calificada. Pero, además, la recepción de cupones para adultos podría acompañarse de la entrega de cupones especiales para niños, a quienes la desnutrición marca de por vida, condicionando los cupones a la vacunación y a la presentación periódica de esos niños para recibir atención de salud. La continuidad de los beneficios directos tendría que ser sostenida, puesto que la salud sólo se logra con efectos acumulativos. Se aconsejaba dar prioridad a la población rural en pobreza extrema, sin descuidar la pobreza extrema en las ciudades.

Concebida como un apoyo básico a la alimentación y la salud, la propuesta tendría sentido. Pero sólo ubicándola en un contexto más amplio, diseñado para favorecer condiciones que habilitaran a los extremadamente pobres como sujetos de su propio desarrollo. En el esquema de Levy, la oferta básica de nutrición y salud correspondería a una institución o a un programa que no tendría que proponerse otros objetivos, tales como promover la agricultura en pequeña escala o las artesanías, o proporcionar educación primaria. Sería algo así como el Programa de Servicios de Salud para la Población Abierta de la Secretaría de Salubridad que, con escasa cobertura, ya funciona en el país, sólo que ampliado en objetivos, muy bien localizado y abarcando todo el territorio.

Otra propuesta, originada en una evaluación de la situación alimentaria, fue presentada a Pronasol por API Consultores en diciembre de 1991, pero al parecer no fue considerada pertinente ni se le dio difusión. Se había pedido un diagnóstico para confirmar o modificar la hipótesis del deterioro de la alimentación de los más pobres en la última década. Los analistas la confirmaron, señalando que el replie-

gue de las acciones de abasto popular de Conasupo restringió el acceso a productos básicos. Aconsejaron, en cambio, reforzar algunos de esos programas. Consideraron insuficientes todos los programas del sector salud dirigidos a la nutrición, incluyendo el de IMSS-Solidaridad, el de raciones alimentarias del DIF y el de cocinas populares, que apenas se iniciaba con presupuesto de Solidaridad. Carencia de recursos, falta de estrategia integral, falta de continuidad y escasa participación de la comunidad caracterizaban a la mayoría de esas acciones.

Se recomendó una estrategia acorde con el Programa Nacional de Alimentación 1990-1994: mantener la autosuficiencia de básicos, sobre todo maíz y frijol; fijar metas explícitas para la pobreza extrema; vincular estrechamente un programa alimentario con los de salud, vivienda y educación para alcanzar un *piso social básico*; estructurar, con todas las acciones propuestas, un *programa integral*; asegurar una *coordinación entre instituciones* que podría realizar la Comisión Nacional de Alimentación (Conal) e incorporar más eficazmente a Pronasol en la lucha contra la pobreza extrema.

La propuesta incluía acciones específicas para las ciudades y otras para el campo. En las ciudades habría que extender los programas vigentes de leche, tortilla y tiendas Conasupo-Solidaridad hasta cubrir a la totalidad de los más pobres. En el campo, aparte de insistir en programas que ya funcionaban, aunque fuera limitadamente, como IMSS-Solidaridad, se aconsejaba impulsar y fortalecer una *economía comunitaria: sólo la reactivación productiva de las comunidades redundaría en un cambio radical del síndrome de privación en sus bases mismas*.

Se trataba, pues, de un enfoque muy diverso al de Santiago Levy. O, más bien, trascendía el alcance específico que aquél fijaba para un paquete de beneficios básicos. La propuesta de API Consultores retomaba una línea que, como se ha visto a lo largo de este libro, puede rastrearse claramente hasta la proposición de revitalizar a las pequeñas comunidades que hizo Tannenbaum en los años cincuenta, recogiendo el remoto antecedente de Vasco de Quiroga.

Los consultores de API detallaban unas cuarenta acciones de diversa índole que, bien articuladas, podrían ofrecer una opción viable para los más pobres del campo, fundándose en

[...]la convicción de que la economía de mercado, por sí sola, no podrá, en un plazo razonable, frenar y menos aún revertir la tendencia que señala un mercado deterioro en la más elemental de las condiciones para construir un piso social básico.⁶²

Una política coherente de bienestar social exigiría combinar programas asistenciales con otros productivos, ajustados a regiones y localidades. Habría que descartar una eliminación radical de subsidios. Lo esencial sería, en todo caso, la *organización comunitaria autogestiva*, para potenciar la capacidad de producir, poder ampliar los

excedentes y distribuirlos a través de mercados locales o regionales. La autosuficiencia en productos básicos estaría en la base de este modelo, que no excluiría la reubicación de una parte de los habitantes de cada comunidad en otros ámbitos de producción que pudieran generarse en la comunidad misma y no necesariamente en la agricultura.

La certidumbre de que el mercado, por sí solo, tiende a exacerbar desigualdades recorre todas las reflexiones sobre la pobreza, aun aquellas propuestas que no impugnan ninguna arista del esquema modernizador. El fracaso de políticas sociales fundadas en el corporativismo, el clientelismo, la centralización y el burocratismo, así como el sobregiro que condujo a la proliferante deuda externa, son otros tantos argumentos sólidos para respaldar un enfoque mucho más realista de política social.

A estas alturas, parece evidente que el gasto deficitario y el endeudamiento sólo sirvieron para hacer más grande la bola de nieve. La vieja modalidad corporativa permitió mejorar condiciones de vida de ciertos sectores que pudieron alcanzar, más que otros, algunos beneficios del desarrollismo, pero dejó fuera a todos los que hoy se consideran marginados. Centralización y burocratismo son vicios de un sistema que gira en torno a un presidencialismo autoritario.

Por todos esos vicios, mucho de lo que se gastó en política social se quedó en el camino, se lo tragó el aparato burocrático o llegó a sectores muy limitados de derechohabientes y no a los más necesitados. Recursos, a veces muy copiosos, y necesidades reales marcharon por caminos diversos y casi nunca se encontraron. La dispersión de esfuerzos y la ausencia de participación auténtica tuvo mucho que ver.

Una política social eficaz aprovecharía a las instituciones de educación, de salud y de vivienda para dar el gran vuelco que permitiría, por fin, llevar servicios de calidad a todos. No sería concebible sin una reforma a fondo en la educación y la salud. No bastaría con un programa compensatorio: haría falta un vasto proyecto para reformular las metas de ambos sistemas. Y un proyecto así sería impensable sin verdadera descentralización y sin transferencia de recursos suficientes a estados y municipios. La eficacia y la calidad en los servicios de educación y de salud tendría que llegar a los más pobres, que han recibido hasta ahora una atención precaria por su escasa capacidad para hacerse oír. La asignación de prioridades en el gasto tendría que destinar más recursos a los que han recibido menos.

En el campo ha crecido y se ha multiplicado la pobreza. Como ha señalado Félix Vélez (ITAM), la pobreza urbana es un reflejo de la pobreza rural: por eso es en el campo donde hay que empezar a revertirla a fondo. Los más pobres del país están en el campo y los más pobres del campo son los jornaleros y campesinos sin tierra, incluyendo una altísima proporción de ejidatarios muy pobres y de propie-

tarios paupérrimos de miniparcelas. Las regiones más aisladas y las más áridas son las más pobres. La pobreza y la baja productividad, por falta de insumos y de créditos, se retroalimentan en un círculo vicioso.⁶³

Como quedó demostrado en el análisis de las reformas al Artículo 27, son mucho más teóricas que reales las oportunidades que se abren a los campesinos pobres con la entrada potencial de sus tierras al mercado.

La mayoría no tendrá con qué respaldar solicitudes de crédito comercial. Se verán obligados a vender a los caciques y se quedarán a la intemperie. ¿Quién va a querer asociarse con ellos en las zonas marginales de temporal, donde habita la mayoría? Habrá que encontrar la manera de subsidiar, no con limosnas, su capacidad de sobrevivir y producir.

Una propuesta de *política comprensiva* para enfrentar las manifestaciones más álgidas de la pobreza (nutrición, salud, educación y vivienda) fue formulada en 1993 por el grupo CIDAC. Avalada por Luis Rubio, coordinador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, se originó en planteamientos de Rawls sobre el liberalismo y de Amartya Sen sobre las *capacidades básicas*. El método es coherente y bien fundado: apunta a la adquisición de esas capacidades (que corresponden a *necesidades básicas*), entendiendo que se complementan entre sí y que los efectos son mínimos o nulos si se pretende resolver una o dos aisladamente. *Contra la pobreza* no incluía una crítica frontal a programas como Pronasol, al que ubicaba concretamente como una “primera etapa”. Sin embargo, los planteamientos envolvían una crítica implícita, lúcida y sin animosidad, al sostener que sólo una lógica persistente de acciones convergentes, entre ese u otro programa y las instituciones, empezaría a encaminar la viabilidad del país. No habría desarrollo competitivo en la economía mundial sin un pueblo nutrido, sano, educado y con hogares satisfactorios. No bastarían los cambios económicos. Sin reforma social, muchos quedarían fuera de la economía de mercado:

De ahí que el gran riesgo de no reformar los sistemas sociales frente a la transformación económica sea el de perpetuar y extender las condiciones de pobreza de grupos de la población que ancestralmente han vivido en esa situación[...].⁶⁴

País alimentado, país educado: país de ciudadanos

Tomando en cuenta la desmesura de la deuda social en todos los ámbitos, y la imbricación de las carencias, es obvio que una política social eficaz no puede ser fragmentaria. Tiene que articularse en una confluencia coherente de acciones. Tiene que atacar la desnutrición, pero no quedarse en ese primer escalón ni hacer-

lo con un criterio verticalista de derrama de dones. De poco servirían los centros de atención a la pobreza extrema en el campo si la gente no puede movilizar su capacidad productiva. Se trataría a los pobres como objetos pasivos de una dádiva y no como sujetos activos de su propio desarrollo. Como ha señalado el padre Miguel Concha:

[...] la aplicación de las medidas de combate a la pobreza no siempre reconoce ni respeta en forma integral los derechos de los pobres. [...] Los verdaderos sujetos sociales son los pobres, en tanto que portadores de necesidades, de potencialidades y de derechos.⁶⁵

Habría que operar centros de atención como tratamiento de emergencia en sitios críticos de pobreza extrema, pero sólo para ir sustituyéndolos consistentemente por programas de recuperación de la capacidad productiva, con la autosuficiencia como meta.

El reforzamiento de los valores tradicionales de la economía campesina, respetando sus formas de organización y su vocación productiva, es decisivo para tocar fondo en política social. A veces, restituir habilidades arcaicas puede ser más realista y eficaz que pretender improvisar otras nuevas. Las carencias de educación formal entre los campesinos no son la causa única de su escasa predisposición empresarial: la falta de vocación acumulativa es parte de una cultura tradicional que sigue persistiendo.

Una alimentación adecuada puede estar vinculada todavía durante mucho tiempo, para los más pobres, a la autosuficiencia. Deben coincidir con ese propósito acciones de medicina preventiva y atención a la salud, incluyendo la adquisición de una cultura básica de actitudes propicias a mejorarla. La casa es el centro de la vida en las comunidades rurales y es urgente apoyar el mejoramiento de la vivienda de los más pobres. La educación debe servir para ampliar los horizontes, pero también para optimizar las opciones de la gente en el pequeño espacio donde ha transcurrido y transcurrirá su vida. Una revitalización de las culturas populares locales es parte de un esfuerzo integral de desarrollo comunitario. Nutrición y educación son el punto de partida de un desarrollo sólido, desde abajo, que trascienda al mero crecimiento económico.

Una amplia política social tendría que incorporar, pues, sugerencias de las diversas propuestas recientes de combate a la pobreza. Y tendría que diseñar, por fin, un modelo coherente con el país tradicional y con el país moderno. Un modelo que ha sido invocado por muchas inteligencias realistas, desde hace años, y que todavía no ha logrado cuajar en un proyecto coherente de país. El campo tendrá que ser prioritario para abatir la pobreza extrema. El denominador común de política social tiene que ser la participación verdadera y no manipulada.

Un modelo de tal naturaleza exige tomar en cuenta a la gente. Responder a necesidades básicas y generar capacidades básicas, y hacerlo dentro de un proyecto de desarrollo integral y concertado de las comunidades, supone un riesgo, si no se desea acabar realmente con la tutela y el clientelismo. El riesgo de que emerja un país de auténticos ciudadanos, con voz y voto. ¿Acaso ese riesgo ha aconsejado preferir compensaciones selectivas y fragmentarias a una amplia política social de acciones confluyentes hacia el fortalecimiento de la autonomía y la autogestión? Es legítimo preguntárselo, mientras no se demuestre otra cosa.

Notas

¹ Las cifras de 1988 son de Enrique Hernández Laos, *Crecimiento económico y pobreza en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, pp. 11-12. De acuerdo con esas cifras, Santiago Levy sacó porcentajes para 1990, en "La pobreza extrema en México: un programa de política social", en *Estudios Económicos*, El Colegio de México, vol. 6, núm. 1, enero-febrero 1991. Ese trabajo aparece incluido con el título "La pobreza en México", en *La pobreza en México: Causas y políticas para combatirla* (Félix Vélez, comp.). México: Instituto Tecnológico Autónomo de México y Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 17.

En el Quinto Informe de Gobierno, el presidente Salinas afirmó que había disminuido la pobreza extrema: en 1989 habría habido 15 millones y en 1992 sólo 13.3 millones de mexicanos muy pobres. La afirmación se fundó en datos manejados antes, en conferencia de prensa, por el director del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el director de estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según tales datos, la proporción de pobreza extrema habría bajado a 11.8% y la de pobreza moderada a 27.9%, de un total de 84 millones de habitantes. Conviene advertir que la cifra oficial para 1989 había sido, hasta ese momento, de 17.3 millones (*El Financiero* 25/X/1993) y que el informe presidencial habló de 2 millones menos.

Pocos días después, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aclaró que tales datos, extraídos de un estudio inconcluso que estaría listo a principios de 1994, eran provisionales. Y a la vez dio a conocer su *Panorama social de América Latina para 1993* donde registraba un aumento del 5% en la pobreza en México, de 1987 a 1990, "debido a la fuerte contracción del salario mínimo, la reconcentración de la distribución del ingreso y la disminución del gasto social" (Julio Moguel, "La CEPAL contra la CEPAL", en *La Jornada*, 28/XI/1993).

² Rudolph Strahm y Ursula Oswald, *Por esto somos tan pobres*. Cuernavaca: Universidad Nacional Autónoma de México/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 1990, p. 32.

³ Datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Sistema de Cuentas

- Nacionales, Informe preliminar, marzo de 1990, citados en Strahm y Oswald, *op.cit.*, p. 135. Cifras de utilidades de empresas, en *La Jornada*, 23/III/1990.
- ⁴ Datos del Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia (Cemedin), *La Jornada*, 6/XI/1991.
- ⁵ Ursula Oswald, en audiencia sobre problemas alimentarios en la Cámara de Diputados. *La Jornada*, 2/III/1993.
- ⁶ *Proceso*, núm. 854, 15/III/1993.
- ⁷ *El Financiero*, 29/IV/1993 y 25/IX/1993.
- ⁸ Documento del Consejo Consultivo de Pronasol citado por *La Jornada*, 4/IX/1993. Macario Schettino, "El creciento económico", en *El Financiero*, 16/X/1994.
- ⁹ Datos registrados en el informe *Un punto de vista sobre el México de hoy*, presentado en París el 19 de mayo de 1993 por el Foro de Apoyo Mutuo. Mimeo, pp. 12-20.
- ¹⁰ *Combate a la pobreza: vertiente alimentaria*, CC Pronasol/API Consultores, Síntesis ejecutiva. Mimeo, pp. 13, 14, 15, 23, 24, 28, 32 y 34.
- ¹¹ José Antonio Roldán Amaro, *Nutrición, desarrollo social e historia*. México: Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, 1992, p. 100.
- ¹² Declaración de Manuel Arango en *La Jornada*, 18/I/1993, p. 1; declaración de Ricardo Govela, exdirector de Cemefi, en *La Jornada*, 18/V/1993.
- ¹³ Lorenzo Servitje, citado por F. Ortega P. en *Proceso*, núm. 798, 17/II/1992.
- ¹⁴ Pbro. Ramón Mendoza, *Las comunidades: una historia de casi dos mil años*. México, Impretei, 1992; Varios, Arquidiócesis de México, *Las CEBs al servicio del Reino: Reflexiones sobre el Encuentro Nacional y Latinoamericano de CEBs* de Jalapa, Ver., 1988; Pbro. José Sánchez Sánchez, *CEBs. Semilla y fruto de nueva evangelización*. Tamazula, Jalisco: Estudios Ecuménicos, 1991.
- ¹⁵ *La Jornada*, 25/V/1992. Comentario del doctor Ávila Curiel, en Roldán Amaro, J. A., *op.cit.*, p. 179.
- ¹⁶ *La Jornada*, 20/XII/1992 y 30/III/1993.
- ¹⁷ Sergio Zermeno, "Desidentidad y desorden: México en la economía global y en el libre comercio", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre de 1991, pp. 28, 54 y 56.
- ¹⁸ Sergio Zermeno, "La derrota de la sociedad. Modernización y modernidad en el México norteamericano", en *La Jornada Semanal*, núm. 211, 27/VI/1993.
- ¹⁹ Véase Juan Manuel Ramírez, *El movimiento urbano popular en México*. México: Siglo XXI Editores, 1986.
- ²⁰ Alonso Urrutia, "El MUP y la política oficial de vivienda", en *La Jornada*, suplemento sobre "La Ciudad de México: la reconstrucción inconclusa", 20/IX/1991.
- ²¹ Guillermo Trejo y Claudio Jones (coord.), *Contra la pobreza. Por una estrategia de política social*. México: Cal y Arena, 1993, pp. 232-235.
- ²² *La Jornada*, 22/VII/1991; 18/IX/1991; 7/X/1991; 22/II y 15/III/1993.
- ²³ *Proceso*, núm. 877, 23/VIII/1993; *La Jornada*, 19/VIII/1993; M. Ángel Granados Chapa, en

El Financiero, 20/VIII/1993; Álvaro Cepeda Neri, "Rebelión de las masas en el Congreso", en *La Jornada*, 31/VIII/1993; Miguel Ángel Rivera, en *La Jornada*, 20/VIII/1993; *El Financiero*, 20/VIII/1993.

²⁴ *La Jornada*, 11/IX/1991, y *Proceso*, 21/XI/1991.

²⁵ Lucy Amador y Enrique Quintana, "El nuevo milagro mexicano y economía informal", en *Este País*, núm. 20, noviembre 1992. Datos que siguen, en la misma fuente.

²⁶ G. Correa y S. Corro, "4% de la fuerza de trabajo en tianguis y otros subempleos; 15% en desempleo total", en *Proceso*, núm. 781, 21/X/1991, y *El Financiero*, 26/I/1993.

²⁷ Opinión recogida por Enrique Quintana, en *Este País*, núm. 20, noviembre de 1992.

²⁸ Sergio Zermeno, "Desidentidad y desorden...", p. 23.

²⁹ Javier Elguea (Colegio de México), "Los sismos de 1985 y el comportamiento de ayuda entre los mexicanos: mitos y realidades", en *México: auge, crisis y ajuste*, vol. I (coord. Bazdresch, Bucay, Loaeza y Lustig). México: Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 163-164.

³⁰ Información recabada por Oliva Velázquez Macías, que coordinó en Tabasco el proyecto de desarrollo integral de la comunidad de 1983 a 1988.

³¹ *Integrando fe y obras*, Cuadernos de Divulgación y Análisis núm. 1; *Una experiencia de SWAP-Social en México*, Cuadernos de Divulgación y Análisis núm. 2; Vicente Arredondo Ramírez, *La concertación social desde la experiencia de la Fundación para el Apoyo de la Comunidad*, Cuadernos de Divulgación y Análisis núm. 4. México: FAC y Arquidiócesis de México: CARITAS, 1993 y 1994. "Demos, estructura orgánica y funcionamiento", en *Personas, un servicio a la comunidad*, núm. 4, febrero de 1994.

³² *Personas*, núm. 3, enero de 1994.

³³ El Foro de Apoyo Mutuo (FAM) incluye a las siguientes organizaciones:

- A.C. Gerardo Ma. Mayela Protege a Casa Hogar Nuestra Sra. de Fátima.
- Agrupación de Derechos Humanos Xochiltépetl, A. C.
- Albergues de México, I.A.P.
- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.
- Alianza para la Integración Vecinal.
- Ancianos y sus Amigos, A.C. (ANSAM).
- Asamblea de Barrios (Consejo de Salud).
- Asilo de Ancianos San Sebastián.
- Asociación de Colonos de Cuautepec, A.C.
- Asociación de Colonos Independientes de la Colonia 2 de Octubre, A. C.
- Asociación de Lucha Metropolitana para el Mejoramiento Ambiental, A. C.
- Asociación Jalisciense de Derechos Humanos.
- Asociación Mexicana de Transformación Rural y Urbana, A.C.
- Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A.C.
- Asociación para la Defensa de los Derechos Indígenas en Michoacán, A.C.
- Brigada de Educación para el Desarrollo Rural, A.C.

- Brigada Universitaria de Servicios Comunitarios para la Autogestión, A.C. (BUSCA).
- Casa de la Amistad Hogar para Ancianos.
- Casa Hogar de Nuestra Sra. de la Paz, A.C.
- Casa Hogar Santísima Trinidad, I.A.P.
- Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO).
- Centro de Comunicación Javier, A.C.
- Centro de Derechos Humanos Yax Kin, A.C.
- Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl, A.C.
- Centro de Desarrollo Juan Diego.
- Centro de Estudios Educativos A.C.
- Centro de Investigación Social Aplicada y Atención Psicológica, A.C.
- Centro de Operación de Vivienda y Población, A.C. (Copevi).
- Centro de Promoción Polanco, A.C.
- Centro de Promoción y Estudios en Alimentación y Salud, I.A.P.
- Centro de Vivienda y Estudios Urbanos, A.C. (Cenvi).
- Centro Fray Servando Teresa de Mier, A.C.
- Centro Juan Diego.
- Centro Juvenil de Promoción Integral, A.C.
- Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
- Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos).
- Centro para el Apoyo a la Comunidad III, A.C.
- Centro para el Apoyo a la Comunidad VI, A.C.
- Centro para la Promoción Social de la Comunidad III, A.C.
- Clínica Mexicana de Geriátrica.
- Club de Aspirantes a Centenarios Felices, A.C.
- Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, A.C. (Comexani).
- Colegio de la Paz Vizcaínas.
- Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC).
- Comisión Episcopal de Pastoral Social.
- Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE)
- Comunidad Participativa Tepito, A.C.
- Comunidad del Valle del Mezquital, A.C.
- Confederación Nacional Niños de México, A.C.
- Consejo Mexicano 500 años de Resistencia Indígena.
- De Mano Amiga a Mano Anciana, I.A.P.
- Desarrollo Integral Autogestionario, A.C.
- Discapacitados Visuales, I.A.P.
- Ecociudadanía del Futuro, A.C.
- Educación, Cultura y Ecología, A.C.
- Educación Popular y Capacitación, A.C.

- Educación y Desarrollo de Occidente, A.C.
- Enlace con Grupos Cristianos de Solidaridad.
- Escuela Nacional de Sordomudos "Benito Juárez".
- Espiral, S.C.
- Familia y Sociedad, A.C.
- Fideicomiso para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Programa de Apoyo a Grupos Marginados "In motloc in monahuac", A.C.
- Fomento solidario a la Vivienda, A.C. (Fosovi).
- Fondo para la Asistencia Promoción y Desarrollo, A.C.
- Fondo para la Asistencia Promoción y Desarrollo, A.C. Jalisco.
- Frente Auténtico del Trabajo (FAT).
- Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC-Chihuahua).
- Frente por el Derecho a la Alimentación.
- Fundación de Apoyo Infantil, A.C.
- Fundación Los Emprendedores, I.A.P.
- Fundación Mexicana para la Rehabilitación Integral del Discapacitado, A.C.
- Fundación para el Apoyo de la Comunidad, A.C. (FAC).
- Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.
- Grupo de Estudios Ambientales, A.C.
- Grupo Dinámico de Consultoría Integral, A.C.
- Hábitat para la Humanidad de México, A.C.
- Hogar Marillac, A.C.
- Iniciativa Pública Ciudadana, Desarrollo, Educación y Cultura Augestionarios.
- Equipo Pueblo, A.C. (IPC-DECA-Equipo Pueblo).
- Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana.
- Jóvenes en Acción.
- Movimiento Ciudadano para la Democracia.
- Movimiento Unificado Nacional de Jubilados y Pensionados.
- Organización de Pueblos Indígenas de la Chinantla.
- Orquesta Sinfónica Juvenil de la Magdalena Contreras, I.A.P.
- Parroquia de San Juan Bautista.
- Patronato Nacional de Alfabetización y Extensión Educativa, A.C.
- Promoción del Desarrollo Popular, A.C.-Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P.
- Regional de Mujeres.
- Sempo. Programa de Educación Laboral y Sindical, A.C.
- Servicio para el Desarrollo Social, A.C. (COPERCACG).
- Servicios de Apoyo Local al Desarrollo de Base en México, A.C. (Saldevas).
- Servicios Informativos Procesados, A.C.
- Servicios para el Desarrollo Social, A.C. Integración Ganadera, A.C.
- Sociedad Cooperativa Tijo.

- Taller de Arquitectura Popular, A.C.
- Trabajo Educativo y Capacitación en Central de Abasto, I.A.P. (Tecceda)
- Unión Ciudadana Fe y Revolución, A.C.
- Unión de Colonias Populares, A.C.
- Unión de Colonos Inquilinos y Solicitantes de Vivienda-Veracruz.
- Unión de Esfuerzos para el Campo, A.C.
- Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ).
- Vejez en México, Estudio y Acción, A.C. (Vemea, A.C.)
- Vida Digna Down, A.C.
- Xochipilli, A.C.
- Yaocihuatl, A.C.

Personas, núm. 4, febrero de 1994. (Publicación de FAC-Faprode).

³⁴ Documento de trabajo *Un punto de vista sobre el México de hoy*. México: Foro de Apoyo Mutuo, mimeo, *op.cit.*, p. 25.

³⁵ *Definición y operación de fondos sociales del Foro de Apoyo Mutuo*, 1a. versión, 24/III/1993, mimeo, pp. 2, 3, 6.

³⁶ Miguel Concha, "Los derechos de los pobres", en *La Jornada*, 4/IX/1993.

³⁷ *La Jornada*, 5/IX/1993.

³⁸ *La Jornada*, 6/IX/1993.

³⁹ *La Jornada*, 4, 5 y 6/IX/1993.

⁴⁰ *La Jornada*, 5/IX/1993.

⁴¹ *Un punto de vista sobre el México de hoy*, del Foro de Apoyo Mutuo, mimeo, *op. cit.*, p. 23.

⁴² Datos de *La Solidaridad en el Desarrollo Nacional*, México: Sedesol, 1993.

⁴³ *Ibid. El Financiero*, 1º/IX/1993.

⁴⁴ Rosalba Carrasco y Francisco Hernández y Puente, "Solidaridad: ¿qué perspectiva?", en *La Jornada*, 6/IX/1993.

⁴⁵ Datos de Cuenta de Hacienda Pública y Presupuesto de Egresos de la Federación, 1993, citados por Rosalba Carrasco, en *La Jornada*, 25/IX/1993. La proporción entre el gasto destinado a Solidaridad y el gasto destinado a pagar la deuda, según cifras de *El Mercado de Valores*; dato de Denisse Dresser, *Neo-populist Solutions to Neoliberal Problems*, San Diego, Center of U.S.-Mexican Studies, Universidad de California, 1991, p. 11.

⁴⁶ *La Solidaridad en el Desarrollo Nacional*, 1993, p. 6. Declaración del presidente Salinas, citada por Julio Moguel, en *El Cotidiano*, Revista de la UAM, núm. 49, julio-agosto de 1992, p. 41.

⁴⁷ Mario Zepeda, "El Pronasol, la política y la pobreza: tejiendo en el taller de Penélope", en *Memoria*, núm. 36, octubre de 1991. Citado por Julio Moguel, en "Cinco críticas solidarias a un programa de gobierno", en *El Cotidiano*, núm. 49, julio-agosto de 1992, p. 42.

⁴⁸ Declaración en la 3a. Reunión de Países de la Cuenca del Caribe, del 5 al 7 de agosto de 1993. Suplemento especial de *La Gaceta de Solidaridad*, 15 de agosto de 1993.

- ⁴⁹ Para la caracterización de los Comités de Solidaridad hasta 1993 y del proyecto esbozado para el futuro, véase *La Gaceta de Solidaridad*, 15 de agosto de 1993.
- ⁵⁰ Denisse Dresser, "Pronasol: los dilemas de la gobernabilidad", en *El Cotidiano*, núm. 49, *op. cit.* p. 55.
- ⁵¹ Carlos Salinas de Gortari, "El liberalismo social", en *Perfil de La Jornada*, 5/III/1992.
- ⁵² Consejo Consultivo de Solidaridad, *El programa nacional de Solidaridad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 11.
- ⁵³ *Ibid.*, p. 13.
- ⁵⁴ Armando Bartra, "Más sobre Pronasol", en *Desigualdad y democracia*, México, *El Nacional*, 1992, p. 27.
- ⁵⁵ Julio Moguel, *op. cit.*
- ⁵⁶ Denisse Dresser, *op. cit.*, pp. 49-57.
- ⁵⁷ Denisse Dresser, *Neo-populist Solutions to Neoliberal Problems. Mexico's National Solidarity Program*. San Diego: Current Issue Brief núm. 3, Center for U.S.-Mexican Studies, Universidad de California, 1991, pp. 3, 18, 32 y 35. Cita en pp. 35-36. La versión en español de este trabajo ha sido incluida, con el título "Pronasol y política: Combate a la pobreza como fórmula de gobernabilidad", en *La pobreza en México: Causas y políticas para combatirla*, *op. cit.* La cita aparece en p. 294.
- ⁵⁸ Juan Molinar y Jeffrey A. Weldon, *Electoral Determinants and Consequences of National Solidarity*. Mimeo. Universidad de California, San Diego, p. 3.
- ⁵⁹ *Ibid.*, p. 34.
- ⁶⁰ *Solidaridad en Zacatecas: Impacto y problemas de una política pública* (coord. José Luis Reyna y A. García Rocha; redacción de Mauricio Merino). México: El Colegio de México, 1993. Mimeo, p. 57.
- ⁶¹ Santiago Levy, *op. cit.*, p. 50.
- ⁶² API Consultores, *Combate a la pobreza/vertiente alimentaria*, Síntesis ejecutiva del documento presentado al Consejo Consultivo de Pronasol. Mimeo, p. 41.
- ⁶³ Emma Campos y Félix Vélez, "La pobreza rural en México", en *La pobreza en México: Causas y políticas para combatirla* *op. cit.*, pp. 179 ss.
- ⁶⁴ Trejo, G., y C. Jones (coordinadores), *op. cit.*, p. 258.
- ⁶⁵ Concha, M., *op. cit.*

XII. Alumbramiento aplazado

En una década, el respeto a los derechos humanos se ha convertido en una obsesión, muy positiva, de sectores muy amplios. Esto es uno de los mejores avances de la sociedad.

Carlos Monsiváis

Enero de 1994

Mucha economía y poca política

La promesa democratizadora fue a dar al desván de las buenas intenciones no cumplidas. La *lección de la elección* no fue entendida, desde el sistema, como un mandato por la democracia. Se escuchó sólo una parte de la demanda: la copiosa votación opositora fue leída como un llamado de atención de los maltratados por el ajuste. Bastaría Solidaridad para apaciguarlos. La propuesta de una *política moderna* no trascendió las fronteras de la economía: para modernizarla, se pensó acaso, nada tan eficiente como los buenos y viejos métodos autoritarios.

¿Podría la imagen de un presidente dadivoso compensar el aplazamiento de la democracia? El manejo publicitario de Solidaridad serviría para apuntalar y revivir a la figura presidencial. Se buscaría vitaminar con popularidad y carisma una imagen que emergía lastimada de las elecciones. La transmisión de la estafeta garantizaba continuidad en el proyecto económico y coherencia con la lógica tecnocrática. No necesariamente coherencia con el mandato de los votantes que, aun tomando como buenas las cifras oficiales, había expresado una expansiva voluntad impugnadora.

Para darle tiempo de maduración al proyecto económico, el presidente buscaría ejercer un liderazgo personalizado y desplazar el de quien había aglutinado y articulado la mayoría de los descontentos y la reprobación al régimen en 1988: Cuauhtémoc Cárdenas. La muerte había sacado del escenario a otro líder capaz de movilizar irritaciones: Manuel J. Clouthier.

La nueva élite concebía la modernización como una puesta al día de la economía. Segura de poder contar todavía con una secular inercia de autoritarismo, tampoco creía, cien años después, que el país estuviera maduro para la democracia. Habiendo apostado a un modelo que no se traduce, en el corto y mediano plazo, en beneficios palpables para la mayoría, el pragmatismo aconsejaba alivios a la penuria. Se modernizaría soltando algunos paliativos con una mano mientras, con la otra, se apretarían las clavijas de controles y decisiones. El neopopulismo serviría para maquillar el rostro avejentado de un autoritarismo secular. Se dirigieron los reflectores hacia la imagen de un donador magnánimo, pródigo en “espíritu solidario”. Como advirtió Federico Reyes Heróles:

[...]presidencialismo a la vieja usanza, gran movilidad, giras cada semana, brincos por aquí y por allá, obra pública que él protagoniza, tanta como se pueda: representa, promete y entrega [...]. Su popularidad se ha incrementado. El estratega de la planeación de los planes de choque combina ahora la frialdad de la increíble reducción del déficit público con una buena dosis de presidencialismo galopante. [...] No es momento para efectuar la gran y definitiva reivindicación. Mejor muchas respuestas concretas [...] el “espíritu solidario” todo lo resuelve. Tal discurso omnicomprendivo tiene la bondad de aminorar las tensiones reales, pero ojalá el presidente Salinas no termine creyendo que de verdad el espíritu solidario ha permeado la sociedad.¹

En el apogeo de Solidaridad, cuando se hablaba de prestarle ese nombre a un rejuvenecido partido oficial, surgieron por aquí y por allá suspicacias de intenciones reeleccionistas. ¿Alcanzaría el milagro de Solidaridad para colmar tantas carencias y para desplazar, de paso, las reclamaciones de democracia?

El segundo sexenio de la modernización económica practicó, en política, su confianza en el mercado: vendió expectativas, apostándole a una amplia demanda que estaba ahí para responder, sedienta de esperanzas. La incertidumbre que se generó en torno a la aprobación del TLC, desde la elección de Clinton hasta el 17 de noviembre de 1993, propició la especulación de que se repetiría un fin de sexenio catastrófico ante el desplome de tales esperanzas. La ratificación de noviembre pareció sugerir que no sucedería así: ¿acaso la diosa Fortuna no suele prodigarse entre los afortunados?

Después de todos sus altibajos, las expectativas del TLC no eran ya, sin embargo, tan resplandecientes. Tampoco las que generó Solidaridad en el cenit de la difusión

publicitaria. El proyecto económico tocó fondo: cero crecimiento; enorme déficit comercial por importar mucho más de lo que se exporta; quiebra masiva de medianas y pequeñas empresas; desempleo crítico; recorte máximo del poder de compra. Ahogo de pequeños y medianos agricultores. Asfixia de campesinos. La terca realidad volvía a colarse, entre las rendijas de los espejismos. Cada día quedaría más claro que la realidad ya no daba para más si no entraba en escena su cara oculta, su otra mitad que le hacía falta para reintegrarse y reconocerse: la democracia.

Democracia empantanada

El sistema político dejó de ser un mecanismo de relojería para volverse una ente-lequia que siguió disponiendo para sostenerse, sin embargo, de una considerable inercia. Se fue quebrando, paso a paso, su columna vertebral que era el sistema corporativo. Los sectores representaron cada vez menos, pero no se logró sustituirlos con algo que cumpliera una función equivalente de brazo legitimador (¿acaso una red territorial de comités de desarrollo comunitario vinculados a la estructura partidaria?). El sistema pendió, cada vez más, de un solo hilo: la voluntad presidencial, que siguió apostándole a la modernidad jugando con reglas premodernas.

Mientras un país tradicional, a años luz de distancia de los satisfactores de la modernidad, contempló de lejos el lanzamiento de un satélite llamado Solidaridad, un presidente con criterios de Primer Mundo enredó y desenredó los hilos de la “transición” desde el convencimiento de que la silla presidencial seguía sacralizada por la investidura de los *tlatoanis*. Con numerosos traspies se fue encaminando, a partir de 1988, el tránsito hacia la democracia.

Si en las elecciones de 1988, como dijo Monsiváis, los mexicanos *se mostraron ansiosos [...] de estrenarse como ciudadanos*, los tiempos señalaban hacia *una nueva definición de la sociedad civil*² y parecía factible y deseable favorecer una reforma política, la transición gradual apadrinada desde arriba seguía pareciendo deseable, pero ya no factible, a mediados de 1992:

Por el contrario, *la renuencia a una apertura política entendida como la iniciativa gubernamental para la conducción de un proceso democratizador, se ha confirmado repetidamente en el sexenio*. La más reciente fue la ausencia de consulta real sobre las reformas constitucionales de 1991. Difícilmente el Ejecutivo hará ahora en términos de apertura, lo que no hizo en los primeros tres años. Menos aun teniendo ya el control total del Congreso.³

La iniciativa social de 1988 apuntaba, sin duda, hacia una auténtica transición. Había que propiciar condiciones para consolidar un auténtico sistema de partidos. En agosto de 1988, Gabriel Zaid no se andaba con paños calientes:

Hay que acabar con el presidencialismo sin acabar con el país, hay que empezar por exigir el sufragio efectivo donde sí puede haberlo: en las elecciones menos importantes para el Gran Elector pero más importantes para los votantes locales: elecciones donde, además, no hay riesgo alguno para el país, si se declaran nulas, hasta que resulten convincentes. Si en Tabasco resulta elegido el primer gobernador cardenista y en Jalisco el primero panista, éstos sí que serían avances concretos.⁴

La secuencia de numerosas inconformidades electorales fue demostrando que la democracia, por muy invocada que fuera, no caería por su propio peso. El sexenio transcurrió entre los avatares de una democracia empantanada. En junio de 1993, Enrique Krauze haría un balance pesimista:

El sexenio [...] terminará sin dar pie a la gran reforma política que muchos esperábamos. Me parece un error múltiple.⁵

Lento y sinuoso camino

Las cifras oficiales habían registrado para el PRI el 48.7% de los votos en 1988. La escasa credibilidad que rondó aquellas elecciones demostró que la sociedad civil disentía abiertamente de un sistema electoral donde el gobierno actuaba como juez y parte. Dos meses después, se abrió una consulta pública en el Congreso y la Comisión Federal Electoral para plantear una nueva reforma. La composición de la Cámara obligaba al partido oficial, por primera vez, a pactar con la oposición para aprobar modificaciones constitucionales. Hubiera sido el momento de ponerle fin al tutelaje oficial de las elecciones. Para la sociedad civil se trataba, según Alberto Aziz Nassif, de

[...]cómo acercar el país legal y el país real. Para el PRI, en cambio, se trataba de mantener el control, una reforma sin riesgo de perder el poder en las urnas [...]. Los problemas de credibilidad, y en gran parte de abstencionismo, han sido producto de esta desconfianza social en las elecciones.⁶

Al principio, PAN y PRD buscaron evitar el control del gobierno sobre el proceso y la excesiva representación del PRI en los organismos electorales. También estaban de acuerdo en que los mecanismos de calificación no eran confiables. La ruptura de la alianza PAN-PRD para constituir la alianza PAN-PRI abrió el camino para aprobar una reforma constitucional, conservar el control de las elecciones, crear el Cofipe e introducir la cláusula del 35 por ciento.

Con una “mayoría calificada” integrada por legisladores del PRI y del PAN, que sumó 346 votos a favor, se aprobaron las reformas a siete artículos constitucionales.

La reforma se aprobó con la oposición del PRD, que sumó 70 votos en contra. La legislación reglamentaria se hizo a partir de propuestas del PAN y del PRI y fue aprobada en julio de 1990, con votación en contra de 65 legisladores del PRD y del Grupo Parlamentario Independiente y dos abstenciones. Los partidos “paraestatales” (PARM, PPS y PFCRN) se sumaron a la votación del PRI y del PAN. El nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) fue aprobado, de la misma manera, en el mes de agosto.⁷

Las reformas introdujeron un cambio significativo en la integración de la Cámara de Diputados. Se mantuvo el número total de 500 miembros, 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Pero el detalle estuvo en las reglas para asignar el número de diputados por representación proporcional. La llamada cláusula de gobernabilidad introdujo una reforma sumamente cuestionable al Artículo 54:

Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y 35% de la votación nacional, le serán asignados diputados de representación proporcional por el número necesario para que alcance la mitad más uno (mayoría absoluta) del total de integrantes de la Cámara de Diputados.

Además:

Al partido político que logre más triunfos de mayoría se le asignarán dos diputados de representación proporcional adicionales a la mayoría absoluta, por cada 1% de votación que obtenga por encima de 35% y por debajo de 60% de la votación nacional.⁸

Argumentando que México necesitaba “una presidencia como la que tiene hoy, con eficacia política”, y que estaba en juego “la viabilidad política del país”, se defendió la postura del PRI, que fue secundada por el PAN. El diputado Javier López Moreno, que formuló tales argumentos, hablaría después de una “coincidencia de coyuntura”, procurando negar la alianza política que permitió la aprobación de la famosa cláusula de gobernabilidad.⁹

El PRI se aseguraba la mayoría en la Cámara aun sin tener mayoría de votos: bastaría obtener, en 1991, el 35% de votación para alcanzar una mayoría absoluta y bastarían 105 constancias de mayoría para obtener 146 diputados más por representación proporcional. Al asignar a los que alcanzaran el 35% de votos más diputados de representación proporcional, el partido oficial podía confiar en la docilidad de la Cámara por el resto del sexenio.

Entre enero y junio de 1990 se negoció el nuevo Código Electoral. Para evitar el peligro de alianzas de última hora, como el Frente Democrático Nacional de 1988, se establecieron “candados” y prohibiciones para candidaturas comunes y coalicio-

nes: sólo una coalición previa, mediante convenio escrito, permitiría a varios partidos presentar un candidato común. Se creó un Instituto Federal Electoral con varios niveles y la variable, poco democrática, de que en las juntas locales y distritales los funcionarios sí tendrían voz y voto. La “profesionalización” de las funciones electorales se envolvió en el despliegue de una enorme burocracia que dejaría poco espacio a los partidos y los ciudadanos. Aunque había más equilibrio entre gobierno y partidos que en el código de 1986, abiertamente favorable al PRI, no se garantizó la transparencia electoral porque ninguno de los organismos creados sería realmente autónomo. Algunos avances se lograron, para dificultar un poco más la manipulación del padrón, *que es desde hace algunos años la técnica más usada para el fraude por los “alquimistas”*.¹⁰ La elección de gobernantes en el Distrito Federal y la representación proporcional en el Senado quedaron fuera de esa reforma.

Un análisis de Alberto Aziz Nassif reconoció avances, retrocesos y omisiones: persistió el régimen de partido *casi único* pero *con menos capacidad de maniobra unilateral*; al que lograra más votos (aunque sólo fuera el 35% del total) *se le daría un premio para que tenga mayoría*, y las decisiones electorales seguirían en manos del Poder Ejecutivo. En suma, *democracia tutelada, con avances y zonas de autonomía, pero al mismo tiempo con candados y restricciones*. Las reformas sucesivas habían sido siempre pragmáticas y respondieron, cada vez, a la relación de fuerzas del momento:

En el fondo de este incesante reformismo se encuentra un problema central: de qué forma transitar de un sistema autoritario de origen revolucionario y una representación corporativa de intereses a otro de corte democrático, con un sistema de partidos, una legitimidad proveniente de las urnas y una representación ciudadana.¹¹

Un parto difícil

Se habló, cada vez más, de un nuevo pacto capaz de sustituir al pacto corporativo de los años treinta. Pero no es fácil improvisar una cultura política para instrumentar la renuncia a la unanimidad y el respeto a la pluralidad. El monolito empezó a fragmentarse con el desgajamiento del PRI que dio origen al Frente Democrático en 1988. Por otra parte, se dio en los años ochenta un fenómeno inédito de polarización del descontento en el terreno electoral, de politización de movimientos sociales populares y de articulación de esa amalgama en una confluencia de frente amplio con voluminosos resultados electorales.

La presencia de la sociedad civil se fue mostrando decisiva para la configuración de una nueva cultura política que tendería a desbordar a los partidos. Estudiantes, comunidades eclesiales de base, grupos de colonos, campesinos independientes, de-

fensores de derechos humanos de diversa índole y mujeres se identificaron como *ciudadanos*, más allá de las fronteras partidistas. En la base del partido hegemónico y en las de otros partidos, y por encima de cualquier sigla, los votantes dejaron de aportar los votos seguros de la unanimidad.

En una encuesta de *Este País*, paralela a las elecciones de 1991, el 56% de los consultados dijeron no simpatizar con ningún partido, aunque los votos computados reflejaran un apoyo mayoritario al PRI. Probablemente sería válido aventurar que la adhesión a los partidos —al PRI y a los demás— había entrado en crisis, a la vez que había crecido la decisión de manifestarse a través del voto y de esperar que fuera tomado en cuenta. En síntesis, *la democracia es una aspiración de la sociedad*.¹² La nueva encuesta sobre *Valores de los mexicanos* de Enrique Alduncin registró, en 1987, dos rasgos muy significativos: el 70% deseaba *avanzar hacia un gobierno más democrático* y el 63% consideraba *deseable para México que otros partidos alcancen el poder*.¹³

La cuadratura del círculo seguía siendo cómo pasar de un régimen de presidencialismo autoritario donde el partido oficial, al que están adscritos forzosamente los sectores corporativos, goza de todas las ventajas a otro donde el ciudadano sea el protagonista del escenario político. El gran “candado” sería, por supuesto, el control del proceso electoral por el Estado.

En el difícil parto que la sociedad civil protagoniza, entre unanimidad y pluralidad, un factor clave para el alumbramiento de una democracia sana sería, claramente, la conquista de la democracia municipal. Fortalecer esa democracia exigiría, evidentemente, transferencia de recursos, puesto que el 80% de los recursos municipales siguen dependiendo de la voluntad federal o estatal. Surgió un cierto consenso entre analistas de diverso registro sobre la importancia de empezar, en el municipio, con la reversión del poder impune, que no le rinde cuentas a nadie. Mauricio Merino sugirió que:

[...] entendidos como clave de la organización social, los municipios pueden convocar a la participación de cada comunidad y distribuir entre ellas cargas y beneficios directos[...] *los dineros empleados en el desarrollo social estarían ligados así a la lógica de la democracia municipal*.¹⁴

Jorge G. Castañeda reiteró:

La responsabilidad municipal, con la supervisión y obligación de rendir cuentas ante movimientos populares urbanos y las instituciones ciudadanas, [...] puede representar la cuadratura del círculo[...].¹⁵

Sólo que, como advirtió Gabriel Zaid desde 1991:

*Si no se ha impuesto la limpieza en las elecciones municipales no es por razones de estrategia macroeconómica, sino porque los presidentes no han querido, como antes no quisieron abrir la economía.*¹⁶

Un recuento sucinto del calendario de la *in-transición* pone de manifiesto cómo, en el ajuste de posiciones que empezó a darse entre la sociedad civil y el Estado, siguió contando mucho la voluntad de arriba o, al revés, la ausencia de tal voluntad.

Fortalecer la democracia municipal sería un paso muy sólido para fortalecer a la sociedad civil y a la democracia representativa. Pero ha sido un camino muy lento: de 1983 a 1990 apenas se pasó del 1.7% al 5% de municipios gobernados por la oposición.¹⁷

El calendario de la *in-transición*

Los resultados de las elecciones de 1991 mostraron un viraje en el disenso de 1988 y devolvieron amplia mayoría al PRI. ¿Qué había pasado en esos tres años? Durante su campaña electoral, el candidato del PRI habló, en Puebla, de *reformas democráticas y progresistas a nuestras instituciones* y, en Chalco, de la *promoción de la democracia participativa* como lo opuesto a las *fórmulas corporativas del ayer*. Los propósitos democratizadores explícitos tropezaron con la realidad del control del gobierno sobre el conteo de los votos que, como ya había señalado desde 1947 Luis Cabrera, impide que haya *verdaderas elecciones*.¹⁸

La negativa a la demanda de abrir paquetes electorales manchó la credibilidad de las elecciones de 1988. Tampoco se aceptó la sugestión de Cárdenas, un día antes del último informe de Miguel de la Madrid, de revisar mil casillas de 60 distritos en donde la votación para un partido hubiera sido del 100%. La calificación de las elecciones presidenciales se realizó después de un Informe que fue interrumpido 12 veces por diputados de oposición. El dictamen fue aprobado, en medio de ruidosas protestas, el 8 de septiembre: no se había logrado hacerlo mediante un consenso democrático.

Los últimos meses de 1988 fueron de elecciones en la provincia: Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tlaxcala y Chiapas. En octubre de ese año se disolvió el FDN y sus líderes convocaron a la fundación de un nuevo partido: el PRD. El PAN, encabezado por Luis H. Álvarez, propuso en noviembre un *compromiso democrático*, pactó con el PRI la nueva Ley Electoral y renunció al enfrentamiento. Mientras la oposición panista se comprometía con un gradualismo pactado, para ir ganando posiciones, la oposición perredista se empeñó en la aventura de consolidar un partido en medio de hostigamientos que acentuarían el resquemor suscitado por las secuelas inmediatas del 88.

Dentro del PRI se inició una campaña de recuperación de apoyo en las bases, con un lema: “Seremos en los hechos partido del poder, no del gobierno”. Como lo demostrarían sucesivos conflictos electorales, el partido logró ganar numerosas elecciones, pero pocas veces logró convencer a la opinión de que efectivamente las había ganado. La falta de credibilidad se instaló como una constante de la *in-transición* a la democracia.

Esa *in-transición* se reflejó en un fenómeno sintomático de la constante intervención presidencial: los interinatos. La práctica, que fue bautizada después como *concertación*, fue diseñada como respuesta pragmática a la inconformidad de la oposición a la que se pretería apaciguar (sobre todo a la del PAN), negociando y soltando posiciones cuando parecía más conveniente que defenderlas para el PRI. Los primeros interinatos se dieron, sin embargo, como resultado de las elecciones de julio del 88, en estados donde había perdido notoriamente el PRI, y como punto de partida para recuperar control: así fue en Michoacán, en Baja California y en el Estado de México.

A mediados de 1989 se reconoció el triunfo del primer gobernador opositor: un panista ocupó el gobierno de Baja California. Las elecciones en Guerrero y el Estado de México fueron muy impugnadas y el PRI aceptó derrotas en algunas alcaldías de Yucatán: una alcaldesa panista gobernaría en Mérida. El desastre electoral provocó la salida del gobernador y la entrada de una gobernadora interina.

La XIV Asamblea del PRI, en septiembre de 1990, reflejó la efervescencia que habían generado las elecciones del 88. Se habló inclusive de un cambio de nombre, que convertiría al PRI en “Partido de la Solidaridad”. Se habló de desaparición de los sectores corporativos y del fortalecimiento de una organización territorial. Se convirtió a la CNOP en UNE, para atraer a movimientos populares que votaron hacia la izquierda en el 88. La reclamación democrática recorría las bases del partido en el poder, que querían tomar en serio la propuesta de “modernizarlo” y democratizarlo. Se aprobó, por fin, la *consulta a la base* para todos los cargos de elección popular, salvo la presidencia de la república, pero los intentos que se hicieron, en Nuevo León y en Colima, no parecieron convincentes.

El *boom* de los interinatos se dio en 1991. En Guanajuato se negoció un gobernador interino panista, sacrificando ese partido a su candidato Vicente Fox que reclamaba un abultado fraude electoral. Tras las elecciones del 18 de agosto, el gobernador que había sido declarado electo en San Luis alcanzó a durar apenas dos semanas, para ser sustituido por un gobernador interino del partido oficial. Allí, donde una Coalición Democrática del PAN, el PRD y el PDM había postulado al candidato del Frente Cívico Potosino, una marcha hacia el Zócalo que hubiera convocado multitudes frente a Palacio Nacional fue interrumpida a tiempo. Un gobernador “electo”, pero rechazado, fue sustituido por otro interino. El navismo, descrito por su gran movilizador como *el levantamiento del pueblo para recobrar su dignidad*,¹⁹ había reflejado siempre una demanda por el sufragio efectivo de evi-

dentes raíces maderistas. Quizá no haya un símbolo más puro de honda convicción democrática que aquel honorable médico de provincia que entregó su vida a defender, sin concesión alguna, el más simple y el más noble de los principios.

Elecciones a mitad del río

El 18 de agosto de 1991 hubo elecciones federales y, en algunos estados, para la gubernatura. El conteo oficial registró una reversión absoluta de la votación de 1988: el PRI habría ganado cerca de 5 millones de votos, mientras que el PAN obtenía sólo 800 mil más y el PRD perdía, en relación con la votación para el Frente en 1988, más de 3 millones. La recuperación del PRI se registró en nueve estados y en el Distrito Federal. Seis de los estados habían sido bastiones del FDN y cuatro del PAN: mientras el PRI recibía cerca de un 74% de votos más que en 1988, el PRD perdía el 91% de los votos que había aglutinado el Frente antes de volverse partido. Cerca de un millón de votos más en el Estado de México y 6 millones 700 mil en el Distrito Federal se sumaron a ventajas en Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Morelos. La recuperación en Michoacán significaba un 253% más de votos para el PRI y la del distrito de Chalco un 312%. La ventaja fue menor en aquellos distritos rurales donde hubo demasiadas reclamaciones de fraude en 1988. Las casillas “zapato”, que habían acumulado un 100% de votos para el PRI, ahora no fueron tan unánimes:

[...]es factible que ahora en 1991 se haya cometido un fraude de menor tamaño que da por consecuencia una menor cantidad de votos, dado que en esta ocasión no se tuvo que compensar la pérdida del voto urbano para el PRI.²⁰

Un examen pormenorizado de esos acontecimientos se encuentra en una investigación de Alberto Aziz y Jacqueline Peschard: *Las elecciones federales de 1991*. Resumiendo sus conclusiones, podría hablarse de una *restauración del partido dominante*; habrían crecido los votos para el PRI en distritos urbanos apareciendo zonas de partido único, otras de bipartidismo y las menos de multipartidismo. Habría una *caída fuerte del voto cardenista* mientras que el porcentaje de *voto panista* se habría mantenido *constante*, subiendo en términos absolutos. Los partidos que integraron el Frente habrían recuperado sus niveles anteriores al 88 y la creación de nuevos partidos, como el PT, no habría logrado distraer votos. Lo más notorio sería la relación inversamente proporcional entre PRI y cardenismo.

La recomposición del escenario político podría atribuirse a “recuperación de la imagen presidencial y difusión propagandística” de esa imagen y de Pronasol que, ayudada por la organización real que ese programa hubiera logrado, habría pesado

más en la balanza que el deterioro de la imagen del partido. También habría intervenido la “ingeniería electoral” que, con recursos de Pronasol, habría movilizado una prolija maquinaria de organización territorial y el acopio de votos en el campo a través de la intacta estructura caciquil y, por supuesto, la cibernética y el control de organismos electorales; la incapacidad de la oposición para cubrir y cuidar el proceso y el probable fraude e irregularidades, que salieron a la luz donde la elección fue muy competida, como en Guanajuato y en San Luis.

El hostigamiento y cierto desfase con las preocupaciones de los votantes había influido en el debilitamiento del cardenismo, agravado por mala designación de candidatos. La estrategia gradualista del PAN, para ir ganando posiciones, le había redituado ganancias y costos: le prestó su programa al partido en el poder y perdió terreno en su vieja pugna por la democratización, que habría podido avanzar si hubiera optado por una alianza con el PRD.

La democracia en compás de espera

La transición a la democracia habría entrado, en 1991, en un compás de espera. Unos días antes de las elecciones, el doctor Nava había advertido, en una entrevista que publicó Perfil de La Jornada:

El fraude no está en las casillas; [...] ahora es muchísimo más sofisticado y ya empezó. Allá en el 59 y en el 61 que llegaban las urnas y se las llevaban, ahora no va a haber necesidad de eso[...]. La última acción que hemos hecho fue retirarnos del Consejo Electoral, porque nada más estamos sirviendo de comparsas[...]. Estamos peleando porque realmente se den condiciones justas para que la gente vote. Que se insacule a los funcionarios de casilla como en el Cofipe, porque aquí los quieren designar.²¹

Gracias a la observación realizada en 750 de las 2 200 casillas instaladas en San Luis por 318 personas entrenadas en un programa piloto de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (que reunía a 120 ONG), se documentaron irregularidades de diversa intensidad en 350 casillas (casi la mitad de las observadas) y se comprobó que eran mucho más frecuentes en los distritos rurales. También se registraron violaciones numerosas a los derechos políticos. Un obstáculo importante fue, sin embargo, que los observadores independientes quedaron excluidos de los momentos cruciales del proceso electoral. En su testimonio de aquella experiencia, Sergio Aguayo Quezada comunicó su pesimismo:

[...]los derechos políticos en México están metidos en un laberinto sin salida. El gobierno y el partido en el poder son juez y parte del proceso electoral: ello lo distorsiona y lo enturbia. Pese a que

*no hay igualdad de condiciones, los partidos de oposición aceptan participar [...]. En realidad, lo más común es que fracasen, y cuando las autoridades electorales les informan que perdieron, descalifican el proceso antes validado con su participación [...]. Con el marco legal e institucional vigente no tiene ningún sentido votar[...]. Las ONG tal vez deberían olvidarse del voto y concentrar su trabajo en seguir promoviendo y apoyando la organización social.*²²

En un catálogo de demandas y denuncias que recopiló *Este País* aparecían los siguientes motivos de queja: irregularidades en la entrega de credenciales; represión o agresión; fraude; amenazas o intimidación; utilización de recursos públicos; irregularidades en instalación de casillas; lo mismo en los padrones; impedimentos a representantes de la oposición; destrucción de propaganda de partidos; carrusel; desatención por autoridades; extravío de boletas; robo o relleno de urnas y robo de credenciales o de boletas y varios más.²³

Sombra de duda o vencer sin convencer

El aplastante triunfo del partido hegemónico en aquellas elecciones a mitad del río no se dio en la transparencia: una *sombra de duda e incredulidad* quedó flotando entre los sorprendentes resultados y la suspicacia de una porción representativa de la opinión. La incierta confiabilidad del padrón y la entrega de credenciales; el control sobre los organismos electorales por una burocracia muy vinculada al PRI; la orquestación de una minuciosa ingeniería de captación de adhesiones con fondos públicos; la demora en la transmisión de resultados y la negativa de darlos a conocer casilla por casilla fueron los principales puntos débiles.

Un primer cuello de botella surgió al faltar equipo y materiales para expedir credenciales cuando había ya millones de empadronados. Tanto el PAN como el PRD alegaron, aunque no lograron demostrarlo, que había sobreempadronamiento en zonas que habían sido favorables al PRI en 1988 y lo contrario en otras de amplia votación perredista o panista. La credibilidad del padrón fue la piedra de toque durante los seis meses que precedieron a las elecciones.

Seguía la dosificación en la entrega de credenciales, que los partidos consideraron dolosa y que mostró, al término del plazo, un déficit del 35%. Según la exploración de Alcocer y Morales, hubo probablemente “trato preferencial” para el PRI en la etapa de empadronamiento, dándole prioridad al de sus electores asegurados. Sin embargo, la confiabilidad del padrón fue mayor que la de entrega de credenciales, donde se manejaron evidentes criterios de selectividad. Hubo desorden en la entrega realizada en los últimos días y destrucción precipitada de credenciales “sobrantes”. Un número significativo de ciudadanos con credencial no apareció, llegado el día, en las listas de casilla y no pudo votar.

El dominio de la estructura electoral, en las diversas instancias del IFE, por funcionarios favorables al PRI produjo, en la opinión de los analistas citados, un *resultado desconsolador*. Los *antecedentes de militancia priísta o la procedencia indudable de las altas esferas del poder público* tenía que reflejarse en las decisiones de quienes manejaron 300 consejos distritales y 32 locales.

El PRI logró influir en la designación de mesas directivas de casillas, cruzando simplemente el padrón de votantes con el padrón priísta. Y, por decisión del director del IFE, aparecieron el día de las elecciones “coordinadores de zona” (equivalentes a los “auxiliares” que los partidos de oposición habían logrado suprimir) bajo las órdenes de los presidentes de consejos distritales, que actuaron como *intermediarios* con los promotores del voto priísta.

Un *vasto operativo de promoción y control del voto* estableció una apretada red en distritos populares de 115 ciudades, manzana por manzana, para comprometer votos y conducir a los ciudadanos a cumplir el compromiso contraído con los promotores:

El ejercicio, pálidamente descrito, supone una capacidad de recursos y de movilización sólo realizable a partir de contar con todo el apoyo del aparato gubernamental.²⁴

Al añadirse a todo lo anterior la ineficiencia que demostró el flamante sistema de información montado por el IFE se cierra el círculo de sombra, la sombra de la duda, que envolvió a las elecciones de 1991. A la una de la madrugada del día 19, los partidos conocerían, a través de pantallas conectadas a un procesador central, los resultados preliminares. Pero las pantallas no funcionaron y, de viva voz, sólo se dio cuenta de 2 500 de las 8 mil casillas instaladas. El último reporte del IFE, tres días después, sólo cubrió la información del 70% de las casillas y esa información nunca se completó. El Sistema de Información de Resultados Electorales, que supuestamente estaría sólo en manos de técnicos, fue puesto bajo el mando de los presidentes de Consejos Distritales por orden del director del IFE, de modo que los técnicos no podían transmitir datos si no se les autorizaba.

Entre las novedades que aportaron esos comicios estuvo, sin duda, la copiosa asistencia a las urnas, que batió en retirada a la abstención. Donde acudieron más votantes crecieron más los votos del PRI. El partido anunció que se dedicaría a “seducir a la abstención” y la precisión de su ingeniería electoral le permitió “ponerle cifras a la victoria”: tanto, que *impresiona lo bien que le salieron los datos al PRI*, según los investigadores multicitados. Con tan espectacular recuperación en la votación urbana, bien hubiera podido calificarse como “mito genial” la antigua conseja de que el partido ganaba por los votos rurales.

Como corolario de su análisis, publicado en *Nexos*, Jorge Alcocer y Rodrigo Morales inferían:

El PRI se recuperó, es un hecho. Pero el escenario y las cifras repiten el viejo formato de *vencer sin convencer*. La sensación (y constatación en el caso de Guanajuato) de que hay un aparato multifacético y poco homogéneo que por encima de las urnas decide sus contenidos no se pudo despejar.²⁵

A medio camino de la refundación

A fines de 1991, la inconformidad en Tabasco con elecciones para el Congreso local y varias municipales motivó el *éxodo por la democracia*. Duró cerca de dos meses y culminó con la caída del gobernador y un nuevo interinato en el mes de febrero. Una movilización por la democracia municipal en Tabasco suscitó el apoyo de la corriente panista que estaba en desacuerdo con la política de alianza y logró una carta de apoyo del CEN del PAN para la nutrida protesta que llegó al Zócalo, donde se calculó una concentración de 50 mil personas.

En Chihuahua ganó ampliamente el candidato panista Francisco Barrio, de modo que no hubo lugar a dudas. En Michoacán, en cambio, el PRD sólo consiguió expulsar a un gobernador que, como el de San Luis, ya había tomado posesión para que lo sustituyera otro interino del PRI. Por otra parte, hubo interinatos motivados por razones extraelectorales. En mayo de 1992, en Jalisco, como consecuencia de las explosiones de un gasoducto de Pemex, y en enero de 1993, en Tlaxcala y Chiapas, por traslado de sus titulares al gobierno federal.

En la XV Asamblea Nacional del PRI, en 1992, se habló de una “refundación” y se procuró transformar a los viejos sectores en una Alianza Obrero Campesina y crear un Movimiento Territorial paralelo, para canalizar hacia el partido a líderes naturales localizados a través del Programa Nacional de Solidaridad. Con cerca de 10 mil “comités sociales de base” se intentó reestructurar al partido oficial y echar los cimientos de una nueva estructura. El presidente de la república puntualizó:

El nuevo PRI se reforma para vigorizar sus organizaciones. Esta reforma no es de siglas [...] sino de nuevas estructuras para conducir a la vida misma del partido, la sociedad que ha nacido [...]. En el barrio y la colonia popular, en las comunidades rurales, en los asentamientos contiguos a las grandes ciudades, ahí están las nuevas masas que deben formar las organizaciones territoriales populares del partido. Ése es el propósito del Movimiento Territorial Urbano Popular[...].²⁶

La presión del sector obrero desplazó el movimiento territorial hacia el antiguo sector popular, sugiriendo la añadidura de los dos términos que lo acotaron y le pusieron límites. La red ciudadana de organizaciones no acabó de cuajar y el

partido en el gobierno se quedó a medio camino de la “refundación”, entre una antigua estructura corporativa debilitada y una nueva semiabortada.

Transición transada

La alianza concertada con el PAN aseguró la mayoría constitucional que se requería para las reformas económicas. De partido en franca oposición, el PAN pasó a andar un difícil camino, a horcajadas entre la oposición y el gobierno.

La alianza entre la dirigencia del PAN y el presidente de la República se habría formalizado desde el inicio de la gestión salinista, aunque habría sido encaminada varias semanas antes de la toma de posesión. El compromiso habría sido respetar triunfos de Acción Nacional e incorporar muchas de sus tesis al proyecto de gobierno. La “alianza estratégica” habría comprometido al PAN, por su parte, a “legitimar en el ejercicio” al nuevo gobierno. En ese intercambio de compromisos, el sistema político mexicano, matriz de los gobiernos priístas, aceptaría en su seno al Partido Acción Nacional.²⁷

El PAN se había fundado cincuenta años antes, el 15 de septiembre de 1939. Manuel Gómez Morín culminó así un proyecto que empezó a concebir tras la fallida experiencia vasconcelista, de la que formó parte: “Proseguir la batalla por medios democráticos pacíficos”.

Profesionales de estratos acomodados coincidieron en la integración del PAN con empresarios, maestros y estudiantes. En sus principios doctrinarios se rechazaba la idea de un Estado “al servicio de una clase social”, como lo sugería el lema del PRM en la época de Cárdenas: “Por una Democracia de Trabajadores”. Se rechazaba la afiliación corporativa y se consideraba a la iniciativa privada como la fuente del desarrollo y el mejoramiento social. Desde su fundación, el PAN hizo profesión de fe democrática.

Registrado oficialmente en 1948, presentó candidato a la presidencia, por primera vez, en 1952. En los años setenta, el liderazgo de Adolfo Christlieb Ibarrola acentuó los vínculos de la ideología del partido con la doctrina social de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II. Se manifestó por una sociedad regida por la “libertad con suficiencia” donde no prevaleciera el poderío económico; por una educación que garantizara libertad de conciencia; por una empresa con responsabilidad social; por la democracia sindical y el fin del control estatal en el campo, por una amplia reforma electoral y por el ejercicio “intachable” de la justicia. Su programa sostenía:

El simple progreso material, las relaciones humanas sin libertad, la prioridad de las premisas técnicas sobre los supuestos humanos para resolver los problemas de la convivencia tal vez pueden producir un bienestar transitorio, pero nunca una renovación política y social.²⁸

En un *Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia*, hecho público el 16 de noviembre de 1988, el PAN señaló:

El poder que se construirá con base en los resultados oficiales del proceso electoral, aprobados sólo con los votos favorables de los miembros priístas del Colegio Electoral, únicamente podrá legitimarse ante los mexicanos con el buen ejercicio del poder mismo[...].²⁹

Al concluir su gestión al frente del PAN, Luis H. Álvarez habría confiado a un grupo de periodistas que, en noviembre de 1988, su partido decidió “legitimar en el ejercicio” al gobierno de Salinas.³⁰ Buscar “la unidad nacional”, objetivo formulado por Luis Donaldo Colosio al tomar posesión como presidente del PRI, significaría en buena medida contar con la anuencia del PAN para las reformas electorales y otras reformas constitucionales, a cambio de garantizarle ciertos triunfos. En los hechos se dio un estira y afloja, que a veces culminaría en alguna “concertación” no demasiado transparente.

El Partido Acción Nacional ganó dos gubernaturas en elecciones y una en negociación y varias alcaldías (Tijuana en 1989 y en 1992; Saltillo en 1990; Ciudad Juárez en 1992; León en 1988 y 1991; Ciudad Guzmán en 1991; San Luis en 1992; Guaymas en 1991 y Mérida en 1990), pero su disposición al diálogo tropezó reiteradamente con intentos del gobierno de ratificar “hechos consumados” que resultaban adversos al PAN en numerosos procesos electorales: el acuerdo no eximió al partido blanquiazul de tener que ir defendiendo, caso por caso, triunfos que se le escatimaron. Aunque para 1992 había pasado de 70 mil a 110 mil militantes, la simbiosis con el gobierno le costó la disidencia del Foro Doctrinario y Democrático en 1989 y su posterior escisión en 1992, con la salida de dirigentes de prestigio como Pablo Emilio Madero, Bernardo Bátiz, Jesús González Schmal y Eugenio Ortiz Gallegos.

La estrategia gradualista del PAN le permitió ir obteniendo espacios de poder en 95 municipios, tres gubernaturas, 142 diputaciones en congresos locales y 88 diputaciones federales. Pero parecía evidente que

[...]el gradualismo y el pragmatismo del PAN llegarán sólo hasta donde quiere el propio pragmatismo presidencial [...]. Para apoyar cambios que le favorecen en primer término renuncia a presionar por reformas profundas que conduzcan a una transición democrática profunda[...].³¹

El riesgo de que la *transición pactada* se quedara en *in-transición* desbordó a ese partido y afectó a la opción democrática. Al comprometerse a legitimar el proyecto del régimen lo hizo calculando, sin duda, que apoyaría la instrumentación de mu-

chas de las propuestas de su propio programa. Sin embargo, se señaló el peligro de que el mimetismo de la simbiosis desdibujara la identidad ideológica del partido con más tradición opositora del país y su inveterada pugna por el federalismo, la división de poderes, la democracia electoral y los derechos humanos y contra los excesos del autoritarismo.

Los disidentes del PAN se propusieron recuperar los principios de la doctrina social de la Iglesia que habían articulado el *corpus* ideológico panista, que se habrían perdido, según ellos, en un neopanismo adherido sin reticencias al proyecto neoliberal. Algunos que no abandonaron el partido, como José Angel Conchello, sostuvieron posturas independientes, implícitamente críticas, que harían ostensible la ambivalencia de un partido que habría cambiado, acaso con demasiada flexibilidad, el cuestionamiento por la interlocución.

En octubre de 1991, tres años después de la invitación al diálogo y la reconciliación que habían pretendido iniciar una transición pactada, el PAN lanzó una nueva propuesta para un *Consenso Nacional por la democracia para la justicia, en la libertad*. La propuesta incluía aumento de salarios mínimos y modificación de leyes laborales; incremento del gasto educativo hasta el 8% sugerido por la UNESCO y del gasto en salud hasta el nivel recomendado por la OMS; incorporar una mayor participación de la sociedad civil en la educación; transferir recursos de Solidaridad a estados y municipios; modificación de leyes agrarias “para corregir el minifundismo ejidal y no ejidal” y facilitar formas justas de asociación; devolverle al Poder Judicial su función originaria de tutelar el cumplimiento de las garantías individuales y volver autónoma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; devolver al Congreso sus facultades plenas; información pública de las negociaciones del TLC, con especial énfasis en la necesidad de mecanismos de compensación para mitigar perjuicios a sectores afectados. Se buscaba también la distribución de recursos entre la federación, estados y municipios; la elección de autoridades en el Distrito Federal; la equidad en espacios y tiempos en los medios informativos; el castigo a los responsables de delitos electorales y una *profundización amplia de la reforma electoral para garantizar equidad para los partidos*.

Algunas de esas propuestas encontrarían eco en las reformas constitucionales aprobadas al terminar el año de 1991. Otras quedaron pendientes.

Hostigada sobrevivencia

El Frente Democrático Nacional fue como una gran marea: una pleamar del descontento que fluía de múltiples movimientos populares, de las bases del partido en el gobierno y de muchísima gente sin partido. El PRD, que se fundó en mayo de 1989, empezó con una doble desventaja: la heterogeneidad de procedencias de sus

miembros y el hostigamiento que buscó acosarlo, dispersarlo y aniquilarlo. Lo que había sido su fuerza como movimiento fue su debilidad como partido: la pluralidad de adhesiones. Conciliar congruencia con pluralismo fue un desafío harto difícil cuando había que enfrentar, a la vez, acoso y acusaciones de intransigencia.

Los recortes al gasto social y el desplome del poder de compra del salario aceleraron la politización de movimientos que, a lo largo de los años ochenta, manifestaron demandas populares. La oportunidad electoral de 1988 propició su cohesión y fortaleció una presencia de la sociedad civil marcada por inquietudes de signo social, paralela a la que había surgido más a la derecha, sobre todo de signo político. Las múltiples demandas, incluyendo las de grupos desgajados de los sectores corporativos del sistema, sobre todo de la CNC y la CNOP, y de gente que pasó de alguna organización priísta al movimiento urbano popular, se articularon en 1988 a un proyecto político global, que prometía rescatar contenidos revolucionarios del Estado, pero con la modalidad de un rechazo a los controles autoritarios y de respeto a la sociedad civil.

Cuauhtémoc Cárdenas recogió todo aquel fermento como símbolo de una vuelta al camino de la primera Revolución Mexicana: *mito redivivo y candidato de una memoria histórica*.³² Catalizó una avalancha de emociones que coincidían en querer precipitar el desplome de un sistema bastante debilitado. *Punto de coincidencia y de confluencia*,

[...]el neocardenismo comenzó entonces a acercarse a la posibilidad de convertirse en el articulador de una gran coordinadora de los movimientos populares tanto del campo como de la ciudad y de llegar a constituirse él mismo en un amplio movimiento social de tipo político.³³

Como advirtió bien Jaime Tamayo (Universidad de Guadalajara), una aportación importante del neocardenismo fue ubicar a las numerosas demandas de democratización locales y aisladas en una demanda nacional por la democratización del sistema:

No es mera casualidad que *en respuesta a la amenaza que significa este movimiento político, resultado de la articulación del conjunto de los movimientos sociales, el Estado y particularmente la administración de Salinas de Gortari haya estructurado una política desarticuladora*: la concertación con los movimientos y organizaciones sociales de manera aislada y la promoción de partidos regionales[...].³⁴

Una estrategia de desarticulación buscó negociar, por separado, con grupos y personas para escindir la amalgama del Frente, ya debilitada al convertirse en PRD. Hasta un nuevo partido brotó de esa negociación: el PT.

El PRD había surgido con la bandera de la legalidad, sin renunciar a la reclamación de fraude en el 88, proponiendo vigencia plena para la Constitución y restauración de la República. Al tropezar con obstáculos para su registro, el Partido Mexicano Socialista le cedió el suyo. En mayo de 1989 se constituyó el nuevo partido con organizaciones de diversa procedencia: Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Consejo Nacional Cardenista, Convergencia Democrática, Consejo Nacional Obrero y Campesino de México, Organización Punto Crítico, Partido Liberal, Movimiento al Socialismo, Grupo Polifórum, Asamblea de Barrios, OIR-Línea de Masas, Fuerzas Progresistas, Partido Verde y Partido Mexicano Socialista.³⁵ Un *melting pot* abigarrado, sin duda, que agudizó sus contradicciones al acentuarse diferencias entre partidarios de la concertación y de la confrontación.

La alianza del PRI con el PAN contribuyó a encerrar al PRD en un callejón más bien estrecho, estigmatizado como la oveja negra de una oposición intransigente y reacia al diálogo. La intransigencia del gobierno no facilitó, por cierto, una determinación objetiva de quién empezó primero. Acciones y reacciones fueron, así, retroalimentándose.

La negativa sistemática a reconocer triunfos del PRD empezó a mediados de 1989 en Michoacán, donde no se le acreditaron victorias en muchas alcaldías. Eso ocurría mientras en Baja California se ratificaba el triunfo de un gobernador y tres alcaldes panistas. En diciembre de 1989, militantes perredistas armados tomaron la sede del ayuntamiento de Jungapeo, en Michoacán. En Guerrero (Chichihuapan, Teloloapan y Arcelia) hubo desalojos de ocupantes de palacios municipales que hacían plantones: hasta 20 ayuntamientos permanecían tomados por perredistas.

Pero la escalada de violencia se había iniciado durante el proceso electoral de 1988, cuando el responsable electoral del FDN fue asesinado. Tres perredistas muertos el 1º de enero de 1990 en Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron el detonador de una secuela de enfrentamientos en Alcozauca y luego en Teloloapan, donde perredistas armados tomaron de nuevo el ayuntamiento, hasta que se les reconoció el triunfo electoral:

El gobierno federal recurrió a la movilización de tanquetas y efectivos del ejército en operativos dirigidos a desactivar protestas del PRD. Una espiral de violencia: cada 36 horas de los primeros cuatro meses de 1990, moría un perredista por un conflicto político. Rasgos de *guerra sucia*.³⁶

El incidente de Tejupilco, Estado de México, al terminar 1990 culminó una etapa de hostigamiento y respuesta violenta y marcó el principio de cierta distensión. Un grupo de policías pretendió desalojar a mujeres que intentaban entrar al palacio municipal, alegando un fraude que negaba el triunfo electoral del PRD. El incidente terminó a balazos con metralletas, pistolas y escopetas. La Comisión

Nacional de Derechos Humanos concluyó que había tantos policías como perredistas armados. La Comisión de Derechos Humanos del PRD señaló, en abril de 1993, que habían muerto asesinados hasta ese momento 209 afiliados a su partido, sin que en ningún caso hubieran sido aprehendidos los culpables. Las muertes se habían producido, sobre todo, en Guerrero y Michoacán, en Oaxaca y en Puebla. A lo que se añade la cifra de 1 537 casos de represión registrados por el Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro, entre tortura, lesiones, desapariciones y detenciones.³⁷

El hostigamiento contribuyó, sin duda, a debilitar al PRD, que además de la represión abierta fue sometido a una persistente difusión publicitaria de su imagen como la de una organización irresponsable y proclive a la violencia. Las pugnas internas no sirvieron precisamente para balancear ese debilitamiento. Salieron del PRD varios de sus miembros prominentes, procedentes todos del PSUM y algunos del MAP y del PMS y partidarios de la concertación: Jorge Alcocer, Pablo Pascual Moncayo, Adolfo Sánchez Rebolledo y José Woldenberg. Se adhirieron, en cambio, Rodolfo González Guevara y el general retirado Alberto Quintanar.

Las elecciones de 1991 marcaron un clímax para la recuperación electoral del PRI (coincidente con el repunte económico, los avances de Solidaridad y quizás algunos recursos menos legítimos) y el punto más bajo de decaimiento del PRD. De acuerdo con las cifras oficiales, su porcentaje de votantes habría descendido del 30% a poco menos del 9%. Si en julio de 1989 no había podido impedir el fraude en su propio baluarte michoacano, tampoco en 1991 pudo impugnarlos en otros sitios y se limitó a reclamaciones verbales y a su difusión en el exterior. En 1991, el PRD hizo causa común con el movimiento cívico de Salvador Nava en San Luis y, al cerrarse el año, mostró un nuevo aliento con el *éxodo* tabasqueño, que empezó reclamando triunfos municipales y propició la caída de un gobernador desprestigiado.

La contienda por la gubernatura de Michoacán acabó en nuevo interinato: aunque el PRD no consiguió demostrar ampliamente su triunfo en las urnas, sí dejó en entredicho a un ganador que carecía de simpatías populares. En Guerrero se insistió en la toma de alcaldías, aunque sin resultados importantes. No obstante, las fuerzas perredistas estaban maltrechas pero sobrevivían. Lo cual no dejaba de ser notable dada la intención tan notoria de aniquilarlas que se había desplegado. En febrero de 1992 pareció abrirse un diálogo con el gobierno por iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo, aunque persistió el discurso muy crítico de Cárdenas hacia las recientes reformas legislativas y el conjunto del proyecto económico. A mediados de 1993, el PRD presidía 90 ayuntamientos en 12 estados de la república, de los cuales 42 estaban en Michoacán.

Diversos análisis han coincidido en que la estructura del PRD es débil y no ha logrado afianzarse en la mayoría del país. Aunque ese partido cuenta con comités de base en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de Méxi-

co, Morelos y Tabasco, integrados por militantes incorporados por las diversas fracciones y por otros sin militancia previa, acaso la porción más considerable de sus simpatizantes no estaría integrada formalmente a su estructura política. Se trata de una vasta y difusa masa de inconformes, que se movilizarían eventualmente para expresar reivindicaciones y descontento:

Evidentemente, éste es uno de los graves problemas del PRD: el hecho de que su principal base social no esté integrada en su estructura.³⁸

La organización de un partido es un desafío harto complejo y más en las adversas condiciones en que le tocó procurarla al PRD.

Se ha identificado como núcleo de ese partido al grupo de dirigentes que, a pesar de sus diversos orígenes, dedican mayores esfuerzos a sus labores partidarias que a sus compromisos de grupo: convencidos de la necesidad de consolidar la nueva estructura, procurarían integrar una posición coherente de centro-izquierda, trascendiendo filiaciones anteriores. Varias corrientes y grupos se ubicarían en distintas tendencias, en torno a ese centro.

En la Corriente por la Reforma Democrática se sitúan académicos, procedentes del Movimiento de Acción Popular (MAP), aunque muchos salieron en 1990. La llamada trisecta, plurisecta o *six pack* se autodenomina Convergencia Democrática. Allí coinciden la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) del excandidato a la presidencia del partido Mario Saucedo; miembros del Partido Patriótico Revolucionario (PPR); exmaoístas del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP); exafiliados a la Organización Independiente Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM) y a la Unión de Lucha Revolucionaria y seguidores del diputado René Bejarano, que estuvieron en el Partido de la Revolución Socialista (PRS). Los antiguos comunistas llegaron tras sucesivas adhesiones al PCM, al PSUM y al PMS y han manifestado diversas tendencias, desde la fidelidad a viejas ortodoxias hasta la simpatía por el eurocomunismo y la *glasnost*. El grupo de Punto Crítico no rehuiría la confrontación y tiene su propio órgano de difusión: *Corre la Voz*. En agosto de 1993 se esbozaba la aparición de una nueva corriente, en torno a Heberto Castillo y para enfrentar a la línea de Porfirio Muñoz Ledo. En el segundo Congreso Nacional, a mediados de 1993, todas las tendencias se manifestaron públicamente en un debate abierto que no pasó por alto deficiencias de la organización y necesidad de cambios.³⁹

El PRD se ha identificado a sí mismo como vinculado a una corriente latinoamericana de *movimientos políticos de renovación democrática* que incluye al Partido de los Trabajadores de Brasil, que encabeza *Lula*; a Izquierda Unida del Perú y al Frente Sandinista de Nicaragua entre otros. Por otra parte, ese partido ha buscado activamente el apoyo de grupos chicanos en los Estados Unidos, país visitado en repetidas ocasiones por Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha recalcado que las relaciones

entre México y sus vecinos deben ser estrechas en todos los ámbitos. Los perredistas han promovido el derecho a votar de los mexicanos residentes en Estados Unidos. El PRD ve con simpatía la presencia de observadores extranjeros en las elecciones, sosteniendo que es una garantía más para la democracia.

Es probable que la reiterada crítica a la escasa organización partidaria del PRD no sea, después de todo, tan pertinente. Acaso la experiencia de fenómenos electorales que trascienden a los partidos y de mareas de opinión mucho más amplias que los límites rígidos de una estructura partidista son rasgos que reflejan la nueva configuración social de países, como los de Latinoamérica, en accidentado tránsito hacia la modernización política. Si las estrechas concepciones de partidos “de clase” de la antigua izquierda han perdido vigencia, también la ha perdido la concepción corporativa con pretensión de abarcar “a todas las clases”, como fue el ejemplo paradigmático del PRI.

Jorge G. Castañeda ha señalado, en su minuciosa reflexión sobre *La utopía desarmada*, que los *movimientos* pueden tener acaso hoy más ductilidad que los partidos para cohesionar a los crecientes brotes de organización popular que genera la sociedad civil:

[...] los éxitos más importantes de la izquierda en los últimos años son todos del tipo “movimiento”. La coalición de *Lula* en 1989 en Brasil, el Frente Democrático Nacional de Cárdenas en 1988 en México, la Coalición del NO en 1988 en Chile son ejemplos de ello. Todos esos frentes electorales fueron amplios, muchas veces inmanejables, pero con coaliciones ricas en diversidad[...].⁴⁰

Esa diversidad parecería ser signo de los tiempos. Más allá de las pugnas y diferencias cupulares en los partidos, que les resultarían más o menos útiles o perjudiciales según el caso, la diversidad de apoyos en las bases sería un síntoma de vitalidad que reflejaría a una sociedad plural y lanzaría augurios de parto feliz, en un plazo no demasiado lejano, de la tan esperada democracia.

La gran ausente

La primera mitad del sexenio culminó con la reforma al Artículo 27 constitucional, que anunció los cambios a la Ley Agraria. Las bases para la modernización económica, que requería la futura aprobación del TLC, acababan de configurarse. Pero la democracia seguía ausente. El mismo Zaid que había observado, en mayo de 1991:

[...] hay que decir que, si tuviéramos democracia desde hace mucho tiempo, no hubiera sido necesario un viraje tan retrasado y brusco [...] ya no es tan fácil asustar a los

mexicanos con los desastres que pudieran ocurrir si la democracia empieza demasiado pronto, antes de sanear la economía[...]. La *democracia se justifica por sí misma*, no por los buenos resultados económicos que con frecuencia la acompañan. La monocracia no se justifica como mal necesario para justificar los buenos resultados económicos[...]

y había advertido en agosto, cuando se hablaba de reelección después del triunfo electoral:

[...] la sociedad y el Estado en México viajan juntos, duermen juntos, pero tienen sueños diferentes: *la sociedad sueña con la democracia*, el Estado con la restauración[...]

señalaba, en diciembre, los *sobregiros de la confianza*:

Se ha avanzado poco en el nivel real, mucho en el financiero y demasiado en el de confianza [...]. *Si no hay avances en el nivel real, el apalancamiento excesivo en las promesas de modernización puede acabar con el milagro*[...].⁴¹

Poco antes de las elecciones de 1991, Lorenzo Meyer había reflexionado sobre la abstención en procesos electorales de Morelos y el Estado de México, y habló de una *desmovilización por la vía del fraude*, capaz de disuadir a votantes jóvenes sin arraigada cultura política:

La democratización sigue en la agenda, pero las posibilidades de que esa prioridad sea asumida como propia por un número tan grande de mexicanos, como ocurrió en 1988, son muy pocas.⁴²

Meyer recordaba el fraude en zonas rurales de las “casillas zapato”, que en 1988 encabezaba Chiapas, con el 100% de votos para el PRI. Unanimidad que había podido moderarse en las elecciones de agosto de 1991 gracias al manejo de recursos “más sofisticados”, como diría el doctor Nava. El padre Miguel Concha llamaría la atención, sin embargo, sobre procedimientos de disuasión menos “sofisticados”, denunciados por Americas Watch y por el Centro Fray Bartolomé de las Casas:

Ejecuciones arbitrarias, torturas, expulsiones y desalojos de campesinos, agresiones físicas, privación ilegal o arbitraria de libertad, extorsiones. La enumeración de estas violaciones a los derechos humanos refleja, muy tímidamente, el clima prevaleciente en Chiapas.⁴³

El 23 de diciembre de 1991 comenzó, en el crematorio de San Juan de Aragón, la quema de boletas de las elecciones de 1988. Con esa decisión, tomada por la Cámara alegando que faltaba espacio para seguir almacenándolas, desaparecieron

para siempre los paquetes de 24 643 casillas (un 45% del total) cuyos resultados nunca se hicieron públicos, que se volvieron cenizas antes de que alguien pudiera abrirlos para limpiar definitivamente la elección o para poner en evidencia su falta de limpieza. Las cenizas de San Juan de Aragón habrían sido, en palabras de Carlos Ramírez, *las cenizas de la democracia*.

La reflexión sobre la democracia prosiguió, en 1992, con un agudo cuestionamiento de Federico Reyes Heróles, centrado en una premisa: mientras el presidente sea el único que decide quién ganó tal o cual elección o el que valora el peso de las presiones populares para decidir si debe haber o no concertación, *todas las elecciones serán un fracaso*. En ese sentido, lo fueron las de 1991: *no en las cifras, sino en la imagen de México ante el mundo y de México ante los mexicanos*.⁴⁴

Carlos Monsiváis recordó, en mayo, que la sociedad civil no puede ser entendida sólo como *el sistema de relaciones públicas del gobierno con unos cuantos ciudadanos*, mientras Demetrio Sodi confió en los *nuevos bríos* y la *presencia nacional* de una *nueva sociedad plural que rechaza el centralismo*.⁴⁵

La fundación del Movimiento Ciudadano por la Democracia, el 18 de mayo de 1992, pareció confirmarlo. El doctor Salvador Nava, gravemente enfermo de cáncer, hacía un vibrante llamamiento a no posponer más la democracia, *cimentación sobre la que deben edificarse todas las soluciones*. El movimiento encauzaría todos sus actos por vías pacíficas y propiciaría la concertación para *un acuerdo de tránsito convenido y pacífico*. Se buscaría la validez del sufragio efectivo sobre la selección presidencial de sucesor; la observación nacional e internacional de los procesos electorales; la capacitación de ciudadanos para la defensa de sus derechos constitucionales; la difusión en todo el país del avance de la lucha cívica y la creación de una conciencia internacional de las violaciones a los derechos humanos. La gran lección de Nava fue buscar el consenso del mayor número sobre un mínimo de metas concretas.

La primera mitad de 1992 había contemplado también un Coloquio sobre *Los grandes cambios de nuestro tiempo* en el mundo, en Latinoamérica y en México. Para Héctor Aguilar Camín:

El verdadero rostro de nuestra opresión no es político, sino social [...]. *La desigualdad, no la democracia, es el problema difícil de México*. Dirigir nuestra política a la solución razonable de la desigualdad es, a mi juicio, la gran opción nacional, la gran tarea civilizatoria que hará verdaderamente viable nuestra modernidad.

Roger Bartra criticó la visión estrechamente economicista y tecnocrática para sostener que

[...]ya no es posible disociar la democracia de la legitimidad. Ahora necesitamos una *legitimidad democrática* que impida que los poderes públicos vayan a buscar en la coop-

tación y manipulación de campesinos, sindicatos e intelectuales la legitimidad que no se ha obtenido en las urnas.

González Pedrero hizo hincapié en la democracia municipal:

Cuando en cada uno de los 2 378 municipios, el voto de cada uno de sus ciudadanos cuente y se cuente [...], ese día México habrá aprovechado y reunido sus átomos, hoy dispersos y sin autonomía real [...] y habrá formado una enorme corriente de energía [...]. Ya que no podemos dar casas a todos, démosle palacios municipales al pueblo.

Rolando Cordera reconoció que el paradigma neoliberal de una sociedad *de mercado* no puede ofrecer democracia y bienestar y que

[...] significa una destrucción del tejido social básico y un arrinconamiento de la comunidad y la solidaridad hasta su sofocamiento.

La autora de este libro anticipó la pregunta que ha sido el hilo conductor de su reflexión en los últimos tres años: *¿Qué pueden hacer los pobres por sí mismos y cómo es factible propiciar que encuentren los recursos para hacerlo?:*

La gente busca, por todas partes, soluciones pequeñas y locales para resolver carencias que son manifestaciones de grandes problemas globales. [...] Favorecer esa iniciativa [...] es una opción realista para empezar a salir, por fin, de las trampas del desarrollo. También en el dilema entre tradición y modernidad *las opciones pueden ser múltiples pero tienen que pasar, necesariamente, por la democracia.*⁴⁶

La democracia podía estar ausente en muchísimos aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos, pero estaba enormemente presente en la preocupación de casi todos. Lorenzo Meyer, que acababa de publicar *La segunda muerte de la Revolución Mexicana* y volvía de una prolongada estancia en el extranjero, había recuperado esperanzas en la decisión de la sociedad civil de abatir el autoritarismo: la presión cívica que había evitado, en San Luis, la virtual reelección del gobernador interino era el motivo. Sin embargo, Meyer no lo veía factible antes del año 2000.⁴⁷ Carlos Fuentes puso el dedo en la llaga de la *credibilidad*, al referirse a lo turbio de la “reforma política”. La gente no cree que su voto cuente y eso pone en grave peligro la estabilidad del país:

La sociedad civil se moviliza constantemente. Yo espero que dentro de los próximos años se movilice de una manera perfectamente normal, en la que considere que su participación en el proceso electoral, en el voto en las casillas, sea suficiente para asegurar que la persona que quieren las mayorías sea la persona electa.⁴⁸

El tema de la reelección había quedado cancelado el 29 de octubre, cuando el propio presidente de la República declaró desde Los Pinos, con un retrato de Madero como telón de fondo, que no promovería ni aceptaría la promoción de *ninguna iniciativa que intentara modificar el principio de la no reelección*. La opinión pública se oponía, como lo declaró en diciembre Juan Sánchez Navarro a *Este País*, cuando esa revista recogió comentarios de intelectuales, periodistas, empresarios y políticos. Carlos Ramírez percibió el consenso que flotaba en el aire: ¿cómo podía pensarse en reelección sin alcanzar antes una auténtica democracia?⁴⁹

La realidad tocaba a la puerta

El año de 1993, de extremada contracción económica, hizo dudar a algunos de la solidez de reformas que parecían todavía “prendidas con alfileres”. Aunque el país legal era indudablemente otro: 17 reformas constitucionales habían completado las 54 del período anterior, y 83 modificaciones a leyes secundarias cerraban el círculo de la modernización. La aparición de Bill Clinton llenaba de esperanzas a los que proponían acelerar el advenimiento de la democracia. La convocatoria a un plebiscito sobre la elección de gobernantes en el Distrito Federal ocupó la atención poco después de comenzado el año. La iniciativa surgió de algunos miembros de la Asamblea de Representantes (Demetrio Sodi entre ellos) y despertó entusiasmo en los sectores con más cultura política, aunque la escasa difusión que le dieron los medios y la ignorancia de la mayoría sobre la naturaleza de ese procedimiento no permitía esperar resultados espectaculares. La organización del plebiscito fue, sin embargo, ejemplar y demostró lo que podían hacer los ciudadanos por iniciativa propia y sin apoyo oficial alguno.

La cena de los 25 millones de dólares, el 23 de febrero, levantó acerbos críticas en la prensa, nacional e internacional. Se había convocado a treinta de los más grandes empresarios del país para solicitarles una aportación de ese respetable monto para sanear las finanzas del partido oficial. Octavio Paz juzgó *demasiado lento y sinuoso* el tránsito hacia un país democrático y plural y escribió:

La cuestión de la democracia es vital para la gran mayoría de los mexicanos. Lo es porque la salud política de una nación no es menos importante que su salud económica [...]. Debe evitarse, hasta donde sea posible, que las inmensas desigualdades económicas y sociales que padecemos desnaturalicen y corrompan las contiendas electorales. La democracia es un sistema fundado en la credibilidad quebrantada por años y años de vicios e irregularidades.⁵⁰

Los avatares de la democracia en México eran objeto de curiosidad constante en medios extranjeros. También en febrero, la revista inglesa *The Economist* hacía una

punzante radiografía de la situación política: perpetuar la tradición de gobierno bajo un hombre fuerte parecía lo contrario de la modernización. Christopher Wood consideraba *ambivalente* la actitud presidencial frente a *las virtudes de la democracia* y dudaba del convencimiento, en el más alto nivel, de *los méritos intrínsecos del sufragio efectivo*.⁵¹ En abril, *Este País* interrogó a académicos y comentaristas extranjeros y también a mexicanos. Roderic Ai Camp (Universidad de Tulane) señaló que los que deciden

[...] no han llegado al punto de evolución en el que estén dispuestos a respetar los resultados de las elecciones, que es el punto definitorio de una verdadera democracia.

Chathryn L. Thorup (directora del Centro de Estudios México-Estados Unidos, Universidad de San Diego) fue más allá:

Si el gobierno obstaculiza el proceso o lo prolonga mucho, se autocondenará a ser un testigo en lugar de un participante en la democratización de México [...]. En esta transición será de suma importancia la participación activa de la sociedad civil mexicana y de los grupos no gubernamentales.

Mientras Lorenzo Meyer habló de *un sistema autoritario a la defensiva*, también calificó la transición como *larga marcha* de la sociedad para acumular la energía y capacidad de organización que permitirían el cambio. Granados Chapa puso el énfasis en la democratización del partido oficial, que podría darle acaso una presencia decisiva en el tránsito hacia la pluralidad.⁵²

Juan Sánchez Navarro, calificado en *La Jornada* como “el principal ideólogo del sector privado”, también fue explícito:

[...] creo que el gobierno todavía no ha salido del ámbito del presidencialismo, que en cierta manera es el reflejo de esta sociedad desigual que históricamente ha caracterizado a México, y por consiguiente la vida democrática es muy débil, es precaria[...]. Va mucho más lenta la modificación política que la económica.⁵³

Por los mismos días, el PRD presentaba los nuevos ejes de su *proyecto de nación*. Porfirio Muñoz Ledo resumió propuestas que, quiso puntualizar, no pretendían restaurar un estatismo anacrónico, centrado en el poder de un solo hombre, sino

[...] el respeto a la pluralidad, la recuperación de las autonomías políticas y la irrupción de un poder ciudadano diverso y múltiple, que aspira a replantear las relaciones entre la sociedad y el Estado.⁵⁴

Entre los propósitos manifiestos se contaban: asegurar el equilibrio entre los poderes y un auténtico federalismo; favorecer, en lo fiscal, a estados y municipios; ponderar un equilibrio entre Estado y mercado; trascender el “capitalismo salvaje” y promover la productividad en todos los ámbitos y no sólo en el financiero. El proyecto reconocía la necesidad de inserción del país en la economía mundial, pero criticaba puntos concretos de lo negociado en el TLC.

Aunque Enrique Krauze dudaba de la sinceridad del rechazo del “estatismo anacrónico” por el PRD, advertía que si el “populismo estatista” volvía al poder *no se acabaría el mundo*:

[...] los temores de que eso ocurra no son una razón admisible para mantener la inercia de nuestra vida política [...] las fuerzas reales de la economía global y nacional revertirían en un santiamén cualquier cambio en ese sentido[...] en cualquier caso, nada justificaría el bloqueo o la posposición de la democracia.⁵⁵

Bajo el lema de *Libertad y Justicia*, los dos puntos de apoyo de la doctrina del *liberalismo social*, el Instituto Nacional de la Solidaridad convocó en junio a un seminario para debatir sobre los cambios en el mundo contemporáneo y los papeles del Estado, el mercado y la sociedad en el bienestar de los pueblos. Carlos Fuentes hizo una síntesis de sus puntos de vista, expresados reiteradamente:

Basta de aplazamientos, basta de mentiras, basta de decirnos desarrollo económico hoy, pero democracia sólo mañana y justicia quizá pasado mañana. O justicia hoy, pero desarrollo sólo mañana y democracia para qué si nunca la ha habido. *La demanda latinoamericana es desarrollo con democracia y con justicia ahora*[...].⁵⁶

Fuentes había abundado, en entrevistas previas, sobre sus más insistentes *leitmotivs*: sólo se puede gobernar *con* la sociedad civil, que ha rebasado en sus iniciativas tanto al gobierno como a los partidos políticos; la gente debe poder elegir a sus gobernantes desde la base, desde los municipios; el federalismo tiene que practicarse. Volvió a reclamar contrapesos para el gobierno; separación de poderes; difusión descentralizada de iniciativas locales. González Pedrero fue igualmente claro:

[...] *si hubiera que escoger qué es primero, yo votaría por la democracia*. Y lo haría en la plena confianza de que la democracia crearía las condiciones capaces de proporcionar los mejores niveles de vida[...]. *La democracia política es el camino de México. La democracia no es la panacea*. Tampoco lo es la aplicación de recetas tecnocráticas. *Pero la democracia tiene una ventaja. Con la democracia todos podremos opinar sobre los problemas y las soluciones del país*.

El exgobernador de Tabasco habló de lograr una *democracia ampliada* donde todos los ciudadanos puedan participar, desde sus comunidades, en las decisiones políticas y donde se protejan *todos* los derechos humanos. Habló de la necesidad de reconocer la pluralidad del país; de volver vigente, por fin, el federalismo y de confiar en los 32 estados, en los 2 378 municipios, en las más de 120 mil comunidades: de confiar en la sociedad civil. ¿Qué ocurriría si esa verdadera y profunda *modernización* no se realizara?

Ocurriría que, tarde o temprano, el Estado tendría que enfrentarse a una incontrolable proliferación de demandas, exigiendo respuesta, sin tener cómo ni con qué resolverlas. Ocurriría una crisis mayúscula de *ingobernabilidad*.⁵⁷

Tiempo agotado

Coincidiendo con Gabriel Zaid en la certeza de que no habría modernización posible sin democracia, Luis Rubio insistió en encontrarle solución política al problema económico, cuyo talón de Aquiles estaba, precisamente, en la transición atorada. Observando el atasco desde el mirador económico Rubio advertía que, a pesar de los avances macroeconómicos, numerosos impedimentos frenaban la inversión privada y la recuperación de empresas medianas y pequeñas. La inercia autoritaria *también* atoraba la economía:

El gobierno se enfrenta a un dilema cada vez más claro y más difícil. *Todo lo que ha construido en casi una década podría venirse abajo*. Pero evitarlo bien podría implicar el fin del sistema político tradicional. [...] *En lugar de aprovechar la oportunidad de conducir el cambio político*, sobre todo porque el éxito de la reforma económica obliga a hacer profundos cambios en este ámbito, *el gobierno se empeña en preservar lo que ya no tiene futuro*.⁵⁸

¿Acaso ese argumento sería más accesible a quienes todavía se resistían a entender, como había afirmado contundente Zaid, que *la democracia se justifica por sí misma*?

En julio se planteó, por el PRI, una nueva Reforma Electoral: crear una tercera senaduría por cada estado, eliminar la cláusula de gobernabilidad, terminar con la sobrerepresentación y ponerle fin a la autocalificación de los legisladores. Una carta del presidente de la República a Porfirio Muñoz Ledo buscó demostrar disposición a la apertura. En la presentación de un libro que hacía un balance de la mitad del sexenio, Lorenzo Meyer advirtió que la democracia requeriría *que una élite y su proyecto se pongan en la balanza de la voluntad de la sociedad por la vía de las urnas* y Miguel Ángel Granados Chapa señaló *la falta completa de una reforma política como la deficiencia central de la actual administración*.⁵⁹

Cuatro cambios constitucionales fueron aprobados el 30 de agosto de 1993, por una mayoría PRI-PAN que sumaba dos terceras partes de la Cámara: la duplicación del Senado, con cuatro en vez de dos representantes por estado; el impedimento a cualquier partido para alcanzar por sí solo la mayoría de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, prohibiendo alcanzar más del 63% de las curules; la posibilidad de aspirar a la presidencia para los hijos de extranjeros; la creación de un nuevo Tribunal Federal Electoral como árbitro final para las disputas en la elección de diputados federales y senadores. La nueva Reforma Electoral se completó con modificaciones a la Ley Electoral (Cofipe), aprobadas el 15 de septiembre por el PRI y el PAN.

La preocupación por el padrón electoral continuó y se consideró esencial la exposición pública de la lista por casilla, cuando menos un mes antes del día de elecciones. Las nuevas disposiciones establecieron selección del personal de casillas mediante dos procesos de insaculación, en vez de uno, con resultados disponibles en cada casilla. Se utilizarían cabinas para votar, en vez de mamparas. Los partidos recibirían copia oficial de los resultados el mismo día, aunque se facultaba al gobierno a tomarse tres días para elecciones de diputados federales y una semana en las presidenciales.

Un análisis del Centro Carter reconoció que las reformas *reducirían gradualmente el control del gobierno sobre el IFE*, pero consideró que *mantienen la influencia necesaria —particularmente en el proceso electoral de 1994— para modificar los resultados, si esto fuese necesario*. Aunque harían falta dos tercios de votos del Consejo General del IFE —donde están representados todos los partidos— para designar a los directores de cada área de ese Instituto y se reduciría la presencia del gobierno en consejos locales y distritales,

[...] *los partidos de oposición sienten que las reformas no van suficientemente lejos como para garantizar la independencia del IFE con respecto al PRI y el control gubernamental.*⁶⁰

No se especificaron fórmulas, criterios ni límites concretos para los gastos de campaña; se restringieron las contribuciones a los partidos, pero con límites muy altos; el IFE establecería tiempos de radio y televisión, pagados por el Estado, para cada partido, pero no se modificaban los favoritismos en la información de los grandes canales de TV. Se dificultó todavía más la formación de coaliciones. La presencia de observadores nacionales se permitiría, pero en condiciones muy restringidas. El estatus de los observadores internacionales no quedaba claro. El análisis del Centro Carter de la Universidad de Emory concluía:

*A pesar de que en conjunto las reformas representan un avance positivo, éstas no alcanzan a establecer un fundamento que ofrezca a los partidos y al pueblo de México la confianza de que las elecciones de 1994 serán auténticamente libres y justas.*⁶¹

Los analistas citaron, por último, una encuesta de junio de 1993: sólo un tercio de la población de México creía en la limpieza de las elecciones de 1994.

Gilberto Guevara Niebla, líder estudiantil en 1968 y reciente subsecretario de Educación, pareció quizá demasiado alarmista cuando advirtió en el mes de agosto:

Quien diga que estamos a salvo de una explosión de violencia social colectiva está equivocado. Mientras tengamos los índices de pobreza, los grados de explotación, los excesos de autoridades, los atropellos, el desorden institucional, mientras que prevalezca la barbarie, la democracia seguirá siendo muy frágil y la convivencia estará siempre en peligro.⁶²

Agosto terminó con una opinión de Octavio Paz, manifestada en el 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Monterrey, que fue muy comentada en la prensa. Paz expresó que *el mejor presidente para 1994 será el que elijan los mexicanos e insistió: al finalizar el siglo, México será democracia o no será país*.⁶³ En el Segundo Encuentro de la revista *Vuelta sobre México: los usos del pasado*, no faltaron comentarios de Krauze, Lorenzo Meyer y González Pedrero sobre la *esperada* y siempre postergada *transición*.

¿Democracia inevitable?

La censura al programa radial *La Ciudad* de Miguel Ángel Granados Chapa tras una entrevista con el ingeniero Cárdenas, causó revuelo. Al principiar octubre, el director de Canal 22 y el director de *Nexos* calificaron de anacrónica y ambigua la ley en materia de comunicación. Aguilar Camín advirtió que en un *futuro inevitable* el gobierno *perderá el control* y pronosticó: *Los medios serán el espacio donde se efectuará la disputa por la nación*. Después de lo cual fue más explícito: *La credibilidad del gobierno respecto a los medios de comunicación está en la lona*.⁶⁴ La inteligencia lúcida de Gabriel Zaid volvió a dejarse oír:

El país se ha llenado de iniciativas cívicas, dentro y fuera de los partidos, con un fervor que recuerda los últimos años del Porfiriato[...]. Queremos ser del Primer Mundo: que la economía deje de ser presidencial, que la ley deje de ser presidencial, que el sufragio presidencial deje de ser el sufragio efectivo.⁶⁵

Entronizar el mito del Primer Mundo, como bien dijo Zaid, *desencadena consecuencias políticas*.

La meta de elecciones claras en 1994 era el deseo expresado por todas partes. A principios de noviembre, el presidente había convocado a un *pacto de civilidad* en su Quinto Informe de Gobierno. Krauze opinó:

El llamado del presidente se debe a que existe un riesgo de que la inestabilidad del país rebase a los partidos y se convierta en violencia.

Octavio Paz también lo hizo, desde Bruselas: *O hacemos una transición democrática o el país tendrá graves dificultades*.⁶⁶

El secretario de Gobernación sentenció, en cambio: *no hay riesgo alguno de inestabilidad*. El 17 de octubre, Cuauhtémoc Cárdenas fue proclamado candidato del PRD, con una afluencia inesperada de más de 40 mil simpatizantes. Cárdenas afirmó que estaba dispuesto a un pacto, si se trataba de *un acuerdo de transición a la democracia* y Muñoz Ledo le envió una carta al presidente reiterando que su partido *compartía el propósito*, agregando que la condición sería solucionar los conflictos postelectorales, que estaban en su apogeo en Nayarit, Guerrero y el Estado de México, y reconocer la necesidad de nuevas formas legales. El hostigamiento contra el PRD se acentuó, con asesinatos de regidores perredistas en Zitácuaro y de otros dos militantes en Guerrero y en Oaxaca.

El Pacto flotaba en el aire, entre cartas que iban y venían, declaraciones de voceros de todos los partidos, inconformidad del PAN y el PRD con comicios en diversos estados, marchas y plantones frente a la Secretaría de Gobernación. Las pláticas para concretar el Pacto se interrumpieron una y otra vez, con diversos motivos y pretextos. El PRD seguía acumulando agravios y el PAN había presentado 70 impugnaciones en el Estado de México, donde la Comisión Estatal Electoral ratificó la victoria del PRI en la totalidad de los 40 distritos. El periódico *Reforma* inauguró su suplemento político, el 28 de noviembre, con un número dedicado a *Los enredos de un pacto difícil*:

Las pláticas están en suspenso. El pacto está en suspenso. La convocatoria para realizar elecciones claras, transparentes y ejemplares está en suspenso. Acaso, cuando el PRI designe su candidato otra será la expectativa.⁶⁷

El suplemento se abrió con un testimonio de Vicente Fox, explicando su decisión de mantenerse al margen de la actividad política en el último año del sexenio:

La enésima reforma política quedó trunca. La democracia mexicana aún está pendiente y, en consecuencia, los derechos fundamentales en México siguen en busca de su historia[...].⁶⁸

El clima confuso y lleno de ruido no mostraba claridad por ninguna parte. Héctor Aguilar Camín sugirió:

No hay responsabilidad mayor, ni deuda mayor con las expectativas democráticas de la nación, que las que ha acumulado el gobierno. Es la hora de que ese gobierno se porte generosa-

mente, como lo que es, como un gobierno rico, sin excusas, capaz de echar al cesto los andrajos de la manipulación y el chanchullo, la abusiva pobreza de sus hábitos fraudulentos, sus estafas patrióticas y su usurpación usurera de la voluntad ciudadana.⁶⁹

Juego limpio

La designación de candidato por el PRI se produjo el mismo día que aparecía ese artículo, en *Proceso*, señalando la dimensión de la deuda política. Los comentarios de la prensa habían hablado, reiteradamente, de carencia de voluntad democratizadora pero, también, de proyecto político, salvo el de perpetuar el sistema.⁷⁰ En esos días, el panorama se nublaba con el anuncio de una victoria arrasadora del PRI en los 106 municipios de Yucatán, reducto bien ganado del Partido Acción Nacional. Carlos Castillo Peraza contrastó los reflectores que bañaban de luz al candidato del partido oficial con el “apagón” oportuno que se había producido en Mérida en pleno conteo de los votos. El presidente del PAN clamó:

¿En qué pacto de civilidad puede pensarse después de lo ocurrido en Yucatán? ¿En qué tipo de campaña federal con este prólogo de inmundicias electorales? ¿Dónde están los hechos locales que den contenido a las palabras vertidas en la ciudad de México? ¿Estamos frente al anticipo de lo que serán los comicios de agosto del próximo año?⁷¹

El PAN pidió anulación de comicios en Yucatán y anunció suspensión, por su parte, del pacto de civilidad. Demetrio Sodi se pronunció por aplicar la ley:

Limpiar las elecciones en Yucatán, investigando a fondo todas las denuncias y abriendo los paquetes electorales, permitiría desenmascarar públicamente a los culpables y sería un primer paso para avanzar en el Pacto de Civilidad que garantice elecciones limpias, creíbles y aceptadas por todos los contendientes en 1994.⁷²

El PAN insistió en que el gobierno había cerrado el camino de la civilidad y los diputados panistas abandonaron la Cámara, el 19 de diciembre, coreando consignas que anunciaban el fin del diálogo con el gobierno. Los días 21 y 22 de diciembre se puso fin al conflicto de Yucatán con la renuncia del candidato supuestamente electo del PRI “a fin de mantener la paz pública”.

En la Convención Nacional donde el PRI lo proclamó oficialmente su candidato, Luis Donaldo Colosio había hecho tres compromisos el 8 de diciembre: aceptar un *grupo plural de observadores nacionales* integrado con propuestas de todos los partidos; *informar* a la opinión pública del *financiamiento de su campaña* y proponerle al

IFE una *auditoría externa al padrón electoral*. Pero, sobre todo, afirmó categóricamente que *el PRI no necesita ni yo quiero un solo voto al margen de la ley*. El compromiso esencial había sido, pues, con lo que Demetrio Sodi llamó *un juego limpio*. Aguilar Camín, por su parte, señaló que la batalla de Colosio no sería sólo por los votos reales

[...]sino, sobre todo, por la credibilidad que le regatean, antes que nada, el pasado electoral de su partido y los intactos reflejos políticos que lo han encumbrado.⁷³

En la segunda mitad de 1993, un grupo de ciudadanos coincidió para encontrar un mínimo de acuerdos muy concretos que pudieran ser ampliamente compartidos para asegurar, por fin, la transición inevitable. Se articularon así *Veinte compromisos por la democracia*:

1. *Respeto al voto.*

Para *fortalecer al Poder Legislativo*:

2. *Consultas públicas* sobre cualquier iniciativa *para modificar la Constitución General de la República*.

3. *No aprobar cambios legislativos en menos de 30 días.*

4. Que los *diputados* de oposición *propongan el nombramiento del Contador Mayor de Hacienda* de la Cámara, *encargado de revisar el ejercicio del gasto público*.

5. *Obligación del Ejecutivo de informar a grupos y comisiones del Congreso*, a petición de éstos.

6. *Ratificación por la Cámara del nombramiento de Procurador General de la República*.
Para *fortalecer al Poder Judicial*:

7. *Inmediata suspensión de la vigencia de leyes o decretos declarados contrarios a la Constitución* por la Suprema Corte de Justicia (sin necesidad de promover juicio de amparo).

8. Que la *Suprema Corte nombre sus propios ministros*, para ser ratificados después por el Senado. Que los *nombramientos de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados* sean definitivos en vez de depender de cada gobernador.

9. Que la *Secretaría de Hacienda respete el presupuesto del Poder Judicial*, elaborado por la Suprema Corte de Justicia.

10. *Reforma integral del Poder Judicial*, que garantice *justicia pronta y expedita* para todos los mexicanos.

Para *fortalecer a estados y municipios*:

11. *Redistribuir atribuciones fiscales* entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal para por lo menos *duplicar los presupuestos estatales y triplicar los municipales* (en términos relativos).

12. *Transferir directamente a los municipios el gasto destinado a combatir la pobreza, así como la ejecución de esos programas.*
13. *Descentralizar hacia estados y municipios servicios públicos que ahora realiza el gobierno federal.*
14. *Que los ayuntamientos puedan ampararse contra actos de los gobiernos estatales y federal.*

Para fortalecer los derechos ciudadanos:

15. *Volver constitucionales las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular.*
16. *Autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nombramiento de su consejo y su presidencia por mayoría calificada del Senado, previa consulta pública.*
17. *Hacer públicas las declaraciones patrimoniales del presidente y los miembros del gabinete.*
18. *Dar al INEGI la misma autonomía que se ha otorgado al Banco de México.*
19. *Obligación de los medios de especificar que una información ha sido pagada, cuando sea el caso.*
20. *Reglamentar el derecho ciudadano a la información.*

La iniciativa cívica fue difundida en los ámbitos político, social y económico del país, para recabar un número copioso de firmas y presentarla después a todos los candidatos presidenciales buscando su compromiso con los *Acuerdos*. Ese compromiso sería un excelente punto de partida y el buen augurio de una democracia instaurada, por fin, como práctica cotidiana, fuera quien fuera el ganador.

La obligación de asumir responsabilidades frente a los ciudadanos, que rige a los gobiernos en las democracias, sería el denominador común: lo que garantiza la credibilidad de un sistema político es el principio que obliga a rendir cuentas (*accountability*), tan valorado en la democracia norteamericana. Si un sistema no se cimienta en ese principio podría llegar a romperse la confianza en la solución de demandas por medios pacíficos, al tensarse demasiado la irritación de los que nunca son tomados en cuenta. No bastaba modernizar las finanzas; ni siquiera bastaba modernizar la economía. Parecía imperativo modernizar la relación del Estado con la sociedad. Mientras la obligación de rendir cuentas no se incorporara a la convivencia política, la democracia seguiría siendo el gran pasivo de una sobrecargada deuda.

Notas

¹ Federico Reyes Heróles, "De la debilidad al liderazgo", en *Este País*, núm. 6, septiembre de 1991.

² Carlos Monsiváis, *La Jornada*, 19/V/1992.

- ³ Miguel Basáñez, "¿Quinta crisis?", *Folios de Este País*, núm. 14, mayo de 1992.
- ⁴ Gabriel Zaid, "Elecciones interminables", agosto de 1988, en *La economía presidencial*. México: Contenido, 1992, pp. 242 y 244.
- ⁵ Enrique Krauze, entrevista en *El Financiero*, 3/VI/1993.
- ⁶ Alberto Aziz Nassif, *La reforma electoral: adecuaciones a una democracia tutelada* (coord. Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo). México: Nueva Imagen, 1992, pp. 141, 142. Sobre los porcentajes de votación oficialmente computados (48.7%) y los publicitados (50.74%) véase Juan Molinar Horcasitas, *El tiempo de la legitimidad*. México: Cal y Arena, 1991, pp. 218-219.
- ⁷ Arturo Núñez Jiménez, *La reforma electoral de 1989-1990*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 35-39.
- ⁸ *Ibid.*, pp. 70-71.
- ⁹ Javier López Moreno, *Reformas constitucionales para la modernización*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 34-35.
- ¹⁰ Aziz Nassif, A., *op. cit.*, p. 149.
- ¹¹ *Ibid.* pp. 153 y 138.
- ¹² Basáñez, M., *op. cit.*, p. 6.
- ¹³ Enrique Alduncin, *Los valores de los mexicanos*, vol. 2, *México en tiempos de cambio*. México: Fomento Cultural Banamex, 1991, pp. 212 y 216.
- ¹⁴ Mauricio Merino, *Fuera del centro*. México: Universidad Veracruzana, 1992, pp. 133, 134.
- ¹⁵ Jorge G. Castañeda, *La utopía desarmada*. México: Planeta, 1993, p. 438.
- ¹⁶ Gabriel Zaid, "La transición mexicana" (mayo de 1991), en *La economía presidencial, op. cit.*, p. 283.
- ¹⁷ Castañeda, J. G., *op. cit.*, p. 434.
- ¹⁸ Citado por Alberto Aziz, "México 1988: entre la herencia y la transición", en *La sucesión presidencial en México (1928-1988)* (coord. Carlos Martínez Assad). México: Nueva Imagen, 2a. ed., 1992, pp. 355-356, nota 22.
- ¹⁹ Entrevista con Salvador Nava, en *Perfil de La Jornada*, 13/VIII/1991.
- ²⁰ Alberto Aziz y Jacqueline Peschard, *Las elecciones federales en 1991*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1992, p. 238.
- ²¹ Entrevista con Salvador Nava, en *Perfil de La Jornada*, 13/VIII/1991.
- ²² Sergio Aguayo Quezada, "Observación electoral en San Luis Potosí", en *Este País*, núm. 7, octubre de 1991.
- ²³ "Elecciones bajo protesta", en *Este País*, núm. 7, octubre de 1991.
- ²⁴ Jorge Alcocer y Rodrigo Morales, "Mitología y realidad del fraude electoral", en *Nexos*, núm. 166, octubre de 1991.
- ²⁵ *Idem.*
- ²⁶ Carlos Salinas de Gortari, discurso ante al XV Asamblea del PRI, *Informe Especial de El Financiero*, 17/IV/1992.
- ²⁷ Ricardo Alemán Alemán, columna "Clase Política" en *La Jornada*, 21/V/1994.

- ²⁸ Véase Salvador Azuela, *La aventura vasconcelista*. México: Diana, 1990, pp. 157-158; Adolfo Christlieb, *Temas políticos I*. México: Ed. Acción Nacional, 1963, p. 71.
- ²⁹ *Compromiso Nacional por la Legitimidad y la Democracia. La Jornada*, 17/XI/88.
- ³⁰ Alemán, R., *op. cit.*
- ³¹ "El PAN frente al 94, Estructura sin rostro", en *Informe Especial de El Financiero*, 21/VIII/1993.
- ³² Jaime Tamayo, "El neocardenismo y el nuevo Estado", en *El nuevo Estado mexicano*, vol. II, *Estado y política* (coord. Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo). México: Nueva Imagen, 1992, pp. 126 y 127. Los epítetos son de Tamayo y Monsiváis.
- ³³ *Ibid.*, pp. 129-130.
- ³⁴ *Ibid.*, p. 131.
- ³⁵ Discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, 21 de octubre de 1988. Mimeo, citado por Jaime Tamayo, *op. cit.*, p. 133.
- ³⁶ "Los partidos ante la sucesión presidencial", reportaje de *Este País*, núm. 23, febrero de 1993.
- ³⁷ *Informe Especial de El Financiero*, 14/VIII/1993.
- ³⁸ *Idem.*
- ³⁹ Véase *Este País*, núm. 23, febrero de 1993, y el citado *Informe Especial de El Financiero*, 14/VIII/1993.
- ⁴⁰ Jorge G. Castañeda, *op. cit.*, p. 239.
- ⁴¹ Gabriel Zaid, "La ley y la excepción", (mayo de 1991), en *La economía presidencial, op. cit.*, pp. 282-283; "Sueños de restauración" (29 de agosto de 1991), *ibid.*, pp. 309-310; "Sobregiros de confianza" (28 de diciembre de 1991), *ibid.*, pp. 311-312.
- ⁴² Lorenzo Meyer, "El límite neoliberal", en *Nexos*, núm. 163, julio de 1991.
- ⁴³ Miguel Concha, "La polémica sobre los derechos humanos", en *La Jornada*, 12/IX/1991.
- ⁴⁴ Federico Reyes Heróles, "El fracaso electoral", en *La Jornada Semanal*, 19/I/1992.
- ⁴⁵ Carlos Monsiváis, *La Jornada*, 19/V/1992; Demetrio Sodi, "Presidencialismo", en *La Jornada*, 9/V/1992.
- ⁴⁶ Héctor Aguilar Camín, "El cambio mundial y la democracia en México", en *Los grandes cambios de nuestro tiempo* (Coloquio de Invierno), vol. 2. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 56; Roger Bartra, "Grandes cambios, modestas proposiciones", en *ibid.*, p. 61; González Pedrero, "Parábola de las parabólicas", en *ibid.*, p. 74; Rolando Cordera, "Las lecciones del desarrollo", en *ibid.*, p. 118; Julieta Campos, "Las trampas del desarrollo", en *ibid.*, p. 173.
- ⁴⁷ Entrevista con Lorenzo Meyer, en *El Financiero*, 16/XI/1992.
- ⁴⁸ Entrevista con Carlos Fuentes, en *La Jornada*, 30/XI/1992.
- ⁴⁹ "Opiniones sobre la reelección", en *Este País*, núm. 21, diciembre de 1992.
- ⁵⁰ Octavio Paz, en *Proceso*, núm. 851, 22/II/1993.
- ⁵¹ *The Economist*, 13 de febrero de 1993. Citado en *Proceso*, núm. 851, 22/II/1993.

⁵² *Este País*, núm. 25, abril de 1993.

⁵³ Entrevista con Juan Sánchez Navarro, en *La Jornada*, 16/V/1993.

⁵⁴ Porfirio Muñoz Ledo, declaraciones en la presentación del *Proyecto de nación* del PRD, *La Jornada*, 20/V/1993.

⁵⁵ Entrevista con Enrique Krauze, en *El Financiero*, 3/VI/1993.

⁵⁶ Carlos Fuentes, Lección magistral en el Seminario Libertad y Justicia, en *Perfil de La Jornada*, 6/VI/1993.

⁵⁷ Enrique González Pedrero, "Gobernabilidad y democracia", en el Seminario Libertad y Justicia, *idem*.

⁵⁸ Luis Rubio, "El talón de Aquiles de la reforma económica", en *Vuelta*, núm. 200, julio de 1993.

⁵⁹ *La Jornada*, 31/VII/1993.

⁶⁰ *Resumen ejecutivo* del Informe del Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Electos del Centro Carter de la Universidad de Emory, 13/X/1993. En *Folios de Este País*, núm. 34, enero de 1994.

⁶¹ *Idem*.

⁶² Entrevista con Gilberto Guevara Niebla, en *El Financiero*, 31/VIII/1993.

⁶³ *La Jornada*, 31/VIII/1993, y *El Financiero*, 31/VIII/1993.

⁶⁴ Declaración de Héctor Aguilar Camín, *La Jornada*, 6/X/1993.

⁶⁵ Gabriel Zaid, "La nueva economía presidencial", en *Época*, núm. 123, 11/X/1993.

⁶⁶ Enrique Krauze y Octavio Paz, citados por Arturo Cano, "Los enredos de un pacto difícil", suplemento *Enfoque*, núm. 1, *Reforma*, 28/XI/1993.

⁶⁷ *Idem*.

⁶⁸ Vicente Fox, "Las razones de mi huelga", en *Enfoque*, núm. 1, *Reforma*, 28/XI/1993.

⁶⁹ Héctor Aguilar Camín, "TLC: ganar y no ganar", en *Proceso*, núm. 891, 29/XI/1993.

⁷⁰ Carlos Ramírez, "Rumbo político perdido", en *El Financiero*, 31/VIII/1993, y Jorge Alcocer, "Ocurrencia presidencial", en *Proceso*, núm. 879, 6/IX/1993.

⁷¹ Carlos Castillo Peraza, "Prólogo de inmundicias", en *Reforma*, 2/XII/1993.

⁷² Demetrio Sodi de la Tijera, "Aplicar la ley en Yucatán", en *La Jornada*, 3/XII/1993.

⁷³ Demetrio Sodi, "Juego limpio", en *La Jornada*, 17/XII/1993. Héctor Aguilar Camín, "Por el consenso y el confeti", en *Proceso*, núm. 893, 13/XII/1993.

XIII. Crónica de incertidumbres

El primero de enero fue para nuestro país un parteaguas histórico que ha favorecido el desfile de “muchos Méxicos” vividos en corto tiempo.

Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal
1º de junio de 1994

Un corazón colectivo y una “palabra verdadera”

La mañana del 1º de enero de 1994, cuatro ayuntamientos de Chiapas amanecieron ocupados por grupos numerosos de embozados, con pasamontañas o paliacates rojos, que decían identificarse con las siglas de un Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las primeras declaraciones de *Marcos*, que asumía la voz del movimiento, se manifestaban como el habla de un “corazón colectivo” que latiría por millares. La Declaración de la Selva Lacandona tachaba de ilegítimo al gobierno de la República y convocaba a los otros poderes a “restaurar la legalidad”, advirtiendo que el EZLN se proponía “avanzar hacia la capital del país”. Los declarantes se proclamaban herederos de 500 años de lucha, señalando que “los desposeídos somos millones” y que en su nombre decían ¡Basta! y reclamaban: *trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz*.

En la frontera más meridional del país un boquete, de proporciones todavía inciertas y acaso imprevisibles, se le abría al proyecto que todavía, el 31 de di-

ciembre de 1993, acariciaba fantasías de haberlo apostado todo para ganarlo todo. San Cristóbal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas empezaron a circular en telefaxes por el mundo entero. ¿Acaso, una vez más, estaría surgiendo un gran movimiento social de las necesidades y las demandas de un espacio muy local y muy remoto, hasta ese día presente apenas, como el umbral de una reserva ecológica en peligro, en las páginas del *National Geographic*?

Las autoridades hablaban de “profesionales de la violencia” y exigían entrega de armas, devolución de rehenes (había sido secuestrado el exgobernador de Chiapas Absalón Castellanos), identificación de los dirigentes y cese de hostilidades por los rebeldes. A los cuatro días se había instalado una Mesa de Atención, encabezada por el secretario de Desarrollo Social, que dispondría de tres mil millones de nuevos pesos para echar a andar medidas de emergencia, mientras voceros del gobierno seguían negando que se tratara de un levantamiento indígena. En los primeros diez días el olor a pólvora se trasladó de la Zona Militar de San Cristóbal, sujeta a varios ataques rebeldes, de las calles y el mercado de Ocosingo, de los estallidos de *rockets* en poblados cercanos a la antigua Ciudad Real, al Distrito Federal, Puebla, Michoacán y Acapulco, donde estallaban coches-bomba, granadas y torres de alta tensión: pronto se supo que los insurgentes de Chiapas se deslindaban de tales golpes terroristas.

Los reflejos del gobierno federal reaccionaron con relativa rapidez: el día 10, el mismo presidente que había lamentado el día 6 el “doloroso golpe” que habrían dirigido “al corazón de todos los mexicanos” los “profesionales de la violencia”, reconocía “lo que no funcionó” y hacía cambios en el gabinete. Mientras Fidel Velázquez se declaraba partidario del “exterminio”, salía González Garrido de Gobernación para dejarle el lugar a Carpizo, y Manuel Camacho abandonaba la Secretaría de Relaciones Exteriores para acudir a Chiapas como Comisionado para la Paz y la Reconciliación. Su reunión con los obispos en la sede del Episcopado Mexicano señalaba que se aceptaría la mediación del prelado de San Cristóbal para una solución negociada.

Entre el 12 y el 17 de enero se declaró una “tregua unilateral” por el gobierno mexicano y una amnistía general; el pacificador declaró que el EZLN era *mexicano y chiapaneco* e invitó a Samuel Ruiz a mediar en la busca de una paz justa, que no pretendería regresar las cosas a su estado anterior. Camacho habló de *pedir perdón a los indígenas, a las comunidades, por todo el sufrimiento que han vivido*. Conocía ya, probablemente, la carta de *Marcos* que se haría pública el día 21, pero que estaba fechada el día 18. Ante el “perdón” que ofrecía la amnistía, el insurgente cuestionaba:

¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? [...] ¿De haber mostrado al resto del país y al mundo entero que la

dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? [...] ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? [...] ¿Los que durante años y años se sentaron en una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo?¹

Mientras una marcha de ganaderos pedía, en Ocosingo, “que se aniquile de una vez por todas a esos indios zapatistas”, el EZLN sugería que había sido prematura la amnistía y proponía una agenda con demandas económicas, sociales y políticas. En el 2º Encuentro de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas, que reunía representantes de 280 grupos, se manifestó un apoyo pacífico a los zapatistas, cuyas demandas se compartían, y se constituyó el CEOIC, que habría de tener en lo sucesivo un papel muy importante.

Los últimos días de enero estuvieron marcados por una advertencia del comisionado que pretendía presionar una negociación acelerada: ¿no habría más alternativa que pactar rápidamente la paz o atenerse al endurecimiento? Sugirió que estaría dispuesto a sentarse a dialogar con el EZLN como “fuerza política en formación”, denominación que despertó suspicacia entre los aludidos, que insistieron en que el dilema de fondo sería otro: *paz con dignidad o guerra con dignidad*.

Conversaciones en la catedral

Las Jornadas por la Paz y la Reconciliación se iniciarían en la sede apostólica de San Cristóbal el 21 de febrero, en un espacio protegido por tres círculos de neutralidad que tendieron la Cruz Roja, las ONG y policía militar desarmada.

Al principiar febrero, Chiapas era una caldera en ebullición. En un municipio tras otro eran impugnados, por corrupción, alcaldes priistas. Se sucedían las ocupaciones de predios y el secretario técnico del Módulo de Atención a las Demandas Indígenas y Campesinas declaraba que estaba comprobada la existencia de propiedades que “podrían ser afectadas”, afirmación que sería desmentida más tarde por el gobernador, alegando que “no hay latifundios documentados”. Para el 1º de agosto, el CEOIC había localizado 33 probables latifundios.

Mixtecos de Puebla, otomíes de Querétaro, zapotecos de Oaxaca, indígenas de muchos rumbos del país se adhirieron por aquellos días a las demandas zapatistas. Las palabras de los indios adquirían tonos inesperados, como las de aquel Modesto Martínez de la Sierra Norte-Zapoteca que le dijo a Colosio:

Como representante de nuestros municipios, me conmueve hablar de los indígenas, señor. Quisiera ser Dios, señor, para resolverles sus problemas, pero me es imposible en este momento. Quiero manifestarle que nosotros no somos limosneros, señor. No

queremos que nos den pescado para un día o para un rato; queremos anzuelo, queremos asesoría para poder seguir pescando y mantenernos[...]. Como serrano, señor, estamos cansados de tantas promesas. No queremos seguir viviendo de promesas, sino de hechos y realidades. Queremos decirle que cuenta con nuestro apoyo, señor, pero queremos saber que contamos con el suyo.²

Las voces del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) sonaban extrañamente articuladas, desde la insondable Selva Lacandona, a ciudadanos acostumbrados a recibir su información de planteamientos académicos, en el mejor de los casos:

Como indígenas creemos y sentimos que tenemos la capacidad para dirigir nuestro destino. No hay necesidad de que nos anden llevando de la mano, pues[...] Como indígena necesitamos autonomía propia, necesitamos esa identidad, esa dignidad, pues. Dignidad de vivir y respetar. [...] En estos parajes la gente vive de puro milagro porque ha sobrevivido en un pedazo de tierra, familias de siete a doce personas, en un pedazo de tierra, puede decir así, de una hectárea, media hectárea de terreno no fértil, no cultivable. Así ha sobrevivido nuestra gente. Y por eso vemos y sentimos una urgencia de tener, pues, las tierras en la mano, como campesinos. Necesitamos esa tierra[...]. Hay personas que no son campesinos, poseen miles de hectáreas de tierras donde se alimenta ganado. Quiere decir que vale más tener cientos de ganados que tener cientos de campesinos. Entonces quiere decir que valemos menos que animales. Por esas razones la gente está reclamando tierra desde siempre, pero el gobierno nunca ha entendido, nunca ha escuchado. [...] Fue el mismo pueblo que dijo ya, ya empezemos. No queremos aguantar más porque ya nos estamos muriendo de hambre[...].³

Como advertiría Blanche Petrich el 21 de febrero, muchos se preguntaban si lo que se jugaba en las rondas de San Cristóbal sería la continuidad del sistema. ¿Cuántos entenderían que estaba en juego mucho más que la adhesión a un sistema o su estabilidad? ¿Cuántos entenderían que estaba en juego mucho más que una fantasía de Primer Mundo o una ilusión de modernidad? ¿Cuántos entenderían que se jugaba la opción de construir de verdad *un nuevo país*, que no podría llegar a ser moderno sin resolver por fin, en el camino, el memorial de todos los agravios ancestrales?

La imagen del comisionado, prendiéndose presurosamente del otro extremo de la bandera nacional que *Marcos* desplegaba en el inusitado foro catedralicio, parecía muy simbólica. Más le valdría, en efecto, al país moderno reconciliarse con el país tradicional, por fin, en el encuentro de un camino integrado para la nación común. ¿Se volvería aquella bandera el puente entre los dos México?

Por boca de su vocero, el CCRI envió un mensaje a los mexicanos:

Cuando bajamos de las montañas cargando a nuestras mochilas, a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. La patria que nos había olvidado en el último rincón del país[...]. No nos dejen solos. Con ustedes, todo somos. Sin ustedes, somos otra vez ese rincón sucio y olvidado de la patria[...]. Y es por esta bandera que nosotros nos hicimos soldados[...]. Pero si quieren saber qué rostro hay detrás del pasamontañas, es muy sencillo: tomen un espejo y véanlo.⁴

El tema de la democracia nacional rebasaba, reconoció *Marcos*, a la mesa de San Cristóbal:

Corresponde a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los partidos políticos presentar proyectos sobre ese tema, ya que son quienes tienen posibilidades reales de darle a este país otro rumbo.⁵

Después de una semana de diálogo, el *subcomandante* y 14 representantes del CCRI calculaban un 50% de avance: la posibilidad de un acuerdo de paz seguía en veremos. Los rebeldes interpretaban la reticencia del gobierno a la demanda de devolver el Artículo 27 a su versión original como una cuestión de principio: un afán de no dar el brazo a torcer, aunque ya hubiera quedado demostrado que el modificado Artículo 27 no había traído, ni traería, inversión al campo. Insistían en que el encuentro no había sido de negociación sino de diálogo: “Diálogo bueno y verdadero”, según el comandante Juan.

En los Compromisos para una Paz Digna en Chiapas, el gobierno ofreció respuestas “resolutivas” a 32 de las 34 demandas zapatistas. A la demanda de renuncia del titular del Ejecutivo se respondía que semejante camino “haría imposible una salida política”. A la primera demanda, que solicitaba “una elección verdaderamente libre y democrática” se respondió que “la opción de avance democrático existe: es ahora”. Se anunció la convocatoria a un período extraordinario de sesiones para discutir la participación de ciudadanos independientes en la conducción del proceso electoral.

Se establecía, en los Compromisos, la promulgación de una Ley General de los Derechos de las Comunidades Indígenas, que reconocería a las autoridades e instituciones tradicionales; la nueva Ley reglamentaría, para Chiapas, el primer párrafo del Artículo 4º constitucional y las fracciones referentes a asuntos agrarios de las comunidades indígenas del Artículo 27. Se fortalecerían, además, las facultades del Estado para restituir tierras y fraccionar latifundios. Algunas reformas jurídicas serían específicamente para Chiapas: nueva Ley Electoral; reformas a la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica Municipal; derogación del Código Penal vigente e iniciativa para una Ley de Justicia Agraria. Se revisaría el impacto del TLC sobre comunidades indígenas y se haría un estudio minucioso

de las carteras vencidas. Se preveían programas concretos de electrificación, rehabilitación de hospitales y, en general, de infraestructura; acciones de emergencia contra la desnutrición infantil; un programa de elevación de calidad de la educación, con aplicación efectiva de la educación bilingüe, construcción de escuelas y becas. Por primera vez, habría una estación de radio indígena. Se propiciaría el respeto a la cultura indígena y se desalentaría la discriminación.⁶

Los zapatistas habían concretado su lema, a dos meses del levantamiento, sin que ello supusiera reducir sus demandas: *tierra, democracia y justicia* englobaba, a su juicio, la esencia de su proyecto. Y se autodenominaban, en carta de *Marcos* a un niño de Baja California, como “profesionales de la esperanza”.

Una apuesta a la sociedad civil

La expectativa de que la presión de la sociedad civil pudiera conjurar la guerra y presionar por el cumplimiento de los compromisos fue expresada por *Marcos*, el 4 de marzo, en una conversación con periodistas de *La Jornada*: “Nuestro ciclo ya terminó”, dijo el jefe rebelde, insistiendo en que había que desear y esperar que la sociedad civil no se “desinflara”. La apuesta a la sociedad civil iba acompañada, sin embargo, de desconfianza hacia la capacidad de convocatoria de los partidos.⁷

La consulta a las comunidades sobre los compromisos de paz se inició, en Ocosingo, el 20 de marzo. La presión de los ganaderos y de otras fuerzas muy conservadoras de Chiapas se iba haciendo, en esos días, cada vez más agresiva, incluyendo marchas en San Cristóbal “contra sotanas, encapuchados y políticos con aspiraciones”. Un comunicado del CCRI insistió en que las conversaciones en la catedral podían calificarse como un “diálogo”, nunca como un acuerdo. La paz, decía, no sería sólo “cuestión de una firma” y no podría lograrse forzando una rendición. El tono de aquel comunicado del 15 de marzo procuraba insuflar en los destinatarios un aliento épico, cargado de reminiscencias del ancestral discurso indígena. No sólo iba dirigido al CEOIC, sino al pueblo entero de México, a los pueblos y gobiernos del mundo y a la prensa nacional e internacional:

No dejen sólo en nuestras manos esta pesada bandera, que sea de todos la acción de levantarla, cambiemos todos la tierra que la abarca; hermanos mexicanos, no olviden esta voz de las montañas, es muy pequeña aún la luz que despiden nuestros muertos. Sumemos luces todos, rompamos ya esta noche vergonzosa. Es tiempo de que amanezca.⁸

El mismo tono prevalecía en otro comunicado del día 19, que terminaba en un inflamado exhorto: “¡Qué se levanten todas las tierras mexicanas!”

El 26 de marzo, el EZLN condenaba el asesinato de Colosio, interpretaba el crimen como una “provocación” fraguada por la “línea dura” del gobierno, que presagiaría una ofensiva militar, la ruptura del cese del fuego y el reinicio de la guerra. El aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, el 10 de abril, despertó adhesiones campesinas al movimiento chiapaneco y llegaron al Zócalo, donde confluían 50 mil campesinos, comunicados que lo invocaban “desde el otro corazón de la patria”.

Un desplegado “Por la paz en Chiapas y en México” apareció en la prensa, el 15 de abril, con muchas firmas representativas, apelando al gobierno, al comisionado, al mediador y al EZLN para una inmediata reanudación del diálogo. El 22 de abril se desactivaba parcialmente la “alerta roja” en territorios zapatistas, permitiendo que parte de la tropa regresara a sus comunidades y ejidos.

Por primera vez tras la conclusión de las pláticas de San Cristóbal, los interlocutores volvieron a reunirse el 4 de mayo, esta vez en una comunidad cerca de Guadalupe Tepeyac. Los zapatistas habrían reconocido “que las señales contra la paz no vienen del Ejército Federal”. Todos habrían estado de acuerdo en que se había fortalecido la línea dura y en que la sociedad civil “no concretaba movilizaciones aunque tiene ánimo de hacerlo”. “Si no hay democracia va a haber guerra civil en el país”, advirtió *Marcos*, pocos días después, en entrevista con Hermann Bellinghausen, sugiriendo el peligro de una situación en la que “no habrá con quién hablar” porque, acaso, otros grupos que pudieran levantarse no estarían tan dispuestos a dialogar como el EZLN.

El 15 de mayo, en esa población con nombre predestinado: La Realidad, se encontraron Cuauhtémoc Cárdenas y algunos de sus colaboradores con *Marcos* y el CCRI. Lo que Blanche Petrich calificó como un “encontronazo” entre la opción partidista y la lucha armada tuvo un marco espectacular, cobijado por la presencia de 1 500 tojolabales. Los zapatistas aprovecharon para expresar su desconfianza por los partidos existentes, incluyendo al PRD, que no se habría salvado de prácticas viciadas ni de la tendencia a descalificar a los que no militaran en sus filas.

Aconsejando, advirtiendo y exigiendo, el *subcomandante Marcos* ofreció constituirse en “garante” del respeto a los resultados electorales del 21 de agosto. Procurando evitar que su severo juicio crítico pudiera interpretarse como una sobreacción de la fuerza moral que le habría dado el habérselo jugado todo a una opción límite, marcó distancias con el partido de Cárdenas y reconoció cercanías con su persona por convocar “figuras y movimientos que nosotros respetamos”. *Marcos* insistió, en suma:

La única fuerza capaz de llevar a cabo el tríptico libertad, democracia y justicia, y de cambiar el mundo entero es la fuerza del pueblo, la fuerza de los sin partido ni organización, la fuerza de los sin voz y sin rostro. Quien gane con verdad esta fuerza será invencible.⁹

La consulta en territorio zapatista había concluido el 31 de mayo y el CCRI-CG se declaró en asamblea permanente para realizar el conteo de los votos. El 10 de junio se respondió "No" a la propuesta de firmar los acuerdos: la respuesta se difundió dos días después. La explicación de motivos se hizo en un extenso comunicado que daba por terminado el diálogo de San Cristóbal. Se convocaba a un nuevo diálogo "con todas las fuerzas progresistas del país" en torno al tema central de *democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos*. Como dato curioso: a los dos temas que habían servido, en junio de 1993, para convocar al coloquio que organizó desde Sedesol Luis Donaldo Colosio, se le antepone, como punto de partida, la democracia.

Se anunciaba la prórroga unilateral del cese del fuego, "para no dar marcha atrás en la búsqueda de una salida política y no interferir en el proceso electoral". Los comicios podrían realizarse inclusive en territorio del EZLN. No se aceptaría, mientras tanto, ayuda alguna del gobierno federal, del estatal ni de los municipales.

A la vez, se emitió la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, llamando a una Convención Democrática Nacional, "soberana y revolucionaria", para proponer un gobierno provisional o de transición "mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral" y una nueva Constitución. El EZLN la reconocía como "representante auténtico de los intereses del pueblo de México en su tránsito a la democracia".

La declaración anunciaba que el EZLN se encontraba ya "en todo el territorio nacional", con capacidad para ofrecerse como "garante del cumplimiento de la voluntad popular". La Convención pondría en la mira al partido de Estado y al presidencialismo. Las demandas políticas pasaban al frente, en contraste con la declaración del 1º de enero.

El neozapatismo parecía recoger, como lo esencial, la propuesta de Madero: la democracia. ¿Se estaría cerrando así el ciclo incumplido de aquella primera demanda de la Revolución Mexicana, a la que Zapata quiso anteponer las de Tierra y Libertad? Los indios de Chiapas parecían haber aprendido la larga y dolorosa enseñanza de una revolución que perdió en el camino a la democracia: sin ese presupuesto, todo lo demás había sido y sería inalcanzable.

Fiel a su inclinación a hacer la guerra "por otros medios", especialmente los medios de comunicación, Marcos envió mensajes en tres entrevistas a Epigmenio Ibarra, entre el 21 y el 23 de junio. Insistió en que sólo la democracia podría frenar el estallido de focos de insurgencia en diversas zonas del país, en una dispersa guerra civil sin un control central y sin posibilidad de interlocución. Insistió en el llamado a una movilización pacífica de la sociedad civil para abrir espacios democráticos. Se habría dado ya una ingobernabilidad *de facto*. Aunque repetía que había fuerzas, en todo el país, que responderían al mando del EZLN, también se refería a otros grupos que no obedecerían a ese mando unificado.

Aludió el jefe rebelde a un “mundo subterráneo”, el “sótano” del país, con el que habrían establecido contacto y que “no es reducido”. Insistió en la necesidad de que la paz no fuera sólo “declaratoria” sino resultado de una auténtica movilización hacia la democracia que tendría que surgir de diversos sectores de la sociedad civil. ¿Habría recorrido el país en seis meses lo que no recorrió en sesenta años?

De una u otra forma el tiempo histórico ya está marcado, ya no depende siquiera de nuestras fuerzas, depende ya de esa organización, de esa dispersión o de esa rebelión desorganizada que se llama sociedad civil, depende de la forma en que llegue a cuajar y de las formas organizativas. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa, la convención como punto de encuentro entre grupos armados y civiles para regular este tránsito pacífico o para darle un poco de coherencia y, en el mejor de los casos, para evitar el estallido de la guerra civil.¹⁰

Tal como la veía *Marcos* en junio, la Convención buscaría un “punto de convergencia” del alzamiento armado con la sociedad civil, “cumpliendo el papel que no pudo cumplir la Convención en ese entonces” (la de Aguascalientes). De ahí la intención de rebautizar a Guadalupe Tepeyac para volverlo “Aguascalientes”. ¿Se trataba de una fantasía de repetir la historia para corregirla? El tiempo histórico, insistía, podía correr más aprisa que los calendarios. La mejor demostración sería la distancia entre la Primera y la Segunda Declaración de la Selva, entre enero y junio, que habría permitido centrar el problema en el imperativo de la transición política. *Marcos* se preguntaba si “tendría nombre” ese tránsito a la democracia. ¿Surgiría un Madero ochenta años después? El papel del EZLN, según *Marcos*, sería el de “acelerador” de los tiempos históricos.

La realidad convoca un fantasma

En la intensa aceleración de tiempos que vivía el país, julio fue un mes rico en gestos, en palabras y en iniciativas para asegurar elecciones limpias y paz. En esa etapa se afinó la organización de Alianza Cívica para la vigilancia electoral y la del Grupo San Ángel para propiciar un tránsito pacífico y diseñar una agenda realista para el gobierno que habría de surgir de las elecciones y que, era de esperarse, sería *el gobierno de la transición*.

Para el EZLN fue el momento de concretar la convocatoria a su Convención Nacional e ir afinando hacia dónde sí y hacia dónde no deberían encaminarse sus debates y sus acuerdos. Para empezar, se consideró pertinente advertir quiénes *no estarían convocados*: los que no creyeran en el tránsito democrático pacífico ni en la vía electoral, ni en un gobierno de transición, ni en la necesidad de una nueva

Constitución. La Convención, según *Marcos*, no sería “el brazo civil o político del EZLN”. La fecha se fijó entre el 6 y el 9 de agosto.

Los 280 organismos chiapanecos del CEOIC aprobaron la convocatoria el 10 de julio, mientras en el Auditorio Che Guevara de la UNAM lo hacían 90 organizaciones de izquierda y se desligaban los grupos más radicales, encabezados por el PROCUP. En los estados se realizaron asambleas para adherirse a la convocatoria.

Al proponer un programa “de insurgencia civil” en previsión de un posible fraude el 21 de agosto, el CEOIC calificó al EZLN como “la única fuerza moral y política” capaz de agrupar a los sectores del país en la búsqueda de una solución pacífica en Chiapas.

¿Sería la Convención el principio de “una inmensa consulta social” en la capital y en todos los estados, como lo deseaba Antonio García de León? ¿Sería un “puente” entre los diversos sectores del espectro político? La prensa difundió cartas de invitación de *Marcos* a Carlos Fuentes, Monsiváis, Enrique Krauze, Fernando Benítez y el Grupo San Ángel. Ninguno aceptó la invitación, por diversas razones. Monsiváis sugirió:

Necesitamos visiones y revisiones críticas que alejen del discurso de la “salvación revolucionaria” y del autoconvencimiento estentóreo. Sería lamentable que la Convención fuese una asamblea más de la izquierda, con pretensiones de Congreso Constituyente. No quiero imaginarme los sermones de la ultratumba stalinista, los codazos ideológicos, las descalificaciones extraídas de manuales de la pureza leninista o guevarista, las acusaciones de “reformismo”, los homenajes “civilistas” al maderismo del EZLN. Por lo contrario, todos nos beneficiaríamos con discusiones y contactos entre tantos grupos de la sociedad civil, entre tantos jóvenes ganosos de vida política racional[...].

Krauze señaló que la Convención era contradictoria con los fines democráticos que decía perseguir, al arrogarse una representación nacional que no se le había confiado. Fuentes se preguntó si podía haber “futuro vivo con pasado muerto” e instó a “repensar una modernidad incluyente”. El Grupo San Ángel propuso una reunión con el EZLN después de la Convención.¹¹

La Convención fue interpretada por algunos como el intento de jalar hacia su propio espacio a todas las fuerzas y grupos que, con mayor o menor notoriedad, le estaban buscando camino a la transición democrática. Abundaron especulaciones sobre una eventual “designación” de presidente provisional o sobre el intento de convocar, desde allí, a una Asamblea Constituyente o de constituirse en tal asamblea. *Marcos* intentó borrar las desconfianzas que habían desatado la Segunda Declaración de la Selva y la convocatoria. El 21 de julio aclaró cómo visualizaba el gobierno de transición:

Un gobierno de transición democrática NO es un gobierno transitorio, NO es un gobierno temporal, NO es un gobierno interino, NO es un gobierno de excepción[...]. Es un gobierno con un programa político de democratización de la vida política del país. Un gobierno que se comprometa a abrir todos los espacios de participación política legal y pacífica para que las distintas fuerzas políticas, partidarias o no, puedan manifestarse, presentar sus propuestas a la sociedad y competir en igualdad de circunstancias por el apoyo popular.¹²

En el umbral del mes de agosto el país no era, definitivamente, el mismo de diciembre de 1993. El 1º de enero había sido, en efecto, un parteaguas por donde se había colado la realidad. De la fantasía o el “delirio” —como lo calificó Lorenzo Meyer— de haber pasado por la vía rápida al Primer Mundo se había dado un salto, más bien, hacia el reconocimiento del verdadero rostro del país. Los excluidos del desarrollo habían aflorado a la superficie y el país los contemplaba, ya no desfilando por las calles de la capital como en 1914, sino invadiendo las conciencias desde las pantallas de televisión, la radio y la prensa escrita. Con la realidad, paradójicamente, había reaparecido un fantasma: el fantasma de Zapata.¹³ ¿Cómo vivía el país urbano y moderno esa irrupción intempestiva?

De vuelta del “país de las maravillas”

El 27 de diciembre de 1993, el presidente de la Comisión de Desarrollo Empresarial de la Concanaco hizo un llamado de atención: había que “aterrizar” la reforma económica; había que democratizar el crédito y fomentar el ahorro; había que demostrar que la reforma económica beneficiaría a todos:

Una cosa es que el sector privado esté convencido de la reforma económica y otra que sea válida para la población que es la que debe recibir los beneficios. Si no los recibe dará la espalda a los dirigentes empresariales y luego a todos[...].¹⁴

Unos días antes, Rolando Cordera había sido prudente al evaluar logros, aun advirtiendo la conveniencia de garantizar continuidad a lo esencial de la estrategia económica. El director del Centro de Estudios del Desarrollo Económico (Cedeni) consideraba que había que entrar ya a una etapa de crecimiento alto; acelerar la inversión pública en infraestructura de puertos, carreteras y ferrocarriles para facilitar la exportación; diseñar una amplia estrategia de desarrollo agrícola, pensando en el campo “como un gran espacio social para el desarrollo”; seguir combatiendo la pobreza extrema y buscar también la equidad para obreros y sectores medios muy afectados; contemplar una amplia política educativa dentro de la po-

lítica social y no pensar que “sobran técnicamente los campesinos” cuando habría que reconstituir una sociedad rural capaz de contenerlos, aceptando que no sólo sobreviven sino que se niegan a desaparecer.¹⁵

El 28 de diciembre, *El Financiero* hacía un balance de 1993 como “el año más desastroso del sexenio”, con franco distanciamiento entre las metas esperadas y las alcanzadas. Los costos de desinflar la economía habían sido recesión y parálisis. La tasa de crecimiento en 1993 no había pasado de 0.9% y la inversión estaba en ceros. El desempleo y subempleo del 25% de la PEA marcaban el nivel más alto del sexenio. Las ramas industriales más afectadas habían sido la textil, de la madera, minería, de alimentos, del papel, química, maquinaria y equipo. También el comercio estaba en declive. En relación con 1982, los salarios se habían deteriorado un 70%. El mercado interno se contrajo tanto que la demanda se situó en 0.8% y el consumo privado bajó a -0.6%, cayendo la inversión privada de 20% en 1992 a 2.8% en 1993. La planta productiva nacional no había soportado las medidas estabilizadoras y lo más alarmante era que, para mantener la estrategia de desinflación un par de años más; seguirían reduciéndose las posibilidades de crecimiento y de mejoramiento social.¹⁶

Las primeras reacciones de los empresarios tras la sorpresa del 1º de enero insistieron en la *teoría del goteo*: habría que generar riqueza para después distribuirla, “dejar madurar las reformas” y no pensar en cambiar de modelo. Reconocieron, sin embargo, que el próximo gobierno tendría que concentrarse en el combate real de la pobreza y que habría que “encontrar un modelo propio” para empujar el fomento a la actividad productiva. El presidente de Concanaco opinó que “será el esfuerzo de varias generaciones llegar a constituir un país desarrollado, lo que no significa que no haya pobres”. Se propuso, por lo pronto, integrar una Comisión de Apoyo o Desarrollo del Sureste y “buscar algún mecanismo que ayude a revertir lo que se ha obtenido en materia económica en beneficio de la sociedad” para evitar la extensión de la violencia. Reasignar el gasto público para elevar el bienestar social sería, advirtieron algunos banqueros, muy recomendable.¹⁷

Un mes después, el sector privado resumió en una meta de “realismo económico” su propuesta a los candidatos a la presidencia. Se requería redistribuir el ingreso en favor de los sectores más pobres; promover un desarrollo regional equilibrado; apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa; establecer un programa de emergencia para la planta productiva; ofrecer apoyo real a la educación y replantear la estructura fiscal. Equilibrio de las finanzas pero con más orientación hacia los sectores pequeños de la industria, hacia la recuperación del campo y hacia los trabajadores y la mayoría de la población. A fines de febrero se había afinado la propuesta empresarial.

Incluía la democratización plena, con mayores cauces de participación de la sociedad; incorporar a la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum y asegurar pluralidad en el gobierno. Equilibrar crecimiento con mejoría social se-

ría uno de los objetivos. La modernización del sistema financiero, abriéndolo a la competencia, se incluyó entre las demandas. También se sugirió canalizar recursos presupuestales hacia obras de infraestructura. La primera sugerencia era lograr tasas de crecimiento del 6%.¹⁸

La Coparmex se pronunció, en mayo, por un nuevo *pacto social*. Ese pacto sería un valladar contra los intentos de “desplazar a la sociedad en la definición de las soluciones” y una garantía frente al clima de desconcierto y la crisis de expectativas. El pacto fue demandado el mismo día que los tres candidatos presidenciales sostuvieron el primer debate televisado. Se reclamó un “liderazgo moral” capaz de fortalecer la seguridad pública y se expresó inquietud por “la política maquiavélica” y la aparente “confrontación de grupos en el poder”.¹⁹

La meta de crecimiento había sido fijada, en el último Pacto Económico, en un 3% para 1994. Ya en febrero, analistas de GEA pronosticaban un 2.6%, con inflación de 7% y déficit fiscal de 0.5% del PIB. Brailowsky, de EA, era menos optimista y situaba el crecimiento en un 1.7% y el déficit en 1.2%: todos confiaban, sin embargo, en que se saldría del círculo vicioso del estancamiento.²⁰

Una encuesta entre 35 empresarios de ANIERM pulsó opiniones sobre la capacidad de exportación. Desconocimiento de mercados y de las opciones que podía ofrecer el TLC; enredosos trámites aduanales y cuellos de botella en carreteras y ferrocarriles agravaban los efectos del rezago tecnológico y la falta de créditos.²¹ En mayo, el presidente de Coparmex reconoció que, de 1 millón 300 mil empresas, sólo 6 mil estaban en capacidad de exportar, es decir, apenas el 0.5%.²²

En abril, México fue aceptado en la OCDE, que reúne a las naciones más industrializadas del mundo desde 1961. La meta de ese organismo es lograr altos índices de crecimiento, empleo y nivel de vida. Con sus 2 870 dólares de ingreso *per cápita*, muy desigualmente distribuido, México apenas es rebasado por Turquía en la categoría de mayor pobreza en el club de los ricos. Lorenzo Meyer señaló la incongruencia de insistir en buscar afuera el reconocimiento de un acceso al Primer Mundo cotidianamente desmentido por la enorme desigualdad de adentro. Advirtió que *llevada al extremo, la fantasía se convierte en locura*:

Ninguna fantasía tecnocrática nos debe llevar a suponer que ya hemos cruzado la línea que separa al subdesarrollo del desarrollo. [...] Necesitamos, sobre todo, un sistema político democrático y responsable, capaz de despertar y encauzar hacia metas realistas y legítimas, la gran energía social que está latente en el país. Mientras la solidaridad auténtica siga ausente de México como conjunto —lo ha estado desde siglos— el proyecto de hacer de nuestro país una sociedad desarrollada no es viable.²³

Datos del INEGI permitieron calcular, en mayo, que el crecimiento en 1993 no había pasado del 0.4%, frente a un crecimiento de población del 1.9%. A la cifra

acumulada de 7 millones 800 mil desempleados y subempleados se habían añadido 150 mil empleos cancelados cada año desde 1991.²⁴ La turbulencia social y política repercutió en una salida de la bolsa de aproximadamente 6 mil millones de dólares, que se compensaron con un crédito equivalente del gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a la repatriación de capitales mexicanos, a fines de mayo de 1994 se calculaba que habría regresado del 90 al 94 el 56% de lo que se había expatriado desde 1980: unos 12 500 millones de dólares.²⁵

Algunos voceros empresariales consideraron oportuno reconocer que México “no es el país de las maravillas” y advirtieron que lo importante no sería tanto el ritmo como la calidad del crecimiento. Ante la salida de capitales y el alza de tasas de interés Hacienda y el Banco de México contemplaron metas más modestas para 1994: crecimiento entre 1.5 y 2%; inflación entre 7 y 8% y superávit de 1.5% del PIB. Se anunció también que el Fondo de Contingencia se convertiría en Fondo de Inversión, empezando con 10 179 millones de nuevos pesos. Se destinarían a mejorar infraestructura, a impulsar la inversión de particulares, a eliminar “cuellos de botella”: a reanimar, en suma, la economía.²⁶ El nuevo giro sería imperativo, “gane quien gane”.

Lloviendo sobre mojado

Datos de la Bolsa Mexicana de Valores y del Banco de México confirmaron, en febrero, la alta concentración de la riqueza en los años más recientes. Apenas 183 239 personas, que equivalen al 0.2% de la población, tienen inversiones en el sistema financiero por 580 700 millones de nuevos pesos, que significan el 51% del PIB de 1993. Ese monto es superior en un 188% al presupuesto total de egresos de la Federación para 1994, que no pasa de 309 mil millones.

Las ganancias percibidas en el año de 1993 por ese reducido número de inversionistas: 129 mil millones de nuevos pesos, son equiparables al total de presupuesto programado para desarrollo social en 1994: cerca de 125 mil millones de nuevos pesos, cifra que representa el 53.9% del gasto programable. El número de inversionistas en la bolsa se ha reducido en el sexenio en un 37%: un dato más que ilustra la creciente concentración de ingresos.²⁷

El Tecnológico de Monterrey, con datos del INEGI y de la firma de consultoría Ciemex-Wefa, realizó un análisis de la concentración de la riqueza. Sus investigadores establecieron que el 10% de los mexicanos percibe el 60% de los ingresos, mientras que el 60% sólo tiene acceso a un 10% de total. El 15% de la población económicamente activa: 5 millones 700 mil mexicanos (y sus dependientes) subsisten sin ingresos, “prácticamente en una economía de autoconsumo”. Esos mexicanos habitan, sobre todo, en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Según el análisis

ta, el modelo de desarrollo adoptado propicia la concentración de riqueza y ha producido un “adelgazamiento” de la clase media, que ha descendido notablemente en sus niveles de consumo. La incapacidad para crear empleos aumenta la desigualdad. Tras de comparar la desigualdad mexicana con las de Nigeria o Nicaragua, el investigador insistió en que no se lograrán tasas aceptables de crecimiento mientras persista la tendencia a la conformación de monopolios.²⁸

Dos caras de la moneda

Lo que le faltaría a la reforma económica, según Luis Rubio, sería “generar su propia justificación histórica y filosófica” aunque, reconocía, “en ausencia de un éxito económico, esa justificación se torna ilusoria”:

Sin credibilidad la reforma no puede tener futuro. En lugar de presentar a la reforma como un nuevo modelo de desarrollo, capaz de transformar positivamente a México[...] ésta ha caído en un esquema defensivo y sujeto a la crítica feroz de la oposición. Si se presentaran los méritos de la reforma en su verdadera dimensión, quizás ésta tuviese una oportunidad de cobrar arraigo, entre una población que sólo tiene todo que ganar. Sin esa legitimidad, la reforma va a quedar en el pasado, sin haber logrado la transformación del país.²⁹

Convencido de que sin reformas México no tendría futuro y de que “se están creando oportunidades nunca antes vistas de desarrollo económico y político”, el analista se equivocaba quizás al suponer que el descrédito del “modelo” estaría en el ámbito de las ideas cuando, según sus propias afirmaciones, parecería desprenderse más bien del ámbito de los resultados concretos. Reconocía que la distribución del ingreso había empeorado, con enriquecimiento de un sector muy pequeño de la sociedad; que la falta de un crecimiento sostenido había frenado la movilidad social, la creación de empleos y el desarrollo de la pequeña empresa: en suma, que no se habían cumplido los propósitos esenciales del cambio. Los efectos más positivos serían, en su opinión, la apertura de la participación y el haberle puesto coto al autoritarismo.

La argumentación se antojaba endeble en relación con los datos de la realidad, que se empeñarían en exigirle al proyecto modernizador algo más que “buenos deseos” para empezar a ser adoptado por la mayoría de la gente como un auténtico “nuevo modelo”. Lo que le faltaría a la reforma económica sería, acaso, reconciliarse con el país real en vez de empeñarse en ponerlo entre corchetes.

La otra cara de la moneda fue expuesta por José Luis Calva en un enfoque crítico del manejo neoliberal de las finanzas. El gasto público bajó a -32% entre 1982

y 1992, para sanear las finanzas, pero eso significó una contracción de toda la actividad económica y una grave afectación al bienestar social. La inversión pública se contrajo a -50% afectando a sectores estratégicos como el petróleo y la infraestructura, cada vez más deteriorada. Se redujo severamente el fomento a la producción en todos los campos —agropecuario, industrial, pesquero y comercial. Subió el gasto social global, como proporción del gasto programable, pero disminuyó el gasto social *per cápita* y como porcentaje del PIB, entre 1982 y 1992. Calva recomendaría:

[...] redefinir la política de ingreso y de gasto público en un modelo alternativo de desarrollo económico que mantenga en proporciones manejables la brecha ingreso/gasto sin incurrir en políticas contraccionistas que afecten al desarrollo económico en el largo plazo o convertir en fetiche el déficit fiscal cero, aun a costa del progreso económico y social.

El *financiamiento no inflacionario* de la ampliación del gasto público debe lograrse mediante el aumento de los ingresos fiscales derivados de la dinamización de la actividad económica y apoyarse en la progresividad del impuesto sobre la renta de los estratos de muy altos ingresos, afectando especialmente a las ganancias especulativas.³⁰

La propuesta supondría conceder incentivos fiscales a la inversión productiva, en especial a las industrias nuevas y de alto interés nacional.

¿Cómo recuperar el crecimiento?

Ya cercana la mitad del ruidoso año de 1994 Jesús Reyes Heróles G. G. se preguntó *cómo recuperar el crecimiento*:

A pesar de que la inflación ha bajado sustancialmente y está bajo control, de que las finanzas públicas arrojan un equilibrio, de que se desreguló ampliamente y de que la apertura comercial estimuló la productividad, el PIB no aumenta y el empleo escasea. Ninguna política económica puede ser aceptable y sostenible sin crecimiento y empleo. La justificación última, única a fin de cuentas, de los costos de la estabilización, es que ésta es indispensable para crecer en el futuro, proporcionar empleos, y, por ese medio, sustentar el aumento del bienestar de la población.³¹

Para crecer al 6% haría falta que la inversión privada creciera a un ritmo 14 puntos superior al alto ritmo observado en México entre 1967 y 1982. Las exportaciones no petroleras tendrían que crecer 33 puntos más de lo observado entre 1989 y 1992. Y cada vez será más difícil aumentarlas: en 1992, los Estados Unidos sólo

importaron de México el equivalente al 6.5% del total de sus importaciones. En resumen: para aumentar el PIB a un 6% anual, se requerirían “esfuerzos extraordinarios” en estímulos, y no sólo promoción, a la inversión privada y a las exportaciones no petroleras. *El TLC ayudará en ambos aspectos pero no lo garantiza.*

Por otra parte, los coeficientes de importación han aumentado ininterrumpidamente desde 1988, a un 30% anual. Es verdad que la planta productiva que produce para exportar ha tenido que remplazar su maquinaria. Pero no se sabe en qué medida la reposición de equipos viejos por otros tecnológicamente superiores amplió simultáneamente la capacidad de producción. Si no se logra producir más, y pronto, esa producción se sustituirá con más importaciones. Los rezagos de infraestructura son enormes, salvo en supercarreteras de cuota, transporte aéreo y cierta telefonía.

Las tasas de inversión que se requieren son muy altas y escasea el ahorro interno para financiarlas. Hay que pensar, pues, en recursos del exterior. Sin el TLC sería *impensable* obtener recursos del orden del 5 o 6% del PIB al año. Pero, ¿bastará con el TLC?

Reyes Heróles G. G. estableció dos condiciones para la recuperación: 1) democracia y elecciones impecables y 2) que la economía crezca porque *de lo contrario, se eliminaría uno de los principales atractivos de México como destino para la inversión.*³² La estrategia macroeconómica tendría que lograr algo muy difícil: reducir la inflación a niveles internacionales y, a la vez, crecer por lo menos a un 6% anual. Ese crecimiento requiere estabilidad y certidumbre; tasas reales de interés pasivo entre 5 y 6% y tasas reales de interés activo entre 8 y 9%; competitividad fiscal; equiparar estímulos estatales y locales para la inversión con los de otros países y que las exportaciones no petroleras crezcan a más de un 10% anual.

Hoy por hoy, el TLC, que fue la principal apuesta del proyecto salinista, es *el principal activo con que cuenta el país para aspirar a crecer con rapidez.* ¿Qué falta entonces? Que se “materialicen” *los cuantiosos flujos de inversión extranjera –sobre todo directa– que reiteradamente se han prometido/anticipado en relación con el TLC.*³³

Para que fluyan 10 mil millones anuales de inversión directa a mediados del próximo sexenio (y una cantidad semejante en inversiones de bolsa) se requiere, pues, democracia y crecimiento. Las preguntas que suscita la argumentación de Reyes Heróles G. G. son evidentes: ¿no estaríamos encerrados en un círculo vicioso entre crecer para merecer las inversiones y recibir las inversiones para crecer? ¿Se revertirá la tendencia actual de gran desequilibrio entre copiosas importaciones y todavía modestísimas exportaciones? ¿Logrará recuperarse la planta productiva en todos sus niveles? ¿Se garantizará una estabilidad política, con democracia, lo suficientemente sólida como para favorecer la afluencia de inversiones tan cuantiosas?

Pero acaso la pregunta más densa sería otra. Suponiendo que todos esos presupuestos se dieran, ¿a cuántos alcanzaría a beneficiar el eventual e improbable crecimiento? ¿Acaso no seguirían fuera de la foto la inmensa mayoría de los pobres?

La operación fue un éxito; el paciente murió

Cuatro economistas respondieron, en mayo, a un interrogatorio del diario *Reforma* sobre la situación económica y su futuro. Ni se recuperaron salarios, ni se creó empleo, ni hubo crecimiento, las tres variables que reflejan las condiciones de vida de la gente. ¿Se habrían sentado las bases para el crecimiento futuro?

Según Enrique Quintana *pudo haber otras opciones con costos sociales y económicos menos onerosos*, con medidas menos “ortodoxas”, aunque sin pretender paradigmas de estabilidad financiera. Quintana fue claro: el sacrificio de la gente *seguirá sufriendo de preservarse la actual política económica*.³⁴

Jonathan Heath sugirió que “se ha sembrado mucho” y “lo que ha faltado es cosechar”. Advirtió, sin embargo, que la pobreza y la desigualdad son tan grandes que *no nos podemos dar el lujo de esperar*. Julio Millán hizo otra advertencia: la aplicación pareja de un modelo en una sociedad desigual ha frustrado ya otros modelos de desarrollo en México. ¿No volverá a pasar lo mismo? La prisa en aplicar muchas medicinas juntas habría intoxicado, quizás, al organismo económico.

Habría faltado imaginación para adaptar las teorías a las realidades. Tomar en cuenta a la gente habría aconsejado programas emergentes de creación de empleos, quizá para reconstruir la infraestructura: las metas tendrían que haber sido las personas, no las fórmulas abstractas.

Los cuatro economistas coincidieron en que la apertura debió ser gradual y en que hay que lamentar la ausencia de una política industrial para compensar los efectos del ajuste macroeconómico sobre la planta productiva.³⁵

Aunque Reyes Heróles G. G. atribuyó el 80% de los costos a la crisis y sólo el 20% a errores de estrategia, augurando crecimiento a mediano plazo con repercusiones favorables sobre la democratización, también opinó:

[...] la incertidumbre política, potenciada por una difícil situación social, genera incertidumbre, que aminora los flujos de capital del exterior, induce aumentos en las tasas de interés y del tipo de cambio, retrasa la inversión privada y, por esa vía, inhibe el crecimiento. Esto a su vez profundiza la crisis social y política.³⁶

Es decir, que podría generarse un círculo vicioso de repercusión de efectos negativos, precisamente porque la estabilidad macroeconómica no se logró dentro de una campana neumática sino en medio de una sociedad muy desigual y llena de carencias.

Ese círculo vicioso es el riesgo que pende sobre el eventual crecimiento que tendría que precipitar, con flujo de inversiones, el TLC. La falta de una política industrial y de moderación de los efectos de la apertura, del cambio estructural y

del ajuste sobre la planta productiva podría traducirse en incapacidad de esa planta para reaccionar, con la velocidad que reclamaría el TLC, al reto de la competencia. La tendencia a aumentar importaciones y franquicias de servicios ya resulta evidente. Y no se detendrá la tendencia migratoria hacia el Norte mientras no se logre crear más oportunidades en México.

Los cuatro expertos hicieron buenos pronósticos para el mediano plazo, con crecimiento sostenido y creación de empleos. La recuperación se vincularía estrechamente al cese de las presiones políticas que prevalecían a mediados de 1994. Jesús Reyes Heróles G. G. señaló, prudentemente, la *gran dificultad* que supondría, aun en un buen panorama de recuperación a mediano plazo, el hallazgo de esquemas que permitieran distribuir los beneficios del desarrollo de manera equitativa.

Enfoque comunicó, a la vez, los datos de una encuesta realizada a principios de abril de 1994 en el Distrito Federal. El 64% evaluaba como *muy mala/mala* la situación económica del país y sólo el 6% la consideró *muy buena/buena*. En cuanto a la situación económica personal, un 10% la sentía *muy buena/buena*; el 58% la evaluaba resignadamente como *regular* y el 32% la calificaba de *mala/muy mala*.³⁷

En suma: recogiendo los juicios sobre el proyecto económico, a mediados de 1994, alguien pudo recurrir con ironía a aquel malicioso chiste que apuntaba: “La operación fue un éxito; el paciente murió”. Se impondría, en consecuencia, no desesperarse y movilizar toda la imaginación para resucitarlo.

Dinero llama dinero

En enero de 1994 un análisis del Banco Mundial que circuló dentro de la SARH, advirtió que sólo fluirían inversiones hacia “regiones tradicionalmente ricas y productivas”. Esas inversiones se dedicarían al cultivo de hortalizas y a industrias procesadoras de alimentos, además de rentar más tierras para la ganadería; desaparecerían, además, varios cultivos básicos. El BM era explícito al sostener que la baja producción agrícola se debía a la falta de capitalización del campo y no a la forma de tenencia de la tierra. También opinaba el Banco Mundial que no había que esperar demasiadas inversiones como resultado del Procede (Programa de Certificación de Derechos) y que, por supuesto, no irían a las zonas más pobres y marginadas.³⁸

En Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Puebla hubo plantones, marchas y ocupaciones de bancos. Las protestas de agricultores medianos y pequeños, afiliados a El Barzón, recuperaron ímpetu en la primera mitad de 1994.³⁹

La crisis de la ganadería en sus diversas ramas se hizo cada vez más notoria. En la porcicultura, por ejemplo, habrían quebrado más de 25 mil productores de Nayarit, Jalisco, Sinaloa y Michoacán por las importaciones masivas a precios que

esos porcicultores consideraban de *dumping*. Muchos dejaron morir de hambre a los animales y tuvieron que vender terrenos, casas y hasta muebles para pagar deudas. Mientras un cerdo importado se vendía en 150 mil viejos pesos, la crianza de un animal semejante costaba el doble en México, de modo que fue resultando imposible competir.⁴⁰

La ganadería bovina también fue desplazada del mercado nacional por la importación de carne en canal y hasta de ganado en pie. Los créditos les cuestan a los mexicanos un 50% más que a sus homólogos en los Estados Unidos; los intermediarios se quedan con la mitad del precio de venta de carne al consumidor y, además, los costos de los insumos son muy altos. Aun con subsidios de Procampo, “sólo los productores más eficientes podrán competir en el mercado”.

Desarrollo donde quepan todos

Los agravios que afloraron violentamente en Chiapas despertaron ecos en otras regiones igualmente marginadas, como Oaxaca, Guerrero, ciertas zonas de Veracruz y Puebla y la Huasteca potosina. Los indígenas de numerosas etnias y campesinos mestizos se movilizaron en varios Encuentros Nacionales. También hubo reclamaciones agrarias y algunas ocupaciones de tierras. La inquietud se manifestó en Querétaro, en Michoacán, en Jalisco, en Chihuahua, en Hidalgo y en Nayarit.

Al analizar el ascenso del movimiento campesino registrado a partir de enero, Armando Bartra procuró hacer un balance de las opciones reales, señalando que ninguna se agota en sí misma ni es válida por separado. No basta demandar reparto si, en muchas regiones, los campesinos tienen que abandonar sus tierras por falta de recursos económicos para cultivarlas; no basta pensar en “empresas” o en proyectos económicamente rentables en zonas económicamente poco atractivas; los derechos de los pueblos indios no pueden contemplarse desvinculados de un esfuerzo más amplio por la democracia.⁴¹

Reconociendo la imposibilidad de liquidar la deuda social a corto plazo, Bartra sostuvo que no habría solución para las demandas concretas sin cambiar el modelo de desarrollo excluyente y marginador por otro de desarrollo con eficiencia productiva, pero también con justicia social. La recuperación de la legitimidad política reclamaría una *refundación* de instituciones y un nuevo *pacto social*. El tránsito hacia la democracia sería el paso previo para poner a debate el proyecto de nación.⁴²

El movimiento campesino independiente presentó a la Cámara de Diputados una nueva propuesta de Artículo 27, para restablecer el reparto agrario, en una secuencia de demandas que se manifestaron alrededor del 75 aniversario de la muerte de Zapata en el mes de abril. Participaron el Consejo de Organizaciones

Agrarias (COA), integrado por CIOAC, CNPI, UNTA, CNPA, CNUD, UCD, TUAC y FNAD; el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC), y una fracción de la UGOCM. Los campesinos denunciaron ante los diputados latifundios simulados. La propuesta campesina incluyó la devolución a la propiedad ejidal y comunal de su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable; la limitación del campo de acción de sociedades mercantiles y la demanda de apoyos integrales para la propiedad social en el campo.⁴³

El pasado entre corchetes

Ante las demandas de derogar las modificaciones al Artículo 27 o de repensar algunas, Arturo Warman hizo la defensa del proyecto oficial y atribuyó a los inconformes una injustificada nostalgia por el improbable “paraíso perdido” de un “pasado imaginario”. ¿No olvidaba, de paso, aquella *fuerza del pasado* que tan lúcidamente había evocado en 1986?

La motivación principal de los cambios, dijo, era el combate a la pobreza y el deterioro en el campo, donde trabaja el 25% de los mexicanos produciendo sólo 1/13 del producto nacional:

*[...] la inversión pública era, es y será insuficiente para cargar sola con el peso del desarrollo del sector agropecuario.*⁴⁴

Reconoció que el campo había sido siempre “más un pretexto que un propósito” y sugirió, con una severidad inmerecida en su caso, que “todos participamos en ese encubrimiento”. La necesidad de “un cambio profundo y radical” justificaría, en su opinión, el nuevo estatuto.

Las reformas habrían respondido a un “diagnóstico” y una “consulta” entre dirigentes y especialistas, funcionarios y juristas, inversionistas y, por último, “luchadores sociales” que serían, todos juntos, “las voces representativas y autorizadas en el desarrollo del campo mexicano”. Era “la consulta que puede llevar a cabo el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la ley”:

Quienes hoy afirman no haber sido consultados se equivocan o están reclamando un procedimiento inexistente en nuestro marco jurídico: están pidiendo un referéndum o un plebiscito, están hablando de otro país.⁴⁵

En esa ocasión Warman avaló la “gran reforma agraria” que se había realizado, sosteniendo que “el reparto agrario mexicano fue profundo y prolongado”, sólo que “había dejado de cumplir su función redistributiva de la riqueza nacional”.

Recordando que la población creció mucho desde el inicio del reparto agrario, advirtió:

[...] el reparto más significativo en los últimos veinte años lo hicieron los propios campesinos entre ellos mismos, al absorber a medio millón de nuevos ejidatarios, sus hijos, en la superficie dotada.⁴⁶

Fraccionar las “excepciones aisladas” de latifundios no tendría un efecto importante en la redistribución territorial. El minifundio es “abrumador” y resulta una gran ventaja que se puedan “compactar” tierras por decisión de la asamblea ejidal. Por otro lado, como la simple propiedad de la tierra rústica “ya no es negocio” habrían desaparecido los riesgos que antes se atribuían a las sociedades mercantiles y resultaría “pueril y absurdo” insistir en prohibirlas.

El ejido estaría recuperando su naturaleza de propiedad social a través de las decisiones democráticas “que con el nuevo ordenamiento le corresponden”. La *certificación de derechos ejidales* le daría al ejidatario certeza sobre su parcela, en vez de la “posesión precaria y vulnerable” que antes dependía del arbitrio del comisariado ejidal. Un millón de ejidatarios de 10 mil ejidos (la tercera parte) ya habían pedido incorporarse al Procede.

Reconociendo que “es lento el flujo de capital hacia el sector”, el funcionario aseguraba que las “asociaciones se están desarrollando”. Y aplaudía la apertura comercial y los acuerdos de libre comercio que diseñan “nuevos rumbos para el desarrollo de la actividad agropecuaria”. Pronasol debía ser contemplado como “una corriente poderosa” que permitía “plantearse con realismo el triunfo sobre la pobreza extrema”. Además, “el rezago agrario estaría prácticamente abatido y se superaría en este mismo año”.

Un documento del INEGI, de fines de 1993, contenía un seguimiento de ese rezago desde diciembre de 1991, cuando el presidente Salinas ofreció “el desahogo de expedientes de tierra en trámite y la ejecución de resoluciones presidenciales pendientes”.⁴⁷ Poner fin al rezago se consideraba el presupuesto de la modernización en el campo, por su estrecha vinculación con el fin del reparto agrario.

En abril de 1993 había 447 mil expedientes; en diciembre había 225 mil (9 expedientes por cada ejido del país). Sólo se había abatido el rezago en 13 estados (Querétaro, México, Campeche, Yucatán, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Baja California y Durango). El Procede generaba un nuevo tipo de rezago, y detonaba conflictos preexistentes, ya que es imposible incorporarse a ese programa sin haber resuelto antes todos los trámites pendientes, incluyendo conflictos de límites externos e internos.

El documento del INEGI aclaraba además que, al anunciarse el fin del rezago en los estados supuestamente liberados, “jamás se menciona el término finiquito”. Es

decir, habrían disminuido expedientes agrarios pendientes de ejecución, de carácter administrativo, pero no se habría llegado al finiquito del problema. Esto es: no se habría concluido, culminado y cumplido con todas las obligaciones contraídas por el Estado con los campesinos en el contexto del reparto agrario.

Economía postelectoral

En un Encuentro Nacional de Investigadores de Economía, a fines de mayo, Luis Felipe Barrón, del ITAM, advirtió que el combate a la pobreza, indispensable para entrar en serio a la globalización, pasa no sólo por una economía sana sino también por la democracia, incluyendo una mayor participación de los gobiernos locales y de la sociedad.⁴⁸

A principios de junio, el candidato presidencial del PRI dio a conocer *diez puntos básicos para la reactivación económica y el crecimiento sostenido*. El Estado volvería a asumir un papel de estimulador del crecimiento mediante inversión pública: el Fondo de Contingencia constituiría un fondo de fomento para impulsar las inversiones privada y mixta; la inversión educativa, en salud y capacitación, se haría contando con el sector privado. El estímulo a la inversión se acentuaría con una política fiscal de aliento a la productividad y a la creación de empleos. Para promover ahorro y financiamiento se buscaría un descenso en las tasas de interés. La promoción del empleo reclamaría, también, una efectiva desregulación y el fin de prácticas burocráticas corruptas. Habría que asegurar el acceso a insumos intermedios y promover la infraestructura para facilitar la competitividad. Con el mismo fin, se apoyaría la actualización tecnológica. Para propiciar una competencia más justa con el exterior se removerían obstáculos administrativos y legales. Para desarrollar el campo, se “ampliaría” el Artículo 27 y se perfeccionaría Procampo. La propuesta de crecimiento respetaría el medio ambiente. Con el “objetivo central” de favorecer “el bienestar de la familia”, se asumió como meta la creación de un millón de empleos anuales. Con ese fin, se elevaría un 25% la inversión pública reduciendo, a la vez, en un 10% el impuesto al activo de las empresas.⁴⁹

Desde Chiapas y ante empresarios del sureste, el candidato del PRD presentó a fines de junio su proyecto económico, centrado en el combate a la pobreza y la democratización de las decisiones económicas. Advirtió que eso no significaría revertir la privatización de empresas ni poner barreras al comercio exterior ni a las inversiones extranjeras. La “democracia económica” definiría sus metas en las áreas productivas en función del interés de la mayoría. Alcanzar un 6% de crecimiento para 1996, para crear entre 800 mil y un millón de empleos, requeriría incrementar hasta el 25% del PIB la inversión pública y privada.

El proyecto de Cárdenas se realizaría en tres etapas complementarias y concurrentes. La transferencia ordenada de la conducción económica, retomando los vínculos de México con sus socios extranjeros y alentando los flujos de inversión, tomaría un año. Se aplicaría después un *plan de emergencia* para la recuperación del crecimiento y la creación de empleos, calculado para dos años, con impulso ordenado y sanamente financiado de la inversión pública, que serviría de detonador a la reactivación económica, estimulando la inversión privada nacional y extranjera. En la tercera etapa se lanzaría un programa de crecimiento con equidad, que incluiría una política industrial, una política para el desarrollo del campo y una estrategia de distribución del ingreso, incluyendo una amplia política social y de apoyo a la educación.

Un *plan de emergencia* de inversión pública se ocuparía del mejoramiento y ampliación de caminos; la recuperación y expansión de ferrocarriles y puertos; el incremento de la generación de energía y de la refinación de petróleo; la construcción y reparación de escuelas, hospitales, viviendas y servicios urbanos. El financiamiento se obtendría de ahorros recabados al eliminar el desperdicio de recursos, el dispendio, la burocracia innecesaria y la corrupción, lo que permitiría contar con 3 200 millones de nuevos pesos. Los recursos del Fondo de Contingencia proporcionarían 3 200 millones de dólares y “un manejo cuidadoso del endeudamiento” permitiría contar con otros 10 600 millones de nuevos pesos, equivalentes al 1% del PIB. Al generarse más actividad económica crecerían los ingresos por la vía tributaria. Para el estímulo del crecimiento se canalizarían recursos con tasas preferenciales, hacia la micro, pequeña y mediana empresa y la liberación a importaciones de bienes de capital.⁵⁰

Una buena idea que se promovió “como si fuera un milagro”

El laureado economista de Stanford Paul Krugman advirtió, en junio, el rezago de México en comparación con los Tigres asiáticos en la calidad de la educación básica, que aquéllos estimularon ampliamente para cimentar su salto hacia el desarrollo. Dos estrategias serían pertinentes para incidir sobre la desigualdad: una reforma agraria eficiente y promover la industria de exportación intensiva en mano de obra. Sólo Taiwan y Corea del Sur habrían logrado, a la vez, crecimiento y más equitativa distribución.

Para empezar a resolver la penuria de los más pobres de los pobres, Krugman avizoraba un camino: auténtica solución al problema de la tenencia de la tierra y el desarrollo rural. El economista, residente ahora en Londres, se preguntaba si “hay manera de hacer otra reforma” en un país que habría hecho ya la reforma agraria.

Por otra parte, sólo “un crecimiento enorme” pondría fin a la motivación migratoria de los mexicanos.

El “pago por adelantado” de los inversionistas que ya llegaron tiene una condición: la transición democrática que acabe de convertir al país en una nación “responsable y respetable”. Los “viejos métodos” podrían desalentar la inversión extranjera.

El conocido creador de nuevos modelos económicos sugirió que el favorecimiento de unos cuantos *strategic traders* (negociantes estratégicos) no favorece a una auténtica economía de libre mercado ni se asienta con bases sólidas en la realidad económica. En cuanto al TLC, la dimensión de sus beneficios y sus peligros habría sido exagerada por sus promotores y por sus críticos. Una “retórica poco realista” fue responsable de la desconfianza que se generó como contrapartida:

El TLC es una buena idea pero fue promovido como si fuese un milagro. Siempre se paga por la falta de honradez. Me parece que ha habido un efecto de resaca (en México) y pienso que esto se debe en gran parte al TLC. Ésa es una buena lección sobre las ventajas de decir la verdad en el medio político.⁵¹

Parece evidente que la conformación de “alianzas estratégicas” no favorece a empresas nacionales medianas o pequeñas, que pudieran asociarse para elaborar productos en común. Se está propiciando, más bien, el surgimiento de oligopolios que limitarán la libre competencia de empresas nacionales y acabarán por desplazarlas. A la vez, los niveles de competitividad externa se buscan, sobre todo, con uso intensivo de capital y ajuste de la planta laboral. Los proyectos de inversión extranjera para 1994 se concentran en el sector automotriz, los servicios y el comercio. El acaparamiento del mercado por las grandes alianzas afectará tanto a los consumidores, que no tendrán acceso a fuentes alternativas, como a los proveedores, que también verán restringido su abanico de opciones de acceso a clientes.⁵² Con graves nudos e inciertas perspectivas se contemplaba el estancado panorama económico al acercarse las elecciones de agosto de 1994.

Repensar el país

La disposición del gobierno a buscar una solución política para Chiapas marcó con signo esperanzador el último día de las “cabañuelas” de enero. Los comentaristas instaban a abrir una agenda de transición a la democracia, partiendo de la garantía de elecciones limpias y propiciando un acuerdo con dirigentes de todos los partidos.⁵³ Un editorial de *La Jornada* destacó los tropiezos neoliberales en Venezuela y en Argentina, y los acontecimientos de Chiapas, como signos inequívocos de que

algo estaba fallando en un modelo empeñado en restringir al mínimo el gasto social a contrapelo de pronunciados desequilibrios.⁵⁴

El sorpresivo detonador del 1º de enero generó reflexiones e irreflexiones de toda índole en la primera quincena de un año que se avizoró turbulento y marcado por situaciones inéditas. Si el ojo del huracán estaba en Chiapas, agravios de parecida dimensión se removían en todas las regiones pobres y en sitios críticos, como Guerrero y Oaxaca, presagiaban convertirse en polvorín. Las campañas electorales se desdibujaban, entre aguijonazos de la prensa que exigía a los candidatos crecerse ante la adversidad, enseñar madera de dirigentes y remontar la “crisis de liderazgos” y sugerencias de que urgía “incorporar a la democracia” en el proyecto del grupo en el poder.⁵⁵

La turbulencia imperante se manifestó en múltiples especulaciones en torno a la candidatura del partido oficial, mientras algunas encuestas sugerían una alta desconfianza de la población del Distrito Federal en relación con la limpieza electoral: 71% no creía que se respetaría el voto.⁵⁶

Una declaración del subsecretario de Estado para América Latina precisó, en Washington, la perspectiva de la administración Clinton ante la falta de espacios políticos para la participación popular que estaría en la raíz del levantamiento indígena:

No hay duda que los acontecimientos en Chiapas se derivan de la pobreza y falta de habilidad del sistema político mexicano —del gobierno y de todos los demás— para abordar algunos de los problemas más fundamentales en esa parte del mundo[...].⁵⁷

El 25 de enero, el presidente Salinas se reunió en Tuxtla Gutiérrez con representantes de organizaciones indígenas y campesinas del CEOIC, que hablaron sin guardarse nada:

En Chiapas has manifestado cambiar la sociedad para ser nuevo, señor presidente, pero no pasó nada. Sólo por palabra quedó. [...] Te he mandado carta. No he recibido respuesta. [...] Que se nos respeten nuestras formas de trabajo y la integridad de nuestras organizaciones. [...] Que todos quepamos en la sociedad.

El 29 de enero, en Davos, el presidente aseguraba ante el Foro Económico Mundial que no se trataba de una revuelta indígena: lo de Chiapas era sólo un accidente, limitado a cuatro municipios, que no afectaría el rumbo “inalterable” ni la ruta “adecuada” del país. La escisión entre los dos Méxicos se hizo muy notoria en ese salto de unas cuantas horas, entre Tuxtla y Davos, que suponía un salto sobre muchos siglos. Lo que el avión permitía hacer con la mayor desenvoltura no podía hacerse en México, sino a riesgo de estallidos como el de Chiapas: no enten-

der, como había sugerido el líder campesino, que *esto es muy real* —la presencia no resuelta del pasado— podía ser catastrófico.⁵⁸

El 27 de enero los partidos políticos suscribieron un Acuerdo Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia. Parecía que la crisis de Chiapas obligaba a revisar todos los temas en debate. El compromiso fue contribuir a crear confianza y certidumbre en todas las instancias del proceso electoral; fomentar condiciones que garantizaran un clima propicio a la inversión y el crecimiento; profundizar políticas de atención prioritaria a los grandes rezagos sociales; facilitar la incorporación a la transformación política de los que habían optado por el enfrentamiento y contribuir a fortalecer autodeterminación y soberanía. Para alcanzar los ocho puntos propuestos para una elección imparcial, se acordó buscar el consenso para promover las necesarias adecuaciones legales. El secretario de Gobernación se comprometió, por su parte, a garantizar la imparcialidad en una elección aceptable para todos, asegurando que *la democracia es un signo inequívoco de modernidad*.⁵⁹

Octavio Paz aplaudió el Pacto como “*el hecho más importante* de los últimos tiempos en México”. Pablo González Casanova precisó los pasos que habrían de completar cualquier inicio esperanzador:

Es imposible construir un sistema democrático electoral sin un Estado democrático que atienda la economía de mercado y la economía social como ejes centrales de una modernización con menos exclusiones e injusticias.⁶⁰

En el desayuno considerado como el “segundo destape” del candidato del PRI, el presidente aludió al Pacto como “un paso fundamental” e insistió en la pertinencia de no cambiar la estrategia económica y de profundizar el programa de Solidaridad, que sí habría “funcionado” puesto que el problema se circunscribía a cuatro municipios. El candidato Luis Donald Colosio aplaudió el acuerdo entre partidos para fortalecer la democracia y, así,

[...] cerrarle el paso a la intolerancia, cerrarle el paso a la intransigencia, cerrarle el paso a la violencia, cerrarle el paso a toda práctica al margen de la ley y a toda intención desestabilizadora [y, sobre todo] cerrarle el paso a los escenarios perversos de la negociación fuera de la ley [...].

Dos días después, en Anenecuilco, Colosio reconoció que

[...] tal vez estamos ante la última oportunidad de responderles a nuestras comunidades en condiciones de paz y de estabilidad política.⁶¹

Todavía en las cabañuelas de enero, un lúcido comentario de Pablo Latapí había invitado, en *Proceso*, a *repensar el país* advirtiendo que, como decía Chesterton, son inútiles las respuestas a preguntas que uno no se ha hecho. ¿Sabría la élite abrirse a la posibilidad de reconocer equivocaciones que, más que plácidos ejercicios académicos, reclamarían rectificaciones políticas y afectarían intereses? *Es el país lo que hay que repensar*, había señalado Latapí, insistiendo en la urgencia de admitir que coexiste “junto al país de la proyectada modernidad” el otro México. Rectificar un modelo de desarrollo inadecuado a la realidad requeriría *reorientar la relación del Estado con la sociedad civil*.⁶²

El tema de los dos Méxicos persistió en febrero. Se habló de encontrar *nuestra propia modernidad* extrayéndola del México profundo y multiétnico. Paradójicamente, la propuesta de los “premodernos” parecería “la más moderna de todas”: acabar con el *sistema tlatoani* y abrirnos a la democracia. El *tiempo* de Chiapas tenía un ritmo que no necesariamente coincidía con el ritmo acelerado del calendario electoral. Acaso, como nunca en este siglo, se apreciaba ahora “la fractura social y cultural de los dos Méxicos”.⁶³

Un conjunto de organizaciones políticas y de grupos ciudadanos constituyeron al principiar el mes una Alianza Democrática Nacional en torno al PRD, suscribiendo una Carta para el Cambio Democrático. Se anunció que habría movilizaciones para lograr un período extraordinario de sesiones y aprobar nuevas reformas electorales.

La necesidad de *un nuevo pacto nacional* para replantear el proyecto de país fue invocada por Demetrio Sodi. El severo cuestionamiento que brotó en Chiapas indicaría que el pacto que había estado vigente se gastó y que sería indispensable abrir esa *discusión nacional que nunca se ha llevado a cabo*.⁶⁴

La paciencia, y el sistema, agotados

Fundando en principios morales su vocación democrática, un expresidente de Coparmex asumió, a mediados de febrero, un rotundo compromiso con el cambio, señalando el error de no haber emprendido una reforma política y social a la par que la reforma económica. José María Basagoiti declaró:

La paciencia del pueblo de México ya llegó a su límite. Hay solución política y democracia, que reclaman la dignidad humana, o veremos otros Chiapas en México [...]. A partir de Chiapas quien intente seguir siendo emperador absoluto de México correrá cada vez mayores riesgos porque cualquiera que llegue al poder deberá compartirlo y no tener el monopolio. De otra manera Chiapas tendrá otros nombres [...]. El futuro de México es optimista porque es bueno que el pueblo se atreva a decir ¡ya basta!⁶⁵

La idea del agotamiento del sistema fue manejada desde múltiples miradores. Luis Rubio advirtió el peligro de que la violencia sustituyera al vacío de instituciones, ante la falta de credibilidad de los viejos mecanismos de control, casi desmoronados, y la necesidad de establecer nuevas reglas de juego. Una nueva *disputa por la nación* se estaría dando, ahora fuera del partido hegemónico, al enfrentar “el mayor reto político de su historia”. La orientación y madurez de los partidos dejaría qué desear en un momento tan decisivo, en la urgencia de construir un puente entre el pasado autoritario y el futuro democrático.⁶⁶

Juan Molinar Horcasitas definió así la situación de un sistema que estaría en el filo de la navaja, entre la opción de democratizarse y el riesgo de “arrastrar en su caída al propio Estado”:

La crisis política de 1994 es la más profunda que ha enfrentado el régimen mexicano, tanto por la gravedad de los hechos mismos, como por la particular debilidad en que se encuentra el sistema.⁶⁷

¿En qué podía fundarse entonces el decidido optimismo que, a la vez, abrigaba? En la existencia de “más y mejores ciudadanos en todo el país”, de “más y mejores políticos opositores” y de que “quizá también tenemos en el gobierno más políticos dispuestos a entenderlo”.

En el mismo supuesto, Carlos Fuentes instó al presidente de la República, desde Los Angeles, a usar “su energía y su gran inteligencia” para iniciar el cambio democrático:

Con la misma energía con la que defendió el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, debe defender ahora una elección limpia y establecer las condiciones para que ésta sea totalmente creíble.

También Aguilar Camín pensaba que el presidente podía constituirse en “garante de unas elecciones inobjectables en agosto de 1994”. Faltaría sólo “asumir la posibilidad de la alternancia y garantizar el estricto respeto a lo que la ciudadanía decida en las urnas”.⁶⁸

Según los sondeos semanales de MORI/*Este País*, la simpatía hacia el movimiento chiapaneco seguía alta: habría pasado de un 61% el 7 de enero a cerca del 80% el 23 de febrero. La intención de voto que favorecía a Colosio, el 21 de enero, con un 28%, había crecido al 40%. A Cárdenas le habría favorecido un 21% el 21 de enero y un 15% el 23 de febrero; Fernández de Cevallos se había mantenido en un 14%. El porcentaje de indecisos o reacios a declarar descendió de 35% a 30% entre enero y febrero. Un 44% de los encuestados el 7 de enero pensaban que existía la posibilidad de levantamiento en otros estados y que la oposición recibiría más votos en el nuevo contexto político.⁶⁹

La reforma electoral se mostraba indispensable después del conflicto de Chiapas. Parecía indudable que el juicio sobre el sexenio pendía encima de las campañas y las elecciones. La impugnación del resultado electoral se avizoraba como un peligro real. Frente a lo que Castañeda advertía como “déficit programático” del PRD, la campaña del candidato del PRI arrastraba una larga cola de yerros del régimen. Para hacerla repuntar tendría que darse un reconocimiento público de errores, que acaso convertiría al candidato en una opción para el futuro, si demostraba estar provisto de alternativas coherentes. Una campaña provechosa para el país podría partir de un autoenjuiciamiento de la cabeza del gobierno sobre todo aquello que “no funcionó”, para despejar el camino a un candidato que así empezaría por sus propios pies:

En síntesis, la condición de posibilidad de una contienda de altura es que el candidato del PRI pueda alejarse del presidente en funciones desde hoy[...].⁷⁰

Gabriel Zaid fue severo y preciso al medir los efectos de Chiapas, que habrían arruinado el triunfalismo de un “sexenio vendedor” en medio de un “ridículo mundial” difundido sin misericordia por los medios:

Hacia fines de 1993, los grandes vendedores del sexenio estaban preparando el broche de oro convencidos de que habían resuelto los problemas nacionales con soluciones avanzadas; convencidos de que habían llegado para quedarse cuatro sexenios, porque el futuro los enviaba como una bendición para el país. En realidad, más que grandes técnicos eran grandes vendedores del carro completo que, en pleno comercial, salió a pantalla con las llantas bajas y echando humo.⁷¹

Tras hacer una exposición de los rasgos “premodernos” del sistema, Wayne Cornelius aconsejó abrirlo, para incluir a la sociedad en el manejo del proceso electoral. No veía otra manera de consolidar la incorporación del país a la economía global y, a la vez, permitir la construcción de una “nueva red de protección social” en salud, educación, creación de empleos y capacitación para el trabajo. De lo contrario, al *déficit social masivo* de los años ochenta se añadirían, sin salida alguna, *los costos sociales que seguirán aumentando en los noventa como consecuencia de una mayor reestructuración del sector privado y de la integración económica de América del Norte*:

Un gobierno dominado por tecnócratas con inclinación macroeconómica y por intereses del centro derecha en la sociedad civil —grandes empresas internacionales, las clases medias altas de las principales ciudades, etc.— corre el riesgo de pasar por alto las oportunidades de intervención estatal en una economía liberalizada que produzca ventajas a nivel *micro*.⁷²

Los compromisos de un discurso

La atmósfera que el candidato del PRI fue sintiendo en una campaña donde incidían, como acicate, agravios de campesinos, agricultores medios, pequeños empresarios y clases medias golpeadas; la sombra del conflicto de Chiapas; las especulaciones sobre alguna eventual candidatura independiente y la presión de la prensa crítica que le proponía asumir “un perfil propio” y “romper con su pasado” influyó, seguramente, en el discurso del 6 de marzo.

Para algunos, el discurso del 65 aniversario del PRI fue una clara definición de autonomía. También habría sido una explícita renuncia al fraude: *¡No queremos ni concesiones al margen de los votos ni votos al margen de la ley!* fue el punto de partida de aquella declaración de principios que sería interpretada por muchos como una “ruptura del cordón umbilical”. Colosio señaló, de entrada, que había que convertir la fuerza de su partido en *independencia con respecto del gobierno*. Asumió, enseguida, compromisos bastante concretos:

[...] reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo[...]; fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal[...]; hacer del sistema de impartición de justicia un sistema independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre [...]. Nuestras elecciones no tendrán vergüenza que ocultar[...]. Su transparencia exige la participación de observadores y no excluye que de ella pueda darse el más amplio testimonio, tanto por parte de nuestros ciudadanos como de visitantes internacionales[...]. Le queremos responder a todos los mexicanos, a los de todos los pueblos, a los de todos los barrios, a los de todas las comunidades[...]. Es la hora de un nuevo impulso económico; es la hora de crecer[...]. Y es la hora de acabar para siempre con todo vestigio de latifundio[...].

El candidato hizo la autocrítica del sistema:

[...] Veo un México de comunidades indígenas que no puede esperar más a las exigencias de justicia[...]. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada[...]. De mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales[...]. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad[...]. Veo a un México convencido de que ésta es la hora de la respuesta[...].

Expresó, en suma, que sólo proponía una continuidad, *la del cambio*, y reconoció que *es la hora de la democracia*.⁷³

Las opiniones oscilaron entre la sorpresa, la incredulidad y el aplauso. Si desde el PRD se manifestaron suspicacias de que tal discurso obedeciera a “instrucciones de aparentar libertad”, desde el PAN se aconsejó al candidato oficial demostrar su

deslinde de la tutela presidencial, sometiendo su candidatura a una convención interna de su partido para competir con Manuel Camacho.⁷⁴

¿Qué va a suceder en México?

La insistencia de Camacho en proponerse como “el hombre de la transición a la democracia” ocupó titulares y encuestas durante la primera quincena de marzo. Según el diario *Reforma* un 62% de regiomontanos y un 53% de ciudadanos del Distrito Federal habrían manifestado beneplácito ante su eventual postulación, y un 52% y un 50% le auguraban posibilidades de triunfo. Unas declaraciones de lectura ambigua contribuyeron, el 11 de marzo, a acentuar conjeturas. Algunos, como Aziz Nassif, atribuyeron la pugna en la cúpula a una profunda crisis del partido gobernante por la ausencia de mecanismos democráticos.⁷⁵

Desde dentro algunas voces, como la de Demetrio Sodi, insistían en pedirle al candidato poner fin a la contradicción personal entre convicciones democráticas y militancia antidemocrática que sufrían los priistas honestos (y que era, probablemente, la del propio Colosio). Juan Sánchez Navarro consideró que el país se encontraba “en la antesala del parto de la democracia”, con los dolores propios de ese proceso y que se requería de un gobierno con suficiente sustento en la opinión pública para completar con redistribución el saneamiento de la economía. Carlos Fuentes llamó al jefe del Estado, desde Madrid, a ser el presidente de la transición y “ostentar una sola insignia histórica: la democracia”.⁷⁶

Preguntas que flotaban en el ambiente fueron formuladas, el 20 de marzo, por M. A. Granados Chapa y Luis Rubio desde sus columnas de *Reforma*. Granados se preguntaba *¿qué va a suceder en México?*, en el supuesto de que “toda certidumbre se habría perdido” y de que “hoy todo puede ocurrir”. Declaraciones de Camacho a David Asman del *Wall Street Journal*, que sonaron a programa de gobierno, ¿sugerían acaso un interinato? Luis Rubio se interrogó: *¿quién puede garantizar la democracia?* Para concluir que la mejor garantía sería fortalecer las instituciones y no jugar en su margen: sugirió la presencia de Camacho en el IFE, para asegurar un proceso electoral transparente, o bien su postulación clara como candidato a la presidencia.⁷⁷ Después de una entrevista con Luis Donaldo Colosio el 16 de marzo, Manuel Camacho declinó su aspiración el día 22.

La reforma “más profunda” desde los años cuarenta

Tras definir PRI, PAN y PRD los acuerdos de principio que servirían de base a la tercera reforma electoral del sexenio, que consumieron seis semanas de negociacio-

nes, se anunció la convocatoria a período extraordinario en la Cámara del 22 al 24 de marzo. Se discutiría la modificación constitucional necesaria para “ciudadanizar” los organismos electorales —Consejo Nacional del IFE y consejos locales y distritales. En el período ordinario de abril se trataría la cuestión de observadores nacionales y extranjeros y los delitos electorales. Los partidos políticos ya no tendrían voto en las decisiones del IFE: de un total de 11 votos en el Consejo General, seis corresponderían a ciudadanos elegidos por dos tercios del Congreso, cuatro a representantes del Poder Legislativo y uno, aunque sin derecho a voto de desempate, al secretario de Gobernación, que seguiría presidiendo el IFE.

En el acto del 18 de marzo, en el Zócalo, Cuauhtémoc Cárdenas no avaló los acuerdos negociados por Muñoz Ledo, considerando que permanecía el control gubernamental sobre las elecciones. Muñoz Ledo sugirió que “sólo habrá órganos electorales autónomos cuando se realice la transición democrática”, aludiendo a la dificultad de evadir por completo el círculo vicioso. Mientras el secretario de Gobernación llamaba a “no dudar de la reforma” que sería “la más profunda desde la década de los cuarenta”, el PRD planteó seis dudas legítimas que las harían insuficientes. Giraban en torno a la depuración del padrón; la revisión de funcionarios electorales y consejeros ciudadanos, para desahogar la impugnación de más de 300; el nombramiento por consenso de *nuevo* director del IFE, con aprobación del Consejo General; la revisión del sistema de capacitación de funcionarios insaculados; la nueva distribución de tiempo en los medios y financiamiento justo para no favorecer a ningún partido, y la prohibición del uso promocional de Pronasol y Procampo.

Los más escépticos dentro del PRD señalaban como “condiciones mínimas”, que a pesar de la escasez del tiempo todavía podían definirse para aceptar sin reticencias los resultados electorales, listas nominales definitivas entregadas 100 días antes de la elección y órganos electorales plenamente autónomos e independientes. El considerable “peso relativo” del secretario de Gobernación como presidente del IFE no dejaba de ser objetado, así como la mano de los gobernadores en la designación de consejeros locales y distritales del IFE.⁷⁸

Un crimen contra México

La campaña de Luis Donaldo Colosio, que había empezado el 10 de enero en Huejutla, Hidalgo, terminó abruptamente a los dos meses y trece días, en Tijuana, con el sorpresivo asesinato del 23 de marzo.

El asesinato de Colosio dejó un ominoso vacío, que suscitó augurios de inestabilidad, ingobernabilidad y barbarie. En medio del desconcierto, la pesadumbre y la anodada reacción de casi todos, algunos alertaron contra el riesgo de una oleada de

autoritarismo represivo. Así lo hicieron Lorenzo Meyer y las 14 redes nacionales de ONG agrupadas en el Espacio Civil para la Paz. Juan Sánchez Navarro había recordado en el III Congreso Internacional Universitario, el propio día 23, que *la política es la parte medular de una sociedad* y había advertido que, o se daba el gran salto hacia la democracia, o se caería en una dictadura.⁷⁹

En la confusión de suspicacias de toda índole no faltó la inclinación a vincular lo que Carlos Fuentes llamó *un crimen contra México* con una “apología” o “épica” de la violencia que habría sido una secuela de Chiapas. Fue una opinión emitida en contextos diversos por Octavio Paz, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Angeles Mastretta y Rolando Cordera. Ortiz Pinchetti señaló que la mayoría de los mexicanos, incluyendo al sujeto a quien se atribuyó el crimen, difícilmente llenarían el perfil de lectores de diarios como *La Jornada* o de análisis político como *Proceso*. Pinchetti evocaba una alusión de Colosio a la “perversidad del sistema” y, como el 70% de la opinión según el diario *Reforma*, abría una interrogación sobre las oscuras motivaciones que se barajaban.⁸⁰

La esperanza de que “un nuevo mecanismo de selección” determinara la nueva candidatura del PRI, expresada por Wayne Cornelius, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis y Enrique Krauze, entre otros, no se cumplió: la designación de nuevo candidato, el 27 de marzo, siguió el cauce acostumbrado.⁸¹

Romper el maleficio

Varias notas del *Washington Post*, el *New York Times* y el *Wall Street Journal* lanzaron señales de que las elecciones de agosto serían “las más observadas de la historia de México”. La posibilidad de que ganara la oposición, ante una candidatura oficial que aparecía como verde, frágil y eventualmente “vencible”, fue ventilada por la prensa norteamericana en los primeros días de abril. También desde Washington llegaba la noticia de que un numeroso grupo de ONG mexicanas buscaban una acción conjunta con organismos norteamericanos para garantizar la limpieza electoral.⁸²

La crisis que, a partir de 1968, fue marcando el pulso alterado de cada fin de sexenio, se había deslizado hacia una tragedia, que podía magnificar a proporciones imprevisibles el “maleficio sexenal”. Así lo observó Jorge G. Castañeda cuando sugirió que los principales actores tenían que sentarse a definir, juntos, “las reglas de agosto”.⁸³ Había un maleficio, en efecto. El maleficio que había que romper era el del perol de las brujas de Macbeth, que rodea de sombríos efluvios al ejercicio y la codicia del poder.

Octavio Paz pidió rechazar “el plato de sangre”, conjurar a los “fantasmas sangrientos” y al “elemento demoníaco de la política” que habría reaparecido. Acaso

con excesiva confianza en la capacidad de irradiar energía de la palabra escrita, atribuía demasiada potencia inflamatoria a los “encendidos artículos” que habrían estado haciendo “la apología de la violencia”. Percibía un peligro de anarquía que pudiera abrirle paso a un régimen de fuerza:

La democracia, no me he cansado de repetirlo, es sobre todo una cultura, es un aprendizaje[...]. Todos los mexicanos conscientes —la parte más viva y consciente de la nación— desean ardientemente conservar la paz y, simultáneamente, asegurar el tránsito pacífico hacia una sociedad más justa y más libre. El único camino para alcanzarla —lo sabemos de sobra, después del terrible fracaso del socialismo autoritario— es la democracia. Y la democracia comienza con elecciones libres, limpias y pacíficas.⁸⁴

Desde *Nexos*, Aguilar Camín evocaba “el perol de los mensajes simbólicos” donde el imaginario colectivo habría condimentado la “épica” de la violencia. El analista advertía en el asesinato “la última llamada, la más dramática, de una larga serie” pero desconfiaba —como Soledad Loaeza— de “los sanos instintos” de la sociedad civil. Advertía, sin embargo, que el riesgo de la discordia estaba detrás de cada regla “no plenamente convenida” por lo cual resultaba indispensable empezar a construir las reglas democráticas:

La democracia es el resultado de la domesticación de esos impulsos originales (que conducirían a exterminar al *otro*), mediante su reglamentación y sometimiento a una racionalidad minuciosa. No viene sola, es un resultado del acuerdo colectivo, de la autocontención reglamentada. Es un fruto civilizatorio.⁸⁵

En la llanura de sombras

Convencido de que se habían cancelado los espacios dentro de su partido para democratizarlo e influir, desde allí, en la reforma política y social, Demetrio Sodi renunció a su militancia en el PRI el 6 de abril. Su renuncia estuvo teñida por un dejo de nostalgia por aquel partido “muy activo” y capaz de ejercer “una gran fuerza en la ciudadanía y en las organizaciones sociales”, que Sodi había llegado a conocer. El asambleísta explicó que había depositado en Colosio sus últimas esperanzas de una apertura democrática nacional y que su muerte y la designación de un candidato sin militancia cerraba tales expectativas:

El país vive hoy una crisis política sin precedente, crisis que puede hacer aun más profunda la inestabilidad económica y financiera existente y la incertidumbre y el temor ciudadano. Hoy como nunca, el futuro del país estará en juego en los próximos

meses; hoy como nunca se requiere lograr un acuerdo político que garantice la unidad nacional[...].⁸⁶

Pocos días después un desplegado, atribuido a la iniciativa del secretario de Agricultura y que reunía firmas de 57 exsecretarios en apoyo a la candidatura del PRI, fue motivo de una acusación penal de la fracción parlamentaria del PAN, por uso indebido de recursos públicos.

En abril se discutió mucho el manejo de las encuestas para influir sesgadamente en la decisión de voto. La cancelación de publicidad oficial a la revista *Este País*, a partir de febrero, fue vinculada con las cifras de sondeos de MORI de México que allí se difundían. Una verdadera “guerra de encuestas”, en la que intervenían funcionarios que pedían guardar el anonimato, procuraba descalificar los resultados que no coincidían con simpatías copiosas para la candidatura del PRI. El diario *Reforma* demostró cómo variaban preferencias entre cuestionarios presentados en la calle o en el domicilio: la gente era, en ese caso, mucho más cauta al favorecer a la oposición. También se explicó cómo era posible inflar porcentajes excluyendo a los indecisos o repartiéndolos proporcionalmente entre los candidatos.

Tomando en cuenta las metodologías empleadas, el experto en observación electoral Sergio Aguayo manifestó su confianza en las de MORI/*Este País*. Otras encuestas confiables serían las del diario *Reforma*, la Universidad de Guadalajara y el IMOP. El 10 de abril, el sondeo de MORI le acreditaba un 34% de votos eventuales a Ernesto Zedillo; un 24% a Cuauhtémoc Cárdenas y un 16% a Diego Fernández de Cevallos. Un 26% de encuestados no declaró por encontrarse indeciso. Otro factor a tomar en cuenta en relación con las encuestas sería que sólo reflejaban la opinión en ciudades importantes: las de MORI se aplican en el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Mérida. El voto rural no estaba considerado en ningún sondeo.⁸⁷

Diego Fernández de Cevallos aprovechó una visita al ITAM, a mediados del mes, para presentar las líneas generales de su programa de gobierno. Se comprometió con una reforma política integral, no sólo electoral, para asegurar una auténtica división de poderes y un pleno Estado de derecho. Propuso fortalecer la cultura nacional en medio de la globalidad y procurar un desarrollo integral para incorporar a los 40 millones de pobres y apoyar un auténtico federalismo. Habló de favorecer una “economía humana y moderna”, equitativa en oportunidades, responsabilidades y beneficios. Insistió en la necesidad de promover la creación de empleos permanentes y bien remunerados para empezar a revertir la pobreza. Ofreció mayor competencia y apertura en el sistema financiero, con crédito accesible, para financiar empresas y asegurar la modernización industrial. Expresó que promovería una distribución justa del gasto, asignando directamente fondos a estados y municipios. Propuso, en fin, restringir partidas “secretas” no sectorizables y reasignar partidas presupuestales para destinarlas a educación, salud y vivienda.⁸⁸

Al terminar abril se constituyó formalmente la Alianza Cívica encabezada por Sergio Aguayo, para observar las campañas políticas y contribuir a prevenir el fraude.⁸⁹ Evocando un poema de Efraín Huerta, Carlos Fuentes comparó al país con *una llanura de sombras*. Adolfo Aguilar Zinser hizo una parábola en torno a la caravana que habría partido seis años atrás, encabezada por el presidente, “en su gran expedición en busca del Primer Mundo”. Extraviada la caravana, el presidente se estaría rodeando de los vaqueros más viejos para enfrentarse a los indios.⁹⁰

Acuerdo para la transición y adiós al sistema

La pertinencia de un acuerdo que comprometiera a los candidatos a aceptar resultados electorales fue sostenida por Demetrio Sodi el 15 de abril, a 126 días de las elecciones:

Son dos trenes que van a toda velocidad tratando de llegar en primer lugar a la estación en donde sólo cabe uno, pero dispuestos a no reducir su fuerza de aceleración para, en caso de llegar en segundo lugar, aplastar al que llegó primero.

Aquella metáfora de las locomotoras expresaba una inquietud que muchos compartían: *Los trenes no pueden chocar porque en medio estamos 80 millones de mexicanos*. Carlos Fuentes la suscribió y habló de una severa crisis en las instituciones. Aguilar Camín habló de evitar que acabaran de hacerse pedazos.⁹¹

Una “lenta acumulación de violencias incontroladas” (en la precaria impartición de justicia; el narcotráfico; la corrupción de policías y la propia lucha política) era síntoma grave, reconoció Aguilar a mediados de abril, como otros tantos de una estabilidad quebrantada. Los más notorios ápices de esa descomposición se habían ido observando desde el asesinato del cardenal Posadas, hasta culminar en la muerte de Colosio:

La nueva estabilidad, si ha de ser duradera, vendrá de la recomposición democrática de la vida política y del Estado mismo, no de un regreso al pasado autoritario y tutelar cuyos despojos constatamos.⁹²

Ya eran demasiadas las voces que, desde afuera, le estaban diciendo adiós al sistema. Gabriel Zaid señaló que, además, “un estado latente de insubordinación” se estaba dando en su interior, desde el nivel municipal hasta la cúspide: *Un sistema en el cual ya no creen ni sus miembros prominentes, no puede durar mucho*.⁹³ Enrique Krauze resucitó un texto de Daniel Cosío Villegas, fechado en 1970, reclamándole al presidente un liderazgo moral que pudiera servirle de inspiración al país. ¿Se comprometería con una declaración pública, convincente y definitiva, en favor de la

democracia? ¿Convocaría a un *acuerdo histórico de transición*, llamando a los candidatos y a la sociedad civil? ¿Podría constituirse, a partir de ahí, un Consejo Ejecutivo de Transición a la Democracia para asegurarla plenamente antes del año 2000?⁹⁴

Un debate que hizo olas

En torno al debate televisivo de los tres principales candidatos giró y se sobregiró la apuesta electoral en el mes de mayo. Los temas de la turbulencia y la inseguridad circularon en los días previos, además de las reclamaciones del PAN y el PRD sobre la falta de confiabilidad del padrón. Mientras el PAN advertía que si sobrepasaba el 6% habría problemas, el PRD sostenía que habría cerca de 4.5 millones de electores de más, o “fantasmas” con credencial. Sergio Aguayo procuró acotar las verdaderas amenazas a la seguridad, en medio de tantas señales desbordadas de violencia, incluyendo los secuestros a empresarios y los asesinatos de líderes sociales. El manejo responsable del aparato de seguridad excluiría los “golpes de ciego” y exigiría, en cambio, un claro discernimiento.

Un reportaje de *El Financiero* difundió un supuesto informe confidencial de la PGR que hacía una radiografía de la violencia de lo que habría sido el sexenio más turbulento en los últimos 36 años. Chiapas habría puesto en evidencia que las tensiones sociales pueden estallar abruptamente en cualquier parte por la marginación extrema y las arbitrariedades. Los estados más críticos serían Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos y Tlaxcala que habían escenificado impugnaciones políticas y desalojos violentos, en un círculo vicioso de protestas y represiones. Habría riesgos electorales en Tabasco, en Yucatán y Oaxaca. En Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco podrían abundar votos para el PAN. Un clima muy propicio para conflictos, con alta irritación social, prevalecería en el Estado de México.⁹⁵

El debate del 12 de mayo le dio una sacudida a la opinión. Las encuestas, que medían el talante del sector moderno en las grandes ciudades, le adjudicaron el triunfo a Diego Fernández. *Reforma* registró un 66% de esa opinión en el Distrito Federal y un 70% en Monterrey y encontró que la decisión de votar había variado al día siguiente: aunque Zedillo conservaba el primer lugar, su puntuación bajó del 45% al 38%; la de Diego subió del 14% al 31% y la de Cárdenas descendió del 15% al 11%. La encuesta de MORI había registrado un 34% para Zedillo el 11 de mayo y un 20% el día 18, después del debate; Cevallos y Cárdenas empataban alrededor del 15% el día 11: Cevallos había subido al 25% el día 18 y Cárdenas había descendido al 13%.⁹⁶

Como sugirió Monsiváis, quedó la sensación de que se habían puesto en juego más las personalidades que las ideas: la agilidad, la rapidez, la astucia argumentadora

y la agresividad, además de la desenvoltura y la desinhibición, fueron percibidas como puntos favorables al panista, que además tomó por sorpresa la atención y la simpatía de un público de clase media y alta que aplaudió una actuación por encima de las expectativas.

Algunos, como Luis Rubio, refrendaron su convicción de que las principales fuerzas políticas serían las del PRI y el PAN; otros, como Oscar Hinojosa de *El Financiero*, recomendaron ponderar más la capacidad para el gobierno que la seducción de las dotes escénicas. Lorenzo Meyer consideró que, con Diego, triunfaría “la visión de la clase media” y se daría, probablemente, un importante cambio en la impartición de justicia. Pero ¿cómo se enfrentaría la pobreza? Aunque lo esencial de los programas económicos no admitiera demasiadas variantes, el problema que sería percibido como fundamental y donde se pondría el acento resultaba muy definitorio. Cárdenas, en su opinión, pondría al combate a la pobreza en la más alta prioridad.

Hubo quien se preguntó si los pobres habrían visto el debate y también se advirtió que, a pesar de su larga tradición de lucha democrática, “el PAN no ha podido arraigar en las masas mexicanas”. Ortiz Pinchetti observaba en Cárdenas un carisma “eficaz”, aunque “gris”, que podría significar una alternativa, precisamente “para atraer a las masas de gente pobre que constituyen la mayoría abrumadora del país”, sin descontar a núcleos cada vez mayores de clase media y a “empresarios exasperados”. Y ¿qué pasaría con el voto rural? ¿Podría garantizarse la vigilancia del proceso electoral en casillas remotas y poco accesibles?⁹⁷

La idea de que el voto de los indecisos definiría el triunfo y la probabilidad de que los porcentajes de sufragios estuvieran próximos entre los contendientes y lejos de la mayoría absoluta contribuyó a extender la propuesta de un gobierno plural, de amplia coalición.

Coalición o colisión

Esa propuesta empezó a manifestarse con insistencia. La compartían analistas norteamericanos como Roderic Ai Camp; Carlos Fuentes, que la hizo explícita después de recibir el Premio Príncipe de Asturias, como deseable aun antes de las elecciones; Luis Rubio, que la contemplaba como el único recurso para salir del “bache político”; Enrique Krauze, que advirtió riesgo de violencia si no se producía después de las elecciones: “Con el sur incendiado, yo quiero ver qué hace el norte de México”, apuntó, augurando una eventualidad de violencia “como no se ha visto desde 1930”. Krauze lamentó que el candidato del PRI no hubiera aceptado, en el debate, la posibilidad de integrar un gobierno plural:

[...] Zedillo no podrá gobernar como sus antecesores, si deja de lado la inmensa fuerza y legitimidad que ha venido alcanzando la oposición[...].

Krauze insistió reiteradamente en un gobierno plural, aclarando que quería decir efectivamente *plural* y no *dual*.⁹⁸

La opción de un gobierno plural ofrecería, según Demetrio Sodi, la única salida para una situación sumamente delicada, en la que ninguno de los candidatos podría gobernar por sí solo aspirando a representar a la mayoría de los mexicanos. Sólo un gobierno plural reflejaría la “diversidad y pluralidad” que estaría reclamando *un nuevo pacto nacional*.

La incredulidad seguía presente. Una Encuesta Mundial de Valores de la Universidad de Michigan reflejaba desconfianza del 70% de los mexicanos hacia el sistema político y MORI registraba un 45% de la población que no creía que su voto sería respetado. Federico Reyes Heróles percibía una “avidez de símbolos y autenticidad” y Krauze y Ortiz Pinchetti la demanda de un liderazgo moral. La presencia creciente de la sociedad civil parecía ser un ingrediente muy saludable, al suplir ese faltante de legitimidad ética.

Hubo signos alentadores por ese lado. Los cerca de 400 grupos de observadores reunidos en Alianza Cívica, ya con amplia experiencia previa, recibirían asesoría técnica y apoyo financiero de la ONU; organismos empresariales solicitaron recibir la misma asesoría para participar como observadores y el gremio notarial anunció que certificaría comicios apoyando a las ONG.

La integración de los seis consejeros ciudadanos, con voto, en el Consejo General del IFE fue recibida como otro síntoma positivo. Habían sido designados por consenso entre los tres principales partidos y elegidos por dos tercios de la Cámara. Nadie tenía muy claro, sin embargo, cuáles serían sus funciones y hasta dónde podrían vigilar la limpieza del proceso electoral. La suspicacia persistía ante la improbable “ciudadanización” de los consejos locales y distritales.

La guerra y la paz

La desazón de un eventual “escenario negativo” atravesó muchas especulaciones en los últimos días de mayo. Gabriel Zaid concretó así la suya propia:

La autodestrucción del sistema empezó desde arriba. No para acabar con el PRI y llegar a la democracia, sino para aumentar el poder central con efectos contraproducentes para el absolutismo de la presidencia: la insubordinación latente o manifiesta, la guerra interna del PRI contra el PRI, los asesinatos políticos, la pérdida de autoridad. En el peor escenario puede reaparecer el pluralismo armado: la guerra de todos contra todos por

el poder central, en medio de posibles disturbios electorales, guerrillas, narcos, secuestros y fuga de capitales. En el mejor (que parece más probable)[...], el consenso social puede imponer, más pronto de lo que se esperaba, la transición a la democracia[...].⁹⁹

Algunas posibles vías para esa transición fueron expuestas por Castañeda en un artículo que centraba la mirada en la circunstancia mexicana, después de un somero recordatorio de otras experiencias. En México no se habría pensado en negociar lo que pasaría *después de* las elecciones, porque tanto la oposición como el gobierno “creían” que iban a ganar: bastaría entonces la elección limpia para evitar concesiones. No hubo acuerdo en torno a reglas aceptadas por todos; ni convenios sólidos para “cualquier resultado concebible”. La elección no podría ser, pues, *el acontecimiento fundante* de la transición: el *punto de llegada*. ¿Habría que posponer el parteaguas para otra elección posterior y esperar que el conflicto no desbordara los cauces?

¿O habría que convertir esa elección en punto de arranque de un tránsito a la democracia por el camino de *grandes acuerdos nacionales*?

La elección serviría para definir quién será el presidente mas no para determinar su programa y su equipo de gobierno, así como los plazos mediante los cuales se siga edificando una democracia mexicana que volvería redundantes pactos de esta naturaleza[...]. El tiempo se agota.¹⁰⁰

Los nudos de la credibilidad

El empate que se dio en el debate televisivo sobre el padrón reflejó el que mostraban los sondeos, entre una mitad de la población todavía incrédula y la otra mitad queriendo creer en la confiabilidad de ese y otros puntos críticos del proceso electoral. Con 37 reformas implantadas desde el 27 de enero, confiar o no confiar seguía siendo el dilema. La auditoría externa al padrón, la instalación de los seis consejeros ciudadanos en el Consejo General del IFE y la designación de Juan Molinar Horcasitas en una de sus direcciones quizás habían llegado demasiado tarde —a once semanas de la elección— para reflejarse en cambios efectivos.

¿Qué podía esperarse de los consejeros ciudadanos? Uno de ellos, Ortiz Pinchetti, quiso dejar muy claro que *las atribuciones que se otorgan al Consejo General están lejos de ser decisivas*. La tardía presencia de los seis consejeros ciudadanos no iba a alterar el manejo de las elecciones, sobre todo porque ya no habría oportunidad de ejercer algunas de sus atribuciones. Pero, además, eran muchas sus restricciones: el Consejo General no puede convocar a sesión ni reunirse válidamente sin su presidente, que es el secretario de Gobernación, y al director general le corresponde incluir los temas a tratar en la orden del día. Tanto ese director como todos los altos

funcionarios, así como los medianos y pequeños, son parte del aparato de la administración pública, es decir, del sistema. La presencia de seis consejeros ciudadanos no podía alterar eso. El peso fundamental del conteo y la calificación corresponde a los Consejos Locales y Estatales en el caso de diputados de votación directa, senadores y presidente de la República. Al Consejo General sólo le toca supervisar la integración de esos consejos. Y revisar, en primera instancia, la legalidad de las elecciones para diputados plurinominales. La validación o rechazo del padrón sería, en los hechos, una de sus prerrogativas más importantes.¹⁰¹

Ortiz Pinchetti insistió, después de la renuncia del secretario de Gobernación en la última semana de junio, que el Consejo había llegado al proceso aún más tarde que Carpizo, *cuando la trayectoria de los comicios es irreversible*. Su papel sería más bien simbólico, como garante moral de una limpieza que estaría, en los hechos, fuera de su control. El mayor error, según el consejero ciudadano, había sido no asegurar la autonomía del IFE *ciudadanizando* a todos sus funcionarios. A muchos ciudadanos no les resultaba creíble un proceso electoral manejado por funcionarios del partido en el gobierno.

La responsabilidad de una reforma al vapor cuando pudo hacerse a lo largo del sexenio y con el consenso de todos los partidos correspondería, pues, al Poder Ejecutivo que todavía estaría a tiempo, sin embargo, para “disciplinar a los oficiales alquimistas, mapaches, operadores” y a los sectores “duros” que los manejan, en “una red tupida de alianzas y complicidades”. Eso y el consenso político y moral de los dirigentes de los partidos sería la clave de bóveda para unas elecciones limpias.¹⁰²

Una encuesta de Alianza Cívica difundida en la prensa el 1º de julio mostró datos reveladores. El 88% afirmó que iría a votar y la mayoría opinó que el país mejoraría si el proceso fuera limpio: 50% seguía pensando que habría fraude. Alianza Cívica trabajó su observación sobre una muestra de 5 mil casillas en 300 municipios (incluyendo todos los municipios de más de 50 mil habitantes y uno de cada quince urbanorurales y rurales). Allí estaría realizando una observación integral del proceso, desde principios de mayo. En el sondeo citado, un 66% auguraba un clima de violencia, con ingobernabilidad y represión, si había fraude.¹⁰³

Los puntos críticos de la elección trascendían al padrón, como lo señaló el consejero Ortiz Pinchetti. Quizá ni siquiera era *el* punto crítico, puesto que la suspicacia sobre el fraude cibernético y la mirada inquisidora de las auditorías podrían restarle peso a ese “fraude sofisticado”. Antes de las elecciones estarían pesando, evidentemente, el desequilibrio en la difusión de mensajes a través de los medios y el exceso de financiamiento con que había contado el partido oficial. Pero, además, se estaría descuidando el terreno más fértil para el fraude: las casillas donde, según Ortiz Pinchetti, podría darse en forma masiva o acaso en dosis mínimas, inteligentemente operadas desde arriba.

Los consejeros ciudadanos presentaron un estudio sobre la posibilidad de establecer centros de votación, que permitieran reunir varias casillas y aumentar la vigilancia y la rapidez del conteo. Se alegó que era demasiado tarde para implantarlos. Habría, pues, 94 mil casillas (casi el doble que en la elección del 88) y el 70% se encontraría en zonas rurales o en zonas suburbanas donde “grupos de poder tienen una influencia decisiva sobre grandes segmentos de población”: ése era el reino de los operadores locales y distritales, controlados por gobernadores y alcaldes del PRI, y allí la vigilancia sería casi inexistente.

¿Cómo se aseguraba que los funcionarios electorales designados por el sistema de doble insaculación no serían presionados o impedidos de ejercer correctamente sus funciones? Como en las zonas rurales se dispondría de 24 horas y en las suburbanas de 12 horas para el acopio de urnas y actas, caciques y *mapaches* tendrían tiempo suficiente, de acuerdo con el análisis de Ortiz Pinchetti, para alterar resultados. El propio analista sugería cuatro recursos para desatar esos “nudos”: 1) la desarticulación del aparato fraudulento por consigna del propio presidente de la República; 2) la designación del fiscal contra delitos electorales, que podría empezar a investigar a los *mapaches* muy notorios para frenar al resto de la fauna; 3) la presencia de observadores nacionales y extranjeros en las zonas remotas para asegurar que los funcionarios de casillas hubieran sido escogidos y capacitados correctamente y, el propio día de la elección, para probar por muestreo —ya que de otra manera sería imposible— si no habían sido sustituidos por “profesionales”; 4) el esfuerzo de los partidos de oposición para cubrir más del 40% de vigilancia efectiva en las 94 mil casillas.¹⁰⁴

La gran dificultad estaba, en la opinión de José Woldenberg, en que bastaría una falla en cualquier eslabón del proceso electoral para “descuadrarlo” todo y alterar la credibilidad:

Entre esos extremos se mueve hoy la política en el país: entre la desconfianza y la necesidad, entre la duda y el imperativo de crear un escenario para la coexistencia pacífica. No son pocos los esfuerzos que se han desplegado para modificar las normas y las instituciones[...], pero los que no creen en su transparencia se apoyan en una larga historia de irregularidades y fraudes que gravita sobre el proceso con una fuerza inmensa[...]. La duda no se disuelve, sólo se transforma, crece o decrece por momentos, pero no puede ser desterrada. La burra no era arisca[...].¹⁰⁵

¿Un solo hombre, garantía de credibilidad?

La incertidumbre generalizada cedió a la tentación de depositar en una sola imagen, a fines de junio, la garantía de una elección transparente. Los múltiples apoyos

que recibió el doctor Jorge Carpizo cuando presentó su renuncia demostraron, por un lado, el prestigio y honorabilidad reconocidos a su persona pero, también, la necesidad de mucha gente representativa de la sociedad civil de contar con una especie de “poderhabiente”, con alguien cuya sola presencia pudiera desvanecer mágicamente los temores de un fraude. La posibilidad de conciliar el sueño cada día, hasta el 21 de agosto, explicaba acaso esa “transferencia” de responsabilidades a un secretario de Gobernación “apolítico” que fungiría, en la fantasía si no en la realidad, como “fiador” del gobierno frente a la sociedad civil.

Carpizo renunció el 24 de junio, en medio del júbilo futbolero, por haberse encontrado

[...] múltiples personas de los más diversos sectores que ante la actual situación del país, sólo están luchando por sus intereses propios o de grupo, sin importarles México [...]. En este cargo, me comprometí a ser imparcial en mi relación con todos los partidos políticos. Estoy empezando a no serlo respecto a uno de ellos, debido a que no estoy y no puedo estar de acuerdo en lo relativo a múltiples actos de algunos de los sectores de ese partido[...].¹⁰⁶

Los candidatos del PRI y el PRD le pusieron nombre al partido aludido por el secretario. Se multiplicaron las especulaciones y se esperó inútilmente la información puntual que permitiera entender los motivos reales. Mientras el PRI centraba sus baterías en el PRD, con acusaciones de suscribir acuerdos para luego desconocerlos, el PRD señalaba manipulaciones fraudulentas para propiciar el triunfo del candidato oficial, que habrían motivado la irritación y la renuncia intempestiva de Jorge Carpizo. El episodio terminó con un fin de semana de negociaciones entre el presidente y su secretario, tras el cual la renuncia fue reconsiderada y el presidente declaró:

El primero de diciembre transmitiré el Poder Ejecutivo Federal a quien resulte triunfador en la jornada electoral del 21 de agosto, independientemente del partido político al que pertenezca.¹⁰⁷

El renunciante fallido advirtió que no precisaría el partido de sus desvelos porque eso “lesionaría gravemente” su imparcialidad y podría interferir con sus funciones en el proceso electoral. La mayoría de entrevistados en una encuesta del periódico *Reforma* opinó que el secretario se había referido al PRI. Mientras algunos respiraron más tranquilos, otros se inquietaron todavía más, pensando que en circunstancias tan neblinosas más valdría poder confiar en las instituciones que tener que depositar en una sola persona la “encarnación” de la credibilidad electoral.¹⁰⁸

Acuerdo nacional para la transición

Prevalecía la idea de lograr un acuerdo de frente amplio, capaz de servir de puente y de facilitar un tránsito pacífico y civilizado hacia las elecciones. Se anticipaba también la necesidad de que el gobierno emanado de éstas fuera plural y ampliamente representativo, para propiciar un deslizamiento hacia la “normalidad democrática”. Era un consenso en los espacios más alertas y lúcidos de la sociedad civil a mediados del año.

¿Qué posibilidades habría de llegar a los acuerdos necesarios para un gobierno de coalición, con un programa aceptable para las principales tendencias políticas? En un ejercicio de síntesis de problemas y demandas en lo económico, lo social y lo político, Jorge G. Castañeda procuró reflexionar sobre los lineamientos generales que podrían enmarcar *un programa común*.¹⁰⁹

En lo económico, sugería una *juiciosa* combinación de respeto a lo existente y de cambios. Tendría que mantenerse la liberalización comercial; la nueva dimensión del sector público; la inversión extranjera para financiar el desarrollo; la autonomía del Banco Central y la limitación de subsidios generalizados. Pero se requerirían ajustes y matices indispensables en cuanto al crecimiento y la redistribución de sus beneficios, apoyándolos con una política deliberada, en vez de esperar al “goteo” improbable. A corto plazo, un programa sanamente financiado de inversión en obras públicas, vivienda y educación crearía empleos y sentaría las bases del crecimiento y la competitividad futuros. Una reducción sostenible de las tasas de interés favorecería el financiamiento de empresas medianas y pequeñas. Habría que cuidar, por otra parte, que la reactivación no “reventara” el desequilibrio comercial considerable que ya existía.

Para mantener flujos de capital y credibilidad habría que garantizar el respeto a obligaciones y compromisos vigentes. Un régimen de transición podría negociar, sin embargo, ciertos ajustes al TLC, a la situación de la deuda y a la situación migratoria.

El combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad tendrían que articular el programa social, para asegurar un mínimo de satisfactores básicos en vivienda, salud, educación, ambiente habitable y protección contra el desempleo. La capacitación para que la gente pudiera obtener progresivamente, y por sí misma, niveles salariales mejores se incluiría en un proyecto educativo que tomaría en cuenta la preparación para el empleo y la reconversión de parte de la fuerza de trabajo. Mejores niveles salariales y democracia sindical entrarían en ese capítulo. Para realizar el programa social tendrían que aplicarse criterios progresivos en la recaudación fiscal y sería indispensable una reasignación equitativa del presupuesto entre la federación, los estados y los municipios.

Democratizar el Estado y fortalecer a la sociedad civil serían los parámetros de la reforma política. Supondría completar la reforma electoral; garantizar la seguridad

a los ciudadanos; fortalecer la separación de los poderes y asegurar, en especial, la honradez de un Poder Judicial que garantizara la impartición clara de justicia y asegurara el rendimiento de cuentas de los servidores públicos. Remover los obstáculos para un auténtico federalismo estaría en esa agenda.

La hora de la democracia

Al cumplirse la primera mitad del año no había muchos destellos de luz en el brumoso panorama. Las controvertidas encuestas registraban datos diversos. El sondeo de MORI/*Este País* marcaba, el 1º de junio, una amplia indecisión del electorado del nivel de un 31%. Las preferencias explícitas señalaban, en ese momento, 28% para Diego, 26% para Zedillo y 14% para Cárdenas. El candidato menos favorecido por las encuestas ponía sus expectativas en los que no declaraban o se manifestaban como indecisos. El que aparecía en segundo lugar creía en sus propias encuestas y el candidato del PAN siempre había dicho que no le merecían interés.

La negativa de las comunidades zapatistas a aceptar las ofertas del gobierno, pero con el compromiso de respetar una tregua que permitiera la realización de elecciones en paz, fue cuestionada por Ernesto Zedillo, que hizo manifiesta su desilusión y la interpretó como un fracaso de las negociaciones y la mediación. La consecuencia inmediata de ese cuestionamiento fue la renuncia del Comisionado para la Paz y su retiro temporal de la arena política.

La ambigüedad de una atmósfera enrarecida por acontecimientos sin precedentes, donde se sobreponían gestos y respuestas improvisados sobre la marcha, no contribuía a la tranquilidad de nadie. La necesidad de un pacto entre el gobierno, los candidatos y grupos de la sociedad civil para establecer las condiciones, aceptables para todos, de una elección no sólo limpia sino creíble se insinuaba como una aspiración de la sociedad civil que todavía no encontraba respuesta.

Una de las iniciativas con más repercusión, en ese sentido, fue la del Grupo San Ángel, que recibió esa denominación de la prensa por el sitio donde se realizaron sus primeras reuniones, a partir del 9 de junio. El día 29 se hizo público un documento titulado *La hora de la democracia*, señalando que ese foro coincidía con un despertar a la misma convicción en otros grupos ciudadanos, e incluía a personas con visiones y procedencias diversas, seguras de que ya no debía posponerse la construcción de la democracia.

México necesita asumir resueltamente la transición y las elecciones del 21 de agosto serían *la gran oportunidad para el avance democrático por la vía pacífica*. Los firmantes sugerían un Pacto de la Concordia, para garantizar limpieza electoral y elaborar una “agenda transitoria de modernización democrática”.

El documento del Grupo San Ángel incluyó ocho proposiciones: 1) apoyar esfuerzos del gobierno, consejeros ciudadanos, partidos y organizaciones cívicas para garantizar limpieza, legalidad y credibilidad electorales; 2) reunirse con los candidatos para identificar los puntos en litigio que todavía impedían un acuerdo; 3) buscar el compromiso de los diversos sectores sociales en torno a una actuación imparcial hacia las opciones electorales; 4) reunirse con los consejeros ciudadanos y con el gobierno para promover sugerencias de los candidatos y demás actores sociales; 5) rechazar el uso de recursos y programas públicos en beneficio de cualquier candidato y exigir el nombramiento inmediato del subprocurador especial para combatir delitos electorales; 6) demandar imparcialidad y apertura de los medios y realizar, en tiempos y canales de amplia audiencia, programas para discutir siete temas centrales: democracia y reforma política; justicia y seguridad; federalismo, desarrollo regional y municipal; desarrollo económico; educación y cultura; salud y ecología; pobreza y desigualdad; 7) promover una participación activa de la ciudadanía en los procesos electorales, y 8) contribuir, a partir de los “20 Compromisos para la Democracia”, a la elaboración de una *agenda para la transición democrática*, para identificar las continuidades y los cambios aconsejables en lo económico, lo social y lo político.

Un gobierno *de concordia nacional*, abocado a *alcanzar una convergencia entre todos los intereses nacionales* tendría que poner en práctica, después de las elecciones, una agenda articulada con tales propósitos.¹¹⁰

Militantes y exmilitantes del PRI, afiliados a Acción Nacional, expanistas agrupados en el Foro Democrático, miembros del PRD coincidieron en el Grupo San Ángel con intelectuales y otras personas independientes. En su misma constitución, el agrupamiento demostraba la posibilidad de promover una política de acuerdo, civilizada y abierta. Se encontraban entre aquellos convencidos de la democracia Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Enrique Krauze, Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Jorge G. Castañeda, Demetrio Sodi, Miguel Basáñez, Francisco Cano Escalante, Enrique González Pedrero, Ricardo García Sáinz, Bernardo Sepúlveda, Federico y Jesús Reyes Heróles, Vicente Fox, Adolfo Aguilar Zinser, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, Manuel, Tatiana y Rebeca Clouthier, David Ibarra y Elba Esther Gordillo. El peso de ese grupo fue creciendo en el mes de julio.

En los primeros días de ese mes, Enrique González Pedrero procuró puntualizar ciertos factores definitorios en el umbral de la transición. Se refirió a una crisis de confianza en todos los niveles, que podría precipitarse en una “continuación de la política por medios violentos”. ¿Sería factible que los contendientes acordaran reglas aceptables para todos? Los vínculos del pacto legitimador que cohesionaba a la sociedad se habrían distendido hasta un peligroso límite, cuando *casi nadie cree en casi nada*, y menos en la capacidad de la elección para abrir por sí sola cauces adecuados a la gobernabilidad.

Habría que suplir, con voluntad política, las fallas de un proceso electoral que, ante la imposibilidad de consolidar en un plazo brevísimo reformas de última hora, presentaría resultados sujetos a discusión. Puesto que la elección no sería paradigmática, sólo la tolerancia permitiría atravesarla con un mínimo de riesgos para alcanzar un *acuerdo en lo esencial* y construir, a partir del 21 de agosto, la transición democrática.

En una sociedad llena de agravios, la intemperancia sólo contribuiría a recrudecerlos. Los candidatos tendrían que entender que no habría victorias indiscutibles. Habría que prefigurar la democracia y volverla determinante del comportamiento de ciudadanos y candidatos. La movilidad de pequeños agrupamientos de la sociedad civil podría ser muy útil para evitar polarizaciones y violencia.

González Pedrero insistió en un *compromiso abierto y leal* entre los contendientes que representaban fuerzas reales para constituir un gobierno que reflejara al máximo la imagen plural del país e incluyera, en los beneficios del desarrollo, a todos los mexicanos:

A la transición democrática llegaremos sólo si hacemos un compromiso con el país real[...]. La *legalidad* del 21 de agosto, y la *legitimidad* del 22 en adelante, dependerán en buena medida de que el país urbano y moderno reconozca y tome en consideración a la otra mitad de México. En las circunstancias de hoy eso, además de ser lo inteligente, es lo único realista.¹¹¹

Entre el Apocalipsis y la esperanza

Los que eligieron “el camino de los fierros” para manifestar sus agravios el 1º de enero, buscaban, según declaración propia, *hacerse escuchar*. La opción violenta habría surgido como un último recurso. La sordera de las autoridades había estado acompañada de una reiterada violencia, que hablaba de complicidades con el pertinaz hostigamiento de guardias blancas y caciques. Las peculiaridades de la zona selvática volvieron álgida, hasta el punto de ser experimentada por muchos como una situación límite de proporciones intolerables, la pobreza extrema y la injusticia flagrante en las que Chiapas se había ganado el primer lugar.

Si el propósito esencial era *hacerse escuchar* no tendría por qué extrañar que el arma de la palabra fuera la más activa del arsenal de los insurgentes. En el discurso de *Marcos*, admirado por un lado y vilipendiado por otro, se expresó la extraña alianza o hibridación que parecía conjugar, en ese levantamiento, los muchos tiempos de México. Y allí resonaban, detrás de los argumentos y actitudes más contemporáneos, o “posmodernos”, y de lo que algunos descalificaron como “vieja extorsión sentimental” del izquierdismo envejecido y hasta enterrado, ecos de una memoria indígena que reactualizaba un secular ímpetu reivindicativo.

La crónica de esa memoria “que apeló siempre a la rebelión” había sido escrita en 1985 por Antonio García de León, en un erudito y exhaustivo memorial de los agravios de Chiapas que daba cuenta, a la vez, de un doble legado de *resistencia y utopía*. No habría que aventurar interpretaciones sin consultar antes ese acopio paciente de información, que muestra cómo se han empalmado los tiempos: el prehispánico, el colonial, el de la plantación de fines del siglo XIX, el de la revolución y la posrevolución, sin que ninguno quedara cancelado y sin que la modernidad acabara por fin de instalarse.

La memoria registrable empieza en el siglo XVI, con un imaginario prodigioso que recreó un universo de los orígenes lleno de dioses, indios y cristianos, todos mezclados. Cristo era el Sol; sus hermanos, las estrellas; su madre, la Luna. *Tzeltal* y *tzotzil* eran las lenguas de una sola etnia que ocupaba Los Altos, la región norte, los llanos de Comitán y los valles al oriente del Grijalva. Se llamaban a sí mismos, los de esa etnia, los “hombres verdaderos” (*basts’il Winik*), los hablantes de la “lengua legítima” (*bats’il k’op*). También los tojolabales se reclamaban como tales y creían poseer esa palabra: eran los *tojol Winik*, dueños de la *tojol Ab’al*. Detrás de esa convicción estaba el mito de las creaciones sucesivas del universo y del hombre: los de barro y de madera no habían resistido al fuego y al agua; tampoco el hombre de oro, que se identificaba con el *caxlan* ladino, cuyo peso, y dureza de corazón, tenían que soportar los indios. Gracias a la palabra verdadera los *hombres de maíz*, “los hombres verdaderos y únicos” seguían comunicándose con lo sagrado.

Las hazañas de una pareja original, que habría sido salvada por los guardianes, hilarían la trama de “una larga noche de resurrecciones” entre una supuesta Edad de Oro anterior a la Conquista y el día de hoy. La tradición oral enlazaría los tiempos en una secuencia portentosa de prodigios, como correspondía a un mundo sacralizado y recorrido por presencias tutelares y nefastas.

Durante cinco siglos, todo eso habló en voces de los que pronunciaban augurios y comunicaban videncias. Hasta las piedras formulaban presagios y sueños de fin del mundo o del comienzo de un paraíso igualitario donde sería desterrada la opresión. El milenarismo indio pendía de aquella profecía del Chilam Balam que anticipaba el día en que el tronco de la ceiba sería resellado: *Entonces escalarán las nubes y escalarán las montañas, será el tiempo de las revueltas y motines[...]*.

García de León consignó “ciclos repetidos de revueltas” bajo la advocación de héroes culturales como la ceiba *Imox* y *Vo’tan*, corazón de la montaña y del pueblo, que presidía el tercer día del calendario agrícola. Era el dios jaguar de la noche y, a la vez, el primer hombre que fue enviado por los dioses a repartir la tierra a los indios.

Las Leyes Nuevas de Indias habían sido promulgadas en 1542, pero no se aplicaban en la práctica en 1546, cuando el obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, amenazado de muerte por encomenderos que lo comparaban con el Anticristo, tuvo que abandonar la diócesis. La explotación ilimitada de los indios, que

prevaleció en lo sucesivo, no tropezó siempre con un espíritu misionero semejante por parte de los obispos y las órdenes, más ocupados ya en multiplicar los bienes terrenales de la corporación eclesiástica. Los “errores” de las antiguas creencias fueron sistemáticamente combatidos, pero nunca desaparecieron. Después de la revuelta de 1712 se constituyó, entre los indios, una especie de Iglesia paralela, “de los pobres”, que predicó la llegada de un Reino de la Justicia Divina, una Nueva Jerusalén que ellos llamaron su *Nueva España*.

En 1974 hubo un Congreso Indígena en Chiapas, donde reaparecieron los colores emblemáticos y las palabras que pretendían volver a colmar aquellos agujeros que a todos los indios les heredó la Conquista: “¡Que nos devuelvan las tierras que nos han quitado!” Hubo también motines y se reabrieron heridas. En los poblados chamulas y tojolabales y tzeltales, y en la Selva Lacandona, *se volvió a evocar la guerra de castas y se desenterraron los símbolos de su exaltación*. El antropólogo García de León identificó en todo aquello una evocación colectiva con la apariencia de una historia que giraba en círculo o en espiral: por encima de las fechas, esa historia reinstala el mito y “una sola y eterna resistencia contra un sistema de opresión renovada”. Advirtió que, en tales momentos de ruptura y de crisis, no había matices. O se estaba con los opresores o “del lado de la palabra legítima, tan viva hoy como hace quinientos años”:

Las inmemoriales hazañas de Votán —corazón del pueblo— daban sentido a la larga lucha y a la vieja alianza entre la espera milenaria de los despojados y la utopía anarquista o socialista. Entonces [...], volvieron a hablar de un deseo profundo, un como trueno subterráneo que recorre la región a guisa de fantasma desde aquella tarde de mayo de 1974: “Que todos los oprimidos sean un solo corazón —*junach ko’tan*— en la continuidad de la lucha”[...].¹¹²

Las palabras oraculares de los ancianos, guardianes de la memoria, seguían anunciando fenómenos telúricos en la naturaleza y en la historia, “alimentando la intermitente resurrección de un mundo que se debate entre el Apocalipsis y la esperanza”.

Volver y no volver al pasado

La marginación en Chiapas, junto con la de Oaxaca, es la más alta de la República. Una secuencia de agravios seculares está en el trasfondo de la inconformidad que se volvió insurgente el 1º de enero de 1994. Habría que remontarse a un profundo análisis histórico y social para comprender sus raíces y razones. Sin un entendimiento claro de tales antecedentes no será posible cimentar una paz perdurable ni la estabilidad que se requiere para empezar a combatir el enorme rezago social.

Fue en Chiapas donde el dominico Fray Bartolomé de las Casas inició, desde 1539, una labor misionera de enorme trascendencia histórica como obispo de la diócesis que tenía sede en Ciudad Real. Su cruzada para la protección de los indios quedó inscrita en las Nuevas Leyes de Indias y le dio otra cara y un sello humanista y cristiano a la colonización española. Cuatro siglos después, otro obispo fundó en aquel ejemplo una pastoral comprometida con la opción por los pobres, que esparció entre las comunidades la semilla del respeto a su dignidad y sus derechos humanos.

El transcurso de cuatro siglos no ha acabado de abolir condiciones inveteradas de injusticias y opresión racial. En el capítulo II de este libro se refieren los brotes de resistencia durante la Colonia y en el siglo XIX. La revolución de 1910 se tropezó en Chiapas con un ejército reclutado por hacendados y encabezado por Tiburcio Fernández que, a cambio de garantizar su apoyo, logró perpetuar una estructura de poder que el porfiriato había consolidado, al legitimar despojos de tierras comunales consideradas como “baldías”.

Durante la presidencia de Cárdenas, el líder Erasto Urbina logró la recuperación de algunas tierras despojadas y se establecieron ejidos, pero hubo favoritismos y muchas tierras fértiles no fueron afectadas. Jacinto Arias, tzotzil de Chenalhó, doctorado en antropología en Pittsburgh, ha explicado cómo la corrupción de las autoridades impidió escuchar los testimonios de los viejos y revisar los “títulos primordiales”, así como investigar los orígenes viciados de muchas escrituras notariales que amparan pequeñas propiedades que se encuentran aún en tierras comunales.

En los años setenta la reivindicación indígena de las tierras despojadas produjo revueltas en Larráinzar y Venustiano Carranza y, aunque se lograron recuperaciones, quedaron varios muertos en el camino. En algunos sitios, como Huixtán o Simojovel, el apoyo de organizaciones campesinas como la CIOAC y de algunos partidos (PST y PSUM) propició recuperaciones sin pérdida de vidas. En otros sitios, como Ocosingo, Chilón y el territorio de los choles, donde siguen abundando ranchos y haciendas, han abundado también las víctimas.¹¹³

Para no alterar la estructura de la propiedad en Los Altos se inició la “expansión de la frontera agrícola” hacia la Selva, donde se hicieron dotaciones en los años sesenta y setenta.

Los llamados “confines de la tierra”

Se conoce como Selva Lacandona un amplio territorio al oriente de Chiapas, que incluye Las Cañadas de Las Margaritas y las de Ocosingo-Altamirano; una zona hacia el norte próxima a Palenque y, hacia el este, la franja dotada en los años setenta a la comunidad lacandona, más la reserva de la biósfera de los Montes Azules y la región de Marqués de Comillas.

La migración hacia esos confines (hacia el *Ahlan K'inál*) se inició en los años cuarenta y se acentuó en los sesenta y los setenta. En la Selva coincidieron indígenas y campesinos de toda la República y de diversas regiones de Chiapas, especialmente de Los Altos. Una diáspora de solicitantes de tierras le dio a la Selva, por décadas, la configuración abigarrada que hoy la caracteriza. Es un territorio de mucha complejidad, debido a la singular convergencia cultural que se fue cuajando. Todos los testimonios antropológicos coinciden en que un peculiar dinamismo ha resultado de la catalización de influencias muy diversas.

Se ha señalado que las asambleas ejidales y los congresos campesinos en Chiapas muestran una enorme porosidad en la circulación de información, que trasciende los límites del ejido, la comunidad, el municipio, el estado y aun el país. La confluencia de contactos, incluyendo el muy reciente con los refugiados guatemaltecos, ha propiciado un singular intercambio de experiencias y visiones del mundo.

Allí se han mezclado las etnias y se han mezclado las lenguas; se han mezclado las creencias religiosas y múltiples influencias políticas e ideológicas en un efervescente proceso de cambios, migraciones y conversiones. La pastoral católica acompañó los esfuerzos de los migrantes apoyando sus actividades productivas, la alfabetización, el cuidado de la salud y propiciando una revaloración de tradiciones e identidades. Allí donde eran escasos o inexistentes los apoyos gubernamentales, los religiosos contribuyeron a promover el desarrollo. Numerosas denominaciones protestantes tienen también presencia en la Selva y aun las que menos simpatizan con las demandas sociales y políticas se han visto obligadas a abrir espacios de reflexión sobre la pobreza extrema. Las vivencias de la gente han marcado su manera de elaborar las experiencias religiosas y de articularlas con sus aspiraciones y sus demandas sociales básicas:

Las iglesias, las organizaciones campesinas, las cajas de ahorro, las organizaciones no gubernamentales, en el mejor de los casos, han abierto espacios organizativos o aportado elementos para la reflexión: los indígenas son quienes han tenido la última palabra.¹¹⁴

***Jcomonaltic* y la aspiración de autonomía**

Ninguna explicación desde afuera es tan ilustrativa como una desde adentro: Jacinto Arias describe el afán de autonomía como *nuestra batalla por pertenecernos a nosotros mismos*. Sólo a los dioses y a sí mismos se pertenecen los tzeltales y los tzotziles. Nadie debe ejercer un dominio sobre los pueblos que suponga servidumbre. En torno a la recuperación del acceso a la tierra y de la ruptura del régimen feudal han girado sus inquietudes a lo largo de un siglo que empezó con la revolución y que, sin embargo, les ha hecho escasa justicia.

Las autoridades indias han “cargado” tradicionalmente con el servicio y la responsabilidad de los pueblos (*Jktelum*). Sólo cuando se han “desindianizado” han descuidado un ejercicio del poder que siempre debe rendir cuentas:

Pues la vida del pueblo es la vida de sus habitantes, el suelo fecundo de donde mana la leche de la madre tierra que nutre a sus pobladores; allí se conservan las tradiciones, es la residencia de los dioses, territorio que legó a sus hijos el santo fundador, patrono del pueblo.

La antigua noción del tiempo sigue vigente: presente, pasado y futuro *están siendo* al mismo tiempo. El presente actualiza al pasado y de esa manera germina el futuro: “Porque nuestro futuro no es volver al pasado sino juntar ambos polos del tiempo.”¹¹⁵

Para hacerlo, los indios demandan autonomía para designar a sus autoridades y que se redefinan los distritos del estado para que las zonas con más del 70% de población indígena envíen representantes auténticos a los congresos estatal y federal.

La vida de los pueblos giró siempre en torno a un profundo sentimiento de comunidad, expresado en un vocablo tzeltal: *jcomonaltic*, que significa *nosotros, la comunidad*. Las fiestas encarnan esa identidad, sobre todo las que celebran al santo patrono, que suelen durar dos o tres días. Al emprender el éxodo en busca de tierras para cultivar se llevaron a sus santos. Cuando los de un mismo origen fundaron un nuevo poblado se mantuvieron las antiguas redes de cargos civiles y religiosos y en algunos asentamientos de la Selva casi todos los pobladores son parientes. Pero, a veces, en un mismo sitio coincide gente de diversa procedencia y de múltiples creencias.

Los sentimientos comunitarios se depositan entonces en nuevos vínculos, como la pertenencia a determinadas organizaciones campesinas. En los últimos años, según explican los expertos, el rechazo o la simpatía por la opción armada que proponía el EZLN contribuyó a polarizar esos sentimientos de identidad. Los indios se habían ido hacia la Selva, con ánimo de pioneros, a lo largo de varias décadas. Querían construir una *vida nueva* para sí mismos y para sus hijos, para que todos pudieran convertirse en *hombres nuevos*.¹¹⁶ La adopción de la insurgencia, como recurso desesperado, habla de ceguera y sordera imperdonables por parte de quienes no supieron verlos ni escucharlos a tiempo.

Debajo de la hierba

El bagaje de la memoria ha pesado sobre una tradición de revueltas indígenas cíclicas. El levantamiento del 1º de enero tuvo, además, antecedentes muy concretos en las dos últimas décadas. El Congreso Indígena de 1974, que conmemo-

raba el quinto centenario del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, reclamó tierra, salud, educación y salidas para los productos de la tierra. Acudieron 1 230 delegados tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles que expusieron con mucha claridad, en bien articuladas ponencias, la adversa realidad de su condición. Se tomaron acuerdos muy concretos, que empezaban por la demanda de restitución de tierras comunales despojadas.

Muchas ramas y hojas le brotaron a aquel árbol con raíces de 500 años, como ha señalado García de León: una gran variedad de organizaciones campesinas crecieron y se multiplicaron. El “ancestral método de sembrar y cosechar la palabra” floreció en el acopio del sentir popular por dirigentes indios en un ejercicio de democracia directa. Muchos de esos dirigentes fueron atraídos después por el poder; otros persistieron en la organización de sus comunidades y muchos fueron encarcelados o asesinados en un clima de creciente represión.¹¹⁷

Se leyó y estudió en las comunidades una versión tzeltal del *Éxodo* bíblico. Los catequistas indios identificaron la migración a la selva con el éxodo de Egipto y empezó a interiorizarse la idea de un Hombre Nuevo, recordando la Epístola de San Pablo, que culminaría la utopía del Reino de Dios sobre la Tierra.

Los misioneros revaloraron la cultura indígena y las prácticas solidarias. El Espíritu parecía capaz de llenar el vacío. Allí donde sólo reinaba la pobreza penetró un aliento que daba sentido a la vida, aun a esa vida precaria. La antigua tradición comunitaria fue recuperada, con un renovado sentimiento de fraternidad en el Espíritu, enmarcado en un horizonte ético de liberación.

En los años setenta surgió un movimiento campesino en el norte, el centro y el sur del país, que reclamaba restitución y dotación de tierras. En el norte se dieron las invasiones que propiciaron las expropiaciones de los valles de Culiacán y del Yaqui y el Mayo. A Chiapas llegaron, en 1976, militantes de la Unión del Pueblo. Dos años después llegaron los norteros de Política Popular: ambos grupos se fusionaron en una Organización Ideológica Dirigente. De una escisión de Política Popular surgieron Línea Proletaria y Línea de Masas, cuya estructura política se sobrepuso a la existente estructura religiosa.

Se difundió la idea de que los campesinos indígenas eran parte de una más amplia comunidad de oprimidos. Según la antropóloga Xóchitl Leyva, el trabajo pastoral fue *un eje articulador importante de la comunidad*, que les permitió a los jornaleros del éxodo cohesionar su nueva convivencia. La formación de uniones de ejidos y de crédito fue fomentada por los militantes políticos que llegaron después: se formaron también tiendas cooperativas, organización colectiva para el cultivo de la milpa o la cría de ganado y cooperativas de transporte. La cohesión comunitaria prevaleció sobre las diferencias confesionales o étnicas que dividían a los indios en otras partes del estado:

En los setenta las tendencias religiosas y políticas se dieron como fenómenos paralelos a pesar de haber llegado en tiempos distintos. Se incrustaron en el proceso de formación del nuevo hombre, lo revitalizaron y dieron un cauce a las demandas sociales de tierra, servicios, producción y canales de comercialización. Ambas corrientes impulsaron la vida participativa y comunal, crearon normas y sistemas de distribución del poder [...]. No se puede soslayar que a la par se experimentó en la lucha por la tierra librada ante finqueros, compañías madereras estatales y agencias gubernamentales[...].

Con marco de referencia y métodos diversos, la pastoral religiosa y la inquietud política

[...] plantearon la necesidad de un cambio radical impulsado por los pobres y compar-tieron la misma utopía: la lucha aquí y ahora por una sociedad justa e igualitaria[...].¹¹⁸

En 1979, un documento de *Línea* sostenía que *todo el pueblo tiene que participar en la toma de decisión* y proponía una democracia amplia, con múltiple participación de ideas y opiniones.

Mientras los religiosos acompañaban un proceso de desarrollo, los políticos quisieron “dirigirlo”: unos ponían el acento en la revitalización de la cultura indígena y los otros en una noción clasista de la opresión. La divergencia culminó con la expulsión de los “norteños” al terminar los años setenta. Pero también los partidos tuvieron su incidencia: el PCM, el PST y el PSUM. Como resultado de esa compleja red de influencias y de la presionante situación productiva y social surgieron diversas organizaciones: Uniones de Ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), Uniones de Crédito.

Asesores de ARIC (Unión de Uniones) remontan su origen, como el de la mayoría de las organizaciones, al Congreso Indígena de 1974, aunque su registro formal se hizo en 1988: habría abarcado a 135 ejidos de Ocosingo y Altamirano y a unos 10 mil campesinos. En febrero de 1994, ARIC reclamaba un lugar en la mesa de negociaciones alegando una larga presencia en la región. La había tenido, en efecto, procurando conciliar la autogestión campesina en la producción con una política de no confrontación con autoridades.

Unión del Pueblo y Línea de Masas, de filiación maoísta, habrían marcado los primeros pasos de la Unión de Uniones que, en 1980, emergió con cerca de 4 500 miembros. En 1983 se escindió, por diferencias en cuanto a los mejores canales para obtener créditos, y surgieron la Unión de Crédito Pajal Yacaltic y la Quiptic Ta Lecubtezal que culminó, en 1988, en lo que hoy se conoce como ARIC/Unión de Uniones. Según asesores de esa organización, habrían mantenido ciertos principios maoístas pero no el de la lucha armada.

La vía armada surgió en las mismas comunidades donde funcionaba ARIC, cuando muchos campesinos jóvenes empezaron a sentir que se cerraban los caminos

pacíficos. El EZLN se habría ido consolidando, así, a lo largo de una década pero, sobre todo, después de 1990, cuando la divergencia de proyectos se acentuó. Después del 1º de enero se dieron tensiones muy agudas entre partidarios de ARIC y del EZLN, que explicarían el desplazamiento de familias que prefirieron abandonar la zona de conflicto. El líder de la ARIC era acusado por el EZLN de traición a la causa campesina, mientras otros dirigentes buscaban caminos de convivencia y concertación con los insurgentes. El propio líder reconocía, en marzo, que un 40% de sus miembros se habían vuelto simpatizantes del EZLN, lo que significaba unos 25 mil campesinos. Dados los orígenes cercanos de ambas organizaciones, sus diferencias posteriores se tradujeron, después de enero, en numerosas confrontaciones más o menos violentas, que a mediados de año ya no eran tan agudas. Al parecer, más campesinos de ARIC habrían engrosado filas del EZLN.¹¹⁹

La fuerte dinámica organizativa habría sido propiciada por una experiencia de lucha por la tierra marcada por

[...] innumerables despojos, sobreposiciones de linderos, políticas agrarias de colonización más que de redistribución de la tierra, creciente expansión de la ganadería, corrupción en las entidades agrarias oficiales aliadas con los grupos de terratenientes y finqueros, acelerado crecimiento poblacional y por el agotamiento de la frontera agrícola.¹²⁰

En 1992 se dieron manifestaciones muy agudas de rebeldía. En Palenque se organizó la Marcha *Xi'Nich'* (de las hormigas) que llegó a México pidiendo, entre otras cosas, la designación democrática de los agentes municipales, y en Simojovel hubo airadas protestas para exigir la libertad del sacerdote Joel Padrón. Para conmemorar el Quinto Centenario de Resistencia Indígena y Popular desfilaron miles de indios de todas las etnias por las calles de San Cristóbal y derrumbaron un símbolo de la opresión: la estatua del conquistador Diego de Mazariegos.

Luis Hernández Navarro ha sostenido que el levantamiento de enero anunció una profunda reorganización del movimiento campesino en el país. No todos los campesinos de Chiapas se fueron a la lucha armada, pero la movilización de organizaciones pacíficas se habría dinamizado considerablemente con ese detonador:

Quienes impulsaron la necesidad de pasar a los fierros tenían un firme trabajo de implantación social, básicamente en la Selva Lacandona y en algunas comunidades de Los Altos, y crecieron “debajo de la hierba” reclutando cuadros claves del conjunto de organizaciones sociales que operaban en esa región.¹²¹

Algunas declaraciones de *Marcos* situaron alrededor de 1983 el comienzo de un largo proceso de organización político-militar que habría conducido al levanta-

miento. La posibilidad de la vía armada se injertó en el complejo de influencias que ya había marcado al indio de Las Cañadas:

Se trata de un indio resocializado en los seminarios, en las marchas, en la confluencia con “la clase trabajadora” [...], en la red formada por organizaciones independientes, en el intercambio de experiencias, en la exportación de café orgánico[...]. Sectores importantes[...] siguen sedientos de justicia social, por ello algunos empuñaron las armas[...], abandonaron las uniones de ejidos, las sociedades de producción rural, las cooperativas y los trabajos comunitarios y reemprendieron —incluso de manera paralela— otra resocialización al cobijo de la vía militar.¹²²

De acuerdo con esa interpretación, ninguna de las influencias recibidas habría sido responsable, mecánicamente, de la vía armada. Alrededor de distintos ejes se habría ido configurando la nueva identidad de los que pensaron haber llegado a la “tierra prometida” y, en cambio, experimentaron el olvido del gobierno estatal y del gobierno federal y, en muchos casos, una despiadada represión.

De la utopía del éxodo al callejón sin salida

No todos los indígenas de Las Cañadas optaron por las armas pero, al parecer, fueron varios miles los que consideraron cerradas otras expectativas: muchos habrían adquirido con sus escasos recursos el propio rifle y el parque necesario para incorporarse. La población que hoy habita las cañadas y las montañas de la sierra había sido desplazada hacia allí en distintas etapas.

Los primeros migrantes llegaron antes de los años cuarenta, para trabajar en compañías madereras. Cuando las compañías se retiraron, fueron arribando por oleadas, algunos desde otros estados pero muchos de otras regiones de Chiapas, por iniciativa de autoridades agrarias que procuraban canalizar así demandas no resueltas de tierra. La mayoría eran jornaleros, solicitantes de tierras en Los Altos, que llegaron a la Selva para levantar poblados en una “nueva frontera” de tierras vírgenes, que recibieron como dotaciones ejidales. El Estado, que los desplazó a la frontera remota, no los acompañó en el esfuerzo de colonización.

Se dieron conflictos constantes con ganaderos que acusaban a los indígenas de invasiones y, en realidad, los despojaban de las tierras que habían colonizado. En la lucha por la tierra y los servicios se siguió la vía de la autogestión, preconizada principalmente por la ARIC/Unión de Uniones. Según Luis Hernández Navarro, asesor de organizaciones cafetaleras, esa vía empezó a perder influencia alrededor de 1990, en la medida en que se fue profundizando el empobrecimiento y, después, se canceló la esperanza del reparto de tierra.

Los poblados habían surgido de la nada y algunos se establecieron en los rincones profundos de la selva. La siembra y la cría de ganado se realizó en difíciles condiciones para quienes conocían otros suelos. Lo que ha sido llamado “una moderna epopeya” encontró más apoyo en la presencia misionera que en la estatal: catequistas y diáconos adquirieron, junto con la lengua castellana, un oficio y una visión ampliada del mundo. Las múltiples influencias posteriores, incluyendo la religiosidad protestante, volvieron cada vez más compleja la diversificación social, sin perderse nunca la persistente cohesión manifestada en asambleas comunitarias y en la disposición organizativa. La propuesta beligerante se fue gestando en ese contexto, partiendo de la exigencia de autodefensa frente a las guardias blancas y radicalizándose después con el cierre de las oportunidades económicas.

A pesar de la altísima tasa de mortalidad infantil, la presión demográfica contribuyó a la diáspora de tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles de Los Altos hacia Las Cañadas. Pero las principales motivaciones de esa diáspora fueron, por un lado, la intención de autoridades agrarias de desplazar la demanda de tierra sin afectar intereses; por el otro, las expulsiones ordenadas por caciques indios de Los Altos, sobre todo de San Juan Chamula. Desde 1974, sólo de ese municipio fueron expulsados unos 30 mil conversos a alguna denominación protestante, que estorbaban los intereses o impugnaban el control de caciques que, según García de León, han ejercido un singular “fundamentalismo corporativo priísta”. Oxchuc, Zinacantán y Tenejapa también fueron núcleos expulsores. Malpaso y las goteras de San Cristóbal recibieron a una parte de los expulsados; otra parte emigró hacia la Selva.

García de León ha descrito a la actual zona de conflictos como *una babel de las cuatro etnias* o “una caldera en constante movimiento” donde la mayoría son jóvenes, hijos de ejidatarios dotados en algún momento de la diáspora, que ya ni siquiera tienen acceso a los magros salarios del Soconusco, o de los ingenios azucareros o del Tabasco petrolero. Vivieron la violencia desde que nacieron,

[...] en casi un millar de desalojos violentos, acompañados de torturas, encarcelamiento y toda clase de transgresiones a la ley que han sido el pan cotidiano de estos migrantes durante los últimos veinte años.¹²³

Han conocido las fincas de peones acasillados y guardias blancas y también los latifundios simulados. Los padres de la nueva generación mantuvieron vivos sus lazos tradicionales con la identidad de la comunidad originaria y los santos patronos, aun los que se volvieron protestantes. Pero a padres e hijos los marcó la migración, que les abrió influencias y contactos de toda índole.

Al comenzar los años noventa, el éxodo ya representaba una población de mil comunidades, muchas levantadas por esos colonizadores. Se producía maíz, sobre todo para autoconsumo, y café y ganado para el mercado. La veda forestal definitiva interfirió con la siembra tradicional de roza, tumba y quema, que cultiva pequeñas parcelas selváticas previamente abiertas, para dejarlas descansar y recuperarse luego por varios años. El desplome a la mitad de los precios del café y el retiro de Inmecafé (canales de comercialización y asistencia técnica) y la suspensión de créditos para la cría y engorda de ganado cerró los caminos de la subsistencia. Los recursos descendieron un 65% en cinco años. Ya sin ningún apoyo institucional, y con la prohibición de asegurar la sobrevivencia por la única vía posible, los indígenas resintieron aun más el trato desigual: todo el norte de la Selva había sido arrasado ya por ganaderos fuertes, para convertirlo en pastizales.

En Los Altos se manejan en forma integrada diversos sistemas agrícolas, pecuarios y forestales vinculados por la rotación de la tierra y el flujo de residuos y abonos. La familia sigue siendo el núcleo de organización productiva. Se mantiene el cacicazgo tradicional y no hay nuevas formas organizativas que contribuyan a encontrar nuevas opciones.

Cerca de 10 mil hectáreas de siembra de café se extienden entre Los Altos y la Selva. El café fue introducido, en mínimas parcelas de una hectárea, por jornaleros de las plantaciones del Soconusco: actualmente no sacan al año más de mil nuevos pesos por su cosecha. Después de esa franja intermedia empiezan Las Cañadas, que ocupan la parte occidental de la Selva Lacandona.

En las tres zonas la economía campesina está quebrada, tanto en la producción para subsistir como en la que se destina al mercado y en la posibilidad de alquilarse como jornaleros. En Los Altos y la franja intermedia, con un suelo limitadísimo y pobre, siempre sujeto al riesgo climático y cada vez más exigente de abonos químicos de alto precio, inadquiribles. En la Selva, con el agravante de la falta de caminos y de infraestructura. En todas partes, al interrumpirse créditos y desplomarse los precios de los escasos excedentes que podían comercializarse. Ni siquiera en los sitios que, por ser planos, permitirían el uso de tractores, se dispone de esa ayuda: las herramientas manuales que se usan son, por todas partes, las tradicionales.

De las tres regiones han salido los jornaleros para trabajar en plantaciones y cafetales del Soconusco, en los potreros de los valles, en las presas y en la industria de la construcción de las ciudades. Pero, al detenerse la inversión pública y escasear la privada, las fuentes de empleo fueron mucho más escasas y los jornales, donde los hubo, permanecieron bajísimos. Arguyendo la baja de precios del café, los jornales en las fincas del Soconusco, por ejemplo, oscilaron entre 8 y 10 nuevos pesos diarios desde 1989.

Un grupo de investigadores que ha trabajado diez años en la región sistematizó recientemente amplia información, que aquí aparece sumamente simplificada, en un documento sobre los factores económicos que condicionaron la opción armada, publicado en *La Jornada del Campo*.¹²⁴ Será útil volver sobre ese acopio de experiencia al tocar la cuestión de demandas y alternativas.

Los nudos que se volvieron gordianos

La agudización del empobrecimiento y el cierre de perspectivas en los últimos años fueron obturando las vías de la autogestión y favoreciendo las del recurso de las armas. En el trasfondo está, por supuesto, una enorme desigualdad en la distribución de la tierra: mientras 6 mil familias ganaderas poseen más de 3 millones de hectáreas (la mitad del estado), 200 mil ejidatarios y comuneros que, con sus familias, suman un millón de personas ocupan parte de los otros 3 millones. A muchos miles asciende el número de campesinos sin tierra, avocindados y jornaleros.¹²⁵

Influyó también, sin duda, el conflicto permanente con finqueros y guardias blancas, vinculados a las instancias del poder local. Las respuestas a solicitudes de tierras fueron, según testimonios múltiples, de una violencia inaudita, incluyendo amenazas, cárcel y muertes. La represión era “vendida” a las autoridades federales, por las locales, como la única garantía de “estabilidad”. Nunca se dio la voluntad de deshacer los nudos de los intereses económico-políticos sino, al contrario, la de enmarañarlos más. La discriminación oprobiosa de los indios añadía rencores profundos a los que de por sí generaba el rezago social. Además, un 30% del regazo agrario se habría concentrado en Chiapas, donde el neolatifundio, con la modalidad de propiedades a nombre de terceros, ha sido denunciado por las organizaciones campesinas.¹²⁶

Tres “nudos adicionales” han sido señalados por Luis Hernández Navarro: *cierre de canales institucionales*, al bloquear las autoridades locales hasta los intentos de instancias federales de desarrollo (como el INI), sin contar el terco hostigamiento a las organizaciones campesinas independientes, a diversas ONG y a los esfuerzos de las Iglesias (evangélica y católica) por contribuir a solucionar problemas álgidos; un Código Penal y un Poder Judicial al servicio de los poderosos, que condena sistemáticamente a los que reclaman tierras o protestan por despojos, y un absoluto azolvamiento de todos los canales de representación democrática.¹²⁷

Las estructuras caciquiles, de mestizos y de indios, que han estado anudando una red que parecería irrompible de intereses pecuniarios y de poder político —desde el monopolio de las tierras y el ganado hasta el control del comercio del alcohol y demás indispensables para las fiestas en la región chamula— lo mismo aseguraban triunfos electorales por “unanimidad” que distribuían a su gusto, y filtraban en su

beneficio, los recursos de Pronasol. Como reguero de pólvora se extendió por eso, después del 1º de enero, una ubicua rebeldía municipal que clamó por el castigo y destitución de alcaldes corruptos y repudiados.

Inoperante Solidaridad

Chiapas tiene 3 millones de habitantes. El 80% no perciben ni siquiera dos salarios mínimos. El 60% viven en comunidades menores de 5 mil habitantes. Las viviendas con piso de tierra suman el 50% y es de suponer que un porcentaje equivalente carece de agua potable y drenaje, aunque las estadísticas hablan de un 42%, a la vez que reconocen un 74% de hacinamiento. El 62% de la población nunca terminó la primaria.¹²⁸

En un documento redactado por *Marcos* en 1992 y publicado en *La Jornada* en enero de 1994 las cifras eran más escandalosas: 54% de desnutridos en el estado, y más del 80% en Los Altos y en la Selva, donde sólo se come frijol y tortilla, acompañados de café y pozol; más de la mitad de las escuelas sólo llegan al tercer grado, pero el 72% de los niños no alcanzan a terminar el primero; de 16 mil aulas que había en 1989 sólo mil estaban en zonas indígenas, donde habita un millón de los chiapanecos.¹²⁹

Chiapas registró el mayor número de Comités de Solidaridad en el país: 8 824, es decir, el 8% del total nacional. En el rubro de infraestructura se invirtieron 609 739 nuevos pesos entre 1989 y 1993; en el de solidaridad “para el bienestar” 768 522 y en el de solidaridad “para la producción” 190 783. De los comités que se instrumentaron sólo 1 229 significaban pequeños apoyos, más para necesidades urgentes de subsistencia que para la producción, sobre todo en zonas cafetaleras.

Los demás manejanon Fondos Municipales, Escuela Digna y Niños en Solidaridad. Los Fondos Municipales sirvieron, probablemente, para atar mejor las redes de poder caciquil con las de la maquinaria electoral. Parece que buena parte de tales fondos se canalizaron supuestamente a la construcción de aulas, sin ningún criterio coherente de mejoramiento educativo. Puesto que un 60% de los niños chiapanecos no pueden asistir a la escuela, por la necesidad imperiosa de contribuir a la subsistencia familiar, difícilmente podrían haber resultado beneficiados con los recursos de Niños en Solidaridad.

No se asignaron los dineros, pues, hacia la rehabilitación integral y profunda de la precaria existencia campesina. El manejo asistencialista —sin contar lo que podría haberse filtrado en el camino— sólo contó con 39 centavos nuevos por cada pobre, al día, durante los cinco años en que funcionó el programa.

En Chiapas existía un semillero de pequeñas y medianas organizaciones campesinas que cobraron fuerza, al agruparse en el CEOIC, después de enero. No se

les había tomado en cuenta para los Comités de Solidaridad, porque los dirigentes del Programa no las consideraban suficientemente “democráticas”.¹³⁰

Una onda expansiva

El surgimiento del CEOIC, en enero del 94, demostró que las demandas zapatistas rebasaban los linderos de la Selva Lacandona. Agrupaciones de todas las regiones, desde cooperativas y pequeñas organizaciones locales y municipales hasta organizaciones regionales y otras que abarcaban el estado, sumando 280, constituyeron el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas.

En aquel agrupamiento catalizado por la rebelión coincidieron casi todas las vertientes que no habían pasado a la opción armada. Muchos habían permanecido divididos y enfrentados antes del levantamiento, y sus dirigentes provenían de las diversas corrientes más o menos radicales que habían llegado a Chiapas desde los años setenta. A través de las organizaciones vinculadas a Pronasol y a la CNC, también presente en el CEOIC, se buscó convertirlo, al principio, en una instancia de negociación alternativa al EZLN.

La evolución del CEOIC, desde sus inicios hasta su adhesión a la Convención Democrática que convocó el EZLN, fue una muestra de la carga latente de demandas no resueltas, susceptibles de dinamizarse en una acción conjugada. Julio Moguel calificó al CEOIC como “el otro poder” en Chiapas, con una considerable capacidad de convocatoria que expresa a la sociedad civil marginada en ebullición. Sin coordinación previa con el levantamiento, fue una condensación de la red social dispersa que, durante dos décadas, había presionado por demandas que no encontraron respuesta:

[...] condensa el poder social más relevante de que se tenga memoria en el estado; resume experiencia y programa de miles de pequeños y medianos agrupamientos campesinos e indígenas de regiones tan distantes como diferentes; proyecta y potencia programas y acciones que hasta ahora eran inimaginables en su traducción práctica[...].¹³¹

El empuje de esa movilización rebasó pronto los intentos oficiales de canalizar la inquietud hacia el planteamiento de demandas puramente económicas, que pudieran negociarse en la “mesa de concertación” y los módulos de atención que Sedesol instaló en las primeras semanas de enero. La demanda de afectación de tierras; la renuncia de 21 alcaldes; la apertura de un amplio proceso de reforma política, con reconocimiento a la autonomía e identidad cultural de los indios; la solución de expulsiones y situación de desplazados; la liberación de presos por el levantamiento y la revisión de expedientes de los cerca de tres mil indios encarcelados desde antes del 1º de enero pasaron a primer plano.

La movilización social no armada se articuló en el CEOIC, visto al principio por la Secretaría de Desarrollo Social como una tabla de salvación para resolver al vapor mucho de lo que nunca se había atendido. Los módulos buscaron derramar recursos más cuantiosos que los enviados antes por Sedesol y sesgar la mediación de presidentes municipales y caciques para negociar, ahora sí, directamente con las organizaciones sociales. Esos grupos no desdeñaron ese cauce expedito para desahogar algunos proyectos económicos y demandas sociales muy concretas.

Pero, más allá, el CEOIC fue afinando un programa centrado en la demanda democrática. Una de sus primeras propuestas había sido la destitución de alcaldes repudiados, para sustituirlos por concejos ciudadanos elegidos en colonias, barrios, ejidos y comunidades. Después se planteó la demanda de autonomía, entendida como “regiones compactas de territorios indígenas” donde los pueblos indios elegirían sus representantes al Congreso local y al nacional y sus presidentes municipales.

También elaboró el CEOIC una Propuesta para el Desarrollo, centrada en la cuestión de la tierra, pero reconociendo que no se agotaría en la afectación de latifundios, sino que debería tomar en cuenta tierras ociosas y terrenos nacionales. Donde hay “peones acasillados” y jornaleros que, por 12 horas de trabajo reciben menos del salario mínimo y ninguna prestación, tendría que repartírseles la tierra donde fueron injustamente explotados toda la vida.

En la Propuesta se sugería redistribuir el presupuesto hacia el medio rural donde habita, en Chiapas, el 60% de la población y asegurar que se tomará en cuenta a las organizaciones sociales en planes y ejecución de programas de desarrollo. Un punto fundamental sería modificar la veda forestal y la ley ganadera, para promover una “explotación razonada e integral” de los recursos. Una amplia política de fomento del campo tendría que pasar por “el rescate de la tecnología y el conocimiento tradicional” de los pueblos indios. Incluiría, por supuesto, infraestructura de caminos y puentes, telefonía y radio, electrificación, mejoramiento de vivienda y atención a la salud.

El analista Julio Moguel advertía, en febrero de 1994, que muchas de esas demandas se empalmaban con las del EZLN, sin que existiera acuerdo previo:

[...] se trata de una verdadera confluencia o convergencia de ideas que nace de una historia común de agravios y de procesos de lucha que tiene décadas o siglos.¹³²

Un conjunto de factores se fueron sumando para favorecer la insurgencia en la Selva Lacandona. Pero lo que allí afloró se encuentra, con variantes y modalidades, en el resto de Chiapas y en el resto del país. Todo señala a la democracia como el punto de partida para cualquier solución viable.

Alternativas para la selva

El sistema tradicional de uso del suelo de los mayas, en la selva, fue la roza, tumba y quema. El bosque se alternaba con los cultivos en la ocupación de un mismo espacio: cuando las parcelas ya no producían con la fertilidad deseada, se permitía la regeneración de la floresta y se emprendía la preparación de otras parcelas para la siembra. Los nutrientes acumulados por el ecosistema boscoso se liberaban al tumbarse y quemarse árboles y arbustos y favorecían la fertilidad dos o tres años: luego se dejaban descansar varias décadas y la selva se reconstituía. La milpa y el bosque se sucedían, en un proceso cíclico perfectamente respetuoso y racional del ecosistema. Múltiples productos podían obtenerse de la selva durante los períodos de regeneración. Cuando la selva era muy abundante y la población moderada, el sistema era óptimo. Los problemas surgieron cuando hubo que aumentar los años de cultivo y disminuir los de descanso, a la vez que se abusó de fertilizantes y herbicidas.

En la Selva Lacandona se pretendió “extender la frontera agrícola” impulsando cultivos comerciales y desmontando definitivamente, para ello, grandes extensiones de bosque. La fragilidad de los suelos tropicales, no propicios para recibir ese tratamiento, dejó pronto a los colonizadores con una tierra empobrecida y a ellos mismos en la miseria. También se pretendió extender la frontera ganadera y eso se hizo con éxito, no en beneficio de los campesinos sino de los grandes propietarios de potreros. La comercialización de la madera funcionó, hasta fines de los años setenta, con aserraderos que talaban una zona hasta agotarla y así sucesivamente.

A los que habían recibido zonas boscosas apenas les llegaron los beneficios de “derechos de monte” que se revertían en algún proyecto social o alguna obra de infraestructura. La veda total de los últimos años procuró remediar, pero demasiado tarde, una devastación de la selva que fue favorecida o tolerada antes por el propio Estado. Los talamontes, en muchos casos vinculados estrechamente con los poderes locales, ya habían extraído pingües provechos y los castigos fueron, a partir de ese momento, para los indios que quemaban algo de monte para la milpa o tumbaban un árbol para levantar una vivienda.

Los expertos han señalado dos posibles estrategias para el manejo de la selva en beneficio de los campesinos y sin afectar la ecología. El aprovechamiento silvícola requeriría un manejo comunitario, capacitación, asistencia técnica, infraestructura que incluyera caminos, y mercado. Incluiría la producción de madera para comercializarla o transformarla dentro de las comunidades y la producción de bienes para el autoconsumo, como complemento de otras actividades agroforestales. La estrategia agroforestal permitiría mezclar, en una misma parcela, árboles y arbustos con cultivos y cría de animales:

[...] la solución a los muchos problemas del agro chiapaneco no reside en derramar enormes cantidades de dinero en créditos de carácter asistencial, ni en crear más instituciones ni ampliar las ya existentes, sino en formular una verdadera estrategia de desarrollo agropecuario y realizar una profunda reestructuración de las formas de apoyo al sector, de manera que éste alcance a la totalidad de las familias campesinas, ofreciendo verdaderas oportunidades para mejorar sus niveles de vida a la vez que estimulan su capacidad de organización.¹³³

Un desarrollo sustentable, que rescate la tradición campesina del uso del suelo, y conjugue conservación del medio y necesidades sociales, ofrecería un camino de modernización racional y no marginadora. Víctor M. Toledo, coordinador de una investigación realizada en 1991-1992 en la región de Las Cañadas, sostiene la viabilidad de encontrar fórmulas que aúnen la sabiduría tradicional con el empleo apropiado de la tecnología moderna.

Las enormes unidades de producción ganadera fueron las principales responsables de la deforestación masiva. El modelo “modernizador” tiende a “especializar” a comunidades enteras en un solo producto: ganado, o maíz, o cítricos, etc. En cambio, tradicionalmente las comunidades indígenas adoptaron una estrategia mixta, combinando lo agrícola, lo pecuario y lo forestal. Esa estrategia aseguraría la autosuficiencia y generaría productos para el mercado.

Una comunidad indígena de Papantla ilustra ese uso múltiple. La parcela promedio es allí de 8 hectáreas. En la milpa se siembran, en torno al maíz, otros 20 cultivos; en el potrero hay 8 cabezas por hectárea (8 veces más que en los ranchos “modernos”) gracias a la integración del forraje verde, derivado del maíz y de otros cultivos con un manejo adecuado del pastizal; hay un huerto familiar; se produce vainilla; se obtiene leña y se extraen diversos productos forestales de la selva alta donde está enclavada la comunidad. La familia campesina logra autosuficiencia energética (leña) y alimentaria (milpa y huerto) y excedentes para el mercado de maíz, leche, carne, vainilla y algunos productos de la selva. Todo eso sin créditos ni ayuda técnica, pero ejerciendo la democracia comunitaria, mediante el reparto equitativo de los recursos entre las unidades domésticas y la toma de decisiones colectiva y consensada en asambleas del ejido.

En medio del inmenso mar de pastizales que es hoy Veracruz, Toledo ha descrito a estas escasas excepciones en el paisaje como “islas polícromas” gracias al variado mosaico productivo de bosques, milpas y potreros. ¿Cuántas comunidades como esa habrán logrado evadir “sigilosamente” las mareas modernizadoras en todo el territorio nacional? No muchas, seguramente. ¿Acaso podrían encontrarse alternativas parecidas para la región de Las Cañadas? *Todas las condiciones parecen estar dadas en la Región de Las Cañadas, para que una estrategia similar a la descrita sea aplicada, reproducida y difundida.*¹³⁴

Es probable que una parte de las demandas de los habitantes de la Selva en rebeldía pudieran resolverse con alternativas como las descritas, que permitirían una saludable armonía entre la conservación de la floresta y el derecho de la gente a vivir con dignidad. Cualquier programa integral de desarrollo tendrá que diseñarse con la más amplia participación de esa gente.

Tradición y modernidad en el alzamiento de Chiapas

La interpretación empezó tan pronto como la guerrilla salió de la selva para llamar la atención del país. Aunque los datos accesibles no permiten análisis definitivos sobre un fenómeno que está en efervescencia y va modificándose día con día, parecería ya evidente uno de sus rasgos: se trata de un levantamiento que, en una peculiar hibridación, conjuga todos los tiempos de México.

Milenarismo y posmodernidad, consenso comunitario y democracia, religiosidad y reivindicación social son elementos que atraviesan el discurso zapatista y que remiten tanto a una memoria habitada por la rebeldía y la fidelidad a antiguos valores culturales como a la anticipación de un nuevo pacto social no excluyente. En Chiapas reventó algo que está presente en todo el país: la polarización entre arcaísmo y modernidad, y quizá lo más significativo del fenómeno sea su propuesta de una reconciliación entre el país tradicional y el país moderno.

La condición de migrantes marginados de los jóvenes que integran las filas del EZLN los señalaría, según García de León, como la “verdadera generación del cambio”. Son los empujados al traspaso del Progreso por la modernización excluyente pero ya han sido inoculados por su virus y exigen otra modernización, que, esa sí, los haga partícipes. Serían, según Zaid, los que “al convertirse a la cultura del Progreso, se hacen ilusiones frustradas” y empiezan a exigir que se les cumpla lo ofrecido.¹³⁵ Disparados hacia la más extremosa periferia del proyecto modernizador ilustran de manera paradigmática los “rebordes de pasado-futuro” que ha generado, en el país, una “modernización arcaizante”, es decir, selectiva y acentuadora de desigualdades:

El mundo y sus conflictos han estado más cerca de estas nuevas generaciones y eso explica hoy la sorprendente modernidad y mexicanidad de sus demandas [...]. La proclama de los insurrectos resulta asombrosamente moderna: un gobierno de transición y que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes.¹³⁶

A diferencia del zapatismo original, este neozapatismo no toma las armas precisamente para evitar el cambio. Todo ha cambiado demasiado para que eso sea

posible. Los alzados son nómadas de una diáspora que rebasa Chiapas, que ha desarraigado a campesinos de todo el país, rompiendo la trama de antiguas redes familiares y vecinales. Son víctimas de la modernización, que la han padecido sin recibir ninguno de sus beneficios. Pero ya fueron contagiados por ese proceso y quieren ser incluidos.

Pretenden que los promotores y beneficiarios de la modernización la hagan extensiva. Reclaman vías de canalización de los bienes de la modernidad: salud, educación de calidad, vivienda decorosa, acceso al mercado, vías de comunicación, infraestructura. Rechazan sus lacras: desempleo, salarios de hambre, mortalidad infantil, casas inhóspitas, enfermedades, nula educación, cierre de caminos. Son los excluidos del desarrollismo que, cansados de recibir sólo sus azotes, reclaman que les muestre un rostro benefactor. Estarían “exigiendo a gritos su lugar en el progreso y la modernidad”. Demandarían lo que Lázaro Cárdenas pretendió: la alianza entre lo tradicional y lo moderno; la reconciliación entre los dos Méxicos, no su distanciamiento:

[...] piden una reforma integral que considere la modernización económica y que propicie la alianza entre propietarios ejidales, comunales y privados (golpeados todos por la política económica actual). Una reforma profunda acompañada de un nuevo pacto social democrático, en el que participen todas las fuerzas [...]. Una reforma que no se limite al campo sino a construir un nuevo proyecto de nación y restauración republicana, cuya entrada al concierto económico global sea firme y duradera[...].¹³⁷

Esa reconciliación se da en los comunicados de *Marcos* y del CCRI, donde las palabras recuperan una eficacia olvidada, mucho más elocuente que la de las balas. Un texto característico sería el comunicado del 26 de febrero, donde se imbrican la fórmula metafórica de un antiguo lenguaje de oráculos y profecías, que evoca el discurso de los mitos, y el discurso político occidental, es decir, moderno:

Así nació nuestra fuerza en la montaña, el que manda obedece si es verdadero, el que obedece manda por el corazón común de los hombres y mujeres verdaderos. Otra palabra vino de lejos para que este gobierno se nombrara, y esa palabra nombró “democracia” este camino nuestro que andaba desde antes que caminaran las palabras.¹³⁸

Los nuevos zapatistas se declaran herederos del sueño de los ancianos, “guardianes verdaderos de la palabra de nuestros muertos”, que les habría sido transmitido en un momento a la vez contemporáneo y mítico por “los hombres verdaderos, los sin rostro, los que en la noche andan, los que son montaña”. El mandato de ese legado inserta su acción en el prestigio de un tiempo fuera del tiempo que es el tiempo del mito:

[...] el silencio lleva mucho tiempo habitando nuestra casa, llega ya la hora de hablar para nuestro corazón y para otros corazones, de la noche y la tierra deben venir nuestros muertos, los sin rostro, los que son montaña, que se vistan de guerra para que su voz se escuche, que calle después su palabra y vuelvan otra vez a la noche y a la tierra[...]. Que si vuelve la razón a estas tierras se calle la furia del fuego[...]. Antes que el día venciera otra vez a la noche se fueron y en la tierra quedó su palabra sola: “¡Ya basta!”

El texto transita de inmediato hacia el discurso contemporáneo:

Demandamos que se convoque a una elección verdaderamente libre y democrática[...] con libertad auténtica para elegir una u otra propuesta y con el respeto a la voluntad mayoritaria [...]. Sin democracia no puede haber ni libertad ni justicia ni dignidad, y sin dignidad nada hay [...].

Democracia es, pues, una palabra moderna que les sirve a los indios para expresar algo que, desde tiempo inmemorial, les fue consustancial. La palabra *dignidad* está cargada de pasado.

“Acá estamos[...] donde moran nuestros muertos y la historia”, dirá un comunicado del 24 de marzo que vuelve a conjugar el vínculo ancestral con la tierra y la sucesión hacia atrás de las generaciones con la inserción en el tiempo histórico de Occidente. Taparse el rostro tendría, acaso, algún significado más allá del gesto de proteger la identidad individual y de garantizar seguridad. Los “sin rostro” de hoy encarnan a los “sin rostro” de ayer y a Votán Zapata, “nombre que cambia, hombre sin rostro”:

Es y no es todo en nosotros[...]. Caminando está[...] Votán Zapata, guardián y corazón del pueblo. Amo de la noche[...]. Señor de la montaña[...]. Nosotros[...]. Votán, guardián y corazón del pueblo. Uno y muchos es, Ninguno y todos[...].¹³⁹

Zapata es el Zapata histórico. Pero es también el Zapata mítico, el héroe fundador de una épica milenaria. Parecen rondar por ahí el murciélago y el jaguar del mapa de Anenecuilco: los remotos símbolos de la tierra y el maíz sacralizados.

Gabriel Zaid creyó encontrar cierta incoherencia desconcertante en la naturaleza de esta rebelión. Muchos de sus rasgos no encajarían en ninguno de los cajones donde habría quedado archivada la guerrilla. El primer desconcierto estaría, es verdad, en la irrupción de una utopía “rearmada” cuando nadie se lo esperaba y como epílogo de la aprobación del TLC. La jefatura de un universitario como *Marcos* y, acaso, de unos cuantos más que fungirían como asesores o dirigentes detrás de bastidores, no bastaría para asimilar el fenómeno a guerrillas latinoamericanas anteriores. La “acción de propaganda armada” que preparó *Marcos* para el

1º de enero fue un gran espectáculo para los medios: la ocupación de territorio no estaba pensada para durar sino para dar golpes simbólicos, como la toma de palacios municipales que son reductos de cacicazgos o los ataques a la Zona Militar de Rancho Nuevo, construida sobre tierras ejidales expropiadas que cobijaban un cementerio indígena.

Uno de los rasgos de posmodernidad que Zaid le atribuye a esta guerrilla es la “distancia irónica” que estaría a la vez actuando y riéndose un poco de las propias acciones y de las propias palabras:

Marcos habla de tomar la capital y destituir al presidente, sin creérselo ni dejar de creérselo: con ganas de que pegue, provocando un levantamiento general, un susto y una fuga. Si no pega, acepta la décima parte, que es un éxito, y se sienta a negociar. Esto no lo hace un fanático.

Abundan los rasgos posmodernos: el pastiche, el eclecticismo, el anacronismo, los elementos fuera de contexto, los saltos metadiscursivos y autorreferentes, la parodia, el baile de máscaras, la guerrilla como espectáculo, cuyo verdadero mensaje es: miren, soy guerrilla y salgo en los periódicos. La guerrilla como representación de la guerrilla, que sin embargo tiene efectos de guerrilla: la sangre es real, la ganancia política es real.¹⁴⁰

Muchos de esos rasgos están presentes, en efecto, pero probablemente retratan más al fenómeno *Marcos* que al “fenómeno Chiapas”. El multifacético talento de este personaje que, habiendo deseado acaso ser un escritor de éxito optó por “hacer como si fuera” un dirigente revolucionario y acabó por serlo, le ha dado al alzamiento una insólita repercusión nacional e internacional. *Marcos* insertó a México en la red global de los medios de comunicación gracias a la auténtica seducción de un personaje que, desdoblándose en muchos personajes, su decisión y su imaginación supieron crear. Ninguna fantasía de Primer Mundo, con inversiones millonarias destinadas a los medios, pudo lograr semejante presencia del país, y demostrando precisamente que no había tal primermundismo sino una monumental desigualdad y una descomunal pobreza.

Uno podría preguntarse, como Aguilar Zínser, si de veras existe *Marcos* o si puede atribuírsele el improbable número de cartas, comunicados, invitaciones, proclamas y colofones que la prensa ha difundido con su firma.¹⁴¹ ¿Serán suyos, por igual, los acentos conmovedores de la carta del perdón, la sopesada misiva del 26 de julio a los “empresarios honestos”, los lunares “chocarreros” o las pinceladas *kitsch* que salpican los textos, la lógica impecable de ciertas argumentaciones y la efusión lírica que se cuela, una y otra vez, en el discurso? Poco importa. Todo eso ha configurado una textualidad que tuvo efectos multiplicadores notables en la transformación de la circunstancia política después del 1º de enero. Pero, aunque la palabra ha sido decisiva, y ha reflejado esa singular alianza de tiempos y de experien-

cias que se da en el “fenómeno Chiapas”, lo que le confiere un peso singular a la palabra es la densidad del silencio que la respalda.

El 1º de enero marcó un parteaguas, como acelerador detonante de un nuevo tiempo político, porque puso en escena, con personajes de carne y hueso, el drama de una sociedad fisurada por una herida de siglos y la necesidad inaplazable de suturar esa herida para reconstituir la salud del cuerpo nacional. Detrás de la voz de *Marcos*, que funge de intérprete y mediador entre el país tradicional y el país moderno, están las comunidades reales —miles de hombres, mujeres y niños que evocan e invocan a muchos millones más. Las voces del largo silencio indio son la carga de profundidad del discurso y la presencia neozapatista.

La intemperie de la pobreza

Lo que el “fenómeno Chiapas” ha puesto al descubierto es la intemperie de la pobreza. También ha vuelto notorio para muchos lo que, hasta diciembre de 1993, sólo era evidente para unos cuantos que habían puesto la mirada, con más atención y menos prisa, en los avatares de las subsecuentes modernizaciones: la inoperancia del modelo excluyente y la necesidad de entreverar tradición y modernidad en el diseño de otro donde quepan todos.

Las reflexiones tuvieron como punto de referencia, a partir de enero, el discurso y la realidad que afloraron en Chiapas. Los afanes de oscurecer la legitimidad de sus demandas con la ilegalidad de su recurso a la violencia no pudieron desplazar al incómodo interlocutor que sacudió buenas conciencias y desactivó argumentos justificadores del proyecto neoliberal.

Como señaló Enrique Krauze:

El México del subsuelo se había alejado de la conciencia pública como en tiempos del Porfiriato y hoy ha vuelto a plantarse frente a nosotros igual que entonces: como la erupción volcánica de un agravio de siglos.¹⁴²

Octavio Paz advirtió, en febrero, sobre el peligro de una “incompleta modernización” que podría convertirse una vez más, “como en los siglos XVIII, XIX y XX, en una quimera, un sueño de verano”:

Ya sabemos que la modernidad es un beneficio ambiguo; para convencerse basta con ver lo que ocurre en los Estados Unidos y en Europa. Pero es inevitable. Y la modernidad pasa por la democracia.

El “tránsito definitivo a la democracia” tendría que ser un proyecto inmediato:

Nuestro país es muy viejo y muy joven, es uno y es múltiple. Hoy tiene que reunirse consigo mismo, sin sacrificar a sus tradiciones ni a su diversidad, para dar el salto y penetrar al fin en el mundo moderno.¹⁴³

En marzo, Paz reconocía que “el *subcomandante* había ganado la batalla de la opinión[...]”.

Para Carlos Fuentes, Chiapas se habría vuelto el “termómetro indispensable del desarrollo nacional” para medir la temperatura de un México que no tendría que desgarrarse entre la entrada ilusoria, vía TLC, al Primer Mundo y la caída en una Centroamérica “rezagada y tumultuosa”:

Que se vea Chiapas en México, pero también que México se vea en Chiapas y, gracias a Chiapas, no separe ya economía de política, ni desarrollo de democracia. La insurrección chiapaneca, al menos, habría tenido la ventaja de despertar a México de su complacencia y autocongratulación primermundista, pero salvándonos, a la vez, de la miseria y la flagelación tercermundista.

Fuentes habría de insistir después en que “los disparos de Chiapas[...] nos despertaron a todos y han transformado a México” y habría de sugerir que asistíamos a “la primera rebelión poscomunista”, que abandonaba viejos dogmatismos para hablar en un lenguaje fresco y nuevo. Insistiría, sobre todo, en el imperativo democratizador:

[...] si los problemas de Chiapas no pueden resolverse sin democracia en Chiapas, la democracia en Chiapas no puede ser efectiva sin una democracia nacional a la cual aquélla se articule.¹⁴⁴

La reforma del presidencialismo autoritario; la garantía de un equilibrio efectivo entre los tres poderes y la implantación de un federalismo que no favorezca privilegios ni caciques locales y respete la democracia municipal se fueron perfilando como las metas amplias hacia las que estaría señalando Chiapas. Por lo pronto, como advirtió Tomás Segovia, ningún movimiento social había provocado tantos cambios políticos como los que se desplegaron desde enero, con el despertar de la opinión pública.¹⁴⁵

Es hora de que la sociedad mexicana se reconozca a sí misma

De los neozapatistas podría decirse que son “muy antiguos” y “muy modernos”. “Antiguos” en la acendrada práctica de respeto al consenso, en la persistencia del vín-

culo comunitario y de la demanda de autonomía de los pueblos. Su proyecto, como ha indicado Julio Moguel,¹⁴⁶ ha sido “internalizado en la vida comunitaria” y por eso fue factible: por eso rebasó el “economicismo” de ARIC y el “asistencialismo” pronasoliano. “Modernos” en su aspiración a la democracia con dimensión nacional; en su crítica al presidencialismo y al partido de Estado. Expresarían, así, lo mejor de la tradición y lo más legítimo de la modernidad.

Buscan respeto para las autoridades tradicionales de los pueblos y su cultura y para el derecho a gobernarse con autonomía mediante concejos que salgan del pueblo y puedan ser removidos por el pueblo, en cualquier momento, si no cumplen su mandato. Pero su profundo arraigo en las comunidades transita hacia la noción de patria y de identidad nacional. No se trata de “una idílica y simple reivindicación de un pasado premoderno” sino de la fusión de toda la historia en una visión hacia el futuro donde también las comunidades tengan un lugar.

Lo que Chiapas ha planteado rebasa a Chiapas y remite a una desarticulación de la sociedad que se ha padecido en todo el territorio:

[...] Una propuesta constructiva se aleja diametralmente de la simple pacificación y va a lo fundamental: cómo reconstituir las identidades sociales y culturales, el tejido social, en una región tan devastada y polarizada y cómo lograr esto con base en proyectos de desarrollo sustentable hacia dentro, hacia afuera y mixtos [...]. Se trata de desarrollos productivos, sustentables, que puedan mantener a la población en sus sitios gracias al reforzamiento de su identidad cultural [...]. ¿El liberalismo que se nos ha propuesto podría llegar al extremo del pluralismo y aceptar la competencia de distintas vías de desarrollo y apoyarlas por igual?¹⁴⁷

El progresivo quebrantamiento de la cultura y la economía campesina está en el corazón de la esquizofrenia que ha vivido el país, precipitada en las últimas décadas. Por eso la disputa por la tierra es central y consustancial con el conflicto.¹⁴⁸ A mediados de abril, diversas organizaciones se habían posesionado de 50 mil hectáreas: los pequeños propietarios aceptaban vender 20 mil. Aunque se sostenía oficialmente que se había abatido en Chiapas el 94% del rezago agrario, otras fuentes insistieron en que allí se registraba todavía el 30% del rezago nacional.¹⁴⁹ La reforma agraria llegó tardíamente a Chiapas y distribuyó la mitad del territorio, pero persistieron muchas simulaciones. Allí se potencia, además, un panorama que se da por todos lados: sin apoyo para la capitalización, sin inversión en infraestructura, sin fomento a los proyectos productivos, el campo se muere. Como lo apuntó Cassio Luiselli, “todo en México es Chiapas”:

La profunda herida de Chiapas es también de la nación: una irrupción violenta del México profundo frente al proyecto de modernización impulsado por el México criollo-mestizo. Por eso abre fundamentales interrogantes sobre los futuros rumbos de la vida mexicana.¹⁵⁰

Hay que acompasar la modernización al tiempo del país real: ésa sería la clara lección de Chiapas. No sólo en Chiapas, sino en todo el país, habría que revertir sobre las zonas más pobres una parte de los recursos que se generan en los sectores modernos. Los intentos de modernizar “a golpes de mercado”, por sí solos, generarían modernización excluyente y hacían a millones en el traspaso de la penuria.

Mientras Carlos Hank informaba que el campo “es el sitio más tranquilo y donde tenemos la mayor solidez”, los campesinos estaban gritando otra cosa por todas partes. Desde una de las muchas sierras de Oaxaca, “cerca de las nubes”, representantes de varios pueblos triquis escribieron una misiva dirigida al Comité Clandestino Revolucionario Indígena en la Selva Lacandona:

No hermanos, no están solos. Con ustedes estamos todos los pueblos indios que sintieron orgullo y satisfacción al escuchar su voz de dignidad [...]. Queremos que la sociedad nacional, al ejercer la democracia, no sólo la entienda como el juego de los partidos para ejercer el poder, sino también como un reconocimiento y respeto a las diferentes formas de organización, de culturas y de vida; que para tener una mejor forma de vida no necesariamente tenemos que depender de lo que produce el gran capital industrial [...]. En suma, queremos un país en donde se elija democráticamente a nuestro gobierno, que ese gobierno entienda sus límites, que no imponga lo que deciden sus burócratas [...]. Pensamos [...] que es hora de que la sociedad mexicana se reconozca a sí misma [...].¹⁵¹

La paradoja de tantos tiempos encimados ha puesto, en efecto, ciertos acentos posmodernos en el discurso y la gestualidad de *Marcos*, quizá porque su función de “intérprete” entre dos mundos así lo requería, pero no habría que recubrir con esa estrategia facilitadora de interlocución todo el “fenómeno Chiapas”. Porque ese fenómeno se sitúa, más bien, en un ámbito de valores morales, recogidos por los triquis en la palabra *dignidad*, que no evoca precisamente la “desubstancialización gratuita” que tan bien ha descrito Gilles Lipovetsky.¹⁵² La trivialización de la *cosa pública*, el reino de la indiferencia y el hedonismo serían la antítesis de lo que estas voces del “México profundo” le están reclamando a la sociedad mexicana.

El barco de Fitzcarraldo

Al terminar la Convención Nacional Democrática parecía evidente que había servido, por lo menos, para recoger muchas inquietudes dispersas con un objetivo común: repensar a México sin descartar, como tantas veces, a los marginados. La mayoría de la gente que llegó necesitaba ser escuchada y reafirmar una pequeña identidad local en medio de una más amplia identidad colectiva: la de los excluidos y los olvidados. Mucha de esa gente habría dicho cosas sensatas y habría insistido

en la importancia de que todos, en cada pueblo y en cada barrio, se enseñaran a detectar y discurrir sobre los problemas comunes. Lo más original estuvo, precisamente, en esas voces frescas que desplazaron a otras, con lastres de viejos sectarismos o de nuevos radicalismos que, a pesar de su obstinación, no lograron prevalecer.

El corte transversal de sectores populares, rurales y urbanos, de la sociedad civil más o menos organizada que allí se dio cita fue desigual y caótico. Quizá no todos los delegados representaban a muchos más pero, en la opinión de algunos asistentes con mirada avisada, había una muestra significativa de las “*grass roots*”, lo más básico de las bases sociales, con incipiente o ya madurado afán organizativo. Más allá de los cauces partidistas o sindicales, la participación desbordó tales límites y fue el termómetro de una voluntad de cambio.

Una muestra muy variada de la sociedad civil se congregó en San Cristóbal y en el anfiteatro selvático, para instalarse, con efusión pacífica, en el “navío pirata”. Había estudiantes, militantes sindicales, delegaciones indias con atuendo tradicional, organizaciones urbano-populares y campesinas, cívicas y feministas, chavos banda, grupos de desarrollo comunitario organizados, o no, en ONG, miembros de comunidades eclesiales de base y unos cuantos intelectuales: sociólogos, antropólogos, especialistas en los problemas del campo, periodistas, artistas y actores, poetas. Había viejos y jóvenes luchadores por los derechos humanos y hasta veteranos del Ejército del Sur de Emiliano Zapata.

Una energía desordenada, pero en busca de articulación coherente, condujo a cerca de ocho mil personas a ese Guadalupe Tepeyac que se volvió, por un día, la meca de una peregrinación híbrida, como todo el fenómeno, de tradición y modernidad. La desorganización que reinó en San Cristóbal, el autoritarismo y la excluyente arbitrariedad que desplegaron los improvisados guardianes de la logística, suscitaron incomodidades e irritaciones y aun la renuncia de uno que otro invitado a trasladarse a la Selva. Pero, más allá de ese rechazo a prácticas despóticas en un encuentro que se quería democrático, acabó por imponerse la corriente emotiva que cimbró a los concurrentes.

Para algunos era el primer contacto de piel a piel con el “otro México”: una especie de descenso ritual al Centro de la Tierra para cargarse de su fertilidad y resurgir a una vida nueva. Como sugirió Daniel Cazés había algo de iniciático en las numerosas pruebas que hubo que vencer antes de tener acceso al “sitio de comunión” donde tendría lugar algo así como un “rito fundacional” en torno a alguien que parecía “por momentos más una figura mesiánica que un dirigente”.¹⁵³ La lejanía que se mantuvo entre forasteros y zapatistas, mantenida en el cateo “profesional” en los retenes y en la distancia escénica que marcó los desfiles y los discursos, no impidió al parecer que el magnetismo del insólito espectáculo volviera copartícipes a los espectadores.

Muchos de los convencionistas eran, en realidad, parte del “otro México”. Unos procedían de organizaciones en germen; otros, de grupos con años de experiencia

participativa. La resistencia indígena estaba representada en la COCEI del Istmo, el Consejo Guerrerense de 500 años, Xi'Nich de Chiapas, triquis, huicholes y mazahuas. Lo mismo estaba la ARIC independiente, estrenando nueva dirigencia y cercanía con el EZLN, que Superbarrio con gente de su *Asamblea* defeña y colonos de Nezahualcóyotl y cristianos de comunidades de base. Codo con codo, estaban El Barzón, expresando demandas de agricultores otrora prósperos del norte y navistas de San Luis, fieles a su inveterado maderismo. Quizá la muestra no era estadísticamente irreprochable, pero indudablemente era significativa de un encuentro entre los dos Méxicos.

¿Podía englobarse aquella Arca de la Alianza como un amplio abanico de la izquierda o rebasaba una calificación hartamente teñida de ideología y un tanto anacrónica? Lorenzo Meyer creyó percibir un camino “muy original y prometedor” en la combinación de la más dogmática experiencia neoliberal del mundo subdesarrollado con el menos ideologizado y más reciente de los movimientos insurgentes en América Latina. Lo inédito de esa conjunción se acentuaba con la convocatoria “a la más amplia gama de la izquierda no armada”, desde uno de los extremos del país, para discutir en la selva la agenda nacional. Meyer advertía la necesidad de una izquierda fuerte, pero no dogmática, para lograr un desarrollo político y social menos desequilibrado. Pero señalaba:

[...] lo que es aún una incógnita, es la capacidad de un agrupamiento tan heterogéneo para cooperar entre sí y con otras fuerzas democráticas, y movilizar a sus bases sociales en favor de un cambio de régimen.¹⁵⁴

Varios análisis de Luis Hernández Navarro ubicaron también como “izquierdas” al abigarrado conjunto de fuerzas que acudió a la Convención. Desde el jurásico de los viejos conceptos empolvados, hubo quienes procuraron manejar dogmas “clasistas” y propuestas radicales, polarizando los debates en San Cristóbal. Pero tales planteamientos no marcaron el tono de los acuerdos finales. La Convención fue contemplada por Hernández Navarro como “un hecho inédito” que había potenciado anteriores intentos de unificación de las izquierdas. Puntualizaba, sin embargo, el asesor de organizaciones cafetaleras de Chiapas:

La Convención es un agente más en el proceso de transición pacífica a la democracia al lado de otros agentes, entre los que se encuentran partidos políticos, medios de comunicación, movimientos sociales y grupos ciudadanos. Pero no es la única pieza que juega en el tablero.¹⁵⁵

No haber caído en el discurso maximalista de los “ultras” habría sido el mayor éxito de lo que Julio Moguel llamó “el pacto de *Aguascalientes*”. La lucha por un

cambio de régimen por la vía pacífica, incluyendo acciones de resistencia civil en caso de fraude, habría sido el acuerdo básico entre un neozapatismo capaz de no caer en el garlito de posturas extremistas para aliarse, en cambio, al “maderismo social” enraizado en movimientos civiles y de masas por la democracia.¹⁵⁶

Entre los análisis inmediatos que procuraron entender la experiencia destacó el cuidado que puso Sergio Zermeno para no ponerle calificativos ideológicos. Sería impreciso considerar el fenómeno “en los términos tradicionales de una izquierda” e intentar abarcarlo con una palabra tan llena de connotaciones desgastadas. Se trataría, más bien, de una “pequeña constelación organizativa” en el piso más bajo de la sociedad, el germen de lo que podría llegar a convertirse en un momento dado en un “desborde popular”. No habría que confundir eso, según el sociólogo, con la composición de la presidencia, que podría ser efímera, de la CND:

Lo que la Convención de Aguascalientes presentó fue una constelación de fenómenos de reconstrucción de identidades colectivas[...], la presencia de una red básica, de la existencia de un tránsito a la democracia social-popular que en este momento[...] tuvo la fuerza para manifestarse articuladamente[...]. [Hubo] un reclamo por el reconocimiento de sus identidades ahí en donde éstas se generan: en lo circunscrito, en lo restringido, en lo local, en la pequeña región[...]. *Aguascalientes* es un grito por el respeto de lo más endeble, por trocar la derrota de la sociedad en reconstrucción social[...].¹⁵⁷

Antes de la Convención, *Marcos* se había manifestado demasiado ambicioso, al expresar su esperanza de que la Convención pudiera “sostener sobre sus espaldas” a un “gobierno de transición”, que necesitaría “recargarse en algo”. Proponía a esa Convención como la más definitiva, si bien no la única fuerza definitiva. Habló de “imponer” el programa que allí se adoptara al candidato triunfante, reconociendo que habría que cumplir antes con otro requisito: “Ser una fuerza real, con un peso específico”.¹⁵⁸

La CND no era, evidentemente, ni el momento ni el lugar para elaborar o definir un proyecto de nación. Se esbozó una aspiración muy general, en torno a los once puntos que había demandado el EZLN. Se propuso replantear las relaciones entre Estado y sociedad, acentuando las responsabilidades sociales del Estado. Se sugirió redefinir la inserción en la globalidad, ampliando el acceso a campesinos y marginados urbanos. Desaparición de latifundios, vigencia del ejido, derechos a trabajadores migratorios, democracia sindical entraron en las propuestas sobre condiciones materiales de vida (*trabajo, techo, salud, alimentación*). Aunque las propuestas sobre educación fueron muy vagas, se insistió en volverla parte fundamental de la vida cotidiana.

Se planteó, en las diversas mesas, la transición hacia un verdadero Estado de derecho y la inviabilidad del partido de Estado; la necesidad de tránsito hacia

una democracia con contenido social; el fin del corporativismo y la libertad de afiliación a partidos y sindicatos. Se abogó por el fin del presidencialismo, por procesos electorales en manos de la sociedad civil, por la legalidad de candidaturas independientes y de coaliciones, por la facultad de la sociedad civil para presentar iniciativas legislativas y por el plebiscito y el referéndum como recursos que tendría que garantizar una nueva Constitución, a la que debería convocar un gobierno de transición.

Se aprobó el recurso a vías pacíficas para promover un tránsito democrático: elecciones, resistencia civil, defensa de la voluntad popular. Partiendo de la inviolabilidad del partido de Estado, se promovería un proceso de democratización desde abajo. La tarea de un gobierno de transición sería “restaurar” a la República y convocar a un Congreso Constituyente. Quedó para una convocatoria posterior, que correspondería a la presidencia colectiva de cien miembros, empezar a profundizar temas y propuestas para hacerlos operativos.

En el discurso que clausuró la Convención, *Marcos* sugirió que el mayor éxito de esa Convención sería volverse tan eficaz en el encuentro de vías pacíficas que se pudiera negar al EZLN como alternativa:

[...] es el momento para decirle a todos que no queremos ni podemos ocupar el lugar que algunos esperan que ocupemos, el lugar del que emanan todas las opiniones, todas las rutas, todas las respuestas, todas las verdades[...].

Los zapatistas no pretenderían convertir a la Convención en “un brazo civil que alargue el siniestro brazo de la guerra”. ¿Qué esperaban de aquella “dispersión reunida y dialogando”?

No la designación de un gobierno interino, no la redacción de una nueva Constitución, no la conformación de un nuevo constituyente, no el aval para un candidato a la presidencia de la República [...], no a la guerra[...].¹⁵⁹

En aquel ámbito improbable, a un tiempo Torre de Babel y Arca de Noé, “el delirio del neozapatismo” celebraba, según *Marcos*, el “miedo roto” y “la paradoja anacrónica”, “la tierna locura de los sin rostro”: constituirse, en medio de un territorio en armas, en “espacio para una paz con justicia y dignidad”. Así zarpaba la nave de Fitzcarraldo al proceloso mar de una transición por la vía pacífica.

Aunque muchos compartieran algunas o muchas de las propuestas que el EZLN llevó a su Convención selvática, la necesidad de configurar un nuevo proyecto nacional requería de una asamblea con convocatoria mucho más amplia, que procurara una participación más representativa, plural y nacional.

Imparcialidad a prueba

Tres declaraciones presidenciales procuraron reflejar imparcialidad en los comicios: el 26 de junio se prometió entregar el poder al ganador, cualquiera que fuera; el 5 de julio se instó a los gobernadores a actuar como “los garantes estatales de elecciones limpias”, y el 22 de julio se “amarró” públicamente las manos a los presidentes municipales, amonestándolos a “no favorecer a ningún partido”. También desde la Presidencia se exhortó a los medios a mostrar equidad en las campañas: con esa sugerencia se difundió el diálogo de Salinas con Alianza Cívica. Tales manifestaciones coincidieron con numerosos recordatorios de la “caída del sistema” en el 88 y con la insistencia del presidente del PRI en que no había que resucitar algo que ya era “cosa juzgada”. Desde Michoacán, el presidente reiteró “imparcialidad” el 11 de agosto.

La llegada tardía de los consejeros ciudadanos y sus escasas facultades para influir en el desarrollo del proceso electoral sería suplida, según Ortiz Pinchetti, haciendo uso del “poder simbólico” que la propia ciudadanía atrapada en la incertidumbre buscaba atribuirles. ¿Podrían comprometer a los contendientes a reconocer cualquier victoria? ¿Podrían dictaminar acerca de la calidad del proceso? ¿Podrían ejercer una presión inteligente y prudente sobre autoridades, medios, “generosos benefactores” de ciertos partidos y delincuentes electorales en potencia? Lo intentarían, por lo menos, para contribuir a una salida civilizada.¹⁶⁰

Cuando los consejeros validaron el padrón estaban cumpliendo, estrictamente, con la ley que los obligaba a hacerlo si los partidos no lo impugnaban o si el Tribunal Federal Electoral rechazaba, como fue el caso, las apelaciones de los partidos. Pero, además, el Consejo General del IFE

[...] se esforzó en determinar si merece confianza, y concluyó que sí. No se ha convertido, sin embargo, en fiador del proceso electoral. Puede distinguir entre un instrumento y su uso, y disponer mecanismos que hagan del padrón razonablemente fiable que la sociedad mexicana ha construido, un instrumento razonablemente útil para unas elecciones con menos sombras que nunca.¹⁶¹

Al mismo tiempo, el investigador de la UAM Fernando Bazúa proponía la aplicación de un programa de computación para comparar huellas dactilares que sirviera para “cazar mapaches”.¹⁶²

¿Quién dictaminaría sobre la limpieza electoral después del 21 de agosto? El secretario de Gobernación se deslindaba de la responsabilidad, endosándola a los consejeros ciudadanos, y éstos advertían que sólo estarían legalmente capacitados para dar su opinión en noviembre, después de la calificación de la elección presidencial por el Congreso.¹⁶³

Era evidente que los avances implantados por la reciente reforma sólo serían efectivos si se garantizaba la autonomía de los 300 consejos distritales y si la oposición o los observadores imparciales lograban vigilar las 96 mil casillas: tales condiciones no estaban cerca de cumplirse. La designación de consejeros locales y distritales, manejada por gobernadores, no había sido modificada más que un 7%. Los representantes de partidos cubrirían entre el 40% y el 70% de las casillas, con el apoyo de observadores, pero quedarían al descubierto cerca de 30 mil casillas sin vigilancia. En zonas rurales de difícil acceso, esas casillas estarían en manos de “caciques” y “mandones”, ilustrando una vez más la polarización y la fractura del país. ¿Cómo reducir ese “gigantesco reducto de irregularidad”? Sergio Aguayo Quezada proponía, desde Alianza Cívica, una movilización nacional de sectores independientes para colocar observadores en todas las casillas rurales. Calderón Alzati, de la Fundación Arturo Rosenbluth, anunciaba que se procuraría ubicar en el campo a 500 visitantes extranjeros aunque, evidentemente, la eficacia de esa vigilancia era muy relativa.¹⁶⁴

Un Acuerdo por la Civilidad, la Concordia y la Justicia en la Democracia, firmado por ocho partidos el 18 de julio, parecía *incompleto*: no lo avalaba el PRD, que seguía reclamando inconsistencias considerables en el padrón, y quedaban diez puntos pendientes, según lo registró el Grupo San Ángel, para dar mayor certeza al proceso.

En un segundo documento, que recogía inquietudes de los candidatos y de los consejeros del IFE, ese Grupo enumeró propuestas muy concretas. La apertura de los medios debería incluir, en los noticieros, comentarios editoriales de analistas imparciales y, en tiempo preferencial, debates entre los candidatos y especialistas sobre los grandes problemas nacionales. Las listas nominales de electores tendrían que exhibirse tres semanas antes en sitio público; su consistencia tendría que demostrarse por muestreo y en las casillas habría que llevar registro de irregularidades. La reducción del excesivo número de 96 mil casillas, que dificultarían la vigilancia, podría hacerse compactando varias en un solo sitio. Para garantizar imparcialidad en consejos distritales y estatales del IFE, a los que tocaría calificar a diputados y senadores, sería aconsejable abrir un período para resolver impugnaciones a consejeros. La importancia del punto era evidente. Sólo en el Consejo General existía ya la garantía de seis ciudadanos sin partido: era indispensable extenderla a los consejos distritales, encargados de calificar a los diputados que después, constituidos en Colegio Electoral, calificarían al presidente.

El Grupo San Ángel consideraba importante que el Consejo General del IFE emitiera una opinión sobre el proceso 72 horas antes de la elección, sobre el desarrollo de esa jornada inmediatamente después y, finalmente, sobre la calificación distrital. Las recientes modificaciones legislativas limitaron la información con que contaría la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial. El Colegio

Electoral debería tener acceso a toda la documentación: es decir, a los paquetes electorales de las casillas. La credibilidad exigiría información inmediata de los resultados el día mismo de la elección. Se pedía asegurar condiciones para la votación dentro de la zona de conflicto en Chiapas.¹⁶⁵

El 24 de julio, tras siete semanas de actuación de los consejeros ciudadanos, Ortiz Pinchetti veía todavía tres puntos oscuros: seguían en entredicho la apertura y veracidad de los medios; no se había logrado nada en la concentración de casillas, en parte porque los propios partidos de oposición temían que se desarticulara su organización de vigilancia; persistían muchas dudas de la imparcialidad de consejeros distritales y locales, que no habían sido oportunamente impugnados por los partidos de oposición. El Consejo opinaba que “se han logrado concretar algunas condiciones necesarias, pero no suficientes para un buen proceso”. En tales condiciones, la responsabilidad y el eventual mérito de limpieza electoral quedaba en manos del gobierno y, concretamente, del presidente de la República:

Si el presidente de la República lleva adelante los conceptos sobre la disciplina de los gobernadores y de los presidentes municipales que expresó el viernes pasado públicamente, las elecciones serán un éxito[...]. Hay que dejar a la más estricta responsabilidad de cada uno de ellos su conducta durante las elecciones, y advertir que los que se proponen recibirán de lleno “todo el peso de la ley”.¹⁶⁶

“Hoyos negros” en la credibilidad

La confiabilidad del padrón como “instrumento estático” no excluía, como advirtió José Woldenberg, la necesidad de garantizar que no sería vulnerado ni desviado su manejo. Nuevas suspicacias se despertaron en los últimos días de julio, cuando el PRD presentó un estudio que comprobaba un millón de homonimias, de nombre y dos apellidos, en el padrón del Distrito Federal. Pronto quedaría demostrado, sin embargo, que más de 500 mil correspondían a personas reales, cuyos nombres se repetían dos o tres veces, y que los casos de credencial duplicada no eran indicativos suficientes de un “padrón amañado”.¹⁶⁷

Mientras el 21 de julio el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Roberto Hernández, advertía que el costo más grande que podría pagarse por el triunfo de la oposición sería la falta de capitales y la caída en la inestabilidad y la incertidumbre, la prensa reportaba indicios de movimientos armados en la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, donde 90 mil campesinos migran hacia el norte cada año.

En el Foro Nacional de Democracia organizado por el PRI el 4 de agosto, Ernesto Zedillo quiso recoger una frase del discurso del 6 de marzo de Colosio que habían reactualizado los documentos del Grupo San Ángel: “Es la hora de la democracia”.

El candidato del PRI prometió “una sana distancia entre PRI y gobierno” y que no tendría injerencia “bajo ninguna circunstancia” en la selección de candidatos.¹⁶⁸

Alianza Cívica presentó, el 27 de julio, su metodología para el conteo rápido elaborada por la Fundación Rosenblueth. Cubriría 2 668 casillas en 427 municipios, con 7 mil observadores y mensajeros y 325 centros de cómputo, calculando un margen de error entre 1 y 5%.

El 7 de agosto, el IFE anunció que haría un conteo rápido el día 21 a partir de una muestra estadística de 1 500 secciones, para conocer esa misma noche la tendencia de la elección. El PRD manifestó reticencias, alegando que el PRI podría “trabajar” las casillas muestras del conteo. Se respondió que ninguna de las tres empresas que realizarían el conteo podría revelar con anticipación cuáles serían las secciones y las casillas. Se contaría, además, con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para divulgar cifras, en las primeras horas del día siguiente, de las 96 419 casillas.

Alianza Cívica advirtió el riesgo de la proliferación de “conteos rápidos” ya prevista: en total serían siete, incluyendo a los tres del IFE. La Fundación Rosenblueth trabajó ocho meses para hacer un conteo “aleatorio” de 500 casillas (más rápido y con mayor margen de error) y otro “estratificado” de 2 100 (más lento y con menor margen de error).

Sergio Aguayo recordó el riesgo de dejar el monopolio de las sumadoras en manos oficiales. Una semana antes de las elecciones, el Consejo General del IFE explicó que los números prioritarios serían los del PREP y que el “conteo rápido” sólo serviría de salvaguarda por si ese sistema mostrara tardanzas. También se advirtió que habría sanciones para quienes revelaran cifras de “conteos rápidos” antes de las 19 horas del domingo.¹⁶⁹

El peligro de una “guerra de cifras” fue anticipado por Miguel Ángel Granados Chapa. El mayor riesgo de confusión estaría en el “*exit poll*”, encuesta a la salida de las casillas, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, porque nadie podría garantizar que los ciudadanos “confesaran” por quién habían votado. En una conferencia de prensa, el 10 de agosto, los consejeros ciudadanos advirtieron que no existía garantía de credibilidad y que persistían “signos de desconfianza” en la población y “hoyos negros” sobre la vigilancia de las casillas, dada su excesiva proliferación. Según el consejero Pozas Horcasitas, los mecanismos implantados “no garantizan una elección creíble”. Santiago Creel reconoció que los consejeros no podrían garantizar la transparencia del proceso “pero sí que hablaremos con la verdad para que se cumpla la ley gane quien gane, venga del partido que venga”:

El de 1994 no va a ser un proceso que se pueda callar, la sociedad tendrá voz a través de los consejeros ciudadanos, el sistema no se va a callar como en 1988[...], la mordaza de 1988 ya terminó: el pueblo ahora quiere expresarse[...].

El 12 de agosto, Santiago Creel recibió en custodia metodología y listado de casillas en que basaría Alianza Cívica su conteo rápido el 21 de agosto. También fue claro Miguel Ángel Granados Chapa:

Salvo una catástrofe fuera de la previsión humana, esta vez el sistema de resultados electorales no se caerá y menos aún se callaría [...]. Cuando se llegue al 15% de las casillas, es decir, cuando se tenga la información de unas 14 500 casillas se hará el primer balance y resumen [...], cualquiera que sea la hora en que ese monto se alcance[...].¹⁷⁰

El integrante perredista de la Comisión de Vigilancia del Consejo General del IFE aseguró, el 11 de agosto, que su partido había enfocado su estrategia a cubrir las casillas “zapato”, aquellas en las que el PRI obtuvo en 1988 y 1991 el 100% de los votos (en Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero).¹⁷¹

Catorce organizaciones se preparaban a distribuir 150 mil observadores por todo el país, aunque por obstáculos burocráticos sólo se habían registrado el 7 de agosto 4 mil. La más grande y madura, Alianza Cívica, agrupaba a 435 organismos civiles, sindicales, campesinos y de derechos humanos de casi toda la República y sólo había logrado acreditar a 1 200 de sus 15 mil observadores. El 14 de agosto, terminado el plazo para acreditar oficialmente observadores, las 14 organizaciones sólo habían recibido aval para 32 133, que apenas alcanzarían a cubrir la tercera parte de las casillas. El proyecto de Alianza Cívica, con la ventaja de ocho años de experiencia previa, había contado con respaldo y asesoría de las Naciones Unidas, aunque el gobierno de México facilitó los fondos.¹⁷²

La actividad del Grupo San Ángel se intensificó desde el 30 de junio, cuando una reunión con Diego Fernández de Cevallos inició encuentros con Cuauhtémoc Cárdenas, con Ernesto Zedillo, con el presidente de la República, con el secretario de Gobernación y los consejeros ciudadanos del IFE y con un grupo de empresarios.

Después de las reuniones resultó claro que los candidatos no estaban dispuestos a suscribir, antes de las elecciones, un Pacto de la Concordia. El segundo documento elaborado por el Grupo recogió los puntos que seguían en litigio y podían nublar las elecciones. El principal propósito, de lograr antes del 21 de agosto un acuerdo para el tránsito, favorable a la formación de un gobierno de amplio consenso, no se había logrado. Tanto Fernández de Cevallos como Cárdenas coincidieron en la visión crítica del sistema autoritario y en la necesidad de una transición democrática. Zedillo no simpatizaba con la palabra “crisis” y prefería considerar el “perfeccionamiento” de la democracia “existente” que una “transición” propiamente dicha.

Un tercer documento del Grupo San Ángel, publicado el 8 de agosto, resumía aquellos puntos de los documentos anteriores que habían recibido respuesta posi-

tiva: medidas para vigilar el padrón el día de la elección; apoyo a observadores, mediante un fideicomiso, para vigilar un mayor número de casillas; acuerdo para elecciones en la zona de conflicto de Chiapas; compromiso del IFE para dar resultados el mismo día; nuevos espacios en la televisión comercial para candidatos y programas de debate sobre grandes problemas nacionales; campaña de información para promover el voto.

Dos propuestas no habían sido aceptadas: la concentración de casillas y la exhibición anticipada de listas nominales. Y quedaban pendientes otras cuatro: abrir nuevo plazo para sustituir a consejeros locales y distritales impugnados; que el Consejo General del IFE, dada su autoridad moral, emitiera un juicio sobre la calidad de la elección inmediatamente después del proceso; insistir en la mayor equidad de los medios y, algo muy importante, insistir en que el Colegio Electoral tuviera a su disposición el expediente electoral completo de cada casilla.

Una vez más, se advertía que las elecciones serían apenas “un punto de partida” para el tránsito democrático con el que deberían comprometerse todos los contendientes. Se reiteraba que *ningún grupo ha de anteponer sus intereses a los de la nación* y que *nadie debe condicionar la estabilidad o la paz al triunfo de la opción política de su preferencia*. Se hacían exhortos puntuales al Poder Ejecutivo Federal; a las autoridades electorales; a candidatos y partidos; a observadores; a empresarios; a organizaciones sociales; al EZLN; a los medios de comunicación; al candidato triunfador, que debería encabezar *un gobierno de concordia nacional, cuya composición y programa reflejen las circunstancias que vive México*. Se convocaba, en suma, a un debate nacional para elaborar la *agenda que demanda el país* y garantizar la reforma política y social pendiente. Separación de poderes; vigencia del federalismo y Estado de derecho, en un contexto de equilibrio económico y de incorporación al mercado, al empleo y al bienestar a los millones de mexicanos excluidos habría de ser el tema de ese fundamental debate.¹⁷³

Entre la inercia autoritaria y la apropiación del futuro

En entrevista a *Los Angeles Times* Cuauhtémoc Cárdenas señaló, el 10 de agosto, que muchas de las encuestas manejadas por los medios contradecían la *enorme* respuesta que estaba recibiendo en su campaña. El presidente de la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública, Seymour Lipset, opinó que si se abatía la abstención y votaba el 70% de los ciudadanos, ganaría Cárdenas. El registro de intención de voto del Sondeo Semanal de MORI, muy variable en los últimos meses, sumaba el 10 de agosto un 28% para Diego, un 24% para Zedillo y un 20% para Cárdenas, con un 20% de personas que preferían no declarar. El *pro-*

nóstico de voto, construido con el manejo de variables que permitían augurar voto de indecisos, preveía un 32% para Diego, un 30% para Cárdenas y un 29% para Zedillo en las cinco ciudades encuestadas, si las elecciones se hubieran realizado ese día. El voto campesino no estaba previsto.

Numerosos “escenarios de la incertidumbre” se manejaron en las semanas previas a las elecciones. Se habló de fuertes impugnaciones, que podrían generar una ingobernabilidad incontrollable; se especuló sobre un eventual interinato y aun se deslizó el riesgo de un “gobierno de excepción”.

Mientras el escenario del equipo gobernante era el de una “victoria aplastante”, opiniones críticas, pero no partidistas, eran bastante terminantes en sus predicciones. Enrique Krauze hacía un “réquiem por el PRI-gobierno” y advertía que “a fines del siglo XX, cuando el mundo entero ha transitado a la democracia, México debe dar un salto histórico”. Gabriel Zaid aportó, como siempre, su filosa reflexión:

Si el PRI ganara la presidencia dentro de seis años, después de haberla perdido una vez, la situación sería distinta a que la gane ahora, sin haberla perdido jamás. Una democracia sin alternancia en el poder, simple y sencillamente no es creíble.¹⁷⁴

Entre las especulaciones, seguía colándose el rumor de inestabilidad, si ganara la oposición, por retiro de inversiones. No fue ésa la opinión de seis empresarios que se reunieron con el Grupo San Ángel el 12 de agosto. Juan Sánchez Navarro, Carlos Abedrop, Clemente Serna, Andrés Marcelo Sada, Jacobo Zaidenweber y Emilio Carrillo convinieron en que habría que reconocer el triunfo del verdadero ganador, sin que ello implicara necesariamente la aceptación integral de su programa de gobierno: el triunfador tendría que concertar un programa nacional con todos los sectores. Sánchez Navarro se mostró convencido de la necesidad de un “cambio radical” en el sistema político, siempre dentro del respeto al Estado de derecho. Un cambio de partido en el gobierno no significaría un riesgo si se respetaban las reglas que aseguran confiabilidad y certidumbre. Andrés Marcelo Sada manifestó su apoyo al tercer documento del Grupo, donde se hacía un llamado a los empresarios a apoyar la estabilidad financiera y al candidato que resultara electo, independientemente de preferencias partidistas.¹⁷⁵

Prevalecía, entre la gente pensante del país y en los sectores más participativos, “la sensación de que el sistema político dio ya de sí y que debe dejar su sitio a uno nuevo regido por la verdadera contienda entre partidos.” El temor al cambio, estimulado sin duda deliberadamente, agitaba el espantajo de la “inestabilidad” como consecuencia de un triunfo de la oposición.

El 21 de agosto se abría como una incógnita habitada por la incertidumbre y la esperanza. El país se debatía entre la inercia de una fatalidad autoritaria que lo jalo-

neaba hacia el pasado y la opción, más visible que nunca, de escoger la libertad de elegir y apropiarse del futuro como destino. La democracia, por fin, parecía estar al alcance de la mano.

Notas

¹ “¿De qué nos van a perdonar?”, carta de Marcos, *La Jornada*, 21/I/1994.

² Columna “Clase Política”, *La Jornada*, 17/II/1994.

³ Entrevista de Blanche Petrich a los comandantes Ramona, David, Felipe, Javier, Isaac y Moisés del CCRI, *La Jornada*, 3/II/1994.

⁴ Alocución de Marcos en la Catedral de San Cristóbal, hablando a nombre del CCRI, *La Jornada*, 23/II/1994.

⁵ Declaración de Marcos en rueda de prensa en la catedral, *La Jornada*, 24/II/1994.

⁶ “Las demandas zapatistas” y “Las respuestas del gobierno”, *El Financiero*, 3/III/94.

⁷ Conversación de Marcos con Ricardo Alemán y V. Ballinas, *La Jornada*, 28/II/1994. Conversación con Julio Moguel y Hermann Bellinghausen, *La Jornada*, 4/III/1994.

⁸ Comunicados del CCRI, *La Jornada*, 17/III/1994 y 22/III/1994.

⁹ *La Jornada*, 17/V/1994.

¹⁰ Entrevista de Epigmenio Ibarra a Marcos, *La Jornada*, 21, 22 y 23/VI/1994.

¹¹ Antonio García de León, “El camino de la Convención”, *La Jornada*, 2/VII/1994; Epigmenio Ibarra, “La Convención como puente”, *La Jornada*, 18/VII/1994; respuesta de Monsiváis a Marcos, *La Jornada*, 27/VII/1994; respuesta de Enrique Krauze, 21/VII/1994; respuesta de Carlos Fuentes, 7/VII/1994; respuesta del Grupo San Ángel, *La Jornada*, 30/VII/1994.

¹² Comunicado de Marcos, 27/VII/1994, publicado en *La Jornada*, 31/VII/1994.

¹³ Luis Hernández Navarro, “El fantasma de Zapata”, *La Jornada*, 16/VII/1994.

¹⁴ Declaración de Luis Santibáñez Cantero, *Reforma*, 27/XII/1993.

¹⁵ Entrevista de José Reveles con Rolando Cordera, *El Financiero*, 20/XII/1993.

¹⁶ Marcos Chávez, “Será de cero por ciento real la inversión bruta fija en todo 93”, *El Financiero*, 28/XII/1993. Fuente: *Criterios de política económica 1993, 1994*.

¹⁷ *El Financiero*, 5 y 6/I/1994; 7 y 11/I y 3/II.

¹⁸ Propuesta de la IP, *Reforma*, 25/II/1994.

¹⁹ *La Jornada*, 12/V/1994.

²⁰ *El Financiero*, 11/II/1994.

²¹ *El Financiero*, 21/II/1994.

²² *El Financiero*, 27/V/1994.

²³ Lorenzo Meyer, “Fantasía sexenal”, en *Reforma*, 28/IV/1994.

²⁴ *El Financiero*, 9/IV/1994 y 21/V/1994.

²⁵ *El Financiero*, 24/V/1994.

²⁶ *El Financiero*, 24/V/1994.

²⁷ *La Jornada*, 14/II/1994.

²⁸ *La Jornada*, 9/V/1994.

²⁹ Luis Rubio, "Falta la revolución de las ideas", en *Reforma*, 17/IV/1994.

³⁰ José Luis Calva, "El manejo neoliberal de las finanzas públicas", en *El Financiero*, 20/V/1994.

³¹ Jesús Reyes Heróles G. G., "Cómo recuperar el crecimiento", en suplemento *Enfoque de Reforma*, 1º/V/1994.

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

³⁴ "¿Qué sigue?" Jonathan Heath, Julio Millán, Enrique Quintana, Jesús Reyes Heróles G. G. responden a preguntas de *Enfoque*, núm. 22, *Reforma*, 8/V/1994.

³⁵ *Idem.*

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

³⁸ *El Financiero*, 26/I/1994.

³⁹ *El Financiero*, 11/II/1994; *La Jornada*, 23/IV/1994.

⁴⁰ *El Financiero*, 29/XII/93.

⁴¹ Armando Bartra, "¿Zapata vive?", en *Perfil de La Jornada*, 8/IV/1994.

⁴² *Idem.*

⁴³ *El Financiero*, 16/IV/1994.

⁴⁴ Arturo Warman, "La reforma al Artículo 27 Constitucional", en *Perfil de La Jornada*, 8/III/1994.

⁴⁵ *Idem.*

⁴⁶ *Idem.*

⁴⁷ Manuel Badillo, "Existen 9 expedientes de rezago agrario por cada ejido del país", en *El Financiero*, 28/XII/93.

⁴⁸ *La Jornada*, 28/V/1994.

⁴⁹ *El Financiero*, 7/VI/1994; *La Jornada*, 7/VI/1994.

⁵⁰ *La Jornada*, 25/VI/1994.

⁵¹ Entrevista de D. Tavarez a Paul Krugman, en *El Financiero*, 19/VI/1994.

⁵² *Análisis de El Financiero*, 24/VI/1994.

⁵³ Carlos Ramírez, "La política llegó tarde", en *El Financiero*, 14/I/1994.

⁵⁴ "Los tropiezos neoliberales", editorial de *La Jornada*, 14/I/1994.

⁵⁵ Raymundo Riva Palacio, "Crisis de liderazgos" y "¿Adónde va Camacho?", en *El Financiero*, 20 y 25/I/1994.

⁵⁶ Encuesta de Adip Sabag, *El Financiero*, 24/I/1994.

⁵⁷ Declaración de Alexander Watson, en *El Financiero*, 26/I/1994.

⁵⁸ Palabras de Luis Herrera, Domingo López Angel, Nazar Morales y Alfonso de León, del CEOIC, recogidas por Carlos Fuentes, "México: las dos democracias son una sola", en *La*

Jornada, 11/II/1994. *El Financiero*, 28/I/1994. Raymundo Riva Palacio, “México en dos tiempos”, en *El Financiero*, 28/I/1994. *La Jornada*, 30/I/1994.

⁵⁹ *La Jornada*, 20/I/1994.

⁶⁰ Declaración de Octavio Paz, *La Jornada*, 20/I/1994; Pablo González Casanova, “1994: la responsabilidad democrática”, en *La Jornada*, 28/I/1994.

⁶¹ Declaración de Luis Donaldo Colosio en Metepec, México, *La Jornada*, 30/I/1994; declaración en Anenecuilco, *El Financiero*, 1/II/1994.

⁶² Pablo Latapí, “Repensar el país”, en *Proceso*, núm. 897, 10/I/1994.

⁶³ José A. Ortiz Pinchetti, “Un camino singular a la democracia”, en *La Jornada*, 1/II/1994; Federico Reyes Heróles, “Falso retorno”, en *Reforma*, 1/II/1994; Raymundo Riva Palacio, “No a las amenazas”, en *Reforma*, 2/II/1994.

⁶⁴ Demetrio Sodi, “Nuevo pacto nacional”, en *La Jornada*, 11/II/1994.

⁶⁵ Entrevista de G. Lomelín a José Ma. Basagoiti, *El Financiero*, 14/II/1994.

⁶⁶ Luis Rubio, “La desinstitucionalización de México” y “La nueva disputa por la nación”, en *Reforma*, 20 y 27/II/1994.

⁶⁷ Juan Molinar Horcasitas, “Cuando más duele”, en *Reforma*, 21/II/1994.

⁶⁸ Declaración de Carlos Fuentes en Los Angeles, *La Jornada*, 26/II/1994; Héctor Aguilar Camín, “La mesa puesta”, en *Proceso*, núm. 903, 21/II/1994.

⁶⁹ Sondeos de MORI: “Chiapas a los ojos de la opinión pública” (7/I/1994); “Evolución de la opinión” (21/I/1994); “Sondeo semanal” (23/II/1994).

⁷⁰ Jorge G. Castañeda, “Salinas o Colosio: sacrificio político”, en *Proceso*, núm. 903, 21/II/1994.

⁷¹ Gabriel Zaid, “Un sexenio vendedor”, en *Reforma*, 27/II/1994.

⁷² Wayne Cornelius, “La transición inconclusa”, en *Este País*, febrero de 1994.

⁷³ Luis Donaldo Colosio, discurso del 65 aniversario del PRI, el 6 de marzo de 1994, en *Perfil de La Jornada*, 15/III/1994.

⁷⁴ *El Financiero*, 8/III/1994.

⁷⁵ Encuesta sobre popularidad de Manuel Camacho en *Reforma*, 11/III/1994; Alberto Aziz Nassif, “La crisis del PRI”, en *La Jornada*, 15/III/1994.

⁷⁶ Demetrio Sodi, “Colosio y la reforma del poder”, en *La Jornada*, 11/III/1994; declaración de Juan Sánchez Navarro, en *Análisis*, *El Financiero*, 16/III/1994; declaración de Carlos Fuentes a *Cambio 16*, Madrid, 16/III/1994.

⁷⁷ Miguel Ángel Granados Chapa, “Lo que va a suceder en México”, en *Reforma*, 20/III/1994; Luis Rubio, “¿Quién puede garantizar la democracia?”, en *Reforma*, 20/III/1994.

⁷⁸ *La Jornada*, 15/III/1994; *El Financiero*, 17/III/1994; *Reforma*, 19/III/1994; *La Jornada*, 19, 22 y 23/III/1994; Rosa Albina Garavito, “¿Queremos tanto a la reforma electoral!”, en *La Jornada*, 22/III/1994.

⁷⁹ *El Financiero*, 26/III/1994; *La Jornada*, 24 y 26/III/1994.

⁸⁰ Declaración de Carlos Fuentes, *Reforma*, 25/III/1994; José A. Ortiz Pinchetti, “El factor decisivo”, en *La Jornada*, 27/III/1994; encuesta de *Reforma*, 21/IV/1994.

- ⁸¹ Declaración de Wayne Cornelius, *Proceso*, núm. 908, 28/III/1994; entrevista de Sanjuana Martínez a Enrique Krauze, *Proceso*, núm. 908, 28/III/1994; Carlos Monsiváis, “El día siguiente de la tragedia”, en *El Financiero*, 27/III/1994; declaración de Carlos Fuentes, *La Jornada*, 24/III/1994.
- ⁸² *La Jornada*, 6/IV/1994; *El Financiero*, 5/IV/1994.
- ⁸³ Jorge G. Castañeda, “Maleficio sexenal”, *Proceso*, núm. 909, 4/IV/1994.
- ⁸⁴ Octavio Paz, “Un plato de sangre”, *Vuelta*, núm. 209, abril de 1994.
- ⁸⁵ Héctor Aguilar Camín, “Compuerta”, en *Cuaderno de Nexos*, núm. 70, abril de 1994.
- ⁸⁶ Demetrio Sodi, “¿Por qué renuncio al PRI?”, en *La Jornada*, 8/IV/1994.
- ⁸⁷ Sergio Aguayo Quezada, “La guerra de las encuestas”, en *La Jornada*, 20/IV/1994. Véase también Sergio Sarmiento, “Las encuestas y la credibilidad”, en *El Financiero*, 8/IV/1994, y la información recogida por C. Gómez Leyva en *El Financiero*, 23 y 25/IV/1994.
- ⁸⁸ *El Financiero*, 8/IV/1994.
- ⁸⁹ *Reforma*, 29/IV/1994.
- ⁹⁰ Carlos Fuentes, “México, una llanura de sombras”, en *La Jornada*, 15/IV/1994; Adolfo Aguilar Zinser, “La Caravana”, en *Reforma*, 29/IV/1994.
- ⁹¹ Demetrio Sodi, “A 126 días de las elecciones”, en *La Jornada*, 15/IV/1994, y “En medio de la crisis”, en *La Jornada*, 29/IV/1994. Declaración de Carlos Fuentes en *La Jornada*, 29/IV/1994; Héctor Aguilar Camín, “El huevo y el nido”, en *Proceso*, núm. 911, 18/IV/1994.
- ⁹² Héctor Aguilar Camín, “El huevo y el nido”, en *Proceso*, núm. 911, 18/IV/1994.
- ⁹³ Gabriel Zaid, “Adiós al sistema”, en *Reforma*, 24/IV/1994.
- ⁹⁴ Enrique Krauze, “Nueva rogativa”, en *Reforma*, 24/IV/1994.
- ⁹⁵ Sergio Aguayo, “Las verdaderas amenazas a la seguridad”, en *La Jornada*, 4/V/1994. Reclamaciones sobre el padrón en *La Jornada*, 5/IV/1994; reportaje de *El Financiero*, 3/V/1994.
- ⁹⁶ Encuesta de *Reforma*, 13/V/1994. Sondeos semanales de MORI/*Este País* del 11 y el 18/V/1994.
- ⁹⁷ Luis Rubio, “Después del debate”, en *Reforma*, 15/V/1994; Oscar Hinojosa, “El triunfo de Diego”, en *El Financiero*, 15/V/1994; Carlos Monsiváis, “El debate y las ideas en tiempo triple A”, en *El Financiero*, 15/V/1994; entrevista con Lorenzo Meyer en *El Financiero*, 19/V/1994; José Cueli, “¿Los pobres escucharon el debate?”, en *La Jornada*, 20/V/1994, sobre una “Rayuela” de *La Jornada*, 13/V/1994; José A. Ortiz Pinchetti, “¿Quién le pondrá el cascabel al gato?”, en *La Jornada*, 15/V/1994; Daniel Cazés, “Observaciones del proceso electoral”, en *La Jornada*, 28/V/1994.
- ⁹⁸ Declaraciones de Roderic Ai Camp, *El Financiero*, 14/V/1994; de Carlos Fuentes en *La Jornada*, 14/V/1994; de Enrique Krauze, en *La Jornada*, 18/V/1994 y *Reforma*, 18 y 25/V/1994; Enrique Krauze, “Gandhismo político”, en *Reforma*, 29/V/1994; Luis Rubio, “¿Primer gobierno de coalición?”, en *Reforma*, 29/V/1994.
- ⁹⁹ Gabriel Zaid, “Escenario negativo”, en *Reforma*, 29/V/1994.
- ¹⁰⁰ Jorge G. Castañeda, “Vías de transición”, en *Proceso*, núm. 917, 30/V/1994.

- ¹⁰¹ Lorenzo Meyer, “¿Confiar o no confiar? He ahí el dilema”, en *Reforma*, 9/VI/1994; “La esperanza en el IFE”, en *La Jornada*, 16/VI/1994.
- ¹⁰² José A. Ortiz Pinchetti, “¿Quién es responsable de las elecciones del 94?”, en *La Jornada*, 26/VI/1994.
- ¹⁰³ *La Jornada*, 1/VI/1994; Daniel Cazés, “Metodología de la observación electoral”, en *La Jornada*, 2/VI/1994.
- ¹⁰⁴ José A. Ortiz Pinchetti, “Elecciones: los puntos críticos”, en *La Jornada*, 3/VI/1994.
- ¹⁰⁵ José Woldenberg, “La credibilidad difícil”, en *La Jornada*, 2/VI/1994. Véase también “Los acuerdos del Consejo General”, en *La Jornada*, 26/V/1994.
- ¹⁰⁶ Carta de renuncia de Jorge Carpizo, en *Reforma*, 25/V/1994.
- ¹⁰⁷ Declaración de Carlos Salinas de Gortari, *La Jornada*, 28/V/1994.
- ¹⁰⁸ Carlos Ramírez, “Carpizo: país de un solo hombre”, en “Archivo Político”, en *El Financiero*, 3/VII/1994; encuesta en *Reforma*, 29/V/1994.
- ¹⁰⁹ Jorge G. Castañeda, “Un programa común”, en *Proceso*, núm. 989, 13/VI/1994.
- ¹¹⁰ “La hora de la democracia”, documento del Grupo San Ángel, en *El Financiero*, 29/V/1994.
- ¹¹¹ Enrique González Pedrero, “Elección es inclusión”, en *Proceso*, núm. 924, 18/VII/1994.
- ¹¹² Antonio García de León, *Resistencia y utopía*. México: Ediciones Era, 1985, p. 96.
- ¹¹³ Jacinto Arias, “Nuestra batalla para pertenecernos a nosotros mismos”, en *Chiapas, una radiografía* (compiladora María Luisa Armendáriz). México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 204-205.
- ¹¹⁴ Rosalva Aída Hernández Castillo, “Los caminos de la fe: dinámica fronteriza y cambio religioso en Chiapas”, en *Chiapas...*, *op. cit.*, p. 224.
- ¹¹⁵ Jacinto Arias, *op. cit.*, pp. 201 y 210.
- ¹¹⁶ Xóchitl Leyva Solano, “Hacia el Ahlan K'inál”, en *Chiapas...*, *op. cit.*, p. 243.
- ¹¹⁷ Antonio García de León, “La vuelta del Katún (Chiapas: a 20 años del Primer Congreso Indígena)”, en *Perfil de La Jornada*, 12/X/1994.
- ¹¹⁸ Xóchitl Leyva Solano, “De identidades y militancias en la región de conflicto”, en *La Jornada*, 1/II/1994; Enrique Maza, *Proceso*, núm. 901, 7/II/1994.
- ¹¹⁹ *La Jornada*, 28/II/1994; 1, 2 y 23/III/1994; Hermann Bellinghausen, *La Jornada*, 2/VII/1994.
- ¹²⁰ G. de Peña Valencia, “Un tercer actor en el conflicto chiapaneco: las organizaciones autónomas campesinas”, en *La Jornada del Campo*, 22/II/1994.
- ¹²¹ Luis Hernández Navarro, “Chiapas: del Congreso Indígena a la guerra campesina”, en *La Jornada del Campo*, 25/I/1994.
- ¹²² Leyva, X., “De identidades y militancias...”, en *La Jornada*, 1/II/1994.
- ¹²³ Antonio García de León, “Los relámpagos de enero”, en *La Jornada Semanal*, núm. 243, 6/II/1994.
- ¹²⁴ Manuel Parra, Reyna Moguel, Blanca Díaz (coord.), “Economía y geopolítica de la guerra indígena”, en *La Jornada del Campo*, 22/II/1994.
- ¹²⁵ Neil Harvey, “Chiapas: de la concertación a la violencia”, en *La Jornada del Campo*, 25/I/

1994.

- ¹²⁶ Luis Hernández Navarro, "Chiapas: del Congreso Indígena a ...", en *La Jornada del Campo*, 25/I/1994.
- ¹²⁷ Luis Hernández Navarro, "Chiapas: de las atrofas a las reformas", en *La Jornada*, 1/I/1994.
- ¹²⁸ Consejo Nacional de Población, *Índices socioeconómicos e índices de marginación municipal*, 1990, México, 1993.
- ¹²⁹ Subcomandante Marcos, "Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía", en *Perfil de La Jornada*, 27/I/1994.
- ¹³⁰ Julio Moguel, "Chiapas y el Pronasol", en *La Jornada del Campo*, 25/I/1994.
- ¹³¹ Julio Moguel, "El CEOIC: el otro poder en la guerra de Chiapas", en *La Jornada del Campo*, 22/II/1994.
- ¹³² *Idem*.
- ¹³³ T. Alemán y L. Soto, "Bosques y selvas de Chiapas: alternativas para un pasado conflictivo", en *La Jornada del Campo*, 3/V/1994.
- ¹³⁴ Victor M. Toledo, "La vía ecológico-campesina del desarrollo: una alternativa para la selva de Chiapas", en *La Jornada del Campo*, 25/I/1994.
- ¹³⁵ Antonio García de León, "Los relámpagos de enero", en *La Jornada Semanal*, núm. 243, 6/II/94; Gabriel Zaid, "La guerrilla posmoderna", en *Enfoque de Reforma*, núm. 23, 15/V/1994.
- ¹³⁶ A. García de León, "Los relámpagos de enero" y "Chiapas: sólo el pasado es infinito", en *La Jornada*, 12/I/1994.
- ¹³⁷ A. García de León, "Cabalgando al futuro", en *La Jornada*, 10/IV/1994.
- ¹³⁸ Comunicado del 26/II/1994, *La Jornada*, 27/IV/1994.
- ¹³⁹ Comunicado del 10/IV/1994, *La Jornada*, 11/IV/1994.
- ¹⁴⁰ Gabriel Zaid, "Chiapas: la guerrilla posmoderna", *op.cit.*
- ¹⁴¹ Adolfo Aguilar Zinser, "Marcos no existe", en *Reforma*, 5/VIII/1994.
- ¹⁴² Enrique Krauze, "Procurando entender", en "Chiapas: días de prueba", suplemento extraordinario, *Vuelta*, núm. 207, febrero de 1994; "El nudo de Chiapas", en *La Jornada*, 5/I/1994.
- ¹⁴³ Octavio Paz, "El nudo de Chiapas", en *La Jornada*, 5/II/1994; "Chiapas: ¿nudo ciego o tabla de salvación?", en "Chiapas: días de prueba", *op. cit.*; "Chiapas: hechos, dichos y gestos", en *Vuelta*, núm. 288, marzo de 1994.
- ¹⁴⁴ Carlos Fuentes, "Chiapas, donde hasta las piedras gritan", en *La Jornada*, 7/I/1994; declaración a *La Vanguardia* de Madrid, *La Jornada*, 5/II/1994; entrevista en la presentación de *Tres discursos para dos aldeas*, *La Jornada*, 10/II/1994; "México: las dos democracias son una sola", en *La Jornada*, 11/II/1994.
- ¹⁴⁵ Tomás Segovia, "Utopía y protesta", en *La Jornada*, 30/I/1994. Primero de una serie de tres artículos.
- ¹⁴⁶ Julio Moguel, "Ciclo vital del zapatismo", en *La Jornada*, 19/VI/1994.

- ¹⁴⁷ Sergio Zermeño, "Primero Chiapas", en *La Jornada*, 19/IV/1994.
- ¹⁴⁸ Luis Hernández Navarro, "Chiapas: la disputa por la tierra", en *La Jornada*, 24/I/1994.
- ¹⁴⁹ Declaración de Arturo Warman, *La Jornada*, 24/IV/1994.
- ¹⁵⁰ Cassio Luiselli, "Los nudos de la modernización", en *Este País*, marzo de 1994.
- ¹⁵¹ Carta del Comisariado de Bienes Comunales de Laguna Guadalupe, San Andrés Chicahuaxtla, Putla, Oaxaca, al CCRI, *La Jornada*, 7/V/1994.
- ¹⁵² Gilles Lipovetsky, *La era del vacío*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1986, pp. 9, 13 y 15. La 1a. edición francesa es de 1983.
- ¹⁵³ Daniel Cazés, "Aguascalientes: la fe, los rituales", en *La Jornada*, 15/VIII/1994.
- ¹⁵⁴ Lorenzo Meyer, "La transición vista desde la izquierda", en *Reforma*, 11/VIII/1994.
- ¹⁵⁵ Luis Hernández Navarro, "Regreso a Aguascalientes", en *La Jornada*, 18/VIII/1994. También de H. Navarro, "Los caminos de la convención", en *La Jornada*, 11/VIII/1994, y "Aguascalientes: el túnel del tiempo", en *La Jornada*, 11/VIII/1994.
- ¹⁵⁶ Julio Moguel, "El pacto de Aguascalientes", en *La Jornada*, 13/VIII/1994.
- ¹⁵⁷ Sergio Zermeño, "Enseñanzas de la Convención", en *La Jornada*, 14/VIII/1994.
- ¹⁵⁸ Entrevista con Jaime Avilés, *El Financiero*, 29/VII/1994.
- ¹⁵⁹ Mensaje del EZLN (discurso del subcomandante Marcos). Documento de la Convención Nacional Democrática.
- ¹⁶⁰ José Agustín Ortiz Pinchetti, "El poder de los consejeros ciudadanos", en *La Jornada*, 10/VII/1994.
- ¹⁶¹ Miguel Ángel Granados Chapa, "Padrón válido y definitivo", en *Reforma*, 21/VII/1994.
- ¹⁶² Fernando Bazúa, "¿Más mentiras?", en *La Jornada*, 21/VII/1994.
- ¹⁶³ *La Jornada*, 18 y 20/VII/1994.
- ¹⁶⁴ Demetrio Sodi, "Inequidad electoral", en *La Jornada*, 15/VII/1994; Sergio Aguayo Quezada, "Casillas esquizofrénicas", en *La Jornada*, 20/VII/1994; declaración de Enrique Calderón Alzati, *Reforma*, 19/VI/1994.
- ¹⁶⁵ "La Hora de la Democracia II", documento del Grupo San Ángel, *La Jornada*, 20/VII/1994.
- ¹⁶⁶ José A. Ortiz Pinchetti, "La vida después del padrón", en *La Jornada*, 24/VII/1994.
- ¹⁶⁷ Miguel A. Granados Chapa, "Homonimias", en *Reforma*, 9/VIII/1994.
- ¹⁶⁸ *La Jornada*, 22, 25, 26 y 28/VII/1994; Ernesto Zedillo, propuesta política ante el Foro Nacional de Democracia, *Perfil de la Jornada*, 5/VIII/1994.
- ¹⁶⁹ Enrique Calderón Alzati, "Tecnología para la observación ciudadana de Alianza Cívica", en *La Jornada*, 30/VII/1994. *La Jornada*, 7/VIII/1994; *El Financiero*, 13 y 14/VIII/1994; Sergio Aguayo Quezada, "Cuentas ciudadanas", en *La Jornada*, 10/VIII/1994.
- ¹⁷⁰ *El Financiero*, 10/VIII/1994; *La Jornada*, 12/VIII/1994; Miguel Ángel Granados Chapa, "Resultados electorales", en *Reforma*, 11/VIII/1994.
- ¹⁷¹ *Reforma*, 11/VIII/1994.
- ¹⁷² *El Financiero*, 7 y 14 y 15/VIII/1994.
- ¹⁷³ Información sobre Grupo San Ángel en *La Jornada*, 30/VI/1994; *El Financiero* y *La*

Jornada, 15 y 18/VII/1994; *Reforma* y *La Jornada*, 19/VII/1994; Adolfo Aguilar Zinser, "Tres candidatos y un Presidente", en *Reforma*, 22/VII/1994; "La Hora de la Democracia I", en *El Financiero*, 29/VI/1994; "La Hora de la Democracia II", en *La Jornada*, 20/VII/1994; "La Hora de la Democracia III", en *La Jornada*, 8/VIII/1994.

¹⁷⁴ Enrique Krauze, "Réquiem por el PRI-gobierno", en *Reforma*, 6/VIII/1994; Gabriel Zaid, "Si gana el PRI", en *Reforma*, 7/VIII/1994. Véase también "Tiempos difíciles para la nación IV. Los escenarios de la incertidumbre. Carta de Política Mexicana", del Grupo Consultor Interdisciplinario (GCI), 5/VIII/1994.

¹⁷⁵ *La Jornada*, 13/VIII/1994.

Siglas

ACNR	Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
AFL-CIO	American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations
Aladi	Asociación Latinoamericana de Integración
Alalc	Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
Alcano	Alianza Campesina del Noroeste
Alfa	Razón social de un grupo financiero de Monterrey
Anamup	Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular
ANIERM	Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
ARIC	Asociación Rural de Interés Colectivo
Aserca	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Banrural	Banco Nacional de Crédito Rural
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
Bondes	Bonos de Desarrollo de la Tesorería de la Federación
CAM	Consejo Agrarista Mexicano
Canacindra	Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CAP	Congreso Agrario Permanente
CCC	Central Campesina Cardenista
CCE	Consejo Coordinador Empresarial
CCI	Central Campesina Independiente
CCRI	Comité Clandestino Revolucionario Indígena

CCRI-CG	Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General
CEB	Comunidades Eclesiales de Base
CEDEM	Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México
CEE	Comunidad Económica Europea
CEIMSA	Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, S.A.
Cemefi	Centro Mexicano para la Filantropía
CEN	Comité Ejecutivo Nacional
Cencos	Centro Nacional de Comunicación Social
CEOIC	Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas
Cepac	Centros para el Apoyo de la Comunidad
CEPAL	Comisión Económica para la América Latina
Cetes	Certificados de la Tesorería
CEU	Consejo Estudiantil Universitario
CFE	Comisión Federal Electoral
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIDE	Centro de Investigación y Docencia Económica
CIESTAAM	Centro de Investigaciones y Estudios de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
CIO	Congress of Industrial Organizations
CIOAC	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CIPAI	Centro de Investigación, Promoción y Análisis Integral
CNC	Confederación Nacional Campesina
CND	Convención Nacional Democrática
CNIT	Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CNOP	Confederación Nacional de Organizaciones Populares
CNPA	Coordinadora Nacional Plan de Ayala
CNPI	Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas
CNTE	Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
COA	Consejo de Organizaciones Agrarias
COCEI	Coordinadora Obrero Campesino Estudiantil del Istmo
COECE	Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior
Cofipe	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Colmex	Colegio de México
Conacyt	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Conal	Comisión Nacional de Alimentación
Conamup	Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano-Populares
Conanimac	Confederación Nacional de Niños de México, A.C.
Conapo	Consejo Nacional de Población

Conasupo	Compañía Nacional de Subsistencias Populares
Concamín	Confederación Nacional de Cámaras Industriales
Concanaco	Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio
Coparmex	Confederación Patronal de la República Mexicana
Coplades	Comités para la Planeación del Desarrollo
Coplamar	Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
CSN	Coordinadora Sindical Nacional
CTM	Confederación de Trabajadores de México
CYDSA	Celulosa y Derivados, S.A.
DDF	Departamento del Distrito Federal
DEMOS	Fundación de asistencia privada para recabar fondos que se destinarán al apoyo a proyectos independientes de desarrollo comunitario
Diconsa	Distribuidora Conasupo, S.A.
DIF	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Dina	Diesel Nacional, S.A.
FAC	Fundación de Apoyo a la Comunidad
FAM	Foro de Apoyo Mutuo
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (<i>Food and Agriculture Organization</i>)
Faprode	Fondo para la Asistencia, Promoción y Desarrollo
FDN	Frente Democrático Nacional
Ficorca	Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios
Fideurbe	Fideicomiso para el Desarrollo Urbano y la Ecología
Fidevisu	Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social Urbano
FIRA	Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
FMI	Fondo Monetario Internacional
Fonafe	Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Fonhapo	Fondo Nacional para la Habitación y Vivienda Popular
Fovissste	Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>)
GEA	Grupo de Economistas Asociados
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IEPES	Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI
IFE	Instituto Federal Electoral
IMAN	Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez
IMSS	Instituto Mexicano del Seguro Social

Indeco	Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Infonavit	Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
INI	Instituto Nacional Indigenista
INOP	Instituto Nacional de Opinión Pública
INPI	Instituto Nacional de Protección a la Infancia
IPADE	Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
IPE	Instituto de Propositiones Estratégicas
ISSSTE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
ITAM	Instituto Tecnológico Autónomo de México
IVA	Impuesto al Valor Agregado
LCA	Liga de Comunidades Agrarias
MAP	Movimiento de Acción Popular
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MLN	Movimiento de Liberación Nacional
MORI	Market and Opinion Research International
MRP	Movimiento Revolucionario del Pueblo
Nafinsa	Nacional Financiera, S. A.
NAFTA	North America Free Trade Agreement
NIC	Newly Industrialized Country
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OIR-LM	Organización Independiente Revolucionaria-Línea de Masas
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC	Organización Mundial de Comercio
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organizaciones No Gubernamentales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
PAN	Partido Acción Nacional
PARM	Partido Auténtico de la Revolución Mexicana
PC	Partido Comunista
PCM	Partido Comunista Mexicano
PDM	Partido Demócrata Mexicano
PECE	Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo
Pemex	Petróleos Mexicanos
PFCRN	Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
PGR	Procuraduría General de la República
PIB	Producto Interno Bruto

Pider	Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural
PIRE	Programa Inmediato para la Recuperación Económica
PMOCC	Programa Maestro de Organización y Capacitación Campesina
PMS	Partido Mexicano Socialista
PMT	Partido Mexicano de los Trabajadores
PNR	Partido Nacional Revolucionario
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PP	Partido de los Pobres
PPR	Partido Patriótico Revolucionario
PPS	Partido Popular Socialista
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PREP	Programa de Resultados Electorales Preliminares
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Procampo	Programa de Apoyos Directos al Campo
Procede	Programa de Certificación de Derechos
PROCUP	Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unificado de los Pobres
Pronasol	Programa Nacional de Solidaridad
PRS	Partido de la Revolución Socialista
PRT	Partido Revolucionario de los Trabajadores
PSM	Partido Socialista Mexicano
PST	Partido Socialista de los Trabajadores
PSUM	Partido Socialista Unificado de México
PT	Partido del Trabajo
SAM	Sistema Alimentario Mexicano
SARH	Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Sedesol	Secretaría de Desarrollo Social
SELA	Sistema Económico Latinoamericano
SEP	Secretaría de Educación Pública
Sepanal	Secretaría de Patrimonio Nacional
SIDA	Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida
SNTE	Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SPP	Secretaría de Programación y Presupuesto
SUTIN	Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear
Telmex	Teléfonos de México
TLC	Tratado de Libre Comercio
UAM	Universidad Autónoma Metropolitana
UCD	Unión Campesina Democrática
UGOCM	Unión General de Obreros y Campesinos de México
UGOCP	Unión General Obrero Campesino y Popular
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México

Unan	Unión Agrícola Nacional
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>)
UNE	Sección Ciudadanos en Movimiento del PRI
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>)
UNICEF	Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Ayuda a la Infancia (<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>)
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
UNTA	Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Vitro	Razón social de la empresa regiomontana fabricante de productos de vidrio Vitro, S.A.
WASP	White Anglo-Saxon Protestant

Bibliografía

- AGUILAR CAMÍN, Héctor. *Saldos de la revolución*. México: Nueva Imagen, 1982.
- _____. *Después del milagro*. México: Cal y Arena, 1988.
- _____ y MEYER, Lorenzo. *A la sombra de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1989.
- ALCÁNTARA, Sergio. *Industrias colectivas del pueblo: un estudio de caso sobre industrialización rural en el sur de Jalisco*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, 1979.
- ALDUNCIN, Enrique. *Los valores de los mexicanos*. Vol. I: *México entre la tradición y la modernidad*. México: Fomento Cultural Banamex, 1986.
- _____. *Los valores de los mexicanos*. Vol. II: *México en tiempos del cambio*. México: Fomento Cultural Banamex, 1991.
- ALONSO, Jorge; AZIZ NASSIF, Alberto, y TAMAYO, Jaime. *El nuevo Estado mexicano*. México: Nueva Imagen, 4 vols., 1992.
- ÁLVAREZ GARÍN, Raúl; GUEVARA NIEBLA, Gilberto; BELLINGHAUSEN, Hermann; HIRIART, Hugo. *Pensar el 68*. México: Cal y Arena, 1988.
- ARMENDÁRIZ, María Luisa (comp.). *Chiapas, una radiografía*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- ASPE, Pedro. *El camino mexicano hacia la transformación económica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- ATTALI, Jacques. *Milenio*. México: Seix Barral, 1993.
- AZIZ NASSIF, Alberto y PESCHARD, Jacqueline. *Las elecciones federales en 1991*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

- AZUELA, Salvador. *La aventura vasconcelista*. México: Diana, 1990.
- BARTRA, Armando. *Desigualdad y democracia*. México: El Nacional, 1992.
- BASÁÑEZ, Miguel. *El pulso de los sexenios. 20 años de crisis en México*. México: Siglo XXI Editores, 1990.
- BAZDRESCH, Carlos; BUCAY, Nisso; LOAEZA, Soledad y LUSTIG, Nora (coords.). *México: auge, crisis y ajuste*. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- BÉJAR NAVARRO, Raúl y HERNÁNDEZ BRINGAS, Héctor (coords.). *Población y desigualdad social*. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.
- BENÍTEZ, Fernando. *Ki, el drama de un pueblo y de una planta*. México: Fondo de Cultura Económica, 1962 (1a. ed., 1956).
- BLANCO, José Joaquín. *Se llamaba Vasconcelos*. México: Fondo de Cultura Económica, 1977.
- BOLTVINIK, Julio (coord.). *Necesidades esenciales en México: alimentación, educación, vivienda, salud, geografía de la marginación*. México: Siglo XXI Editores/Coplamar, 5 vols., 1992.
- BRADING, David A. *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*. México: Fondo de Cultura Económica, 1975.
- _____. (coord.). *Caudillos y campesinos en la revolución mexicana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1985 (1a. ed., en inglés, 1980).
- CALVA, José Luis. *La disputa por la tierra, La reforma del Artículo 27 y la nueva Ley Agraria*. México: Fontamara, 1993.
- CÁRDENAS, Lázaro. *¡Cárdenas habla!* México: Partido Nacional Revolucionario, 1940.
- _____. *Obras I. Apuntes*, vol. 1, 1913/1940; *Apuntes*, vol. 2, 1941/1956; *Apuntes*, vol. 3, 1957/1966. México: Nueva Biblioteca Mexicana, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972.
- _____. *Palabras y documentos públicos*, vol. 1, 1928/1940. México: Siglo XXI Editores, 1978.
- CASTAÑEDA, Jorge G. *México: el futuro en juego*. México: Joaquín Mortiz/Planeta, 1987.
- _____. *La casa por la ventana*. México: Cal y Arena, 1993.
- _____. *La utopía desarmada*. México: Joaquín Mortiz/Planeta, 1993.
- _____. y PASTOR, Robert A. *Límites de la amistad. México y Estados Unidos*. México: Joaquín Mortiz/Planeta, 1989.
- CHRISTLIEB, Adolfo. *Temas políticos*. México: Acción Nacional, 1963.
- CONCHELLO, José Ángel. *El TLC: un callejón sin salida*. México: Grijalbo, 1992.
- Consejo Consultivo de Solidaridad. *El programa nacional de solidaridad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- COOMBS, Philip y MANZUR, Ahmed. *Attacking Rural Poverty. How Non-Formal Education Can Help*. Baltimore and London: John Hopkins University Press, 1974.

- CORDERA, Rolando (coord.). *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- _____, TREJO DELARBRE, Raúl y VEGA, Juan Enrique (coords.). *México: el reclamo democrático. Homenaje a Carlos Pereyra*. México: Siglo XXI Editores, 1988.
- _____ y TELLO, Carlos. *La disputa por la nación*. México: Siglo XXI Editores, 1981.
- _____ y TELLO, Carlos (coords.). *La desigualdad en México*. México: Siglo XXI Editores, 1989 (1a. ed. 1984).
- CÓRDOVA, Arnaldo. *La política de masas del cardenismo*. México: Ediciones Era, 1974.
- CORNIA, G. A., JOLLY, Richard, y STEWART, Frances. *Ajuste con rostro humano. Protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*. Madrid: Siglo XXI Editores para UNICEF, 1987.
- COSÍO VILLEGAS, Daniel. *Ensayos y notas*. México: Editorial Hermes, 1966.
- _____ (coord.). *Historia moderna de México*. México: Ed. Hermes, 11 vols. (vols. 1-3: *La república restaurada*; vols. 4-11: *El porfiriato*), 1970 (1a. ed., a partir de 1955).
- CUMBERLAND, Charles C. *Mexico: The Struggle for Modernity*. Oxford University Press, 1968.
- DANIELS, Josephus. *Shirt-sleeve Diplomat*. New York: Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1947.
- DRESSER, Denisse. *Neo-populist Solutions to Neo-liberal Problems. Mexico's National Solidarity Program*. San Diego, California: Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, 1991.
- DRUCKER, Peter. *Post-capitalist Society*. New York: Harper Collins, 1993.
- ESTEP, Raymond. *Lorenzo de Zavala, profeta del liberalismo mexicano*. México: Librería de Manuel Porrúa, 1952.
- FLORESCANO, Enrique (comp.). *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina (1580-1975)*. México: Fondo de Cultura Económica, 1979.
- _____. *El nuevo pasado mexicano*. México: Cal y Arena, 1991.
- FRANKEL, Boris. *Los utópicos postindustriales*. Valencia: IVEI, Ediciones Alfons el Magnánim, 1989 (1a ed., en inglés, 1987).
- FUENTES, Carlos. *La región más transparente*. México: Fondo de Cultura Económica, 1958.
- _____. *Tiempo mexicano*. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1971.
- GANDHI, Mohandas Karamchand. *Swadeshi, artesanía no violenta*. Quito: Instituto Andino de Artes Populares Andrés Bello, 1983.
- _____. *Mi socialismo*. Buenos Aires: La Pléyade, 1984.
- GARCÍA. DE LEÓN, Antonio. *Resistencia y utopía*. México: Ediciones Era, 2 vols., 1985.
- GILLY, Adolfo. *El cardenismo, una utopía mexicana*. México: Cal y Arena, 1994.
- GÓMEZ MORÍN, Manuel. *1915 y otros ensayos*. México: Jus, 1973 (1a. ed., México: Cultura, 1927).

- GONZÁLEZ, Luis (coord.). *Historia de la Revolución Mexicana*, 23 vols. México: El Colegio de México, 1977-1984.
- _____. *Los artífices del cardenismo*, vol. 14 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*
- _____. *Los días del presidente Cárdenas*, vol. 15 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. *La democracia en México*. México: Ediciones Era, 1965.
- _____. (coord.). *Segundo informe sobre la democracia: México el 6 de julio de 1988*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México y Siglo XXI Editores, 1990.
- _____. y AGUILAR CAMÍN, Héctor (coords.). *México ante la crisis*. México: Siglo XXI Editores, 2 vols., 1985.
- _____. y FLORESCANO, Enrique (coords.). *México, hoy*. México: Siglo XXI Editores, 1979.
- GONZÁLEZ COSÍO, Arturo. *México: cuatro ensayos de sociología política*. México: Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972.
- _____. *Clases medias y movilidad social en México*. México: Extemporáneos, 1976.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés. *La pobreza en México*. México: El Colegio de México, 1985.
- GONZÁLEZ PEDRERO, Enrique. *Riqueza de la pobreza*. México: Cal y Arena, 1990 (1a. ed., Joaquín Mortiz, 1979).
- _____. *País de un solo hombre: el México de Santa Anna*. Vol. I: *La ronda de los contrarios*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- GORDILLO, Gustavo. *Campesinos al asalto del cielo. De la expropiación estatal a la expropiación campesina*. México: Siglo XXI Editores, 1988.
- GUERRA, François Xavier. *México: del Antiguo Régimen a la Revolución*. México: Fondo de Cultura Económica, 2 vols., 1988 (1a. ed., en francés, 1985).
- GUEVARA NIEBLA, Gilberto. *La democracia en la calle. Crónica del movimiento estudiantil mexicano*. México: Siglo XXI Editores, 1988.
- GURRÍA, José Ángel. *La política de la deuda externa*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- HANSEN, Roger D. *La política del desarrollo mexicano*. México: Siglo XXI Editores, 1971.
- HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia. *La mecánica cardenista*, vol. 16 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*
- HERNÁNDEZ LAOS, Enrique. *Crecimiento económico y pobreza en México*. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

- HEWITT DE ALCÁNTARA, Cynthia. *Ensayo sobre la satisfacción de necesidades básicas del pueblo mexicano*. México: El Colegio de México, Cuadernos del Centro de Estudios Sociológicos núm. 21, 1977.
- HUMBOLDT, Alejandro de. *Ensayo político sobre el reino de la Nueva España*. México: Porrúa, 1966.
- IANNI, Octavio. *El Estado capitalista en la época de Cárdenas*. México: Ediciones Era, 1977.
- KATZ, Friedrich. *La servidumbre agraria en México en la época porfiriana*. México: Ediciones Era, 1980 (1a. ed., 1976).
- KING, Alexander y SCHNEIDER, Bertrand. *La primera revolución mundial. Informe del Consejo al Club de Roma*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
- KNIGHT, Alan. *The Mexican Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press, 2 vols., 1986.
- La gira del general Lázaro Cárdenas*. México: Partido Nacional Revolucionario, 1934 (La ed. original fue reimpressa en México: PRI, 1986).
- LEMOINE, Ernesto. *Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonio de la época*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1965.
- LEMPÉRIÈRE, Annick. *Intellectuels, État et société au Mexique, XXème Siècle*. Paris: L'Harmattan, 1992.
- LEÓN PORTILLA, Miguel. *Toltecáyotl. Aspectos de la cultura náhuatl*. México: Fondo de Cultura Económica, 1980.
- LIPOVETSKY, Gilles. *La era del vacto*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1986 (1a. ed., en francés, 1983).
- LÓPEZ MORENO, Javier. *Reformas constitucionales para la modernización*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- MAGAÑA, Gildardo. *Emiliano Zapata y el agrarismo en México*. México: Editorial Ruta, 2 vols., 1951.
- MARTÍNEZ ASSAD, Carlos (coord.). *La sucesión presidencial en México (1928-1988)*. México: Nueva Imagen, 1992.
- MC ROBIE, George. *Small Is Possible*. New York: Harper and Row, 1981.
- MEADOWS, Donella H., DENNIS, L. y RONDERS, Jorgen. *Más allá de los límites del crecimiento*. Madrid: El País/Aguilar, 1992 (1a. ed., en inglés, 1991).
- MEDIN, Tzvi. *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*. México: Siglo XXI Editores, 1972.
- MEDINA, Luis. *Del cardenismo al avilacamachismo*, vol. 18 de *Historia de la Revolución Mexicana, op. cit.*
- MENDES, Cândido (coord.). *Le mythe du développement*. Paris: Seuil, 1977.
- MERINO HUERTA, Mauricio. *Fuera del centro*. México: Universidad Veracruzana, 1992.
- MEYER, Jean. *La revolución mejicana 1910-1940*. Barcelona, Dopesa, 1973 (1a. ed., en francés, Paris: Calmann Lévy, 1973).

- _____. *La Christiade*. Paris: Payot, 1975 (1a. ed., en español, México: Siglo XXI Editores, 3 vols., 1973).
- _____. *Problemas campesinos y revueltas agrarias (1821-1910)*. México: SEP-Setentas, 1973.
- _____. *Estado y sociedad en Calles*, vol. 11 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*
- MEYER, Lorenzo. *La segunda muerte de la Revolución Mexicana*. México: Cal y Arena, 1992.
- MOLINAR HORCASITAS, Juan. *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*. México: Cal y Arena, 1991.
- MONSIVÁIS, Carlos. *Días de guardar*. México: Ediciones Era, 1970.
- _____. *Entrada libre, crónicas de la sociedad que se organiza*. México: Ediciones Era, 1987.
- MORA, José María Luis. *México y sus revoluciones*. México: Fondo de Cultura Económica, vol. 1, 1986 (1a. ed., Paris: Librería de la Rosa, 1836).
- MORRIS, David y HESS, Karl. *Neighborhood Power*. Beacon Press, 1975.
- NÚÑEZ JIMÉNEZ, Arturo. *La reforma electoral de 1989-1990*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- O'GORMAN, Edmundo. *México: el trauma de su historia*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1977.
- OROZCO, Wistano Luis. *Los ejidos de los pueblos*. México: Ediciones El Caballito, 1975 (1a. ed., Guadalajara: 1914).
- OSORIO MARBÁN, Miguel. *El partido de la revolución mexicana*. México: CISA, 2 vols., 1970.
- PARRA, Manuel Germán. *La industrialización de México*. México: Imprenta Universitaria, 1954.
- PASTOR, Robert A. *Whirlpool. U.S. Foreign Policy Toward Latin American and the Caribbean*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. México: Cuadernos Americanos, 1a. ed., 1950 (Se consultó también la edición del Fondo de Cultura Económica, 1959).
- _____. *Posdata*. México: Siglo XXI Editores, 1970.
- _____. *El ogro filantrópico*. México: Joaquín Mortiz, 1979.
- _____. *La otra voz*. Barcelona: Seix Barral, 1990 (Se consultó *La otra voz*, lección inaugural de los cursos de verano de 1990. Madrid: Universidad Complutense, 1990).
- PAZ SOLÓRZANO, Octavio. *Historia de la Revolución Mexicana* (edición de José Meléndez). México: Talleres Gráficos de la Nación, 1936.
- PELLICER DE BRODY, Olga y REYNA, José Luis. *El afianzamiento de la estabilidad política*, vol. 22 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*
- _____. y MANCILLA, Esteban L. *El entendimiento con los Estados Unidos y la gestión del desarrollo estabilizador*, vol. 23 de *Historia de la Revolución Mexicana*, *op. cit.*

- PEREYRA, Carlos. *Sobre la democracia*. México: Cal y Arena, 1990.
- PONIATOWSKA, Elena. *Fuerte es el silencio*. México: Ediciones Era, 1980.
- _____. *La noche de Tlatelolco*. México: Ediciones Era, 1991 (1a. ed., 1971).
- _____. *Primera Cumbre Iberoamericana*. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
- RAMÍREZ, Ignacio. *Obras*, tomo II. México: Tipografía de la Secretaría de Fomento, Calle de San Andrés núm. 15, 1889.
- RAMÍREZ, Juan Manuel. *El movimiento urbano popular en México*. México: Siglo XXI Editores, 1986.
- REBOLLEDO, Juan. *La reforma del Estado*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- REED, John. *México Insurgente*. Barcelona: Ariel, 1969.
- REED, Nelson. *La guerra de castas de Yucatán*. México: Ediciones Era, 1964.
- REICH, Robert B. *The Work of Nations*. New York: Vintage Books, 1992.
- RESTREPO, Iván y ECKSTEIN, Salomón. *La agricultura colectiva en México: la experiencia de La Laguna*. México: Siglo XXI Editores, 1975.
- REYES HERÓLES, Jesús. *Discursos políticos*. "Avancemos con la sonda en la mano". México: Comisión Nacional Editorial del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 1975.
- _____. *Reforma Política*, vol. 1. México: 1977.
- ROGOZINSKI, Jacques. *La privatización de empresas paraestatales*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- ROSS, Stanley. *¿Ha muerto la revolución mexicana? Balance y epílogo*. México: SEP-Setentas, 2 vols., 1972.
- RUBIO, Luis. *¿Cómo va a afectar a México el Tratado de Libre Comercio?* México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- RULFO, Juan. *El llano en llamas*. México: Fondo de Cultura Económica, 1953.
- SCHUMACHER, E. F. *Lo pequeño es hermoso*. Madrid: Hermann Blumme Ed., 1978 (1a. ed., en inglés, London: Blond and Briggs, 1973).
- _____. *The Age of Plenty. A Christian View*. Edinburg: The Saint Andrew Press, 1979.
- _____. *Good Work*. London: Abacus, 1980.
- SOTELO INCLÁN, Jesús. *Raíz y razón de Zapata*. México: Comisión Federal de Electricidad, 1970 (1a. ed., 1943-44).
- SOUSTELLE, Jacques. *La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
- STOKES, Bruce. *Helping Ourselves: Local Solutions to Global Problems*. New York-London: World Watch, W. W. Norton & Co., 1981.
- STRAHM, Rudolph y OSWALD, Úrsula. *Por esto somos tan pobres*. Cuernavaca: Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
- TANNENBAUM, Frank. *El futuro de la democracia en América Latina*. México: Diana, 1978.

- _____. *La revolución agraria mexicana*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. IV, núm. 2, abril-junio de 1952 (1a. ed., en inglés, New York, 1929).
- _____. *México, la lucha por la paz y por el pan*. México: *Problemas Agrícolas e Industriales de México*, vol. III, núm. 4, octubre-diciembre de 1951.
- TÉLLEZ KUENZLER, Luis. *La modernización del sector agropecuario y forestal*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- TELLO, Carlos. *La política económica de México, 1970-1976*. México: Siglo XXI Editores, 1979.
- The Challenge to the South. The Report of the South Commission*. New York: Oxford University Press, 1990.
- TORRES, Blanca. *México en la Segunda Guerra Mundial*, vol. 19 de *Historia de la Revolución Mexicana*, op. cit.
- _____. *Hacia la utopía industrial*, vol. 21 de *Historia de la Revolución Mexicana*, op. cit.
- TOWNSEND, William. *Lázaro Cárdenas, un demócrata mexicano*. México: Biografías Ganesa, 1959.
- TREJO, Guillermo y JONES, Claudio (coords.). *Contra la pobreza. Por una estrategia de política social*. México: Cal y Arena, 1993.
- TREJO REYES, Saúl. *El futuro de la política industrial en México*. México: El Colegio de México, 1987.
- VAITSOS, C. V. *The Role of Transnational Enterprises in Latin American Economic Integration Efforts: Who Integrates and With Whom, How and for Whose Benefit?* UNCTAD/SD/ECDE/19. New York: United Nations, 1982.
- VALERO SILVA, José. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*. México: Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2 vols., 1967.
- VARIOS AUTORES. *La experiencia de la libertad*. México: Vuelta, 7 vols., 1991.
- _____. *Los grandes cambios de nuestro tiempo* (Coloquio de invierno). México: Universidad Nacional Autónoma de México/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica, 3 vols., 1992.
- _____. *El perfil de México en 1980*. México: Siglo XXI, 3 vols., 1972.
- _____. *México mañana*. México: Océano/Nexos, 1986.
- _____. *México: 75 años de Revolución. Desarrollo económico*, 2 vols.; *Desarrollo social*, 2 vols. México: Fondo de Cultura Económica, 1988.
- _____. *La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá*. México: Siglo XXI Editores, 1990.
- _____. *La transición interrumpida. México 1968-1988*. México: Universidad Iberoamericana/Nueva Imagen, 1993.
- _____. *Transnational Corporations in World Development, Third Survey*. New York: United Nations, 1983.

- VEGA CÁNOVAS, Gustavo (coord.). *México ante el libre comercio con América del Norte*. México: El Colegio de México/Universidad Tecnológica de México, 1991.
- VÉLEZ, Félix (comp.). *La pobreza en México: causas y políticas para combatirla*. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México/Fondo de Cultura Económica, 1994.
- VERNON, Raymond. *El dilema del desarrollo económico de México*. México: Diana, 1966.
- WARD, Barbara. *Progress For a Small Planet*. London: W. W. Norton & Co., 1979.
- WARMAN, Arturo. ...*Y venimos a contradecir*. México: Secretaría de Educación Pública/CIESAS, 1976.
- _____. *Ensayos sobre el campesinado en México*. México: Nueva Imagen, 1980.
- _____. *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Editorial Nuestro Tiempo, 1983 (1a. ed., 1972).
- WOMACK, John. *Zapata y la Revolución Mexicana*. México: Siglo XXI Editores, 1969.
- ZAID, Gabriel. *El progreso improductivo*. México: Siglo XXI Editores, 1979.
- _____. *La economía presidencial*. México: Vuelta, 1987; *Contenido*, 1992.
- _____. *La nueva economía presidencial*. México: Grijalbo, 1994.
- ZAVALA, Lorenzo de. *Ensayo crítico de las revoluciones en México desde 1808 hasta 1830*. México: Porrúa, 1969.
- ZERMEÑO, Sergio. *Una democracia utópica. El movimiento estudiantil del 68*. México: Siglo XXI Editores, 1978.

Hemerografía

Periódicos

El Financiero
La Jornada
Reforma
Uno más uno

Revistas

Cambio 16
El Cotidiano
El Espectador
Época
Este País
Estudios Económicos
Investigación Económica
La Gaceta de Solidaridad
Nexos
Personas, un servicio a la comunidad
Política Exterior
Proceso

Problemas Agrícolas e Industriales de México

Revista Mexicana de Sociología

Time

Vuelta

Discursos, documentos, folletos, informes y tesis

Arquidiócesis de México. *Las CEB al servicio del reino*. México: Arquidiócesis de México, 1988.

CENTENO, Miguel Ángel. *The New "Científicos": Technocratic Politics in Mexico 1970-1990*. Tesis de doctorado de la Universidad de Yale, mayo de 1990. (Mimeografiado). Una nueva versión de este trabajo fue editada posteriormente, con el título *Democracy Within Reason, Technocratic Revolution in Mexico*. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994. Aparecerá próximamente en México, traducido por Editorial Océano.

Combate a la pobreza. Documento programático del Programa Nacional de Solidaridad. México: *El Nacional*, 1990.

Combate a la pobreza. Vertiente alimentaria. Consejo Consultivo de Pronasol/API Consultores, 1993. Versión ejecutiva. Mimeo.

Comisión Económica para la América Latina (CEPAL). *Estudio económico de América Latina y el Caribe 1988*. Santiago de Chile: CEPAL, 1989.

_____. *Estudio económico de América Latina y el Caribe 1989*. Santiago de Chile: CEPAL, 1990.

Coplamar. *Bases para la acción. 1977-1982*. México: Coplamar, 1977. Mimeo.

Cuadernos de divulgación y análisis, núm. 1. "Integrando Fe y Obras".

Cuadernos de divulgación y análisis, núm. 2. "Una experiencia de SWAP en México".

"Decreto de reformas al Artículo 27 Constitucional". *Diario Oficial*, México: 1992.

- ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, Luis. "Discurso de toma de posesión", 1º de diciembre de 1970. México: Partido Revolucionario Institucional, Comisión Nacional Editorial, 1970.
- Foro de Apoyo Mutuo (ONG). *Definición y operación de fondos sociales del Foro de Apoyo Mutuo*. 1a. versión. México: Mimeo.
- _____. *Un punto de vista sobre el México de hoy*. Presentado en París el 19 de mayo de 1993. Mimeo.
- Fundación para la Protección de la Niñez. *Folleto descriptivo*. México: 1991. Mimeo.
- GONZÁLEZ, Luis (recopilador). *Los presidentes de México ante la nación, 1821-1966*. México: Cámara de Diputados, vol. 4, 1966.
- Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán". *Encuesta Nacional de Alimentación en el medio rural*. México: Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán", 1990.
- LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO, José. *Discursos, ensayos y conferencias*. México: Dirección General de Documentación y Análisis, Secretaría de Programación y Presupuesto, 1979.
- MADRID HURTADO, Miguel de la. *Plan Básico de Gobierno y Plataforma electoral*. México: Partido Revolucionario Institucional, 1982.
- _____. *Mensaje a la Nación*. México: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 1982.
- _____. *Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988*. México: Presidencia de la República, 1983.
- MENDOZA, Ramón. *Las comunidades: una historia de casi 2000 años*. México: Impretei, 1992.
- MOLINAR, Juan y WELDON, Jeffrey. *Electoral Determinants and Consequences of National Solidarity*. San Diego: University of California, mimeo.
- NAVA ÁNGELES, Susana. *El Espectador: un proyecto de disidencia intelectual*. México: Escuela Nacional de Ciencias Políticas, UNAM, agosto de 1993. Tesis de licenciatura.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). *Informe sobre desarrollo humano 1991*. Bogotá: PNUD, Tercer Mundo Editores, 1991.
- _____. *Informe sobre desarrollo humano 1992*. Bogotá: PNUD, Tercer Mundo Editores, 1992.
- REYNA, José Luis, GARCÍA ROCHA, A. y MERINO, Mauricio (redacción). *Solidaridad en Zacatecas: impacto y problemas de una política pública*. México: El Colegio de México, 1993, mimeo.
- ROLDÁN AMARO, José Antonio. *Nutrición, desarrollo social e historia*. México: Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán", 1992. Mimeo.
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José. *CEB, Semilla y fruto de nueva evangelización*. México: Estudios Euménicos, 1991.

- Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). *La Solidaridad en el Desarrollo Nacional*. México: Sedesol, 1993.
- Trickle Up Program Newsletter*. New York: Vol. 9, N° 1, June, 1989.
- UNICEF. *Estado Mundial de la Infancia*. Barcelona: UNICEF, 1991.

Índice analítico y onomástico

A

- Abad y Queipo, Manuel: 97
Abedrop, Carlos: 612
Acapulco: 446, 530
acasillados: 122
Acción Comunitaria: 225
Acosta, Mariclaire: 374, 416, 461
Acuerdo Multifibras: 379
Acuerdo Nacional para la Paz, la Democracia y la Justicia: 555
Acuerdo por la Civilidad, la Concordia y la Justicia: 607
administración pública: 276, 570
AFL-CIO: 366, 374, 416
África: 28, 40, 46, 48, 49, 50, 56, 59, 63, 65, 69, 70, 71, 346, 440
agricultura: 48, 51, 59, 64, 101, 272
 asociaciones: 420
 autosuficiente: 299
 campesina: 393, 403
 campesina autogestionaria: 303
 capitalista especulativa: 234
 comercial: 45, 156, 185, 195, 307, 317, 381
 comercial de exportación: 121
 cultivos básicos: 130
 cultivos de exportación: 197
 cultivos de plantación: 12, 163
 de escala: 233, 307, 403, 404
 de subsistencia: 12, 185, 275
 ejidal: 180
 frontera agrícola: 579, 584, 592
 industrial: 17, 40, 47
 mexicana: 422
 norteamericana: 306
 orgánica: 59
 plantación exportadora: 44
 precios agrícolas: 122
 precios de garantía: 303, 393, 423
 privada: 180
 producción agrícola e industrial: 52, 476
 producción de autoconsumo: 59
 productos primarios: 112
 tradicional: 49, 229, 401
agua potable: 62, 63, 64, 65, 66, 87, 135, 159, 168, 260, 317, 464
Aguascalientes: 140, 419, 537, 547, 550
Aguayo Quezada, Sergio: 501, 564, 565, 566, 575, 607, 609
Aguilar Camín, Héctor: 119, 165, 285, 298, 325, 337, 338, 341, 370, 371, 372, 514, 521, 522, 524, 557, 562, 563, 565

- Aguilar Zinser, Adolfo: 294, 369, 371, 374, 416, 418, 461, 565, 575, 597
- Agustina (miembro del EZLN): 106
- ahorro interno: 56, 73, 365, 406, 407, 414
- Alamán, Lucas: 100, 104, 109, 286
- Alcano: 400
- Alcocer, Jorge: 358, 502, 503, 510
- Alcozauca: 509
- Alduncín, Enrique: 280, 281, 378, 497
- Alemán, Miguel: 165, 178, 184, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 210, 245
- Alemania: 56, 78, 349, 385, 412
- alemanismo: 194, 300
- alfabetización: 64, 186, 580
- Alianza Cívica: 19, 537, 565, 568, 570, 606, 609, 610
- Alianza Democrática Nacional: 556
- Alianza Obrero Campesina: 504
- Alianza para el Progreso: 205, 300, 362, 375
- Alianza para la Producción: 182, 249, 253
- alianza
- PAN-PRD: 494
 - PAN-PRI: 494
 - para la modernización: 186
 - popular: 236
- alimentación: 35, 257, 272, 275, 318, 345, 346, 463, 464, 529
- básica: 269, 440
- alimentos procesados: 40
- Almada-Calles: 241
- Almazán, Juan Andrew: 313
- Altamirano, Ignacio Manuel: 530, 579, 583
- Altos Hornos de México: 181
- Álvarez, Juan: 102, 104, 239
- Álvarez, Luis H.: 374, 498, 506
- Álvarez Gándara, Miguel: 9
- Álvarez Garín, Raúl: 214
- Allende, Salvador: 237
- Amanecer del Barrio: 453
- América: 71, 80, 94
- hispanica: 113
 - Iniciativa para las Américas: 74, 349, 362
 - nuevo bloque continental: 75
 - sudoeste norteamericano: 122
 - véase* Estados Unidos
- América Central o Centroamérica: 64, 74, 292, 293, 338, 368, 599
- América del Norte: 29, 76, 78, 139, 366, 401, 558
- véase* Estados Unidos
- América del Sur (Cono Sur): 352
- América Latina: *véase* Latinoamérica
- amnistía: 530, 531
- Amozoc: 102
- amparo agrario: 183, 184, 191
- Anáhuac: 92
- analfabetismo: 65, 159, 167
- analfabetos: 63, 139, 439
- Anamup: 447, 448
- Anenecuilco, Mor.: 111, 128, 131, 132, 133, 134, 555
- Angola: 63
- Anguiano, Arturo: 146
- ANIERM: 541
- apartheid*: 63
- apertura
- comercial: 343, 355, 362, 409, 420, 544, 550
 - democrática: 222
 - política: 373
- API Consultores: 439, 469, 479, 480
- Arabia Saudita: 64, 364
- Arango, Manuel: 442
- Arca de la Alianza: 603
- Arca de Noé: 605
- Arcelia, Gro.: 509
- Archivo General de la Nación: 131
- Argentina: 54, 63, 64, 65, 74, 125, 208, 352, 358, 553
- Arias, Jacinto: 579, 580
- ARIC: 583, 584, 600
- ARIC-Unión de Uniones: 585, 603
- Arizcorreta, Mariano: 103
- Arizpe, Lourdes: 311, 312
- Armas, Miguel: 9
- Arquidiócesis de México: 455, 456
- arrendatarios: 122
- Arriaga, Ponciano: 108
- Asamblea Constituyente: 538
- Asamblea de Barrios: 447, 448, 471, 509
- Asamblea de Representantes: 320, 516
- Aserca: 392
- Asesoría Económica Especializada: 417
- Asia: 40, 48, 49, 55, 63, 69, de 76, 78, 94, 364, 379
- Asman, David: 560
- Asociación Cívica Nacional Revolucionaria: 239, 509, 511
- Asociación de Banqueros de México: 228
- Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi): 74
- Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc): 74
- Asociación Mexicana de Bancos: 608
- Asociación Mexicana de Seguros: 228

Asociación Mundial para la Investigación de la
Opinión Pública: 611
Aspe, Pedro: 205, 243, 406, 412, 413, 417, 419, 429
Ateneo de la Juventud: 139
Atoyac: 239
Attali, Jacques: 27
Austin, Texas: 215
Australia: 125
autogestión: 160, 303, 456, 585, 588
ejidal: 305
autonomía: 14
municipal: 139, 263
sindical: 190, 197
autoritarismo: 211, 222, 492, 507, 543, 559, 562
autosubsistencia: 307
autosuficiencia: 43, 53, 61, 70, 186, 192, 259, 260,
269, 274, 275, 345, 400, 481, 483, 593
alimentaria: 272, 445, 459, 470
Ávila Camacho, Manuel: 179, 180, 184, 198, 212
Ávila Camacho, Maximino: 212
Ávila Curiel: 444
ayuntamientos: 104, 131, 151
españoles: 128, 263
Azcárate: 98
Aziz Nassif, Alberto: 323, 494, 496, 500, 560
Azkenazy: 160
Aznavurian, Avedis: 377

B

Bahro, Rudolf: 27
Baja California: 309, 316, 322, 499, 509, 534, 550,
566
Baja California Sur: 309, 550
Bajío: 98
Baker, James: 301
balanza
comercial: 293, 367, 406, 409, 413, 415
de pagos: 60, 227, 258, 359
Balzac, Honorato de: 326
Banco Central: 573
Banco de Avío: 102
Banco de Crédito Agrícola: 138
Banco de México: 39, 70, 255, 297, 316, 359, 360,
362, 438, 525, 542, 547
Banco del Sur: 69
Banco Ejidal: 160, 198
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo: 355
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 73

Banco Mexicano de Comercio Exterior: 429
Banco Mundial: 49, 69, 230, 251, 267, 349, 417, 459,
478, 547
Banco Nacional de Crédito Ejidal: 154, 157
Banco Nacional de Crédito Rural: 305, 402, 419
Banco Norteamericano de Desarrollo: 384
Bangladesh: 44, 63, 65
barreras
arancelarias: 79, 382
proteccionistas: 68
Barrio, Francisco: 504
Barrón, Luis Felipe: 551
Bartra, Armando: 422, 424, 469, 548
Bartra, Roger: 515
Basáñez, Miguel: 227, 378, 575
Basagoiti, José María: 556
Bassols, Narciso: 107
Bátiz, Bernardo: 506
Baz, Gustavo: 169
Bazúa, Fernando: 606
Bejarano, René: 511
Belgrado: 69
Bell, Daniel: 31
Bellinghausen, Hermann: 535
Benítez, Fernando: 160, 538
Berlín: 29
Beteta, Mario Ramón: 165, 181, 189
Biblistas Populares: 459
Biebrich, Carlos: 241
bienes
circulación de: 92
de manos muertas: 102, 103
industriales: 88
y servicios básicos: 57
bienestar: 270
comunitario: 452
económico: 367
social: 90, 271, 300, 367, 460, 480, 544
Blanco, Herminio: 374
Blanco, José Joaquín: 139
Bloque de Organizaciones Sociales (BOS): 448
Bolivia: 63, 74
Bolsa Mexicana de Valores: 417, 542
Bondes: 410
Bonfil, Guillermo: 311
Borbones, Los: 14, 95, 113
Botswana: 51
braceros: 197
Brading, David A.: 96, 119
Brady, Bill: 417

Brailowsky, Vladimiro: 408, 541
 Brandenburg, Frank R.: 210
 Brasil: 44, 50, 51, 54, 63, 71, 74, 351, 511
 Bretton Woods (Tratados de): 49, 348
 Bruce, Terry : 368
 Bruselas: 522
 Brzezinski: 417
 Buendía, Manuel: 342
 Buenos Aires: 432
 Bufete de Promoción Industrial: 417
 Bulnes, Francisco: 111
 burocracia: 234, 237, 257, 314, 371, 469, 471, 481, 552
 agraria: 304
 estatal: 306
 Bush, George: 74, 75, 349, 362, 368
 Bustamante, Carlos María de: 101

C

Cabañas, Lucio: 238, 239
 Cabrera, Luis: 124, 125, 498
 caciques: 139, 471, 607
 Cajeme: 161
 calidad de vida: 65, 186, 468
 California: 382
calpulalli: 91
calpuleques: 131
 Calva, José Luis: 393, 398, 403, 404, 420, 423, 439,
 445, 461, 543, 544
 calzonudos: 112
 Calles, Plutarco Elías: 14, 107, 134, 138, 140, 141, 150,
 240, 241, 278, 396
 callismo: 134
 CAM: 400
 Camacho, Manuel: 560
 Cámara: 513, 520, 523
 Cámara Americana de Comercio: 227
 Cámara de Diputados: 124, 323, 368, 399, 400, 448,
 495, 520, 548, 607
 Cámara de Representantes: 416
 Cámara Internacional de Comercio: 426
 Cámara Nacional de Agricultura: 140
 Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la
 Televisión: 609
 Camarena, Enrique: 293
 cambio: 12, 19, 468
 demográfico: 19
 estructural: 289, 290, 299, 341
 Camdessus, Michel: 376

Camerún: 58
 Camp, Roderic Ai: 517, 567
 Campeche: 241, 419, 550
 campesinos: 89, 140, 163, 206, 304, 305, 306, 308,
 309, 310, 392, 394, 396, 398, 400, 401, 402, 422,
 424, 449, 481, 493, 515, 540, 551, 580, 588, 604
 de autoconsumo: 423, 425
 en migración: 269
 independientes: 496
 indígenas: 582
 sin tierra: 588
 yucatecos: 160
 Campillo Sáinz, José: 196
 Canacina: 188, 196, 366, 410, 412, 425, 429, 449
 Canadá: 74, 291, 344, 366, 368, 370, 380, 384, 429
 Canal 22 (de televisión): 521
 Cananea Cattle Company: 198
 canasta básica: 392, 410, 411, 438
 Cancun: 106
 Cancún: 426
 Cano Escalante, Francisco: 575
 capital: 16
 extranjero: 135, 272, 276, 432
 financiero: 276
 fuga de: 58, 195, 245, 279, 542
 norteamericano: 195, 206
 público: 229
 repatriación de: 542
 capitalismo: 80, 167
 de Estado: 148, 207
 salvaje: 518
 Cárdenas, Cuauhtémoc: 316, 320, 321, 322, 323, 374,
 473, 492, 498, 508, 510, 511, 512, 521, 522, 535,
 552, 557, 561, 564, 566, 567, 574, 610, 611, 612
 Cárdenas, Lázaro: 121, 137, 141, 142, 145, 146, 147,
 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,
 162, 163, 165, 167, 168, 170, 171, 179, 182, 183,
 184, 186, 188, 198, 202, 203, 210, 221, 225, 244,
 263, 274, 278, 300, 342, 505, 579, 595
 Fundación Lázaro Cárdenas: 375
 Tata Lázaro: 154
 cardenismo: 120, 500, 501
 Caribe: 368
 CARITAS: 453
 Carlos V: 92, 98
 Carpizo, Jorge: 570, 572
 carrancismo: 128
 Carranza, Venustiano: 14, 107, 124, 126, 162, 278,
 297, 313, 396, 579
 Carrasco, Bartolomé: 459

- Carrillo, Emilio: 612
 Carrillo Flores: 195, 197
 Carrillo Puerto, Felipe: 160
 Carta de Derechos y Deberes de los Estados: 69
 Carta de Naciones Unidas: 52
 Carta Económica para las Américas: 181
 Carta para el Cambio Democrático: 556
 cartera vencida: 420, 426, 464, 534
 Casa de Austria: 105
 Casa de España: 168
 Casa del Obrero Mundial: 128, 136
 Casas, Fray Bartolomé de las: 93, 98, 103, 444, 577, 579, 582
 Castañeda, Jorge G.: 290, 294, 301, 302, 362, 363, 369, 383, 385, 409, 416, 417, 419, 428, 497, 512, 558, 562, 569, 573, 575
 Castellanos, Absalón: 530
 Castillo Peraza, Carlos: 370, 371, 372, 523
 Castoriadis, Cornelius: 32, 33, 41
 caudillismo: 154
 latinoamericano: 352
 caudillos
 del Norte: 147
 Cazés, Daniel: 602
 CCC: 400
 CCI: 203, 400
 CCRI: 532, 533, 534, 535, 595
 CCRI-CG: 536
 CEB: 444
 CEE: 349
 Celanese: 181, 207
 Celaya: 129
 Cementos Portland: 207
 Centeno, Miguel Ángel: 286
 Center for U.S.-Mexican Studies: 469
 centralismo: 14, 100, 121, 122, 239, 314, 321, 469, 481
 Centro Carter: 520
 Centro Comunitario Juan Diego: 455
 Centro de Análisis e Investigación Económica: 366, 377
 Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño: 459
 Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro: 445, 459, 510
 Centro de Estudios del Desarrollo Económico (Cedem): 539
 Centro de Estudios Ecuménicos: 459
 Centro de Estudios México-Estados Unidos: 517
 Centro de Investigación, Promoción y Análisis Internacional: 322
 Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE): 266
 Centro de Investigaciones de la Agroindustria: 421
 Centro de Investigaciones para el Desarrollo: 482
 Centro Fray Bartolomé de las Casas: 513
 Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi): 442
 Centro Mexicano para los Derechos de la Infancia: 440
 Centro Morelos: 453
 Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos): 456, 459
 Centro Patronal de Monterrey: 154
 centros
 de atención a la pobreza extrema: 479
 para el apoyo a la comunidad: 455
 CEOIC: 35, 531, 534, 538, 549, 554, 589, 590, 591
 Cepac: 455
 CEPAL: 52, 73, 300, 359, 411
 Cepeda Neri, Álvaro: 448
 Cetes: 409, 410
 CEU: 302, 315
 CFE: 301, 322, 354, 380
 Cid: 212
 Cidac: 482
 Ciemex-Wefa: 542
 ciencia: 70
 y tecnología: 49, 68, 372, 377, 414
 científicos: 147
 nuevos: 286
 y técnicos: 63
 CIOAC: 303, 400, 422, 549, 579
 Círculo de Estudios Mexicanos: 196, 203
 Cisteil: 106
 Ciudad Real: 530, 579
 civilización
 alternativa: 309
 latinoamericana y norteamericana: 373
 posmoderna: 34
 clase
 alta: 99, 204
 dominante: 210
 dual: 210
 media: 18, 47, 88, 99, 111, 204, 208, 211, 214, 224, 258, 276, 295, 296, 319, 353, 412, 414, 448, 543, 559, 567
 media ilustrada: 139
 media rural: 141
 media urbana: 212
 pobre: 110
 trabajadora: 255

clases

medias (estratos medios): 15
 populares: 204, 228, 353
 rurales: 125
 clientelismo: 471, 477, 481, 484
 Clinton, Bill: 77, 351, 375, 379, 386, 417, 492, 516, 554
 Clouthier, Manuel: 575
 Clouthier, Manuel J.: 320, 322, 492
 Clouthier, Rebeca: 575
 Clouthier, Tatiana: 575
 Club de Deudores: 295
 Club de los Siete: 33, 541
 Club de Roma: 25, 26, 36
 CNC: 159, 163, 179, 192, 195, 203, 231, 241, 303, 395, 399, 400, 508, 590
 CND: 604
 CNT: 182
 CNN: 22
 CNOP: 499, 508
 CNPA: 549
 CNPI: 549
 CNUD: 549
 Coahuila: 140, 158, 184, 309, 314, 354, 424, 464, 500
 Coalición
 del NO: 512
 COCEI: 315, 603
 Código Penal: 533, 588
 CODUC: 400
 Cofipe: 494, 495, 501, 520
 colectivismo empresarial: 234
 colectivización: 229, 230, 232, 234, 237, 306, 307
 Colegio de San Nicolás de Hidalgo: 263
 Colegio Electoral: 322, 323, 607, 611
 cólera: 54
 Colima: 198, 241, 499, 547, 550
 Colombia: 74
 Colonia: 91, 95, 132, 579
 novohispana: 94
 obrajes: 110
 régimen colonial: 106
 sistema novohispano: 93
 sociedad novohispana: 98
 colonialismo: 39
 español: 95
 neocolonialismo: 53
 colonias
 agrícolas: 124
 americanas: 96
 populares: 88
 colonización: 585

española: 579

Colorado River Land Company: 161

Colosio, Luis Donald: 22, 466, 506, 523, 524, 531, 535, 536, 555, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 565, 608

comercio: 55, 93, 110, 227

 exterior: 551

 informal: 450

 internacional: 112

 libertad de: 101

 libre: 77, 96

 mundial: 66, 73, 78

 zona de libre: 74

Comisión de Bruselas: 385

Comisión de Desarrollo Empresarial: 539

Comisión de Evangelización y Catequesis del
 Episcopado: 444

Comisión de Vigilancia del Consejo General del IFE:
 610

Comisión del Programa Nacional de Solidaridad: 463
 véase Pronasol

Comisión Económica de Norteamérica: 385

Comisión Económica para América Latina: *véase*
 CEPAL

Comisión Estatal Electoral: 522
 véase elecciones

Comisión Federal de Electricidad: *véase* CFE

Comisión Federal Electoral: 321, 494
 véase elecciones

Comisión Nacional de Alimentación (Conal): 480

Comisión Nacional de Derechos Humanos: 507, 509,
 525

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras: 359

Comisión para la Justicia en las Maquiladoras: 385

Comisión Sur: 53, 57, 67, 68, 69, 70, 74

Comisión Tripartita Agraria: 241

comisionado para la paz: 530, 531, 532, 574

Comité de Defensa Popular de Durango: 471

Comité de Pequeña Empresa: 416

Comité Regulador de Mercados de Subsistencia: 165

Compromisos para una Paz Digna en Chiapas: 533,
 534

comunidad

 americana: 77

 lacandona: 579

Comunidad Democrática de las Américas: 79

Comunidad Económica Europea: 29, 71, 344, 349,
 364, 383, 384, 423

comunidades

 indígenas: 128, 398, 400, 533, 559, 593

- rurales: 13, 35
- zapatistas: 574
- Comunidades Eclesiales de Base (CEB): 444, 496, 602
- comunismo: 162
- con-certacesión: 499
- Conacyt: 377
- Conamup: 303, 315, 446, 447
- Conanimac: 455
- Conasupo: 231, 237, 240, 296, 318, 361, 392, 423, 440, 463, 466, 480
 - Solidaridad: 480
- Concamín: 182, 228, 426
- Concanaco: 188, 228, 378, 411, 412, 539, 540
- Concilio Vaticano II: 443, 505
- Concha, Miguel: 460, 461, 483, 513
- Conchello, José Ángel: 375, 376, 401, 507
- Confederación de Trabajadores de América Latina: 190
- Confederación Nacional de Niños de México: 455
- Confederación Nacional Ganadera: 421
- Conferencia de Bandung: 69
- Conferencia de Chapultepec: 181
- Conferencia de México sobre Desarrollo Social y Pobreza: 459
- Conferencia de Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología: 27
- Conferencia del Cairo: 20
- Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional: 203
- Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo: 71
- Confucio: 56
- Congreso: 102, 251, 524, 561
- Congreso Agrario Permanente: 395, 399, 400, 421
- Congreso Constituyente: 131, 538, 605
- Congreso Constituyente de 1824: 16, 100, 137
- Congreso de Chilpancingo: 99
- Congreso de la Unión: 327
- Congreso de los Estados Unidos: 40
- Congreso del Trabajo: 254, 302
- Congreso Federal: 559
- Congreso Indígena: 581, 583
- Congreso Indígena en Chiapas: 578
- Congreso Internacional Universitario: 562
- Congreso Latinoamericano de Nutrición: 439
- Congreso Nacional de Industriales: 196
- Conquista: 12, 14, 97, 134, 142, 148, 285, 373, 577, 578
- consejeros ciudadanos del IFE: 571, 607, 610
 - véase* elecciones
- Consejo Consultivo de la Ciudad: 454, 468
- Consejo Consultivo de Pronasol: 438
 - véase* Pronasol
- Consejo Coordinador Empresarial: 228, 238, 242, 266, 411
- Consejo de Ciencia y Tecnología de la Presidencia: 377
- Consejo de Organizaciones Agrarias: 548
- Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico: 343
- Consejo Ejecutivo de Transición a la Democracia: 566
- Consejo Electoral: 501
- Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales: 343
- Consejo General del IFE: 520, 561, 568, 569, 606, 609, 611
 - véase* elecciones
- Consejo Guerrerense: 603
- Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: 228
- Consejo Nacional Agropecuario: 395, 419, 421
- Consejo Nacional Cardenista: 509
- Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas: 235
- Consejo Nacional Obrero y Campesino de México: 509
- consejos
 - distritales: 503
 - locales y estatales: 570
- Consejos Supremos de las Etnias: 235
- conservadores: 100, 104, 109
- Constitución: 100, 129, 131, 141, 142, 147, 150, 171, 200, 203, 274, 276, 287, 307, 376, 396, 397, 400, 509, 524, 533, 605
 - Artículo 3º: 137
 - Artículo 4º: 533
 - Artículo 27: 140, 142, 180, 184, 191, 381, 391, 396, 398, 400, 401, 419, 482, 512, 533, 548, 549, 551
- Constitución de 1824: 262
- Constitución de 1857: 108
- Constitución de Apatzingán: 99
- Constitución liberal: 99
- consumo: 54
 - autoconsumo: 165, 587
 - urbano: 47
- contaminación: 54, 58
- control
 - corporativo: 201
 - de precios: 356
- Convención: 127, 537, 538, 603, 605
- Convención de Aguascalientes: 126, 604
- Convención del Partido Nacional Antirreeleccionista: 138

- Convención Democrática (en Chiapas): 523, 536, 537, 590, 601
 Convención Nacional Bancaria: 406
 Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia: 460, 501
 Convergencia de Organizaciones Campesinas de Chiapas: 460
 Convergencia Democrática: 509, 511
 cooperación comunitaria: 43
 cooperativas: 43, 160
 Coordinación de Asesores de la Presidencia: 362
 Coordinadora de Cuartos de Azotea de Tlatelolco: 448
 Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio: 369
 Coordinadora Lomas de la Era: 454
 Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras: 460
 Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: 315
 Coordinadora Nacional Plan de Ayala: 303, 315, 459
 Coordinadora Sindical Nacional: 315
 Coordinadora Única de Damnificados: 447
 Coparmex: 225, 227, 228, 242, 266, 378, 411, 413, 449, 541, 556
 Copevi: 459
 Coplades: 464
 Coplamar: 257, 269, 270, 465
 Cordera, Rolando: 207, 266, 270, 271, 276, 277, 299, 300, 515, 539, 562
 Córdova, Arnaldo: 146, 148, 151, 155
 Córdoba Montoya, José: 341, 355, 356, 358, 360, 362, 405, 406, 416
 Corea: 51, 63, 64, 65, 305, 347, 384, 446
 Corea del Sur: 48, 51, 347, 349, 365, 403, 552
 Cornelius, Wayne: 558, 562
 Corona (*refiérese a la Corona española*): 92, 93, 95, 96
 corporativismo: 481, 605
 corporativización: 171
 Corriente Democrática del PRI: 316, 320
 Corriente por la Reforma Democrática: 511
 corrupción: 58, 74, 191, 194, 293, 301, 461, 565
 Cortes de Cádiz: 97, 99, 103
 Cosío Villegas, Daniel: 87, 147, 168, 191, 209, 221, 565
 Costa Rica: 64, 65
 Coyuca de Benítez, Gro.: 509
 Cozumel: 466
 crecimiento: 13, 22, 29, 37, 44, 47, 48, 52, 58, 64, 189, 209, 210, 225, 350, 354, 355, 363, 376, 412, 428, 541
 con inversiones y tecnología: 67
 de la economía: 407
 desaceleración del: 410, 415
 desigual: 16
 económico: 41, 63, 145, 170, 205, 209, 343, 379, 407, 438, 483
 hacia afuera: 342
 industrial: 120, 146, 166
 industrial y comercial: 47
 modelos de: 37
 sostenido: 38, 73, 88, 194
 y empleo: 544
 crédito: 59, 66, 89, 196, 202, 212
 agrícola: 160
 ejidal: 162, 402
 exterior: 195
 Creel, Santiago: 609, 610
 crisis: 22, 23, 216, 221, 224, 298, 317, 319, 353, 410, 420, 425, 468, 610
 agroalimentaria: 304
 de alimentos: 234
 de crecimiento: 222, 223
 de gobernabilidad: 34
 de la deuda: 53, 66
 de los paradigmas: 80
 de producción agrícola: 304
 del campo: 393
 del México moderno: 228
 del partido gobernante: 560
 del petróleo: 25
 económica: 279, 292, 293, 325, 329
 estructural: 287
 fiscal: 353
 moral: 221
 social y política: 546
 cristiada: 134, 141
 cristianismo: 95
 Cristó: 577
 Cronos: 142
 Cruz Roja: 453, 531
 CTM: 154, 203, 254, 302, 366, 412, 418
 Cuahuixtla: 111, 131
 Cuautla: 132
 Cuenca del Pacífico: 29, 291, 343, 348, 349
 cuenta corriente: 413
 Cuernavaca, Mor.: 99, 103, 104, 127
 Cuevas, Elisa: 9

cultura: 110, 371, 400, 452, 575
 campesina: 186
 de la abundancia: 265
 de la razón: 167
 del desperdicio: 42
 del progreso: 265, 594
 hispánica: 168, 223
 identidad cultural: 61
 indígena: 461, 534, 582, 583
 mexicana: 370
 moderna: 110
 nacional: 139, 372
 norteamericana: 373
 occidental: 26, 27, 90, 94, 374
 política: 496, 516
 tradicional: 258, 483
 valores: 54

culturas

arcaicas: 14
 campesinas del Sur: 60
 de la pobreza: 54
 populares: 483
 prehispánicas: 223
 tradicionales: 29, 55, 90, 259

Cumbre de Cancún: 69

Cumbre de la Tierra: 71

Cydsa: 297

CH

Chalco: 354, 455, 471, 498, 500

chamulas: 578

Chan Santa Cruz: 106

charrismo: 190, 199, 200

Chávez, Ignacio: 168, 211

Chenalhó: 579

Chesterton: 556

Chiapas: 12, 24, 35, 87, 88, 106, 121, 199, 241, 303,
 322, 323, 399, 444, 459, 460, 464, 473, 498, 504,
 513, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 538, 542,
 548, 551, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 562, 566,
 576, 577, 579, 580, 582, 584, 585, 588, 589, 590,
 591, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 603, 608,
 610, 611

chicanos: 511

Chicontepec: 106

Chichihuapán: 509

Chihuahua: 87, 123, 140, 212, 239, 241, 309, 314, 315,
 393, 399, 424, 500, 504, 547, 548, 566

Chilam Balam: 106, 577

Chile: 52, 65, 74, 208, 237, 351, 352, 358, 512

Chilón: 579

Chilpancingo: 239

China: 45, 48, 56, 71, 75, 90, 169, 347, 349

Chinameca: 133

choles: 582, 586

Chomsky, Noam: 416

Christlieb Ibarrola, Adolfo: 505

Chrysler: 364

D

Damocles: 74

Daniels, Josephus: 148

Davos: 554

DDF: 453, 454

DEA: 293

década perdida: 49, 58, 63, 73

Declaración de Berna: 56

Declaración de Guadalajara: 74

Declaración de la Selva Lacandona: 529

déficit: 493

cero: 357

comercial: 375, 407, 430

del Distrito Federal: 446

fiscal: 347, 541, 544

público: 492

Delegación Álvaro Obregón: 454: 447

Delegación Venustiano Carranza: 454

demanda

agraria: 123

de libertad: 124

de mano de obra: 378

de pan: 124

de tierra: 123

democrática: 591

interna: 407

social: 469

demandas

agrarias: 124

populares: 236, 352, 353, 508

sociales: 222, 583, 580, 591

democracia: 11, 14, 16, 19, 20, 23, 29, 31, 33, 37, 57,
 59, 72, 74, 79, 80, 104, 130, 151, 163, 171, 191,
 200, 211, 212, 214, 215, 223, 224, 228, 235, 250,
 252, 278, 294, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 326,
 327, 342, 351, 354, 367, 372, 377, 428, 461, 467,
 468, 491, 492, 493, 494, 497, 498, 499, 501, 511,

- 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 521, 525, 529,
- 535, 536, 537, 545, 548, 551, 554, 555, 559, 560,
- 562, 563, 566, 568, 574, 575, 576, 591, 594, 596,
- 599, 600, 601, 603, 604, 608, 613
- a la mexicana: 204
- ampliada: 519
- con contenido social: 605
- de carne y hueso: 13
- de los trabajadores: 505
- directa: 32, 582
- ejidal: 33
- electoral: 507
- en México: 516
- formal: 301
- gremial: 211
- interna: 308
- mexicana: 522
- moderna: 30
- mujeres en lucha por la: 460
- municipal: 497, 498, 504, 515, 599
- nacional: 533
- norteamericana: 525
- para la justicia: 507
- participativa: 498
- pequeña: 312
- política: 329, 372, 518
- política moderna: 325
- recomposición: 565
- representativa: 33
- simulada: 201
- sin alternancia: 612
- sindical: 200, 255, 505, 573
- social: 21555
- social-popular: 604
- tutelada: 170, 496
- transición a la: 326, 506, 522, 537, 539, 553, 575,
- 576, 605, 610, 611, 612,
- y justicia: 534
- Veinte Compromisos por la: 524
- democratización: 221, 222, 224, 244, 277, 305, 363,
- 445, 447, 513, 540, 546, 551
- de México: 374, 517
- del partido oficial: 517
- del sistema: 508
- electoral: 314
- integral: 287
- promesa democratizadora: 491, 504, 341, 464,
- 590
- dependencia: 47, 54, 90
- clientelar: 12
- del Norte: 68
- económica: 139
- derechos
 - humanos: 36, 68, 72, 368, 374, 444, 456, 491, 497,
 - 507, 513, 514, 519, 579, 602
 - laborales: 384
- desamortización: 109
- desarrollismo: 15, 41, 42, 171, 194, 234, 237, 255, 262,
- 276, 481, 595
- industrial: 178
- desarrollo: 16, 18, 27, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 49, 52,
- 55, 56, 57, 58, 61, 67, 68, 71, 75, 136, 168, 211,
- 215, 216, 243, 256, 258, 263, 270, 376, 541
- acceso al: 53
- acelerado: 177
- agrario integral: 203
- agrícola: 162, 192, 306, 539
- agroindustrial: 45
- agropecuario: 400, 403
- bancos de: 69
- beneficios del: 214
- capitalista: 138, 148
- científico: 61
- compartido: 225, 290, 300
- comunitario: 70, 71, 453, 454, 483, 493
- con democracia: 460
- cooperación para el: 69
- del campo: 552
- democrático: 254
- económico: 215, 224, 246, 368, 575
- en pequeño: 376
- equitativo: 37
- equitativo y sustentable: 61
- estabilizador: 156, 195, 196, 199, 204, 205, 225,
- 243, 290, 408, 414, 457
- hacia afuera: 59, 376
- histórico: 177
- humano: 17, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 148
- industrial: 45, 48, 100, 162, 163, 185, 201, 205, 207,
- 253, 286, 403, 407
- industrial y agrícola: 429
- infantil: 455
- inflacionario: 195
- integral: 17, 421, 439, 449, 468, 484, 564
- agropecuario: 425
- del campo: 47
- investigación para el: 61
- mito del: 223
- modelo de: 59, 112
- mexicano: 208

- nacional: 88
- nuevo modelo de: 543
- obstáculos para el: 74
- regional: 465, 575
- regional y municipal: 575
- rural: 300, 552
- rural integral: 275
- social: 215, 224, 277, 317, 343, 375, 400, 460, 469, 497, 542
- social y político: 294
- socialista: 148
- sostenido: 467
- subdesarrollo: 55, 216, 347, 541
- sustentable: 20, 26, 34, 433, 593
- tecnológico: 61, 256
- teoría del: 25
- trampas del: 207
- urbano y rural: 43
- urbano y ecológico: 463
- descentralización: 60, 287, 289
- desempleo: 45, 47, 52, 53, 63, 72, 78, 205, 240, 271, 272, 274, 288, 294, 296, 298, 301, 345, 355, 376, 384, 385, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 429, 430, 431, 445, 449, 450, 493, 540, 542, 573, 595
- con industrialización: 45
- subempleo: 205, 429, 540
- véase* empleo
- desequilibrio comercial: 290, 573
- desestabilización: 395, 396
- desigualdad: 12, 14, 16, 18, 30, 37, 44, 60, 67, 73, 77, 91, 99, 101, 145, 170, 191, 193, 205, 208, 211, 223, 225, 226, 230, 237, 245, 256, 259, 277, 288, 295, 297, 310, 328, 329, 363, 376, 402, 428, 432, 442, 443, 468, 514, 516, 541, 543, 546, 552, 573, 575, 588, 597
- desnutrición: 34, 47, 50, 51, 55, 63, 66, 67, 90, 269, 304, 318, 376, 440, 441, 445, 469, 478, 479
- infantil: 534
- véase* nutrición
- desobediencia civil: 315
- despotismo ilustrado: 324, 363
- destino manifiesto: 177, 178
- deuda: 38, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 63, 64, 68, 69, 72, 76, 110, 135, 195, 227, 235, 264, 267, 277, 279, 287, 288, 290, 292, 295, 297, 301, 308, 329, 343, 344, 352, 353, 354, 355, 356, 367, 376, 407, 410, 419, 525
- comercial: 343
- del gobierno federal: 362
- externa: 189, 205, 258, 266, 432, 465
- Foro de Deudores: 69
- interna: 361, 408, 409
- pago de la: 72, 79, 289, 293, 298, 350
- política: 523
- presión de la: 53
- privada: 310
- préstamos comerciales: 38
- pública: 243, 279, 310, 362
- renegociación de la: 357, 359, 384, 405, 406, 409
- servicio de la: 51, 58
- social: 351, 439, 548
- devaluación: 21, 195, 316, 417
- de 1954: 195
- Dewey, John: 137
- Diario Oficial*: 166
- Díaz, Porfirio: 14, 107, 111, 112, 113, 132, 142, 196, 427
- Díaz de León, El "Charro": 190
- Díaz Ordaz, Gustavo: 196, 203, 211, 221
- Díaz Serrano, Jorge: 277, 361
- Dickens, Charles: 89
- Diconsa: 455
- dictadura: 562
- militar: 358
- DIF: 438, 466, 480
- Dina: 302
- Diócesis de San Cristóbal de las Casas: 460
- discurso agrarista: 183
- de la utopía: 192
- distribución: 588
- del ingreso: 50, 55, 62, 73, 78, 112, 166, 194, 223, 255, 411, 414, 427, 472, 540, 552
- de la riqueza: 199
- de la tierra: 139, 584
- Distrito Federal: 35, 135, 140, 141, 169, 179, 186, 231, 269, 303, 309, 312, 316, 320, 322, 412, 447, 448, 454, 496, 500, 507, 516, 530, 547, 554, 560, 564, 608
- regente del: 463
- divisas: 409
- división internacional del trabajo: 37, 54, 55, 78, 345
- doctrina socialista: 149
- Dolores Hidalgo, Gto.: 99, 212
- Dornbusch, Rudiger: 417
- Dresser, Denisse: 465, 469, 470, 471, 472
- Drucker, Peter: 13, 26, 27
- Durango: 87, 123, 158, 315, 322, 399, 424, 446, 547, 550

E

Eckstein, Samuel: 157, 158

ecología: 27, 70, 575

véase medio ambiente

economía: 289

abierto: 289, 344

Acuerdo Marco para la Estabilización de la:

agraria: 59

nacional: 202

campesina: 186, 193, 230, 272, 275, 381, 403,

421, 425, 445, 483, 600

cerrada: 289, 344

de la pobreza: 32

de mercado: 28, 29, 30, 37, 67, 355, 432, 555

de subsistencia: 258, 260

ejidal: 160

ficción: 15, 308

global: 15, 27, 48, 55, 66, 76, 77, 328, 344, 346,

370, 423, 427, 558

informal: 17, 72, 365, 378, 406, 411, 412, 449, 450

internacional: 296

mexicana: 155, 197, 292, 294, 339, 367, 406, 408,

417

mixta: 32, 288, 289, 290, 299

monetaria: 185, 193

mundial: 36, 37, 49, 52, 53, 58, 91, 94, 206, 255,

291, 297, 339, 348, 364, 417, 428, 432, 518

nacional: 408

norteamericana: 270, 273, 293, 294, 358, 362, 364,

365, 428

occidental: 348

prehispánica: 286

rural: 138

sin fronteras: 346

social: 555

subterránea: 45, 51

tradicional: 449

economías

semindustrializadas: 59

socialistas: 355

Echeverría Álvarez, Luis: 221, 225, 227, 228, 229, 235,

237, 241, 243, 245, 249, 281

Ediciones de Buena Tinta: 9

Edificio Chihuahua, Tlatelolco: 213

educación: 26, 32, 35, 39, 47, 50, 51, 52, 56, 58, 62,

64, 65, 66, 68, 74, 77, 79, 90, 92, 101, 110, 137,

138, 139, 147, 159, 166, 167, 168, 192, 208, 215,

226, 235, 257, 269, 275, 276, 305, 318, 347, 351,

400, 407, 414, 438, 439, 441, 452, 463, 464, 465,

466, 467, 468, 474, 477, 479, 480, 482, 483, 507,
529, 534, 540, 552, 558, 564, 573, 575, 582, 595,
604

aulas rurales móviles: 235

agropecuaria: 235

básica: 552

bilingüe: 534

enseñanza técnica: 158

escuela rural: 137

escuelas de trabajo: 167

formal: 483

primaria: 60, 63, 64, 66, 89, 139

primaria y secundaria: 63

transformación: 413

secundaria: 89

socialista: 137, 167

superior: 89, 377, 452

y cultura: 73

efecto invernadero: 54, 70

Egipto: 269

Ejecutivo: 524, 533, 536

ejército: 227

Ejército del Sur (de Emiliano Zapata): 602

Ejército Federal: 535

ejidatarios: 87, 88, 159, 161, 184, 187, 188, 192, 202,

209, 231, 308, 398, 400, 402, 585, 591

ejido: 93, 140, 141, 161, 183, 302, 304, 307, 397, 399,

550, 580

colectivo: 157, 158, 160, 162, 163, 179, 306, 398

parcelado: 162

El Barzón (movimiento campesino): 421, 603

El Colegio de México: 168, 302, 366, 410, 473, 475

El Constitucional: 109

El Escorial: 30, 33

El Espectador: 200, 201, 204, 212

El Manantial (ejido): 158

El Nigromante: 11, 113, 114

El Norte: 122, 178

El Popular: 199

El Salvador: 63, 340, 418

el Yaqui (valle de): 180

elecciones: 19, 22, 326, 502, 503, 506, 512, 520, 522,

533, 545, 557, 558, 565, 569, 571, 573, 575, 576,

605, 608

conflictos postelectorales: 494, 522, 569

de 1988: 285, 286, 315, 320, 325, 341, 493, 499

de 1991: 473, 498, 503, 510, 513

de agosto de 1994: 374, 520, 521, 562, 553

delitos electorales: 507

estadounidenses: 340

- fraude: 301, 323
- fraude cibernético: 570
- IFE: 496, 503, 520, 560, 561, 568, 569, 570, 606, 607, 609, 611
 - Colegio Electoral del IFE: 322, 323, 607, 611
 - consejeros ciudadanos del IFE: 571, 569, 606, 609
- libres: 563
- limpias: 553, 570
- municipales: 498
- nueva ley electoral: 533
- opciones: 575
- organismos electorales: 502
- padrón electoral: 520, 524
- procesos electorales: 19, 293, 575
- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP): 609
- reforma electoral: 315, 507, 519, 520, 558, 560, 573
- reforma política: 223, 249, 251, 252, 253, 255, 373, 493, 494, 515, 519, 573, 575
- Sistema de Información de Resultados Electorales: 503
- sistema democrático electoral: 555
- vía electoral: 537
- electricidad: 87, 178, 207
- élite
 - empresarial: 228, 296
 - gobernante: 337
 - ilustrada: 286
 - intelectual: 207
 - nueva: 328, 492
 - política: 207, 228, 246, 373, 416
 - tecnocrática: 245, 405
- emigración: 63
- Emiratos Árabes Unidos: 63, 64
- empleo: 17, 37, 38, 45, 52, 60, 62, 63, 66, 72, 87, 89, 98, 205, 207, 243, 276, 328, 340, 351, 432, 451, 463, 541
 - autoempleo: 70, 451
 - véase* desempleo
- empobrecimiento: 207, 209, 319, 588
- empresarios: 208, 295, 451
 - del Sur: 70
 - medianos y pequeños: 410
- empresas
 - en Solidaridad: 461, 464
 - estatales: 210, 296, 354, 360
 - medianas y pequeñas: 299, 301, 407, 446, 573
 - monopólicas: 271
 - norteamericanas: 380
 - pequeñas y medianas: 350
 - públicas: 64, 271, 287, 289
 - transnacionales: 206, 275, 294, 303, 345, 391
- enclaves: 16
 - feudales: 122
 - modernos: 27
- endeudamiento: 552
 - crítico: 350
 - externo: 204
- enfermedades tropicales: 70, 168
- Enlace*: 460
- Ensenada: 198
- Episcopado Mexicano: 530
- Epístola de San Pablo: 582
- equilibrio
 - económico: 611
 - fiscal: 413
 - social: 432
- Equipo Pueblo: 459
- era cristiana: 92
- esclavitud: 99, 121
- Escuela de Cambridge: 255
- Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM: 212
- Escuela de Chicago: 352
- Escuela de Medicina Rural: 169
- Escuela Normal: 302
- Escuela Práctica de Santa Teresa: 158
- espaldas mojadas: 196
- España: 96, 263, 349, 384, 408, 412
 - borbónica: 103
- especulación: 432
 - financiera: 272, 412
- esperanza de vida: 62, 63, 64
- estabilidad: 344, 578
 - económica: 212
 - política: 212, 301, 545
 - social: 212, 384
- estabilización: 544
 - de la economía: 414
 - política y económica: 155
- Estado: 11, 17, 29, 30, 32, 38, 61, 67, 75, 78, 80, 100, 103, 109, 114, 120, 130, 133, 137, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 163, 166, 167, 170, 171, 178, 182, 183, 186, 188, 194, 196, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 215, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 245, 246, 253, 254, 255, 256, 258, 266, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 282, 288, 289, 296, 297, 298, 299, 300, 306, 308, 309, 314, 318, 320, 323, 325, 328, 342, 344, 347, 348, 350, 351, 353, 354, 360, 361,

- 367, 369, 371, 385, 392, 393, 395, 396, 398, 400,
402, 419, 425, 426, 429, 432, 442, 443, 445, 446,
447, 450, 452, 456, 457, 458, 460, 461, 462, 463,
467, 468, 497, 498, 508, 517, 518, 519, 525, 533,
536, 551, 556, 557, 560, 565, 573, 582, 585, 592,
600, 604
adelgazado: 358
autoritario: 212
benefactor: 148, 208, 350, 468
de bienestar: 75
de derecho: 68, 428, 564, 604, 611, 612
democrático: 353, 462, 555
intervención del: 188, 195, 297
interventor: 292
mexicano: 150, 292, 295, 338, 380, 382, 395, 462,
513
moderno: 142, 286
nacional: 152
paternalista: 353, 414
patrón: 149
pueblo (relación con el): 470
rectoría: 358
y sociedad: 211
Estado de México: 108, 112, 134, 141, 303, 309, 399,
464, 471, 499, 500, 509, 510, 513, 522, 566
estados nacionales: 275, 370
Estados Unidos: 14, 15, 17, 21, 22, 29, 31, 32, 40, 42,
43, 45, 54, 56, 60, 62, 71, 74, 75, 76, 77, 79, 80,
100, 101, 112, 113, 122, 129, 147, 148, 154, 157,
177, 178, 180, 181, 185, 187, 188, 209, 211, 225,
261, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 280, 291, 292,
293, 294, 301, 339, 342, 343, 344, 347, 348, 349,
350, 351, 362, 363, 364, 366, 367, 373, 375, 378,
379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 393, 394, 403,
404, 416, 418, 423, 424, 427, 428, 429, 445, 446,
449, 473, 511, 512, 542, 544, 548, 599
véase América
estatismo: 467
Este
refiérase a los países del: 76, 215, 224, 348, 351
estratos medios
véase clases medias: 15
estructura
electoral: 503
fiscal: 540
estructuras
caciquiles: 588
políticas autoritarias: 373
eurocomunismo: 511
Europa: 29, 43, 45, 49, 76, 94, 95, 211, 291, 343,
347, 348, 349, 385, 403, 418, 599
Comunidad Económica Europea: 29, 71, 344, 349,
364, 383, 384, 423
del Este: 71, 349
Occidental: 31, 78
reconstrucción de: 189
Unión Europea: 71
evangelizadores del progreso: 164
Excelsior: 228, 244
éxodo
biblico: 582
por la democracia: 504
expansión
del comercio: 379
económica: 223
exportaciones: 112
agrícolas: 47
latinoamericanas: 59, 75
no petroleras: 364
expropiación petrolera: *véase* petróleo
Extremo Oriente: 347
EZLN: 529, 530, 535, 536, 537, 538, 581, 584, 591,
594, 603, 604, 605, 611
Comité Clandestino Revolucionario Indígena: 601
Primera y Segunda Declaración de la Selva: 537
Segunda Declaración de la Selva Lacandona:
536, 538
profesionales de la violencia: 530
- ## F
- FAC: 453, 454, 456
FAM: 456, 457
Familia Cusi: 162
Familia Garza Sada: 227
fanatismo científico: 139
fantasía tecnocrática: 541
FAO: 478
Faprade (Fondo para la Asistencia, Promoción y
Desarrollo): 455, 456
Fase Dos de Reconstrucción: 453
fast track: 338, 341, 362
véase TLC
FDN: 316, 320, 322, 323, 326, 327, 447, 495, 498, 500,
507, 509, 512
Federación de Partidos del Pueblo: 195
federalismo: 18, 100, 518, 575, 611
Fernández de Cevallos, Diego: 321, 557, 564, 566,
567, 574, 610, 612

Fernández de Lizardi, Joaquín: 103
 Fernández, Tiburcio: 579
 ferrocarril: 189
 Ferrocarril del Pacífico y Mexicano: 199
 ferrocarriles: 112, 178, 190, 195
 Fertilizantes Mexicanos: 450
 Ficorca: 296, 297
 Fideurbe: 447
 Figline Valdarno: 41
 Filipinas: 50, 51, 349
 financiamiento
 compensatorio: 383
 externo: 409
 no inflacionario: 544
 finanzas
 internacionales: 55
 públicas: 289, 355, 413, 468, 544
 Finlandia: 62
 FIRA: 402
 Fitzcarraldo: 605
 Flores Magón, Ricardo: 135
 Flores Olea, Víctor: 200, 212, 370, 371, 372
 Florescano, Enrique: 142
 FMI: 39, 49, 69, 70, 245, 249, 287, 295, 296, 298, 344, 347, 349, 350, 376, 409, 438
 FNAD: 549
 Fonafe: 230
 Fondo Amerimex: 416
 Fondo de Ayuda Católica: 455
 Fondo de Contingencia: 542, 551, 552
 Fondo de Solidaridad: 231, 464
 Fondo Nacional de Fomento Ejidal: 230
 fondos
 compensatorios: 384
 municipales: 589
 para la producción: 464
 Fonhapo o Fividesu: 447, 453
Forbes: 88
 Ford: 364, 385
 Foro de Apoyo Mutuo: 453, 456, 458, 459, 462
 Foro de Consulta: 365
 Foro de Deudores: 69
 Foro de la Sociedad Civil: 459
 Foro de Niños y Jóvenes: 459
 Foro de Oaxaca: 460
 Foro Democrático: 575
 Foro Doctrinario y Democrático: 506
 Foro Económico Mundial: 554
 Foro Nacional de Democracia: 608
 Foro Nacional de la Sociedad Civil: 459

Fortune: 88
 Fovissste: 235, 447
 Fox, Vicente: 499, 522, 575
 Francia: 44, 201, 412
 Frente Auténtico del Trabajo: 460
 Frente Campesino Independiente: 231, 242
 Frente Cívico: 314, 471
 Frente Potosino: 460, 499
 Frente Democrático de Campesinos de Chihuahua: 460
 Frente por el Derecho a la Alimentación: 460
 Frente Sandinista: 511
 Friedman, Milton: 33, 270
 Friedman, Rose: 270
Fuenteovejuna: 132, 448
 Fuentes, Carlos: 23, 80, 88, 177, 200, 201, 203, 210, 215, 222, 244, 369, 370, 371, 372, 418, 427, 428, 432, 515, 518, 538, 557, 560, 562, 565, 567, 575, 599
 Fuentes Molinar, Olac: 377
 fuerzas
 económicas globales: 372
 progresistas: 509
 Fundación Arturo Rosenblueth: 322, 607, 609
 Fundación Barrio Unido: 453
 Fundación Demos: 456
 Fundación Lázaro Cárdenas: 375
 Fundación para el Apoyo de la Comunidad (FAC): 453, 455, 456
 Fundación para la Protección a la Niñez: 443, 456, 459

G

Galbraith, John Kenneth: 22
 Galván, Rafael: 254
 Gallup: 416
 ganadería: 12, 51
 ganaderización: 304
 Gandhi, Mahatma: 48, 146
 García de León, Antonio: 106, 538, 577, 578, 582, 586, 594
 García Sáinz, Ricardo: 255, 282, 575
 García Terrés, Jaime: 200
 García y Cubas, Antonio: 107
 Garza Sada, Eugenio: 225, 227
 gasto
 educativo: 507
 en salud: 64, 507

- público: 51, 63, 65, 188, 189, 195, 196, 207, 208,
 225, 244, 267, 271, 274, 275, 287, 290, 298, 299,
 317, 403, 524, 540, 543, 544
 social: 18, 50, 51, 64, 65, 66, 79, 208, 245, 289, 351,
 354, 361, 362, 429, 466, 468, 508, 554
 global: 544
 redistributivo: 91
 GATT: 189, 324, 344, 346, 363, 379, 381, 393, 417
 Ronda Uruguay del: 71
 Gavin, John: 293
 GEA: 541
 generación rota: 214
véase movimiento estudiantil del 68
 General Motors: 364
 Gephardt, Richard: 416, 418
 Gershenson, Antonio: 395
 Ghana: 51, 63
 Gilly, Adolfo: 224
 Ginebra: 57, 417
 globalización: 13, 14, 17, 19, 23, 27, 30, 48, 55, 61, 68,
 70, 75, 78, 79, 80, 291, 337, 345, 348, 349, 364,
 391, 431, 445, 457, 467, 564
 red global: 13, 36, 53, 79
 gobernabilidad: 495, 576
 gobierno: 237
 central: 123
 de coalición: 573
 de excepción: 612
 de México: 200, 293, 610
 de transición: 594
 federal: 525
 mexicano: 209
 plural: 567, 568
 zapatista: 130
 Gómez Farías, Valentín: 107
 Gómez Morín, Manuel: 126, 128, 138, 179, 505
 Gómez Z., Napoleón: 190
 González Casanova, Pablo: 131, 208, 211, 239, 298,
 322, 555
 González Garrido, Patrocinio: 530
 González Guevara, Rodolfo: 510
 González Navarro, Moisés: 11, 112
 González Pedrero, Enrique: 9, 12, 200, 204, 212,
 258, 261, 326, 515, 518, 521, 575, 576
 González Schmal, Jesús: 506
 González Torres, Enrique: 9
 González y González, Luis: 110, 151, 168
 Gorbachov, Mijail: 373
 Gordillo, Elba Esther: 575
 Gordillo, Gustavo: 395
 Gorz, André: 27
 Gran Bretaña: 62, 272
 Gran Depresión: 89, 148
 Granados, Otto: 289
 Granados Chapa, Miguel Ángel: 448, 517, 519, 521,
 560, 609, 610
 Grijalva (río): 577
 Grito de Dolores: 98
véase Independencia
 Grupo Alfa: 265, 266, 297
 Grupo de Economistas Asociados (GEA): 429
 Grupo de Estudios Ambientales: 460
 Grupo de los 7: 52, 58
 Grupo de los 77: 69
 Grupo Industrial Bimbo: 426
 Grupo Monterrey: 225, 297
 Grupo Parlamentario Independiente: 495
 Grupo Polifórum: 509
 Grupo San Ángel: 537, 538, 574, 575, 607, 608, 610
 Guadalajara: 71, 231, 343, 564
 Guadalupanas: 443
 Guadalupe Tepeyac: 535, 537, 602
 Guadalupe, Virgen de: 94, 134, 399
 estandarte de la: 99
 Tonantzin: 94
 Guajardo Suárez, Roberto: 225, 227, 242
 Guanajuato: 241, 393, 498, 499, 500, 501, 504, 547,
 566
 guardias blancas: 586
 Guarín: 198
 Guatemala, Capitanía General de: 106
 Guaymas: 506
 guerra
 civil: 536, 537
 cristera: 136
 interna: 568
 Guerra de Castas: 106, 160, 578
 Guerra de Corea: 189, 197
 Guerra del Golfo: 29
 Guerra Fría: 28, 29, 37, 69, 71, 74, 188, 348, 363
 Guerra, François Xavier: 113, 114, 119, 141, 142, 201
 Guerrero: 87, 88, 98, 123, 124, 134, 239, 314, 322,
 323, 453, 459, 464, 499, 509, 510, 522, 542, 548,
 554, 566, 610
 Montaña y Costa Chica de: 608
 Guerrero, Vicente: 146, 239
 guerrilla: 35, 240, 569, 594, 597
 rural: 238
 urbana: 236, 238
 Guevara Niebla, Gilberto: 222, 239, 521

Gulag: 33
Guzmán, ciudad: 506

H

Habsburgo: 105
hacendados: 160
hacienda: 93, 94, 95, 226, 245, 246, 249, 255, 282, 406, 524, 542
halcones: 222
hambre: 55
Hank González, Carlos: 601
Hansen, Roger D.: 136, 194, 208, 209, 210, 212, 280
Harvard: 223, 373
Heath, Jonathan: 546
Helms, Jesse: 293
Henríquez Guzmán, Miguel: 194, 198, 313
henriquismo: 194
Heredia, Carlos: 383, 385
Hermosillo: 385
Hernández, Roberto: 608
Hernández Laos, Enrique: 318
Hernández Navarro, Luis: 584, 585, 588, 603
Hidalgo: 122, 263, 316, 459, 548, 561, 566
Hidalgo y Costilla, Miguel: 87, 88, 97, 98, 99
Hijas de la Caridad: 443
Himno Nacional: 343
Hinojosa, Óscar: 567
Hiroshima: 349, 385
Holanda: 42
Hong Kong: 63, 347, 349, 365
Hospital, (lugar en Morelos): 131
Hospital General: 168, 302
Hospital Juárez: 302
Houston: 417
Howe, Irving: 32, 34
Huasteca: 464
 potosina: 548
Huatabampo: 133, 134
Huejutla: 561
huelgas: 155
Huerta, Efraín: 565
Huerta, Victoriano: 123, 124
huicholes: 603
Huitzilopochtli: 139
Huixtán: 579
Humboldt, Alejandro de: 91, 96, 97
Huntington, Samuel P.: 348, 373, 374

I

Ibarra, David: 249, 575
Ibarra, Epigmenio: 536
Iberoamérica: 77
ideal
 bolivariano: 77
 socialista: 33
identidad
 cultural: 370
 nacional: 371
ideología
 de la Revolución Mexicana: 203
 ilustrada: 103
 modernizadora: 109, 190
IFE: 496, 503, 520, 560, 561, 568, 569, 570, 606, 607, 609, 611
 Colegio Electoral: 322, 323, 607, 611
 consejeros ciudadanos del: 571, 607, 610
 véase elecciones
Iglesia: 11, 93, 95, 96, 100, 102, 103, 134, 152, 285, 454, 456, 460, 463, 507, 578
 Católica: 136, 137, 443
 de los pobres: 443
Iguala: 150
Ilustración: 99, 100, 113
IMAN: 235
IMOP: 564
imperialismo: 193
importaciones: 60, 112
IMSS: 211, 270
 -Solidaridad: 480
Indeco: 447
Independencia: 99, 101, 102, 103, 121, 147, 170, 250, 529
 Grito de Dolores: 98
India: 28, 44, 48, 56, 63, 65, 214, 269
indígenas: 167, 209, 467, 531, 532, 548, 580
 revueltas de: 581
 zonas: 464
indios: 310
 servidumbre de los: 90
indocumentados: 368
Indonesia: 46, 64, 65, 349
industria: 59, 101, 110
 alimentaria: 206
 automotriz: 206
 de punta: 59
 de transformación: 178
 de la construcción: 206

- del cemento: 206
- del conocimiento: 39
- eléctrica: 206, 207
- manufacturera: 165, 412
- mediana: 17
- pequeña: 17
- petrolera: 12, 135
- química: 45
- industrialización: 13, 15, 46, 49, 90, 109, 113, 138, 165, 167, 178, 179, 181, 182, 183, 188, 193, 195, 196, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 262, 274, 286, 311, 358
- complementaria: 273
- primera: 405
- proceso de: 254, 273
- rural: 231
- subordinada: 207
- desindustrialización: 345, 364, 428, 446
- industrias
 - colectivas del pueblo: 231
 - contaminantes: 54
 - medianas y pequeñas: 60
- INEGI: 410, 412, 437, 449, 525, 541, 542, 550
- inestabilidad: 612
 - económica y financiera: 563
 - política: 293
- inflación: 22, 23, 51, 72, 73, 189, 234, 249, 253, 254, 271, 274, 287, 288, 289, 290, 295, 296, 298, 299, 317, 321, 342, 350, 352, 355, 367, 405, 407, 408, 411, 412, 414, 425, 427, 429, 430, 541, 542, 544
- desinflación: 540
- importada: 275
- Infonavit: 235, 273, 378, 446, 447, 448
- información: 78
 - sistemas de: 38
 - y servicios: 77
- Inglaterra: 80, 112, 211, 361, 412
- ingobernabilidad: 519, 536, 612
- ingreso: *véase* distribución del ingreso
- ingresos fiscales: 195, 227
- INI: 396, 463, 588
- iniciativa privada: 80, 196, 210, 249
- Inmecafé: 587
- INPI: 235
- Instituto Agropecuario: 168
- Instituto de Estudios Estratégicos de la
 - Universidad de Harvard: 373
- Instituto de Finanzas Internacionales: 410
- Instituto de Física de la UNAM: 168
- Instituto de Investigaciones Económicas de la
 - UNAM: 363, 410
- Instituto de Matemáticas de la UNAM: 168
- Instituto de Proposiciones Estratégicas (IPE): 322
- Instituto de Salubridad: 168
- Instituto Mexicano del Comercio Exterior: 226
- Instituto Nacional de Antropología e Historia: 168
- Instituto Nacional de Estadística Geografía e
 - Informática: *véase* INEGI
- Instituto Nacional de la Solidaridad: 518
- Instituto Nacional de Nutrición: 268, 440, 444
- Instituto Nacional del Consumidor: 318
- Instituto Nacional para el Desarrollo de la
 - Comunidad: 235
- Instituto Politécnico Nacional: 168, 169
- Instituto Tecnológico de Monterrey: 415, 521, 542
- Instituto Wharton: 415
- Intermediate Technology Development Group: 43
- integración
 - acelerada: 362
 - desigual: 294
 - económica: 370, 373
 - formal: 366
 - silenciosa: 364, 406
 - (social) desintegración: 311
- intelectuales: 200, 221, 222, 224, 236
- interdependencia: 30, 34, 36, 53, 54, 292, 294, 339, 371
 - competitiva: 349
 - global: 70, 328, 365
- invasión
 - napoleónica en España: 98
 - norteamericana: 106
- inversión
 - educativa: 551
 - especulativa: 360
 - extranjera: 45, 58, 112, 179, 181, 182, 189, 194, 196, 206, 207, 227, 228, 229, 292, 294, 301, 340, 343, 344, 356, 358, 359, 375, 380, 402, 405, 406, 409, 419, 430, 545, 551, 553
 - inglesa: 206
 - internacional: 38, 39
 - norteamericana: 363, 366
 - privada: 188, 234, 235, 290, 413, 540, 544, 546, 551
 - productiva: 360, 407, 432, 470, 544
 - pública: 179, 188, 226, 234, 235, 236, 245, 269, 355, 420, 544, 549, 551, 552
 - y privada: 551

transnacional: 45
 investigación
 en salud pública: 268
 tecnológica: 441
 IPADE: 366, 413
 Irlanda: 384
 irrigación: 178, 195, 207
 Islas, Francisco: 104
 ISSSTE: 211
 Istmo de Tehuantepec: 464
 Italia: 384
 ITAM: 366, 401, 402, 411, 470, 481, 551, 564
 Iturbide, Agustín de: 99, 100
 iturbidismo: 102
 Iturriaga, José de: 111, 182
 IVA: 22, 290
 izquierda: 203
 intelectual: 201
 nueva: 201
 progresista: 194
 tecnocrática: 255
 Izquierda Unida: 511

J

Jackson, Jesse: 416
 Jalisco: 105, 108, 140, 309, 420, 421, 424, 498, 500,
 504, 547, 548, 566
 Jamaica: 51
 Japón: 30, 48, 49, 56, 62, 71, 78, 305, 344, 346, 347,
 348, 349, 364, 365, 384, 418
 Jaramillo, Rubén: 183, 198, 239
Jcomonalitic: 580
 Jesucristo: 106
 jesuitas: 95, 136
 Jiquilpan: 157
 Jordania: 50, 64, 65
 Jornadas por la Paz y la Reconciliación: 531
 jornaleros: 87, 122, 161, 231, 440, 445, 481, 582, 588
 Josefina: 443
 Jovellanos, Salvador: 97, 103
 Juan (comandante del EZLN): 533
 Juan Diego: 94
 Juan XXIII: 443
 Juárez, Benito: 102, 104, 107, 109, 111, 132
 Juárez (ciudad): 314, 506
 Juárez (colonia): 112
 juarismo: 114, 134
 Juchitán: 315

Jueves de Corpus: 222, 238
 Jungapeo: 509
 Junta de Asistencia Privada: 453
 Junta de Defensa: 131, 132
 Juquila: 166
 justicia: 80, 113, 305, 354, 529, 535, 536, 565, 575,
 580
 social: 145, 167, 199, 200, 223, 225, 245, 289, 353,
 354, 372, 414, 467, 471, 548, 585

K

Kahn, Herman: 27
 Kantor, Mickey: 418
 Katz, Friedrich: 119, 122
 Keynes, John M.: 209, 270
Ki: 160
 Kissinger, Henry: 22, 411
 Klein, Lawrence: 415
 Knight, Alan: 119, 123, 142
 Kolakowski, Leszek: 31
 Krauze, Enrique: 494, 518, 521, 538, 562, 565, 567,
 568, 575, 598, 612
 Krugman, Paul: 552
 Kuwait: 64, 65, 364

L

La Laguna: 123, 140, 157, 158, 161, 180, 183, 191, 198,
 464
 La Realidad: 535
 La Rioja: 75
 Las Cañadas: 579, 585, 586, 587, 593
 Lajous, Roberta: 374
 Larráinzar: 579
 Latapi, Pablo: 556
 latifundios: 126, 156, 183, 192, 198, 242, 399, 400,
 531, 533, 549, 550, 591
 Latinoamérica: 27, 28, 30, 31, 32, 40, 45, 49, 50, 55,
 56, 58, 59, 63, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 156, 166,
 181, 189, 201, 205, 209, 212, 225, 271, 272, 317,
 343, 347, 351, 352, 363, 364, 368, 444, 438, 461,
 512, 514, 554, 603
 integración: 59, 76
 izquierda: 76
 Lavín, José Domingo: 183
 Lecumberri: 214, 224
 Lehman Brothers: 418

- Lempérière, Annick: 201
 Lemus, Paulina Mercedes: 9
 León: 506
 léperos: 110
 Lerdo de Tejada, Sebastián: 110, 111
 Lévi-Strauss, Claude: 41
 Levy, Santiago: 478, 479, 480
 ley
 electoral: 252, 498, 520
 electoral nueva: 533
 ganadera: 591
 Ley Agraria: 127, 391, 396, 397, 398, 400, 401, 420, 470, 477
 Ley Agraria de Palafox: 130
 Ley de Consolidación: 95
 Ley de Desamortización: 125, 395
 Ley de Fomento Agropecuario: 266
 Ley de Inversión Extranjera: 429
 Ley de Inversiones: 375
 Ley de Inversiones Extranjeras: 344, 417
 Ley de Justicia Agraria: 533
 Ley de Patrimonio Familiar Ejidal: 138
 Ley de Reforma Agraria: 229
 Ley de Salario Mínimo: 154
 Ley de Sociedades de Solidaridad Social: 231
 Ley Federal de Reforma Agraria: 303
 Ley General de los Derechos de las Comunidades Indígenas: 533
 Ley Inquilinaria: 448, 449
 Ley Lerdo: 108
 Ley Nacional de Educación para Adultos: 235
 Ley Omnibus Trade: 344
 Ley Orgánica Municipal: 533
 Leyes de Colonización: 395
 Leyes de Desamortización: 108
 Leyes de Reforma: 108
 Leyes Nuevas de Indias: 92, 577, 579
 Leyva, Xóchitl: 582
 liberales: 100, 103, 105, 107, 109, 113, 123, 136
 liberalismo: 80, 99, 136, 142, 191, 355, 482, 600
 capitalista: 148
 clásico: 149
 social: 460, 462, 467, 468, 518
 tecnocrático: 298
 liberalización
 política: 373
 progresiva: 381
 libertad: 31, 33, 34, 37, 98, 354, 507, 529, 535, 536
 de expresión: 200
 sindical: 139
 y justicia: 518
 Libia: 293
 libre cambio: 181
 libre comercio: 181, 337, 340, 346, 348, 349, 423, 553
 libre empresa: 211
 libre intercambio internacional: 338
 Liga 23 de Septiembre: 238, 239
 Liga de Comunidades Agrarias: 154, 159, 163
 Limantour, José Yves: 107, 196
 Línea de Masas: 582, 583
 Línea Proletaria: 582
 Lipovetsky, Gilles: 601
 Lipset, Seymour: 611
 Loaeza, Soledad: 286, 295, 296, 563
 Lombardía: 161
 Lombardo Toledano, Vicente: 107, 154, 165, 183, 186, 188, 190
London School of Economics: 413
 Londres: 42, 89, 552
 López, Marco Antonio: 9
 López Arias, Jacinto: 190, 198
 López Cámara, Francisco: 200
 López Mateos, Adolfo: 197, 198, 199, 202, 203
 López Moreno, Javier: 495
 López Portillo, José: 226, 242, 282, 289
 López Velarde, Ramón: 119, 250
 Los Altos: 577, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 589
 los "científicos": 113, 123, 395
 Los Mochis: 162
 Los Pinos: 228, 246, 399, 516
 Lozada, Manuel: 105
 Lucero, Ignacio: 161
 Luiselli, Cassio: 600
 Lula (Luis Inácio da Silva): 511, 512
 Lustig, Nora: 317, 318
- ## LL
- llanos de Comitán: 577
- ## M
- Maastricht: 349
Macbeth: 562
macehualtin: 91, 92
 Madero, Francisco I.: 123, 124, 138, 139, 324, 516, 536, 537
 Madero, Pablo Emilio: 506

- Madrid: 560
- Madrid Hurtado, Miguel de la: 255, 282, 285, 287, 289, 291, 300, 297, 498
- maestros rurales: 164
- Magaña, Gildardo: 124
- Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia: 524
- Malasia: 65, 317, 349
- Maldonado, Francisco Severo: 103
- Malpaso: 586
- Manifiesto a la Nación: 254
- Manjarrez, Froylán: 150
- mano de obra: 39, 379
- barata: 375, 376
- mexicana: 273
- MAP: 510, 511
- Mapaztlán: 131
- maquiladoras: 357, 359, 365, 379, 405, 410, 445, 446
- Marcos (*subcomandante*): 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 576, 584, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 604, 605
- Marcha Xi' Nich' (de las hormigas): 584
- Margáin, Hugo B.: 225, 226
- Margaritas: 530
- marginación: 45, 75, 88, 256, 257, 281, 307, 461, 477
- autosuficiente: 260
- en Chiapas: 578
- extrema: 566
- marginados: 17, 18, 39, 65, 67, 88, 90, 237, 257, 259, 269, 277, 310, 325, 416, 443, 462, 466, 601
- rurales: 424
- urbanos: 604
- Marqués de Comillas: 579
- Martínez, Ifigenia: 339, 375
- Martínez, Modesto: 531
- Mastretta, Angeles: 562
- materias primas: 68, 69, 71, 73, 75, 90, 112, 178, 185, 197, 207, 271, 291, 345, 346, 403
- estratégicas: 180
- Maximiliano (emperador): 104
- Mayo (valle en Sonora): 241, 582
- Mayorazgo de Salgado: 131
- mayos: 123
- mazahuas: 603
- Mazariegos, Diego de: 584
- Medellín: 443
- medieros: 122
- Medin, Tzvi: 148
- medio ambiente: 34, 36, 40, 61, 66, 68, 79, 192, 368, 379, 384, 479, 573
- protección del: 49
- recursos naturales: 71
- medios de comunicación: 34, 35, 54, 137, 215, 261, 516, 533, 536, 597
- Mendes de Almeyda, Candido: 41
- Méndez, Eloisa: 9
- mercado: 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 53, 55, 58, 66, 77, 79, 80, 88, 89
- agrícola: 260
- común: 343
- de consumo: 47
- de exportación: 233
- democrático: 33
- européo: 181
- externo: 48, 50, 56, 60, 358
- global: 53, 74, 292, 345
- hemisférico: 349
- interno: 15, 17, 45, 48, 49, 53, 56, 60, 112, 197, 206, 207, 255, 259, 267, 289, 293, 302, 339, 347, 350, 364, 365, 378, 403, 407, 410, 411, 418, 425, 432, 449
- lógica del: 16, 78, 165
- mundial: 38, 45, 46, 48, 56, 61, 94, 95, 290, 328, 329, 350
- mundialización del: 29
- nacional: 192
- norteamericano: 367
- Mercado Común del Caribe: 74
- Mercado Común del Cono Sur: 75
- mercados
- internacionales: 297, 366
- municipales de Morelos: 130
- nacionales: 345
- Mérida: 499, 506, 523, 564
- Merino, José: 134
- Merino, Mauricio: 418, 497
- Meseta Central: 121, 125
- Mexicali: 161
- mexican way of life*: 213
- Mexicana de Aviación: 302
- mexicanidad: 190
- México: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 40, 50, 58, 59, 61, 62, 65, 73, 74, 75, 77, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 101, 106, 107, 109, 112, 113, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 145, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 162, 165, 166, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 196, 200, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 221, 223, 225, 226, 228, 240, 250, 251,

- 261, 262, 263, 269, 270, 271, 272, 273, 279, 280, 286, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 301, 306, 318, 319, 322, 324, 325, 326, 338, 339, 343, 347, 349, 351, 354, 355, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 393, 394, 395, 401, 403, 406, 408, 411, 415, 416, 417, 418, 423, 424, 425, 428, 429, 431, 438, 439, 441, 444, 451, 457, 461, 495, 497, 499, 501, 512, 514, 520, 521, 534, 535, 536, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 562, 564, 566, 567, 569, 572, 574, 576, 584, 594, 598, 601, 611, 612
- Ayuntamiento de: 98, 128
- campesino: 167
- ciudad de: 35, 98, 110, 126, 135, 315, 363, 415, 451, 523
- Centro Histórico de la: 412, 451
- Zócalo de la: 199, 303, 323, 399, 412, 499, 504, 535, 561
- desarrollado: 222
- dos Méxicos (*refiérase a la oposición entre el México tradicional y el México moderno*): 19, 143, 145, 188, 194, 215, 222, 250, 325, 416, 431, 440, 460, 532, 554, 556, 595, 603
- es Chiapas: 600
- gobierno de: 76
- Golfo de: 55
- historia de: 214
- marginal: 222
- moderno: 198
- muchos Méxicos: 123, 281, 529
- nuevo: 129, 145, 166
- obrero: 167
- otro, ...el tradicional: 12, 13, 24, 142, 177, 228, 280, 468, 556, 602
- plural: 224
- pobre: 427
- primer: 224
- profundo: 120, 601
- relegado: 121
- rural: 110, 152
- segundo: 224
- texanos de: 134, 137
- tradicional: 147, 152, 168, 395
- Meyer, Jean: 103, 106, 113, 119, 136, 137, 138, 153
- Meyer, Lorenzo: 22, 165, 292, 313, 324, 325, 341, 362, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 513, 515, 517, 519, 521, 539, 541, 562, 567, 575, 603
- microelectrónica: 25, 26
- microempresa: 17
- Michapa: 198
- Michigan: 385
- Michoacán: 87, 108, 123, 124, 134, 161, 263, 314, 322, 393, 464, 499, 500, 504, 509, 510, 530, 547, 548, 566, 606
- Mier, Fray Servando Teresa de: 16, 87, 93, 98, 101, 250
- migración: 17, 34, 43, 45, 75, 78, 383, 385, 404, 405, 573, 580, 582, 585, 586
- campesina: 44, 446
- ilegal: 293
- interna: 273
- marginados: 594
- milagro
- agrícola: 180
- del petróleo: 430
- industrial: 180
- Milagro Mexicano: 15, 166, 171, 177, 178, 185, 186, 196, 202, 206, 211, 216, 290, 449
- nuevo: 13, 15, 22, 310, 329, 338, 406, 411, 450
- primer: 445, 457
- segundo: 457
- milenarismo: 594
- indio: 577
- militares: 64, 79
- Millán, Julio: 546
- Miller: 411
- minería: 112
- minifundio: 198, 231, 391, 396, 398, 404, 550
- ejidal: 507
- minifundistas: 188
- mínimos de bienestar: 257
- miseria: 113
- círculo de la: 88
- urbana: 35
- misiones
- culturales: 167, 235
- protestantes: 137
- MIT: 367, 411, 417
- Mixcoac: 206
- Mixteca Alta: 179
- Mixtecos de Puebla: 531
- MLN: 203
- modelo
- agroalimentario: 304
- alimentario transnacional: 304
- alternativo: 310, 432
- chileno: 401
- de agricultura comercial: 232

- de agricultura polarizada: 306
- de Calles: 210
- de desarrollo: 215, 376
 - alternativo: 303
- de industrialización: 409, 449
- desarrollista: 201
- económico mexicano: 361
- excluyente: 598
- maquilador: 358
- mexicano: 431
 - de desarrollo: 261
- modernizador: 593
- neoliberal: 271, 272, 286, 303, 352, 431, 449, 457, 461
- norteamericano: 191
- Occidental: 127
- reaganiano: 351
- soviético: 148
- modernidad: 11, 12, 14, 16, 19, 137, 142, 149, 167, 183, 208, 215, 221, 223, 258, 261, 280, 281, 306, 309, 324, 371, 431, 451, 515, 532, 555
 - económica: 200, 324
 - política: 200
- modernización: 13, 14, 15, 16, 27, 29, 33, 34, 47, 49, 57, 59, 60, 61, 76, 77, 119, 138, 142, 147, 150, 213, 238, 290, 301, 302, 308, 310, 324, 325, 328, 353, 363, 381, 392, 404, 405, 430, 446, 450, 451, 492, 513, 516, 519, 541, 550, 594, 595, 600, 601
 - agrícola: 232, 414
 - capitalista: 112
 - de la industria petrolera: 380
 - del campo: 398
 - democrática: 574
 - económica: 59, 288, 291, 297, 341, 492, 512
 - modelo de: 114
 - nacionalista y popular: 354
 - política: 512
 - porfiriana: 286
 - productiva: 73
 - rural: 395
 - salvaje: 75, 312
 - segunda: 285, 286, 338
 - selectiva: 460
- Modigliani, Franco: 411
- Módulo de Atención a las Demandas Indígenas y Campesinas: 531
- Moguel, Julio: 469, 470, 590, 591, 600, 603
- Molina Enríquez, Andrés: 123
- Molinar Horcasitas, Juan: 319, 320, 321, 323, 472, 557, 569
- Montelargo: 241
- monarquía española: 120
- Monclova: 314
- monocracia: 513
- monopolio: 139
 - del Estado: 141
- monopolios norteamericanos: 380
- Monsiváis, Carlos: 35, 213, 221, 312, 315, 369, 370, 371, 372, 493, 514, 538, 562, 566, 575
- montañas del Sur (Guerrero): 124
- Montaño, Otilio: 127, 131
- Montemayor, Carlos: 239, 424
- Monterrey: 177, 222, 227, 266, 269, 296, 446, 564, 566
- Montes Azules: 579
- Mora, José María Luis: 101, 102, 107
- Morales, Rodrigo: 502, 503
- moratoria: 295
- Morelia: 211
- Morelos y Pavón, José María: 99, 101, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 140, 141, 164, 183, 198, 239, 263, 399, 419, 453, 471, 500, 511, 513, 566
- MORI: 557, 564, 568, 574, 611
- Morin, Edgar: 41
- Mosk, Sanford A.: 193
- movilidad social: 210, 543
- movilización social: 591
- movimiento
 - al socialismo: 509
 - campesino: 242, 548, 582
 - de electricistas: 254
 - estudiantil del CEU: 320
 - estudiantil-popular: 214
 - ferrocarrilero: 199, 202
 - obrero: 136, 183, 190, 200, 204, 227, 254
 - revolucionario: 122
 - territorial: 504
 - urbano popular: 320, 446, 448, 504, 508
 - zapatista: 129
- Movimiento Estudiantil de 1968: 212, 213, 215, 221, 238
 - generación rota: 214
 - manifestación “del silencio”: 214
 - sacrificio de Tlatelolco: 221
- Movimiento Ciudadano por la Democracia: 514
- Movimiento de Acción Popular (MAP): 511
- Movimiento de Liberación Nacional (MLN): 203
- Movimiento de los No Alineados: 69, 201
- Movimiento Nacional de Resistencia y Lucha Campesina: 399

Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP): 511
 Movimiento Vecinal: 448
 movimientos
 armados: 608
 civiles y de masas: 604
 estudiantiles: 211
 insurgentes: 603
 populares: 77, 496, 508
 populares de Hidalgo y Morelos: 99
 serranos: 123
 sociales: 508
 Mozambique: 63
 Mulroney, Brian: 75
 multinacionales: 37, 54, 431
 municipios: 18, 34, 151
 Muñoz Ledo, Porfirio: 341, 510, 511, 517, 519, 522, 561

N

nación: 11, 18, 100, 109, 113, 127, 192, 193, 224, 250, 291
 Nacional Monte de Piedad: 110
 nacionalismo: 76, 255, 467
 económico: 79
 internacionalista: 371
 mexicano: 380
 nacionalización bancaria: 278, 279, 295, 296, 313, 315
 Naciones Unidas: 27, 52, 54, 66, 69, 70, 343, 568, 610
 Conferencia de Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología: 27
 FAO: 60, 61
 PNUD: 36, 37, 39, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 69, 74, 459, 466
 UNCTAD: 49, 54, 56
 UNESCO: 74, 438, 507
 UNICEF: 38, 50, 51, 52, 74, 89
 Nafinsa: 166, 182, 189, 207, 300, 416
 NAFTA: véase TLC
 Nagasaki: 349
 nahuas: 92
 Nairobi: 69
 narcotráfico: 292, 293, 565, 569
 combate al: 75
 drogas: 54, 62, 75, 293, 368
 narrativa tzeltal-tzotzil: 106
 Nava, Salvador: 374, 501, 510, 513, 514

navismo: 499
 Nayarit: 87, 316, 522, 547, 548, 550
 necesidades básicas: 71, 89, 92, 111, 268, 300, 303, 307, 467, 468
 neocardenismo: 325, 508
 neolatifundio: 187, 191, 198, 229, 231, 232, 240, 393, 588
 financiero: 187, 188
 territorial: 187
 neoliberales: 255, 368
 neoliberalismo: 22, 80, 245, 270, 273, 274, 276, 277, 286, 313, 317, 337, 348, 350, 351, 352, 355, 375, 432, 460, 462, 467, 468, 543, 603
 latinoamericano: 338
 modelo: 55, 62, 75
 neomaltusianismo: 18
 neopanismo: 507
 neopopulismo: 492
 neoproteccionismo: 349
 neozapatismo: 536, 600, 604, 605
New Deal: 148, 149, 154, 300
New York Herald Tribune: 170
New York Times: 22
 Nezahualcóyotl: 603
 NIC: 347
 Nicaragua: 511, 543
 Nigeria: 63, 543
 Norte
 (*refiérese a los países del*): 19, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 121, 124, 547, 608
 -Norte: 75
 -Sur: 49, 69, 88
nouvelle gauche: 201
 Nuestra Señora de la Unanimidad: 315
 Nueva España: 91, 96, 97, 101, 125, 578
 Nueva Inglaterra: 101
 Nueva Italia: 161
 Nueva Jerusalén: 106, 578
 Nueva York: 29, 416
 Nueva Zelanda: 125
 Nuevo León: 140, 222, 309, 322, 323, 354, 498, 499
 Nuevo Mundo: 91, 139
 nutrición: 50, 52, 74, 400, 482, 483
 deficiencia en la: 318
 desnutrición: 34, 47, 50, 51, 55, 63, 66, 67, 90, 269, 304, 318, 376, 440, 441, 445, 469, 478, 479
 desnutrición infantil: 534
 Nyerere, Julius: 57, 64, 67

O

Oaxaca: 87, 88, 121, 123, 124, 314, 315, 322, 323, 399, 459, 460, 464, 473, 510, 522, 542, 548, 554, 566, 578, 610

Oaxtepec: 57

obispo Carrasco: 460

obispo de Chiapas: 461, 577

obispo de Oaxaca: 461

obispos de Veracruz: 444

Obregón, Álvaro: 14, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 240, 396

Obregón, ciudad: 161, 241

obregonismo: 125

obreros: 88, 163, 224
 sindicalizados: 204

Ocampo, Melchor: 104, 107

Occidente: 25, 26, 27, 30, 32, 41, 42, 94
 eje de: 348
 moderno: 90

Océano Pacífico: 291
 Costa del: 363

OCDE: 347, 437, 541

Ocosingo: 530, 531, 534, 579, 583

Ocoyoacac: 303

Ocuilas: 123

Oeste: 215, 224

O'Gorman, Edmundo: 101

OIR-Línea de Masas: 509

Olaguibel, Carlos: 11

Olaque (barrio de): 111

Olimpiada 1968: 212, 213

OMS: 478, 507

ONG: 18, 35, 36, 70, 71, 77, 381, 385, 386, 442, 447, 449, 451, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 502, 517, 531, 562, 568, 580, 588, 602

opinión
 pública: 36
 mundial: 35

orden
 colonial: 109
 cósmico: 91
 económico global: 37
 económico internacional: 56
 económico internacional, nuevo...: 69, 338
 mundial, nuevo [des]: 13
 prehispánico: 93

Organización Ideológica Dirigente: 582

Organización Independiente Revolucionaria-Línea de Masas: 511

Organización Internacional del Trabajo (OIT): 45

Organización Mundial de Comercio (OMC): 71

Organización Punto Crítico: 509

organizaciones
 campesinas: 224
 vecinales: 320

Organizaciones No Gubernamentales: *véase* ONG

Oriente Medio: 50

Orozco, Luis Wistano: 103, 112

Ortiz, Tadeo: 103

Ortiz Gallegos, Jorge Eugenio: 506, 575

Ortiz Mena, Antonio: 196, 204

Ortiz Pinchetti, J. Agustín: 562, 567, 568, 569, 570, 571, 606, 608

Ortiz Rubio, Pascual: 140

OTAN: 348

otomíes (de Querétaro): 531

Oxchuc: 586

ozono: 54, 70

P

Pablo VI: 443

pacto
 continental: 375
 corporativo: 496
 de civilidad: 521, 523
 nacional: 568
 social: 98, 142, 270, 299, 541, 548, 594
 social y político: 326

Pacto de Aguascalientes: 603

Pacto de Carranza: 136

Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE): 342, 357, 405, 412, 422, 425, 426, 522

Pacto de la Concordia: 574, 610

Pacto de Ocampo: 231, 242

Pacto de Solidaridad Económica: 316, 321

Pacto de Varsovia: 348

Pacto Económico: 541

Pacto Intersectorial: 257

Padilla, Ezequiel: 145

Padrón, Joel (sacerdote): 584

país
 campesino: 12, 19
 de la desigualdad: 91
 democrático: 516
 en transición: 373
 moderno: 17, 19, 142, 146, 213, 278, 483, 532, 594

- tradicional: 12, 13, 14, 17, 19, 100, 137, 141, 142, 152, 171, 264, 278, 483, 493, 532, 594
- países
- árabes: 49, 64
 - árabes petroleros: 63
 - coloniales: 90
 - con culturas tradicionales: 42
 - del Este: 31
 - del Sur: 53, 58
 - desarrollados: 25, 26, 27, 38, 39, 42, 44, 45, 59, 227
 - en desarrollo: 28, 39, 40, 41, 45, 49, 53, 54, 62, 63, 65, 71, 346, 349, 350, 379
 - Escandinavos: 211
 - industriales: 29, 38, 63, 90
 - industrializados: 25, 39, 47, 298
 - latinoamericanos: 59
 - más pobres: 50
 - occidentales: 41
 - petroleros: 50
 - pobres: 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 49, 54, 57, 60, 61, 67, 68, 77, 79, 89, 90, 259, 346, 351, 376
 - postindustriales: 78
 - prósperos: 40, 78
 - ricos: 28, 259
 - subdesarrollados: 41, 54
- Pakistán: 58, 65
- Palacio Legislativo: 323
- Palacio Nacional: 399, 499
- Palafox, Manuel: 126, 127
- Palenque: 579, 584
- Palermo: 120
- PAN: 184, 314, 316, 320, 321, 322, 323, 342, 374, 375, 376, 472, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507, 509, 522, 523, 559, 560, 564, 566, 567, 574, 575
- CEN del: 504
- Panetta: 417
- Pani, Alberto: 165, 166
- Papantla: 593
- Papelera Atenquique: 181
- Paraguay: 63, 74, 317
- París: 215, 451, 457
- partido
- de Estado: 12, 604, 605
 - hegemónico: 557
- Partido Acción Nacional: *véase* PAN
- Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM): 316, 495
- Partido Comunista Mexicano (PCM): 203, 222, 238, 511, 583
- Partido de la Revolución Democrática (PRD): 375, 447, 471, 472, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 517, 522, 535, 551, 556, 558, 559, 560, 561, 566, 572, 607, 608, 609
- Frente Nacional: 448
- Partido de la Revolución Socialista (PRS): 511
- Partido de los Pobres: 239
- Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN): 316, 495
- Partido del Trabajo: *véase* PT
- Partido Democrata Mexicano (PDM): 499
- Partido Liberal: 135, 509
- Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT): 238, 316
- Partido Mexicano Socialista (PMS): 316, 509, 510, 511
- Partido Patriótico Revolucionario (PPR): 511
- Partido Popular: 190
- Partido Popular Socialista (PPS): 203, 316, 495
- Partido Pronasol: 471
- Partido Republicano: 209
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): 190, 194, 203, 209, 210, 244, 245, 246, 253, 254, 313, 319, 320, 321, 322, 323, 326, 327, 466, 467, 470, 471, 472, 473, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 506, 509, 510, 512, 519, 523, 524, 551, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 567, 568, 571, 572, 575, 606, 608, 609, 610, 612
- Asamblea Nacional: 243, 504
- IEPES del: 281, 326
- gobierno: 612
- PAN: 520
- Partido de la Solidaridad: 499
- PNR: 138, 150, 154
- PRM: 505
- Partido Socialista de los Trabajadores: *véase* PST
- Partido Verde: 509
- partidos
- independientes: 200
 - políticos: 211, 533
- Parra, Manuel Germán: 193
- Pascual Moncayo, Pablo: 510
- Pastor, Robert A.: 79, 373
- pastoral católica: 580
- paternalismo: 213, 468
- Patiño Ixtolinque, Pedro: 106
- paz: 529, 578
- pública: 523

- social: 39, 353
- espacio civil para la: 562
- Paz, Octavio: 25, 27, 30, 33, 34, 90, 100, 107, 119, 129, 140, 201, 210, 214, 216, 222, 223, 224, 228, 244, 250, 251, 314, 431, 516, 521, 522, 555, 562, 598, 599
- PEA: 540
- Peace, Don: 368
- peones acasillados: 94, 140, 591
- pequeña industria: 272, 274, 276, 363, 366, 439
- pequeña propiedad: 187
- Perelló, Marcelino: 214
- Pereyra, Carlos: 145, 148, 236, 244, 252, 278, 302
- Perot, Ross: 416, 418
- Perú: 51, 63, 74, 352, 511
- Peschard, Jacqueline: 314, 500
- Petrich, Blanche: 532, 535
- petróleo: 13, 19, 26, 28, 29, 40, 49, 50, 58, 112, 139, 181, 189, 199, 207, 249, 250, 251, 253, 258, 264, 265, 266, 272, 277, 279, 292, 293, 295, 311, 359, 361, 362, 364, 368, 369, 380, 429, 544
- auge: 298, 360
- boom*: 276, 315
- expropiación petrolera: 147, 153, 166
- petroquímica: 23
- precios del: 69, 267, 270, 279, 321, 409
- Petróleos Mexicanos (Pemex): 195, 251, 265, 266, 279, 301, 342, 354, 361, 380, 450, 504
- PGR: 524, 566
- PIB: 26, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 62, 63, 64, 65, 73, 112, 204, 249, 267, 290, 356, 362, 367, 384, 407, 408, 410, 412, 437, 438, 449, 461, 541, 542, 544, 545, 551, 552
- Pider: 230, 231
- Piedras Negras: 314
- Pimentel, Francisco: 108
- Pinochet, Augusto: 351, 401
- Piore, Michael J.: 367
- pipiltin*: 91, 92
- PIRE: 302
- Pittsburgh: 579
- Plan Brady: 343
- Plan de Amatlán: 106
- Plan de Anenecuilco: 399
- Plan de Ayala: 123, 124, 131
- Plan de emergencia: 552
- Plan de Guadalupe: 124
- Plan de Iguala: 99
- Plan de San Luis: 123
- Plan de Tuxtepec: 111
- Plan Global de Desarrollo: 255, 341
- Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina: 229
- Plan Marshall: 189
- Plan Michoacán: 471
- Plan Nacional: 255
- Plan Nacional de Desarrollo: 291, 303, 342, 344, 352, 358
- Plan Nacional de Desarrollo Industrial: 253, 255
- Plan Nacional de Salud: 268
- Plan Nueva Laguna: 471
- Plan Sexenal: 148, 149, 150, 157
- planeación
 - del desarrollo: 18
 - democrática: 287
- plata
 - de México: 94, 95
 - de México y Perú: 94
- Plaza de la Constitución: 213
- Plaza de Santo Domingo: 139
- plebiscito: 540
- Plural*: 244
- pluralidad: 496
- pluripartidismo: 251, 252
- población: 28
 - campesina: 12, 197
 - Conferencia del Cairo (Mundial sobre Población): 20
 - crecimiento demográfico: 18, 49, 60, 61, 72, 170, 205, 235, 353, 412, 541
 - indígena: 18, 95, 97, 167, 581
 - marginada: 296
 - materno-infantil: 39
 - mortalidad: 89, 160, 595
 - mortalidad infantil: 51, 63, 65, 89, 479, 586, 595
 - mundial: 78
 - planificación familiar: 18, 39, 235, 438
 - rural: 51, 89, 135, 193, 198, 202, 259, 273
 - sobrepoblación: 68
 - urbana: 64, 101, 167
- pobreza: 12, 16, 19, 20, 27, 29, 30, 36, 37, 39, 45, 47, 48, 50, 55, 62, 66, 67, 68, 72, 78, 87, 88, 89, 90, 96, 120, 135, 138, 145, 170, 208, 249, 250, 259, 281, 310, 319, 347, 366, 428, 432, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 447, 451, 456, 457, 459, 460, 463, 471, 472, 474, 478, 479, 481, 482, 540, 541, 546, 549, 551, 564, 567, 573, 575, 582, 597, 598
- absoluta: 56, 63, 273, 319
- círculo vicioso de la: 90
- cultura de la: 89

- del campo: 35
- del Sur: 74, 75
- extrema: 17, 34, 38, 49, 52, 59, 73, 88, 257, 319, 353, 381, 437, 438, 441, 458, 463, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 483, 550, 576, 580
- geografía de la: 476
- moderada: 475, 478
- rural: 425, 481
- síndrome de la: 54
- urbana: 90, 312, 319, 481
- pochteca*: 92
- poder
 - adquisitivo: 411
 - adquisitivo del salario: 272
 - caciquil: 589
 - económico y político: 208
 - presidencial: 170, 194
 - público: 503
- Poder Ejecutivo: 150, 496, 549, 570, 572, 611
- Poder Judicial: 139, 326, 385, 507, 524, 574, 588
- Poder Legislativo: 299, 326, 524, 561
- policía militar: 531
- política
 - agraria: 138, 232, 306
 - arancelaria: 367
 - de desarrollo: 208, 211
 - de inversión: 256
 - económica: 207
 - educativa: 539
 - fiscal: 271
 - industrial trilateral: 383
 - moderna: 341, 342, 491
 - monetaria: 271
 - popular: 582
 - salarial: 302
 - social: 207, 367, 477, 481, 483, 539, 552
- Poniatowska, Elena: 213, 214, 228, 575
- populismo: 80, 188, 236, 244, 245, 249, 341, 468, 518
- porfiriato: 111, 113, 134, 135, 142, 146, 290, 521, 579
- Portland: 206
- Portugal: 349
- Posadas Ocampo, Juan Jesús (cardenal): 565
- Posdata*: 210, 215
- positivismo: 139
- positivistas: 113
- posmodernidad: 27, 41, 594, 597
- Pozas Horcasitas, Ricardo: 609
- Premio Príncipe de Asturias: 567
- Presidencia de la República: 459, 463
- presidencialismo: 287, 326, 358, 428, 492, 494, 497, 517, 536, 600, 605
- autoritario: 201, 327, 481, 599
- PRI: *véase* Partido Revolucionario Institucional
- Prieto, Guillermo: 107
- Primer Mundo: 13, 16, 19, 22, 23, 33, 43, 75, 213, 258, 329, 337, 338, 339, 341, 346, 411, 415, 428, 430, 457, 521, 532, 539, 541, 565, 597, 599
- Primera Cumbre Iberoamericana: 71, 74
- Princeton: 76, 470
- Príncipe Salina: 120
- privatizaciones: 355, 358, 360, 399, 427
- problema agrario: 124, 129
- Procampo: 422, 423, 424, 425, 475, 548, 551, 561
- Procede (Programa de Certificación de Derechos): 547, 550
- Proceso*: 251
- PROCUP: 538
- Procuraduría de Colonias Populares del DDF: 447
- Procuraduría de Justicia Agraria: 396
- Procuraduría General de la República: *véase* PGR
- productividad: 32
- Producto Interno Bruto: *véase* PIB
- Producto Mundial Bruto: 78, 345, 347
- programa cardenista: 237
- Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Tierras: 419
- Programa de Desarrollo Regional: 464
- Programa de Emergencia: 540
- Programa de Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud al Medio Rural: 268, 270
- Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo: 230
- Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP): *véase* elecciones
- Programa de Servicios de Salud para la Población Abierta: 479
- Programa Inmediato de Reordenación Económica: 288
- Programa Maestro de Organización y Capacitación Campesina: 230, 232
- Programa Nacional de Alimentación: 303, 480
- Programa Nacional de Solidaridad: *véase* Pronasol
- progreso: 14, 16, 33, 34, 41, 42, 90, 101, 103, 107, 109, 113, 114, 137, 138, 145, 148, 149, 152, 167, 168, 178, 190, 191, 193, 207, 208, 213, 215, 223, 224, 225, 229, 237, 238, 256, 258, 259, 261, 280, 306, 312, 431, 594
- económico y social: 544

improductivo: 260
 teoría del: 31
 Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad): 65, 73, 89, 341, 353, 424, 438, 439, 446, 447, 448, 457, 458, 460, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 479, 480, 482, 491, 492, 500, 501, 507, 510, 550, 561, 589
 Comités de Solidaridad: 461, 464, 466, 467, 476, 589, 590
 Empresas en Solidaridad: 461, 464
 Escuela Digna: 464, 466, 589
 Fondo de Solidaridad: 231, 464
 Mujeres en Solidaridad: 464
 Niños en Solidaridad: 464, 477, 589
 IMSS/Solidaridad: 480
 Prospectiva Estratégica, A.C.: 378
 proteccionismo: 181, 188, 189, 195, 301, 367, 382, 383, 409, 432
 protestantismo: 136
 proyecto
 alternativo: 374
 borbónico: 286
 cardenista: 146, 149
 de los "científicos": 142
 de Plan Básico de Gobierno: 281
 desarrollista: 190, 238
 económico: 286, 430
 modernizador: 12, 100, 120, 123, 138, 142, 149, 163, 170, 190, 212, 278, 309, 310, 337, 356, 374, 396, 398, 401, 430, 433, 470, 54
 nacional: 21, 142
 nacional de alimentación: 268
 nacional de desarrollo: 253, 276
 neoliberal: *véase* neoliberalismo
 Proyecto Vaquerías: 419
 PRT: 316
 PST: 238, 316, 579, 583
 PSUM: 315, 316, 510, 511, 579, 583
 PT: 471, 500, 508, 511
 Puebla: 87, 88, 98, 108, 123, 124, 134, 141, 211, 241, 314, 322, 323, 354, 444, 464, 498, 510, 530, 547, 548, 610
 pueblos indios: 311
Punto Crítico: 511

Q

Querétaro: 88, 108, 140, 241, 315, 399, 548, 550
 Quetzalcóatl: 139

Quintana, Enrique: 450, 546
 Quintana Roo: 106, 135, 550
 Quintanar, Alberto: 510
 Quinto Centenario de Resistencia Indígena y Popular: 584
Quiptic Ta Lecubtezal: 583
 Quiroga, Vasco de : 261, 263, 480
 Tata Vasco: 154, 263

R

radicallismo: 137
 Radio Universidad: 222
 Raimond Kedilhac, Sergio: 413
 Ramírez, Carlos: 428, 514, 516
 Ramírez, Ignacio: 11, 109, 113
 Rancho Nuevo: 597
 Rawls: 482
 Reagan, Ronald: 32, 33, 34, 80, 292, 293, 300, 350
 reaganismo: 75, 294
 rebelión agraria: 123
 Rebelión de Imán: 106
 Rebolledo, Juan: 354
 recesión
 de la economía: 317, 367
 económica mundial: 156
 norteamericana: 408
 Reconstruction Finance Corporation: 300
 reconversión: 424
 del campo: 394
 industrial: 290, 294
 recursos
 naturales: 305, 400
 públicos: 469
 Red de Acción: 374
 Red de Convergencia: 369
 red global: 291
 Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio: 369, 375, 460
 Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos: 460
 Red Nacional de Pescadores Ribereños: 460
 reelección: 516
 Reforma: 22, 95, 102, 251, 395, 467, 552
 reforma
 agraria: 59, 103, 104, 130, 133, 138, 141, 156, 157, 161, 165, 186, 187, 188, 198, 205, 237, 254, 305, 306, 307, 552, 553, 600

- cardenista: 180
 - del Estado: 353, 413
 - económica: 254, 519, 539, 543
 - electoral: 315, 507, 519, 520, 558, 560, 573
 - estructural: 355
 - política: 223, 249, 251, 252, 253, 255, 373, 493, 494, 515, 519, 573, 575
 - segunda: 190
 - social: 482
 - universitaria: 211, 212
 - reformas
 - borbónicas: 285
 - democráticas: 498
 - liberales: 285
 - neoliberales: 401
 - reformismo: 236, 538
 - régimen
 - ejidal de tenencia: 163
 - feudal: 580
 - región
 - chamula: 588
 - de Las Cañadas: 593
 - regionalización: 349
 - Reich, Robert B.: 36, 77, 78, 79
 - Reino de Dios: 582
 - Reino de la Justicia Divina: 578
 - Rello, Fernando: 303, 304, 306
 - Renovación Habitacional: 452, 453
 - reparto agrario: 129, 134, 138, 140, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 186, 187, 229, 256, 303, 307, 308, 369, 392, 394, 395, 399, 400, 548, 549, 550, 551, 585
 - República: 110, 124, 183
 - reserva
 - petrolera: 266
 - en dólares: 406
 - resistencia civil: 577, 604, 605
 - Restrepo, Iván: 157, 158
 - Reunión Nacional para la Reforma Económica: 254
 - revolución
 - agraria: 142
 - postindustrial: 28, 71, 89
 - tecnológica: 337
 - verde: 44, 59
 - Revolución Cubana: 201, 205, 237
 - Revolución de Mayo: 215
 - Revolución Francesa: 125
 - Revolución Industrial: 28, 41, 89, 101, 188, 193
 - Revolución Inglesa: 125
 - Revolución Mexicana: 15, 113, 119, 120, 121, 127, 129, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 145, 148, 149, 183, 191, 210, 270, 280, 288, 320, 325, 327, 396, 467, 508, 515, 536
 - ideología de la: 203
 - Revueltas, José: 214
 - Reynolds, Clark: 364
 - Reyes, Alfonso: 168
 - Reyes, Candelario: 160
 - Reyes Heróles, Federico: 252, 339, 374, 492, 514, 568, 575
 - Reyes Heróles, Jesús: 243, 251, 575
 - Reyes Heróles G. G., Jesús: 544, 545, 546, 547
 - Reyes Osorio, Sergio: 229
 - rezago
 - agrario: 550, 588, 600
 - social: 578
 - tecnológico: 407
 - Ricardo, David: 55
 - Rico, Guillermina: 451
 - Richey, Charles R.: 417
 - Riego (levantamiento de): 99
 - Río de Janeiro: 71
 - río Verde: 106
 - riqueza
 - acumulación de: 92
 - concentración de la: 16, 88, 190, 542, 543
 - petrolera: 251, 272
 - Rivera, Edna: 9
 - Rivera, Miguel Ángel: 449
 - Robles, Federico: 210
 - Rockefeller, David: 417
 - Rogozinski, Jacques: 360, 361, 362
 - Roma: 125
 - Ronda Uruguay (del GATT): 348
 - Roosevelt, Franklin D.: 148, 154
 - Rosa, Luis de la: 104
 - Ross, Stanley: 141
 - Rousseau, J. Jacques: 127, 131, 308
 - Rubio, Luis: 362, 413, 427, 482, 519, 543, 557, 560, 567
 - Ruiz, Samuel: 444, 461, 529, 530
 - Ruiz Cortines, Adolfo: 194, 195, 197
 - Rusia: 364
- S**
- Sada, Andrés Marcelo: 612
 - Sáenz, Josué: 30

- Sáenz, Moisés: 137, 167
Sagrado Corazón: 443
Sahel: 55
salario
 mínimo: 88, 197, 317, 318, 410, 411, 412, 425, 507, 591
 real: 206, 319, 355
salarios: 271
 congelación de: 299
 contención de los: 274
Salazar, José: 132
Salazar, Othón: 199
Salinas de Gortari, Carlos: 255, 322, 323, 339, 340,
 352, 354, 359, 362, 363, 373, 385, 418, 428, 465,
 467, 506, 508, 550, 554, 606
Saltillo: 314, 506
salud: 32, 35, 50, 52, 56, 58, 64, 65, 66, 74, 77, 79, 90,
 110, 147, 159, 168, 169, 170, 186, 226, 231, 235,
 257, 268, 269, 275, 305, 317, 318, 347, 351, 400,
 407, 438, 452, 456, 463, 464, 465, 466, 468, 474,
 476, 477, 479, 480, 482, 529, 551, 558, 564, 573,
 575, 580, 582, 591, 595
 atención a la: 60
 comunitaria: 270
 económica: 516
 política: 516
 pública: 65, 169
Samsung: 349
San Ángel: 102
San Antonio: 374
San Cristóbal de las Casas: 106, 444, 530, 531, 532,
 533, 534, 535, 584, 586, 602, 603
 diálogo de: 536
 Diócesis de: 460
San Diego: 469
San Francisco: 110
San Ignacio Río Muerto: 241
San Juan Chamula: 106, 586
San Juan de Aragón: 323, 513, 514
San Juanico: 312
San Luis: 499, 501, 504, 506, 510, 515, 603
San Luis Potosí: 314, 412, 471
San Pedro: 65
Sánchez Navarro, Juan: 516, 517, 560, 562, 612
Sánchez Rebolledo, Adolfo: 510
Santa Anna, Antonio López de: 104, 106, 131
Santiago del Estero: 75
São Paulo: 51
SARH: 302, 305, 392, 547
Sarmiento, Domingo Faustino: 139
Sarukhán, José: 377
satisfactores
 básicos: 259, 260, 573
 del desarrollo: 274
Saucedo, Mario: 511
Scherer, Julio: 244, 250
Schumacher, E. F.: 40, 42, 43, 192, 258, 259, 261, 376
Secretaría de Agricultura: 391
Secretaría de Desarrollo Social: 454, 463, 464, 466,
 536, 590, 591
Secretaría de Gobernación: 245, 246, 252, 282, 522
Secretaría de Hacienda: 281, 361, 524
Secretaría de la Presidencia: 230, 231
Secretaría de la Reforma Agraria: 229
Secretaría de Patrimonio Nacional (Sepanal): 255
Secretaría de Programación: 270
Secretaría de Programación y Presupuesto: 230, 255,
 281, 282, 471
Secretaría de Relaciones Exteriores: 182, 530
Secretaría de Salubridad: 479
Secretaría del Trabajo: 245
secretario de Agricultura: 564
secretario de Comercio: 370, 418
secretario de Desarrollo Social: 417, 530
secretario de Gobernación: 522, 555, 561, 569, 570,
 572, 606, 610
secretario de Hacienda: 411, 413, 417, 430
sector
 agropecuario: 45, 404, 549
 automotriz: 379
 bursátil: 339
 campesino: 209, 401
 capitalista: 197
 educativo: 317
 ejidal: 198
 empresarial: 228, 237, 243, 277, 297, 369
 externo: 375
 feudal: 305
 formal: 445
 industrial: 296, 404
 informal: 445, 450, 451
 moderno: 15, 16, 17, 19, 47, 72, 78, 154, 185, 207,
 259, 260, 265, 275, 306, 309, 310, 376, 433, 439,
 449, 566
 obrero: 209, 238, 254, 504
 paraestatal: 226
 pecuario: 421
 petrolero: 226
 popular: 504
 privado: 189, 210, 225, 227, 242, 392, 408, 409,
 410, 539, 540, 551

- público: 205, 209, 227, 237, 266, 270, 277, 292, 299, 301, 384, 408, 465
- y privado: 236
- rural: 403
- salud: 317, 480
- social: 393
- tradicional: 47, 206, 265, 275, 376
- sectores
 - campesino y obrero: 470
 - corporativos: 277, 508
 - estratégicos: 207
 - medios: 89, 236, 339, 445
 - modernos: 257
 - populares: 204, 210, 224, 237, 313, 448, 602
 - populares marginados: 223
 - social y privado: 392
 - sociales: 463, 575
 - tradicional: 54, 59
 - urbanos: 65
- Segovia, Tomás: 599
- Segunda Guerra Mundial: 38, 43, 49, 69, 166, 180, 270, 291, 292, 347, 364
- seguridad
 - nacional: 418
 - social: 37, 64, 74, 208
- Seguro Social: 182, 208, 235, 273, 378
- Selva (Lacandona): 35, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 594, 602
- Seminario Nacional de Alternativas: 431
- Sen, Amartya: 482
- Senado de la República: 365, 377, 399, 496, 520
- Sentimientos de la Nación: 99
- Sepúlveda, Bernardo: 575
- Serna, Clemente: 612
- Serra Puche, Jaime: 424
- servicios: 27
 - básicos: 52, 464
 - de salud: 63, 87
 - para el desarrollo: 459
 - rurales: 64
 - sanitarios: 62
 - sociales básicos: 59
- servidumbre: 121
- Servitje, Lorenzo: 426, 442
- SIDA: 54
- siderúrgica: 207
- siderúrgica del Balsas: 361
- siderúrgica Lázaro Cárdenas: 302
- Sierra, Justo: 107, 109
- Sierra de Alicia: 105
- Sierra de Atoyac y de Tecpan: 240
- Sierra de Guerrero: 240
- Sierra de Oaxaca: 601
- Sierra Leona: 63
- Sierra Norte-Zapoteca: 531
- Silva Herzog, Jesús: 183, 191, 221, 295, 369
- Simojovel: 579, 584
- Sinaloa: 123, 140, 161, 198, 211, 229, 241, 316, 323, 393, 438, 547
- sinarquistas: 183
- sindicalismo
 - independiente: 302
 - oficial: 302
- sindicato
 - de electricistas: 199, 453
 - ferrocarrilero: 190
- sindicatos: 199, 211, 224
- universitarios: 302
- Singapur: 63, 347, 349
- sistema
 - autoritario: 496, 517, 610
 - cooperativo: 157
 - económico global: 52, 328
 - financiero: 541, 542
 - financiero internacional: 351
 - fiscal: 432
 - mexicano: 352
 - político: 120, 251, 358, 427, 493, 525, 568
 - político democrático: 541
 - político mexicano: 250, 505
 - político tradicional: 519
 - productivo campesino: 233
 - socialista: 348
 - soviético: 31
 - tlatoani*: 556
 - tradicional: 592
 - tradicional de cultivo: 61
 - transnacional: 311
- Sistema Alimentario Mexicano: 257, 269
- Sistema Económico Latinoamericano (SELA): 73
- Slim, Carlos: 411
- SNTE: 342
- soberanía: 203, 354, 367, 370, 395
 - alimentaria: 424
 - popular: 23
- Soberón, Guillermo: 377
- socialdemócratas: 32
- socialismo: 23, 33, 34, 41, 167
 - autoritario: 563
 - democrático: 201

o utopismo democrático: 32
 real: 201, 351
 totalitario: 201
 sociedad
 agraria: 165
 civil: 12, 18, 19, 35, 36, 75, 77, 203, 213, 244, 299, 311, 312, 328, 369, 371, 374, 377, 430, 443, 452, 456, 457, 458, 460, 462, 463, 493, 494, 496, 498, 507, 508, 512, 514, 515, 517, 518, 533, 534, 535, 537, 556, 558, 566, 572, 573, 574, 576, 590, 602, 605
 colonial: 95
 de consumo: 30, 42, 43, 54
 de las Américas: 416
 del conocimiento: 13
 igualitaria: 171
 indígena: 91
 industrial: 27, 261
 justa e igualitaria: 583
 plural: 215
 postindustrial: 25, 26
 rural: 305, 540
 socialista democrática: 32
 tradicional: 114
 sociedades
 cooperativas: 128, 157, 158
 desarrolladas: 62
 henequeneras: 160
 industriales: 89, 223
 totalitarias: 32
 tradicional: 142
 Soconusco: 586, 587
 Sodi de la Tijera, Demetrio: 395, 514, 516, 523, 524, 556, 560, 563, 565, 568, 575
 Solidaridad: véase Pronasol
 Solidaridad (satélite llamado): 493
 Sonora: 121, 123, 140, 199, 212, 229, 232, 240, 241, 242, 309, 314, 316, 393, 420, 438, 547
 Sony: 349
 Sotelo Inclán, Jesús : 105, 131, 132
 Sri Lanka: 47, 50
 Stalin, José: 33, 201
 Strahm, Rudolph: 56
 Suárez Dávila, Francisco: 300
 subprocurador especial: 575
 Subsecretaría de Desarrollo Regional: 463
 Subsecretaría de Organización y Desarrollo
 Agrario: 229
 subsecretario de Educación: 521
 subsecretario de Estado: 554

subsecretario de Hacienda: 295, 300
 subsidios
 a la exportación: 381
 y aranceles: 71
 Suecia: 78, 88, 90, 427
 Suiza: 56, 78
 superávit: 542
 fiscal: 422
 Superbarrio: 603
 Suprema Corte de Justicia: 524
 Sur
 (*refiérase a los países del*): 12, 19, 28, 29, 30, 50, 52, 54, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77, 79, 87, 88, 89, 90, 121, 239
 comunicaciones Sur-Sur: 70
 cooperación inter-Sur: 71
 de Jalisco: 231
 Secretariado del: 70
 solidaridad Sur-Sur: 57
 sustitución de importaciones: 166, 204, 226, 300, 352, 445
 modelo de: 38, 55

T

Tabasco: 9, 12, 59, 88, 121, 264, 399, 464, 494, 498, 504, 511, 519, 542, 566, 586
 Tagle, José de: 131
 Tailandia: 349
 Taiwan: 45, 48, 305, 347, 349, 365, 446, 552
 taiwanización: 294
 Taller de Análisis Económico de la UNAM: 410
 Tamaulipas: 241, 309, 316, 393, 500
 Tamayo, Jaime: 508
 Tampico: 123
 Tannenbaum, Frank: 113, 141, 142, 146, 148, 151, 153, 178, 192, 193, 262, 480
 Tantoyuca: 106
 Tanzania: 48, 57, 64, 65, 67
 tasa
 de crecimiento: 540
 de desarrollo: 267
 de desempleo: 426
 de empleo: 427
 de mortalidad: 135
 tasas
 de crecimiento: 413
 de inversión: 545
 de mortalidad: 170

- Tata Lázaro: véase Cárdenas, Lázaro
 Tata Vasco: véase Quiroga, Vasco de
 tecnología: 26, 27, 37, 38, 39, 41, 53, 54, 60, 71, 78,
 79, 206, 207, 260, 270, 358, 391, 394, 591
 agrícola: 70
 alta: 70, 289
 brecha tecnológica: 394
 calificación: 39
 cambios: 89, 90
 de abono orgánico: 48
 de escala: 233
 de punta: 432
 intermedia: 47, 276, 439
 investigación: 38
 moderna: 46, 48, 593
 nueva: 16, 32, 378
 para el desarrollo: 54
 transferencia de: 228
 tecnologías: 61
 adecuadas: 192
 alternativas: 43
 intensivas: 45, 205
 intermedias: 262
 sencillas: 43
 Tecoac: 111
 Tecpan: 99
 Tejupilco: 509
 tela de *Penélope*: 469
 Telegrafistas: 199
 Telmex: 302, 356, 360, 410
 Teloloapan: 509
 Téllez Kuenzler, Luis: 391, 392, 401, 404, 423, 425
 Tello, Carlos: 255, 266, 270, 271, 276, 277, 282, 290,
 298, 299, 300
 Tenejapa: 586
 Tenochtitlan: 92, 97, 131
 teoría
 de la abundancia: 192
 de la liberalización global: 349
 del goteo: 15, 55, 190, 209, 271, 300, 338, 376,
 449, 467, 540
 española del Estado: 98
 keynesiana: 300, 350
 Tepeyac (cerro del): 94
 Tepeyac (señora del): 98
 Tepic: 198
 tequila o tributo: 91
 Tequixquiác: 303
 Tercer Mundo: 37, 38, 41, 45, 47, 49, 53, 55, 60, 63,
 337
 terremoto de 1985 (en la ciudad de México): 320
 terrenos baldíos: 395
 Tesobonos: 21
 Tesorería: 423
 Tezonteopan: 440
 Thatcher, Margaret: 33, 34, 80, 298, 350, 383
 thatcherismo: 75
 Thorup, Chathryn L.: 517
 tianguizco: 92
 tierra
 acaparamiento: 95
 afectación: 590
 apeo y deslinde: 111
 comunal: 110, 112, 397, 579
 concentración de la: 61, 156
 dotación de: 153, 158, 198, 393, 395, 402, 582
 ejidal: 393, 394, 402, 597
 tenencia de la: 392, 396, 419, 552
 Tierra Caliente: 103
 Tierra y Libertad (lema zapatista): 536
 Tigres Asiáticos: 27, 56, 71, 78, 347, 359, 364, 552
 Tijuana: 506, 561, 564
 Tlatelolco: 213, 214, 215, 238
 tragedia de: 216
 tlatoani: 91, 92, 93, 493
 tlatoque: 91, 92
 Tlaxcala: 87, 123, 134, 140, 241, 498, 504, 550, 566
 TLC: 13, 15, 17, 22, 74, 76, 77, 181, 189, 339, 340, 343,
 349, 357, 360, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373,
 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
 385, 394, 401, 404, 405, 406, 407, 413, 415, 416,
 417, 418, 419, 421, 422, 426, 427, 428, 429, 430,
 432, 439, 446, 478, 492, 507, 512, 533, 541, 545,
 546, 547, 553, 557, 573, 596, 599
 Artículo 501 del: 391
 Comité Asesor para el: 368
fast track: 338, 341, 362
 NAFTA: 349, 414
 Tobler, Hans Werner: 119, 120
 Toffler, Alvin: 27
 tojolabales: 577, 578, 582, 586
 Tokio: 29
 Toledo, Victor M.: 593
 Tolstoi: 127
 Tolteca: 206
 Torre de Babel: 605
 Tovar, Guillermo: 370, 371, 372
 Townsend, William: 146, 153, 157, 171
 tradición: 11, 14, 142, 280, 281, 468, 515
 autonómica: 128

campesina: 593
 comunitaria: 582
 revolucionaria: 215
 y modernidad: 602
 tradicionalismo: 119
 transnacionales: 44, 45, 46, 54, 59, 192, 207, 276,
 294, 304, 358, 364, 365, 366, 383, 439
 del Sur: 70
 Tratado de Libre Comercio: véase TLC
 Tratado de Maastricht: 384
 Tribunal Federal Electoral: 520, 606
 tribunales agrarios: 396
 tributo: 92, 95, 99
trickle down effect: véase teoría del goteo
 triquis: 603
 trópico húmedo: 169
 TUAC: 549
 Turner, Frederick C.: 223
 Turner, John Kenneth: 121
 Turquía: 541
 Tuxtla Gutiérrez: 554
 Tzajaljemel: 106
 tzeltales: 578, 580, 581, 582, 586
 tzotziles: 580, 582, 586

U

UAM: 377, 606
 Xochimilco: 377
 Ubú Rey: 65
 UCD: 549
 UGOCM: 197, 400, 549
 UGOCP: 400
 UNAM: 89, 168, 211, 212, 241, 302, 365, 431, 538
 Facultad de Ciencias: 168
 Facultad de Derecho: 378
 Facultad de Economía: 438
 Facultad de Medicina: 169
 Instituto de Investigaciones Económicas: 363,
 410
 Instituto de Matemáticas: 168
 UNE: 499
 Unión Agrícola Nacional: 241
 Unión Campesina Democrática: 460
 Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo
 Ejidal: 159
 Unión de Colonias de la Guerrero: 448
 Unión de Colonias Populares: 448
 Unión de Comunidades Indígenas de la Zona
 Norte del Istmo: 460
 Unión de Crédito Pajal Yacaltic: 583
 Unión de Cuartos de Azotea e Inquilinos: 448
 Unión de Lucha Revolucionaria: 511
 Unión de Uniones: 402, 583
 Unión de Vecinos y Damnificados 19 de
 septiembre: 447, 448
 Unión del Pueblo: 582, 583
 Unión Internacional para la Conservación de la
 Naturaleza: 459
 Unión Popular Nueva Tenochtitlan: 448
 Popular Valle Gómez: 453
 Vecinal del Valle de México: 453
 uniones
 de crédito: 583
 de ejidos: 583
 Universidad Complutense: 30
 Universidad de Boston: 478
 Universidad de California: 469
 Universidad de California, San Diego: 472
 Universidad de Chapingo: 419, 421
 Universidad de Emory: 520
 Universidad de Guadalajara: 421, 508, 564
 Universidad de Michigan: 568
 Universidad de San Diego: 517
 Universidad de Tulane: 517
 Universidad Iberoamericana: 442
 Universidad Nacional Autónoma de México: véase
 UNAM
 Universidad Nicolaíta: 211
 Universidad Obrera: 168
 Universidad Popular: 139
 Universidad Tecnológica de México: 366
 UNORCA: 400
 UNTA: 400, 422, 549
 urbanización: 193, 353
 Urbina, Erasto: 579
 URSS: 48, 49, 75, 261, 337
 Uruguay: 74, 352
 utopía: 32, 34, 99, 100, 126, 127, 129, 139, 163, 191,
 193, 215, 223, 263, 577, 583
 bucólica: 193
 cardenista: 165
 civilizatoria vasconceliana: 139
 de la autosuficiencia regional: 376
 de la igualdad: 286
 del éxodo: 585
 desarmada: 512
 neoliberal: 75
 socialista: 75

zapatista: 130
 zapatista: véase EZLN
 utopías: 41, 80
 postindustriales: 27

V

Vallarta, Ignacio L.: 105
 Valle de Guadalupe: 198
 Valle de Mexicali: 180
 Valle de Toluca: 102
 Valle del Mezquital: 104
 Valle del Yaqui: 53, 161, 241, 582
 Valle Gómez: 453
 Valle Imperial: 137
 Vallejo, Demetrio: 199
 valles de Culiacán: 582
 valles del Yaqui y del Mayo: 399
 Vargas Llosa, Mario: 27
 Vasconcelos, José: 138, 139, 177, 204, 313
 Vázquez, Genaro: 238, 239
 Velázquez, Fidel: 190, 197, 199, 254, 410, 412, 450, 530
 Velázquez, Olivia: 9
 Velázquez, Vicente María: 103
 Velázquez Leyva: 192
 Vélez, Félix: 481
 Venezuela: 74, 208, 553
 Veracruz: 87, 108, 123, 126, 316, 322, 323, 400, 498, 500, 510, 548, 566, 593, 610
 Vernon, Raymond: 155, 189, 194, 209
 vía armada: 585
 Victoria, Guadalupe: 102
 Villa, Pancho: 126, 129, 136
 Villalar (batalla de): 98
 villismo: 125, 126, 127, 128
 Villoro, Luis: 33, 97, 98, 200, 201, 252
 violencia: 13, 62, 78
 Visa: 297
 Vitro: 297
 vivienda: 52, 56, 66, 74, 89, 90, 186, 208, 226, 231, 235, 257, 269, 400, 448, 449, 463, 464, 476, 480, 482, 483, 564, 573, 591, 595
 de adobe: 92
 viviendas
 campesinas: 88
 populares: 206
 Votán: 578
 Vuelta: 243, 250, 315

W

Ward, Barbara: 42, 58
 Warman, Arturo: 129, 130, 133, 134, 140, 141, 146, 163, 164, 165, 185, 187, 188, 230, 232, 255, 256, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 395, 401, 549
 Washington: 76, 343, 362, 363, 374, 406, 410, 416, 417, 418, 554, 562
 Weintraub, Sidney: 366, 415
 Weldon, Jeffrey A.: 472
 Westinghouse: 207
 Weyl, Nathaniel y Sylvia : 156
 Woldenberg, José: 395, 510, 571, 608
 Womack, John: 127, 129, 130, 140, 151, 223
 Wood, Christopher: 517

X

Xochicalco: 198
 Xochimilco: 453
 Xochináhuac: 447

Y

yaquis: 121, 122, 123, 134, 161
 yorkinos: 102
 Yucatán: 103, 106, 121, 130, 153, 160, 184, 322, 323, 464, 499, 523, 550, 566
 henequeneros de: 161

Z

Zacatecas: 104, 108, 140, 374, 473, 474, 476, 477, 498, 547, 550
 Zacatepec: 198
 Zaga, José: 450
 Zaid, Gabriel: 9, 243, 258, 259, 261, 262, 265, 279, 291, 324, 363, 427, 493, 497, 512, 519, 521, 558, 565, 568, 594, 596, 597, 612
 Zaidenweber, Jacobo: 612
 Zapata, Emiliano: 111, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 141, 151, 152, 193, 239, 278, 297, 303, 396, 399, 535, 536, 539, 548, 596
 Ejército del Sur: 602
 Zapata, José: 132
 zapatismo: 125, 127, 128, 129, 133, 134

zapotecos de Oaxaca: 531

Zavala, Lorenzo de: 100, 101, 102, 103, 107

Zea, Leopoldo: 77, 193

Zedillo Ponce de León, Ernesto: 21, 22, 564, 566,
568, 574, 608, 610, 611, 612

Zepeda, Mario: 465

Zermeño, Sergio: 213, 214, 338, 445, 446, 451, 604

Zimbabwe: 51, 63, 64

Zinacantán: 586

Zitácuaro: 522

Zócalo: *véase* México: ciudad de

zona Aeropuerto-Arenal: 447

Zona Militar de San Cristóbal: 530

Zubirán, Salvador: 440

Índice general

Agradecimientos	9
Introducción	11
Post Scriptum	21
 I. La pobreza en su laberinto	25
Fin de milenio	25
¿Fin de la utopía?	29
Lo global no quita lo local	34
Los de arriba y los de abajo	37
La <i>grande bouffe</i>	39
El fetiche del progreso	40
¿Nuevas direcciones?	42
La abundancia no gotea	44
De <i>Bretton Woods</i> a la década perdida	49
Globalización asimétrica	53
Modelos propios	55
Satisfacer necesidades básicas	58
El PIB no mide el bienestar	62
Pensar en la gente antes de tomar decisiones	66
Experiencia: la prueba de fuego	67
Aprovechar la globalización en vez de padecerla	68
No hay más camino que la democracia	71
El cuerpo maltrecho de Latinoamérica	72
¿A qué le apostamos?	74
Modernidad sin consenso no es modernidad	77

II. ¿Qué hacemos con los pobres?	87
Rascacielos de riqueza y espinazo de pobreza	87
Ser pobre en país pobre	89
El destino de los <i>tlatoque</i>	91
Y fue nuestra herencia una red de agujeros	92
Un puente de plata	94
Los Borbones, precursores de la Reforma	95
Los que poseen todo y los que nada tienen	96
1810: una nación que quería ser oída	97
Un pecado original	99
La única salvación: sacrificar a las comunidades	101
La disputa por la tierra	103
Que nos devuelvan todo lo que nos han quitado	105
Tener “luces” o gastar en cirios para los santos	107
Un pueblo de parias	110
¿Qué hacemos con los pobres?	113
III. Una revolución parricida	119
Un juego donde se jugó el destino	119
Los muchos Méxicos	121
Todos los tiempos y un “estupor optimista”	123
Los que hicieron una revolución porque no querían cambiar	126
La utopía zapatista	129
Todos los pueblos Anenecuilco	131
Entre Anenecuilco y Huatabampo, distancia de siglos	133
Los texanos de México	134
¿Fin al reparto agrario?	140
Una revolución parricida	141
IV. Un compromiso entre dos utopías: Lázaro Cárdenas	145
Una fórmula conciliatoria	145
Un <i>gran padre</i> generoso para una orfandad de siglos	147
Un mosaico de criterios y un Estado catalizador	148
Todo empieza en lo más pequeño	151
La Iglesia y los indios	152
Un país para todos	154
Lo antiguo y lo moderno en el reparto cardenista	156
Los sinsabores del ejido colectivo	158
Cuando la realidad desbordó a la utopía	163
La modernidad se imponía	165
Educarse para vivir mejor	166
Sanar a un país enfermo	168
Un milagro efímero y una democracia tutelada	170
V. El milagro mexicano	177
Un destino manifiesto	177

Nadie sabe para quién trabaja	179
Regateando la industrialización	180
Revolución en crisis pero con alianza patriótica	182
Así nos han dado la tierra	183
Un milagro “como debe ser”	185
La “verdadera solución”: el neolatifundio	186
Pensar en grande	188
Charrismo, “mexicanidad” y un alegato impugnador	190
¿Utopía o sentido común?	191
Importar capitales o exportar hombres	194
Los sustentos del “milagro”	196
Confianza y tranquilidad en el campo	197
Un verano y un otoño calientes	199
Espectadores y voceros: una clarinada de disidencia	200
Un modelo casi mítico	202
Progreso para un 20%	204
De cómo inventar un país moderno	206
La modesta cosecha del crecimiento y un activo faltante: democracia	208
Tiempo encapotado	211

VI. En busca de una legitimidad perdida

Borrón y cuenta nueva	221
Un malestar esquizoide y una fractura ostensible	222
¿Desarrollo compartido?	225
Arriba con las inversiones y adelante con la deuda	226
Economía y democracia, manejadas desde Los Pinos	228
Los campesinos, “hijos predilectos del régimen”	229
Gasto alegre, empresas desde arriba y más burocracia	230
Desarrollismo colectivista	231
Lo peor y lo mejor de la economía presidencial	234
Más de lo mismo, con “populismo”	235
Otra versión de los dos Méxicoes	238
En el filo de la navaja	240
La apoteosis del sobregiro	243
La balanza perdió su fiel	245

VII. El espejismo de la abundancia

Los veneros del diablo	249
Lo que resiste apoya	251
Conflicto de lealtades	252
Una “nueva sociedad” o el preludio de una disputa	253
Una recomendación: repartir la tierra	255
La danza de los millones	257
Las trampas del progreso improductivo	258
Un doble modelo, garantía de sobrevivencia	261
Alegre vértigo de finanzas frágiles	264

¿Crecer o no crecer?	266
Inoperante "altruismo"	267
No hacen falta grandes inversiones para que la gente coma	268
¿Aulas y centros de salud o atención real?	269
La disputa por la nación	270
"Malas noticias de la realidad"	278
Los valores de los mexicanos	280
Los que heredaron el futuro	281
VIII. Entre la espada y la pared	285
Los "nuevos científicos"	285
Apego a la realidad y siete propósitos irreprochables	287
Entre la Revolución Mexicana y la neoliberal, prudente rectoría del Estado	287
Finanzas sanas, Estado esbelto, economía abierta	289
Entre la espada (de la deuda) y la pared (del ajuste)	290
La opción de taiwanizarse	293
Los empresarios, interlocutores del régimen	295
El "nuevo dogma" y sus impugnadores	298
A corto plazo todos estamos ya muertos	300
Una crítica desde la plataforma modernizadora	301
Protestas sin eco	302
Importar maíz, una tragedia nacional	303
Lo que hundió al campo	304
Lo que podría restaurarlo	307
Tiempo de rescatar el otro sueño mexicano	308
Espacios para la pequeña democracia	310
Hegemonía en jaque: "¿hora cumplida?"	313
Una generación sacrificada	316
¿Qué tantos y qué tan pobres?	318
Campo minado	319
Elecciones aciagas	321
Reclamación democrática <i>vs.</i> despotismo ilustrado	324
Un mandato sutil y contundente	325
La lección de la elección: un pueblo que votó por la democracia	326
¿Gobernar al país real o inventar uno a la medida?	327
IX. El nuevo milagro	337
<i>Fast track</i> al Primer Mundo	337
Compromiso con "una política moderna"	341
Afianzar; dismantelar; renegociar	342
Apertura <i>vs.</i> proteccionismo	344
Globalización, palabra clave	345
El circuito de la riqueza	347
Tres polos y un solo dios verdadero: la economía de mercado	348

El modelo neoliberal en la probeta latinoamericana	350
Reformando al Estado: el proyecto salinista	352
Los diez mandamientos	355
Se puede, pero no se debe	357
“Capitales de la esperanza”	358
Exitosa privatización	360
¿Integración por la puerta trasera?	362
¿Destino manifiesto o apuesta temeraria?	363
Pros y contras de un matrimonio de conveniencia	365
Una “ventaja comparativa” demasiado cara	368
¿Negociar al margen o con la sociedad civil?	369
Cultura en el tapete y democracia arrinconada	370
<i>A torn country</i>	373
¿Acuerdo parejo o venta de ilusiones?	374
Callejón sin salida	375
Temores y expectativas	377
El Tratado en cuestión	378
¿Ningún TLC u otro TLC?	383
X. Proyecto en entredicho	391
El campo que se merece la globalización	391
El campo ordeñado	392
¿Escenarios catastróficos?	393
Ocaso del maíz y fin al reparto agrario	394
Todas las tierras al mercado	395
La mesa puesta	397
Un chivo expiatorio que no se quería morir	398
Alternativas campesinas	400
Las disidencias, “el cuarto de junto” y el modelo chileno	401
¿Diáspora o agricultura con campesinos?	401
Se equivocan de modelo o se equivocan de país	404
Milagro “prematureo”	405
Un proyecto en entredicho	406
Estancamiento estabilizador	408
Déficit comercial, desempleo, inversión especulativa	409
Mitos geniales	410
Ácida realidad	411
Neorrealismo futurista	413
Mi bicicleta por el TLC	414
Calendario de expectativas y sobresaltos	415
El campo es mal negocio	419
Carteras vencidas: la punta del iceberg	420
¿Subsidios con qué fin?	421
Procampo: mucho ruido y pocas nueces	422
¿Éxodo o “gran reservación”?	423
Las empresas no aguantan más	425

Entre "Pobre México" y "la nueva grandeza mexicana", el TLC	427
Modelo mexicano	430
XI. La tela de Penélope	437
Vertiginosa pobreza	437
Hambre sin adjetivos	439
Incipiente filantropía	442
Religiosos al rescate de los pobres	443
¿Sociedad derrotada?	445
Fuenteovejuna, señor	446
El mito genial del desempleo y el milagro de sobrevivir	449
Pequeños caminos en la megaciudad	451
La sociedad civil sí funciona	456
Los pobres construyendo su política social	459
Abrir agujerotes y parchar agujeritos	462
Compensación "sin precedentes"	463
Escasa participación, mucha publicidad	466
Un fénix que renacía de sus cenizas: el Estado benefactor	467
Retejer la tela de Penélope	469
¿Aritmética solidaria?	472
Los más pobres, otra vez fuera	473
Precaria panacea	476
Una golondrina no hace verano	477
País alimentado, país educado: país de ciudadanos	482
XII. Alumbramiento aplazado	491
Mucha economía y poca política	491
Democracia empananada	493
Lento y sinuoso camino	494
Un parto difícil	496
El calendario de la <i>in-transición</i>	498
Elecciones a mitad del río	500
La democracia en compás de espera	501
Sombra de duda o vencer sin convencer	502
A medio camino de la refundación	504
Transición transada	505
Hostigada sobrevivencia	507
La gran ausente	512
La realidad tocaba a la puerta	516
Tiempo agotado	519
¿Democracia inevitable?	521
Juego limpio	523
XIII. Crónica de incertidumbres	529
Un corazón colectivo y una "palabra verdadera"	529
Conversaciones en la catedral	531

Una apuesta a la sociedad civil	534
La realidad convoca un fantasma	537
De vuelta del "país de las maravillas"	539
Lloviendo sobre mojado	542
Dos caras de la moneda	543
¿Cómo recuperar el crecimiento?	544
La operación fue un éxito; el paciente murió	546
Dinero llama dinero	547
Desarrollo donde quepan todos	548
El pasado entre corchetes	549
Economía postelectoral	551
Una buena idea que se promovió "como si fuera un milagro"	552
Repensar el país	553
La paciencia, y el sistema, agotados	556
Los compromisos de un discurso	559
¿Qué va a suceder en México?	560
La reforma "más profunda" desde los años cuarenta	560
Un crimen contra México	561
Romper el maleficio	562
En la llanura de sombras	563
Acuerdo para la transición y adiós al sistema	565
Un debate que hizo olas	566
Coalición o colisión	567
La guerra y la paz	568
Los nudos de la credibilidad	569
¿Un solo hombre, garantía de credibilidad?	571
Acuerdo nacional para la transición	573
La hora de la democracia	574
Entre el Apocalipsis y la esperanza	576
Volver y no volver al pasado	578
Los llamados "confines de la tierra"	579
<i>Jcomonalitic</i> y la aspiración de autonomía	580
Debajo de la hierba	581
De la utopía del éxodo al callejón sin salida	585
Los nudos que se volvieron gordianos	588
Inoperante Solidaridad	589
Una onda expansiva	590
Alternativas para la selva	592
Tradición y modernidad en el alzamiento de Chiapas	594
La intemperie de la pobreza	598
Es hora de que la sociedad mexicana se reconozca a sí misma	599
El barco de Fitzcarraldo	601
Imparcialidad a prueba	606
"Hoyos negros" en la credibilidad	608
Entre la inercia autoritaria y la apropiación del futuro	611

Siglas	621
Bibliografía	627
Hemerografía	637
Discursos, documentos, folletos, informes y tesis	639
Índice analítico y onomástico	643

Títulos de reciente aparición en
AGUILAR NUEVO SIGLO

Cuaderno de Sarajevo
Juan Goytisolo

Subversiones silenciosas
Héctor Aguilar Camín

El contenido de la felicidad
Fernando Savater

Desafíos a la libertad
Mario Vargas Llosa

La invención del poder
Federico Campbell

Sorpresas te da la vida
Jorge G. Castañeda

Nuevo tiempo mexicano
Carlos Fuentes

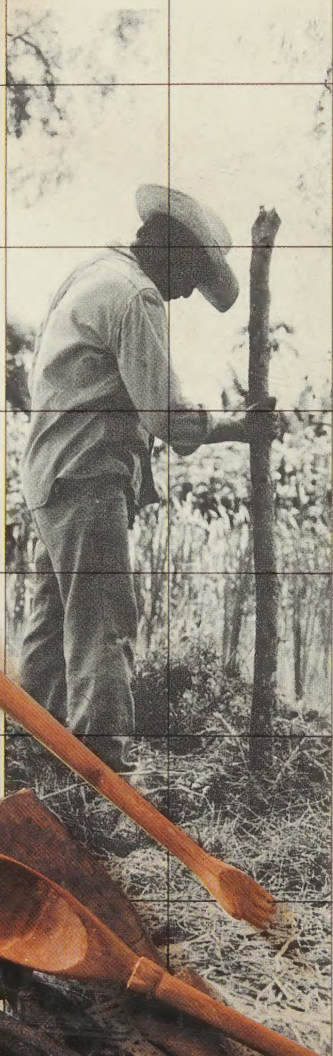
A Dios lo que es de Dios
Carlos Martínez Assad (comp.)

© Foto portada y foto del campesino: Gerardo Suter

¿Qué hacemos con los pobres?

Ignacio Ramírez, El Nigromante.

Carta a Carlos Olaguíbel, del 25 de octubre de 1875.



Los liberales no le encontraron respuesta, hace un siglo, a una pregunta que hoy sigue vigente: “¿Qué hacemos con los pobres?” Sucesivos proyectos modernizadores —desde el borbónico, a fines del XVIII, hasta el neoliberal, en las postrimerías del XX— han ignorado el rostro del país real. Por eso se ha multiplicado la enorme desigualdad que Humboldt descubrió, en México, al principiar el siglo XIX. Modernizaciones diseñadas siempre por las élites han dado la espalda al país de los pobres, cargado de agravios: todas han dejado fuera a la mayoría. En el umbral del siglo XXI, es perentoria una reconciliación entre pasado y futuro para lograr, por fin, una modernidad con sustentos reales: un país donde quepan todos. Sólo la democracia puede hacerlo. Sólo un proyecto nacional que resane esa fractura que ha fisurado a la nación y procure un desarrollo sustentable, participativo y desde abajo, cimentará, con expectativas realistas, la viabilidad en el mundo globalizado de hoy. Es un escándalo moral, y un imperdonable fracaso, que la mayoría de los mexicanos sobrevivan apenas, precariamente, en la intemperie de la pobreza. Es indispensable reconocer, como sugiere Julieta Campos, que todos somos “el otro México”.



9 789681 902568